Michael Mann

Las fuentes del poder social, II

El desarrollo de las clases y los Estados nacionales, 1760-1914

Versión española de
Pepa Linares

Alianza
Editorial

Título original: *The Sources of Social Power. Volume II*

© Cambridge University Press, 1993
© Ed. cast.: Alianza Editorial, S. A., Madrid 1997
J. I. Luca de Tena, 15; teléf. 393 88 88; 28027 Madrid
ISBN: 84-206-2881-6 (T. II)
ISBN: 84-206-2958-8 (O.C.)
Depósito legal: M. 35.613-1997
Fotocomposición: EFCA, S. A.
Parque Industrial «Las Monjas»
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Impreso en Gráficas ANZOS, S. A. FUENLABRADA (Madrid)
Printed in Spain

ÍNDICE

Lista de cuadros 9
Prefacio 13
1. Introducción 15
2. Las relaciones del poder económico e ideológico 43
3. Una teoría del Estado moderno 70
4. La Revolución Industrial y el liberalismo del antiguo régimen en Gran Bretaña, 1760-1880 132
5. La Revolución Americana y la institucionalización del liberalismo capitalista confederal 190
6. La Revolución Francesa y la nación burguesa 229
7. Conclusión a los capítulos 4 a 6: la aparición de las clases y las naciones 289
8. Geopolítica y capitalismo internacional 342
9. La lucha por Alemania: I. Prusia y el capitalismo nacional autoritario 398
10. La lucha por Alemania: II. Austria y la representación confederal 439
11. El surgimiento del Estado moderno: I. Datos cuantitativos 473

12. El surgimiento del Estado moderno: II. La autonomía del poder militar 525
13. El surgimiento del Estado moderno: III. Burocratización 579
14. El surgimiento del Estado moderno: IV. La expansión de la esfera civil 624
15. La resistible ascensión de la clase obrera británica, 1815-1880..... 663
16. La nación de la clase media 710
17. La lucha de clases durante la Segunda Revolución Industrial, 1880-1914: I. Gran Bretaña 776
18. La lucha de clases durante la Segunda Revolución Industrial, 1880-1914: II. Análisis comparado de los distintos movimientos obreros..... 817
19. La lucha de clases durante la Segunda Revolución Industrial, 1880-1914: III. El campesinado 899
20. Conclusiones teóricas: Clases, Estados, naciones y las fuentes del poder social 940
21. Culminación empírica en las trincheras: geopolítica, lucha de clases y Primera Guerra Mundial 961
Apéndices. Cuadros adicionales sobre las finanzas y el empleo estatal 1041
Índice analítico 1057

LISTA DE CUADROS

3.1. Dos dimensiones del poder estatal 90
3.2. Las redes de poder en los Estados del siglo XIX 94
3.3. La cuestión nacional: poder infraestructural central contra poder infraestructural local 123
4.1. Porcentaje de familias británicas y de rentas familiares según la clase social del cabeza de familia, 1688, 1759 y 1801-1803 141
4.2. Las relaciones de los Estados con las clases dominantes y el clero durante el siglo XVIII 154
6.1. Porcentaje de las profesiones desempeñadas por los revolucionarios franceses con anterioridad a 1789 254
6.2. Porcentaje de los *conventionnels* que publicaron obras culturales, sociales o científicas 259
6.3. Actividades culturales de los «doce que decidían» 262
8.1. Porcentajes nacionales de las potencias en el conjunto del producto nacional bruto europeo, 1830, 1913 352
8.2. Volumen bruto de la producción industrial nacional, 1750-1913 353
8.3. Nivel de desarrollo per cápita de la agricultura nacional, 1840-1910 353

8.4. Industrialización per cápita, 1750-1913 354
8.5. Porcentaje del producto nacional bruto correspondiente al comercio exterior de mercancías, 1825-1910, en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos .. 380
8.6. Porcentaje del comercio total entre grandes Estados, 1910 388
11.1. Gastos total de los Estados centrales y de todos los niveles de gobierno, 1760-1910, a precios corrientes 479
11.2. Tendencias del gasto per cápita de los Estados a precios constantes, 1780-1910, Estado central y todos los gobiernos 482
11.3. Porcentaje de los gastos gubernamentales en relación con la renta o el producto nacional, 1760-1910 486
11.4. Porcentajes de los presupuestos asignados por todos los gobiernos a los gastos civiles y militares, 1760-1910 494
11.5. Aumento del porcentaje en las partidas del gasto civil, 1870-1910 y su contribución porcentual al presupuesto total del Estado en 1910 498
11.6. Porcentaje de los ingresos estatales correspondientes a los impuestos directos e indirectos y la propiedad del Estado, 1760-1910 503
11.7. Empleo estatal para Austria-Hungría, Francia, Gran Bretaña, Prusia-Alemania y Estados Unidos, 1760-1910 515
15.1. Porcentaje de la mano de obra británica por sectores, 1801-1881 665
15.2. Alternativas obreras y campesinas al capitalismo 668
17.1. Distribución industrial de la mano de obra británica 789
18.1. Afiliación sindical como porcentaje de la mano de obra civil no agrícola, 1890-1914 821
18.2. Porcentaje de la mano de obra civil no agrícola en huelga, 1891-1913 822
18.3. Porcentaje del electorado masculino que votaba a los partidos socialistas en las elecciones nacionales, 1906-1914 825
18.4. Trabajadores muertos en conflictos laborales, 1872-1914 825
19.1. Distribución de la mano de obra nacional por sectores .. 900
19.2. La democracia de partidos y la cuestión nacional en los Estados agrarios del siglo XIX 910
A.1. Empleo estatal: Austria 1042

A.2. Empleo estatal: Gran Bretaña 1044
A.3. Empleo estatal: Francia 1045
A.4. Empleo estatal: Prusia-Alemania 1046
A.5. Empleo estatal: Estados Unidos 1048
A.6. Ingreso estatal: Austria 1049
A.7. Ingreso estatal: Gran Bretaña 1050
A.8. Ingreso estatal: Francia 1051
A.9. Ingreso estatal: Prusia 1052
A.10. Ingreso estatal y federal: Estados Unidos 1053
A.11. Ingreso federal: Estados Unidos 1054
A.12. Ingreso estatal: Estados Unidos 1055

PREFACIO

El presente libro es el segundo de lo que pretendía ser un estudio en cuatro volúmenes de las fuentes del poder social. No obstante, abarca sólo el 63 por 100 de lo prometido en el Volumen I, puesto que termina en 1914 y no en 1990 como entonces anuncié. En el Volumen III trataré el siglo XX (probablemente completo en el momento de su finalización). La conclusión teórica de *Las fuentes del poder social* aparecerá en el Volumen IV. Confío en que aquellos que han manifestado interés por mis conclusiones lo conserven en ese momento.

He trabajado en la investigación correspondiente a este volumen durante más de una década, desde mediados de 1970, cuando creía que *Las fuentes* iba a ser una obra de dimensiones normales. Con el paso de los años he aprovechado los trabajos, consejos y críticas de muchas personas. Roland Axtmann y Mark Stephens me ayudaron a reunir las estadísticas comparadas del capítulo 11, y Mark me ayudó también en el capítulo 5. Jill Stein colaboró en la obtención de datos sobre los revolucionarios franceses para el capítulo 6. La contribución de Ann Kane fue esencial para el capítulo 19, entre otros, especialmente para el 16. Marjolein't Hart, John Hobson y John B. Legler me facilitaron datos inéditos para el capítulo 11. Joyce Appleby y

Gary Nash me facilitaron el estudio de la Revolución Americana; Ed Berenson y Ted Margadant hicieron lo propio en el caso de la Revolución Francesa; James Cronin y Patrick Joyce, en la historia de la clase obrera británica; y Kenneth Barkin y Geoff Eley, respecto a la historia de Alemania. Christopher Dandeker comentó con generosidad el capítulo 12; Ronen Palan, los capítulos 3, 8 y 20; y Anthony Smith, el capítulo 7. John Stephens supuso una ayuda extraordinaria para los capítulos 18 y 19. Randall Collins y Bill Domhoff colaboraron con sus respuestas en ambos volúmenes. Me siento igualmente agradecido hacia un crítico anónimo del primer borrador de este libro. Él o ella me obligó con su crítica a esclarecer algunas de mis ideas principales.

Doy las gracias también a la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE) y a la Universidad de California en Los Ángeles por haberme proporcionado ambientes de trabajo inestimables durante la última década. Ambas instituciones programaron una serie de seminarios cuyos excelentes análisis me ayudaron a aclarar muchas ideas. El seminario «Pautas de la Historia» de la LSE fue posible gracias al entusiasmo de Ernest Gellner y John A. Hall; los seminarios del Centro para la Teoría Social y la Historia Comparada de la Universidad de California dependieron especialmente de Bob Brenner y Perry Anderson. Mis secretarias, Yvonne Brown, en Londres, y Ke-Sook Kim, Linda Kiang y Alisa Rabin, en Los Ángeles, me trataron a mí y a mi obra mejor de lo que probablemente merecíamos ambos.

He contraído la mayor deuda intelectual con John A. Hall, que durante muchos años me ha aportado una crítica aguda y una afectuosa amistad. A Nicky Hart y a nuestros hijos, Louise, Gareth y Laura les debo el amor y la perspectiva.

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

Este volumen continúa la historia del poder a través del «largo siglo XIX», desde la Revolución Industrial hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Me concentro en los cinco países occidentales en la punta de lanza del poder: Francia, Gran Bretaña [1], la Austria de los Habsburgo, Prusia-Alemania y los Estados Unidos. No he alterado mi teoría general, según la cual la estructura de las sociedades viene determinada fundamentalmente por las cuatro fuentes del poder social: ideológica, económica, militar y política. También la pregunta primordial continúa siendo la misma: ¿cuáles son las relaciones entre estas cuatro fuentes de poder? ¿Hay alguna o algunas que resulten determinantes en última instancia para la estructuración de la sociedad?

Los grandes teóricos sociales han aportado respuestas contradictorias. Marx y Engels respondieron de forma clara y positiva. Fundamentalmente, afirmaron que las relaciones económicas estructuran

[1] Analizo sólo el territorio continental, excluyendo a Irlanda, gobernado por Gran Bretaña durante este periodo. Después de dudarlo mucho decidí dar en este volumen a la única gran colonia europea el mismo tratamiento que a las restantes (salvo a los futuros Estados Unidos), es decir, analizarla sólo en aquellos casos en que influye de modo decisivo en la metrópoli imperial.

las sociedades humanas. Max Weber respondió negativamente; según él, no cabía establecer «generalizaciones significativas» sobre las relaciones de lo que denominó «las estructuras de la acción social». Por mi parte, rechazo el materialismo marxiano, pero, ¿podría mejorar el pesimismo weberiano?

A este respecto, aporto buenas y malas noticias. Como pretendo que el lector no abandone el libro, comenzaré por las buenas. Vaya por delante que en el presente volumen formularé tres generalizaciones significativas respecto a la cuestión de la primacía, que ampliaré en el resto de la obra con numerosos detalles, salvedades y advertencias.

1. Durante el siglo XVIII preponderaron en la determinación de la estructura social de Occidente dos fuentes de poder social, la económica y la militar. Hacia 1800 la «Revolución Militar» y el desarrollo del capitalismo habían transformado Occidente; la primera, aportando un poder predominantemente «autoritario»; el segundo, un poder básicamente «difuso». Pero al encontrarse íntimamente relacionadas, no podemos atribuir a ninguna de ellas la primacía última.

2. Con todo, durante el siglo XIX, a medida que el poder militar quedaba subsumido en el «Estado moderno», y el capitalismo continuaba revolucionando la economía, las fuentes de poder económico y político comenzaron a predominar. Los actores decisivos de poder en la época moderna fueron el capitalismo y sus clases, los Estados y las naciones; el primero aportando aún mayor difusión y ambigüedad; los segundos ofreciendo una solución autoritaria a la citada ambigüedad. Pero, una vez más, en la medida en que ambos se encontraban íntimamente relacionados, resulta imposible determinar la primacía última de uno de ellos.

3. Las relaciones ideológicas de poder se fueron debilitando a lo largo del periodo. La Europa medieval debió su estructura al cristianismo (como sostuve en el Volumen I); en 1760 las iglesias se encontraban en plena revolución de los medios de comunicación discursiva. Después de este periodo no surgió ningún movimiento ideológico de poder comparable, pese a que las iglesias conservaron muchos de sus poderes y a que la alfabetización surtió un efecto considerable. Las ideologías modernas más importantes se han aplicado a las clases y las naciones. Según una distinción que explicaremos más adelante, el poder ideológico (salvo en raras coyunturas revolucionarias; véanse capítulos 6 y 7) fue en este periodo más «inmanente» que

«trascendente», y contribuyó a la aparición de los actores colectivos creados por el capitalismo, el militarismo y los Estados.

Vayamos ahora a las malas noticias o, más bien, a unas noticias complicadas, a partir de las cuales podremos, de todos modos, elaborar una teoría más rica y adecuada para hacer frente a la confusión de las sociedades humanas reales:

1. Las cuatro fuentes del poder social no son como bolas de billar que siguen una trayectoria y cambian de dirección al chocar entre sí, sino que se «entrelazan»; es decir, sus interacciones alteran recíprocamente sus configuraciones internas y sus trayectorias externas. Los acontecimientos que analizo en estas páginas: la Revolución Francesa, la casi hegemonía británica, la aparición del nacionalismo o del socialismo, la política de las clases medias o del campesinado, las causas y resultados de las guerras, etc., supusieron el desarrollo entrelazado de más de una fuente de poder. Por mi parte, critico las teorías «puras» y monocausales, ya que las generalizaciones no pueden culminar en una simple afirmación de «primacía última». Las tres tesis que presenté anteriormente no generan leyes históricas, sino generalizaciones aproximadas e «impuras».

2. Mis generalizaciones impuras y aproximadas tampoco son capaces de distinguir por completo entre el poder distributivo y colectivo de Parsons (1960: 199 a 225), aunque sus historias difieran. El *poder distributivo* es el poder del actor A sobre el actor B. Para que B adquiera más poder distributivo, A debe perderlo en alguna medida. Pero el *poder colectivo* es el poder conjunto de A y B, que colaboran para explotar la naturaleza o a un tercer actor, C. Durante este periodo los poderes colectivos de Occidente crecieron de forma espectacular: el capitalismo comercial y, más tarde, el industrial acrecentaron la conquista humana de la naturaleza; la Revolución Militar aumentó el poder de Occidente; el Estado moderno promovió la aparición de un nuevo actor de poder colectivo: la nación. Aunque otras fuentes de poder social contribuyeron a producir estos desarrollos, estas tres «revoluciones» del poder colectivo se debieron principal y respectivamente a las relaciones de poder económico, militar y político (la «revolución» del poder ideológico —la expansión de la alfabetización discursiva— fue menos «pura»). Los cambios en el poder distributivo fueron más complejos e «impuros». De hecho, los crecientes poderes colectivos de los Estados redujeron el poder de las

elites políticas sobre sus súbditos cuando las «democracias de partidos» desplazaron a las monarquías. Tampoco las elites militares o ideológicas acrecentaron por regla general su poder distributivo sobre otros. Pero surgieron dos actores impuros de poder distributivo muy importantes: las clases y las naciones; primero, en respuesta a las relaciones de poder militar y económico, y después institucionalizados por las relaciones de poder político y económico. La complejidad de su historia mal puede resumirse en unas cuantas frases.

3. Las clases y los Estados-nación surgieron también entrelazados, lo que añade mayor complejidad. Convencionalmente, se les ha mantenido en compartimentos estancos, concebidos como opuestos, dado que el capitalismo y las clases se consideran «económicos», y los Estados nacionales, «políticos»; las clases son «radicales» y habitualmente «transnacionales»; las naciones, «conservadoras» y reductoras de la fuerza de las clases. Sin embargo, lo cierto es que crecieron todos juntos, y con ello se suscitó un problema adicional sin resolver sobre la primacía última, esto es, hasta qué punto debía organizarse la vida social en torno a principios difusos, de mercado, transnacionales y capitalistas en última instancia, por un lado, o en torno a principios autoritarios, territoriales, nacionales y estatistas, por otro. ¿Debía ser la organización social transnacional, nacional o nacionalista? ¿Y los Estados, habían de ser fuertes o débiles, confederales o centralizados? ¿Se dejarían sin regular los mercados, se les protegería selectivamente o estarían dominados por el imperio? ¿La geopolítica sería pacífica o belicosa? En 1914 aún no se habían tomado decisiones al respecto. Todas estas consideraciones representan ambivalencias decisivas para la civilización moderna.

4. Las clases y los Estados-nación no se vieron libres de desafíos a lo largo de la historia de la civilización occidental. Los actores «seccionales» y «segmentales» (rivales de las clases) y los actores transnacionales y «local-regionales» (rivales de las naciones) subsistieron. Considero que las organizaciones tales como partidos políticos de notables, linajes aristocráticos, jerarquías de mandos militares y mercados internos de trabajo son organizaciones segmentales de poder. En cuanto a los movimientos sociales tales como iglesias minoritarias (y algunas mayoritarias), gremios de artesanos y movimientos secesionistas, los trato como alternativas local-regionales a las organizaciones de carácter nacional. Todos ellos influyeron en la formación de las clases y los Estados-nación, atenuando su poder y su pureza.

5. El efecto acumulativo de todas estas acciones recíprocas —entre

fuentes de poder social, actores de poder colectivo y distributivo, mercado y territorio, clases, naciones y organizaciones seccionales, segmentales, transnacionales y local-regionales— dio lugar a un complejidad que a menudo superó la comprensión de los contemporáneos. Su acción produjo numerosos errores, accidentes aparentes y consecuencias involuntarias, que, a su vez, reaccionaron alterando la constitución de mercados, clases, naciones, religiones, etc. Por mi parte, intentaré establecer algunas teorías sobre esos errores, accidentes y consecuencias involuntarias, pero es obvio que introducen una complejidad adicional.

Así pues, el análisis de este volumen ampliará las tres generalizaciones que he llamado aproximadas e impuras, contando con las cinco complicaciones añadidas. Y afrontará, como ha de hacer toda teoría sociológica, el desorden pautado que constituyen las sociedades humanas.

En éste y en los dos capítulos siguientes examinaré las teorías sociológicas. A continuación vendrán cinco grupos de capítulos narrativos. Los capítulos 4 a 7 cubren el periodo de las revoluciones americana, francesa e industrial, que he situado en el marco de las transformaciones de las cuatro fuentes de poder. Dos de ellas habían comenzado mucho antes —el capitalismo y la Revolución Militar—, pero fue durante el siglo XVIII cuando actuaron como estimulantes de transformaciones ideológicas y políticas, cada una con su lógica parcialmente autónoma: la aparición de la alfabetización discursiva y del Estado moderno. Tomo las cuatro «revoluciones» muy en serio. Del *Boston Tea Party* a la *Great Reform Act*; de la máquina de hilar de husos múltiples, la *spinning jenny*, al *Rocket* de George Stephenson; del Juramento del Juego de Pelota a los Decretos de Karlsbad; del campo de Valmy al de Waterloo, los acontecimientos fueron impuros y supusieron diversas combinaciones de las cuatro revoluciones del poder, lo que hizo que las clases, las naciones y sus rivales evolucionaran por vías complejas, que a menudo escapaban a su propio control. El capítulo 7 presenta mi relato general de los desarrollos del poder durante esta primera parte del periodo, y apunta como causas fundamentales a los Estados militares y al capitalismo comercial.

Los capítulos 9 y 10 se concentran en la rivalidad austro-prusiana en la Europa central y en las complejas relaciones que se establecieron entre los actores de clase y los de nación. Se explica allí el consiguiente triunfo de los Estados-nación relativamente centralizados so-

bre los regímenes confederales más descentralizados. La conclusión del capítulo 10 resume los argumentos de estos dos capítulos y analiza la posibilidad de que las resoluciones centroeuropeas tuvieran un carácter general en toda la civilización de Occidente.

En los capítulos 11 a 14 analizo el auge del Estado moderno. Presento allí estadísticas sobre las finanzas y el personal de los cinco Estados, y divido la expansión del Estado en cuatro procesos diferentes: tamaño, alcance, representación y burocracia. El plano militar lideró el masivo aumento de tamaño hasta 1815, lo que supuso la politización de buena parte de la vida social. Fomentó las clases extensivas y políticas y las naciones, a expensas de los actores local-regionales y transnacionales. Al revés de lo que suele creerse, la mayoría de los Estados no volvieron a crecer hasta la Primera Guerra Mundial. Pero a partir de 1850 —respondiendo sobre todo a la fase industrial del capitalismo— extendieron ampliamente su alcance civil, y este hecho supuso, de forma involuntaria, la integración del Estado-nación, la consolidación de las clases nacionales y el debilitamiento de los actores del poder local-regional y transnacional.

Gran parte de las teorías funcionalistas, marxianas y neoweberianas sobre el Estado moderno destacan el aumento de su tamaño, alcance, eficacia y homogeneidad. Con todo, a medida que los Estados crecían y se diversificaban, sus dos mecanismos de control emergentes —representación y burocracia— luchaban por avanzar al mismo ritmo. Los conflictos representativos giraron en torno a qué clases y qué comunidades religiosas y lingüísticas debían estar representadas y en qué lugar; esto es, ¿hasta qué punto debía ser centralista y nacional el Estado? Aunque el «quién» ha producido numerosas teorías, no podemos decir lo mismo del «dónde». En realidad, existen numerosos estudios empíricos sobre los derechos de los estados en Estados Unidos o sobre las nacionalidades en la Austria de los Habsburgo. Pero la lucha entre los actores del poder nacional centralizado y del poder local-regional constituyó un hecho universal, y las cuestiones representativa y nacional aparecieron siempre entrelazadas. Como ninguna de ellas quedó resuelta durante este periodo, el crecimiento de los Estados los hizo menos coherentes, lo que puede apreciarse con toda nitidez en la disyunción entre política interior y exterior: las clases estaban obsesionadas por la política interior, mientras que las elites políticas y militares disfrutaban del monopolio de la política exterior. El marxismo, la teoría del elitismo y la teoría pluralista encuentran en los Estados una coherencia excesiva. Por mi parte, recu-

rro a mi propia teoría «polimorfa», que presento en el capítulo 3, para demostrar que los Estados modernos «cristalizaron», a menudo confusamente, en cuatro formas principales, la capitalista, la militarista y las diferentes soluciones a las cuestiones representativa y nacional. La conclusión del capítulo 14 resume mi teoría sobre el auge del Estado moderno.

El cuarto grupo, los capítulos 15 a 20, aborda los movimientos de clase entre las clases medias y bajas, y la aparición de las naciones populares a partir de 1870. El capitalismo comercial e industrial produjeron, de modo simultáneo y ambiguo, organizaciones de clase, seccionales y segmentales. Atribuyo sobre todo los resultados a las relaciones de poder político autoritario. En el capítulo 15 analizo la «primera clase obrera», aparecida en Gran Bretaña a comienzos del siglo XIX. El capítulo 16 se ocupa de tres fracciones de la clase media —pequeña burguesía, profesionales y empleados de carrera— y de sus relaciones con el nacionalismo y el Estado-nación. Los capítulos 17 y 18 describen la competencia a tres bandas por la voluntad de los obreros entre clases, sectores y segmentos, que se resolvió autoritariamente a través de las diversas cristalizaciones de los Estados modernos. El capítulo 19 analiza una resolución similar de la competencia por el alma de los campesinos entre las «clases definidas por la producción», las «clases definidas por el crédito» y los «sectores segmentales». El capítulo 20 plantea una generalización de todo este material y resume las relaciones entre las fuentes del poder social durante el «largo siglo XIX».

De este modo, en el capítulo 7, en las deducciones de los capítulos 10, 11 y 14 y en el capítulo 20 generalizo las conclusiones del presente volumen. Pero existe aún otra conclusión sobre el periodo, de carácter auténticamente empírico. La sociedad occidental culminó en la Gran Guerra, el conflicto más devastador de la historia. El siglo anterior también había culminado con una ruinosa secuencia de guerras, las de la Revolución Francesa y los conflictos napoleónicos; estos puntos culminantes serán analizados en los capítulos 8 y 21. El capítulo 21, donde se explican las causas de la Primera Guerra Mundial, constituye la última ejemplificación empírica de mi teoría general. Rechazo allí las explicaciones que se concentran de modo predominante en la geopolítica o en las relaciones de clase. Ninguna de ellas puede explicar la irracionalidad objetiva de aquellos actos, reconocida incluso por sus protagonistas en tiempos más pacíficos. El entramado de las clases, las naciones y sus rivales produjo una espiral

descendente de consecuencias internas y geopolíticas involuntarias, demasiado complejas para la comprensión cabal de los participantes o para su control por parte de unos Estados polimorfos. Convendría aprender la lección de esta decadencia e institucionalizar el poder con objeto de no repetir tales acontecimientos.

Lo que resta de este capítulo y los dos siguientes explican con mayor detalle mi modelo IEMP de poder. Repito aquí el consejo que di al lector al comenzar el Volumen I: si encuentra difícil la teoría sociológica, puede saltar directamente al primer capítulo narrativo, el número 4. Cabe esperar que más tarde sienta ganas de regresar a la teoría.

El modelo IEMP de organización del poder

En busca de nuestros objetivos, nos adentraremos en las organizaciones de poder con tres características formales y cuatro sustanciales que determinan la estructura general de las sociedades:

1. Como he apuntado antes, la organización supone la existencia de un poder colectivo y distributivo. La mayoría de las relaciones reales de poder —entre clases o entre un Estado y sus súbditos— los comprenden a ambos, en combinaciones variables.
2. El poder puede ser extensivo o intensivo. El *poder extensivo* puede organizar grandes masas de población en territorios extensos. El *poder intensivo* moviliza un alto grado de avenencia entre quienes participan de él.
3. El poder puede ser autoritario o difuso. El *poder autoritario* comprende las órdenes procedentes de la voluntad de un actor (normalmente, una colectividad) y supone la obediencia consciente de los subordinados. Los ejemplos típicos son las organizaciones de poder militar y político. El *poder difuso* no manda directamente; se propaga de forma relativamente espontánea, inconsciente y descentralizada. Los sujetos se ven obligados a actuar de una forma determinada, pero no por orden de una persona u organización concreta. La forma típica del poder difuso son las organizaciones de poder ideológico y económico. El intercambio mercantil del capitalismo constituye un buen ejemplo de ello. Esta forma de poder entraña un grado considerable de imposición, aunque se trata de un hecho no personalizado, que suele parecer «natural».

Cuando es eficaz, el ejercicio del poder combina el poder colectivo y distributivo, extensivo e intensivo, autoritario y difuso. De ahí las escasas posibilidades de que una sola fuente de poder —por ejemplo, económico o militar— sea capaz de determinar por sí sola la estructura total de las sociedades. Debe unirse con otros recursos de poder, como en el caso de las dos determinaciones duales que identifico a lo largo de este periodo. Existen de hecho cuatro fuentes sustantivas de poder social: económica, ideológica, militar y política.

1. El *poder ideológico* procede de la necesidad humana de dotar a la vida de un significado último, compartir normas y valores y participar en prácticas estéticas y rituales. El control de una ideología que combine significados últimos, valores, normas, estética y rituales brinda un poder social general. Las religiones constituyeron el ejemplo fundamental del Volumen I; en el presente volumen figuran junto a ideologías laicas como el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo, las cuales, cada una a su modo, se esforzaron por resolver el problema del sentido de las clases y las naciones.

Cada fuente del poder genera distintas formas de organización. El poder ideológico es predominantemente difuso, ordena a través de la persuasión y pretende una participación «verdadera» y «libre» en el ritual. Se difunde de dos formas principales. Puede ser «trascendente» desde el punto de vista socioespacial, esto es, una ideología puede difundirse directamente por las fronteras de las organizaciones de poder económico, militar y político. Los seres humanos que pertenecen a diferentes Estados, clases, etc., afrontan problemas semejantes, para los que una ideología puede ofrecer soluciones creíbles. Entonces, el poder ideológico se extiende trascendentalmente para formar una nueva red de interacción social, característica y poderosa. En segundo lugar, el poder ideológico puede consolidar una organización de poder ya existente, mediante el desarrollo de su «moral inmanente». La trascendencia es una forma de poder radicalmente autónoma; la inmanencia reproduce y fortalece las relaciones de poder ya existentes.

2. El *poder económico* nace de la necesidad de extraer, transformar, distribuir y consumir los recursos de la Naturaleza. Resulta particularmente poderoso porque combina la colaboración intensiva del trabajo cotidiano con los circuitos extensivos de la distribución, el intercambio y el consumo de bienes. Ello genera una combinación estable de poder intensivo y extensivo, y normalmente también de poder

autoritario y difuso (el primer par se centra en la producción; el segundo, en el intercambio). En el volumen I he denominado a estas organizaciones de poder económico «circuitos de praxis», pero el término resulta demasiado abstruso. Abandono ahora este nombre para adoptar unas etiquetas más convencionales para las formas de colaboración y conflicto económicos que analizo en estos volúmenes: las clases y las organizaciones económicas seccionales y segmentales.

Todas las sociedades complejas han contado con un control desigualmente distribuido de los recursos económicos. Así pues, las clases han sido ubicuas. Marx distinguió de forma más básica entre quienes poseían o controlaban los medios de producción, distribución e intercambio y quienes controlaban sólo su propio trabajo, aunque es evidente que podríamos continuar la distinción y diferenciar con más detalle otras clases con derechos más específicos sobre los recursos económicos. Estas clases pueden dividirse también en actores más pequeños y seccionales, como un oficio especializado o una profesión. Las clases se relacionan mutuamente de manera vertical: la clase A está por encima de la clase B y la explota. Pero otros grupos establecen también conflictos horizontales entre sí. Me atengo al uso antropológico para llamar a estos grupos «segmentos» [2]. Los miembros de un grupo segmental provienen de distintas clases: una tribu, un linaje, una red clientelista, una localidad, una empresa industrial, etc. Los segmentos compiten entre sí horizontalmente. Las clases, las secciones y los segmentos se cruzan y atenúan mutuamente en las sociedades humanas.

En el Volumen I he mostrado el frecuente predominio de los segmentos y las secciones sobre las clases. En general, estas últimas se mantuvieron «latentes»: los propietarios, los trabajadores y otros elementos luchaban entre sí, pero solían hacerlo de forma semioculta, intensiva y limitada a un nivel cotidiano y local. La lucha más extensiva se entabló entre los segmentos. Pero cuando las relaciones de clase comenzaron a predominar, alcanzamos un segundo estadio: el de las clases «extensivas», unas veces «simétricas» y otras «asimétricas». Las clases extensivas y asimétricas aparecieron, por lo general, antes: sólo los propietarios estaban organizados extensivamente, mientras que los trabajadores se encontraban bloqueados en organi-

[2] Con bastante confusión, los teóricos americanos de las clases emplean el término «segmento» para referirse a una parte de la clase, lo que recibe en Europa el nombre de «fracción». Por mi parte, me atengo aquí al uso europeo y antropológico.

zaciones seccionales y segmentales. Más tarde, en estructuras de clase extensivas y simétricas, las dos clases principales se organizaron en un área socioespacial semejante. Por fin, llegamos a la «clase política», organizada para dominar el Estado. Aquí también podemos distinguir entre estructuras de clase simétricas y asimétricas (por ejemplo, donde sólo los propietarios están organizados políticamente). Marx, en sus momentos más grandiosos, sostuvo que las clases extensivas, políticas y simétricas y la lucha de clases eran el motor de la historia. Sin embargo, como expuse en el Volumen I (salvo en el caso de la Grecia clásica y de los comienzos de la Roma republicana), las clases no comenzaron a ser políticas y extensivas hasta justo antes de la Revolución Industrial. En la mayor parte de las sociedades agrarias existe una clase dominante, organizada extensivamente, que «enjaula» a las clases latentes subordinadas dentro de sus propias organizaciones segmentales de poder. En este Volumen describiré una derivación incompleta hacia la lucha de clases plena y simétrica de Marx, así como la consiguiente transformación vinculada de secciones y segmentos.

3. El *poder militar* es la organización social de la fuerza física. Nace de la necesidad de organizar la defensa y la utilidad de la agresión. El poder militar posee aspectos tanto intensivos como extensivos, puesto que requiere una intensa organización para preservar la vida y causar la muerte, y puede organizar a un elevado número de individuos en vastas áreas socioespaciales. Quienes lo monopolizan, como las elites o castas militares, pueden esgrimir un grado de poder social general. La organización militar es por naturaleza autoritaria y «concentrada-coercitiva». El estamento militar proporciona una coerción disciplinada y rutinizada, especialmente en los ejércitos modernos (en el capítulo 12 subrayo el papel de la disciplina militar en la sociedad moderna). El influjo de su poder en el resto de la sociedad es doble desde el punto de vista socioespacial. Proporciona un núcleo concentrado en el que la coerción garantiza una colaboración positiva; por ejemplo, en el trabajo esclavo de las antiguas sociedades históricas o en «demostraciones de fuerza» ritualizadas, como veremos en el presente volumen. Pero también produce un impacto mucho más amplio y de un carácter más negativo y terrorista, tal como he subrayado en el Volumen I, capítulo 5, bajo el título de «Los primeros imperios de dominación». En el Occidente moderno, el poder militar es diferente. Ha sido formalmente monopolizado y restringido por los Estados, si bien las elites militares han conservado una

considerable autonomía dentro de aquéllos, y no han dejado de influir en la sociedad, como tendremos ocasión de comprobar.

4. El *poder político* surge por la utilidad de una regulación centralizada y territorial. En definitiva, poder político significa poder *estatal.* Su naturaleza es autoritaria, ya que imparte órdenes desde un centro. La organización del Estado es doble: desde el punto de vista interno, se encuentra «territorialmente centralizado»; pero cara al exterior, implica una geopolítica. Ambos planos influyen en el desarrollo social, particularmente en la época moderna. En el capítulo 3 establecí una teoría del Estado moderno.

La lucha por el control de las organizaciones de poder ideológico, económico, militar y político constituye el drama más importante del desarrollo social. Las sociedades se estructuran, ante todo, mediante la interacción de los poderes ideológico, económico, militar y político. Pero, dicho así, se trata sólo de cuatro tipos ideales, y lo cierto es que no existen en forma pura. Las organizaciones reales del poder los mezclan, porque los cuatro son necesarios entre sí y para la existencia social. Una organización económica, por ejemplo, requiere que algunos de sus miembros compartan normas y valores ideológicos. También necesita de una defensa militar y una regulación estatal. De esta forma, las organizaciones ideológicas, militares y políticas ayudan a estructurar las económicas, y viceversa. No hay en las sociedades niveles o subsistemas autónomos que se desarrollen aisladamente, según su propia lógica («del modo de producción feudal al modo de producción capitalista», «del Estado dinástico al Estado-nación», etc.). Durante las grandes transiciones, la interrelación y la propia identidad de organizaciones tales como «la economía» o «el Estado» comienzan a sufrir una metamorfosis, que puede cambiar incluso la propia definición de «sociedad». Durante el periodo que nos ocupa, el Estado-nación y un concepto más amplio de civilización transnacional compitieron como unidades básicas de pertenencia en Occidente. En ese marco también sufrió una metamorfosis la «sociedad», el concepto básico de la sociología.

Las fuentes de poder generan, pues, redes de relaciones de poder que se intersectan y se superponen a otras dinámicas y fronteras socioespaciales; esta interrelación presenta consecuencias involuntarias para los actores de poder. Mi modelo IEMP no consiste en un sistema social dividido en cuatro «subsistemas», «niveles», «dimensiones» o cualesquiera otros de los términos geométricos favoritos de los teóricos sociales. Constituye, por el contrario, una aproximación

analítica para comprender el desorden. Las cuatro fuentes del poder ofrecen medios concretos de organización, con capacidad potencial de brindar a los seres humanos la consecución de sus objetivos. Pero los medios elegidos y sus posibles combinaciones dependerán de la interacción permanente entre las configuraciones de poder históricamente dadas y lo que aparece entre ellas y dentro de ellas. Las fuentes del poder social y las organizaciones que las incardinan son impuras y «promiscuas». Se entretejen mutuamente en una compleja interacción de fuerzas institucionalizadas y fuerzas intersticiales emergentes.

¿Un largo siglo revolucionario?

Este volumen presenta una evidente discontinuidad respecto al I, donde abarqué 10.000 años de experiencia social de la humanidad y 5.000 de historia civilizada en todo el mundo, mientras que aquí abordaré apenas 154 años, y ello en el núcleo de una única civilización: la Europa occidental y su principal vástago colonial de raza blanca. Muchas de las cuestiones de amplio alcance tratadas en el Volumen I caen fuera del ámbito de éste. No podré desarrollar (salvo en formas muy limitadas) uno de sus temas principales: la dialéctica entre los imperios de dominación y las civilizaciones con múltiples actores de poder, puesto que esta civilización en concreto es meramente un ejemplo de las últimas. En este volumen sustituyo lo macro por lo micro.

Existen buenas razones para reducir el objetivo. La civilización occidental, además de transformar el planeta, ha transmitido una riqueza documental que permite una descripción más sustanciosa, capaz de vincular las macroestructuras a los grupos con poder de decisión y a las agencias humanas individuales. Por otra parte, ensayo también un análisis más comparativo. A este respecto, debo aclarar que no soy por principio enemigo de este tipo de análisis, aunque algunos reseñadores del Volumen I lo hayan supuesto. Cuanto más numerosos son los casos cercanos en el tiempo de la historia universal, mayores serán también las posibilidades de comparación. Siempre que no perdamos de vista que los cinco casos que estudio fueron «países» o «potencias» y no «sociedades» completas, podremos compararlos con provecho. Por otra parte, la mayoría de los historiadores y los sociólogos consideran que este periodo representa una discontinuidad respecto a la historia anterior. Creen que el desarrollo social

general dependió ante todo de una revolución singular, normalmente de tipo económico. Estamos ante una explicación mucho más simple que la de mi modelo IEMP: no cuatro, sino una sola fuente fundamental de poder; no una interacción ni una metamorfosis impura e intersticial, sino un sistema dialéctico único. ¿Es útil ese modelo de revolución única?

En el curso de unos setenta años, primero en Gran Bretaña, de 1780 a 1850, y después en América y Europa occidental, durante los setenta siguientes, tuvo lugar lo que habitualmente se reconoce como el cambio revolucionario más trascendente de la historia humana: la Revolución Industrial. Este hecho transformó el poder de los seres humanos sobre la naturaleza y sobre sus propios cuerpos, la localización y densidad de los asentamientos humanos, el paisaje y los recursos naturales de la Tierra. Durante el siglo XX tales transformaciones se extendieron por el mundo. Hoy vivimos en una sociedad global. No se trata de una sociedad unitaria, de una comunidad ideológica o de un Estado, sino de una única red de poder, influida por todo tipo de perturbaciones: derrocamiento de imperios, migraciones masivas, transporte de todo tipo de materiales y mensajes, y, finalmente, amenazas contra el ecosistema y la atmósfera planetaria.

Una gran parte de las teorías históricas y sociológicas consideran tales cambios «revolucionarios», en el sentido cualitativo, no meramente cuantitativo, y establecen una dicotomía en la historia de la humanidad a partir del año 1800. La teoría sociológica clásica fue al principio poco más que una serie de dicotomías entre las sociedades pasadas y presentes, como si cada una de ellas hubiera tenido un carácter unitario y sistémico. Entre estas dicotomías destacan las siguientes: el paso de la sociedad feudal a la sociedad industrial (Saint-Simon); la transición de la etapa metafísica a la científica (Comte); la de la sociedad militante a la industrial (Spencer); la del feudalismo a la del capitalismo (Smith, los economistas políticos y Marx); la del estatus a la del contrato (Maine); la de la comunidad a la de la asociación (Tonnies); y la de las formas mecánicas a las formas orgánicas de la división del trabajo (Durkheim). El propio Weber, que no estableció dicotomías, concibió la historia como un proceso singular de racionalización, aunque rastreó su desarrollo desde mucho más atrás.

Y esta idea se ha prolongado. En la década de 1950 Parsons estableció una cuádruple dicotomía que revolucionaba las relaciones interpersonales, según la cual éstas se desplazaban de lo particular a lo universal, de lo adscriptivo a una orientación hacia el logro, de lo

afectivo (es decir, con carga emocional) a lo neutral e instrumental, de lo específico de una relación concreta a lo difuso a través de numerosas relaciones. Las relaciones preindustriales se habrían regido por las primeras características; las sociedades industriales, por las últimas. Más tarde, los fantasmas de Comte y Marx reaparecían en la distinción establecida por Foucault (1974, 1979) entre una era clásica y una era burguesa, cada cual dominada por su propia «episteme» o «formación discursiva» del conocimiento y del poder. Giddens (1985) se aproxima a todos estos autores con su distinción declaradamente «discontinuista» entre las sociedades premodernas y los modernos Estados-nación.

En tiempos recientes han aparecido algunas tricotomías, es decir, argumentaciones sobre un tercer tipo de sociedad a finales del siglo XX. Se sugieren ahora dos transiciones: del feudalismo a la sociedad industrial y de ésta a la sociedad posindustrial; del feudalismo al capitalismo y de éste al capitalismo de monopolio, capitalismo desorganizado o poscapitalismo; de la sociedad premoderna a la moderna y de ésta a la posmoderna. Hoy, el posmodernismo alborota la universidad; sin embargo, sólo avanza a través de la sociología. Su vitalidad depende de que haya existido realmente una época «moderna» anterior. No es éste el lugar para discutir las terceras etapas (que aparecerán en el Volumen III), pero las revisiones no cuestionan la naturaleza revolucionaria y sistémica de la primera transición; sencillamente, se limitan a añadir una segunda.

Intentaré esclarecer estas dicotomías y tricotomías criticando sus dos supuestos principales y su desacuerdo interno. En primer lugar, suponen que este periodo transformó cualitativamente el conjunto de la sociedad. En segundo lugar, achacan la transformación a una revolución económica. En su mayoría son explícitas al respecto, pero algunas resultan bastante opacas. Por ejemplo, Foucault nunca explicó su transición, pero la describió repetidamente como una revolución «burguesa» en un sentido aparentemente marxiano (aunque, al carecer de una teoría real del poder distributivo, nunca aclaró quién hace qué y a quién se lo hace). Por mi parte, critico los dos supuestos.

Pero la aclaración puede comenzar por el desacuerdo entre las propias dicotomías. Mientras que algunas plantean que la esencia de la nueva economía fue industrial (Saint-Simon, Comte, Spencer, Durkheim, Bell, Parsons), otros la etiquetan de capitalista (Smith, los economistas políticos, Marx, los neomarxistas, Foucault, Giddens y la mayoría de los posmodernistas). El capitalismo y el industrialismo

fueron procesos distintos que tuvieron lugar en tiempos diferentes, sobre todo en los países más adelantados. Gran Bretaña poseía ya una economía predominantemente capitalista mucho antes de la Revolución Industrial.

En la década de 1770 Adam Smith aplicó su teoría del capitalismo de mercado a una economía esencialmente agraria, al parecer sin percibir la revolución industrial que se avecinaba. Si la escuela capitalista está en lo cierto, debemos fechar la transformación revolucionaria inglesa a partir del siglo XVIII o incluso del XVII. Pero si lo está la escuela industrial, podemos conservar la fecha de comienzos del siglo XIX. No obstante, si ambas tienen razón en parte, tuvo que haber más de un proceso revolucionario, y entonces deberemos desenmarañar su entrelazamiento. En realidad, puede que las transformaciones económicas fueran aún más complicadas. Algunos historiadores económicos minimizan la importancia de la (primera) Revolución Industrial, mientras que otros ponen el énfasis en una «Segunda Revolución Industrial», que afectó, de 1880 a 1920, a las economías de vanguardia. Pero las relaciones del capitalismo con la industrialización también difirieron en los distintos países y regiones; así pues, intentaré demostrar que la transformación económica no fue ni singular ni sistémica.

¿Fue un cambio cualitativo? Sí para el poder colectivo; no para el distributivo. Se produjo ciertamente una auténtica trasformación exponencial, sin paralelo, de la logística del poder colectivo (como destaca Giddens, 1985). Si medimos este último según tres baremos: la capacidad de movilizar grandes grupos de personas, la capacidad de extraer energía de la naturaleza y la capacidad de esa civilización para explotar colectivamente a otras.

El crecimiento de la población mide el aumento de la capacidad de movilizar a los individuos para la cooperación social. En Inglaterra y Gales el proceso del desarrollo humano produjo una población de 5 millones hacia 1640. Después de 1750, la curva ascendente de la población alcanzó los 10 millones hacia 1810, y los 15 en 1840. En treinta años se consiguió lo que antes había requerido milenios. El primer billón de personas en todo el planeta no se alcanzó hasta 1830; el segundo necesitó un siglo; el tercero, treinta años; y el cuarto, quince años (McKeown, 1976: 1 a 3; Wrigley y Schofield, 1981: 207 a 215). Durante los milenios anteriores la esperanza de vida se limitaba por lo general a los 30 años; a lo largo del siglo XIX se llegó a los 50 años en Europa; y durante el siglo XX, a más de 70 años. Todo un

cambio para la experiencia humana (Hart, de próxima aparición). La misma aceleración se produjo en todas las formas de movilidad colectiva. De 1760 a 1914 las estadísticas sobre la comunicación de mensajes y el transporte de bienes, sobre el producto bruto nacional, la renta per cápita y la capacidad mortífera de las armas muestran un despegue que supera todos los ritmos históricos conocidos. El crecimiento de la movilización del poder colectivo, lo que Durkheim llamó la «densidad social», fue auténticamente exponencial.

La habilidad de los seres humanos para extraer energía de la naturaleza creció también enormemente. En las sociedades agrarias estudiadas en el Volumen I, la producción de energía dependía casi por completo de la musculatura humana y animal. Pero los músculos necesitaban las calorías producidas por la agricultura, y ésta, a su vez, el trabajo de la práctica totalidad de la población. Era una especie de trampa energética, que dejaba poco tiempo para actividades no agrícolas que no estuvieran destinadas al servicio de clases dominantes de reducido tamaño, ejércitos e iglesias. Landes (1969: 97 a 98) apunta el cambio que introdujeron las minas de carbón y las máquinas de vapor; hacia 1870 el consumo de carbón superaba en Gran Bretaña los 100 millones de toneladas, que producían unos 800 millones de calorías, capaces de satisfacer las demandas energéticas de una sociedad preindustrial de unos 200 millones de adultos. La población británica ascendía en 1870 a 31 millones, pero no hicieron falta más de 400.000 mineros para generar semejante energía. La capacidad de los seres humanos para extraer energía ha llegado a amenazar con agotar las reservas de la Tierra y destruir su ecosistema.

En términos históricos, este ritmo de extracción de energía produce vértigo. Las sociedades agrarias pudieron igualar en ocasiones la concentración energética de una mina de carbón o una gran máquina de vapor —por ejemplo, durante la construcción de una pirámide egipcia o de una calzada por una legión romana—, mas para ello necesitaban miles de hombres y animales. Los caminos de acceso a aquellos emplazamientos, que terminaban en grandes almacenes, se encontraban atascados de carromatos llenos de suministros. En muchos kilómetros a la redonda, la agricultura se organizaba para llevar allí sus excedentes. Esta logística agraria suponía la existencia de una federación autoritaria de organizaciones de poder local-regional y segmental, que concentraban sus fuerzas en esa tarea extraordinaria por medio de la coerción. Sin embargo, cuando las máquinas de vapor se extendieron por toda Inglaterra hacia 1870 cada una de ellas

necesitaba quizás unos cincuenta trabajadores con sus familias, unas cuantas bestias, un taller y un par de vehículos de suministro. La producción de energía ya no necesitaba la movilización concentrada, extensiva y coercitiva. Se hallaba difundida por la sociedad civil, transformando la organización de poder colectivo.

Esta civilización era capaz de dominar el mundo por sí sola. Bairoch (1982) ha reunido varias estadísticas históricas de producción (que analizaré en el capítulo 8). En 1750 Europa y América del Norte abarcaban alrededor del 25 por 100 de la producción industrial del mundo; hacia 1913, alcanzaban el 90 por 100 (quizás algo menos, ya que las estadísticas minimizan la producción de las economías no monetarias). La industria se encontraba lista para transformarse en superioridad militar. Unos cuantos contingentes europeos, relativamente pequeños, de tropas y flotas podían intimidar continentes y repartirse el mundo. Sólo Japón, el interior de China y los países inaccesibles y poco atractivos se libraron de los imperios europeos y sus colonos blancos. Entonces, el este de Asia reaccionó y se unió a esta selecta banda de saqueadores de la Tierra.

Como afirman las teorías dicotómicas, el poder colectivo occidental experimentó una revolución. Mejoró la organización cualitativa de las sociedades para movilizar la capacidad humana y explotar la naturaleza, pero también para explotar a otras sociedades menos desarrolladas. Su extraordinaria densidad social permitió la participación en la misma «sociedad» tanto a los dirigentes como al pueblo. Los contemporáneos llamaron «modernización» o «progreso» a esta revolución del poder colectivo. Veían en ella el cambio hacia una sociedad más rica, más sana y mejor en todos los aspectos, que aumentaría la felicidad humana y la moralidad social. Pocos dudaban de que los europeos estaban dando un salto cualitativo en la organización de la sociedad, tanto en las colonias como en la madre patria. Por muy grande que sea nuestro escepticismo actual, incluso nuestra alarma por dicho «progreso», no podemos ignorar que durante el largo siglo XIX muy pocos lo pusieron en duda.

El cambio se produjo en un tiempo tan breve ya que algunas de las transformaciones más profundas tuvieron lugar en el curso de la vida de una persona. Algo muy distinto a lo que hemos visto en la mayoría de los cambios estructurales descritos en el Volumen I. Por ejemplo, la aparición de las relaciones sociales capitalistas en Europa occidental había requerido siglos, y aunque la población experimentó en su carne algunas de sus consecuencias (por ejemplo, la sustitución

de las corveas por rentas en metálico o el cercamiento forzoso de las tierras), es dudoso que alguien comprendiera los macrocambios que estaban en marcha. Por el contrario, los macroprocesos del siglo XIX fueron identificados por participantes reflexivos; de ahí la aparición de las propias teorías dicotómicas, que en realidad constituían sólo versiones relativamente científicas de las ideologías contemporáneas de la modernización.

Pero la autoconsciencia y la reflexión se alimentan a sí mismas. Si los actores sociales se dan cuenta de las transformaciones estructurales en curso, puede que intenten resistirse a ellas. Pero si, como en este caso, las transformaciones acentúan los poderes colectivos, es más probable que intenten embridar la modernización conforme a sus intereses. Sus posibilidades de lograrlo dependen del poder distributivo que tengan.

Una mirada superficial podría concluir que también el poder distributivo experimentó una transformación a comienzos de este periodo. Las clases y las naciones, actores relativamente noveles en las luchas por el poder, generaron los acontecimientos sociopolíticos que denominamos «revoluciones». En el Volumen I demostré que la organización de clase y de nación era una rareza en las sociedades agrarias. Pero como observaron Marx y Weber, entre otros, la lucha nacional y de clase se convirtió ahora en un hecho decisivo para el desarrollo social. El poder distributivo, como el colectivo, se desplazó desde el particularismo hacia el universalismo.

Curiosamente, sin embargo, los resultados no fueron revolucionarios. Tomemos, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, la primera nación industrial. Gran parte de las relaciones británicas de poder distributivo propias de 1760 subsistían en 1914 y subsisten en la actualidad. Y en los casos en que han cambiado, la transición se encontraba en marcha mucho antes de 1760. El protestantismo de Estado se introdujo gracias a Enrique VIII, se consolidó gracias a la Guerra Civil y acabó por ser casi secular durante el siglo XVIII y la primera parte del XIX. La monarquía constitucional se institucionalizó en 1688; desde entonces, a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, los poderes monárquicos han sufrido una fuerte erosión, aunque ello no ha evitado la confirmación de su dignidad simbólica. La agricultura y el comercio se transformaron pronto en actividades capitalistas; la industria fue moldeada por las instituciones comerciales del siglo XVIII y las clases modernas han sido absorbidas por ese capitalismo. La Cámara de los Lores, las dos universidades antiguas, las escuelas públi-

cas, la *City*, la guardia de palacio, los clubes londinenses, la clase burocrática, todo ello sobrevive dentro del poder como una mezcla del siglo XIX con todos los siglos pretéritos. En realidad, se produjeron también auténticos desplazamientos de poder —el auge de la clase media y de la clase obrera, la expansión de la democracia de partidos, el nacionalismo popular y el Estado asistencial—, pero la tendencia general no fue tanto la transformación cualitativa que defienden las teorías dicotómicas como los cambios graduales, que demostraron la inmensa capacidad de adaptación de los regímenes gobernantes.

Acaso Gran Bretaña, en muchos sentidos el país más conservador de Europa, constituya un elemento extremo; pero encontramos pautas semejantes en otros lugares. En el mapa religioso europeo, establecido ya en 1648, no volvieron a registrarse alteraciones significativas. La religión cristiana quedó prácticamente secularizada desde entonces. Es verdad que hubo dos grandes derrocamientos de monarquías al comienzo de nuestro periodo, pero las revoluciones americana y francesa tuvieron lugar antes de la industrialización de esos países, y (como veremos) la Revolución Francesa necesitó todo un siglo para conseguir unos cambios bastante más modestos que los que había prometido en un principio; la Constitución de los revolucionarios americanos, por su parte, no tardó en convertirse en una fuerza conservadora para las posteriores relaciones de poder distributivo. En otros lugares, el capitalismo y la industria resultaron desestabilizadores, pero rara vez derrocaron al antiguo régimen; sólo hubo dos revoluciones sociopolíticas, en Francia y Rusia, en comparación con la multitud de revoluciones fracasadas y de reformas limitadas de otros países. El antiguo régimen y el nuevo capital normalmente se fundieron en una clase gobernante moderna durante el siglo XIX; después hicieron concesiones de ciudadanía, que contribuyeron también a domesticar en gran parte a las clases medias, a la clase obrera y al campesinado. La continuidad resultó aún mayor en el Japón, el principal país capitalista fuera de Occidente.

Quizás haya sido demasiado selectivo y haya subestimado algunos desplazamientos auténticos del poder distributivo. Pero el argumento opuesto, que defiende la transformación —especialmente en el sentido dialéctico marxiano de los opuestos que chocan en una «revolución» social y política— no parece viable.

Esto parece igualmente cierto para el poder distribuido geopolíticamente. Los Estados se hicieron nacionales, pero siguieron creciendo y decayendo, en tanto que algunos, muy pocos, continuaban

luchando por el liderazgo durante varios siglos. Francia y Gran Bretaña se enfrentaron sin descanso desde la Edad Media hasta este periodo. Las novedades fueron el éxito de Prusia, la aparición de los Estados Unidos y la decadencia de Austria. La Revolución Industrial (Tilly, 1990: 45 a 47) frenó la tendencia a la concentración del poder en unas cuantas potencias que se había manifestado desde el siglo XVI, favoreció al Estado-nación en detrimento del imperio multinacional y privilegió a los Estados que contaban con economías más grandes. Veremos, no obstante, que estas tendencias dependieron también de relaciones de poder no económicas.

La sorprendente continuidad del poder distributivo tiene una excepción importante. Las relaciones de poder entre el hombre y la mujer experimentaron durante este periodo una transformación rápida, que sí podríamos calificar de revolucionaria. En otro lugar (1988) he descrito con brevedad el final del «patriarcado», su sustitución por el «neopatriarcado» y la posterior aparición de unas relaciones más igualitarias entre los géneros. El indicador más sencillo es la longevidad. Desde los más remotos tiempos prehistóricos hasta finales del siglo XIX, los hombres vivieron más que las mujeres, unos cinco años más en un arco vital de entre treinta y cuarenta y cinco. Luego, la desigualdad se invirtió: las mujeres viven ahora cinco años más que los hombres en un arco vital de setenta años, y la diferencia sigue agrandándose (Hart, 1990). Por mi parte, he abandonado la intención inicial de analizar en este volumen las relaciones de género, cuya historia se está reescribiendo en este momento gracias a la investigación feminista. No es éste, pues, el momento de intentar una gran síntesis, aunque formularé algunos comentarios sobre las conexiones entre género, clase y nación durante el periodo. Sin embargo, cabe afirmar que, exceptuando el género, el poder distributivo evolucionó en el periodo menos de lo que sugiere la tradición teórica. Las clases y los Estados-nación no revolucionaron la estratificación social.

No han faltado sociólogos e historiadores que lo apuntaran. Así, Moore (1973) argumenta que las antiguas pautas de posesión de la tierra afectaron más al desarrollo político que el capitalismo industrial. Rokkan (1970) distingue dos revoluciones, la nacional y la industrial, cada una de las cuales generó dos escisiones políticas. La revolución nacional comportó conflictos entre el centro y la periferia, y entre el Estado y la Iglesia; la Revolución Industrial produjo conflictos entre la agricultura y la industria, los propietarios y los trabajadores. Rokkan descifra la dicotomía revolucionaria como una combina-

ción compleja de cuatro luchas, en las que las antiguas consignan los parámetros de las nuevas. Lipset (1985) cree que las variaciones que presentan los movimientos obreros del siglo XX se debieron a la presencia o ausencia de un feudalismo previo. Corrigan y Sayer destacan la supervivencia de la clase gobernante británica; su «supuesta sensatez, moderación, pragmatismo, hostilidad hacia la ideología, y su capacidad para "salir del paso sin saber cómo", sus argucias y excentricidades» (1985: 192 y ss.). Mayer (1981) argumenta que los antiguos regímenes europeos no fueron liquidados por el industrialismo: sólo se pusieron en peligro de muerte tras perpetrar la Primera Guerra Mundial, reaccionar exageradamente ante el socialismo y abrazar el fascismo.

Estos autores establecen dos puntos. Primero, la importancia de la tradición. Ni el capitalismo ni el industrialismo acabaron con todo; por el contrario, se moldearon según formas antiguas. En segundo lugar, estos estudiosos trascienden la economía y añaden a los modos de producción y a las clases sociales diversas relaciones de poder político, militar, geopolítico e ideológico. Sus argumentaciones resultan con frecuencia acertadas. Algunos de los capítulos que veremos a continuación se apoyan en ellas, especialmente en las de Rokkan, que percibió la significación de las luchas nacionales y de clase.

No obstante, hubo cambios en las relaciones de poder distributivo. En primer lugar, el antiguo régimen no podía limitarse a ignorar o reprimir a las clases y las naciones. Para sobrevivir, debía llegar a un compromiso (Wuthnow, 1989: III; Rueschemeyer, Stephens y Stephens, 1992). Pero las luchas nacionales también se entrelazaron con las clases, modificando con ello a todos los actores de poder, no sistemática o «dialécticamente», sino por vías complejas que a menudo surtían efectos involuntarios. En segundo lugar, las tradicionales organizaciones de poder rivales de las clases y las naciones —segmentales o seccionales y transnacionales o local-regionales— no fueron eliminadas sino transformadas. Las redes flexibles, controladas por notables del antiguo régimen, se convirtieron en partidos políticos clientelistas, más accesibles a la capacidad de maniobra de los notables, que mantuvieron a raya a los partidos de clase. Las fuerzas armadas se consolidaron, pasando de ser confederaciones más flexibles de regimientos, «propiedad» de grandes nobles o emprendedores mercenarios, a fuerzas modernas y profesionales, que impusieron el control y la disciplina de manera altamente centralizada. La iglesia católica consolidó también su transnacionalismo gracias a un mayor

poder de movilización local-regional para organizar el poder descentralizado contra el Estado-nación. Todas estas organizaciones transformaron las relaciones de los regímenes con las masas.

En resumen, la transformación económica no fue única sino múltiple; el poder colectivo experimentó una revolución; la mayor parte de las formas de poder distributivo experimentaron alteraciones, pero no revoluciones; los tradicionales actores de poder dominantes sobrevivieron mejor de lo esperado; y los actores de poder fueron conscientes de las transformaciones estructurales, pese a la extrema complejidad de las mismas. El panorama resultante tiene consecuencias para una teoría del cambio social.

El cambio social: estrategias, entrelazamientos impuros y consecuencias involuntarias

A comienzos del periodo tuvieron lugar tres revoluciones que sorprendieron a sus protagonistas. La Revolución Industrial británica, iniciada por la «mano invisible» de Adam Smith, no dependió de la voluntad de nadie en particular; el propio Smith se habría asombrado. En segundo lugar, los colonos británicos de América se tropezaron, sin quererlo, con la primera revolución colonial. Por último, el antiguo régimen francés se vio sorprendido por una revolución política que pocos de sus protagonistas pretendían. Los actores de poder debatieron entonces la posibilidad de repetir o evitar otras revoluciones. Puesto que las revoluciones coloniales no pertenecen al campo de nuestro análisis, revisaré aquí las revoluciones industriales y políticas.

Aunque la industrialización tuvo unos comienzos difíciles, su imitación y adaptación se produjeron con sorprendente facilidad, lo que demuestra que existía alguna forma de comercialización previa. Las adaptaciones afortunadas se extendieron por toda Europa, desde el norte de Italia y Cataluña hasta Escandinavia, y desde los Urales al Atlántico, así como por América y Japón. Los regímenes se afanaron por maximizar los beneficios y minimizar las perturbaciones, adaptando la industrialización a las tradiciones locales. Con la revolución política sucedió lo contrario: fue aparentemente fácil de empezar pero difícil de imitar en cuanto que el antiguo régimen advirtió sus peligros. No obstante, el programa revolucionario podía modificarse, pues los actores de poder, antiguos o nuevos, eligieron distintos ca-

minos, más o menos acordes con el gobierno monárquico, el gobierno de la ley, el liberalismo económico, la democracia o el nacionalismo. Las estrategias semiconscientes, de carácter a un tiempo integrador y represivo, dieron lugar a una enorme variedad de pautas de desarrollo no revolucionarias.

En consecuencia, las formas tradicionales ni se reprodujeron ni se derrocaron por completo. Fueron modificadas o ampliadas conforme al resultado de los enfrentamientos entre las «derivas-estrategias del régimen» y las derivas-estrategias de las naciones y clases emergentes. Por «régimen» entiendo aquí la alianza de los actores dominantes de poder ideológico, económico y militar, coordinados por los gobernantes del Estado. Estos últimos, como veremos en el capítulo 3, comprendían tanto a los «partidos» (en el sentido weberiano) como a las «elites del Estado» (en el sentido que les asigna la teoría elitista del Estado). Buscaron una alianza modernizadora para movilizar los poderes emergentes de clases y naciones, ante la amenaza de que el Estado sucumbiese por rebeliones internas o por la acción de potencias extranjeras. Los regímenes poseen, por lo general, una capacidad logística muy superior a los gobernados. Pero su posibilidad de recuperación, en todo caso, dependió de su cohesión. Las banderías facciosas en una era de clases y naciones en auge potenciaron la revolución. Denomino «estrategias del régimen» a los intentos de afrontar el desafío planteado por la aparición de las naciones y de las nuevas clases sociales. Pero no todos los regímenes las desplegaron, e incluso los más perspicaces se vieron abocados por la complejidad del momento político a tomar decisiones cuya trascendencia ni ellos mismos conocían. La mayoría de los actores de poder hacían proyectos y al mismo tiempo iban a la deriva; por esa razón hablamos aquí de estrategias-derivas.

En un principio, casi todos los regímenes se movieron en un continuo entre la monarquía despótica y la monarquía constitucional. T. H. Marshall (1963: 67 a 127) defiende, desde la experiencia británica, una evolución en tres fases hacia la plena ciudadanía. La primera fase comprende la ciudadanía legal o «civil»: «los derechos necesarios para la libertad individual —libertad personal, libertad de palabra, pensamiento y religión, derecho a la propiedad privada, a firmar contratos legales, y derecho a la justicia—». Los británicos conquistaron su ciudadanía civil durante un «largo siglo XVIII», desde 1688 hasta la Emancipación de los católicos en 1828. En la segunda fase se produjo la conquista de la ciudadanía «política»: el voto y la participación en

parlamentos soberanos, a lo largo de un siglo, desde la *Great Reform Act* de 1832 hasta las *Franchise Acts* de 1918 y 1928. La tercera fase, realizada durante el siglo XX, corresponde a la consecución de la ciudadanía «social», o Estado asistencial: «El derecho a un módico bienestar material, a la seguridad de ... compartir plenamente la herencia social y a disfrutar de una vida civilizada según el nivel predominante en cada sociedad».

La teoría de Marshall despertó un interés considerable en el mundo anglosajón (los mejores análisis recientes son australianos: Turner, 1986, 1990 y Barbalet, 1988). Con todo, dos de los tipos de ciudadanía que él establece son heterogéneos. La ciudadanía civil puede dividirse en dos subtipos: el individual y el colectivo (Giddens, 1982: 172; Barbalet, 1988: 22 a 27). Como veremos, aunque casi todos los regímenes del siglo XVIII concedieron derechos legales individuales, ninguno reconoció el derecho de los trabajadores a crear organizaciones colectivas hasta finales del siglo XIX, o incluso hasta bien entrado el siglo XX (véanse los capítulos 15, 17 y 18). Subdivido también la ciudadanía social («el derecho a compartir la herencia social», como dice Marshall) en dos subtipos: el ideológico y el económico, es decir, el derecho a la educación, que permite la participación cultural y el logro de una profesión, y el derecho a la subsistencia económica directa. En el transcurso del largo siglo XIX, las clases medias de todos los países europeos conquistaron la ciudadanía ideológico-social (véase el capítulo 16), pero el grado de ciudadanía económico-social fue insignificante (como apunta Marshall; véase el capítulo 14). La evolución de la ciudadanía se produjo con una gran variedad de formas y ritmos. Es probable que no se tratara de un proceso único como sugiere Marshall.

Por otra parte, como hemos sostenido en otro lugar (1988), el evolucionismo de Marshall presenta dos problemas: su olvido de la geopolítica y su anglocentrismo. Empecemos por una pregunta sencilla: ¿Por qué habían de *querer* la ciudadanía las clases o cualquier otro actor de poder? ¿Por qué consideraron que el Estado era un factor fundamental para su vida? La mayor parte de los individuos no habían pensado así hasta ese momento. Su vida había transcurrido en un entramado de redes de poder predominantemente local o regional, influidas tanto por iglesias transnacionales como por el Estado. Más adelante comprobaremos que, para sufragar los gastos bélicos del siglo XVIII, los Estados impusieron a sus súbditos enormes exacciones, tanto fiscales como de recursos humanos, que los enjaularon dentro

del territorio nacional y acabaron por politizarlos. Las clases, en vez de enfrentarse unas a otras en el contexto de la sociedad civil, como había sido tradicional, invirtieron su renovado vigor en hacer política. Superada esta fase «militarista», aparecieron otros estímulos para la nación enjaulada: la disputas por los cargos públicos, los aranceles, los ferrocarriles y las escuelas. El proceso de transformación de los Estados en Estados nacionales, primero, y en Estados-nación, después, enjauló a las clases y, sin quererlo, las «naturalizó» y las politizó. Si la nación fue vital para la ciudadanía (como reconoce Giddens, 1985: 212 a 221), deberemos establecer, además de la teoría de la lucha de clases, una teoría de la lucha nacional.

En efecto, dos cuestiones afectaron sobre todo al problema de la ciudadanía: la representatividad y la cuestión nacional; quién ha de ser representado y dónde ha de serlo. La cuestión del *dónde* giraba en torno a la estructuración del Estado, ¿hasta qué punto centralista y nacional o descentralizado y confederal?. El despotismo se combatía descentralizando el Estado en asambleas locales; por otra parte, era lógico que las minorías lingüísticas, religiosas o regionales se resistieran al Estado-nación centralizado [3]. Los modernizadores de la Ilustración creyeron que ambas cuestiones se resolverían al mismo tiempo: el futuro pertenecería a los Estados representativos y centralizados. Los posteriores teóricos evolucionistas como Marshall han creído que el Estado-nación y la ciudadanía nacional fueron inevitables. El hecho cierto es que la mayoría de los países occidentales *son* hoy Estados-nación formados por ciudadanos, centralizados y representativos.

Pero dicha «modernización» no fue ni unidimensional ni evolutiva. La Revolución Industrial no produjo homogeneidad; por el contrario, lo que hizo fue modernizar las estrategias que, en cada caso, adoptaron los distintos regímenes. Cualquier régimen —democrático o despótico, confederal o centralizado— podía aprovechar el aumento de los poderes colectivos que produjo la revolución para ampliar sus características iniciales. Los resultados dependieron tanto de la política interna como de la geopolítica. Lo mismo sucedió con el

[3] Turner (1990) ha criticado con razón el olvido de la dimensión étnica y religiosa en mi ensayo de 1988. Intento remediarlo ahora tomándome en serio la cuestión nacional. También ha criticado mi énfasis en la estrategia de la clase gobernante en detrimento de la estrategia de las clases bajas. En este volumen tendré en cuenta las dos, pero continuaré subrayando la primera.

movimiento —por lo demás, generalizado e incuestionable— en favor del Estado-nación centralizado. Los regímenes compitieron, progresaron y perecieron según las luchas locales de poder nacional y de clase, las alianzas diplomáticas, las guerras, la rivalidad económica internacional y las reivindicaciones ideológicas que cundieron por todo Occidente. A medida que crecían las potencias, lo hacía también el «encanto» de las estrategias de su régimen; cuando las primeras decayeron arrastraron a las segundas en su caída. La estrategia afortunada de una potencia puede modificar la industrialización subsiguiente. La monarquía semiautoritaria de Alemania y la centralización estadounidense fueron, en parte, el resultado de la guerra. Después consolidaron la Segunda Revolución Industrial, la gran empresa capitalista y la regulación estatal del desarrollo económico.

Finalmente, los «entrelazamientos impuros» obcecaron la percepción de los contemporáneos. Por eso me aparto de las «estrategias», es decir, de las elites cohesionadas con intereses transparentes, de las visiones claras, de las decisiones racionales y de la supervivencia infinita. Las transformaciones ideológicas, económicas, militares y políticas, y las luchas nacionales y de clase fueron múltiples, se mezclaron entre sí y se desarrollaron intersticialmente. Ningún actor de poder podía comprender y dominar la totalidad del proceso. Cometieron errores y produjeron consecuencias involuntarias, que, sin quererlo nadie, cambiaron sus propias identidades. Fue, en conjunto, un proceso no sistémico, no dialéctico, entre instituciones con un pasado histórico y fuerzas intersticiales emergentes. Estoy convencido de que mi modelo IEMP está en condiciones de afrontar este desorden y empezar a entenderlo; las teorías dicotómicas, no.

Bibliografía

Bairoch, P. 1982: «International industrialization levels from 1750 to 1980». En *Journal of European Economic History,* 11.

Barbalet, J. 1988: *Citizenship.* Milton Keynes: Open University Press.

Corrigan, P., y D. Sayer. 1985: *The Great Arch.* Oxford: Blackwell.

Foucault, M. 1974: *The Order of Things.* Nueva York: Pantheon.

— 1979. *Discipline and Punish.* Londres: Allen Lane. [Ed. cast.: *Vigilar y castigar.* Madrid, Siglo XXI, 1996.]

Giddens, A. 1982: *Profiles and Critiques in Social Theory.* Londres: Macmillan.
— 1985: *The Nation-State and Violence.* Cambridge: Polity Press.
Hart, N. 1990: «Female vitality and the history of human health». Ponencia presentada en el Tercer Congreso de la European Society for Medical Sociology, Marburg.
—: *Life Chances and Longevity.* Londres: Macmillan en prensa.
Landes, D. 1969: *The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present.* Cambridge: Cambridge University Press.
Lipset, S. M. 1985: «Radicalism or reformism: the sources of working-class politics». En *Consensus and Conflict: Essays in Political Sociology.* New Brunswick, N. J.: Transaction Books.
McKeown, T. 1976: *The Modern Rise of Population.* Nueva York: Academic Press.
Mann, M. 1986: *The Sources of Social Power.* Vol. I, *A History of Power from the Beginning to A.D. 1760.* Cambridge: Cambridge University Press. [Ed. cast.: *Las fuentes del poder social, I.* Madrid, Alianza Editorial, 1991.]
— 1988: «Ruling class strategies and citizenship». En M. Mann *States, War and Capitalism.* Oxford: Blackwell.
Marshall, T.H. 1963: *Sociology at the Crossroads and Other Essays.* Londres: Heinemann.
Mayer, A. J. 1981: *The Persistence of the Old Regime.* Londres: Croom Helm.
Moore, B. Jr. 1973: *Social Origins of Dictatorship and Democracy.* Harmondsworth: Penguin Books. [Ed. cast.: *Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia.* Barcelona, Ed. 62, 1991.]
Parsons, T. 1960: «The distribution of power in American society». En Parsons, T., *Structure and Process in Modern Societies.* Nueva York: Free Press.
Rokkan, S. 1970: *Cities, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development.* Oslo: Universitets forlaget.
Rueschemeyer, D., E. Stephens, y J. Stephens. 1992: *Capitalist Development and Democracy.* Chicago: University of Chicago Press.
Tilly, C. 1990: *Coercion, Capital and European States, AD 990-1990.* Oxford: Blackwell. [Ed. cast.: *Colección, capital y los Estados europeos, 990-1990.* Madrid, Alianza Editorial, 1992.]
Turner, B. S. 1986: *Citizenship and Capitalism.* Londres: Allen & Unwin.
— 1990: «Outline of a theory of citizenship», en *Sociology* 24.
Wrigley, E. A. y R. S. Schofield. 1981: *The Population History of England, 1541-1871.* Londres: Arnold.
Wuthnow, R. 1989: *Communities of Discourse.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Capítulo 2
LAS RELACIONES DEL PODER ECONÓMICO E IDEOLÓGICO

Durante el siglo XVIII fue un hecho convencional —y continúa siéndolo desde entonces— distinguir entre dos esferas fundamentales de la actividad social: «la sociedad civil» (o, sencillamente, «la sociedad») y «el Estado». Los títulos de este capítulo y el siguiente respetan en principio dicha convención. Aunque Smith, Marx y otros economistas políticos entendieron por «sociedad civil» sólo las instituciones económicas, otros muchos —Ferguson, Paine, Hegel y Tocqueville, especialmente— sostuvieron que abarca las dos esferas que analizamos en el presente capítulo. Para ellos, sociedad civil significaba (1) mercados económicos descentralizados basados en la propiedad privada y (2) «formas de asociación civil ... círculos científicos y literarios, escuelas, editoriales, posadas ... organizaciones religiosas, asociaciones municipales y hogares privados» (Keane, 1988: 61). Ambas esferas comportaban libertades vitales descentralizadas y difusas, que ellos querían preservar del poder autoritario de los Estados.

Sin embargo, una división tan tajante entre sociedad y Estado encierra ciertos peligros. Es, paradójicamente, muy política, porque asigna la libertad y la moralidad a la sociedad, no al Estado (obviamente Hegel se distancia en este punto). Y así era, en efecto, para los

autores del siglo XVIII enfrentados a lo que les parecía despotismo; como ha vuelto a serlo una vez más cuando los disidentes soviéticos, chinos y del Este de Europa quisieron movilizar las fuerzas descentralizadas de la sociedad civil contra la represión estatal. Sin embargo, los Estados no son tan diferentes del resto de la vida social como estas ideologías sugieren. En el Volumen I demostré que las sociedades civiles comenzaron a crecer entrelazadas con los Estados modernos. En éste demostraré que durante el largo siglo XIX la sociedad civil se convirtió en la provincia del Estado-nación de modo más sustancial, aunque en absoluto completo. Este hecho, que tuvo consecuencias para las relaciones de poder, tanto económicas como ideológicas, constituirá el tema central del capítulo que nos ocupa. De modo que tanto en éste como en el número 3 se cuestionará con frecuencia la separación que sugieren sus títulos.

El poder económico: el capitalismo y las clases

En 1760 el capitalismo comenzó a dominar las relaciones del poder económico en Occidente. Siguiendo a Marx, defino este sistema económico en los siguientes términos:

1. *Producción de mercancías.* Los factores de la producción, entre ellos el trabajo, no se consideran fines en sí mismos, sino únicamente medios, a los que se asigna un valor de cambio y son intercambiables entre sí. El capitalismo es, pues, una forma difusa de poder económico, salvo en una de sus características: la necesidad de la garantía autoritaria de:
2. *La propiedad privada y exclusiva de los medios de producción.* Los medios de producción, incluyendo la fuerza de trabajo, pertenecen sólo y únicamente a una clase de capitalistas privados.
3. *El trabajo es «libre», pero está separado de los medios de producción.* Los trabajadores son libres de vender su fuerza de trabajo o abandonar su puesto si lo consideran conveniente, sin prohibiciones autoritarias; cobran un salario libremente negociado pero carecen de derechos de propiedad directos sobre la plusvalía.

Marx sostuvo con razón que el capitalismo había revolucionado las «fuerzas productivas» de la sociedad; esto es, el poder económico colectivo. Se trata de la afirmación más evidente de «primacía última»

en los tiempos modernos para este modo de producción. Pero Marx sostuvo también que las «relaciones de producción» del capitalismo —el poder económico distributivo— tenían la misma capacidad de revolucionar la sociedad. La plusvalía se obtenía ahora por «medios puramente económicos», a través de la producción y los mercados, sin necesidad de la ayuda de organizaciones de poder ideológico, militar y político. Su contraposición del capitalismo a los anteriores modos de producción ha encontrado eco en muchos autores (Poulantzas, 1975: 19; Anderson, 1979: 403; Giddens, 1985: 181; Brenner, 1987: 227, 231, 299). Yo no estoy de acuerdo. Marx sostuvo también que la producción de mercancías difunde las *mismas* relaciones en toda el área de implantación capitalista. Si así fuera, la lucha de clases económica resultaría «pura», extensiva y política, transnacional y, en definitiva, simétrica y dialéctica, como rara vez ha ocurrido en la historia (aunque Marx no llegó a admitir totalmente este último punto). A su parecer, el enfrentamiento entre las clases constituía el motor del desarrollo moderno y generaba sus propias luchas ideológicas, políticas y militares. Sus formas vendrían determinadas «en última instancia» por la dialéctica de clase del modo de producción capitalista. El proceso culminaría por fin —según las esperanzas y, en ocasiones, los augurios de Marx— en el derrocamiento del capitalismo por un proletariado revolucionario que establecería el socialismo y el comunismo.

No cabe duda de que algo falló en su teoría. Sobrevaloró las tendencias revolucionarias del proletariado, como había sobrevalorado antes las de la burguesía. Incluso cuando las revoluciones rozaron el éxito, lo hicieron por razones muy distintas a la mera lucha de clases. Exageró las contradicciones económicas del capitalismo e ignoró las relaciones de poder ideológico, militar, político y geopolítico. Todo ello es bien sabido, pero las demoliciones convencionales de la obra de Marx enturbian nuestra comprensión del *punto exacto* en que se halla su equivocación y nos impiden perfeccionar su teoría. Aunque la historia no sea «la historia de la lucha de clases», las clases existen efectivamente y compiten con otros actores de poder por la voluntad humana. En este momento de retraimiento marxiano y nihilismo posmoderno, hay historiadores decididos a abandonar por completo el estudio de las clases (por ejemplo, Joyce, 1991), lo que equivale a tirar al niño con el agua de la bañera. Necesitamos precisar nuestras concepciones sobre las clases y sus rivales de poder.

Al describir a los campesinos franceses, Marx fue más explícito sobre las clases:

> Cuando millones de familias viven en condiciones económicas de existencia que separan su modo de vida, sus intereses y su cultura de los de las restantes clases, y las sitúan en una oposición hostil hacia éstas, aquéllas forman una clase. Cuando existe una interconexión meramente local entre estos campesinos, dueños de minifundios, y la identidad de sus intereses no genera entre ellos ninguna comunidad, ningún lazo nacional y ninguna organización política, no forman una clase. Son, consiguientemente, incapaces de defender por sí mismos sus intereses de clase. [1968, 170 a 171.]

En el capítulo 19 demostraré que Marx tenía una idea errónea de los «campesinos dueños de minifundios», quienes, en realidad, fueron muy prolíficos en organizaciones. Pero este pasaje ofrece un interés más general. Los historiadores y los sociólogos lo han citado con frecuencia a propósito de otras dos distinciones formuladas por el propio Marx. El campesinado de minifundio, dicen, constituía una clase «en sí», aunque no «para sí»; es decir, tenía una relación común con los medios de producción, pero era incapaz de acometer acciones colectivas de clase. No cabe duda de que se trata de una idea de Marx. No obstante, los comentaristas establecen una segunda distinción: el campesinado era una clase «objetivamente», pero no lo era «subjetivamente». Según ellos debemos analizar dos dimensiones: las condiciones económicas objetivas y la conciencia subjetiva de pertenecer a una clase concreta, ambas necesarias para la formación de una clase. Hunt, un historiador de la Revolución Francesa, afirma: «Para Marx, la formación de las clases dependía tanto de las condiciones económicas y la cultura como de la categoría y la conciencia social» (1984: 177). Los sociólogos Westergaard y Resler anuncian que su análisis de la estructura de clases del siglo XX arranca de la siguiente pregunta: «¿Cómo las divisiones objetivas de poder, riqueza, seguridad y oportunidades dan lugar a grupos cuyos miembros son conscientes de una identidad común? ¿Se traduce el hecho de la «clase en sí» en una conciencia activa de la «clase para sí?» (1975: 2 y 3).

Es lógico que se haya malinterpretado a Marx, porque su propia polémica contra el idealismo creó ese dualismo de una realidad económica objetiva frente a una conciencia subjetiva que subyace a los comentarios que acabamos de ver. Sin embargo, no es eso lo que Marx sostuvo en el pasaje citado. Él incluyó explícitamente la «cultura» del campesinado en el aspecto supuestamente objetivo de la

clase. Y a la inversa, la «interconexión meramente local» de los campesinos, que les impedía actuar (se supone que subjetivamente) como clase, es de hecho económica. Marx no dijo nada sobre la oposición entre los aspectos económicos e ideológicos de la clase. Lo que hizo fue distinguir dos condiciones previas y predominantemente económicas para la formación de una clase: la «semejanza» entre los campesinos, que sí se daba, y su «interdependencia colectiva», que, según él, no se daba. La semejanza económica de los campesinos les proporcionaba un sentido de sus intereses de clase y una identidad cultural más amplia, pero su habilidad para organizarse, también económica en origen, era parcial y estaba limitada localmente. Para Marx, las clases eran organizaciones de poder económico, y como tales se definían mediante dos criterios, el económico y el organizativo.

El criterio económico amplio de Marx era la «posesión efectiva» de recursos económicos. En el capitalismo, el modelo genera dos clases antagónicas principales, los propietarios capitalistas y los proletarios sin propiedad. También señaló una clase intermedia de pequeños burgueses que poseían sus propios medios de producción pero no dominaban el trabajo de otros; y estableció algunas directrices para abordar la aparición de la(s) clase(s) media(s) (véase el capítulo 16). Aunque estas clases pueden considerarse «objetivas», también podemos optar por definirlas según otros criterios no menos «objetivos». Los llamados teóricos de la sociedad industrial distinguen las clases según su papel especializado en la división del trabajo; un método que da lugar a numerosas clases laborales. Los weberianos identifican las clases según las capacidades del mercado, lo que produce un gran número de clases basadas en el disfrute de la propiedad, la cualificación laboral escasa, los poderes profesionales y los grados de formación. ¿Como elegir entre estos esquemas, igualmente «objetivos»?

En el pasaje antes citado, Marx nos brinda un segundo criterio: las clases tienen capacidad de organización. Cuando al criterio económico no se suma el organizativo se produce lo que denomino aquí una «clase latente», que corresponde aproximadamente a la «clase objetiva» o «clase en sí». Esa clase latente presenta escaso interés sociológico. Los teóricos pueden, sin duda, desarrollar las categorías analíticas que prefieran, en tanto que tipos ideales, pero sólo algunas de ellas nos ayudan a explicar el mundo real. Si las clases han de ser actores de poder significativos en el mundo real deben estar *organizadas,* extensiva o políticamente. En el presente volumen intentaré diseccionar la capacidad de organización de las clases y de otros mo-

vimientos. ¿Cuál es su logística? ¿Sobre qué terreno geográfico y social y de qué forma transmiten mensajes, intercambian sujetos y organizan reivindicaciones, huelgas, levantamientos y revoluciones?

Marx creyó que las clases modernas se encontraban insertas en una lucha frontal de naturaleza *dialéctica*. El modo capitalista de producción habría proporcionado tanto a la burguesía como a los trabajadores una capacidad de organización que, si bien hundía sus raíces en la producción, abarcaba el conjunto de la sociedad y de la experiencia vital de sus miembros. Y en parte, llevaba razón. De hecho esas organizaciones de clase existieron y fueron capaces de cambiar la historia. Es cierto que su concepción de la clase obrera fue absurdamente utópica; nada más improbable que una clase explotada condene toda la historia anterior y se rebele con el ánimo de destruir cualquier forma de estratificación; sin embargo, Marx descubrió una verdad esencial: el capitalismo había creado unas clases potencialmente extensivas, políticas y (ocasionalmente) simétricas y dialécticas. Un fenómeno muy raro en las sociedades primitivas, que desde entonces se ha hecho omnipresente.

La conciencia de clase representa también una faceta permanente de las sociedades modernas, aunque nunca es pura o completa. La mayoría de las clases dominantes muestran una conciencia ambivalente. Comparten una comunidad cohesiva y una acendrada defensa de sus intereses. ¿Qué grupo social puede jactarse de tener más conciencia de clase que, por ejemplo, la baja nobleza inglesa del siglo XVIII o los *Junkers* prusianos del XIX? Y, no obstante, negaron que la sociedad estuviera dividida en clases opuestas, pretendiendo que las organizaciones segmentales y local-regionales (apuntaladas quizás por el consenso normativo) eran mucho más importantes. En efecto, las clases subordinadas suelen encontrarse insertas en dichas organizaciones, pero Marx creyó que podrían desarrollar una conciencia de clase. Su modelo sobre la aparición de la conciencia de clase contenía implícitamente cuatro componentes que he señalado en una obra anterior sobre la clase obrera (1973: 13).

1. *Identidad.* La autodefinición como una clase obrera que desempeña, junto a los otros trabajadores, un papel específico en la economía [1]. Esta concepción no se asocia necesariamente a la lucha de clases.

[1] En 1973 escribí «en el proceso productivo», una frase que ahora sustituyo por el término más difuso de *economía*, en línea con uno de los argumentos generales de este volumen.

2. *Oposición.* La percepción de que los capitalistas y sus gerentes constituyen el enemigo permanente de los trabajadores. La identidad y la oposición sumadas pueden generar el conflicto, pero éste puede no ser extensivo si se limita al lugar de trabajo, a la actividad o a la comunidad local sin generalizarse a clases enteras. De este modo se legitima un conflicto seccional, no de clase.

3. *Totalidad.* La aceptación de los dos primeros elementos como características definitorias de (1) la situación social total de los trabajadores y (2) del conjunto de la sociedad. La suma de (1) añade intensidad a la conciencia de conflicto seccional, y la de (2) convierte la conciencia seccional en un conflicto de clase extensivo.

4. *Alternativa.* La concepción de unas relaciones de poder alternativas a las del capitalismo. Esto reforzará el conflicto de clase extensivo y político y legitimará la lucha revolucionaria.

Analizaré ahora en qué medida muestran las clases emergentes estos componentes de la conciencia de clase. Es probable que la mayor parte de los individuos sientan con mayor intensidad el primero que el segundo, y éstos más que el tercero y el cuarto. Pero es raro que movilicen resueltamente a nadie. También somos miembros de familias, de comunidades y lugares de trabajo interclasistas; de iglesias y otras asociaciones voluntarias, de naciones, etc. La mayoría de estas identidades aportan confusión al sentido estricto de clase, y algunas se le oponen. Las sociedades son confusos campos de batalla, en los que lucha por nuestra conciencia toda una multitud de redes de poder. En las sociedades modernas, la clase es sólo una de las principales formas de la identidad de los sujetos. Pero los individuos con circunstancias económicas similares se ven influidos también por otras identidades. Sólo unos pocos experimentarán que su vida está dominada por la identidad de clase, de religión, de nación o de cualquier otro tipo. Cuando en capítulos posteriores describa la «actuación» de las clases, no representaré imágenes de masas actuando resueltamente, como en las heroicas pinturas proletarias de la antigua Unión Soviética. Normalmente describiré a unos cuantos militantes realmente motivados, capaces de movilizar a un gran número de sujetos, persuadiéndolos de que sus sentimientos de clase son una parte de sí mismos mucho más importante de lo que ellos habían creído. No obstante, incluso en ese caso, cabe la posibilidad de que la mayor parte de ellos deseen de corazón seguir siendo leales productores, católicos, ciudadanos, etc.

Identifico seis actores de clase fundamentales: el *antiguo régimen* y la *pequeña burguesía*, que a comienzos del periodo emergen de los conflictos planteados entre los modos de producción y los regímenes políticos antiguos y nuevos; la *clase capitalista* y la *clase obrera*, los dos grupos extensivos que surgen en la segunda mitad del periodo; la *clase media*, que aparece a lo largo del siglo XIX; y el *campesinado*, de gran importancia en toda la época. Defino estas clases al comienzo de tres capítulos: el campesinado en el capítulo 19; la clase obrera, en el 15; y las restantes clases, en el capítulo 4.

Estas clases resultarán familiares, especialmente para la tradición marxiana. Sin embargo, al contrario que los marxistas, no las considero puras, es decir, definidas únicamente en cuanto a las relaciones con los medios de producción. Las clases completas y puras nunca organizan los grandes cambios sociales. En los movimientos sociales que reconocemos como de clase pueden distinguirse dos niveles. Cuando aparecen, suelen ser impuros, pues su fuerza procede de redes de poder económico y de poder no económico. Consideradas como organizaciones puramente económicas, son heterogéneas, incapaces de desplegar una intensa acción colectiva (aunque algunas fracciones pueden llegar a poseer su propia organización). Existen cuatro fallas económicas que debilitan por sistema la solidaridad de las clases:

1. El sector económico fragmenta las clases. Las fracciones, tanto del capital como del trabajo, adoptan distintas formas de organización interna, que, a veces, entran en conflicto. La agricultura genera habitualmente su propia subcultura. Los trabajadores agrícolas rara vez se sienten «proletarios», como los obreros industriales; los campesinos propietarios y minifundistas generan sus propios movimientos característicos (véase el capítulo 19). Las divergencias interindustriales y el auge de los sectores públicos y de servicios añaden su propia heterogeneidad.

2. Las relaciones directas de producción económica pueden generar colectividades mucho más pequeñas que una clase; esto es, una sola empresa, rama u oficio. Este hecho lejos de producir siempre organizaciones de clase, consolida a veces organizaciones segmentales. La solidaridad puede desarrollarse con fuerza dentro de esas fronteras, manteniendo escasas conexiones organizativas con quienes se supone que pertenecen a la misma clase. En el mejor de los casos, constituirán un movimiento militante, sindical y seccional; en el peor,

formarán una alianza segmental con su empleador, en contra de otros trabajadores y empresarios.

3. Los estratos y las fracciones dividen a las clases. La pequeña burguesía de finales del siglo XVIII comprendía en realidad una nutrida colección de profesionales, comerciantes, agentes de comercio, tenderos, maestros artesanos y artesanos a sueldo, entre otros. Más tarde, la «clase media» abarcó una amplia jerarquía de oficios y tres fracciones distintas (profesionales, empleados de carrera y pequeña burguesía). La clase obrera incluía grupos con distinto poder en el mercado de trabajo, donde se distinguían especialmente los trabajadores cualificados de los no cualificados, y aquellos que se encontraban atrincherados en los mercados laborales internos frente a los recién llegados; una división reforzada a menudo por la raza y el género. Tales diferencias produjeron organizaciones específicas —profesionales, corporativas o artesanales— que los separaron de otros miembros de «su clase». Los mercados internos de trabajo, las carreras directivas y otras formas de dependencia jerárquica generaron organizaciones segmentales, y con ello se redujeron las posibilidades de la organización de clase.

4. El Estado-nación mezcla las clases y forma segmentos nacionales. Nunca ha existido una sola gran burguesía o un solo gran proletariado transnacionales, aunque sí las tendencias transnacionales de clase (que quizás en ninguna parte han sido más intensas que en la clase capitalista contemporánea). Normalmente, los grandes actores de clase, como la «clase obrera británica» o la «burguesía francesa», han tenido una limitación nacional. La fragmentación nacional de las clases ha sido en realidad bastante compleja, como veremos más adelante.

Estas cuatro razones demuestran que no bastan las relaciones de producción para generar clases completas. Estas últimas son también un confuso campo de batalla en el que se lucha por la identidad de los individuos. Los actores puramente económicos han sido normalmente más pequeños y específicos, y han estado más fragmentados por el seccionalismo interno y el segmentalismo transversal que las grandes clases de Marx. Con todo, sus clases han desempeñado papeles históricos importantes. ¿Por qué? No precisamente porque la «ley del valor» o cualquier otra ley económica hayan polarizado todas estas particularidades económicas en dos grandes bandos de clase. Por el contrario, fueron las organizaciones *no económicas* las que aportaron la solidaridad que soldó estas fracciones, estratos y segmentos

económicamente heterogéneos. El conflicto de clase surgió en sociedades con relaciones entre los poderes ideológico, militar y político, que, a su vez, lo moldearon. Tales cosas suelen aducirse para explicar la *falta* de solidaridad de clase; por ejemplo, por la influencia de la religión. Pero las redes no económicas también *generan* solidaridad de clase. La indiferencia de Marx hacia el poder ideológico, militar y político no es sólo un desprecio por los fenómenos externos al capitalismo y a las clases. Pero sus organizaciones contribuyeron a transformar actores económicos muy dispares, a menudo con concepciones opuestas sobre identidades e intereses, en clases relativamente cohesionadas. Las clases que proponemos aquí aparecieron en el entrelazamiento de los distintos desarrollos de las fuentes del poder social. La «pureza» de las clases modernas, aunque bastante desarrollada en términos históricos, sólo ha sido parcial.

Veremos que los Estados, en especial los Estados-nación en desarrollo, tuvieron una enorme capacidad estructuradora en el desarrollo de la sociedad civil y sus clases. Ni siquiera la política revolucionaria surge sin más del conflicto entre las clases ya existentes en la sociedad civil. Los actores de clase de la Revolución Francesa apenas existían antes de ella. Los crearon sus proprios procesos de poder; en parte, porque los ideólogos militantes movilizaron los sentimientos de clase, pero sobre todo porque fueron inconscientemente estimulados por las relaciones de poder político. Los Estados también son impuros; contienen tantos factores económicos como políticos. Poseen propiedades, gastan y recaudan. En el siglo XVIII los derechos a disfrutar de cargos públicos, monopolios y privilegios fiscales proporcionaron recompensas económicas y generaron una política facciosa y segmental. Los partidos «integrados» se enfrentaron a los «excluidos», y los de la «corte» a los del «país». Los partidos «integrados» procedían de las familias terratenientes, las oligarquías comerciales o las profesiones aliadas con la corona, mientras que los partidos de «excluidos» se formaban entre las facciones descontentas de esos mismos grupos, liderando a la pequeña burguesía. Así pues, la política de facción se mezcló con las luchas seccionales y de clase, generadas por la transición del capitalismo del comercio y de la tierra al capitalismo industrial. Los «integrados», la baja nobleza terrateniente y la oligarquía comercial, formaron una clase del antiguo régimen; los «excluidos» y las distintas fracciones y estratos se consolidaron dentro de un movimiento pequeño burgués más amplio. No se trató, pues, de una mera lucha de clases; en ciertos casos, se debió so-

bre todo a la política económica del Estado. La «clase» sólo se hizo extensiva y política cuando las luchas por el poder político y el poder económico se entrelazaron. Allí donde la lucha política entre las facciones fue más débil, como en Alemania (o Japón), no hubo revolución, las políticas de clase fueron más endebles y el feudalismo derivó hacia el capitalismo con pocos conflictos de clase.

Lo mismo puede decirse, aunque en menor medida, respecto a las relaciones del poder ideológico con el poder militar. Marx pensaba que las clases crean su propia ideología y articulan su propia práctica y sus propios intereses. Es posible que reciban la ayuda de intelectuales como él mismo, pero entonces se trata sólo de estructurar una ideología ya inmanente a una clase constituida. Esta idea plantea dos problemas: en primer lugar, como en otras teorías «instrumentales» de la acción (por ejemplo, la economía neoclásica, la teoría del intercambio, la teoría de la elección racional), no es evidente que los intereses puedan estimular por sí mismos el tipo de acción que Marx planteaba. ¿En los intereses del sujeto trabajador entra siempre exponerse al poder de su empresario o del Estado creando un sindicato, levantando barricadas o atacando a los cosacos? Las clases existen, pero comparten normas y pasiones que pueden impulsarlas tanto al sacrificio como a la temeraridad o la crueldad. Todo ello las ayuda a superar la diversidad económica de sus miembros y generar un comportamiento colectivo apasionado. La ideología de las clases puede ser inmanente y trascendente. En segundo lugar, tanto como la ideología importan los ideólogos. Los del siglo XVIII, laicos o religiosos, crearon medios de comunicación que trascendían las distintas quejas de los segmentos pequeño burgueses, las fracciones de clase, los contribuyentes, los desprovistos de un cargo público lucrativo, etc. Periodistas, dueños de cafés y maestros, entre otros, movilizaron la conciencia de clase. Un siglo más tarde, la dependencia de la clase media de la educación estatal la ayudó a transformar su propia conciencia nacional y de clase (véase el capítulo 16).

También Engels creía que algunos tipos de poder militar estimulan la conciencia de clase; el reclutamiento masivo del ejército prusiano podía formar revolucionarios. Por mi parte, creo lo contrario; en este periodo los ejércitos ejercieron una disciplina segmental efectiva sobre las clases subordinadas, que contribuyó a la supervivencia de los regímenes y de las clases dominantes. Existieron, sin embargo, otras organizaciones de poder militar —la guerra de guerrillas y los

ejércitos derrotados— que facilitaron la formación de clase, como veremos más adelante.

Las clases se formaron, por tanto, de modo imperfecto y vacilante, a medida que múltiples identidades económicas se fusionaban con las redes del poder político, ideológico y militar, con las que se entrelazaron siempre las luchas económicas.

Este hecho hace más problemática lo que para Marx era la cualidad culminante de la lucha de clases: su naturaleza simétrica y *dialéctica.* Si la clase A se organiza según redes de poder distintas a las de la clase B, es posible que no lleguen a enfrentarse en el mismo terreno. Marx, como otros muchos, dio por sentado el escenario del conflicto. El capitalismo se define invariablemente como un hecho transnacional, capaz de atravesar las fronteras socioespaciales del Estado siempre que existan mercancías que intercambiar y beneficios que obtener. Sin embargo, el capitalismo surgió dentro del territorio estatal, y se estructuró socioespacialmente a través de las relaciones internas y geopolíticas del Estado. Las clases capitalistas pueden contar, como los segmentos y como todos los actores de poder, con tres formas socioespaciales:

1. *Transnacional.* La organización y la lucha atraviesan las fronteras estatales, con las que no guardan relaciones significativas. Las clases tienen el alcance global del capitalismo. Los Estados y las naciones resultan irrelevantes para la lucha de clases, y su poder se debilita por el alcance global de ésta. Según una distinción que explicaremos más adelante, los intereses se definen más en función del mercado que del territorio. La nobleza medieval, con sus vínculos de parentesco extendidos por toda Europa y la gestión de su propia diplomacia de clase y de sus propias guerras, constituye el ejemplo de una clase predominantemente transnacional. De forma más pacífica, así vieron la mayoría de los teóricos clásicos —de Smith a Marx y a Durkheim— el futuro del capitalismo. Las clases modernas habrían de ser transnacionales.
2. *Nacionalista* [2]. La totalidad o la mayoría de los habitantes de

[2] En una obra anterior he empleado la expresión «inter-nacional» para este tipo de organización. Para entenderlo, el lector deberá reparar en el guión. La expresión «internacional» sin guión suele utilizarse para denotar algo muy parecido a lo que llamamos aquí organización transnacional (por ejemplo, el «internacionalismo liberal»). Aquí prefiero el término «nacionalista», dado que se adapta convencionalmente al sentido que pretendo dar a este segundo tipo.

un Estado se convierten en una casi-clase, cuyos intereses económicos entran en conflicto con los de los habitantes de otros Estados. Las «naciones», o el concepto más limitado de «naciones-clase», compiten entre sí y se explotan mutuamente, cada una con su propia praxis específica dentro de la división internacional del trabajo. Las clases nacionalistas estimulan lo que denomino definiciones «territoriales» de interés (que analizaré más adelante) y una rivalidad agresiva de tipo geoeconómico y geopolítico. La obra de numerosos autores de principios de siglo, como Gumplowicz (1899) y Oppenheimer (1922), destaca la importancia de las organizaciones nacionalistas, supuestamente predominantes en su época; Rüstow (1981) formalizó el concepto en la noción de «superestratificación» o dominación de una nación sobre otra. Las mismas tendencias históricas informan la teoría del imperialismo de Lenin y las teorías marxianas más recientes, como las de Wallerstein y Chase-Dunn sobre el «sistema mundial», y otras contemporáneas sobre la dependencia del Tercer Mundo.

3. *Nacional.* La organizacion y la lucha de clases se hallan limitadas territorialmente dentro de cada Estado, sin referencias significativas a las relaciones de clase de otros Estados. Aquí, la praxis de clase no está «anclada» en el espacio internacional. Las clases se ven atrapadas en las luchas internas sobre la identidad de la nación, pero su sentido nacional permanece orientado hacia dentro, divorciado de los asuntos exteriores o indiferente a ellos. Carecen de serios intereses geopolíticos o geoeconómicos respecto al mercado o al territorio, así como de una predisposición concreta hacia la guerra o hacia la paz. Aunque ninguna de las grandes escuelas teóricas ha conceptualizado este modelo de organización de clase, subrayo aquí su importancia durante todo el periodo que estudiamos.

Hasta aquí hemos tratado de tipos ideales, pero las clases reales (como los restantes actores de poder) comprenden normalmente elementos de los tres tipos de organización. Una clase puede contener distintas fracciones: una relativamente transnacional; otra, nacionalista. O bien los actores de clase pueden responder a dos o tres formas de organización, reduciendo así su coherencia interna. O también, una clase puede estar más limitada territorialmente que otra, como ocurre en la actualidad con la clase trabajadora respecto al capital. Así pues, las clases se enfrentan menos dialécticamente de lo que Marx afirmaba.

El papel estructurador de los Estados-nación hizo que su práctica

geopolítica se entrelazara también con las clases. Es corriente analizar el influjo de la lucha de clases sobre la geopolítica (por ejemplo, en la teoría del imperialismo social que examinaré en el capítulo 12), pero no lo es tanto, pese a su necesidad, estudiar el efecto contrario (como han hecho Skocpol, 1979 y Maier, 1981). El hecho de que el capitalismo y la industria capitalista lleven la etiqueta *made in Britain*, y de que la casi hegemonía de Gran Bretaña provocara la oposición de Francia, Alemania y otros países, reorganizó la naturaleza de la lucha de clases. Lo mismo podríamos decir de la actual hegemonía americana. La historia de la lucha de clases y la historia de la geopolítica no pueden contarse por separado. Por mi parte, puedo afirmar, pecando de inmodesto, que no se había abordado a gran escala antes de este volumen.

Pero no sólo la lucha de clases, sino las concepciones mismas de «interés» y «beneficio» económico se ven influidas por la geopolítica. Respecto a los conceptos de interés y beneficio, cabe distinguir dos tipos ideales, que hemos llamado aquí «territorial» y «de mercado» (*cf.* Krasner, 1985: 5; Rosecrance, 1986; Gilpin, 1987: 8 a 24). La concepción de mercado considera el interés un asunto que se gestiona privadamente y se fomenta mediante la posesión de recursos en los mercados, sin preocuparse por cuestiones de territorio, guerras o diplomacias agresivas. Su carácter es transnacional y pacífico. Los capitalistas buscan el beneficio allí donde hay mercados, al margen de las fronteras estatales. La geopolítica no define aquí el «interés», por el contrario, el concepto territorial de interés económico busca asegurar el beneficio mediante el control autoritario que el Estado ejerce sobre el territorio, sirviéndose con frecuencia de una diplomacia agresiva y, en último extremo, de la guerra. La tensión entre el mercado y el territorio, el capitalismo y la geopolítica, constituye un tema de este volumen.

Una vez más, esos tipos ideales no existen en la realidad. El capitalismo y los Estados conviven en el mundo y se influyen mutuamente. A este respecto podemos establecer seis estrategias:

1. *Laissez-faire*. El Estado se limita a ratificar (o es incapaz de cambiar) las condiciones del mercado, sin tratar de modificarlas autoritariamente.
2. *Proteccionismo nacional*. El Estado interfiere autoritariamente en las condiciones del mercado para proteger su propia economía, aunque lo hace de forma pragmática y pacífica (al tratar de la Alema-

nia decimonónica dividiré este concepto en protección «selectiva» y protección «general coordinada»).

3. *Dominación mercantilista.* El Estado intenta dominar los mercados internacionales, controlando autoritariamente la mayor cantidad posible de recursos mediante sanciones diplomáticas (quizás de acuerdo con otros Estados aliados) o demostraciones de fuerza, aunque no suele recurrir a la guerra o la expansión territorial. La antigua fórmula mercantilista sostenía que «el poder y la abundancia» van emparejados.

Gran parte de la economía política internacional de los regímenes combina a menudo distintos grados de las tres estrategias. Aunque sin duda esta política crea conflictos, no suele provocar la guerra (como ocurre en el caso de «El Tercer Mundo contra el Liberalismo global», analizado por Krasner, 1985); no obstante, existen otras tres clases de política económica que comportan una mayor agresividad:

4. *Imperialismo económico.* El Estado conquista un territorio determinado para explotarlo económicamente.

5. *Imperialismo social.* En este caso la necesidad no es tanto conquistar nuevos pueblos o territorios, sino dominar los ya existentes. Se trata de distraer la atención sobre el conflicto entre las clases u otros grupos del territorio estatal. Lenin y los marxistas han subrayado esta política de distracción. Según Weber, cualquiera que ejerza el poder estatal puede practicar este tipo de imperialismo contra sus enemigos. Las motivaciones del régimen se centran ante todo en la política interior, *Innenpolitik*; la geopolítica, *Aussenpolitik*, es un subproducto.

6. *Imperialismo geopolítico.* La conquista de un territorio determinado por parte de un Estado es en este caso un fin en sí misma.

Estas seis estrategias demuestran que «el poder y la abundancia», la geopolítica y el capitalismo, el territorio y el mercado, se entrelazan. Ni siquiera los extremos son completamente «puros». Gran Bretaña, por ejemplo, pudo mantener su política de *laissez-faire* durante el siglo XIX porque gracias a otras estrategias más belicosas (3 y 4) formó un Imperio y una marina real con el objetivo de imponer *sus* condiciones en el comercio internacional. En el extremo contrario, Hitler adoptó un imperialismo geopolítico llevado de su obsesión por dominar el mundo, sin prestar mucha atención a la economía. Sin embargo, hasta él mismo creyó que con esa política estaba beneficiando a Alemania. La economía política internacional —por ejem-

plo, el *laissez-faire* o el proteccionismo— no es el resultado de un cálculo «puro» del interés económico. En la realidad, las definiciones de interés se encuentran influidas por cuestiones territoriales, por el sentido de identidad nacional y por la geopolítica, en la misma medida en que esta última se ve influida por el interés económico. Y ambas sufren el influjo de las ideologías. No existe ninguna estrategia en sí misma económicamente superior a sus principales rivales. La elección o la derivación dependen, por lo general, del entrelazamiento de la *Innenpolitk* con la *Aussenpolitik*, y de ambas con las redes del poder ideológico, económico, militar y político. En los últimos capítulos entretejeré la historia de la aparición de las clases y los Estados-nación, extensivos, políticos y también «impuros».

Las relaciones del poder ideológico

Como indiqué en el capítulo 1, creo que la importancia del poder ideológico disminuyó durante este periodo, aunque, desde luego, no por ello careció de significación. En los capítulos 4 a 7 trataré el poder ideológico como parte esencial y autónoma del auge de las naciones y las clases burguesas, especialmente influyente en la organización de sus pasiones. En los capítulos 16 y 20 continuaré la argumentación durante todo el siglo XIX al describir la importancia de las instituciones educativas del Estado para el progreso de la clase media y examinar la ideología nacionalista. En el capítulo 15 distinguiré las principales formas de ideología socialista entre la clase obrera y los movimientos campesinos del largo siglo XIX; y en los capítulos 17 a 19 trazaré sus desarrollos. No he intentado, sin embargo, examinar en profundidad la autonomía potencial de estas últimas ideologías en el presente volumen, ya que es tarea reservada al tercero, donde trataré las ideologías socialistas y nacionalistas del siglo XX. El análisis que abordaré a continuación se concentra en periodos anteriores.

Empezaré por establecer dos cuestiones previas respecto al poder ideológico en 1760. En primer lugar, al igual que cualquier otro de los principales aspectos de la sociedad civil, la economía capitalista y sus clases y redes de poder ideológico se movieron siempre entre el marco nacional y el transnacional. Por una parte, Europa —cada vez más, «Occidente»— constituía una comunidad normativa, cuyas ideologías se difundían intersticial y «trascendentalmente» por los Esta-

dos. Por otra parte, los Estados levantaban barreras contra el libre fluir de los mensajes (mucho más eficaces cuando las comunidades lingüísticas coincidían con las fronteras estatales). De este modo, durante todo el periodo, lo nacional tendía a consolidarse a expensas de lo trasnacional, sin que por ello desapareciera esta última faceta. En segundo lugar, la expansión revolucionaria de los medios de comunicación discursiva durante el siglo XVIII hizo posible que el poder ideológico desempeñara un papel en alguna medida autónomo.

Europa había constituido una comunidad ideológica durante mil años. Valores, normas, ritos e ideas estéticas se difundieron a lo largo y ancho del continente. Había sido incluso una sola *ecúmene* cristiana hasta la escisión entre católicos y protestantes. Hemos visto que, pese a su pérdida de poder en el plano estatal, las iglesias se atrincheraron en el ámbito familiar y local-regional, especialmente en el campo. El poder histórico del cristianismo, ahora en decadencia parcial, había dejado una herencia importante: unos medios de comunicación intersticiales, no dominados por una sola organización de poder. Dado que gran parte de la alfabetización dependía del patrocinio de las iglesias, todos los esfuerzos del Estado y el capitalismo por controlarla resultaron inútiles. Al difundir estas ideologías por sus colonias, los europeos cambiaron el concepto de «cristiano» por el de «blanco», y el de «Europa» por el de «Occidente». Pero incluso en el propio Occidente las fronteras nacionales se mostraron incapaces de contener la difusión de los mensajes ideológicos. En términos comparativos, semejante autonomía del poder ideológico resulta insólita; ni Japón ni China presentan nada comparable a comienzos de la época moderna. Ser occidental significaba participar en una organización parcialmente trascendente de poder ideológico, intersticial respecto a otras organizaciones de poder. Ello significa también que el panorama internacional no carecía de normas, como suelen argumentar los realistas.

Cuando los teóricos subrayan la rápida difusión de las ideologías durante este periodo lo hacen para sostener la «autonomía de las ideas» en la sociedad (por ejemplo, Bendix, 1978). Yo estoy en desacuerdo, pero no pretendo oponer a ese «idealismo» un «materialismo» que reduzca las ideas a su base social. Mi posición es la de un «materialismo organizativo». Las ideologías son intentos de afrontar los problemas sociales reales, pero se difunden a través de medios específicos de comunicación cuyas características pueden transformar los mensajes ideológicos y, por tanto, otorgar un poder ideológico autónomo.

Así pues, el objetivo de nuestro estudio serán las particularidades de la organización del poder ideológico.

Esto significa que deberemos concentrarnos en la revolución que hacia 1760 se estaba produciendo en la «alfabetización discursiva», es decir, de la capacidad para leer y escribir textos que no sean meras listas o fórmulas, sino literatura que domina la argumentación y el intercambio de ideas. En este volumen estudiaremos varias ideologías discursivas del largo siglo XIX. Algunas de ellas, religiosas, como el influyente puritanismo de los orígenes de la historia americana; la moral protestante en Gran Bretaña; o la división entre católicos y protestantes, tan importante para Alemania. Otras serán laicas y aparecerán, por lo general, en conflicto con las religiosas, como la Ilustración, el utilitarismo, el liberalismo y las dos grandes ideologías modernas: la de clase y la de nación. Todas ellas se encontraron en un amplio territorio, comunicadas entre sí por la alfabetización discursiva.

A Benedict Anderson (1983) se debe la célebre idea de que la nación es una «comunidad imaginada» en el tiempo y el espacio. Se supone que la «nación» vincula a individuos que no se conocen, que nunca se han encontrado personalmente, vivos, muertos o aún por nacer. En cierta ocasión, una secretaria de la Universidad de Los Ángeles me decía, refiriéndose a la fiesta estadounidense de Acción de Gracias: «Es el día en que festejamos la llegada de nuestros antepasados en el *Mayflower*». Me impresionó su imaginación, porque aquella secretaria era de raza negra. En cuanto a Anderson, que es marxista, añado que si la nación es una comunidad imaginada, sus clases rivales deben de ser aún más metafóricas: una auténtica «comunidad *imaginaria*». Las naciones se consolidan gracias a tradiciones históricas perdurables, fronteras estatales (pasadas o presentes) y comunidades lingüísticas o religiosas. ¿Sería posible que las clases, que apenas cuentan con una historia previa (aparte de la de las clases dirigentes) y siempre viven entre otras clases, con las que colaboran, se concibieran y se crearan en tanto que comunidades? Veremos que las dos comunidades imaginadas aparecieron juntas a medida que la alfabetización discursiva se difundía por las distintas sociedades, superando su confinamiento en las redes particularistas del antiguo régimen.

La mayor parte de las infraestructuras ideológicas de la época estaban en manos de lo que Anderson ha llamado la «cultura de la imprenta», aunque no únicamente en las de su «capitalismo de im-

prenta». Los textos se multiplicaban y circulaban por miles. La capacidad de escribir conocida hasta ese momento había sido mínima, apenas la firma con el nombre propio en el registro de la boda, pero desde el siglo XVII y a lo largo del XVIII se multiplicó en todos los países, hasta abarcar casi el 90 por 100 de los hombres y el 67 por 100 de las mujeres en Suecia y Nueva Inglaterra; el 60 y el 45 por 100 en Gran Bretaña; y el 50 por 100 de los hombres en Francia y Alemania (Lockridge, 1974; Schofield, 1981; Furet y Ozouf, 1982; West, 1985). El ascenso entre los hombres precedió al de las mujeres, pero estas últimas los igualaron hacia 1800. La capacidad de firmar no significa alfabetización discursiva —muchos individuos capaces de firmar no lo son de escribir o leer—, pero sí una rápida extensión de la alfabetización básica. La alfabetización discursiva llegó a través de nueve medios fundamentales:

1. *Iglesias.* Desde el siglo XVI los protestantes primero, y los católicos después, estimularon la lectura de la Biblia y la lectura y redacción de sencillos catecismos. No es otra la causa primordial de la alfabetización de la firma. A las escuelas religiosas, que dominaron la educación en casi todos los países hasta finales del siglo XIX, se debe también en gran parte el aumento de la alfabetización discursiva. En 1800 los libros devotos constituían aún las obras literarias más adquiridas por el público.

2. *Ejércitos.* La «Revolución Militar» de 1540-1660 centralizó y burocratizó los ejércitos y las armadas. La instrucción y el apoyo logístico se estandarizaron; la técnica desarrolló la artillería y las armadas; la división entre el estado mayor y la tropa institucionalizó las órdenes escritas y la interpretación de los mapas. Los manuales de instrucción y de señalización naval, de uso común entre oficiales y suboficiales, contramaestres y oficiales artilleros y de marina, impusieron la necesidad de saber leer y escribir y conocer las cuatro reglas; por otra parte, el alto mando ya «estudiaba», en el sentido moderno de la palabra. El aumento de los soldados, que representaban el 5 por 100 del total de la población a finales del siglo XVIII (capítulo 11), convirtió al ejército en un importante medio de alfabetización discursiva.

3. *Administración del Estado.* Antes de la expansión masiva de los niveles más bajos de la burocracia a finales del siglo XIX (véase capítulo 11), hubo sólo un modesto aumento, concentrado en los departamentos fiscales que abastecían a las fuerzas armadas. Pero la al-

fabetización de los altos cargos administrativos comenzó a secularizarse cuando las universidades sustituyeron a las iglesias y al ambiente familiar de las clases altas en la educación de los administradores.

4. *Comercio.* Su inmensa expansión durante los siglos XVII y XVIII extendió la alfabetización discursiva a través de los contratos, las cuentas y los métodos de mercadeo. La alfabetización era mayor en las áreas comerciales y de oficios que en los medios agrícolas o industriales. Además, las mujeres ocuparon siempre un lugar en el comercio, aunque su importancia disminuyó cuando la industrialización separó el lugar de trabajo de la vivienda.

5. *Abogacía.* El derecho ocupó una interfase ideológica entre la Iglesia, el Estado y el comercio. Durante el siglo XVIII se expandió y amplió su educación en todos los países.

6. *Universidades.* Dominadas tanto por la Iglesia como por el Estado, cuyos jóvenes miembros formaban (también los de la abogacía), las universidades se expandieron con rapidez durante el siglo XVIII hasta convertirse en los principales centros de alfabetización discursiva de alto nivel.

7. *Medios literarios.* La escritura, impresión, circulación y lectura de productos literarios se expandieron desde finales del siglo XVII, transformadas por la producción capitalista y los métodos mercantiles. Desde entonces se introdujeron en los hogares de clase media. Aunque producidos por hombres, las consumidoras de estos medios literarios fueran mayoritariamente mujeres (Watt, 1963).

8. *Medios de publicación periódica.* Periódicos, revistas y folletos laicos aparecieron a finales del siglo XVII, pero su expansión exponencial se produjo durante el XVIII.

9. *Centros de discusión intelectual.* Academias, clubes, bibliotecas, salones, tabernas y cafés se convirtieron pronto en lugares de discusión pública sobre materiales discursivos impresos. Incluso los barberos y los peluqueros disponían en sus locales de periódicos y panfletos que se sometían allí mismo a discusión. Salvo en los salones, los hombres dominaban en todos estos centros.

Los porcentajes de aumento sólo resultan cuantificables en ocasiones y son, además, tan distintos que no nos permiten realizar un índice completo de la expansión discursiva. No obstante, cabe la posibilidad de que la alfabetización discursiva se expandiera con mayor rapidez durante el siglo XVIII que la alfabetización básica. Estaba na-

ciendo una red de comunicación de masas. ¿Quién participaba en ella? ¿Quién la dominaba?

La primera demanda llegó de las iglesias, luego de los Estados, especialmente de sus ejércitos, y del capitalismo comercial. Este hecho trazó dos vías alternativas. Tomo aquí el caso de Gran Bretaña como prototipo de una vía «capitalista comercial» difusa (parecida al «capitalismo de imprenta» de Anderson); Austria y Prusia, como prototipo de una vía «militar-estatista»; y el antiguo régimen francés, como combinación de las dos. Todas experimentaron el influjo de las ideas religiosas y morales de las iglesias. En Gran Bretaña, la expansión comercial generó una pequeña burguesía letrada, abogados, universidades, escuelas y técnicas empresariales propias del mercado de masas para los medios literarios. En Austria y Prusia, el ejército y la expansión de la administración vincularon más estrechamente con el Estado a abogados, universidades, escuelas y medios literarios. Francia, comercial y estatista, también experimentó ambas expansiones. Estas vías unieron lo antiguo a lo nuevo. Las «nuevas» redes de poder —de la pequeña burguesía, los militares profesionales y los funcionarios civiles— se encontraban conectadas igualmente con las clases mercantiles y nobles y con el clero. Este hecho produjo distintas fermentaciones ideológicas, no completamente armoniosas, en los tres casos.

Hacia 1760 los Estados y las clases capitalistas constituían con toda probabilidad la principal clientela de los ideólogos. Pero la demanda no condujo simplemente a un control efectivo. Ni Gran Bretaña careció de Estado o de iglesias, ni Austria de éstas o de capitalismo. En cada país, las iglesias, el Estado y las clases plantearon distintas demandas, con frecuencia conflictivas, y se dividieron en facciones respecto a las estrategias de modernización. El resultado fue un espacio intersticial, dentro del cual operaron los ideólogos.

Pero también las facciones dividían a los ideólogos, como evidencian los dilemas implícitos en la Ilustración entre religión y ciencia, Estado y capitalismo, territorio y mercado (Cassirer, 1951; Gay, 1964, 1967; Payne, 1976). Los *philosophes* concedían un papel de primer orden a la razón humana, concebida en primer lugar como una «racionalidad formal» de carácter científico, a la que denominaron *esprit systematique* o aplicación sistemática del cálculo metódico, un cuestionamiento continuo de la organización social con el objetivo de procurar a los seres humanos la felicidad. Pero la razón se concebía también como algo «sustantivo» y moral, fuertemente influido por la religión. La razón permitía conocer la bondad de las sociedades y su

capacidad para hacer felices a los hombres, aunque no todos la poseían plenamente, la cultura y la educación podrían mejorar la estupidez de la plebe, la ingenuidad del salvaje o la escasa dotación de las mujeres para el razonamiento, como afirmaba Kant en su opúsculo «¿Qué es la Ilustración?». Aunque la mayor parte de los *philosophes* más importantes eran antirreligiosos, su moralismo procedía sin lugar a dudas de la religiosidad europea, y se desarrolló en paralelo al fermento moral dentro de las propias iglesias. La ideología progresaba tanto como la moral, la pasión y la ciencia.

Pero la razón no estaba exenta de contradicciones cuando se pretendía aplicar a la sociedad. Por un lado, la racionalidad formal se descentralizó, estimulada sobre todo por la «mano invisible» del capitalismo comercial. En el corazón del capitalismo, el mundo anglosajón, alentó una estrategia propia del régimen liberal: política económica del *laissez-faire*, ciudadanía civil individual, desarrollo de la ciudadanía política para los propietarios, invididualismo moral (por lo general, protestante) y deber de expandir la ilustración y la moral mediante la caridad privada y el trabajo voluntario. Tampoco en otros países faltaron estas ideas, ya que los filósofos eran transnacionales, y sus programas no se arredraban ante las fronteras estatales; por el contrario, se propagaban mediante el aprendizaje de otros idiomas y los viajes continuos. Con todo, en la Europa absolutista, la potencialización de la razón sustantiva se identificó más con la modernización de los Estados. Aunque la mayoría de los filósofos respetaban la «libertad» y el progreso material del capitalismo y de las asociaciones privadas, muchos de ellos creían que la responsabilidad social ilustrada invitaba a la acción legislativa. Kant encarnó esta ambivalencia, convencido de que el absolutismo ilustrado y la difusión transnacional de la Ilustración traerían la «paz perpetua» al mundo. Un modelo de «sociedad civil contra el Estado» no habría podido sustentar este dualismo fundamental.

La ambivalencia pasó a un nuevo plano cuando la «mano» del capitalismo se hizo «invisible». Aunque sus ideólogos presentaban el *laissez-faire* como una ley natural, ello suponía una sociedad de clases, en la que unos poseían los medios de producción y otros sólo su fuerza de trabajo. De modo que aquella «mano», aunque indirectamente, no significa otra cosa que poder de clase y poder geopolítico de los capitalistas «nacionales», dispuestos a imponer sus condiciones de mercado a otras naciones capitalistas más débiles. De ahí que se aceptara que el comercio libre era el comercio dominado por Gran

Bretaña. Los ideólogos, tanto de las clases como las naciones emergentes del siglo XIX, se opusieron a la regla de la «mano» exigiendo un mayor poder territorial y autoritario del Estado.

El entrelazamiento de las clases y los Estados-nación produjo nuevos dilemas para los actores de poder, y les demostró que las soluciones claras no existen. Sin duda, como ya hemos visto en el caso de las clases, la auténtica identidad de éstas y de las naciones era aún fluida y se encontraba expuesta al influjo de los ideólogos. Éstos disponían de un espacio intersticial en el que proponer sus soluciones e influir sobre las distintas identidades sociales. La comunidad ideológica de Occidente analizó las contradicciones trascendentes en desarrollo. La teoría económica se encontraba desgarrada entre la teoría de mercado de Adam Smith y dos ideologías más autoritarias: la «territorial nacional» alternativa de Friedrich List y la alternativa de clase de Karl Marx. Pronto se dejaron sentir con fuerza sus desacuerdos en tres vías, en medio de las luchas de las clases y las potencias.

Oigamos a Ito Hirobumi, el principal autor de la constitución Meiji japonesa de 1889:

> Nos encontrábamos en una época de transición. La opiniones predominantes en el país eran extremadamente heterogéneas y con frecuencia diametralmente opuestas. Había entre nosotros supervivientes de anteriores generaciones que aún creían en las ideas autocráticas, y, por ello, en que cualquier intento de restringir las prerrogativas imperiales suponía una especie de alta traición. En el otro lado, la inmensa mayoría de las generaciones jóvenes, educadas en la época en que la teoría de Manchester [es decir, el *laissez-faire*] estaba de moda, defendía ideas de libertad muy radicales. Los miembros de la burocracia miraban con buenos ojos a los doctrinarios alemanes del periodo reaccionario; mientras que, frente a ellos, los políticos educados entre el pueblo, que aún no habían tenido ocasión de probar el amargo sabor de la responsabilidad administrativa, se encontraban más dispuestos a escuchar las palabras deslumbrantes y las lúcidas teorías de Montesquieu, Rousseau y otros autores franceses ... En tales circunstancias se redactó y se sometió a Su Majestad el primer borrador de la Constitución [Citado en Bendix, 1978: 485].

¿Es esto *autonomía* ideológica? ¿Fueron los filósofos —los teóricos de Manchester y los doctrinarios alemanes de Hirobumi— meras ayudas, «intelectuales orgánicos» en el sentido gramsciano, para los Meiji y sus iguales occidentales? ¿Se limitaban a ofrecer esquemas que los regímenes dominantes podían aceptar, enmendar o rechazar

libremente? Los medios ideológicos desempeñaron, en definitiva, funciones técnicas con un alto nivel de especialización. Difundieron la capacidad de leer catecismos, manuales de instrucción y contratos comerciales. Puede que los ideólogos estuvieran ofreciendo una mera moral *inmanente* a clases y regímenes políticos ya formados.

Pero los ideólogos tuvieron también capacidad de creación. En primer lugar, las clases y las facciones estatales no estaban plenamente constituidas, sino que emergían de forma intersticial. Los ideólogos las ayudaron a crear sus «comunidades imaginadas», especialmente en los casos de las revoluciones americana y francesa (véanse capítulos 5 y 6). En segundo lugar, los medios discursivos presentaban también propiedades emergentes, que en parte los libraban de cualquier forma de control. Muchos de ellos no estaban segregados, simplemente comunicaban un conocimiento técnico a clientes especializados. Difundían conjuntamente debates sobre cuestiones generales, normas, ritos e ideas estéticas. Las ideologías modernizadoras —cameralismo, Ilustración, movimiento evangélico, teoría del contrato social, reforma «económica» y política, «progreso», economía política— se difundieron a través de ellos. Sus demandas eran universales, se aplicaban tanto a la ciencia como a la moral, e influían tanto en las ideologías de la nación como de la clase. Los debates a tres bandas entre las escuelas de Smith, List y Marx no versaban sólo sobre los intereses económicos de las clases y los Estados. Gran parte de la experiencia social era de tipo intersticial respecto al Estado y a la clase; Europa buscaba la modernización y el «santo grial» del progreso. Estos autores no eran meros pragmáticos de la economía. Para ellos el conflicto ideológico era moral y filosófico, y no versaba menos sobre la verdad y la moral cosmológicas que sobre la economía. Los tres estaban anclados en la Ilustración: el mundo progresaría sólo cuando la razón se situara a la cabeza del movimiento social. Como ideólogos potencialmente *trascendentes*, pudieron encontrar un eco formidable.

Fue así como los principales elementos de los medios discursivos desarrollaron un sentimiento de comunidad. Una elite de poder ideológico —la *intelligentsia*, los intelectuales— se convirtió en un actor colectivo, tal como lo había sido en otras épocas la casta sacerdotal. En realidad, los intelectuales no estaban unidos, ni eran «puros»; muchos se mantuvieron leales a sus clientes, y éstos competían por dominarlos con premios y castigos, concesiones y censuras. No obstante, los protagonistas reconocieron ese afán como un hecho real y

novedoso: la batalla por conquistar mayor poder de movilización ideológica. En el entramado formado por clases, naciones, iglesias, Estados, y aun otros elementos, se sucedían las luchas por el poder. Las soluciones llegaban de una comunidad occidental, trascendente y revolucionada, de la que estableceré en los capítulos narrativos de este volumen su grado concreto de autonomía y poder. Adelanto ahora que fue mayor, por lo general, a comienzos que a finales del periodo, cuando los regímenes habían desarrollado ya sus estrategias para hacerle frente, centradas en el confinamiento de la mayor parte de las redes ideológicas de poder dentro de las instituciones del Estado.

Conclusión

El capitalismo y los medios de alfabetización discursiva constituyeron las dos caras de una sociedad civil que se expandió a lo largo y ancho de la civilización europea durante el siglo XVIII. Ninguna puede reducirse a la otra, aunque siempre aparecieron entrelazadas, especialmente en los países occidentales más capitalistas. Las clases dominantes, las iglesias, las elites militares y los Estados no lograron enjaularlas por completo, pero las estimularon y estructuraron en distintos grados. Así pues, fueron en parte transnacionales e intersticiales respecto a otras organizaciones de poder, pero sólo en parte; en posteriores capítulos trazaré la desaparición de estas características. El entrelazamiento de las sociedades civiles con los Estados fue un hecho continuo, que iría a más durante el largo siglo XIX.

Bibliografía

Anderson, P. 1983: *Imagined Communities.* Londres: Verso.
— 1979: *Lineages of the Absolutist State.* Londres: Verso. [Ed. cast.: *El estado absolutista.* Madrid, Siglo XXI, 1989.]
Bendix, R. 1978. *Kings of People: Power and the Mandate to Rule.* Berkeley: University of California Press.
Brenner, R. 1987. «The agrarian roots of European capitalism». En T. Aston y C. Philpin, *The Brenner Debate.* Cambridge: Cambridge University Press.
Cassirer, E. 1951: *The Philosophy of the Enlightenment.* Princeton, N. J.:

Princeton University Press. [Ed. cast.: *La filosofía de la Ilustración.* Madrid, F.C.E., 1993.]
Ferguson, A. 1966: *An Essay on the History of Civil Society, 1767.* Edimburgo: Edinburgh University Press.
Furet, F., y M. Ozouf. 1982: *Reading and Writing: Literacy in France from Calvin to Jules Ferry.* Cambridge: Cambridge University Press.
Gay, P. 1964: *The Party of Humanity.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
— 1967: *The Enlightenment: An Interpretation.* Vol. I: *The Rise of Modern Paganism.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Giddens, A. 1985: *The Nation-State and Violence.* Oxford: Polity Press.
Gilpin, R. 1987: *The Political Economy of International Relations.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Gumplowicz, L. 1899: *The Outlines of Sociology.* Filadelfia: American Academy of Political Social Science.
Hunt, L. 1984: *Politics, Culture, and Class in the French Revolution.* Berkeley: University of California Press.
Joyce, P. 1991: *Visions of the People: Industrial England and the Question of Class, 1848-1914.* Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, I. 1963: «What is Enlightenment?». En *Kant on History,* ed. L. W. Beck. Indianapolis. Ind.: Bobbs-Merrill.
Keane, J. 1988: «Despotism and democracy». En *Civil Society and the State: New European Perspectives.* Londres: Verso.
Krasner, S. 1985: *Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism.* Berkeley: University of California Press.
Lockridge, K. 1974: *Literacy in Colonial New England.* Nueva York: Norton.
Maier, S. 1981: «The two postwar eras and the conditions for stability in twentieth century Western Europe». *American Historical Review,* 86.
Mann, M. 1973: *Consciousness and Action Among the Western Working Class.* Londres: Macmillan.
Marx, K. 1968: «The 18th Brumaire of Louis Bonaparte». En *Marx and Engels, Selected Works.* Londres: Lawrence & Wishart. [Ed. cast.: *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte.* Barcelona, Ariel, 1982.]
Oppenheimer, F. 1922: *The State.* Nueva York: B. W. Huebsch.
Parkin, F. 1979: *Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique.* Londres: Tavistock. [Ed. cast.: *Marxismo y teoría de clases.* Madrid, Espasa-Calpe, 1984.]
Payne, H. C. 1976: *The Philosophes and the People.* New Haven. Conn.: Yale University Press.
Poulantzas, N. 1975: *Classes in Contemporary Capitalism.* Londres: NLB. [Ed. cast.: *Las clases sociales en el capitalismo actual.* Madrid, Siglo XXI, 1977.]
Rosecrance, R. 1986: *The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World.* Nueva York: Basic Books. [Ed. cast.: *La expansión del Estado comercial.* Madrid, Alianza Editorial, 1987.]

Rüstow, A. 1981: *Freedom and Domination: A Historical Critique of Civilization,* Ed. inglesa. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Schofield, R. S. 1981: «Dimensions of illiteracy in England, 1750-1850. En *Literacy and Social Development in the West,* ed. H. J. Graff. Cambridge: Cambridge University Press.

Skocpol, T. 1979: *States and Social Revolutions.* Cambridge: Cambridge University Press.

Watt, I. 1963: *The Rise of the Novel.* Harmondsworth: Penguin Books.

West, E. G. 1985: «Literacy and the Industrial Revolution». En *The Economics of the Industrial Revolution»,* ed. J. Mokyr. Londres: Allen & Unwin.

Westergaard, J. , y H. Resler. 1975: *Class in a Capitalist Society: A Study of Contemporary Britain.* Londres: Heinemann.

Capítulo 3
UNA TEORÍA DEL ESTADO MODERNO

En el capítulo 1 ha quedado establecida la distinción entre el poder político y el poder militar. En el Estado moderno, sin embargo, ambos se fusionan debido a la monopolización formal de los medios de la fuerza militar. Este hecho no destruyó la autonomía organizativa del poder militar, como se verá en los capítulos 12 y 21, simplemente la recondujo a través de organizaciones formalmente estatales. Por eso analizaré en este capítulo el poder militar en el marco de un examen más amplio que abarca también el poder político.

Pasaré revista a cinco teorías actuales del Estado y a los conceptos políticos de Max Weber, para luego exponer en tres fases mi propia teoría. Comenzaré por una definición «institucional» del Estado, tratando de especificar las numerosas particularidades institucionales de los Estados modernos, aunque luego intentaré simplificar esta complejidad mediante un análisis de tipo «funcional» capaz de ofrecer una visión polimorfa de las funciones del Estado. Comenzaré afirmando que los Estados modernos «cristalizan» (en el área que abarca este volumen) en varias formas. Atendiendo a las otras tres fuentes del poder social, cristalizan en formas ideológico-morales, capitalistas y militaristas. Atendiendo a sus propias luchas políticas, cristalizan en puntos variables dentro de dos constantes, una constante «repre-

sentativa», que durante este periodo conducirá de la monarquía autocrática a la democracia de partidos, y una constante «nacional», que irá desde el Estado-nación centralizado a un régimen más o menos confederal. De un modo más general, cristalizan también como un patriarcado que regula las relaciones familiares y de género. Finalmente, examinaré la posibilidad de detectar relaciones jerárquicas entre dichas cristalizaciones, para conocer si una o más de ellas pueden determinar en última instancia el carácter global del Estado.

Cinco teorías del Estado

Por lo general, suelen considerarse tres teorías sobre el Estado: la teoría de las clases, la teoría pluralista y la teoría elitista (denominada a veces estatismo o gerencialismo) (Alford y Friedland, 1985). Dado que el elitismo es similar a la teoría realista de las relaciones internacionales, analizaré ambas al mismo tiempo. No obstante, he dividido las teorías elitistas en dos, cada una de las cuales presenta una concepción diferente de la autonomía del Estado. Las denomino «elitismo auténtico» y «estatismo institucional». Añado, además, una quinta teoría, implícita en muchos estudios empíricos, que yo denomino «teoría del embrollo». De todas he tomado préstamos, en especial del estatismo institucional.

Gran parte de las teorías de las clases son marxistas. Marx tendía a reducir el Estado a las relaciones económicas de poder. Los Estados serían, pues, funcionales respecto a las clases y los modos de producción. El Estado moderno se habría creado en dos estadios de la lucha de clases política: la que tuvo lugar entre los señores feudales y la burguesía capitalista, y la que enfrentó después a ésta con el proletariado. Aplicada a los Estados modernos de Occidente, la teoría de las clases ha tenido la virtud de demostrar que aquéllos son fundamentalmente capitalistas. Los cinco Estados que estudiaré aquí eran ya capitalistas, o se encontraban en camino de serlo, en el largo siglo XIX. Pero el defecto de la teoría consiste en considerar que esta propiedad fundamental es *la única*. En realidad, ciertos escritos de Marx dejan entrever la existencia de otros poderes insertos en el Estado. En el capítulo 9 analizaré las limitadas autonomías que Marx reconoció al «Estado bonapartista». Los marxistas consideran que el Estado moderno tiene sólo una autonomía relativa porque, en última instancia, sirve a la acumulación de capital y la regulación de clase, y

aunque suelen añadir «coyunturas» y «contingencias históricas», raramente las teorizan, se limitan a añadirlas empíricamente (como en la historia de los Estados modernos de Wolfe, 1977). Aunque el reconocimiento de la contingencia indica una sensibilidad más empírica que el mero concepto de clase, no llega a transformar la teoría.

Son muchos los marxistas que rechazan la acusación de reduccionismo económico, pero la tendencia los traiciona a la hora de definir el Estado. Poulantzas (1978: 18 a 22), Jessop (1982) y Offe y Ronge (1982: 1 y 2) sostienen que los Estados sólo pueden definirse en relación con formas específicas de producción; el «Estado capitalista» y el «Estado feudal» son conceptos posibles, dicen, pero no lo es el «Estado» en términos generales. Los que sí definen el «Estado» lo hacen únicamente en términos de relación de clase: «El "Estado" es el concepto que se aplica a los medios concentrados y organizados de dominación legitimada de clase», dice Zeitlin (1980: 15). En los últimos años, algunos marxistas han mostrado mayores dudas. Jessop (1990) subraya ahora el valor de la «contingencia» para la política, aduciendo que la noción marxista de la «autonomía relativa» del Estado presenta aún un determinismo económico demasiado rígido. La clase capitalista persigue esencialmente la «forma del valor», pero puede tener otros proyectos alternativos de acumulación (como yo mismo destaco en este volumen). Las clases dominantes abrigan «proyectos hegemónicos» para cuya consecución pueden organizar alianzas interclasistas, incluso con fines no económicos, como el aumento del poder militar o de la moralidad; sin embargo, Jessop continúa teorizando y cualificando únicamente a las clases. Pese a la autonomía relativa, las coyunturas y las contingencias, los marxistas aportan una concepción teórica reduccionista del Estado. Por mi parte, trataré de hacerlo mejor en estas páginas.

A medida que aumenta su pesimismo sobre las posibilidades de la revolución proletaria, gran parte de los marxistas adelantan una concepción «instrumental» o «estructural» del Estado capitalista. O bien el personal del Estado moderno es un instrumento directo de la clase capitalista (Miliband, 1969), o bien funciona estructuralmente para reproducir las relaciones capitalistas de producción (Poulantzas, 1973). Sorprende que los sociólogos hayan considerado interesante para la teoría del Estado el «debate Miliband-Poulantzas», si se tiene en cuenta que, considerado desde la perspectiva de las restantes teorías, se limita a un aspecto tan restringido. En cualquier caso, el Estado facilita la acumulación de capital y regula la lucha de clases, incluso re-

primiendo, en determinados momentos, a ciertos capitalistas cuyos intereses seccionales frustran los del capital en términos generales (sobre este punto se ha discutido mucho; para las revisiones véase Jessop, 1977, 1982). Tales funciones «requieren» un fuerte desarrollo de lo que Althusser (1971: 123 a 73) llamó «aparatos represivos e ideológicos del Estado»: policía, agencias asistenciales, educación, medios de comunicación de masas, etc. El Estado no es un actor, sino el lugar donde se organizan las clases y las «fracciones» o «segmentos» de clase (Zeitlin, 1980, 1984). En realidad, el Estado es *al mismo tiempo* un lugar y un actor.

Las teorías de las clases que conservan un mayor optimismo subrayan que el capitalismo aún conlleva contradicciones y luchas de clase, que se politizan y se desplazan al Estado mismo, como «crisis fiscal» (O'Connor, 1973), «crisis de legitimación» (Habermans, 1976) o «crisis de gerencia» (Offe, 1972, 1974; Offe y Ronge, 1982). Offe se distingue por aceptar que también el Estado se ha convertido en actor, produciendo una contradicción entre su propio interés institucional en la búsqueda de un compromiso en la lucha de clases, mediante el desarrollo de programas de bienestar, y la dinámica de la acumulación capitalista, que continuamente tiende a subvertir ese compromiso reduciendo los gastos estatales. La teoría de las clases ha producido también una escuela empírica radical, vinculada a C. Wright Mills (1956) y Domhoff (1978, 1990), quienes dibujan un Estado menos unificado, compuesto de distintas instituciones y ramas colonizadas por las elites de poder y las fracciones de clase. Aparte de estos radicales, la mayoría de los teóricos de las clases tratan el Estado como un elemento pasivo y unitario, al que consideran sobre todo el lugar político central de la sociedad capitalista. Las relaciones entre el Estado y la sociedad forman un solo sistema: el Estado, en el centro de una «formación social» definida por sus modos de producción económica, reproduce la cohesión y las contradicciones sistémicas de éstos. De este modo, han definido el Estado occidental moderno en función de una sola de sus cristalizaciones: la capitalista.

Al contrario que la teoría de las clases, que intenta explicar todos los Estados, la teoría pluralista pretende explicar sólo los modernos Estados democráticos. El pluralismo es la democracia liberal (en especial, la americana) vista desde sí misma. La modernización transfirió el poder político «del rey al pueblo» (como propone el título de Bendix, 1978). Dahl apunta que se llevó a cabo en dos procesos: (1) la aparición de una «contestación» institucionalizada entre los partidos

los grupos de presión que representaban una pluralidad de intereses dentro de la sociedad, y (2) un momento en el que se reivindica la «participación» del pueblo en esa contestación. La democracia auténtica (lo que Dahl llama «poliarquía») sería el producto de combinar la contestación y la participación. Puesto que, según Dahl, la primera aparece pronto en Occidente, en tanto que la participación se mantuvo muy limitada, su historia resulta más crítica para el periodo que estoy analizando. Por mi parte, llamo a la contestación de Dahl «democracia de partidos». Para los pluralistas, la cristalización fundamental que define a la mayoría de los Estados occidentales modernos consiste en una democracia de partidos más amplia.

A través de la democracia de partidos, el Estado representa en última instancia los intereses de los ciudadanos en tanto que individuos. Las clases pueden considerarse los grupos de interés más importantes después de los partidos (véase Lipset, 1959), o bien, sencillamente, uno más entre los muchos que se contrarrestan entre sí y cuya composición varía de un Estado a otro (otros grupos de interés serían los económicos, religiosos o lingüísticos, las distintas comunidades étnicas, las regiones, el género, los grupos de edad, etc.). Algunos pluralistas sostienen que todos los grupos de interés tienen el mismo poder o que la democracia de partidos les confiere una perfecta igualdad política. No obstante, la mayoría afirma que las democracias liberales de Occidente posibilitan la existencia de un grado de competición y participación suficiente para producir un gobierno formado por elites competentes y responsables, es decir, no están gobernadas por una sola elite o clase dominante. Las desigualdades de poder no son acumulativas sino dispersas, dice Dahl (1956: 333; 1961: 85 a 86; 1977).

El pluralismo reconoce con razón la importancia de la democracia de partidos para la historia de Occidente (aunque quizás exagere el grado de democracia de los Estados modernos). Reconoce también que la sociedad es algo más que las clases. Comete, sin embargo, dos errores. En primer lugar, aunque plantea un Estado más complejo, es, en definitiva, como la teoría de las clases, funcionalista y reduccionista. El Estado continúa siendo un lugar, no un actor, y carece, pues, de poder autónomo; la política de los partidos y de los grupos de presión irradia hacia dentro con el fin de controlarlo. En segundo lugar, considera que las clases, sectores, regiones, religiones, etc., son análogos y sistémicos en su competición mutua. Una vez más, como la teoría de las clases, el Estado es unitario y sistémico. Las relaciones

entre el gobierno y los grupos plurales de interés forman un *sistema* democrático funcional. Los grupos plurales de interés disfrutan de un poder proporcional a la fuerza de su distrito electoral. Todo esto forma un único conjunto: la «sociedad». El gobierno democrático refleja la «sociedad» y sus «necesidades» como un todo.

Para Easton (1965: 56), «el sistema político» es el «sistema de conducta más inclusivo que posee una sociedad para la asignación autoritaria de valores». El «sistema político», la «forma de gobierno», la «comunidad política» o el «gobierno» son, a su parecer, coherentes. Los pluralistas se abstienen de emplear el término «Estado», quizás porque transmite un sentido más germánico del «poder». Pero el término elegido carece de importancia; por mi parte, emplearé Estado por ser el más corto. Cualquiera que sea el término utilizado por los pluralistas, el hecho es que concuerda en esencia con el aserto funcionalista de Poulantzas: el Estado es el «factor de cohesión» de la sociedad. Sólo la concepción pluralista de la sociedad difiere de la suya. Pero, como tendremos oportunidad de comprobar, ni la sociedad ni el Estado están, por lo general, tan cohesionados.

Por el contrario, los escritores de la tercera escuela, los «elitistas» o «estatistas» se concentran en los poderes autónomos del Estado. Aún así, proponen dos conceptos muy diferentes de autonomía que conviene distinguir. Mi forma de considerar el poder político como la cuarta de las fuentes sociales del poder no sería significativa a menos que uno de esos conceptos o ambos resultaran esencialmente ciertos. Aunque los dos contienen alguna verdad, uno es mucho más acertado.

La teoría del elitismo prosperó a comienzos del siglo XX. Oppenheimer (1975) subrayó el aumento del poder de la «clase política» a lo largo de la historia. Mosca (1939) localizó el poder político en la organización centralizada. Una minoría organizada, centralizada y cohesionada podría controlar y derrotar siempre a las masas desorganizadas, argumenta con razón. Pero tanto Mosca como Pareto destacan que el poder de las elites políticas se origina en otro lugar, en la sociedad civil, y es, a la larga, vulnerable a las nuevas contraelites que surgen de ella. El control de los recursos (económicos, ideológicos o militares) hace posible que las elites emergentes derroquen a la elite política en decadencia y organicen su propio poder dentro de las instituciones del Estado. De ahí que los elitistas clásicos consideren el poder político una relación dinámica *entre* el Estado y la sociedad civil, lo cual es sin duda correcto.

Sin embargo, hacia 1980, la atención de los sociólogos se concentró en los poderes estatales centralizados. Theda Skocpol (1979: 27, 29 y 30; *cf.* 1985) definió el Estado como «un conjunto de organizaciones militares, administrativas y políticas, encabezadas y mejor o peor coordinadas por una autoridad ejecutiva ..., una estructura autónoma que responde a unos intereses y a una lógica internos», pretendiendo corregir la concepción pluralista, centrada en la sociedad, y las teorías marxistas, centradas en el Estado. Aunque ni ella ni sus críticos parecen haberlo comprendido, tales puntualizaciones contienen dos versiones distintas de la autonomía del Estado, que yo denomino «elitismo auténtico» y «estatismo institucional».

Los elitistas auténticos subrayan el poder distributivo de las elites estatales *sobre* la sociedad, de ahí que consideren actores a los Estados. Krasner (1984: 224) lo plantea sin rodeos: «El Estado debe ser tratado como un actor por derecho propio». Levi (1988: 2 a 9) insiste también en que «los gobernantes gobiernan». Considera que el Estado es un actor racional que maximiza sus propios intereses privados y se convierte en un «depredador» que despoja a la sociedad civil; un punto de vista muy americano. Kiser y Hechter (1991) han adelantado un modelo de Estado de «elección racional», según el cual éste sería un actor único, racional y unitario. Poggi (1990: 97 a 9, 120 a 127), aunque reconoce que el Estado es «útil» (por ejemplo, sirve a intereses plurales) y «partidista» (beneficia a unas clases), sostiene que, en última instancia, resulta «invasor» y se preocupa por «sus propios intereses». Los elitistas auténticos invierten las teorías pluralista y de las clases: el poder distributivo irradiaría ahora desde el Estado, no hacia él.

La mayor virtud de los elitistas auténticos consiste en subrayar un aspecto del Estado que los pluralistas y los teóricos de las clases han silenciado imperdonablemente: el hecho de que los Estados viven en un mundo de Estados y «actúan» en una dimensión geopolítica (Shaw, 1984, 1988 constituye una honrosa excepción al silencio marxiano; e igualmente ocurre con los radicales Mills y Domhoff). Los escasos teóricos de las clases que analizan las relaciones internacionales tienden a reducirlas a las distintas clases y modos de producción que se encuentran en el mundo; el ejemplo más reciente de este análisis es la teoría del sistema mundial. Por el contrario, los teóricos influidos por el elitismo auténtico subrayan el papel de la geopolítica y el de la guerra y su financiación (Giddens, 1985; Levi, 1988; Tilly, 1990).

Las teorías elitistas encuentran apoyo en los teóricos «realistas» de las relaciones internacionales. Aunque poco interesados en la estructura interna del Estado, los realistas consideran que se trata de un actor unitario de poder que disfruta de «soberanía» sobre sus territorios. Los «estadistas» tienen autoridad para representar internacionalmente el conjunto de los intereses «nacionales». Pero entre los Estados soberanos no existe una mayor racionalidad o solidaridad normativa, sólo el ejercicio de un poder distributivo, ausencia de normas y anarquía (Poggi, 1990: 23 a 25). Esto explica que en materia de política exterior los estadistas y los Estados persigan de forma sistemática y «realista» sus «propios» intereses geopolíticos, a expensas de los de otros Estados. El principal interés es la seguridad, una mezcla de defensa vigilante y agresión intermitente. Morgenthau (1978: 42) declara: «La historia demuestra que las naciones activas en política internacional se encuentran siempre preparándose para una violencia organizada en forma de guerra, o haciéndola, o recuperándose de ella». El realismo subraya así la cohesión interna de los Estados, y sus juegos de suma cero, su anarquía y su tendencia a la guerra en el exterior. Gran parte de los teóricos de las relaciones internacionales, realistas o no, resaltan la dificultad que presenta la creación de normas internacionales. Allí donde éstas existen, los teóricos tienden a atribuirlas a la «hegemonía» o a la coerción (por ejemplo, Lipson, 1985), o bien a un cálculo «realista» de los intereses nacionales en el marco del equilibrio de los sistemas de poder. La solidaridad ideológica entre las potencias sólo puede ser transitoria e impuesta por el interés.

Las mayores críticas al realismo han venido del campo de una teoría contraria en materia de relaciones internacionales que subraya la interdependencia de los Estados. Su acusación contra los realistas consiste en que éstos han descuidado las redes de poder transnacional y transgubernamental que existen en el mundo. Esta soberanía interestatal transversal reduce la cohesión de los Estados y proporciona una fuente alternativa de normas y, por tanto, de orden mundial (Keohane y Nye, 1977: 23 a 37). Dado que los teóricos de la interdependencia se concentran en el moderno capitalismo global, no acostumbran a aplicar sus argumentaciones a otras épocas. Parecen coincidir con los realistas en que aquéllas estuvieron regidas por el equilibrio entre las potencias o por potencias hegemónicas. La excepción es Rosecrance (1986), quien analiza distintos grados de Estados mercantiles e imperiales a lo largo de la historia, con sus distintos sistemas normativos. Por mi parte, desarrollaré una argumentación semejante en

los capítulos 8 y 21. En las civilizaciones con múltiples actores de poder, como la europea o la occidental moderna, las relaciones geopolíticas se producen en el marco de una civilización más amplia, que comprende normas y redes de poder transnacionales y transgubernamentales.

Los realistas y los teóricos de la interdependencia comparten también un curioso prejuicio, es decir, se plantean hasta qué punto se muestran benignas las normas pacíficas de carácter internacional. Los teóricos de la interdependencia ven en las normas contemporáneas de cooperación el reflejo de una coincidencia de intereses materiales plurales; los realistas ven en ellas cálculos generalizados de los intereses estatales. Pero no todas las ideologías o normas transnacionales y transgubernamentales han de ser positivas ni reflejar intereses materiales pacíficamente expresados en los mercados. También pueden encarnar la represión de clase y otros intereses propios de un actor de poder: declarar la guerra en nombre de ideales superiores e incluso idealizarla. Las solidaridades normativas pueden conducir al desorden. Éste no es necesariamente el resultado de la ausencia de un régimen internacional, sino a menudo el efecto de su presencia. Pero los realistas prefieren eludir el problema. Por ejemplo, en la narración histórica de Morgenthau, los periodos de calma, los equilibrios racionalistas de las potencias o las hegemonías se ven bruscamente sacudidos por interregnos violentos, como los acaecidos de 1772 a 1815 o de 1914 a 1945. Sin embargo, Morgenthau no se molesta en explicarlos. Puesto que previamente ha descrito las ideologías como meras legitimaciones o «disfraces» de los intereses, carece de conceptos teóricos para interpretar aquellos periodos en que la diplomacia y la guerra se hallan, ellas mismas, profundamente arraigadas en ideologías revolucionarias o reaccionarias de carácter violento (1978: 92 a 103, 226 a 228). Por mi parte, demuestro que los cálculos de interés siempre se encuentran influidos por el entramado que forman las fuentes del poder social, y siempre conllevan normas —unas veces pacíficas, otras violentas— que emanan de complicados vínculos con las «comunidades imaginadas» de clase y nación.

El realismo y el elitismo auténtico tienden también a defender, con el pluralismo y el marxismo, la existencia de un Estado cohesivo y sistémico, esta vez en la forma de un solo actor de elite. Krasner ha sostenido que la autonomía de la elite estatal es mayor en la política exterior que en la interior, y que se encuentra relativamente «aislada» de las clases nacionales y de los grupos de presión. El Estado consiste

en «un conjunto de roles e instituciones que poseen sus propios mecanismos, impulsos y esferas de acción, distintos a los intereses de cualquier otro grupo concreto» (1978: 10 y 11). Más adelante, en este mismo volumen, emplearé, al examinar la conclusión de Krasner, su metáfora del «aislamiento». Los estadistas también personifican las distintas identidades sociales que emanan de lugares diferentes al Estado, por eso, tampoco ellos son cohesivos.

En cuanto al primer punto, como afirma Jessop (1990), los recursos del Estado central raramente se adecuan a sus ambiciosos proyectos estatistas. Las elites estatales necesitan aliarse con grupos poderosos que están «afuera», en la sociedad. Pero no suele tratarse de una alianza entre grupos completamente distintos. Laumann y Knoke (1987) demuestran que en la América contemporánea las redes formadas por organizaciones múltiples penetran la división formal entre Estado y sociedad. Los actores del Estado son también «civiles» y poseen una identidad social. Domhoff (1990: 107 a 157) demuestra que los modernos «estadistas» norteamericanos proceden del mundo de los grandes negocios y de las grandes firmas dedicadas al derecho de sociedades. Forman, en realidad, un «partido» que «representa» más a una fracción internacional de la clase capitalista que a los Estados Unidos.

Todos los teóricos de las clases subrayan la identidad y los intereses de clase dominante de los estadistas. Como sociólogo convencido de que las identidades sociales no pueden reducirse a la clase, ampliaré su línea argumentativa en este volumen. Aunque coincido con Krasner en que los estadistas del siglo XIX se encontraban bastante aislados, tanto de las clases populares como de las dominantes, no creo que lo estuvieran del todo ya que ellos mismos poseían una identidad social. Todos eran hombres de raza blanca, procedentes en su mayor parte del antiguo régimen y de las comunidades lingüísticas y religiosas dominantes. Este conjunto de identidades sociales tuvo importancia para su conducta en materia de política exterior, desde el momento en que los impulsaba a compartir o rechazar los valores de otros actores de poder, nacionales o internacionales, y, con ello, a aumentar unas veces y reducir otras la violencia internacional.

Respecto al segundo punto, pocos Estados resultaron ser actores unitarios. Keohane y Nye (1977: 34) cuestionan afirmaciones como «los Estados actúan conforme a su propio interés» preguntando «¿qué significa propio y cuál es ese interés?». Las elites estatales no son singulares sino plurales, como reconocen incluso algunos autores

estatistas moderados. Tilly (1990: 33 a 34) acepta que tan ilegítima es, en última instancia, la reificación del Estado como, él mismo lo dice, su propio descuido de las clases sociales. Se trata de simplificaciones pragmáticas y heurísticas, afirma. Skocpol reconoce que los poderes y la cohesión de la elite son variables. Las Constituciones también tienen su importancia; las democráticas prohíben las autonomías de elite que permiten las autoritarias. Su análisis (1979) de las primeras revoluciones modernas cifra con bastante razón la autonomía del Estado en los poderes de las monarquías absolutas. En el periodo que analizo aquí, el poder de las monarquías se aproximaba más a la noción de autonomía estatal de los elitistas auténticos, aunque ni entonces ni nunca ha sido absoluta. Pero el trabajo en colaboración más reciente de Skocpol (Weir y Skocpol, 1985) sobre los programas de bienestar social del siglo XX localiza la autonomía de las elites en los burócratas especializados; una forma de autonomía menor y más subrepticia. En el análisis de las «revoluciones desde arriba» en los países desarrollados, debido a Trimberger (1978), la elite estatal presenta nuevas características, aquí es una alianza revolucionaria de burócratas y oficiales del ejército. Así pues, las elites estatales son diversas y pueden ser incoherentes, en especial durante el periodo que nos ocupa, cuando convivían en el Estado monarquías, ejércitos, burócratas y partidos políticos.

Pero Skocpol ha llevado a cabo, según parece casi inconscientemente, una revisión fundamental de la autonomía del Estado. Recordemos su aserto: «El Estado es una estructura con lógica e intereses propios». Los «intereses» son obviamente propiedades de los actores —una expresión de la teoría del elitismo auténtico—, pero la «lógica» no implica necesariamente la existencia de actor o elite algunos. La autonomía del Estado residiría menos en la autonomía de las elites que en la lógica autonóma de unas determinadas instituciones políticas, surgidas en el curso de anteriores luchas por el poder y luego institucionalizadas, que, a su vez, influyen en las luchas actuales. Skocpol y sus colaboradores (Weir *et al.* 1988: 1 a 121) destacan que el federalismo estadounidense y el sistema de patronazgo de los partidos, institucionalizado durante el siglo XIX, frenaron el desarrollo del poder estatal en los Estados Unidos, especialmente en el terreno de las políticas de bienestar. Aunque suelen afirmar intermitentemente que las elites estatales (burócratas, tecnócratas y dirigentes de los partidos) poseen alguna autonomía en cuanto actores, Skocpol y sus asociados se dedican más a los efectos que producen las instituciones es-

tatales en la autonomía de todos los actores políticos. Federalismo, partidos, presencia o ausencia de un gabinete de gobierno y otros muchos aspectos de lo que llamamos la «constitución» de los Estados estructuran las relaciones de poder en formas muy distintas. Laumann y Knoke (1987) ofrecen una aproximación institucional más empírica. Buscan las pautas de interacción entre los distintos departamentos del Estado y los grupos de presión, concluyendo que el Estado norteamericano contemporáneo está formado por redes «de organización» complejas.

Estamos, pues, ante un «poder del Estado», aunque raramente ante un «poder de elite», ya que se relaciona más con el poder colectivo que con el poder distributivo. Afecta más a las formas de colaboración de los actores politizados que a quién tiene el poder sobre quién. Tal teoría no predice tanto que las elites estatales dominan a los actores de la sociedad civil como que todos los actores están constreñidos por las instituciones políticas existentes. Puesto que los Estados son, en esencia, medios de institucionalizar autoritariamente las relaciones dinámicas de la sociedad, se prestan fácilmente a una especie de teoría del «retraso político». El Estado institucionaliza los conflictos sociales presentes, pero los conflictos históricamente institucionalizados continúan ejerciendo un poder considerable sobre los nuevos; así, pasamos del Estado como lugar pasivo (en el caso de las teorías pluralistas y marxianas) al Estado no tanto actor (en el caso del elitismo auténtico) como lugar activo. En el capítulo 20 ratificaré esta concepción del Estado occidental.

Denomino «estatismo institucional» a esta aproximación al poder estatal, y lo acepto como una parte más de mi «materialismo organizativo». La teoría demostrará ser muy eficaz en nuestro caso, ya que en este periodo surgió el Estado-nación, un auténtico conjunto masivo de instituciones políticas. El elitismo auténtico se puede aplicar a los Estados autoritarios y dictatoriales, por ejemplo, al nazismo y al estalinismo (aunque incluso en esos casos habrá que rebajar su opinión sobre la coherencia de las elites). Pero el elitismo tiene bastante que decir incluso respecto a los Estados absolutistas y a las monarquías autoritarias del periodo. Me serviré sobre todo del estatismo institucional para identificar las formas predominantes de autonomía estatal.

Como es lógico esperar, muchos escritores no encajan exactamente en ninguna de las citadas escuelas, y otros se alimentan de varias. Rueschemeyer y Evans (1985) sostienen que si bien el capita-

aunque impone límites al Estado, las elites disfrutan de una cierta autonomía. Laumann y Knoke (1987) se acercan a las cuatro teorías que acabó de examinar. Dahl ha modificado su anterior pluralismo reconociendo que el poder concentrado del capitalismo corporativo está poniendo en peligro la democracia. Cualquier persona con sentido empírico —Dahl, Domhoff, Offe o Skocpol— entiende que las tres escuelas dicen cosas muy válidas sobre el Estado: que es a la vez actor y lugar; que ese lugar tiene muchas mansiones y distintos grados de autonomía y cohesión, aunque también responde a las presiones de los capitalistas, a las de otros grandes actores de poder y a las necesidades más generales que expresa la sociedad.

Pero gran parte del trabajo empírico sobre la administración estatal no destaca ninguno de los actores que tratan estas teorías, ya sea la elite estatal, los intereses del capital o los del conjunto de la sociedad. Los Estados presentan una apariencia caótica, irracional, con múltiples autonomías ministeriales, presionadas de forma errática e intermitente por los capitalistas, pero también por otros grupos de poder. Al microscopio, se «balcanizan», se disuelven en ministerios y facciones que compiten entre sí (Alford y Friendland, 1985: 202 a 222; Rueschemeyer y Evans, 1985). Por ejemplo, cuando Padgett (1981) disecciona los presupuestos del ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos no encuentra ese actor singular cohesivo, *el* Estado, sino un conjunto de administraciones múltiples, fragmentadas y esparcidas, cuyo grado de confusión suele aumentar al añadir la política exterior. En la laboriosa reconstrucción que llevó a cabo Albertini (1952-1957) de la diplomacia que condujo a la Primera Guerra Mundial, los Estados aparecen desgarrados por numerosas disputas, unas geopolíticas, otras nacionales, que se entrelazan de modo involuntario, muy lejos tanto de la cohesión que pinta la teoría realista de las elites como de la que se desprende de la teoría pluralista y de la teoría de las clases. Como afirma Abrams (1988: 79), lo que desorienta es la idea misma de *el* Estado: «El Estado es el símbolo unificado de una desunión real ... Las instituciones políticas ... son siempre incapaces de desarrollar una unidad en la práctica, pues constantemente demuestran su incapacidad para funcionar como un factor general de cohesión».

Por consiguiente, ofrezco aquí una quinta teoría, que describo con una expresión popular: el Estado no es una conspiración sino un «embrollo». O, lo que es igual, el Estado no es funcional sino «embrollador».

Muchos sociólogos mirarán mi teoría con desdén. Están convencidos de que la vida social responde a un orden y a unos modelos. Es evidente que unos Estados se encuentran más ordenados que otros, pero ¿no es verdad que existe una cierta lógica en los errores garrafales del Estado, así como en sus estrategias? No cabe duda de que los Estados occidentales son fundamentalmente «democracias de partidos» y «capitalistas» (como afirman los marxistas y los pluralistas). Han contenido monarquías y elites burocráticas (como observan los elitistas). Son potencias, grandes o pequeñas, son laicos o religiosos, centralizados o federales, patriarcales o neutrales en materia de género, en definitiva, responden a un modelo. Pero, vistos los excesos propios de las teorías sistémicas, ¿podremos establecer un modelo de Estado sin reificarlo? ¿Tendremos que abandonar las teorías sustantivas para construir la nuestra a partir de las propiedades formales de los mapas de las densas redes de organización de la influencia política moderna, como hacen Laumann y Knoke (1987)? Pese a las profundas virtudes de esta teoría de la organización, y a los paralelismos entre su empresa y la mía, ¿no permite a veces que el árbol le impida ver el bosque? El Estado americano es sin duda capitalista a un macronivel; es también federal y posee el militarismo más poderoso del mundo, como todos sabemos sin necesidad de esos mapas de redes complejas de poder organizativo. De hecho, al rechazar la noción de que se trata de un Estado capitalista basándose en que las redes de organización raramente se configuran para defender el capitalismo (por eso, en ocasiones, pueden reaccionar con retraso a las amenazas contra sus propios derechos de propiedad), Laumann y Knoke (1987: 383 a 386) corren el riesgo de reproducir el antiguo error pluralista de confundir el terreno de la organización y el debate político abierto con la política en términos globales.

Mi versión, más sustantiva, del materialismo de organización se desarrolla en dos fases. En primer lugar, identifico las características concretas de las instituciones políticas. El marxismo y el pluralismo, por su índole reduccionista, tienden a despreciar las particularidades. El realismo y el elitismo auténtico las consideran singulares, exagerando el poder y la cohesión de los actores estatales; en la teoría del «embrollo» proliferan las particularidades. Para abordar la identificación de las pautas generales de las particularidades políticas, nada mejor que comenzar con Max Weber, a quien, erróneamente, se ha considerado a veces un elitista auténtico. Weber no elaboró una teoría coherente del Estado, pero nos dejó una serie de conceptos con los

que elaborarla. Una aproximación institucional tiende a multiplicar la complejidad de la organización, como en el caso de Laumann y Knoke (que emplean unos datos mucho más complejos de aquellos a los que yo puedo aspirar para el estudio de los Estados históricos). Por tanto, en la segunda fase, trato de simplificar la proliferación institucional sirviéndome de mi teoría polimorfa de las «cristalizaciones estatales de nivel superior».

Los conceptos políticos de Weber: un análisis institucional

Weber fue ante todo un teórico del desarrollo histórico de las instituciones sociales. Comenzó su análisis del Estado distinguiendo tres fases de desarrollo institucional, caracterizadas por los términos «poder político», «Estado» y «Estado moderno». En la primera fase, existía el poder político pero no el Estado.

> Una «organización dirigente» se llamará «política» en la medida en que su existencia y su orden estén siempre salvaguardados dentro de un área *territorial* mediante la amenaza y el empleo de la fuerza física por parte de los dirigentes administrativos.

[Ésta y las dos citas siguientes están tomadas de Weber 1978: I, 54 a 56; la cursiva es suya.]

De modo que el poder político es esencialmente territorial, y lo impone físicamente un grupo dirigente especializado (lo que implica también centralizado). El «Estado» surge luego, en la segunda fase:

> Una organización política preceptiva, continuamente operativa, puede llamarse «Estado» en la medida en que sus dirigentes administrativos sostengan con éxito la pretensión de *monopolizar* el empleo *legítimo* de la fuerza física para imponer su orden.

Esta definición institucional del Estado ha encontrado una aprobación mayoritaria (MacIver, 1926: 22; Eisenstadt, 1969: 5; Tilly, 1975: 27; Rueschemeyer y Evans, 1985: 47; Poggi, 1990, capítulos 1 y 2). Por mi parte, coincido con Giddens (1985: 18) en una objeción. Son muchos los Estados históricos que no «monopolizaron» los medios de la fuerza física; incluso en los Estados modernos estos medios han sido prácticamente autónomos respecto al (resto del) Estado.

Mi propia definición, aunque muy influida por Weber, parte de aflojar los lazos que unen el poder político con el poder militar:

1. El Estado es un conjunto diferenciado de instituciones y personal que
2. implica una centralidad, en el sentido de que la relaciones políticas irradian desde el centro y hacia el centro, para abarcar
3. una demarcación territorial sobre la que ese Estado ejerce
4. en alguna medida, una capacidad de establecer normas autoritarias y vinculantes, respaldadas por algún tipo de fuerza física organizada.

Se trata de una definición institucional, no funcional, del Estado, donde no se menciona qué es lo que éste hace. Es cierto que emplea la fuerza, pero sólo como medio para respaldar unas normas cuyo contenido concreto no se define. Entre las teorías que he considerado aquí, sólo la marxista y algunas de tipo realista especifican las funciones del Estado, bien porque reproduzca las relaciones sociales necesarias para los modos predominantes de producción (marxismo), bien porque aspire a satisfacer las necesidades de seguridad territorial (realismo). Pero los Estados se encargan de otras muchas funciones. Aunque las de clase y seguridad resulten innegables, podemos hablar también de arbitrio de disputas, redistribución de recursos entre las regiones, los grupos de edad y otros grupos de interés, sacralización de ciertas instituciones y secularización de otras, entre otros muchos cometidos. No obstante, la gran variedad de Estados con funciones en distintos grados de compromiso, dificulta la definición del Estado conforme a sus funciones. Más adelante pasaré a un análisis funcional con el objetivo de identificar las distintas cristalizaciones funcionales.

De mi definición, cabe extraer cuatro características de las instituciones políticas, que comparten todos los Estados:

1. El Estado está centralizado territorialmente. No maneja, sin embargo, el mismo recurso respecto al poder ideológico, económico y militar. De hecho, ha de congratularse con estos recursos que se encuentran fuera de él. Su fuente de poder característica reside en que él y sólo él se encuentra intrínsecamente centralizado en un territorio delimitado sobre el que impone sus poderes vinculantes.
2. El Estado presenta dos dualidades: es, al mismo tiempo, un lugar, unas personas, un centro y un territorio. El poder político es

«...tista», por estar ejercido en su centro por instituciones e individuos pertenecientes a la elite; pero simultáneamente está compuesto de relaciones de «partidos» entre personas e instituciones, tanto en el centro como en la totalidad de los territorios. Por esa razón, cristalizará *tanto* en formas esencialmente generadas por la sociedad exterior a él, *como* en formas intrínsecas a sus propios procesos políticos.

3. Las instituciones estatales son muy variadas y realizan distintas funciones para los distintos intereses de los grupos localizados dentro de su territorio. Cualquiera que sean su grado de centralismo y su racionalidad privada, el Estado es también impuro, pues las diferentes partes de su cuerpo político están abiertas a la penetración de diversas redes de poder. Así se explica que *el Estado necesite que su unidad, incluso su consistencia, no sean definitivas*. Lo contrario sólo podría darse si la sociedad presentara una unidad y una consistencia idénticas, no en mi modelo de sociedad compuesta por redes de poder superpuestas y cruzadas.

4. La propia definición del Estado como territorio delimitado sugiere un ulterior conjunto de relaciones «políticas» entre ese Estado y otros Estados; naturalmente, me refiero a la *geopolítica*. A lo largo de su obra, en especial al tratar del Estado imperial alemán, Weber hace hincapié en que la geopolítica ayuda a configurar la política interior. Collins (1986: 145) afirma que, para Weber, «la política funciona desde fuera hacia dentro», aunque no faltan apartados de su obra en los que se subraya el proceso contrario. Política y geopolítica se entrelazan, y ninguna de ellas puede estudiarse por separado.

Me extenderé en estos puntos después de explicar la tercera fase de Weber, el «Estado moderno», que, adicionalmente,

> posee un orden administrativo y legal sometido a cambios a través de la legislación, al que se encuentran orientadas las actividades organizadas del personal administrativo, que también está sometido a las leyes. Este sistema de órdenes impone una autoridad vinculante no sólo a los miembros del Estado y a los ciudadanos ..., sino también, y en gran medida, a los actos que se producen en el área de su jurisdicción. Es, pues, una organización obligatoria de base territorial.

Es decir, el Estado moderno añade unas instituciones rutinarias, racionalizadas y formalizadas de gran alcance sobre los ciudadanos y los territorios. *Penetra* en sus territorios mediante la ley y la adminis-

tración (encarnando lo que Weber llama «dominación legal-racional»), como nunca antes había ocurrido. Tilly (1990: 103 a 116) describe acertadamente el fenómeno como gobierno «directo», y lo compara con el gobierno indirecto de Estados anteriores. Pero no se trata sólo de que el Estado haya aumentado su poder sobre la sociedad. Por el contrario, los «ciudadanos» y los «partidos» han penetrado en el Estado moderno. El Estado se ha convertido en un *Estado-nación*, que representa también el sentido de comunidad que abrigan sus ciudadanos y subraya la peculiaridad de sus intereses exteriores respecto a los ciudadanos de otros Estados. Aunque para Weber el problema de la «legitimidad» en la mayor parte de los Estados históricos sea ante todo un asunto de cohesión entre el gobernante y su personal, sostiene que en el Estado moderno esto afecta sobre todo a las relaciones entre los gobernantes, los partidos y la nación.

Weber trata con frecuencia una institución del Estado moderno en la que pone un énfasis especial: la «burocracia monocrática», es decir, la burocracia centralizada bajo una sola autoridad. Vetamos un famoso párrafo:

> La variedad monocrática de la burocracia es capaz de lograr, desde un punto de vista exclusivamente técnico, el mayor grado de eficacia, y en este sentido resulta el medio más racional de ejercer la autoridad sobre los seres humanos. Supera a cualquier otra forma en precisión y estabilidad, en el rigor de su disciplina y en fiabilidad. Esto proporciona a los responsables de la organización una gran posibilidad de calcular los resultados ... El desarrollo de las modernas formas de organización en todos los campos es idéntico al desarrollo y continua extensión de la administración burocrática ... Su evolución se encuentra, por tomar el caso más llamativo, en las raíces del Estado occidental moderno ... La administración de una sociedad de masas lo hace completamente imprescindible en la actualidad. Lo único que cabe elegir en el terreno de la administración es la burocracia o el diletantismo [1978: I, 223.]

Weber piensa que la burocratización domina Occidente. Aunque veía en el Estado alemán un pionero de la burocracia, se esforzó por demostrar que los dos Estados supuestamente menos burocratizados —la Rusia zarista y los Estados Unidos confederales y gobernados por los partidos— tampoco se habían librado de su imperio. Las autoridades políticas se encontraban subordinadas a la burocracia en todas partes. Un régimen democrático, al centralizar la responsabilidad, fomenta la burocracia monocrática. Weber lamentaba su «irresistible avance» con esta pregunta retórica: «¿Cómo salvar los restos de la li-

bertad "individualista"?», y también: «¿Qué podemos oponer a semejante maquinaria para salvar a una parte de la humanidad de esta parcelación del alma, de esta dominación total del ideal burocrático de la vida?» (1978: II, 1403; Beetham, 1985: 81).

En cierto modo, sin embargo, Weber parece haber comprendido la debilidad de su argumentación. Reflexionó entonces si es la modernización lo que aumenta el *poder* de la burocracia (sin explicar el significado de la repentina cursiva), pero llegó a la siguiente conclusión categórica: «El poder de una burocracia hecha y derecha es siempre grande; en condiciones normales, inmenso. El político avezado se encuentra siempre frente al burócrata cualificado como el diletante ante el experto» (1978: II, 969 a 1003, citado de la pág. 991; existe un excelente comentario de Beetham, 1985: 67 a 72).

Pero Weber se equivocaba gravemente al ratificar inesperadamente esta teoría elitista de la burocracia; en realidad, los burócratas han dominado pocas veces los Estados modernos, y las administraciones del Estado tampoco han sido siempre monocráticas (véase capítulo 13). Se pueden aducir objeciones conceptuales y empíricas.

Curiosamente, las objeciones empíricas se encuentran en la disección que llevó a cabo Weber de su propio Estado imperial alemán, donde no se limitó a identificar una burocracia poderosa, sino tres instituciones políticas distintas: la burocracia, un ejecutivo político dual (el káiser y el canciller) y los partidos (especialmente el de los *Junkers*). Cuando Weber habla de «partidos» no se refiere exclusivamente a los grupos políticos que compiten en las elecciones, sino a cualquier grupo colectivamente organizado que intente adquirir poder, incluidas las facciones de la corte, los ministerios y los altos mandos. Como muestra el capítulo 9, afirmó en momentos distintos la dominación de cada uno de estos tres actores sobre el *Kaiserreich*. Nótese, sin embargo, que los partidos son distintos a los otros dos actores. La burocracia y el ejecutivo son compatibles con el auténtico elitismo, pero el poder de los partidos procede de una relación de dos direcciones entre el centro y el territorio: los *Junkers* formaban una clase «exterior» al Estado, perteneciente a la sociedad civil, pero estaban atrincherados en el ejército y otras instituciones estatales decisivas. Weber concedió una gran importancia a los partidos en su obra; éstos, y no la burocracia o el ejecutivo, componían el tercer actor de su modelo tripartito de estratificación social, junto con las clases y los grupos de estatus.

Aunque Weber no elaboró una teoría completa del Estado mo-

derno, sus ideas sobre la materia se distinguen claramente de las que acabamos de ver. Nunca fue un reduccionista; al contrario que los defensores del marxismo y el pluralismo, vio que los Estados poseen sus propios poderes. Y al contrario que los del realismo y el elitismo auténtico, no localizó esos poderes sólo en una elite central, ni los consideró necesariamente cohesivos. Como muchos otros escritores modernos, Laumann y Knoke (1987: 380) han considerado a Weber un realista elitista y han criticado el hecho de que no reconociera la borrosa frontera que se levanta entre lo público y lo privado. Pero precisamente es esto lo que constituye el núcleo de su análisis de los partidos. El poder político era al mismo tiempo un recurso centralizado, una relación de dos direcciones entre el centro y los territorios y una relación entre los Estados. Weber no moldeó estos elementos institucionales en una teoría del Estado. Nosotros, sin embargo, remediando esta trascendente confusión conceptual, estamos en condiciones de hacerlo.

Las puntualizaciones de Weber confunden dos concepciones de la fuerza estatal, que en la cita que acabamos de ver llamaba «poder» y «penetración». Weber acierta cuando sostiene que la burocracia aumenta la penetración, pero se equivoca cuando afirma que simplemente aumenta el poder, porque está confundiendo el poder colectivo infraestructural y el poder distributivo despótico. El primero es el que subrayan las teorías de las instituciones estatales; el segundo, las del elitismo auténtico.

El *poder despótico* se refiere al poder distributivo de las elites estatales sobre la sociedad civil. Procede de un variado abanico de acciones que las elites estatales emprenden al margen de la negociación habitual con los grupos de la sociedad civil, y del hecho de que sólo el Estado se encuentre intrínsecamente organizado en función del territorio y cumpla funciones sociales que requieren esta forma de organización y que los actores del poder ideológico, económico y militar, organizados sobre bases distintas, no pueden realizar. Los actores que se localizan fundamentalmente dentro del Estado poseen un cierto espacio donde operan con intimidad, cuyo grado varía según la habilidad de los actores de la sociedad civil para organizarse centralmente mediante asambleas representativas, partidos políticos formales, facciones cortesanas, etc. De modo alternativo, éstos pueden retener poderes de la política central (que analizaré más adelante) o eludir los del Estado reforzando las relaciones transnacionales en el exterior. Un Estado con poder despótico se convierte tanto en un actor

autónomo —así lo plantea el elitismo auténtico— como en múltiples y quizás confusos actores autónomos, según el grado de su homogeneidad interna.

El *poder infraestructural* es la capacidad institucional de un Estado central, despótico o no, para penetrar en sus territorios y llevar a cabo decisiones en el plano logístico. Se trata de un poder colectivo, de un «poder a través de» la sociedad, que coordina la vida social a través de las infraestructuras estatales. Comporta un Estado como conjunto de instituciones centrales y radiales que penetran en sus territorios. Puesto que los poderes infraestructurales de los Estados modernos han aumentado, Weber deduce que este hecho implica un aumento paralelo del poder despótico sobre la sociedad civil. Sin embargo, no ocurre necesariamente así. El poder infraestructural es una vía de doble dirección, que también permite a los partidos de la sociedad civil controlar al Estado, como sostienen los marxistas y los pluralistas. Aumentar el poder infraestructural no significa necesariamente aumentar o disminuir el poder despótico distributivo.

No obstante, los poderes infraestructurales efectivos aumentan el poder colectivo del Estado. El hecho de que en la actualidad las instituciones estatales coordinen una gran parte de la vida social contribuye en parte a estructurarla, acrecentando lo que podríamos llamar su «centralización territorial» o «naturalización». Desde el punto de vista estructural, los Estados más poderosos «enjaulan» más relaciones sociales dentro de sus fronteras «nacionales» y a lo largo de las líneas radiales de control entre el núcleo y los territorios; aumentan los poderes colectivos, nacionales y geopolíticos, a expensas de los locales, regionales y transnacionales, al tiempo que dejan abierta una pregunta de tipo distributivo: ¿Quién los controla? Así pues, el poder explicativo del estatismo institucional aumenta en el Estado moderno a medida que se expanden masivamente sus poderes colectivos e infraestructurales.

CUADRO 3.1. *Dos dimensiones del poder estatal*

	Poder infraestructural	
Poder despótico	Bajo	Alto
Bajo	Feudal	Burocrático-democrático
Alto	Imperial/Absolutista	Autoritario

Como vemos en el cuadro 3.1, los poderes despótico e infraestructural se combinan en cuatro tipos ideales.

El Estado feudal los combinaba débilmente, porque apenas tenía capacidad de intervención en la vida social. Gozaba de una autonomía considerable en su esfera privada, pero de escaso poder sobre la sociedad. El rey medieval era dueño del Estado; éste constituía su casa, su guardarropa y la hacienda que le proporcionaba sus propios ingresos. Dentro del Estado hacía lo que le venía en gana, pero en la sociedad no podía tanto. Su gobierno era indirecto; dependía de las infraestructuras de los señores autonómos, de la Iglesia y de otras corporaciones. Su ejército estaba en manos de soldados contratados que podían desobedecer sus órdenes. Los Estados imperiales de China y de Roma y el absolutismo europeo se aproximan al segundo tipo ideal, de pronunciado poder despótico pero escaso poder infraestructural. Sus reacciones podían costarle la cabeza al que se encontrara a tiro, pero pocos lo estaban. Sus ejércitos eran formidables, pero tendían a fragmentarse a medida que los generales se convertían en rivales por el poder imperial. El Estado occidental moderno, de carácter liberal-burocrático, se aproxima al tercer tipo, con infraestructuras masivas ampliamente controladas bien por los capitalistas bien por el proceso democrático (no juzgo aún cuál de los dos). El Estado autoritario moderno —la Unión Soviética en su momento culminante— ha disfrutado tanto de poder despótico como de un consistente poder infraestructural (aunque la cohesión de ambos fue menor de lo que solemos reconocer).

Desde el siglo XVI en adelante, cada intento monárquico de aumentar el despotismo se saldó con un contragolpe representativo y un conflicto político de gran alcance, pero el poder infraestructural creció con un considerable grado de consenso a medida que los Estados participaron del crecimiento exponencial de los poderes colectivos generales que hemos analizado en el capítulo 1. Como indica el cuadro 3.1., la insólita fuerza de los Estados modernos es infraestructural. Los Estados agrarios llegaban incluso a desconocer la riqueza de sus súbditos; y no cobraban los impuestos con precisión. Como no podían evaluar las rentas, establecían indicadores de riqueza aproximativos (tamaño de las tierras o de las casas, valor de los productos situados en el mercado, etc.) y dependían de los notables locales para la recaudación. Sin embargo, hoy, los Estados británico y estadounidense pueden calcular mis ingresos y mi patrimonio «en la fuente» —conocen mi patrimonio aproximado— y tomar la parte que les co-

rresponde antes incluso de que yo haya podido tocarla. Quien controle estos Estados tiene un control sobre mí infinitamente mayor que el de los Estados agrarios sobre mis antepasados. Como observa Huntington (1968: 1), los Estados británico, norteamericano y soviético (este último antes de 1991) se asemejan más entre sí que cualquiera de los Estados históricos o que la mayoría de los Estados de los países en desarrollo; «el gobierno gobierna» en realidad cumpliendo las decisiones de los gabinetes, de los presidentes o del Politburó, que son capaces de movilizar un poder superior al de sus predecesores históricos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Pero no sólo se expanden las infraestructuras estatales. Una revolución en las logísticas del poder colectivo aumenta la penetración infraestructural de todas las organizaciones de poder. La capacidad de la sociedad civil para controlar el Estado aumenta también. Las sociedades modernas contienen tanto Estados autoritarios, que dominan efectivamente la vida cotidiana dentro de su territorio (como nunca lo hicieron los Estados históricos), como Estados democráticos de partidos, rutinariamente controlados por la sociedad civil (como sólo lo había hecho antes las pequeñas Ciudades-estado). Esto representa el fin de los Estados de la parte superior izquierda del cuadro 3.1.: autónomos y bastante cohesivos, aunque débiles, que gozaban de intimidad respecto a la sociedad civil pero tenían escaso poder efectivo sobre ella. Los Estados modernos y las sociedades civiles se interpenetran demasiado estrechamente para permitir una autonomía sin poder.

Este hecho enturbia nuestro análisis, porque si partimos de semejante interpenetración, ¿dónde acaba el Estado y dónde comienza la sociedad civil? Aquél no es ya un lugar central y una elite, pequeños y privados, que poseen su propia racionalidad, sino que contiene múltiples instituciones y tentáculos que se extienden desde el centro hacia los territorios e incluso hacia el espacio transnacional. Y viceversa, la sociedad civil está más politizada que en tiempos pasados, introduce distintos partidos —partidos políticos y grupos de presión— en los distintos nucleos del Estado, e incluso llega a rebasarlo transnacionalmente. El poder político moderno, como lugar y como actor, como infraestructura y como déspota, como elite y como partidos, es dual y afecta tanto al centro, con sus múltiples particularidades de poder, como a las relaciones centro-territorio, con sus particularidades de poder. Su cohesión es siempre problemática. Sólo en un sentido es singular «el Estado»: a medida que aumenta la interpene-

tración infraestructural, el Estado tiende a «naturalizar» la vida social. El «poder» del Estado moderno no es principalmente el de las «elites estatales» sobre la sociedad, sino una estrecha relación sociedad-Estado, que enjaula las relaciones sociales más en el plano nacional que en el local-regional o transnacional, politizando y geopolitizando la vida social en una medida mucho mayor que la de los Estados anteriores.

Partiendo de Weber, he descrito en esta sección las características institucionales que comparten todos los Estados, para después añadir las características de los modernos Estados-nación. Por otro lado, estas semejanzas generales de los Estados difieren considerablemente según el tiempo y el lugar. En la siguiente sección abordaré los detalles, para catalogar las principales instituciones políticas de las sociedades occidentales durante el largo siglo XIX, comenzando por las que afectan a la política nacional.

Las instituciones políticas del siglo XIX

Política interior

El cuadro 3.2 muestra las principales instituciones del gobierno central (más adelante trataré las relaciones de los gobiernos centrales y locales). La primera columna enumera las instituciones, y las restantes analizan quién las controla, añadiendo la distinción entre el poder «aislado» y el poder «inserto». Para que un Estado sea despótico (como en el elitismo auténtico), sus redes deben permanecer aisladas de la sociedad civil (como, según Krasner, ocurre en la política exterior). La columna 2 enumera las formas de aislamiento que liberan a la elite estatal de las presiones y los intereses de la sociedad civil. Pero si las instituciones estatales se hallan «insertas» en la sociedad civil, estarán también controladas, como afirman las teorías pluralistas y las teorías de las clases (columnas 4 y 5).

No obstante, el despotismo pleno y el aislamiento completo no son la misma cosa. Puesto que el Estado es al mismo tiempo un centro y un conjunto de relaciones entre éste y su territorio, la autonomía tendría que abarcar el centro y el territorio para permanecer aislada. Pero lo más importante, la base de los recursos estatales —sus redes fiscales y de recursos humanos penetran en la sociedad civil— debería permanecer aislada del control de la sociedad civil. Sin em-

CUADRO 3.2. *Las redes de poder en los Estados del siglo XIX*

Instituciones políticas	*Estado despótico*	*Alianza particularista del Estado con la sociedad civil*	*Clases dominantes*	*Múltiples grupos de interés*
Ejecutivo supremo	Monarquía absoluta, dinastía	Inserto en la Corte y el antiguo régimen	Inserto en la sociedad feudal-capitalista	Constitucionalmente inserto en estados, parlamentos y privilegios corporativos
Judicatura-policía	Cortes reales aisladas	Insertas en las corporaciones profesionales de abogados y en las universidades	Insertas en la ley de la propiedad	Ciudadanía civil (individual y colectiva)
Administración civil	Cuerpos aislados de oficiales reales o burocráticos	Inserta en el Antiguo Régimen, los nuevos profesionales y las universidades	Funcional para el capitalismo	Burocracia meritocrática que rinde cuentas a los parlamentos
Partidos, asambleas	Regímenes de un solo partido (*inexistentes en* este periodo)	Legislaturas limitadas, «*divide y vencerás*», oligarquías de partidos, intrigas cortesanas	1. Derecho al voto de los *propietarios* 2. Limitaciones capitalistas a la soberanía parlamentaria	Ciudadanía política
Diplomacia	«Estadistas» aislados	Inserta en el Antiguo Régimen	Inserta en las clases propietarias	Rinde cuentas a los parlamentos
Ejército	Casta aislada	Inserto en el Antiguo Régimen y en otros grupos particularistas	Inserto en las clases propietarias; rinde cuentas a ejecutivos civiles	Rinde cuentas a los parlamentos
Poder despótico	Alto	Medio	Bajo	Bajo
Teoría del Estado	Realista y Elitista auténtica	Estatismo institucional	De las clases	Pluralista

bargo, este aislamiento no abunda en la historia. El reclutamiento de tropas y la obtención de recursos necesitaron siempre de la ayuda de los notables locales y regionales. En el periodo que estudiamos, el aislamiento constituyó un fenómeno aún más raro gracias al desarrollo de la representación política, dirigido precisamente a controlar esas exacciones fiscales y ese reclutamiento de potencial humano. El aislamiento o la autonomía completa del Estado, tal como especifica la segunda columna del cuadro 3.2 y sostienen las teorías realistas y elitistas auténticas, es poco probable. Ello presupone el aislamiento de todas las instituciones que aparecen en la columna 1. Lo cierto es que algunas aparecen relativamente aisladas; otras, insertas en las clases dominantes; y otras aún, en las redes de poder plural (*cf.* Domhoff 1990: 26 a 28). Así pues, el Estado sería bastante menos coherente de lo que afirman las tres primeras escuelas teóricas. El Estado puede aislarse y ser autónomo en algunas de sus partes, nunca en su totalidad.

Más real es el nivel «medio» de poder despótico que aparece en la tercera columna. Las instituciones estatales pueden hallarse insertas en varios actores particularistas de poder de la sociedad civil, como en el análisis que efectúa Weber del partido de los *Junkers*. Según él, la monarquía alemana gozaba de una gran autonomía respecto a los capitalistas y a la ciudadanía en general porque formaba una alianza particularista con los *Junkers*, una clase que dominaba la sociedad desde mucho antes y que en ese momento perdía poder económico, aunque continuaba dominando el ejército y gran parte de los ministerios civiles. Mediante el particularismo, los regímenes insertos por alianza logran un aislamiento moderado y una cierta autonomía respecto a las fuerzas sociales que especifican las teorías pluralista y de las clases. Los regímenes realizan una política de «divide y vencerás» para asegurarse aliados particularistas segmentales y partidarios políticos, así como para moderar la oposición de los «excluidos» con la esperanza de integrarlos. Naturalmente, el equilibrio de poder que proporcionan estas alianzas puede producir el efecto inverso: el grupo particularista de la sociedad civil puede llegar a «colonizar» efectivamente una parte del Estado y utilizarlo contra otras elites estatales o ciertos actores de poder, como fue, por ejemplo, el caso del control histórico que ejercieron los políticos americanos del sur, insertos en las oligarquías de plantadores y comerciantes de los estados sureños, sobre la estructura de los comités del Congreso (Domhoff, 1990: 53, 104 a 105). La columna 3 enumera las principales alianzas

segmentales y particularistas, insertas o semiaisladas, del largo siglo XIX.

La primera línea del cuadro 3.2 se refiere al ejecutivo supremo, el principal modelo para la teoría realista y auténticamente elitista. Es el caso en que podemos esperar una auténtica autonomía del centro. Entonces, como ahora, todas las constituciones estatales conferían ciertos poderes al ejecutivo, especialmente (como demostramos en el capítulo 12) en materia de política exterior. La mayoría de los ejecutivos occidentales proceden de una fase absolutista de la monarquía. La frase de Luis XIV, «*L'état c'est moi*» contiene tres verdades. Los gobernantes absolutistas disfrutaron de mayor poder despótico que los monarcas constitucionales o los ejecutivos republicanos. Las constituciones tienen importancia porque, como creían sus contemporáneos, suponen el atrincheramiento de distintos grados de autonomía estatal. En segundo lugar, en las monarquías absolutistas y en las posteriores de carácter autoritario casi todo depende de la habilidad y la energía del monarca o de los primeros ministros en que aquél delega sus poderes. Como advierten los historiadores, el talento de una María Teresa, de un Bismarck (muy considerable), de un Luis XVI o de un Bethmann-Hollweg (insignificante) marcan la diferencia; en todo caso, mucho más que el de un monarca constitucional o incluso el de un primer ministro parlamentario. En tercer y último lugar, las monarquías hereditarias y sus familias fueron las únicas que no establecieron relaciones entre el centro y el territorio, ya que al ser actores centralizados constituían un núcleo, una elite estatal aislada, con sus propias características de poder.

Sin embargo, para ejercer el poder sobre la sociedad, los reyes tuvieron que dominar otras instituciones estatales. En el centro, dependían de la corte. Los cortesanos eran por lo general los aristócratas, el alto clero y los mandos militares insertos en la clase dominante, como afirma la teoría de las clases. Los monarcas debían contrarrestar esa inserción mediante una política segmental de «divide y vencerás», a través de las redes de parientes y allegados para escindir a la clase dominante en partidos «integrados» y «excluidos». A medida que el Estado y la sociedad se hacían más universalistas, la estrategia tuvo que cambiar para integrar al monarca y a la corte en el antiguo régimen, una alianza de partidos, centrada en la corte, entre el monarca y la antigua clase terrateniente y rentista, más la jerarquía de las iglesias establecidas y los cuerpos de oficiales.

El antiguo régimen domina gran parte de los semiaislamientos de

la columna 3. Este «partido-cum-elite» sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX (como ha sostenido con vigor Mayer, 1981). Como es lógico, resulta más importante en el caso de las monarquías autoritarias, pero incluso las constitucionales conservan ciertos rasgos del antiguo régimen, y tampoco en las repúblicas faltan los elementos «antiguos»: los «notables de la República», las «cien (o doscientas o cuatrocientas) familias», el «*Establishment*», etc. En todos los países existe una parte del poder político que estuvo o está mezclada con la «clase alta» de las «fortunas antiguas», generalmente banqueros o terratenientes, asociada al estatus tradicional; el término «*Establishment*» puede aplicarse tanto al caso británico como a la política exterior de los Estados Unidos. Los antiguos regímenes conservaron un considerable poder sobre la diplomacia, tal como explicamos en el capítulo 12.

Los teóricos de las clases argumentan que los antiguos regímenes se incorporaron como una fracción a la clase capitalista dominante que se encontraba en ascenso. Aunque los pluralistas han aplicado en contadas ocasiones su teoría a los regímenes no democráticos, las redes plurales de poder pueden impregnar también las monarquías absolutas. Bajo la presión de múltiples grupos de interés, los absolutistas concedieron derechos políticos y privilegios a grupos distintos a los capitalistas y la aristocracia terrateniente, esto es, a las iglesias y a los estados menores: municipalidades, cuerpos profesionales, gremios y corporaciones mercantiles, e incluso a los campesinos minifundistas. Como en el caso de los cortesanos, estos privilegios eran particularistas y su práctica política tendía a la intriga segmental y facciosa. Evaluaré en los siguientes capítulos estas concepciones pluralistas y de clase del antiguo régimen.

La segunda línea del cuadro 3.2 se refiere a las instituciones jurídicas y policiales, es decir, a los tribunales y los departamentos encargados de imponer la ley. En este periodo las fuerzas policiales se separaron de los ejércitos, pero no desempeñaron funciones significativas en cuanto al poder (véase capítulo 12). Los tribunales tenían mayor importancia. La ley desempeñaba una doble función: expresaba la voluntad del monarca y encarnaba la ley divina y el derecho consuetudinario. El monarca prevalecía sobre su tribunal supremo, pero a un nivel más bajo la justicia quedaba en manos de los notables locales y regionales, con frecuencia pertenecientes a iglesias, o se impartía en colaboración con ellos. Europa era una comunidad gobernada por la ley; ni siquiera los gobernantes absolutistas parecen

haberse atrevido a infringir la ley o la costumbre (Beales, 1987: 7). Este carácter híbrido hizo de la ley el núcleo de la lucha ideológica y confirió a los abogados una identidad corporativa irreductible tanto al Estado como a la sociedad civil. Los monarcas les concedieron privilegios corporativos, pretendiendo con ello disminuir su grado de inserción en la sociedad. La monarquía francesa llegó más lejos que ninguna otra al conceder patentes de nobleza con privilegios materiales (*noblesse de la robe*) y derechos a las asambleas corporativas (*parlements*). El fracaso de su alianza particularista durante la década de 1780 constituyó una condición previa y necesaria para el estallido de la revolución (véase capítulo 6). El éxito de esta estrategia de semiaislamiento por parte del poder despótico fue variado. En algunos Estados, los abogados y las cortes se aliaron con el despotismo (Austria y Prusia); en otros, con sus enemigos (fue el caso de las revoluciones francesa y americana). La modesta autonomía que en ocasiones disfrutaron las instituciones jurídicas no era autonomía del Estado.

Las clases y los grupos de interés emergentes del siglo XVIII depositaron gran parte de sus energías en la ley, con el objetivo de asegurarse el primero de los derechos ciudadanos del triunvirato que ha descrito T. H. Marshall: la ciudadanía civil. Exigían derechos jurídicos para los individuos, no para las colectividades. Los antiguos regímenes colaboraron porque ellos mismos comenzaban a ser capitalistas y estaban preparados para la ecuación de derechos personales y derecho de propiedad que C. B. MacPherson ha llamado «individualismo dominante». Por parte de los monarcas existía también la intención de desarrollar unas relaciones contractuales más universales con sus súbditos. Los Estados modernos comenzaban a encarnar lo que Weber llamó «dominación legal-racional» (Poggi, 1990: 28 a 30). En este periodo el enfrentamiento de clase respecto a los derechos civiles individuales fue escaso (al contrario que en los siglos anteriores). Los antiguos regímenes se dividieron en facciones por la presión de las clases emergentes. En ocasiones fueron los propios monarcas absolutistas quienes promulgaron los códigos civiles, cuyo lenguaje era universal aunque estuviera elaborado para proteger a los propietarios del género masculino (y en ocasiones, a las comunidades étnicas o religiosas predominantes). La ley constituía un poder en alza, que las clases bajas, las comunidades religiosas y las mujeres podrían utilizar para ampliar sus derechos. Durante cierto tiempo, las organizaciones jurídicas —en parte dentro y en parte fuera del Estado— ejercieron presiones muy radicales. A partir de 1850, sin embargo, se volvieron

conservadoras y se integraron en todas las combinaciones imaginables entre el antiguo régimen y las clases capitalistas, siempre que estuvieran institucionalizadas. La ciudadanía civil e individual acabó por constituir una barrera para el desarrollo de otros derechos políticos y colectivos de los ciudadanos.

La tercera línea del cuadro 3.2 se refiere a la administración civil. Aparte de las jurídicas y militares, los anteriores Estados no tuvieron muchas actividades administrativas, pero los del siglo XIX aumentaron considerablemente sus objetivos infraestructurales. Todos los Estados necesitan recursos fiscales y humanos (como subraya Levi, 1988), pero el despotismo requiere que la localización de sus ingresos y gastos permanezca aislada de la sociedad civil. Los dominios reales y las regalías (es decir, la propiedad estatal de los derechos para la explotación de minas y del derecho a la venta de monopolios económicos) permitían un cierto aislamiento de los ingresos, al igual que las antiguas formas institucionalizadas de imposición fiscal. La guerra era también prerrogativa estatal, y una victoria podía aumentar los ingresos gracias al botín y al empleo del ejército para la represión interior (aunque una derrota contribuía sin duda a menguar el poder). Pocos monarcas del siglo XVIII tuvieron que someter los presupuestos al parlamento. Sin embargo, la escalada de la guerra moderna hizo insuficientes los ingresos tradicionales. Los nuevos sistemas de impuestos y préstamos insertaron a las administraciones entre los contribuyentes y los acreedores, aunque las alianzas particularistas con los recaudadores de impuestos y los comerciantes mantuvieron a distancia el control de la clase dominante. Todo esto dio lugar a una balanza fiscal compleja y variada, como veremos en el capítulo 11.

Los funcionarios del Estado eran formalmente responsables ante el monarca, pero se veían obligados a administrar a través de los notables locales y regionales. En 1760 las administraciones se hallaban integradas en las relaciones locales de propiedad mediante prácticas que hoy consideramos corruptas. Como se verá en el capítulo 13, el proceso de «burocratización» produjo conflictos entre los monarcas, las clases dominantes y los grupos plurales de presión. El monarca pretendía aislar a los funcionarios como cuerpo dependiente, pero incluso esto implicaba una cierta inserción en la profesión jurídica y otras organizaciones de alto nivel educativo, y a través de ellas, en las clases y otras redes de poder. Las clases dominantes querían que la gestión de la burocracia estuviera en manos de gentes afines a ellas y rindiera cuentas ante los parlamentos que ellas controlaban. Los mo-

vimientos políticos de carácter más popular preferían que se gestionara según criterios universales de eficacia, con responsabilidad ante las asambleas democráticas. Se produjo entonces una moderada autonomía estatal a través de alianzas particularistas semiaisladas entre el ejecutivo y los hijos educados del antiguo régimen, ampliada después a los vástagos igualmente bien preparados de la clase media profesional. El control de la educación secundaria y superior resultó decisivo para estas estrategias semaislacionistas.

Todo ello contribuyó a desarrollar una institución distinta, de carácter «tecnócrata y burocrático» dentro del Estado, en principio responsable ante la cumbre del poder, pero en la realidad parcialmente aislada. Incluso los Estados que representaban los intereses de la sociedad o de su clase dominante estaban centralizados; no así las clases o las sociedades, cuyas posibilidades de supervisión eran limitadas. Dos monopolios tecnocráticos identificados por Weber (1978: II, 1417 y 1418) —la pericia técnica y los cauces administrativos de comunicación— permiten esa forma de aislamiento limitada y subrepticia que han destacado Skocpol y sus colaboradores. Las clases y otros grandes actores de poder no poseen una organización sistemática capaz de supervisar todas las funciones estatales, por eso necesitan reivindicar por otros medios la legislación que conviene a sus intereses, y una vez que lo han logrado se disuelven o dirigen sus intentos hacia otros fines, dejando a los servidores públicos una cómoda autonomía. Si los actores de poder no vuelven a organizarse, pueden aparecer autonomías ministeriales, probablemente mayores en los regímenes autoritarios que en los parlamentarios. Sin un gabinete gubernamental centralizado, responsable en última instancia ante el parlamento, los monarcas autoritarios ejercen un control sobre «sus» organizaciones tecnocrático-burocráticas muy inferior al de los ejecutivos constitucionales. Aunque menos autónomos, los regímenes constitucionales demuestran una mayor capacidad de cohesión que los autoritarios.

Así pues, la elite puede disfrutar de *numerosas* formas de autonomía que reducen la cohesión estatal. Aunque el crecimiento de la burocracia parezca aumentar la centralización, en realidad, contribuye a expandirla, porque entonces son miles, incluso millones, los servidores públicos que ejecutan la política. La tecnocracia y la burocracia, especializadas y múltiples por su propia naturaleza, acrecienta la complejidad del Estado, como subraya mi teoría del «embrollo». No cabe imaginar un análisis más errado de los actuales Estados que la

idea weberiana de burocracia monocrática. La administración del Estado casi nunca forma un único conjunto burocrático.

La cuarta línea del cuadro 3.2 se refiere a las asambleas legislativas y los partidos. Amplío aquí el término, como hizo Weber, a cualquier grupo de presión. El absolutismo no reconoció formalmente a los partidos; nunca (al contrario que en el siglo XX) hubo un intento de gobierno despótico a través de un solo partido. Sin embargo, los esfuerzos del ejecutivo por establecer alianzas particularistas integradas hicieron proliferar las facciones compuestas por camarillas cortesanas y parlamentarias, dedicadas a la intriga y al clientelismo solapado. Más formales y a menudo menos segmentales fueron los partidos realmente políticos, que aparecieron en el siglo XIX, constituyéndose en actores de la sociedad civil encargados de ejercer un cierto control sobre los ejecutivos estatales (y entre sí) a través de la «ciudadanía política» de Marshall. Así nacieron las asambleas legislativas y soberanas, elegidas por un voto secreto y más amplio y, en general, reconocidas por las constituciones. Según los pluralistas, este hecho confirma la democracia de los Estados occidentales modernos.

Pero la ciudadanía política no avanzó con la facilidad que se desprende del análisis de Marshall. Los ejecutivos autoritarios aplicaron la política de «divide y vencerás» a facciones y partidos mediante alianzas particularistas y segmentales con los grupos oligárquicos de notables. Las propias constituciones sancionaban formas de propiedad tendentes a impedir un mayor desarrollo de la ciudadanía. Las restricciones del sufragio en materia de género y de propiedad se mantuvieron hasta el final del periodo, y lo mismo puede decirse de las que afectaban a la soberanía de las asambleas. Las constituciones se «atrincheraron» para proteger los derechos de los partidos contratantes e impedir el cambio social. La constitución de los Estados Unidos, que mantuvo un Estado capitalista-liberal y federal a lo largo de dos siglos en condiciones sociales muy distintas, demostró una gran resistencia frente a los movimientos colectivos que reivindicaban derechos sociales para los ciudadanos. La constitución británica (no escrita) atrincheró la soberanía parlamentaria para preservar un Estado bipartidista, relativamente centralizado.

Los marxistas sostienen también que la dependencia del capitalismo limita a los partidos y las asambleas. Muchos de los actores políticos de este periodo creían en el carácter «natural» del derecho a la propiedad y la producción de mercancías. Raramente se consideraban explotados por ellos. Pero aunque hubieran querido oponerse, las

posibilidades habría sido escasas puesto que la acumulación capitalista les proporcionaba sus propios recursos (como destacan Offe y Ronge, 1982). Este punto es clave en la argumentación marxiana contra las posiciones elitistas y pluralistas. Ni las elites estatales ni los partidos anticapitalistas pueden acabar con las «limitaciones» que impone la necesidad de acumulación capitalista, argumentan. Por mi parte, ya he apuntado que los Estados disponen de una capacidad muy restringida de generar sus propios recursos fiscales independientes, y esto confirma la argumentación marxiana, pero la capitalista no fue la única cristalización del Estado moderno.

La política exterior

Las líneas quinta y sexta del cuadro 3.2 se refieren a las instituciones diplomáticas y militares. Como ya he polemizado antes (en varios ensayos reeditados en Mann, 1988; *cf.* Giddens, 1985), la mayor parte de las teorías del Estado han descuidado el estudio de los poderes diplomático y militar. Sin embargo, todo Estado habita en un mundo de Estados, donde oscila entre la paz y la guerra. Los Estados agrarios destinaban a la guerra, como mínimo, las tres cuartas partes de sus recursos, y su personal militar superaba al civil. El Estado constituía, en realidad, una máquina de guerra que la diplomacia se encargaba unas veces de poner en marcha y otras de parar, puesto que no faltaban las orientaciones hacia la conciliación y la paz. La política exterior era esencialmente dual.

Los diplomáticos europeos vivían en una «civilización con múltiples actores de poder»; no en un anárquico agujero negro (como lo conciben algunos realistas), sino en una comunidad normativa, de ideas y reglas compartidas, unas muy generales, otras comunes a clases y religiones específicas de carácter transnacional; algunas de ellas pacíficas, otras violentas. Gran parte de las redes de poder que operaban internacionalmente no lo hacía a través de los Estados. En el capítulo 2 he señalado que este hecho resulta especialmente cierto en el caso de las redes del poder económico e ideológico. Los Estados no pueden acaparar el intercambio de mensajes, personal o mercancías, ni interferir en exceso en los derechos de propiedad privada o en las redes comerciales. Los estadistas poseen unas identidades sociales, especialmente de clase y de religión, cuyas normas contribuyen también a definir ciertas concepciones del interés y la moralidad.

Así pues, la diplomacia y la geopolítica se hallaban sometidas a reglas. Algunas de ellas, comunes a todos los estadistas del mundo civilizado, definían lo que parecía razonable para los intereses nacionales. Otras añadían los planteamientos normativos compartidos unas veces por los aristócratas emparentados, otras por los católicos, los «europeos», los «occidentales» o incluso, en ciertas ocasiones, los «seres humanos». También la guerra se sometía a una reglamentación, «limitada» respecto a algunos y salvaje respecto a otros. La estabilidad de la civilización durante siglos confirma lo que muchos realistas consideran una habilidad humana de carácter universal para calcular racionalmente el «interés nacional». La diplomacia europea, en particular, disfrutaba de una experiencia milenaria respecto a dos situaciones geopolíticas concretas: el equilibrio entre varias (de dos a seis) grandes potencias, bastante igualadas, y los intentos de hegemonía por parte de alguna de ellas, contrarrestados siempre por las demás. Ese entendimiento común se ha conocido con el apelativo de «sistema westfaliano», por el tratado firmado en Westfalia en 1648, que puso fin a las guerras de religión (Rosecrance 1986: 72 a 85), pero encarna unas normas europeas mucho más antiguas.

Se trataba de una diplomacia de *alianzas*. Prácticamente todas las guerras enfrentaban a grupos de potencias aliadas, a no ser que una de las protagonistas consiguiera aislar diplomáticamente a su oponente. La diplomacia se encargaba de hacer amigos y aislar a los enemigos; en caso de guerra, las potencias se servían de los primeros para obligar al adversario a luchar en varios frentes al mismo tiempo. No cabe duda de que son tácticas muy realistas. Pero algunas alianzas descansaban también en normas compartidas o en lo que había sido hasta entonces una solidaridad de tipo religioso; para el periodo que nos ocupa, en la solidaridad entre los monarcas reaccionarios, en la del mundo «anglosajón» y en el rechazo cada vez mayor de los regímenes liberales a hacerse la guerra mutuamente (véanse capítulos 8 y 12).

Pero los siglos XVII y XVIII conocieron un aumento de la fascinación por la guerra. Europa se expandía por el este, hacia Asia; por el sudeste, hacia el mundo otomano; por el sur, hacia África, y, en definitiva, gracias a los colonos y a los enclaves navales, por todo el mundo. Hacia 1760 los costes de la guerra (en términos financieros y vidas humanas) habían aumentado, pero también lo habían hecho los beneficios. Las guerras coloniales no fueron, por lo común, de suma cero para las potencias europeas. Si Gran Bretaña o Francia luchaban en América del Norte, o Rusia y Austria lo hacían en los Balcanes, la

vencedora tomaba las presas selectas, y la perdedora, las inferiores, pero todas ganaban algo. El extraordinario provecho del colonialismo convenció a los europeos de la suerte de haber nacido cristianos y occidentales, en la civilización «blanca» del «progreso», y no en civilizaciones salvajes o decadentes.

Dentro de Europa, la agresión afectó a los grandes Estados. En 1500 existían unos doscientos Estados independientes en suelo europeo, que se habían reducido a veinte en 1900 (Tilly, 1990: 45 a 46). Los vencedores se apropiaron también de la historia. Cuando en 1900 los alemanes reflexionaban sobre su identidad nacional, pocos se consideraban ex ciudadanos de los treinta y ocho estados no menos alemanes derrotados desde 1815 por el reino de Prusia. Ellos eran alemanes vencedores, no perdedores, como los de Sajonia o Hesse. En la historia escrita por los vencedores, la agresión siempre aparece maquillada. Por otro lado, la guerra afectó de tal manera a la totalidad de los Estados que durante aquel largo siglo XIX los europeos la consideraron un hecho normal.

La omnipresencia de la guerra y de la diplomacia agresiva mezcló las nociones de interés material y provecho capitalista, fomentadas por una civilización con múltiples actores de poder, con las concepciones territoriales de identidad, comunidad y moral. Así prosperaron las seis economías políticas internacionales que hemos distinguido en el capítulo 2: *laissez-faire*, proteccionismo, mercantilismo e imperialismo económico, social y geopolítico. Todos ellas estrategias-derivas «normales».

Cinco principales actores organizados participaron en las decisiones diplomáticas:

1. *Las clases*. Vuelvo ahora sobre los tres tipos de organización de clase que hemos visto en el capítulo 2. Muchos de los primeros teóricos esperaban que el capitalismo moderno o la sociedad industrial acabarían dominados por las clases transnacionales y por otros grupos de interés definidos al margen de las fronteras nacionales. En realidad, existieron clases transnacionales agresivas; por ejemplo, la nobleza guerrera de la Edad Media europea o la burguesía revolucionaria francesa en su intento de exportar la revolución. Sin embargo, durante todo el periodo las clases transnacionales fueron fundamentalmente cosmopolitas e internacionalistas, por experiencia y por intereses; y conciliadoras, cuando no pacíficas, en su actividad diplomática. Era lo que los liberales esperaban de la clase capitalista; y los

socialistas, de la clase trabajadora. Los marxistas clásicos y los teóricos de la interdependencia subrayan este transnacionalismo pacífico.

Luego, hacia 1900, cuando el mundo parecía más violento, los teóricos destacaron lo contrario: las clases «nacionalistas» se definían a sí mismas por oposición a los habitantes de otros Estados. No porque les faltara pericia o interés por la diplomacia, sino por su naturaleza agresiva, expansionista y militarista. De esta perspectiva procede la teoría del imperialismo económico.

La diplomacia nacionalista y transnacional está supervisada por aquellos actores organizados de la sociedad civil que poseen experiencia e intereses diplomáticos. Por ejemplo, al acabar una guerra de grandes proporciones suele producirse un renacer del interés por parte de las clases dominantes de las potencias victoriosas. En el capítulo 8 referiré el intento de restauración del antiguo régimen por las potencias victoriosas de 1815. Domhoff (1990: 107 a 152) y Maier (1981) defienden que las fracciones de clase de la América capitalista configuraron un nuevo orden internacional al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero la diplomacia será mucho menos experta allí donde dominen las clases nacionales. Cuando éstas y otros grupos de interés se mantienen dentro de los límites de su Estado, muestran una escasa propensión diplomática. Debido a su obsesión por la política interior, las clases nacionales abandonan la diplomacia en manos de otros, lo que aumenta el «aislamiento» de los estadistas, o plantean políticas exteriores que se limitan a desplazar sus problemas interiores, lo que explica su concepción superficial, volátil y despegada de la realidad geopolítica.

En este volumen describiré el desarrollo entrelazado de las tres formas de organización de clase. Pero entre ellas, las clases nacionales emergen con una fuerza excepcional, transfiriendo a los otros cuatro actores organizados una gran capacidad de maniobra en materia de política exterior. Uno de ellos se encontraba arraigado sobre todo en la sociedad civil; dos, en el Estado; y el cuarto estaba inserto en la relación dinámica de ambos.

2. *Los grupos particularistas de presión.* En medio de la indiferencia nacional de las clases y de otros grandes actores de poder, pueden surgir numerosos partidos particularistas en el mundo de la política exterior. Algunos sectores económicos, ciertas industrias e incluso determinadas empresas privadas pueden tener intereses concretos en determinadas zonas y países. En su mayor parte son fracciones de clase, como ha establecido Domhoff en su estudio de una

fracción internacional del capitalismo moderno, localizada en bancos y grandes corporaciones con intereses globales. El «capitalismo caballeresco» del siglo XVIII y de principios del XIX constituyó probablemente una amplia fracción de clase de este tipo, muy influyente en la política exterior de Gran Bretaña (véase capítulo 8); y las tres alternativas de la política exterior alemana a partir de la década de 1890 (*Weltpolitik*, *Mitteleuropa* y liberalismo) procedían en parte de fracciones de clase (véase el capítulo 21). De forma semejante, Weber argumenta que el imperialismo económico —lo que él llama el «capitalismo de botín»— estaba respaldado por los capitalistas con intereses materiales dentro del Estado, lo que hoy llamamos un «complejo militar-industrial». Pero también abundaban los grupos de presión no económicos: étnicos, religiosos o lingüísticos, con vínculos en otros países.

La presión de esos grupos podía resultar más decisiva en este caso que en la política interior, donde generalmente soportaban la supervisión de las clases y de otros actores más amplios. También debieron de ser más erráticos en su actuación. Por ejemplo, en la reciente política exterior de los Estados Unidos las empresas mineras influyeron en la política practicada en Chile; los negros, en la de Suráfrica; los judíos, en la de Oriente Medio; etc. Pero la atención al conjunto de la política exterior no existe, es siempre parcial: ni los negros ni los judíos tienen el más mínimo interés en Chile, y la mayoría de las empresas mineras se interesan escasamente por la política en Oriente Medio. La política exterior dominada por los grupos de presión consta de una serie de cristalizaciones muy jaleadas aunque de corta duración, con escasas pautas de conjunto. Como señalaba Durkheim: «No existe nada menos constante que el interés».

3. *Los estadistas*. El realismo se concentra en los actores estatales implicados profesionalmente en la diplomacia internacional, que hablan en nombre del Estado o que (como sugiere su nombre) lo personifican y se agrupan en torno al ejecutivo. Los monarcas siempre disfrutaron de la prerrogativa de gestionar la política exterior, incluida la declaración de las guerras. El enjaulamiento de las clases dentro de los límites nacionales hizo posible la supervivencia de esa prerrogativa en la era democrática, aunque otros actores de poder redujeron el aislamiento. Las presiones sociales procedían a menudo de la propia identidad de los estadistas. Casi todos ellos procedían de la clase del antiguo régimen. Expresaban sus valores, sus normas, su racionalidad y algunas de sus solidaridades transnacionales. De nuevo, como en el

caso de la política interior, estamos más ante una alianza particularista que ante un Estado completamente aislado o controlado, y de nuevo, aquélla se produce entre el jefe del ejecutivo y el antiguo régimen. Ambos dirigen la actividad diplomática, establecen o rompen alianzas y amenazan con la guerra, que a veces llevan a cabo, prácticamente sin consultar con otros actores del poder. Como cosmopolitas y especialistas plurilingües, los estadistas eran «expertos» que reunían poderes burocráticos y tecnocráticos y dedicaban una atención especial al conjunto de la política exterior, la cual variaba conforme a que su aislamiento fuera o no completo.

Pero incluso los estadistas del antiguo régimen cambiaron con el surgimiento del Estado-nación. Como observó Weber, pasaron a representar tanto al Estado como a la *nación*. Su propio poder político dependía de su éxito en las relaciones entre las grandes potencias, tal como percibieron otros actores del poder que considero aquí (*cf.* Rosecrance, 1986: 86 a 88). Weber insiste en que los estadistas se volvieron más activos al hacerse imperialistas, e identificaron su propio poder político con el poder brutal de sus correspondientes Estados-nación, conscientes de que las victorias militares aumentarían su triunfo, pero también de que las derrotas podrían destruirlos (Collins, 1986). Esto, afirma Weber, vale también para los monarcas, para los primeros ministros nombrados por ellos y para los líderes elegidos. Se trata de una idea bastante pesimista de la nación, ya que, por el contrario, algunas naciones generan una concepción más pacífica y liberal de su misión en el mundo, y sus estadistas pueden defender ciertas posiciones, obtener prestigio y ganar elecciones precisamente por ejemplificar virtudes nacionales de carácter pacífico. En realidad Weber era un nacionalista alemán, cuya idea del prestigio político de una nación no podemos aceptar por completo.

4. *El ejército*. Observemos ahora la línea sexta del cuadro 3.2 sobre la monopolización estatal del poder militar organizado, una vez desaparecidas las levas feudales y los ejércitos privados. La actividad militar quedó centralizada bajo un alto mando sometido al control del ejecutivo. Nacieron entonces las técnicas modernas de aislamiento del personal militar mediante salarios, pensiones y empleos estatales en caso de retiro. Puesto que la mayoría de los cuerpos de oficiales del siglo XVIII y principios del XIX se reclutaron en el antiguo régimen (véanse los datos en el capítulo 12), estimularon una postura fuertemente militarizada en la política exterior, aunque carecían de interés por la diplomacia y se mostraban moderados respecto a las

posibilidades reales de la guerra; cautelosos a la hora de comenzarla y deseosos de «limitarla» mediante reglas.

Los altos mandos del siglo XIX se encontraban muy cercanos a los estadistas, ya que ambos procedían mayoritariamente del antiguo régimen. Pero también establecieron estrechos vínculos con la industria capitalista, en su calidad de principales consumidores de los productos de la Segunda Revolución Industrial. Aunque el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, bautizó este fenómeno con el nombre de «complejo militar-industrial», en realidad existía desde mucho antes. No obstante, los militares formaron también lo que puede definirse una casta aislada dentro del Estado. Disfrutaban de una fuerte confianza tecnocrática en sí mismos, y sus conocimientos se apartaron de las prácticas cotidianas de la sociedad, que perdió el control sobre los ejércitos. Éstos impusieron una displicina segmental a la tropa, ya que los cuadros inferiores comenzaban a reclutarse en antecedentes sociales marginales. Su influjo potencial sobre la sociedad creció tanto como la capacidad mortífera de las armas. El pensamiento estratégico del siglo XIX prefería ya el ataque a la defensa. Al deteriorarse la situación diplomática, los altos mandos llegaron a la conclusión de que lo mejor era movilizarse y atacar primero, como ocurrió durante los últimos días de julio de 1914. De modo que, aunque los militares se encontraban cerca del ejecutivo, del antiguo régimen y del capitalismo, el carácter profesional de su actividad formó una casta dentro del Estado, normalmente discreta, pero en ocasiones devastadora. La autonomía del poder militar sobrevivió al monopolio estatal de la violencia organizada.

5. *Los partidos nacionalistas* [1]. La falta de unas clases con fuertes intereses diplomáticos materiales dio origen en dos ocasiones a un nacionalismo de raigambre política, primero con ocasión de las guerras revolucionarias y napoleónicas, y después, a finales del siglo XIX. A medida que las clases, entre otros actores políticos, accedían a la ciudadanía política y civil, el Estado se convertía en «su» Estado-nación; una especie de «comunidad imaginada» en la que cifrar su lealtad. Comenzaron a percibir que su poder, su honor y sus humillaciones, incluso sus intereses materiales, adquirían un sentido; un

[1] De nuevo empleo el término «partidos» en el sentido weberiano de grupo organizado políticamente, cualquiera que sea su naturaleza. En general, los nacionalistas influyeron más a través de grupos de presión (ligas navales, ligas imperiales, etc.) que promocionando auténticos partidos políticos.

sentimiento que se encargaron de movilizar los grupos de presión, los militares y los estadistas; estos últimos, a su vez, presionados por los grupos y los partidos nacionalistas. Con todo, la agresividad del nacionalismo no encontró en este periodo el eco popular que suele atribuírsele. Contaba con sus propios núcleos portadores, que he llamado «nacionalistas estatistas», directamente implicados en las instituciones estatales, gracias al aumento de los empleados del Estado y a la socialización de las instituciones educativas estatales. El nacionalismo más blando, el de las clases que disfrutaban de la ciudadanía y el de los grupos de interés centralizadores: las clases medias y las comunidades religiosas, lingüísticas y étnicas dominantes, continuó expandiéndose durante el siglo XX, con la ampliación de la ciudadanía a la clase trabajadora, las minorías y las mujeres.

En determinados momentos, el crecimiento de la identidad nacional y de los núcleos portadores del nacionalismo estatista confirió a la diplomacia un tinte apasionado, popular y nacional. Pero le faltaba esa racionalidad concreta de intereses que persiguen las clases y los grupos particularistas de presión, y carecía también de los planteamientos normativamente arraigados propios de los estadistas aislados del antiguo régimen. Todas las teorías referidas a las clases, así como las pluralistas y las realistas, afirman que la política exterior venía dictada por intereses materiales colectivos. Sin embargo, pudo ocurrir lo contrario, que éstos vinieran impuestos por el nacionalismo político. Cada vez que otra potencia parecía querer menoscabar el «honor nacional», se producía una agresión o una defensa firme por parte de un nacionalismo popular, superficial y volátil, aunque no por ello menos apasionado. El caso extremo, quizás, se produce cuando la nación emprende una auténtica cruzada internacional, por ejemplo, para defender la cristiandad o la raza aria, expandir la libertad y la fraternidad por el mundo o combatir el comunismo. Pero en este periodo sólo la Revolución Francesa fue capaz de suscitar éstos sentimientos extremados.

El conjunto de estos cinco actores organizados determinó la política exterior durante el largo siglo XIX, y, en gran parte, continúa haciéndolo hoy. Sus interrelaciones fueron complejas. Dado que el abanico de sus intereses y preocupaciones resultaba muy amplio, se produjo entre ellos un consenso relativamente poco sistémico y un gran número de conflictos. A menos que hubiera por medio fuertes fracciones de clase o una cruzada moral de carácter nacional, la política exterior quedó en manos de los estadistas, con esporádicas y

erráticas alianzas de ida y vuelta en caso de crisis o de guerra. No parece que la situación pudiera conducir a una política exterior sistémica, como afirman el elitismo, el realismo, el pluralismo y el marxismo.

He identificado hasta aquí vários actores organizados de la política interior y exterior. Las instituciones de la política nacional diferían a menudo de las de la política exterior; además, no siempre coincidían con las de otros países, lo que a menudo provocaba problemas de entendimiento entre los distintos regímenes. Un cálculo realista de los intereses de los distintos Estados requiere un profundo conocimiento mutuo de esas instituciones, especialmente durante las inconstantes crisis diplomáticas. Como tendremos ocasión de comprobar (véase en especial el capítulo 21), ese conocimiento no se dio durante el proceso que condujo a la Gran Guerra. Resulta evidente que ni el Estado ni la sociedad civil fueron entidades autónomas o cohesivas. Los poderes despóticos no proceden tanto de una elite centralizada como de las alianzas particularistas y semiaisladas entre actores organizados dentro de los Estados, de las sociedades civiles nacionales o de la civilización internacional. El personal del Estado ejerce un poder autónomo gracias a la centralidad que sólo él posee. Monarcas, burócratas y altos mandos emergieron como actores del poder distributivo, y mucho más raramente como elites estatales singulares y cohesivas. Pero las instituciones del poder central disfrutan de escaso poder distributivo, a no ser que se encuentren reforzadas por distritos electorales de la sociedad civil, que canalizan hacia ellas recursos fiscales y humanos. La elite estatal singular, ese personaje decisivo del auténtico elitismo, apenas figurará en este volumen. Lejos de ser singulares y centralizados, los Estados modernos constituyen redes polimorfas de poder, atrincheradas entre el centro y los territorios.

Un análisis funcional: el modelo polimorfo de cristalización

En química se llama polimorfa aquella sustancia que cristaliza de dos o más formas distintas, que generalmente pertenecen a diferentes sistemas. El término se adapta a las formas en que cristaliza el Estado, como centro —diferente en cada caso— de numerosas redes de poder. Los Estados poseen múltiples instituciones encargadas de un gran número de tareas, y movilizan distritos electorales tanto territoriales como geopolíticos. Como observa Rosenau (1966) y prueban

formalmente Laumann y Knoke (1987), las distintas «áreas de cuestiones» o «dominios de política» movilizan distintos electorados. Así pues, los Estados son completamente polimorfos. Quizás, como ha sostenido Abrams, al describir un Estado concreto deberíamos abandonar el propio término «Estado». Pero al cambiar la aproximación institucional por otra funcional, puede que estemos simplificando instituciones que son múltiples, para subrayar las que posee este o aquel Estado concreto. Este planteamiento podría impregnar múltiples instituciones y electorados y convertir a los Estados en cristalizaciones generales más simples.

Durante este periodo los Estados cristalizaron, fundamentalmente y de forma duradera, como «capitalistas», «dinásticos», «democracias de partidos», «militaristas», «confederales», «luteranos», etc. Cuando más adelante determine una o varias cristalizaciones fundamentales, emplearé el término «cristalizaciones de nivel superior». Marxistas, pluralistas y realistas han afirmado que los Estados modernos cristalizan en última instancia como capitalistas, democracias de partidos y perseguidores de seguridad, respectivamente. Significa esto que, en su opinión, las relaciones entre las distintas instituciones responden a unas pautas y unas jerarquías, pero mi teoría del «embrollo» lo desmiente explícitamente. El pluralismo, por su parte, añade que la democracia de partidos constituye una vía de compromiso sistemático entre otras muchas cristalizaciones. Marxismo, realismo y pluralismo defienden fundamentalmente un Estado singular, cohesivo, capaz de tomar decisiones «últimas» entre las distintas cristalizaciones. Existen dos métodos para determinar si ciertas cristalizaciones o compromisos entre ellas son en definitiva decisivos; se trata de la comprobación de la «jerarquía» y la «ultimidad». El primer método es directo; el segundo, indirecto.

El método directo confirma que, por ejemplo, el Estado cristaliza en última instancia como X y no como Y; por ejemplo, como capitalista y no como proletario. Puesto que X e Y son diametralmente opuestos, se encuentran destinados a colisionar frontalmente. En general, sabemos que X (el capitalismo) triunfó sobre Y, si no invariablemente, sí en «última instancia», al evitar de modo sistemático la revolución proletaria e imponer limitaciones a la acción de los partidos proletarios. Ahora bien, ¿podemos aplicar esta prueba con carácter general?

Steinmetz ha intentado someter a esta prueba a las clases rivales y

las teorías elitistas («auténticas») de la política social de la Alemania imperial. Según él, para apoyar la teoría elitista habría que identificar:

> aquellas políticas que desafían directamente los intereses de la clase dominante... La teoría que se centra en el Estado se apoya en los casos de «*no correspondencia*», es decir, en ejemplos en los que los empleados del Estado o los políticos se oponen directamente a los intereses de la clase económicamente dominante [1990: 244].

Steinmetz sostiene que la teoría elitista no satisface la prueba en el caso de la Alemania imperial, porque falta la «no correspondencia». En efecto, la política de bienestar social agradaba a muchos capitalistas y estaba impregnada de los principios de su propia racionalidad, por eso hubo «correspondencia» entre el capitalismo y la política de bienestar social. En el capítulo 14 mostraré mi acuerdo básico con las conclusiones empíricas de Steinmetz. Sin embargo, no comparto su metodología para resolver la naturaleza «última» del Estado. El problema surge cuando nos planteamos la posibilidad de aplicar la prueba de la no correspondencia, del desafío frontal y de la consiguiente síntesis dialéctica victoria-derrota al conjunto del Estado. Esto implica un sistema social que establece limitaciones holísticas a su Estado. El modelo de clase marxiano lo percibe así al ver en la lucha de clases una totalidad dialéctica que estructura sistemáticamente el conjunto de la sociedad y del Estado. *Siempre que* las disputas teóricas se mantengan en esos términos dialécticos, podremos juzgarlas.

El conflicto frontal entre las clases se puede plantear en términos dialécticos, pero los Estados no son feudales y capitalistas, o capitalistas y socialistas, o monárquicos y democráticos. Son lo uno o lo otro, o bien una forma de compromiso entre ellos. En este periodo se estructuraron según la forma capitalista, no según el feudalismo o el socialismo. Podemos especificar también las condiciones en las que el conflicto sistémico puede romper las «limitaciones» que normalmente impone el capitalismo a los Estados. Rueschemeyer y Evans (1985: 64) las ordenan (en orden ascendente según la amenaza contra el capital) en función de la división de la clase capitalista: en unos casos la amenaza que llega de abajo induce a la clase capitalista a entregar su poder al régimen político (y éste actúa con autonomía para mediar en el conflicto de clase); en otros, las clases subordinadas toman el poder en la sociedad civil para capturar el Estado. La lucha entre el capital y los trabajadores ha sido sistémica en todas las nacio-

nes modernas, pero los países sólo funcionan bien cuando producen, y para ello logran solucionar con eficacia la lucha de clases. El Estado necesita resolver, de una u otra forma, el conflicto entre el capital y el trabajo. Ambos se han enfrentado sin tregua durante más de un siglo en todos los sectores estatales. Podemos analizar los repetidos enfrentamientos (X contra Y) y las «no correspondencias», ver quién gana, y llegar a una u otra conclusión sistemática.

Sin embargo, cabe preguntarse si este modelo marxiano resulta aplicable a todo tipo de política. El problema, considerado en sí mismo, reside en que cada cristalización de una función es sistémica y limitada, en el sentido de que ha de estar establemente institucionalizada. De igual modo que un Estado puede ser capitalista o socialista o encontrar un compromiso relativamente estable entre ambas cosas, puede ser también laico, católico, protestante, islámico, etc., o establecer un compromiso institucionalizado en materia religiosa. Ha de dividir también de modo estable la autoridad política entre un centro nacional y las regiones y localidades; ha de institucionalizar las relaciones entre los hombres y las mujeres; y, por último, ha de gestionar con eficacia la justicia, la administración, la defensa militar y la seguridad diplomática. Cada una de estas cristalizaciones es intrínsecamente sistémica y presenta desafíos frontales y no correspondencias que los países occidentales contemporáneos han conseguido institucionalizar en buena medida.

Pero las relaciones *entre* las cristalizaciones funcionales no presentan ese carácter sistémico. Las relativas a la clase o a la religión, por ejemplo, difieren bastante, y a menudo entran en conflicto. Sin embargo, éste no acostumbra a ser sistémico, ni sus enfrentamientos suelen producirse en una dialéctica frontal. Los Estados no tienden a realizar elecciones «últimas» entre ellas. Tomemos como ejemplo la Italia actual: un Estado capitalista, democrático *y* católico, que conserva, entre otras cristalizaciones, su estructura patriarcal. Si Steinmetz piensa que la racionalidad capitalista puede encarnarse en una política de bienestar social es porque esa política económica aspira a reducir la lucha de clases (aunque se olvida de estudiar si es, además, patriarcal; como lo es, en realidad).

No debe sorprendernos, pues, que respecto a ese caballo de batalla que representa la teoría del Estado moderno y a tantas controversias suscitadas respecto al Estado asistencial del New Deal americano o las políticas agrícolas, la mayoría de los autores hayan destacado las cristalizaciones de clase. Tales políticas son ante todo económicas, y

se estructuran pensando en las clases o los sectores económicos. Sin embargo, la política de bienestar social estadounidense tiene también algo de patriarcal (aunque no lo explicite) y con frecuencia ha sido también racista. ¿Cómo se relacionan entre sí estas tres cristalizaciones relativas a la política asistencial? Algunos de los mejores sociólogos y científicos sociales estadounidenses se han esforzado por resolver estos entrelazamientos de clase, raza y género, sin llegar a un acuerdo en las conclusiones. Steinmetz busca correspondencias y no correspondencias entre las distintas áreas políticas de la Alemania imperial; por ejemplo, entre los intereses de clase, la *Kulturkampf* y la diplomacia de Bismarck, pero, en realidad, eran cosas distintas que se entrelazaban pero no se enfrentaban a muerte. Lo mismo podríamos decir de las áreas políticas estadounidenses relativas a la clase, a la cuestión federal y a la diplomacia.

Pero incluso sin confrontación directa, los Estados tienen que establecer prioridades y dar a cada cristalización su importancia. Para ello existen cuatro mecanismos:

1. *Constituciones y códigos de leyes* que especifican los derechos y las obligaciones. Las leyes civil y criminal establecen prohibiciones y derechos civiles y políticos, pero no indican con exactitud cómo se asigna el poder. Se supone que las constituciones localizan dónde reside la soberanía, pero no indican cómo han de establecerse sus prioridades. A este respecto, Anderson y Anderson (1967: 26 a 82) han demostrado que las constituciones de los siglos XVIII y XIX muestran una gran ambigüedad porque encarnan una lucha inacabada contra los poderes ejecutivos.

2. *Presupuestos* que establecen prioridades fiscales. Puesto que la actividad del Estado cuesta dinero, sus presupuestos revelan dónde residen fundamentalmente el poder y las limitaciones. La elección entre un sistema de impuestos regresivo o progresivo, o el gasto en «cañones o mantequilla» puede traslucir un conflicto frontal y revelar la distribución sistémica del poder. Tales son los supuestos de mi análisis de las finanzas estatales. Pero éstas también tienen sus características propias. El coste de las funciones no puede equipararse únicamente por su importancia. La diplomacia no requiere mucho dinero, pero sus consecuencias pueden ser de vida o muerte. En cualquier caso, los Estados no presentaron presupuestos unificados durante la mayor parte de este periodo, y cuando lo hicieron, algunas partidas

aparecen constitucionalmente atrincheradas, de modo que resulta imposible utilizarlas para su reasignación.

3. *Las mayorías políticas democráticas* que podrían indicar la distribución jerárquica del poder, tal como afirman los pluralistas. La política de los partidos mayoritarios puede indicar prioridades fundamentales. Pero las intrigas de tales formaciones evitan, por lo general, el enfrentamiento total y la toma de decisiones últimas. Los partidos gobernantes rebajan sus exigencias de principio adoptando compromisos pragmáticos e intercambiando favores políticos. Los regímenes no acostumbran a elegir entre cañones o mantequilla; quieren ambas cosas, y para ello establecen distintas combinaciones de acuerdo con las cambiantes cristalizaciones políticas. Pero en el periodo que tratamos, esas mayorías son indicadores muy imperfectos. Ni uno solo de los principales Estados permitía el voto femenino; y otros discriminaban el masculino por categorías. ¿Carecían estos excluidos de poder político? En algunos países el acceso al monarca era tan importante como una mayoría parlamentaria. El Estado se hallaba dividido en múltiples compartimentos. Los parlamentos no llevaban un control ordenado de las prácticas militares o diplomáticas; las clases y otros grupos de interés presionaban en la corte, el ejército, las administraciones y en el propio parlamento. Éste no era soberano en la práctica; en algunos casos no lo era siquiera constitucionalmente.

4. *La burocracia monocrática* podía asignar racionalmente prioridades dentro de la administración. Aunque Weber exageró la autonomía de los burócratas, éstos pueden organizarse de modo racional a través de la jerarquía y las funciones, con prioridades determinadas autoritariamente por el jefe del ejecutivo. En nuestro periodo se consolidó la burocratización del Estado, no obstante, como hemos visto en el capítulo 13, fue incompleta, especialmente en las áreas administrativas más cercanas a la cumbre. Las monarquías autoritarias aplicaron una política de «divide y vencerás» para eludir la capacidad cohesiva de la burocracia; los regímenes parlamentarios se encargaron de introducir en los altos cargos administrativos a políticos leales. Las administraciones no vivían aisladas por completo; por el contrario, encarnaban las principales cristalizaciones del resto del Estado.

Naturalmente, unos Estados presentan mayor coherencia que otros, lo que se aprecia por la claridad con que localizan la toma de decisiones últimas, es decir, por su grado de *soberanía*. Tendremos ocasión de comprobar que durante el siglo XVIII Gran Bretaña y Pru-

sia localizaron la soberanía con mayor claridad que Francia o Austria en determinados conjuntos de relaciones fundamentales (las que afectaban a los monarcas y el Parlamento o a los altos funcionarios), y que en 1914 las democracias de partidos también lo hacían más claramente que las monarquías autoritarias. En términos comparativos, los últimos casos comportaban un mayor grado de «embrollo» que los primeros. Sin embargo, aunque el Estado moderno intentó ser más coherente en la localización de los cuatro mecanismos que acabamos de examinar, lo hizo como respuesta a la asunción de otras cristalizaciones funcionales distintas (como afirmaré en el capítulo 14). De forma que esa coherencia fue entonces (como ahora) incompleta. Por mi parte, sostengo que la coherencia estatal disminuyó probablemente a lo largo del periodo, de ahí la imposibilidad de asignar sistemáticamente las prioridades.

No existe ninguna medida universal del poder político comparable a lo que representa, por ejemplo, el dinero para el poder económico o la concentración de fuerza física para el poder militar. No hay, pues, una medición definitiva del poder estatal último. Para que las distintas cristalizaciones produjeran un Estado singular y sistémico se requeriría no sólo un extraordinario talento organizativo por parte de los administradores, sino también un no menos extraordinario interés político por parte de los actores de la sociedad civil. ¿Por qué habrían de preocuparse por la actividad habitual de la diplomacia la clase capitalista o la trabajadora o la iglesia católica? O, ¿por qué iban a interesarse por la legislación sobre la seguridad en las fábricas los partidos nacionalistas o el ejército? Los Estados no establecen sus prioridades últimas entre funciones tales como la regulación de las clases, la centralización del gobierno o la diplomacia. Los actores políticamente poderosos realizan la mayoría de las numerosas funciones estatales con un sentido pragmático, según la tradición y las presiones del momento, y reaccionan con igual pragmatismo y precipitación a las crisis que los afectan a todos.

Por tal razón, las cristalizaciones políticas no acostumbran a enfrentarse entre sí dialécticamente. No cabe aplicar de modo rutinario una prueba directa como, por ejemplo, «quién gana», porque los Estados no suelen encarnar *más* a X *que* a Y. Los que trato aquí fueron capitalistas, pero también patriarcales; fueron grandes potencias, y todos, excepto Austria, llegaron a ser Estados-nación (pero también católicos, federales, relativamente militaristas, etc.). La lógica del capitalismo no requiere un género, una gran potencia o una lógica na-

cional concretos, y viceversa. Estas X y estas Y no chocan frontalmente, se entrelazan o se deslizan unas alrededor de las otras, y las soluciones de las crisis que afectan a cada una de ellas suelen tener consecuencias, a veces involuntarias, para las demás. Incluso las cristalizaciones que en principio se oponen frontalmente no se perciben así en la práctica, porque aparecen entrelazadas con otras cristalizaciones. A mi parecer, las tres condiciones de Rueschemeyer y Evans (que acabo de comentar), según las cuales la clase trabajadora podría triunfar sobre el capital, son reductoras en exceso. En mi opinión, siempre que se ha producido el enfrentamiento entre las clases opuestas de Marx, la dominante —que cuenta con los grandes recursos del poder social (especialmente, el Estado y el ejército)— ha salido victoriosa. Las clases subordinadas han conocido los mayores éxitos cuando su amenaza coincidía con otras, bien con la de otras clases, bien, sobre todo, con la de facciones religiosas o militares, políticamente descentralizadoras, o bien con la de potencias extranjeras. En tales circunstancias, los regímenes políticos y las clases dominantes pueden llegar a perder su capacidad de concentración sobre el enemigo en potencia y verse superadas por su aparición intersticial. Así ocurrió durante la Revolución Francesa (véase el capítulo 6), pero no durante el cartismo (véase el capítulo 15).

Naturalmente, las distintas cristalizaciones pueden dominar distintas instituciones estatales. Un Estado perfectamente burocratizado, con una división racional del trabajo, podría dominar la situación, pero tal cosa ni existía en el siglo XIX ni existe en la actualidad. Por el contrario, lo usual es que la mano izquierda del Estado no sepa lo que hace la derecha. Los aislados diplomáticos estadounidenses (intermitentemente acosados por grupos de presión) se ocupaban de las relaciones con Irak, cuando, de repente, en agosto de 1990, las consecuencias de sus actos (y las de los de otros países) recabaron toda la atención del presidente. Hace algunos años, los mandos de los submarinos nucleares de la OTAN llevaban consigo órdenes selladas para abrir en caso de que las comunicaciones con los cuarteles generales quedaran interrumpidas. Se cree que tales órdenes rezaban: «Lancen los misiles contra los objetivos enemigos designados aquí». En este caso, el meñique de la mano derecha (el ejército) de los Estados puede actuar automáticamente y decidir el destino del Estado, del capitalismo y quizás del mundo entero. El Estado no siempre sabe lo que hacen sus miembros.

La prueba directa no sirve, ¿cabría aplicar la segunda, de tipo in-

directo? Las cristalizaciones del Estado no siempre chocan frontalmente; pero, ¿existen efectos de una o más de ellas tan destructivos para las restantes que puedan llegar a limitar y determinar el conjunto, a través, quizás, de consecuencias tan imprevistas como importantes? ¿Hubo al menos una «cristalización de nivel superior»?

Las cristalizaciones estatales de nivel superior

El presente volumen ofrece algunas respuestas convenientemente matizadas a las preguntas que acabamos de plantear. Cada tipo de Estado cristaliza en formas distintas. Aunque sin duda es así, conviene proceder con cautela; para este periodo he identificado seis cristalizaciones de nivel superior en los Estados occidentales. Las cinco primeras son la capitalista, la ideológico-moral, la militarista y varias posiciones variables de un continuo representativo que va desde la monarquía autocrática a la democracia de partidos, y de un continuo «nacional» que va del Estado-nación centralizado al sistema confederal. Establezco también varias cristalizaciones ideológico-morales, varias religiosas (por ejemplo, católica y luterana) y otras que mezclan lo laico y lo religioso. No obstante, éstas pierden importancia a lo largo del siglo (aunque no desaparecen por completo), a medida que las religiones y las ideologías comienzan a identificarse con las cuestiones nacional y representantiva. La cristalización ideológico-moral aparece con mayor fuerza cuando está entrelazada con el sexto nivel superior, que, por desgracia, sólo trataré de pasada en este volumen: el Estado patriarcal, cuya importancia para vincular las relaciones intensivas de poder a las extensivas tendremos ocasión de comprobar. En el nivel extensivo, subrayo por lo general cuatro cristalizaciones de nivel superior: capitalista, militarista, representativa y nacional.

Cada una de estas cuatro cristalizaciones produce su propio conflicto dialéctico frontal, que constituye, combinado con otros, la sustancia política del periodo. En realidad, algunos Estados fueron católicos; otros, protestantes; otros, laicos; potencias navales o terrestres, monolingües o plurilingües; con las más variadas fórmulas burocráticas o del antiguo régimen; y todos ellos generaron sus propias cristalizaciones. No obstante, a través de esta diversidad, percibo cuatro grandes vías: una hacia la maduración de las relaciones económicas del capitalismo; otra hacia una representatividad mayor; otra hacia la

centralización nacional; y una última hacia el Estado militarista profesionalizado y burocratizado. Los Estados occidentales modernos experimentaron cambios lingüísticos y religiosos, entre otros muchos, pero en todos ellos se consolidaron el capitalismo (con mayores variaciones), el militarismo y la representatividad nacional gracias al desarrollo general de las fuentes del poder social. Si no hubieran modernizado las cuatro, no habrían sobrevivido.

Que los Estados occidentales eran capitalistas resulta tan evidente que no merece otros comentarios. En consecuencia, defendieron el derecho a la propiedad privada y la acumulación de capital. Tradicionalmente los Estados europeos no habían tenido una gran capacidad de intervención en las propiedades de sus súbditos. En la época en que las formas capitalistas de propiedad y de mercado se hallaban ya institucionalizadas en todos los lugares (1760 para Gran Bretaña, 1860 para el resto de Occidente), la práctica totalidad de los actores políticos habían interiorizado su lógica. A medida que prosperaban el comercio y la industria, casi todos los países se asemejaban en esta cristalización, si bien con toda la gama de adjetivos: capitalismo liberal, capitalismo industrial, etc. Las economías nacionales (y regionales) también diferían. Gran Bretaña constituía la única sociedad auténticamente industrial del momento; Alemania y Austria tuvieron un desarrollo tardío característico. Estas variantes de las cristalizaciones capitalistas tuvieron su importancia, aunque, como veremos, no tanta como suelen adjudicarles la mayoría de las teorías economicistas de la ciencia social moderna. Marx y Engels escribieron en el *Manifiesto comunista*: «El ejecutivo del Estado moderno no es más que una comisión encargada de gestionar los negocios de la burguesía» (1968: 37). Si prescindimos del «no más que», la afirmación es correcta. Los Estados occidentales fueron y son capitalistas; una cristalización hasta cierto punto no amenazada por desafíos frontales. En este periodo, encontraremos pocos conflictos frontales que provengan de tendencias o movimientos partidarios del feudalismo. De hecho, el feudalismo tendió a transformarse en capitalismo con un grado de conflicto mucho menor del que parece haber imaginado Marx. La oposición mayor la encontramos del lado socialista, aunque antes de 1914 no había representado una amenaza grave. La cristalización capitalista conduce nuestra atención hacia el conflicto de clase, pero también hacia la hegemonía capitalista del periodo.

Sin embargo, los Estados occidentales ni fueron ni son *únicamente* capitalistas. Los pluralistas añaden muchas otras cristalizacio-

nes. A las clases, suman los actores segmentales de poder, algunos económicos, otros no: mundo urbano contra mundo rural, conflictos interregionales, católicos contra protestantes y ambos contra los laicos, conflictos lingüísticos y étnicos, politización de los conflictos de género, etc. Todas estas posiciones formaron partidos que unas veces reforzaron a una u otra clase, y otras fueron interclasistas. Existieron también grupos de presión de carácter más particularista. Una industria, una empresa, una profesión, una secta, incluso un salón intelectual, podían dominar un partido para mantener el equilibrio político o disfrutar de buenos cauces de comunicación para la toma de decisiones, especialmente en materia de política exterior. Cada Estado, incluso cada gobierno local o regional, podía ser único. Ahora bien, ¿estas adiciones pluralistas se limitan a sumar matices o cambian los parámetros del poder político? Las comunidades religiosas, los partidos regionales, los salones podían introducir ciertas diferencias, pero, ¿eran estos Estados esencialmente capitalistas?

Las respuestas concretas diferirán según el tiempo y el espacio. En Occidente, durante este periodo, las redes de poder cristalizaron también en torno a otras cuestiones de nivel superior. Dos de ellas afectaban a la ciudadanía: *quién* la disfrutaba y *dónde* se localizaba. Llamaré a estas cuestiones «representativa» y «nacional», respectivamente.

La representatividad gira alrededor de las dos condiciones democráticas previas de Dahl: contestación y participación. La primera comenzó como una lucha contra el despotismo monárquico, y generó partidos «integrados» y «excluidos», partidos «de la corte» y partidos «del país». La contestación apareció con toda su fuerza cuando los partidos alternativos formaron gobiernos soberanos tras ganar unas elecciones libres y limpias, garantizadas primero por la constitución estadounidense y establecidas de hecho en Gran Bretaña durante las décadas posteriores. Participación quería decir posibilidad de votar y de ejercer cargos públicos, así como de disfrutar del derecho a recibir educación del Estado para todas las clases, etnias y comunidades religiosas y lingüísticas. Muy al final del periodo, llegó a plantearse incluso la cuestión del sufragio femenino.

Algunos regímenes cedieron más a la contestación; otros, a la participación. Durante el largo siglo XIX, las concesiones a la primera fueron mucho más significativas. Un régimen en el que un partido de la oposición puede alcanzar el gobierno soberano implica un grado de apertura inexistente en un régimen de sufragio universal mascu-

lino cuyos partidos no pueden aspirar a la soberanía. Así lo reconocían los propios monarcas autoritarios, mucho más proclives a conceder el sufragio universal masculino que la soberanía parlamentaria, aunque ésta les permitía el ejercicio de una gran parte de sus poderes despóticos (más cierto aún en el caso de los regímenes dictatoriales del siglo XX). De este modo, aunque Gran Bretaña contó con un sufragio más restringido que el de Prusia-Alemania durante la segunda mitad del periodo, llamaré democracia de partidos a la primera, pero no a la segunda. El parlamento británico era soberano; el *Reichstag* no lo era. Veremos la diferencia fundamental de sus respectivas políticas: la británica concernía a los partidos; la alemana, a los partidos *y* la monarquía.

Así pues, la representación puede situarse durante este periodo a lo largo de un continuo que va de la monarquía despótica a la democracia plena, y que recorrieron de forma desigual los Estados que estudiamos[2]. Gran Bretaña primero y los Estados Unidos después encabezaron la marcha, Francia la siguió dibujando una línea quebrada. En 1880 los tres Estados «liberales» (aparte de América del Sur) disfrutaban de elecciones libres y abiertas y de legislaturas soberanas (aunque había entre ellos diferencias respecto al derecho al voto). Puesto que todos ellos se agrupan en el continuo representativo, acostumbro a compararlos con las dos monarquías que sobrevivieron, Austria y Prusia-Alemania, donde no existía la soberanía parlamentaria y donde los monarcas formaban sus propios ministerios. No obstante, cabe distinguir en la época varios grados de despotismo: la «autocracia» rusa poseía mayor poder y autonomía que el régimen dinástico de Austria, que, a su vez, disfrutaba de mayor autonomía (no de más poder) que la monarquía «semiautoritaria» de Alemania. Pero en todos los países, la política del momento estuvo dominada por los conflictos entre los partidarios de una mayor democracia de partidos y sus oponentes.

Con todo, la controversia nacional se produjo también sobre *dónde* participar. ¿Hasta qué punto debía ser el Estado uniforme, centralizado y «nacional»? El enfrentamiento entre la centralización

[2] Durante el periodo se produjo en una sola dimensión, ya que todos estos países pasaron de una situación a otra sin solución de continuidad. Mayor complejidad presenta el siglo XX, en el que la mayor parte de los regímenes despóticos no fueron monarquías, sino partidos dictatoriales o regímenes militares, cada uno de ellos con sus propias características «no democráticas», distintas a las de las monarquías.

y el confederalismo produjo una guerra civil en los Estados Unidos y otros conflictos en Alemania, Italia y los territorios de los Habsburgo, y estructuró de forma persistente la práctica política. El confederalismo triunfó en los Estados Unidos. Los partidos políticos alemanes formaban un conjunto de gran complejidad: algunos se basaban en la clase, otros eran explícitamente religiosos (entre los que destaca el centro católico); otros lo eran implícitamente (los partidos protestantes, tales como los conservadores, los nacional-liberales, y los socialistas, ostensiblemente laicos); otros tuvieron un carácter étnico (daneses, polacos, alsacianos); otros aún, regional (el partido de los campesinos bávaros, los güelfos de Hannóver). Pero la mayoría giraron confusamente en torno a la cuestión «nacional». Los partidos católicos, los étnicos y los del sur de Alemania defendían la descentralización frente a los protestantes centralistas del norte.

La Cámara de los Comunes del siglo XIX empleó más tiempo en discusiones religiosas que en cuestiones económicas o de clase. Pero la religión no sólo tenía una importancia intrínseca; en realidad, expresaba la discusión sobre el carácter más o menos uniforme, descentralizado y nacional de Gran Bretaña. ¿Debía ser también «oficial» la iglesia anglicana en Gales, Escocia e Irlanda? En cuanto a la educación y la cobertura social, ¿debía ser uniforme y planificada desde el Estado, religiosa o laica? Los católicos más activos se opusieron a la centralización en todos los Estados, porque la Iglesia conservó su carácter transnacional al tiempo que consolidaba su organización local y regional.

Las luchas entre los partidarios de la centralización y los de los poderes locales y regionales desgarró los Estados. La razón estriba en que fueron dos las vías históricas de la lucha contra el despotismo: la vía de la representatividad democrática centralizada y la de la reducción de los poderes centrales del Estado, con el consiguiente impulso de la democracia plural, local y regional de partidos. El masivo crecimiento de los poderes estructurales del Estado durante el siglo XIX añadió dificultad a la cuestión. ¿Dónde localizar esos poderes? Las minorías religiosas, étnicas, lingüísticas y regionales, por ejemplo, apoyaron siempre una descentralización «antinacional».

Sin embargo, estas cuestiones vitales para las relaciones entre el gobierno central y el local han sido ignoradas por la mayor parte de las teorías del Estado (no por Rokkan, 1970: 72 a 144). Los pluralistas y los teóricos de las clases emplean el mismo modelo para analizar el gobierno central y el local; los teóricos elitistas y Weber apenas men-

CUADRO 3.3. *La cuestión nacional: poder infraestructural central contra poder infraestructural local*

	Gobierno central		
	Poder Infraestructural	Bajo	Alto
Gobierno local	Bajo	(Estado premoderno)	Estado-nación federal
	Alto	Estado confederal	Estado-nación centralizado

cionan el último, pese a que la política de los Estados modernos ha consistido fundamentalmente en distribuir el poder entre los distintos niveles. El cuadro 3.3 muestra las principales opciones.

La expansión de las infraestructuras en todos los Estados de los siglos XVIII y XIX explica que la parte superior izquierda del cuadro aparezca vacía. La mayor expansión se produjo en los gobiernos locales y regionales que acabaron por desarrollar Estados federales, como en el caso de los Estados Unidos en el siglo XIX, donde los gobiernos de los estados y las ciudades realizaban un número mayor de funciones políticas que Washington. En otros casos, como en la Francia posterior a la revolución, predominó la expansión del Estado-nación centralizado. Y en otros aún, aunque desigualmente, se dieron los dos niveles, hasta producir un Estado nacional federal, como en la Alemania imperial o en los Estados Unidos del siglo XX. Mientras que en Austria-Hungría (como al principio en Estados Unidos) se vio en la centralización el peor enemigo de los movimientos a favor de la representatividad durante los siglos XVIII y XIX, para Francia la centralización significó democracia. En estos debates se mezclaban la clase y la nación; cada una de ellas producía consecuencias involuntarias para la otra, que influían en sus respectivas cristalizaciones. Ni las clases ni las naciones fueron «puras»; por el contrario, se formaron a partir de sus mutuos entrelazamientos.

En materia de política exterior, la cuestión nacional se centró en el grado de nacionalismo y de territorialidad que debía defender la diplomacia, y en hasta qué punto ésta debería practicar una *Geopolitik* agresiva. En realidad, produjo las seis formas de economía política internacional que he indicado en el capítulo 2, y se mantuvo vincu-

lada a la cuarta cristalización estatal de nivel superior: el *militarismo*. Al principio del periodo, los Estados invirtieron por lo menos las tres cuartas partes de sus ingresos en los ejércitos, y aunque al final disminuyó la inversión, no lo hizo por debajo del 40 por 100, lo que significa que el militarismo impregnaba el Estado, la política fiscal y las dos cristalizaciones relativas a la ciudadanía: la representativa y la nacional.

El militarismo afectó también a las cristalizaciones representativa y nacional en el interior; ya que la represión era una forma evidente de contenerlas. Dado que cada país tuvo su dosis de represión interna y externa, no resulta posible catalogarlos en un solo continuo militar (como hemos hecho en el caso de la representatividad). Los Estados Unidos, menos amenazados por la geopolítica militar, fueron también los menos implicados en ella, lo que no les impidió llevar a cabo en su territorio un genocidio contra los indios y una considerable represión a nivel local para mantener el esclavismo; fenómenos que impregnaron la vida americana de una terrible violencia. Como resultado, el militarismo geopolítico estadounidense presenta un perfil bajo, al tiempo que su militarismo nacional es quizás el más alto —y desde luego el más violento— de los cinco países estudiados. No menos paradójico resulta que Gran Bretaña, la mayor potencia de la época, disfrutara de una evidente paz interior, o que el militarismo interno y geopolítico de Austria no se unieran hasta que el régimen vio amenazadas sus fronteras por el nacionalismo. Las cristalizaciones militaristas fueron, pues, duales y, por eso mismo, muy complejas.

Pero el militarismo no movilizó únicamente a los ejércitos. Durante la primera mitad del periodo, los antiguos regímenes (en alianza particularista con la monarquía) dieron un cariz territorial a las concepciones capitalistas de interés y a la política exterior de los Estados-nación emergentes. A comienzos del siglo XX estas tendencias contaron con el refuerzo añadido de los partidos nacionalistas, que exigían intervenciones militares en el exterior, y con las clases capitalistas, que demandaban la represión interior. A ellos se opusieron grupos más pacíficos, como los liberales y los socialistas, aunque no acostumbraban a ser pacifistas a ultranza, sino partidarios de limitar la represión, los gastos militares, la conscripción y las guerras. No resultaba fácil excluir a los militares en Occidente, porque habían prestado un gran servicio a las potencias, pero quizás se les podría relegar a instrumento político de último recurso. Era la esperanza de muchos

liberales y de no menos diplomáticos, pero en 1914 se vio que estaban equivocados.

Sería deseable establecer una teoría general de las relaciones «últimas» entre estos cuatro niveles superiores de cristalizaciones estatales. Sin embargo, existen cuatro obstáculos. El primero es la abundante casuística. Aunque cada una de las cuatro cristalizaciones representara sólo una dicotomía, tendríamos dieciséis combinaciones posibles. El capitalismo, es cierto, no variaba en exceso, pero el militarismo presentaba dos dimensiones separables (la geopolítica y la interior), al tiempo que las cuestiones nacional y representativa cristalizaban en múltiples formas. Las posibles combinaciones de variables son numerosas. Una vez más, la macrosociología rebasa los límites del método comparativo. No existen suficientes Estados para comprobar el impacto de cada una de las cristalizaciones, manteniendo constantes al resto de ellas.

En segundo lugar, los Estados no eran casos análogos y completamente autónomos. Las cuatro fuentes del poder —economía transnacional, civilización occidental, comunidad militar y diplomacia— se expandieron con rapidez por todos ellos. Cualquier acontecimiento contundente, por ejemplo, la Revolución Francesa o la aparición de un Estado, como el de Prusia-Alemania, acarreaba consecuencias para todos. La teorización de lo particular presenta unas limitaciones evidentes.

En tercer lugar, el entrelazamiento de las cuatro cristalizaciones produjo consecuencias involuntarias que afectaron a sus evoluciones respectivas; y los «efectos de la interacción» produjeron más «variables». Los Estados nacionales se desarrollaron y cambiaron a medida que interiorizaban las diferentes racionalidades parciales y contestadas del capitalismo, el militarismo y la representatividad. Las clases capitalistas cambiaron al interiorizar una concepción representativa, parcial y contestada, nacional y territorialmente agresiva del interés. Los ejércitos cambiaron cuando se vieron obligados a defender a las clases con derecho al voto, la propiedad y la nación. El Estado capitalista, la democracia de partidos, el Estado-nación y la casta militar no aparecen en este volumen en sus formas «puras». Los Estados del siglo XIX estaban constituidos de forma no dialéctica por un entramado de contiendas relativas a los cuatro.

En cuarto y último lugar, la impureza de las clases, la representatividad, los Estados-nación y las relaciones entre civiles y militares aumentaron a medida que lo hacía la participación de todos ellos en

la política interior y exterior. Esta última, en manos de los estadistas del antiguo régimen, las castas militares, los volátiles partidos nacionalistas y los grupos de presión, mantenía su carácter particularista y aislado; la interior, por el contrario, se encontraba dominada por el capitalismo, la representación y el proceso de centralización nacional. Las luchas de cada una de ellas raramente se encontraban de frente, más bien se superponían, entrelazando cristalizaciones que afectaban a sus respectivos desarrollos de formas imprevistas. No encuentro mayor ejemplo de lo que acabo de afirmar que el conjunto de causas que determinaron la Primera Guerra Mundial y que ninguno de los actores supo dominar, ya fueran «elites», monarquías absolutas, burocracias, clases, parlamentos, altos mandos o grupos heterogéneos de interés. El Estado moderno no sólo no se conformó según un modelo determinado por alguno de ellos, sino que cambió los intereses y las identidades de todos.

Los cuatro obstáculos que acabamos de ver me aconsejan cambiar la metodología extensiva por otra intensiva, basada en una descripción relativamente detallada de los cinco países, y no en una descripción superficial que abarcara numerosos países y variables. Incluso limitándome a los cinco casos (completados en ocasiones con la cobertura apresurada de algunos otros), podré refutar las teorías del factor único y establecer proposiciones más amplias sobre pautas generales. Pero ésta es también una historia que versa sobre un tiempo y un espacio concretos, con una singular culminación en la Primera Guerra Mundial.

Conclusión

He tomado préstamos de las principales teorías sobre el Estado para crear la mía propia, polimorfa, a medias funcional y a medias institucional. Acepto la insistencia de la teoría de las clases en que los Estados modernos son capitalistas y en que la lucha de clases domina con frecuencia la política. El capitalismo es, de hecho, una de las cristalizaciones que he llamado aquí de nivel superior. Sin embargo, rechazo por completo la idea de que la cristalización capitalista, o de cualquier otra clase, sea «determinante en última instancia». Acepto también la idea pluralista de la existencia de múltiples actores de poder y múltiples funciones estatales, y del desarrollo (parcial) hacia la democracia. Esto nos conduce directamente a una segunda cristaliza-

ción de nivel superior: la representativa, respecto a la cual la monarquía desempeñó una acción retardatoria de la democracia de partidos (entrelazada con las luchas de clases). El pluralismo se adecua también a la tercera cristalización relativa a la cuestión nacional. No obstante, rechazo su concepto de democracia como factor fundamental, ya que otras formas de poder, que carecen de elecciones o consenso normativo, contribuyen igualmente a decidir los resultados. En cuanto al elitismo auténtico, acepto que los administradores del Estado central pueden constituirse en actores autónomos de poder. Para este periodo, sin embargo, identifico dos actores estatales muy distintos. Las monarquías se conservaron en varios países, en parte resistiéndose a la democracia y en parte generando sus propias cristalizaciones representativas. También la represión geopolítica e interior, aunque se produjo por lo general mediante alianzas particularistas con los actores de la sociedad civil, generó una cuarta cristalización de nivel superior: la militarista. Con todo, el primer poder es, en sí mismo, generalmente débil, mientras que el último es más errático. Lo que proporciona, hasta donde es posible, un modelo «último» de los Estados modernos son precisamente las combinaciones de esas cristalizaciones de nivel superior (a las que podríamos añadir los efectos de las cristalizaciones ideológico-morales y patriarcales).

No obstante, como buen teórico del «embrollo» creo que los Estados son más confusos y menos sistémicos y unitarios de lo que pretenden los teóricos. Ello me ha permitido servirme de todo tipo de teorías sobre el Estado, tanto como de las ideas de Max Weber, para desarrollar lo que denomino «estatismo institucional». Para comprender a los Estados y su impacto causal en las sociedades, debemos concretar sus características institucionales. Puesto que el Estado moderno ha ampliado masivamente sus infraestructuras institucionales, desempeña un papel más estructurador de la sociedad que, a su vez, refuerza el poder de todas las cristalizaciones. Mi historia de la sociedad occidental se centrará en el desarrollo entrelazado y no sistémico de las cristalizaciones estatales: capitalista, representativa, nacional y militarista.

Bibliografía

Abrams, P. 1988: «Notes on the difficulty of studying the state». *Journal of Historical Sociology,* 1.

Albertini, L. 1952, 1957: *The Origins of the War of 1914,* 3 vols. Oxford: Oxford University Press.

Alford, R. y R. Friedland, 1985: *Powers of Theory: Capitalism, the State, and Democracy.* Cambridge: Cambridge University Press.

Althusser, L. 1971: *Lenin and Philosophy and Other Essays.* Londres: New Left Books.

Anderson, E. N., y P. R. Anderson, 1967: *Political Institutions and Social Change in Continental Europe in the Nineteenth Century.* Berkeley: University of California Press.

Beales, D. 1987: *Joseph II.* Vol. I: *In the Shadow of Maria Theresa, 1740-1780.* Cambridge: Cambridge University Press.

Beetham, D. 1985: *Max Weber and the Theory of Modern Politics.* Cambridge: Polity Press. [Ed. cast.: *Max Weber y la teoría política moderna.* Madrid, C. Estudios Constitucionales, 1979.]

Bendix, R. 1978: *Kings of People: Power and the Mandate to Rule.* Berkeley: University of California Press.

Block, F. 1977: *The Origins of International Economic Disorder.* Berkeley: University of California Press.

Collins, R. 1986: «Imperialism and legitimacy: Weber's theory of politics», En *Weberian Sociological Theory.* Cambridge: Cambridge University Press.

Dahl, R. A. 1956: *A Preface to Democratic Theory.* Chicago: University of Chicago Press.

— 1961: *Who Governs? Democracy and Power in an American City.* New Haven, Conn.: Yale University Press.

— 1977: *Polyarchy.* New Haven, Conn.: Yale University Press.

Domhoff, W. 1978: *The Powers That Be: Processes of Ruling Class Domination in America.* Nueva York: Random House.

— 1990: *The Power Elite and the State.* Nueva York: Aldine de Gruyter.

Easton, D. 1965: *A Framework for Political Analysis.* Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.

Eisenstadt, S. N. 1969: *The Political Systems of Empires: The Rise and Fall of the Historical Bureaucratic Societies.* Nueva York: Free Press. [Ed. cast.: *Los sistemas políticos de los imperios.* Madrid, Revista de Occidente, 1972.]

Giddens, A. 1972: *Politics and Sociology in the Thought of Max Weber.* Londres. Macmillan. [Ed. cast.: *Política y sociología en Max Weber.* Madrid, Alianza Editorial, 1976.]

— 1985: *The Nation-State and Violence.* Cambridge: Polity Press.

Habermas, J. 1976: *Legitimation Crisis.* Londres: Heinemann.

Huntington, S. 1968: *Political Order in Changing Societies.* New Haven, Conn.: Yale University Press.
Jessop, B. 1977: «Recent theories of the capitalist state». *Cambridge Journal of Economics,* 1.
— 1982: *The Capitalist State.* Oxford: Martin Robertson.
— 1990: *State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place.* University Park: Pennsylvania State University Press.
Keohane, R., y J. Nye, 1977: *Power and Interdependence.* Boston: Little, Brown.
Kiser, E., y M. Hechter, 1991: «The role of general theory in comparative-historical sociology. *American Journal of Sociology,* 97.
Krasner, S. D. 1978: *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
— 1984: «Approaches to the state: alternative conceptions and historical dynamics. *Comparative Politics* 16.
— 1985: *Structural Conflict: The Third World Against Global Liberalism.* Berkeley: University of California Press.
Laumann, E. O., y D. Knoke, 1987: *The Organizational State.* Madison: University of Wisconsin Press.
Levi, M. 1988: *Of Rule and Revenue.* Berkeley: University of California Press.
Lipset, S. M. 1959: *Political Man.* Londres: Mercury Books.
Lipson, C. 1985: *Standing Guard: Protecting Foreign Capital in the Nineteenth and Twentieth Centuries.* Berkkeley: University of California Press.
MacIver, R. M. 1926: *The Modern State.* Oxford: Oxford University Press.
Maier, C. 1981: «The two postwar eras and the conditions for stability in twentieth-century Western Europe». *American Historical Review* 86.
Mann, M. 1988: *States, War and Capitalism.* Oxford: Blackwell.
Marshall, T. H. 1963: *Sociology at the Crossroads and Other Essays.* Londres: Heinemann.
Marx, K., F. Engels, 1968: *Selected Works.* Moscú: Progreso. [Ed. cast.: *Obras escogidas.* Madrid, Ayuso, 1975.]
Mayer, A. J. 1981: *The Persistence of the Old Regime.* Londres: Croom Helm.
Miliband, R. 1969: *The State in Capitalist Society.* Nueva York: Basic Books.
Mills, C. W. 1956: *The Power Elite.* Oxford: Oxford University Press.
Mommsen, W. 1984: *The Age of Bureaucracy: Perspectives on the Political Sociology of Max Weber.* Oxford: Blackwell.
Morgenthau, H. 1978: *Politics Among Nations: The Struggle for War and Peace,* 5th ed. Nueva York: Knopf.
Mosca, G. 1939: *The Ruling Class.* Nueva York: McGraw-Hill.
O'Connor, J. 1973: *The Fiscal Crisis of the State.* Nueva York: St. Martin's Press.

Offe, C. 1972: «Political authority and class structure: an analysis of late capitalist societies». *International Journal of Sociology* 2.
— 1974: «Structural problems of the capitalist state». En *German Political Studies*, vol. 1, ed. K. Von Beyme. Londres: Sage.
Offe, C., y V. Ronge, 1982: «Theses on the theory of the state». En *Classes, Power and Conflict*, ed. A. Giddens y D. Held. Berkeley: University of California Press.
Oppenheimer, F., 1975: *The State.* Nueva York: Free Life Editions.
Padgett, J. F. 1981: «Hierarchy and ecological control in federal budgetary decision making». *American Journal of Sociology* 87.
Poggi, G. 1990: *The State. Its Nature, Development and Prospectus.* Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Poulantzas, N. 1973: *Political Power and Social Classes.* Londres: New Left Books. [Ed. cast.: *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista.* Madrid, Siglo XXI, 1978.]
— 1978: *Political Power and Social Classes.* Londres: Verso.
Rokkan, S. 1970: *Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development.* Oslo: Universitetsforlaget.
Rosecrance, R. 1986: *The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World.* Nueva York: Basic Books. [Ed. cast.: *La expansión del Estado comercial.* Madrid, Alianza Editorial, 1987.]
Rosenau, J. 1966: Pre-theories and theories of foreign policy. En *Approaches to Comparative and International Politics*, ed. R. B. Farrell. Evanston, Ill.: Northwestern University Press.
Rueschemeyer, D., y P. Evans. 1985: «The state in economic transformation: towards an analysis of the conditions underlying effective transformation». En *Bringing the State Back In*, ed. P. Evans, D. Rueschemeyer, y T. Skocpol. Cambridge: Cambridge University Press.
Shaw, M. 1984: «War, imperialism and the state-system: a critique of orthodox Marxism for the 1980s». En *War, State and Sciety*, ed. M. Shaw. Basingstoke: Macmillan.
— 1988: *Dialectics of War: An Essay on the Social Theory of War and Peace.* Londres: Pluto Press.
Skocpol, T. 1979: *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China.* Cambridge: Cambridge University Press.
— 1985: «Bringing the state back in: strategies of analysis in current research». En *Bringing the State Back In*, ed. P. Evans, D. Rueschemeyer, y T. Skocpol. Cambridge: Cambridge University Press.
Steinmetz, G. 1990: «The myth and the reality of an autonomous state: industrialists, Junkers and social policy in Imperial Germany». *Comparative Social Research*, 12.
Tilly, C. 1975: *As Sociology Meets History.* Nueva York: Academic Press.
— 1990: *Coercion, Capital and European States, AD 990-1990.* Oxford:

Blackwell. [Ed. cast.: *Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes.* Madrid, Alianza Editorial, 1991.]
Trimberger, E. K. 1978: *Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt and Peru.* New Brunswick, N. J.: Transaction Books.
Weber, M. 1978: *Economy and Society,* 2 vols. Berkeley: University of California Press.
Weir, M., y T. Skocpol. 1985: «State structures and the possibilities for "Keynesian" responses to the Great Depression in Sweden, Britain and the United States». En *Bringing the State Back In,* ed. P. Evans, D. Rueschemeyer, y T. Skocpol. Cambridge: Cambridge University Press.
Weir, M., *et al.* 1988: *The Politics of Social Policy in the United States.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Wolfe, A. 1977: *The Limits of Legitimacy: Political Contradictions of Contemporary Capitalism.* Nueva York: Free Press.
Zeitlin, M. 1980: «On classes, class conflict, and the state: an introductory note». En *Classes, Class Conflict and the State: Empirical Studies in Class Analysis,* ed. M. Zeitlin. Cambridge, Mass.: Winthrop.
— 1984: *The Civil Wars in Chile.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Capítulo 4
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL LIBERALISMO DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN GRAN BRETAÑA, 1760-1880

La paradoja británica ha quedado expuesta en el primer capítulo: Gran Bretaña encabezó la Revolución Industrial —el mayor fenómeno de poder colectivo de la historia de la humanidad—, pero sus relaciones de poder distributivo no se revolucionaron. En todo el territorio, salvo Irlanda, se produjeron la consolidación nacional y la reforma representativa de forma paulatina. ¿Por qué?

La solución más sencilla a esta paradoja viene del campo de los historiadores revisionistas de la economía, quienes han despojado de parte de su contenido «revolucionario» a la propia Revolución Industrial. La industrialización, afirman, fue también paulatina y produjo sólo un moderado cambio estructural. También algunos marxistas han minimizado la importancia de la industrialización, subrayando la transición anterior del feudalismo al capitalismo, que culminaba ahora con el paso del capitalismo agrario-comercial al comercial-industrial, alterado por las primeras agitaciones proletarias (E. P. Thompson, 1963). Los liberales ven una modernización evolutiva más difusa, en la que la interacción del capitalismo industrial con la conquista de los derechos civiles y el gobierno constitucional habría contribuido a ampliar y estabilizar la ciudadanía y la democracia (Plum, 1950: 140; Marshall, 1963). Moore (1973: capítulo 1) combina

las concepciones liberales y marxianas; según él, Gran Bretaña evolucionó de la reforma a la democracia gracias a la ausencia de una nobleza terrateniente que empleara mano de obra forzosa en la agricultura y a la presencia de una amplia burguesía. Tanto los marxistas como los liberales creen que el capitalismo industrial forzó la democratización del Estado. Los conservadores disienten; a su parecer, el antiguo régimen conservó el poder ideológico, el Estado y la deferencia hasta bien entrado el siglo XIX. Su posterior decadencia se habría debido más a sus propios errores y divisiones que a las presiones de la sociedad industrial (Moore, 1976; Clark, 1985).

Me permito la libertad de tomar varios préstamos de todas estas ideas, y añado por mi cuenta la importancia de las relaciones de los poderes militar y geopolítico. Naturalmente, la industrialización estaba ya estructurada por un capitalismo mercantil mucho más antiguo. El Estado británico ya había institucionalizado los derechos civiles y una rudimentaria democracia de partidos, aunque existía un conflicto entre el antiguo régimen y la pequeña burguesía (no con la «burguesía» en bloque). Pero estas clases eran «impuras» y en su configuración intervinieron también fuentes no económicas del poder social. Las presiones de la guerra intensificaron en un primer momento las identidades de clase, después las empujaron al compromiso, y ambas cosas favorecieron el desarrollo del Estado-nación moderno. En la década de 1840, los núcleos de las dos clases se fundieron en una sola clase dirigente capitalista, representante de ese «liberalismo del antiguo régimen» que ha sobrevivido hasta nuestros días. En mi tesis se entrelazan todas las organizaciones de los poderes ideológico, económico, político y militar. Prestaré una atención especial a las instituciones concretas del Estado. Ni el liberalismo del antiguo régimen ni el éxito de la reforma pueden achacarse sin más a la industrialización o al capitalismo. El desarrollo común de las cuatro fuentes del poder social obligó al antiguo régimen y a la pequeña burguesía a establecer un compromiso, a modernizar el Estado y a crear la nación.

La Revolución Industrial

Comenzaré por el dato más sencillo, el tamaño de la población, que es también el que conocemos mejor y el más esclarecedor. Wrigley y Schofield (1981: cuadro A3.3) y Wrigley (1985) demuestran

que el crecimiento de la población entre 1520 y 1700 se produjo ante todo en Londres; de 1700 a 1770 ocurrió, por el contrario, en los centros históricos regionales o en los puertos como Norwich, York, Bristol o Newcastle; y sólo a partir de 1770, en las nuevas ciudades industriales y comerciales como Manchester, Liverpool y Birmingham. A lo largo de estas tres fases, de 1520 a 1801, con la disminución del porcentaje de la agricultura del 76 al 36 por 100, los habitantes de las zonas rurales (en poblaciones de menos de 5.000 almas) sin empleo agrícola crecieron del 18 al 36 por 100 de la población nacional. En 1801 había en el campo tantos servicios, comercio y «protoindustrias» como agricultura, y las ciudades aún contaban sólo con el 28 por 100 de la población. El capitalismo era tan rural como urbano; tan agrario como industrial o comercial. El histórico cambio que supuso el desplazamiento de la población desde los condados agrícolas a las ciudades como Manchester había tenido una prehistoria capitalista-comercial de tres siglos, incluidas las dos centurias de predominio londinense, y sólo entonces culminó en una explosión demográfica en los centros urbanos industriales. Pero el cambio fue más complejo y menos revolucionario de lo que sostienen las teorías dicotómicas que hemos visto en el capítulo 1. Después de todo, cabe la posibilidad de que fueran las instituciones del poder distributivo las que dirigieran la Revolución Industrial en Gran Bretaña.

Como hemos dicho, los historiadores revisionistas de la economía han despojado de bastantes aspectos «revolucionarios» a la Revolución Industrial. El crecimiento económico anual a partir de 1760, afirman, no alcanzó el 3 por 100 antes de 1830, aproximadamente igual que el aumento demográfico. Las exportaciones eran modestas, y casi todas procedían de una sola industrial, la del algodón. No hubo ni «despegue» ni pequeña fábrica ni mecanización a vapor ni crecimiento productivo ni cambio estructural. En 1841 la mecanización había «revolucionado» bastante menos del 20 por 100 de la fuerza de trabajo, por lo general en la industria textil (Harley, 1982; Crafts, 1983, 1985: 7 y 8; Lee, 1986). No obstante, si tomáramos un arco sólo algo mayor de tiempo, los cambios resultarían espectaculares. En 1850 gran parte de las inversiones y la mano de obra se habían trasladado a las ciudades, al comercio y a la industria. Nunca se había conocido un periodo tan prolongado de crecimiento agrícola como el de los tres siglos anteriores; ni una expansión comercial semejante al de los doscientos años previos; ni, desde luego, la aparición de una economía centrada en la industria y en las ciudades. Si esta combina-

ción no se considera una revolución social, sería difícil encontrar otra en la historia mundial. Siempre que lo consideremos un fenómeno no ya concreto o unidimensional, sino un conjunto de múltiples procesos continuados, deberemos concluir que tales acontecimientos fueron revolucionarios.

Sobre las causas existe aún una fuerte controversia. Muchos historiadores apuntan al progreso de la agricultura y a la demanda de las familias agricultoras de tipo medio (Eversley, 1967; John, 1967; McKendrick, 1974, 1982; 9 a 33; Pawson, 1979; para un estudio más centrado en Europa véase Hagen, 1988). Otros afirman que el crecimiento agrícola disminuyó a partir de 1710 y cesó por completo desde 1760. Destacan que el impulso llegaba ahora del lado de la oferta industrial y del comercio internacional (Mokyr, 1977, 1985; McCloskey, 1985; O'Brien, 1985). La propia controversia revela la causa más general de la revolución: la aparición de una economía capitalista de mercado en la que la oferta y la demanda se integraron estrechamente en los tres sectores. Las leyes clásicas de la economía política —oferta y demanda, competencia del mercado, incentivo del beneficio, utilidad marginal, etc.— podrían describir ahora la economía británica de finales del siglo XVIII. La mayor parte de la población —por primera vez en las sociedades extensivas— actuaba en una sociedad civil integrada en el mercado, en calidad de vendedores y compradores de mercancías. Pocos economistas aprecian la peculiaridad de estos mecanismos del mercado, que nunca, hasta ese momento, habían dominado hasta ese punto las sociedades humanas.

En el Volumen I identifiqué las circunstancias que hicieron posible a largo plazo este tipo de economía: la aparición de parcelas descentralizadas de propiedad privada, la expropiación de la tierra que sufrieron los labriegos, la integración de redes formadas por la villa y el señorío locales en el marco de la regulación normativa de la cristiandad, la «dispersa cartera de recursos económicos» del continente (Jones, 1982), la ventaja de suelos más húmedos y la navegación en mar abierto. Todo ello contribuyó a desarrollar la economía capitalista, especialmente en la Europa noroccidental y, más concretamente, en Gran Bretaña.

Las causas a medio plazo han de buscarse ante todo en la agricultura, que duplicó las cosechas en los 150 años anteriores a 1710, liberando a la población hacia las ciudades y al comercio, y permitiendo así la diversificación rural que revela el crecimiento demográfico. Las demandas integradas de los sectores agrícola, comercial y protoin-

dustrial produjeron mercados de consumo masivo, alfabetización discursiva y nuevas infraestructuras de comunicación: barreras de portazgo, canales y servicios postales (Albert, 1972; O'Brien, 1985). Por último, Gran Bretaña comenzó a dominar la navegación y el comercio internacionales, con sus consiguientes efectos militares y geopolíticos (por ejemplo, el ejército se convirtió en el mayor consumidor de hierro y textiles). En 1770 la «mano invisible» de Adam Smith gobernaba la sociedad civil. La economía política clásica nació para describirla.

Las causas inmediatas residieron en tres industrias: carbón, algodón y hierro, donde

> se sustituyó el trabajo y la pericia de los seres humanos por la máquina —rápida, regular, precisa e infatigable—; las fuentes animadas de energía por otras inanimadas, en especial, por la introducción de motores para convertir el calor en trabajo, que inauguró para la humanidad un suministro nuevo y casi ilimitado de energía; se emplearon materias primas nuevas y abundantes, en particular, se sustituyeron las sustancias vegetales o animales por otras de origen mineral [Landes, 1969: 41].

Estos inventos eran marginales, pero comportaron un desarrollo múltiple del progreso tecnológico que había comenzado mucho antes (Lillie, 1973: 190 a 191; *cf.* mi volumen I: 571 a 578 ed. cast.). La máquina de vapor es un buen ejemplo de las continuas innovaciones que vincularon distintas industrias, cuyo penúltimo impulso llegaría del ejército. Al aumentar la demanda de carbón, se excavaron nuevos filones que acabarían por anegarse. La primera máquina de vapor (la máquina atmosférica de Newcomen) extrajo el agua de los pozos, pero al crecer el suministro de carbón se produjo un cuello de botella en la distribución a los hornos. Se modificaron, entonces, las bombas de Newcomen y Watt para convertirlas en máquinas de tracción capaces de acarrearlo. El abaratamiento de los precios sustituyó el carbón vegetal elaborado a partir de la madera por el coque extraído del carbón, que permitía alcanzar temperaturas mucho más elevadas. Pero entonces se vio la necesidad de mejorar el diseño de los hornos y la fundición del hierro. Así fue como la máquina de vapor se adaptó para mejorar los métodos de fundición de las fábricas artilleras del ejército. A lo largo de todo el proceso las presiones del mercado habían sido muy importantes: las demandas interconectadas de los consumidores de carbón y hierro (especialmente las fuerzas arma-

das) y de sus industrias complementarias (sobre todo los ferrocarriles). Del lado de la oferta, la innovación continúa siendo un misterio. Los inventos no surgen sólo de la demanda, pero carecemos aún de un conocimiento suficiente de cómo llegaron a sus descubrimientos Newcomen, Watt, Boulton, Arkwright y Wedgwood, entre otros (Musson, 1972: 45, 56, 68; McCloskey, 1985).

Lo que sí sabemos es que la participación del gran capital y la ciencia compleja se mantuvo limitada hasta mucho más tarde. Los principales financieros de la revolución fueron los pequeños empresarios, sus familias y amigos, peor capitalizados que sus iguales de otros países en épocas posteriores (Crafts, 1983; Mokyr, 1985: 33 a 38). Ni siquiera la ciencia organizada tuvo mucho que ver al principio (Musson y Robinson, 1969; Musson, 1972). Gran parte de los experimentos quedaron limitados a comercios muy pequeños, incluso a un solo obrador. La famosa tetera de Watt existió realmente, se trataba de una caldera en miniatura que formó parte de un experimento. La ciencia desempeñó un papel importante para la química, a veces para la ingeniería y raramente para la industria textil. Algunos inventores eran meros «caldereros aficionados» (según la descripción de Lande). Muchos de ellos tenían alguna cualificación técnica, pero todos fueron grandes lectores de la filosofía natural de la Ilustración. El acceso de las ideas pioneras de la revolución científica del siglo XVII al mercado libre y la Ilustración del XVIII (transmitida por la expansión de infraestructuras de alfabetización discursiva) fueron dos acontecimientos mucho más provechosos que la ciencia organizada.

A falta de una ciencia grande, de una tecnología compleja y de un capital concentrado, las empresas industriales conservaron su modesto tamaño y su configuración conforme a las instituciones comerciales al uso. El *entrepreneur* («el tomador entre») había sido con frecuencia un comerciante generalista. Las empresas eran familiares, muchas veces a cargo de las mujeres, y mantenían relaciones personales con los proveedores (Wilson, 1955; Pollard, 1965; Payne, 1974; Chandler, 1977; Davidoff, 1986). La máquina de vapor hizo posible el aumento de la producción y de la fuerza de trabajo en algunas fábricas (véanse las cifras en el capítulo 15), que a menudo eran sociedades formadas con ese propósito por varias familias. El comerciante generalista cambió su papel por el de un empresario modesto pero especializado. Cualquier empresario podía colaborar con un artesano inventor de talento y supervisar a varios artesanos que empleaban a sus propios peones. La empresa no solía contar con más de cincuenta

personas. Las ventas y la distribución corrían a cargo de agencias intermediarias, tanto dentro del país como en el extranjero.

Los dueños de este universo eran pequeños maestros, intermediarios, comerciantes, ingenieros y artesanos independientes que invertían su propio trabajo y las pequeñas cuantías del capital familiar, es decir, la clásica pequeña burguesía. Fue *su* Revolución Industrial —quizás el mayor logro de una clase a lo largo de la historia—; sin embargo, no estaban organizados como clase. En realidad, no necesitaban una organización extensiva propia porque ya existía una sociedad civil institucionalizada en la agricultura y el comercio, cuya «mano invisible» estaba fomentando un desarrollo que nadie se había propuesto. En Gran Bretaña, al contrario que en Francia, el antiguo régimen era ya completamente capitalista, trataba los recursos como mercancías, defendía la propiedad absoluta y buscaba el beneficio en ultramar. La pequeña burguesía se enriqueció aprovechando la organización de otras clases.

Las clases durante el siglo XVIII

De modo que en Gran Bretaña no existió una supuesta burguesía o clase capitalista. El término singular más cercano sería la «nación», en referencia a aquellos que tenían intereses invertidos (es decir, en forma de propiedades) en la creación del Estado nacional. Sin embargo, la mayor parte de los miembros de la pequeña burguesía, excluidos del voto y de los cargos estatales, no eran miembros de pleno derecho de la nación. Por otra parte, las condiciones de las clases contemporáneas eran diversas y plurales. En el presente volumen identifico cinco actores de clase «capitalista».

1. *El antiguo régimen* o clase dirigente británica, que en 1760 comprendía el monarca y la corte, la iglesia oficial, la aristocracia, la baja nobleza rural y las oligarquías de comerciantes. En una palabra, quienes disfrutaban de propiedades sustanciales y las explotaban según la práctica capitalista. Los mismos que controlaban el Estado situando estratégicamente a sus leales. Gran parte de los profesionales y funcionarios de mayor categoría (incluidos los altos mandos del ejército) pertenecían a esa clase o dependían de ella, mientras que la mayoría del «nuevo» capital se mantenía al margen. Su Iglesia se hallaba implantada en todas las áreas de la sociedad, aunque cada vez

con menos fuerza. Cuando se referían a esta clase, los adversarios contemporáneos la llamaban «la antigua corrupción». Más adelante se impondría en toda Europa el término «antiguo régimen», aunque la etiqueta no indica un hecho enteramente homogéneo, porque políticamente se hallaba dividida en facciones.

2. *La pequeña burguesía*, compuesta por los pequeños capitalistas del comercio y la industria y los artesanos independientes. En ese momento el número, riqueza, alfabetización y confianza en sí mismos de sus miembros se encontraban en ascenso, sin embargo estaban excluidos del Estado y, en ocasiones, se opusieron al antiguo régimen. Entre ellos cabe incluir lo que Gramsci denominó «intelectuales orgánicos», abogados modestos, maestros y periodistas, que articularon una ideología liberal burguesa. Estos intelectuales habrían de dirigir la revolución en Francia y, en menor medida, en América. La expresión más comúnmente empleada en Gran Bretaña en esa época era «clase(s) media(s)»; no obstante, el término «pequeña burguesía» resulta más preciso porque sugiere un capitalismo modesto y urbano. No es un término ideal, ya que se utilizó menos en Gran Bretaña y en América que en la Europa continental, pero he reservado la expresión «clase media» (empleado en este caso por Neale, 1983) para otro grupo (el número 5 de esta lista).

3. *Los agricultores minifundistas*, que poseían o controlaban (como agricultores arrendatarios estables) la pequeña propiedad de la tierra, en la que empleaban el trabajo familiar, complementado quizás con algún contratado. En la Europa continental se utiliza la palabra «campesino», pero en América y Gran Bretaña, donde el término resulta algo más despectivo, «granjero» la sustituye adecuadamente. La mayor parte de los pequeños agricultores británicos no eran propietarios, sino arrendatarios de un señor, aunque en condiciones bastante seguras.

Los tres grupos anteriores fueron los principales actores capitalistas del siglo XVIII, con sus distintas peculiaridades en cada país. Los campesinos minifundistas conservaron su identidad de clase (véase capítulo 19). Pero de 1830 a 1870 se produjo en muchos países un reordenamiento de otros propietarios en dos nuevas clases:

4. Una *clase capitalista* que fusionó el antiguo régimen con la pequeña burguesía más acomodada, en la tierra, el comercio y la industria. Hacia 1870 la clase capitalista gobernaba Gran Bretaña, y los poderes de la «mano invisible», la corte, la Iglesia, la aristocracia terrateniente, las instituciones financieras, las corporaciones industria-

les y el Estado nacional se encontraban prácticamente en sus manos. Esta fusión adoptó distintas formas en los distintos países. Llamaré a la variante británica «liberalismo del antiguo régimen».

5. Una *clase media* formada tanto en la Gran Bretaña de mediados de la época victoriana como en otros países (aunque normalmente pluralizada como «clases medias» por los contemporáneos). Esta clase y sus tres fracciones: pequeña burguesía, profesionales y empleados de carrera, se analizarán en el capítulo 16. Los artesanos, originalmente parte de la pequeña burguesía, se proletarizaron.

Estas clases son tipos ideales, que no avanzaron con resolución a lo largo del siglo XVIII, pero no meros artificios. En su época se habló de ellas, y las tres primeras aparecieron en la «aritmética política» de los tres primeros sociólogos ingleses. Gregory King (en 1688), Joseph Massie (1759) y Patrick Colquhoun (1801-1803) calcularon las cifras e ingresos de lo que ellos llamaron las principales clases de Gran Bretaña (véase el cuadro 4.1).

Los tres identificaron también lo que yo he denominado «antiguo régimen», y distinguieron «los títulos altos y las profesiones-oficios», divididos en subcategorías semejantes: distintos niveles de nobleza alta y baja, clero, funcionarios gubernamentales, abogados y otros profesionales. Me he permitido enmendar ligeramente su clasificación dando un tinte de «clase» al antiguo régimen, un poco menos vinculado a las gradaciones de estatus, añadiendo unos cuantos miles de «grandes comerciantes» que ellos mantuvieron aparte. Las tres estimaciones, así ampliadas, configuran un antiguo régimen formado por el 5 por 100 de las familias y del 27 al 28 por 100 del ingreso nacional. Los títulos y la baja nobleza no sumaban más de un 1 por 100 de las familias, pero obtenían el 15 por 100 del ingreso nacional. Los profesionales de servicios venían inmediatamente después por su riqueza a lo largo de todo el periodo, aunque los «grandes comerciantes» no les iban a la zaga.

En la base de la sociedad, el descenso de los jornaleros es probablemente una distorsión de las distintas clasificaciones. Las cifras enmascaran también el mayor cambio registrado durante el periodo entre los pobres, es decir, el descenso relativo de los peones agrícolas. En cuanto a lo que llaman «plebe», estos sociólogos no demuestran interés en distinguirla por sectores económicos. Sólo Colquhoun intenta clasificar por categorías sectoriales a los mineros y trabajadores de la industria. En Francia y Gran Bretaña, los escritores liberales o *whigs* solían distinguir de la «plebe» al «pueblo» educado y rico. En

CUADRO 4.1. *Porcentaje de familias británicas y de rentas familiares según la clase social del cabeza de familia, 1688, 1759 y 1801-1803*

Clases contemporáneas			1688		1759		1801-1803	
Políticos liberales	Sociólogos	Mi denominación	% Famil.	% Renta	% Famil.	% Rent	% Famil.	% Renta
Pueblo	Grandes títulos y caballeros Profesionales, grandes comerciantes[a]	Antiguo Régimen	5	28	5	27	5	28
	Poseedores de feudos francos, minifundistas	Agricultores minifundistas	16	22	16	25	15	26
	Pequeños comerciantes, industriales, grandes artesanos[b]	Pequeña burguesía	15	26	19	27	16	23
(Marginales)	Pequeños artesanos[c]	(Marginales)	12	8	17	9	21	13
Plebe	Trabajadores, aldeanos, pobres, vagabundos	Peones o jornaleros	45	12	37	8	36	8
—	Ejército y Marina	—	7	4	6[d]	3	11	5

Notas:

[a] Los grupos de comerciantes ingresaban un promedio de no menos de 400£ anuales en 1688 y 1759, y de 800£ anuales en 1801-1803.

[b] Todos los grupos ingresaban de 40 a 399£ anuales en 1688 y 1759, y de 80 a 799£ anuales en 1801-1803. King agrupa «todos los oficios manufactureros» con un ingreso promedio de 38£ anuales. He dividido sus cifras por igual entre los «grandes artesanos» (con unos ingresos de 50£ anuales) y «pequeños artesanos» (con unos ingresos de 25£ anuales).

[c] Se incluyen también mineros y artesanos de la construcción.

[d] Obviamente infraestimado, dado el crecimiento militar de ese año.

Fuentes: Estimaciones contemporáneas de Gregory King (1688), Joseph Massie (1759) y Patrick Colquhoun (1801-1803); revisadas por Lindert y Williamson (1982) y Crafts (1985).

whigs solían distinguir de la «plebe» al «pueblo» educado y rico. En este punto, el filósofo Holbach se expresa con toda claridad:

> Cuando digo pueblo no me refiero a esa plebe idiotizada que, privada de luces y de sentido común, corre siempre el peligro de convertirse en instrumento y cómplice de los más turbulentos demagogos que pretenden perturbar el orden social. Todo aquel que pueda vivir dignamente de los ingresos de su propiedad y todo cabeza de familia que posea una tierra deberán considerarse ciudadanos [*Système Sociale* 1773: vol. II].

Los que realmente no tenían nada despertaban poco interés, tanto si pertenecían al medio rural y agrícola, como en 1688, como si procedían de los sectores urbanos, comerciales o industriales, como ocurrió posteriormente. Pero representaban sólo algo más del 40 por 100 de la población, es decir, no una gran mayoría, sino una cifra igual a la de las categorías «medias».

En la zona «media», los sociólogos no encontraron ninguna dificultad en identificar a los agricultores como una clase aparte; aproximadamente el 15 por 100 de la población, con un 25 por 100 de la riqueza. Con menos éxito, intentaron distinguir las clases medias comerciales de las industriales. King subestimó y Massie sobrevaloró el número de tenderos o empleados de comercio. La mayor parte de los de Massie aparecen clasificados en King como «artesanos de la manufactura» y por Colquhoun como «artesanos, trabajadores manuales y peones». Si buscamos una solución de compromiso entre ambas clasificaciones, los dedicados al comercio comprenden del 9 al 12 por 100 de la población, y representan quizás el 20 por 100 de la riqueza nacional. En la industria y la construcción los sociólogos confunden maestros y artesanos independientes y a veces artesanos y peones. Sólo King incluye los oficios de la industria y la construcción entre los trabajadores comunes. Massie separa a los sujetos dedicados a la industria por sus ingresos familiares; Colquhoun, por la posesión o no de capital. Puesto que cuatro quintas partes de ellos carecían de capital, los sitúa en una amplísima «clase trabajadora»: «artesanos, mecánicos y trabajadores empleados en las industrias, la construcción y cualquier otro tipo de trabajo».

Es decir, los sociólogos contemporáneos no sabían cómo tratar los estratos de las nuevas ocupaciones, ni en qué se distinguían los trabajadores de la industria de los de la construcción o el comercio,

además de confundir a los trabajadores con los artesanos. No sabían dónde acababa el «pueblo» y comenzaba la «plebe».

Sus dilemas eran reales. No existe una solución ideal para las identidades económicas de hecho competidoras de gran parte de la población. Por mi parte, ofrezco una solución parcial en el cuadro 4.1 mediante la combinación de las categorías industrial y comercial en el conjunto de la «pequeña burguesía», que representa del 15 al 19 por 100 de la población y del 23 al 27 por 100 de la riqueza. Su tamaño y riqueza probablemente aumentaron con el tiempo (lo que queda oscurecido en el cuadro por la elevada conscripción militar de 1801-1803) gracias a la expansión de los artesanos de la industria y la construcción. Es lo que, junto a los agricultores y el antiguo régimen, recibió de la terminología liberal contemporánea el calificativo de «pueblo», para distinguirlo de la «plebe». Pero en esta pequeña burguesía subyace una falla potencial. Los que se dedicaban a la industria y la construcción, crecientes en número, no eran tan pudientes como los del comercio, pues sus ingresos rondaban el promedio nacional, no el doble de éste. Las tres cuartas partes de los industriales y constructores, la mitad de la pequeña burguesía, eran problablemente artesanos, con mayor riqueza y más seguridad que los «pequeños artesanos» que he calificado de «marginales» en el cuadro, pero compartían con ellos gran parte de su experiencia vital.

Estos grupos «medios» podrían reunirse de dos formas: bien en un movimiento de pequeños burgueses y artesanos modestos frente al antiguo régimen y los agricultores, bien, teniendo en cuenta la falla que hemos comentado, clasificando a la pequeña burguesía comercial frente a los artesanos más los jornaleros, y por debajo de ellos a la clase obrera o «plebe». Las «clases» eran ambivalentes y variaban según el tiempo y los países, como veremos en los últimos capítulos. No se trata de una cuestión de clases fuertes o débiles —como sostienen Moore (1973) y Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992)—, sino de identidad y existencia como tales clases. En el presente capítulo y en el capítulo 15 distinguiré en Gran Bretaña una pequeña burguesía y una clase trabajadora como actores colectivos, aunque a menudo encontraremos las mismas ocupaciones en ambos grupos. Veamos ahora cómo llegaron a tener estas clases latentes (con cierta significación para la teoría contemporánea) una existencia extensiva y política, aunque parcial e indecisa.

Las clases en la economía, 1760-1820

El capitalismo comercial dominó la vida económica británica del siglo XVIII (Perkin, 1968; Abercrombie, Hill y Turner, 1980: 104 a 119; Hill, 1980). El antiguo régimen, los agricultores y la pequeña burguesía vendían productos en el mercado, y la mayoría de ellos contrataban mano de obra libre. El trabajo forzoso se encontraba en descenso (Kussmaul, 1981). Siglos de cercamientos habían acabado con el derecho a las tierras comunes; la mayoría de los privilegios y restricciones feudales sobre la enajenación quedaron abolidos en 1770. La propiedad privada absoluta se encontraba aún restringida por leyes protectoras de la familia mediante el denominado «*strict settlement*», que obligaba al heredero a ocuparse de sus hermanos y hermanas (Bonfield, 1983). Pero en Gran Bretaña, al contrario que en el antiguo régimen francés, faltaban los «órdenes» privilegiados que gozaban de una propiedad no capitalista.

De 1760 a 1820 triunfó un *laissez-faire* capitalista no burgués, sino del antiguo régimen. Este último promulgó una legislación que apuntaba más al tradicionalismo industrial que al agrario. Desde hacia mucho tiempo los Estados regulaban los salarios, el régimen de aprendizaje y los precios, establecían monopolios y concedían licencias a las grandes empresas, pero en 1820, los salarios, el aprendizaje y las restricciones gremiales fueron suprimidos, y gran parte del comercio internacional quedó libre de los monopolios. La legislación corrió a cargo de un parlamento no reformado, cuyos miembros eran comerciantes o banqueros, terratenientes o profesionales, con intereses mercantiles o bancarios. Prácticamente no contaba con industriales. En 1804, cuando Peel (el Viejo) introdujo la legislación que abolía la regulación gremial, para proteger «la salud y la moral de los aprendices», él debía de ser el único miembro de una Cámara que aún los empleaba. Sin embargo, el término «*laissez-faire*» se adapta mal a un Estado en el que la marina forzó despiadadamente algo muy parecido a un monopolio del tráfico comercial promulgado por las *Navigation Acts*. El más burgués de los Estados, el norteamericano, en vez de someterse al comercio libre internacional, funcionaba con tarifas protectoras. Wolfe emplea con propiedad el término «Estado acumulativo» para describir estos Estados angloamericanos (1977: 13 a 41). Pero podemos decir, de forma más sencilla, que eran capitalistas.

No existió una oposición económica fundamental entre el antiguo régimen y la pequeña burguesía. Las necesidades legislativas comunes

los empujaron a considerar que las fronteras territoriales del Estado delimitaban *su* sociedad civil. Se estaban naturalizando sin saberlo. Gran parte de los «británicos del norte» y de los galeses eran ya claramente «británicos»; no así los irlandeses. El pueblo inglés se estaba convirtiendo en el «más nacional de Europa», según la afirmación de un contemporáneo, que, sin darse cuenta, equiparaba ya lo inglés a lo británico (como continuamos haciendo nosotros desde entonces). Esta identidad nacional y de clase precedió al nacionalismo más abierto de la Revolución Francesa (Colley, 1986: 97, 100; Newman, 1987). El Estado-nación de los propietarios comenzaba a surgir a espaldas de los hombres que lo componían.

Con todo, no faltaron en Gran Bretaña las disputas económicas. Los intereses agrarios y muchas de las industrias favorecían los aranceles protectores, mientras que el algodón quería un comercio libre. Gran parte de las industrias cambiaron de bando, y el conflicto alcanzó su punto máximo en la década de 1840 con las Leyes del Trigo. Hubo también controversias de elevado tono ideológico-moral sobre la Ley de Pobres. El *laissez-faire* imponía una interferencia mínima en los mercados e incentivos de trabajo para los pobres sanos, mientras que muchos sectores del antiguo régimen, en especial la Iglesia, practicaban el paternalismo local. El contencioso sobre la Ley de Pobres se alargó hasta la década de 1830. Pero ninguna de estas disputas produjo un enfrentamiento de clase entre la pequeña burguesía y el antiguo régimen.

¿Existió un conflicto de clase significativo entre ellos? He mantenido que el conflicto nunca fue directo, sino que estuvo mediatizado por la política económica del Estado. Sin embargo, McKendrick, Brewer y Plumb (1982) no están de acuerdo conmigo. Ellos detectan la aparición de un conflicto directo entre la «economía clientelista» del antiguo régimen y el «mercado libre» de la pequeña burguesía, reforzado por la economía de consumo y la alfabetización de las masas. Documentan para el siglo XVIII una oleada de consumo en productos tan diversos como vestidos, loza, libros, simientes para jardines, *utensilios para el afeitado y ataúdes de acero*. «Para la seguridad del muerto ... lo mejor es sepultarlo en hierro» era el insistente lema comercial de las funerarias que explotaban el miedo a los ladrones de tumbas. Esta economía habría entrado supuestamente en conflicto con el clientelismo del antiguo régimen, en el que la dependencia personal de los comerciantes y los profesionales de los notables les impedía ejecutar los créditos contra ellos.

Así pues, Brewer (1982: 197 a 198) afirma: «El estrato medio o la burguesía», «los hombres con bienes muebles, miembros de las profesiones y del comercio» promovían una cierta agitación para sustituir el antiguo régimen por «otro más basado en el mercado y más equitativo en el terreno político»; implícitamente, un enfrentamiento de clase.

El consumo de masas también resultaba subversivo en términos cualitativos, ya que quebraba el estatus de los órdenes del antiguo régimen e introducía medidas cuantitativas de riqueza más sutiles y difusas. Como apuntaba un contemporáneo:

> En Inglaterra los distintos rangos de personas comienzan a desplazarse imperceptiblemente, y un espíritu de igualdad los recorre de arriba a abajo. De ahí la fuerte emulación de los distintos estatus y condiciones para competir entre sí, y la incasable ambición de los rangos inferiores por alcanzar el nivel de los que están inmediatamente por encima de ellos. Esta moda acabará por dominar completamente en aquel Estado, y se expandirá como una epidemia la oleada de lujo y elegancia [Citado por McKendrick 1982: 83, 11].

Plum afirma que la «moda» representaba una ideología de «prosperidad»:

> «Prosperidad» era la palabra más empleada en la Inglaterra del siglo XVIII. De paisajes, jardines, agricultura, ciencia, industria, música, arte, literatura, instrucción laica o religiosa, se decía que prosperaban ... Después de «prosperidad», la frase que mejor expresaba el credo de los comerciantes era «nuevo método», e inmediatamente después, «última moda»... Ciertas actividades bastante sencillas tuvieron su importancia para la aceptación de la modernidad y de la ciencia: el crecimiento de los pepinos o de las aurículas, el cruce de los galgos con los bulldogs, el regalo a los niños de un microscopio o de una baraja de naipes geográficos, la visita al primer canguro que se vio en Inglaterra o la contemplación del ascenso de un globo por el aire...; todo ello tuvo un cometido de primer orden en la mayor revolución que ha conocido la vida de los seres humanos [1982: 332 y 333].

Los historiadores de las ideas se preguntan a menudo por qué no una Ilustración en Inglaterra, como la de Francia o Escocia, y concluyen que Inglaterra era en realidad moderna y no necesitaba una modernización ideológica. Pero Inglaterra era quizás un especie de anuncio publicitario de la Ilustración. La «Ilustración inglesa» no fue tan filosófica ni tan formalmente ideológica, pero el afeitado, el ves-

tido y el entierro de sus muertos situaban implícitamente los principios del mérito, la utilidad y la razón por encima del particularismo del estatus y el privilegio corporativo.

McKendrick y sus colaboradores sostienen que hubo una subversión económica por parte de la pequeña burguesía, no un ataque frontal de clase. Pero ¿cómo pudo el antiguo régimen permitirle que subiera a su barco sin echar por la borda sus propios intereses? Las infraestructuras de la comunicación discursiva resultaron fundamentales para la economía de consumo. ¿Cómo articularon los intereses de clase?

Una revolución del poder ideológico

La alfabetización discursiva experimentó una fuerte expansión en todo Occidente a través de las nueve infraestructuras que hemos enumerado en el capítulo 2. Como en otros casos, las iglesias aportaron el impulso inicial y más duradero, al que la expansión británica añadió la vía comercial del «capitalismo de imprenta». ¿Sirvió esto para separar a la pequeña burguesía del antiguo régimen y crear una identidad de clase aparte, como sostienen McKendrick y sus colaboradores, o, por el contrario, sirvió para integrarlos?

El grado más elemental de alfabetización, la firma en el registro matrimonial, había ascendido durante el siglo XVIII hasta casi el 60 por 100 de los hombres y el 45 por 100 de las mujeres (Schofield, 1981; West, 1985). Era mucho más elevado en las ciudades comerciales que en las industriales o en el campo, especialmente entre los artesanos y los comerciantes (Houston, 1982a, 1982b). Mucho más significativa resultó la expansión de la alfabetización discursiva. Los libros más vendidos eran homilías religiosas, seguidas de novelas moralizantes, sobre todo entre las mujeres; los hombres no leían obras de ficción, sino periódicos, revistas y planfetos. Un librero de Birmingham presumía en 1787 de tener un depósito de 30.000 volúmenes, y de que todos los meses se leían en su ciudad 100.000 libros y panfletos; dos artículos por habitante (Money, 1977: 121). La lectura de textos discursivos y la escritura de cartas se extendió entre las familias de agricultores y de la pequeña burguesía hasta llegar incluso a los criados. Los escritores y editores que sintonizaban con el mercado se afanaban por encontrar mensajes de amplio atractivo social, que en-

carnaran valores universales (Cranfield, 1962, 1978; Watt, 1963; Wiles, 1968; Brewer, 1976: 139 a 153, 1982; Money, 1977; 52 a 79).

Periódicos y revistas se decuplicaron a lo largo del siglo. En principio estaban destinados al antiguo régimen y los comerciantes (el movimiento de los barcos constituía el elemento esencial de la prensa), pero más tarde se propagaron por los estratos más bajos. En la década de 1760 existía prensa en cincuenta y cinco de las ciudades de provincias, y Londres contaba con cuatro diarios, cinco o seis publicaciones trisemanales (que también circulaban en provincias) y muchas más semanales y quincenales. Las ventas anuales de diarios superaban los diez millones (Cranfield, 1962: 175 a 176). Su público lector procedía principalmente de «el benemérito cuerpo de comerciantes y ciudadanos», «caballeros, artesanos y otros», así como de «personas de todos los órdenes y de todos los sexos». La prensa de provincias se mostraba recelosa con la política y apenas contó con columnas de opinión hasta la década de 1790; el cohecho gubernamental aseguraba una circulación más amplia a las ideas conservadoras. Pero la mayoría de los lectores eran aquellos provincianos medios que afirmaban como principio radical «que todo invididuo tiene derecho a conocer los asuntos del Estado» (Cranfield, 1962: 184, 273). En la década de 1770 se vendieron de 500 a 5.000 ejemplares de panfletos breves, y un número mucho mayor de folletos y tiras cómicas. Cada ejemplar de periódico o de panfleto podía ser leído y discutido por un número de personas que oscilaba entre las veinte y las cincuenta.

En 1800 existían unas 600 bibliotecas y clubes de suscripción de libros, que podían contar con 50.000 miembros entre caballeros, profesionales, comerciantes, industriales y artesanos estables. En estas sociedades proliferaban los disidentes, pero escaseaban las mujeres, ya que para ellas la lectura representaba un acto íntimo (Kaufman, 1967: 30 a 32). Mucho más numerosas eran las posadas y tabernas, cafés, clubes, barberías y peluquerías, donde siempre había periódicos, revistas y panfletos que daban lugar a continuos debates. En 1739 Londres contaba con 551 cafés y 654 posadas y tabernas (Money, 1977: 98 a 120; Brewer, 1982: 203 a 230). En muchos de estos establecimientos se mezclaban los rangos: caballeros, profesionales, comerciantes y artesanos educados, y se celebraban rituales de fraternidad (a los que asistían incluso algunas mujeres). Los viajeros de la Europa continental comentaban esta apertura a los grupos medios en comparación con los clubes de sus países de origen.

Había ocurrido algo nuevo; como en los últimos momentos del Imperio romano (véase volumen I, capítulo 10) se expandía una red intersticial de comunicación, centrada en los comerciantes, industriales y artesanos; esta vez con infraestructuras mucho más difusas. El resultado fue una revolución de las relaciones del poder ideológico: un potente vehículo de mensajes a lo largo y ancho de una red difusa, muy difícil de controlar para cualquier régimen autoritario. No obstante, todos los regímenes intentaron ejercer la censura y someter a permisos y restricciones a estas asambleas. Pero los Estados contaban con pocas estructuras que no fueran de exacción de impuestos. Las iglesias pudieron ejercer una censura más eficaz, formal o informalmente, pero ninguno de estos controles fue total. Estas infraestructuras se encontraban a disposición de todos los actores de poder opuestos.

McKendrick, Brewer y Plumb (1982, en especial Brewer) creen que estimulaban una política radical pequeño burguesa, como yo mismo he demostrado respecto a las redes romanas que activaron la capacidad subversiva del cristianismo. Pero los grupos emergentes en Roma no sólo tenían vetado el acceso a la administración imperial, sino también a la cultura oficial y a las formas asociativas de la comunidad. Por tal razón, desarrollaron ideologías contrarias a las oficiales en el Imperio. No existía una segregación semejante en la Inglaterra del siglo XVIII. La pequeña burguesía no estaba completamente privada ni del voto ni de los empleos políticos (como veremos más adelante). Participaba de la misma economía y de la misma cultura, leía la misma literatura impresa, pertenecía a los mismos clubes y discutía las mismas ideas.

Estas estructuras se expandieron a partir de las redes del antiguo régimen, como el consumo de las masas se expandió también a partir del consumo de esa clase. En realidad, discutían doctrinas más igualitarias que las propias del régimen, pero implicaban tres grupos de relaciones de clase: una colaboración nacional del antiguo régimen modernizador con las facciones burguesas y pequeño burguesas; una organización interclasista local y regional, contraria al régimen en algunas zonas industriales nuevas (como Manchester), pero más colaboradora en otros lugares; y una organización de clase pequeño burguesa aliada con los artesanos radicales.

La combinación produjo ideologías ambiguas e «impuras». En uno de sus extremos, nació entre un grupo más bien pequeño de la pequeña burguesía radical —especialmente entre los artesanos inde-

pendientes— un sentido combativo de identidad de clase y de oposición al antiguo régimen. Ellos mismos se identificaban con orgullo en periódicos y panfletos como «clases industriosas». La etiqueta, como las de «nación» y «pueblo», incluía sólo a quienes disfrutaban de educación y medios económicos independientes, y excluía a los trabajadores (aquellos cuya subsistencia dependía de otros). Comprendía a los capitalistas independientes que también trabajaban, fueran maestros o artesanos, en oposición a los rentistas, supuestamente ociosos y parasitarios, a los hombres colocados estratégicamente en los puestos de la administración y a los nababs de las Indias Orientales, que empleaban pasivamente el capital. La «antigua corrupción» explotaba la diligencia de otros y fomentaba la dependencia del patronazgo. El comercio era libre cuando se dejaba en manos del mercado y del trabajo, y corrupto cuando estaba dirigido por el patronazgo particularista. Una publicación radical de Birmingham describía a dos candidatos a unas elecciones con metáforas tomadas de una industria cuyo consumo gozaba de repentina prosperidad: las carreras de caballos. La carrera era en este caso entre «El caballo del señor Kelly, Independencia, logrado con Libertad de Comercio, y el caballo negro del señor Rous, Nabab, descendiente de un condenado árabe, hermano gemelo de la tiranía y la corrupción, al que apuestan lord Jaghire y otros deportistas asiáticos» (Money 1977: 105).

Se trata de una ideología pequeño burguesa, que sugiere a veces una imagen «trascendente» de sociedad alternativa. Newman (1987) muestra que esta ideología de clase se entrelaza con el nacionalismo y el protestantismo, fomentados en ese momento por la rivalidad geopolítica con Francia. Ante los matices cosmopolitas y afrancesados de la cultura del antiguo régimen, el resentimiento pequeño burgués adquirió un tinte nacional. La sinceridad, la franqueza y la laboriosidad inglesas y la sencillez protestante chocaban con el aristocrático lujo católico de una Francia decadente, arrogante y holgazana. La virtud de Inglaterra radicaba en su «pueblo», principalmente en su pequeña burguesía.

Sin embargo, todos estos elementos de ideología de clase no formaban una totalidad, ya que coexistían con otras concepciones más compatibles con el antiguo régimen. Ambas incluían versiones superpuestas de la «constitución protestante». Tras unas feroces elecciones parciales, los industriales y comerciantes de Birmingham arrebataron el escaño del condado de Warwick a la baja nobleza de la zona, pero, inmediatamente, su miembro parlamentario prometió basar

las Leyes y las Libertades de este País en los sólidos principios de nuestra excelente Constitución, impidiendo ... los intentos de abuso e innovación que proponen hombres intrigantes y visionarios, y ... fomentando los intereses comerciales de este vasto Imperio, de los que nuestro condado reivindica una parte tan considerable [Money, 1977: 211].

El texto considera que los intereses de Birminghan y la pequeña burguesía pueden satisfacerse sin salir de la estructura del antiguo régimen «comercial» y de la constitución. Las ideologías alternativas transcendentes no prosperaban con facilidad. En los próximos capítulos veremos que no fue así ni en América ni en Francia.

Tampoco los mensajes morales e ideológicos, basados en principios, que difundían las iglesias y las sectas, eran menos ambiguos. Los disidentes representaban un 10 por 100 de la población y más del 20 por 100 de los que acudían regularmente a las iglesias (Currie *et al.*, 1977: 25). Al principio procedían de las clases pobres y menos educadas, pero poco a poco se implantaron entre la pequeña burguesía y llegaron a contar con numerosos artesanos y modestos hombres de negocios (Gilbert, 1976: 59 a 67). Con todo, las sectas variaban, y algunas estaban compuestas predominantemente por trabajadores. Existía también el movimiento de «disidencia racional», más importante, que editaba panfletos de gran éxito, patrocinaba bibliotecas de suscripción, sociedades literarias y filosóficas, dispensarios y escuelas (Seed, 1985). Algunas sectas, en particular las compuestas por miembros de la clase trabajadora, eligieron el radicalismo político. En general, muchos políticos *whigs* dependían de la disidencia radical para ser elegidos. No obstante, Wesley (un *tory*) y otros muchos líderes religiosos dirigieron sus congregaciones al margen de la política nacional (Ward, 1973: 70 a 104). La disidencia era variada, más implantada en el activismo de la comunidad local que en la política nacional, pero, de ningún modo, un «consuelo religioso» para los oprimidos (como sostiene E. P. Thompson).

La iglesia oficial también se volvió más heterogénea. Aunque gran parte de su jerarquía estaba identificada con la «antigua corrupción», los evangélicos intervinieron activamente en las causas humanitarias, y ocasionalmente en las reformas políticas. Pero las comunidades más activas en el terreno religioso se centraban en la familia y en los intereses de la comunidad local. Este hecho produjo una gran diversidad política y unas ideologías más locales, regionales e interclasistas que de clase. Al igual que otras infraestructuras discursivas, las iglesias

promovieron más la colaboración entre las clases, el regionalismo y el localismo que el conflicto. ¿Hacia qué tipo de Estado se encaminaba esta heterogeneidad política?

La representación y la soberanía política

Todos los Estados europeos habían establecido su soberanía territorial básica hacia el año 1700. Los decretos estatales, los recaudadores de impuestos y los oficiales de reclutamiento abarcaban el territorio. Sus embajadas en el extranjero disfrutaban de un especial estatus «extraterritorial» negociado con otros Estados soberanos; se firmaban acuerdos sobre las fronteras fluviales y las costas; sus generales monopolizaban el poder militar, y sus estadistas, la diplomacia. La soberanía se cohesionaba en torno a la figura del monarca, su familia y su clientela; algo parecido a una «elite estatal», como subraya la escuela elitista de la teoría del Estado examinada en el capítulo 3. Quien ejercía la soberanía, tanto nacional como geopolítica, no era otro que el soberano.

Pero el alcance efectivo de la soberanía era muy corto. Los Estados carecían prácticamente del derecho a interferir en lo que se llamó las relaciones «privadas» de propiedad y no reivindicaban un conocimiento o un significado últimos; de ahí la distinción contemporánea entre el Estado y la sociedad civil. Los poderes infraestructurales del Estado consistían en su mayor parte en un errático ejercicio de la justicia, en el mantenimiento de un orden mínimo, en la recaudación de impuestos y el reclutamiento de soldados y marineros. Apenas existían infraestructuras encargadas de realizar objetivos políticos de mayor alcance, aunque éstos se proclamaban con frecuencia. Para ejecutar una política efectiva, el soberano se veía obligado a colaborar con un amplio entramado político, compuesto por notables semiautónomos de la corte o parlamentarios. Éstos disfrutaban también de derechos de propiedad sobre los cargos estatales y dominaban la administración provincial.

Todo ello prueba que en este periodo no tratamos con un Estado singular y unitario. Su unidad y su cohesión estaban muy reducidas en dos sentidos. En primer lugar, el Estado *total* —la corte, las asambleas parlamentarias y los variados vínculos administrativos— era dual en la práctica. Existían dos Estados, un núcleo formado por una *elite* monárquica, potencialmente autónoma, y un conjunto de redes

radiales que se extendían entre ese núcleo y la sociedad civil, y que yo, siguiendo a Weber, he llamado *partidos*. Los partidos del siglo XVIII organizaron principalmente las relaciones con las clases dominantes y las de éstas entre sí, y, secundariamente, las relaciones con las iglesias y las de éstas entre sí. En segundo lugar, estos partidos produjeron un Estado polimorfo, cristalizado en formas plurales tales como redes de partidos que se apoyaban tanto en instituciones internas al Estado como en instituciones externas a él, a las que movilizaban para obtener un mayor grado de influencia. Cuanto mayores eran la variedad y los objetivos de las funciones estatales, más eran los partidos y más polimorfo el Estado. Los partidos y las funciones estatales del siglo XVIII fueron relativamente pocos; sin embargo, hubo partidos «excluidos» y partidos «integrados», partidos «de la corte» y partidos «del país», que mantenían conflictos con las elites y entre sí. Puesto que las iglesias transnacionales se implantaron en el plano local más que los Estados, la intervención estatal en materia religiosa había producido la mayor agitación política y las mayores presiones por la representatividad a lo largo del siglo XVII. Pero ahora, tanto la sociedad europea como la colonial eran bastante apolíticas.

Los notables, por el contrario, estaban bastante politizados. En las monarquías despóticas, la corte y la administración real eran *la* institución política donde interactuaban las elites y los partidos. En los regímenes más representativos, los cortesanos se hallaban subordinados a los partidos de notables parlamentarios. A lo largo del siglo XVIII el Estado británico desarrolló una forma embrionaria de democracia de partidos. Su poder despótico estaba limitado por los derechos administrativos, legales y políticos que disfrutaban sobre todo las clases dominantes y la iglesia oficial. Desde el punto de vista legislativo (no tanto desde el administrativo) era un Estado bastante centralizado, en el que la soberanía residía simbólicamente en el «rey con el Parlamento», donde los partidos competían abiertamente, aunque los ministros reales podían «comprar» con facilidad una mayoría parlamentaria. Sólo al acabar el siglo pudo ganar las elecciones y formar gobierno un genuino partido de oposición.

La soberanía efectiva, respaldando la doctrina constitucional con un poder infraestructual realmente estatal para penetrar en los territorios y movilizar los recursos, residió, pues, en la colaboración entre la elite estatal y las redes de partidos. El Estado británico organizó la situación, entre otras, de la forma que indica el cuadro 4.2.

CUADRO 4.2. *Las relaciones de los Estados con las clases dominantes y el clero durante el siglo XVIII*

	Relaciones infraestructurales con las clases dominantes y el clero	
Poder despótico	Centralizado	Descentralizado
Alto	Prusia	Austria, Francia
Bajo	Gran Bretaña	Colonias americanas

Las elites estatales británicas y más recientemente las prusianas habían centralizado sus relaciones con los partidos de las clases dominantes y el clero, atrayéndolos así al Estado. Aunque la base del poder de las clases dominantes continuaba siendo local, algunas organizaciones colectivas tenían un carácter central: en el caso de Prusia, dentro de la administración real (y cada vez más en las universidades); en Gran Bretaña, dentro del Parlamento y a través de la «propiedad» de los cargos. Por el contrario, los poderes de los notables y las iglesias de Austria se expresaban con mayor autonomía a través de las dietas y las administraciones provinciales, independientes en su mayor parte de la administración real. En cuanto a Francia, estaban organizadas al margen de las instituciones monárquicas, y disfrutaban de una exención privilegiada de las obligaciones políticas. Esos Estados centrales estaban más controlados por una «elite» dinástica que por la elite estatal y los «partidos» clericales de clase.

Así pues, el poder infraestructural de los Estados del siglo XVIII se correspondía menos con el despotismo de la elite dinástica que con la habilidad para coordinar centralmente las relaciones de partido que implicaban a las clases dominantes. En el capítulo 11 veremos que los Estados británico y prusiano del siglo XVIII podían apartar una elevada proporción de la renta nacional para los gastos estatales. Prusia era absolutista; Gran Bretaña no. La diferencia decisiva con Austria y Francia no dependía de su grado de poder despótico, sino más bien de la inserción de aquellos Estados en la organización colectiva de las clases dominantes. Sus elites estatales eran de hecho menos autónomas. Las elites estatales austriacas y francesas disfrutaban de una mayor autonomía; se mantenían «suspendidas» por encima de sus respectivas sociedades civiles, y relativamente aisladas de ellas. A despecho de las polémicas entre los partidarios de las teorías de clase y del elitismo auténtico, los Estados son *simultáneamente* actores

centralizados y lugares en los que se coordinaban las relaciones de la sociedad civil. Como en muchas épocas y lugares, la autonomía estatal del siglo XVIII comportaba más debilidad que fuerza.

Esto significa también que las instituciones estatales austriacas y francesas debían de ser menos adecuadas para hacer frente a las nuevas presiones que llegaban desde sus respectivas sociedades civiles. Los Estados británico y prusiano disfrutaban de instituciones centralizadas que «representaban» directamente a las clases dominantes y a las iglesias. Así, cuando la sociedad civil comenzaba a generar presiones nuevas y mayores, éstas podían penetrar, a través de los partidos, directamente en las instituciones centrales del Estado. En Prusia, tales presiones penetraron a través de las instituciones administrativas. En Gran Bretaña lo hicieron en mayor medida a través del Parlamento y su democracia embrionaria de partidos. Pero, ¿a quién representaba el Parlamento?

¿Separó la cristalización representativa del Estado al antiguo régimen de la pequeña burguesía y contribuyó a crear un conflicto entre las clases? La mayoría de los hombres de la pequeña burguesía se encontraban excluidos del voto y de los cargos administrativos (y, por supuesto, todas las mujeres); los conflictos que llevaron a la promulgación de la *Great Reform Act* en 1832 se describen con frecuencia como una lucha de clases. Pero las instituciones políticas británicas eran particularistas. Unos 500.000 varones ricos (el 15 por 100 de los hombres adultos) podían votar y desempeñar cargos públicos. Las desigualdades del sufragio se basaban en la costumbre y la geografía tanto como en la discriminación de clase. Los electorados municipales oscilaban entre los 12.000 contribuyentes de Westminster y el electorado cero de Old Sarum, cuyo patrón podía asignar el escaño a su gusto. En 1830 los cincuenta y seis escaños municipales de los patronos y las corporaciones se correspondían con unos cincuenta votantes; sin embargo, cuarenta y tres de ellos tenían más de 1.000 votantes; y siete, más de 5.000. El irregular crecimiento de la población dejó a las ciudades más nuevas como Birmingham, Manchester y Leeds sin representación, aunque sus poseedores de feudos francos de cuarenta chelines pudieron votar en los distritos electorales del condado circundante. La región peor parada fue Escocia, con sólo 4.500 votantes; sin embargo, el sufragio galés era mayor que el inglés (Brock, 1973: 20, 312).

De modo que el sufragio era, en realidad, muy confuso. Los pequeño burgueses con mayores propiedades constituían un electorado

muy variable; el resto quedaba excluido en las nuevas ciudades industriales, y los artesanos, en casi todo el territorio; los antiguos puertos, las ciudades de los condados y las ciudades pequeñas presentaban aún mayores variaciones. Únicamente una minoría se beneficiaba del derecho al voto, pero los «virtualmente representados», a través de la participación en las antiguas redes segmentales de patronos y clientes, eran muchos más. Y muchos de ellos podían operar con comodidad a través de los «partidos» existentes, como ya hemos visto en el caso de Birmingham y el condado de Warwick. Por esa razón, los mensajes que fluían a través de las redes de comunicación de la pequeña burguesía podían airearse en el parlamento. No era fácil para ellas encarnar los elevados principios políticos de las clases excluidas.

Así pues, incluso los radicales sintieron la atracción de las dos políticas rivales. En principio existía una tradición de lucha por los derechos civiles (individuales) de ciudadanía, centrada en el parlamento, los tribunales de justicia y la disidencia protestante; los dos primeros dentro del régimen, el tercero en su periferia respetable. Tenían la posibilidad de aliarse con las facciones parlamentarias de «excluidos», con los abogados y con el chovinismo popular, según el cual los ingleses no eran ni «esclavos» ni «papistas», ni llevaban «abarcas» como en los países menos libres. Disfrutaban de una libertad por «derecho de nacimiento», reconocida incluso por el régimen. Blackstone, el jurista, definía la libertad del individuo en términos de ciudadanía civil: libertad personal y propiedad privada, ejecutables incluso contra el rey, contra los grandes y contra cualesquiera otros, principalmente en los tribunales de justicia y mediante la petición al parlamento y a la corona de la reparación de los agravios (Gash, 1986: 11). En segundo lugar, si esto resultaba insuficiente, los radicales de la pequeña burguesía podían reivindicar la «reforma», es decir, la ciudadanía política para el «pueblo». Pocos eran los que querían una «democracia» plena. Su único deseo consistía en una cualificación según la propiedad que brindara a todos los hombres independientes un «interés en la nación» y en una democracia de partidos soberana aunque limitada.

Ambas retóricas se desarrollaron irregularmente en el plano local y regional, donde competían por el apoyo de las clases emergentes. Mientras que la pequeña burguesía de Birmingham se encontraba dividida entre las dos, la de Manchester y Sheffield se sentía más atraída por la reforma. No estamos, sin embargo, ante el «talento para el compromiso» típicamente británico. En realidad, Gran Bretaña era

constitucional porque había concedido una serie de derechos universales mínimos (predominantemente civiles), pero la división y, en ocasiones, el compromiso de las ideologías de clase potencialmente subversivas fue ante todo la involuntaria consecuencia del gran desorden que imperaba en el sufragio británico. Hasta ahora hemos encontrado un escaso contenido económico en el resentimiento de clase. La mayor parte de los intereses de la pequeña burguesía parecían satisfechos por un Estado que, sin embargo, «no era representativo»; pero se trata de una apariencia engañosa porque aún no he analizado la economía política del Estado.

¿Podría haberse prolongado mucho más el antiguo régimen? En otros países, la política segmental de patronazgo tuvo una larga vida. Mouzelis (1986) observa que la comercialización y la urbanización en Latinoamérica y los Balcanes desarrollaron unas instituciones casi parlamentarias que sobrevivieron durante mucho tiempo antes de la industrialización. Las oligarquías tradicionales sufrieron el ataque de unas clases comerciales ascendentes, poco poderosas para hacerse con el poder del Estado pero capaces de crear un cierto desorden. Las oligarquías desarrollaron dos estrategias de incorporación segmental: el clientelismo y el populismo. El carácter particularista del clientelismo se amplió, de modo que las oligarquías locales «hablaban» por sus clientes con una mayor base popular, y aquellos líderes populistas que demostraron la capacidad de convencer a las masas fueron admitidos a compartir el poder. Mouzelis sostiene que este tipo de política continúa predominando en los regímenes parlamentarios de los países semidesarrollados, pero cree que la uniformidad de la comercialización y la industrialización inglesas creó una sociedad civil demasiado poderosa para el régimen y unas clases demasiado poderosas para el patronazgo.

El clientelismo decayó en Gran Bretaña (aunque nunca llegó a desaparecer), y el populismo nunca tuvo importancia. ¿Fue la decadencia de la organización segmental y al ascenso de una organización extensiva y política de clase el inevitable resultado de procesos evolutivos y revolucionarios profundamente arraigados? Trataré de aportar una respuesta cualificada, comenzando por apuntar que las teorías evolucionistas (o revolucionarias) explican la política en términos de desarrollo económico y de clase, mientras que descuidan la singularidad de cada Estado.

Los Estados europeos fueron bastante débiles durante mucho tiempo. Incluso en el siglo XVIII, su práctica y sus objetivos continua-

ron siendo bastante limitados. El rey inglés con el parlamento encabezaba la iglesia oficial, dirigía la política exterior, defendía el reino (especialmente en Irlanda), promulgaba leyes, imponía un mínimo de orden público y de caridad y recaudaba impuestos. Puesto que la Iglesia disfrutaba en la práctica de una amplia autonomía, su cúpula jerárquica se dormía en los laureles. La política exterior no solía afectar al territorio continental británico. El reino no se sintió amenazado después de 1745; sobre Irlanda existía en el resto del territorio un consenso básico; la defensa se confiaba a una marina estacionada en el extranjero; el orden público y la caridad quedaban en manos de las autoridades locales, laicas y religiosas.

De modo que el grueso de la legislación era particularista, como demuestran las leyes aprobadas en 1763-1764. Las «*Private acts*» permitieron, por ejemplo, a los albaceas de John Newport arrendar su hacienda cuando se volvió loco y disolver el matrimonio de John Weller. Pero no eran mucho más amplias la mayoría de las «leyes públicas». La legislación de los impuestos determinaba la exacción de 2 peniques escoceses o 1/6 de libra esterlina sobre cada pinta de cerveza vendida en Dunbar, así como las aduanas generales y los impuestos sobre el consumo y las ventas. El orden público se ocupaba tanto de reconstruir la carretera de Shillingford a Reading como de renovar la Ley de Motines. De los 176 estatutos de esta sesión, 145 se referían a asuntos locales y personales (Gash, 1986: 14). Unos cuantos fueron aplicados por las burocracias centralizadas, y muchos más por los notables locales que disfrutaban de cargos públicos (a menudo en propiedad) y podían movilizar relaciones segmentales de patronazgo con su clientela. Las relaciones del Estado con los intereses de clase eran problemáticas, ya que aquél apenas tenía poder infraestructual para intervenir en el desarrollo económico general o en la regulación de las luchas de clase.

¿Por qué habrían podido desear las masas excluidas una participación en ese Estado particularista, cuando apenas lo habían hecho antes, excepto en aquellos momentos en que se movilizaron por ideologías religiosas? Las clases capitalistas emergentes demostraron poco interés al principio, pero cuando lo hicieron, lo que vinculó al Estado con la lucha de clases fue un hecho que entonces recibió el nombre de «reforma económica». Ello nos conduce al núcleo particularista de las instituciones estatales del siglo XVIII, y nos aleja de la concepción según la cual el puro conflicto económico o de clase ha de politizarse inevitablemente.

La economía política del Estado

Los Estados del antiguo régimen no eran sólo políticos, sino también económicos. Distribuían el patronazgo económico; recaudaban impuestos y tomaban préstamos. Ingresos y gastos beneficiaban financieramente a quienes controlaban el Estado y gravaban a quienes no podían hacerlo. Lo que impulsaba a desarrollar una actividad política era el acceso al reparto de los cargos, a las condiciones de los bonos del gobierno y a los privilegios en materia de exención de impuestos. La exclusión de todos estos beneficios en un periodo de aumento de los gastos estatales fomentaba los deseos de reforma y activaba las redes de alfabetización discursiva que la reivindicaban.

La venta de cargos, de la recaudación de impuestos y de privilegios económicos era menor en Gran Bretaña que en Francia. Pero en lo que atañe a los gastos, las prácticas se asemejaban bastante, aunque a una escala menor. Es probable que la mitad de los 16.000 cargos públicos del Estado se distribuyeran por el sistema de patronazgo. Los patronos políticos asignaban a sus familiares y clientes los mejores beneficios eclesiásticos. En cuanto a la promoción dentro del ejército y la armada, era más rápida para un oficial que tuviera un padrino poderoso. El gobierno cedía privilegios y monopolios para el comercio colonial. Los miembros de las Cámaras ayudaban, pero la merced de los ministros del rey resultaba más eficaz, ya que los reyes de la casa de Hannóver se convirtieron en la principal fuente de los oficios y honores, que examinaban personalmente.

En cuanto a los ingresos, Gran Bretaña no era un Estado en exceso corrupto, pero sí regresivo. Una cuarta parte eran préstamos (especialmente en tiempos de guerra), según un sistema de crédito nacional organizado por el Banco de Inglaterra a partir de 1697. La recaudación fiscal aportaba el resto, sobre todo a partir del comercio, mediante las tasas aduaneras y los impuestos sobre el consumo y las ventas, respaldados por la fiscalidad sobre la tierra (véase cuadro 11.6). El sistema permitía pocas excepciones, pero beneficiaba a los encargados de obtener los ingresos. No obstante, cabían ciertas elecciones políticas entre los impuestos sobre la tierra, a costa directamente de los terratenientes (e indirectamente de los trabajadores y arrendatarios), las aduanas y los impuestos sobre el consumo y las ventas, que gravaban ostensiblemente los intereses comerciales, aunque también afectaban a las masas por su carácter regresivo, ya que se recaudaban a partir de productos de primera necesidad, y el crédito,

que beneficiaba a los ricos con capacidad de ahorro a expensas de todos los demás, que no la tenían. El carácter regresivo aumentaba en tiempos de guerra, pero no disminuía con el fin de los conflictos, pues los impuestos debían mantenerse elevados para pagar a los titulares de bonos. Todas estas circunstancias dividían a las clases y a los sectores, que defendían su propio interés en términos constitucionales y de principios.

En un principio, los asuntos fiscales alimentaron un embrión de democracia de partidos, no a través de las clases disidentes sino de los partidos segmentales de los «excluidos» y los «integrados». La lucha de facciones había generado ya ideologías basadas en principios, tanto religiosas como de la «corte» y del «país», pero todas ellas decayeron a lo largo del siglo XVIII. Los disidentes y los católicos quedaron «marginados». Aunque estaban desapareciendo las restricciones del voto, los católicos fueron descartados del cuerpo legislativo, y ambos, católicos y disidentes, de los cargos públicos y las universidades (y por tanto, del derecho y la medicina). Pero, salvo esta excepción, el conflicto del rey, de su mayoría permanente en la Cámara de los Lores y de su facción ministerial en los Comunes contra la oposición de esta última Cámara se concentraba más en el patronazgo que en los principios. A medida que las ideologías se debilitaban, el patronazgo local y regional acaparaba más distritos electorales. Las elecciones reñidas disminuyeron y la concurrencia a las urnas decayó entre 1715 y 1760. Luego, comenzó a recuperarse, por razones que explicaré (Holmes, 1976; Speck, 1977: 146 y 147, 163; Clark, 1985: 15 a 26). Antes del decenio de 1760 la política de los partidos segmentales que protestaban por los abusos, aunque potencialmente más basada en principios, «excluía» a las clases y a las religiones que se mantenían al acecho desde fuera.

El mayor partido de los Comunes comprendía de 200 a 250 «excluidos», caballeros independientes del campo, sin acceso al expolio nacional aunque con la posibilidad de obtener empleos locales como jueces de paz y comisarios de impuestos sobre la tierra. Estos grupos favorecieron los impuestos bajos y denunciaron la corrupción ministerial y el «despotismo». Sin embargo, contaban también con una facción de los antiguos *tories* y apoyaron a la Iglesia y al rey contra los «radicales». Venían luego los casi cien miembros de los partidos de la corte y el tesoro: funcionarios, cortesanos, grandes comerciantes, abogados y oficiales del ejército en busca de ascensos, sinecuras y honores, de los cuales, muchos ofrecían su lealtad a los ministros y al

rey. Finalmente, estaban los 100 ó 150 activistas políticos, líderes de las facciones de terratenientes y su clientela, que proporcionaban ministros y oradores, los hombres famosos de la época. Pocos de ellos reivindicaban principios consistentes, como hizo Edmund Burke. Muchos llegaron a articular ciertos principios al generalizar los problemas de los cargos o de la exclusión de ellos y de los intereses de la renta. Representaban quizás a unas 200 familias dominantes. Los independientes representaban de 5.000 a 7.000 familias de la baja nobleza y, junto con el partido del tesoro, a las 3.000 ó 4.000 familias de ricos hombres de negocios, comerciantes y profesionales. En total, los partidos representaban directamente los intereses materiales de quizás un 1 por 100 de las familias británicas (Smith, 1972: 68 a 102).

Tales partidos competían, por lo general rutinariamente, por el apoyo de un 15 por 100 de los varones con derecho al voto. El 85 por 100 restante eran o bien gentes sin ningún poder o bien sus clientes segmentales. No se trataba de una democracia, pero tampoco carecía de una contestación política institucionalizada. Como observa Dahl (1971), el fenómeno tiene una extraordinaria importancia porque siempre ha constituido el primer paso hacia la conquista de la democracia. Gran Bretaña contaba, pues, con los rudimentos de una democracia de partidos. Conviene no olvidar, sin embargo, que el 85 por 100 marginado no se definía simplemente por la clase. De modo que la contestación institucionalidad no estaba cerrada por completo a las clases en ascenso. Pero, de momento, los partidos y las clases emergentes demostraban un escaso interés mutuo.

El gobierno dependía de los candidatos de los partidos a través de lo que he llamado en el capítulo 3 «inserción particularista». Los ministros del rey debían preservar el botín de la corte y el tesoro, sobornar a las facciones «integradas» y satisfacer al mismo tiempo a las «excluidas» con impuestos bajos, éxitos nacionales y adhesión a la Constitución protestante, y al mismo tiempo impedir que cundiera un excesivo descontento entre los «marginados». Muchos gobiernos lo hicieron bastante bien y conquistaron la admiración de toda Europa por su estabilidad, su modernidad y su equilibrio. Pero todas estas cualidades progresaron porque las facciones institucionalizaron y encarnaron la corrupción. Se trataba, en efecto, de la «antigua corrupción».

Y sólo se denunció como tal cuando coincidieron dos formas de presión: las presiones fiscales del militarismo y la aparición de ideologías que vinculaban los problemas a la marginación política. De 1760

a 1832 convergieron en la reivindicación de la reforma política y económica, intensificando las luchas entre los partidos, que se hicieron menos segmentales, casi clases dirigidas por ideólogos defensores de principios. Las presiones fiscales y militares llegaron en tres oleadas: las consecuencias de la guerra de los Siete Años, la Revolución Americana, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Durante estos momentos bélicos, incluso muchos miembros del antiguo régimen formaron grupos de presión partidarios de un Estado más moderno. Sometidos a las presiones geopolíticas, sus principios modernizadores se sumaron a los principios prácticamente marginados de la pequeña burguesía, que propugnaba la «nación sin puertas».

Guerra y reforma, 1760-1815

Cara al exterior, el Estado británico era esencialmente militarista. Las guerras engrandecieron a Inglaterra. La guerra de los Siete Años se saldó en 1763 con un éxito glorioso y un gran Imperio. La pérdida de las colonias americanas de 1776 a 1783 quedó compensada por el triunfo final en la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que se prolongaron de 1792 a 1815. Estas guerras masivas produjeron los efectos históricos normales sobre las finanzas estatales que he documentado en el Volumen I; en el caso de Gran Bretaña, los mejores de su historia, ya que la convirtieron en una gran potencia imperial. Al empezar las guerras se duplicaron los gastos; al principio debido únicamente a los costes militares. Más tarde, hubo que asumir los reembolsos de la deuda hasta mucho después de la llegada de la paz. Las secuelas de la guerra volvían a instalarse, pero siempre a un nivel superior al de los tiempos de paz. Durante el periodo, el Estado multiplicó por tres su tamaño financiero, más del doble del crecimiento económico nacional. Como muestra el cuadro 11.3, en tiempos de paz el Estado central británico recaudó alrededor del 11 por 100 de la renta nacional; durante las guerras, al menos el 22 por 100, y en el caso de las napoleónicas, más del 30 por 100. Muchas exacciones eran, además, regresivas y divisionistas, mediante préstamos e impuestos indirectos.

¿Por qué no fue capaz de adquirir importancia para la sociedad civil este Estado militarista? Las súbitas oleadas crearon problemas políticos más agudos que los que la lenta Revolución Industrial pudo plantear al Estado. Sin embargo, éste consiguió el dinero suficiente

para ganar las guerras, y la derrota en América del Norte no se sintió demasiado dentro de casa. Los conflictos bélicos nunca produjeron una bancarrota real del régimen, como ocurrió en las colonias americanas, en Francia y en algunas provincias austriacas. En términos comparativos, la crisis fiscal-militar fue sólo moderada, al igual que en Prusia. La razón estriba en que los partidos estaban ya institucionalizados en los cuerpos soberanos de este Estado con capacidad de decisión, y en que, sometidos a presión, pudieron plegarse y ampliarse sin romper el Estado. Incluso el militarismo pudo gestionarse con una democracia de partidos rudimentaria pero soberana.

Las presiones moderadas produjeron moderadas reformas políticas en dos fases. El propio régimen se vio implicado por los costes durante la guerras y se acogió a las reformas para aumentar la eficacia administrativa y fiscal. Durante las guerras victoriosas, los contribuyentes protestaron, pero pagaron impuestos extraordinarios. Los reformistas radicales no aparecieron hasta la segunda fase, con la guerra acabada, cuando los contribuyentes tuvieron que subsidiar a los titulares de bonos. El nivel de impuestos no subió mucho durante el periodo en proporción al producto nacional bruto (lo hicieron, sin embargo, los ingresos totales), pero el carácter especialmente regresivo de la fiscalidad como consecuencia de la guerra elevó la parte correspondiente a las clases medias y pobres. El resultado fue el descontento popular.

Tanto si procedían de los «integrados» del antiguo régimen como si pertenecían a los «excluidos» o a los «marginados», más radicales, los reformistas difundían mensajes y principios a través de las redes interclasistas de poder ideológico, hasta fomentar un movimiento por la reforma económica en los propios aledaños del régimen. Los «integrados» buscaban en las mejoras administrativas un modo de reducir costes; los «excluidos» maldecían la corrupción y el particularismo; los «marginados», estimulados por el faccionalismo de quienes estaban por encima de ellos, pidieron el control popular de la fiscalidad. Como veremos en el capítulo 15, los «marginados» se enfurecieron cuando los impuestos se hicieron más regresivos. El Estado y la clase no habían preocupado en exceso a los hombres de mediados del siglo XVIII; pero en 1815 el Estado importaba ya mucho y estaba organizando la explotación de clase a escala nacional. La exacción fiscal-militar condujo a la lucha de clases política y nacional.

Las guerras presentaban una gran variedad en popularidad e ideología. La de los Siete Años fue un conflicto tradicional entre grandes

potencias gobernadas por reyes dinásticos. Tuvo una motivación ligeramente religiosa, sobre todo entre protestantes y católicos. Pero, al contrario que las posteriores, no implicó ideologías políticas divisorias. La racionalidad instrumental de los participantes la convirtió en una «guerra limitada» (Mann, 1988b). En Gran Bretaña, el «pueblo» de los propietarios la sostuvo; la «plebe» no pasaba de tener una organización local. La práctica política sólo se interesaba por la estrategia o por si la paz se había buscado con demasiada prisa, las cargas se aceptaron de mala gana hasta el final de la guerra, pero cuando acabó, a mediados de la década de 1760, los «excluidos» y los «marginados» reivindicaron un gobierno más barato. Cuando vieron que no llegaba, denunciaron la corrupción. Algunos exigieron incluso una reforma del sufragio. Los ministros respondieron aumentando el patronazgo y la coerción. En una palabra, añadiendo el lema del despotismo.

El condado de Middlesex disfrutaba de un electorado amplio, y tenía a John Wilkes como miembro parlamentario. En 1763 fue arrestado por publicar libelos sediciosos. Acogiéndose al privilegio parlamentario, con el apoyo de las facciones «excluidas», desafió con éxito su arresto mediante varias victorias legales contra el hostigamiento de la prensa gubernamental y forzó la publicación de los debates de la Cámara de los Comunes. Aunque centrado en los derechos civiles del ciudadano, Wilkes puso en marcha una organización nacional de amplio apoyo urbano a la reforma electoral, la reducción de los parlamentos, la exclusión de los poseedores de cargos de los Comunes y la limitación de la autoridad ministerial. A principios de la década de 1770 apoyó a los rebeldes americanos. El liderazgo de Londres

> se manifestaba en los propietarios de periódicos, los editores de tiras cómicas, los inventores de ingenios, los cerveceros y propietarios de tabernas, en los hombres de negocios y en todos aquellos cuya concepción de la política difería sustancialmente de la que sostenía la elite. Gracias a Wilkes, estos hombres ... de escasa significación política antes de 1750, la adquirieron durante la década de 1760 [Brewer, 1976: 268; *cf.* Christie, 1962].

Los agentes del gobierno declaraban alarmados que Wilkes contaba con el apoyo de «discretos y prudentes maestros del comercio y la artesanía» (Christie, 1982: 75). Ni la organización de Wilkes ni, más tarde, la de Wyville abundaron en artesanos u obreros corrientes. El núcleo de la de Wilkes estaba formado por pequeños burgue-

ses, comerciantes modestos y medianos y tenderos de Londres y de otras ciudades comerciales, así como por poseedores de feudos francos no menos modestos en los distritos urbanos y rurales. Sin embargo, la agitación se extendió con frecuencia hacia los estratos bajos. Muchos de los arrestados entre la muchedumbre londinense eran artesanos y trabajadores, que a menudo protestaban también por conflictos laborales (Rudé, 1962: 172 a 90, 220 a 223). Ambos, el «pueblo» y la «plebe», comenzaban a movilizarse, pero aún no lo hacían juntos.

La organización de Wilkes se concentraba en la alfabetización discursiva, que comprendía la distribución de folletos, panfletos y peticiones impresas. En 1769, 55.000 habitantes de quince condados y doce municipios firmaron una petición para que se le excarcelara. Wilkes movilizó las ciudades; una facción «excluida», los *whigs* de Rockingham, movilizó los condados. El régimen se vio obligado a imitarlos, extendiendo sus propias iniciativas publicitarias y sus propias peticiones. Las facciones *whigs* y los ministros competían por el apoyo popular. Los *whigs* coqueteaban con los radicales excluidos proponiendo reformas económicas. En la década de 1790 ambos bandos recurrían a tácticas de movilización de masas en Manchester (Bohstedt, 1983: 100 a 125). El primer público masivo de la historia se activó en la sociedad extensiva británica (y en la americana; véase el capítulo 5).

Wilkes se esfumó en 1779, tras obtener una provechosa sinecura como chambelán de la ciudad de Londres, que le convirtió en un «integrado». Su organización siempre había pecado de ambigüedad por adherirse a los dos cauces de reforma que ya hemos visto: la prensa popular, las peticiones y las masas, por un lado, y la ley y el parlamento por otro. Éste podía aumentar la ciudadanía civil, pero temía a la muchedumbre y a la extensión del electorado. Los abogados ingleses, al contrario que la mayoría de los franceses y los americanos, no eran radicales. Defendían la costumbre y el precedente. Estaban dispuestos a asegurar los derechos dentro de la antigua Constitución, pero nada más; en eso ha consistido el papel generalmente conservador de la ley británica desde entonces. De modo que el movimiento de Wilkes era contradictorio, y los radicales pequeño burgueses espantaron a los «excluidos» simpatizantes. Cuando llegó la paz, en la década de 1770, descendieron los gastos y el descontento.

Al principio, la guerra americana benefició al gobierno. Pero en 1779 los ejércitos británicos fracasaron; Francia había declarado la

guerra y el movimiento de los Voluntarios Irlandeses amenazaba con la rebelión. La guerra imponía de nuevo una fiscalidad regresiva, interrumpía el comercio y parecía gestionada de modo incompetente (aunque la logística de una línea de abastecimiento de casi 3.000 kilómetros habría representado un terrible esfuerzo para cualquier Estado contemporáneo). Los impuestos volvieron a echar leña al fuego de la reforma económica. Las redes discursivas volvieron a activarse. El dueño de uno de los numerosos cafés y tabernas de Birmingham anunciaba un debate en su establecimiento en versos evocadores del conflicto entre los contribuyentes y los titulares de bonos. Las palabras que él mismo subrayó eran los conceptos básicos de un movimiento en los Comunes contra la guerra:

> ...
> por el bien de la patria no quiero la guerra.
> Del impuesto aún me queda la mitad por pagar,
> y aunque *siempre trabajo, nunca veo el final.*
> Mas aquellos que del préstamo conocen la dulzura,
> con el mismo trabajo vivirán con más holgura.
> [Money, 1977: 104]

Esta guerra, al contrario que la de los Siete Años, fomentó los principios. Los rebeldes americanos añadieron a su tradicional oposición al despotismo la exigencia de derechos contractuales universales. Y su petición encontró eco en la experiencia de mercado de los propietarios, en la moral protestante y en los derechos civiles establecidos. Los colonos clamaban: «No a los impuestos sin representación». El régimen adujo que los contribuyentes disfrutaban de una «representación virtual», ya que los miembros del parlamento representaban a los hombres de la independencia y con ello, indirectamente, a toda la nación (Brewer, 1976: 206 a 216). Los *whigs* de Rockingham y de Chatham, cuya larga exclusión de los cargos favorecía la adherencia a los principios, propusieron reducir la influencia de la corona mediante una mezcla de reformas económicas y electorales, que excluían a los contratistas del gobierno de los escaños de los Comunes y despojaban del sufragio a los funcionarios encargados de los ingresos.

El segundo movimiento radical, la asociación dirigida por el reverendo Christopher Wyville, surgió en 1779-1780 (Christie, 1962). Los comités de correspondencia de casi cuarenta condados y munici-

pios organizaron peticiones de reforma económica, movilizando a los propietarios «integrados» y «excluidos». Parece que Wyville dependió más de los radicales religiosos que Wilkes; él mismo consideró haber recibido un gran apoyo de los disidentes. Se unió a los radicales para reclamar elecciones anuales y cien circunscripciones nuevas en los condados. Pero estos actos preocuparon a los aliados *whigs* de Rockingham, y a varias de sus propias asociaciones en los condados. Ni siquiera un líder tan astuto podía disimular estas grietas. Los «excluidos» renunciaron, dejando el asunto en manos de los radicales «marginados» urbanos. Acabaron con ellos las revueltas de Gordon de junio de 1780, entregadas a la quema y el pillaje, en teoría para defender la constitución protestante contra los católicos. El miedo unió a los propietarios, que se comprometieron con las reformas menores, pero dieron marcha atrás respecto a la reforma electoral.

La Revolución Francesa resucitó la reforma y la alfabetización discursiva radical, tipificada en una organización de masas: la Sociedad para la Información Constitucional. Los *Derechos del hombre* de Tom Paine, publicados en 1791, habían vendido hacia 1793 la extraordinaria cifra de 200.000 ejemplares. Pero la ejecución de Luis XVI, el Terror y las victorias de los ejércitos revolucionarios alejaron a los «excluidos» y a los «marginados» con mayor poder económico. El movimiento por la reforma tuvo que refugiarse en las sociedades de correspondencia artesanas, pero el patriotismo de los momentos de guerra las redujo a un papel insignificante. Con el ejemplo francés ante sus ojos, las disputas entre los partidos del régimen ya no podían basarse en principios. Fue precisamente el éxito de la Revolución Francesa lo que hizo imposible una revolución burguesa o pequeño burguesa en Gran Bretaña. Los panfletos populares se congratulaban de que Gran Bretaña hubiera conquistado la libertad y el progreso sin violencia y sin igualación. Como declamaba en 1793 el *Anti-Gallican Songster*:

> Tenga la Vieja Inglaterra contento y felicidad,
> propiedad, libertad, y ninguna igualdad.
> [Dinwiddy, 1988: 62]

El ascenso de Bonaparte disminuyó el temor a la revolución, pero empeoró el peligro geopolítico. Como en Francia, la guerra que financiaban las masas se estaba haciendo nacional. Aparecieron algunos nacionalismos molestos con la administración estatal corrupta y

particularista. Los ministros intentaron economizar. Las reformas escalonadas de Pitt disminuyeron la «antigua corrupción» de los ministerios encargados de la guerra. El patronazgo sobrevivió en la abogacía, la Iglesia, la Compañía de la India y otras sinecuras, desde los *Cinque Ports* a la *Banda de los Pensionistas del Estado*, que antes constituían la ciudadela estatal, y ahora, sus escondrijos y sus grietas. Era difícil defender la corrupción con la modernización de esa ciudadela en marcha. Lord Eldon, dirigente conservador, se lamentaba: «Tóquese un átomo y se perderá todo el conjunto». El régimen venía a aceptar la burocracia, la responsabilidad y la uniformidad nacional (Rubinstein, 1983). El Estado-nación se estaba construyendo gracias a la reforma económica impulsada por la guerra (véase capítulo 13 para los detalles de la administración).

Sin embargo, la pesadilla francesa quebró el vínculo entre la reforma económica y la reforma electoral. El partido *whig* de Foxite, que llevaba dos décadas excluido del poder, planteó una oposición basada en los principios, pero no se unió a los radicales «marginados» que se organizaban en sociedades de correspondencia y clubes jacobinos. Los intentos de reforma sólo consiguieron en el parlamento un puñado de votos; las revueltas de clase de los pobres tejedores manuales de las ciudades fueron aisladas y reprimidas.

Reforma, no revolución, 1815-1832

El final de la guerra volvió a situar la reforma entre los asuntos pendientes que ya había anunciado la segunda fase del ciclo fiscal-militar. Los costes militares directos disminuyeron, pero la devolución de la deuda en tiempos de paz causó irritación. En 1816 los Comunes abolieron el impuesto sobre la renta, es decir, el que afectaba en primer lugar a las clases propietarias, aumentando así el carácter regresivo de la recaudación que se empleaba para liquidar a los titulares de los fondos. Las mejoras en la elaboración de los presupuestos en tiempo de guerra habían puesto de manifiesto los costes del personal estratégicamente situado en la administración por motivos políticos. El gobierno de posguerra de lord Liverpool intentó recortar gastos, pero sus miembros se beneficiaron de la «antigua corrupción». Los panfletos radicales denunciaban que doscientos obispos y pares *tories* habían recibido más de dos millones de libras anuales de sinecuras, salarios, cargos oficiales y beneficios eclesiásticos —más que de la nó-

mina de sus rentas agrícolas—, incluso sin contar las ganancias de la Compañía de la India (Rubinstein, 1983: 76 y 77). Todo el mundo llamaba ya corrupción a esto, especialmente en la prensa. Peel escribía en 1820:

> La opinión pública nunca ha disfrutado de tanta influencia sobre las medidas públicas, y, sin embargo, nunca se ha sentido tan insatisfecha con su parte. Ha crecido demasiado para los canales que tradicionalmente le daban cauce ... los ingenieros que los construyeron no podían imaginar ni en sueños estas distintas corrientes que luchan ahora por encontrar una abertura [Brock, 1973: 16].

El *Manchester Guardian*, fundado en 1821, y la *Westminster Review* (1824), respetables periódicos reformistas que circulaban entre la gente educada, confirmaban la observación de Peel. De 1819 a 1823 los dirigentes *whig* se comprometieron con la reforma electoral, aunque los radicales de la pequeña burguesía consideraban todavía prioritaria la reforma económica. El *Political Register* de Cobbett, «leído en todas las cervecerías», afirmaba una y otra vez que la reforma parlamentaria era un medio para alcanzar un fin: la eliminación de los poseedores de fondos, corruptos y «devoradores de impuestos». Como aclaraba en 1832 el *Extraordinary Black Book*: «Un gobierno barato, un pan barato, una justicia barata y una industria productiva y sin trabas premiarán nuestros esfuerzos cuando triunfe la Ley de Reforma» (Gash, 1986: 45 y 46). Lord John Russell escribía en 1823:

> Los escasos jacobinos entusiastas de 1793 se convirtieron a partir de 1817 en cientos, en miles de descontentos. La presión de sesenta millones de impuestos ha enfrentado a más hombres sanos y leales con la constitución de su país de lo que las arengas del ciudadano Brissot ... podrían haber conseguido en cien años [Dinwiddy, 1988: 70].

Pero el descontento de la posguerra aún debió enfrentarse a una represión apoyada por muchos «excluidos» reformistas. Para conocer el alcance de la unidad entre los reformistas me referiré en primer lugar a los cambios experimentados por los movimientos populares.

Como en la mayoría de las sociedades agrarias, las masas fueron incapaces de crear una organización política y extensiva propia. Para una plebe iletrada y excluida del sufragio, la mejor forma de demostrar con energía su descontento eran las manifestaciones masivas que acababan en revuelta. Bohstedt (1983) ha analizado las revueltas en

Inglaterra y Gales de 1790 a 1810. El tipo más común, el 39 por 100, se refería a la comida; la mayoría protestaba por los elevados precios. El 22 por 100 tenía objetivos militares: las rondas de enganche y los métodos de casi conscripción. Las revueltas «políticas e ideológicas» (*whigs*, *tories*, radicales y muchedumbres «por el rey y el país») ascendían al 10 por 100, inmediatamente antes de los levantamientos por motivos laborales. El modelo londinense era distinto. Las revueltas «mixtas», que comprendían un 25 por 100, se realizaban contra figuras prominentes muy impopulares, para ayudar a los presos a escapar de las autoridades o bien «ocurrían en los teatros». Muchas de ellas deberían incluirse en la categoría política e ideológica, lo que quizás las elevaría del 14 al 25 por 100 de las acaecidas en Londres. Luego vienen las «pendencias» (en su mayor parte conflictos entre ingleses e irlandeses), con un 16 por 100. En Londres eran muchas menos las revueltas por la comida y algo más numerosas las de tipo laboral.

Las revueltas por la comida y contra el ejército contaban con la base social más baja, en realidad, movilizaban a la plebe. Las mujeres (que se ocupaban del mercadeo) intervenían también en las revueltas por la comida y participaban en todas, salvo en las relacionadas con el trabajo (de trabajadores y artesanos a sueldo). Las revueltas políticas e ideológicas y las «mixtas» de Londres reunían a los dirigentes de la pequeña burguesía con masas procedentes de la plebe. Tales conflictos movilizaron intensamente a familias, calles y vecindarios. Como veremos en otros países, y como en el caso del cartismo en la propia Gran Bretaña, su carácter intensivo dio en ese momento un tono insurreccional a la protesta del pueblo, que no tendría en épocas posteriores.

Pero las revueltas se extendieron muy raramente. Las diferencias de clase cortaron esa posibilidad. La «plebe» se rebelaba por la comida y contra el reclutamiento forzoso; cosas que preocupaban menos al «pueblo». Los agricultores se beneficiaban de la elevación de los precios, y la pequeña burguesía contaba con posibilidades de afrontarlos; ninguno de estos grupos se encontraba expuesto a las rondas de enganche. Los conflictos laborales separaban al pueblo de la plebe, porque el primero daba empleo al segundo. Tales divisiones de clase permitieron a las autoridades servirse de sus organizaciones segmentales y reprimir a los revoltosos. Sólo algunas de estas rebeliones se dirigían contra el Estado. Las manifestaciones de trabajadores solicitaban con frecuencia la intervención del régimen local contra

sus empleadores. La mayor parte de los disturbios por la comida eran apolíticos; así, los de 1766 respondieron a cambios en la reglamentación tradicional que habían permitido a los intermediarios del trigo desviarlo hacia la exportación, produciendo con ello un aumento del precio del pan en las ciudades y en las poblaciones rurales especializadas en otros productos. Pero las consiguiente revueltas no se dirigieron contra el Estado, sino contra las figuras visibles del mercado, comerciantes y molineros, y a menudo solicitaban la ayuda del régimen local para actuar contra ellos (Williams, 1984; *cf.* Stevenson, 1979: 91 a 112; Bohstedt, 1983: 211 a 212, 296). Las autoridades, que no se sentían atacadas, se mostraron con frecuencia comprensivas.

Las diferencias de clase y de objetivo en los movimientos populares fueron decisivas; en realidad, constituyeron la causa *organizativa* de que en Gran Bretaña no se produjera una revolución política. Sin embargo, los historiadores las han subestimado, haciendo gala de su vicio característico, a saber, analizarlas según los supuestos teóricos y políticos del siglo XX, dando por descontado que la lucha de clases había de ser tan política en el siglo XVIII y a principios del XIX como en nuestra época. Por un lado, los historiadores marxianos como E. P. Thompson (1963) y Foster (1974) exageran el radicalismo político de la plebe, o explican su fracaso sobrevalorando ciertas ideologías consoladoras como el metodismo. Por otro, los conservadores como Clark (1985) y Christie (1984) achacan la ausencia de revolución a lo contrario, es decir, a la satisfacción política, al bienestar material y a la conservación de la deferencia. Examinemos el libro de Christie, donde aborda explícitamente las razones que impidieron la revolución en Gran Bretaña.

Christie emplea varios argumentos conservadores extraídos de la experiencia del siglo XX. Se evitó la revolución, afirma, porque Gran Bretaña era una sociedad de estratificación plural, no cualitativa (el «ocaso de las clases» propio del siglo XX); por la deferencia hacia los hacendados, la Iglesia y el rey (el «votante conservador respetuoso»); por el aumento de la prosperidad (la «opulencia» posterior a la Segunda Guerra Mundial); por la generosidad de la Ley de Pobres (el «Estado asistencial»); y por las combinaciones legítimas de trabajadores (la «institucionalización del conflicto industrial»). Todas estas cosas son pertinentes para el siglo XX, porque todas ellas relacionan la experiencia de la vida cotidiana con el Estado. Las estructuras nacionales de la estratificación, el sufragio universal, los partidos políticos nacionales, la economía regulada por el gobierno, el Estado asisten-

cial y las relaciones institucionalizadas entre los sindicatos y el empresariado insertan la política nacional en la experiencia práctica del pueblo.

Algunos de los argumentos de Christie valen también para el siglo XVIII, pero no tanto para el *Estado* británico. La Ley de Pobres tuvo su importancia para la vida económica popular, pero más en el plano local que en el nacional. La pluralidad de la riqueza, reproducida por el mercado, y la ausencia de privilegios legales evitaron que los asuntos materiales provocaran necesariamente una reforma del Estado, como, por el contrario, ocurrió en Francia, donde los privilegios legales impregnaban la economía. Pero otros argumentos de Christie se adaptan mal al siglo XVIII. Por ejemplo, exagera la prosperidad, que en absoluto llegó a todo el pueblo bajo. ¿Si la tendencia era tan conservadora, por qué se produjo, desde abajo, la insurrección cartista en las décadas de 1830 y 1840? (véase capítulo 15). Y si la prosperidad material impidió la revolución, ¿por qué se produjo ésta en el país más próspero del momento (América) y en el segundo país más próspero de Europa (Francia)? Las épocas de retroceso económico, malas cosechas y carestías produjeron descontento en los tres países, pero sólo en el campo francés se pueden relacionar estas causas con la revolución de 1788-1789, debido a razones políticas características de Francia. Cuando, para mejorar su suerte, el campesinado francés atacó los privilegios legales de los señores, estaba entrando en un camino que implicaba un asalto frontal al *Estado*.

Pero las condiciones económicas de la plebe británica carecían de importancia para el poder *político*. Por lo general, este grupo parecía contenido y respetuoso; sin embargo, ello no explica la supervivencia del régimen. En otras épocas, se volvieron insolentes y revoltosos, pero, como ya hemos tenido oportunidad de comprobar, sus revueltas masivas y su sentimiento del agravio de clase raramente se dirigían contra el Estado, raramente afectaban a todas sus clases, y no menos rara era la alianza con los elementos políticamente excluidos del «pueblo» formado por los propietarios. Su grado de satisfacción tenía poco que ver con esto. El «pueblo» controlaba segmentalmente la mayoría de las organizaciones extensivas y políticas de protesta, centrándose en las redes de alfabetización discursiva. Gran parte del descontento de la «plebe», al carecer de organizaciones políticas y extensivas, se expresaba por esos cauces. Esto explica suficientemente la ausencia de movimientos revolucionarios en Gran Bretaña antes del cartismo.

No obstante, estaban en marcha algunos cambios de organización. Si bien es cierto que disminuían las revueltas por la subsistencia, aumentaban los conflictos laborales y políticos. Los distritos industriales arrebataron el testigo a Londres y a las ciudades comerciales. Las nuevas ciudades fabriles aterrorizaban a los observadores del antiguo régimen, especialmente a los religiosos, que en sus descripciones empleaban las peores analogías que cabe imaginar. Las fábricas eran como un infierno en llamas alimentado por los condenados al trabajo, fueran éstos hombres, mujeres o niños. Nunca antes, salvo en las antiguas descripciones del infierno, se había situado a los niños entre los condenados. Las ciudades arrojaban humo y apestaban como campos de batalla, plagadas de supervivientes borrachos y degradados. El rápido crecimiento de la población aumentaba el desorden, la indiferencia religiosa y las «clases peligrosas». Y, en efecto, lo eran precisamente por encontrarse al margen de las organizaciones segmentales del régimen. El propio ejército contaba sólo con un escaso número de cuarteles en las zonas industriales, y ello para contrarrestar las protestas organizadas y las manifestaciones.

Las manifestaciones masivas, convertidas en rebeliones, dieron pie a las asambleas de masas dirigidas por agitadores que presentaban peticiones y resoluciones, en una coordinación que no sólo era regional, sino también nacional. Los periodistas acudían a estas plataformas y daban publicidad a los agravios y las atrocidades del régimen. La palabra «Peterloo» fue invención de uno de ellos para expresar que las tropas británicas habían pervertido su victoria en Waterloo por la ferocidad con que cuatro años después dispersaron a los manifestantes de St. Peter's Square, en Manchester. Las manifestaciones de masas y las campañas de la prensa difundieron las infraestructuras discursivas por toda la nación. Las revoluciones americana y francesa habían extendido también esa organización compuesta de literatura impresa y asambleas orales (véanse los dos capítulos siguientes). Los dirigentes radicales británicos como Place, Hunt, Cobbett y O'Connor difundían propuestas de reforma tan radicales como las revolucionarias del periodo 1789-1790 en Francia. Pero, como dice Stevenson, cuando hay que enfrentarse «a un gobierno invicto y potencialmente represivo, la única forma de extraer algún fruto de la rebelión es organizarse» (1979: 317), y, además, parecer que se es moderado. Los revoltosos contaban con pocos principios alternativos y exigían una reforma económica y política tan sólo limitada, empleando, eso sí, el «lenguaje de la amenaza». Los modernizadores del antiguo régimen y

la pequeña burguesía acomodada aducían que no podrían preservar el orden local y regional hasta que la propiedad no obtuviera una representación absoluta. La reforma respetable y racional y la agitación popular permanecieron separadas hasta que se produjo la simbiosis de la década de 1820, ambas con una organización más nacional y de clase y menos segmental y local-regional.

Entonces se abrió paso el poder ideológico. Durante las guerras americana y francesa, el enemigo había sido secular. La religión ya no constituía un peligro geopolítico. Disidentes y católicos habían demostrado su lealtad con ocasión del enfrentamiento armado, de modo que las leyes contra ellos no volvieron a aplicarse durante décadas. Se sabía que gobernar Irlanda resultaría tarea difícil si se discriminaba a los católicos, y que la decadencia moral de la jerarquía de la iglesia establecida era un hecho ampliamente comentado. Los proyectos de ley para revocar las *Test and Corporation Acts* contra los disidentes y plantear la emancipación de los católicos estuvieron a punto de tener éxito. La arrolladora victoria de O'Connell en el condado de Clare durante las elecciones de 1828 convirtieron aquella ley en una parodia: el pueblo había podido elegir a un católico, pero éste no podía tomar posesión de su escaño. En las siguientes elecciones irlandesas, los católicos podían barrer. El duque de Wellington, un *tory*, se adelantó para impedir una crisis institucional. Su ley de emancipación fue aprobada en 1829. El antiguo régimen renunciaba a su alma protestante y a su poderoso control segmental sobre las almas de sus súbditos (Clark, 1985).

Los *whigs* modernizadores se envalentonaron. Una vez en el gobierno, presentaron una ley de reforma en la sesión de 1830-1831. Grey y su gabinete estaban decididos, y el movimiento popular se consolidaba gracias a la expansión de las redes artesanales discursivas, las mutuas de socorro y los sindicatos (véase capítulo 15). Los *whigs* se sirvieron de las manifestaciones masivas para presionar a las dos cámaras. Por vez primera, se produjo un enfrentamiento real entre una facción del antiguo régimen y un movimiento popular «marginado». Pero esto dividió a los artesanos radicales, ya que muchos de ellos temían con razón que el proyecto de ley retrasara su propia representatividad por la inclusión de los propietarios medios en el sufragio. Sin embargo, poco pudieron hacer para oponerse al proyecto. Aunque los conservadores comprendían que sólo las propuestas alternativas de reforma podrían desviar la ley, no estaban de acuerdo con sus formas. Rechazaron la primera en 1831, pero el gobierno

convocó una nueva elección. Ésta se produjo entre manifestaciones y revueltas, y su resultado diezmó a los conservadores declarados. Por consiguiente, muchos cambiaron de bando y apoyaron el segundo proyecto de ley. Con el apoyo de la calle, el parlamento de la «antigua corrupción» se reformó a sí mismo. Parecía, como observó Carlyle, «una abdicación de los propios gobernantes» (Perkin, 1969: 183 a 195).

Pero el régimen no se había convertido a la democracia plena. Más bien se encontraba impresionado por dos argumentos, uno progresista, generalmente implícito, y otro reaccionario y explícito. Implícitamente aceptaba el punto de vista de la reforma sobre la modernización y el progreso, que identificaba particularismo con corrupción. El imprevisto aumento demográfico había anulado la representatividad por parte del sistema electoral vigente de cualquier principio general de ciudadanía política. Era un sistema tan irracional como corrupto. Una vez abandonado el absolutismo, el particularismo en los principales departamentos gubernamentales y la jerarquía en la Iglesia, el régimen se encontró privado de principios. Reconoció también la contribución de la pequeña burguesía al aumento de la prosperidad de Gran Bretaña. El país podía dominar ahora el mundo gracias al comercio libre respaldado por un gobierno económico. La pequeña burguesía tenía ya un interés material en la nación y no podía permanecer excluida, a condición, claro está, de que rompiera con la plebe. De modo que, en segundo lugar, los gobernantes se aplicaron, explícitamente, a separarla por completo de la muchedumbre.

Cabía esperar que la propiedad —cualquiera que fuera su origen, linaje o patronazgo— gobernara la nación. Las indagaciones revelaron que la concesión del derecho a los ciudadanos que poseyeran una propiedad de 10£ en los municipios podría preservar la «independencia» del votante, pues con ello se admitía a gran parte de la pequeña burguesía, pero sólo a uno en un margen de 50 a 100 empleados artesanos (la mayor parte en Londres, donde un grado de instrucción más alto favorecería también la «independencia»). Las nuevas restricciones en función de la propiedad era más elevadas que algunas de las vigentes, que de hecho excluían del electorado a varios miles de electores; pero, en conjunto, se añadieron 300.000 hombres al electorado de 500.000. La eliminación de 140 municipios corrompidos anunció la muerte del patronazgo real y ministerial en los Comunes. En términos políticos (aunque no simbólicos), Gran Bretaña no era ya una monarquía; había desaparecido la política segmental del «divide y

vencerás» que prosperaba en centro Europa. La derrotada Cámara de los Lores también decayó antes de la democracia de partidos. Pero la distribución de los escaños entre los condados y los municipios se mantuvo en pie, al tiempo que se conservaba la «representación virtual» del condado y de las organizaciones segmentales. Ni el personal administrativo ni los partidos experimentaron grandes variaciones. Los notables terratenientes formaron una mayoría en los Comunes hasta la década de 1860 (Thomas, 1939: 4 y 5). Pero el Estado sí había pasado del particularismo y el segmentalismo, centrados en el rey con el parlamento, al universalismo centrado en una clase-nación capitalista.

El triunfo del liberalismo del antiguo régimen: 1832-1880

La pequeña burguesía parecía triunfante: imperio del libre comercio; abolición del patronazgo; reforma del funcionariado, del gobierno municipal, de la Iglesia, de Oxford, Cambridge y las escuelas públicas; abolición de las restricciones en función de la propiedad de bienes raíces para los miembros del parlamento, de los tasas eclesiásticas, del cercamiento de las tierras urbanas comunes y de los «impuestos sobre el conocimiento»; todo ello habría parecido revolucionario en 1760, pero se estaba consiguiendo cien años después. El Estado no intervendría de modo particularista, pero mantendría contra las cuerdas a las fuerzas difusas del mercado.

Con todo, eran los notables del antiguo régimen quienes dominaban el Estado encargado de legislar el liberalismo. Sus redes de patronazgo controlaban aún muchos condados y algunas ciudades; ellos disfrutaban de suficiente riqueza y tiempo libre para dedicarse a la política y, además, dominaban en Londres. Thompson (1963: 298) asegura que el electorado pequeño burgués no mandaba «a través de la composición de la Cámara, sino en el desarrollo de la legislación». Lo cual no es exacto, ya que el propio régimen se había convertido a los nuevos principios. El régimen estaba secularizado a mediados de siglo, no sin conservar un cierto sentido moral, pero la Iglesia decayó a medida que Gran Bretaña se convertía probablemente en el país más laico del mundo. Su régimen se adaptaba al concepto originalmente burgués según el cual «cierta riqueza, en concreto la propiedad pasiva de la tierra, no tenía derecho a exigir portazgos a otros, concretamente al capital activo de la industria y el comercio» (Perkin,

1969: 315 y 316). Pero el antiguo régimen perdió poco en su conversión y ganó la posibilidad de embridar la revolución industrial de la pequeña burguesía según su particular forma de capitalismo comercial (Ingham, 1984; véase también «La decadencia de Gran Bretaña» en Mann, 1988a).

Durante el largo reinado de Victoria (1837-1901), la economía británica experimentó un fuerte desarrollo. Hasta la década de 1860, se beneficiariaron los más ricos y se extendió la desigualdad, como en la mayoría de los países industrializados (Kuznets, 1955, 1963; Lindert y Williamson, 1983). Los más beneficiados fueron los terratenientes. Rubinstein (1977a, 1977b) estima que, en 1815, el 88 por 100 de las fortunas mayores de 100.000£ se debían en gran parte a la tierra. Entre los millonarios muertos de 1809 a 1858, el 95 por 100 seguían siendo grandes terratenientes. Incluso hasta la década de 1880, muchos millonarios o semimillonarios lo eran. En 1832 la tierra y las granjas contribuyeron al 63 por 100 del capital total de la nación (Deane y Cole, 1967: 271). Esto tuvo consecuencias para la expansión industrial. Los cambios del siglo XVIII en las leyes hipotecarias y los porcentajes del interés, la aparición del West End y los bancos del país, de las compañías de seguros, del mercado hipotecario provincial y la gestión profesional de las haciendas dieron al antiguo régimen la posibilidad de manejar los ingresos agrícolas según un capitalismo más diversificado (Mingay, 1963: 32-37). La minería convirtió a unos cuantos terratenientes en propietarios de minas de carbón, en tanto que la urbanización aumentaba el valor del suelo y permitía a los terratenientes invertir en acciones de industrias urbanas del transporte.

Canales y ferrocarriles hicieron llover beneficios sobre los dueños de las tierras contiguas y aumentaron también los beneficios y las rentas de la agricultura, gracias a la fulminante reducción de los costes de distribución en los mercados urbanos (F. M. L. Thompson, 1963: 256 a 268). Las inversiones de los terratenientes se inclinaron más al comercio que a la industria y, a través de bancos privados y agentes o de la *City*, más al comercio, a las obligaciones del gobierno y al mercado exterior. Hasta 1905 las «ganancias invisibles» de la *City* procedentes de la banca, las compañías de seguros y la navegación superaban sus ingresos por inversiones en el exterior, y ambos excedían en mucho el ingreso de la industria manufacturera nacional. De este modo, la *City*, protegida por la hegemonía naval británica, se convirtió al libre mercado, hasta ahora ajeno a la parte más antigua del régimen. La *City* y el tesoro comenzaban a cimentar la alianza

que habría de dominar ya para siempre la economía política de Gran Bretaña. Las inversiones se realizaban a través de los bancos del país y la ciudad, los bancos de descuento, los corredores de cambios y los procuradores ante los bancos, que las encuazaban hacia la industria, generalmente a corto plazo, o más comúnmente hacia los proveedores de los industriales y los distribuidores comerciales. Puesto que resultaba fácil hipotecar la tierra, las deudas de sus dueños canalizaron corrientes contrarias: los ahorros de la pequeña burguesía se encauzaban a través de los agentes y las compañías de seguros hasta el consumo y la nueva inversión de los terratenientes (Crouzet, 1972, 1982: 335 a 341; Cannadine, 1977: 636 y 637).

La comercialización afectó a todos los hacendados que se encontraban insertos en circuitos difusos y descentralizados de capital. Las categorías particularistas de rango y genealogía se hicieron menos decisivas para la diferenciación social. El capital se difundió también a través de la familia. El patriarca había sido siempre el responsable de la hacienda, pero el sistema capitalista de acciones separó la propiedad de la gestión. Cualquiera podía ser accionista, al margen de su adscripción social. El accionista maneja mejor los delicados problemas de la propiedad a lo largo del ciclo de la vida y de las generaciones. Los hijos jóvenes, los descendientes más pequeños, los mayores y los patriarcas achacosos podían recibir acciones sin implicaciones a largo plazo para el control de la hacienda. Mayor incluso resultó el efecto para las mujeres de las familias acaudaladas, ya que benefició a las dotes matrimoniales, las hijas y las tías solteras y las viudas. Toda esta actividad imponía cambios legales, que se llevaron a cabo hacia mediados de siglo, de forma que las mujeres pudieron acceder a la propiedad por sí mismas. El régimen se componía más de empresarios privados que de linajes corporativos. Ya no gobernaba tanto a través de las organizaciones segmentales como de la clase y el mercado.

El ferrocarril fomentó la concentración económica, porque las vías y el material móvil debían instalarse antes de que fluyeran los ingresos. En 1847 el gasto bruto en la formación de capital ferroviario (incluso excluyendo la adquisición de tierras) ascendía al 7 por 100 de la renta nacional. Cuando finalizó su época dorada en Inglaterra, se exportó al extranjero. Las nuevas Bolsas de provincias y las sociedades anónimas (antes de responsabilidad limitada) se volvieron hacia el ferrocarril, como hizo la Bolsa de Londres, que anteriormente se había dedicado sobre todo a las obligaciones del gobierno. El grupo

más numeroso de accionistas estaba formado por la baja nobleza, los profesionales, los hombres de negocios y los comerciantes de Londres y de la mayor parte de las zonas industriales. Venían después los grandes terratenientes locales, útiles para influir en el parlamento, dado que todas las empresas necesitaban un ley privada parlamentaria para establecerse. Con ello apareció una «nueva corrupción»; en 1865, 157 miembros parlamentarios y 49 pares dirigían compañías ferroviarias. El tercer grupo inversor estaba formado por la pequeña burguesía propietaria, que contaba con ahorros suficientes para comprar al menos una acción (cuyo valor solía ser de 100£) y que también en este caso procedía más de las zonas comerciales que de las industriales (Pollins, 1952; Barker y Savage, 1974: 77 a 79; Reed, 1975; Crouzet, 1982: 335 a 341). Un capital más rentista se difundía por la sociedad civil, moviendo la riqueza de la tierra y el comercio hacia la principal empresa industrial de la época. Los intereses estancos del antiguo régimen se fusionaron gracias al capitalismo comercial.

La «antigua corrupción» no había desaparecido, simplemente se desplazó oblicuamente a la *City*, donde permanece desde entonces. Los poseedores de cargos oficiales y los hijos menores de los terratenientes deshicieron sus vínculos particularistas con el Estado y se desplazaron al comercio de la *City*. Durante todo el siglo XIX los ricos que no debían sus ingresos a la agricultura amasaron auténticas fortunas con el comercio, las finanzas y el transporte, más en calidad de comerciantes, banqueros, armadores, banqueros comerciales y agentes de Bolsa y de compañías de seguros que de industriales. La industria nunca fue la primera fuente de riqueza para el comercio (Rubinstein, 1977b: 102 y 103). Las fortunas del antiguo régimen, amasadas en las colonias y en el comercio ultramarino, habían adquirido primero grandes haciendas, títulos y obligaciones del gobierno, para después pasar a los préstamos hipotecarios. Ahora, sus sucesores de la *City* estaban en condiciones de hacer lo mismo. Construyeron «más *Fonthills* que fábricas», dice Crouzet (1972: 176). Se casaron más con la tierra que con la industria (F. M. L. Thompson, 1963: 20 y 21). Los aristócratas y los terratenientes preferían pertenecer a los consejos de administración de la *City* que a las empresas industriales. Como gustaba de señalar John Bright, parlamentario radical por la industrial Rochdale, la *City* constituía «una especie de ocio fuera de casa para los aristócratas».

Esta fusión de la tierra, las finanzas y el comercio facilitó los efectos de la decadencia de los ingresos agrícolas y del valor del capital de

la tierra que comenzó a finales de la década de 1870. Los que diversificaban ya no buscaban como antes la riqueza y la posición en la tierra; otros vendían el suelo urbano para invertir en acciones y bonos del gobierno. Aunque la baja nobleza y la aristocracia rural experimentaron una auténtica decadencia, las grandes familias desplazaron sus intereses. Y lo mismo hizo el partido *tory*. En 1895 el negocio de las finanzas había sustituido al de la tierra en el interés de sus miembros parlamentarios (Thomas, 1939: 15). Los capitalistas de la tierra, el comercio y las finanzas se fusionaron en una clase política extensiva, que disponía de organizaciones económicas nacionales, familiares y educativas (las escuelas «públicas»), comprometida con el Estado burocrático y el libre comercio bajo la casi hegemonía británica. Los liberales del antiguo régimen se habían convertido en la nueva clase dirigente.

Los industriales pertenecían a esa clase, pero estaban en los márgenes. Pocos de ellos se sentaban en el parlamento. La mayoría de los parlamentarios pertenecían a las finanzas, el comercio y el ferrocarril, y más, en un principio, al partido conservador que al liberal (Thomas, 1939: 13 a 20). Los liberales representaban a una propiedad más amplia; los *tories*, a la tierra, las finanzas y el comercio. Pero también la región y la religión dividían a los partidos. Ni éstos ni los sectores económicos diferían mucho en materia de política económica. Entre la revocación de las Leyes del Trigo en 1846 y el movimiento por la reforma de los aranceles, que comenzó en la década de 1890, el parlamento apenas se preocupó de la economía. Los asuntos predominantes eran entonces —y continuaron siéndolo hasta 1914— la religión, la educación, la cuestión irlandesa (la versión británica de la cristalización «nacional» del Estado que he destacado en el capítulo 3) y la representación de la clase obrera (parte de la cristalización capitalista del Estado). Incluso después de que aflorara la reforma de los aranceles, la industria no desafió en serio a los dioses del libre mercado de la *City* y el patrón oro.

El gobierno de «la primera nación industrial» nunca lo fue tanto como los de sus principales adversarios. Gran Bretaña se quedó empantanada en imaginar políticas de organización industrial autoritaria: corporativismo, educación estatal y provisión de fondos estatales para la industria de alta tecnología (Longstrech, 1983; Ingham, 1984; Lee, 1986; Mann, 1988a). La organización del capital británico había sido insólitamente difusa y comprometida con la conservación de los mercados. La fuerza del mercado había sido la razón principal de que

la Revolución Industrial ocurriera en aquella isla antes que en ningún otro sitio. Gran Bretaña dio el paso acostumbrado: institucionalizó en primer lugar aquellas estructuras que la habían engrandecido. Pero esas mismas estructuras contribuyeron a su decadencia en un mundo que estaba cambiando.

De este modo, ni la pequeña burguesía ni la industria manufacturera constituyeron una clase organizada o una fracción de clase en la Inglaterra victoriana. Desde la madurez de Victoria se habían sentido «virtualmente representadas» por el liberalismo esencialmente comercial del antiguo régimen, que descansaba menos que los anteriores regímenes en la organización segmental. Los terratenientes se habían consolidado como una clase singular, nacional y capitalista, organizada en partidos políticos de masas que controlaban los notables del liberalismo del antiguo régimen.

Conclusión

Gran Bretaña pasó por una revolución industrial sin revolución burguesa; la reforma política permitió al antiguo régimen sobrevivir con un nuevo ropaje liberal. El primer país industrial institucionalizó el liberalismo nacional capitalista con una pátina antigua, sin verse sometido a excesivas turbulencias. Y esa misma mezcla de reforma moderada y continuidad de la tradición ha caracterizado también a su historia posterior. Podría parecer un proceso evolutivo; pero durante el siglo XVII hubo una guerra civil y varios cismas religiosos, y se ejecutó y se envió al exilio a varios reyes. Sin embargo, las sublevaciones jacobitas de 1715 y 1745 fueron meros restos del pasado. A partir de la década de 1830, también el cartismo se convirtió en un movimiento revolucionario que iba a ser derrotado precisamente por esa fusión del antiguo régimen con la pequeña burguesía que acabamos de describir (véase el capítulo 15). De ahí que el periodo en que se produjo esa unión, desde la década de 1750 a la de 1830, resulte decisivo para la historia moderna de Gran Bretaña. Y, desde luego, fue también un punto de inflexión para la historia mundial, ya que el liberalismo se convirtió en una viable estrategia global para sentar las bases de la modernización.

Mi explicación ha implicado a las cuatro fuentes de poder social, si bien no he acometido el análisis del peso relativo que tuvo cada una de ellas, que comenzará a partir del capítulo 7. Veamos en primer lu-

gar el poder económico: a lo largo de los siglos XVII y XVIII la agricultura británica institucionalizó el capitalismo comercial de mercado. En este hecho residió la principal causa a medio plazo de la Revolución Industrial. Por otra parte, se aseguró así una organización económica no autoritaria, sino inusitadamente difusa; la «mano invisible» forzó a todos los actores de poder. En realidad, produjo también una clase emergente pequeño burguesa, pero la existencia del mercado permitió que la posible lucha de clases, de carácter económico y dialéctico, entre ésta y el antiguo régimen se mantuviera latente, sin estallar nunca. Como el antiguo régimen no excluyó a la pequeña burguesía de las ventajas económicas del mercado, ésta disfrutó de un auténtico progreso. A principios del siglo XIX la preocupación que ambos compartían por el mercado desarrolló una mutualidad de intereses. También la tierra y la industria quedaron subordinadas a las finanzas y el comercio, y la heterogénea clase capitalista británica continuó con su obsesiva preocupación por el libre comercio y el patrón oro, los dos pilares de la economía política del liberalismo británico del antiguo régimen.

La religión, la posterior expansión estatal y, en especial, el capitalismo de mercado generaron las segundas redes de poder en importancia que hemos analizado aquí: las redes ideológicas de masas de la comunicación discursiva, que, en ciertas ocasiones, transmitieron ideologías moralizantes de clase a la pequeña burguesía. En otros países, contribuyeron a destruir la cohesión moral de los antiguos regímenes y dieron lugar a un liderazgo revolucionario y a principios de reorganización social. Pero en Gran Bretaña, estas redes estaban guiadas por mercados de consumo en los que participaban tanto el antiguo régimen como la pequeña burguesía. Los valores de la conciencia burguesa y la modernización del antiguo régimen se coaligaron, en una medida mucho mayor que en Francia, para generar un movimiento común de compromiso por la reforma, sólo parcialmente basado en principios, que se extendería a través de una organización mixta, segmental y de clase. Las relaciones ideológicas de poder fueron quizás menos autónomas que las otras cuatro, al estar generadas en gran parte por organizaciones capitalistas y estatales.

En tercer lugar, las características de los Estados, tal como sostiene la teoría estatista institucional (analizada en el capítulo 3), también contribuyeron a producir «una reforma, en vez de una revolución». El Estado británico ya había institucionalizado unas relaciones centralizadas y competitivas de «partido» entre la elite estatal y (fun-

damentalmente) las clases dominantes. No he intentado analizar aquí esta rudimentaria «democracia de partidos» porque tuvo lugar en una época anterior (a la que no dediqué tampoco mucho espacio en mi anterior volumen). Puede que una teoría reduccionista de clase sobre estas instituciones tuviera algo que decir al respecto, pero yo creo que esas causas se entrelazaron con las presiones fiscal-militares y las disputas ideológico-religiosas. No obstante, el *resultado* político de aquel proceso anterior logró su propia autonomía de poder «rezagada». Puesto que durante el periodo aumentó la importancia del Estado para la vida social, las características de sus instituciones vigentes iban a desempeñar un papel de primer orden para la sociedad occidental. La argumentación vale en general para la época; en posteriores capítulos demostraré que se produjo un proceso idéntico en otros países.

En Gran Bretaña, el sufragio y la «representación virtual», a causa de su desorden, nunca estuvieron completamente cerrados a las clases emergentes. Pero cuando el sufragio en función de la propiedad introdujo el orden, a partir de 1832, se produjo el cierre para quienes no contaban con propiedades suficientes (hasta que la prosperidad de mediados del periodo victoriano lo amplió a una masa mayor de trabajadores). Antes de 1832 (y también desde la década de 1860) los «partidos» localizados en el núcleo del Estado se plegaron y tuvieron que ampliarse ante las presiones que llegaban desde abajo, pero demostraron ser menos quebradizos que los de los Estados francés y austriaco o los de las colonias británicas. Más aún, la agitación por la reforma se centró menos en el sufragio de clase que en otro aspecto de las instituciones estatales —común a todos los Estados de finales del siglo XVIII—: la significación cada vez mayor de su economía política. Los movimientos por la «reforma económica» exigían la eliminación de la corrupción estatal, con la intención de reducir los impuestos, pero inconscientemente provocaron la centralización y la «naturalización» del gobierno. En ello residió el núcleo de las quejas pequeño burguesas contra el antiguo régimen, y la clave por la que los partidos modernizadores del régimen abandonaron la «antigua corrupción» para aliarse con la pequeña burguesía.

Pero todo el proceso estuvo guiado por la lógica de la cuarta fuente de poder social. La cristalización militarista, debida al progreso geopolítico de Gran Bretaña, impuso presiones fiscales y políticas. La causa de la modernización y reforma del Estado fue ante todo la necesidad de ganar guerras. Sin los conflictos bélicos con Francia

habría sobrevivido en la sociedad industrial un antiguo régimen más segmental, menos «nacional» y mucho menos reformado. También se habría mantenido una pequeña burguesía próspera, con derechos individuales y, quizás, una ciudadanía política parcial, tal como habían vivido hasta entonces los pequeños granjeros, clientes de un régimen segmental y constitucional-monárquico pero en absoluto democrático. El desarrollo de Prusia-Alemania demuestra la viabilidad de una trayectoria semejante.

El conflicto de clase extensivo y político entre el antiguo régimen y la pequeña burguesía se intensificó, para llegar después a un compromiso. Pero no fue «puro», sino moldeado por las redes de poder ideológico, militar y político. La modernización británica no representó una evolución unidimensional; el capitalismo industrial no determinó las estructuras del Estado. Éste era en Inglaterra polimorfo; cristalizado en un capitalismo y un militarismo duraderos. El influjo de ambos fomentó el desarrollo de su cristalización representativa hacia la democracia de partidos y su cristalización «nacional» hacia un Estado-nación más centralizado.

Durante este periodo la modernización de la sociedad y del Estado dependió ante todo de la confluencia del capitalismo de mercado y las luchas geopolíticas. Cada uno de estos fenómenos consolidó al otro: el auge geopolítico de Gran Bretaña, que he calificado de casi hegemonía, se debió en parte a la precocidad de su capitalismo de mercado y a la Revolución Industrial, ambos respaldados por la Marina Real, las sagaces alianzas exteriores y las refinadas y complejas finanzas estatales. Sin embargo, en palabras de Iron Duke, el éxito geopolítico de Gran Bretaña constituyó «una carrera endiabladamente difícil». Como veremos en el capítulo 8, dependió en exclusiva de la habilidad naval y diplomática de los británicos para establecer alianzas que forzaran a Francia a luchar en dos frentes. Cada vez que esto ocurría, Francia perdía la guerra. Cuando, con ocasión de la Revolución Americana, fue Gran Bretaña la que tuvo que luchar en esas condiciones, la perdió. La viabilidad del liberalismo del antiguo régimen no fue una necesidad evolutiva, ni el mero resultado de las revoluciones agrícola e industrial o del equilibrio de las fuerzas de clase, sino, en última instancia, el de la coincidencia contingente de dos luchas fundamentales por el poder —entre las clases y entre los Estados— en las que cada una de ellas contribuyó a reducir los rivales segmentales y local-regionales de la otra.

Bibliografía

Abercrombie, N., S. Hill, y B. S. Turner, 1980: *The Dominant Ideology Thesis.* Londres: Allen & Unwin. [Ed. cast.: *La tesis de la ideología dominante.* Madrid, Siglo XXI, 1987.]

Albert, W. 1972: *The Turnpike Road System of England, 1763-1844.* Cambridge: Cambridge University Press.

Barker, T., y C. Savage, 1974. *An Economic History of Transport in Britain.* Londres: Hutchinson.

Bohstedt, J. 1983: *Riots and Community Politics in England and Wales, 1790-1810.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Bonfield, L. 1983: *Marriage Settlements, 1601-1740: The Adoption of the Strict Settlement.* Cambridge: Cambridge University Press.

Brewer, J. 1976: *Party Ideology and Party Politics at the Accession of George III.* Cambridge: Cambridge University Press.

— 1982: «Commercialization and politics». En *The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth Century England,* ed. N. McKendrick, J. Brewer, y J. H. Plumb. Londres: Europa Press.

Brock, M. 1973: *The Great Reform Act.* Londres: Hutchinson.

Cannadine, D. 1977: «Aristocratic indebtedness in the nineteenth century: the case re-opened». *Economic History Review,* 2.ª ser., 30.

Chandler, A. D., Jr. 1977: *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press. [Ed. cast.: *La mano visible.* Madrid, Ministerio de Trabajo y Sanidad, 1988.]

Christie, I. R. 1962: *Wilkes, Wyville and Reform: The Parliamentary Reform Movement in British Politics, 1760-1785.* Londres: Macmillan.

— 1982: *Wars and Revolutions: Britain 1760-1815.* Londres: Arnold.

— 1984: *Stress and Stability in Late Eighteenth Century Britain.* Oxford: Clarendon Press.

Clark, J. C. D. 1985: *English Society, 1688-1832.* Cambridge: Cambridge University Press.

Colley, L. 1986: «Whose nation? Class and national consciousness in Britain, 1750-1785». *Past and Present.* núm. 113.

Crafts, N. 1983: «British economic growth, 1700-1831: a review of the evidence». *Economic History Review,* 36.

— 1985: *British Economic Growth During the Industrial Revolution.* Oxford: Clarendon Press.

Cranfield, G. A. 1962: *The Development of the Provincial Newspaper, 1700-1760.* Oxford: Clarendon Press.

— 1978: *The Press and Society: From Caston to Northcliffe.* Londres: Longman Group.

Crouzet, F. 1972: «Capital formation in Great Britan during the Industrial Revolution». En *Capital Formation in the Industrial Revolution.* Londres: Methuen.

— 1982: *The Victorian Economy.* Londres: Methuen.
Currie, R., *et al.* 1977: *Churches and Churchgoers: Patterns of Church Growth in the British Isles Since 1700.* Oxford: Clarendon Press.
Dahl, R. 1971: *Polyarchy.* New Haven, Conn.: Yale University Press.
Davidoff, L. 1986: «The role of gender in the "first industrial nation", agriculture in England 1780-1850». En *Gender and Stratification,* ed. R. Crompton y M. Mann. Oxford: Polity Press.
Deane, P., y W. Cole, 1967: *British Economic Growth, 1688-1959.* Cambridge: Cambridge University Press.
Dinwiddy, J. 1988: «England». En *Nationalism in the Age of the French Revolution,* ed. O. Dann y J. Dinwiddy. Londres: Hambledon Press.
Eversley, D. 1967: «The home market and economic growth in England, 1750-1880». En *Land, Labour and Population in the Industrial Revolution,* ed. E. Jones y G. Mingay. Londres: Arnold.
Foster, J. 1974: *Class Struggle and the Industrial Revolution.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Gash, N. 1986: *Pillars of Government and Other Essays on State and Society, c1770-c1880.* Londres: Arnold.
Gilbert, A. D. 1976: *Religion and Society in Industrial England: Church, Chapel and Social Change, 1740-1914.* Londres: Longman Group.
Hagen, W. 1988: «Capitalism and the countryside in early modern Europe: interpretations, models, debates». *Agricultural History,* 62.
Harley, C. 1982: «British industrialization before 1841: evidence of slower growth during the Industrial Revolution». *Journal of Economic History,* 42.
Holmes G. 1976: «The Electorate and the National Will in the First Age of Party». *Lección inaugural,* University of Lancaster.
Houston, R. A. 1982*a*: «The development of literacy: northern England, 1640-1750. *Economic History Review,* 2.ª ser., 35.
— 1982*b*: «The literacy myth: illiteracy in Scotland, 1630-1760». *Past and Present,* núm. 96.
Ingham, G. 1984: *Capitalism Divided: The City and Industry in British Social Development.* Londres: Macmillan.
John, A. H. 1967: «Agricultural productivity and economic growth in England, 1700-1760». En *Agriculture and Economic Growth in England 1650-1815,* ed. E. L. Jones. Londres: Methuen.
Jones, E. 1981: *The European Miracle.* Cambridge: Cambridge University Press. [Ed. cast.: *El milagro europeo.* Madrid, Alianza Editorial, 1994.]
Kaufman, P. 1967: «The community library: a chapter in English social history». *Transactions of the American Philosophical Society,* 57.
Kussmaul, A. 1981: *Servants in Husbandry in Early Modern England.* Cambridge: Cambridge University Press.
Kuznets, S. 1955: «Economic growth and income inequality». *American Economic Review,* 49.

— 1963: «Quantitative aspects of the economic growth of nations: VIII - distribution of income by size». *Economic Development and Cultural Change*, 11.

Landes, D. 1969: *The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present.* Cambridge: Cambridge University Press.

Lee, C. H. 1986: *The British Economy Since 1700: A Macroeconomic Perspective.* Cambridge: Cambridge University Press.

Lillee, S. 1973: «Technological progress and the Industrial Revolution, 1700-1914». En *The Fontana Economic History of Europe.* Vol. 3: The Industrial Revolution, ed. C. M. Cipolla. Londres: Fontana.

Lindert, P. H., y J. G. Williamson, 1982: «Revising England's social tables, 1688-1812». *Explorations in Economic History,* 19.

— 1983: «Reinterpreting Britain's social tables, 1688-1913». *Explorations in Economic History,* 20.

Longstreth, F. 1983: «State Economic Planning in a Capitalist Society: The Political Sociology of Economic Policy in Britain, 1940-1979». Tesis doctoral, London School of Economics.

McCloskey, D. 1985: «The Industrial Revolution, 1780-1860: a survey». En *The Economics of the Industrial Revolution,* ed. J. Mokyr. Londres: Allen & Unwin.

McKendrick, N. 1974: «Home demand and economic growth: A new view of the role of women and children in the Industrial Revolution». En *Historical Perspectives. Studies in English Thought and Society.* Londres: Europa Press.

— 1982: «Commercialization and the economy». En *The Birth of a Consumer Society,* ed. McKendrick, Brewer, and Plumb.

McKendrick, N., J. Brewer, y J. H. Plumb, eds. *The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth Century England.* Londres, Europa Press.

Mann, M. 1988*a*: «The decline of Great Britain» y

— 1988*b*: «The roots and contradictions of modern capitalism». En *States, War and Capitalism.* Oxford; Blackwell.

Marshall, T. H. 1963: «Citizenship and social class». En *Sociology at the Crossroads.* Londres: Heinemann.

Mathias, P., y P. K. O'Brien. 1976: «Taxation in Britain and France, 1715-1810». *Journal of European Economic History,* 5.

Mingay, G. E., 1963: *English Landed Society of the Eighteenth Century.* Londres. Routledge & Kegan Paul.

Mokyr, J. 1977: «Demand versus supply in the Industrial Revolution». *Journal of Economic History,* 37.

— 1985: «The Industrial Revolution and the new economic history». En *The Economics of the Industrial Revolution,* ed. J. Mokyr. Londres: Allen & Unwin.

Money, J. 1977: *Experience and Identity: Birmingham and the West Midlands, 1760-1800.* Manchester: Manchester University Press.
Moore, B., Jr. 1973: *Social Origins of Dictatorship and Democracy.* Harmondsworth: Penguin Books.
Moore, D. C. 1976: *The Politics of Deference.* Hassocks, Sussex: Harvester.
Mouzelis, N. 1986: *Politics in the Semi-Periphery.* Basingstoke: Macmillan.
Musson, A. E. 1972: «Editor's introduction». En *Science, Technology and Economic Growth in the Eighteenth Century.* Londres: Methuen.
Musson, A. E., y E. Robinson, 1969: *Science and Technology in the Industrial Revolution.* Manchester: Manchester University Press.
Neale, R. S. 1983: *History and Class: Essential Readings in Theory and Interpretation.* Oxford: Blackwell.
Newman, G. 1987: *The Rise of English Nationalism. A Cultural History, 1740-1830.* Nueva York: St. Martin's Press.
O'Brien, P. K. 1985: «Agriculture and the home market for English industry, 1660-1820». *English Historical Review,* 100.
Pawson, E. 1979: *The Early Industrial Revolution.* Nueva York: Harper & Row.
Payne, P. L. 1974: *British Entrepreneurship in the Nineteenth Century.* Londres: Macmillan.
Perkin, H. 1969: *The Origins of Modern English Society.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Phillips, J. A. 1982: *Electoral Behavior in Unreformed England: Plumpers, Splitters and Straights.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Platt, D. C. M. 1972: *Latin America and British Trade, 1806-1914.* Londres: Black.
Plumb, J. H. 1950: *England in the Eighteenth Century: 1714-1815.* Harmondsworth: Penguin Books.
— 1982: «Commercialization and society». En *The Birth of a Consumer Society,* ed. McKendrick, Brewer, y Plumb.
Pollard, S. 1965: *The Genesis of Modern Management.* Londres: Arnold.
Pollins, H. 1952: «The finances of the Liverpool and Manchester railway». *Economic History Review,* 2.ª ser., 5.
Reed, M. C. 1975: *Investment in Railways in Britain, 1820-44.* Londres: Oxford University Press.
Rubinstein, W. D. 1977*a*: «The Victorian middle classes: wealth, occupation and geography. *Economic History Review,* 2.ª ser., 30.
— 1977*b*: «Wealth, elites and the class structure of modern Britain. *Past and Present,* núm. 76.
— 1983: «The end of "old corruption" in Britain, 1780-1860». *Past and Present,* núm. 101.
Rudé, G. 1962: *Wilkes and Liberty.* Oxford: Clarendon Press.
Rueschemeyer, D.: E. Stephens, y J. Stephens, 1992: *Capitalist Development and Democracy.* Chicago: University of Chicago Press.

Schofield, M. 1981: «Dimensions of literacy in England, 1750-1850». En *Literacy and Social Development in the West: A Reader*, ed. H. J. Graff. Cambridge: Cambridge University Press.
Seed, J. 1985: «Gentlemen dissenters: the social and political meanings of rational dissent in the 1770s and 1780s». *The Historical Journal* 28.
Smith, R. A. 1972: *Eighteenth-Century English Politics: Patrons and Place-Hunters.* Nueva York: Holt, Rinehart & Winston.
Speck, W. A. 1977: *Stability and Strife: England, 1714-1760.* Londres: Arnold.
Stevenson, J. 1979: *Popular Disturbances in England, 1700-1810.* Londres: Longman Group.
Thomas, J. A. 1939: *The House of Commons, 1832-1901: A Study of Its Economic and Functional Character.* Cardiff: University of Wales Press Board.
Thompson, E. P. 1963: *The Making of the English Working Class.* Harmondsworth: Penguin Books. [Ed. cast.: *La formación de la clase obrera británica.* Barcelona, Crítica, 1989.]
Thompson, F. M. L. 1963: *English Landed Society in the Nineteenth Century.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Ward, W. R. 1973: *Religion and Society in England, 1790-1850.* Nueva York: Schocken Books.
Watt, I. 1963: *The Rise of the Novel.* Harmondsworth: Penguin Books.
West, E. G. 1985: «Literacy and the Industrial Revolution». En *The Economics of the Industrial Revolution*, ed. I. Mokyr. Londres: Allen & Unwin.
Wiles, R. M. 1968: «Middle class literacy in eighteenth century England: fresh evidente». En *Studies in the Eighteenth Century*, ed. R. F. Brissenden. Canberra: Australian National University Press.
Williams, D. E. 1984: «Morals, markets and the English crowd in 1766». *Past and Present*, n.° 104.
Wilson, C. 1955: «The entrepreneur in the Industrial Revolution in Britain». *Explorations in Entrepreneurial History* 3.
Wolfe, A. 1977: *The Limits of Legitimacy.* Nueva York: Free Press.
Wrigley, E. A. 1985: «Urban growth and agricultural change: England and the Continent in the early modern period». *Journal of Interdisciplinary History* 15.
Wrigley, E. A., y R. S. Schofield, 1981: *The Population History of England, 1541-1871.* Londres: Arnold.

Capítulo 5
LA REVOLUCIÓN AMERICANA Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL LIBERALISMO CAPITALISTA CONFEDERAL

La guerra y la reforma se mantuvieron separadas en el territorio continental de Gran Bretaña, la primera se producía en el extranjero; la segunda, en casa, pero en otros países, incluida la Irlanda británica, las luchas armadas las fusionaron. Las dos grandes revoluciones del periodo estallaron en Francia y América. En esta última, los Estados Unidos se convirtieron en el país probablemente más capitalista del mundo, con el Estado más federalista y menos nacional. Por mi parte, defino al nuevo Estado americano como una cristalización liberal-capitalista, confederal y democrática, a lo que habría que añadir un militarismo desigual, más pronunciado en el plano nacional que en el geopolítico. Trataré de explicar ahora cómo adquirió estas características.

Las colonias americanas

Los cálculos de 1760 arrojaban una población de dos millones de súbditos de la corona británica en las colonias de América del Norte. No se calculó la población de americanos nativos («indios») (cuyo número rebasaba los 100.000 en las colonias, pero era mayor en las

zonas del oeste). Los esclavos de ascendencia africana suponían un 20 por 100 de la población calculada. Entre los blancos, un 75 por 100 descendía de ingleses e irlandeses, de forma que, salvo los nativos y los esclavos, la mayoría de la población estaba habituada a las leyes británicas. América era, en efecto, británica. Sus instituciones económicas e ideológicas se parecían mucho a las de la madre patria; constituía el segundo hogar de aquella «sociedad civil» difusa, caracterizada por el capitalismo y la vía capitalista comercial a la alfabetización discursiva de masas que he comentado en el capítulo 2. También sus instituciones políticas y militares se habían modelado sobre las británicas. Cabría esperar, pues, una variante americana de aquel liberalismo moderadamente centralizado, propio del antiguo régimen, que he descrito en el capítulo 4. Con todo, las presiones fiscales y militares provocaron una «revolución» que intensificó las peculiaridades americanas y, más tarde, las recondujo a un liberalismo capitalista y confederal. Pero ya antes de la crisis, el poder se distinguía en las colonias americanas por cinco peculiaridades, que no hicieron sino subrayar las diferencias de Gran Bretaña respecto a la mayor parte de los países europeos:

1. El hecho de que las colonias se encontraran a cinco mil kilómetros de la madre patria las dotaba de una considerable autonomía logística y unas libertades civiles y políticas de facto. Las comunicaciones del siglo XVIII no facilitaban a Londres el control de los territorios americanos. Las condiciones locales eran tan distintas que la adopción de decisiones importantes de Londres requerían consultas constantes, pero los barcos invertían por lo menos cuatro meses en completar sus viajes de ida y vuelta, prácticamente el tiempo de una campaña o estación agrícola completa. En todo caso, a Londres le interesaba mucho más el provecho comercial que la organización del Imperio, de modo que adoptó una política que calificaba de «saludablemente descuidada», dejando una gran autonomía a pueblos que, después de todo, no eran extranjeros o «nativos», sino sus primos de las colonias. Un gobierno despótico no habría sido admisible para la corona británica, pero la elección de representantes de las colonias para el parlamento de Westminster se consideraba imposible (aunque los revolucionarios franceses adoptaron después esta solución centralista). Las colonias americanas eran, por tanto, esencialmente libres.

La autonomía significaba en realidad varias autonomías descentralizadas, ya que nunca existió una colonia capital, ni tampoco una

separación neta entre estas colonias, el Canadá o el Caribe británico. La longitud del litoral era de unos dos mil kilómetros. Como se indica en el cuadro 4.1, América contaba con un Estado constitucional y descentralizado. Cada colonia administraba sus asuntos mediante sus propias asambleas elegidas y sus autoridades policiales y fiscales. El funcionamiento de estos miniestados —los recursos fiscales, los procesos judiciales y la aprobación de los proyectos de ley— era americano. El parlamento británico sólo rechazó el 5 por 100 de las leyes de las asambleas (Palmer, 1959: 190). Gran parte de estas asambleas coloniales se encontraban formalmente subordinadas a un gobernador representante de la corona, aunque algunas estaban aún bajo gobiernos otorgados por carta de privilegio a un propietario o una compañía. El gobernador disfrutaba de amplios poderes formales: podía vetar leyes, disolver la asamblea y convocar una cámara alta o consejo legislativo en calidad de autoridad ejecutiva. Sin embargo, no podía imponer su voluntad, como no fuera mediante acuerdo con los notables de la colonia. El parlamento británico se había negado a incluir los salarios de los gobernadores, su personal y los jueces al presupuesto civil. Las asambleas legislativas locales establecían estos sueldos por votación. Así pues, el gobernador se convirtió en un «negociador duro en un país extranjero» (Pole, 1966: 503) gobernado en la práctica por parlamentos locales. El Estado nominalmente soberano de Westminster apenas estaba institucionalizado en la vida local. Las variaciones locales y regionales progresaron sin trabas gracias a esa amplia autonomía.

2. La economía colonial era unitaria, fundamentalmente agraria, incluso primitiva y, sin embargo, sumamente capitalista. Más del 90 por 100 de los americanos blancos eran granjeros que explotaban un medio mucho menos domesticado que cualquiera de los europeos. La manufactura era insignificante. Pero la cualificación laboral y la abundancia de la naturaleza hicieron a los americanos blancos más prósperos que los europeos. Los reclutas del ejército americano medían por término medio unos cinco centímetros más que sus iguales británicos, lo que indica una clara superioridad de la dieta (Sokoloff y Villaflor, 1982). La agricultura generaba mayores excedentes para el mercado. Sus dos formas predominantes, la granja pequeña y las plantaciones de algodón y tabaco del sur, que producían para los mercados internacionales, generaron tres clases sin equivalencia exacta en Europa: los plantadores, los esclavos de las plantaciones y los campesinos granjeros con una autonomía prácticamente total. Si

Gran Bretaña era el país más capitalista de Europa, una vez que los agricultores americanos comenzaron a producir para los mercados internacionales, América lo fue mucho más.

3. Las colonias habían institucionalizado el racismo. Las teorías europeas respecto a la evidente superioridad de su poder sobre los pueblos de otros continentes ya habían dado lugar a un racismo ideológico en todos los países. Pero los europeos masivamente instalados en América vivían entre dos razas muy distintas: la de los «pieles rojas», con quienes entablaron una feroz competencia por las tierras que desencadenó frecuentes guerras, y la de los esclavos africanos negros, cuya fuerza de trabajo explotaban. Esta relación a tres se prolongó más que en el centro y el sur del continente americano: el clima resultaba más benigno para los europeos, los indios demostraron una fuerte capacidad de resistencia, y el trabajo esclavo era muy útil para el cultivo del algodón y el tabaco. Dos realidades terribles, el genocidio indio y la esclavitud africana constituyeron un hecho fundamental para la sociedad norteamericana del periodo que abarca el presente volumen. La situación marcó tan intensamente a los colonos europeos que acabó por producir una violencia generalizada en las relaciones de poder; descarada en el enfrentamiento con los indios, apenas disimulada en las instituciones que regulaban la esclavitud, e institucionalizada en la costumbre de llevar armas entre los blancos. Alimentó, además, un militarismo nacional y una definición racial de la solidaridad y de la comunidad normativa. A pesar de la diferencia de sus orígenes, la comunidad blanca presentaba entre aquellas «razas extrañas» una homogeneidad sin parangón con cualquier otro país europeo del siglo XVIII.

4. La comunidad blanca extraía su fuerza de una religión común y de una situación económica relativamente equitativa. Casi todos sus miembros eran protestantes. Muchas confesiones se establecieron juntas, formando sólidas comunidades religiosas reunidas en torno a las instituciones del culto, donde se fomentaba la alfabetización masiva. La primera de las tres grandes infraestructuras ideológicas del siglo XVIII, la alfabetización promovida desde las iglesias, conoció su mayor expansión en América. A finales del siglo XVIII los americanos blancos estaban tan alfabetizados como los ingleses, a pesar de vivir en una sociedad mucho más agraria. Alrededor de dos tercios de los hombres, un porcentaje no inferior de mujeres y prácticamente todos los varones de la Nueva Inglaterra puritana sabían leer y escribir (Lockridge, 1974: 72 a 101). Las redes ideológicas de poder (analiza-

das en el capítulo 2) difundieron las ideologías discursivas entre la comunidad blanca, en un nuevo renacer religioso, como el *Great Awakening* de mediados del siglo XVIII. Sermones y panfletos expandieron el libre mercado de la salvación. Aunque la iglesia anglicana era también allí oficial, sólo predominaba en algunas zonas, ya que el fermento religioso minaba su autoridad y fomentaba la disensión. Un protestantismo no sectario pudo separar potencialmente las almas de los colonizadores de las de sus gobernantes.

La relativa igualdad económica cimentó también la cohesión de los blancos. En realidad, los colonos pertenecían en su mayor parte a las mismas clases que muestra el cuadro 4.2 para Gran Bretaña. El antiguo régimen estaba representado por la aristocracia y la baja nobleza, especialmente en Virginia y las Carolinas (muchos conservaron durante varias generaciones la posición y la riqueza), por las oligarquías de comerciantes de la costa, que dominaban el comercio marítimo, y por el clero, la abogacía y los oficiales del ejército, que buscaban el patronazgo oficial y formaban parte de la administración. Pero entre el «pueblo» formado por los propietarios comunes, los pequeños granjeros independientes eran muchos más numerosos que en Europa, pues sumaban un 40 por 100 de la población blanca y un tercio del total de la población estimada, además de unos cuantos pequeño burgueses comerciantes, tenderos, artesanos y trabajadores urbanos. De este modo, la «plebe» americana se distinguía por estar compuesta de indios, esclavos negros y un número escaso de jornaleros e indigentes blancos. Aunque las diferencias crecieron durante el siglo XVIII (Henretta, 1973: 102 a 112, Nash, 1975-6), la abundancia, la fertilidad de la tierra y la escasez de mano de obra garantizaban la subsistencia de la mayor parte de los blancos. No existía una marginación significativa entre los más pobres, ni, por tanto, una conciencia clara de oposición de clase contra el «pueblo» de los propietarios, como en el caso de Gran Bretaña. Los blancos formaban una sociedad civil y participaban en sus actividades cotidianas, incluso en mayor medida que sus iguales británicos. Sólo los indios y los negros estaban marginados.

5. La emigración había liberado a los blancos de la dependencia de las organizaciones segmentales de poder. En el plano local no existía un «antiguo régimen» enraizado en la costumbre y el respeto por la tradición, aunque se dio una fuerte presión para cultivarlos, especialmente en las zonas de asentamiento más antiguo del sur y en las comunidades urbanas patriarcales de la Nueva Inglaterra puritana. Faltaban las redes del Estado-Iglesia y de la «antigua corrupción»

propia de la baja nobleza terrateniente. La iglesia anglicana, respaldada por Gran Bretaña, sólo pudo establecerse en el sur. Desde principios del siglo XVIII la ciudadanía individual era un hecho tan real en América (Bailyn, 1962: 348) como en Gran Bretaña, mientras que la ciudadanía política se encontraba mucho más desarrollada porque el acceso al voto era mayor. También era limitado el patronazgo en materia de cargos. Por el contrario, existía una fuerte corrupción orientada hacia el mercado. Las administraciones coloniales constituían la mayor fuente de concesiones de tierras y de privilegios en materia de esclavos y de mercado. El régimen encarnó una «nueva corrupción capitalista» frente a la antigua versión inglesa.

La libertad que proporcionaba la emigración benefició de modo particular a los granjeros. Más de un 20 por 100 de los emigrantes habían sido antes pobres arrendatarios, explotados en sus tierras de Inglaterra, Escocia y el Ulster por los terratenientes. Ahora, la inmensa mayoría eran auténticamente libres y un poco más ricos en sus pequeñas granjas de las regiones apartadas y las tierras fronterizas. Un grupo mayor de ellos —Bailyn (1986) estima que sumaban casi la mitad de los emigrantes británicos— habían sido artesanos y comerciantes empobrecidos de las zonas urbanas, que para costearse el pasaje se alquilaban a sí mismos mediante contratos de aprendizaje (*indentured servants*). Abarrotaban las cubiertas, como los esclavos, y soportaban un sometimiento personal a sus patronos que solía durar cuatro años. Al acabar el plazo, la mayoría abandonaba su oficio y compraba granjas pequeñas en el interior. En la década de 1770 estos contratos disminuían en favor del trabajo libre asalariado (como en la agricultura inglesa).

Todas estas variaciones facilitaban la independencia respecto a la organización segmental de poder. Aquella movilidad era mucho más significativa que los simples cambios de profesión que implica el término en la sociología moderna (aunque Main, 1965, sostiene que también existía una considerable movilidad en los trabajos). Como en otras colonias durante los años de formación, había muchas oportunidades de progreso personal. El trabajo duro, el talento, la suerte y un mínimo de recursos podían transformar a un artesano en maestro; a un pequeño tratante, en dueño de una tienda; y a cualquiera, en un granjero independiente, con mayor facilidad que en los países europeos, mucho más institucionalizados. Entre las clases altas, esta misma combinación proporcionó a los jóvenes más capaces de las familias respetables con poco dinero la posibilidad de emplear sus rela-

ciones familiares para adquirir posición y riqueza, como fue el caso de algunos Padres Fundadores (Mann y Stephens, 1991). Aunque América era rural, faltaba la aristocracia relativamente cerrada de Europa. Más que estabilidad y prestigio, la tierra representaba para los americanos blancos movilidad e independencia. Los pequeños granjeros europeos del siglo XVIII —es decir, los campesinos— también disfrutaban por lo general de independencia económica respecto a sus superiores, pero esa autonomía raramente era política. América invirtió el orden de la política urbana y rural. El término «pequeña burguesía» resulta excesivamente urbano para definir a la vanguardia del capitalismo americano, formada por granjeros modestos e independientes, libres de las organizaciones segmentales de poder.

Aunque oficialmente eran ingleses, estas cinco diferencias garantizaron a los colonos americanos blancos una sociedad civil más cohesionada, menos organizada segmentalmente, y más regionalizada y fluida que la de la madre patria, por no hablar de la gran parte del continente europeo. Los capitalistas modestos eran más numerosos y más independientes a nivel local, especialmente en los estados medios y en la agricultura del interior. Todos ellos habían conquistado la independencia con esfuerzo, como muestran sus historias personales de lucha contra la pobreza y el sometimiento. Sin embargo, la concentración de la propiedad, el patronazgo político y la sujeción legal también desempeñaron un importante papel en la determinación de los productos que contaban en el mercado, tanto en las ciudades como en los puertos y en la producción agrícola del sur. De este modo, el capitalismo americano tuvo cuatro elementos distintivos:

1. Un capitalismo de pequeña mercancía, predominantemente agrario, cuyo espíritu hizo célebre Weber al citar los escritos de Benjamin Franklin en su obra *La ética protestante y el espíritu del capitalismo.*
2. Grandes concentraciones de propiedad privada, que empleaban mano de obra libre, cuyos propietarios solían combinar al menos dos de los siguientes intereses: agricultura, comercio, manufactura y finanzas.
3. Un capitalismo represivo y esclavista en el sur, productor de materias primas para el comercio internacional.
4. Un patronazgo estatal, «casi del antiguo régimen», de la actividad capitalista, que inicialmente se benefició de la mano de obra en régimen de aprendizaje.

Tales elementos, variables de una localidad y de una región a otra, a lo largo y ancho de trece colonias y de una gran extensión de territorio, produjeron una América económicamente muy variada, menos centralizada en lo político y en ciertos aspectos menos «nacional» que Gran Bretaña. Pero los colonos redujeron la variedad haciendo la revolución. Dicho en pocas palabras, la Revolución Americana supuso el triunfo de la primera y la tercera formas de capitalismo sobre la cuarta. La segunda se escindió, pero su facción revolucionaria consiguió aferrarse al poder dentro del nuevo Estado. De esta forma, el Estado se mantuvo confederal y descentralizado. Más tarde, la guerra civil destruiría la tercera, es decir, la forma esclavista de capitalismo. En los Estados Unidos se impuso entonces un capitalismo que combinaba la descentralización y las grandes concentraciones de propiedad, paradójicamente imbuido del espíritu capitalista pequeño burgués. Se convirtió en un país típicamente liberal-capitalista, y conservó su estructura confederal.

Antes de la revolución, la política tendía a enfrentar a los que se encontraban integrados en la primera forma de capitalismo (la pequeña producción) con las tres restantes. Las asambleas coloniales se elegían según las cualificaciones británicas de la propiedad. Dado que el número de pequeños granjeros era mayor que en Gran Bretaña, entre el 40 y el 80 por 100 de los adultos blancos de sexo masculino (con variaciones en las distintas colonias y un promedio posible de alrededor del 50 por 100) tenían derecho al voto. Se trata de cifras muy superiores a las del resto del mundo (en Gran Bretaña los varones adultos con derecho al voto no superaban el 15 por 100). Los hacendados participaban normalmente en las asambleas de la ciudad (invención típicamente americana), donde los pequeños granjeros formaban la mayoría junto con una pequeña burguesía urbana. No obstante, las familias notables, cuyos miembros combinaban por lo general la tierra con el comercio, el ejercicio de la abogacía y los cargos oficiales (y que solían poseer también esclavos en el sur) copaban las instituciones administrativas y los consejos legislativos de los gobernadores, y formaban también la mayoría elegida para las asambleas y los comités de las asambleas de la ciudad. Se puede decir que el gobierno se ejercía, como en el condado inglés, a través de una pequeña red compuesta por familias extensas unidas por matrimonio.

Los conflictos se dieron sobre todo en los grandes puertos de mar. Los partidos conservadores y reformistas movilizaban a sus seguidores definidos por la clase en un clima de violencia esporádica.

Pero se trataba de una dinámica tan confusa como la del radicalismo inglés: la plebe protestaba sin llegar nunca a organizar alternativas, y el liderazgo de la reforma, compuesto por los notables «excluidos», colaboraba muy raramente con los activistas de la pequeña burguesía y del artesanado, cuya conciencia de clase era, en todo caso, ambigua y presentaba muchas diferencias de una ciudad a otra (de nuevo, igual que en Inglaterra). De los tres puertos principales, Filadelfia se había desplazado a la izquierda desde principios de la década de 1770; Boston, a la derecha; sólo Nueva York carecía de una dirección nuclear (Nash, 1986: 200 a 247).

En otras muchas zonas, el electorado aceptó su impotencia política, fue incapaz de obtener el derecho al voto y se sometió a las redes de patronazgo y de deferencia del régimen colonial de notables (Dinkin, 1977). En palabras de un contemporáneo, existía «una aristocracia con voz, frente a una democracia silenciosa» (Fischer, 1965: 4). Muchos colonos progresaron gracias a negocios lucrativos propios de la conquista, colaborando con sus vecinos blancos y explotando o exterminando a los restantes. Como ya he tenido ocasión de subrayar, a comienzos del siglo XVIII ni la política ni el Estado constituían asuntos de importancia vital para la mayoría de la población de los países occidentales; en el caso concreto de los americanos, el hecho de vivir en el país más próspero y más aislado desde el punto de vista logístico, en la avanzadilla más aislada de la civilización occidental, y al mismo tiempo menos gravada por los impuestos, tanto el Estado británico como el gobierno de la colonia resultaban insignificantes. De modo que el gobierno no era ilegítimo, sencillamente porque no existía.

En medio de la indiferencia política general resurgió el antiguo régimen segmental. Las colonias habrían podido continuar de este modo durante años y años, prolongando el sistema corrupto pero liviano de Gran Bretaña. En realidad, las peculiaridades americanas que hemos enumerado anteriormente ya existían, pero no evolucionaron con uniformidad hacia el floreciente liberalismo capitalista americano del siglo XIX, como ha sostenido Hartz (1955). Los regímenes locales y regionales de la colonia habían comenzado a institucionalizarse por sí solos sobre una próspera sociedad agraria de colonos. El tiempo y la estabilidad que necesitaban para llamarse antiguos se dieron entre la nobleza del sur y los patriarcas puritanos de Nueva Inglaterra. En definitiva, habría podido prosperar un liberalismo de antiguo régimen, modelado sobre el británico, con las acostumbradas diferencias locales y regionales.

Podríamos aplicar el mismo argumento contrafactual al poder geopolítico. Sin la revolución, el crecimiento de las colonias habría favorecido su liberación de las garras de la reina con el parlamento a lo largo del siglo XIX. Es probable que para entonces los gobiernos británicos hubieran estado preparados para formas más flexibles de asociación política, como las que concedieron a lo que quedaba de sus dominios blancos. El poder político y geopolítico moderno se habría configurado de modo muy distinto: dominado por una *commonwealth* confederal y anglófona, cuyo centro se habría trasladado al otro lado del Atlántico, evitando quizás de esta forma el desestabilizador periodo de conflicto entre grandes potencias, acaecido entre la decadencia británica y la hegemonía americana, que aterrorizó y cambio el mundo.

La rebelión

El ciclo de exacciones fiscales provocado por la situación geopolítica condujo las relaciones de poder por caminos distintos, más aún en este caso que en el caso británico. La situación impuso al gobierno de Londres una política que intensificó las peculiaridades americanas. Fue entonces cuando, por primera vez, muchos americanos descubrieron la significación del Estado colonial, e, inmediatamente, lo consideraron ilegítimo. Y fue entonces también cuando lo derribaron para establecer un régimen diferente.

Durante la guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763 (llamada en América guerra francesa e india), los colonos pagaron impuestos especiales a cambio de un aumento del poder de sus asambleas locales, que acrecentó su autonomía política. La victoria británica acabó con los subsidios de Francia y España a los indios hostiles y fijó las fronteras coloniales. La amenaza militar a las colonias quedó prácticamente eliminada. Sin embargo, desde el punto de vista británico respecto a América, la victoria fue un desastre. Los colonos ya no necesitaban ni la protección ni el gobierno de Inglaterra; de hecho, muchos consideraban que el gobierno británico interfería innecesariamente en el desplazamiento de los indios y la expansión hacia el oeste. Pero la guerra proporcionó al gobierno británico un Imperio global y una zona de mercado libre, además de un ejército regular en tierra americana. Gran Bretaña intentó organizar ese Imperio como un todo coherente y quiso que las colonias contribuyeran en gran

parte a su mantenimiento, creyendo tener en el ejército permanente un nuevo medio capaz de forzar su voluntad.

El gobierno británico nunca exigió a los americanos unos impuestos tan elevados como los que recaudaba a sus súbditos británicos. En términos comparativos, la presión fiscal directa fue mucho menor que la de otros ejemplos que aparecen en estas páginas, incluido el caso prusiano (donde gran parte de los ingresos procedían de los dominios reales). Pero, como veremos también en el caso de Francia, la carga fiscal resultó lesiva por la combinación de la subida de impuestos y el grado en que los Estados podían institucionalizar la recaudación. En las colonias faltó esto último. Al no estar institucionalizada la deuda nacional, se exigió a los colonos un esfuerzo impositivo más alto. Sin embargo, a estas alturas la mayoría de ellos sentía una total indiferencia por el Imperio y sus necesidades geopolíticas; su concepción del interesés era local y contaban con una larga experiencia en el control local de los impuestos y la evasión de las tasas aduaneras. La autonomía logística americana se vio atacada por un régimen acuciado por su planteamiento de las necesidades geopolíticas. La presión fiscal-militar aumentó la lucha política y la centralización del descontento.

Desde finales de las décadas de 1760 y 1770, este conflicto directo de intereses fiscales se hizo más amplio y más basado en principios. Movilizó una red alternativa de poder ideológico, tal como había ocurrido en Gran Bretaña (véase el análisis del capítulo 4) y en Francia (véase capítulo 6). También en América, escritos y discursos se encargaron de convertir en una cuestión de principios lo que había sido una cuestión de intereses, beneficiándose de las cinco peculiaridades americanas ya citadas. Pero tanto los intereses como los principios se debatieron con espíritu democrático en unas asambleas que de hecho eran logísticamente soberanas. Aquel radicalismo puritano del siglo XVII, prácticamente enterrado, se combinó aquí con una tradición más respetable, la del pensamiento de Locke y los ilustrados escoceses, y encontró eco en un ambiente de práctica independencia económica y espíritu contractualista propio del capitalismo de pequeña mercancía y la moral protestante. Sometidas a la presión fiscal, las tradiciones americanas amplificaron las tradiciones británicas para proclamar aquel principio de «no a los impuestos, sin representación», que también había encontrado un fuerte apoyo en Gran Bretaña. La homogeneidad de una comunidad blanca religiosa, alfabetizada y bastante igualitaria contribuyó a difundir la protesta basada en

principios morales a través de dos niveles de las redes del poder ideológico y político.

El nivel más popular estaba formado por los pequeños granjeros, los artesanos y las capas más modestas de la pequeña burguesía. En un primer momento los movilizaron las asambleas orales —manifestaciones y reuniones para emplumar y llevar a cabo diversos ataques contra los funcionarios reales y su clientela local—, tendiendo un puente entre la «plebe» y el «pueblo», al modo de las masas revolucionarias francesas y las manifestaciones británicas del periodo de Peterloo. En América, como hasta cierto punto en Gran Bretaña, los clubes y las tabernas, junto a las asambleas de la ciudad típicamente americanas, fueron el lugar de encuentro de los granjeros modestos y la pequeña burguesía con el segundo nivel, el de las redes de familias notables. En principio, todo se centró en las asambleas coloniales, pero cuando éstas comenzaron a estancarse, los notables expandieron sus redes por todas las colonias gracias a las conexiones familiares, a las infraestructuras de alfabetización discursiva y a los profesionales de la abogacía.

Se produjo un estallido de ideologías discursivas. De 1763 a 1775 el número de periódicos se había duplicado (Davidson, 1941: 225). En 1776 se publicaron cerca de cuatrocientos panfletos, la mayoría de ellos de 10 a 15 páginas, que indagaban en las premisas, analizaban la lógica de los argumentos y establecían conclusiones razonadas. Su estilo manifiesta la existencia de un público letrado, sofisticado y rico (Bailyn, 1967: 1 a 21). Se vendieron 120.000 ejemplares de *Common Sense* de Tom Paine, publicado en ese mismo año (un número equivalente al 3 por 100 del conjunto de la población colonial, la misma proporción que alcanzaría más tarde la venta de *Los derechos del hombre* en Gran Bretaña). Ni los periodistas ni los escritores de panfletos solían ser profesionales. Los panfletos estaban escritos por notables a los que aún quedaba tiempo libre después de desempeñar sus variados papeles como abogados, ministros religiosos, maestros, comerciantes y plantadores; en los periódicos aparecían sus cartas y los resúmenes de sus conferencias, sermones e informes oficiales. En realidad, no se trataba de radicales, sino de un «partido» progresista en el marco del régimen del gobierno colonial. Como sus iguales «ilustrados» en la Francia del antiguo régimen, se vieron abocados por las presiones del gobierno a ejercer una oposición «nacional» y a fundar una alternativa basada en los principios.

Los abogados desempeñaron un papel decisivo. Durante todo el siglo XVIII habían constituido un accesorio útil del régimen colonial,

tal y como sirvieron los profesionales de las leyes al antiguo régimen británico. Los conocimientos de leyes se convirtieron en un auténtico peldaño para acceder al patronazgo real, el estatus y la promoción política. En un primer momento, muchos abogados fueron conservadores leales, pero la presión fiscal inglesa les planteó una serie de problemas ideológicos. Los impuestos eran compatibles con la soberanía del parlamento inglés, sin embargo entraban en contradicción con la política local y la práctica legal. Se había violado la costumbre, y ésta era esencial para la concepción inglesa de los derechos legales. Como en la madre patria, los radicales se sirvieron de la estructura legal inglesa para defender las libertades adquiridas contra el «despotismo». Pero cuando la legítima autoridad política, el rey con el parlamento, se negó a concederlas, algunos se vieron obligados a rebasar la costumbre e inventar nuevos principios de libertad. En realidad, tenían a su disposición las teorías de Locke y la Ilustración escocesa, pero los abogados las propagaron fundamentándolas en un concepto esencialmente comercial: el contrato entre individuos libres.

Se convirtieron así en los principales teóricos, en los «intelectuales orgánicos» (por emplear el término de Gramsci) de una concepción más burguesa de la libertad. Muchos juristas prominentes no eran profesionales especializados, sino hacendados dedicados a la gestión de sus bienes. Entre los de mayor edad predominaban intereses que los vinculaban al régimen colonial, por eso se hicieron masivamente lealistas. Los más jóvenes, sin embargo, formados en la década de 1770 y aún no comprometidos, lideraron la protesta y se convirtieron prácticamente en patriotas rebeldes (McKirdy, 1972; Murrin, 1983). Como en el caso francés, tampoco aquí existen pruebas de que estos hombres padecieran una «movilidad bloqueada»; algunos de ellos cosecharon grandes éxitos en su actividad. Eran, por el contrario, ideólogos genuinamente prácticos. Como lamentaba Gage, el general británico, ante sus superiores, a raíz de la *Stamp Act*: «Los abogados son la fuente de la que ha brotado la protesta en todas las provincias». La profesión iba a estar bien representada entre los líderes revolucionarios.

La estabilidad del gobierno británico de las colonias dependía de la alianza de la corona con los notables locales y regionales. Pero éstos se encontraban ahora divididos en partidos patrióticos y lealistas. Los patriotas movilizaron la alfabetización discursiva y la ley, y se relacionaron con otras redes más populares, como las asambleas orales, que a veces llegaron a controlar. Puesto que apenas existían «cla-

ses peligrosas» entre los pobres de raza blanca, el temor a una revolución de la «plebe» no produjo entre ellos la disciplina que había implantado entre sus iguales en casi todos los países europeos.

El primer acto de resistencia organizada de importancia tuvo lugar a comienzos de 1766 contra la *Stamp Act*. Los Hijos de la Libertad crearon vínculos a lo largo y ancho de las colonias mediante periódicos, panfletos y redes de correspondencia entre los hombres con propiedades: gentileshombres, poseedores de feudos francos, maestros artesanos y comerciantes independientes. Pero ante el ejército británico necesitaban el respaldo de las clases bajas. La combinación dio resultado. La ley fue rechazada en 1776 y los Hijos de la Libertad se disolvieron. Volvieron a agruparse cuando el gobierno impuso las *Townshend Acts*, los impuestos sobre el consumo, al año siguiente. Resultó fácil obtener el apoyo de las masas, ya que los impuestos gravaban a todos los consumidores. La táctica cambió entonces al boicoteo de los productos ingleses y el castigo para quienes no lo siguieran. Los tribunales, elegidos por los elegibles para votar a los miembros de las asambleas y compuestos por notables que, por lo general, se dedicaban también a las leyes, dieron un aire jurídico a la cuestión (Davidson, 1941: 63 a 82; Maier, 1973: 77 a 112, 280 a 287). La rebelión estaba en marcha, dirigida por miembros del régimen colonial y organizada en todas las colonias, con el apoyo de las masas y nuevos métodos de movilización ideológica.

Pero el gobierno británico no se plegó a sus principios. Birch (1976) y Pocock (1980) sostienen que los políticos británicos tenían los suyos propios. La representación y la soberanía eran inseparables conforme a la fórmula de «el rey con el Parlamento». Si se permitía a las asambleas coloniales la libertad de ratificar y vetar los impuestos, la soberanía del parlamento, sobre la que descansaba el concepto centralizado británico de libertad, se pondría en cuestión. Por mi parte, no creo que la revolución fuera el resultado de un choque entre principios distintos. Me parece una visión excesivamente estática de las ideologías, que normalmente surgen de enfrentamientos por el poder. Como hemos visto en el capítulo 4, el antiguo régimen británico no se basaba prioritariamente en los principios. Tenía sus oponentes —igual que en América—, que habían elaborado poco a poco en forma de principios su resentimiento por haber sido excluidos del poder. El gobierno británico tenía dos concepciones más cínicas de los hechos. En primer lugar, creía que los principios americanos eran sólo una nube de humo para esconder el rechazo a costear la parte

correspondiente de la defensa imperial, y se negaba a aumentar la carga impositiva en suelo británico. En segundo lugar, aunque consideró con gran pragmatismo la forma menos penosa de exacción fiscal, contaba con el ejército permanente para el caso de verse obligada a forzar las voluntades. Desplegó, pues, todo su repertorio fiscal, desde los impuestos sobre la tierra, las aduanas, el consumo y los sellos.

Una de dos, o el gobierno británico cometió un grave error por desconocimiento de las peculiaridades americanas o carecía de alternativas. Al contrario que en Gran Bretaña, estos esquemas fiscales no se hallaban institucionalizados en las colonias mediante infraestructuras de recaudación supervisadas por las organizaciones segmentales de notables locales. La coerción militar no constituía aquí (como en Gran Bretaña) una amenaza en la reserva; para recaudar los impuestos habría que emplearla. Cada recurso, cada desfile de las tropas, ofendían a la población, desafiaba su sentido de la libertad y de la autonomía local y provocaba mayor resistencia, más coerción por parte británica y, a su vez, más oposición ideológica. Los americanos acababan de comprender dos cosas: (1) que un pequeño ejército regular estaba mal equipado para recaudar impuestos en un país inmenso que se resistiera, y (2) que los impuestos no eran el producto de la mala fe de unos ministros, sino de la voluntad del rey con el parlamento. A partir de ese momento, la resistencia se convirtió en una rebelión de principios dirigida contra la soberanía parlamentaria.

En el verano de 1775 los ingleses desencadenaron una represión militar a gran escala. Pero su superioridad no era mucha, ya que los americanos se encontraban bastante bien equipados; muchos poseían armas cortas, tenían experiencia en la milicia, y algunos sabían cómo dirigirla para apropiarse rápidamente de cañones, carros, munición, caballos y mapas (los uniformes y los manuales de instrucción llegarían más tarde). Eran los recursos de cualquier ejército del siglo XVIII. En definitiva, suficiente capacidad militar para frustrar los primeros avances británicos y ganar tiempo con el fin de organizar la rebelión.

El recurso a las armas dividió a los colonos. No menos del 20 por 100 de los blancos se mantuvieron leales. Pero esta división no respondía simplemente a motivos de clase, región o sector. Algunos autores han sostenido que Patriotas y Lealistas se dividieron por motivos económicos, a causa del interés de los primeros por la expansión hacia el oeste que la política británica había frustrado (por ejemplo, Egnal, 1988). Pero sus pruebas son débiles y están reñidas con lo que

Stephens y yo mismo (1991) consideramos los intereses económicos esencialmente distintos de los líderes patriotas. Lo más claro es quizás que se diferenciaran dos modos de producción netamente capitalistas del tercero. Los «integrados», que dirigían la economía política estatal y se beneficiaban de ella —la administración colonial y el comercio—, fueron Lealistas (Brown, 1965). Los granjeros más independientes, la pequeña burguesía urbana y los dueños de esclavos, que apenas se relacionaban con la administración y el comercio, fueron Patriotas (la esclavitud estaba tan institucionalizada en el sur que ya no necesitaba el apoyo militar de la corona). La distinción más clara fue probablemente la segmental: una especie de enfrentamiento entre el partido de los «integrados» y el de los «excluidos». Como en otros lugares, mientras los «excluidos» proclamaban principios universales, los «integrados» se acogían a la tradición particularista. Pero tales distinciones resultan a menudo poco netas; en realidad, un grupo cohesionado de notables locales organizó a la comunidad favorable a su posición, silenciando a los oponentes de la mayoría.

Como ha resaltado Brown, muchos adoptaron una posición creyendo que resultaría vencedora, y esta opinión variaba según el balance visible del terror local. El grupo de los Patriotas consistía en una curiosa alianza de los caballeros de Virginia con los demócratas de Nueva Inglaterra; en tanto que los Lealistas contaban con Nueva York y muchas comunidades medias de colonos. Los líderes de ambos bandos procedían de las familias más ricas de notables prominentes. La rebelión no era aún revolucionaria. Hasta ese momento, la presión fiscal y militar no había conseguido reconducir las peculiaridades americanas; por el contrario, las estaba empujando a la guerra.

Guerra y «revolución»

La escalada del conflicto armado condujo a la guerra civil. En cada una de las fases, ambos bandos creyeron que el otro se retraería, y apostaron por la guerra total confiando en sus posibilidades de victoria, pero siempre obtuvieron una respuesta equivalente. La tradición histórica subraya los errores británicos, el mayor entusiasmo y la capacidad de aguante de los rebeldes; sin embargo, las revisiones más recientes conceden mayor importancia a la situación geopolítica. El gobierno británico, llevado por su temor a que la rebelión se extendiera a Irlanda y a que desde allí, alentada por las intrigas france-

sas, amenazara a la propia Gran Bretaña, estacionó en Irlanda más tropas de las que tenían a su disposición en América los generales británicos. El equilibrio se tambaleó cuando Francia y España entraron en guerra. La flota francesa irrumpió, transportando un ejército, para asegurar la decisiva rendición del general Cornwallis en Yorktown, en 1781. Sin la participación de Francia, la guerra podría haberse estancado o haber acabado en alguna forma de compromiso. La guerra tuvo importantes consecuencias para América. Su proceso y sus resultados estuvieron determinados ante todo por las relaciones militares y geopolíticas de las potencias, y en última instancia por la suerte del conflicto. Se trataba de una discontinuidad sustancial respecto a la anterior historia americana.

Pero el conflicto también contribuyó a empujar a los rebeldes hacia la revolución. El carácter revolucionario de la Guerra de Independencia ha sido siempre, con razón, un tema controvertido. Una revolución puede definirse sociológicamente como una transformación violenta de las relaciones dominantes de poder; pero las revoluciones reales son siempre una cuestión de grado. Los acontecimientos americanos resultaron decididamente ambiguos. La resistencia a calificarlos de revolucionarios se debe a cuatro razones:

1. En la Guerra de Independencia confluyeron tres luchas distintas: la que destruyó el antiguo régimen británico, la que estableció una nueva constitución política y la que creó nuevas relaciones sociales entre las clases. Si las tres se hubieran fusionado en un único y violento cataclismo, como ocurrió en los casos ruso y francés, no dudaría en calificarlo de «revolución», pero no fue así.
2. Aunque la lucha contra los ingleses se planteó violentamente, las otras dos llegaron a un compromiso y se institucionalizaron en un conflicto que habría de prolongarse durante generaciones. La «revolución» comenzó con violencia, pero luego procedió con mayor o menor turbulencia durante varias décadas, al final de las cuales el poder político e ideológico se había transformado mucho más que las relaciones de clase.
3. Aunque estos cambios fueron profundos, puede decirse que habrían ocurrido en cualquier caso como resultado de un intenso proceso evolutivo, que quizás hubiera podido recibir una inyección del conflicto violento.
4. Los líderes de la revolución, los Padres Fundadores, fueron siempre y en todo lugar hombres blancos y propietarios acomoda-

dos. Mis investigaciones (1991) y las de Stephens demuestran que pertenecían a clases más altas y más organizadas como tales de lo que han indicado los anteriores estudios de Beard (1913), Solberg (1958: 387 y ss.) y McDonald (1958).

Ciento veintinueve Padres Fundadores firmaron la Declaración de Independencia de 1776 o los Artículos de la Confederación en 1783 o fueron delegados de la Convención Constitucional de 1787. Casi todos procedían de las familias más ricas e importantes de las colonias. Ninguno era pobre ni vivía del trabajo manual (salvo los médicos y un puñado de granjeros de tipo medio). Sólo unos veinte trabajaban o tenían una profesión, en el sentido moderno de la palabra. El resto combinaba las diversas actividades económicas de un caballero; como media, tres de las siguientes: plantador, jurista, comerciante, financiero, industrial, alto funcionario, etc. Pertenecían igualmente a las familias extensivas más ricas de la comunidad local, en la que se beneficiaban del patronazgo, concertaban matrimonios y recibían herencias a través de estos entramados. Únicamente dos de los Padres Fundadores presentan las características de hombres hechos a sí mismos; el resto de los hombres de talento que habían escalado la pirámide social eran hasta cierto punto «parientes pobres» apoyados en las relaciones familiares. En la práctica totalidad de los casos habían recibido una elevada educación, que sólo estaba al alcance de un 1 por 100 de los colonos, y sus redes culturales eran densas, extensas y de alto nivel. Aunque no podemos trazar un cuadro comparable para los líderes Lealistas, es improbable que procedieran de familias más acaudaladas que éstas, si bien la mayoría parecen haber sido ricos (Brown, 1965). ¿No estamos ante un fenómeno de facciones en el seno de un antiguo régimen emergente? Después de todo, Burch (1981: vol. I) ha demostrado que esa misma clase continuaba dominando los gabinetes americanos bastante después de la revolución.

No obstante, cuatro fuerzas potencialmente «revolucionarias» dieron el contrapunto:

1. Durante la guerra, los contendientes emplearon una extrema violencia social y política. La guerra no se libraba sólo entre América y Gran Bretaña, era también una contienda civil entre comunidades, vecinos y amigos, que luchaban a muerte entre sí. Aun excluyendo las batallas, la violencia en términos comparativos fue la que cabe es-

perar de una situación revolucionaria, por ejemplo, en las revoluciones rusa y francesa. Los Lealistas se vieron expropiados en igual medida que los monárquicos franceses, y tuvieron que exiliarse cinco veces más (Palmer, 1959: I, 188, 202). La redistribución de la tierra, generalmente de los Lealistas ricos a los granjeros y pequeños burgueses, constituyó una expropiación de poder económico tan profunda y violenta como la francesa (aunque no como la rusa).

2. Estos hechos encontraron legitimación en la ideología política revolucionaria. Los Patriotas se acogían a la autoridad moral del «pueblo» contra el «despotismo», la «esclavitud» (no la de los negros), los «privilegios», la «corrupción» y las «conspiraciones», tal como en Francia. Los Lealistas y los principios británicos se aplicaban únicamente a la defensa de la autoridad debidamente establecida, y sentían un escaso interés por las grandes batallas ideológicas. Esta asimetría ideológica recuerda también a otras revoluciones.

3. Los acontecimientos produjeron una súbita transformación de la legitimidad política. Derrotar a los Lealistas y a los británicos implicaba refundar el Estado desde sus cimientos y «constituirlo» en un documento escrito. El poder residía en «Nosotros, el pueblo» y en sus asambleas populares elegidas, cuyo voto fue proclamado soberano y capaz de crear un Estado. En 1780 los rebeldes de Massachusetts, forzados por la intransigencia británica más allá de una reorganización política *ad hoc*, comenzaron su «constitución» con estas palabras «Nosotros, el pueblo, ordenamos y establecemos». Se trataba de una desviación del conservadurismo de la tradición rebelde de Occidente. Los europeos habían defendido siempre la rebelión en términos de derechos consuetudinarios legitimados por antiguas tradiciones. De hecho, así comenzaron también los americanos.

Como indica Bailyn (aunque no lo hace para justificar una valoración revolucionaria, sino conservadora, de los acontecimientos), lo que querían no era «derribar o alterar el orden social establecido, sino preservar la libertad política amenazada por la aparente corrupción de la constitución y del sistema vigente de libertades» (1967: 19). En efecto, si la corona hubiera renunciado a introducir nuevas formas de recaudación fiscal, la anterior situación habría podido recuperarse. Pero la insistencia de la corona hizo imposible la restauración del orden político. Pese a sus buenas intenciones, los rebeldes se convirtieron en revolucionarios políticos. Se vieron empujados a introducir al «pueblo» en su Estado en calidad de fuerza política activa, no como una mera encarnación pasiva de libertades consuetudinarias. Desde

ese momento, los rebeldes de otros países se convertirían en revolucionarios al imitar conscientemente esta invención americana, y formarían «asambleas constituyentes», como en el caso de los revolucionarios franceses y rusos.

4. El haber permitido la participación del «pueblo» resultó mucho más provechoso que una legitimación meramente simbólica. Abrió el camino a la democracia política y a una mayor democracia de la economía política. Los notables ricos que proclamaron la rebelión en nombre del «pueblo» no eran demócratas. Por «pueblo» querían decir exactamente lo mismo que los ingleses: hombres blancos y hacendados, «hombres de educación y de fortuna». Pero combatían contra la mayor potencia del mundo, aunque el grueso de su ejército se encontrara a miles de kilómetros, y necesitaban al pueblo. De hecho, necesitaron además a la «plebe», que en América estaba formada por hombres violentos, duchos en el uso de las armas cortas y útiles para la rebelión. En el lado rebelde se apreciaban ahora signos expresos y reconocidos de lucha de clases entre los líderes de las clases altas y las masas militantes (Countryman, 1981, 1985; Nash, 1986; Rosswurm, 1987), pero la disciplina militar imprescindible para enfrentarse a un enemigo más peligroso la frenó en gran medida.

La organización de las relaciones de poder militar se entrelazaba con todas estas fuerzas pro y antirrevolucionarias a medida que la guerra arrojaba ambiguos resultados «revolucionarios». Así se produjo la primera movilización masiva de las guerras modernas, con un carácter muy descentralizado que a menudo recuerda a la guerrilla. Durante las grandes crisis, los rebeldes proclamaron el servicio militar universal en las zonas bajo su control, que, paulatinamente, se hizo efectivo. El principal papel de la milicia no consistía en ganar batallas (aunque algunos destacamentos proporcionaron una eficaz pantalla frente el ejército regular del continente), sino en obligar a la mayoría indiferente a que asumiera un mínimo de actividad militar. Una vez persuadida o atrapada en el marasmo local contra los destacamentos ingleses o los vecinos Lealistas, aquella mayoría ya no podía volverse atrás; desde ese momento se convertía en un grupo de rebeldes en guerra contra la corona (Shy, 1973).

La movilización masiva surtió efectos muy variados en la estructura del poder interior. No habría tenido consecuencias radicales si la estructura del mando jerárquico del régimen hubiera continuado victoriosamente la guerra. Como veremos en el capítulo 12, austriacos y prusianos conservaron el dominio de sus ejércitos masivos en 1812-

1813, de modo que pudieron desafiar al ejército francés al tiempo que contenían las reformas. Pero la guerra americana creó organizaciones militares más variadas. Estuvo mucho más descentralizada y se libró en trece colonias autónomas, mediante numerosos frentes y escaramuzas, en los que ambos bandos luchaban a menudo con los métodos de la guerrilla. Incluso el ejército continental rebelde estaba descentralizado a veces en facciones regionales, cuyas diferencias se veían aumentadas por unos suministros inadecuados que las obligaban a ser autosuficientes en el plano local. El mando del general Washington demostró mayor inteligencia para el politiqueo militar que para una estrategia de campo integrada. Así pues, cuando el «pueblo» luchaba, lo hacía en grupos locales autónomos, como hombres libres (aunque no faltaron tampoco las mujeres), acosando y dando muerte a los mismos notables del lugar que antes habían respetado.

De este modo, como subraya Palmer (1959), la guerra desestabilizó rápidamente las redes del patronazgo colonial y desarrolló la tendencia popular y democrática de las relaciones de poder en la colonia. «Cuando la olla hierve, es imposible que no se haga espuma», se quejaba un contrariado notable rebelde de Massachusetts (Handlin y Handlin, 1969: 11). Los jóvenes alistados en el ejército o reclutados para la milicia no eran precisamente hacendados o votantes libres. Sus demandas de libertad política eran claras y, durante algún tiempo, imposibles de defraudar.

Desde el punto de vista logístico y estratégico, la campaña dependió también de los puertos y de otras ciudades en las rutas de comunicación, así como de los granjeros del interior para los suministros y los movimientos tácticos. La fuerza para esta organización masiva se consiguió en muchos lugares a expensas de los notables.

La clave del éxito rebelde residió en dos grupos marginales dentro del régimen colonial. En primer lugar, los artesanos urbanos, trabajadores mecánicos y comerciantes modestos —el estrato más bajo de la pequeña burguesía— estaban en condiciones de presionar en las asambleas ciudadanas y de organizar actos violentos contra los Lealistas cada vez que una localidad se declaraba a favor del rey o de la rebelión. En segundo lugar, los pequeños granjeros, recién establecidos en las zonas del oeste donde aún no existía el derecho al voto o estaba muy restringido, contaban con comunidades autónomas y organizaciones mercantiles capaces de impedir que los Lealistas operaran en sus zonas y de dotar de hombres y sumistros a las fuerzas rebeldes. Simpatizaban con la causa, especialmente con la abolición del

gobierno que concedía monopolios y privilegios económicos, lo que he llamado en estas páginas «la nueva corrupción capitalista». La carga revolucionaria de la guerra estuvo en haber satisfecho las demandas de la pequeña burguesía y de los granjeros a través de sus propias organizaciones políticas y militares. Las asambleas populares de las ciudades y las organizaciones de la comunidad rural se convirtieron en órganos de la milicia y del naciente Estado rebelde. Tanto en las ciudades como en el campo, las redes restringidas de literatura impresa —periódicos, panfletos y comités de correspondencia— fueron sustituidas por las asambleas orales del pueblo (véanse Henretta, 1973: 162 a 165; ensayos en Young, 1976; y Steffen, 1984).

De esta forma, cuando los notables Patriotas arengaban al pueblo para la lucha —sin una conciencia clara de su significación— estaban justificando la rebelión para conquistar un gobierno basado en principios populares. Su retórica era cada vez más populista en el tono y más democrática en el contenido. Los principios ideológicos se hicieron universales y trascendentes a raíz de esta petición de ayuda. Después, siguieron algunas ratificaciones políticas formales. El requisito de la propiedad descendió ligeramente en la mayoría de los estados, incrementando así la proporción de varones adultos blancos con derecho al voto en una banda del 50 al 80 por 100 y del 60 al 90 por 100; se abolió la discriminación religiosa a nivel local e incluso se concedió el derecho al voto a un escaso número de negros y mujeres (Williamson, 1960; Dinkin, 1982: 27 a 43). El aumento en más del doble del número de votantes durante la década de 1780 minó la capacidad de control local y segmental por parte de los notables a través del patronazgo y las redes de deferencia, a ello contribuyó también la extensión de la práctica de los representantes por delegación (que comenzó en las asambleas de la ciudad de las décadas de 1760 y 1770) y las campañas electorales masivas.

Lo que Dahl ha llamado «contestación» y yo «democracia de partidos» estaba ya institucionalizado. En realidad, el liderazgo descendió poco en la estructura de clases y continuó dominado por los «mejores», pero las relaciones organizadas de éstos con el electorado habían experimentado una profunda transformación, como sostiene Cook para el caso de Nueva Inglaterra: «Cuando la revolución destruyó los fundamentos del concepto jerárquico de los acuerdos sociales, comenzó a desaparecer la política basada en la deferencia. Ya no se consideraba hombres socialmente superiores a los líderes, sino, explícitamente, servidores del pueblo» (1976: 192).

Creció el número de pequeños propietarios en las asambleas legislativas. En 1765 más del 50 por 100 de los asambleístas de Massachusetts disfrutaban de un patrimonio superior a los 2.000$; en 1784 la proporción era sólo del 22 por 100. De 1750 a 1775 menos del 20 por 100 de los delegados en las asambleas coloniales eran artesanos o pequeños granjeros. En 1784, ascendían al 40 por 100 del total de los legisladores, pero en su mayoría procedían del norte (Main, 1966: 406 y 407; Henretta, 1973: 168). El poder político todavía era local; sin embargo, comenzaba a pasar a manos de los pequeños granjeros y la pequeña burguesía. En un país rural, cuyas instituciones eran básicamente británicas, el fenómeno formaba parte de un proceso evolutivo, en este caso mucho más rápido de lo que había sido el compromiso a la británica entre el antiguo régimen y la pequeña burguesía emergente, como consecuencia de una guerra evitable, que tuvo un resultado militar coyuntural y contestado.

Las reformas económicas contribuyeron a consolidar el proceso. Luchando contra el despotismo, los rebeldes favorecían la libertad económica. Redujeron el mercantilismo estatal, abolieron las primogenituras y las rentas que pagaban los poseedores de feudos francos para librarse del trabajo debido al dueño de la tierra, aumentaron el porcentaje de funcionarios elegidos e intentaron acabar con la práctica de las cesiones de tierras a través del patronazgo. Los efectos se sintieron más en los estados medios, donde la mayoría de los notables habían sido Lealistas. Se les expropiaron las tierras y los cargos, y el poder local pasó a manos de los pequeños granjeros y de la pequeña burguesía. Fuera del sur, no existía ya una diferencia cualitativa entre el gran capital y el pequeño capital. El «espíritu del capitalismo (de pequeña mercancía)» weberiano predominaba al norte y al oeste, y compartía el sur con el capitalismo esclavista. A reforzarlo vino una tendencia europa sin relación con la guerra. La población de Europa crecía en ese momento por encima de la capacidad de su agricultura para alimentarla y necesitaba el trigo de los productores americanos, en su mayoría pequeños granjeros. En la década de 1790 el norte superaba a los estados del sur en exportaciones y riqueza per cápita (Appleby , 1984). Una vez más, el crecimiento fue mayor en los estados medios —especialmente en Pennsylvania— donde el pequeño capital agrario dominaba la economía. El nuevo sistema electoral tradujo esta situación en poder político.

No obstante, los virajes a la izquierda tuvieron su contrapartida en la centralización de las relaciones del poder militar durante las úl-

timas fases de la guerra, a medida que las campañas se hacían más coherentes y el centro estratégico se trasladaba al ambiente mucho más conservador del sur. Los Padres Fundadores de la clase alta, al mando de los cuarteles generales políticos y militares, encontraron entonces un fuerte apoyo local a su conservadurismo social entre las organizaciones segmentales de los plantadores sureños. El aumento de la disciplina del ejército continental contribuyó a aumentar su poder. Los propietarios radicales podían dominar las asambleas locales en todas partes, pero no la cumbre centralizada del posterior esfuerzo de guerra de los Patriotas.

El acuerdo constitucional

La guerra acabó en 1783 con la expulsión de británicos y Lealistas y la dispersión de las milicias populares. Aunque los radicales conservaron su influencia en los estados, la perdieron en el liderazgo. En ese momento, algunas asambleas estatales practicaban una economía política radical, con cancelación de deudas (la mayoría contraída por los granjeros pobres), impuestos progresivos y concesión de tierras. La constitución vigente en el ínterin, es decir, los Artículos de la Confederación de 1783, sólo preveía un Estado central débil. Amenazados por este radicalismo local de clase, los notables se organizaron para reforzar el Estado.

Su principal respuesta fue la Constitución redactada durante la Convención de 1787 en Filadelfia, donde se aprobó por un amplio consenso la creación de un Estado representativo (para los hombres de raza blanca), desvinculado de cualquier religión concreta, cuyo poder militar sería lo menos gravoso posible para sus ciudadanos blancos (al tiempo que suficiente para dominar a las razas distintas a la blanca). Naturalmente, su índole patriarcal se mantuvo incuestionable. El debate se centró en dos aspectos que hemos tratado en el capítulo 3 como «cristalizaciones de nivel superior» de los Estados modernos: el capitalismo y el Estado-nación.

El primero no fue un capitalismo contra cualquier otra forma de producción, sino un conjunto de economías capitalistas alternativas, cuyo modelo de desarrollo basado en los grandes y pequeños propietarios (más los poseedores de esclavos, para acabar de complicar el resultado) debería apoyar el Estado. Se planteaban, pues, dos problemas: ¿quién debería estar representado en este Estado y cuál habrían

de ser sus poderes económicos?; a los que se sumaba otra cristalización problemática: ¿cuál sería su grado de centralismo y hasta qué punto habría de ser «nacional»? Los partidos, avezados en la guerra contra el despotismo, no deseaban un Estado centralizado al estilo del que los revolucionarios franceses crearían más tarde, ni siquiera como el británico, pero la mayoría de los notables que controlaban todo el territorio tendían a una mayor centralización que los radicales. Tampoco estaban de acuerdo con la centralización los dueños de esclavos y los notables de los estados pequeños. El entrelazamiento de ambas cristalizaciones no permitió la existencia de un choque frontal de clase.

La Convención constitucional fue el único proceso de toma de decisiones en aquel periodo que se realizó de puertas adentro, sin consultas ni presiones directas del pueblo (véase el análisis gráfico de Collier y Collier, 1986). Tras dos semanas de intenso debate, cincuenta y cinco delegados redactaron una nueva constitución que debían ratificar los estados. Todos los delegados eran acaudalados propietarios; los más ricos y notables de los tres grupos de Padres Fundadores. Todos ellos querían poderes para reprimir las «tendencias anarquistas» de las asambleas legislativas locales. Ya se habían producido algunas situaciones que evidenciaban los riesgos, como la rebelión de Shays, una auténtica insurrección de clase contra los impuestos y las deudas en Massachusetts. Pero las cuestiones de clase no se trataban en aquellos debates cuyos delegados compartían implícitamente las mismas ideas sobre este punto. Tampoco se explayaban sobre las cuestiones religiosas. Aunque procedían de una enorme diversidad de confesiones, las delegaciones no eran sectarias, sino miembros de un Estado multiconfesional. Inmediatamente llegaron al acuerdo de que el Estado sería laico.

Por el contrario, el asunto de la centralización «nacional» los dividía. Los delegados de los estados más pequeños, recelosos de que el electorado de los grandes les impusieran una forma de «tiranía», temían un Estado relativamente centralizado, en especial los representantes del sur, por estar convencidos de que un Estado central y fuerte legislaría contra la esclavitud. Para lograr una constitución acordada y apartar a los radicales, tenían que alcanzar un compromiso sobre los derechos de los estados. Lo hicieron con sentido práctico, dejando lagunas (sobre todo en lo relativo a las constituciones de los futuros estados), pero convirtieron el asunto de los derechos —y sus vínculos con la esclavitud en el sur y los nuevos estados del

oeste— en un problema de difícil solución. Con todo, salieron adelante bastante unidos, con una Constitución capaz de evitar los enfrentamientos de clase, de lo que sólo en parte eran conscientes.

La consciencia fue plena en el caso de la separación de poderes, que produjo un Estado central dividido y diseñado para satisfacer a conservadores y descentralizadores radicales, mediante la prevención tanto del despotismo como de las súbitas expresiones de voluntad popular. Los poderes públicos quedaron divididos en no menos de cinco instituciones representativas: la presidencia, las dos cámaras del Congreso, los trece estados y los gobiernos locales. La división no se hizo conforme a principios consistentes que pudieran permitir la aparición de jerarquías entre ellas. Los poderes económicos concedidos a las asambleas legislativas de los estados se dividieron en varias instituciones. El Senado y la Cámara de Representantes tenían sufragios diferentes para elecciones escalonadas; la Cámara elaboraba los presupuestos; el Senado disfrutaba de mayores poderes sobre los nombramientos presidenciales y los tratados con el extranjero, pero su sufragio era más restringido; el presidente se elegía indirectamente mediante un colegio electoral pensado para representar mejor a los propietarios; el presidente no tenía facultades para iniciar una legislación, pero sí para vetar la del Congreso (a menos que ambas cámaras la aprobaran por mayorías de dos tercios). No se ampliaron significativamente los sufragios (salvo en los casos en que se pretendía acabar con las desventajas religiosas), pero sí los distritos electorales con el fin deliberado de hacerlas interclasistas para que resultaran invulnerables al control del pueblo bajo.

La separación final de poderes dio origen al Tribunal Supremo, una idea brillante, aunque no tanto una estrategia consciente como un consenso sobre la naturaleza de los derechos, que habría de tener consecuencias tan trascendentes como involuntarias. Se debió al predominio, tanto en el proceso revolucionario como en la redacción de la Constitución, de los grupos de notables formados por propietarios juristas; al menos treinta y tres de los cincuenta y cinco delegados habían practicado alguna vez la abogacía, aunque sólo cuatro de ellos habían sido *únicamente* abogados (Mann y Stephens, 1991). La rebelión se había hecho en principio contra la autoridad despótica del rey con el Parlamento, pero llegó un momento en que las asambleas legislativas locales actuaron contra las leyes de la propiedad, por esa razón, los delegados consideraron prudente «atrincherar» su Constitución, convirtiéndola en una norma de ley supervisada por un

Tribunal Supremo, incluso, de ser necesario, contra el ejecutivo y las asambleas legislativas (aunque no parece que la oposición se diera cuenta de las implicaciones de esta decisión).

La Constitución cambiaría cuando lo hiciera el poder social, pero las modificaciones habrían de ser siempre coherentes con los principios establecidos por la clase propietaria de los Padres Fundadores. Para los cambios constitucionales, se establecían mayorías tan amplias que resultaba imprescindible un consenso considerable entre las clases y entre los estados. El presidente nombraría a los jueces del Tribunal Supremo a título vitalicio, de modo que éstos sobrevivían por lo común a su benefactor. Por otra parte, podían vetar la legislación o los actos gubernamentales, así como decidir si los actos del gobierno o de cualquier órgano privado obedecían a los principios constitucionales. Otros tribunales menores emitían los mismos juicios reguladores sobre entidades más pequeñas.

De modo que los juristas, a través del Tribunal Supremo, se convirtieron en reguladores activos de las agencias privadas, corporativas o gubernamentales, como sucedáneo de una administración estatal más centralizada (como observa Skowronek, 1982: 24 a 30). Las instituciones legales necesitaron varias décadas para materializar su total primacía, pero a mediados del siglo XIX la ley estaba por encima de la política y, en última instancia, puede decirse que también de la democracia de partidos. Podría parecer (como creyó T. H. Marshall) que América había institucionalizado precozmente la ciudadanía civil y política, pero la primera era capitalista y fuertemente individualista y se encontraba atrincherada incluso contra la segunda. «Las mayorías populares ... quedaron sujetas para siempre» concluye Appleby (1987: 804).

En sus observaciones sobre la democracia americana, Tocqueville subraya el poder de los juristas con su famosa declaración según la cual «los jueces y los abogados» formaban «la aristocracia americana». Una apreciación poco precisa si tenemos en cuenta que la ley americana entonces (como ahora) era inseparable de la forma capitalista de propiedad. Estos juristas, notables acaudalados, sostenían una concepción del derecho muy distinta, fraguada en aquella ecuación de libertad personal y propiedad individual que MacPherson (1962) ha denominado «individualismo dominante». Aunque MacPherson localiza esta ideología demasiado pronto, distorsionando la concepción de Hobbes y Locke para situarla en el siglo XVII, lo cierto es que dominó el pensamiento de los Padres Fundadores. La propiedad pri-

vada se hizo sagrada, tan inviolable para el Estado como para el anarquismo. El carácter inalterable de la norma de ley protegía en ese contexto la libertad de la persona y la de su propiedad. Los pequeños granjeros y los pequeños burgueses, que formaban la principal oposición radical, nunca se opusieron a este principio porque también ellos eran propietarios. Sobre semejante asunto de vital importancia no hubo jamás un conflicto frontal de clase conforme al esquema marxiano. El carácter cada vez más favorable de la solución a la gran propiedad (a medida que se concentraba la propiedad industrial y financiera y los pequeños granjeros volvían a endeudarse) pasó desapercibido durante mucho tiempo, en medio de los conflictos posrevolucionarios.

Cuando se concedió a los grupos sociales explotados —clases bajas, mujeres, negros y, en ocasiones, a los escasos nativos supervivientes— la ciudadanía cívica y política, el régimen americano pasó a ser el más avanzado en materia de libertades y derechos de la propiedad individual. Sin embargo, los derechos colectivos quedaron siempre subordinados a los individuales, como tuvieron ocasión de comprobar a su costa los sindicatos (véase capítulo 18), los grupos de granjeros radicales (capítulo 19) y todos aquellos que durante el siglo XX abogaron por el aumento de los derechos sociales. Sus reivindicaciones obtuvieron como respuesta una feroz represión militar y jurídica. Contra la teoría evolucionista de Marshall sobre la ampliación de la ciudadanía, lo cierto es que América nunca desarrolló una ciudadanía social, y que los movimientos de trabajadores y campesinos fueron neutralizados mediante el atrincheramiento de la ciudadanía civil individual como en ningún otro de los países que aquí estudiamos. Las asambleas legislativas estatales no podían cancelar los débitos constitucionalmente, ni (hasta bien entrado el siglo XX) aprobar leyes que legalizaran los piquetes u otras «conspiraciones» contra la libré propiedad de los empresarios. La gran propiedad capitalista se atrincheró contra las principales reivindicaciones de trabajadores y pequeños granjeros del siglo XIX, como veremos en los capítulos 18 y 19. Tal como lo habían interpretado los juristas, esta Constitución atrincherada se convirtió en la mejor garantía del poder de la propiedad capitalista en América (también lo observa Hartz, 1955: 103). Los abogados fueron desde entonces y para siempre los «intelectuales orgánicos» del capitalismo. Cuarenta años más tarde, esta condición los llevaría a dejar el campo revolucionario para pasarse al conserva-

dor, prácticamente sin oposición de los radicales de la pequeña burguesía.

Aunque la Constitución se redactó en el aislamiento de Filadelfia, nadie podía ignorar la presión popular. Los delegados aseguraron a duras penas la ratificación del nuevo texto constitucional por parte de los estados, contra una oposición que a veces fue muy dura. De igual modo se vieron forzados a hacer concesiones para proteger los derechos individuales contra el nuevo gobierno a través de las primeras enmiendas constitucionales, conocidas globalmente con la expresión *Bill of Rights*. Sin embargo, puesto que nada en la Constitución parecía impedir directamente las metas de los radicales en materia de política económica, éstos no se opusieron con la energía necesaria.

Durante la década de 1780, nacieron dos «partidos» de implantación similar, que comprendían cerca de los tres cuartos del número de representantes en las asambleas legislativas. Main (1973: capítulo 2) los denomina «cosmopolitas-comerciales» y «localistas-agrarios». Entre los primeros predominaban los profesionales y los comerciantes urbanos, apoyados por los terratenientes y plantadores establecidos cerca de las ciudades; de hecho, un antiguo régimen muy parecido a los regímenes coloniales locales anteriores a 1776. Los localistas eran políticos de nuevo cuño que representaban sobre todo a los pequeños granjeros capitalistas de los condados del interior. Artesanos, pequeños industriales y pequeños comerciantes (la pequeña burguesía baja) se dividieron entre ambas facciones; su clase los inclinaba hacia los localistas; sus intereses urbanos hacia los cosmopolitas. Durante la década de 1790 los unos y los otros entraron a formar parte de partidos políticos poco firmes, muchos cosmopolitas se hicieron federalistas, y muchos localistas (unidos a los plantadores del sur) se hicieron primero antifederalistas y luego republicanos jeffersonianos y demócratas. En tercer lugar, la política americana cristalizó, antes que en ningún otro país, como una plena democracia de partidos.

Las cristalizaciones problemáticas —qué forma de capitalismo y hasta qué punto había de ser «nacional» el gobierno— continuaron dividiendo a los partidos. Los federalistas apoyaban un gobierno central fuerte y un sufragio restringido para asegurar el desarrollo económico y los derechos de la propiedad; sus oponentes favorecían lo contrario. El conflicto demostró ser paradójico. Los federalistas consiguieron sus objetivos por medios que no habían elegido.

El temor a un resurgimiento del despotismo centralizado, que compartían todas las clases y regiones, favoreció la descentralización

del Estado. La Constitución delegó las funciones e infraestructuras gubernamentales (educación, salud, familia, leyes, gran parte de las obras públicas, la policía y la atención a los pobres) en la administración de cada estado (véase el resumen de Lowi, 1984, sobre el poder de los tres niveles gubernamentales). De hecho, delegó los poderes «residuales» —es decir, no especificados en ningún otro lugar— en estas materias a los estados particulares. Desde el punto de vista de la mentalidad europea, incluida la británica, el Estado nacional americano fue débil desde su nacimiento. En el capítulo 11 veremos hasta qué punto era menos poderoso que los Estados europeos durante el periodo que estamos tratando.

Con todo, los federalistas triunfaron en dos frentes más reducidos, que resultaron decisivos para la consecución de sus metas. Como ya hemos visto, la ley que encarnaba la seguridad de los derechos de la propiedad individual era inalterable. Sin embargo, su aspecto no era de centralización, de modo que la potencial oposición de clase no le opuso resistencia. En segundo lugar, los federalistas (especialmente Hamilton) generaron las teorías del «desarrollo tardío». Creyendo que Gran Bretaña proporcionaba el modelo de la futura economía, quisieron que el gobierno fomentara la concentración financiera y la manufactura industrial. Centraron su ofensiva centralista casi exclusivamente en asegurar infraestructuras gubernamentales de carácter federal para la actividad económica a gran escala: creación de una banca nacional, una moneda y una estructura crediticia, así como establecimiento de aranceles protectores para los manufactureros (Ferguson, 1964; McGuire y Ohsfeldt, 1984). Con menos controversias, apoyaron la ampliación del servicio postal, aduanas y agencias agrarias, así como una pequeña armada para proteger la navegación y un modesto ejército permanente para matar a los indios y emprender obras de ingeniería civil. Este recortado centralismo «modernizador» del Estado ganó muchos adeptos. Tom Paine, que supuestamente fue su enemigo político, calificaba de provincianos indiferentes a las necesidades de la nación emergente a sus aliados demócratas rurales (Foner, 1976). Durante la primera mitad del siglo XIX los estados particulares subvencionaron también carreteras y canales, y dieron carta de privilegio a las corporaciones; todo ello menos en el sur que en otras zonas (Pisani, 1987; para las cifras véase Holt, 1977). Los federalistas lograron imponer los derechos de propiedad y el desarrollo de las infraestructuras, pero a través de un Estado predominantemente *confederal* —mediante los tribunales y una división

del trabajo entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados—, no del Estado-nación centralizado que habían pensado en principio.

En materia de sufragio sobrevaloraron sus poderes segmentales sobre las elecciones. Sus redes de patronazgo lucharon por imponerse en la masa electoral emergente. Las redes de poder ideológico se expandieron gracias en parte a esa política; por ejemplo, durante la década de 1790 el número de oficinas de correos se multiplicó por doce y los periódicos por dos veces y media. Aumentaron las sociedades de correspondencia republicanas y demócratas y los mítines en campaña. Granjeros, pequeño burgueses y trabajadores manuales tuvieron también sus organizaciones alternativas. La actitud de los notables varió según las regiones. Los plantadores del sur sentían una solidaridad de clase por los federalistas, pero la constante amenaza que suponía la centralización para el esclavismo los empujó al campo demócrata. Nunca llegó a materializarse una alianza electoral entre las clases altas y su clientela (como la que dominó en Gran Bretaña durante el siglo XIX), lo que evitó el estallido de un conflicto frontal de clase y planteó al mismo tiempo un problema electoral a los federalistas. El factor geopolítico vino a empeorar la situación. Los federalistas adoptaron el modelo británico de sociedad capitalista moderna, capaz de legitimar un sistema impositivo y de mantener un Estado fuerte, constitucional y, sin embargo, no democrático. Pero Gran Bretaña había sido el gran enemigo hasta poco antes, aún lo era de Francia, la heredera revolucionaria de América, y ahora se estaba convirtiendo en el primer rival comercial. En estas condiciones, la política exterior de los federalistas se exponía a la acusación de antiamericana.

Los demócratas de Jefferson obtuvieron una victoria fulminante en las elecciones de 1800. «Ningún otro grupo de americanos volvería a buscar seriamente el poder en unas elecciones nacionales defendiendo valores jerárquicos o prácticas políticas basadas en la deferencia», concluye Appleby (1984: 3). La fuerte competición de los partidos produjo en 1810 un aumento de la concurrencia a las urnas correspondiente a la mitad de los adultos blancos; una participación mucho más alta que la del periodo colonial (Fischer, 1965: 182 a 192). Los demócratas de Jackson, a la cabeza de los granjeros modestos, los artesanos y de la pequeña burguesía urbana, lucharon por una más amplia reforma del sufragio durante la década de 1830. Tanto los jeffersonianos como los jacksonianos expresaron ocasionalmente una ideología anticapitalista, de corte populista, que oponía los grupos

«industriosos» y «agrarios» a los parásitos «capitalistas» (Hartz, 1955: 120 a 125). En efecto, hubo ocasiones en que los partidos americanos recordaron a los radicales británicos y a los *sans-culottes* franceses. Sin embargo, lograron cumplir sus metas respecto al sufragio con menos violencia y prácticamente dentro de las instituciones de la América colonial, ampliadas por la guerra e institucionalizadas por la Constitución; puesto que ésta había atrincherado la ley de la propiedad y dividido con rigor los poderes, ni los notables ni los federalistas tenían mucho que temer de la reforma electoral. En 1840 todos los varones adultos y blancos disfrutaban del derecho al voto en la primera democracia bipartidista de la historia. El sistema segmental de reparto de empleos entre los miembros del partido vencedor benefició a muchos (véase capítulo 13). La lucha de clases, frenada por la democracia de partidos y el clientelismo segmental, no amenazaba al imperio de la propiedad.

En 1840 vino a sumarse a esta situación una estrategia bastante coherente del régimen. Salvo en el sur, éste no fue nunca «antiguo» en América. La guerra colonial y la furiosa embestida electoral de un capitalismo modesto barrieron el sistema basado en la cuna, la religión, el patronazgo y la deferencia. La pequeña burguesía, encabezada únicamente por los granjeros con menos medios, logró antes que en ningún otro lugar del mundo una democracia de masas, lo que iba a tener implicaciones potencialmente radicales. Pero el radicalismo no era anticapitalista. El Estado, al convertirse en una separación real de los poderes, se hizo conservador. Lentamente, sus infraestructuras divididas se pusieron al servicio de los programas del capitalismo a gran escala. Y la norma de ley atrincheró una concepción de la propiedad privada enteramente capitalista. Salvo en el sur, la combinación de estos factores condujo a la hegemonía del liberalismo capitalista. La constitución como norma de ley —y no como en otras partes el Estado o la soberanía parlamentaria— se había convertido a finales del siglo XIX en el núcleo simbólico y venerado de la nación.

Pero ni la Constitución ni el Estado fueron de gran ayuda para la cuestión nacional de los derechos de los estados. El esclavismo y el capitalismo del norte llegaron finalmente al enfrentamiento en un Estado federal débil que carecía de recursos para resolver el conflicto, e incluso de la capacidad de asignar autoritariamente constituciones (¿aceptando la esclavitud?) a los nuevos estados del oeste. La Unión se sumió en una guerra civil que sólo pudo aumentar la centralización del Estado durante un breve tiempo. La geopolítica americana no de-

safiaba a otras grandes potencias, de modo que hasta el siglo XIX tuvo pocas necesidades de movilización nacional o de tecnología militar, y este hecho retrasó al Estado-nación. A medida que se reforzaban las infraestructuras del gobierno estatal y de los gobiernos locales, durante el siglo XIX, el gobierno americano cambió el confederalismo por una forma más federal, en el sentido que he especificado en el cuadro 3.3. Sus instituciones federales afrontaron la Segunda Revolución Industrial —y el desafío que suponía el descontento de los granjeros y los trabajadores, entre otros grupos sociales— con la estrategia propia de un régimen coherente liberal-capitalista y democrático de partidos y el apoyo de un pronunciado militarismo interno. Analizaré las respuestas a estos desafíos en los capítulos 18 y 19.

Conclusión americana

He subrayado tres problemas principales en la fundación de la República americana: cómo caracterizar su régimen emergente, cómo explicar su auge y si fue auténticamente revolucionaria.

Al considerar el nuevo régimen confederal y democrático de partidos como liberal-capitalista, me he limitado a aceptar la opinión convencional. Como demostraré en los capítulos que siguen, la estrategia liberal-capitalista fue capaz de asimilar con éxito todos los elementos propios de la sociedad industrial (y de la masiva inmigración étnica). Puesto que los Estados Unidos se convirtieron en la potencia hegemónica de Occidente, su liberalismo capitalista ha ejercido un fuerte influjo en todo el mundo. Sus partidos, el liberalismo capitalista inherente a sus tribunales de justicia y su confederalismo sobrevivieron también a la Segunda Revolución Industrial, aunque el confederalismo quedó finalmente modificado por el *New Deal* y la adquisición del estatus de superpotencia (que también acabó con la irregularidad de su militarismo).

Al explicar su auge, tomaré partido en el debate de los historiadores, con Bailyn (1967) y Appleby (1984) contra el evolucionismo de Boorstin (1959), Degler (1959), Hartz (1955) y Lipset (1964), que han rastreado el liberalismo capitalista desde la época de los Padres Fundadores y los primeros establecimientos coloniales, debido a la supuesta ausencia de «feudalismo» en el Nuevo Mundo. Por el contrario, yo sostengo que fueron la Guerra de la Independencia y las consiguientes luchas políticas las que destruyeron unos regímenes lo-

cales-regionales, que eran viables y que habríamos podido calificar de «antiguos». Sin la intervención de aquellos acontecimientos, tales regímenes, independientemente de que se encontraran bajo control de Gran Bretaña, habrían evolucionado como sus equivalentes británicos. En realidad, las colonias contaban también con organizaciones alternativas de poder que, al ampliarse, abrieron caminos más puramente capitalistas, pero esta ampliación se realizó mediante tres procesos adicionales y contingentes:

1. Las presiones geopolíticas y fiscales-militares que operaron dentro del Imperio británico dividieron en facciones a sus clientes americanos y, reforzadas por la potencia militar de Francia en la guerra, contribuyeron a debilitar la capacidad británica para defender sus colonias.
2. Las presiones militares de una guerra prácticamente combatida con los métodos de la guerrilla desviaron la reforma moderada en un sentido más democrático. El antiguo régimen no podía, sin más, pasar al control local americano una vez que los notables rebeldes se vieron obligados a recabar la ayuda del «pueblo» (según el concepto del masas propio de principios del siglo XX) para luchar con las armas contra los británicos y los lealistas. Dejando a un lado el sur, era la clase y no la organización segmental lo que dominaba en el plano local, pero había que ganar la guerra y, para ello, los actores de poder, pueblo y notables, debían llegar a un compromiso.
3. Al acabar la contienda, aquel equilibrio de poder bastante igualado pero confuso entre las fuerzas nacionales y de clase impidió el estallido de un nuevo enfrentamiento entre los vencedores. Por el contrario, sus conflictos y sus relaciones de poder quedaron institucionalizados conforme a la estrategia liberal-capitalista del régimen, a través de los compromisos de la posguerra, que combinaban el capitalismo con la democracia. Desde el principio, los notables tuvieron en sus manos la redacción de una Constitución a su medida. Mediante una mezcla de consecuencias buscadas, involuntarias y mal calculadas, idearon una Constitución cuya separación de poderes conllevaba resultados conservadores. Se comprometieron respecto a la cuestión de los derechos de los estados, institucionalizando las cristalizaciones políticas Norte-Sur (y otras de corte regional) que debilitaban la lucha de clases. Los federalistas y los notables rebajaron sus ofensivas favorables a la propiedad y la centralización del Estado en dos aspectos: atrincherando la ley de la propiedad en la

Constitución y creando unas infraestructuras centrales en el Estado para desarrollar el gran capitalismo (inesperadamente reforzados después por cada uno de los estados). Pero calcularon mal su capacidad para controlar las elecciones desde las organizaciones segmentales, y las masas (de hombres blancos) lograron imponer una democracia bipartidista. El confuso resultado consistió en una consolidación de un régimen democrático de partidos, liberal-capitalista y confederal, hegémonico en todo el territorio, con la excepción del sur. Puesto que las luchas por el poder entrelazaron estos elementos dispares, el conflicto entre las clases nunca se manifestó de forma «pura» o transparente. Los notables y las masas jamás se enfrentaron dialécticamente, como enemigos de clase. Se aliaron primero para la guerra, y luego concentraron sus energías en distintas, aunque entrelazadas, cristalizaciones políticas y redes de poder político.

He dibujado, en términos generales, una transición de las relaciones de primacía entre las cuatro fuentes de poder social. Las relaciones del poder ideológico desempeñaron un papel reducido en la estructuración del conjunto de las relaciones de poder. Las primeras consecuencias —la espiral descendente hacia la rebelión, el cambiante equilibrio de poder entre los rebeldes notables y populares y el desenlace militar de la propia guerra— se debieron ante todo a un entrelazamiento de las relaciones del poder económico y el poder militar. De forma muy confusa —y recordando siempre que las relaciones económicas presentaban fuertes componentes segmentales, regionales, nacionales y de clase— configuraron conjuntamente las instituciones de la nueva República. Con todo, (como podría sostener el estatismo institucional) sus instituciones políticas dispusieron de su propia autonomía y determinaron significativamente el desarrollo americano. En un país que no sufría la amenaza de potencia alguna, el militarismo geopolítico (no así el interno) apenas tuvo significación durante el siglo XIX. El desarrollo de América era ya el desarrollo del capitalismo, aunque sometido a una organización estatal institucionalizada, confederal, militar, desde el punto de vista interior, y democrática de partidos. Se trata, pues, de la versión americana de la transición general que he establecido para este periodo en el capítulo 1, y a la que he asignado *grosso modo* una determinación dual «última»: de las relaciones de poder económico-militar a las relaciones de poder económico-político.

Para acabar, ¿se trató de una revolución? La absoluta conversión americana al capitalismo liberal —su aspecto «revolucionario» en pa-

labras comunes— se debió a la ausencia de una revolución en el sentido sociológico del término, es decir, de una transformación violenta de las relaciones de poder. Las fuerzas de clase opuestas nunca se enfrentaron por completo como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Francia. El liberalismo capitalista se hizo muy pronto conservador. Cuarenta años más tarde se encontraba completamente institucionalizado y mejor pertrechado contra el cambio que en cualquier otro régimen. Había descubierto la forma de evitar la lucha de clases; no de erradicarla, se entiende, pero sí de impedir el conflicto político concreto, frontal y extensivo. La comercialización de la agricultura no resultó menos destructiva ni la Revolución Industrial menos brutal que en otros lugares; ni tampoco cundió menos el descontento entre los pequeños granjeros y los trabajadores, pero sus aspiraciones se encauzaron, como en ningún otro país, a través de las instituciones políticas y militares, en organizaciones ajenas a la clase. La temprana institucionalización de la revolución colonial estructuró decisivamente la estructura del poder en la futura América.

Bibliografía

Appleby, J. A. 1984: *Capitalism and a New Social Order: The Republican Vision of the 1790s.* Nueva York: New York University Press.

— 1987: «The American heritage: the heirs and the disinherited». *Journal of American History,* 74.

Bailyn, B. 1962: «Political experience and enlightenment ideas in eighteenth-century America». *American Historical Review,* 67.

— 1967: *The Ideological Origins of the American Revolution.* Cambridge, Mass: Harvard University Press.

— 1986: *Voyagers to the West: A Passage in the Peopling of America on the Eve of the Revolution.* Nueva York: Knopf.

Beard, C. 1913: *An Economic Interpretation of the Constitution.* Nueva York: Macmillan.

Birch, R. C. 1976: *1776: The American Challenge.* Londres: Longman Group.

Boorstin, D. 1959: *The Americans: The Colonial Experience.* Nueva York: Random House.

Brown, W. 1965: *The King's Friends.* Providence, R. I.: Brown University Press.

Burch, P. H., Jr. 1981: *Elites in American History.* Vol. I: *The Federalist Years to the Civil War.* Nueva York: Holmes & Meier.
Collier, C., y J. L. Collier, 1986: *Decisions in Philadelphia.* Nueva York: Ballantine Books.
Cook, E. M., Jr. 1976: *The Fathers of the Towns: Leadership and Community Structure in Eighteenth-Century New England.* Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Countryman, E. 1981: *A People in Revolution: The American Revolution and Political Society in New York.* Baltimore: Johns Hopkins University Press.
— 1985: *The American Revolution.* Nueva York: Hill & Wang.
Davidson, P. 1941: *Propaganda and the American Revolution, 1763-1783.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Degler, C. N. 1959: *Out of Our Past: The Forces That Shaped Modern America.* Nueva York: Harper.
Dinkin, R. J. 1977: *Voting in Provincial America: A Study of Elections in the Thirteen Colonies, 1689-1776.* Westport, Conn.: Greenwood Press.
— 1982: *Voting in Revolutionary America: A Study of Elections in the Original Thirteen States, 1776-1789.* Westport, Conn.: Greenwood Press.
Egnal, M. 1988: *A Mighty Empire: The Origins of the American Revolution.* Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.
Ferguson, E. J. 1964: *The Power of the Purse: A History of American Public Finance, 1776-1790.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Fischer, D. H. 1965: *The Revolution of American Conservatism. The Federalist Party in the Era of Jeffersonian Democracy.* Nueva York: Harper & Row.
Foner, E. 1976. *Tom Paine and Revolutionary America.* Nueva York: Oxford University Press.
Handlin, O., y M. F. Handlin, 1969: *Commonwealth: A Study of the Role of Government in the American Economy: Massachusetts, 1774-1861,* 2.ª ed. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Hartz, L. 1955: *The Liberal Tradition in America.* Nueva York: Harcourt, Brace & World.
Henretta, J. A. 1973: *The Evolution of American Society, 1700-1815.* Lexington, Mass.: D. C. Heath.
Holt, C. F. 1977: *The Role of State Government in the Nineteenth-Century American Economy, 1840-1902.* Nueva York: Arno Press.
Lipset, S. M. 1964: *The First New Nation.* Londres: Heinemann.
Lockridge, K. A. 1974: *Literacy in Colonial New England.* Nueva York: Norton.
Lowi, T. J. 1984: «Why is there no socialism in the United States? A federal analysis». En *The Costs of Federalism,* ed. R. T. Golombiewski y A. Wildavsky. New Brunswick, N. J.: Transaction Books.
McDonald, F. 1958: *We, the People.* Chicago: University of Chicago Press.

McGuire, R., y R. Ohsfeldt, 1984: «Economic interests and the American Constitution: a quantitative rehabilitation of Charles A. Beard». *Journal of Economic History,* 44.

McKirdy, C. R. 1972: «A bar divided: the lawyers of Massachusetts and the American Revolution». *American Journal of Legal Library,* 16.

MacPherson, C. B. 1962: *The Political Theory of Possessive Individualism.* Oxford: Clarendon Press.

Maier, P. 1973: *From Resistance to Revolution: Colonial Radicalism and the Development of American Opposition to Britain.* Londres: Routledge & Kegan Paul.

Main, J. T. 1965: *The Social Structures of Revolutionary America.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

— 1966: «Government by the people: the American Revolution and the democratization of the legislatures». *William and Mary Quarterly,* 23.

— 1973: *Political Parties Before the Constitution.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Mann, M., y M. Stephens, 1991: «American revolutionaries: social class and the Founding Fathers». Monografía no publicada, Department of Sociology, University of California, Los Ángeles.

Murrin, J. M. 1983: «The legal transformation: the bench and bar of eighteenth-century Massachusetts». En *Colonial America: Essays in Politics and Social Development,* ed. S. N. Katz y J. M. Murrin. Nueva York: Knopf.

Nash, G. 1973: «The transformation of American politics, 1700-1765». *Journal of American History,* 60.

— 1975-6: «Urban wealth and poverty in pre-revolutionary America». *Journal of Interdisciplinary History,* 6.

— 1986: *The Urban Crucible: The Northern Seaports and the Origins of the American Revolution.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Palmer, R. 1959: *The Age of the Democratic Revolutions,* 2 vols. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Pisani, D. 1987: «Promotion and regulation: constitutionalism and the American economy». *Journal of American History,* 74.

Pocock, J. G. A. 1980: «1776: The revolution against Parliament». En *Three British Revolutions: 1641, 1688, 1776.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Pole, J. R. 1966: *Political Representation in England and the Origins of the American Republic.* Londres: Macmillan.

Rosswurm, S. 1987: *Arms, Country and Class: The Philadelphia Militia and the «Lower Sort» During the American Revolution.* New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press.

Shy, J. 1973: «The American Revolution: the military conflict considered as a revolutionary war». En *Essays on the American Revolution,* ed. S. G. Kurtz y J. H. Hutson. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Skowronek, S. 1982: *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920.* Cambridge: Cambridge University Press.

Sokoloff, K., y G. Villaflor, 1982: «The early achievement of modern stature in America». *Social Science History,* 6.

Solberg, W. 1958: *The Federal Convention and the Formation of the Union of the American States.* Nueva York: Liberal Arts Press.

Steffen, C. G. 1984: *The Mechanics of Baltimore: Workers and Politics in the Age of Revolution, 1763-1812.* Urbana: University of Illinois Press.

Williamson, C. 1960: *American Suffrage: From Property to Democracy, 1760-1860.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Young, A. F. (ed.), 1976: *The American Revolution: Explorations in the History of American Radicalism.* DeKalb: Northern Illinois University Press.

Capítulo 6
LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y LA NACIÓN BURGUESA

El análisis de la Revolución Francesa ha planteado tradicionalmente la duda sobre su carácter de revolución de clase. Los historiadores, de Jaurès a Lefebvre, sostuvieron que, en efecto, lo fue, y analizaron la revolución como una lucha de clases entre el antiguo régimen feudal y la burguesía capitalista. No obstante, existen tres revisiones que lo desmienten. Desde Cobban (1964), los estudios empíricos han demostrado que la revolución comenzó como una lucha entre facciones del antiguo régimen y continuó bajo el liderazgo de elementos no burgueses. La segunda revisión, centrada en Behrens (1967) y Skocpol (1979), sostiene que el estallido de la revolución se debió a la crisis fiscal provocada por la rivalidad entre las grandes potencias. La lucha de clases se habría producido sólo a raíz de esa crisis. La tercera revisión, debida a Ozouf (1976), Furet (1978), Agulhon (1981), Hunt (1984) y Sewell (1985), considera que la revolución fue un hecho esencialmente ideológico, impulsado por ideas, emociones y formas culturales que movilizaron a las clases más por razones simbólicas que materiales. Esto último se ha convertido en un nuevo tópico; para los historiadores de Francia los códigos han venido a sustituir a las clases. La intelectualidad apunta hacia sí misma.

Por mi parte, comparto algunos de esos argumentos. Mi explicación abarcará, como siempre, las redes del poder ideológico, económico, militar y político. La revolución no comenzó como una lucha de clases, salvo en el caso del campesinado, pero se convirtió en ello, como se convirtió también en un conflicto nacional. No se trataba de clases «puras», sino definidas por fuerzas ideológicas, militares y políticas. La revolución se hizo burguesa y nacional no tanto por la lógica del paso desde el feudalismo a los modos capitalistas de producción como por el militarismo del Estado (generador de problemas fiscales), por el fracaso de este último en la institucionalización de las relaciones entre las elites y los partidos enfrentados y por la expansión de determinadas infraestructuras del discurso ideológico, portadoras de principios alternativos. Por otra parte, ofrezco en este volumen ciertas evidencias en las que me baso para elaborar una argumentación general sobre la lucha de clases. Allí donde el conflicto entre las clases es relativamente «puro» —donde las clases proceden más directamente de los modos de producción y chocan de frente—, éstas se perciben entre sí con toda claridad. Las ventajas organizativas de la clase dominante —que controla el Estado— le permiten adoptar, de modo alternativo, una actitud represora o integradora para impedir la revolución. Pero donde el conflicto de clase se entrelaza confusamente con otros conflictos, las clases dominantes pierden la concentración en sus intereses. Es entonces cuando el descontento popular puede romper su equilibrio, inducirlas a cometer errores y alimentar una situación revolucionaria, tal como ocurrió en Francia. Más adelante volveremos sobre estos errores.

De igual modo, acepto el revisionismo de Behrens y Skocpol sobre el problema fiscal-militar; de hecho, lo aplico en este volumen a todos los países del periodo. Pero también aprovecho la crítica de Goldstone (1991: 172 a 174) a Skocpol. Debido a su teoría auténticamente elitista del Estado, Skocpol considera la crisis fiscal una crisis «objetiva» que afectó a una elite singular del Estado. Esta historiadora olvida la intraelite y la lucha entre los partidos. Las finanzas francesas se encontraban en un estado desastroso, pero la quiebra —que propició la caída del antiguo régimen— no se produjo hasta que se deterioraron las relaciones entre (y dentro de) las facciones de los dos elementos principales del Estado: la elite estatal monárquica y un partido privilegiado bien atrincherado en la sociedad francesa. Puesto que el Estado francés no había institucionalizado mecanismos de representación soberana para sosegar las disputas entre facciones,

los conflictos fiscales que otros Estados supieron resolver causaron en este caso su destrucción. El elitismo auténtico de Skocpol explica menos de la revolución que el estatismo institucional de la misma autora.

Sin embargo, difiero en tres puntos del revisionismo a propósito de las clases. No estoy de acuerdo con la idea de Cobban, según la cual, los dirigentes de la revolución pertenecían a una fracción del antiguo régimen decadente, ni con Goldstone cuando afirma que los revolucionarios padecían una «movilidad bloqueada». Tampoco coincido con Skocpol ni con Goldstone en su curioso modelo de «una sola clase», ya que si bien la importancia que ambos confieren al campesinado me parece acertada, descuidan por completo a la burguesía y a la pequeña burguesía. En todas aquellas ciudades, incluida París, en las que la revolución adoptó su dirección básica, la teoría de estos autores se sitúa de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba (como las teorías de las clases). Lo cierto es que el fracaso en la institucionalización de las luchas entre la elite y los partidos permitió la entrada de las clases excluidas, el campesinado y la pequeña burguesía. Tanto en las ciudades como en el campo, la revolución se movió desde arriba hacia abajo, y luego desde abajo hacia arriba. En tercer lugar, el auge de los partidos burgueses y pequeño burgueses fue continuo, no se trató de una «desviación de la trayectoria» a partir de 1791, desconectada de los acontecimientos de 1789, como argumentan Furet y Richet (1970; *cf.* Furet, 1981), en un intento de defender las metas de la revolución antes, y no después, de 1791.

Acepto algunos de los argumentos empíricos de la escuela ideológica dominante en la actualidad, y puesto que el poder ideológico desempeñó un papel de primer orden en la revolución (en mayor medida que en los acontecimientos británicos y americanos), analizaré ahora brevemente los argumentos de la escuela culturalista. El problema reside en su idealismo. Pero los idealistas podrían establecer argumentaciones causales demostrables y útiles, subrayando el papel de las instituciones ideológicas, de las prácticas simbólicas y rituales y del contenido de las ideologías. Sin embargo, raramente lo han hecho así, porque sus argumentos causales suelen encontrarse subsumidos en un idealismo totalizador que renuncia al análisis de las causas e intenta, por el contrario, reescribir todo el proceso social en términos culturales. Estamos ante la herencia de Hegel y del idealismo alemán, adaptado a la ciencia social contemporánea a través del análisis del discurso y de escritores como Foucault y Geertz.

En esta línea, Lynn Hunt analiza la revolución como si fuera un «texto»: «según sus pautas internas y sus conexiones con otros aspectos de la cultura política». El valor de su obra reside en demostrar que los revolucionarios manifestaron un gran interés por la moral y la cultura simbólica. En esto podemos estar de acuerdo. No obstante, desde el momento en que Lynn Hunt se niega a «buscar lo que hay detrás de las palabras o más allá de ellas» para indagar en la causas, y concluye que los orígenes de la revolución «deben rastrearse en la cultura política» no plantea una argumentación causal, sino una tautología. Hunt no establece relaciones causales entre la cultura y los restantes factores (1984: 24 y 25, 234). Para cifrar la importancia de la cultura, debemos investigar también fuera del ámbito de las palabras y de los textos revolucionarios, pues sólo así podremos saber de dónde proceden ellos mismos. ¿Se limitaron a articular las relaciones de los poderes económico, militar y político? ¿O expresaron la necesidad de instituciones ideológicas específicas? Hunt elude estos factores causales.

También Furet tiende a replantear la revolución como un proceso simbólico-cultural, aunque en su caso añade argumentos causales. Por ejemplo, sugiere que el vacío dejado por la caída del poder real ante el empuje de la revolución fue ocupado por *la parole*. Todo aquel que pretendiera hablar con éxito en nombre de la nación y de la voluntad general podía acceder al poder. A partir de ahí la revolución se convirtió, literalmente, en una guerra de palabras (1978: 83), según la expresión del propio Furet.

Esta idea centra de forma muy útil nuestra atención no en una totalidad formada por textos y discursos simbólicos, sino en unos medios de comunicación y unos mensajes específicos que interactúan con otras fuentes de poder social. Para estimular al pueblo mediante mensajes culturales es imprescindible que éste tenga acceso a ellos. No podemos aceptar sin más que compartieran la misma cultura. Sabemos por incontables estudios sociológicos, antropológicos e históricos (y a despecho de la teoría funcionalista normativa) que esto casi nunca ocurre en las sociedades extensivas. Las infraestructuras de la comunicación serán objeto de nuestro análisis del poder ideológico (o cultural, si se prefiere el término). Así pues (basándome en el trabajo de Eisenstein, 1986), mi análisis comenzará por la expansión de las infraestructuras durante el siglo XVIII, la creación de una «opinión pública» y su liberación del control absolutista.

Tanto Furet como Hunt subrayan con razón que la revolución difundió más una política de principios que un compromiso pragmá-

tico. A medida que la crisis se hacía más profunda y la política práctica no encontraba salidas, los actores de poder volvieron la vista hacia las soluciones de principio. Los «principios» comportaban un doble significado de regla moral y general, porque las obsesiones de los revolucionarios fueron la «virtud», la «pureza», los esquemas de una reconstrucción racional y la «política de las emociones auténticas» (en expresión de Hunt) y de las ideologías. Cuando se invocan los principios, cabe sospechar que las instituciones ideológicas y las elites están ejerciendo alguna forma de poder. Al contrario que los actores económicos, militares y políticos, las elites buscan un conocimiento general y transitivo basado en los principios.

Para corroborar esta sospecha deberemos responder a dos cuestiones previas. En primer lugar, ¿el contenido de los principios es únicamente la experiencia de los actores prácticos de poder generalizada por los ideólogos? ¿O son los principios una creación de los ideólogos a partir de su propia experiencia particular? En segundo lugar, ¿disponen los ideólogos de técnicas de poder colectivo o distributivo capaces de influir sobre los actores prácticos, hasta el punto de lograr que tales principios sean defendidos y llevados a la práctica? Mediante la indagación de las infraestructuras ideológicas y la respuesta a estas preguntas, intentaré evaluar la significación causal del poder ideológico. Abordaré esta tarea en el presente capítulo y la completaré en el capítulo 7.

Para acabar, vuelvo sobre los errores. La Revolución Francesa constituye un acontecimiento histórico único en el mundo. Fue la primera y prácticamente la única revolución burguesa triunfante. Los actores de poder fueron en este caso «inconscientes», al contrario de lo que ocurriría después con sus iguales en otros países. Al principio no sabían que se encontraban inmersos en una revolución. Por tal razón, cometieron lo que una mirada retrospectiva podría calificar de errores de bulto, en especial el rey y los órdenes privilegiados. Aquellos errores causaron el agotamiento de la práctica política y el recurso a principios ideológicos revolucionarios. Si el rey y los órdenes privilegiados hubieran conocido lo que les esperaba, habrían actuado de otro modo, como hicieron más tarde sus equivalentes en otros países (con el ejemplo de la Revolución Francesa ante los ojos). Hubo procesos de poder profundamente arraigados —geopolíticos, ideológicos y de clase— que trataré de explicar en estas páginas, pero si los actores de poder hubieran tomado otras decisiones, habrían podido frenarlos o reconducirlos. No es mi intención establecer un

principio sociológico universal a partir de este enunciado, sino aplicarlo a un tipo concreto de situación estructural en la que los actores son inconscientes del surgimiento de nuevas redes intersticionales de poder y, por tal razón, se ven abocados a realizar cálculos erróneos. Si es cierto que las revoluciones tienen lugar cuando los regímenes pierden la capacidad de concentración en sus propios intereses, los errores serán un factor *esencial* para los procesos revolucionarios.

Los poderes político y económico en el antiguo régimen

La revolución no estalló en un país especialmente atrasado o de desarrollo tardío e irregular (como afirma Skocpol). En 1789 Francia se había convertido en la mayor de las potencias y en uno de los países más prósperos del mundo a lo largo de una centuria. Sin embargo, padecía una forma de «atraso»: se había dejado adelantar por su rival, Gran Bretaña. En la década de 1780 el químico Lavoisier estimaba la productividad de la tierra inglesa en 2,7 veces la de Francia. Y, en efecto, algunos historiadores consideran más avanzada la economía inglesa en su conjunto (Crouzet, 1966, 1970; Kindleberger, 1984). Otros, sin embargo, muestran su desacuerdo y estiman que ambas potencias se encontraban en una situación casi idéntica (O'Brien y Keyder, 1978).

Los cálculos económicos de Goldstone parecen más convincentes (1991: 176 a 192; pero véanse Vovelle y Roche, 1965; Crouzet, 1970; Léon, 1970; Chaussinand-Nogaret, 1985: 90 a 106; Dewald, 1987). Goldstone estima que la economía francesa creció en términos reales aproximadamente un 36 por 100 de 1700 a 1789, aunque se encontraba desigualmente distribuida por sectores, ya que el comercio se duplicó; la industria creció un 80 por 100; y la agricultura, sólo un 25 por 100. La tasa de crecimiento por sectores era semejante a la de Gran Bretaña, de forma que ninguno presentaba un atraso especial (aunque algunos datos anteriores asignarían un mayor crecimiento agrícola a Gran Bretaña). Pero sólo un tercio de la población británica se dedicaba a la agricultura, el sector de menor crecimiento, en comparación con los cuatro quintos de la francesa. El retraso de la economía francesa se debió, pues, al tamaño de su agricultura. De ahí que el modesto crecimiento demográfico del 30 por 100, menor que el británico, afectara sobre todo a la población agraria, causando una caída del rendimiento agrícola per cápita del

4,3 por 100 entre 1700 y 1789. El problema económico no estaba en la caída o el atraso del producto nacional bruto, sino en las onerosas desigualdades sectoriales. Con todo, este «problema» fue mucho más grave en la mayoría de los países europeos, donde, sin embargo, no provocó revolución alguna. No podemos atribuir la Revolución Francesa a la situación general de la economía. Lo que influyó en mayor medida, por subyacer a todas las causas de la revolución, fueron las finanzas estatales.

El militarismo geopolítico francés planteó graves problemas fiscales. Durante todo el siglo XVIII Gran Bretaña y Francia contendieron por la supremacía global. Gran Bretaña ganó tres de las cuatro guerras, y perdió sólo cuando hubo de enfrentarse al mismo tiempo a la rebelión de los colonos americanos. Pero tampoco en esa guerra ganó Francia lo suficiente para justificar sus altos costes. Mientras Gran Bretaña conquistaba un imperio global, Francia contraía deudas. Aunque tanto la suerte como las condiciones geopolíticas influyeron en los resultados (analizados en el capítulo 8), no cabe duda de que el Estado británico poseía un mayor poder infraestructural, basado en su eficiencia fiscal. El Estado francés sólo fue capaz de obtener de los impuestos una fracción mucho menor de riqueza nacional (Mathias y O'Brien, 1976; Morineau, 1980). Francia recaudó lo mismo, pero obtuvo mucho menos, porque tuvo que gastar más en pagar a sus acreedores y recaudadores de impuestos.

A medida que se intensificaba la rivalidad anglo-francesa, aumentaban las finanzas estatales británicas y decrecían visiblemente las francesas (Behrens, 1967: 138 a 162; Riley, 1987). Numerosos comentaristas deducen que las británicas se veían favorecidas por su régimen parlamentario. Los hacendados británicos dieron su consentimiento a los impuestos indirectos, sobre aduanas y sobre el consumo y las ventas, así como a los empréstitos organizados por el Banco de Inglaterra. Por otra parte, el éxito geopolítico contribuyó a hacer menos penosa la contribución fiscal-militar. No obstante, como indica el cuadro 4.1., otras formas de «representación» soberana podrían haber sido igualmente eficaces. En Prusia no existía un parlamento, pero las clases dominantes estuvieron efectivamente «representadas» en la administración real central. El monarquismo y la democracia de partidos brindaban formas alternativas de cristalización «representativa». Ambos lograron institucionalizar establemente las relaciones elite-partidos, como se desprende de los casos británico y prusiano. Pero esto no ocurrió en Francia.

Dado que las finanzas constituían el recurso del Estado francés, su crisis afectó al resto de las instituciones. Francia evolucionó como un reino más grande y más inseguro. Al expandirse la monarquía más allá de los límites de L'Île de France, estableció un trato particularista con las redes de poder local-regional, creando de esta forma un absolutismo bastante descentralizado de «órdenes» y «corporaciones». El consentimiento de las regiones, de los tres estados (clero, nobleza y plebeyos) y de las comunidades urbanas y profesionales (especialmente de las asambleas de abogados, conocidas como *parlements*) se compró con «privilegios», derechos sobre los campesinos y exenciones de ciertos deberes cívicos, en especial de los impuestos. Al contrario que en Prusia y Gran Bretaña, el consenso se basó en la exclusión respecto al Estado central, no en la participación en él. Pese al absolutismo y a los intendentes (funcionarios reales encargados de supervisar las provincias), no puedo compartir la famosa argumentación de Tocqueville, según la cual el Estado francés se encontraba ya fuertemente centralizado antes de la revolución (1955). Era un Estado institucionalmente dual; por un lado, una elite estatal centralizada y monárquica, por otro, unos partidos de notables, privilegiados y descentralizados. Ambos perdieron coherencia a medida que avanzaba el siglo XVIII.

La fiscalidad se basaba ante todo en los impuestos directos sobre la tierra, que generaban cada vez menos ingresos a medida que los terratenientes se aseguraban la exención y el poder de fijarlos. Como observa Goldstone (1991: 196 a 218), el problema fiscal de Francia no residía tanto en una escasez de riqueza como en un sistema impositivo que gravaba con mayor dureza a quienes menos podían pagar, es decir, a los campesinos. La salvación habría podido llegar, como sucedió parcialmente en Gran Bretaña, de los impuestos indirectos sobre el comercio, pero los comerciantes y las corporaciones urbanas también gozaban de privilegios. La respuesta de la corona reforzó la inserción particularista y corporativa del Estado, ya que éste vendió sus propios cargos para obtener liquidez y concedió derechos de recaudación de impuestos a cualquiera que estuviera dispuesto a adelantar el dinero a la corona. Lo más parecido al Banco de Inglaterra fue una corporación autónoma de hombres pudientes, la Compañía de Recaudadores Generales (esto es, recaudadores de impuestos), que negoció con los banqueros extranjeros para aportar créditos al Estado.

La venta de empleos y la recaudación de impuestos había costeado las guerras de Luis XIV y sus sucesores (Chaussinand-Nogaret, 1970;

Bien, 1987), pero tuvo consecuencias para la estructura de las clases. En mi opinión, los cargos públicos venales pudieron ascender a más de 200.000 (véase el capítulo 11). La posesión de cargos y la recaudación de impuestos implicaron prácticamente a todas las familias ricas, convirtiéndolas en un amplio «partido de privilegios» que bloqueó la modernización del Estado (Matthews, 1958: 249; Durand, 1971: 282 a 362; Doyle, 1980: 120). Los departamentos de finanzas pasaron de ser oficinas judiciales y administrativas a convertirse en instituciones de crédito a la corona por parte de los grupos más acaudalados (Bossenga, 1986). Este absolutismo difería del prusiano e incluso del austriaco. La hacienda contaba sólo con doscientos sesenta y cuatro empleados, mientras que sus equivalentes en los ministerios y la banca estatal austriacos se contaban por miles (Dickson, 1987; I, 306 a 310). La elite del Estado francés estaba compuesta del monarca, la corte, unos cuantos clérigos y una modesta administración situada en el centro de unas difundidas redes de partidos de notables privilegiados (el mejor análisis se encuentra en Beik, 1985, sobre la rama de Languedoc). La nobleza y la burguesía se mezclaron en una «clase de propietarios», en su mayoría no capitalista, cuyos ingresos procedían en gran parte de derechos feudales, rentas, empleos y anualidades. La venalidad favoreció incluso la «moderna» economía monetaria, dado que los cargos eran productos con valor de mercado (Taylor, 1967; Beik, 1985: 13).

Puesto que compartían los privilegios, comerciantes e industriales manifestaron una escasa oposición a la nobleza y un tímido compromiso con los valores «capitalistas» alternativos. Querían ennoblecerse, y el sistema de la dote favorecía la mezcla de los burgueses ricos con la nobleza pobre (Barber, 1955; Lucas, 1973: 91). Antes de la revolución, apenas se apreciaban signos de lucha entre el antiguo régimen feudal y la burguesía; no existía una oposición o una identidad de clase claramente burguesa, ni se oía «ruido de sables» entre las familias privilegiadas y las que ascendían en la escala social (como sugiere Goldstone, 1991: 237), salvo en el ejército (cuyo faccionalismo, mucho más complejo, analizaré más adelante). Darnton pretende encontrar un ejemplo de tensión de clase en una relación contemporánea de Montpellier. Su autor burgués afirma que la riqueza debería ser más importante que el honor y critica tibiamente los privilegios nobiliarios. Sin embargo, manifiesta mayor temor hacia el pueblo común, «malo por naturaleza, licencioso e inclinado al alboroto y al pillaje» (1984: 128 a 130). La burguesía se introducía sinuosamente a través de las organizaciones segmentales del régimen, haciendo gala

de una «deferencia manipuladora» y buscando ventajas materiales a través de la adquisición de privilegios. «La solicitud de un título nobiliario formaba parte de las perspectivas de inversión de los burgueses», dice Favier refiriéndose a los Gap, una familia de comerciantes, (1987: 51; *cf.* Bonnin, 1987). La búsqueda de privilegios sofocó otras formas de identidad universal como la clase o la nación.

Los nobles, por su parte, se hacían más urbanos y se distanciaban de los campesinos. Algunos se convirtieron en industriales rentistas. Más de la mitad de las fraguas y las minas pertenecían a los aristócratas (aunque pocas veces las gestionaban). Se trataba ya de una aristocracia tan basada en el dinero como en la cuna. Chaussinand-Nogaret (1985: 23 a 34) calcula que la cuarta parte de las familias nobles de 1789 habían conseguido el título a partir de 1700, y dos tercios, probablemente a partir de 1600; y añade: «Un noble ya no era más que un hombre común ennoblecido». Darnton (1984: 136 a 140) sostiene que se habían convertido en una pequeña burguesía porque la moda y la cocina se hicieron mucho más sencillas. Pero el término «burguesía» se aplicaba tanto a un tipo de «vida nobiliaria» debida a rentas, anualidades vitalicias y cargos, como a los negociantes, comerciantes e industriales. Taylor (1967) calcula que incluso en la comercial Burdeos el Tercer Estado contaba con mil cien propietarios y profesionales de origen no aristocrático, contra setecientos hombres de negocios y comerciantes, la mayoría de ellos ennoblecidos. Lejos de enfrentarse, las clases pudientes urbanas convergían.

La vida rural fue más discorde. El antiguo régimen francés contaba con tres formas de explotación. La más antigua procedía del modo de producción feudal: los terratenientes explotaban a los campesinos mediante rentas y derechos, en el contexto de una jerarquía de nacimiento y privilegios. La segunda, políticamente determinada, procedía de las necesidades fiscales del absolutismo tardío, y estaba organizada por privilegios y corporaciones. El Estado practicaba y sostenía el tipo de política que consideramos feudal (Bien, 1987: 111). La palabra «feudalismo» (adoptada después en otros países) era ya sinónimo de abuso, debido a esta fusión de explotación feudal y explotación absolutista. La tercera era la producción capitalista de pequeña mercancía, que a menudo dominaba la producción y los mercados, pero que política y socialmente se encontraba sometida a las dos anteriores (Dewald, 1987). La producción capitalista a gran escala era escasa, de modo que unos cuantos agricultores dominaban la fuerza de trabajo de otros (Cominel, 1987). La tierra, el producto y, más raramente, el

trabajo eran mercancías. Los campesinos y los señores, incluso muchos comerciantes, artesanos, industriales y trabajadores se encontraban vinculados por una regulación consuetudinaria del trabajo.

El capitalismo rural entró entonces en conflicto con las restantes formas de explotación. Presionados por la expansión demográfica y la subida de los precios, los campesinos se indignaban contra la explotación del feudalismo absolutista. Pagaban antiguas cargas feudales, ahora más en dinero o cosechas que en trabajo, y acataban los odiados monopolios señoriales: las *banalités* u obligación de utilizar el molino, la presa o el horno del señor. La carga no se hizo insoportable hasta que las malas cosechas los redujeron a la subsistencia, como en 1787 y 1788. Pero Francia no era la Europa del este. La servidumbre de la gleba, los estados señoriales y la corvea habían desaparecido prácticamente. Casi todos los campesinos eran personas libres que cultivaban y vendían sus productos con total autonomía de su señor. Estos productores libres de mercancías modestas estaban, pues, sometidos a privilegios señoriales sin arraigo ni en la producción ni en las relaciones de la comunidad local. Salvo el caso de la Iglesia —el mayor terrateniente del país, implantado en todos los pueblos—, apenas padecían otro poder segmental que limitara la acción de clase. Los privilegios parecían llegar de muy lejos, de París y de la corte. Como observa Barrington Moore (1973: 73), el descontento surgió por «el carácter intermedio de su situación, ya que poseían la tierra pero no eran sus auténticos dueños».

El conflicto de clase en el medio rural se fraguó, pues, a partir de su nivel consuetudinario latente. El mantenimiento de la cristalización de una clase propietaria privilegiada propia del antiguo régimen dependía cada vez más del refuerzo externo de otras tres cristalizaciones: el militarismo; el absolutismo, en política; y el catolicismo, en materia ideológica. Mientras el antiguo régimen mantuviera unidos el cuerpo político, el brazo armado y el alma, poco podrían hacer las organizaciones de clase campesinas confinadas en el plano local. Sin embargo, habría de ser una época peligrosa para la elite monárquica, las clases propietarias, los funcionarios y los clérigos.

Los poderes ideológico y militar en el antiguo régimen

La contribución del poder ideológico a la revolución se produjo en cuatro fases. Primero, el régimen perdió el control autoritario so-

bre una gran parte de sus propias redes de alfabetización discursiva a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. En segundo lugar, durante la década de 1780 la Ilustración y los profesionales de la abogacía se unieron para ofrecer unos principios ideológicos y políticos alternativos a los de la elite estatal. En tercer lugar, inmediatamente después de 1789, redes ideológicas más populares desplazaron esa unión hacia la izquierda, creando aquella organización doble, de letra impresa y asamblea oral, que ya vimos surgir en la Revolución Americana. Por último, la fusión de estas redes en medio de una crisis que los políticos profesionales no pudieron resolver impuso el recurso a las ideologías trascendentes para reorganizar el Estado y la sociedad. La importancia de los ideológos no dejó de crecer a lo largo de las cuatro fases.

Como en otros países avanzados del siglo XVIII, aumentó la alfabetización básica, representada por la capacidad de plasmar una firma, alcanzando del 70 al 80 por 100 de los varones de las ciudades hacia 1750. La alfabetización discursiva creció con mayor rapidez. La Iglesia contribuyó en gran medida a través de los maestros de escuela y el aumento de la asistencia de las masas al templo. Las iglesias europeas conocieron una revitalización local y regional, aunque estaban perdiendo su anterior influencia sobre los estados. Pero no hubo un adoctrinamiento en una sola dirección. Poco a poco los curas y los maestros de escuela «tendían a secularizar la moral que enseñaban a los niños y las familias» (Furet y Ozouf, 1982: 80). La alfabetización popular no era abiertamente subversiva, ya que sus mensajes eran ante todo religiosos o prácticos, pero el control autoritario sobre ella se hacía menos riguroso.

En el capítulo 2 identifiqué las dos vías principales de la posterior expansión de la alfabetización discursiva. Dado que Francia poseía una economía comercial, un Estado y un ejército grandes, combinaba el capitalismo comercial con la vía estatista militar. El crecimiento del comercio y del Estado —de los cuerpos de funcionarios, de los poseedores de cargos civiles y de las instituciones legales semioficiales— expandió rápidamente la escuela secundaria, los libros, las publicaciones periódicas, las bibliotecas de suscripción y las academias. Los medios de comunicación y los mensajes bajo el absolutismo diferían de sus equivalentes en los régimenes constitucionales. El antiguo régimen propietario tenía más integrados el comercio y la ley; la enseñanza se encontraba monopolizada por la iglesia católica, también muy integrada en el régimen. Podría parecer una situación autoritaria

y eficazmente controlada; sin embargo, no dejó de producir problemas ideológicos dentro del propio régimen.

Los conservadores achacaban a la Ilustración la paternidad del proceso revolucionario. Víctor Hugo los parodia en *Los miserables*:

> Cada vez que tropiezo
> y doy con las narices
> en el suelo,
> la culpa es de Voltaire.

Pero el régimen no la fomentó menos que los filósofos, ya que gran parte de la Ilustración se encontraba dentro del propio sistema. Casi todos los filósofos eran nobles por nacimiento o compra del título (Rousseau constituía la excepción). Gran parte de sus ideas —la condena del feudalismo, de la superstición, de la metafísica y de la escolástica, y la alabanza de la razón— eran corrientes entre la gente educada. Siete de los dieciocho últimos ministros de finanzas se declaraban partidarios de la Ilustración (Behrens, 1967: 136). Aunque los filósofos sufrieron persecución y censura, fueron capaces de invertirlas a su favor. Situaron a Malesherbes a la cabeza de la censura de 1750 a 1763 y coparon la Academia Francesa de 1760 a 1772 (Gay, 1967: I, 22 y 23, 76). Malesherbes, como otros hombres de letras, clamaba: «Lo que significaron los oradores de Roma y Atenas para aquel pueblo reunido en *asamblea*, significan hoy los hombres de letras para un pueblo *disperso*» (Eisenstein, 1986: 200; *cf.* Starobinski, 1987). Los filósofos se pavoneaban por los salones aristocráticos, entre ellos el del duque de Orleans, primo del rey. Madame de la Tour du Pin, dama de honor de la reina María Antonieta, ha dejado constancia de que princesas y duquesas se reputaban de filósofas, lo que, según añade, significaba «librepensadoras» (1985: 81). Versalles perdió la primacía cultural en favor de los salones parisienses (Lough, 1960: capítulo 8). La tensión creció entre los principios de los salones y el particularismo, el «lujo» y la supuesta «laxitud moral» de la corte. Mientras que ésta y el consejo real se ocupaban de la política del régimen, los salones y las academias dirigían su teoría y su moral; así, la Ilustración se convirtió en la conciencia del régimen, cuando no en su núcleo. La modernización podía ser analizada y evaluada; realizarla era ya más difícil.

El manifiesto de la Ilustración fue la Enciclopedia, que abarcó en sus artículos todas las ramas del saber y sostuvo que la razón humana

y «el hábito organizado de la crítica» derrotarían a la superstición, el particularismo y los privilegios. La razón cultivada por la educación crearía una sociedad gobernada por principios racionales y universales y administrada por el mérito. Como demuestra la indagación de Darnton (1979: esp. 273 a 299), estas ideas subversivas penetraron en el antiguo régimen. En 1789 se habían vendido quince mil ejemplares, mucho más extendidos por las antiguas ciudades administrativas con *parlements* que por las urbes industriales o portuarias, y más también entre los nobles y el clero que entre los comerciantes o los industriales. Su lectura —a través de los clubes de lectores, donde se realizó la mitad de las ventas— se difundió más entre los abogados de modesto nivel, clérigos, funcionarios y nobles locales al servicio del régimen que en el mundo del comercio o de la industria.

El estudio de Roche sobre las academias literarias de provincias descubre un modelo semejante. El 20 por 100 de los académicos pertenecían al primer estado (clero); el 37 por 100, al segundo (nobleza), y el 43 por 100 eran plebeyos del tercer estado. Menos del 4 por 100 de los plebeyos se dedicaban al comercio o la industria, el 29 por 100 eran abogados y funcionarios (el 35 por 100 de los nobles eran funcionarios); el 23 por 100, bajo clero; el 26 por 100, médicos y cirujanos; y el 18 por 100, individuos con medios independientes. Aunque las mujeres desempeñaban un papel activo en los salones, los clubes, academias y logias masónicas eran masculinos. De modo que la intelectualidad estaba formada por «una burguesía de servicios asimilada a la jerarquía social consagrada» (Roche, 1978: I, capítulo 4, citado de la pág. 245). Las logias masónicas en expansión, que constituían en su mayor parte centros de discusión y análisis, presentaban una composición similar, aunque contaban con un número menor de clérigos a causa de su tibio anticlericalismo (Le Bihan, 1973: 473 a 480). El número de periódicos aumentaba constantemente (Censer y Popkin, 1987: 18), pero hasta finales de la década de 1780 reflejaban el mundo de la nobleza urbana, al contrario que sus equivalentes ingleses y americanos, mucho más identificados con la pequeña burguesía y también más voluminosos (Botein *et al.*, 1981). La educación secundaria difería. Según Palmer (1985: 23): «Los hijos de los nobles y de los artesanos coincidían en las mismas aulas». Al salir, sin embargo, frecuentaban redes culturales distintas. Pero acabarían por encontrarse de nuevo en la revolución.

Estos medios recorrieron los dos caminos hacia la modernización que he mencionado en el capítulo 2: uno dirigido por el Estado y

otro inserto en la sociedad civil. Algunos filósofos alababan al monarca por encarnar un «absolutismo benévolo». Y aunque D'Alembert decía que la obra aduladora de Voltaire, *Pedro el Grande*, le producía náuseas, él mismo gozaba de una pensión real. El legislador debía promulgar los derechos civiles, patrocinar la educación y el bienestar social y desterrar las corporaciones particularistas y los privilegios. El «gobierno absolutista» era bueno, siempre que respetara la ley. Por eso apoyaba Voltaire a la monarquía contra los privilegios, y criticaba los *parlements* (asambleas de abogados) por considerarlos un impedimento arcaico para la eficacia administrativa (Gay, 1967: II, 67, 474). No obstante, los filósofos encontraban mayor facilidad en aplicar este programa a ciertos Estados para ellos casi desconocidos (como Rusia y Austria) que a su propia administración y a su propia corte venal. El Estado francés requería un repaso general para convertirse al absolutismo benévolo.

El segundo programa de la Ilustración veía la razón descentralizada en la sociedad civil. La educación ilustraría a los hombres (incluso a las mujeres) mediante el cultivo de su raciocinio natural. Había que fomentar la autonomía personal, premiar el mérito y aumentar con cautela la libertad económica, política, religiosa y sexual. Gran parte de los filósofos eran paternalistas; deseaban dirigir al pueblo poco a poco hacia la Ilustración. Ninguno de ellos creía en la democracia. Muchos abogaban por el constitucionalismo angloamericano. Dado que todos los individuos adultos poseían una humanidad común, todos ellos deberían gozar de una ciudadanía civil o «pasiva». Los alfabetizados y propietarios cabezas de familia, que gozaban de «independencia», serían ciudadanos políticos o «activos». Basar los derechos en principios «racionales» contradecía la sociedad de órdenes y privilegios; todos debían ser iguales ante la ley; y todos eran teóricamente capaces, mediante el perfeccionamiento personal, de participar en la política. El éxito de la Revolución Americana estimulaba este camino de la sociedad civil hacia la reforma.

La elite monárquica percibía la fermentación ideológica dentro del régimen, y la censuraba. De hecho, encarceló en la Bastilla a más de ochocientos escritores, impresores y libreros, de 1600 a 1756 (Eisenstein, 1986: 201). Muchos mostraban un acuerdo tácito en mantener a las masas alejadas de las ideologías alternativas. Como subraya Becker (1932: 31): «Discutían valientemente sobre el ateísmo, pero nunca delante de los criados». El absolutismo había considerado siempre una prerrogativa esencial la toma secreta de decisiones, pero

la aparición del término «opinión pública» presagiaba ya la posibilidad de un gobierno restringido por lo que Baker (1987: 246) llama con optimismo «la política de consenso nacional» (*cf.* Ozouf, 1987). Sin embargo, tal consenso no existía, y el régimen ya no sabía qué pensar.

Esta situación era especialmente cierta en el caso de la Iglesia. La jerarquía censuraba los ataques de la Ilustración contra su riqueza, su corrupción y su manipulación de las supersticiones. Muchos filósofos compartían con Hume la idea de que la religión era «un sueño de locos», que los hombres sanos e ilustrados deberían desechar. Gran parte de la Iglesia mostraba su irritación ante la secularización de la corte, la tibieza de la censura y la tolerancia hacia los protestantes. Tácitamente, dejó de sostener la sacralidad del poder real (Julia, 1987). Pero ni siquiera la Iglesia se libró del imperio de la razón. Las luchas entre los jansenistas y los jesuitas acabaron por relativizar la doctrina, atacando la verdad literal de la Biblia e incorporando la ciencia al cuerpo de justificaciones de la fe (Cassirer, 1951: 140 a 184). Hacia mediados de siglo disminuyó la asistencia de las clases propietarias al templo (Vovella, 1984: 70 y 71). Puesto que muchos altos prelados eran aristócratas, esta desviación tuvo efectos desafortunados. No faltaban los arzobispos (entre ellos dos prominentes ministros del Estado durante la década de 1780) que ya no creían en Dios. Los párrocos y maestros de escuela protestaban por la irreligión y los privilegios de sus superiores aristocráticos (McManners, 1969: 5-18). El descontento en el seno de la Iglesia era peligroso, ya que el control local y segmental de los campesinos dependía vitalmente de esta institución. La modernización secular y el fermento de la Ilustración separaron a la monarquía de la Iglesia, debilitando la moral inmanente del régimen y del Estado, cuyo poder ideológico comenzaba a flaquear.

Otro tanto ocurría con el poder militar. La modernización del ejército, esencial para todos los Estados, produjo conflictos. Aunque los regímenes europeos criticaban la modernización fiscal, pronto emprendieron una revisión de sus ejércitos. Después de los desastres de la Guerra de los Siete Años, se reformó la táctica y las técnicas del ejército francés; gran parte de los suboficiales y muchos oficiales jóvenes se profesionalizaron; el reclutamiento hubo de efectuarse ahora mayoritariamente entre la pequeña burguesía cualificada y artesana de las ciudades (véase capítulo 12). Pero los cargos continuaban siendo venales, los regimientos estaban dominados por patronos no-

bles y conservaban de hecho su independencia; entre la alta oficialidad reinaba la incompetencia. Los ministros de la guerra, con la ayuda de varios generales, intentaron acabar con la corrupción y fomentar la profesionalidad.

La reforma fue divisiva (Corvisier, 1964; Bien, 1974, 1979; Scott, 1978: 4 a 45). Tres facciones del régimen copaban los privilegios militares. Los grandes nobles presentes en la corte dominaban los rangos superiores; los hombres ricos, recientemente ennoblecidos, compraban los rangos, y las antiguas familias nobles, con frecuencia más pobres y de larga tradición militar, se servían de la experiencia y los contactos para conseguir ascensos. En los antiguos regímenes nunca hubo muchas posibilidades de lograr ascensos o buenos destinos por la experiencia y el mérito. Pero la experiencia militar de la tercera facción, la antigua nobleza, brindaba un asomo de competencia. Así pues, la reforma combinó (de un modo extravagante para una mentalidad moderna) la abolición de la venalidad con el Decreto Segur de 1781, que exigía una nobleza de cuatro generaciones para acceder directamente a los cuerpos de oficiales (la promoción de los rangos quedó limitada a unos cuantos *officiers de fortune*). Esto aumentó la profesionalidad, pero ahondó el abismo que separaba a la oficialidad de los restantes grados, simplificándolo en un conflicto casi de clase entre el «nacimiento» y el «mérito», y creando enemistad tanto entre los ricos como entre los plebeyos. Puesto que los oficiales y los suboficiales sabían leer, el conflicto se aireó en panfletos, libros y academias. En 1789 el brazo armado del régimen se encontraba muy debilitado.

La crisis fiscal y la aparición de la resistencia basada en los principios

Ni el ejército ni la Iglesia provocaron los enfrentamientos de 1788 y 1789. Todo lo más, contribuyeron a debilitar la respuesta del régimen. La causa debe buscarse en la incapacidad de la corona para resolver sus problemas fiscales. Hacia la década de 1730 las finanzas habían alcanzado un punto culminante. Ahora los costes de la recaudación de impuestos y el reembolso de los préstamos efectuados por recaudadores y financieros, así como de la exacción de impuestos en un contexto de exenciones privilegiadas produjeron un grave agotamiento. La Guerra de los Siete Años (1757-1763), que acabó en una derrota masiva, provocó el estallido de la crisis. A falta de un sistema

impositivo universal, el gobierno pidió préstamos a través de las redes particularistas y a elevados costes y tasas de interés. El servicio de la deuda subió del 30 por 100 de los ingresos totales anterior a la guerra al 60 por 100 de la posguerra (Riley, 1986: 231). Alcanzado este nivel, la deuda se prolongaba en sí misma porque el gobierno sólo podía hacer frente a los gastos corrientes tomando otros préstamos. En esto residía el problema principal, agravado, además, por los costes de la Revolución Americana. De 1776 a 1787 sólo el 24 por 100 del aumento de los impuestos directos e indirectos llegaba a la hacienda, el resto se empleaba en pagar la deuda acumulada, especialmente las comisiones de los recaudadores.

En ese momento, los ministros comprendieron que habían empujado a los campesinos a la mera subsistencia. Desde finales de la década de 1760 hasta la revolución, propusieron varios esquemas de reformas. Turgot, interventor general de 1774 a 1776, y Necker, que ocupó el mismo puesto de 1777 a 1781, redujeron los cargos venales y recaudatorios, con el fin de liberar el transporte y el comercio del trigo del control de los recaudadores y limitar la autonomía de la CGF (la principal compañía recaudatoria) (Bosher, 1970: 90, 145 a 162). Los privilegios representaban el mayor problema, como exponía Calonne, Ministro de Finanzas, a la Asamblea de Notables en 1787:

> En este vasto reino es imposible dar un paso sin encontrarse con leyes distintas, costumbres contrarias, privilegios y exenciones ... y esta falta general de armonía complica la administración, la interrumpe, bloquea sus engranajes y multiplica por doquier el desorden y el gasto [Vovelle, 1984: 76].

Durante medio siglo, la elite estatal atacó de forma errática al partido y a la clase de los privilegios, su pilar tradicional. Tanto la unidad política de feudalismo y absolutismo como la de las cristalizaciones del Estado propietario y absolutista se debilitaron, afectando también a sus apoyos ideológicos y militares. Los ministros reformistas hubieron de enfrentarse a la oposición de los propietarios privilegiados que controlaban los *parlements* y la corte. El rey —y esto ha de contarse entre las causas necesarias de la revolución— vaciló, atrapado entre los intereses de las elites y los partidos; era un absolutista, pero protegía los derechos de la propiedad. En todas las crisis apoyó primero la reforma y desafió a los *parlements*, para luego doblegarse ante las intrigas de la corte, expulsar al ministro reformista de turno y abortar el plan de reformas.

Como otros monarcas ejecutados, Luis nunca ha gozado de buena prensa. Sin duda lo mereció después de 1789, aunque antes es obligado reconocer que hubo de enfrentarse a gravísimos problemas de Estado, únicos entre los cinco países que analizo en estas páginas. En todos ellos hubo luchas entre las elites y los partidos. La cuestión estuvo en disponer de medios para resolverlas. Un jefe del ejecutivo extraordinario —en este periodo, un Federico Guillermo, un Bonaparte o un Bismarck— habría salido airoso. Es evidente que Luis no pertenecía a esa casta, pero tampoco otros muchos gobernantes. La mayor parte de los Estados encuentran soluciones más institucionales, asignando «soberanía» a ciertas instituciones estatales, con el fin de dotar de autoridad a las decisiones adoptadas por cualquiera de los organismos del Estado. La soberanía del parlamento británico es un ejemplo evidente. Los Estados Unidos desarrollaron soberanías complejas y especializadas, cuyas interrelaciones especifican tanto la Constitución como el Tribunal Supremo. Tendremos oportunidad de comprobar que la política exterior constituyó el talón de Aquiles de la soberanía en estos Estados constitucionales.

Pero hubo también una versión absolutista de la soberanía. Los reyes prusianos del siglo XVIII la centraron en las relaciones del rey con sus ministros, en la forma que a menudo se ha llamado (erróneamente) «burocrática» (véase capítulo 13). Pudieron hacerlo porque aquellos ministros eran realmente «representativos de los partidos» de la nobleza. Aunque el rey prusiano practicó entre los ministros la política de «divide y vencerás», y aunque las intrigas de la corte influyeron también en sus relaciones, las decisiones que se tomaban en las instituciones salieron adelante. Tales instituciones no desfallecerían hasta finales del siglo XIX, a raíz de la enorme expansión de las funciones del Estado. Incluso las austriacas presentaban una gran coherencia en virtud de la neta división entre los dos niveles de soberanía, la real y la provincial. María Teresa y José II sabían qué instituciones eran suyas, pero Luis tuvo que soportar una gran incoherencia institucional, en la que las facciones de la clase acaudalada permeaban todos los empleos del Estado. Sus ministros no dominaban siquiera sus propios ministerios (véase capítulo 13), sus oficiales de la toga pertenecían a asambleas corporativas y autónomas, y el ejército y la Iglesia estaban divididos. Las vacilaciones de Luis se comprenden precisamente porque coincidieron con la imposibilidad de institucionalizar el conflicto entre las elites y los partidos.

Una de las consecuencias fue que desde la década de 1750 los mi-

nistros de Luis abandonaron sus proclamados planes de reforma y tuvieron que afrontar el empeoramiento del déficit y las fuertes críticas contra su incompetencia. Aunque la monarquía declaraba repetidamente su intención de abolir los privilegios, no pudo cumplirla. La incoherencia institucional bloqueó desde dentro la vía prusiana o «modernización conservadora desde arriba» (Moore, 1973: 109). Cuando el antiguo régimen se mostró incapaz de llevar a cabo el primer programa «estatista» de la Ilustración, muchos de sus miembros volvieron la vista al segundo, es decir, el programa de la sociedad civil, y con ello a la representación.

De este modo, el conflicto elite-partido se convirtió en el núcleo de la cuestión. Turgot fue uno de los filósofos; Necker mantenía en su casa un salón ilustrado. Pero también sus oponentes en el seno del régimen se acogieron a los principios. Existía un entramado de propiedad privada, obtención de empleos, cesiones de recaudación de impuestos y privilegios. Un ataque del rey a cualquiera de ellos afectaba a todos los demás. Los departamentos de finanzas respondieron con atropellos a la reforma; la corona interfirió arbitrariamente en los derechos fundamentales de la propiedad y en las garantías locales contra el despotismo. Pasó de hablar de la defensa de los privilegios particularistas a apelar a la costumbre y la leyes fundamentales, y a enunciar los derechos «imprescriptibles» de los hacendados frente al despotismo (Bossenga, 1986). Los *parlements* cambiaron su estrategia defensiva, pasando de los antiguos privilegios a las «libertades», y de ahí a una sola «libertad» universal; ideas que adquirieron una enorme popularidad en la década de 1780. La abogacía había dejado de ser una pequeña corporación. A lo largo del siglo XVIII la profesión progresó porque constituía la forma privilegiada de acceso a los cargos oficiales, y gracias también a la extensión de los estudios de leyes. Los abogados más jóvenes participaron en los círculos intelectuales de la Ilustración.

Los abogados que más tarde se convertirían en dirigentes revolucionarios habían comenzado sus carreras con el antiguo régimen, mediante la compra de empleos oficiales que constituían la fuente de sus ingresos. Pero Robespierre, Bailly, Brissot y Barère ya recibían premios en sus respectivas academias locales por sus ensayos sobre la naturaleza de la verdad, de la justicia y de la libertad. Thompson (1936: 40) sostiene que la profesión legal se dividió en dos bloques: las *gens de lettres* y los abogados prácticos que ganaban los casos. Robespierre se contó entre los primeros. Pero la práctica legal estaba unida a

principios sociales, filosóficos y estéticos. Aunque había recibido una excelente educación, Robespierre defendió a clientes pobres. Era una actitud corriente entre los abogados revolucionarios, lo que demuestra que junto a las teorías políticas apuntaba ya una intensa conciencia social.

¿De dónde procedía esta conciencia? No del interés de clase, puesto que los abogados jóvenes pertenecían a familias privilegiadas y sus carreras parecían encaminadas al éxito. No existen pruebas de que su radicalismo respondiera a la amargura del fracaso personal (como sugiere Goldstone, 1991). Se explica mejor porque sus ideas políticas se fraguaron en la interacción de los principios y la práctica profesional. Esta actividad se extendía a medida que Francia se hacía más comercial y más próspera, y con ello aumentaban los litigios que afectaban a los campesinos y las clases urbanas (Kagan, 1975: 54, 68). Sus principios acusaban la influencia de una moral paternalista de origen eclesiástico, que ahora encontraba cauce en las infraestructuras discursivas de la Ilustración.

En consecuencia, al tiempo que trabajaba, Robespierre asistía a un salón de Arras donde se discutía de filosofía, estética y reformas políticas. Comenzó a tentarle la escritura después de asistir a un abogado ilustrado de Arras en la defensa, contra la superstición local, de un hombre que había instalado un pararrayos en su casa. Publicó un artículo en un periódico (del que envió un ejemplar a Benjamin Franklin) e ingresó en un club literario y en la Academia de Arras, donde ganó varios premios y más tarde fue elegido director (Matrat, 1971: 11 a 35). Uno de los ensayos de su juventud sobre la deshonra del delincuente revela el influjo de la Ilustración y los orígenes de su fe republicana. En él escribe:

> La principal fuente de energía de una república, como ha demostrado [Montesquieu], es la *virtud*, vale decir, la virtud política, que no es otra cosa que el amor por las propias leyes y el propio país ... Un hombre de principios elevados estará dispuesto a sacrificar al Estado la salud, la vida y el ser ... todo, excepto el honor.

Robespierre estaba preparado para la «República de la Virtud», pero no se encontraba tan seguro de cómo crear al hombre virtuoso, y se apoyaba sin demasiada confianza en el idealismo ilustrado: «Razón y elocuencia; tales son las armas de que disponemos para atacar ... los prejuicios» (Thompson, 1936: 23 y 24).

Menos altruistas fueron las motivaciones de Vadier, el futuro jefe de policía del Comité Revolucionario de Seguridad General (Lyons, 1977: Tournier, s.f.). La actitud política de Vadier se desarrolló en cierto modo a partir de las luchas facciosas entre los notables locales, abogados y terratenientes. Los hombres como Vadier eran los «excluidos», y los hombres como Darmaing, los «integrados» de la pequeña ciudad de Pamiers, en las estribaciones de los Pirineos. Según Lyons, Vadier se hizo revolucionario para guillotinar a los Darmaings (lo que, en efecto, hizo). Sin embargo, parece una opinión demasiado cínica. Tras recibir una educación provinciana y religiosa y una formación en leyes, los horizontes intelectuales de Vadier se ampliaron durante su estancia en el ejército. De vuelta a Pamiers, leyó a Voltaire, Hume y la Enciclopedia, y adquirió fama local a raíz de un caso que afectaba a un hospital de la zona y en el que él hizo de paladín de los pobres. Como juez local, se le tuvo por un liberal. Aunque era hombre de pocas palabras y menos discursos, Vadier demostró poseer una conciencia política que le aseguró su apretada victoria en las elecciones a los Estados Generales. Firmó el juramento del Juego de Pelota y renunció de buena gana a los privilegios de su familia. Él se hizo de izquierdas, en tanto que los partidarios de Darmaing se desplazaban a la derecha. La revolución creó una política de principios entre las facciones locales «integradas» y «excluidas», sin parangón en Inglaterra o América.

Los abogados ilustrados como Robespierre o los levemente resentidos como Vadier no pensaban al inicio como revolucionarios. Pero la ineptitud de la ofensiva monárquica cristalizó las tensiones del antiguo régimen desde París a Pamiers, empujando poco a poco a los abogados a la adopción de aquellos principios. De igual forma, los filósofos comenzaron a separarse de la monarquía. Diderot, que había apoyado al comienzo el ataque a los privilegios de los *parlements*, acabó por considerarlo una amenaza para la libertad (Gay, 1967: II, 474). Los reformadores cambiaron la vía estatista hacia la modernización por la vía de la sociedad civil. La monarquía se quedaba sola, mientras la Ilustración y la ley unían fuerzas para acaudillar un movimiento del antiguo régimen cada vez más basado en los principios, que pretendía hablar en nombre del «pueblo» y exigía representatividad. En los extremos estaban los periodistas y abogados radicales como Marat y Brissot, dispuestos a sustituir el antiguo régimen por otros proyectos basados en principios. En 1780 Brissot replicaba a un amigo que le instaba a realizar el cambio en la práctica del momento:

«Tienes una pobre idea de mi entendimiento si me crees capaz de preferir la práctica del momento, que conozco demasiado bien. Por muy escandalosas que sean las nuevas teorías, nunca igualarán a la práctica en estupidez y ferocidad» (Palmer, 19659: I, 261). Pocos escucharon entonces las palabras de Brissot. Más tarde tendrían que hacerlo.

En 1787 un desesperado ministro de finanzas, Calonne, convocó una Asamblea de Notables *ad hoc*. Después de una paz de cuatro años, Necker, su antecesor, había publicado unas cuentas fiscales optimistas (para mantener la clasificación crediticia del régimen). De ahí que los datos del déficit pasmaran a la Asamblea. Los miembros quisieron ver los libros, se negaron a creerlos y, valiéndose de intrigas de corte, lograron la destitución de Calonne. Su sucesor, el incrédulo arzobispo Lomenie de Brienne, estaba sometido a una fuerte presión por la escasez de fondos. Decidió entonces arrebatar a otros la causa de la representación y, yendo más allá de los notables con mayores privilegios, recurrió a la convocatoria de la única asamblea representativa que había conocido Francia: los antiguos Estados Generales. La corona continuaba practicando su táctica basada en el «divide y vencerás» en las inexploradas aguas del gobierno representativo. Como en otras épocas, todas las comunidades locales fueron invitadas a enviar sus quejas por escrito a París. Pero ambas tácticas produjeron resultados inesperados. Si el régimen lo hubiera sabido, habría obrado de otro modo. La monarquía francesa podría haber sobrevivido como lo hizo la prusiana reformando su administración según principios más universalistas.

Las reclamaciones se publicaron en los *cahiers de doléance* (cuadernos de quejas), redactados por los representantes locales de cada uno de los estados (Taylor, 1972; Chartier, 1981; Chaussinand-Nogaret, 1985: 139 a 165; y, sobre los campesinos, Gauthier, 1977: 131 a 144). Algunos fueron redactados en una reunión «primaria», otros se llevaron para su discusión a las reuniones de los distritos, bailías, que también elegían a los representantes para los Estados Generales. Sorprendentemente, este hecho puso en marcha un proceso político «nacional», dotado de una dinámica propia que aceleró la expresión de principios ideológicos y la fusión de tres infraestructuras de comunicación que crearon una elite ideológica y revolucionaria: la Ilustración del régimen, los abogados defensores de los derechos políticos y la alfabetización difundida entre la pequeña burguesía, el bajo clero y el campesinado rico. Las asambleas del tercer estado atrajeron a la

burguesía y al campesinado rico, pero la redacción de los proyectos corrió a cargo de los abogados y los funcionarios reales. Parecían poca cosa para asustar al régimen, al fin y al cabo las quejas quedaban en manos de sus propios funcionarios. Con la suspensión de la censura para permitir la circulación de los *cahiers*, proliferaron los diarios y las publicaciones periódicas. Las infraestructuras ideológicas comenzaban a escaparse de las manos del control autoritario.

La mayor parte de los *cahiers* han sobrevivido. Su contenido no pareció tan malo para el régimen. La mayor parte manifestaban lealtad al rey y se quejaban de las injusticias locales, sin aludir a principios de carácter general. Los campesinos clamaban contra los privilegios de la Iglesia y los señores, y contra los impuestos. Los *cahiers* de los nobles y del tercer estado se lamentaban de la arbitrariedad real, pero aproximadamente la mitad de los documentos de las bailías, sobre todo en París y otras ciudades grandes, hablaban de un programa de reformas más basado en principios; por lo general, solicitaban que los Estados Generales se reunieran con regularidad y, en ocasiones, una constitución escrita, libertad de prensa y una mayor equidad de la carga fiscal. Ni rastro de democracia o de revolución; su lenguaje se ajustaba más al de los abogados del antiguo régimen que al de los filósofos.

No obstante, muchos de los *cahiers* redactados a partir de las reuniones de las bailías manifestaban la universalización del discurso político y un desarrollo subterráneo del capitalismo y de la nación. Los campesinos consideraban que los privilegios y el feudalismo constituían los restos de un pasado bárbaro, ofensivo para la igualdad natural y el desarrollo económico. En la mayoría de los *cahiers* se daba por descontado que Francia era un único país y un único pueblo o «nación», cuyos derechos naturales, entre ellos el acuerdo sobre los impuestos, habrían de respetarse. El término «nación» había sufrido un cambio similar al que una política fiscal comparable produjo en Gran Bretaña, Holanda y Hungría. Aunque su significado original era un pueblo con origen común —vinculado por la sangre, pero no necesariamente por lazos territoriales o políticos—, lo proclamaban ahora los descontentos contribuyentes privilegiados que exigían «libertades nacionales» basadas en las antiguas constituciones (Dann, 1988: 4 a 7).

Para ellos, el principal instrumento de la reforma eran los Estados Generales, que si bien podían considerarse antiguos, no eran tradicionales. Puesto que no se habían reunido desde 1614, nadie sabía cómo

organizarlos. Sus antiguas normas tuvieron dos consecuencias involuntarias de carácter «estatista constitucional» que nadie esperaba. La primera es que si bien todos conocían la existencia de los tres estados, no sabían ni quién podía ser elegido para cada uno de ellos ni cómo votarían. El temor a que el rey estableciera normas arbitrarias llevó al *parlement* de París a pronunciarse por las de 1614. Se aceptaron antes de comprender cuáles serían las consecuencias. Pero las normas de 1614 reducían los miembros del segundo estado, el de los nobles, a la antigua «nobleza de la espada». Francia se encontraba mucho más desarrollada en 1789 que en 1614. Muchos de los grandes propietarios no eran nobles, y bastantes de los que se habían ennoblecido durante el siglo XVIII no resultaban elegibles para el segundo estado. El hecho de que sólo fuera elegible una exigua minoría introdujo una inesperada división política entre los propietarios del antiguo régimen (Lucas, 1973: 120 y 121; Goldstone, 1991: 243 a 247, aunque este último opina que la lucha entre las facciones había comenzado antes). La aristocracia y el clero eran los únicos poderes corporativos y políticos claros. De golpe, el enfrentamiento entre el feudalismo y la burguesía adquirió alguna forma de realidad política, centralizada en Versalles.

Algunos críticos exigían más representantes del tercer estado; otros, que todos los estados se unieran en una sola asamblea. Se trataba de demandas excesivamente radicales, pero Necker, poniéndose a su favor, convenció al rey de que ampliara el tercer estado para que el aumento de la representación de los propietarios sirviera de contrapeso a los otros dos, siguiendo la estrategia del «divide y vencerás». De este modo, la suma de sus miembros superaría la de los otros dos estados juntos, aunque los tres se reunirían por separado. Parecía un compromiso razonable, pero no hizo sino aumentar el volumen de la voz del tercer estado que protestaba ante el súbito atrincheramiento de los privilegios.

En segundo lugar, nadie supo prever los efectos de las elecciones abiertas. En los primeros estados, los párrocos vencieron a los prelados y enviaron un mayor número de representantes, entre ellos muchos descontentos. Las elecciones del segundo estado resultaron sorprendentemente dominadas por los conservadores, reduciendo a un tercio a los vocales nobles urbanos e ilustrados de las ciudades. Estos dos estados se encontraban divididos en facciones. Creció el abismo entre los nobles del segundo estado y sus copropietarios del tercero. El intento real de llevar la táctica segmental del «divide y vencerás» al

CUADRO 6.1. *Porcentajes de las profesiones desempeñadas por los revolucionarios franceses con anterioridad a 1789*

	Funcionarios de la corona	Abogados independientes	Otros profesionales	Negocios, comercio, agricultura	Medios privados o desconocidos	% TOTAL	N.º
1. Asamblea Nacional, 1789	49	23	7	20	—	100	648
2. Activistas de la Asamblea Constituyente, 1789	44	33	16	6	—	100	62
3. Revolucionarios inquebrantables de la Asamblea Constituyente, 1789-1791	23	26	18	20	12	100	287
4. Convención Nacional, 1792-1794	27	27	24	15	7	100	749
5. Activistas de la Convención Nacional, 1792-1794							
5 (a). Destacados en las biografías de Knscinski	23	27	43	6	3	100	162
5 (b). Miembros del CSP, miembros fundamentales del CSG o ejecutados 1792-1794	25	26	38	7	4	100	80

Notas: Los términos *Asamblea Nacional* y *Asamblea Constituyente* se refieren al mismo cuerpo, que se reunió desde junio de 1789, se remodeló en la Asamblea Legislativa de octubre de 1790 y fue sustituido por la Convención Nacional en septiembre de 1792. La Convención se disolvió definitivamente en octubre de 1795.

Fuentes:
1, 2: Lemay (1977), quien probablemente incluye a los que vivían de medios privados en el epígrafe «agricultura».
3: Calificados en un documento de 1792, *Le Véritable Portrait de nos Législateurs*, de «patriotas que no han variado» durante el periodo 1789-1791. Datos facilitados por Dawson (1972: 238 y 239), quien especula que puede deberse al diputado Alquier. Sin embargo, en las memorias del patriota diputado Prieur de la Marne se atribuye a Dubois-Crancé.
4: Patrick (1972: 260), a partir de las biografías de Kuscinski (1916).
5a: Se trata de los *conventionnels* cuyas biografías ocupan dos o más columnas en Kuscinski (más Robespierre, omitido por Kuscinski).
5b: Los veintitrés miembros del Comité de Salvación Pública (CSP), los treinta y seis miembros de mayor permanencia en el Comité de Seguridad General (CSG) (véase Patrick 1972: 374 y 375) y los *conventionnels* guillotinados o asesinados entre 1792 y 1794 (dirigentes dantonistas y girondinos, además de Philippe Egalité, antes duque de Orleans).

desconocido terreno de la representatividad aumentó la división de las facciones. Los *parlements* y la aristocracia habían resistido al particularismo. La consecuencia fue un conflicto abierto con el universalismo forzado en el tercer estado «excluido», que ahora era potencialmente burgués. Aunque el problema se había originado entre los partidos del antiguo régimen, la situación comenzaba a adquirir ligeros tintes de lucha de clases.

La aparición de la elite ideológica

No obstante, el tercer estado no representaba aún ni una clase ni una amenaza. La burguesía emergente se encontraba demasiado vinculada al antiguo régimen para generar una conciencia o una organización independientes, de forma que las elecciones no produjeron una oposición burguesa, como puede comprobarse por los antecedentes de los representantes de la revolución que resultaron elegidos. Al analizar la actividad de los miembros de las asambleas revolucionarias antes de 1789, el cuadro 6.1 muestra las profesiones de los diputados del tercer estado (después de que se convirtieran en Asamblea Nacional a finales de junio de 1789).

La mitad de los diputados eran funcionarios de la corona, generalmente oficiales de toga de las bailías locales. Una cuarta parte eran abogados con una práctica independiente. Al menos el 72 por 100 habían estudiado leyes. Un 14 por 100 se dedicaba a los negocios particulares o al comercio, y sólo el 6 por 100 (latifundistas en su mayoría) a la agricultura, que representaba las tres cuartas partes de la población francesa. El 7 por 100, encuadrado en «otros profesionales», estaba formado por un grupo heterogéneo de médicos, oficiales del ejército, académicos y filósofos. Cobban (1964: 59 a 61) aporta cifras semejantes para establecer una teoría de las clases: la revolución no fue un producto de la burguesía, sino de una clase formada por abogados y funcionarios resentidos por la decadencia de su situación económica y social. Goldstone (1991: 247 a 249) atribuye la revolución, alternativamente, a las jóvenes elites cuya «ansia de credenciales» había producido lo que él llama «una movilidad bloqueada». Pero la evidencia desmiente estas opiniones. Los diputados del tercer estado fueron elegidos libremente y, en general, sin conflictos, por todas las clases acaudaladas. Entre los diputados había miembros de las más celebradas familias de abogados de Francia. Los abogados

que se unieron a la revolución no se distinguían por una gran diferencia de edad, origen familiar o riqueza de los que no lo hicieron (Seligman, 1913: I, 118 a 186; Berlanstein, 1976: 177 a 182; Fitzsimmons, 1987: 34 a 38).

¿A quién habrían de votar los electores, sin experiencia electoral anterior, para que los representaran? Como es lógico, a prominentes hombres locales, con profesiones de prestigio. En primer lugar, eligieron abogados con empleos públicos, personas con gran experiencia en materia de responsabilidades públicas, que, en el absolutismo, eran lo más parecido a los políticos. Precisamente habían adquirido importancia haciendo lo que sabían hacer: redactar los documentos que recogían las quejas (*cahiers*). Pero apareció también un segundo talento muy valorado: el ideólogo, ejemplificado por Robespierre, que si aún no se había convertido en un orador radical, era ya un reformador conocido en las academias y los salones literarios, muy avezado en las técnicas retóricas. El electorado comenzaba a plantearse ciertas cuestiones de principio a medida que las reuniones de los *cahiers* daban paso a los debates sobre la normativa que iba a regir las reuniones de los estados. Casi todos los diputados que viajaron a París eran favorables a las reformas basadas en principios políticos alternativos. Y ¿quién podría deliberar mejor sobre esos principios que aquellos miembros de las familias más respetables, que habían demostrado con sus ensayos premiados su capacidad de protesta, como, por ejemplo, Robespierre?

Estamos ante lo que Doyle (1980: 155) ha llamado «una victoria aplastante de la burguesía no comercial, profesional y propietaria». Cobban tenía razón, no fue una burguesía estructurada conforme al modelo marxista la que dirigió la revolución. En 1794 ni los dirigentes de derechas ni los de izquierdas (términos acuñados a partir de la disposición de los escaños en la Asamblea Nacional), desde los monárquicos constitucionalistas o termidorianos de derechas, pasando por los centristas brissotinos y girondinos, hasta los izquierdistas jacobinos y *enragés*, representaron una sección representativa de la burguesía, de la pequeña burguesía o de cualquier otra clase. La cuarta línea del cuadro 6.1 demuestra que las clases comerciales o directamente productivas formaban sólo el 15 por 100 de los diputados elegidos a la Convención Nacional de 1792, especialmente hombres de negocios y algunos agricultores. Sólo unos cuantos artesanos y pequeños burgueses entraron en la Asamblea Constituyente, pese a que proporcionaron a la revolución el grueso de las tropas de asalto. Es-

tas clases aportaron aún menos líderes, como puede verse en las líneas 2 y 4 del cuadro 6.1. Sesenta y dos diputados de la Asamblea Nacional aparecen clasificados como activistas por Lemay (aunque no se nos explica cómo ha medido ella ese activismo). Agricultores, comerciantes y negociantes forman sólo el 6 por 100 de aquéllos. A mi parecer, alcanzaban el 20 por 100 en la lista del diputado revolucionario Dubois-Crancé, bajo el epígrafe «patriotas que no habían variado» su apoyo a la revolución de 1789 a 1791. Puede que constituyeran el núcleo de un movimiento revolucionario de burgueses y campesinos. Con todo, en la Convención Nacional descendieron a sólo el 3 y el 4 por 100 de los activistas en las líneas 5(a) y 5(b).

Entonces, ¿de dónde procedía el grueso de los dirigentes revolucionarios? Los abogados y funcionarios que tropezaron por casualidad con la revolución formaron un grupo importante, aunque el cuadro 6.1 muestra que todo el grupo descendió del 72 al 54 por 100 en la Convención Nacional. Los funcionarios prerrevolucionarios disminuyeron aún más, del 49 al 27 por 100 (casi todos ellos oficiales de la toga). No obstante, puede que el cuadro exagere el giro, ya que se analiza sólo las ocupaciones anteriores a 1789, y no debemos olvidar que algunos líderes entraron en la Convención Nacional después de haber servido como funcionarios de la revolución. Si incluimos las ocupaciones posteriores a 1789, aumenta la proporción de funcionarios del 27 al 43 por 100, en tanto que los abogados independientes descienden por debajo del 5 por 100 (estimaciones amablemente aportadas por Ted Margadant a partir de una investigación aún en curso).

A los abogados se unían en ese momento otras profesiones eruditas, contribuyendo en un 24 por 100 a la Convención Nacional, que incluían unos cuantos funcionarios posteriores a 1789. Entre ellos, cincuenta y cinco curas, cuarenta y seis médicos, cuarenta y una figuras literarias o académicas y treinta y seis oficiales del ejército. Los abogados independientes y otras profesiones intelectuales contribuyeron con un número incluso mayor de activistas, aportando la mitad de ellos a la Asamblea Nacional (según la clasificación de Lemay), pero sólo el 30 por 100 de sus miembros, aunque aumentarían hasta los dos tercios en la Convención Nacional para ambas categorías. Las restantes profesiones eruditas proporcionaron alrededor de un 40 por 100 de los activistas. Entre ellos, predominaban los escritores y los clérigos sobre otras profesiones más técnicas como la abogacía y la milicia. Estas tendencias eran aún más marcadas entre los *convention-*

nels de París y las provincias colindantes. El liderazgo había cambiado con la disminución de los oficiales de la toga y el aumento de los ideólogos: «Los hombres de la sala de conferencias» dejaban paso a «los hombres del podio» (Dawson, 1972: 125), a medida que la persuasión retórica sustituía a la lucha de facciones entre los funcionarios.

¿Cuántos de ellos participaron en las redes discursivas ilustradas del mundo de la palabra impresa? Las cifras que siguen deben de ser estimaciones bajas de obras y actividades que en su gran mayoría no han sobrevivido. Las listas de miembros de la masonería muestran una presencia significativa, aunque no arrolladora, de masones entre los líderes. En los Estados Generales formaban el 28 por 100 del segundo, el de la nobleza, en comparación con el 17 o el 19 por 100 del tercero, y sólo el 6 por 100 en el del clero (debido a su anticlericalismo). Son las cifras que ofrece Lamarque (1981), que si bien no ha reunido datos sistemáticos para la Convención Nacional establece provisionalmente un 15 por 100 de masones entre sus miembros. Los datos a mi disposición son que los masones comprendían por los menos un 20 por 100 de mis dos grupos de activistas *conventionnels*.

He investigado también las publicaciones de los *conventionnels* partiendo de la monumental obra de Kuscinski, *Dictionnaire des Conventionnels* (1916), que incluye la mayor parte de las publicaciones conocidas de los miembros de la Convención Nacional, completadas por mi parte con numerosas biografías y autobiografías de los revolucionarios. He ignorado aquellas memorias u obras consistentes en meros comentarios políticos sobre los asuntos del día, aunque Darnton (1987) argumenta que incluso las publicaciones políticas de dos *conventionnels*, Rivard y Fabre d'Eglantine, ejemplifican mejor los géneros literarios y el culto a las virtudes absolutas que la propia práctica política.

No me he limitado a las publicaciones anteriores a 1789. ¿Cuántos *conventionnels* publicaron, en el momento que fuera, obras sociales, culturales o científicas que manifestaran un interés intelectual con un aliento parecido al de las preocupaciones de la Ilustración? Los resultados aparecen en el cuadro 6.2, línea 1. Aunque, una vez más, debe de haber una grave infravaloración.

Al menos una cuarta parte de las publicaciones de los diputados de la Convención Nacional manifiestan amplios intereses intelectuales. Algunos indican una formación profesional. El *Ensayo sobre los nuevos principios de las ecuaciones diferenciales* de Arbogast, y las

CUADRO 6.2. *Porcentaje de los* conventionnels *que publicaron obras culturales, sociales o científicas*

Publicaciones	*Porcentaje*	*Total*
1. Convención Nacional, 1792-1794	23	892
2. Activistas de la Convención Nacional (Kuscinski).....	56	162
3. Activistas de la Convención Nacional (CSP, CSG, ejecutados)[a].....	58	80

[a] Véase la nota 5b del Cuadro 6.1.

Fuente: Kuscinski (1916) y numerosas memorias y biografías.

Observaciones sobre un tipo de epilepsia, de Barailon, son las obras de un matemático y de un médico. Pero cabría preguntarse por qué tales publicaciones presentan el aspecto de un requisito para acceder a un empleo. Su volumen excede en mucho a las obras equivalentes de los miembros de otras asambleas modernas, como el Congreso de los Estados Unidos o la Cámara de los Comunes británica. Otras obras eran más generales, y gran parte de ellas abarcaban los más variados argumentos, como la *Paz perpetua y general entre las naciones basada en la Ley natural*, de Bonet de Treyches, o las *Instituciones republicanas o el desarrollo analítico de la naturaleza civil y de las facultades políticas del hombre* de Bonnemain. Otras trataban temas políticos, como las *Reflexiones sobre los fundamentos de una Constitución*, de Bresson, o los trabajos sobre filósofos anteriores, como los de Deleyre sobre Bacon y Montesquieu. Otras trataban de arte, como las *Opiniones sobre los teatros y el estímulo del arte dramático*, de Eschasseriaux, o la *Epístola a M. Vernet, pintor del rey*, de Bouquier. Algunos escribieron obras de ficción: *La muerte de Enrique de Guisa*, tragedia de Himbert, o las *Fábulas* de Deville. Estos *conventionnels* eran los «segundones» de la Ilustración.

Ninguno de ellos tenía categoría de líder, su actividad política quedaba empequeñecida ante la de diputados como Brissot o Robespierre, y sus obras no alcanzaban el mérito de las de otros diputados como Condorcet, el filósofo, o David, el pintor. ¿Pero existía alguna relación entre la importancia del diputado y el aliento de sus intereses intelectuales? ¿Publicaron más los activistas? En efecto. Las líneas 2 y 3 del cuadro 6.2 indican que más de la mitad de los activistas, en una

proporción que doblaba la de los diputados ordinarios, publicaron obras no políticas. Pero es más fácil descubrir las realizaciones de los líderes que las de estos «segundones». No he podido encontrar más obra publicada por Merlin de Thionville que unas memorias. Sin embargo, fue profesor de latín y francmasón, y estuvo relacionado con los filósofos. ¿Es posible que no escribiera ninguna obra de contenido cultural? ¿Tampoco lo hicieron Pinet, Petit o Reubell, cuya biblioteca contaba con 1.500 volúmnes (y cuyo biógrafo, Homan, 1971, nada dice al respecto)? Puede que todos ellos publicaran ensayos en los periódicos o poemas con su propio dinero. Pero no he podido encontrar nada en las bibliotecas de Londres y Los Ángeles (quizás una indagación complementaria en Francia habría proporcionado otros datos), de modo que los he incluido entre quienes no publicaron nada. Contamos con mayor información sobre los grandes dirigentes, los «doce que gobernaban», el núcleo del Comité de Salvación Pública que rigió los destinos de Francia de 1793 a 1794. El cuadro 6.3 ofrece sus currícula vitae.

No menos de once de ellos —a excepción de Lindet— publicaron obras sobre asuntos no políticos. Incluso los «jornaleros» de los comités administrativos —Couthon, los Prieur y Carnot, el «organizador de la victoria»— eran académicos con amplios intereses culturales. También el más joven, Saint-Just, con sólo 22 años en 1789, hizo incursiones en la «imprenta ilustrada». Los doce venían a ser una especie de exquisito «Ministerio de la Civilización Occidental», y, al igual que en el caso de los miembros de un ministerio moderno, nadie leería sus obras doscientos años después si sus autores no se hubieran transformado en terroristas de la historia universal. En 1789 sólo Saint-André había estado relacionado con el comercio (aunque fracasó) y ninguno de ellos se había dedicado a la producción. Los doce eran cómodos perceptores de rentas, pensiones y cargos; tipos medios del antiguo régimen, que presentaban en común el hecho de ser «intelectuales ... impregnados de la filosofía del siglo XVIII» (Palmer, 1941: 18).

Ahora bien, ¿se trata de una tendencia genuina —es decir, cuanto más prominente era el líder mayor era también su preparación para los cargos y su formación como intelectual ilustrado— o una indagación más profunda revelaría que prácticamente todos los *conventionnels* fueron activistas de la Ilustración? Incluso entre los escasos mercaderes e industriales, habría «capitalistas de la cultura», procedentes de las imprentas o de las industrias del consumo, cuyos locales eran

centros de discusión revolucionaria de donde saldrían las masas, como Santerre, el cervecero, y Legendre, el carnicero. Prácticamente todos los *conventionnels* contaban con ingresos procedentes de propiedades, incluidos los cargos venales. No trabajaban a tiempo completo en el sentido moderno, por el contrario, gozaban de suficiente tiempo libre para escribir panfletos y ensayos y hablar en las asambleas.

Como quiera que fuese, los líderes revolucionarios formaban una elite ideológica, una tropa de asalto de las dos redes de poder ideológico más importantes del siglo XVIII: los profesionales de la toga y la circulación del discurso impreso.

A medida que avanzaba la revolución, los principios de la Ilustración comenzaron a predominar sobre los «semiprincipios» de la ley (como explicaré en el capítulo 7). La elite tenía distintos «intereses ideales» (por emplear el término de Weber). Los abogados se volvieron contra el rey y generalizaron los preceptos legales en principios políticos; los hombres de letras apostaron por una reconstrucción del Estado y una sociedad basada en la razón. Plasmaron las ideas de la Ilustración en el estilo prosístico del antiguo régimen. La oratoria de las asambleas revolucionarias se escribía previamente siguiendo las reglas de Quintiliano sobre la argumentación y las técnicas, paradigmas y ejemplos de la retórica clásica (Hunt, 1984: 33). La obsesión de los líderes ilustrados era la *vertu* política. Arriesgaron la vida por cuestiones políticas, no por asuntos económicos. Al rey y a los privilegios particularistas opusieron los «Derechos del Hombre y del Ciudadano», la «justicia», «la libertad, la igualdad y la fraternidad», y la ciudadanía para el «pueblo» y la «nación». Por toda Europa se difundieron las redes de alfabetización discursiva que proclamaban la ampliación potencial del concepto de «nación» desde los privilegiados a todos aquellos que tenían educación y propiedades. En su lucha contra los privilegios, los líderes del tercer estado ampliaron el concepto de nación y lo extendieron hacia abajo. El pueblo y la nación eran una misma cosa, como había sostenido especialmente Rousseau. El lema del antiguo régimen «*Un roi, una foi, une loi*» (Un rey, una fe, una ley) fue sustituido otro «*La Nation, la loi, le roi*», donde sólo la Nación aparecía con mayúsculas (Godechot, 1973, 1988).

Los líderes unían los hechos a los valores y las normas, en lo que Hunt llama «la política de las emociones auténticas». Los jacobinos hablaban de un «sentimiento ardoroso de la urgencia del ideal», como indica Brinton (1930). Robespierre y Saint-Just declaraban que

CUADRO 6.3. *Actividades culturales de los «doce que gobernaban» (antes de 1789, salvo que se indique lo contrario)*

Robespierre	Abogado independiente. Presidente, Academia de Arras; escribió al menos tres ensayos para los premios de la academia (obtuvo un segundo premio) y un poema inédito sobre la belleza.
Saint-Just	Estudiante de leyes. Publicó *Organt*, un largo poema épico, satírico y erótico.
Barère	Abogado; posterioremente, juez. Miembro directivo de la Academia de los Juegos Florales, Toulouse; escribió numerosos ensayos sobre la reforma legal y penal y sobre Rousseau (en uno de ellos comparaba *La nueva Eloísa* con la *Clarisa* de Richardson); ganó un premio de la academia. Francmasón.
Carnot	Oficial del ejército. Participó en la Academia de Arras. Publicó canciones, poemas, un *Ensayo sobre las máquinas*, un *Elogio a Vauban* y un esquema sobre la reorganización del ejército.
Billaud-Varenne	Profesor. Participó en varias academias; publicó numerosas obras de teatro (p.e., *Mujeres*, y *Puesto que ella ya no existe*) y una polémica contra la Iglesia: *El último combate contra el prejuicio y la superstición*. Publicó *Los principios regeneradores del sistema social* (1795).
Hérault de Séchelles	Noble y Juez. Participó en academias y salones literarios; publicó *Reflexiones sobre la declamación*, *Una teoría de la ambición*, libros de viajes y un volumen sobre el geólogo Buffon.
Collot d'Herbois	Actor, director y empresario. Publicó numerosas obras de teatro (p.e., *Lucía o los padres imprudentes*, *El campesino magistrado*, *El buen anjovino*).
Jeanbon Saint-André	Capitán de barco y, posteriormente, pastor protestante. Publicó varios sermones y unas *Consideraciones sobre la organización civil de las iglesias protestantes*. Miembro de la Academia de Montauban. Francmasón.
Couthon	Abogado independiente. Participó en la Academia de Clermont-Ferrand, se presentó a varios premios y fue elogiado por su «Discurso sobre la Paciencia». Publicó una comedia política en dos actos: *El aristócrata converso*. Francmasón.
Prieur de la Côte-d'Or	Oficial del ejército. Miembro de la Academia de Dijon y de la Sociedad Parisiense de Historia Natural. Publicó varios artículos en los *Anales de Química* y en el *Journal de l'École Polytechnique*. Más tarde escribió sobre estrategia militar y *Sobre la descomposición de la luz en sus elementos más simples*.
Prieur du Marne	Abogado independiente. Académico y francmasón. Una vez en el exilio escribió un *Estudio sobre la lengua flamenca*, una historia de la masonería, un *Diccionario de leyes* y numerosos poemas.
Lindet	Fiscal. No se le conocen actividades culturales antes de 1789, aparte de la publicación con carácter local de un dicurso en el que abogaba por la reforma. Más tarde publicó unas *Memorias* y un *Ensayo sobre el crédito público y la subsistencia*.

virtud y pureza eran su filosofía política y económica. Pero, a la larga, la virtud y el Terror acabaron convergiendo. Parece que Saint-Just creía que los moderados que criticaban el Terror eran gentes sexual y económicamente corruptas: «Uno podría creer que espantados por su conciencia y por la inflexibilidad de las leyes, se dicen a sí mismos: "Nos falta virtud para ser terribles. Legisladores filosóficos, ¡apiadaos de mi debilidad; no me atrevo a decir que yo soy un corrupto, prefiero decir que vosotros sois crueles"» (Curtis, 1973: 189).

Saint-Just creía en sus peroratas moralizantes. Un individuo astuto como Barère, probablemente no, pero eso no le impidió elaborar informes regulares del Comité de Salvación Pública destinados a la Convención Nacional con el siguiente tono: «El Comité está dedicado a un ambicioso plan de regeneración cuyo resultado erradicará de la República los prejuicios y la inmoralidad, el ateísmo y la superstición ... Hemos de fundar una República basada en la moral y los principios, que, con vuestro apoyo, se entregará por entero al gran proyecto» (Gershoy, 1962: 226).

Algunos revolucionarios creían sinceramente en la «República de la Virtud»; otros lo hacían por interés. La elevación de los principios morales no es un elemento común a todas las revoluciones. Los bolcheviques hablaban de leyes científicas, pero sus principios morales (en particular, la camaradería) procedían directamente de su teoría «científica» de la lucha de clases. No así los revolucionarios franceses, que salieron de la Ilustración como una mezcla de religión, ciencia, filosofía y arte, como manifestan la poesía y los ensayos de Robespierre, Saint-Just, Collot d'Herbois y el resto. Existía una cadena ideológica causal que conducía desde la Iglesia a las academias ilustradas y a la «República de la Virtud». Los políticos de la corte real, los tribunales de justicia y la calle tuvieron que adaptarse a su poder de coaccionar y persuadir moralmente al mismo tiempo.

¿Representaba la elite ideológica a la burguesía? Las historias narrativas insisten en considerar «burgueses» o representantes de grupos de la clase burguesa a los dirigentes de 1789 a 1792 (Furet y Richet, 1970; Boiloiseau, 1983; Vovelle, 1984). De hecho, los cuadros revolucionarios de provincias comenzaban a ser burgueses. En 1789 la administración real de los municipios fue sustituida por unos comités permanentes creados al efecto y dominados por abogados y comerciantes. Posteriormente, en una segunda oleada, los abogados fueron sustituidos por pequeños comerciantes y dependientes de comercio, maestros artesanos y profesionales modestos, tales como maes-

tros de escuela y cirujanos-barberos. En 1791 la mayor parte de los concejos municipales estaban dominados por aquellos que dirigían la economía local y por algunos profesionales cultos; los pueblos, por pequeños agricultores, artesanos, dependientes de comercio y, cada vez más, por maestros de escuela (Hunt, 1984: 149 a 179). La política de provincias reflejaba mejor que la política nacional la estructura de clase. También los líderes nacionales proclamaban enfáticamente las consignas burguesas. Situaban el mérito y el trabajo por encima de los privilegios, el universalismo por encima del particularismo, el *laissez-faire* por encima del mercantilismo y el monopolio. Pero, sobre todo, creían firmemente en la propiedad privada absoluta, que había que defender tanto contra los privilegiados como contra los desposeídos.

No obstante, durante mucho tiempo la elite no fue consciente de las fuerzas de clase que aparecían a su alrededor y a través de su poder. Así se explica quizás que aquellos hombres adinerados encabezaran, sin embargo, una auténtica revolución. Comenzaban a identificar actores que presentaban algunas características de clase: la corte y la aristocracia, los notables de la burguesía y el «pueblo» (una combinación de plebe y pequeña burguesía). Pero nunca formaron una alianza de clase propiamente dicha. Los derechistas como Ferrières, Malouet y Mirabeau deseaban reformas tibias, con el fin de echar los cimientos de un «partido de orden» de la corte y los notables contra el pueblo. Incluso las reformas más radicales, reclamadas en ese momento por izquierdistas como Barnave y Robespierre, pretendían unir a toda la burguesía contra la corte y la plebe. Es decir, derecha e izquierda evaluaban de distinta forma la amenazas procedentes de la corte y de la calle. Lo auténticamente revolucionario en Francia fue que de 1789 a 1794 la mayoría de los dirigentes políticos temieron menos a la segunda que a la primera. Así lo demuestra la elección del lugar de reunión de la Asamblea Constituyente: el clamor de la galería parisiense era preferible a las intrigas de la corte de Versalles. Al contrario que en Gran Bretaña, no se impuso el partido de orden del antiguo régimen.

Los principios ideológicos y la clase se consolidaron en esta espiral descendente de la política práctica. También la ineficaz hostilidad del rey y de la aristocracia contribuyeron a reforzar los principios morales y la ideología de clase. La intransigencia del antiguo régimen sirvió de acicate para la burguesía emergente; la elite ideológica la acaudilló en su defensa del capitalismo contra el orden feudal. Sin es-

tos dos procesos del poder político e ideológico la burguesía francesa podría haberse mantenido como una clase latente, atrapada en la organización segmental del antiguo régimen. Lucas (1973: 126) ha observado que «fue la revolución lo que hizo a la burguesía, aunque no fue la burguesía quien hizo la revolución». Más claramente: la oposición política y el liderazgo ideológico hicieron la revolución y crearon la burguesía.

Tan pronto como se reunieron en París los Estados Generales, a principios de mayo de 1789, los ministros del rey defraudaron a los reformistas. La crisis era fiscal, sostenían, y los estados deberían limitarse a la discusión en asambleas separadas. Desde ese momento hasta el de su caída, la corona no planteó un solo programa de reformas. El rey parecía sordo a las súplicas de los monárquicos constitucionales «para que os pongáis a la cabeza de la voluntad general», es decir, a la cabeza de un partido nacional de orden. Con su fracaso, Luis se perdió a sí mismo y los perdió a ellos.

El primer choque se produjo al plantearse la discusión sobre si los estados debían reunirse conjuntamente o por separado. Un grupo de abogados y de hombres de letras, que se autodenominaban Comunes, siguiendo el modelo británico, sostuvieron que los estados debían mezclarse puesto que la nación era indivisible. Los votos demuestran que la proporción de nobles que se oponían a la mezcla de los estados era de tres a uno; enseguida se replegaron en torno al rey. El clero fue la cuerda más débil. Gran parte del clero bajo se sentía más cerca de sus parroquianos que de la jerarquía. Como manifestaba cierto panfleto:

> Es erróneo atribuir un sólido *esprit de corps* al clero ... ¿Por qué hablar de tres órdenes de ciudadanos? Dos son suficientes ... Todos se agrupan bajo alguno de los dos bandos: la nobleza y los comunes. Éstos son los únicos gritos de unión que dividen a los franceses. El clero está tan dividido como el país ... El párroco es un hombre del pueblo [McManners, 1969: 18].

A partir del 13 de junio los curas se dejaron arrastrar al tercer estado, que se dio a sí mismo el nombre de Asamblea Nacional desde el 17 de junio. El 19 de junio, el clero votó por escasa diferencia a favor de la integración en la Asamblea Nacional. El rey quiso saber si un ejército desafecto estaría dispuesto a reprimir a un cuerpo llamado «Asamblea Nacional», dirigido por unos supuestos «patriotas». Sus generales le aconsejaron cautela. Al ver la actitud de los nobles ilus-

trados, Luis pareció ceder y se recomendó a los nobles y a los clérigos que se unieran a la Asamblea. El antiguo régimen se había derrumbado antes de que los revolucionarios hubieran lanzado contra él un auténtico ataque y antes de que la burguesía se hiciera consciente.

Pero ni el rey ni la corte eran sinceros. A principios de julio veinte mil soldados rodeaban París (Scott, 1978: 46 a 80). Sin embargo, tanto ellos como sus suboficiales comprendían mejor a los civiles que a los oficiales nobles que los mandaban. La mitad de los oficiales se encontraban licenciados, como era costumbre en 1789 y, sorprendentemente, también en 1790. Gran parte de los soldados sabían leer y comprendían los panfletos de París. Los oficiales advirtieron que lo más inteligente sería retirar los regimientos franceses de la ciudad. Los regimientos extranjeros parecían leales. Pero después del 14 de julio (día de la toma de la Bastilla), la multitud y la nueva autoridad municipal de París se encontraban armadas y robustecidas gracias a los desertores del ejército. El empleo de extranjeros contra las milicias ciudadanas en las calles de París parecía un riesgo político (aunque si el rey no estaba dispuesto a llegar a alguna forma de compromiso, no quedaba otra alternativa). Una vez debilitado el poder militar del régimen, los poderes político e ideológico tomaron la delantera.

El 4 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional votó casi por unanimidad «la total destrucción del régimen feudal». Uno tras otro, los nobles se levantaban en medio de un gran entusiasmo para proponer la abolición incluso de más privilegios y cargas feudales. La escena ha extasiado a los historiadores. Sewell (1985) sostiene que se produjo una declaración emocional de principios, que, una vez promulgados, hipotecaron la práctica política por la necesidad de no contradecir la metafísica de los «derechos sagrados, naturales e inalienables del hombre», tal como quedaron establecidos en la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano. Los más críticos observan que los nobles proponían la abolición de los privilegios de sus vecinos. Puede que la emoción fuera tan auténtica como intensa, pero los «patriotas» del tercer estado habían preparado el escenario intrigando entre los nobles ilustrados, presionados por la plebe urbana y la rebelión de los campesinos (que examinaré más tarde). La reforma se había visto obligada a controlar la anarquía. Por eso se llegó a la conclusión de que hablaran los nobles, para que aquella hostilidad de clase no afectara a la unidad de la nación.

Pero vieron superadas todas sus expectativas. La elite ideológica descubrió su técnica básica de poder: la persuasión moral para suscitar una gran declaración de principios, que luego se vuelven coercitivos y tienden a cumplirse. La presión popular se encargó de asegurar que una posible «traición» posterior pudiera costar la dignidad, la posición e incluso la vida. Los líderes no habían imaginado el éxito de la estrategia. La renunciación se convirtió así en una práctica política; una solución a la crisis fiscal y a la insurrección de los campesinos. Pero su contenido seguía fielmente el ideario de la Ilustración: el fin del feudalismo y la denuncia de los privilegios y de los localismos en tanto que impedimentos para la *nation une et indivisible*. «Nación» y «feudalismo» eran creaciones imaginarias; la primera representaba un hecho moral y unificador; el segundo, algo inmoral y divisivo. Las fronteras de las alianzas pragmáticas adquirían un nuevo trazado. En vez de constituirse en aliados naturales (con el rey) contra los desposeídos, los tres estados se dividieron en los privilegiados contra la nación, con una frontera inferior bastante ambigua. La nación de los principios había surgido intersticialmente.

Como indica Fitzsimmons (1987: 41), los principios establecieron su propia dinámica; por ejemplo, se abolieron corporaciones como el Orden de los Abogados, aunque al parecer no existía nada en su contra. Se produjo una declaración de principios en su doble sentido de planteamiento de un nuevo orden social y moral al mismo tiempo. Las emociones no se despertaron sólo ante las palabras de los oradores, sino también por la interacción dinámica entre esas palabras, las consignas de las redes discursivas emergentes (centradas en clubes, panfletos y periódicos), y los lemas que gritaban afuera la calle. La interacción se intensificó cuando la Asamblea Nacional se trasladó de Versalles a París, en el mes de octubre. La galería —una claque en parte pagada y en parte representativa de las fuerzas populares que esperaban en la calle— intervino en los debates. Casi por accidente, los líderes revolucionarios descubrieron que las consignas que expresaban a gritos los principios establecían poderosos vínculos emocionales entre los distintos actores de poder. Pero proclamar esos principios significaba llegar a un punto de no retorno, y condenar a los privilegios al olvido político. Las técnicas del poder ideológico produjeron un momento trascendente. Los principios se convirtieron en un nuevo patrimonio de la política revolucionaria, en una inesperada consecuencia de los actos.

Luis se mantuvo firme y declaró: «Nunca permitiré que se despoje de sus posesiones a *mi* nobleza y a *mi* clero». Analizó correctamente lo que estaba pasando, pero se equivocó al creer que podía frenarlo. El clero fue el primer despojado. En octubre, la venta de las propiedades de la Iglesia vinculó a muchas familias adineradas, algunas de campesinos ricos, con la revolución. Pero en noviembre de 1790 los patriotas, haciendo una absurda exhibición de su secularismo ilustrado, obligaron al clero a jurar lealtad a la nación, por encima del Papa y de la Iglesia. La mitad de ellos (dos tercios de los miembros de la asamblea clerical) se negaron. La Iglesia se partió en dos: la «Iglesia constitucional» de la revolución frente a la Iglesia contrarrevolucionaria de los «refractarios». Muchos clérigos locales se pusieron del lado de la contrarrevolución; lo más efectivo ahora que los privilegios ya no los indisponían con los campesinos. Los nobles no fueron desposeídos inmediatamente, pero sus poderes se tambalearon. Se suponía que iban a ser compensados por la pérdida de los privilegios, sin embargo, el control que los campesinos ejercían sobre las zonas rurales convirtió la reparación en letra muerta. Los nobles conservadores se retiraron a sus haciendas o emigraron para organizar la contrarrevolución. Los nobles liberales perdieron importancia en la Asamblea Constituyente y carecieron de un estatus diferenciado en la Asamblea elegida en octubre de 1791.

La revolución se convierte en lucha de clases

La clave del proceso revolucionario posterior a 1790 fue la interacción de cinco actores de poder. Cuatro de ellos se aproximaban ya a lo que entendemos por clase: el antiguo régimen, con su núcleo en la corte; la alta burguesía; la pequeña burguesía, con su núcleo de *sans-culottes*, y el campesinado, aunque todos ellos procedían de distintos procesos de poder político. Sus conflictos produjeron la quiebra del quinto actor —la elite ideológica que había dirigido al principio la revolución— en dos facciones, una de derechas y otra de izquierdas. Comenzaré por el antiguo régimen.

A mediados de 1790 las instituciones del Estado eran duales. Monarquía, aristocracia y jerarquía eclesiástica, perdida su capacidad de controlar las nuevas instituciones donde se votaba, los clubes y las asambleas, se habían retirado a su antigua institución, la intriga cortesana. El rey y su familia aparentaban aceptar la revolución mientras

negociaban con los moderados, de Mirabeau a LaFayette, y de los brissotinos a Danton, a quienes financiaban clandestinamente. Pero todo era una pantomima, el rey contaba con ser liberado por una intervención armada extranjera y tramaba con emisarios aristócratas la huida para alcanzar los ejércitos provinciales y extranjeros. Entre las facciones de la corte, se tenía al comité austriaco que rodeaba a la reina por especialmente intransigente. Se descubrieron numerosas conspiraciones, y se sospechó de la existencia de otras muchas. Furet (1978) sostiene que las conjuras se convirtieron en el principal mito de la revolución, pero esto es engañoso y en extremo inocente desde el punto de vista ideológico. Las conspiraciones no eran un invento. Los revolucionarios tuvieron que enfrentarse a un auténtico empeño de la corte por dividirlos, provocar levantamientos en las provincias y obtener el apoyo armado de los príncipes europeos.

Tales conspiraciones contrastaban también con la auténtica apertura y «moralidad» de las infraestructuras revolucionarias: libertad de palabra en la asamblea (imitada en los clubes y asambleas de toda Francia) y libertad de prensa. El «pueblo» entero, desde los propietarios a los sectores más populares, se sintió implicado. Las intrigas del rey y de la aristocracia confirmaban la verdad de los hechos: eran los enemigos del «pueblo», los inmorales que maniobraban y sobornaban a espaldas del país. La denuncia de Saint-Just durante el juicio al rey resonó por toda Francia: «Nadie gobierna inocentemente: el disparate es demasiado evidente. El rey es siempre un rebelde y un usurpador» (Curtis, 1973: 39). Este contraste entre las intrigas aristocráticas y la libre comunicación de los revolucionarios sacralizó al «pueblo» y convirtió en demonios a los conspiradores. En 1791 Robespierre veía un conspirador en todo hombre rico; la virtud era ya patrimonio del pueblo entendido en su sentido más bajo, el de la plebe.

A medida que el contraste se hacía más evidente, minaba a los políticos pragmáticos que luchaban por tender puentes entre los dos grupos de instituciones estatales. Las memorias de Ferrières (1822) y de Malouet (1874) constituyen largas lamentaciones al respecto; su partido monárquico se vio continuamente frustrado por culpa de las intrigas cortesanas y la insinceridad de Luis. La abortada huida del rey al extranjero, seguida de una invasión extranjera, demostró a los centristas lo que podían esperar del antiguo régimen. Muchos de ellos se desplazaron a la izquierda, para creer en, o al menos repetir mecánicamente, principios que en otro tiempo habían considerardo impracticables. A los que aún negociaban con el rey les esperaba lo peor

en caso de ser descubiertos. Eran «traidores» a la nación. Al mismo tiempo, el rey y su familia ponían en peligro sus propias cabezas; su intransigencia acabó con el partido de orden de los ricos, polarizó las infraestructuras políticas e ideológicas, convirtió a sus enemigos en representantes de principios sagrados y transformó su propio partido en un grupo de agentes del demonio. A finales de 1791 el antiguo régimen estaba acabado.

En ese momento quedaban tres clases organizadas. La más numerosa y la que influyó antes que ninguna era el campesinado (véase Lefebvre, 1924, 1954, 1963, capítulo 4, 1973; Moore, 1973: 70 a 101; Skocpol, 1979: 118 a 128; Goldstone, 1991: 252 a 268). Las malas cosechas de 1787 y 1788 y el terrible invierno de 1788, agravados por los precios y la elevada presión demográfica habían empeorado el desempleo y la penuria en el campo. Ahora bien ¿por qué produjo esta situación un movimiento campesino *revolucionario*? Como vimos en el capítulo 4, los motines del pan en Inglaterra no se dirigían contra el Estado, sino contra aquellas clases que supuestamente imponían las condiciones del mercado. El absolutismo francés, al asumir la responsabilidad de distribuir el pan, hizo de ello una cuestión *política*. Y lo mismo ocurrió con los «privilegios»; los derechos feudales y la recaudación de impuestos pesaban de un modo especial cuando fallaban las cosechas, mientras que las formas segmentales de control se debilitaban por la ausencia de los nobles y las divisiones dentro del ejército y de la Iglesia; instituciones vitales en los villorrios. En este contexto, los campesinos tuvieron la libertad de reflexionar sobre los conflictos y la identidad de clase. Los *cahiers* de los campesinos manifiestan un profundo descontento, por lo general, dirigido contra el Estado. El campesinado sostenía al tercer estado contra el rey y los nobles. En el verano de 1789 estallaron aquí y allá varias insurrecciones rurales, conocidas como *la grande peur*. Por toda Francia se extendían rumores de la existencia de cuadrillas de bandidos encabezadas por aristócratas que saqueaban las propiedades campesinas. Los campesinos tomaron las armas, pero, al no encontrar a los bandidos, quemaron castillos y destruyeron los archivos de las grandes familias donde constaban sus obligaciones feudales.

Las fuerzas urbanas habían inmovilizado al régimen; los campesinos se enfrentaban al debilitado control segmental. Al contrario de lo que siempre había ocurrido, las rebeliones campesinas podían saldarse con éxito. Los campesinos tomaron el control del campo, privando con ello al antiguo régimen de su base rural. La revolución ur-

bana pudo seguir su curso. Como observa Moore (1973: 77): «El campesinado fue el árbitro de la revolución, aunque no su principal fuerza impulsora». Su núcleo militante ya tenía conciencia de clase.

Los campesinos querían liberarse de la carga que representaban los privilegios y los derechos de la propiedad absoluta. Y así lo hizo la elite ideológica, abolió las cargas feudales en teoría —aunque los campesinos forzaron la práctica— y vendió las tierras de la Iglesia y de los nobles exiliados en pequeños lotes y a precios moderados. Hasta 1791 la revolución encontró una fuerte apoyo entre los campesinos capaces de organizarse (desconocemos qué pensaban los restantes). Sin esta «conexión capitalista» entre los movimientos urbanos y rurales, la revolución no habría podido continuar adelante. La revolución urbana había activado política e ideológicamente un conflicto entre el feudalismo y el capitalismo comercial y pequeña mercancía en el campo, que de otro modo habría permanecido latente, como ocurrió en la mayor parte de la Europa central.

Pero en el mundo rural comenzaban a cundir el desencanto y las divisiones. La caída del feudalismo no produjo grandes ganancias para muchos campesinos. La venta de las tierras sólo benefició a quienes poseían suficiente para comprarlas. Éstos formaron una nueva clase explotadora compuesta por los campesinos ricos y los burgueses que había adquirido las tierras. Los revolucionarios urbanos se vieron obligados a abordar el problema del cercamiento de las tierras comunes, con poco conocimiento de la cuestión. También ellos necesitaban desesperadamente pan para las ciudades y el ejército. La burguesía era partidaria del suministro en el mercado libre; los *sans-culottes*, de imponer el control de los precios y las cantidades con métodos coercitivos. Los agricultores, ricos o pobres, querían un mercado que mantuviera los precios altos. Cuando la revolución se desplazó a la izquierda, en 1792 y 1793, y se hizo más proclive a los controles ahuyentó a los campesinos. Bajo el Terror, se intentó distribuir las tierras y bienes confiscados entre los pobres, pero faltaron la infraestructuras necesarias para llevarlo a cabo. La opción más izquierdista entre los campesinos, favorable al colectivismo comunitario contra los nobles y los campesinos más ricos, resultó un fracaso. El campo se desplazó hacia la derecha y el clero acaudilló los actos contrarrevolucionarios desde un denso entramado organizativo local y regional. Los *sans-culotte* quedaron aislados en las ciudades. Los campesinos mejor organizados saludaron con alegría el golpe derechista de Termidor (agosto 1794), aunque las tensiones entre la ciu-

dad y el campo se prolongaron durante toda la década de 1790. El poder de los campesinos había constituido al principio una causa necesaria de la revolución; ahora sería la causa necesaria de su caída, pero en todo momento la revolución rural había favorecido al pequeño capitalismo agrario. Los campesinos propietarios mantuvieron el control de las tierras, aunque, como demostraré en el capítulo 19, se adhirieron a diversas tendencias políticas locales y regionales.

De 1790 en adelante la revolución se centró en los tres actores de poder que quedaban en las ciudades. Se encontraba dirigida por la elite ideológica, respaldada por la burguesía y la pequeña burguesía. El nuevo principio legitimador era el «pueblo» o «nación». Pero, como en América y Gran Bretaña, la identidad del pueblo era un hecho ambiguo, que comprendía tanto a los grandes propietarios (varones) como al conjunto de los hombres pertenecientes a la plebe. Los primeros dirigían la revolución, pero necesitaban el apoyo de la muchedumbre contra la corte hostil. Interactuaban en cinco tipos fundamentales de organización política: clubes, prensa, asambleas, guardia nacional y muchedumbre urbana. Todos, salvo esta última, estuvieron al principio bajo el control de la elite ideológica, pero más tarde se pusieron al servicio de la pequeña burguesía y de los artesanos, creando así un movimiento de clase autónoma de *sans-culotte* que dividió a la elite ideológica e intensificó la lucha de clases entre la alta y la pequeña burguesía.

La muchedumbre urbana era vital para la revolución porque sólo ella podía coaccionar al rey. Pero lo que más importaba a la multitud era el pan. En todos los países, a lo largo del siglo XVIII (como vimos en el capítulo 4 para el caso inglés), predominaron los disturbios populares provocados por el hambre. Los artesanos de París gastaban la mitad del salario en pan; cuando éste subía de precio, la inanición se convertía en una amenaza real. Las revueltas de la harina marcaron gran parte de las jornadas revolucionarias y movilizaron especialmente a las mujeres. Fue el consumo, no la producción, lo que produjo una movilización basada en la comunidad popular. La intensidad de los movimientos populares de la época se fraguaba en la familia y en el reforzamiento de la clase en la comunidad (retomaré este asunto en el capítulo 15). Al principio, los sublevados gritaban los acostumbrados lemas sobre la liberación de los privilegios y la corrupción. Los «intereses» del antiguo régimen —nobles y estamentos privilegiados de la Iglesia, comerciantes ricos y burgueses monopolistas— impedían la distribución de alimentos. La muchedumbre mar-

chó hacia Versalles para capturar a la familia real cantando: «*Cherchons le boulanger, la boulangère et le petit mitron*» («Busquemos al panadero, a la panadera y mozo de la tahona»). Con las buenas cosechas de 1790, el mercado se recuperó y la elite ideológica y la pequeña burguesía lucharon codo con codo, pero la mala cosecha de 1791, los contrarrevolucionarios y la inestabilidad de la moneda trajeron la escasez. La exigencia de una intervención del gobierno, por parte de los revoltosos, era anatema para la mayoría de la elite ideológica. ¿Quién se saldría con la suya?

Los clubes formaron el núcleo de la revolución. En 1790 la *Confédération des Amis de la Verité* sumaba de 3.000 a 6.000 socios. De sus ciento veintiún miembros destacados al menos cien eran publicistas, políticos y escritores, todos ellos cultos, fascinados por la Ilustración, en particular por Rousseau, y dedicados a plasmar literariamente sus ideas: «La humanidad ya tiene una gran tribuna: la prensa», «sin periódicos o gacetas, nunca habría tenido lugar la revolución en América» (Brissot); «una población diseminada por un amplio territorio puede ser ahora tan libre como la de una ciudad pequeña... Sólo la letra impresa permite que un país extenso participe en una misma discusión» (palabras de Condorcet para solucionar el problema planteado por Rousseau sobre la posibilidad de establecer la democracia en lugares mayores a la ciudad-Estado) (Kates, 1985: 83 a 85, 177, 180; Eisenstein, 1986: 191). Los brissotinos y los girondinos se centraron en las editoriales. Los jacobinos superaron a todos, de los veinticuatro clubes de febrero de 1790 se llegó a los más de doscientos de diciembre de 1790, a los 426 de marzo de 1791, y a los más de 6.000 a principios de 1794, que se extendieron también por los pueblos pequeños. Los clubes más grandes poseían salas de lectura y prensa, y sus reuniones coincidían con la llegada de las principales publicaciones. Las resoluciones se comunicaban a través de una red de correspondencia con París y los centros regionales. Los clubes eran asambleas orales en las que se discutía la letra impresa.

La mayor parte de los jacobinos de primera hora eran ricos, aunque luego se abrió a otros estamentos la posibilidad de entrar en los clubes en calidad de socios. Contaban también con unos cuantos nobles, pero los campesinos, trabajadores y sirvientes apenas estaban representados. Entre los miembros de los trece clubes existentes de 1789 a 1791, el 16 por 100 eran funcionarios o empleados asalariados; el 16 por 100, miembros de la alta burguesía (comerciantes al por mayor, inversores, industriales y rentistas); el 14 por 100, maestros arte-

sanos y hombres de los oficios; el 13 por 100, profesionales liberales (mayoritariamente abogados); el 7 por 100, sacerdotes; y el 5 por 100, oficiales y suboficiales. Había, además, un 24 por 100 de pequeños artesanos, entre los cuales, los pequeños maestros pasaban desapercibidos (Kennedy, 1982: 73 a 87 y apéndice F). De este modo, los jacobinos procedían de todos los estamentos de la burguesía y la pequeña burguesía, especialmente desde que a finales de 1791 los clubes ampliaran la entrada a los ciudadanos «pasivos»; y aunque la mayoría de los dirigentes eran burgueses acaudalados, la presión de sus galerías los situó de parte de la democracia.

Las unidades de la guardia nacional y los comités de sección de los gobiernos locales procedían de la pequeña burguesía. La gran mayoría de los activistas de las secciones parisienses (Soboul, 1964: 38 a 54) y de las secciones de Provenza (Vovelle, 1976) eran maestros artesanos, trabajadores cualificados y pequeños comerciantes, que producían y vendían en la vecindad. Sus dirigentes eran pequeños industriales, profesionales de bajo nivel y administradores (Andrews, 1985). Ellos movilizaron a la población local, cuyas fichas de arresto muestran que eran maestros de taller, artesanos, dependientes de comercio y pequeños comerciantes, gentes de ingresos modestos que mezclaban la propiedad y el trabajo. Los asalariados estaban poco representados, pues las sublevaciones tenían lugar entre el vecindario pequeño burgués, no en los suburbios industriales (Rudé, 1959). La ideología de esos grupos oponía la dureza de su trabajo y su tenaz independencia al parasitismo inútil de los ricos. Los militantes se llamaban a sí mismo *sans-culottes* —literalmente, sin calzones (ya que vestían pantalón)— para indicar el orgullo de pertenecer a la clase de los trabajadores productivos. Esta política y esta ideología de vecindario contaban también con las mujeres. No obstante, y pese a sus tremendas acciones en París y a la ferocidad de sus ataques contra la alta burguesía, estos *enragés* carecían de una organización nacional coherente. Eran «pueblo», pero no podían organizar la nación.

Los revolucionarios se encontraban divididos en instituciones de carácter dual. La elite ideológica, formada mayoritariamente por la alta burguesía, dominaba las infraestructuras discursivas de los clubes en el plano nacional, la Asamblea Nacional y la Convención. Pero compartía la administración y el ejército con un rey poco fiable. Para presionarle necesitaba de la violencia popular, pero ésta estaba en manos de las turbulentas instituciones pequeño burguesas —donde la secciones se vinculaban a una prensa virulenta—, de las poco discipli-

nadas unidades de la guardia nacional y de la muchedumbre. Las diferencias que separaban a estas dos bases organizadas del poder de clase podían subsanarse sólo si la izquierda jacobina, cuya organización nacional y parisiense defendía algunas de las aspiraciones de ambas, actuaba como puente entre ellas. Por consiguiente, desde finales de 1792 los éxitos jacobinos y su fracaso final fueron también los de la propia revolución.

La revolución se convierte en una lucha nacional

Pero ni siquiera en tales circunstancias fue «pura» la lucha de clases. Se alcanzó un compromiso satisfactorio respecto a la cuestión del sufragio; el conflicto disminuyó por la ausencia de una organización pequeño burguesa nacional, que permitió a la elite preservar la «libertad» de mercado; y, por otro lado, era imprescindible conservar la unidad frente a los contrarrevolucionarios. Además, una segunda fase de las relaciones de los poderes militar y geopolítico vino a intensificar y centralizar la clase y la nación.

Dentro de la elite ideológica, el poder pasó de los monárquicos constitucionalistas a los jacobinos a finales de 1791. Éstos respondieron a las rebeliones aristocráticas desplazando a la izquierda los lemas de «pueblo» y «nación». La nación era ahora una comunidad de ciudadanos libres e independientes, de la que la nobleza, el clero e incluso el rey deberían quedar excluidos. Se expropió a los exiliados, lo que contribuyó a convertir el conflicto en una cuestión nacional y geopolítica en los extremos de Francia, ya que la «nación» confiscó las haciendas francesas de los nobles alemanes. Los alsacianos *querían* ser franceses, pero el principio revolucionario de la ciudadanía voluntaria abolía la propiedad y los antiguos derechos establecidos por tratado. Los monarcas austriacos y prusianos llegaron a la conclusión poco prudente de que su causa era la de Luis, la de los *émigrés* y la de los nobles alemanes. El particularismo dinástico se enfrentaba a la nación universal.

El duque de Brunswick, dirigente de los *émigrés*, abandonó toda cautela. Su manifiesto llamaba a una rebelión total contra la revolución, amenazando con que no habría piedad para París si se atrevía a resistir. Tal actitud reforzó la unidad de los revolucionarios parisienses, anunció la muerte para el rey en caso de derrota del ejército exiliado y debilitó a los burgueses conservadores. Las organizaciones de

la pequeña burguesía se movilizaron para defender la nación. La guardia nacional y las secciones militantes de París tomaron las Tullerías el 10 de agosto de 1792. El rey fue apresado; Francia se declaró una república y se proclamó el sufragio universal para los hombres adultos. La comuna de pequeños burgueses se conservó junto a una convención dirigida por una elite ideológica que defendía la propiedad. Los brissotinos moderados querían ahora la guerra, convencidos de que reforzaría la unidad nacional bajo su liderazgo, desviaría la agitación popular hacia la amenaza extranjera y aumentaría el prestigio del ejército. Ellos y la corte querían la guerra para el otro.

El 20 de septiembre de 1792 la invasión del ejército formado por prusianos y *émigrés* (los austriacos se demoraron) alcanzó Valmy, un villorrio situado al norte del departamento del Marne. Allí encontraron ordenado para la batalla un multicolor ejército francés, representativo de la revolución. Una sección del antiguo ejército real aparecía casi intacta: la artillería mandada por oficiales burgueses, respaldada por batallones compuestos de restos de los antiguos regimientos de línea y unidades revolucionarias de voluntarios. Los oficiales de línea que permanecieron leales a la revolución eran en su mayoría burgueses, procedentes sobre todo de las ciudades y los estamentos profesionales. La desaparición de los privilegios nobiliarios despertaba en ellos expectativas de ascenso por el mérito y la experiencia de combate. Muchos acababan de acceder desde el estatus de suboficial; un hecho poco común antes de la revolución. Numerosos voluntarios eran dependientes de comercio, artesanos y profesionales liberales de París y otras ciudades. La «nación en armas» era burguesa, pequeño burguesa y estaba bastante alfabetizada (Scott, 1978).

Por fortuna para ella, se produjo una batalla artillera que favorecía a la fuerza francesa. Durante doce horas los cañones se bombardearon mutuamente alrededor de los molinos de viento de Valmy. Los franceses mantuvieron sus posiciones al grito de *Vive la Nation!*. Al acabar la jornada, los prusianos, que combatían de mala gana, abandonaron Francia en orden. La revolución y la nación estaban salvadas; el destino de Luis, sellado. Él y su familia fueron ejecutados en enero de 1793. No había punto de retorno para los regicidas. Independientemente de la dirección que tomaran los acontecimientos, el antiguo régimen había desaparecido. «Los cañonazos de Valmy», un enfrentamiento militar de orden menor, constituyeron una de las grandes coyunturas críticas de la historia moderna. Goethe fue testigo. Al final de la jornada se encontraba sentado alrededor del fuego

del campamento, entre los prusianos en retirada. Quiso animarlos diciendo: «Hoy, en este lugar, ha comenzado una nueva era para la historia del mundo, y vosotros podréis decir: yo estuve allí» (Bertaud, 1970; Best, 1982: 81).

La significación de Valmy sobrevivió a la revolución. Los triunfadores de la batalla eran una nación de ciudadanos, movilizada por su Estado. Un año después repitieron la victoria contra los austriacos, que fueron rechazados por la *levée en masse*, una movilización de 300.000 a 400.000 soldados, donde predominaban los artesanos y los campesinos mandados por oficiales burgueses. En 1799 la nación en armas rechazó a los invasores por tercera vez. Durante quince años, este ejército, formado sólo por franceses (además de las «legiones de patriotas» procedentes de «naciones hermanas»), constituyó el único ejército nacional de Europa. Incluso entre los momentos de crisis, cuando el ejército era más pequeño y profesional, penetraban en él las ideas comprometidas con la *grande nation*, que proclamaban clubes y panfletos. Volveré sobre ello en el capítulo 8.

La guerra y la *levée en masse* dirigió la ideología revolucionaria hacia principios trascendentes y coercitivos que tendían a cumplirse por su propia naturaleza. Los argumentos pragmáticos de Brissot no consiguieron convencer a las asambleas, los clubes, las secciones y la guardia nacional. Robespierre, oponiéndose a la guerra, demostró la debilidad de tales argumentos, el peligro de depender de los generales sospechosos y la amenaza que la derrota constituía para la revolución. En palabras que podían aplicarse universalmente, argumentaba:

> Está en la naturaleza de las cosas que la difusión de la razón proceda lentamente. Los gobiernos más perniciosos se apoyan ante todo en los prejuicios, las costumbres y la educación de sus pueblos ... La idea más insensata que puede concebir un político es que un pueblo puede inducir a otro a adoptar sus leyes y constituciones sólo por el sometimiento mediante una invasión armada. Nadie acepta de buen grado a los misioneros armados [Gauthier, 1988: 31].

Pero la asamblea escogió la guerra como principio de gran capacidad emotiva para unir a las separadas facciones del poder y proteger la propiedad. Según recogen las actas, la asamblea estalló cuando un diputado girondino declaró a gritos que la nación estaba dispuesta a morir por su constitución:

Todos los miembros de la Asamblea, impulsados por un mismo sentimiento, se pusieron en pie gritando: *Sí, lo juramos*. Esta oleada de entusiasmo se extendió entre los presentes, inflamando sus corazones. Los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores, los ujieres y los ciudadanos de ambos sexos allí presentes se unieron a los diputados, y puestos en pie, agitando sus sombreros y alargando los brazos hacia la mesa del presidente, repitieron a gritos el juramento: *Viviremos libres o moriremos. La Constitución o la muerte*, y la cámara estalló en un estruendoso aplauso [Emsley, 1988: 42; la cursiva aparece en el original].

En realidad, el entusiasmo unió los principios al cálculo interesado. Muchos moderados vieron en la guerra la posibilidad de activar un principio ilustrado. Como ha demostrado Pocock, (1975) el ideal clásico de república formada por ciudadanos-soldados-propietarios llevaba mucho tiempo circulando entre los intelectuales europeos. Una milicia de ciudadanos ricos podría defender el centro tanto de la monarquía como de la plebe. Pero las secciones de la pequeña burguesía y la guardia nacional también vieron en la movilización una forma de fortalecer su propio puesto en la revolución. El liderazgo ideológico jacobino, disimulado entre los estallidos de la burguesía y de la pequeña burguesía, ideó una nueva arma ofensiva muy poderosa: la nación en armas contra los antiguos regímenes de toda Europa. Este principio creativo superó a sus propios instigadores, como ya había ocurrido con la abolición de los privilegios feudales. Contra las expectativas de los brissotinos, la guerra desplazó el liderazgo hacia la izquierda y permitió el acceso de la guardia nacional pequeño burguesa y de los comités de sección al Estado. La «nación» había cambiado en cuanto a su composición de clase, porque ahora incluía a la plebe urbana (sólo los hombres). Un nuevo actor colectivo había surgido intersticialmente, tomando por sorpresa a la mayor parte de los actores de poder, que lo habían creado con sus actos.

La lucha se desarrollaba ahora entre izquierda y derecha, girondinos y montañeses, y entre las distintas facciones jacobinas. Hasta cierto punto fue un conflicto de clase, en este caso entrelazado con una cuestión política de gran calado en el periodo: la discusión sobre la naturaleza central o local-regional del Estado. La muchedumbre de París y las secciones resultaba vital para la concepción izquierdista de la revolución. De ahí que la derecha intentara luchar contra el poder de la plebe descentralizando el Estado. Exactamente lo contrario a la estrategia conservadora posterior a la revolución en los Estados Uni-

dos, donde la respuesta al gobierno de la plebe en los estados particulares había sido centralizar el poder político. Así se explica que el federalismo, conservador en ambos países, significara en un primer momento centralización en los Estados Unidos y descentralización en Francia. Los girondinos veían en el Estado federal y descentralizado el mejor medio para proteger la propiedad.

La creciente centralización de la política a partir de 1789 y el hecho de tener que luchar en París, el corazón de sus enemigos, supuso una desventaja para los girondinos. Sin embargo, antes de 1789, el Estado francés había sido dual, con una monarquía absoluta centralizada y la mayor parte de la administración y de los tribunales de justicia localizados en el plano local-regional. Aunque la asamblea se encargaba del grueso de la legislación, no pudo abolir el localismo de un plumazo. La lucha había quedado en tablas, pero la guerra inclinó la balanza favoreciendo la instituciones parisienses de los montañeses y la lógica de la causa centralista. Suiza y la federación de los Estados Unidos ofrecían un admirable ejemplo de libertades internas, afirmaban los redactores de panfletos, pero eran geopolíticamente débiles. Para resistir una invasión hacía falta una «nación indivisible» (Godechot, 1956, 1988: 17 y 18). Sus aliados brissotinos agravaron la apurada situación de los girondinos con sus vacilaciones respecto a la prosecución de la guerra; algunos negociaron con el enemigo. Las acusaciones de conspiración contribuyeron a implantar el Terror, dirigido contra los girondinos, la alta burguesía y la aristocracia. Los girondinos habían perdido.

Francia se centralizaba a medida que la guerra imponía la intervención económica del gobierno. Los ejércitos necesitaban provisiones, y también las ciudades, que eran sus principales bases de reclutamiento. Lo que quedaba de la elite ideológica aún deseaba proteger la propiedad y el mercado libre, pero tenía que distribuir pan para conjurar la cólera del pueblo. El Comité de Salvación Pública, dirigido por Robespierre, organizó la intervención económica y el Terror, mientras todavía lograba evitar las divisiones de clase. Robespierre declaró: «Debemos salvar el Estado a cualquier precio; nada es anticonstitucional, salvo aquello que contribuye a su ruina» (Boiloiseau, 1983: 9). La «República de la Virtud» alababa la «pureza» y purgaba la «corrupción», pero la política se basaba cada vez menos en los principios. Robespierre gobernaba entre la libre propiedad de la burguesía y el radicalismo de la pequeña burguesía. Los diputados jacobinos radicales y los destacamentos armados de *sans-culottes* reco-

rrían las provincias para asegurar el aprovisionamiento, organizar a los activistas y deshacerse de los oponentes. Obtuvieron bastante éxito, a fuerza de emplear tácticas distintas, ora el Terror, ora la conciliación, según las necesidades locales y sus propias predilecciones. El comité repartía golpes a diestro y siniestro contra todo lo que pareciera amenazarle, purgando una veces a los burgueses conciliadores, y otras a las secciones, los *enragés* y los terroristas; otras imponiendo cuotas sobre el trigo y precios máximos (contra los agricultores y los comerciantes); y otras aún estableciendo salarios máximos (con perjuicio para los trabajadores y los artesanos). En definitiva, logró aprovisionar los ejércitos a costa de un gran sufrimiento para las ciudades.

El apoyo activista carecía de rumbo fijo, y los *sans-culottes* hicieron poco por frenar el confuso golpe de Estado del mes de Termidor de 1794, que derrocó a Robespierre y debilitó fatalmente a la elite ideológica. El resultado fue la implantación de un régimen burgués que acabó con la revolución. Las ambigüedades de clase se acabaron igualmente ante el empuje de una burguesía consciente de sus intereses, libre de conexiones con los privilegios, que empuñó los poderes del Estado-nación centralizado como antes habían hecho sus enemigos.

La guerra continuó. Según Furet: «Es la guerra lo que sobrevive al Terror y constituye el último refugio de la legitimidad revolucionaria» (1978: 128). Pero la guerra también cambió esa legitimidad, asignada ahora a un Estado-nación más fuerte y más centralizado. Con la disciplina militar de Bonaparte adquirió un tinte autoritario. Después de Termidor, su administración centralizada favorecía el liberalismo burgués más directamente que en Gran Bretaña. A partir de 1815 sólo presentaba una diferencia de grado, pero constituía la fuente de una división duradera entre los Estados capitalistas: por un lado, el modelo anglosajón de Estado como centro y localización territorial de una nación y una sociedad civil capitalista; por otro, el modelo continental, con un Estado organizado más centralmente, explícitamente nacionalista y algo más despótico, que establecía e impulsaba desde el centralismo más normas capitalistas (Birnbaum, 1982). Con todo, la monarquía restaurada y la Iglesia revitalizada librarían aún muchas batallas contra este Estado-nación, centralizado y republicano, antes de que triunfara definitivamente.

Conclusiones francesas

La Revolución Francesa no fue en origen ni burguesa ni nacional, ni estuvo tampoco dominada por las clases. Comenzó a presentar tales características cuando el Estado militarista produjo una crisis fiscal que lo incapacitó para institucionalizar el acostumbrado faccionalismo de la elite estatal y los partidos privilegiados, paralizando con ello el antiguo régimen. Esta situación se vio reforzada por la imposibilidad de resolver la lucha entre las distintas facciones del ejército y la Iglesia. En 1789 las acostumbradas defensas segmentales contra la oposición política, las rebeliones urbanas y las *jacqueries* de campesinos disminuyeron. Entonces comenzó a aparecer intersticialmente el conflicto entre las clases. El campesinado hizo su revolución de clase pronto y defendió bien lo que habían ganado. En las ciudades, el poder estaba en manos de una elite ideológica, formada por burgueses y modernizadores del antiguo régimen, aunque no por la corriente principal de esas clases, y procupada por los principios morales característicos de la Ilustración.

Durante los cinco años siguientes, esta elite ideológica estatal recibió golpes por la derecha, a causa de la ineficaz intransigencia del rey y de la corte, ambos apoyados en unos ejércitos extranjeros poco convencidos, y por la izquierda, desde una pequeña burguesía cada vez más consciente de su identidad y de su carácter de oposición, aunque todavía débil en alternativas y soluciones políticas globales. Sometida a esta presión, la elite ideológica hizo grandes descubrimientos para conservar el poder: desarrolló una ideología trascendente basada en los principios y unas técnicas de poder capaces de consolidarlos (examinaré este punto en el capítulo 7). La interacción de la elite con las clases aumentó la realidad de un segundo actor intersticial de poder: la nación burguesa y pequeño burguesa. Así se derrocó a la monarquía y se forzó a la Iglesia a volver a sus organizaciones segmentales de carácter local y regional. No obstante, la propia unidad de la elite ideológica se desintegró durante el proceso. Su liderazgo se vio finalmente forzado a adoptar una identidad de clase más burguesa.

En ese momento, el conflicto *comenzó a definirse* por la clase y la nación que aparecían intersticialmente, entrelazadas con las relaciones de los poderes ideológico, militar y político. La lucha final entre las fracciones de clase de la alta y la pequeña burguesía desplazó a la elite ideológica, permitió la victoria de una burguesía nacional y puso

fin a la revolución. Francia fue, y sigue siendo, al fin y al cabo una nación burguesa —cuyo Estado se configuró como capitalista y nacional—, aunque su constitución fuera más tarde republicana, imperial o monárquica.

Como parte del mismo proceso, tanto el Estado francés como la propia identidad francesa experimentaron un cambio. La elite ideológica estableció los vínculos entre el antiguo régimen y la burguesía posrevolucionaria; ella misma se consolidó y se hizo burguesa bajo la presión geopolítica de los antiguos regímenes. Estas mediaciones produjeron una transmutación de los elementos absolutistas en el Estado-nación fuerte y despótico de la era burguesa. Cuando la guerra derrotó la alternativa federal girondina, la ciudadanía política se concibió sólo como un hecho centralizado, al contrario de la solución americana. Fue así como el Estado francés movilizó el sentimiento de la nación en un grado desconocido hasta entonces en el mundo (como veremos en el capítulo 7). Francia dejó de ser un agregado de corporaciones particularistas y autoritarias, unificadas por la monarquía y la Iglesia. Era ya una sociedad civil capitalista como Gran Bretaña, pero dependía más de un Estado-nación. Europa contaba ahora con más de un modelo de modernización.

Bibliografía

Agulhon, M. 1981: *Marianne in Combat: Imagery and Republican Symbols from 1789 to 1880.* Cambridge: Cambridge University Press.

Andrews, R. M. 1985: «Social structures, political elites and ideology in revolutionary Paris, 1792-94». *Journal of Social History,* 19.

Baker, K. M. 1987: «Politics and public opinion under the old regime: some reflections». En *Press and Politics in Pre-Revolutionary France,* ed. J. R. Censer y J. D. Popkin. Berkeley: University of California Press.

Barber, E. G. 1955: *The Bourgeoisie in Eighteenth-Century France.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Becker, C. L. 1932: *The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers.* New Haven, Conn.: Yale University Press.

Behrens, C. B. A. 1967: *The Ancien Regime.* Londres: Thames & Hudson.

— 1985: *Society, Government and the Enlightenment: The Experiences of Eighteenth-Century France and Prussia.* Londres: Thames & Hudson.

Beik, W. 1985: *Absolutism and Society in Seventeenth-Century France.* Cambridge: Cambridge University Press.

Bernlanstein, L. 1976: *The Barristers of Toulouse, 1740-1783.* Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Bertaud, J. P. 1970: *Valmy.* París: Julliard.
— 1979: *La Révolution Armée.* París: Laffont.
Best, G. 1982: *War and Society in Revolutionary Europe: 1770-1870.* Leicester: Leicester University Press. [Ed. cast.: *Guerra y sociedad en la Europa revolucionaria (1770-1870).* Madrid, Min. Defensa, 1990.]
Bien, D. D. 1974: «La réaction aristocratique avant 1789: l'exemple de l'armée». *Annales E.S.C.* 29.
— 1979: «The army in the French Enlightenment: reform, reaction and revolution». *Past and Present,* núm. 88.
— 1987: «Offices, corps and a system of state credit: the uses of privilege under the *Ancien Régime*». En *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture.* Vol. I: *The Political Culture of the Old Regime,* ed. K. M. Baker. Oxford: Pergamon Press.
Birnbaum, P. 1982: *La Logique de l'État.* París: Fayard.
Boiloiseau, M. 1983: *The Jacobin Republic, 1792-94.* Cambridge: Cambridge University Press.
Bois, P. 1960: *Paysans de L'ouest. Des structures economiques et sociales aux options politiques depuis l'époque révolutionnaire dans la Sarthe.* París: Vilaire.
Bonnin, B. 1987: «Un bourgeois en quête de titres et de domaines seigneuriaux: Claude Perier dans les dernières années de l'Ancien Règime». En *Bourgeoisies de Province et Révolution,* ed. M. Vovelle. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
Bosher, J. F. 1970: *French Finances, 1770-1795.* Cambridge: Cambridge University Press.
Bossenga, G. 1986: «From corps to citizenship: the Bureaux des Finances before the French Revolution». *Journal of Modern History,* 58.
Botein, S. *et al.* 1981: «The periodical press in eighteenth-century English and French society: a cross-cultural approach». *Comparative Studies in Society and History,* 23.
Brinton, C. 1930: *The Jacobins: An Essay in the New History.* Nueva York: Russell & Russell.
Cassirer, E. 1951: *The Philosophy of the Enlightenment.* Princeton, N. J.: Princeton University Press. [Ed. cast.: *La filosofía de la Ilustración.* Madrid, F.C.E., 1993.]
Censer, J. R., y J. D. Popkin, 1987: «Historians and the press». En *Press and Politics in Pre-Revolutionary France,* ed. J. R. Censer y J. D. Popkin. Berkeley: University of California Press.
Chartier, R. 1981: «Cultures, lumières, doléances: les cahiers de 1789». *Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine,* 24.
Chaussinand-Nogaret, G. 1970: «Capital et structure sociale sous l'ancien régime». *Annales E.S.C.* 25.

— 1985: *The French Nobility in the Eighteenth Century.* Cambridge: Cambridge University Press.
Cobban, A. 1964: *The Social Interpretation of the French Revolution.* Cambridge: Cambridge University Press.
Cominel, G. 1987: *Rethinking the French Revolution: Marxism and the Revisionist Challenge.* Londres: Verso.
Corvisier, A. 1964: *L'Armée française de la fin du XVIIe siècle au ministère de Choiseul: Le Soldat,* 2 vols. París: Presses Universitaires de France.
Crouzet, F. 1966: «Angleterre et France en XVIIIe siĕcle: essai d'analyse comparĕe de deux croissances économiques. *Annales E.S.C.,* 21.
— 1970: «An annual index of French industrial production in the 19th century». En *Essays in French Economic History,* ed. R. Cameron. Homewood, Ill.: Irwin.
Curtis, E. N. 1973: *Saint-Just, Colleague of Robespierre.* Nueva York: Octagon Books.
Dann, O. 1988: «Introduction». En *Nationalism in the Age of the French Revolution,* ed. O. Dann y J. Dinwiddy. Londres: Hambledon Press.
Darnton, R. 1979: *The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie, 1775-1800.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
— 1984: «A bourgeois puts his world in order: the city as a text». En *The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History.* Nueva York: Basic Books.
— 1987: «The facts of literary life in eighteenth-century France». En *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture.* Vol. I: *The Political Culture of the Old Regime,* K. M. Baker, ed. Oxford: Pergamon Press.
Dawson, P. 1972: *Provincial Magistrates and Revolutionary Politics in France, 1789-1795.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Dewald, J. 1987: *Pont-St.-Pierre, 1398-1789.* Berkeley y Los Ángeles: University of Califonia Press.
Dickson, P. G. M. 1987: *Finance and Government Under Maria Theresa, 1740-1780,* 2 vols. Oxford: Clarendon Press.
Doyle, W. 1980: *The Origins of the French Revolution.* Oxford: Clarendon Press.
Durand, Y. 1971: *Les fermiers-généraux au XVIIIème siècle.* París: Presses Universitaires de France.
Eisenstein, E. 1986: «On revolution and the printed word». En *Revolution in History,* ed. R. Porter y M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press.
Emsley, C. 1988: «Nationalist rhetoric and nationalist sentiment in revolutionary France». En *Nationalism in the Age of the French Revolution,* ed. O. Dann y J. Dinwiddy. Londres: Hambledon Press.
Favier, R. 1987: «Un grand bourgeois à Gap à la fin de l'Ancien Régime: Pie-

rre-Daniel Pinet». En *Bourgeoisies de Province et Révolution,* ed. M. Vovelle. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
Ferrières, Marquis de, 1822: *Mémoires,* 2.ª ed. París: Baudouin Frères.
Fitzsimmons, M. P. 1987: *The Parisian Order of Barristers and the French Revolution.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Furet, F. 1978: *Penser la Révolution Française.* París: Gallimard. Traducido como:
— 1981: *Interpreting the French Revolution.* Cambridge: Cambridge University Press.
Furet, F., y J. Ozouf, 1982: *Reading and Writing: Literacy in France from Calvin to Jules Ferry.* Cambridge: Cambridge University Press.
Furet, F., y D. Richet, 1970: *Frech Revolution.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Gauthier, F. 1977: *La voie paysanne dans la révolution française: l'exemple picard.* París: Maspero.
— 1988: «Universal rights and the national interest in the French Revolution». En *Nationalism in the Age of the French Revolution,* ed. O. Dann y J. Dinwiddy. Londres: Hanbledon Press.
Gay, P. 1967: *The Enlightenment: an Interpretation,* 2 vols. Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Gershoy, L. 1962: *Bertrand Barère: Reluctant Terrorist.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Godechot, J. 1956: *La grande nation.* París: Aubier.
— 1973:«Nation, patrie, nationalisme et patriotisme en France au XVIIIe siècle». *Actes du colloque Patriotisme et nationalisme en Europe a l'époque de la Révolution française et de Napoléon.*
— 1988: «The new concept of the Nation and its diffusion in Europe». En *Nationalism in the Age of the French Revolution,* ed. O. Dann y J. Dinwiddy. Londres: Hambledon Press.
Goldstone, J. 1991: *Revolution and Rebellion in the Early Modern World.* Berkeley: University of California Press.
Homan, G. 1971: *Jean-François Reubell.* La Haya: Nijhoff.
Hunt, L. 1984: *Politics, Culture and Class in the French Revolution.* Berkeley: University of California Press.
Julia, D. 1987: «The two powers: chronicle of a disestablishment». En *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture.* Vol. I: *The Political Culture of the Old Regime,* ed. K. M. Baker. Oxford: Pergamon Press.
Kagan, R. L. 1975: «Law students and legal careers in eighteenth-century France». *Past and Present,* núm. 68.
Kates, G. 1985: *The Cercle Social, the Girondins and the French Revolution.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Kennedy, M. L. 1982: *The Jacobin Clubs in the French Revolution: The First Years.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Kindleberger, C. 1984: «Financial institutions and economic development: a comparison of Great Britain and France in the eighteenth and nineteenth centuries». *Explorations in Economic History*, 21.
Kuscinski, A. 1916: *Dictionnaire des conventionnels.* París: Société de l'histoire de la Révolution francaise.
Lamarque, P. 1981: *Les francs-maçons aux états-généraux de 1789 et à l'assemblée nationale.* París: EDIMAF.
La Tour du Pin, Madame de, 1985: *Memoirs.* Londres: Century.
Le Bihan, A. 1973: *Francs-maçons et ateliers parisiens de la Grande Loge de France au XVIIIe siècle.* París: Bibliothèque Nationale.
Lefebvre, G. 1924: *Les Paysans du Nord pendant la Révolution Française.* Lille: Librairie Papeterie.
— 1954: *Questions Agraires au Temps de la Terreur.* La Roche-sur-Yon: Henri Potier.
— 1963: *Études sur la Révolution Francaise.* París: Presses Universitaires de France.
— 1973: *The Great Fear of 1789: Rural Panic in Revolutionary Francy.* Nueva York: Pantheon. [Ed. cast.: *El gran pánico de 1789.* Barcelona, Paidós, 1986.]
Lemay, E. 1977: «La composition de l'Assemblé Nationale Constituante: les hommes de la continuité?» *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 24.
Léon, P. 1970: «L'élan industrial et commercial». En *Histoire économique et sociale de la France*, ed. F. Brandel y E. Labrousse. París: Presses Universitaires de France.
Lough, J. 1960: *An Introduction to Eighteenth-Century France.* Londres: Longman Group.
Lucas, C. 1973: «Nobles, bourgeois and the origins of the French Revolution». *Past and Present*, núm. 60.
Lyons, M. 1977: «M.-G.-A. Vadier (1736-1828): the formation of the Jacobin mentality». *French Historical Studies*, 10.
McManners, J. 1969: *The French Revolution and the Church.* Londres: SPCK.
Malouet, P. V. 1874: *Mémoires.* París: Plon.
Mathias, P., y P. O'Brien, 1976: «Taxation in England and France, 1715-1810». *Journal of European Economic History*, 5.
Matrat, J. 1971: *Robespierre, or the Tyranny of the Majority.* París: Hachette.
Matthews, G. 1958: *The Royal General Farms in Eighteenth-Century France.* Nueva York: Columbia University Press.
Moore, B., Jr. 1973: *Social Origins of Dictatorship and Democracy.* Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books. [Ed. cast.: *Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia.* Barcelona, Ed. 62. 1991.]
Morineau, M. 1980: «Budgets de l'état et gestation des finances royales en France au dix-huitième siècle». *Revue historique*, 264.

O'Brien, P., y C. Keyder, 1978: *Economic Growth in Britain and France, 1780-1914.* Londres: Allen & Unwin.
Ozouf, M. 1976: *La Fête révolutionnaire, 1789-1799.* París: Gallimard.
— 1987: «Public opinion». En *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture.* Vol. I: *The Political Culture of the Old Regime,* ed. K. M. Baker. Oxford: Pergamon Press.
Palmer, R. R. 1941: *Twelve Who Ruled: The Committée of Public Safety During the Terror.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
— 1959: *The Age of the Democratic Revolutions.* Vol. I. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
— 1985: *The Improvement of Humanity: Education and the French Revolution.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Patrick, A. 1972: *The Men of the First French Revolution: Political Alignments in the National Convention of 1792.* Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Pocock, J. G. A. 1975: *The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republic Tradition.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Riley, J. C. 1986: *The Seven Years War and the Old Regime in France.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Roche, D. 1978: *La Siècle des lumières en province: Académies et académiciens provinciaux, 1680-1789,* 2 vols. París: Mouton.
Rudé, G. 1959: *The Crowd in the French Revolution.* Oxford: Clarendon Press.
Scott, S. F. 1978: *The Response of the Royal Army to the French Revolution.* Oxford: Clarendon Press.
Seligman, E. 1913: *La justice en France pendant la Révolution,* 2 vols. París: Plon.
Sewell, W. H. Jr. 1985: «Ideologies and social revolutions: reflections on the French Revolution». *Journal of Modern History,* 57.
Skocpol, T. 1979: *States and Social Revolutions.* Cambridge: Cambridge University Press.
Soboul, A. 1964: *The Parisian Sans-Culottes and the French Revolution, 1793-4.* Oxford: Clarendon Press. [Ed. cast.: *Los sans-culottes.* Madrid, Alianza Editorial, 1987.]
Starobinsky, J. 1987: «Eloquence ancient and modern: aspects of an Old Regime commonplace». En *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture.* Vol. I: *The Political Culture of the Old Regime,* ed. K. M. Baker. Oxford: Pergamon Press.
Taylor, G. V. 1967: «Non-capitalist wealth and the origins of the French Revolution». *American Historical Review,* 72.
— 1972: «Revolutionary and nonrevolutionary content in the *cahiers* of 1789: an interim report». *French Historical Studies,* 7.
Thompson, J. M. 1936: *Robespierre,* 2 vols. Nueva York: Appleton-Century.

Tocqueville, A. de, 1955: *The Old Regime and the French Revolution.* Nueva York: Doubleday. [Ed. cast.: *El Antiguo Régimen y la revolución.* Madrid, Alianza Editorial, 1982.]

Tournier, A. n.d.: *Vadier Sous le Terreur.* París: Flammarion.

Vovelle, M. 1976: *Les Métamorphoses de la fête en Provence, 1750-1830.* París: Flammarion.

— 1984: *The Fall of the French Monarchy, 1787-1792.* Cambridge: Cambridge University Press. [Ed. cast.: *La caída de la monarquía.* Barcelona, Ariel, 1980.]

Vovelle, M., y D. Roche, 1965: «Bourgeoisie, rentiers and property owners: elements for defining social categories at the end of the eighteenth century». En *New Perspectives on the French Revolution: Readings in Historical Sociology,* ed. J. Kaplow. Nueva York: Wiley.

Capítulo 7
CONCLUSIÓN A LOS CAPÍTULOS 4 A 6: LA APARICIÓN DE LAS CLASES Y LAS NACIONES

Son muchos los que han saludado el medio siglo que comenzó en la década de 1770 como una época revolucionaria, tanto en Europa como en las dos Américas. Algunos la han identificado con la clase y la democracia —la «era de las revoluciones democráticas», en palabras de Palmer (1959)—; otros, con la revolucionaria aparición de las naciones en los dos continentes (Anderson, 1983). Es cierto que varios países evolucionaron hacia el nacionalismo y la democracia, pero no lo es menos que la mayoría de las revoluciones fracasaron: la francesa quedó incompleta y la americana fue ambigua. Por otra parte, gracias a estos acontecimientos otros regímenes aprendieron a impedir las revoluciones mediante el compromiso con las clases y las naciones ascendentes. Tales compromisos tuvieron una enorme importancia para la historia mundial, porque adoptaron formas de institucionalización permanentes. El presente capítulo resume lo que ha demostrado ser la fase más creativa de la historia moderna de Occidente. Las cuatro grandes cristalizaciones del Estado moderno —capitalismo, militarismo, representación y cuestión nacional— se institucionalizaron al mismo tiempo. Lejos de oponerse entre sí, las clases y las naciones nacieron juntas, estructuradas por las cuatro fuentes de poder social, y si bien sus rivales, las organizaciones de ca-

rácter segmental, local y regional, sufrieron un retroceso, sobrevivieron transformadas.

Para explicar todo lo anterior, comenzaré por las tres revoluciones que experimentó el poder durante el periodo. En primer lugar, la revolución económica generó más capitalismo que industrialismo. Sólo en Gran Bretaña (y en regiones menores de Europa) se desarrolló en ese momento el fenómeno industrial; sin embargo, el poder distributivo no cambió allí más que en cualquier otro lugar. En el capítulo 4 hemos visto que el industrialismo británico se configuró a partir de un capitalismo comercial previamente institucionalizado. Durante todo el periodo la industrialización sólo afectó intensamente a los poderes colectivo y geopolítico en el caso británico. Su impacto sobre el poder distributivo resultó menor en los restantes países, lo que explica que los capitalistas industriales y los trabajadores apenas figuren en esta narración. Por el contrario, fue un capitalismo agrario, comercial y protoindustrial, mucho más difundido, lo que generó unas densas redes de organización, así como nuevas clases burguesas y pequeño burguesas, cuya confrontación con el antiguo régimen representaría la lucha más dura por el poder dentro de cada país a lo largo del periodo.

En segundo lugar, la intensificación del militarismo geopolítico espoleó el crecimiento masivo del Estado y la modernización. Durante los siglos anteriores, los gastos estatales habían supuesto menos del 3 por 100 del producto nacional bruto en épocas de paz, y quizás el 5 por 100 durante los periodos bélicos. Pero en la década de 1760 alcanzaban ya el 10 por 100 en épocas de paz y el 20 por 100 en tiempos de guerra (el 30 por 100 en Prusia), y durante las guerras napoleónicas ascendieron hasta el 30 y el 40 por 100 (véase cuadro 11.3). El aumento mayor correspondió a las fuerzas armadas, tanto en la paz como en la guerra. Los recursos humanos del ejército se duplicaron a mediados de siglo, y volvieron a hacerlo durante las guerras napoleónicas, afectando al 5 por 100 del total de las poblaciones (véase cuadro 11.6). Estas exacciones, muy superiores a las de cualquier Estado occidental de nuestros días, son idénticas a las de las sociedades más militarizadas de 1990; igualan, por ejemplo, a las de Irak en los gastos, y a las de Israel en los recursos humanos. Basta considerar las transformaciones que tales compromisos militares han producido en Irak [1] e Israel, para

[1] Este capítulo fue redactado antes de que tuviera lugar la Guerra del Golfo de 1990-1991. Después de este episodio, Irak sufrió transformaciones militares de otra índole.

apreciar su impacto sobre la Europa del siglo XVIII: los Estados adquirieron un mayor peso para sus súbditos; los regímenes llevaron a cabo un intento desesperado de economización y modernización; y la protesta política adquirió visos de una lucha de clases política e intensiva, que desplazó a la organización segmental, y de una lucha nacional, que desplazó a la organización local y regional. La cuestión nacional y la cuestión representativa se convirtieron en los principales asuntos pendientes de Occidente como producto del aumento del militarismo estatal.

En tercer lugar, el crecimiento del capitalismo, asociado al de los Estados, avivó el fuego de una revolución del poder ideológico, que ya habían prendido las iglesias. Sus demandas se expandieron transformando las redes de alfabetización discursiva —o capacidad para leer y escribir textos que no sean meras fórmulas—, que desarrollaron sus propios poderes autónomos. Al acabar la fase protagonizada por las iglesias, la alfabetización discursiva evolucionó en dos direcciones. La primera, predominante en Gran Bretaña y las colonias americanas, recibió el impulso del capitalismo comercial; la segunda, predominante en Austria y Prusia, respondió en mayor medida al crecimiento de las administraciones militares y estatales. En Francia se produjo una mezcla de ambas. Estas vías capitalista y estatal a la alfabetización discursiva constituyeron las condiciones previas del desarrollo de la clase y la nación como comunidades extensivas.

En cuanto a los fenómenos de clase y nación, me encuentro más cerca del «modernismo» que del «perennialismo» o «primordialismo» (para estas distinciones en la literatura sobre el nacionalismo, véase Smith 1971, 1979: 1 a 14). Una nación es una comunidad extensiva e interclasista que afirma la singularidad de su identidad étnica y de su historia y reclama un Estado propio. Las naciones tienden a concebirse a sí mismas como entidades poseedoras de virtudes específicas y características, que, en muchos casos, manifiestan mediante un conflicto persistente y agresivo con otras, a las que consideran «inferiores». Pero, como han destacado numerosos autores (por ejemplo, Kohn, 1944; Anderson, 1983; Gellner, 1983; Hroch, 1985; Chatterjee, 1986; Hobsbawm, 1990), agresivas o no, las naciones no aparecieron en Europa y América hasta el siglo XVIII, y mucho más tarde en otros lugares. Antes, las clases dominantes, y sólo muy raramente las subordinadas, se organizaron política y extensivamente. Puesto que la cultura de la clase dominante vivió mucho tiempo aislada de la cultura de las masas campesinas, fueron escasísimas las uni-

dades políticas que se definieron como una cultura compartida, que es el caso de las naciones (véanse Vol. I de esta obra: 740-745 ed. cast.; y también Gellner, 1983, capítulo 1; Hall, 1985; Crone, 1989, capítulo 5). Por debajo de esa clase dominante y extensiva se exparcían las redes particularistas segmentales, sostenidas no por las clases, sino por la localidad y la región.

Pero estas generalizaciones requieren alguna precisión. Como vimos en el Volumen I, la lucha de clases se produjo también en sociedades poco comunes, como la Grecia clásica o la Roma republicana; sin embargo, en otros casos sólo aparece cuando se encuentra fuertemente estructurada por comunidades religiosas. Como apunta Smith, «la conciencia étnica», el sentido de compartir una identidad y una historia comunes (por lo general de carácter mítico) no faltó en épocas anteriores, especialmente si tenemos en cuenta la presencia de una lengua, una religión o una unidad política comunes. Es entonces (como en Inglaterra, donde se dieron las tres) cuando puede aparecer un sentimiento difuso de «nacionalidad». Pero se trata sólo de una de las distintas identidades «especializadas», diluida en la identidad local, regional, corporativa o de clase.

Antes de la Revolución Francesa, el término «nación» aludía, por lo general, a un grupo de parentesco que compartía un entramado de relaciones basadas en la sangre. El término «nación política» que encontramos en Gran Bretaña durante el siglo XVIII, se refiere sólo a los individuos con derecho al voto y acceso a los cargos oficiales (a través de las relaciones de parentesco y de la propiedad). La nación era un fenómeno prácticamente «lateral» (por emplear el término de Smith), limitada a las clases dominantes. Smith detecta también la presencia de lo que llama comunidades étnicas «verticales» (esto es, interclasistas) en las sociedades agrarias, y apunta así una teoría de tipo «perennialista» (al igual que Armstrong, 1982). Por lo general, me he opuesto a este perennialismo en el Volumen 1, e incluso el propio Smith está de acuerdo en que «el nacionalismo, como ideología y como movimiento, es un fenómeno enteramente moderno» (1986: 18, 76 a 79).

Con todo, concedo una posibilidad histórica «premoderna» a la nación, pues he identificado dos estadios «protonacionales» de su desarrollo que se encontraban en marcha antes de que comenzara el periodo que nos ocupa. Los denomino estadio religioso y estadio comercial-estatista. Sostengo, pues, que durante el «largo siglo XIX» tales protonaciones se transformaron en naciones propiamente dichas a

través de dos nuevas fases: la militarista y la capitalista-industrial. En este capítulo analizaré a fondo la fase militarista, dividiéndola a su vez en dos subfases: una anterior a 1792 y otra posterior a esa fecha. La cuarta, la capitalista-industrial, quedará para futuros capítulos; en el capítulo 20, ofreceré un resumen histórico.

Durante la primera fase, la religiosa, que comenzó en el siglo XVI, el protestantismo y la contrarreforma católica crearon dos formas potenciales de protonación. En primer lugar, las redes de alfabetización discursiva de las iglesias cristianas se extendieron lateralmente al ámbito de las grandes lenguas vernáculas y (con mayor variabilidad) a los individuos de la clase media. Mientras que Chaucer y sus contemporáneos escribieron en tres idiomas (inglés, francés anglo-normando y latín), Shakespeare lo hizo sólo en inglés, lengua que se encontraba completamente fijada en su forma escrita a finales del siglo XVII. En muchos países, la lengua vernácula escrita del régimen y de la Iglesia se extendió paulatinamente a partir de su zona de origen, a expensas de otras lenguas y dialectos, por tratarse de la lengua de Dios. Las lenguas provinciales y fronterizas, tales como el galés o el provenzal, quedaron relegadas a las clases bajas y la periferia. Allí donde el idioma vernáculo triunfante llegó a abarcar prácticamente todo el territorio del Estado, aumentó entre los súbditos letrados la sensación de compartir una comunidad. En segundo lugar, donde las diferentes iglesias organizaron distintos estados o regiones, sus conflictos manifestaron una fuerza protonacional mayor, como ocurrió durante las guerras de religión. No obstante, ambas tendencias «naturalizadoras» varían mucho de una zona a otra, ya que hubo iglesias (la católica al completo) esencialmente transnacionales, y las fronteras estatales, lingüísticas y eclesiásticas coincidieron sólo en contadas ocasiones.

Si juzgamos teleológicamente, desde el presente hacia el pasado, la historia de Occidente, esta fase religiosa de construcción nacional se traduce en un predominio generalizado del poder ideológico en el mundo. Sin embargo, en sí misma produjo sólo protonaciones muy rudimentarias. Incluso en Inglaterra, donde Estado, lengua e Iglesia coincidieron probablemente como en ningún otro lugar, la conciencia de lo «inglés» durante el siglo XVII y principios del XVIII era un hecho limitado por la clase e infundido por el protestantismo y sus sectas. El Estado aún no tenía para el conjunto de la vida social la importancia suficiente para imprimir o consolidar esa identidad protonacional. Con todo, la mayor herencia de esta fase consiste quizás en

la movilización de lo que he llamado aquí «poder intensivo». Las iglesias llevaban mucho tiempo bien implantadas en los ritos que marcaban los ciclos vitales de la familia y los ciclos estacionales de la comunidad, especialmente en los pueblos pequeños, pero al extender la alfabetización vincularon la esfera moral e íntima de la vida social con otras prácticas más amplias y seculares. Analizaré la gran significación de esta movilización, puesto que aquella unidad «familiar» ampliada habría de transformarse más tarde en una nación.

En la segunda fase, la comercial-estatista, que comenzó hacia 1700, el moderado sentimiento de comunidad se secularizó a medida que el capitalismo comercial y la modernización militar de los Estados —con el predominio de uno u otra, según los países— asumían la expansión de la alfabetización. Contratos, archivos gubernamentales, manuales de empleo de las armas, discusiones de negocios en los cafés, academias de funcionarios notables, etc.; todas estas instituciones secularizaron y extendieron a estratos más bajos la cultura literaria de las clase dominantes (como he analizado en detalle en capítulos anteriores). Puesto que para entonces todos los Estados se regían por la ley, existía en todo el territorio una elemental «ciudadanía civil», al tiempo que las religiones compartidas difundían una solidaridad mucho más universal. Con todo, el hecho de que, aún bajo el predominio del capitalismo, la alfabetización discursiva de las clases dominantes y de las iglesias conservara parte de su espíritu transnacional limitó este fenómeno de «naturalización». El «capitalismo de imprenta» —término acuñado por Anderson— generó con cierta facilidad una idea transnacional de Occidente como comunidad de naciones. El concepto de nación aún no era capaz de movilizar a la sociedad.

La transformación de las protonaciones en comunidades interclasistas vinculadas por el Estado y, finalmente, agresivas, comenzó durante la tercera fase que estudiaremos en este capítulo. Cabe afirmar que en 1840 todas las grandes potencias contenían lo que podríamos denominar casi naciones, pero éstas respondían a tres tipos distintos. Las naciones francesa y británica continental consolidaron los Estados ya existentes; son ejemplos de nación construida mediante el reforzamiento del Estado. En Prusia-Alemania, la nación, mayor que cualquiera de los estados ya existentes, pasó de desempeñar un papel apolítico a ser creadora del Estado (o del Panestado). En los territorios austriacos, las naciones eran menores que las fronteras estatales, por eso resultaron subversivas para el Estado. ¿Por qué se desarrolla-

ron en formas tan variadas? Para responder, me centraré en la inserción del militarismo expansivo de esta tercera fase en las diferentes relaciones económicas, ideológicas y políticas de poder.

El gran drama de las clases se representó durante la Revolución Francesa. En el capítulo 6 hemos visto que ésta no fue inicialmente una lucha de clases, lo que no le impidió convertirse en el principal ejemplo en el sentido marxista: extensivo, simétrico y político. Sin embargo, fue el único acontecimiento de tales características en su época, imitado principalmente por la rebelión de los esclavos en Haití. En América se sublevó el capitalismo liberal, pero su revolución se basó mucho menos en la clase y produjo efectos sociales menos revolucionarios. Sólo en Francia triunfó la revolución burguesa por sus propios méritos. Otras recibieron la ayuda del ejército francés y fracasaron cuando éste faltó (de 1945 a 1989 hemos asistido a un resultado semejante en la Europa del Este). Una vez analizadas las consecuencias de las reformas mucho más moderadas en América y Gran Bretaña, y tras anticipar mi posterior examen de la situación más conservadora de Alemania y Austria, realizaré ahora un análisis comparativo desde la perspectiva del concepto marxista de lucha de clases entre el feudalismo y el capitalismo y entre el antiguo régimen y la burguesía emergente. ¿Por qué la revolución burguesa fue posible en Francia y no ocurrió en ningún otro lugar? En mi opinión, todos estos resultados de clase y nación, si bien presentan una gran variedad, se encuentran estrechamente vinculados. Explicaré, pues, su aparición simultánea en cuatro estadios, comenzando por las clases, para abordar después las naciones.

1. *Del feudalismo al capitalismo*

Como ya apreció Marx, el capitalismo constituyó un hecho revolucionario que aceleró las fuerzas productivas, primero en la agricultura y el comercio, más tarde en la industria, y difundió sus relaciones de mercado libre y de producción, basadas en la propiedad privada absoluta, de forma universal a lo largo y ancho de la sociedad civil. Pero también contribuyó a extender la alfabetización discursiva (capitalismo de imprenta) y sus mensajes ideológicos comunes. Los poderes colectivos se revolucionaron con un alto grado de uniformidad. Ningún régimen habría podido sobrevivir sin adaptarse a los poderes distributivos del capitalismo, compartidos por sus clases emer-

gentes, cuyas luchas, entre las que se incluía la reivindicación de la representación política, constituyeron el gran drama del periodo. Pero tales argumentaciones resultan ya tan familiares que no merece la pena demorarse en ellas.

No obstante, Marx erró al sostener que la transición del feudalismo al capitalismo había revolucionado el poder distributivo en el sentido de producir un conflicto de clase extensivo y político entre los «señores feudales» y la «burguesía capitalista». En Alemania (como, más tarde, en Japón) y hasta cierto punto en Gran Bretaña, los propios señores se *transformaron* en capitalistas que operaban en el comercio y la agricultura y luego en la industria, y cambiaron la base de su poder sin necesidad de cataclismos sociales. La tensión entre las clases se mantuvo latente, y aunque a veces fue rupturista, se limitó al plano local y apolítico. Incluso cuando los señores rechazaron el capitalismo, el conflicto permaneció sorprendentemente inactivo. Durante el siglo XVIII, en Francia, como después en Austria-Hungría y Rusia, los burgueses capitalistas subordinados a los antiguos nobles reaccionaron ejerciendo una «deferencia manipuladora» dentro de las organizaciones segmentales, no con una abierta hostilidad de clase. En realidad, llegaron a entenderse con el antiguo régimen, en parte porque ambos temían al «pueblo» y a la «plebe», aunque éstos aún no representaban el problema que iban a suponer en 1848. La ausencia de ese temor y de un amplio «partido de orden» hizo posible la Revolución Francesa. A falta de sus propias organizaciones extensivas, los burgueses capitalistas se sirvieron de las del antiguo régimen para alcanzar sus metas: adaptaron sus prácticas económicas al antiguo régimen, integraron en él a sus hijos e hijas, compraron patronazgos, cargos, títulos y nobles para casar a sus retoños. Pero no sacrificaron la riqueza en aras del estatus, por el contrario, se introdujeron en el régimen para asegurarse los privilegios y los frutos de los cargos oficiales contra la incertidumbre del mercado.

Más aún, el modo capitalista de producción requiere únicamente la existencia de una propiedad privada y de un mercado competitivo. Su organización extensiva no va más allá del mercado y los tribunales de justicia, y no tiende a la revolución, sino a la adaptación a otras organizaciones de poder distributivo. Si, por ejemplo, las diferencias étnicas han institucionalizado una situación de *apartheid*, o si lo institucional es el patriarcado, los capitalistas integran tales estructuras en sus cálculos mercantiles. En otras circunstancias, los cálculos se elaboran a partir de supuestos de igualdad de género y de raza. Sus ma-

nipulaciones pueden contribuir a la consolidación del *apartheid*, del patriarcado o del antiguo régimen, pero los capitalistas no son responsables de los sistemas. Cuando las organizaciones distributivas de poder comienzan a tambalearse, los más avisados transforman sus manipulaciones estratégicas y buscan el beneficio al margen de ellas. El capitalismo no es, como creía Marx, una poderosa fuerza transformadora de las relaciones de poder distributivo, sencillamente porque no lo es ningún modo de producción.

En ningún lugar, durante el periodo que estudiamos, creyó la alta burguesía encontrarse inmersa, codo a codo con la pequeña burguesía, en una lucha de clases contra el antiguo régimen feudal. En el sentido clásico de Marx, la burguesía, como unión de sus fracciones «alta» y «pequeña», no tuvo relevancia en tanto que actor de poder, precisamente en el momento en que podía haberla tenido. Es cierto que algunos de sus miembros despotricaban contra el régimen feudal, pero se aliaban más con las facciones modernizadoras del antiguo régimen que con la pequeña burguesía (a menos que intervinieran relaciones de poder no económico, como veremos más adelante). Lo que faltó no fue la conciencia, sino la organización de clase. Los capitalistas se integraron en la economía política del antiguo régimen mediante la compra de la influencia cortesana o parlamentaria, con el objetivo de adquirir privilegios y monopolios comerciales, la recaudación de impuestos y la obtención de cargos gubernamentales, al tiempo que se servían del matrimonio para introducirse en las redes de clientelismo. La disminución evidente de estas prácticas «corruptas» se debió más a la presión que ejercían los modernizadores del antiguo régimen, ellos mismos en proceso de transformase en capitalistas, que a una burguesía independiente. El nuevo capitalismo industrial se basó en una plétora de pequeñas empresas vinculadas por un mercado muy difuso. La burguesía industrial no tuvo una organización autoritaria, y la burguesía como tal fue sólo una «clase latente». Sus integrantes no necesitaban ni una clase ni un Estado propio para materializar sus intereses.

Fueron los capitalistas de la pequeña burguesía quienes demostraron más organización e identidad de clase. Como han sostenido McKendrick, Brewer y Plumb para el caso inglés, Soboul para Francia, y Nash para las colonias americanas, los comerciantes más modestos y los maestros artesanos se sentían irritados por la corrupción y el parasitismo con que la economía del antiguo régimen subordinaba a los privilegios el trabajo y los mercados donde ellos vendían sus produc-

tos. En los momentos de crisis, este sentimiento de oposición e identidad de una clase que produce y vende estallaba en denuncias políticas contra la «antigua corrupción» y las «intrigas aristocráticas». Sin embargo, la conciencia de una explotación económica directa se vivió más a través del mercado que de las relaciones de producción. Los estallidos de la pequeña burguesía, en especial cuando contaban con el apoyo del pueblo bajo, solían precipitarse con ocasión de las carestías del pan; se centraban en el mercado, y la movilización se producía gracias a la fuerte implantación pequeño burguesa en las comunidades locales, respaldada por las redes discursivas de comunicación mediante panfletos, periódicos de gran formato y otras publicaciones. Participaba toda la familia, mujeres y hombres, organizados localmente, en la calle y el vecindario más que en el ámbito del trabajo. La integración de la intimidad familiar en la política extensiva (evidente también en los levantamientos contra las conscripciones) dotó a estos movimientos de una considerable fuerza moral.

Pero los estallidos de clase se proponían metas muy limitadas: demostrar el descontento contra el antiguo régimen y obtener concesiones prácticas; en absoluto conquistar nuevas estructuras representativas, ni mucho menos hacer la revolución. Su organización era local, aunque los disturbios de la capital podían estar dirigidos contra el Estado central; cuando el Estado distribuía o fijaba el precio del pan, adquirían un mayor contenido político. Las revueltas del pan podían preocupar a los antiguos regímenes, incluso desestabilizarlos, pero nunca los sustituían por otros de carácter burgués. Si tenían contenido político, la mayoría estaban dominadas por organizaciones interclasistas dedicadas a la transmisión de la alfabetización discursiva que analizaré más adelante. Pero cuando la protesta se politizaba y se hacía extensiva, las revueltas perdían fuerza moral, rebajaban su intensidad y estrechaban su base, en especial mediante la exclusión de las mujeres (ampliaré este punto en los capítulos 15 y 17).

Esta combinación de mercado y organizaciones económicas de producción explica que el conflicto latente de clase y las protestas intensivas de carácter local arrancaran algunas concesiones al régimen, pero no explica ni las clases extensivas o políticas ni la reforma democrática de las estructuras, ni tampoco la revolución. La pequeña burguesía operaba en el marco de mercados muy difusos, cuyos amplios parámetros establecían también difusamente sus superiores, con un apoyo estatal muy limitado. El resentimiento que demostraba en ocasiones constituyó una condición necesaria para todos los conflictos

de clase, pero no produjo directa o «puramente» un periodo de lucha de clases extensiva y política. Puesto que los Estados no representaban un papel de primer orden para la vida económica, la revolución capitalista no pudo impulsar por sí sola la creación de las «naciones» populares. El descontento pequeño burgués se alzó contra el antiguo régimen y reivindicó la ciudadanía; su lucha generó una conciencia «nacional», pero sólo entró en acción cuando intervinieron las ideologías y el militarismo.

2. *El militarismo anterior a 1792*

¿Por qué se organiza extensiva y políticamente una clase? La respuesta de Marx es obvia: la organización de clase surge directamente de las relaciones de producción. Pero Marx se equivocaba. Como ya hemos visto, la burguesía prefirió la organización segmental a la organización de clase. En posteriores capítulos encontraremos una organización proletaria de clase, pero siempre en competición con las organizaciones seccional-segmentales o local-regionales. Sin embargo, no debería sorprender a nadie que la organización política de clase tenga también causas expecíficamente políticas, relativas a las características institucionales de los Estados.

Tales características se centraban ahora en el militarismo estatal. Analizaré en primer lugar la subfase anterior a 1792, para pasar después a la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Tilly (1975, 1990) y yo mismo (en el volumen 1) hemos demostrado que durante siglos las luchas políticas se estructuraron como respuesta a las crisis fiscales producidas por los gastos de guerra. De modo semejante, hemos visto que durante este periodo la pequeña burguesía se organizó extensiva y políticamente sólo cuando los Estados, presionados por la necesidad de dinero y recursos humanos que imponía la rivalidad entre las grandes potencias, fueron incapaces de proveerse a través de medios institucionalizados y recurrieron a nuevos impuestos, préstamos y conscripciones. Cuando tales medidas aumentaban y se hacían más regresivas, las tensiones sociales alcanzaban un nivel político y «nacional». El descontento se dirigía contra los costes (impuestos y servicio militar) y los beneficios estatales (empleos oficiales, monopolios económicos, adquisición de bonos y exenciones de impuestos y reclutamiento). La contestación se alzó contra esta economía política, no contra las relaciones de producción y de mercado propias del

capitalismo. Pero antes de proseguir deseo aclarar que no estoy planteando que el descontento fuera mayor que el producido por la explotación económica directa, de hecho tales cosas eran sin duda menos importantes para la vida de la mayoría de las personas, sólo afirmo que este sentimiento evocaba con mayor consistencia lo *político*.

El militarismo también alentó entre las elites del Estado monárquico la racionalización de la administración y el ataque a los costosos privilegios particularistas que ellas mismas habían sostenido hasta entonces. Así pues, las luchas políticas comenzaron como un conflicto, parcialmente inspirado en principios, entre la elite y los partidos, es decir, *dentro* del antiguo régimen. Más tarde, los agravios del fisco y la conscripción, unidos a la oportunidad que brindaban las luchas facciosas del régimen sacaron a las clases contribuyentes de su tradicional indiferencia política y las llevaron a cuestionar la legitimidad del Estado. Cuando las instituciones estatales no supieron resolver la lucha entre las facciones de las elites y los partidos, aparecieron los ideólogos y las organizaciones de la pequeña burguesía y ampliaron las dos reivindicaciones de los modernizadores del régimen. Al principio, reivindicaron la ciudadanía civil para protestar con libertad contra la economía política; cuando la protesta resultó inútil, reclamaron la ciudadanía política.

Sólo este camino conducía potencialmente hacia la revolución, porque sólo así se podía obtener el apoyo de la plebe —trabajadores rurales y urbanos y campesinos pobres— a las demandas del pueblo de propietarios. Ni la Revolución Americana ni la Francesa habrían triunfado sin su ayuda. La revuelta de los campesinos franceses en 1789 desplazó a los modernizadores del régimen hacia la izquierda, es decir, hacia la reforma estructural; los *sans-culottes* urbanos mantuvieron la presión. Cuando, durante la década de 1780, la plebe urbana y los pequeños granjeros americanos proporcionaron tropas y suministros para ganar la guerra, empujaron a la izquierda a los notables rebeldes. Su principal meta era la economía política, esto es, las concesiones del Estado en materia de impuestos, obligaciones y privilegios económicos, leyes sobre la deuda, monopolios y precios. La alianza de clase entre la pequeña burguesía, los campesinos y, en ocasiones, los pobres de las ciudades, se politizó por las características institucionales de los Estados.

La crisis fiscal tuvo dos componentes. En primer lugar, la tasa de aumento de las exacciones hubo de ser sustancial para causar tanto

descontento, pero los gravámenes no produjeron en todos los casos la misma reacción política. Gran Bretaña era el país gravado con mayores impuestos; Prusia, el que soportaba las peores conscripciones, seguida de Austria y de Francia; en las colonias americanas ambas cosas eran menores. Sin embargo, el nivel de exacción no se corresponde con el grado de rebelión política. Las tasas del impuesto resultan malos indicadores para las revoluciones o revueltas de este periodo, porque la mayor parte de las veces fueron bastante estables. El aumento del gasto se financió en gran parte a través del préstamo.

En segundo lugar, la gravedad de la crisis se explica también por el grado en que cada Estado institucionalizó sus conflictos entre la elite y los partidos. Según la distinción que muestra el cuadro 4.1, aquellos regímenes —Gran Bretaña y Prusia— que habían centralizado la coordinación infraestructural entre las elites estatales y los partidos de las clases dominantes obtuvieron mayores ingresos a través de esas instituciones y redujeron las disputas entre sus facciones internas. En Gran Bretaña, el parlamento continuó votando los impuestos y el banco continuó allegando préstamos; los primeros para pagar los segundos. Las negociaciones de ambos medios estaban institucionalizadas, y la soberanía última, localizada en el parlamento, donde interactuaban la elite estatal y los partidos «integrados» y «excluidos». En Prusia, la soberanía descansaba en las relaciones del rey con los nobles, institucionalizadas en todos los niveles de la administración estatal. Existía entre ellos un acuerdo para recaudar conjuntamente impuestos del resto de la población. El rey también podía recabar recursos considerables a partir de la gestión institucionalizada de sus propios dominios.

Sin embargo, en Francia y en las colonias americanas, las instituciones estatales, supuestamente soberanas, se hallaban menos entrelazadas entre los notables locales. Los intentos de recaudación, moderados en Francia e incluso tímidos en América, afectaron a los partidos de notables «excluidos» siempre que se pretendió acabar con sus privilegios u obtener nuevos ingresos a su costa. Austria mantuvo una actitud intermedia. Aunque su Estado central se hallaba escasamente inserto entre los notables locales, había institucionalizado un sistema de contratos particularistas con los notables de las provincias que le permitía aumentar los impuestos y las conscripciones en tiempos de guerra, aunque sólo hasta cierto punto.

Los créditos creaban numerosas desigualdades cuando se producían a gran escala. El hecho de que la masa de contribuyentes hubiera

de cubrir los pagos a los poseedores de bonos los hizo regresivos. La situación duró más que la propia guerra, y entonces fue más difícil legitimarla. Gran Bretaña y Francia se nutrieron de préstamos en mayor medida que los restantes países, por eso cundió más el descontento en época de paz.

De modo que la crisis fiscal varió de un país a otro. En Prusia, las exacciones se gestionaban a través de las instituciones fiscales existentes, pero este país contaba también con la Iglesia más estatista y apenas padecía el descontento religioso. Aunque no faltaron las protestas, se expresaron casi siempre «dentro» del Estado, en la forma de un movimiento por la reforma administrativa y en la fusión final de las dos iglesias protestantes en una sola iglesia estatal. Se crearon nuevas normas de acceso a los cargos administrativos (y a las asambleas representativas locales), la elite estatal se unió a los partidos de las clases altas y consiguió alejar su moral y su política del descontento de otras clases. Puesto que el Estado prusiano tomó poco dinero prestado, los contribuyentes no tuvieron que subvencionar a los poseedores de bonos. En cuanto a Gran Bretaña, la recaudación se encontraba en manos de la elite estatal y los partidos «integrados», pero el carácter regresivo de los préstamos y los impuestos indirectos sembró el descontento entre los partidos «excluidos» y «marginados». Este hecho movilizó a amplias clases emergentes que ahora tenían las condiciones necesarias para organizarse, sobre todo en el caso de la pequeña burguesía, ideológicamente apoyada en la noción de «constitución protestante» y moralmente reforzada por los rituales religiosos cotidianos. Pero su organización de clase nunca fue autónoma, y osciló entre las alianzas con los «excluidos» e incluso con los «integrados», formados por los modernizadores del antiguo régimen, y con la plebe marginada; en cuanto a su organización religiosa, también generó mensajes ambiguos. La reforma democrática resultante pudo ser a veces turbulenta pero nunca revolucionaria.

Las exacciones austriacas superaron a veces la capacidad de los medios institucionalizados de las provincias. La crisis no se manifestó como un conflicto singular y centralizado, por el contrario, adoptó la forma de una lucha plural. El descontento no se expresó tanto a través de las clases como de las nacionalidades regionales (lo veremos enseguida). Pero en Francia y en las colonias americanas, la protesta contra la exacción y las reformas fiscales no institucionalizadas e «ilegítimas», moralmente apoyada en el descontento de los estratos más bajos de la Iglesia (Francia) y las sectas protestantes (colonias ameri-

canas), acabó por desintegrar el antiguo régimen. Los marginados, la pequeña burguesía y los campesinos minifundistas aparecieron entonces en escena, en un primer momento estimulados por los modernizadores del antiguo régimen, luego por su propia cuenta.

Sin una crisis fiscal y militar, la política «nacional» y el Estado nunca hubieran tenido suficiente peso en la vida popular, y por tanto no habrían producido una lucha de clase por la representación; y libres de esa politización, los capitalistas habrían podido integrarse segmentalmente en la economía del antiguo régimen, debilitando con ello la organización autónoma de clase. Eran muchos los que probablemente hubieran preferido continuar ignorando al Estado. Pero ahora, de grado o por fuerza, se encontraban «enjaulados», politizados y «naturalizados» por las exacciones fiscales del Estado.

Como suele ocurrir con la macrosociología comparada, encontramos pocos casos que nos permitan sustentar estas generalizaciones tajantes. No obstante, me animan a ello algunas variantes comparables de principios del siglo XX, cuando estas presiones fiscales y militares no constituían ya el principal mecanismo de politización de las clases, pese a lo cual, se desarrolló un mecanismo análogo a medida que la lógica de la geopolítica militar sustituía las recaudaciones estatales por la movilización masiva de recursos humanos. En las condiciones resultantes de la Primera Guerra Mundial, el grado de turbulencia revolucionaria, instigado esta vez por el proletariado, varió en relación directa a la gravedad de la crisis que la movilización masiva planteó a cada régimen. Entre estas dos grandes fases revolucionarias de la historia occidental, la Comuna de París y la Revolución Rusa de 1905 respondieron a presiones semejantes. Salvo la revolución de 1830 en Francia y los Países Bajos y las fracasadas de 1848 [2], todas las revoluciones occidentales estallaron cuando las necesidades militares de la geopolítica encauzaron las presiones de clase —fiscales, primero, de recursos humanos, después— hacia las instituciones del Estado. Dados los avatares de la historia y la singularidad de cada caso, se trata de una relación tan consistente como las que proporciona la macrosociología.

[2] Ni la revolución de 1848 en Francia ni los disturbios en Alemania tuvieron estas causas, pero los tumultos de los territorios austriacos, más graves, se debieron fundamentalmente a una crisis fiscal-institucional (véase el capítulo 10), y, en gran parte, lo mismo puede decirse respecto al cartismo en Gran Bretaña (véase el capítulo 15).

Muchos de estos procesos condujeron a las primeras *naciones*, más allá del nivel protonacional, a la autoconciencia interclasista. Sólo los hacendados podían oponerse a las exacciones estatales, pero su número rebasaba ahora la capacidad de la tradicional política particularista y segmental, que, en cualquier caso, no satisfacía adecuadamente sus demandas. De ahí que los ricos adoptaran también lemas universales como el de «pueblo» y «nación». Cuando la crisis fiscal se desviaba, como en el caso de Prusia, pocas veces se producía nada semejante. Cuando se alcanzaba el compromiso, como en el caso de Gran Bretaña, menguaba su carga radical. Pero en América, y más aún en Francia, la crisis fiscal surtió el efecto de politizar al «pueblo» y a la «nación». De este modo, tanto en Francia como en Gran Bretaña la nación se creó reforzando el Estado. Por otro lado, el concepto mismo se amplió desde la idea de sangre a la de ciudadanía. Sin perder sus denominaciones metafóricas, fue «patria» y «madre patria» de todos, unidos en una familia nacional entre otras familias nacionales. La Revolución Francesa excluyó formalmente a los reyes, los nobles y el clero, que simbolizaban la familia basada en el parentesco, de la familia de los ciudadanos. Según el abate Volfius: «La auténtica *patria* es aquella comunidad política en la que todos los ciudadanos, protegidos por las mismas leyes y unidos por los mismos intereses, disfrutan de los derechos naturales del hombre y participan en la causa común» (Kohn, 1967: 43).

La crisis fiscal produjo lo que podríamos denominar «clases-naciones emergentes». La conciencia de sí mismas de las naciones surgió, pues, de la lucha por conquistar el gobierno representativo. Por muchas que hayan sido las atrocidades cometidas con posterioridad en su nombre, no deberíamos olvidar que la nación se basó en los ideales democráticos de aquella época que más valoramos en la nuestra.

Pero el lado oscuro de la nación se debió precisamente a que los ideales democráticos surgieron de la guerra. Sin la presión de las conscripciones, los impuestos y los préstamos regresivos, el «pueblo» habría continuado sintiéndose apolítico y contento con su indiferencia hacia el Estado. Ahora, sin embargo, un «pueblo» limitado controlaba parcialmente al Estado, cuya función principal era hacer la guerra. Así pues, la nación se hizo algo más agresiva. La política exterior ya no podía ser limitada, dinástica o privada. La lucha entre Francia y Gran Bretaña durante el siglo XVIII estuvo apoyada por grupos de presión externos al régimen y respaldada por manifestacio-

nes patrióticas, y ello aunque las exacciones también provocaron oposición popular a la guerra. Las redes de alfabetización discursiva generaron estereotipos sobre las virtudes nacionales de cada país y los vicios igualmente nacionales del contrario (como indican Newman y Colley, citados en el capítulo 4). Se adjudicaba a las naciones cualidades propias de las personas, y como a éstas se las amaba o se las odiaba. El nacionalismo agresivo no llegó a más, ni siquiera en estos países, antes de 1792, pero ya había aparecido.

Con todo, la fase militarista anterior a 1792 creó una complicación de mayor calado, destinada a durar. El proceso hacia la ciudadanía política dio pie a dos cuestiones: la representativa y la «nacional», que produjeron, a su vez, dos tipos de naciones: la nación que consolidó el Estado y la que lo subvirtió. En términos generales, Gran Bretaña y Francia constituyen un ejemplo de lo primero, mientras que el caso austriaco ejemplifica lo segundo. La crisis fiscal austriaca fue distinta, no tanto en su magnitud como en sus consecuencias organizativas. La mayor parte de los gastos militares se cubrían con impuestos denominados «contribuciones militares» de las llamadas provincias históricas; el resto eran préstamos (Dickson, 1987). Pero las fórmulas de contribución (que generalmente establecían el número de tropas que podía reunirse) no fueron satisfactorias, y la monarquía perdía capacidad crediticia (se declaró en bancarrota en 1811). Hubo que negociar exacciones más elevadas en el marco de una estructura confederal de dietas y administraciones provinciales difícil de manejar. Por tal razón, la disidencia austriaca adoptó una organización regional.

Lemas tales como «No a los impuestos, sin representación» procedían de los notables atrincherados en asambleas y administraciones provinciales. En efecto, durante la década de 1780, José II había provocado los dos primeros movimientos «patrióticos» de Europa; uno en su provincia económicamente más avanzada, los Países Bajos de dominio austriaco; el otro en Hungría, una de las más atrasadas. Lo común en este caso era la poderosa capacidad de organización política que demostraron las provincias; en Holanda, entre las clases acaudaladas; en Hungría, limitada a la nobleza. Hasta ese momento, sólo las llamadas naciones históricas (esto es, con tradición de autonomía política) organizaron la disensión. De estos heterogéneos actores regionales habrían de surgir las primeras naciones subvertidoras del Estado.

Esta temprana fase militarista de la aparición de naciones conscientes de sí mismas se construyó sobre las dos fases protonacionales.

Los movimientos de las provincias austriacas, por ejemplo, no surgieron de la nada, sino de los antiguos magiares, bohemios, moravos y otras noblezas e iglesias similares (e, intermitentemente, de los burgueses de los Países Bajos de dominio austriaco, los campesinos más ricos y otros estratos intermedios en otros lugares). Pero lo que realmente caracteriza este periodo (y aquí me aparto de la teoría «perennialista» de Anthony Smith) fue el crecimiento exponencial de la nación vertical ya existente a través de las líneas de clase. Fue el estímulo del militarismo desarrollado por los Estados, en mayor medida que sus cristalizaciones capitalistas, lo que fomentó la aparición de las naciones interclasistas. Dado que la presión fiscal-militar afectó más directa y uniformemente al Estado que el capitalismo industrial o comercial, las naciones aparecieron en este marco a través de las instituciones políticas regionales, y no sólo en las zonas de economía más avanzada. Las diferencias entre las naciones se debieron a que las instituciones estatales eran también distintas; o sirvieron para consolidar el Estado, como en Gran Bretaña; o para subvertirlo, como en Austria. Pero las naciones emergentes aún compartían algo más con las clases: el hecho de movilizar pasiones ideológicas de un fervor inusitado. Puesto que todo ello, con las consiguientes variaciones, influyó poderosamente en el militarismo posterior a 1792, haré ahora una pausa para analizar el poder ideológico.

3. *El poder ideológico*

Pero la irritación producida por la fiscalidad y las conscripciones no bastaba, el «pueblo» y la pequeña burguesía necesitaban recursos organizativos. Para saldar con éxito su lucha, como clase o como nación, necesitaban un sistema dotado de sentido y de principios, normas, rituales y prácticas estéticas. Es decir, una ideología, en su doble significado de moral colectiva inmanente y mensaje trascendental, capaz de conferir una moralidad determinada a una identidad colectiva, negar la del oponente, totalizar la lucha y concebir una sociedad alternativa que la refuerce. De hecho, la fortaleza moral de las clases y, muy especialmente, de las naciones ha sido siempre evidente. Las teorías sociales basadas en la «motivación del interés» —como la economía marxista o neoclásica, o la teoría de la elección racional— no explican por qué los miembros de una organización colectiva, como la clase o la nación, se dejan arrastrar por intensas emociones comu-

nes, capaces de romper tabúes tan fuertes como la tortura, el asesinato e incluso el genocidio, y de empujarlos al sacrificio de sus propios vidas en barricadas y trincheras. El único intento serio de esclarecer la fuerza emocional del nacionalismo se ha realizado en las escuelas «primordialistas» y «perennialistas», que lo explican por la profundidad de sus raíces ancestrales (Armstrong, 1982; Smith, 1986). Sin embargo, yo no las considero correctas.

Intentaré ir algo más lejos. Y digo «algo» porque considero que una explicación completa requeriría un análisis más riguroso de la esfera íntima de la vida social que el que podré realizar aquí. En este volumen veremos que las naciones y las clases extensivas han suscitado mayor pasión y fervor moral cuando han podido movilizar las redes más *intensivas* de sus miembros. Asistiremos a la decadencia del fervor proletario cuando pierda el arraigo en la familia y la comunidad local en pro de las relaciones laborales. Como ya hemos visto (y volveremos a ver en el capítulo 15), la protesta de las clases bajas y medias resultó más apasionada y turbulenta al principio del periodo, cuando la explotación se realizaba sobre las familias y afectaba tanto a los hombres como a las mujeres, y cuando su organización se producía en la calle, en los pueblos y entre el vecindario. Y la pasión era mayor porque la injusticia de los precios del pan, de las conscripciones y de los impuestos regresivos sobre la tierra y el consumo y las ventas afectaba de forma inmediata no sólo al individuo, sino también a su intimidad, donde vivían sus seres más queridos. La familia era el principal agente moral y emocional porque constituía también el lugar de la socialización, donde se producía la experiencia y la canalización social del amor y del odio. El nacionalismo creó en todos los casos una especie de ficción familiar; se suponía, erróneamente, que la nación era una comunidad de descendencia y una madre o un padre simbólicos. Por mi parte, creo que el fervor moral del nacionalismo procede de su habilidad para vincular la familia a la comunidad local y al territorio extensivo que abarca la nación.

Pero si la familia intensiva y la organización comunitaria generan fuertes emociones que pueden acabar en disturbios incendiarios, no producen una solidaridad extensiva entre toda una clase o una nación. La intensidad ha de ser movilizada por organizaciones extensivas de poder. De ahí la importancia de las dos fases protonacionales. Las iglesias habían dominado por tradición las conexiones de la familia con la vecindad y el poder extensivo, monopolizando durante mucho tiempo las formas morales de la sociedad, centrando los rituales

en las fases del ciclo vital individual y familiar (bautismo, matrimonio, muerte) y acogiendo la expresión del descontento regional o «de clase» en los movimientos heréticos y cismáticos, desde los albigenses a la guerra civil inglesa. En tiempos más recientes, se convirtieron en las principales maestras de un conocimiento socialmente útil a través de la alfabetización masiva. Pero esta instrucción conllevaba también una moral, ya que su principal instrumento, el libro, continuaba siendo la Biblia, junto a las homilías y los sermones.

La estrecha vinculación de las jerarquías eclesiásticas con el antiguo regimen les impedía fomentar directamente la identidad de clase o de nación, pero todos los regímenes, desde Enrique VIII hasta Napoleón, expropiaron a las iglesias y sustituyeron el derecho canónico por el derecho real. En este momento, se inmiscuían además en la educación. Las relaciones extensivas y protonacionales de poder se hicieron laicas. Los eclesiásticos influyentes en el Estado, como los obispos ingleses y franceses de finales del siglo XVIII, parecían mundanos e inmorales a sus propios subordinados y parroquianos. Al contrario que sus iguales de otras épocas (a excepción, quizás, del jansenismo), los renovadores religiosos y las sectas disidentes de esta centuria se interesaron menos por la transformación doctrinal que por el desarrollo social de sus localidades. El *Great Awakening*, el metodismo o los párrocos desafectos de los pueblos franceses, vincularon sus intereses morales a las prácticas sociales del pueblo, al tiempo que brindaban una puesta en escena religiosa a los rituales que introducían esas prácticas en los ciclos de la familia y la comunidad. La religión comenzaba a refugiarse en las relaciones sociales de la localidad y la región que examinaré en capítulos posteriores, pero dejaba una fuerte impronta de comunicación moral entre la familia, la localidad y las relaciones de poder extensivo.

En la segunda fase protonacional, el capitalismo comercial y los Estados militaristas desplazaron a las iglesias de su papel de principales comunicadoras de mensajes entre los planos intensivo y extensivo del poder. Sin embargo, ninguna de sus organizaciones autoritarias se adecuó al objetivo. El capitalismo comercial no produjo más que tímidas organizaciones vinculadas por un mercado difuso y amoral. La organización autoritaria del Estado militar en auge se vivió como una experiencia inmoral y explotadora. De ahí que tanto el Estado como el capitalismo se movilizaran de modo más indirecto, principalmente a través de las redes de alfabetización discursiva que habían generado. La lectura, la escritura y las asambleas orales vincularon lo intensivo

y lo extensivo, lo instrumental laico y lo moral sagrado, pero, como la religiosidad y las iglesias no perdieron por completo su capacidad de influir, se produjo dentro de aquellas redes una contienda entre la moralidad religiosa y la moralidad laica. Nació así una intelectualidad discutidora, que proporcionó recursos ideológicos de poder al desarrollo de las clases y las naciones. Como ya hemos visto, sus ideologías no eran tan avanzadas como los principios científicos, sino extraordinariamente moralizantes.

En los capítulos precedentes hemos comprobado que gran parte de la ideología y el liderazgo de las clases emergentes y los movimientos nacionales, en especial los más radicales, no procedían de la pequeña burguesía. Hemos examinado los antecedentes sociales de tipo radical. Así aparecen tipificados en la lista de profesiones de una célula *Vonckist* (patriotas radicales de los Países Bajos de dominio austriaco) confeccionada por la policía de Bruselas en la década de 1780: ocho abogados, cuatro médicos o boticarios, un arquitecto, tres comerciantes, tres rentistas, tres peluqueros, tres propietarios de cafés, dos impresores y tres curas (Palmer, 1959: I, 353). Sólo los comerciantes y los rentistas pertenecerían al núcleo de las clases altas, y todos ellos estaban divididos igualmente entre la burguesía y el antiguo régimen. ¿Es esto una auténtica burguesía emergente? Los otros patriotas eran por lo menos ideólogos semiprofesionales. Su labor presuponía una formación y la existencia de una alfabetización discursiva; sus premisas resultaban vitales para las redes de comunicación. La presencia de los peluqueros (radicales activos en varios países) me sorprendió antes de darme cuenta de que en sus establecimientos (como en los cafés y las tabernas) se vendían periódicos y panfletos para leer y discutir durante el largo proceso del arreglo de una peluca. Los capítulos 5 y 6 muestran que los líderes revolucionarios de Francia y América disfrutaban de una excelente formación. Muchos de los revolucionarios franceses escribieron ensayos no políticos y trabajos literarios. Abundaban las organizaciones políticas «literarias», los panfletos, las peticiones colectivas, las redes de lectura y escritura, las sociedades de correspondencia, las estratagemas retóricas de los revolucionarios. Estos radicales parecen haber sido menos burgueses que literatos; una especie de intelectualidad en el sentido de un estrato característico de moralistas intelectuales.

El hecho de que una vanguardia ideológica acaudillara a las burguesías y a determinadas naciones dibuja un panorama bastante leninista. Parafraseando las palabras de Lenin respecto a la clase trabaja-

dora (que analizaremos en el capítulo 18), por sí misma, la burguesía sólo fue capaz de desarrollar una forma de economicismo: la actitud segmental de deferencia manipuladora del siglo XVIII. La conciencia revolucionaria, según Lenin, requiere el liderazgo de una vanguardia de intelectuales distintos a la clase; aunque no explica de dónde proceden. Un marxista, Lucien Goldman, ha tratado de hacerlo (1964). Aunque las contradicciones entre los modos de producción están siempre en la base de las crisis sociales, Goldman piensa que quien las articula mejor no es la clase emergente, sino los intelectuales que desarrollan «el máximo posible de conciencia», en virtud de su posición pública y del carácter ideológico de su cometido profesional. Sin embargo, añade, la clase emergente se apropia de sus ideas y luego prescinde de ellos. El argumento puede hacerse extensivo, ya que las contradicciones no fueron sólo económicas. Una vanguardia ideológica debió de articular mejor la experiencia y las necesidades de otros actores de poder (económico, militar y político), pero éstos le arrebataron su ideología. De modo alternativo, podemos creer en un poder autónomo de la vanguardia, cuyas ideas y soluciones se articularon y se impusieron desde sus propias redes discursivas y no a partir de las contradicciones de las clases o los Estados.

He analizado estas argumentaciones contrarias con mayor detenimiento al tratar de la Revolución Francesa. Ninguna de ellas carece de sentido, aunque varía según los países. Los lemas ideológicos y los principios se adoptaban como soluciones viables a los problemas reales de los actores de poder económico, político y militar. Pero el recurso a la ideología implicaba también la existencia de dos poderes emergentes a partir de las redes expansivas de la alfabetización discursiva.

1. Los principios ideológicos eran *transitivos* y transgredían la naturaleza esencialmente particularista y segmental del antiguo régimen. El conocimiento era universal, es decir, los principios podían aplicarse a la totalidad de la experiencia humana, a los problemas filosóficos, morales, estéticos, científicos, sociológicos y políticos. Las redes discursivas abogaron tanto por la reconstrucción racional como por la regeneración moral. El peligro no pasó desapercibido para el antiguo régimen, que censuró, patrocinó y concedió licencias en un intento de aislar estas infraestructuras para evitar la transitividad. El antiguo régimen podría modernizarse sin riesgos si los abogados se limitaban a los tribunales, si la alfabetización de los campesinos y de

la pequeña burguesía se aplicaba sólo a mejorar las cuentas y los contratos, si las escuelas de la Iglesia se circunscribían a fomentar la lectura de homilías y si los periódicos se dedicaban a notificar la llegada de los barcos y los comunicados oficiales. El patronazgo particularista, la coerción y la corrupción disciplinarían las infraestructuras segmentales. Pero el aislamiento no se produjo porque las infraestructuras del siglo XVIII contenían tres formas de transitividad:

a. La especialización se convirtió en una forma de conocimiento generalista moralizador. Las homilías y los sermones no sólo trataban de los dogmas, sino también de la moralidad social. Se vendían masivamente homilías, sermones, novelas, ensayos sociales y panfletos sobre cuestiones de todo tipo. Las cuestiones de significado y de moralidad social se entrelazaban con la teología, la filosofía, la poesía —cuya métrica se había adaptado a las lenguas vernáculas nativas—, las historias satíricas de amplia circulación, tales como *Cándido*, y las pinturas satíricas, reproducidas con nuevas técnicas de impresión, como las de Hogarth. La formación jurídica se entrelazaba con la educación humanista propia de un caballero, y los conceptos legales se transformaban en derechos universales. La prensa, por su parte, analizaba y anunciaba los temas más variados.

b. La alfabetización discursiva se difundió en el antiguo régimen y desde allí hacia la base social. Los modernizadores del régimen articularon ideologías reformistas en disputa con las facciones conservadoras de la corte, en los tribunales de justicia, los parlamentos, la administración del Estado, las academias y los salones, en los cuerpos de oficiales y en las iglesias. Cuando la controversia entre las facciones nó lograba institucionalizarse, recurrían al apoyo popular. Las sectas religiosas, los cafés, las tabernas y algunas academias, así como las ventas de cinco mil periódicos y panfletos movilizaron a los campesinos medios, a los maestros artesanos, comerciantes, maestros de escuela, sacerdotes, oficiales, funcionarios y mujeres.

c. Las redes de alfabetización discursiva se servían de puntos de referencia comparativos para relativizar los usos sociales. Las redes religiosas, especialmente las protestantes y puritanas, exhortaban a sus miembros a vivir con la sencillez de las primeras comunidades cristianas. La Ilustración laica practicaba la antropología cultural comparando a Europa y a las colonias con otras culturas. El comportamiento que se les suponía a los ingleses, los franceses, los estadounidenses o los persas (*Las cartas persas* de Montesquieu), incluso a

los indios hurones (*El ingenuo* de Voltaire) se analizaba para saber cómo deberíamos comportarnos todos los seres humanos. De hecho, estos retratos supuestamente auténticos eran en realidad panfletos morales y políticos. Los hurones no eran tan ingenuos ni tan naturalmente virtuosos, pero lo que importaba a Voltaire era que *nosotros* descartáramos la corrupción, el lujo y el fraude. Lo que se analizaba en las redes literarias era aquello que Bendix (1978) ha llamado «sociedades de referencia» alternativas. Las revoluciones francesa y americana se convirtieron en dos formas concretas de sociedades de referencia, más o menos atractivas (según la perspectiva de cada cual) para la modernización política.

Pero la transitividad variaba también entre las distintas infraestructuras ideológicas y según la intensidad de la crisis fiscal-militar. La de las infraestructuras religiosas no solía plantearse explícitamente la política nacional o de clase, pero tampoco carecía de implicaciones políticas. La alfabetización promocionada por la iglesia galicana, el *Great Awakening* en las colonias americanas y el metodismo inglés democratizaba implícitamente la religión porque depositaba el conocimiento último en el individuo y la moral última en una comunidad familiar y local cada vez más próspera, al tiempo que desacralizaba las jerarquías del antiguo régimen. Pero incluso la intervención del Estado en la educación secundaria y el derecho de familia y su apropiación de los bienes eclesiásticos fomentaba la desacralización. La iglesia católica se fue conformando como una confederación transnacional de redes locales y regionales de poder, bien implantada en la vida familiar y comunitaria, que dominaba los ciclos vitales de la familia y los ciclos estacionales de la vida rural, al tiempo que controlaba gran parte de la educación primaria. Las iglesias protestantes minoritarias hicieron lo propio; las oficiales, por el contrario, conservaron un fuerte estatismo. De este modo, las ideologías populares quedaron más expuestas al influjo de la religión de lo que creyeron los intelectuales ilustrados. Pero esa influencia no tuvo por qué limitarse a favorecer al antiguo régimen.

Las infraestructuras estatistas de Austria y Prusia generaron ideologías como el cameralismo y el «absolutismo ilustrado» contra el particularismo de las iglesias y las aristocracias y los privilegios corporativos. La intelectualidad propuso a veces reformas radicales, pero raramente les dio la publicidad necesaria para potenciar movimientos de clase. Nunca llegaron a ser populares o «nacionales». La transitividad estatista fue, pues, limitada.

Las vías del estatismo y el capitalismo comercial se cruzaron en la profesión jurídica. La práctica de la abogacía, una vez independizada del control real, se dedicó cada vez más a los contratos civiles. Los derechos y las libertades que antes residían en la costumbre particularista de corporaciones y comunidades, se basaban ahora en los derechos universales de la persona y la propiedad. Los abogados desempeñaron un importante papel en las reformas moderadas, tanto si se encontraban incorporados al estatismo austriaco, y especialmente al prusiano, como en las primeras fases de la reforma inglesa y de las revoluciones francesa y americana. Los abogados americanos, ingleses y franceses vivieron a través de la práctica profesional el enfrentamiento entre los antiguos y nuevos modos de producción y los regímenes políticos (aunque raramente lo articularon así). Lo que sí articularon fue una especie de «ideología a medias», de semioposición y semibasada en principios. Pero cuando los regímenes aprendieron a entenderse con el capitalismo, los abogados incorporaron ese entendimiento a la práctica de las instituciones estatales tales como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Código Civil napoleónico o el *Rechtstaat* prusiano. En la década de 1840 la ley había perdido su fuerza desestabilizadora y semiideológica y respaldaba a los nuevos regímenes.

El capitalismo comercial fue el principal generador de las restantes infraestructuras de alfabetización discursiva: redes de discusión (academias, círculos de lectura, tabernas y cafés), periódicos, panfletos, revistas y medios literarios. En Gran Bretaña, especialmente tras la regeneración moral producida por las iglesias, fomentaron el reformismo interclasista y el «progreso»: un programa pragmático de mejora personal y reforma social y política. Cuando el capitalismo comercial se entrelazó con el absolutismo militar en el occidente de Europa, apareció el auténtico programa de la Ilustración; las metáforas bélicas justificaban los cambios sociales basados en principios que proporcionarían una sociedad mejor. Su lema fue la transitividad del conocimiento, el *Sapere aude* (atreverse a saber) de Kant, el *Écrasez l'infâme* (destruid la infamia; esto es, la superstición) de Voltaire. Combinaba la política, la sociología y la ética comparadas, fomentando la extensión popular de la razón cultivada y moralizadora. No comportaba mensajes explícitos de clase, y su radicalismo estaba limitado por el absolutismo; pero allí donde la crisis fiscal escapó al control institucional de la elite gobernante y de los políticos de partido, como en Francia, la Ilustración generó unas ideologías alternati-

vas, basadas en los principios y expuestas por una intelectualidad profesional.

La alfabetización discursiva se debió primero a las iglesias y luego a los Estados y al capitalismo, pero acabó por producir una transitividad del poder. Sin ella, las tensiones producidas por los procesos singulares de modernización del Estado, la Iglesia, la economía y el ejército habrían conservado su carácter segmental y habrían permanecido aisladas entre sí. Los hombres burgueses que protestaban por los privilegios económicos podrían haber creído que no había alternativa a la «deferencia manipuladora», los aristócratas liberales habrían podido retirarse a cuidar sus haciendas y el clero crítico habría podido optar por la meditación o acogerse al jansenismo. Recuérdese que Vadier, el notable descontento de un pequeña ciudad, abogado-soldado, que leía los textos de la Ilustración, se dedicó a la política y acabó siendo el jefe de la policía en tiempos de la revolución. La transitividad se había convertido en una potente arma ideológica. Los ideólogos encontraron aliados para derrocar el antiguo régimen, expusieron la corrupción particularista a los principios morales, movilizaron sentimientos democráticos y relativizaron las tradiciones más sagradas.

Pero las clases y las naciones emergentes presentaban, en realidad, grandes diferencias. El movimiento pequeño burgués comprendía los estratos más modestos del comercio, los profesionales, la industria y la artesanía. Sus relaciones de producción eran tan variadas como seccionales. La mayoría eran capitalistas independientes que empleaban una escasa fuerza de trabajo, pero algunos de los profesionales más modestos (profesores, periodistas, funcionarios de los juzgados y escritores de panfletos) eran empleados, y gran parte de los artesanos también trabajaban para otros artesanos. Estas relaciones con los medios de producción no podían proporcionar más que una limitada entidad de clase, que convivió con otras identidades seccionales y segmentales. Pero la crisis fiscal ayudó a consolidar la identidad de clase. Con todo, la transitividad de las infraestructuras ideológicas creó una moral y una concepción basada en los principios del conflicto sistémico entre las nuevas y las antiguas sociedades; entre el particularismo, la dependencia, la sofisticación, la ociosidad y la corrupción del feudalismo, por un lado, y la enérgica independencia, la honradez y la laboriosidad de las clases industriosas y de la nación, por otro. Los contemporáneos pluralizaban el concepto de burguesía en clases medias o industriosas; pero el entrelazamiento de las clases

emergentes con la crisis político-fiscal y las infraestructuras ideológicas las convirtió a veces en una sola comunidad, una sola clase y una sola nación.

Las clases, aun cuando las genere el capitalismo, no son nunca «puras». Los actores de clase de este periodo no fueron meramente económicos, sino un resultado del entrelazamiento de las relaciones de poder ideológico, militar y político, en una suerte de «trialéctica» entre las clases, la crisis fiscal-militar y los principios ideológicos. Los ideólogos contribuyeron a integrar las distintas experiencias de las familias «medias» en una pequeña burguesía coherente. La guerra entre las nuevas y las antiguas formas de sociedad se luchó sobre todo a través de organizaciones ideológicas, no económicas, ya que la creciente autonomía del poder ideológico superó la reduccionista noción de Goldman sobre el «máximo posible de conciencia». La intelectualidad no ayudó a que una clase o una nación ya existentes desarrollaran su moral inmanente, sino que contribuyó a imaginar y, por tanto, a crear la clase y la nación.

2. Sólo en contadas crisis revolucionarias, cuando fracasó la práctica política, apareció un segundo poder ideológico, es decir, una vanguardia ideológica con poder sobre otros actores. Los ideólogos confiaban en una moral y un conocimiento superiores, basados en los principios. La moral, la ciencia y la historia estaban de su parte; despreciaban a los pragmáticos y a los conformistas. Los políticos, sin embargo, sabían que el mundo no se gobierna con principios, sino con compromisos, coerciones y corrupción. Pero cuando la crisis fiscal-militar se agudizó y el régimen se negó a pactar, su práctica institucionalizada demostró ser insuficiente; tuvieron que recurrir entonces a los principios y a quienes los sustentaban. Declarándolos, se *podrían* abolir los privilegios y la superstición y convocar a la nación a las armas. En realidad, la retórica de Barnave, Brissot, Danton y Robespierre tuvo mucho de cálculo. Pero, mientras estuvo en suspenso la política práctica, tuvieron un poder ideológico característico: la habilidad de movilizar al pueblo para que llevara a cabo acciones sin posibilidad de retorno, mediante la invocación de principios y emociones que fluían a lo largo y ancho de las infraestructuras escritas y orales que había generado la crisis.

La muchedumbre, los panfletos, las reglas clásicas de composición y de retórica, todo se daba cita en las asambleas revolucionarias francesas, a medida que los discursos, los movimientos y el público

interactuaban en un clima de intensas emociones. Allí la enunciación de los principios se teñía de un contenido emocional, ritualista y ético que habría resultado ridículo en una situación no revolucionaria. Los acontecimientos llegaron demasiado lejos incluso en Francia. La búsqueda obsesiva de la «virtud» y de la «pureza» de Robespierre y Saint-Just ocasionó su propia caída. Su frecuente rechazo del compromiso los hizo sospechosos de intrigas dictatoriales; sin embargo, permanecieron curiosamente pasivos ante el golpe de Termidor en su contra.

De modo que el segundo nivel del poder ideológico consistió, tanto en Francia como, a veces, en América, en la habilidad para movilizar al pueblo por principios que tendían a cumplirse. Los ideólogos manipularon a sus seguidores y los coaccionaron moralmente para que realizaran declaraciones y dieran pasos que difícilmente podían desandarse. Una vez abolidos los privilegios, ningún político habría podido defenderlos en el clima de la revolución. Los políticos prácticos podían echarse atrás respecto a ciertos detalles, pero nunca respecto al principio de la abolición. Francia se encontraba en un continuo estado de cambio. Declarando traidores a la causa o a la nación a los aristócratas o a los vecinos ricos, se les podía arrastrar hasta la guillotina, confiscar sus propiedades y hacer añicos las redes segmentales de deferencia. Luis XVI fue ejecutado por traicionar a la nación, como declaró la Asamblea Nacional, y este hecho polarizó Europa en dos frentes armados. La nación se declaró en armas y fue armada, con sus correspondientes consecuencias globales. Se redactaron las constituciones que encarnaban los grandes principios sobre los derechos humanos fundamentales. La constitución americana aún se imponía a la práctica política. La lucha de clases del siglo XIX en Francia se plasmó en constituciones rivales.

En estas coyunturas, las elites del poder ideológico establecieron principios extraídos en parte de su anterior experiencia en las redes de alfabetización discursiva. Los americanos optaron por los principios legales y protestantes; los franceses, por los de la moral ilustrada. Naturalmente, había también un fuerte contenido económico-político en los derechos «evidentes», la nación igualitaria sin privilegios y la nación en armas, que reflejaba el descontento de las clases obligadas a pagar impuestos. Pero esa generalización se produjo en la interacción de los escritos y los discursos de la vanguardia ideológica con los lemas de las asambleas populares, los panfletos y las masas. En la interacción dinámica de comunicados orales y escritos, los ideólogos

descubrieron y explotaron las fórmulas sencillas y los sentimientos populares, y aprendieron técnicas muy útiles para la materialización de los principios ideológicos. Habían encontrado los principios «trascendentes» de la organización del poder.

No cabe duda de que los revolucionarios dependían de las organizaciones económicas, políticas y militares para institucionalizar sus reglas, pero también aquéllas cambiaron en virtud de la ideología. En Francia, y en menor medida en América, los principios trascendentes fusionaron el poder político y económico en una ciudadanía más activa, que movilizó a la nación y la clase, especialmente en los ejércitos, como ha ocurrido en todas las revoluciones modernas. Este Estado-nación contaba con una capacidad de movilizar el poder colectivo muy superior a la del antiguo régimen y podía forzarlo a reformarse para sobrevivir. El poder ideológico sólo fue decisivo en algunas coyunturas revolucionarias, pero fueron coyunturas de importancia histórica para el mundo.

Con todo, en la Europa central aparecieron ideologías más conservadoras, difundidas a través de cauces estatistas. El luteranismo, tradicionalmente reforzador del Estado en todo el norte de Alemania, lo confirma; otras iglesias cooperaron con menos gusto con el Estado y sufrieron numerosas divisiones en su base. La administración, las escuelas religiosas, los ejércitos y las capitales crecieron a mayor ritmo que el capitalismo comercial. La alfabetización discursiva prosperó entre los clientes del antiguo régimen y, en menor medida, entre la pequeña burguesía. La tasa de alfabetización, aunque no rebasaba el 25 por 100 en Alemania, aumentaba sin cesar. Oficiales del ejército, funcionarios, maestros y clérigos dominaban las academias, los clubes y los periódicos (Blanning, 1975). Las ideologías radicales atraían menos a los empleados y clientes del absolutismo, aunque muchos de ellos aludían a un conflicto entre la educación y los privilegios y se consideraban *Mittelstand* o *Bildungsstand:* «estado medio» o «estado educado» (Segeburg, 1988: 139 a 142). El descontento fiscal era menor en muchos estados alemanes (no en Austria) porque obtenían gran parte de sus ingresos de las regalías y las tierras de la corona (véase el capítulo 11). Así se explica que los reformadores políticos alemanes, molestos por la imposición fiscal y militar como en otras partes, se mostraran menos airados.

No obstante, las redes de alfabetización discursiva de la Europa central escaparon al control estatal en otro sentido. Al contrario que en Francia y Gran Bretaña, entre las clases altas no coincidían las

fronteras estatales y las comunidades lingüísticas. El Estado austriaco era mayor que cualquier comunidad lingüística; los estados alemanes, mucho más pequeños. Austria gobernaba sobre nueve grandes lenguas y otras muchas de menor importancia. En cuanto a Alemania, en 1789 contenía en su territorio más de trescientos estados y unos mil quinientos principados de pequeño tamaño; en 1815 sobrevivían treinta y nueve de ellos. Ambos Estados contaban, además, con dos de las grandes comunidades religiosas: protestantes y católicos (en Austria existían también iglesias ortodoxas orientales). Así pues, tanto en Austria (en un primer momento) como en Alemania, y al contrario que en Francia y Gran Bretaña, la alfabetización discursiva era en cierto modo apolítica, sin orientación positiva o negativa hacia el Estado, y producía lo que suele describirse como un fermento nacional, menos mundano y más limitado desde el punto de vista «cultural», en una intelectualidad más modesta.

En los movimientos románticos de Alemania y la Europa central, los intelectuales exploraban más las emociones y el alma que la política y la razón. Schiller no definía la «grandeza» de Alemania como un producto político, sino como «una profundización en el mundo espiritual». La ausencia de un Estado central permitió a los intelectuales inventar ese «espíritu universal»: lo que triunfó fue la *Bildung* (mezcla de educación formal y cultivo de la moral), no la geopolítica. Para Hölderlin, una «Alemania sacerdotisa» habría de guiar «a los príncipes y a los pueblos». Alemania no ejercería el poder político o militar, sino el ideológico; sería un ideal cosmopolita. Schiller y Goethe escribieron: «¡Alemanes!, desechad la esperanza de convertiros en una *nación* y educaos ... como seres humanos» (Segeburg, 1988: 152).

Los intelectuales alemanes estudiaban historia, literatura, filosofía y el medio de comunicación por excelencia: el lenguaje. Codificaron y gramaticalizaron el alemán, y en ello fueron imitados por otros pueblos europeos: polacos, magiares, checos, eslovacos y otros eslavos. Los materiales se extrajeron, como era de esperar, de las comunidades lingüísticas existentes. Los checos de distintas regiones y clases hablaban distintos dialectos de una lengua mutuamente inteligible, que les proporcionaba un cierto sentido de comunidad, pero pocos de ellos, como ha demostrado Cohen (1981), identificaron este hecho con una identidad «nacional» plena. El checo era la lengua de unas identidades especializadas, limitadas a la vida privada y la comunidad local; el alemán, la lengua de unas identidades especializadas procedentes de los sectores públicos del capitalismo y el Estado. Los que

utilizaban esta última solían llamarse a sí mismos «alemanes», a pesar de sus apellidos checos. Las identidades intensivas y extensivas no formaban una unidad. Los filólogos y los intelectuales protonacionalistas no parecían una amenaza para el Estado. En efecto, fueron muchos los Estados, iglesias e incluso nobles del antiguo régimen que fomentaron la normalización de la lengua con el fin de facilitar sus propias tareas de gobierno. Sin embargo, este hecho acabó por subvertir sutilmente el poder estatal porque fomentó aquellas identidades de la comunidad que iban a rebasar o subvertir las fronteras estatales.

Las identidades «nacionales» de estos ideólogos eran notoriamente apolíticas pero no carecían de implicaciones. Asumieron la llamada ilustrada a la razón, la educación y la alfabetización para modernizar la sociedad, acompañada a menudo de ideas políticas liberales. Pero no faltaban corrientes de tendencias conservadoras (Droz, 1966). Para los románticos alemanes, lo que generaba el progreso no era el individuo, sino la comunidad (*Volk*). Herder descubrió un *Volksgeist* en las canciones folclóricas y los dialectos vernáculos, que proyectó hacia el pasado; creía estar reviviendo, no creando, la nación alemana. En otro contexto político estos hechos habrían podido fomentar reivindicaciones radical-burguesas de democracia limitada, pero en el ambiente de estatismo, clericalismo y escaso descontento fiscal de Alemania, sólo contribuyeron a idealizar un orden pasado; así, el gobierno absolutista articuló una unión espiritual entre el gobernante, la comunidad ancestral y la religión, y los románticos austriacos y católicos idealizaron la comunidad del Sacro Imperio Romano, formada por el emperador, la Iglesia y los estados.

Pero todo esto habría podido tener poca importancia. El protonacionalismo centroeuropeo preocupaba a pequeños grupos de intelectuales, mayoritariamente leales a sus gobernantes y ocupados en formas abstrusas de conocimiento. Hroch (1985:23) lo llama la «Fase A del nacionalismo (o periodo de interés erudito)», que desemboca después en una «Fase B (o periodo de agitación patriótica)» y más tarde en la «Fase C (o aparición de un movimiento nacional de masas)». Hroch busca con rigor explicaciones económicas y de clase, y admite que proporcionan unas cuantas conclusiones bastante simples. Por desgracia, ignora la mayor parte de las causas políticas y geopolíticas. Esto último resulta especialmente sorprendente, ya que los eruditos consiguieron su primer éxito espectacular cuando el militarismo de la

Francia revolucionaria intensificó en toda Europa las identidades nacionales y de clase.

4. *El militarismo posterior a 1792*

Desde 1789 Francia arrebató a Gran Bretaña y los Estados Unidos el papel que habían desempeñado para los modernizadores, lo que Bendix denomina «sociedades de referencia». La revolución atrajo en un primer momento a todos los reformistas, pero cuando se hizo violenta y atacó al antiguo régimen en otros países, se transformó en un ejemplo terrible para todos aquellos que no se consideraran radicales. En ese momento, el antiguo régimen y la alta burguesía comprendieron que sus luchas intestinas podían conducirlos al abismo. Establecieron compromisos y crearon unos ejércitos y una administraciones estatales más «nacionales». Francia fue derrotada por unas naciones que sólo lo eran a medias.

La rápida conversión de Francia en un Estado-nación entró en un periodo de ralentización. Una contrarrevolución puramente burguesa habría podido adoptar la estrategia americana y descentralizar Francia como precaución contra futuros levantamientos populares. Pero Napoleón no representaba a la burguesía, sino sólo a sí mismo. Era un dictador y un general que se apoyaba en un formidable ejército nacional y en un Estado centralizado, a los que imprimió un nuevo vigor. El código napoleónico, un cuerpo de leyes comprehensivo, desarrolló las reformas legales del Directorio; se realizaron parcialmente los intentos revolucionarios de centralizar la administración (véase capítulo 14); la educación se centralizó por completo; y las jerarquías del Estado y de la Iglesia se reconciliaron. Napoleón institucionalizó el Estado-nación al tiempo que mutilaba la ciudadanía política. Tras su caída, la monarquía y, con efectos más duraderos, un clericlarismo forzado a volver al plano local-regional, se encargaron de debilitar al Estado-nación hasta 1848. El triunfo final del Estado-nación republicano comenzaría en la década de 1870.

Las estructuras sociales de Rusia y Gran Bretaña fueron las menos afectadas directamente por los ejércitos franceses. Ninguno de estos países soportó una ocupación al uso o una humillación militar. Sus formaciones militares tradicionales respondieron adecuadamente: por un lado, la marina británica y la sustanciosa ayuda a los europeos para la guerra terrestre; por otro, la autocracia rusa que, respaldada

por el «general Invierno», dirigió a la nobleza y el campesinado en defensa de la patria. El Terror y Bonaparte convirtieron a Francia en una sociedad de referencia negativa y retardaron las reformas internas. La autocracia permitió al zar Alejandro abandonar la reforma y volver a la reacción sin graves conflictos y sin estimular el surgimiento de una nación rusa.

Durante las guerras, la pequeña burguesía británica se dividió y los radicales sufrieron la represión. Pero las presiones fiscales vinieron a forzar la reforma política y económica. La pequeña burguesía pactó con el antiguo régimen, y la ciudadanía política quedó garantizada para los propietarios. La nueva «clase-nación gobernante» consideraba que sólo ella podía pactar una evolución gradual y, gracias a su cualificación moral, gobernar un imperio de pueblos salvajes y «de color». Con la institucionalización del *laissez-faire*, la nación británica parecía pacífica; el disfrute de su poder imperial hacía menos necesaria la agresión. Su nacionalismo era complaciente y se sentía realizado; sólo resultaba antipático para las colonias lejanas. El paso del Estado nacional al Estado-nación pleno se produjo en Gran Bretaña con una suavidad relativa (véase capítulo 16).

El influjo francés fue mucho mayor en el continente. Francia hacía propaganda de la libertad de opinión, de prensa y de asociación; de la igualdad ante la ley, el fin de los privilegios, la expropiación de los bienes de la Iglesia, la libertad de culto, la libertad económica para los gremios y otras corporaciones y la ciudadanía política para los varones con propiedades. Bonaparte abolió la ciudadanía política pero no la civil. En 1808 escribía a su hermano Jerónimo, recién nombrado rey de Westfalia:

> En Alemania, como en Francia, Italia y España, el pueblo ansía la igualdad y el liberalismo. Las ventajas del Código Napoleónico, el procedimiento legal ante un tribunal público, el jurado, todo ello deberá caracterizar tu monarquía ... Tu pueblo ha de disfrutar de una libertad y una igualdad desconocidas en el resto de Alemania [Markham, 1954: 115].

La mayor parte de Europa se encontraba gobernada por dinastías lejanas. Aún se mantenían las brasas del descontento entre las poderosas aristocracias locales y regionales y las oligarquías de las ciudadas, y en aquellos lugares donde las iglesias locales eran distintas a la de la dinastía. Las relaciones del poder intensivo local-regional no reforzaron allí el Estado extensivo. En amplias zonas de Italia, los Paí-

ses Bajos de dominio austriaco, Polonia e Irlanda, la nobleza o la alta burguesía —apoyadas en el clero en las poblaciones pequeñas— reunieron a las fuerzas locales para acoger a los franceses como libertadores «nacionales». Sus «naciones» fueron a menudo tradicionales, segmentales y particularistas: la residencia territorial unía a los notables, que gobernaban sirviéndose de sus relaciones de parentesco. Pero los grupos burgueses y pequeño burgueses en las zonas económicamente avanzadas —Países Bajos, ciertas partes de Suiza y algunas ciudades italianas— abrazaron un jacobinismo más laico y democrático. La nación debía encarnar la ciudadanía civil y política para todos los hombres o, mejor dicho, todos los hombres con propiedades. Ni siquiera estas zonas se encontraban muy industrializadas en la década de 1790, pero eran comerciales y urbanas. Sus radicales creyeron que el gobierno pasaría de las dinastías, las aristocracias y las clientelas particularistas al «pueblo» universal de los ricos.

Los líderes de los «patriotas», ya fueran clericales conservadores o radicales, y de los movimientos de clase procedían sobre todo de las profesiones ideológicas: curas, abogados, profesores, impresores y periodistas, cuyas tropas de choque solían ser estudiantes y seminaristas. En la atrasada Irlanda se dio el caso curioso de Wolfe Tone, un abogado protestante y fanático de la Ilustración laica que dirigió la rebelión campesino-clerical contra los británicos. La «burguesía emergente», es decir, la burguesía industrial aparecía escasamente representada en los movimientos patrióticos de toda Europa. Por ejemplo, ni uno solo de los varios cientos de estados alemanes (entre ellos, los más débiles) fue derribado por los patriotas; sólo cayeron ante las armas francesas. El estatismo predominante y la vía luterana a las ideologías discursivas produjeron pocos patriotas en Alemania (Blanning, 1974: 305 a 334).

En otros lugares, los patriotas consiguieron crear federaciones intensivas y transnacionales de redes de alfabetización discursiva. A medida que se acercaba el ejército francés, cundían las logias masónicas, los clubes de ilustrados, los jacobinos y las sociedades secretas. Aunque pequeños y poco representativos (sólo en los Países Bajos de dominio austriaco pudieron organizar un partido de amplia base popular, los *vonckistas*), sus sublevaciones confundían a los estados locales. Más tarde formaron milicias auxiliares y administraciones clientelistas. En torno a las fronteras francesas, los patriotas proveyeron de personal a las «repúblicas hermanas» protegidas por el ejército galo.

En ocasiones se unió a este fenómeno un segundo e intenso chispazo de carácter lingüístico. Apelando a la ayuda del pueblo local, los patriotas presentaron sus reivindicaciones en escritos redactados en las lenguas vernáculas, que no solían coincidir con la que hablaba la dinastía reinante, aunque tampoco se trataba de la lengua hablada por las clases bajas, cuyos numerosos dialectos eran a veces mutuamente inteligibles, pero la necesidad de ampliar su capacidad de comunicación llevó a los patriotas a desarrollar una intensa actividad lingüística. También los revolucionarios franceses habían tratado de extender su idioma en ámbitos populares. La indagación del abate Grégoire, en 1790, reveló que tres cuartas partes de la población conocían algo de francés, pero sólo poco más de un 10 por 100 era capaz de hablarlo con propiedad. Como declaraba el Comité de Salvación Pública en 1794:

> La monarquía tiene buenas razones para querer una Torre de Babel; pero en una democracia, permitir que los ciudadanos permanezcan ignorantes de la lengua nacional e incapaces de controlar al gobierno significa traicionar a la patria y no aprovechar las ventajas de la prensa escrita, pues cada editor es un maestro de la lengua y de la legislación ... La lengua de un pueblo libre ha de ser una y la misma para todos [Kohn, 1967: 92].

En Italia, Polonia y los Países Bajos estos hechos sirvieron para dar mayor realce a la comunidad lingüística, al clero, que aún tenía en sus manos gran parte de la educación, y a algunos oscuros filólogos.

Al parecer, el término «nacionalismo» se empleó por primera vez en Alemania, en 1774, y en Francia, en 1798, aunque aún no implicaba agresividad. Los líderes de Francia, a la que se llamó *la grande nation* desde 1797, no se consideraban enemigos de otras naciones; éstas eran aliadas en la lucha contra las dinastías reaccionarias por la implantación de la libertad y la paz universales (Godechot, 1956; Mommsen, 1990). Pero a medida que las guerras intensificaban la movilización masiva, se desarrollaban dos procesos. En primer lugar, las necesidades de dinero y recursos humanos impusieron limitadas reformas políticas y económicas. Esto apartó paulatinamente a los Estados del particularismo segmental, considerado ya corrupto, y los indujo a adoptar principios más universales respecto a la moralidad, la administración y el servicio militar. En segundo lugar, la organización de la guerra —con un 5 por 100 del total de las poblaciones re-

clutado, y probablemente la mitad de los excedentes agrícolas e industriales invertidos en las máquinas de guerra— suponía de hecho la preparación de los «pueblos» para el enfrentamiento mutuo. En Francia y Gran Bretaña, los países combatientes de primera línea, alimentó un nacionalismo popular agresivo a partir de 1802, una vez que tanto el jacobinismo británico como la contrarrevolución francesa habían comenzado a retroceder y ya nadie dudaba de que ambos países se enfrentarían a muerte. Ambos compartieron abundantes estereotipos nacionales negativos. Según una leyenda local, cuando los ciudadanos de West Hartlepool encontraron un mono vestido de uniforme, que el mar había arrojado a su playa desde un barco, lo ahorcaron creyendo que era un francés.

El crecimiento del nacionalismo en el continente fue más complejo [3]. Al principio, se produjeron escisiones entre las distintas poblaciones, especialmente en las zonas avanzadas. Por otra parte, muchas de las reformas francesas resultaron populares, en especial los códigos civiles. La napoleónica Confederación del Rin permitió la modernización de los estados de tamaño medio (como Baden, Württemberg y Baviera) y absorbió a los más pequeños, contrarrestando así la potencia de Austria. Las industrias se beneficiaron de la demanda francesa de uniformes, armas y forraje. Pero la propia Francia alimentó el fuego de los nacionalismos locales cuando la «liberación» se tornó imperialismo. Los acuerdos comerciales de carácter bilateral la favorecían; como resultado, la riqueza, los inventos y los trabajadores cualificados acababan a menudo en su territorio. En 1799 las rebeliones contra «el francés» se extendían por todas partes. Algunas enarbolaban la bandera conservadora del antiguo régimen y la antigua religión; otras proclamaban en términos radicales la autodeterminación nacional. Como en Inglaterra, aparecieron estereotipos del «carácter nacional» tomados del carácter de los individuos. Los alemanes se tenían por gentes abiertas, rectas y temerosas de Dios; los franceses eran para ellos maliciosos e informales. La nación y *la grande nation* ya no eran una misma cosa.

---

[3] Hobsbawm (1962: 101 a 116) ha realizado una síntesis breve aunque perspicaz de estos nacionalismos. Palmer (1959), otra no menos aguda pero más amplia. La de Godechot (1956) es valiosa hasta 1799; para los detalles de los casos véanse, después, Dunan (1956), Connelly (1965), Devleeshovwer *et al.* (1968), y Dovie y Pallez-Guillard (1972). Para un estudio contrastante de Renania, leal a Francia, véase Diefendorf (1980).

El propio ejemplo de Bonaparte agravaba la contradicción. Su carrera, que demostraba adónde podía encumbrar el mérito a un burgués de nacimiento, había inspirado a los patriotas radicales de toda Europa. Sin embargo, se enfrentó al nacionalismo y sólo apoyó los movimientos patrióticos cuando se ceñían a sus intereses personales (Godechot, 1988: 23 a 26). Creó un imperio dinástico, no una confederación de Estados nacionales soberanos. Nombró reyes a sus parientes y a sus mariscales, y los casó con las familias reales europeas. Él mismo se divorció de Josefina para desposar a la hija mayor de Francisco de Austria en 1810. Como apuntaba la coplilla vienesa:

> Las enaguas de ella y los calzones de él
> nos unen ahora con el francés.
> [Langsam, 1930: 142]

A medida que el gobierno imperial entraba en un ciclo de revueltas y represiones, incluso sus reyes-clientes aconsejaron hacer concesiones a los patriotas. Pero Bonaparte apenas suavizó su despotismo. Aún así, poco habría importado de haber ofrecido paz y prosperidad, pero las guerras sólo traían consigo los impuestos, la conscripción y el bloqueo británico. En 1808 prácticamente todos los patriotas se habían vuelto contra Napoleón; a partir de 1812 incluso sus colaboradores activos habían desertado de lo que era ya una causa perdida.

¿Pero adónde dirigirse, entonces? Los patriotas conservadores —nobles y clérigos capaces de movilizar a los campesinos— pusieron en marcha en la atrasada España y en los montañosos territorios de Suiza y el Tirol la guerrilla, una forma de guerra segmental e intensiva, de carácter local-regional. En otros lugares se necesitaron grandes ejércitos para expulsar a los franceses. Como había ocurrido durante la revolución, y más adelante durante ese mismo siglo, la guerra entre grandes ejércitos consolidó el Estado «único e indivisible». Un patriota milanés percibía así la fragilidad militar del federalismo italiano:

> La facilidad con que puede ser invadida Italia, las ... envidias nacionales que surgen en la actualidad entre las repúblicas confederadas y la torpeza con que actúan las federaciones me mueven a rechazar el proyecto federal. [Italia] necesita un gobierno capaz de ofrecer la mayor resistencia posible a la invasión; y ese gobierno sólo puede ser la *república, una e indivisible* [Godechot, 1988: 23].

Recomendaba una constitución para Italia basada en la francesa de 1793, es decir, la del Estado que se había resistido con mayor éxito a la invasión extranjera.

Lo que resultaba utópico para Italia podía hacerse realidad en el centro de Europa gracias al poder de los Estados austriaco y prusiano. Los patriotas alemanes se plantearon con realismo la elección entre un gobierno francés o el mantenimiento de esas monarquías absolutas. Los auspicios no eran buenos ni para los estados alemanes más pequeños ni para los patriotas radicales, comprometidos por el apoyo que habían prestado a Bonaparte y debilitados ahora por su caída. El liberalismo parecía aliado con el particularismo y con el fracaso militar de los estados menores. El liberalismo y el nacionalismo radical sólo habían marchado juntos en Alemania; pero en 1815 ambos vacilaban.

Las decisivas victorias francesas en Ulm y Austerlitz, Jena y Auerstadt habían devastado Austria y Prusia, respectivamente, en 1805-1806. Sin embargo, ambas monarquías continuaban en pie. La derrota las asustó demasiado para plantearse la reforma; aprendieron a añadir una módica cantidad de nacionalismo al absolutismo. Los franceses abolieron pocos privilegios nobiliarios en la Europa central porque necesitaban el respaldo de los aristócratas, pero el Código Civil, la venta de las tierras comunales y eclesiásticas ampliaron el entorno capitalista tanto para los nobles como para los burgueses. En Francia, la revolución había fomentado el capitalismo y el liberalismo jurídico y político. Con una gestión cuidadosa del régimen, la modernización alemana podría garantizar el capitalismo y la burocracia sin concesiones a la libertad; no haría falta la representación parlamentaria, bastaría con la administrativa.

Después de Jena, los reformistas prusianos, en gran parte oficiales con educación universitaria, hicieron grandes progresos; entonces, se avinieron al compromiso (Grey, 1986; véase el capítulo 13 para los pormenores). Su proyecto de conceder el voto a todos los hacendados en una asamblea nacional resultó derrotado, pero se realizó parcialmente en el plano municipal. Se racionalizó la administración central, sujeta a la ley y abierta a la burguesía educada. La educación pública y la alfabetización discursiva llegaron a una base social más amplia gracias al liderazgo prusiano y luterano. Se emancipó a los siervos (y a los judíos) y se abolió la corvea. En contrapartida, los campesinos entregaron más de un tercio de sus tierras a los señores. Éstos disponían ahora de trabajadores libres sin tierras, que ya no

eran siervos. El capitalismo agrario se desarrolló. En los ejércitos predominó la conscripción universal y la promoción meritocrática, y se crearon las escuelas militares superiores. Se permitió a todos los súbditos utilizar, por primera vez, los colores prusianos como insignia nacional. Se creó la milicia del *Landwehr*, una pálida imitación del ejército francés de los ciudadanos (véase el capítulo 12). En 1813 el rey declaró la guerra a Francia, apelando «a mi pueblo», aunque el «mi» y el «pueblo» resultaran términos algo contradictorios. El entusiasmo del *Landwehr* durante las campañas de 1813 a 1815 aumentó las esperanzas liberales. Hegel, partidario de Bonaparte en 1806, veía ahora en la burocracia prusiana una «clase universal» capaz de realizar las potencias del espíritu humano. Aunque parezca extraño, muchos nacionalistas liberales alemanes miraban hacia Prusia con esperanza.

Después de 1815 se produjeron algunas reacciones. Como en Austria, la monarquía y la corte temían armar a la chusma. El comandante de la guardia de corps y el ministro de la policía alertaban: «Armar a una nación significa organizar y facilitar la sedición y las rebeliones» (Ritter, 1969: I, 103). Pero muchos oficiales profesionales apoyaban el cambio, y el *Landwehr* se salvó, aunque no como milicia permanente sino como fuerza de reserva. En definitiva, se desarrolló una identidad nacional luterana y prusiano-alemana, cuyos lazos religiosos y sentimientos nacionales se basaban en la lealtad a un Estado fuerte.

Las opciones de los Habsburgo eran distintas. Cuando en cierta ocasión recomendaron un patriota austriaco al emperador Francisco, éste replicó: «Será un patriota para Austria, pero lo importante es que sea un patriota para mí» (Kohn, 1967: 162). Los Habsburgo no podían gobernar un Estado nacional. Eran una dinastía que regía un imperio plurilingüe y pluriprovincial, respaldada en algunas provincias por la iglesia católica. Aunque el corazón de Austria era germánico, gran parte de su población hablaba otras lenguas. Pero la dinastía poseía el liderazgo titular del Sacro Imperio Romano Germánico desde hacía casi cuatrocientos años, y los austriacos intentaban conjurar un nacionalismo alemán alternativo. Oigamos un informe francés sobre las actividades de un confidente del archiduque Juan, que posteriormente encabezaría una rebelión contra los franceses:

El barón Hormayr ... ha emprendido la edición de una publicación periódica titulada *Archivos de geografía, historia, política y ciencia militar*. Bajo este tí-

tulo aparentemente inocente continúa imitando a Thomas Paine en la prédica de doctrinas revolucionarias, que, según él, traerán a Alemania la regeneración y la unidad de ese vasto país bajo una nueva Constitución. El señor de Hormayr no suele hablar con sus propias palabras. Por el contrario, cita con astucia a un gran número de escritores alemanes, justamente apreciados, que nunca pensaron ni de lejos en la revolución. No ha faltado siquiera la contribución de Lutero ... Los temas favoritos de estas citas son la *unidad* y la *indivisibilidad* de Alemania, así como la conservación de sus *costumbres*, usos y lenguas. Como archivero histórico e imperial, el señor de Hormayr tiene acceso a muchos pormenores sobre la antigua unidad alemana, que nosotros ignoramos por completo [Langsman, 1930: 49].

Es decir, un archivero preocupaba al ejército de ocupación, pero también a su propio emperador.

Francisco deseaba librarse de los franceses, pero no con las condiciones del pueblo. Admitió el compromiso, reformó el ejército, creó el *Landwehr* en Austria y Bohemia, prometió una reforma general (que nunca llevó a cabo) e impulsó un levantamiento contra los franceses en 1809, apelando a la «nación alemana» como «aliada» y «hermana» de los Habsburgo y de Austria. La gran derrota infligida en Aspern a Napoleón por el archiduque Carlos puso fin al mito de su invencibilidad, pero Napoleón logró recobrarse y redujo a los generales austriacos, que no tuvieron más remedio que pedir la paz. Con todo, Austria mantuvo el liderazgo de la resistencia germana con el ejército más potente, lo que le permitió nombrar al archiduque Carlos supremo comandante aliado en el enfrentamiento final con Napoleón. Con el renacimiento del poder militar de los Habsburgo, la «carta alemana» continuó resistiendo. Francisco rechazó la corona imperial. Los oficiales recibieron instrucciones de aludir sólo al patriotismo austriaco, incluso de referirse a Napoleón con respeto, «puesto que, al fin y al cabo, es el yerno de nuestro rey» (Langsam, 1930: 160). El dinasticismo segmental había resucitado.

Pero las guerras empeoraron los problemas de las regiones y nacionalidades austriacas, y los Habsburgo se veían obligados a soportar a los patriotas jacobinos en Italia, Polonia y los Países Bajos. La salida de escena de Napoleón restañó las heridas por breve tiempo, pero los disidentes se habían envalentonado con el periodo napoleónico y era difícil que sus reivindicaciones se esfumaran. A lo largo del siguiente (y último) siglo de gobierno de los Habsburgo, los nacionalistas atacaron la monarquía con el argumento de que un pueblo, definido por su cultura étnica y lingüística pero regido por extranjeros,

necesitaba tener su propio Estado. Al fin y al cabo, triunfaron las naciones subvertidoras del Estado.

El desarrollo del industrialismo o el capitalismo no causó directamente los movimientos en territorio austriaco (como han sostenido los marxistas y Gellner, 1983: capítulo 2), puesto que aparecieron en todas las clases y grupos económicos. El nacionalismo prosperó en toda Europa en niveles muy distintos de desarrollo capitalista e industrial (Mann, 1991); y ésta es la única perversión que detecto en aquella concepción revisionista del marxismo según la cual el nacionalismo se debió a la «desigualdad del desarrollo» (como ha defendido Nairn, 1977). Los nacionalistas no dijeron prácticamente nada sobre las clases, el capitalismo o el industrialismo (hasta la aparición, mucho más tarde, de los nacionalismos campesinos). ¿Por qué tendríamos que creer que pueden reducirse a estas fuerzas?

Hroch (1985) ha efectuado el análisis más preciso de las clases y los grupos económicos, basándose sobre todo en muestras de los miembros de asociaciones nacionalistas en ocho pequeñas naciones subvertidoras del Estado de toda Europa (entre ellas, dos minorías austriacas, los checos y los eslovacos). La fase del nacionalismo que él llama B, en la que varios movimientos patrióticos significativos comenzaron su labor de agitación popular sin conseguir aún un respaldo masivo, corresponde aproximadamente a la primera mitad del siglo XIX en la mayoría de los territorios austriacos. Hroch sustenta en estos datos varias generalizaciones. En muchos de aquellos episodios participaron también los intelectuales (con su ala clerical definitivamente anulada), pero la mayoría de los patriotas pertenecían a sectores profesionales de las ciudades, probablemente a los niveles más altos a que podían aspirar los sujetos de las minorías oprimidas. La burguesía directamente productiva se encontraba tan poco representada como todos los sectores de la industria, pese a que los nacionalistas eran más activos en las áreas comerciales más desarrolladas.

Pero los países de Hroch no incluyen las regiones más avanzadas y subvertidoras del Estado dentro del territorio austriaco, los Países Bajos bajo su dominio y el norte de Italia. En el momento en que comenzaba a fermentar el patriotismo se encontraban muy urbanizadas y disfrutaban de un gran desarrollo comercial (como en el caso de los checos a su debido tiempo). Pero Polonia, Hungría, Eslovaquia y los Balcanes, pese a ser sociedades mucho más agrarias y atrasadas, abrazaron con idéntico entusiasmo al nacionalismo. Habría que contar quizás con un nivel mínimo de alfabetización y comunicación, facili-

tado por el mercado, a partir del cual resultaba viable la organización de los patriotas, como, en definitiva, parece concluir Hroch. Pero *más allá de ese nivel de movilización estaba la diversidad económica* y de clase. En efecto, las asociaciones nacionalistas de Hroch no fueron siempre los actores más significativos. Durante la revolución de 1848, la mayoría de los líderes de los movimientos «nacionales» de implantación provincial fueron nobles que buscaban la representación sólo para sí mismos (Sked, 1989: 41 a 88). Los nobles magiares mantuvieron el dominio de la situación, pero a la mayor parte de las noblezas se les fue de las manos. Como observa el propio Hroch, el nacionalismo de masas subvertidor del Estado (la fase C, que tuvo lugar sobre todo a finales del siglo XIX) tuvo una base campesina. ¿Cómo podría haber estimulado a todos estos nacionalistas una motivación común de clase (*cf.* Sugar, 1969)?

Mi propia explicación se centra en el impacto político del militarismo y de las ideologías que hemos visto con anterioridad. Gran parte de las quejas se referían a la economía política del Estado: a sus exacciones cada vez más onerosas de dinero y recursos humanos y al botín de los cargos, es decir, costes y beneficios. Pero el descontento fiscal se expresaba aquí con carácter territorial, es decir, a través de la región. Este hecho tuvo consecuencias desafortunadas para la cristalización «nacional» del Estado. El descontento por la fiscalidad o las concripciones produjo en Gran Bretaña levantamientos de clase que tanto la baja nobleza local como los labradores ricos pudieron manipular, pero en el descontento de base territorial eran los notables provinciales quienes manejaban a los revoltosos y mandaban sobre las milicias, y a veces sobre tropas regulares, contando con la simpatía inicial del bajo clero y movilizando entre las familias la creencia de estar sufriendo una agresión extranjera. La representación política se estructuró tanto a través de la comunidad local y la región como de la clase: tan importante era *dónde* localizar la ciudadanía como *quién* la obtendría.

Pero Austria no constituía un caso único, también los Estados Unidos se habían visto desgarrados por la lucha de lo nacional contra lo regional. A mediados del siglo XIX los derechos de los estados suscitaron en este último país fuertes pasiones locales, dominaron la política y acabaron por provocar una guerra civil. Durante todo el siglo, los disturbios civiles se extendieron por el territorio austriaco —en 1821, 1830, 1848-1849, 1859, 1866 y 1908—, generalmente instigados por potencias extranjeras. La resistencia local-regional al Estado cen-

tralizador se produjo en los cinco países que estamos tratando, pero sólo en éstos provocó una guerra civil.

Sin embargo, entre los cinco, sólo el nacionalismo austriaco planteó problemas lingüísticos, sobre todo a través del reparto de cargos. Se plantearon entonces dos cuestiones: ¿cuál debía ser la lengua de la esfera pública, en especial, del gobierno, y qué lenguas había que enseñar en las escuelas públicas? Como aduce Gellner (1983), la alfabetización era un capital cultural convertible mediante los cargos dentro del ejército, la administración civil, los tribunales de justicia y la economía capitalista. Con la expansión del capitalismo y los Estados, los empleados públicos y privados comenzaron a proceder de ámbitos lingüísticos no alemanes. Nobles, burgueses y pequeños burgueses mostraban un interés personal en que la lengua local se convirtiera en lengua del Estado. Los Habsburgo no se opusieron, incluso estimularon el bilingüismo dentro del ejército, pero a la hora de recaudar impuestos recurrieron de forma intermitente a la represión, haciéndolos depender fundamentalmente de los cuerpos de funcionarios y la administración central austro-alemana. Otras comunidades lingüísticas fueron bloqueadas desde la administración y los tribunales de justicia, lo que provocó las protestas de los revolucionarios de 1848 (Sked, 1989: 41 a 88).

Pero el nacionalismo lingüístico no se limitó a ser una reivindicación instrumental (como en el modelo de Gellner). La normalización de las lenguas vernáculas locales por parte de clérigos y filólogos cimentó redes públicas de interacción local-regional, que se reprodujeron en las escuelas elementales, en las iglesias y en los intercambios mercantiles. El lenguaje se convirtió en la ideología aglutinadora de una comunidad interclasista, arraigada en la localidad, que establecía el contraste entre un «nosotros», los que hablamos de modo inteligible, y un «ellos», los conquistadores a quien nadie entiende. Los movimientos se dotaron de una legitimidad basada en la «nación», incluso allí donde (como en el caso de Hungría) sólo permitieron la ciudadanía política a la nobleza, o donde (como en Eslovaquia) la «nación» fue el invento de un exiguo grupo de intelectuales. La fusión de estas identidades regionales y lingüísticas explica que el enfrentamiento con los Habsburgo procediera menos de las clases que de unas «naciones» apasionadas y subvertidoras del Estado.

Tanto Bonaparte como los revolucionarios desempeñaron una función de primer orden en esta fase militarista posterior a 1792. Aunque el ascenso de la nación parece inexorable cuando se consi-

dera teleológicamente, desde el siglo XX, el fenómeno avanzó de forma contingente, porque las decisiones de los líderes de la principal potencia agresora tuvieron importantísimas consecuencias geopolíticas. Si Luis XVI se hubiera avenido al compromiso, si los brissotinos habrían previsto que la guerra acabaría por destruirlos; si las tropas francesas se hubieran dispersado en Valmy (como se esperaba que hicieran); si no hubiera salido del Directorio un consumado general, que demostró ser un conquistador implacable; si éste no hubiera tomado la terrible decisión de invadir Rusia ... Todos estos «síes» habrían podido frenar la marea nacionalista.

En todo caso, sí parecía que los acontecimientos de 1815 serían capaces de frenarla. Con la derrota de Francia, se tomaron decisiones políticas tendentes a cortar el nacionalismo de raíz. El Concierto de las potencias y la Santa Alianza de las dinastías actuaron sin ambages contra los patriotas radicales (véase capítulo 8). Aunque Gran Bretaña se había convertido en un Estado-nación, no respaldaba principios nacionales de gobierno para Europa. Puede que el régimen prusiano sintiera la tentación de jugar la carta alemana en su rivalidad con Austria, pero el temor al pueblo mantuvo por el momento a su Estado en un «dinasticismo» segmental. El poder de los Habsburgo era conscientemente dinástico; Rusia no conocía otro modelo. Los Estados Unidos estaban al otro lado del océano y ya no contaminaban con sus gérmenes democráticos a la vieja Europa. Parecía que el mundo se encauzaba por el camino de una modernización cautelosa, gobernado por dos transnacionalismo: las redes formadas por los antiguos regímenes dinásticos y la economía global y liberal de Gran Bretaña.

Tres razones explican por qué no se pudo acabar con el nacionalismo. En primer lugar, las numerosas contingencias de esta breve subfase habían transformado las organizaciones de poder. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos eran ya Estados nacionales que no podían volver al antiguo régimen particularista. Aunque los Estados Unidos mantuvieron su estructura confederal, Gran Bretaña y Francia consolidaron la centralización. Y aunque las situaciones de Austria y Prusia se mantenían más «abiertas», también se habían reforzado las naciones que había en su seno. En segundo lugar, el capitalismo y la modernización del Estado eran ya imparables, porque ambos se identificaban con el «progreso» moral y material que aumentaba la eficacia de los Estados en la guerra. Esta conjunción significaba que las clases y las naciones podrían continuar desarro-

llando su organización política y extensiva. No era inevitable que dominaran los Estados-nación democráticos, ya que tanto la Prusia estatista como Austria, más confederal, lograron sobrevivir durante mucho tiempo, pero el antiguo orden segmental y particularista había decaído sustancialmente. En tercer lugar, el capitalismo industrial vino a incrementar la densidad de la interacción social y transformó las funciones del Estado. Las consecuencias involuntarias de esta fusión produjeron Estados-nación completamente formados durante la cuarta fase de desarrollo, cuya crónica esbozaré en posteriores capítulos.

Conclusión

Durante este periodo tuvo lugar la aparición de las clases y las naciones. Como percibió el propio Marx, el capitalismo del siglo XVIII desplazó *grosso modo* lo que ahora llamamos feudalismo, y se produjo una lucha de clases extensiva y política entre el antiguo régimen y algunos sectores de la burguesía. Pero estos últimos pertenecían casi por completo a la pequeña burguesía, no a la burguesía en su conjunto. La burguesía, el paradigma histórico de una clase ascendente para Marx, estuvo casi ausente del registro macrohistórico. Tendremos oportunidad de ver que Marx también exageró el poder del proletariado, su otro ejemplo de clase ascendente. Incluso en el modo capitalista de producción, las clases son menos extensivas y menos políticas de lo que él y otros muchos han sostenido.

No todo el conflicto entre la pequeña burguesía y el antiguo régimen surgió directamente de una dialéctica económica. La intervención de la cristalización militarista del Estado provocó una crisis fiscal y un grave conflicto entre las elites estatales, los partidos «integrados» y «excluidos», el «pueblo» y la «plebe». Las relaciones directas de producción fueron más particularistas, diversas y adaptables a los compromisos segmentales y seccionales. Gran parte del conflicto entre la pequeña burguesía y el antiguo régimen estalló por la economía política del Estado. Las redes de alfabetización discursiva en expansión ayudaron a las pequeñas burguesías emergentes y a los modernizadores del régimen a trascender su conflicto y modernizar el Estado. Allí donde no pudo institucionalizarse el conflicto elite-partidos, se ahondó la crisis fiscal, permeando la estructura de clase y generando hostilidad. Los revolucionarios, que contaban con

poder ideológico, tomaron entonces las riendas de la situación para transformar la estructura social. Después, los revolucionarios franceses marcharon contra todos los antiguos regímenes europeos. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas intensificaron el militarismo y espesaron aquel brebaje impuro pero embriagador.

Ninguna revolución fue completa; el conflicto entre las clases se produjo de forma parcial y en sordina; las naciones sólo se configuraron a medias. La democracia de partidos se sostuvo a duras penas y de forma desigual, desde el momento en que las clases y las naciones emergentes pactaron con el antiguo régimen. Éste se hizo más capitalista cuando las clases se incorporaron parcialmente a su organización segmental y local-regional. Tanto los Estados como los ejércitos se modernizaron, se profesionalizaron y admitieron en su seno a los hijos de los profesionales con elevada educación; también disminuyó su corrupción y su estructura particularista. Aumentaron los matrimonios entre los elementos del antiguo régimen, la alta burguesía y los profesionales. En Gran Bretaña, el capitalismo conservó rasgos del antiguo régimen comercial; en Alemania, adquirió tintes estatistas. Durante el siglo XIX los nuevos ricos de todos los países se incorporaron tanto a los regímenes nacionales como a las redes de poder segmental y local-regional del antiguo régimen.

La incorporación de la pequeña burguesía (y más tarde la de la clase media; véase capítulo 16) fue más problemática porque su número era mayor y sus demandas de ciudadanía más radicales. El régimen no deseaba casar a sus hijos con las muchachas de *aquella* clase. Sin embargo, se aseguró muchas lealtades mediante la concesión de la total ciudadanía civil y de una parcial ciudadanía política. Los códigos legales asumieron el «individualismo dominante» que combinaba la libertad personal y el derecho a la libre propiedad, aunque se dieron grandes variaciones entre un régimen y otro en la concesión de derechos civiles colectivos tales como la libertad de asociación o de prensa (ninguno concedió a los trabajadores derechos de organización sin trabas). Se concedió a la pequeña burguesía una democracia de partidos con distintos grados de limitación.

Comenzó entonces la era de los partidos políticos de «notables», predominantemente segmentales y controlados por los hacendados más ricos, que se servían tanto del patronazgo, la deferencia, el soborno o de una blanda coerción (por lo general, el voto no era secreto) para persuadir a las clases medias de que eligieran a sus superiores. En los Estados Unidos reivindicaron el sufragio para los

varones adultos (salvo en el sur), pero la región, la religión y la raza permearon las clases, que conservaron sus partidos segmentales en manos de los notables. En Gran Bretaña, los dos partidos de notables extendieron el sufragio para perjudicarse mutuamente. Austria y Prusia se resistieron, pero acabaron por conceder algunas formas de representación, primero local y más tarde central. Dos antidemócratas notorios, Bismarck y Napoleón III se adelantaron a introducir el sufragio universal para los hombres adultos (aunque sólo para asambleas de soberanía limitada). Los partidos de notables incorporaron segmentalmente a la mayor parte de la pequeña burguesía (aunque en las provincias austriacas solían ser contrarios al régimen). El masivo aumento de la densidad social y la aparición de las clases y las naciones supuso una mayor movilización de poder colectivo y distributivo. El «pueblo» y la «plebe» tenían relaciones más directas con los antiguos regímenes, pero éstas fueron más colaboradoras y mucho más variadas de lo que alcanzaron a comprender Marx o cualquiera de los teóricos de la dicotomía que hemos visto en el capítulo 1.

Por mi parte, he presentado una teoría predominantemente modernista de la aparición de las naciones en la historia mundial. Las naciones no son lo opuesto a las clases, por el contrario, ambas surgieron al mismo tiempo y ambas también (aunque en grados distintos) fueron el producto de la modernización producida por las iglesias, el capitalismo comercial, el militarismo y la aparición del Estado moderno. De esta forma, mi teoría combina las cuatro fuentes del poder social. El poder ideológico dominó la primera fase protonacional, cuando la alfabetización discursiva de masas patrocinada por las iglesias difundió identidades sociales más amplias. En la segunda fase protonacional, las distintas combinaciones de capitalismo comercial y modernización del Estado continuaron difundiendo identidades protonacionales (y de clase) más universales, que implicaron roles económicos de carácter particularista, localidades y regiones. En la tercera y decisiva fase, la militarista, el aumento de los gastos provocados por la geopolítica durante el siglo XVIII y principios del XIX provocó la politización de las reivindicaciones regionales y de clase, y con ello las identidades protonacionales evolucionaron hacia el Estado nacional. Al intensificarse las rivalidades geopolíticas, la identidad nacional adquirió por vez primera tintes agresivos, y así fue como las protonaciones se hicieron conscientes de sí mismas y se hicieron interclasistas y, en cierto modo, violentas. Pero la aparición de las naciones (y de la clases) movilizó también una pasión moral carac-

terística, dado que las relaciones del poder ideológico vincularon las redes intensivas de la familia y la comunidad local a la percepción de una explotación extensiva por parte del capitalismo y del Estado militarista. La clase extensiva y política y el descontento nacional se organizaron sobre todo a través de las redes de alfabetización discursiva en manos de una intelectualidad religiosa y laica.

Las clases y las naciones emergentes tenían ya capacidad de influir en las instituciones estatales, pero también ellas se vieron influidas por esas instituciones. Sacudidas por el militarismo y excitadas sus pasiones morales por las ideologías, demandaron un gobierno más representativo que abría el camino a la democracia. Así pues, el origen de las naciones fue, en esencia, los movimientos por la democracia. No obstante, en este punto se vieron enfrentadas a un dilema: democratizar el Estado central o reducir su poder y democratizar los escaños locales y regionales de gobierno. Lo que determinó la elección final fue el entramado de las relaciones de poder político e ideológico.

Desde el punto de vista político, la elección dependió del grado de centralización que presentaran en ese momento las instituciones del Estado. Las británicas estaban centralizadas; las austriacas y las de las colonias americanas, no. En estos últimos países, los abogados de la representación volvieron la vista a las instituciones locales y regionales por creerlas más fácilmente controlables que el Estado central. Desde la perspectiva ideológica, la herencia de las dos primeras fases protonacionales se sentía ahora intensamente, ya que el territorio político se relacionaba de una u otra manera con las comunidades religiosas y lingüísticas, igualmente capaces de movilizar la intensidad local con propósitos extensivos. La cuestión de la lengua generó también una política de educación pública y cualificaciones para los cargos públicos. Cuando estas relaciones de poder político e ideológico centralizaron la totalidad (o el núcleo) de los territorios estatales surgió el nacionalismo reforzador del Estado, como en el territorio continental de Gran Bretaña y (después de las vicisitudes revolucionarias) en Francia. Cuando descentralizaron el Estado surgió un nacionalismo subvertidor, como en el caso de Austria. Los Estados Unidos y Alemania representan casos intermedios. El primero no necesitó un gran refuerzo ideológico para su descentralización política, de ahí que su sentido de la «nación» se mantuviera en un equilibrio ambiguo. El caso intermedio de Alemania es distinto, ya que su descentralización política se produjo dentro de una comunidad ideológica mucho más amplia,

pero también su carácter de nación fue ambiguo, aunque enseguida se encauzó hacia la tercera vía, creadora del Estado.

Numerosas teorías han explicado el nacionalismo partiendo de las relaciones políticas o económicas, o de ambas. Sin embargo, las naciones surgieron del entrelazamiento de las cuatro fuentes del poder social, cuyas relaciones cambiaron a lo largo del periodo. Al comienzo (y ya antes) la Revolución Militar causó repetidas crisis estatales que politizaron y «naturalizaron» las relaciones de clase. La última y más profunda de las crisis llegó a finales del siglo XVIII. Los Estados anteriores se habían mantenido relativamente débiles en casa; aunque con frecuencia bastante autónomos incluso respecto a las clases dominantes, sobre las que ejercieron poco poder. La naturaleza de las elites o de las instituciones estatales apenas había importado a la sociedad, pero ahora le preocupaba bastante. La ciudadanía se ha identificado convencionalmente con el auge de las clases modernas y su acceso al poder político. Pero las clases no son políticas «por naturaleza». A lo largo de la historia, las clases subordinadas se han mostrado indiferentes hacia el Estado o han tratado de eludirlo. Ahora, por el contrario, se encontraban enjauladas en una organización nacional, «metidas en política», por los dos grandes guardianes del zoológico: los recaudadores de impuestos y los oficiales del reclutamiento.

Durante este periodo (y con posterioridad a él) el capitalismo comercial, primero, y el industrial, después, revolucionaron las relaciones de clase. El capitalismo y el militarismo comenzaban a configurar ideologías entre las clases y las naciones. Hasta entonces éstas estuvieron influidas por la movilización moral y religiosa de poder intensivo, pero, desde el punto de vista de la «primacía última» podríamos identificar ya desde el principio del periodo dos fuentes de poder social, la económica y la militar.

Pero en el cruce de las revoluciones militar y económica había generado el Estado moderno, que demostró tener características emergentes de poder. En cuanto a la cuestión representativa, los Estados cristalizaron en varias posiciones distintas, que abarcaban desde una monarquía autoritaria más movilizada a una democracia de partidos embrionaria (más las variantes de los enclaves coloniales). Respecto a la cuestión nacional, el arco va de los Estados-nación centralizados al confederalismo. La última fase de la crisis fiscal-militar aumentó enormemente el tamaño de los Estados y politizó y naturalizó a la clases. No hubo, sin embargo, un aumento del poder distributivo de las elites estatales, pero sí de los poderes colectivos y estructuradores

de las instituciones del Estado, lo que refuerza la importancia de lo que he llamado teoría del estatismo institucional. Así pues, como era previsible, la primacía última se trasladó a una combinación de poder político y económico. Los siguientes capítulos demostrarán que cuando el capitalismo continuó revolucionando la vida económica, las instituciones políticas surtieron un efecto conservador. Sobrevivieron aquellas capaces de contribuir a la resolución de los primeros conflictos nacionales y relativos a la representación de las clases: la Constitución americana; la contestada Constitución francesa; el liberalismo británico del antiguo régimen; la monarquía autoritaria de Prusia y el confederalismo dinástico de los Habsburgo. Todas ellas interactuaron con la Segunda Revolución Industrial para determinar los resultados de la siguiente fase de la lucha de clases, la que se produjo entre obreros y capitalistas.

Por último, he demostrado que las sociedades modernas no tendieron a la democracia y la ciudadanía nacional como parte de una evolución general de los seres humanos hacia la realización de la libertad. Por el contrario, reinventaron la democracia, como lo hicieron en su tiempo los antiguos griegos, porque sus Estados no pudieron sustraerse a ello, como lo hacían los Estados medievales. Lo que llamamos «democracia» no es sencillamente libertad, porque se trata del resultado de un confinamiento social. Giddens describe el Estado moderno como un «receptáculo de poder». Yo prefiero emplear el término más duro de «jaula». A comienzos del periodo moderno los pueblos quedaron atrapados dentro de jaulas nacionales; lo que querían cambiar era las condiciones de su confinamiento en ellas.

Esto ocurrió también durante las dos fases tempranas del crecimiento estatal que he descrito en el Volumen I. Los primeros Estados permanentes, en las «civilizaciones prístinas» del mundo, resultaron del enjaulamiento producido por el cultivo en valles irrigados y de aluvión. Parece que aquellos primeros Estados disfrutaron de instituciones representativas, subvertidas después por la guerra, la concentración comercial y la aparición de la propiedad privada. En una segunda fase, la democracia griega fue también la consecuencia de un enjaulamiento, en parte económico y en parte debido a la guerra hoplita. En el Volumen I, he sostenido que los griegos no fueron necesariamente más libres en materia de política que los persas, sus principales adversarios. El despotismo del Gran Rey persa importaba menos que el despotismo griego de las ciudades-Estado, puesto que los súbditos persas se relacionaban con su Estado en menor medida

que los griegos. En los tres casos —las civilizaciones prístinas, Grecia y el fin del siglo XVIII— el espacio de la jaula se hizo más angosto, y siempre suscitó la misma reacción popular: los prisioneros se preocuparon más de las condiciones de su confinamiento que de la jaula misma.

Bibliografía

Anderson, B. 1983: *Imagined Communities.* Londres: Verso.

Armstrong, J. 1982: *Nations Before Nationalism.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Bendix, R. 1978: *Kings or People: Power and the Mandate to Rule.* Berkeley: University of California Press.

Blanning, T. C. W. 1974: *Reform and Revolution in Mainz, 1743-1803.* Londres: Cambridge University Press.

Chatterjee, P. 1986: *Nationalist Thought and the Colonial World.* Totowa, N. J.: Zed Books for the United Nations University.

Cohen, G. 1981: *The Politics of Ethnic Survival: Germans in Prague, 1861-1914.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Connelly, O. 1965: *Napoleon's Satellite Kingdoms.* Nueva York: Free Press.

Crone, P. 1989: *Pre-Industrial Societies.* Oxford: Blackwell.

Devleeshovwer, R., *et al.* 1968: *Les pays sous domination française (1799-1814).* París: CDU.

Dickson, P. G. M. 1987: *Finance and Government Under Maria Theresa, 1740-1780,* 2 vols. Oxford: Clarendon Press.

Diefendorf, J. M. 1980: *Businessmen and Politics in the Rhineland, 1789-1834.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Dovie, J., y A. Pallez-Guillard, 1972: *L'épisode napoléonien. Aspects extérieurs.* París: Presses Universitaires de France.

Droz, J. 1966: *Le Romantisme allemand et l'État: Résistance et collaboration dans l'Allemagne napoléonienne.* París: Payot.

Dunan, M. 1956: *L'Allemagne de la Revolution et de l'Empire,* 2 vols. París: Centre de Documentation Universitaire.

Gellner, E. 1983: *Nations and Nationalism.* Oxford: Blackwell. [Ed. cast.: *Naciones y nacionalismos.* Madrid, Alianza Editorial, 1988.]

Godechot, J. 1956: *Le Grande Nation. Expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 1799,* 2 vols. París: Aubier.

— 1988: «The new concept of the nation and its diffusion in Europe». En *Nationalism in the Age of the French Revolution,* ed. O. Dann y J. Dinwiddy. Londres: Hambledon Press.

Goldman, L. 1964: *The Hidden God.* Nueva York. Humanities Press.

Gray, M. 1986: «Prussia in transition: society and politics under the Stein reform ministry of 1808». *Transactions of the American Philosophical Society, 76.*

Hall, J. A. 1985: *Powers and Liberties.* Harmonsworth: Blackwell. [Ed. cast.: *Poderes y libertades.* Barcelona, Ed. 62, 1988.]

Hobsbawm, E. J. 1962: *The Age of Revolution, 1789-1848.* Nueva York: Weidenfeld & Nicolson. [Ed. cast.: *La era de la revolución: 1789-1848.* Barcelona, Labor, 1991.]

— 1990: *Nations and Nationalism Since 1780.* Cambridge: Cambridge University Press.

Hroch, M. 1985: *Social Preconditions of National Revival in Europe.* Cambridge: Cambridge University Press.

Kohn, H. 1944: *The Idea of Nationalism.* Nueva York: Collier.

— 1967: *Prelude to Nation-States: The French and German Experience, 1789-1815.* Princeton N. J.: Van Nostrand.

Langsam, W. C. 1930: *The Napoleonic Wars and German Nationalism in Austria.* Nueva York: Columbia University Press.

Mann, M. 1991: «The emergence of modern European nationalism». En *Power, Wealth and Belief· Essays for Ernest Gellner,* ed. J. Hall y I. C. Jarvie. Cambridge: Cambridge University Press.

Markham, F. 1954: *Napoleon and the Awakening of Europe.* Londres: English Universities Press.

Mommsen, W. J. 1990: «The varieties of the nation state in modern history: liberal, imperialist, fascist and contemporary notions of nation and nationality». En *The Rise and Decline of the Nation State,* ed. M. Mann. Oxford: Blackwell.

Nairn, T. 1977: *The Break-up of Britain.* Londres: Verso.

Palmer, R. 1959: *The Age of the Democratic Revolution,* 2 vols. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Ritter, G. 1969: *The Sword and the Scepter: The problem of Militarism in Germany.* Vol. I: *The Prussian Tradition, 1740-1890.* Coral Gables, Fla.: University of Miami Press.

Segeburg, H. 1988: «Germany». En *Nationalism in the Age of the French Revolution,* ed. O. Dann y J. Dinwiddy. Londres: Hambledon Press.

Sked, A. 1989: *The Decline and Fall of the Habsburg Empire, 1815-1918.* Londres: Arnold.

Smith, A. D. 1971: *Theories of Nationalism.* Londres: Duckworth.

— 1979: *Nationalism in the Twentieth Century.* Oxford: Martin Robertson. [Ed. cast.: *Las teorías del nacionalismo.* Barcelona, Ed. 62, 1976.]

— 1986: *The Ethnic Origins of Nations.* Oxford: Blackwell.

Sugar, P. F. 1969: «External and domestic roots of Eastern European nationalism». En *Nationalism in Eastern Europe,* ed. P. F. Sugar y I. J. Lederer. Seattle: University of Washington Press.

Tilly, C. 1975: «Introduction». En *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
— 1990: *Coercion, Capital and European States, AD 990-1990*. Oxford: Blackwell.

Capítulo 8
GEOPOLÍTICA Y CAPITALISMO INTERNACIONAL

Perspectivas teóricas

El presente capítulo constituye un intento de explicar las relaciones de la geopolítica con el capitalismo durante el «largo siglo XIX», aunque también introducirá en la ecuación un tercer término, el de civilización europea (que comenzaba ya a ser civilización occidental). Europa había sido durante mucho tiempo una civilización con múltiples actores de poder, que llevaba dentro de sí una contradicción: estaba regulada por leyes comunes, pero, desde el punto de vista geopolítico, se encontraba enzarzada en continuas guerras en suelo continental. Durante el siglo XVIII la guerra, que se hizo más costosa y destructiva pero también más provechosa para las grandes potencias, estaba regulada hasta cierto punto por instituciones transnacionales y por una diplomacia multiestatal. La sociedad tenía dos niveles: el estatal y el europeo. La enorme ola de poder colectivo que generaron el industrialismo y el capitalismo rompió en este universo de dos niveles, parcialmente regulado, trayendo consigo implicaciones contradictorias de carácter nacional, transnacional y nacionalista.

1. La revolución experimentada por las relaciones del poder económico e ideológico creó una sociedad civil parcialmente transna-

cional (como he sostenido en el capítulo 2). Las redes de alfabetización discursiva y moralizadora traspasaron las fronteras del Estado; el derecho a la propiedad privada quedó institucionalizado en todo el continente, con una gran autonomía respecto a los Estados. Así pues, la expansión capitalista habría podido desvanecer las rivalidades entre los Estados. Europa tenía que industrializarse transnacionalmente para convertirse en el núcleo de una economía y una sociedad globales, como esperaban casi todos los escritores del siglo XIX.

A este respecto, cabe distinguir una versión «fuerte» y otra «débil». La primera predeciría la práctica desaparición de los Estados. Las clases transnacionales serían pacíficas. De Kant a John Stuart Mill, todos los liberales creyeron en una paz perdurable. Las infraestructuras del Estado sobrevivirían para respaldar el desarrollo capitalista, pero los antiguos Estados militares serían barridos. El concepto de interés propio del *laissez-faire* acabaría por desplazar al interés mercantilista e imperialista, aunque a veces con un cierto grado de proteccionismo selectivo. Con el transnacionalismo «débil», los Estados podrían continuar su política exterior de carácter privado, incluso hacer la guerra, sin mayores implicaciones para la economía o la sociedad. La estructura de poder sería doble: economía capitalista transnacional y rivalidades limitadas entre los Estados.

2. Pero la industrialización capitalista, al entrelazarse con la modernización del Estado, reforzó también la organización nacional. La expansión infraestructural del Estado durante el siglo XIX «naturalizó» sin siquiera intentarlo a los actores económicos (como explicaré en el capítulo 14). También el capitalismo lanzó a las clases extensivas, politizadas por las finanzas estatales, a la demanda de la ciudadanía. Los antiguos regímenes respondieron incorporándolas a las organizaciones segmentales más dinámicas de la monarquía autoritaria. Ambas cosas, las reivindicaciones de clase y las respuestas del régimen crearon en Europa los Estados-nación, en las tres formas que he distinguido en el capítulo 7. En países como Gran Bretaña y Francia el Estado ya existente, dominado por una «clase dirigente nacional», cultural y lingüísticamente homogénea, se amplió hasta convertirse en una nación reforzadora del Estado. En segundo lugar, en países como Alemania e Italia una comunidad ideológica unida por la cultura y la lengua, pero dividida en numerosos estados alcanzó la unidad política, formando una nación creadora de Estado. Por último, los grandes Estados confederales como los imperios austriaco y oto-

mano se quebraron a causa de los nacionalismos regionales, de las naciones subvertidoras del Estado, que formaron después sus propios Estados-nación. Éstos predominaban ya en todo Occidente en 1918. Las clases quedaron confinadas dentro de la nación, forzando a los Estados a abandonar su tradicional autonomía, y a la sociedad, su transnacionalismo.

3. El capitalismo y el industrialismo impusieron también una organización nacionalista. El primero se desarrolló asociado a una geopolítica agresiva. Al movilizar sus poderes, intensificó las concepciones territoriales de interés y las luchas entre las distintas naciones. El mercantilismo se transformaba, como decía Colbert, en «*un combat perpétuel*». Europa se consolidaba, a través de la guerra, como un pequeño conjunto de Estados de gran tamaño, mientras que la explotación de las colonias fomentaba el militarismo. Como han demostrado los teóricos del sistema mundial (Wallerstein, 1974; Chase-Dunn, 1989; 201 a 255), el «sistema capitalista mundial» se hizo dual: mercados libres, trabajo libre en su núcleo occidental, intercambio desigual y trabajo sometido a la coerción en su periferia. La situación tuvo que influir en Occidente, y lo hizo aumentando la organización nacionalista agresiva.

De este modo, el capitalismo y el industrialismo fueron tridimensionales. La competición del mercado era transnacional por naturaleza y ofrecía grandes oportunidades de beneficio a los grandes propietarios allí donde podían producirse e intercambiarse mercancías sin las trabas de las fronteras políticas. En segundo lugar, las clases sociales politizadas se organizaron al nivel del Estado autoritario y territorial. Cuanto mayor era su rebeldía allí, más se «naturalizaban», quedando así confinadas a un territorio. Y en tercer lugar, el capitalismo enjaulado en las fronteras estatales extremó la rivalidad territorial, tanto en Europa como en las colonias. El capitalismo y el industrialismo fueron siempre y al mismo tiempo nacionales, transnacionales y nacionalistas, y generaron unas relaciones de poder de gran variación y complejidad.

No obstante, las versiones «fuertes» de las teorías 1 y 3 han predominado en la teoría social, por lo general rivalizando entre sí, aunque en ocasiones hayan alcanzado un compromiso. Los teóricos, desde Vico, pasando por la Ilustración, hasta Saint-Simon, Comte, Spencer y Marx, contaron con el triunfo de un transnacionalismo fuerte. Al comenzar el siglo XX, esta concepción marxiano-liberal parecía haber fracasado estrepitosamente, de ahí que algunos, marxia-

nos y liberales, denostaran el triunfo del nacionalismo (y, en ocasiones, también del racismo), saludado en cambio por sus partidarios. Un nacionalismo que constituía la «superestratificación» de un Estado-nación sobre otro. El fascismo y el nazismo lo llevaron al extremo. Con el triunfo de los aliados marxistas-liberales en la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo explícito pasó de moda, pero su influjo continuó vivo. La mayor parte de la historiografía no es otra cosa que la narración de una rivalidad entre Estados nacionales. También el realismo teorizó la historia de la diplomacia como una forma de establecer el poder del Estado soberano en un contexto de anarquía internacional. Giddens (1985) ofrece también una teoría compatible del Estado: los Estados-nación, «receptáculos de grandes potencias», «disciplinadores» y «vigilantes» de la vida social, siempre reforzaron su poder interior y geopolítico absorbiéndola. Pero el transnacionalismo liberal-marxista renació con posterioridad a 1945 en las teorías del sistema mundial y la interdependencia. El resultado fue la aparición de un compromiso liberal-marxiano-realista: la interdependencia global depende ahora de la presencia de una única potencia, que ejerce una hegemonía benévola.

A causa del predominio marxiano-liberal, muchas de las teorías geopolíticas recientes presentan una tendencia notoriamente economicista, que reduce el «poder» a poder económico. Al clasificar las estadísticas militares y económicas, Kennedy concluye:

> Todos los cambios importantes en el equilibrio del poder militar del mundo han seguido a ciertas alteraciones del equilibrio productivo, ... el ascenso y la caída de los distintos Estados e imperios ... se han visto confirmados por los resultados de las guerras entre las grandes potencias, en las que la victoria se ha inclinado siempre del lado de la que poseía mayores recursos materiales [1988: 439].

Las guerras se limitan, pues, a «confirmar» los cambios de los poderes productivos, que determinan la geopolítica. Sin embargo, la teoría de Kennedy es dual en última instancia; puesto que trata la rivalidad y la guerra entre las grandes potencias como constantes del desarrollo social, el poder económico se limita a proporcionar los medios para conseguir los fines que aquéllas establecen. Kennedy no intenta teorizar las relaciones entre ambas cosas, ni analizar por qué es el orden y la paz, y no el desorden y la guerra, lo que caracteriza a veces las relaciones internacionales.

Este último punto ha sido subrayado por el marxismo y el realismo, que explican la alternancia de guerra y paz durante los siglos XIX y XX en términos de hegemonía o estabilidad hegemónica. Los Estados hegemónicos o hegemones son aquellos que tienen poder suficiente para establecer normas y ejercer funciones de gobierno en el conjunto de la escena internacional. Kindleberger (1973) dio origen a la teoría al explicar que la crisis de la década de 1930 se debió a la imposibilidad de los Estados Unidos para calzarse los gastados zapatos de la hegemonía británica. Los Estados Unidos habrían podido establecer entonces sus normas internacionales, pero hasta 1945 se negaron a aceptar ese papel hegemónico. «Los británicos ya no podían; los americanos no querían». El capitalismo internacional necesitaba un elemento hegemónico para evitar las devaluaciones competitivas, las guerras de aranceles e incluso la guerra misma.

Los realistas han desarrollado este argumento en una extensa literatura (veinte artículos sólo en el periódico *International Organization*). Numerosos escritores identifican dos elementos hegemónicos capaces de establecer normas para el comercio libre global y de impedir la inestabilidad económica y las grandes guerras: Gran Bretaña durante la práctica totalidad del siglo XIX y Estados Unidos a partir de 1945. El caso británico indica que el elemento hegemónico no ha de ser necesariamente el más grande sino, sobre todo, el que presenta un superior desarrollo económico que le permite imponer normas e instituciones económicas. Gran Bretaña hizo de la libra esterlina la moneda de reserva mundial; de la *City* de Londres, su centro financiero; y de la marina, su principal portadora. Por el contrario, cuando predominó la rivalidad entre las potencias, el desarrollo capitalista se hizo inestable y estallaron las guerras, tanto durante el siglo XVIII como durante la rivalidad anglo-alemana que preparó el terreno a la Primera Guerra Mundial, o como en el periodo de entreguerras (Calleo y Rowland, 1973; Gilpin, 1975: 80 a 85, 1989; Krasner, 1976; Keohane, 1980). Pese a todo, muchos autores han acabado por mostrarse escépticos (por ejemplo, Keohane, 1980; Rosecrance, 1986: 55 a 59, 99 a 101; Nye, 1990: 49 a 68; Walter, 1991). Por mi parte, me sumo a su escepticismo.

Los teóricos marxianos del sistema mundial dan un paso más en la cuestión de la hegemonía, buscando una solución a su dualismo teórico. Según ellos, la rivalidad entre las grandes potencias responde sólo a «la lógica de la economía mundial capitalista» (Wallerstein, 1974, 1984, 1989; Chase-Dunn, 1989: 131 a 142, 154, 166 a 198;

Arrighi, 1990, que conserva un mayor dualismo). Y añaden además otro elemento hegemónico, la República holandesa de finales del siglo XVII, cuya moneda, barcos e instituciones financieras gobernaron el capitalismo contemporáneo. Para la hegemonía británica, americana y holandesa, la potencia naval fue el vínculo primordial entre la hegemonía militar y la económica (Modelski, 1978, 1987; Modelski y Thompson, 1988). La economía capitalista nacional más avanzada confiere poder, especialmente poder naval, a su Estado, y éste impone entonces un orden geopolítico en la economía internacional. Wallerstein concluye, en términos idénticos a los de Kennedy:

> No es el Estado que avanza de golpe política y militarmente el que gana la carrera, sino el que progresa sin desánimo, aumentando palmo a palmo su capacidad de competir a largo plazo ... Las guerras quedan para los demás, hasta que llega el momento culminante de la guerra mundial, cuando la potencia hegemónica puede invertir finalmente sus recursos para decidir de una vez la victoria [1984: 45 a 46; *cf.* Goldteins, 1988 y Modelski, 1987].

Se trata de las teorías hobbesianas del gran hombre trasladadas al Estado, que es nacionalmente autónomo. Casi todos estos teóricos son americanos y les gusta celebrar la significación histórica mundial y la hegemonía benévola de los Estados Unidos. Los británicos se unen a ellos porque les agrada oír que su historia no ha sido menos grande ni menos benigna. Pero la teoría es pesimista en última instancia. Los realistas asumen que las potencias continuarán luchando hasta el fin de los tiempos, a menos que una de ellas alcance tal hegemonía que le permita instituir un gobierno mundial. Por otro lado, son también dualistas: la rivalidad anárquica de las grandes potencias es un aspecto determinante y prácticamente eterno de las relaciones humanas de poder; el resultado de la rivalidad y la quiebra del orden vienen determinados por las relaciones del poder económico. Los teóricos del sistema mundial, como conviene a los marxianos, atisban un resultado económico y eventualmente utópico cuando, por fin, la economía capitalista abarque por igual todo el globo terráqueo, hecho que permitirá la revolución y el gobierno mundiales.

Pero estas teorías economicistas y duales se equivocan, al menos en lo que atañe al pasado que estudiamos aquí. La geopolítica y la economía política internacional fueron más variadas, complejas e intermitentemente esperanzadoras, y se vieron dinámicamente determinadas por todas las fuentes de poder social. El capitalismo, los Esta-

dos, el poder militar y las ideologías contenían principios de organización social, contradictorios e interdependientes. Veamos ahora cómo la unión de todos estos elementos determinó el poder geopolítico.

Los determinantes del poder

Los cinco determinantes principales del «poder» geopolítico son, en mi opinión, las cuatro fuentes que vengo tratando en este estudio más una combinación de dos de ellas en el liderazgo diplomático y militar. (En esta sección me sirvo libremente de los trabajos de Knorr, 1956 y Morgenthau, 1978: 117 a 170.)

1. El *poder económico*. Las distintas combinaciones en el tamaño y modernidad de la economía del Estado confieren sin duda un poder considerable. Las potencias auténticamente pobres o atrasadas casi nunca llegan a ser grandes, y ello sólo cuando las restantes fuentes de poder pueden compensar las carencias. Pero en materia de geopolítica, la geoeconomía —las condiciones en que una determinada economía se encuentra integrada en el plano regional y global— afecta también al tamaño y la modernidad de la economía y puede que aumente la importancia de ambas cosas para la geopolítica. Los siglos «de espera» británicos hasta la revolución de la navegación y el «descubrimiento» del Nuevo Mundo significan que el poder y la riqueza habrían de llegar a través de su geoeconomía de ultramar. El poder económico se convierte en potencia sólo cuando tiene relevancia geopolítica, como comprobaremos en el caso de las restantes fuentes.

2. El *poder ideológico*. Los actores comprometidos en empresas de poder pueden verse estimulados por recursos ideológicos de trascendencia geopolítica; por ejemplo, un fuerte sentimiento de identidad colectiva —moral inmanente— y unas creencias moralmente trascendentales legitiman la agresión. Si una clase capitalista carece de identidad nacional, difícilmente podrá movilizar sus recursos para apoyar un proyecto de gran potencia; y si un ejército grande y bien equipado no cuenta con una buena moral, será frágil.

3. El *poder militar*. En un contexto geopolítico agresivo, los países ricos que no cuenten con unas fuerzas armadas eficaces serán derrotados y absorbidos por otros Estados militarmente más eficaces.

Algunos ejércitos son muy provechosos para el poder inmediato de una potencia, como ocurrió durante el siglo XVIII en Gran Bretaña, y en Prusia-Alemania entonces y después. Otros resultan ineficaces, como los rusos de finales del siglo XIX. El poder militar posee su propia lógica; su organización «concentra de modo coercitivo» los recursos. El poder económico, por muy grande que sea, ha de materializarse en recursos humanos, armamento y suministros, sometidos a una disciplina coercitiva y luego concentrados de la misma forma contra el enemigo. Esto requiere no sólo un producto nacional bruto, sino también un cuerpo militar capaz de concentrar esa riqueza en el entrenamiento para la guerra y en la batalla. En 1760 los recursos económicos de Prusia eran inferiores a los austriacos, sin embargo, una mejor aplicación a los proyectos militares concretos hizo de aquélla una gran potencia y le proporcionó territorios donde más tarde tendría lugar un fuerte desarrollo económico. Cuando las dos potencias libraron su batalla final en 1866, la economía prusiana estaba por delante de la austriaca, pero lo decisivamente superior fue la movilización militar (y política) de esos recursos. Los recursos del poder militar también son relevantes para la finalidad geopolítica que se encuentra en marcha; para una diplomacia cañonera se necesitan cañoneros, no baterías artilleras masivas (o armas nucleares).

4. El *poder político*. Los Estados modernos transforman los recursos económicos e ideológicos, el producto nacional bruto y la moral en poder militar, una finalidad para la que tales elementos pueden ser más o menos eficaces. Organski y Kugler (1980: 64 a 103) han demostrado que en las guerras acaecidas desde 1945 los recursos económicos no han predicho los resultados. Lo que ellos llaman organización política superior (aunque en realidad se trata de una mezcla de poder político, ideológico y militar) resultó decisiva en las victorias de Israel sobre los Estados árabes y de Vietnam del Norte sobre Vietnam del Sur y los Estados Unidos. El régimen y la administración del Estado deben suministrar eficazmente los recursos necesarios para el objetivo geopolítico. Ésta es la ventaja de los regímenes políticos mejor cohesionados, donde las cristalizaciones y la lucha de facciones se encuentran más institucionalizadas.

Todo lo que acabo de examinar resulta especialmente importante para la diplomacia estatal. Los teóricos economicistas parecen olvidar que las grandes guerras modernas se han luchado entre alianzas. Kennedy —extrañamente, puesto que él mismo es un historiador de la diplomacia— da por sentado el hecho de que, bajo Napoleón, Francia

tuvo que habérselas con las otras grandes potencias; que Austria se enfrentó, sin aliados, a Prusia y a Italia en 1866; que Austria y Alemania desafiaron a Gran Bretaña, Francia y Rusia (y, más tarde, también a Italia y a los Estados Unidos) en la Primera Guerra Mundial. Sumando sus recursos económicos combinados, Kennedy pronostica con toda precisión quién será el vencedor. Pero, en realidad, ganaron las alianzas, que aún están por explicar. Sólo tras esa explicación, que ellos no ofrecen, podrían los teóricos de la hegemonía calificar a Francia o a Alemania de «desafiador hegemónico fracasado» y no de elemento hegemónico real. Si los vencidos hubieran negociado entre sí alianzas más poderosas, habrían sido vencedores y probables candidatos a la hegemonía.

Como tendremos ocasión de comprobar, su diplomacia fracasó por dos razones, una de orden político y otra de orden ideológico. En primer lugar, sus Estados fueron incoherentes, porque las distintas cristalizaciones políticas los empujaron en direcciones diplomáticas contrarias, sin instituciones soberanas para resolver la lucha de facciones. En segundo lugar, las ideologías nacionalistas características los hicieron introvertidos y tendentes a descuidar la utilidad de los «extranjeros» en materia de alianzas. La diplomacia también ayuda a establecer la paz. Puede que durante el siglo XIX la paz resultara más de la diplomacia entre las grandes potencias que de la hegemonía británica; y puede que se rompiera cuando esa diplomacia cambió, y no con el comienzo de la decadencia británica.

5. El *liderazgo*. Una causalidad compleja introduce el corto plazo y la contingencia. Las decisiones diplomáticas y militares que se adoptan en los momentos de crisis son decisivas. En esas coyunturas, el panorama internacional se asemeja a la «anarquía» carente de normas favorita del realismo. Los diplomáticos adoptan entonces decisiones acordes con las concepciones de interés de sus Estados, con independencia de los demás. No pueden predecir fácilmente los resultados, ya que cada decisión tiene para las demás consecuencias involuntarias (en el capítulo 21 analizaré este asunto con mayor profundidad, a propósito de los acontecimientos que condujeron a la Primera Guerra Mundial). Pero la incertidumbre de la campaña es aún mayor. Tolstoi nos ha dejado en *Guerra y paz* una memorable descripción de las batallas de Austerlitz y Borodino, aprovechando su experiencia personal como oficial artillero en las guerras ruso-turcas. Cuando los cañones abren fuego, el campo queda cubierto por un humo denso. Los jefes, que apenas puden apreciar lo que está

ocurriendo, quedan abandonados a su suerte en la adopción de decisiones tácticas acertadas. A veces aciertan; otras, las más (según los historiadores de salón, que tienen la ventaja de dominar todo el campo de batalla), se equivocan.

En la adopción contingente de decisiones, individuales o de grupos pequeños, algunos resultados parecen accidentes o productos del azar; no estrictamente fortuitos, sino emanados de la concatenación de numerosas series causales débilmente relacionadas (las decisiones de algunos comandantes de ambos bandos, la moral de sus tropas, la calidad de sus cañones, los avatares del clima o del terreno, etc.). Todo ello requiere unas habilidades militares y diplomáticas extraordinarias. En ausencia de un conocimiento objetivo y global, se toman decisiones que parecen desastrosas e incompetentes. Las derrotas de una penosa sucesión de generales austriacos (desde «*le malheureux* Mack» de Tolstoi en Austerlitz en adelante, con la excepción del archiduque Carlos) se atribuyen por lo general a sus errores garrafales. Hay estadistas y generales que tienen una concepción distinta de la diplomacia o de la guerra, una concepción intuitiva de lo que puede funcionar, de lo que inspira a las tropas, y aunque no puedan elaborarla por completo, el hecho es que da resultado. Tolstoi atribuía al general Kutusov una sorprendente combinación de letargo, vejez y sagacidad, que, sin embargo, derrotó al gran Napoleón.

De modo convencional atribuimos este «genio» a las características de la personalidad idiosincrásica (Rosenau, 1966), aunque procede de roles de liderazgo socialmente prescritos. La sagacidad y el genio puede aparecer en cualquier organización de poder; los inventores y los empresarios de éxito poseen esas cualidades. Pero en las redes del poder económico, la competición, la imitación y la adaptación se producen de forma más pautada y repetitiva y a pasos más lentos. La sagacidad puede verse frenada o restringida por las fuerzas del mercado. Las decisiones que toman los generales y los diplomáticos en unas cuantas horas (o en unos cuantos minutos) pueden cambiar el mundo, como lo hicieron el imperfecto genio militar de Bonaparte y el genio diplomático de Bismarck.

Así pues, el ascenso y caída de las grandes potencias estuvieron determinados por cinco procesos entrelazados de poder. Puesto que el poder económico es decisivo para las teorías de la hegemonía, y puesto que puede medirse estadísticamente, empezaré por él, para luego abordar una narración combinada de los cinco.

Poder económico y hegemonía, 1760-1914

Evaluaré la fuerza económica de las potencias con la ayuda de las heroicas compilaciones de estadística económica debidas a Paul Bairoch. Dada la imperfección de los datos, las cifras sólo pueden ser indicadores aproximados y en parte controvertidos (las cifras francesas constituyen para los estudiosos un campo de batalla, y algunas de las correspondientes al Tercer Mundo son meras conjeturas). Puesto que los datos sobre el producto nacional bruto no pueden dar una idea cuando se trata de comparar países con tan diferentes grados de desarrollo, me centraré en las estadísticas sectoriales. El poder económico ayuda a determinar el poder. En el periodo que nos ocupa, esto significaba unas industrias manufactureras de grandes dimensiones y una agricultura eficaz. ¿Cuáles fueron las potencias que presentaban tales características?

Lo más llamativo de los cuadros 8.1 a 8.4 es la expansión global del poder económico de Occidente. El cuadro 8.2 muestra que el conjunto de la producción industrial de Occidente fue inferior al de China hasta después de 1800. Entonces, Europa y Norteamérica superaron al resto del mundo, distanciándose rápidamente del resto. En 1860 generaban dos tercios de la producción industrial global; en 1913 contaban ya con nueve décimos. Estas cifras pueden exagerar el cambio, ya que probablemente subestiman la producción de las economías de subsistencia (que consumen gran parte del excedente antes de que llegue al mercado o sea susceptible de evaluación). No obs-

CUADRO 8.1. *Porcentajes nacionales de las potencias en el conjunto del producto nacional bruto europeo, 1830, 1913*

	1830		*1913*	
	%PNB	*Posición*	*%PNB*	*Posición*
Rusia	18,1	1	20,4	1
Francia	14,8	2	10,7	4
Reino Unido	14,2	3	17,2	3
Alemania	12,5	4	19,4	2
Austria-Hungría	12,4	5	10,1	5
Italia	9,6	6	6,1	6
España	6,2	7	2,9	7

Fuente: Bairoch, 1976a: 282.

CUADRO 8.2. *Volumen bruto de la producción industrial nacional, 1750-1913 (Reino Unido en 1900 = 100).*

	1750	*1800*	*1830*	*1860*	*1880*	*1900*	*1913*
Conjunto de los países desarrollados	34	47	73	143	223	481	863
Austria-Hungría	4	5	6	10	14	26	41
Francia	5	6	10	18	25	37	57
Alemania	4	5	7	11	27	71	138
Rusia	6	8	10	16	25	48	77
Reino Unido	2	6	18	45	73	100	127
Estados Unidos		1	5	16	47	128	298
Japón	5	5	5	6	8	13	25
Tercer Mundo	93	99	112	83	67	60	70
China	42	49	55	44	40	34	33
El mundo	127	147	184	226	320	541	933

Fuente: Bairoch, 1982: Cuadro 8.

tante, la superioridad es indiscutible. Las cifras pueden indicar mejor incluso el poder geopolítico que el económico, ya que los Estados y las fuerzas armadas dependen de excedentes mensurables, con valor comercial. Bairoch sostiene que el capitalismo occidental desindustrializó el Tercer Mundo, como indica el Cuadro 8.4.

Al verse inundadas por productos baratos procedentes de Occidente, China y la India se vieron reducidas al papel de exportadoras

CUADRO 8.3. *Nivel de desarrollo per cápita de la agricultura nacional, 1840-1910 (100 = producción anual neta de 10 millones de calorías por trabajador agrícola del sexo masculino)*

	1840	*1860*	*1880*	*1900*	*1910*
Austria-Hungría	75	85	100	110	—
Francia	115	145	140	155	170
Alemania	75	105	145	220	250
Rusia	70	75	70	90	110
Reino Unido	175	200	235	225	235
Estados Unidos	215	225	290	310	420
Japón	—	—	16	20	26

Fuentes: Bairoch, 1965: cuadro 1. Cifras austriacas de Bairoch, 1973: cuadro 2.

CUADRO 8.4. *Industrialización per cápita, 1750-1913 (Reino Unido en 1900 = 100)*

	1750	*1800*	*1830*	*1860*	*1880*	*1900*	*1913*
Conjunto de los países desarrollados	8	8	11	16	24	35	55
Austria-Hungría	7	7	8	11	15	23	32
Francia	9	9	12	20	28	39	59
Alemania	8	8	9	15	25	52	85
Rusia	6	6	7	8	10	15	20
Reino Unido	10	16	25	64	87	100	115
Estados Unidos	4	9	14	21	38	69	126
Japón	7	7	7	7	9	12	20
Tercer Mundo	7	6	6	4	3	2	2
China	8	6	6	4	4	3	3
El mundo	7	6	7	7	9	14	21

Fuente: Bairoch, 1982: Cuadro 9.

de materias primas. Este cambio sin precedentes del poder geoeconómico convirtió a Occidente durante el siglo XIX en un elemento decisivo para el mundo, en la punta de lanza del poder; es decir, en una civilización hegemónica.

Dentro de Europa, Rusia predomina en todos los recursos a lo largo del periodo, debido al tamaño de su población y a una economía sólo relativamente atrasada. El cuadro 8.1 indica que el producto nacional bruto ruso era el más alto en 1830; incluso en 1913 mantenía, ya por poca diferencia, el primer puesto. En el cuadro 8.2 el volumen bruto de la industria rusa aparece ya por debajo del británico, y luego del estadounidense y del alemán, aunque aún conserva las cifras de una gran potencia. Por el contrario, los cuadros 8.3 y 8.4 indican que los niveles per cápita de la agricultura y la industria rusas cayeron muy por debajo de los de las restantes potencias. En un siglo en el que la modernización expandía en gran manera la capacidad de organización, este hecho es muy costoso. Rusia mantuvo su capacidad para movilizar un ejército, pero no su eficacia.

Hacia 1760, seguían a Rusia en recursos económicos totales dos potencias casi parejas, Gran Bretaña y Francia. Pero la Francia del siglo XIX se separó del grupo de cabeza, superada por Gran Bretaña, Alemania y los Estados Unidos. Gran Bretaña se convirtió en la pri-

mera potencia que conquistó un liderazgo económico sin paliativos, con una ventaja industrial significativa de 1830 a 1880 y (junto a los Estados Unidos) con la agricultura más eficiente hasta 1900 (véase el cuadro 8.3). Los Estados Unidos se encontraban al otro lado del océano, y hasta después de 1815 no se vieron implicados en la geopolítica europea, pero los cuadros muestran el enorme crecimiento de su poder económico. En 1913 la economía industrial estadounidense doblaba a cualquier otra; era ya un gigante, pero aún dormía. La tercera historia de éxito corresponde a Alemania, que desde la igualdad con Austria, su rival centroeuropeo, llegó a encabezar la producción industrial y agrícola europea en 1913 (aunque se mantenía detrás de Gran Bretaña en la industria per cápita). Austria conservó el cuarto puesto como potencia económica europea durante todo el periodo, con una industria que iba ganando terreno a la francesa. Pero como se comprueba en el cuadro 8.3, la agricultura austriaca estaba atrasada. Este hecho y la fragilidad política (que veremos en el capítulo 10) la debilitaron gravemente.

El elemento hegemónico indiscutible que muestran los cuadros no es un Estado o potencia en concreto, sino la civilización occidental en su conjunto, capacitada para «pacificar» el planeta según sus propias condiciones. Desde el punto de vista de los indios o de los africanos poco importaba que sus comerciantes, empleadores o administradores coloniales fueran británicos, franceses o incluso daneses. La dominación era occidental, cristiana y blanca, y su poder presentaba unas instituciones básicamente iguales. Desde la perspectiva global, las luchas entre Francia, Gran Bretaña y Alemania parecen un epifenómeno. Venciera quien venciera, los europeos (o sus primos de las colonias) gobernaban el mundo de forma muy semejante. Gran parte de la hegemonía de esta civilización con múltiples actores de poder no procedía de un Estado concreto.

Pero los cuadros revelan también la existencia de un potencial elemento hegemónico secundario dentro de Occidente. Aunque Gran Bretaña nunca conquistó dentro del contexto occidental el avasallador predominio económico que disfrutó Occidente en términos globales, sí fue el líder económico más claro del siglo XIX. Pero, ¿significa esto que fue hegemónica? Depende de cómo definamos la «hegemonía». Adoptaré en principio una medida arbitraria. De 1817 hasta la década de 1890 los gobiernos ingleses exigieron a la Marina Real que satisfaciera el «estándar de dos potencias» de Castlereagh, es decir, la posesión de más acorazados que las dos marinas inmediata-

mente inferiores juntas (generalmente tuvo más que las tres o cuatro inmediatamente inferiores). Se trata de una hegemonía naval indiscutible, que nadie desafió hasta entrado el siglo XX. ¿Respondía la economía británica a ese estándar? ¿Era su economía mayor o más avanzada que la de las dos potencias inmediatamente inferiores juntas?

El producto nacional bruto de Gran Bretaña no alcanzó el estándar de las dos potencias. No fue siquiera la mayor de las economías occidentales (esta categoría pasó de Rusia a Estados Unidos). Fue la modernidad de su economía lo que satisfizo al final ese modelo. El cuadro 8.2 muestra que el volumen de la producción industrial británica de 1860 a 1880 superó el de las dos potencias inmediatamente inferiores juntas. Pero en 1900 la industria de Gran Bretaña había perdido ya el primer puesto; y en 1913 el estándar industrial de dos potencias había pasado a los Estados Unidos, que lo conservó durante cincuenta años. El modelo industrial per cápita de dos potencias, una medida más adecuada de la modernidad económica, se prolongó en Gran Bretaña desde la década de 1830 hasta la de 1880. Todavía en 1900 disfrutaba de un primer puesto, que no dejaría a los Estados Unidos hasta 1913 (véase cuadro 8.4). Hacia 1860 el predominio británico resulta aún más llamativo en las industrias más modernas; producía la mitad del hierro, el carbón y el lignito del mundo, y manufacturaba la mitad del suministro mundial de algodón crudo. De este modo, la cualificación estadística de la hegemonía británica podría entenderse como un compromiso entre tamaño económico y modernidad.

Vemos, pues, que Gran Bretaña disfrutó de una hegemonía económica efímera e insegura, que llamaré casi hegemonía, pese a que debió de superar con mucho el dominio económico ejercido por la República holandesa durante el siglo XVII, que según la teoría del sistema mundial constituyó el elemento hegemónico precedente. Aunque Holanda disfrutó de la economía capitalista más moderna del periodo, ni su poder económico ni su poder militar en tierra fueron suficientes para aventajar a España. La economía holandesa no habría podido alcanzar el estándar de dos potencias; sólo su marina fue capaz de lograrlo. Ya antes, la marina portuguesa había sobrepasado a todas las demás, sin dejar de ser una potencia menor desde el punto de vista económico y territorial. Pese a los logros posteriores de los Estados Unidos, lo cierto es que ninguna potencia europea desde la época del Imperio romano había conquistado una hegemonía económica y militar absoluta. Como volveremos a ver en este capítulo, los

europeos poseían una larga experiencia en la prevención de las hegemonías absolutas.

Sin embargo, las hegemonías especializadas de Gran Bretaña fueron un hecho. En primer lugar, se trató de una hegemonía especializada regionalmente, en acuerdo diplomático con otras potencias, al modo de los recientes acuerdos tácitos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que permitieron a las dos potencias dominar su correspondiente esfera internacional. En este periodo, Gran Bretaña estableció convenios diplomáticos por los que cedía el dominio continental a cambio del dominio naval global. En segundo lugar, su hegemonía estaba especializada por sectores, como reconocen los propios teóricos de la hegemonía. En materia de industria, Gran Bretaña disfrutó de un liderazgo histórico amplio pero efímero; ya que pronto fue imitada y alcanzada por otras potencias. Sin embargo, otras especialidades típicamente británicas disfrutaron de larga vida, y algunas sobrevivieron a 1914. Gran parte de ellas estaban relacionadas con la circulación de mercancías, lo que Ingham (1984) llama «capitalismo comercial»: los instrumentos financieros, la navegación y la distribución, y la libra esterlina como moneda de reserva. Se trata de instrumentos transnacionales característicos del capitalismo. De ahí la paradoja: el capitalismo transnacional fue también inconfundiblemente británico.

Así pues, en términos económicos, el caso británico fue sólo el de una «casi hegemonía especializada», no absoluta en el plano militar, es decir, el modelo de las dos potencias, que garantizaba la navegación británica y sus transacciones comerciales en el mundo, en tanto que el papel de reserva que representaba la libra, debido en gran parte a la conquista de la India, le proporcionaba una balanza comercial favorable y unas sustanciosas reservas de oro. Pero también respondió a unos condicionamientos políticos previos: el poder de la *City* estaba atrincherado en la hacienda y el Banco de Inglaterra (Ingham, 1984) y plenamente reconocido en el exterior. Algunos autores han apuntado que toda hegemonía parece necesitar un bajo grado de coerción; las normas del elemento hegemónico han de parecer a los intereses de los demás benévolas, «naturales» incluso (Keohane, 1984; Gilpin, 1987: 72 a 73; Arrighi, 1990). Pero, como ya he comentado, la británica fue menos que una «hegemonía»; Gran Bretaña fue sólo la potencia dirigente que fija las reglas transnacionales mediante *negociación* con las restantes potencias. Nunca tuvo tanto poder como quieren los teóricos de la hegemonía. Occidente era hegemónico en el

mundo, pero constituía aún una civilización con múltiples actores de poder. Su diplomacia y sus normas transnacionales contribuyeron a estructurar el capitalismo. ¿Cómo funcionó durante el periodo anterior de intensa rivalidad?

La rivalidad anglo-francesa

El siglo XVIII

Hacia 1760, tres potencias —Gran Bretaña, Francia y Rusia— se impusieron sobre las restantes. En el este, la vastedad de su territorio y de su población hizo invulnerable a Rusia, y le facilitó la expansión hacia el sur y hacia el este a medida que los turcos otomanos y los Estados del Asia central entraban en decadencia. Desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico Rusia se mantuvo en cierto modo al margen, en parte en Asia, dejando el occidente a la rivalidad anglo-francesa. Tras estas potencias estaban Austria y Prusia, cuyos enfrentamientos por Europa central analizo en los capítulos 9 y 10. Las luchas y las alianzas de las cinco formaron el núcleo geopolítico occidental. Venía después la periférica Estados Unidos, con una papel geopolítico intermitente fuera de su propio continente; y después aún, las potencias que representan el papel de figurantes en este volumen: España, Holanda, Suecia y un sinfín de Estados más pequeños.

Durante la práctica totalidad del siglo XVIII, Gran Bretaña y Francia contendieron por el occidente de Europa y el liderazgo colonial, encabezando, por lo general, coaliciones con otras potencias implicadas en la guerra en territorio europeo. Según el examen que Holsti realiza de las guerras libradas entre 1715 y 1814 (1991: 89), el aumento del territorio constituyó una motivación significativa en el 67 por 100 de las guerras, seguido en un 36 por 100 por cuestiones de carácter comercial o naval. Detrás se sitúan las disputas relativas a la sucesión dinástica, un 22 por 100, seguidas de otras cuestiones menores. El concepto de beneficio aparece significativamente influido por las opciones territoriales. Las rivalidades mezclaron elementos de las cinco o seis economías políticas internacionales que he establecido en el capítulo 3. Francia y otras potencias intentaron de forma intermitente hacerse con el dominio territorial de Europa; Francia y Gran Bretaña lo intentaron respecto al resto del mundo, impulsadas por un imperialismo económico y geopolítico (aunque ningún régimen tra-

taba aún de movilizar un imperialismo de corte social popular). «El comercio del reino ha sido concebido para prosperar mediante la guerra», afirmaba con toda franqueza Burke. Desde unos enclaves militares y comerciales relativamente baratos, las armadas europeas imponían las condiciones del comercio con los no europeos. Norteamérica y la India eran dos colonias especialmente provechosas. Las compañías comerciales francesas y británicas invadieron este último país aprovechando la decadencia del imperio mogol. Cuando el Estado monopolizó el poder militar, los de Francia y Gran Bretaña se hicieron cargo de la India. La riqueza y el comercio indios demostraron ser inmensamente provechosos. La corriente de colonos europeos hacia Norteamérica y la explotación del trabajo esclavo también produjeron allí un comercio pujante. El atractivo económico del imperialismo moderno residió ante todo en estas dos ventajosas bases.

Pero las potencias no siempre estaban en guerra. En los momentos de paz practicaban la forma más moderada de mercantilismo que había aparecido durante el siglo XVIII: el Estado, que ya no fomentaba la piratería contra sus rivales, empleaba su «poder» para garantizar la «abundancia» estimulando las exportaciones y dificultando las importaciones mediante aranceles, cuotas y embargos comerciales y navales; todo ello respaldado por medidas diplomáticas y ocasionales abordajes de navíos extranjeros. El mercantilismo no tenía un sentido autoevidente, ya que, sin esta política, la economía real habría consistido en múltiples mercados locales, regionales y transnacionales, en los que las fronteras estatales habrían carecido de importancia. Pero los Estados eran aún muy débiles. Apenas disfrutaban de capacidad para restringir los derechos de la propiedad privada o de poderes infraestructurales para imponerse. Es probable que el contrabando fuera con frecuencia superior al comercio registrado; por otro lado, las ideologías transnacionales evadían la censura. Los Estados desarrollaron aún dos tipos de economía política más orientada al mercado: el *laissez-faire* y un proteccionismo nacional moderado. Hacia finales de siglo, varios tratados bilaterales redujeron algunos aranceles, aunque las motivaciones fueron con frecuencia más geopolíticas que económicas.

Así pues, aunque la economía política internacional del siglo XVIII osciló de modo considerable, la expansión colonial fue fácil, ya que la decadencia islámica y española creó vacíos de poder; los Estados grandes seguían barriendo a los pequeños. Tres potencias (Gran Bretaña, Francia y España) provocaron la mayor parte de las guerras co-

loniales; el resto se especializó en la guerra en suelo europeo. Aunque ésta era aún «limitada» y se libraba con métodos bastante «caballerosos», como comenta Holsti, el enfrentamiento por tierra no era tan restringido en sus metas, ya que cada potencia buscaba el desmembramiento de su rival. Este hecho aumentó el atractivo de la agresión e intensificó los conflictos bélicos. Sólo las alianzas disuasorias, los costes y quizás también un difundido sentimiento civilizado de que la paz es siempre intrínsecamente preferible a la guerra impidió a las potencias mantener continuos enfrentamientos (Holsti, 1991: 87 a 95, 105 a 108).

¿Quién ganaría? Francia era al principio la más grande, la más poblada y la más rica en todo tipo de recursos. El Estado francés consiguió con estos recursos un ejército eficaz, convirtiéndose así en la primera potencia de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, contenida sólo por las alianzas que lograron establecer Holanda y Gran Bretaña. En ese momento, Gran Bretaña comenzaba a representar una amenaza. Su agricultura era muy eficiente, y su comercio marítimo facilitaba el predominio naval (los marinos más experimentados se adaptaban en las épocas de paz a la marina mercante). El crecimiento de sus manufacturas continuó a paso lento en la segunda mitad del siglo, aunque la agricultura y los servicios tuvieron mayor peso que la industria en todas partes. El avance de la economía británica era necesario para mantener el desafío a Francia, pero no resultó suficiente.

En segundo lugar, el Estado británico estaba mejor cohesionado que el francés (como hemos tenido ocasión de ver en el capítulo 4). El territorio francés se orientaba en dos direcciones, hacia Europa y hacia el otro lado del Atlántico. Ambas «Francias» cristalizaron facciones dentro del Estado francés cuyas presiones convirtieron al país en una potencia territorial en Europa y naval en las colonias. Con el progreso de Gran Bretaña, Francia se encontró atrapada entre sus dos ambiciones; carecía de instituciones políticas soberanas capaces de resolver autoritariamente las políticas enfrentadas. Gran Bretaña no estaba atrapada y tenía un «rey con el parlamento». Aparte de conservar a los Hannover (su dinastía originaria), abandonó las aspiraciones territoriales europeas por la extensión naval y comercial en el Atlántico y adquirió enclaves navales en la periferia de Europa, allí donde otras potencias perdían poder. La estrategia recibió en su época el nombre de «política del agua azul» (Brewer, 1989). El ejército era pequeño y el régimen contaba con su armada para defender el canal e

impedir que el enemigo pisara suelo británico. El prestigio, los recursos y la eficacia de la armada real crecieron. La «clase-nación dirigente» no carecía de conflictos, pero los resolvía mediante mayorías parlamentarias. Allí se formaron los proyectos geopolíticos y se les dotó de los instrumentos militares necesarios.

En tercer lugar, la estructura del capitalismo británico también facilitó el camino. El comercio permitió a Inglaterra desarrollar instituciones financieras con las que aprovechar la riqueza agraria y comercial para la marina a través del Banco de Inglaterra, de la *City* y la hacienda (como vimos en el capítulo 4). Durante lo que Cain y Hopkins (1986, 1987) llaman la fase de «interés de los terratenientes» del «capitalismo caballeroso» se produjo la fusión de varias cristalizaciones: el antiguo régimen, el ejército y el capitalismo. Todos estaban de acuerdo en que los impuestos y los créditos debían financiar la expansión naval. Dados los elevadísimos costes de la guerra, los Estados con posibilidades de obtener ingresos líquidos (comercio) disfrutaban de mayores recursos militares que aquellos cuya riqueza se encontraba vinculada a la tierra. Este hecho dio ventaja a Gran Bretaña sobre Francia, como ya había ocurrido en el caso de Holanda y España. Aunque ninguna guerra se autofinanció, las victorias navales en todo el mundo aportaron mayores beneficios comerciales que las logradas en territorio europeo. Las guerras del siglo XVIII supusieron un gran esfuerzo, que fue menor en el caso británico si tenemos en cuenta la suma invertida.

A mediados del siglo XVIII un liderazgo inteligente combinó estas tres ventajas para lograr victorias decisivas. Los gobiernos británicos emplearon su capital líquido procedente del comercio para subvencionar a los aliados continentales (buscados en principio para defender a los Hannover) e inmovilizar los recursos franceses en Europa, al tiempo que la marina real británica golpeaba al Imperio francés y bloqueaba sus puertos, reduciendo así la riqueza líquida mercantil que Francia necesitaba para pagar a sus propios aliados. Pitt apuntaba con razón: «Canadá será conquistada en Silesia», donde luchaban sus aliados prusianos. La incautación de la riqueza de la India a raíz de la batalla de Plassey permitió a Gran Bretaña recomprar su deuda nacional a Holanda (Davis, 1979: 55; Wallerstein, 1989: 85, 139 y 140, 181). Por otra parte, Prusia, enfrentada a la derrota, supo recuperarse inesperadamente y vencer. Gran Bretaña y Prusia sellaron una alianza durante la guerra, en tanto que Francia y sus aliados fracasaron. Los británicos respondieron con las tradicionales palabras de

agradecimiento, llamando «El rey de Prusia» y «La princesa de Prusia» a varias tabernas londinenses.

Durante el siglo XVIII Gran Bretaña ganó las tres guerras en las que el antiguo régimen francés se vio atrapado en los frentes terrestre y marítimo; perdió la única guerra en la que Francia dio la vuelta al tablero financiando a los rebeldes americanos e irlandeses. Gran Bretaña repartió entonces su ejército en América y en Irlanda y su marina por todo el mundo. Una flota francesa se deslizó sin encontrar resistencia para trasladar a su ejército, ante el cual se rindió en Yorktown el general Cornwallis, pero la Guerra de los Siete Años, 1756-1763, había consolidado el predominio británico en Norteamérica, las Indias Occidentales y la India, dañando la economía de los puertos de Francia y devastando sus finanzas estatales. Ni siquiera la pérdida de las colonias americanas se tradujo en desastre, porque el comercio continuó fluyendo entre América y Gran Bretaña, que dominaba así los dos ámbitos comerciales más provechosos del siglo XIX: la India y América del Norte.

Este breve resumen del ascenso británico incluye a los cinco determinantes del poder. La economía británica creció y se modernizó, geoeconómicamente vinculada a la expansión naval-comercial. Esto aumentó la cohesión ideológica de las elites estatales y la clase dominante, y acrecentó la eficacia del Estado para convertir en potencia naval tanto la riqueza como la ideología. Sus diplomáticos se hicieron más hábiles para reconducir los activos del líquido comercial hacia un aliado militarmente efectivo en el segundo frente. Como subraya Kennedy, el poder geopolítico está siempre en relación con otros poderes. El poder británico presentaba un perfil relacionado con las características de su rivalidad con Francia.

En la década de 1780 lo francés predominaba aún en el continente europeo, pero era la armada británica la que dominaba los mares y encabezaba la expansión imperialista. Sin embargo, no debemos exagerar el poder de ninguno de los dos países. Las industrias del algodón, el hierro y la minería habían comenzado su revolución en Gran Bretaña, pero gran parte de ese poder se expresaba sobre todo en el plano transnacional, no en el estatal; y el gobierno francés aún confiaba lo suficiente (quizás por error) para firmar el Tratado Comercial anglo-francés de 1786, que redujo el mercantilismo y los aranceles entre los dos países. Pese a todo, ninguna economía y ningún poder fueron hegemónicos. Ambas potencias dependían de los aliados para asegurarse nuevas victorias, pero éstos no estaban dispues-

tos a alzar a la hegemonía a ninguna de ellas. Los franceses habían aprendido la lección diplomática y percibido la amenaza británica, de modo que mantuvieron un perfil bajo en el continente (por otra parte, tenían problemas de liquidez).

Ninguna de las potencias consiguió infligir un daño auténtico en territorio contrario; ni el ejército británico fue capaz de derrotar al francés, ni éste pudo cruzar el canal. Como afirma Kennedy, a propósito de un empate similar en 1800: «Como la ballena y el elefante, cada una de las potencias era con mucho la criatura más voluminosa en su propio terreno» (1988: 124). La ballena de la marina real británica parecía imponerse, pero tenía mucho océano por cubrir. Las dificultades logísticas eran inmensas, los barcos de guerra, modestos, por debajo de las tres mil toneladas, y las flotas estaban compuestas de menos de treinta navíos. Se comunicaban por señales con banderas, dentro de un alcance telescópico. Las armadas no solían encontrarse en la inmensidad del océano, de modo que dependían de sí mismas para luchar en los encuentros decisivos. Los franceses los evitaron; los británicos raramente alcanzaron al enemigo avistado. La prosperidad de Gran Bretaña había servido para igualarse con Francia.

Los diplomáticos europeos del antiguo régimen compartían una comprensión normativa de la situación: preservar el equilibrio de las potencias contra un posible elemento hegemónico. La geopolítica se limitó a esto durante algún tiempo, ya que el aumento de los costes de guerra y la mengua del botín global desalentaron el militarismo.

Estos hechos han suscitado especulaciones contrafactuales. ¿Qué habría ocurrido de no haber intervenido la Revolución Francesa? ¿Habrían tenido la Revolución Industrial, los instrumentos transnacionales del capitalismo y los imperios globales esa impronta británica de no haberse producido nuevas guerras? ¿Se habría cuestionado la hegemonía británica? No podemos estar seguros. Wallerstein (1989), desdiciéndose del economicismo de sus anteriores obras, sostiene que la hegemonía británica se debió a dos triunfos geopolíticos, que, según él, no pueden explicarse desde el punto de vista económico. Ya he descrito aquí el primero de ellos; sobre el segundo triunfo, relacionado con Napoleón, volveré en breve. Por mi parte, me inclino por un concepto menos optimista de la industria francesa que Wallerstein, y la separo de los liderazgos comercial y naval. La geopolítica ayudó a la Revolución Industrial británica y dificultó la francesa, pero la industria británica se habría impuesto de cualquier

modo porque fue el resultado de unas economías internas distintas y de una actitud más comprensiva por parte del Estado británico. No obstante, sin las ganancias de las guerras comerciales y coloniales, los británicos no habrían dominado la navegación, el comercio y el crédito internacionales durante el siglo XIX, y sus reglas habrían tenido menos importancia para la economía internacional. Se habría producido un mayor desorden (como dicen los realistas) o (más probablemente) una mayor regulación mediante el transnacionalismo y la negociación entre potencias que compartían normas e identidades sociales.

El fracaso hegemónico de Bonaparte

Pero la Revolución Francesa intervino inesperadamente. Como ya hemos visto en el capítulo 6, su desvío hacia la guerra y la conquista tuvo orígenes muy distintos a la diplomacia tradicional o las estrategias realistas de poder. Por primera vez desde las guerras de religión, la revolución produjo unas guerras más motivadas por los valores que por el provecho, e introdujo también en la época moderna el régimen final de la economía política: el imperialismo social. Sus amenazas —seculares, nacionales y de clase— contra el antiguo régimen causaron un feroz enfrentamiento de clase y empujaron a un ejército revolucionario a derrocar los antiguos regímenes y sus diplomacias. La guerra era ahora menos limitada, menos profesional y menos independiente de los mercados y de las clases del capitalismo ascendente. Al principio, el enfrentamiento lanzó a la Francia revolucionaria y sus aliados «patriotas» contra la alianza de los antiguos regímenes de Austria y Prusia y los pequeños principados y estados eclesiásticos. Pero cuando la revolución vaciló, el oficial que iba a salvarla demostró ser un aspirante a la hegemonía. Los restantes regímenes europeos respondieron como de costumbre, pero reforzaron con realismo los intereses de clase.

Napoleón Bonaparte ejemplifica mi quinto elemento determinante del poder: el genio para el liderazgo. Gobernó de modo singular, sin legitimidad monárquica, pero como rey absolutista; fue un extraordinario general, sólo derrotado por enemigos demasiado poderosos; un político capaz de institucionalizar la revolución, al tiempo que dominaba personalmente a todos sus rivales. Las cualidades de Napoleón tuvieron probablemente mayor importancia para la

historia del mundo que las de cualquier otro mandatario de la época que abarca este volumen. Convendrá examinar, pues, sus motivaciones, sus éxitos y sus fracasos.

Parece que Bonaparte intentó la hegemonía global ya en 1799; los británicos elaboraron en parte sus propios proyectos, y en parte se dejaron llevar por los de Napoleón, quien perseguía el imperialismo geopolítico. Si bien sabía que el «poder» habría de reportar a Francia la prosperidad, no se preocupó mucho de ello ni buscó metas concretas de provecho económico. Tenía las ideas muy claras: «Mi poder depende de mi gloria, y ésta se basa en las victorias que he alcanzado. Fracasará sólo si no lo alimento de nuevas victorias y nuevas glorias. Las conquistas han hecho de mí lo que soy, y sólo ellas me permitirán mantener mi posición». Quiso, pues, institucionalizar la hegemonía a través de la ley civil francesa, de un mercado común francés (el Sistema Continental) y de una instituciones estatales modeladas sobre las de Francia. La integración en la cumbre del poder se produjo en el plano dinástico —sus generales y su familia se convirtieron en gobernantes de los Estados clientes—, aunque hacia abajo se movilizó desconcertando las clases y las identidades nacionales.

El poder económico de Bonaparte sólo puede compararse con el de los Borbones antes de la revolución. Francia era rica, es decir, tenía una de las condiciones necesarias para el éxito, pero sus recursos eran sólo iguales a los británicos, muy inferiores a los de Gran Bretaña, Prusia y Rusia juntas y aliadas, sin contar con Rusia, su otro enemigo intermitente. La hegemonía continental de Bonaparte se basaba ante todo en su extraordinaria habilidad para movilizar recursos de coerción concentrada como el poder *militar*. Acrecentó la moral y la excelencia de los ejércitos revolucionarios de tres formas, cada una de las cuales impactaba sobre el problema del orden:

1. Explotó los ideales revolucionarios nacionales de los ciudadanos-oficiales de Francia y de sus «repúblicas hermanas», concediéndoles carreras, autonomía e iniciativa. Aproximadamente desde 1807 sus soldados rasos eran en parte reclutas y en parte mercenarios, no diferentes a los de cualquier otro ejército, pero la moral de sus combatientes, aparentemente basada en la veneración por «su» emperador, era sin duda distinta. No obstante, los cuerpos de oficiales, profesionales comprometidos con valores modernos y con la garantía de las carreras meritocráticas, tenían vínculos políticos muy superiores a los de sus iguales en las restantes fuerzas armadas, especialmente en

las centroeuropeas, donde muchos dudaban de que sus regímenes no reformados pudieran sobrevivir. Napoleón supo aunar el poder militar al ideológico, partiendo de la «moral inmanente» del ciudadano-soldado, sobre todo entre los oficiales y suboficiales, y con ello aisló a sus enemigos del antiguo régimen. No se limitó a ser un enemigo externo real, sino un incitador de la subversión nacional y de clase en el territorio adversario. Sus guerras importaban ideologías y el espectro de un nuevo orden social.

2. Pero también movilizó militarmente el poder económico que había aportado a Europa la revolución agrícola, vinculándolo a la moral de los oficiales. En el Volumen I, cuadro 12.2 (página 568) he demostrado que la población del noroeste y el este de Europa creció casi un 50 por 100 durante el siglo XVIII, debido en gran parte a un incremento similar de los ratios de rendimiento de las cosechas que aparecen en el cuadro 12.1 del mismo volumen (pág. 567). Pero el aumento de la densidad de la población y de los excedentes alimentarios redujo el mayor problema logístico de la historia de la guerra: la dificultad de transportar los suministros de comida a distancias superiores a los 80 kilómetros. Los grandes ejércitos se movían libremente sólo durante una campaña, desde finales de la primavera hasta mediados del otoño, un periodo durante el cual los suministros para los hombres y los caballos podían obtenerse en toda Europa a nivel local. La táctica de las divisiones bonapartistas explotó esta circunstancia. Los ejércitos del siglo XVIII habían evolucionado hacia una estructura más elástica de las divisiones, pero Napoleón lo llevó mucho más lejos. Se basó en una guerra de *movimiento* para conservar la iniciativa táctica. Dispersó ejércitos que contaban con sus propios recursos, con órdenes de tipo general, que después se escindían en cuerpos y divisiones con una autonomía similar a lo largo y ancho de un frente amplio y de numerosas rutas de comunicación. Los oficiales se valían de su propia iniciativa para vivir del campo, sin preocuparse de las plazas fuertes (con el fin de aprovechar los ya exhaustos recursos locales). Napoleón consideraba que un cuerpo de 25.000 a 30.000 hombres podía valerse por sí mismo indefinidamente si evitaba entrar en batalla, o durante gran parte de la jornada si resultaba atacado por una fuerza superior. Esta situación aumentó en gran manera el tamaño de los ejércitos movilizados y de las economías. Este tipo de guerra acrecentaba el desorden económico, pero tenía una mayor capacidad potencial de reordenar la economía que las libradas durante el siglo XVIII.

2. Napoleón vinculó a la moral de los oficiales, los excedentes agrícolas, la táctica de las divisiones y la movilidad en una campaña estratégica característica. Varios cuerpos del ejército se desplazarían por separado a lo largo de un amplio frente para envolver al enemigo y forzar un compromiso mediante la amenaza a su capital y corte (las capitales eran ya demasiado grandes para defenderse como fortalezas). Cuando el enemigo se encontraba preparando la batalla, Napoléon concentraba rápidamente su ejército contra una parte de su línea; entonces, su superioridad numérica le permitía romperla y provocar una desbandada general. Después de la victoria, el ejército francés se abastecía de los recursos del enemigo derrotado. Esta táctica dio buenos resultados en el centro y el oeste de Europa, en especial cuando se aplicó contra las fuerzas aliadas, débilmente coordinadas. Los franceses atacaban entonces antes de que los aliados pudieran volver a reunirlas. Allí donde un adversario se retiraba, encontraban suministros que les permitían avanzar contra él. Cuando el gobernante de turno había perdido su capital o se había retirado de sus territorios, se avenía a un acuerdo (sobre la logística véase van Creveld, 1977: 34 a 35, 40 a 47; sobre la táctica, véanse Chandler, 1967: 133 a 201; y Strachan, 1973: 25 a 37). Esto último ocurrió con las potencias menores y con las dos grandes centroeuropeas, Austria y Prusia. Pero las cosas no fueron mejores para el inmenso ejército ruso, e incluso el zar se vio obligado a pedir la paz. Bonaparte había derrotado así a poderes económicos y a fuerzas militares más poderosos que los suyos sirviéndose de una concentración y una movilidad superiores del poder militar. Su capacidad de movilizar la totalidad de las fuerzas del poder social le permitió invadir y derrotar a otros Estados, así como integrarlos y reestructurarlos imperialmente, con mayor facilidad que en las guerras del siglo XVIII.

Napoleón impuso su orden imperial por tierra. Pero sus pretensiones fracasaron en el mar. Desde 1789 la marina francesa se estancó por no haber defendido la revolución. Aunque la reconstruyó, Napoleón carecía de experiencia y de perspectiva en materia naval. Sus ambiciones respecto a Oriente Próximo y el Báltico naufragaron ante los barcos de Nelson en las batallas del Nilo y de Copenhague. Decidió entonces (como haría después Hitler) que la forma más sencilla de hacerse con el imperio británico sería invadir la propia Gran Bretaña. Pero la *Grande Armée* no podía igualar a los británicos en el canal (Glover, 1973). La marina real británica mandaba en sus aguas, y quien quisiera derrotarla tendría que expulsarla primero de ellas. Las

flotas aliadas de Francia, Holanda y España superaban numéricamente a la británica, pero no igualaban ni su experiencia bélica ni su marinería; la pusilanimidad de los almirantes indica que también ellos lo creían así. Espoleadas por Napoleón, las flotas de guerra española y francesa salieron por fin resueltamente hasta el cabo de Trafalgar.

Como en todas las batallas, en Trafalgar se dieron elementos casuales; su resultado podría haber sido otro, pero el que fue pareció apropiado a los combatientes, como nos lo parece a nosotros. No cabe duda al respecto, una vez que la superior capacidad de maniobra británica se unió a la atrevida táctica de Nelson consistente en navegar en línea recta a través de la línea de batalla francesa y española. Seis horas después, más de la mitad de las naves española y francesas eran destruidas o capturadas, con graves pérdidas humanas (para un relato gráfico véase Keegan, 1988). Hacia las seis de la tarde del 21 de octubre de 1805 Nelson había muerto, y con él la hegemonía francesa y la posibilidad de un imperio europeo de dominación. El aire del mar aún hacía libres a los ingleses, encerrados en la jaula más soportable de una civilización con múltiples actores del poder.

La potencia naval británica había triunfado. El bloqueo económico británico se veía ahora reforzado por el dominio de los mares, al tiempo que el contrabando minaba el Sistema Continental. La retirada rusa del Sistema en 1810 demuestra que el zar sabía apreciar por dónde soplaba el viento. El comercio internacional francés quedó destrozado (un proceso que había comenzado en 1793, cuando los británicos tomaron Santo Domingo, el mayor puerto francés de las Américas). Los británicos bloquearon Amsterdam, el principal rival financiero de la *City* de Londres, y sus exportaciones se duplicaron antes de 1815. Algunas industrias francesas prosperaron gracias al proteccionismo, pero técnicamente se encontraban por debajo de las británicas y perdieron capacidad de acceso a los mercados globales y al crédito. Gran parte de las posesiones francesas en el Caribe, el Océano Índico y en el Pacífico fueron barridas. Con la hegemonía naval y comercial asegurada, la industria británica aumentó su liderazgo. Las victorias de Gran Bretaña sellaron el vínculo del liderazgo industrial y el predominio comercial, asegurando así su casi hegemonía.

Con el Mediterráneo, el Báltico y el Atlántico bloqueados, Napoleón podía elegir entre intentarlo de nuevo por mar o imponer la hegemonía en el continene europeo. Eligió lo último (una vez más como Hitler). A partir de 1807 sólo resistieron España y Rusia, los

dos países más grandes y más atrasados. España representaba un problema especial, porque allí la potencia naval británica podía abastecerse y las tropas de tierra podían apoyar a los rebeldes. Bonaparte había conquistado España, donde entronizó a su hermano José, quien tuvo que enfrentarse a una rebelión popular respaldada por las tropas británicas a las órdenes de Wellington, abastecida desde el mar. Mientras la guerrilla española y las tácticas evasivas de Wellington inmovilizaban a 270.000 soldados franceses, Bonaparte invadió Rusia.

Y ése fue su error decisivo, el primero de los tres sorprendentemente iguales que habrían de cometer durante los próximos ciento treinta años las naciones centroeuropeas aspirantes a imperios. La decisión bonapartista de luchar al mismo tiempo en el este y en el oeste reproduce la del alto mando alemán en 1914 y la de Hitler en 1941. Partiendo de la seguridad adquirida en una serie de éxitos rápidos, su estrategia común consistió en lograr una victoria rápida y decisiva sobre un enemigo al que habían subestimado, para dedicarse después a otro más persistente. Pero la victoria rápida no se materializó. En una guerra de desgaste, es probable que triunfen los grandes batallones (como sostiene Kennedy). En 1914 el alto mando alemán subestimó a sus enemigos occidentales (valoró mal la fuerza del ejército francés y la del compromiso diplomático inglés). En 1812 y 1941, el fallo estuvo en subestimar el régimen ruso, significativamente distinto a todos los demás. Rusia era un país atrasado, cuyos cuerpos de oficiales nobles y autocráticos estaban divididos por la política de la modernización y controlaban por completo a los campesinos.

En junio de 1812 Napoleón cruzó la frontera rusa con 450.000 hombres (mitad franceses, mitad aliados), habiendo dejado otros 150.000 para cubrir los flancos y la retaguardia; se trataba del mayor ejército conocido en la historia de occidente y probablemente en la del mundo (soy escéptico respecto a la posibilidad de que los chinos pudieran movilizar sus ejércitos formados por «millones» de soldados en una sola campaña). Llevaban provisiones suficientes (aunque no bastante forraje) para veinticuatro días; los convoyes y las gabarras acarreaban suministros para veinte días; los hombres, para cuatro, con el complemento del avituallamiento en el país. Los generales rusos se encontraban divididos respecto a la táctica a emplear, pero el resultado final fue (quizás inconscientemente) copiar la táctica de Wellington en España y evitar la batalla. Las extensas líneas de comunicación, las dificultades logísticas y el hostigamiento ruso fueron minando al ejército de campaña real de Napoleón. Cuando llegó ante

Moscú, en el decimoctavo día, disponía de 130.000 soldados. Ante las presiones de la corte, Kutusov, a regañadientes, dispuso a sus fuerzas en el campo de Borodino. Como de costumbre, los oficiales y soldados rusos no se arredraron, por el contrario, resistieron y murieron, ocasionando graves pérdidas a los franceses. Kutusov, espantado ante las terribles bajas, acabó por replegarse. El ejército francés ocupó otra capital.

Pero, ante la sorpresa de Napoleón, el régimen ruso no se rindió; Kutusov dispersó sus fuerzas y se desplazó hacia el este a principios del invierno. Las ventajas económicas, geoeconómicas y políticas de Rusia —su tamaño, su invierno y su atraso político y económico— comenzaban a hacerse evidentes. El régimen ruso, como en 1941, era autocrático y estaba menos inserto en la sociedad civil que cualquier otro de Europa. Podía abandonar el territorio, quemar las casas y las ciudades de sus súbditos y destrozar las cosechas de sus campesinos con mayor facilidad que cualquiera de los restantes enemigos de Bonaparte. El zar y la corte, al contrario que sus primos de Berlín y Viena, nunca consideraron seriamente la negociación.

Por vez primera, Napoleón no podía seguir a su enemigo. Ni pudo tampoco pasar el invierno en un Moscú que el ejército ruso había incendiado. En octubre ordenó la retirada de su ejército de campaña, formado ahora por 100.000 irreductibles. A medida que cobraba velocidad, la retirada se encontraba con el resto de la *Grande Armée*. Había pocas vituallas y menos perspectivas de obtenerlas del país. El «general Invierno» actúa en Rusia mediante dos tácticas. Al principio y al final, la lluvia y el deshielo producen un fango que, al inmovilizar los cañones, los transportes y los suministros, priva a los ejércitos de comida y equipamiento. En medio, la nieve y el hielo los matan de frío. Ambas devastaron a los franceses. Pero el «general Invierno» contaba, además, con la ayuda de los destacamentos rusos de tropas dispersas que evitaban la batalla y dejaban baldío el campo (y al campesinado) al paso de los franceses. Cuando Napoleón y su alto mando abandonaron a sus hombres, éstos abandonaron la artillería pesada y el transporte, los sanos abandonaron a los débiles y la caballería se comió sus caballos, la *Grande Armée* se convirtió en una muchedumbre que huía en desbandada.

Una carta del mariscal Ney a su esposa evidencia la angustia de la retaguardia que él mismo mandaba: «Es una muchedumbre sin meta, hambrienta, febril ... El general Hambre y el general Invierno han derrotado a la *Grande Armée*» (Markham, 1963: 184 a 185). Literal-

mente había sido diezmado: menos de 40.000 soldados exhaustos volvieron a Alemania. Se trataba de la mayor pérdida sufrida por un gran ejército desde el año 9 d.C., cuando las legiones de Varo desaparecieron en los bosques germanos.

El desastre de la campaña rusa supuso la pérdida de la oportunidad hegemónica. Los monarcas, tan temerosos de sus patriotas como de Napoleón, deseaban la vuelta del «equilibrio» del antiguo régimen, aunque fuera con Bonaparte. Se avinieron a pactar, pero Napoleón no podía aceptar la pérdida de su imperio. Reunió nuevos ejércitos, pero ahora sus enemigos habían aprendido a copiarle. Como comprobamos en el capítulo 7, se vieron forzados a la movilización patriótica. Las ventajas excepcionales de Napoleón habían desaparecido. Austria y Prusia recuperaron la confianza al ver las victorias de los rusos y los ejércitos británicos (y sus subsidios) converger en Francia por el este y por el sur. Las cuatro potencias, apoyadas por Suecia, se confabularon contra Napoleón. De 1812 a 1815 la alianza de las potencias restauró la civilización europea de múltiples actores de poder. Los aliados lucharon juntos en todos los campos de batalla, de Leipzig (la «batalla de las Naciones») a Waterloo (donde las tropas de Wellington resistieron a los franceses hasta la llegada de los prusianos). Los aliados del antiguo régimen institucionalizaron entonces el equilibrio en los salones diplomáticos de Versalles.

Pero sigamos especulando contra los hechos. Retrospectivamente vemos que a Napoleón le falló su talento para el liderazgo. Eligió una diplomacia equivocada. Debería haberse tomado las cosas con mayor calma, concentrándose primero en el frente hispano-portugués o en el ruso, al tiempo que se reconciliaba con el otro enemigo, para luego dedicarse a este último. Su ejército principal podría haber forzado la retirada de Wellington y protegido sus costas con una armada reconstruida. Puede que en cualquier caso no hubiera conquistado Rusia o Gran Bretaña, pero su habilidad para ganar batallas terrestres y la ocupación de la Rusia europea habrían hecho a los británicos más cautos, y al zar, su cliente. Así se habría inaugurado un periodo de hegemonía continental francesa contra la hegemonía marítima británica: una confrontación entre dos superpotencias comparable a la que hemos vivido en años recientes. Gran Bretaña y Francia podrían haber aceptado una guerra fría como modus vivendi. De no haber sido así, los bloqueos habrían podido continuar; Francia habría contruido una gran flota o Gran Bretaña habría aumentado sus compromisos continentales. Se habrían buscado Estados clientes, se habrían despa-

chado fuerzas expedicionarias, y se habrían aumentado los bloqueos contra el Sistema Continental. El transnacionalismo se habría debilitado a causa de la intervención interior y geopolítica de los dos Estados. El desarrollo industrial se habría desviado de su destino predominantemente transnacional.

Es probable que la hegemonía continental francesa no hubiera durado. Los Estados más combativos —Austria, Prusia y Rusia— se habrían recuperado con la ayuda británica, como ocurrió con los dos primeros gracias al apoyo británico y ruso. No podemos estar seguros de los resultados hipotéticos, pero una cosa es clara: la estrategia diplomática y militar de los que intentan la hegemonía en un sistema sustancialmente multiestatal ha de ser prácticamente impecable. La de Bonaparte no lo fue. Cuando en la Edad Media el papado excomulgaba a los gobernantes más poderosos, las restantes potencias veían la señal para precipitarse sobre ellos. Ahora, la señal era la diplomacia secular de Rusia y Gran Bretaña en el momento en que (1812) Bonaparte cometió su error fatal. El poder geopolítico necesita tanto la diplomacia como la movilización de recursos económicos en forma de poder militar. Como ha apuntado Pareto, raramente se combinan en una persona, o en una gran potencia, las cualidades del zorro y del león. Napoleón triunfó apoyado en un militarismo leonino, pero despreció a los zorros de la diplomacia. La hegemonía fue la estrategia del león francés, que fracasó a manos de los zorros anglo-rusos. La astucia diplomática resultó decisiva para las relaciones de las potencias occidentales.

La derrota de Napoleón nada tuvo que ver con el poder económico. Como les ocurrió a los alemanes en el siglo XX, los rivales económicos sólo se unieron en su contra *después* de que él mismo se hubiera creado muchos enemigos aliados. En una guerra de desgaste, la economía de una sola potencia, al margen de la eficacia militar de sus ejércitos, puede verse superada por el enfrentamiento contra varias potencias enemigas. Para su desgracia Napoleón, como el káiser o Hitler, convirtió la guerra relámpago en una guerra de desgaste. Había perseguido una hegemonía similar a la de los tres germanos: el emperador medieval Enrique IV, el káiser Guillermo y Hitler. Quizás, como sostuvo Wellington sobre sus propias victorias, cada una de esas situaciones fue «una cosa muy reñida», pero la semejanza geográfica del fracaso resulta llamativa.

Se trató, pues, de una potencia con una situación central en Europa, con sus principales rivales en ambos flancos, capaz de movilizar

recursos económicos en un poder militar insólitamente efectivo, pero ese hecho provocó una alianza diplomática entre sus enemigos, capaz de librar la batalla en dos frentes. Sin embargo, no es fácil que los aliados se coordinen tácticamente cuando se mueven en dos frentes, ya que apenas pueden transportar tropas y suministros de uno a otro a tiempo de afrontar el peligro en las condiciones logísticas del siglo XIX (como se pudo hacer, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial). Pero sí pueden lanzar frontalmente sus recursos para agotar al enemigo e impedir que traslade sus tropas (contando con la ventaja de las líneas internas de comunicación). Si los aliados son superiores en materia de recursos militares y económicos, la guerra de desgaste se saldará normalmente con una victoria para ellos. La extraordinaria habilidad de un Napoleón o de un Hitler, la capacidad bélica de los ejércitos francés y alemán, trabajaron en contra de esa desventaja diplomática decisiva, que se convirtió después en una desventaja militar. Todos, menos Enrique, paliaron la inferioridad atacando simultáneamente por el este y por el oeste. Únicamente Enrique actuó como un zorro, por eso capituló con el solo expediente de caer de rodillas ante el Papa. Los demás lucharon como leones, y lo perdieron todo.

El fracaso de la hegemonía vino determinado por las relaciones de poder ideológico, económico, militar, político y diplomático, unidas a un liderazgo en crisis; en este caso, a las imperfecciones de un genio. Su error decisivo tuvo como contrapartida la casi hegemonía de su enemigo. Como comentaba con ironía el general prusiano Gneisenau:

> Gran Bretaña se lo debe todo a ese rufián, porque los acontecimientos que él ha provocado han aumentado la grandeza, y la prosperidad de los británicos, que ahora son los dueños de los mares, y ni en su territorio ni en el comercio internacional tienen un solo enemigo a su altura [Kennedy, 1988: 139].

El concierto y el equilibrio de las potencias, 1815-1880

El periodo comprendido entre 1815 y 1914 no fue precisamente un «siglo de paz». Holsti (1991: 142) demuestra que durante esos años la guerra supuso sólo un 13 por 100 menos en el sistema internacional que en los cien años anteriores. Sin embargo, la paz predominó en el corazón de Europa (no en su periferia). Las grandes po-

tencias habían aprendido a relacionarse con cautela. Las guerras que se produjeron en el corazón europeo de 1848 a 1871 fueron breves, astutas y decisivas. Pero la tensión internacional creció hasta el estallido de 1914. Las variaciones hacen del siglo XIX una época de gran interés para analizar las causas del orden y la paz internacionales. Muchos autores atribuyen ambas cosas al desarrollo del capitalismo industrial y transnacional bajo la hegemonía británica después de 1815, y el aumento de la tensión posterior a 1880 a la pérdida de esa hegemonía. Pero esta idea resulta demasiado economicista y demasiado apegada al poder británico. El orden del mundo decimonónico dependía en realidad de tres redes de poder entrelazadas: un concierto de las potencias, negociado diplomáticamente (apuntalado en la solidaridad normativa de los antiguos regímenes restaurados), la casi hegemonía especializada del Imperio británico y un capitalismo transnacional difuso. Las tensiones posteriores a 1880 se debieron a la decadencia simultánea de las tres.

Para muchos liberales, este periodo de paz relativa anunciaba un nuevo orden mundial; de ahí el pacifismo transnacional de la teoría social del siglo XIX que he analizado en el capítulo 2. Pero la perspectiva que nos proporcionan los acontecimientos de 1914 y 1939 anulan ese optimismo inconsciente. No obstante, cabría preguntarse si fue razonable en su momento. ¿Pudo imponerse el pacifismo en Occidente hacia la mitad del periodo victoriano?

Como tendremos oportunidad de ver en el capítulo 12, los estadistas de la época procedían mayoritariamente de las clases del antiguo régimen. La identidad social común consolidó el realismo del equilibrio de las potencias. Éstas construyeron un elaborado sistema de alianzas para prevenir la repetición de aquella alarmante coincidencia de guerras devastadoras, clases revolucionarias y movilizaciones nacionales. Francia había transformado la actitud de los estadistas hacia la guerra, la economía política internacional y las relaciones de clase, pues los tres fenómenos aparecían asociados ahora con resultados subversivos, en mayor medida que durante el siglo XVIII. La guerra había traído un desastre social. Los estadistas decidieron entonces estabilizar Europa e incluso los territorios coloniales (hasta cierto punto) y controlar mediante la represión las relaciones de clase, pero dejar a los mercados el gobierno de la economía (con una cierta dosis de proteccionismo pragmático). Rusia limitó su expansión al exterior de Europa, a un territorio que se convirtió por mucho tiempo en su propia esfera de influencia. Prusia y Austria se expandieron más a

costa de las potencias pequeñas que de las grandes. Todo ello reforzó la solidaridad normativa entre las potencias europeas, basada en la comunidad de clase y de intereses geopolíticos. El equilibrio fue, pues, geopolítico —entre potencias— y de clase, entre los antiguos regímenes, las burguesías y las pequeñas burguesías.

La tarea se saldó con un éxito excelente [1]. En el núcleo, el concierto y el equilibrio de las potencias entre Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia inauguraron treinta años de paz y estabilidad interna. Aunque el constitucionalismo continuó prosperando, las testas coronadas se mantuvieron sobre sus cuerpos y conservaron gran parte de sus poderes; del mismo modo, las iglesias conservaron las almas. Con una consciencia poco común, la estrategia de los regímenes concertados proporcionó a Europa una gran estabilidad de clase, a despecho de la interrupción del capitalismo y de la industria, y paz internacional, pese al ascenso y la caída de algunas potencias. Francia se hallaba rodeada de Estados cuya soberanía quedaba garantizada por las grandes potencias: los reinos ampliados de Holanda y Piamonte-Cerdeña, la España de la restauración borbónica y la Renania cedida a Prusia. La revolución que había llegado desde abajo y desde el exterior fue sustituida por una mezcla de represión y reformas tímidas planteadas desde arriba. A mediados de siglo, con las revoluciones reprimidas, una Francia domesticada fue admitida al concierto de las potencias.

No es fácil conocer el puesto que ocupaba cada potencia dentro del concierto, pero ninguna de ellas se aproximó siquiera a la hegemonía geopolítica. De lo que no hay duda es de dónde residía el poder durante los acontecimientos de 1815: 200.000 soldados rusos marcharon con su zar hasta París (había otros 600.000 movilizados en otras partes) mientras el ejército de Wellington se mantenía cerca y los barcos británicos rodeaban las costas de Francia. Pero el ejército ruso se volvió a casa, el zar Alejandro se dedicó a soñar y el poder

[1] Este juicio no es compartido por muchos especialistas en relaciones internacionales, que abrigan grandes ambiciones para el orden internacional y esperan de la diplomacia mayores ideales de los que sin duda puede proporcionar. Morgenthau (1978: 448 a 457) se muestra decepcionado por el concierto, pero es que en realidad se centra más en Rusia y Gran Bretaña, que no se vieron especialmente obligadas, que en los liberales del sur o del centro de Europa, que sí lo estuvieron. Holsti (1991: 114 a 137) dedica más espacio a la elegancia de los ideales kantianos de la juventud del zar Alejandro que a sus propios datos: las potencias no fueron a la guerra entre sí, y regularon conjuntamente aquellas regiones cuya inestabilidad amenazaba con el estallido del conflicto.

militar de Rusia decayó a mediados de siglo. Las dos figuras dominantes en Versalles fueron los representantes de las dos potencias que más favorecieron el *statu quo*: el príncipe Metternich, ministro de Austria, y Castlereagh, ministro británico de Asuntos Exteriores. El predominio de Metternich en el continente se prolongó durante dos décadas. El hecho de que Austria se encontrara minada por los disturbios internos volvió en favor de Prusia la situación centroeuropea. Sin embargo, todavía en 1850 Prusia se retrajo y desmovilizó a su ejército por no arriesgarse a la guerra con Austria en el incidente conocido como la «humillación de Olmutz». Las potencias continentales eran muy similares. Los Estados Unidos, aunque crecían en poder, contribuyeron sólo ocasionalmente al concierto, como correspondía a sus distantes intereses.

Gran Bretaña, que se desentendía de la mayor parte de los asuntos continentales, no ocupó el puesto hegemónico vacante. Canning, el ministro de Exteriores (sucesor de Castlereagh), abandonó el concierto convencido de que Rusia acabaría por dominarlo. Gran Bretaña nunca tuvo sobre Europa la hegemonía que quiso para sí Napoleón o que más tarde obtuvieron los estadounidenses. Es un error afirmar, como hace Arrighi (1990), que el concierto fue «sobre todo un instrumento de la primacía británica en la Europa continental». Gran Bretaña se encontraba aún haciendo las cuentas del coste de sus intervenciones en el continente, y se sentía satisfecha por su superioridad naval en todo el momento, que en el caso del Mediterráneo le costaba especialmente barata. En realidad, las potencias continentales padecían peores condiciones económicas por su endeudamiento con los obligacionistas británicos. Canning llegó a considerar la posibilidad de emplear el poder financiero de Gran Bretaña para chantajear a las otras potencias, pero se volvió atrás temeroso de desestabilizar el equilibrio entre ellas, lo que no deja de ser un hecho significativo.

En otros lugares, la potencia británica no encontró demasiados impedimentos. Ya no quedaban rivales navales o coloniales. Los imperios francés, español, portugués y holandés estaban muy menguados, mientras que el británico crecía sin limitaciones (Shaw, 1970: 2). El mayor rival en sus fronteras exteriores, situadas en el Mediterráneo oriental, el Lejano Oriente y el límite nordoccidental de la India, parecía ser Rusia, lo que da una idea de hasta dónde se había extendido Gran Bretaña en su hegemonía especializada, naval, comercial, colonial e intercontinental. Y todo ello gracias al «rufián» de Bonaparte. Sin embargo, Gran Bretaña gobernó el orden geopolítico *colec-*

tivamente, mediante una división de poderes negociada en un concierto de dinastías europeas iguales entre sí.

El concierto se conservó no sólo como reflejo de un deseo general de preservar el *status quo*, sino como una serie de tratados concretos y de operaciones conjuntas. Al Congreso de Viena de 1815 siguió el de Aquisgrán en 1817. En la Santa Alianza, la Rusia ortodoxa, la católica Austria y la Prusia protestante anunciaron su derecho a intervenir contra los movimientos liberales, seculares o nacionalistas, tanto nacionales como extranjeros, «de acuerdo con el sagrado mandato». Las dinastías no pusieron en práctica los grandiosos ideales de la alianza (que fueron proclamados sólo para apaciguar al zar), sino sus motivaciones reaccionarias. Los decretos de Karlsbad de 1819, debidos a Metternich, prohibiendo los movimientos liberales, fueron impuestos en todos los Estados alemanes. Los congresos autorizaron a las fuerzas austriacas para sofocar las rebeliones de Nápoles, 1821, y el Piamonte, 1823, así como a unirse a las fuerzas borbónicas franco-españolas para reprimir los levantamientos que tuvieron lugar en España durante 1823. En ese mismo año Gran Bretaña reveló las limitaciones europeas del concierto al anunciar que su marina interceptaría toda expedición franco-española dirigida a reprimir la rebelión de las colonias españolas del Nuevo Mundo. El Atlántico era propiedad británica.

Las potencias se enfrentaron a tres grandes inestabilidades regionales que pronto se hicieron «nacionales». A menudo no lograron un acuerdo al respecto, pero sabían que los desacuerdos las conducirían a la guerra y querían evitarlo. Los gobiernos de los Países Bajos carecían de legitimidad, los Estados de pequeño tamaño sobrevivían en Italia y Alemania entre otros grandes y depredadores; en cuanto a los Balcanes otomanos se encontraban en franca decadencia. En las décadas de 1820 y 1830, las potencias frenaron las ambiciones francesas en los Países Bajos. Prusia y Austria permanecieron limitadas a Europa central. Gran Bretaña, Francia y Rusia apoyaban la independencia griega contra Turquía, asegurada en 1829 por la mediación prusiana. Sin embargo, aparecieron algunas grietas. El concierto se convirtió de hecho en un equilibrio realista del poder. En los Balcanes diferían los intereses rusos y austriacos, y las liberales Francia y Gran Bretaña (tras el derrocamiento del gobierno borbónico de 1830) discrepaban a menudo con los tres monarcas reaccionarios. Aún así, consiguieron componérselas para regular la formación de un Estado belga y garantizar su «neutralidad eterna» en 1830 (como habían hecho en 1815

con Suiza), y finalmente fijar las fronteras de los Países Bajos en 1839. Los tres monarcas reñían con frecuencia, pero continuaban actuando juntos. Juntos reprimieron en 1846 las revueltas polacas y juntos apoyaron la anexión austriaca de la ciudad libre de Cracovia. Austria llamó a Hungría a las tropas rusas para ayudar a reprimir la revolución de 1848: el último intento revolucionario de la Europa decimonónica (aparte de la Comuna de París). Incluso en 1878 las restantes potencias, sirviéndose de una simple declaración diplomática, consiguieron que Rusia devolviera los territorios otomanos que acababa de conquistar. Se declaró Estados independientes a algunos de ellos, otros fueron transferidos a Austria con el fin de preservar el equilibrio de las potencias en los Balcanes.

Tales acuerdos perseguían dos objetivos: mantener el orden y evitar que cualquier de las potencias se alzara con la hegemonía en una u otra región de Europa. «Orden» significaba en este caso la regulación de las disensiones nacionales e internacionales, lo que para los monarcas reaccionarios significaba reforma represiva y para las potencias liberales impedir la revolución permitiendo la autodeterminación burguesa y «nacional». La diplomacia creó conscientemente el engranaje más opuesto a la teoría de la estabilidad hegemónica: preservar la paz y el orden, lo que incluía el orden de las clases reaccionarias y el orden del mercado, *evitando* la hegemonía. En efecto, la labor de los diplomáticos fue ingente durante todo el siglo XIX. Tuvieron que afrontar una novedad potencialmente devastadora: el nacimiento de la nación enfrentada a los múltiples Estados ya existentes. Holsti (1991: 143 a 145) calcula que más de la mitad de las guerras ocurridas de 1815 a 1914 —en comparación con sólo el 8 por 100 de las guerras de los cien años anteriores— respondían a problemas relativos a la creación de un nuevo Estado. Tales motivaciones distaban mucho de las predominantes en el siglo XVIII: la extensión territorial y los problemas comerciales. En los Países Bajos, Italia y los Balcanes la adecuación de la nación al Estado provocaba de continuo situaciones al borde del conflicto. Si nunca produjeron un enfrentamiento grave entre las potencias se debió sobre todo al talante negociador de éstas. En efecto, la diplomacia sólo fracasó cuando una de las potencias, en concreto Rusia, aprovechó la oportunidad para explotar en su favor los nacionalismos del este, mientras que una segunda, Prusia, demostró ambiciones «nacionales» en centro Europa, y ambas pretensiones desestabilizaron a una tercera, la Austria multinacional. El orden y la

hegemonía regional y «nacional» se relacionaron inversamente en la geopolítica a lo largo del siglo XIX.

Los Estados desviaron también sus respectivas economías políticas internacionales hacia opciones pacíficas, más orientadas hacia el mercado. Como se ha demostrado recientemente, la guerra entre las grandes potencias era demasiado peligrosa para los antiguos regímenes. Colonizaban y aterrorizaban a los nativos del Tercer Mundo, pero actuaban con cautela y aceptaban la conciliación a través de una tercera cuando sus intereses chocaban en las colonias. Las concepciones territoriales de interés no faltaron, pero se estabilizaron siempre gracias a las negociaciones. De 1814 a 1827 se produjo una auténtica oleada de tratados comerciales: Gran Bretaña los negoció con Argentina, Dinamarca, Francia (dos), Holanda, Noruega (dos), España (dos), Suecia (dos), Estados Unidos (tres) y Venezuela. La oleada selló las condiciones del comercio internacional británico, ya que (excepto los de Venezuela y China) no se firmaron otros tratados de esa naturaleza hasta después de 1850 (Ministerio de Asuntos Exteriores, 1931). Pero las negociaciones nunca fueron puramente comerciales; los intereses de las alianzas geopolíticas de ambos lados aparecían siempre mezclados con aquéllos.

El capitalismo transnacional, 1815-1880

El concierto y el equilibrio recibieron una amplia ayuda de carácter transnacional del capitalismo industrial. Las guerras napoleónicas habían reducido el comercio internacional; hasta 1830 la producción europea creció a un ritmo mayor que el comercio internacional. En efecto, durante esta fase, la primera de la Revolución Industrial, aumentó la naturalización de las economías. Más tarde, en Francia y Gran Bretaña, como se percibe en el cuadro 8.5, se incrementó el porcentaje del producto nacional bruto correspondiente al comercio internacional, especialmente desde mediados de siglo, hasta nivelarse en la década de 1880.

El comercio internacional británico había aumentado desde un cuarto hasta la mitad del producto nacional bruto. Las importaciones crecieron más aprisa que las exportaciones, hasta alcanzar el punto máximo en la década de 1880; la situación se equilibró gracias a las reexportaciones y los reembolsos de la inversión en el exterior. Aunque carecemos de datos fiables para otros países, el conjunto del co-

CUADRO 8.5. *Porcentaje del producto nacional bruto correspondiente al comercio exterior de mercancías, 1825-1910, en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos*

	Gran Bretaña	Francia	Alemania	Estados Unidos
1825	23(27)	10	n.i.	n.i.
1850	*27(33)*	*13*	n.i.	*12(13)*
1880	41(49)	30	35	13(14)
1910	43(51)	33	36	11(12)

Notas:
1. Kuznets no ofrece cifras de los mismos años para todos los países. Mis datos sirven tanto para el año indicado como para los años inmediatos o para un periodo completo; cuando es necesario aparecen ajustados a la tendencia subyacente. Naturalmente se trata de aproximaciones (como todas las estadísticas de las cuentas nacionales).
2. Las cifras británicas entre paréntesis añaden los servicios; las correspondientes a Estados Unidos entre paréntesis añaden la mayor parte de los servicios.
3. Las evaluaciones francesas se calculan sobre el producto nacional neto. Naturalmente, he ajustado ligeramente a la baja el porcentaje de la fuente (un 5 por 100).

Fuente: Kuznets, 1967: cuadros en apéndice 1.1, 1.2, 1.3, 1.10, cantidades a precios corrientes.

mercio internacional creció probablemente a mayor ritmo que la producción mundial aproximadamente hasta 1880, momento en el que alcanzó la estabilidad. Kuznets estima que el comercio internacional se incrementó desde sólo el 3 por 100 de la producción mundial de 1880 hasta el 33 por 100 de 1913, debido en su mayor parte a los Estados europeos. El caso de los Estados Unidos resulta excepcional, ya que no presenta un aumento proporcional de su comercio internacional por estar aún implantándose en su propio continente. A medida que el comercio se expandía, se hacía menos bilateral, necesitaba menos tratados y generaba mayores interdependencias transnacionales. El comercio entre dos potencias era menos equilibrado, de forma que las monedas y los créditos adquirían importancia como medios de liquidación. Las monedas se hicieron enteramente convertibles con la adopción generalizada del patrón oro, en primer lugar por Gran Bretaña, en 1821, más tarde por Alemania, en 1873, y finalmente por Rusia, en 1897. Con la libra esterlina como moneda de reserva, la estabilidad monetaria se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial. Todos los países con un comercio exterior significativo integraron su banca y sus prácticas de préstamo a partir de 1850.

La expansión del comercio coincidió con lo que hemos llamado casi hegemonía económica de Gran Bretaña y suele atribuirse a ese

hecho, pero, en realidad, no se trata más que de una causa entre muchas. La industrialización de Occidente fue desde 1815 intrínsecamente transnacional. Esta expansión masiva del intercambio interregional de mercancías no podía someterse al control de las débiles infraestructuras de los Estados contemporáneos. De modo que no fueron éstos, sino los propietarios privados quienes impulsaron el crecimiento económico, gran parte del cual se produjo intersticialmente respecto a las reglas del Estado y a través de mercados bastante libres. Como es lógico, todo se produjo de otro modo en las colonias, adquiridas y conservadas por la fuerza militar. Pero las necesidades exportadoras e importadoras de Gran Bretaña no representaron una gran oportunidad para los Estados, sino para los particulares, los inventores y los trabajadores cualificados que operaban a través de los mercados europeos y americanos.

La expansión industrial respondió principalmente a tres características de los mercados transnacionales. En primer lugar, el nivel existente de la agricultura regional y de la industria. Para comerciar provechosamente con Gran Bretaña hacía falta una organización social avanzada, y para competir con sus productos se necesitaban unas instituciones capitalistas no muy inferiores a las suyas. En segundo lugar, la industrialización dependía del acceso al carbón, y más tarde al hierro, vital para las máquinas de vapor. Por último, la facilidad de las comunicaciones con Gran Bretaña, y luego con otras zonas industriales, reducía los costes de las transacciones. Así pues, la industria se difundió primero por zonas relativamente avanzadas, que poseían carbón y se encontraban cerca del núcleo capitalista original.

La difusión, que no conocía fronteras, tuvo un carácter más regional que nacional. Se expandió por los Países Bajos —parte de las zonas holandesa y austriaca (esta última se convertiría en Bélgica en 1830) y del norte de Francia—, sin respetar el territorio de cada Estado; después, por Renania, el Sarre y algunas zonas de Suiza, nuevamente regiones de fronteras cruzadas, que no se encontraban en el territorio central de los grandes Estados. La industrialización de Silesia, Sajonia y Checoslovaquia cruzó las fronteras de Prusia, Austria y otros Estados menores; el norte de Italia era un territorio en liza; Cataluña, una región fronteriza, no completamente integrada en el reino de España. En efecto, la primera industrialización se produjo, por lo general, fuera de las zonas nucleares de penetración infraestructural del Estado. Como subraya Pollard (1981), en este periodo los mecanismos económicos fueron menos nacionales e internacionales que

regionales e interregionales. El capitalismo se difundía intersticial y transnacionalmente.

Pero las condiciones del comercio se establecían más en Gran Bretaña que en otros países, por ser mucho mayor la proporción de mercancías y de capital comercial que se producía o pasaba por allí. Por tal razón fueron «británicas» la mayor parte de las normas. Aunque esto es sólo un convencionalismo para designar normas que no tenían un solo lugar de origen, que dependía de la institucionalización de la propiedad privada absoluta y, en casi todo Occidente, del trabajo formalmente libre. Lo que significa que los instrumentos transnacionales del capitalismo comercial se desarrollaron plenamente en Gran Bretaña, pero no fueron sólo británicos. McKeown (1983) ha demostrado que Gran Bretaña no influyó mucho en las políticas sobre los aranceles y las cuotas de importación de otros países, lo que supone un gran golpe para las teorías que sostienen que Gran Bretaña impuso la estabilidad hegemónica. Como reconocía Palmerston: «El gobierno inglés carece de fuerza para impedir que los Estados independientes establezcan acuerdos relativos a su comercio mutuo que les parezcan más adecuados para sus propios intereses» (O'Brien y Pigman, 1991: 95).

Con todo, Gran Bretaña no empleó la «fuerza», porque «su» economía parecía beneficiosa para el mundo entero (como observa Arrighi, 1990). Era abierta y liberal. La política exterior británica no agredía el territorio de las restantes potencias occidentales. El imperio británico y la influencia mediterránea estaban en su sitio; sólo había que defenderlos. Los nuevos gobiernos británicos ya no buscaban amplios territorios desconocidos, sino enclaves y puertos dispersos y estratégicos (posteriormente, enclaves donde repostar carbón para los buques de hierro) como Adén, Singapur y Hong Kong, aunque los colonos blancos los involucraron con frecuencia en los continentes). Gallagher y Robinson (1953) sostienen que aunque Gran Bretaña prefería un «imperio informal», empleaba el control político formal siempre que era necesario. Pero casi nunca lo fue en el trato con otras potencias. La potencia naval británica garantizaba un mercado libre y equitativo, sin discriminación a favor de los productos británicos o intervención en los países del Tercer Mundo, que podían dominar sus propios territorios y garantizar el comercio libre (Platt, 1968a, 1968b; Semmel, 1970; Cain y Hopkins, 1980: 479 a 481).

A las otras potencias, las condiciones «británicas» les parecían meramente técnicas. La marina real inglesa pacificaba las rutas co-

merciales y reducía a los Estados no occidentales que se mostraban recalcitrantes. Gran Bretaña brindaba un futuro modelo de capitalismo industrial, que unas veces resultaba lógico imitar, y otras, evitar. Las transacciones internacionales podían realizarse adecuadamente en libras esterlinas respaldadas por el compromiso de la convertibilidad en oro y acreditadas por la mayor cámara de compensación del mundo, la *City* de Londres. Todos los Estados trataban de atraer o imitar la técnica y el capital británicos, sus trabajadores cualificados y sus gestores.

¿Por qué habría de ser de otra forma? Las industrias establecidas de otros países —por ejemplo, la textil en la mayoría de los países avanzados o la industria francesa del hierro— podían competir con las británicas (respaldadas con frecuencia por una moderada protección estatal), ya que la experiencia local y la inferioridad de los costes del transporte en sus regiones estaban a su favor. La prosperidad y la demanda de productos especializados para el consumo crearon unas excelentes condiciones para las industrias artesanas de las ciudades occidentales. Muchos países empleaban el capital británico para desarrollar su propia industria y sus propias infraestructuras. Escandinavia, la costa del Báltico, Portugal y América suministraban materias primas a los industriales y los consumidores británicos. La industrialización se difundió por Bélgica, Holanda, Suiza y el territorio de los pequeños Estados situados a lo largo del Rin y del Sarre. Un cinturón económico ceñía el noroeste de Europa, donde los productos de los primeros en llegar, como Bélgica y Suiza, competían con los británicos, y donde prosperaban los productores primarios de Dinamarca y Suecia. Todos aceptaban la economía transnacional, sin preocuparse en exceso de su carácter «británico».

¿Por qué habrían de querer otra cosa los *Estados* extranjeros? Los de menor tamaño aceptaban el liderazgo de las grandes potencias que decían garantizar su integridad territorial. Puesto que el interés fundamental de todos ellos en el mercado era ante todo fiscal, se beneficiaban de la prosperidad comercial nacional e internacional (Hobson, 1991). Se encontraban a gusto intercambiando complicadas licencias de monopolios para recaudar impuestos sobre las aduanas generales y el gran flujo comercial. Cuando el comercio prosperaba, decaía el interés de los Estados por mantener los aranceles; en los momentos de depresión, y por tanto de decadencia del comercio y de los ingresos aduaneros, los aumentaban (McKeown, 1983). Como comprobare-

mos en el capítulo 11, la presión por razones fiscales sobre los Estados de mediados del siglo XIX fue la más baja en varios siglos.

Así pues, se produjo a mediados de siglo una coincidencia de motivaciones geopolíticas, fiscales y económicas, que alejó la economía política de Occidente del proteccionismo y la acercó al *laissez-faire*. De 1842 a 1846 Gran Bretaña abolió las Leyes del Trigo y proclamó la libertad de comercio en todos los sectores. Los Estados redujeron los aranceles mediante una serie de tratados comerciales bilaterales durante las décadas de 1850 y 1860, en los que las razones de las alianzas geopolíticas tuvieron menos peso que las fiscales y comerciales. Las negociaciones incluyeron también las marcas registradas y el reconocimiento mutuo de las sociedades anónimas de cada país, así como de las leyes relativas a los ríos y estrechos internacionales, y a los sujetos dedicados al comercio internacional, una segunda oleada de tratados comerciales que abarcó desde la década de 1850 a la de 1880 (Ministerio de Asuntos Exteriores, 1931). También el transnacionalismo económico fue el resultado de una negociación entre las potencias.

Vemos pues, que el optimismo sobre el influjo de la economía en la paz y las relaciones internacionales gozaba de una sólida base. Gran Bretaña favorecía el transnacionalismo, y así lo hacían también las principales dinastías monárquicas y las potencias menores; era la tendencia predominante del propio capitalismo. Por otro lado, resultaba improbable un trasnacionalismo demasiado fuerte, que implicara la decadencia del Estado en una sociedad trasnacional. ¿Por qué no un transnacionalismo débil, con unos Estados relativamente privados, relacionados por la diplomacia o incluso comprometidos intermitentemente en guerras limitadas, sin demasiada importancia para la sociedad civil? Las guerras escasearon y los gastos militares se mantuvieron congelados o disminuyeron en términos absolutos en un contexto de masiva prosperidad económica (véase el capítulo 11). En efecto, la primera de estas guerras pareció encarnar perfectamente un «transnacionalismo débil», ya que los gobiernos se mostraban capaces de distinguir los aspectos militares de los civiles. Al mismo tiempo que las tropas británicas y francesas se enfrentaban a los rusos en Crimea, Gran Bretaña permitía al gobierno ruso acceder a un préstamo en la Bolsa de Londres, y los franceses invitaban al mismo gobierno a participar en la exposición internacional de las artes y la industria. «La marcha ordinaria de los negocios» no había de verse interrumpida, según declaraciones del ministro británico de Asuntos

Exteriores (Imlah, 1958: 10; Pearton, 1984: 28). Las guerras limitadas quedaban atrás; la movilización nacionalista popular parecía olvidada. La economía política del *laissez-faire*, que los alemanes llamaban «*Manchestertum*», representaba para los modernizadores de cualquier país la encarnación de las leyes naturales de la economía, de modo que la mayoría de los regímenes no encontraban en ello nada subversivo.

Pero las leyes de Manchester, como todas las leyes económicas, descansaban en el poder social: en el poder expropiador de la clase capitalista, difundido transnacionalmente en las normas geopolíticas. El trasnacionalismo no era un hecho «natural», un resultado de la interacción de la propiedad privada, las mercaderías, el mercado y la división del trabajo. El capitalismo industrial supuso una regulación normativa y coercitiva del panorama internacional a través de dos grandes mecanismos diplomáticos: el concierto y el equilibrio de las potencias que regulaban las relaciones internacionales de todo tipo, y las rutas comerciales globales, el dinero y el crédito regulados por la casi hegemonía especializada de Gran Bretaña. Cuando ambas cosas vacilaron, también lo hizo el capitalismo transnacional.

El fracaso geopolítico y capitalista, 1880-1914

La economía política nunca fue un *laissez-faire* absoluto. Un proteccionismo nacional selectivo moderó el mercantilismo; los aranceles y las cuotas de importación nunca faltaron; en todos los países, los economistas exigían que se protegieran los productos nacionales frente a los británicos; los industriales buscaban siempre una protección selectiva. No obstante, hacia la década de 1840 se produjo una transformación en la economía transnacional. Con el ferrocarril, la demanda de bienes de equipo pesados superó la capacidad de la industria local. La industria británica exportaba a cambio de productos artesanos y alimentarios. La amenaza potencial contra las industrias extranjeras se hizo realidad cuando hacia 1873 se cerró el periodo de prosperidad que había comenzado a mediados de la época victoriana. El trigo procedente de Norteamérica y de Rusia, transportado en ferrocarril y en barcos de vapor, perjudicó a la agricultura y aumentó la competencia en el sector (Bairoch, 1976b), pero en Europa el consumo agrario representaba el 60 por 100 del total, de modo que disminuyó la demanda de productos manufacturados. Cuando la ele-

vada capacidad de competir de los británicos les permitió bajar los precios, los industriales del continente se sumaron a los agricultores en demanda de protección. Las elites estatales tenían un interés propio en la protección porque los aranceles altos mantenían unos ingresos amenazados por la depresión económica.

Cuando vaciló el equilibrio de las potencias, la diplomacia se vio obligada a cambiar. La nueva situación afectó poco o nada a la hegemonía comercial y ultramarina de Gran Bretaña, pero mucho al equilibrio del continente. La decadencia del Imperio otomano, los problemas internos de Austria y la prosperidad de Prusia desestabilizaron el marco diplomático; comenzaba a temerse la aparición de dos elementos hegemónicos: Rusia, en el este y el sureste, y Prusia, en la Europa central. Ninguna de estas expansiones se realizó contra Gran Bretaña, ni estuvo seriamente relacionada con la cuestión del liderazgo capitalista. Prusia acabó con los Estados pequeños y amenazó la estabilidad de Austria y de Francia. Rusia aprovechó la decadencia de una potencia precapitalista, y esto sí afectó a los intereses geopolíticos británicos. En 1852-1854 Gran Bretaña y Francia se aliaron para luchar en Crimea, en un intento de evitar que Rusia alcanzara el Mediterráneo. Cumplieron el objetivo gracias a su potencia naval. Pero en la Europa continental, Gran Bretaña —en la cúspide de su supuesta «hegemonía» económica y naval, y no obstante, con un ejército modesto— tuvo que limitarse a observar cómo Francia, primero, y Prusia, después, aprovechaban las revueltas italianas para derrotar a Austria en 1859 y 1866; cómo Prusia y Austria confiscaban el territorio danés en 1865 (Palmerston intentó intervenir, con escasos resultados); y cómo Prusia derrotaba a Francia en 1870 (los británicos sólo pudieron obtener el compromiso prusiano de respetar la neutralidad belga).

A lo largo de esta oleada de imperialismo geopolítico calculado, Bismarck estableció metas limitadas, para no quebrar el equilibrio ya precario, pero el poder prusiano-alemán comenzaba a dominar el continente. Rusia tuvo buen cuidado en expandirse por Asia y los Cárpatos, neutralizando la potencia naval británica. El ferrocarril había puesto fin a la debilidad logística de las potencias terrestres. En Crimea, Gran Bretaña y Francia habían abastecido con mayor facilidad a sus tropas a través de miles de millas marítimas que Rusia a través de sus propias provincias. Sin embargo, el panorama estaba cambiando, y así lo reconocieron geopolíticos como Mackinder. Gran Bretaña gobernaba aún los mares, pero los grandes territorios de Eu-

rasia estaban libres tanto de elementos hegemónicos como de conciertos o equilibrios de potencias. Ni el equilibrio ni el concierto planteaban problemas, a juzgar por el éxito que reportaba a las potencias ascendentes la agresividad. Alemania estaba institucionalizando en su Estado dos de las tres condiciones principales de su triunfo: olvidando la prudencia diplomática de Bismarck, se afianzó en el militarismo y la estrategia segmental del «divide y vencerás». La tendencia de las grandes potencias a institucionalizar lo que las había engrandecido no presagiaba nada bueno ni para la paz ni para el realismo (véanse los capítulos 9 y 21).

La decadencia del concierto indujo a las potencias a entrar en alianzas defensivas y aumentar los gastos militares. El ferrocarril, la artillería y los barcos de acero industrializaron la guerra. Los gastos militares y civiles crecieron a partir de 1880 (véase el capítulo 11). Los Estados necesitaban más ingresos y los aranceles podían cubrirlos con facilidad. Las razones fiscales y económicas decidieron una política económica territorialista, aunque sólo fue proteccionista al principio, (analizaré el asunto con relación a Alemania en el capítulo 9). Los aranceles subieron en casi todos los países entre 1877 y 1892. En 1900 los niveles eran muy altos, aunque no prohibitivos. Sólo en Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Suiza se mantuvo el *laissez-faire*. Como indica el cuadro 8.5, se estabilizó la proporción de la producción mundial correspondiente al comercio internacional. La oleada transnacional de los primeros cincuenta años del capitalismo industrial había llegado a su fin.

Muchos historiadores de la economía y no menos politólogos han explicado de este modo convencional la pendiente por la que se deslizaría Europa hasta los acontecimientos de 1914. Sin embargo, no es ésa la explicación. El abandono del *laissez-faire* se frenó antes de convertirse en mercantilismo o en imperialismo económico. Más aún, el comercio exterior continuó creciendo, a mayor ritmo durante la fase proteccionista posterior a 1879 que durante el periodo anterior de libre comercio (Bairoch, 1976b). La Europa continental entró en un periodo boyante, en el que seguían expandiéndose las instituciones internacionales creadas a mediados del siglo XIX. Los aranceles eran selectivos, pragmáticos y cautos. Ni enjaulaban a las distintas economías nacionales ni generaban un serio nacionalismo económico. La economía en su conjunto no se dividía tanto en economías nacionales como en esferas de interés de las grandes potencias, que encarnaban grados distintos de territorialidad.

La economía mayor y más orientada hacia el mercado era la angloamericana. Los elevados aranceles americanos nunca impidieron que las economías de Gran Bretaña y Estados Unidos se mantuvieran integradas. Ambos países compartían una lengua y gran parte de su cultura. Hacia mediados de siglo acordaron dividirse la tarea geopolítica. Gran Bretaña dejó a Estados Unidos las Américas; ambas negociaron amistosamente en el Pacífico; y los Estados Unidos cedieron a Gran Bretaña el resto. El cuadro 8.6 muestra que ambos países fueron mutuamente sus mejores socios comerciales hasta entrado el siglo XX. Cada uno invirtió en el territorio del otro, y ambos en Latinoamérica y Canadá. También Gran Bretaña se sentía más ligada a su imperio y menos a Europa.

CUADRO 8.6. *Porcentaje del comercio total entre grandes Estados, 1910*

Estado	Comercio con estos Estados								
	Austria-Hungría	Bélg.	Franc.	Aleman.	Rusia	R.U.	EE.UU	Resto	Total %
Austria-Hungría.	—	–3	–3	42	5	14	6	33	100
Bélgica	–3	—	18	19	6	14	5	38	100
Francia	–3	11	—	12	–3	16	8	53	100
Alemania	10	4	6	—	12	11	11	46	100
Rusia	–3	3	6	33	—	15	–3	43	100
Reino Unido	–3	–3	6	8	5	—	12	69	100
Estados Unidos	–3	–3	7	12	–3	23	—	58	100

Fuente: Mitchell, 1975, 1983: cuadros F1, F2.

De 1860 a 1913 el porcentaje de las exportaciones británicas hacia el imperio aumentó del 27 al 39 por 100 (Woodruff, 1966: 314 a 317). Jenks (1963: 413) estima que en 1854, el 55 por 100 de las inversiones británicas en el exterior correspondían a Europa; el 25 por 100 a los Estados Unidos; y el 20 por 100 a Latinoamérica y el imperio. En 1913 habían caído espectacularmente las inversiones en Europa (hasta el 6 por 100), se mantenían constantes en Estados Unidos y alcanzaban en el imperio el 47 por 100 (las cifras varían poco según los autores; véase Woodruff, 1966: 154; Simon, 1968; Thomas, 1968: 13; Born, 1983: 115 a 119; Davis y Huttenback, 1986). Las inversiones más directas de las compañías británicas en filiales extranjeras iban a

parar también al imperio (Barratt-Brown, 1989). Puesto que las instituciones inversoras británicas y americanas operaban con independencia del gobierno, el transnacionalismo del *laissez-faire* primó en el mundo angloamericano, moderado por sus dos fallas internas: el proteccionismo selectivo de los Estados Unidos y el Imperio británico (Feis, 1964: 83 a 117).

Gracias al liderazgo británico, los tentáculos se extendieron desde el mundo angloamericano, especialmente hacia el Tercer Mundo y los países europeos más pequeños con comercio libre. En 1914 sólo Gran Bretaña contribuía con el 44 por 100 a las inversiones exteriores mundiales (casi su norma durante el siglo XIX); Francia, con el 20 por 100; Alemania, con el 13; Bélgica-Holanda-Suiza juntas, con el 12; y los Estados Unidos, con el 8 por 100 (Woodruff, 1966: 155; Bairoch, 1976b: 101 a 104). El comercio británico y el americano eran los más orientados globalmente, como se aprecia por la columna «Resto» del cuadro 8.6. Su transnacionalismo se difundió por todo el mundo.

La segunda esfera de influencia por su amplitud fue la francesa. En principio se orientó también hacia el mercado. La industria francesa no estaba tan organizada en el sentido nacional como la británica o la alemana. Como afirma Trebilcock: «La revolución industrial internacional pasó por Francia dejando grandes bolsas de industria interior, pero movilizando hombres y dinero para otro cometido más amplio y transcontinental» (1981: 198). La orientación exterior del comercio francés ocupa el tercer puesto en el cuadro 8.6, por detrás de Gran Bretaña y Estados Unidos, pero sus inversiones fueron mayores. En 1911, el 77 por 100 de las acciones vendidas en Francia fueron a parar a iniciativas extranjeras, en comparación con el 11 por 100 alemán (Calleo, 1978: 64). Las inversiones extranjeras de Francia estaban sometidas a supervisión diplomática. A medida que decaía su poder militar, el ministerio francés de Asuntos Exteriores comenzó a ver en el capital un arma secreta contra las divisiones de Prusia y las escuadras británicas. A ese organismo correspondía la aprobación de los empréstitos exteriores emitidos por la Bolsa de París. Los acuerdos relativos a las inversiones francesas ocuparon un gran espacio en la doble alianza franco-rusa de 1894. En 1902 las inversiones exteriores francesas reflejaban sus alianzas diplomáticas. Gran parte de ellas se realizaron con aliados y clientes; el 28 por 100 en Rusia, el 9 por 100 en Turquía, el 6 por 100 en Italia y el 6 por 100 en Egipto. Tras la *entente* de 1904 con Gran Bretaña, aumentó el comercio con la esfera de influencia anglosajona; el 30 por 100 se dirigía a Suramérica (Tre-

bilcock, 1981: 178 a 184; véanse también Feis, 1964: 33 a 59, 118 a 159; Born, 1983: 119 a 123). La geopolítica acercaba la esfera francesa a la angloamericana.

La tercera esfera, la más delimitada territorialmente, correspondía a Alemania. Las inversiones exteriores de Alemania eran bajas, se encontraban inspeccionadas por el Reichsbank, presidido por el Canciller, y guiadas por la diplomacia. En 1913 la mayoría se dirigían a los vecinos clientes y los Estados tapón —Austria-Hungría y los Balcanes—, aunque también se expandían hacia Rusia y Suramérica (Feis, 1964: 60 a 80, 160 a 188; Born, 1983: 1234 a 134). Alemania fue la única gran potencia cuyos porcentajes en comercio e inversiones extranjeras en relación con el producto nacional bruto decayeron a comienzos del siglo XX. El cuadro 8.6 muestra que el comercio alemán se expandió más que sus inversiones exteriores, que se dividían por igual entre los países anglosajones y la Europa del este. Pero esta última (en el cuadro 8.6, Austria-Hungría y Rusia) dependía de Alemania, cuyas exportaciones supusieron a partir de 1904 una competencia desleal subvencionada de productos manufacturados. Una de las tres primeras economías se organizaba contra lo que consideraba el transnacionalismo «falso» de las potencias extranjeras. La economía política alemana se hizo más territorial que la de sus dos principales enemigos en Occidente, como analizaré en el capítulo 9.

Con todo, este contraste entre los grandes era sólo una cuestión de grado. Las pautas de comercio e inversiones se diferenciaban en poco, mientras que los capitalistas privados comerciaban e invertían con entera libertad tanto entre sí como en terceros países. El cuadro 8.6 muestra que el comercio alemán, británico, francés y americano se difundió por todo el mundo, lo que presupone la existencia de instituciones financieras. De este modo, al acabar lo que hemos llamado casi hegemonía británica, sus rivales se cuidaron de conservar el transnacionalismo fiscal de cuño «británico». La libra esterlina nunca estuvo tan segura ni tan firmemente apoyada en el oro como lo estuvo el dólar americano a partir de 1945, porque dependía en mayor medida de la «confianza» internacional. El patrón oro requería ayuda por parte de otros gobiernos, especialmente de aquellos con mayor control sobre las instituciones financieras del que tenía el *laissez-faire* británico (Walter, 1991). Durante las crisis financieras de 1890 y 1907, el Banco de Inglaterra no dispuso de reservas suficientes para mantener la confianza internacional. De ahí que el Banco de Francia y el gobierno ruso le prestaran oro y adquirieran libras esterlinas en

billetes en el mercado. En 1907 el Banco de Francia intervino para defender el patrón oro británico. Eichengreen (1990) comenta al respecto: «La estabilidad del patrón oro ... dependía de una colaboración internacional efectiva entre un núcleo de países industriales». Todo aquello que se considerara transnacional o hegemónico presuponía una diplomacia multilateral. Tales arreglos habrían podido dominar el siglo XIX, si el «rufián» de Bonaparte no hubiera aumentando el «transnacionalismo británico».

La mayor organización transnacional correspondía al capital financiero. Los Rothschild, los Warburg, los Baring y los Lazard, que esparcían deliberadamente a los miembros de sus familias por los grandes países, carecían prácticamente de Estado. Los financieros formaban un grupo de presión partidario de la paz transnacional (Polanyi, 1957: 5 a 19). A su parecer, la guerra causaría daños generalizados en las economías nacionales. De hecho, las amenazas de guerra producían de modo invariable ataques de pánico en las Bolsas, cuya relación con los ciclos económicos era mucho más estrecha en aquella época que después de la Primera Guerra Mundial (Morgenstern, 1959: 40 a 53, 545 a 551). El transnacionalismo estaba vivo y continuaba mandando.

Sin embargo, el periodo acabó con su catastrófica caída. Puesto que no es éste el lugar para examinar las causas de la Primera Guerra Mundial (que analizaré en el capítulo 21), bastará con apuntar que las finanzas internacionales aportaron dos puntos débiles. En primer lugar, la mayor parte de las inversiones exteriores eran «pasivas», es decir, realizadas en una cartera de acciones, valores públicos o una compañía extranjera determinada (generalmente, de ferrocarriles), que los inversores no podían controlar con facilidad. Las inversiones extranjeras directas por una compañía no eran frecuentes, aunque aumentaron inmediatamente antes de la guerra (Barratt-Brown, 1989). En esta economía internacional de rentistas, pocos capitálistas controlaban los recursos en otros Estados occidentales, como hacen hoy las sociedades multinacionales. Los gobiernos francés y alemán controlaban más directamente algunas inversiones extranjeras, pero el transnacionalismo pasivo de los británicos era cuantitativamente muy superior. Gran Bretaña pasó de ser una potencia reestructuradora al rentista más pasivo del capitalismo internacional. En segundo lugar, el capital dependía de la protección geopolítica general. La mayor parte fluía hacia el territorio de los Estados amigos, protegido por el Estado local o central. El capital británico se dirigía al imperio, a los Estados

Unidos y a los Estados clientes del Tercer Mundo; en cuanto a los capitales francés y alemán se invirtieron en los Estados aliados y clientes de sus respectivas esferas.

Así pues, la economía capitalista perdía ligeramente su carácter transnacional a medida que aumentaba la importancia económica de las fronteras estatales. La economía occidental había entrado en una etapa ambigua de coexistencia compleja entre las redes nacionales y transnacionales. En 1910 Europa no había alcanzado aún un grado de rivalidad económica, nacionalista y territorial capaz de explicar la Primera Guerra Mundial. Es muy probable que la guerra no resultara en primer lugar del capitalismo internacional (el capítulo 21 confirmará la sospecha). Con todo, debemos distinguir unas geopolíticas de otras. Una economía mundial dominada por Gran Bretaña y Estados Unidos tenía que ser más transnacional que otra dominada por Francia, que, a su vez, sería más transnacional que la dominada por Alemania. A medida que la prosperidad alemana se volvía desafiante, las razones de su auge, de su economía política relativamente territorial y de su política nacionalista se hacían decisivas. Volveré sobre ello más tarde. Queda mucho por analizar antes de explicar el derrumbamiento del orden económico y geopolítico cuyo ascenso he esbozado en este capítulo.

Conclusión

Aunque la narración concluye con una nota de incertidumbre, su contenido es claro: la historia geopolítica marchó a ritmos más complejos de lo que sostienen las teorías economicistas, dualistas y hegemónicas. La creciente intensidad de las guerras del siglo XVIII se debió más a su insólita rentabilidad, tanto en Europa como en las colonias, que a la ausencia de un elemento hegemónico. Pero ello no significa un cuadro internacional sin normas. La guerra estaba regulada y coexistía con otras fuentes de orden. El intento de hegemonía napoleónico se vio acompañado por la inesperada aparición de ideologías nacionales y de clase capaces de movilizarse por la revolución y de hacer la guerra en nombre de determinados valores. Esto amenazó el orden del antiguo régimen, pero las potencias se unieron para preservarlo, gracias a que poseían normas de alianza bien establecidas para controlar la situación y a los errores diplomáticos de Napoleón. Por mi parte, he calificado el caso inglés como una «casi hegemonía

especializada», que proporcionó paz y orden gracias al refuerzo de las normas creadas por la diplomacia concertada de los antiguos regímenes y al transnacionalismo capitalista. La paz y el orden se acabaron con el siglo, cuando se tambalearon también estas tres condiciones previas, cada una de ellas por razones concretas que requieren un análisis más profundo.

El mundo no era dual. Ni el capitalismo ni el Estado soberano nacieron con el poder que les atribuyen las distintas escuelas teóricas. Ambos fenómenos se encontraban entrelazados con las cuatro fuentes del poder social, que los configuraron en parte. He tratado de negar en particular la existencia de ideologías imperialistas «de autoservicio» en Gran Bretaña, durante el siglo XIX, y en Estados Unidos durante el siglo XX. La paz y el orden no dependieron de su benévola hegemonía; ni el «orden», que respondía a razones mucho más complejas, fue necesariamente benéfico. La historia ha desmentido la creencia de Hobbes en que la paz y el orden internos requieren un solo soberano con grandes poderes, y, de igual modo, desmiente la idea de que la paz internacional y el benéfico orden necesitan un elemento hegemónico imperial. Por el contrario, lo que necesitan son normas compartidas y una esmerada diplomacia pluriestatal.

Bibliografía

Arrighi, G. 1990: «Three hegemonies of historical capitalism». Ponencia presentada en la Conferencia ESRCC sobre los Estados y los Mercados Internacionales, Cambridge: septiembre, 5-7.

Bairoch, P. 1965: «Niveaux de développement économiques de 1810-1910». *Annales ESC*, 20.

— 1973: «Agriculture and the Industrial Revolution, 1700-1914». *The Fontana Economic Histor of Europe.* Vol. 3: *The Industrial Revolution*, ed. C. Cipolla. Glasgow: Fontana.

— 1976*a*: «Europe's gross national product, 1800-1975». *Journal of European Economic History*, 5.

— 1976*b*: *Commerce extérieur et développement économique de l'Europe au XIXe siècle.* La Haya: Mouton.

— 1982: «International industrialization levels from 1750 to 1980». *Journal of European Economic History*, 11.

Barratt-Brown, M. 1989: «Imperialism in theory and practice». Ponencia

presentada en el Centro de Teoría Social e Historia Comparada, University of California, Los Ángeles: marzo, 13.
Born, K. E. 1983: *International Banking in the Nineteenth and Twentieth Centuries.* Nueva York: St. Martin's Press.
Brewer, J. 1989: *The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783.* Nueva York: Knopf.
Cain, P., y A. Hopkins, 1980: «The political economy of British expansion overseas, 1750-1914. *Economic History Review,* 33.
— 1986: «Gentlemanly capitalism and British expansion overseas». I: The old colonial system, 1688-1850». *Economic History Review,* 39.
— 1987: «Gentlemanly capitalism and British expansion overseas. II: New imperialism, 1850-1945». *Economic History Review,* 40.
Calleo, D. 1978: *The German Problem Reconsidered: Germany and the World Order, 1870 to the Present.* Cambridge: Cambridge University Press.
Calleo, D., y B. Rowland, 1973: *America and the World Political Economy.* Bloomington: Indiana University Press.
Chandler, D. 1967: *The Campaigns of Napoleon.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Chase-Dunn, C. 1989: *Global Formation: Structures of the World Economy.* Oxford: Blackwell.
Creveld, M. van. 1977: *Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton.* Cambridge: Cambridge University Press. [Ed. cast.: *Los abastecimientos en la guerra.* Madrid, Ejército, 1985.]
Davis, L. y R. Huttenback, 1986: *Mammon and the Pursuit of Empire.* Cambridge: Cambridge University Press.
Davis, R. 1979: *The Industrial Revolution and British Overseas Trade.* Leicester: Leicester University Press.
Eichengreen, B. 1990: «Phases in the development of the international monetary system». Ponencia presentada en la Conferencia ESRC sobre los Estados y los Mercados Internacionales, Cambridge: septiembre, 5-7.
Feis, H. 1964: *Europe: The World's Banker, 1870-1914.* New Haven, Conn.: Yale University Press.
Foreign Office, U. K. 1931: *Handbook of Commercial Treaties etc. with Foreign Powers,* 4.ª ed. Londres: H.M.S.O.
Gallagher, J., y R. Robinson, 1953: «The imperialism of free trade». *Economic History Review,* 2.ª ser., 6.
Giddens, A. 1985: *The Nation-State and Violence.* Cambridge: Polity Press.
Gilpin, R. 1975: *U.S. Power and the Multinational Corporation.* Nueva York: Basic Books.
— 1987: *The Political Economy of International Relations?* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
— 1989: *The Economic Dimension of International Security.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Glover, R. A. 1973: *Britain at Bay: Defence Against Bonaparte, 1803-1814.* Londres: Allen & Unwin.
Goldstein, J. 1988: *Long Cycles, Prosperity and War in the Modern Age.* New Haven, Conn.: Yale University Press.
Hobson, J. 1991: «The Tax-Seeking State». Tesis doctoral, London School of Economics and Political Science.
Holsti, K. 1991: *Peace and War: Armed Conflicts and International Order, 1648-1989.* Cambridge: Cambridge University Press.
Hopkins, T., y I. Wallersten, 1979: *Processes of the World System.* Berverly Hills, Calif.: Sage.
Imlah, A. H. 1958: *Economic Elements in the "Pax Britannica".* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Ingham, G. 1984: *Capitalism Divided?* Londres: Macmillan.
Jenks, L. H. 1963: *The Migration of British Capital to 1875.* Londres: Nelson.
Keegan, J. 1988: *The Price of Admirally.* Londres: Hutchinson.
Kennedy, P. 1988: *The Rise and Fall of the Great Powers.* Londres: Unwin Hyman. [Ed. cast. *Auge y caída de las grandes potencias.* Esplugues Llobregat; Actualidad y Libros, 1989.]
Keohane, R. 1980: «The theory of hegemonic stability and changes in international economic regimes, 1967-1977». En *Change in the International System,* ed. O. R. Holsti *et al.* Boulder, Colo.: Westview Press.
— 1984: *After Hegemony.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Kindleberger, C. P. 1973: *The World in Depression, 1929-1939.* Berkeley: University of California Press. [Ed. cast.: *La crisis económica, 1929-1939.* Barcelona, Crítica, 1985.]
Knorr, K. 1956: *The War Potential of Nations.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Krasner, S. 1976: «State power and the structure of international trade». *World Politics,* 28.
Kutznets, S. 1967: «Quantitative aspects of the economic growth of nations. X: Level and structure of foreign trade: Long-term trends». *Economic Development and Cultural Change,* 15.
McKeown, T. 1983: «Hegemonic stability theory and nineteenth-century tariff levels in Europe». *International Organization,* 37.
Markham, F. 1963: *Napoleon.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Mitchell, B. R. 1975: *European Historical Statistics, 1750-1970.* Nueva York: Columbia University Press.
— 1983: *International Historical Statistics: The Americas and Australasia.* Detroit: Gale Research.
Modelski, G. 1978: «The long cycle of global politics and the nation-state». *Comparative Studies in Society and History,* 20.
— (ed.) 1987: *Exploring Long Cycles.* Boulder, Colo.: Rienner.

Modelski, G., y W. R. Thompson, 1988: *Seapower in Global Politics, 1494-1933.* Seattle: University of Washington Press.
Morgenstern, O. 1959: *International Financial Transactions and Business Cycles.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Morgenthau, H. 1978: *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace,* 5.ª ed. Nueva York: Knopf.
O'Brien, P. K., y G. Pigman, 1991: «Free trade, British hegemony and the international economic order in the nineteenth century». Ponencia presentada en la Conferencia ESRC sobre los Estados y los Mercados Internacionales, Cambridge: septiembre, 5-7.
Organski, A. F. K., y J. Kugler, 1980: *The War Ledger.* Chicago: University of Chicago Press.
Pearton, M. 1984: *Diplomacy, War and Technology Since 1830.* Lawrence: University of Kansas Press.
Platt, D. C. M. 1968*a*: *Finance, Trade and Politics in British Foreign Policy, 1815-1914.* Oxford: Clarendon Press.
— 1968*b*: «Economic factors in British policy during the new imperialism». *Past and Present,* núm. 39.
Polanyi, K. 1957: *The Great Transformation.* Boston: Beacon Press. [Ed. cast.: *La gran transformación.* Madrid, Endymián, 1989.]
Pollard, S. 1981: *Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe, 1760-1970.* Oxford: Oxford University Press.
Rosecrance, R. 1986: *The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World.* Nueva York: Basic Books. [Ed. cast.: *La expansión del Estado comercial.* Madrid, Alianza Editorial, 1987.]
Rosenau, J. 1966: «Pre-theories and theories of foreign policy». En *Aproaches to Comparative and International Politics,* ed. R. B. Farrell. Evanston, Ill.: Northwestern University Press.
Semmel, B. 1970: *The Rise of Free Trade Imperialism.* Cambridge: Cambridge University Press.
Shaw, A. G. L. (ed.), 1970: *Great Britain and the Colonies, 1815-1865.* Londres: Methuen.
Simon, M. 1968: «The pattern of new British portfolio foreign investment, 1865-1914». En *The Export of Capital from Britain,* ed. A. R. Hall, Londres: Methuen.
Strachan, H. 1973: *European Armies and the Conduct of War.* Londres: Allen & Unwin. [Ed. cast.: *Ejércitos Europeos y la conducción de la guerra.* Madrid, Ejército, 1985.]
Thomas, B. 1968: «The historical record of international capital movement to 1913». En *The Export of Capital from Britain,* ed. A. R. Hall. Londres: Methuen & Co.
Trebilcock, C. 1981: *The Industrialization of the Continental Powers, 1780-1914.* Londres: Longman Group.
Wallerstein, I. 1974: *The Modern World System.* Nueva York: Academic

Press. [Ed. cast.: *El moderno sistema mundial:* Vol. I. *La agricultura capitalista.* Madrid, Ed. Siglo XXI, 1984.]
— 1984: *The Politics of the World Economy.* Cambridge: Cambridge University Press.
— 1989: *The Modern World System. III.* San Diego, Calif.: Academic Press. [Ed. cast.: *El moderno sistema mundial:* Vol. III. *El mercantilismo y la consolidación.* Madrid, Ed. Siglo XXI, 1984.]
Walter, A. 1991: *World Power and World Money: The Role of Hegemony and International Monetary Order.* Hassocks, Sussex: Harvester.
Woodruff, W. 1966: *Impact of Western Man: A Study of Europe in the World Economy, 1750-1970.* Londres: Macmillan.
Woytinski, W. S., y E. S. Woytinski, 1955: *World Commerce and Governments: Trends and Outlooks.* Nueva York: Twentieth Century Fund.

Capítulo 9
LA LUCHA POR ALEMANIA: I. PRUSIA Y EL CAPITALISMO NACIONAL AUTORITARIO

Tres rivales, tres cuestiones teóricas

Poco antes de 1900, la Segunda Revolución Industrial trajo consigo la concentración económica, las agrupaciones de empresas y los carteles, precisamente en el momento en que las infraestructuras del Estado «naturalizaban» las sociedades civiles (véase el capítulo 14). Incluso Gran Bretaña, la patria del transnacionalismo, se hizo más centralizada y territorial. Pero Alemania, que estaba convirtiéndose en la mayor potencia europea, llegó más lejos; en 1914, el *Reich* alemán era el mayor exponente del «capitalismo nacional autoritario» que combinaba la monarquía semiautoritaria, el capitalismo organizado y el Estado-nación. La punta de lanza del poder se había desplazado a la Europa central. ¿Por qué? ¿Cuál era la naturaleza de esa configuración de poder, y cuáles fueron sus consecuencias? [1]

Si nos remontamos hacia 1800, podremos explicarlo en gran parte. El Estado que conformó el *Reich* alemán fue el reino de Prusia,

[1] Para el siglo XIX alemán me he servido de Hamerow (1958), Taylor (1961a), Henderson (1975), Berchardt (1976), Geiss (1976), Milward y Saul (1977: capítulo 1), Böhme (1978), Kitchen (1978) y Snyder (1978: esp. capítulo 3).

una potencia de segundo orden, que dominaba sólo dos tercios de la Alemania del norte, en general bastante atrasada. Su territorio, población y recursos económicos no estaban en consonancia con sus pretensiones de poder; no parecía fácil que llegara a conquistar la hegemonía en Alemania. Dos rivales le cerraban, además, el paso: Austria y la Confederación Alemana. En 1815 el mundo germánico era una confederación formada por Austria (en la presidencia), Prusia y treinta y siete estados más pequeños. La mayoría de ellos eran insignificantes, pero se encontraban bajo la protección de las grandes potencias vecinas y arropados por la creencia de muchos alemanes en que la confederación defendía la libertad religiosa (el luteranismo y el catolicismo eran las iglesias del Estado en Prusia [2] y Austria, respectivamente), los principados menores, las ciudades, las comunidades comerciales y, en general, las libertades civiles. Con tantas fronteras estatales, la censura, por ejemplo, no resultaba efectiva, y la alfabetización discursiva fluía a lo largo y ancho de Alemania. En 1800 Austria era una gran potencia, cuya población y territorios doblaban los de Prusia; sin embargo, el hecho de que su economía se encontrara más atrasada y sus provincias dispusieran de una considerable autonomía dificultaba el buen aprovechamiento de los recursos por parte del Estado. Las dos potencias rivales se encontraban, pues, en igualdad de condiciones.

Durante el siglo XIX, Prusia se impuso sobre Austria y la Confederación Alemana, al principio con cautela, después con mayor agresividad. Los cuadros 8.1 y 8.4 muestran el avance económico. Antes de 1850 o de 1860 existía poca diferencia entre los recursos agrícolas e industriales de Austria y Prusia, pero en la década de 1890 la Alemania prusiana duplicaba tanto la eficiencia agrícola como el tamaño industrial, bruto y per cápita, de Austria; en adelante, las distancias seguirían agrandándose. En las guerras de 1866-1867 y 1870-1871, Prusia engulló a los estados más pequeños, derrotó a Austria y Francia, y fundó el *Reich* alemán. En 1914 la Alemania prusiana dominaba la Europa continental; Austria no era más que un Estado subordinado a sus intereses. Representó la victoria de un Estado-nación más

[2] En realidad, el protestantismo prusiano y alemán había comprendido dos confesiones, el luteranismo y el calvinismo. En 1817 ambas se fusionaron en Prusia (y luego en otros estados alemanes) en una sola iglesia evangélica, a la que me referiré como iglesia luterana por ser un término más familiar que expresa adecuadamente su condición.

autoritario y centralizado, estrechamente relacionado con el capitalismo industrial. La Alemania prusiana llevaba aparejada una estrategia de «incorporación autoritaria» al capitalismo industrial y el Estado-nación. En Austria, los nacionalismos provinciales fortalecían en ese momento sus tendencias confederalistas. La Prusia «nacional» y centralizada triunfó sobre una Alemania confederada y una Austria multinacional.

¿Fue seguro e incluso inevitable el triunfo del capitalismo nacional, o contingente y precario? ¿Hasta qué punto eran viables a largo plazo los tres modelos de desarrollo del poder, el que tuvo éxito y los dos que fracasaron? Comenzaré por abordar este primer grupo de cuestiones.

Un segundo grupo de cuestiones surge de la creciente organización «nacional» de la economía alemana. En realidad, se apartó dos veces de aquel continuo de economías políticas que hemos visto en el capítulo 3, y que abarca desde las concepciones de interés basadas en el mercado a las de tipo territorial. La mayoría de los estados alemanes comenzaron siendo proteccionistas, para adoptar luego el *laissez-faire*, volver al proteccionismo, esta vez menos selectivo, y acabar, hacia 1890, muy próximos al mercantilismo. Finalmente, se incorporaron elementos de los tres imperialismos —económico, social y geopolítico— a medida que la política económica se entretejía con una vocación de conquista territorial. La deriva alteró también el equilibrio de la organización de clase, que pasó de ser predominantemente transnacional (por rebasar las fronteras estatales) a ser nacionalista (por organizar a los ciudadanos de su Estado para luchar contra los de otro) a través de una fase intermedia predominantemente nacional (de confinamiento de los ciudadanos dentro de sus límites). Vacilantes, contestadas y sólo parciales, estas transiciones condujeron, sin embargo, a lo que iba a ser la demostración final del interés territorial-nacional durante este periodo: la carrera alemana hacia la guerra de 1914. El presente capítulo avanza una explicación de la deriva desde el mercado hasta las estrategias territoriales, y desde las clases transnacionales a las nacionalistas (en el capítulo 21 completaré la explicación).

Existe una tensión entre los términos «estrategia» y «deriva». *Estrategia* significa elección racional de los medios adecuados para conseguir un objetivo: el incremento del beneficio económico. *Deriva* sugiere que esas concepciones racionales han sido sutil e inconscientemente modificadas por procesos de poder no económico. Esto se

aparta en gran medida de la historia económica marxiana y neoclásica, que tiende al economicismo de la elección racional, según el cual, el «interés económico» explicaría el desarrollo. Lo que se plantea en esa hipótesis es una estrategia económicamente racional del «desarrollo tardío», que habría generado la organización autoritaria del capitalismo, la planificación del Estado y el proteccionismo (examinados con mayor amplitud en el capítulo 14). Gerschenkron (1962) elaboró la versión contemporánea de la teoría, aunque sus antecedentes alemanes se remontan a Friedrich List. Senghaas (1985), resucitando a List, argumenta que el *laissez-faire* británico, que denomina «asociativo», es, en términos económicos, menos racional para la mayoría de los países que el proteccionismo «disociativo»; por tal motivo, Alemania adoptó este último, razona.

A este respecto, me permitiré dos afirmaciones:

1. Por un lado, demostraré que el propio concepto de identidad económica —quién de un «nosotros» puede compartir un determinado interés económico— es problemático y está estructurado por fuentes de poder social entrelazadas. El «nosotros» que comenzaba a surgir en Alemania, el interés económico «nacional», estuvo determinado por relaciones de poder no sólo económicas sino también ideológicas, militares, políticas y geopolíticas.
2. Los teóricos del desarrollo tardío no explican la posterior deriva de la política alemana, desde el proteccionismo al mercantilismo, al imperialismo y a la guerra. No lo consideran un problema económico, sino una interferencia externa a la racionalidad económica. Por el contrario, yo explico la deriva general del siglo XIX a concepciones más territoriales del interés. Las cuestiones económicas, la economía política y la lucha de clases se entrelazaban con la cuestión nacional, originando una relaciones de poder ideológico, militar, político y geopolítico. Los actores de poder raramente se enfrentan a las unas sin las otras. La deriva es la resultante del modo en que se conjuntan las dos luchas, adoptando formas inesperadas para los actores de poder.

Una teoría puramente económica no puede explicar la deriva del mercado al territorio. A mediados del siglo XIX la identificación de la «economía» ya no era transnacional sino nacional. Los economistas políticos británicos han considerado casi siempre que el mercado y la división del trabajo son fenómenos abstractos y transnacionales. Aunque Adam Smith hablara en su famosa obra de la riqueza de las

naciones, éstas representaban para él simples ejemplos geográficos, sin cometido alguno dentro de su teoría. Intercambiaba «Escocia» e «Inglaterra» (regiones nacionales) con «Gran Bretaña» (un Estado nacional) para ilustrar sus ideas (como hacen la mayoría de los británicos). Teorizaba sobre los individuos que maximizan sus utilidades, las clases que se forman en torno a los factores de producción, las estructuras transnacionales, tales como los mercados, y la división del trabajo. La «nación» quedaba fuera de las teorías de los economistas clásicos.

Sin embargo, no fue así en la teoría alemana. Los cameralistas (véase capítulo 13) fomentaban la intervención económica del Estado, como cita Alexander Hamilton, y alababan el éxito de los aranceles americanos. Friedrich List criticó a Smith por no proponer una «economía política», sino una «economía cosmopolita» de individuos sin arraigo que representaban al conjunto de la humanidad, ignorando la realidad de las sociedades nacionales. El *laissez-faire* formaba una pantalla de humo tras la que Gran Bretaña dominaba el mundo. Alemania debía replicar con aranceles selectivos, ajustados a las necesidades de los distintos sectores y regiones, y rebajar el proteccionismo a medida que avanzara el desarrollo (1885; *cf.* Snyder, 1978: 1 a 34).

Las ideas de List encontraron mayor eco en la ideología estatista luterana del norte que en el sur católico y transnacional. Pero el hecho mismo de que los alemanes debatieran las necesidades de las «economías nacionales» suponía un reconocimiento implícito de la cuestión fundamental. Una vez que la cuestión no se formuló en términos de «economía», sino de «economía *alemana*» (francesa o rusa), la solución no podía ser transnacional. Pero «Alemania» no existía aún, ni política ni culturalmente (al menos para las masas). Goethe y Schiller puntualizaron: «¿Alemania, dónde está? No sé cómo encontrarla» (Sheehan, 1981). ¿Quién creó Alemania? La respuesta engloba las cuatro fuentes del poder social.

El tercer grupo de cuestiones concierne a la naturaleza del Estado moderno. Alemania era ya «moderna» en 1900; su economía había sobrepasado a la británica, y la organización del capital, de la tecnología y de los recursos humanos avanzaba a mayor ritmo. Sin embargo, conservaba una monarquía semiautoritaria, de corte militarista. ¿Era esto un *Sonderweg* (camino especial) alemán? ¿De qué tipo de Estado se trataba? Por mi parte, revisaré las teorías marxianas respecto a su «bonapartismo» y su limitada autonomía de poder, y el énfasis de Max Weber en sus autonomías plurales de poder, para de-

mostrar que se trató de una autonomía no unitaria. Aunque muy orientadas al centro, sus principales instituciones eran insólitamente polimorfas (como expuse en el capítulo 3). Al final, esta ausencia de instituciones soberanas capaces de tomar decisiones acabó con el Estado, como se verá en el capítulo 21. El cataclismo de 1914 representó el triunfo de las consecuencias involuntarias de los actos, institucionalizadas en un *Kaiserreich* polimorfo.

El desarrollo «alemán»

En 1815 la realidad de la vida política de «Alemania» se basaba en una débil confederación, por un lado, y en el mito histórico del Sacro Imperio Romano Germánico, por otro. Su vida era activa, sin embargo, en las redes de alfabetización discursiva, que si apenas interesaban a las masas, contaban con la burguesía profesional y administrativa. Como demostré en el capítulo 7 esta tímida «nación alemana» existió ideológicamente antes de la unificación política y la integración económica, pero la lucha contra Bonaparte la había arrojado a los brazos poco acogedores de las dinastías de los Habsburgo y los Hohenzollern. El Estado-nación alemán surgió de aquel abrazo, por un camino tortuoso.

Tanto Austria como Prusia eran monarquías dinásticas, desinteresadas por el nacionalismo de corte popular, aun cuando éste se limitara a las clases propietarias. Una vez barrida Europa central, se enfrentaban ahora directamente. Ninguna de las dos podía expandirse con facilidad a costa de la otra. La geopolítica, en su sentido estricto de estructuración geográfica de las relaciones interestatales, las empujaba hacia proyectos distintos. Puesto que al sur y al este, Prusia lindaba con las grandes potencias rusa y austriaca, la expansión se presentaba más fácil entre los pequeños estados de habla alemana del oeste y suroeste. Un accidente dinástico, reforzado por la geopolítica, aumentó el atractivo del imperialismo «alemán». Los Hohenzollern habían obtenido por matrimonio los dispersos aunque prósperos territorios de la Renania; el acuerdo de 1815, proyectado contra la hegemonía francesa, los amplió a un único bloque. Los territorios de Prusia se extendían así al norte de Alemania, pero no eran contiguos, unirlos se convirtió en el objetivo de Prusia. Esto significaba la existencia de una estrategia *Kleindeutsch* («de la pequeña Alemania»),

que ignoraba a los millones de alemanes que vivían bajo el dominio austriaco.

Austria, que había dado los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y presidía la confederación, podría haber sido el líder más obvio de una integración nacional *Grossdeutsch* («de la gran Alemania»). Pero la confederación era pluralista y legalista, un instrumento poco adecuado para la hegemonía austriaca (Austensen, 1980). La expansión austriaca obtendría mayor recompensas en el sureste, donde declinaba el poder otomano sobre los Balcanes y donde Austria había obtenido en 1815 territorios italianos a cambio de la renuncia a los Países Bajos. La expansión no se efectuó entre alemanes. Austria aumentó incluso su carácter multinacional y tuvo un interés menor que Prusia en jugar la carta alemana. El dinasticismo y el transnacionalismo económico gobernaban aún Europa, pero el último iba a tener consecuencias imprevistas para el primero.

La economía alemana creció con rapidez a todo lo largo del siglo XIX y principios del XX, como puede comprobarse en los cuadros 8.1 a 8.4. En la década de 1850 se aceleró el ritmo de crecimiento, como consecuencia de la transferencia de las innovaciones británicas al desarrollo de las industrias centroeuropeas. Las exportaciones de hilo de algodón pasaron de representar un 25 por 100 de los suministros nacionales en 1835 (en plena dependencia de las importaciones británicas) al 44 por 100 de 1853 (momento de la liberación) y al 88 por 100 de 1874 (una vez alcanzada la autonomía) (Tipton, 1974; Tilly, 1978; Trebilcock, 1981: 22 a 111; Perkins, 1984). Semejante crecimiento sostenido no conocía paralelo en Europa, aunque hasta cierto punto tampoco constituía una sorpresa. Los yacimientos de hierro y hulla del Ruhr y el Sarre posibilitaban su desarrollo industrial. Pero el desarrollo fue relativamente «estatista» y «nacional». El Estado prusiano patrocinó tres infraestructuras económicas fundamentales y facilitó la integración de una nación *Kleindeustch*: la *Zollverein*, el ferrocarril («gemelos siameses» del desarrollo alemán, según List) y la educación.

1. La *Zollverein*. En 1815 los actores de poder en Alemania coincidieron en que la industrialización era deseable, aunque estaban en desacuerdo respecto a la economía política internacional. El liderazgo británico del libre comercio había estado asociado a los avances económicos, pero entraba en conflicto con la prudencia proteccionista del mercantilismo y los intereses fiscales de los Estados, que ob-

tenían la mayor parte de sus impuestos a través de los derechos de aduanas. No obstante, treinta y nueve aduanas y aranceles parecían excesivos, y los alemanes del norte, competitivos en los mercados internacionales, deseaban, al contrario que los austriacos y algunos estados del sur, unos aranceles exteriores más bajos. Dado que los territorios de Prusia se esparcían por el norte de Alemania, aquélla tuvo que negociar acuerdos económicos con sus vecinos; Austria y sus colindantes no tuvieron esa necesidad porque formaban bloques territoriales inequívocos. Además, los estados del norte dominaban las desembocaduras del principal río alemán y los caminos que conducían a los mercados europeos más avanzados. Prusia podía presentar la reforma aduanera como un hecho técnico, para reunir una coalición de aranceles bajos en el norte y liderar la economía alemana.

Acordó entonces con los estados vecinos la abolición de las aduanas internas, garantizándoles los mismos ingresos de antes. En 1834 la ampliación de los acuerdos locales creó la *Zollverein*, una unión aduanera de dieciocho estados, que abarcaba la mayor parte del norte y el oeste de Alemania. Los estados aceptaron los bajos aranceles externos de Prusia, y le permitieron negociarlos con las potencias extranjeras. Una administración común recaudaba los derechos de aduanas y los repartía de acuerdo con la población de cada estado, lo que supuso un ahorro administrativo considerable, un gran auge del comercio exterior y un fuerte beneficio fiscal para los estados. La *Zollverein* fue un éxito que acreditó el liderazgo prusiano (Henderson, 1959, 1975). Así se formó un embrión de economía nacional y una auténtica administración económica también a nivel nacional. Fue el resultado involuntario de un cruce de intereses económicos con estrategias de política fiscal de los estados confederados y la geopolítica prusiana.

Al no poder entrar en una unión aduanera alemana sin que ello afectara a sus territorios del este, que no eran alemanes y precisaban una mayor protección, Austria se quedó al margen. En 1850 amplió su propia unión aduanera a la mitad húngara del imperio. Pero, dado que los estados alemanes del sur se comunicaban más fácilmente con el noroeste que con Austria, poco a poco se sumaron a la unión de aranceles bajos de Prusia. Por otra parte, la habilidad prusiana para negociar los aranceles con el exterior aisló a Austria. Cuando la *Zollverein* ratificó los aranceles prusianos con Francia en 1865, Austria, que aún presidía la confederación, no fue consultada. La economía austriaca ya no era germánica, la prusiana sí.

¿Qué significación tuvo este hecho? La *Zollverein*, en realidad, había bajado los aranceles haciéndolos selectivos y pragmáticos y facilitado la expansión de los mercados por encima de las fronteras, todo ello en sintonía con el predominio contemporáneo del *laissez-faire* sobre el mercantilismo. Como en otras partes, las principales regiones industriales se encontraban a caballo de las fronteras. En Renania-Westfalia, Sajonia, Bohemia y la Baja Austria, la industrias importaban hilo, hierro en lingotes y maquinaria de Gran Bretaña, que se convertían en productos finales para su venta en las regiones y en el este más distante, normalmente a cambio de artículos alimenticios. La materia prima fundamental era la hulla, y, en coincidencia con lo apuntado en el capítulo 7, la mayoría de los yacimientos se encontraban cerca de las fronteras o a caballo de ellas.

Para esta economía, más interregional que internacional, la *Zollverein* significó sólo una tímida subversión, con un escaso impacto inmediato sobre el crecimiento económico (Trebilcock, 1981: 37 a 41). Austria había sufrido un revés con la aceptación del liderazgo económico prusiano por parte de la confederación, sin embargo, nada resultó decisivo. La *Zollverein* constituía una técnica fiscal útil, pero no un modelo de Estado alemán. De hecho, en 1867, cuando los estados alemanes entraron en guerra, los oficiales de aduanas continuaron recaudando impuestos; hubo un déficit de guerra de sólo un 10 por 100. Tales acontecimientos hacen pensar en un transnacionalismo débil: las guerras y las luchas geopolíticas continuaban produciéndose con una escasa incidencia social. Para que Prusia comenzara a tener una importancia geoeconómica, otras fuerzas tuvieron que contribuir a la decadencia del capitalismo transnacional.

2. Los *ferrocarriles*. Como en otras partes, el ferrocarril fomentó las industrias de la hulla, el hierro, el acero y las manufacturas del metal, y comercializó la agricultura reduciendo los costes del mercado. Los ferrocarriles alemanes redujeron los fletes entre el 5 y el 10 por 100 del producto nacional bruto, lo que supuso un ahorro considerable. En la Alemania oriental, especialmente en la Renania prusiana, la industria creció a mayor ritmo desde la década de 1840, ayudada por los yacimientos locales de hulla y mineral de hierro y la proximidad al núcleo formado por Gran Bretaña-Bélgica y el norte de Francia. Los ferrocarriles contribuyeron a extender los mercados, y fortalecieron la integración regional vinculando las regiones atrasadas a la agricultura y las adelantadas al hierro y al acero. El trigo prusiano se transportaba al oeste; las mercancías semielaboradas del

oeste se finalizaban en Alemania y se distribuían en el este con unos costes de transporte más baratos que los de los estados occidentales y con una tecnología superior a la de los orientales. En definitiva, el ferrocarril creó una economía más integrada. En palabras de Fremdling (1983), fue el «héroe de la Revolución Industrial alemana».

De este modo, el Estado fue el patrocinador, cuando no el financiador o el dueño de los ferrocarriles, que, al contrario que en el caso británico, existían ya *antes* de la industrialización en la mayor parte de Alemania. La planificación estatal de las líneas férreas resultó a menudo más importante que las fuerzas del mercado. Tres cristalizaciones estatales se vieron implicadas: el capitalismo, el militarismo y la monarquía. Esta última, en especial, obtuvo pingües beneficios; el hecho de que en 1910 los ferrocarriles aportaran el 44 por 100 de los ingresos estatales de Prusia permitía una autonomía cada vez mayor del control parlamentario. Como los restantes Estados, Prusia comprendió enseguida la significación del ferrocarril para la logística militar, el transporte de tropas y suministros hasta las fronteras y las posiciones de reserva, con el fin de atacar o defenderse a gran escala. Apenas se percibía algún conflicto entre las motivaciones capitalistas, militares o monárquicas. El Estado percibió también que una eficaz distribución de los productos de la minería y de las fábricas de acero y de tejidos proporcionaba equipamientos militares, poder geopolítico y recursos fiscales autónomos. Con el aumento de la urbanización, la logística del transporte de mercancías, pasajeros, tropas y suministros militares se hacía prácticamente idéntica. El ferrocarril permitió también a los *Junkers*, el núcleo del antiguo régimen, alimentar a las ciudades en desarrollo. Nacía, pues, una economía orientada territorialmente y una clase dirigente mejor coordinada en los planos agrario, militar e industrial.

No obstante, al consolidar las distintas economías dentro de las fronteras estatales, el ferrocarril contribuyó también a debilitar el transnacionalismo. Se asemejaba a una tela de araña, con las puntas enganchadas en el territorio de cada uno de los estados y sólo unos cuantos hilos para conectar la red nacional. Todo respondía a una estrategia deliberada; por ejemplo, una línea prusiana corría a lo largo de la práctica totalidad de la frontera sajona, con múltiples conexiones hacia Prusia y sólo una dentro de Sajonia. Se trataba de una combinación de consideraciones militares y de economía nacional. Esta área de Sajonia estaba más desarrollada que la Prusia adyacente, pero la línea férrea restringía el acceso al mercado de los prusianos al

tiempo que permitía a éstos moverse por su propia red para obtener mercancías más baratas. Durante la guerra, y en 1866, el ejército de Prusia traspasó con facilidad la frontera de Sajonia. El ferrocarril naturalizaba en parte la economía y la hacía más estatista.

3. La *educación*. El mismo razonamiento podría aplicarse a los canales, los caminos, el telégrafo y, en especial, a las infraestructuras educativas heredadas del despotismo ilustrado. Como veremos en el capítulo 13, la monarquía prusiana centralizó su compromiso con la nobleza y los profesionales en las universidades y entre los *Bildungsbeamten* (administradores educados). El nacionalismo cultural de la burguesía se expandió dentro de los límites estatales, pero, cuando Prusia se convirtió en el primer gran Estado en imponer la enseñanza primaria y crear un cuerpo de profesores formados (29.000 en 1848), se extendió hacia el norte y hacia el sur. A mediados de siglo, la tasa de alfabetización prusiana, tanto en lectura como en escritura, alcanzaba el 85 por 100, mientras que la francesa (sólo para la lectura) se mantenía en el 61 por 100, y la inglesa (lectura y escritura), en el 52 por 100. Los extranjeros comentaban admirados el nivel educativo de Prusia (Barkin, 1983). A partir de 1853, sin embargo, la educación dio un giro conservador, aunque aún fomentaba una formación técnica muy bien adaptada a las necesidades de la Segunda Revolución Industrial. Como proclamaba Bismarck: «Una nación con escuelas es una nación con futuro», aunque por «nación» quería decir «Estado».

A partir de 1872, los gastos en educación del *Kaiserreich* igualaban a los militares. La alternativa no era aquí «cañones o mantequilla». Se publicitaba con orgullo que la alfabetización de las tropas alemanas era la mayor de toda Europa (véase capítulo 14). Pero no debemos pensar en una educación en el sentido moderno. En 1882 las aulas prusianas contaban con una media de 66 alumnos, que se reducirían a 51 en 1911 (Hororst *et al.*, 1975: 157), momento en el que otros países comenzaban a alcanzar ese nivel. Pero, en Prusia, la educación era estatista y se apoyaba en el norte en la iglesia pietista luterana (evangélica). Aunque involuntariamente, el régimen había conseguido aprovechar las lealtades «nacionalistas».

Estas estructuras no se limitaron a respaldar el crecimiento económico, también aumentaron el tamaño del Estado, la naturalización y el estatismo de sus clases altas y de su economía originalmente regionalizada y multiestatal. Los *Junkers* prusianos, los industriales de Renania, comerciantes, profesionales y funcionarios de toda Alemania (de la *Kleindeutsch*), que hablaban y escribían cada vez más en

una lengua homologada y asistían a las mismas escuelas y universidades, se estaban integrando en una sociedad civil cuyas infraestructuras eran las de Prusia.

Existen dos versiones, una fuerte y otra débil, de esta argumentación estatista. La débil, expuesta por numerosos economistas, sostiene que la política estatal fue «más permisiva que propulsiva» (Trebilcock, 1981: 78; *cf.* Böhme, 1978), que las infraestructuras estatales se limitaron a «quitar los grilletes» (en frase de Schumpeter, 1939: 280) a la expansión de la «mano invisible» del capitalismo de mercado. De hecho, la intervención *disminuía* a medida que el mercantilismo y la protección retrocedían (Pounds, 1959). Otros prefieren la versión fuerte, que yo comparto. Kindleberger (1978: capítulo 7; *cf.* Epstein, 1967: 109) observa que la intervención supuso una mayor integración nacional de la economía y, por tanto, fomentó el crecimiento. No obstante, puesto que, en gran parte, se produjo de modo intersticial e involuntario, tuvo que vencer ciertas relaciones intitucionalizadas de poder político y geopolítico.

La creación del Kaiserreich: *el* Sonderweg

De 1865 a 1871 Prusia conquistõ la confederación, expulsó a Austria de Alemania (la *Kleindeutsch*) y fundó el Segundo *Reich*. La naturaleza de este nuevo Estado ha suscitado dos grandes controversias que afectan a ciertas cuestiones fundamentales de la teoría sociológica, referentes a la *Sonderweg* y a la «autonomía» estatal, y que abordaré aquí por separado.

Muchos historiadores y sociólogos liberales han considerado al *Kaiserreich* una aberración, puesto que para ellos no existen otras vías normales al desarrollo capitalista que la francesa o la anglosajona. Así, identifican el *Sonderweg* alemán con un país que creó su «propia vía especial» de desarrollo capitalista semiautoritario, es decir, no basado en la democracia de partidos, y le atribuyen la rápida industrialización en un medio dominado por las clases altas y las elites reaccionarias. La burguesía emergente se habría mostrado débil e incapaz de establecer una democracia. Max Weber acuñó a este respecto una expresión clásica (Beetham, 1985: capítulo 6), que se ha repetido con frecuencia (Dahrendorf, 1968; Böhme, 1978; Kitchen, 1978; Wehler, 1985 ofrece una versión revisionista). La argumentación da por descontado que las burguesías son normalmente predemocráticas, es de-

cir, la idea tradicional de la sociología comparada (Moore, 1973; Lipset, 1980).

Los autores marxistas han atacado esta interpretación liberal del *Sonderweg*. Blackbourne y Eley (1984) niegan la existencia de una relación necesaria entre el capitalismo y la democracia (Poulantzas, 1973; Jessop, 1978). A su parecer, la burguesía alemana nunca persiguió en serio el liberalismo porque se sentía satisfecha con un régimen semiautoritario que promocionaba el desarrollo capitalista, con una ciudadanía civil mínima y una ciudadanía política restringida, y que negaba a los trabajadores los derechos colectivos. Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992) han ampliado el argumento. Citando numerosos estudios de casos históricos y contemporáneos, intentan demostrar que la burguesía ha reinvindicado en contadas ocasiones la democracia, y, cuando lo ha hecho, a menudo se ha debido a las presiones que llegaban desde abajo, de la clase trabajadora y, más irregularmente, del campesinado. Cuando aparece, como en el *Kaiserreich*, entre una poderosa nobleza terrateniente y un Estado militarista, acepta encantada las normas autoritarias. No hubo un *Sonderweg* alemán, porque el autoritarismo burgués ha sido tan «normal» como el liberalismo.

No obstante, y a despecho de sus diferencias, los liberales y sus críticos ofrecen versiones alternativas de un mismo panorama. Todos descubren en el *Kaiserreich* un compromiso entre dos actores de poder: el antiguo régimen y la burguesía emergente. Para los liberales el predominio del primero forzó el compromiso de la segunda. Sus críticos consideran que ambos se repartieron las ganancias; el antiguo régimen para asegurarse el control político; la burguesía, el económico. Los liberales ven en el militarismo un antiguo régimen inestable y herido de muerte, porque, para ellos, la naturaleza del capitalismo moderno es liberal. Los críticos lo consideran en su conjunto: el antiguo régimen era belicoso, la burguesía deseaba la represión de la clase obrera. Compartiendo el pesimismo de los marxistas más recientes, Blackbourne y Eley han descubierto en este compromiso un camino viable al desarrollo capitalista: «La reproducción ordenada de las relaciones capitalistas de producción encuentra una garantía en un Estado carente de auténticas instituciones democráticas y representativas». Se habría tratado, pues, de una «revolución desde arriba». La «modernización conservadora desde arriba» de Moore habría tenido lugar tanto aquí como en el Japón Meiji o en la Italia del *Risorgi-*

mento (Blackbourne y Eley, 1984: 84 y 90; Eley, 1988). Me serviré de estas ideas corrigiendo dos defectos:

1. Todas ellas conceden una importancia excesiva a las relaciones de clases, al tiempo que descuidan la cuestión nacional. No se plantean la identidad de la sociedad. Difieren sólo en cuanto a las relaciones establecidas entre el régimen y la burguesía en una sociedad-Estado concreta, Alemania (Evans, 1987: 114, también lo critica). Pero, ¿dónde estaba esa Alemania?, porque esta pregunta afecta a la identidad tanto del régimen como del capitalismo. En realidad, se encontraban en marcha *dos* clases de incorporación política: la incorporación burguesa a un Estado autoritario y la incorporación a una sola Alemania federal de treinta y nueve estados, dos religiones regionales, Prusia, Austria y la geopolítica confederal. Aunque muchos de estos autores, en especial Blackbourne y Eley, tienen un buen conocimiento empírico de la situación, sus teorías no lo reflejan. El compromiso entre el antiguo régimen y la burguesía incluía, como en otras partes, la cristalización nacional del Estado. El *Sonderweg* alemán fue durante todo el periodo una mera cuestión de detalle. Como observan los marxistas, en ningún Estado faltó alguna forma de autoritarismo. Rokkan ha destacado, como yo mismo en este volumen, que los conflictos nacionales desgarraron a *todos* los Estados, con las diferencias relativas a las peculiaridades regionales, religiosas, etc., que deberemos especificar.

2. Al concentrarse en el conflicto frontal entre los actores de clase, estos autores enfatizan las estrategias y los intereses deliberados y racionales. Asumen, sin más, que el régimen y la burguesía sabían lo que querían, por qué luchaban, lo que perdían y lo que ganaban. Pero las cosas no ocurrieron de ese modo. Cuando se entrelazan las cuestiones de clase y nación, las identidades colectivas se complican en extremo, y los resultados de cada enfrentamiento tienen consecuencias involuntarias para el otro. *Ningún* actor poderoso luchó por la incorporación a un capitalismo nacional autoritario (el resultado) consciente y consistentemente. Fue el producto de distintas redes de poder, cuyas relaciones se cruzaron con tal complicación que nadie pudo controlarlas.

La revolución de 1848 constituye un buen ejemplo de estos cruces entre la clase y la nación. En muchos aspectos, las revoluciones que estallaron en Europa central en aquel año fueron versiones tardías de la década revolucionaria en Francia, de hecho comenzaron a

raíz de un nuevo intento revolucionario en París. Pero si la historia se repite, en una civilización multiestatal lo hace conscientemente. Los tres actores de clase fundamentales en 1848 —el antiguo régimen, la alta burguesía y la pequeña burguesía, y el pueblo bajo (entre ellos, los artesanos y algunos jornaleros)— se parecían a los de la década revolucionaria francesa (aunque contaron con una mayor participación artesana y proletaria, como veremos en los capítulos 15 y 18). También en este caso se produjo con anterioridad una enorme expansión de las redes de alfabetización discursiva, especialmente en Alemania.

Pero hubo una diferencia de mayor calado. Los actores de 1848 poseían una precoz conciencia de clase basada en la anterior experiencia occidental. Los radicales reivindicaron inmediatamente la ciudadanía civil y política, y los regímenes entendieron que debían burlar el destino de sus primos franceses. Esta vez, cuando estallaron los desórdenes, las burguesías y los antiguos regímenes cometieron pocos «errores» en la defensa de sus intereses e identidades. Supieron enseguida que no eran enemigos, porque la auténtica amenaza llegaba desde abajo. Por eso se consolidó en 1848 el «partido de orden» que había fallado en 1776 y 1789. La mayor parte de los burgueses y algunos profesionales, pequeño burgueses y empleados de carrera desertaron pronto, abandonaron a los radicales y a unos cuantos pequeño burgueses, artesanos y estudiantes en las barricadas (Stearns, 1974; Price, 1989). Durante el *Kaiserreich* la mayoría de los «liberales» no reivindicaron el sufragio masculino por miedo a las masas (Sheehan, 1978), como observan Blackbourne y Eley.

Este proceso de descubrimiento de la clase se produjo junto a un segundo, de descubrimiento de la nación, es decir, de que la nación de los alemanes ricos se defendía mejor con la Prusia conservadora. Los «liberal-nacionales» del norte luterano esperaban progreso y libertades de una Prusia reformada. Los «liberal-confederales», predominantes en el sur de Alemania y a menudo católicos, buscaron la libertad en los intersticios del Estado y reivindicaron la reforma de la confederación. Estas divisiones, más relacionadas con la unificación que con la clase, estancaron los intensos debates de los aspirantes a revolucionarios en el Parlamento de Fráncfort durante 1848 e impidieron la elaboración de un programa coherente de reformas. Para muchos líderes burgueses el estancamiento significaba anarquía; por tanto, pidieron la intervención del ejército prusiano. Cuando éste reprimió la revolución, los príncipes alemanes comprendieron que sus

tronos dependían de Prusia. Los partidarios de la confederación se dividieron entonces en defensores del *statu quo* particularista y demócratas que abogaban por un Parlamento soberano en Fráncfort (Hope, 1973).

Prusia no era un caso desesperado para la reforma. Sus *Bildungsbeamten*, funcionarios y profesores, que habían desempeñado un importante cometido en 1848, pidieron la reforma desde dentro. El régimen concedió entonces una constitución de compromiso. Se estableció un frágil sistema parlamentario, con la idea de reprimir los movimientos más radicales. El rey nombraba con toda libertad a los ministros, los jueces, los funcionarios y los miembros de una Cámara Alta, al tiempo que dirigía el ejército. La Cámara Baja, el *Landtag*, debatía, participaba informalmente en la legislación y aprobaba o rechazaba los presupuestos (aunque no es seguro que, en el último caso, dejaran de aplicarse). Se elegía por sufragio universal masculino (para los hombres mayores de veinticinco años), pero según un voto ponderado. Tres «clases» contaban con el mismo número de votos: el 4 por 100 de los grandes hacendados, el 16 por 100 de los pequeños hacendados y el 80 por 100 para el resto de los hombres. Algunos reformadores se dieron por satisfechos; otros, reclamaron más. Desde 1859, los liberales, que formaban la mayoría en el *Landstag*, rechazaron los presupuestos militares. La constitución era confusa. Bismarck (primer ministro de Prusia desde 1862) replicó que prevalecería el «interés del Estado». Los ingresos se obtuvieron arbitrariamente, pero había que resolver la paralización.

Bismarck volvió la mirada a la geopolítica. Los Hohenzollern ya habían recurrido al consenso de los estados alemanes para excluir paulatinamente a Austria, Francia y Dinamarca de sus asuntos, pero en la década de 1860, Bismarck eligió la agresión. La ira popular a raíz de un supuesto maltrato a los alemanes en la frontera danesa le dio el pretexto para invadir, junto a las fuerzas austriacas, en 1864. La victoria proporcionó a Prusia el control de Schleswig; a Austria, el de Holstein (de dudoso provecho por su lejanía de los restantes territorios austriacos). En 1866, un Bismarck envalentonado aumentó la apuesta. Convenció al rey para que invadiera Austria y sus aliados alemanes, firmando al mismo tiempo un tratado secreto con Italia para obligar al enemigo a luchar en dos frentes. La movilización prusiana se benefició de un ferrocarril mucho más desarrollado; Austria, en efecto, se vio perjudicada por la dispersión de los frentes de batalla, pese a lo cual, la mayor parte de Europa, entre otros Francia, la

Bolsa de Berlín y Friedrich Engels, se preparó para una victoria austriaca. Los austriacos derrotaron a los italianos, pero fueron arrasados por los prusianos en Königgrätz-Sadowa (Craig, 1964; Rothenberg, 1976: 67 a 73; McNeill, 1983: 249 y 250).

Pero esto no supuso el final. Una vez dentro de Austria, los ejércitos prusianos, sin la ventaja de su ferrocarril, presentaban el habitual aspecto caótico de los carros, las bestias y los hombres empantanados en los cenagosos caminos rurales, faltos a veces de comida y municiones y nunca situados en las posiciones marcadas por la estrategia de campaña. Si Austria hubiera continuado el conflicto, los generales europeos habrían aprendido la lección del reciente invento americano: la guerra de desgaste típica de la sociedad industrial, que acababa de librar ferozmente el norte en la Guerra Civil Americana. Bismarck conocía la crisis financiera de Austria y los disturbios nacionalistas que soportaba en el este, pero temía la intervención francesa. Se apresuró a pedir la paz sin exigir territorios austriacos; al fin y al cabo había logrado su objetivo, demostrar la impotencia austriaca a sus aliados alemanes. La mayoría aceptó la incorporación a la Confederación de la Alemania del Norte dominada por Prusia.

Las relaciones con una Francia cuya alarma sólo era comparable a su aislamiento, empeoraban. En 1870, sabiendo que ni la desmoralizada Austria ni la Inglaterra que dominaba los mares, intervendrían, Bismarck atacó frontalmente a los franceses. El ejército prusiano, endurecido por la lucha, triunfó con una facilidad mayor de lo que convenía a una Europa aún ignorante de los horrores de la guerra industrial. Prusia barrió los últimos estados alemanes, pero, en un cálculo imprudente, arrebató la Alsacia-Lorena a Francia. La estrategia de Bismarck había demolido —primero por consenso, luego por manipulación diplomática, y, finalmente, «a sangre y fuego»— las alternativas austriaca y confederal de Alemania. El Segundo *Reich* se encontraba en marcha, con un régimen, unas leyes, unas redes de comunicación y una coerción predominantemente prusianos. El poder autoritario de la monarquía y el ejército de Prusia, acreditado por haber conseguido la unificación, encabezaba la nación.

Estos dramáticos acontecimientos responden al cruce de las cinco causas del auge y caída de las potencias, ya analizadas en el capítulo 8. Las diferencias del poder ideológico parecen pequeñas, incluso teniendo en cuenta que las victorias habían acrecentado la moral de las tropas prusianas. La modernización económica de Prusia resultó decisiva; en el campo de batalla se tradujo con toda claridad en los fe-

rrocarriles y en la rápida recarga de los fusiles. En segundo lugar, el propio equilibrio del poder militar se inclinó a favor de Prusia porque Moltke y su alto mando aplicaron una formación y una tácticas más relevantes que las de sus enemigos para la industrialización de la guerra. En tercer lugar, el Estado prusiano había integrado el militarismo industrial mejor que sus adversarios. Pero la ventaja política de mayor alcance estuvo en la diplomacia. Bismarck había escogido con todo cuidado cuándo luchar y cuándo declarar la paz; con los aliados en las dos primeras guerras; después de neutralizar a otros enemigos potenciales en las tres; y fijando siempre a sus generales los objetivos concretos. Por el contrario, las diplomacias francesa y británica comunicaron a sus generales metas confusas. En cuarto lugar, la habilidad para las decisiones políticas y la autoridad de los individuos —Bismarck y Moltke, principalmente— supuso una diferencia en un clima de crisis complejas y cambiantes. La balanza no se habría inclinado en ese momento sin el dominio político de Bismarck; en ese caso, las tres opciones alemanas habrían continuado siendo viables (Pflanze, 1976). Los individuos —cuando dominan instituciones que concentran mucho poder— desempeñan un papel en la historia. Una vez más, como hemos visto en las anteriores victorias británicas sobre Francia, se aprovechó con inteligencia un *conjunto* de ventajas sobre un enemigo concreto en una situación concreta. Y, de nuevo, la superior capacidad para las alianzas diplomáticas resultó decisiva para ese aprovechamiento.

Las victorias de Prusia tuvieron enormes consecuencias para Alemania y para el resto del mundo. Se logró la unificación poniendo fin al confederalismo por la fuerza. Con ello, el militarismo, adquiría legitimidad en detrimento del transnacionalismo. Tanto los modernizadores como los nacionalistas burgueses se integraron en el Estado prusiano. Para ellos, la superioridad de Prusia descansaba en su aceptación de la industria, la ciencia, la educación y el capitalismo. El Estado autoritario ya no era una propiedad privada de la monarquía o del antiguo régimen, desconectada de la burguesía (como afirma la teoría liberal). Ni tampoco el mero producto del interés común por reprimir a la clase obrera (como afirman los marxistas). Era la consecuencia involuntaria de las soluciones a las luchas entrelazadas de la clase y la nación.

En lo sucesivo, declaraba Bismarck, Prusia «estaría en condiciones de dictar leyes a Alemania, no de recibirlas ... Si ha de haber una revolución, no la suframos, hagámosla nosotros» (Gall, 1986: I, 62,

278). Sus palabras han introducido la expresión «revolución desde arriba» en el lenguaje político. Los liberales se dividieron en una minoría recalcitrante de progresistas y una mayoría obediente, el partido Liberal Nacional, que ofreció a Bismarck su colaboración incondicional en los asuntos nacionales y exteriores, al tiempo que cumplía con sus «obligaciones de oposición leal y vigilante» en las cuestiones de interés nacional. Lo importante de su decisión fue el apoyo a los presupuestos militares del régimen, para no «dividir a la nación». Sus prioridades en el interior resultaban más centralistas que liberales: establecer el liderazgo constitucional del Canciller imperial, unificar el código civil y fundar el *Reichsbank*. Finalmente, se estableció un *Reichsstaat* liderado por Prusia con ciertas restricciones en materia de libertad de expresión y asociación, un Estado más regido por las leyes que por el Parlamento, que encarnaba más la ciudadanía civil que la política.

La estructura política de Prusia se extendió a la Confederación de la Alemania del Norte en 1867, y al *Reich* alemán en 1871. Existía una constitución federal, pero la administración rutinaria, que incluía la policía, la justicia y la educación, quedaba en manos de los estados. Los príncipes y los representantes de los estados compartían la recaudación de los ingresos, en tanto que el gobierno municipal disfrutaba de una amplia autonomía. El sufragio de clase se abandonó en el *Reichsstag*, pero se conservó para el Parlamento prusiano. La distribución de los distritos electorales presentaba un sesgo favorable a las zonas rurales, lo que, unido a la emigración del campo a la ciudad, disminuyó en gran medida el peso del voto obrero. Existía el sufragio, pero no la soberanía parlamentaria. El *Reichstag* no nombraba a los ministros, ni debatía la política exterior. El ejército rendía cuentas sólo al káiser. Los Hohenzollern conservaban la libertad de acción, al mismo tiempo que concedían a la burguesía un *Reichsstaat* (esto es, la ciudadanía civil de Marshall), pero sólo una limitada democracia de partidos. Desde el punto de vista representativo, se trataba de un Estado semiautoritario.

Los oponentes del nuevo régimen hablaban con desprecio de un «parlamento de aduanas, correos y telégrafos» (Eley, 1983: 282) —es decir, de las funciones civiles que desempeñaba el *Reich*—, pero, al fin, aquél ganó las elecciones a la dividida oposición de los radicales y los confederales. Su «liberalismo» se distinguía del francés o el británico por tolerar una mayor intervención de las prácticas autoritarias, incluso militaristas, del Estado y por una concepción más territorial

del interés. El régimen se había consolidado. La burguesía, que tildaba de reaccionario al federalismo, se movilizó después que el régimen. En Austria, mientras tanto, ocurría todo lo contrario; allí los «nacionalistas» de las regiones robaron a los liberales las ideologías modernizadoras.

Los confederales no desaparecieron, pero estaban obligados a defenderse del Estado central, que no los incluía. Alsacianos, daneses y polacos, súbditos a regañadientes, organizaron partidos regionales recalcitrantes en el *Reichstag*. Algunos liberales defendían la autonomía regional, especialmente en el sur católico, contra la centralización del *Reich* impuesta por el Estado luterano de Prusia. Las luchas nacionales y de clase se entrelazaban dentro de un único Estado. Prusia había vencido, pero su Estado era ahora mucho más polimorfo.

Por otra parte, el desacuerdo en materia de economía política internacional minaba la alianza entre la burguesía y el antiguo régimen. La industria pesada, que comenzaba a competir con la británica, imponía un proteccionismo selectivo. Se planteó entonces el problema (recurrente en el futuro) de la conveniencia o no de proteger las industrias que daban sus primeros pasos y de la existencia de unos mercados potenciales al efecto. Las ideas de List volvieron al candelero a partir de 1850. Pero, ¿era tan necesaria la protección como el propio List y los grupos de presión aseguraban? La transición alemana a la autonomía industrial había tenido lugar en las condiciones de libre mercado de mediados de siglo. El debate se vio, además, influido por las consecuencias involuntarias del nacionalismo modernizador. La articulación de los «intereses» fue *alemana*. Los industriales se identificaron con el Estado prusiano-alemán que los había incorporado, de modo que su sentido de la economía era más nacional que transnacional. Muchos profesaban el luteranismo; dependían del Estado para mantener a raya a la clase obrera; se encontraban socializados dentro de un Estado cuyo sistema educativo se hacía cada vez más conservador; apreciaban la *Zollverein* y consultaban regularmente al Estado las facilidades de crédito y las infraestructuras de comunicación; gran parte de su personal se movía entre la industria y el funcionariado (Kocka, 1981). Los industriales y los administradores del Estado generaron las soluciones «nacionales» a la competencia extranjera.

Schmoller ha observado que la protección fue

> al mismo tiempo la estructura del Estado y de la economía nacional... La esencia del sistema no descansaba en una doctrina monetaria, en el equilibrio

comercial o en las leyes de navegación, sino en algo de mayor trascendencia. Literalmente, se pretendía transformar la organización social y las instituciones estatales sustituyendo la economía local y territorial por la del Estado nacional [Ashley, 1970: 55].

Los *Junkers* no estuvieron de acuerdo al principio, porque exportaban productos agrícolas y temían que la protección arancelaria de los bienes industriales levantara represalias en el extranjero. Entonces intervino el Nuevo Mundo. El cuadro 8.4 muestra que la producción agrícola estadounidense superaba a la alemana. Cuando, en la década de 1870, el ferrocarril y los barcos de vapor abarataron el transporte transatlántico y terrestre, el trigo americano y otros artículos primarios invadieron Europa a precios más competitivos. Por otra parte, aquel trigo era más blando que el centeno prusiano. Así, desde finales de la década, los *Junkers* y los productores agrícolas se convirtieron al proteccionismo.

Estas circunstancias resultaron, sin embargo, menos determinantes que la carga impositiva. Los deseos de pagar menos impuestos coincidieron con un aumento de las necesidades recaudatorias del Estado. Lo que parecía un mero interés «económico» sectorial se entrelazó con complejas cristalizaciones estatales: nacionales, militares y de clase. La ausencia de un equilibrio entre las potencias y la carrera tecnológica del armamento aumentaron los gastos militares en el preciso momento en que el libre comercio disminuía los ingresos aduaneros, finalizaban las indemnizaciones francesas (1875) y la depresión aumentaba la morosidad de los contribuyentes. El gobierno federal entró en una crisis fiscal porque dependía en gran parte del pago de la «cuota de matrícula» por parte de los estados. Pero la situación afectaba gravemente a los *Junkers* y otros productores agrícolas que sostenían a Bismarck; así pues, descentralizaban el poder estatal y daban un mayor peso de los estados. Los impuestos indirectos sobre las aduanas, que requerían sólo un consenso mínimo por parte del consejo federal de los estados y un acuerdo inicial en el *Reichstag* y gravaban a los consumidores más que a los productores, resultaban ventajosos para todos. El propio Bismarck se dejó convencer por estas razones políticas.

Sólo se oponían a este plan los progresistas y los liberal-nacionales, entre los que predominaban los parlamentarios y los partidarios del libre comercio. En 1878 se produjeron dos atentados izquierdistas contra el káiser. El primero de ellos provocó la promulgación de

las leyes antisocialistas. Cuando Bismarck se enteró del segundo, exclamó: «Ahora los tengo en mis manos»; «A los socialdemócratas», le preguntaron, «No, a los liberal-nacionales», contestó (Sheehan, 1978: 183). Disolvió el *Reichstag* y organizó unas elecciones alarmistas contra socialistas y liberales, que dieron resultado. Con el apoyo fiscal de la nueva mayoría, los agricultores conservadores y el centro católico, consiguió imponer los aranceles que le garantizaban el presupuesto militar. El gobierno del *Reich* aumentó su autonomía fiscal respecto a los estados confederales (y, hasta cierto punto, respecto al propio *Reichstag*) y obtuvo unos beneficios extraordinarios e involuntarios del nuevo consenso sobre la economía política que aportaron las concepciones agrarias del interés, partidarias ahora de los aranceles (mi análisis de los aranceles se basa en la investigación de Hobson, 1991: capítulo 2). Estaba en marcha la alianza del «centeno y el hierro», a la que se sumaron muchos campesinos propietarios del oeste. Los aranceles alemanes subieron en 1885, 1887, 1902 y 1906.

Sin embargo, no eran más altos que los de otros países o que los propios aranceles alemanes de periodos anteriores (Barkin, 1987). Su importancia reside más bien en las consecuencias involuntarias del hecho. La unidad fundamentada en el proteccionismo selectivo estrechó las relaciones del antiguo régimen con la burguesía y una parte del campesinado. Industriales, banqueros y comerciantes compraban títulos nobiliarios y mansiones en el campo, al tiempo que enviaban a sus hijos al ejército. La alta burguesía se integraba en el antiguo régimen mediante el mismo respecto manipulador, de carácter segmental, que había practicado en Francia durante el siglo XVIII (véase el capítulo 6) y que aquí recibió el nombre de «política del esfuerzo común». Los industriales y los *Junkers* intercambiaban productos, hijos e hijas, colaboraban en la economía política, se reconciliaban con el campesinado y reprimían a los trabajadores. No faltaban los desacuerdos, especialmente en materia de impuestos, pero la oposición estaba más dividida.

El capitalismo nacional autoritario se institucionalizó durante la década de 1880. La industria, organizada verticalmente en grandes corporaciones y horizontalmente en carteles, siempre en estrecha colaboración con la banca, se introdujo en una monarquía autoritaria administrada por la nobleza agraria. El éxito atrajo a unas clases medias privadas en parte de la participación política que disfrutaban sus iguales en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que, sin embargo, compartían el progreso económico, las oportunidades educati-

vas que facilitaban el acceso a la administración pública, la gestión y las profesiones, y un creciente sentimiento de comunidad nacional basada en un Estado-nación fuerte y victorioso. Los recientes triunfos se habían conseguido gracias al doble militarismo de estos grupos: por un lado, las aventuras militares en el exterior; por otro, la represión interna de la clase obrera. La incorporación autoritaria unía al antiguo régimen con el nuevo capitalismo y la clase media en el marco de una sociedad industrial moderna.

Pero los éxitos económicos de Alemania produjeron también grandes cambios en las clases, que acabaron por desestabilizar estas cómodas relaciones. La contribución de la agricultura al producto nacional bruto cayó del 47 por 100 de 1850 al 25 por 100 de 1909. En el este, los *Junkers* se replegaron a sus problemas económicos locales cuando los financieros y los industriales, reaccios a su economía política y su idea de los impuestos y de la geopolítica, entraron en el Estado. La comercialización de la agricultura diversificó las relaciones de clase en el oeste produciendo al mismo tiempo un proletariado rural y unos campesinos minifundistas más independientes (véase el capítulo 19). Mientras tanto, aumentaba el poder de la clase media (pequeños burgueses, profesionales y empleados de carrera de la industria privada y la burocracia estatal), que si había estado sometida al control de los partidos segmentales dirigidos por notables, en 1900 dependía ya de los partidos de masas que reivindicaban un nacionalismo antiproletario (véase el capítulo 16). Los trabajadores de la industria también eran más poderosos. Puesto que el poder político los excluía, se unieron en organizaciones de clase y en el socialismo marxista (véase capítulo 18). Todo esto limitó las opciones del régimen basadas en la política de la división.

En 1900 el electorado de clase se estructuraba en tres tercios; uno agrario, otro de la clase media (que incluía a los artesanos independientes) y otro del proletariado industrial, pero la correspondencia entre clase y el voto no reflejaba la realidad. Los notables, a los que ahora se habían añadido los industriales, ejercían aún controles de tipo segmental, en tanto que la cuestión del poder nacional frente al local-regional, expresada ante todo por las iglesias, dividía a las clases y los partidos. Las identidades de clase, región y religión entraron en competencia. Las dos clases extremas, el régimen y el partido socialdemócrata, eran centralistas y estatistas, predominantemente norteños y luteranos. Los socialdemócratas optaron resueltamente por una combinación de democracia social estatista y de marxismo, con es-

casa influencia de economicismo descentralizador o sindicalista, lo que explica que alcanzaran mayor éxito entre los luteranos que entre los católicos.

Así pues, ni el régimen ni la socialdemocracia despertaron entusiasmo entre los regionalistas o los católicos. El conflicto entre la Prusia luterana y la católica Austria y la *Kulturkampf* fortalecieron al partido del centro católico. La iglesia católica se había visto privada a comienzos del siglo de sus vastos dominios y sus poderes seculares en los estados alemanes. Desde entonces se dedicaba a defender sus posiciones en el plano comunitario, donde resistió la secularización decimonónica mejor que los estatistas luteranos. Durante la *Kulturkampf*, los curas y las asociaciones de católicos voluntarios se unieron en la defensa de los derechos locales, especialmente en las áreas rurales, aunque también entre los trabajadores industriales de confesión católica (Evans, 1987: 142 a 150). La iglesia católica luchaba en toda Europa contra las ideas ateas y estatistas del marxismo. El centro católico se oponía con la misma fuerza a la centralización nacional y al socialismo estatista; aunque desde el punto de vista clerical era conservador, poseía su propio programa social. La clase y la nación se entrelazaban en la identidad de las personas y los programas de los partidos.

La aprobación de las leyes en el régimen semiautoritario necesitaba la mayoría en el *Reichstag*. Aunque el régimen combinaba la manipulación segmental con la represión selectiva, gestionaba los grandes problemas internos a través de los partidos del *Reichstag*, y puesto que el partido socialdemócrata predominaba entre los trabajadores luteranos y los partidos de las minorías étnicas se encontraban firmemente atrincherados, debía establecer compromisos al menos con dos de los siguientes grupos: la clase media, el campesinado y los católicos, según se viera impulsado por el capitalismo, el monarquismo o el militarismo. Por eso no pudo cortar el paso a los socialdemócratas fomentando una alianza centrista con los obreros moderados, la clase media, el campesinado y los liberales católicos, aunque nadie más habría podido hacerlo. Como observa Blackbourne (1980), una alianza entre los socialdemócratas, el centro católico y los burgueses progresistas a partir de 1890 habría podido mantener una mayoría permanente en el *Reichstag*; pero el centro prefirió aliarse con el régimen a desafiarlo con una política hostil, regionalista y de clase. Como veremos en el capítulo 19, aquél tenía una fuerza considerable en las zonas rurales, bien porque los campesinos luteranos mantuvie-

ran su lealtad, bien porque se sintieran presionados por la derecha; en cuanto a los católicos, buscaban un acomodo pragmático. El régimen concedió entonces una cierta autonomía local-regional a cambio del dominio del centro.

La clase obrera luterana, cuyo núcleo militante estaba notoriamente comprometido con el socialismo estatista revolucionario, quedó excluida. Mayor incluso era el aislamiento del partido socialdemócrata. A partir de 1900 rechazó varios intentos de acercamiento de los progresistas. En el capítulo 19 comprobaremos que la insensibilidad socialdemócrata hacia el mundo agrario procedía de su apego a la ortodoxia productivista del marxismo; obsesionados con el triunfo de la clase obrera urbana e industrial, dejaron las manos libres a los proletarios agrícolas y los campesinos para entablar alianzas políticas alternativas. Lo hicieron, en efecto, con los partidos conservadores, los partidos campesinos regionales y, en mayor número, con el centro católico. La política de clase se polarizó entre los trabajadores luteranos y el resto. El grueso de la clase media no era partidario del liberalismo que hemos encontrado en Francia o Gran Bretaña; los católicos fueron conservadores en todo lo referente a la clase y mantuvieron una «oposición leal» respecto a la cuestión nacional. Así, sus presiones no fueron capaces de diluir ninguna de las cristalizaciones que he atribuido al régimen: capitalista, semiautoritaria, monárquica y militarista. En realidad, sólo se diluyó su luteranismo. Aunque disminuyeron sus posibilidades de aplicar una política segmental de «divide y vencerás», todas las cristalizaciones «aditivas» quedaron intactas.

El régimen tenía dos prioridades internas: sacar adelante el presupuesto anual y los gastos asignados al ejército cada siete años (más tarde, cada cinco) en el *Reichstag* y el Consejo Federal, y modernizar, industrializar y emprender tímidas reformas sociales, al tiempo que reprimía ordenadamente a la clase obrera y a las minorías étnicas. Las mayores incertidumbres estaban en el centro, la derecha y los regionalistas moderados. Los conservadores apoyaban al régimen, pero se oponían a la modernización. Los *Junkers* se oponían a los privilegios para el fomento de la industria y a la reforma fiscal. La industria, en cambio, los esperaba con impaciencia. El centro católico y los estados del sur interpretaron la modernización como centralización del Estado y se opusieron. La pesadilla del régimen era que un partido «excluido» o cualquiera de los «integrados» temporalmente alejados del Estado se unieran a los «enemigos del *Reich*», los *Reichsfeinde*, en

los momentos de crisis para rechazar el presupuesto o las asignaciones militares.

Pero la pesadilla nunca se hizo realidad. El régimen conseguía sus principales objetivos sin perder la libertad de acción. Caían los ministros, desaparecían las mayorías parlamentarias y la humillación de los políticos apaciguadores templaba (por poco tiempo) el temperamento del káiser, pero se aprobaban las asignaciones y no se producían avances democráticos peligrosos. La incorporación autoritaria parecía consolidarse en lo que era ya la mayor nación industrial de Europa. Puede que la clase obrera representara una amenaza, pero cuanto más crecía el partido socialdemócrata entre los obreros urbanos y protestantes, más se acercaban al régimen la burguesía, el campesinado, los católicos y los descentralizadores. Las elecciones de 1912, que convirtieron a los socialdemócratas en el partido mayoritario, acercaron al centro y a la derecha al régimen, lo que permitió a los ministros realizar una reforma fiscal largamente deseada. De modo que todo parecía seguro en el interior. Por otro lado, el *Sonderweg* estaba dejando de ser «especial» porque otros muchos regímenes autoritarios, desde Austria al Japón, intentaban adaptar sus existosas instituciones.

El Kaiserreich *y la autonomía del Estado*

¿Cuánto poder autónomo tenía este Estado? Los marxistas y Max Weber han ofrecido las principales respuestas. Marx concedía a las elites estatales la autonomía «limitada» que describió en *El 18 Brumario de Luis Bonaparte* (Marx y Engels, 1968: 96 a 179), donde identifica tres actores políticos autónomos: la «oposición republicana oficial», los funcionarios del Estado y Luis Bonaparte, subrayando la habilidad de este último para enfrentar a las clases o a sus fracciones en un escenario que carecía de una clase o modo de producción dominante. Los marxistas amplían el análisis a otros casos, entre los que incluyen siempre a Bismarck y al *Kaiserreich* (Poulantzas, 1973: 258 a 262; Draper, 1977: 311 a 590; Blackbourne y Eley, 1984; *cf.* Wehler, 1985: 55 a 62), pero siempre ven la manipulación bonapartista o bismarckiana del conflicto de clase limitada estructuralmente por la clase capitalista en auge. Bonaparte sobrevivió porque ofreció a los propietarios la mejor garantía de orden social contra la insurrección del pueblo. Bismarck logró una «independencia creativa del ejecutivo

estatal dentro de los límites impuestos por la dinámica política del desarrollo social capitalista» (Blackbourne y Eley, 1984: 150). La forma de estos Estados puede ser liberal o autoritaria, porque lo que dicta en última instancia los límites de su autonomía es siempre el capitalismo.

Weber concedió bastante más autonomía al *Kaiserreich* (bajo el cual vivió), pero también identificó muchos más portadores de autonomía. Ante todo, la burocracia. En el capítulo 3 se cita su tajante expresión sobre los burócratas que se «encumbraban» por encima de los gobernantes en los Estados modernos. Oigamos sus palabras:

> Quien gobierna en realidad los Estados modernos es necesaria e inevitablemente la burocracia, porque el poder no se ejerce con los discursos parlamentarios o los pronunciamientos monárquicos, sino con la rutina de la administración ... Los «burócratas» gobiernan Alemania desde la dimisión del príncipe Bismarck [1978, II: 1393, 1400, 1404].

Pero no debemos creer que los Estados contemporáneos de Weber tuvieran los poderes que se desprenden de su tajante afirmación. En el capítulo 13 veremos que el número de burócratas aún era demasiado pequeño para permitir una eficaz penetración infraestructural del Estado en sus territorios. Bismarck intentó por dos veces destruir organizaciones de poder alternativas, pero el fracaso de la *Kulturkampf* contra la iglesia católica y de las leyes antisocialistas contra el PSD fortaleció a sus enemigos. La burocracia era demasiado pequeña y poco fiable desde el punto de vista político para ejecutar la legislación (Ross, 1984).

En efecto, el propio Weber rebajó su exageración del poder burocrático. Observó que, aunque eficientes en la realización de los objetivos, los burócratas no los establecen e identificó para el caso alemán dos centros de decisión, el ejecutivo —o, mejor, los dos ejecutivos que permitía la constitución, el káiser y el canciller— y los «partidos». Por canciller quería decir Bismarck, porque estaba convencido de que había dominado la política alemana y había «*dejado una nación sin voluntad propia*». Pero, luego, la locura del káiser y su círculo, sin la limitación de unos ministros o de un Parlamento soberano, tuvo desastrosos efectos para la política exterior (1978: II, 1385, 1392, 1431 a 1438; para una revisión, véase Mommsen, 1984: 141 a 155). Pero los burócratas *y* los dos ejecutivos estaban subordinados al «partido» de los conservadores y los *Junkers*. El monarca reinaba en

tanto que cabeza patrimonial de la red de parentesco señorial formada por los *Junkers*, que compartían sus ideas y su forma de vida, componían el personal de la corte y, junto a su clientela, la alta burocracia:

> El que una burocracia sea todopoderosa no quiere decir que no exista un *partido* dirigente. En Prusia sólo existen gobiernos conservadores y el parlamentarismo de fachada en Alemania responde a un axioma: el gobierno y sus representantes han de ser necesariamente «conservadores», salvo unas cuantas concesiones de patronazgo a la burguesía prusiana y al partido centrista ... Esto es lo que significa el «partido desde arriba» que caracteriza al gobierno burocrático. Cualquiera que sean los intereses de poder social o material del estrato que sostiene al partido dirigente, el trono siempre es impotente [Beetham, 1985: 165, 179].

Así pues, también Weber pone límites a la autonomía de la burocracia y de los ejecutivos, incapaces de desafiar no ya al capitalismo, sino al partido conservador.

Pero este partido no es una elite estatal autónoma perteneciente a una clase social (como en las teorías del elitismo auténtico). Los *Junkers* formaban una clase dominante, ahora en decadencia, que conservó el poder porque el Estado institucionalizó su antiguo poder económico. Por el contrario, la burguesía capitalista que dominaba ahora en Alemania era políticamente débil. La antigua clase dominante conservó su poder contra la nueva porque controlaba las instituciones estatales. Estos «partidos» eran relaciones *entre* la sociedad civil y el Estado (como he sostenido en el capítulo 3). En el capítulo 4 hemos visto que el antiguo régimen británico también conservó el poder político a través del liberalismo del antiguo régimen, que aplicó una política de *laissez-faire* en mayor medida de lo que habría requerido la industria británica (véase también Mann, 1988: 210 a 237). Pero allí tuvieron poder de «partido». Por el contrario, Weir y Skocpol (1985), que se declaran influidos por Weber, sostienen que el fracaso británico en la adaptación del corporacionismo keynesiano durante el siglo XX se debió al poder de una burocracia estatal autónoma. La verdad dependerá de los datos empíricos —los únicos que cuentan—, en cuanto al influjo de Weber, me tomaré la libertad de reivindicarlo para mí. La autonomía del Estado alemán fue plural y estuvo compuesta de dos elementos de elite característicos, la burocracia y el ejecutivo dual y un partido dominante institucionalizado.

De hecho, los tres actores políticos de Weber proceden de una infravaloración. Si perseguimos una teoría estatista institucional, podremos contar no menos de once instituciones políticas significativas en el *Kaiserreich*. Las dos primeras corresponden a los ejecutivos de Weber:

1. El *káiser* soberano, que podía delegar o arrogarse poderes.
2. El *canciller* del *Reich* y sus *ministros*, nombrados y destituidos por el káiser (aunque sólo lo hizo de modo errático), ante el cual rendían cuentas. Por lo general, se elegían entre los *Junkers* y la aristocracia del oeste, y solían ser luteranos.

Añado, por mi parte, las instituciones administrativas del *Reich*, que también encarnaban relaciones de «partido», en el sentido weberiano, entre el centro y el territorio:

3. La *corte*. Si bien no formaba una sola estructura administrativa, se agrupaba en torno al káiser, en especial a través de su *Kabinetten*, los círculos de consejeros personales, las facciones y la intriga. La corte representaba más directamente a los aristócratas y los *Junkers* luteranos, así como a una mezcla de industriales influyentes o ennoblecidos, banqueros, *Bildungsbeamten* y (más tarde) católicos.
4. El *ejército*. Esencialmente prusiano (aunque Baviera, Sajonia y Württemberg contaban con sus propios contingentes), formalmente responsable ante el káiser, su comandante en jefe, vinculado a la corte e inserto en clases semejantes. Su estructura de mando era independiente de la estructura de mando de la armada, con la que no mantenía relaciones formalizadas, pero los rangos aristocráticos y la *Immediatstellung*, derecho de los antiguos funcionarios a mantener audiencias privadas con el káiser (véase capítulo 13), se imponían al mando.
5. La *burocracia*. Era la institución más coherente, responsable en parte ante los ministros, pero con sus propios derechos colectivos y su solidaridad de casta. Representaba el compromiso de clase, a través de las universidades, entre la burguesía profesional y el antiguo régimen. Los ministros de finales del siglo XIX ampliaron el compromiso a las confesiones religiosas admitiendo a algunos católicos. En la cima, se le imponía la *Immediatstellung*, y en todos los niveles, el federalismo. La mayor parte de las funciones civiles quedaban en manos de los estados, en tanto que el *Reich* administraba el ejército, la

política exterior y las infraestructuras materiales de comunicación. No obstante, el dominio de Prusia (institución número 10) contrarrestaba esta diversidad.

Añadiré después las instituciones parlamentarias —el *Reichstag* y los partidos políticos formales— que representaban a los miembros y a los votantes de la sociedad civil. El *Reichstag* no era soberano. Sus poderes eran limitados y estaban mal definidos, aunque el derecho formal a vetar los presupuestos le confería un poder que no tenían los partidos. El respeto hacia el régimen produjo unos partidos centralizados y oligárquicos, más segmentales que electorales. De nuevo, resulta apropiado el modelo tripartito que aplicamos al siglo XVIII británico (véase capítulo 4):

6. *Partidos «integrados»* de notables, a los que consultaban el káiser, el canciller y los ministros: conservadores, representantes de los terratenientes luteranos y sus dependientes, y liberal-nacionales, representantes de la mayoría de los burgueses luteranos de las ciudades. Ambos estatistas.
7. *Partidos «excluidos»*, normalmente no consultados, pero cuyo apoyo podía segurar una mayoría en el *Reichstag*, sin la cual el régimen podía verse obligado a realizar concesiones poco convenientes: progresistas antiestatistas, nacionalistas de la clase media, el centro católico y los partidos del campesinado. Poco a poco escaparon al control de los notables y se transformaron en partidos electorales de masas.
8. *Partidos «marginados»*, calificados de *Reichsfeinde*, enemigos del *Reich*, por el régimen, que bajo ninguna circunstancia solicitó su apoyo: socialdemócratas, minorías étnicas y separatistas.

Añadiré ahora las instituciones federales. Aunque el federalismo era en parte formal y dejaba poca iniciativa a los estados individuales, podemos distinguir tres instituciones de poder:

9. El *Consejo Federal* (*Bundesrat*) o Cámara Alta de los representantes de los veinticinco estados federales. Legislaba (junto al káiser) y declaraba la guerra y la ley marcial. No obstante, lo presidía el káiser y los representantes de Prusia tenían derecho de veto colectivo. Su poder descansaba en los complejos acuerdos relativos a los ingresos compartidos procedentes de los impuestos directos.

10. El *Estado de Prusia*. Este gobierno «provincial» era en realidad mayor que el del *Reich* y gobernaba el corazón del régimen. Ejercía una influencia mayor que la reconocida por la constitución y definía el carácter de la administración del *Reich*. Más aún, el control civil sobre el ejército se realizaba a través del ministro prusiano de la guerra.

11. Los *gobiernos locales*. Las ciudades disfrutaban de una autonomía considerable para decidir sus constituciones, recaudar impuestos complementarios y ampliar las propiedades públicas (Kocka, 1986). Las variantes dependían de que los partidos locales estuvieran «integrados», «excluidos» o «marginados». En Baviera, por ejemplo, la iglesia católica y sus partidos clientes pertenecían a los «integrados». Incluso los socialdemócratas lo estaban en algunas ciudades.

Se trata, pues, de un Estado polimorfo, cuyas cristalizaciones se producían en un marco de instituciones plurales. La modernización se produjo por vías semirrepresentativas, en instituciones múltiples que sólo rendían cuentas ante el káiser y en un Estado menos cohesionado y unitario que su antecesor prusiano del siglo XVIII. La soberanía residía en las relaciones del rey con sus altos funcionarios. La constitución dividía los poderes, pero, al contrario que la americana, no los asignaba con claridad. La materialización de la política requería instituciones cuyos poderes constitucionales se hubieran establecido con la vaguedad suficiente para permitir al monarca la libertad de acción, como en la práctica totalidad de las constituciones monárquicas del siglo XIX. Esta situación favorecía la política de pasillos y la centralidad del monarca y el canciller. La capital estaba dominada por un faccionalismo segmental orientado desde arriba, cuyas intrigas, cábalas e intentos de acceder al monarca constituían las claves de los procesos políticos y subvertían la supuesta racionalidad de la burocracia militar y ministerial.

Las relaciones segmentales de poder en el centro fomentaban también la existencia de grupos corporativos de presión. Los actores de poder dependían menos que en otros países de los mercados o de las elecciones masivas. En la capital, proliferaban las organizaciones de carácter corporativo, que intrigaban cerca de los cortesanos, en los pasillos de los ministerios y las antecámaras del *Reichstag*. Diefendorf (1980) ha demostrado que las «corporaciones» caracterizaron pronto la relación entre los hombres de negocios y los estados alemanes de Renania. A lo largo del siglo XIX crecieron a todos los niveles, en forma de organizaciones y carteles de empresarios; grupos de pre-

sión, tales como la Liga Naval o la Sociedad de las Marcas del Este; u otros tipos de organización, como las numerosas sociedades corales. Alemania se organizó desde arriba, con un autoritarismo mayor que el de los países liberales. Las corporaciones capitalistas también funcionaban como grupos de presión en los Estados Unidos, pero allí el gobierno era más pequeño. En la década de 1920, Hilferding, un marxista alemán, acuñó el término «capitalismo organizado» para este periodo. Sin embargo, convendría que hubiera pluralizado la expresión para adaptarla al caso alemán. Wehler la calificó con mayor acierto de régimen «policrático» y de «autoritarismo no coordinado» (1985: 62). En realidad, se encontraba menos centralizado que los Estados liberales, como Francia o Gran Bretaña, que disponían de cuerpos soberanos con capacidad de decisión política. La política era el resultado de complejas intrigas segmentales, cuyos resultados pocas veces reflejaban las intenciones de partida.

Con todo, este faccionalismo polimorfo no se traducía exactamente en un caos. Los elementos con capacidad de decisión dentro del Estado —el monarca, el canciller y los ministros— aplicaban tácticas moderadamente coherentes de poder segmental para conservar la dirección de los asuntos. Las grandes iniciativas, como los aranceles o la reforma fiscal, los programas navales, la *Kulturkampf* o la legislación asistencial requerían un poder arbitrario, que no dudó en disolver el *Reichstag*, licenciar ministros y hostigar a los oponentes. Bismarck empleó con una notable habilidad la represión selectiva, los incentivos y la política de división para dirimir las luchas entre los ministros más ideológicos o menos beneficiados, contribuyendo con ello a entrelazar fluidamente la política nacional y de clase y las cuestiones interiores y exteriores, una actitud bastante apropiada para un *Reich* cuyos oponentes fluctuaban entre las alianzas de «excluidos» y «marginados», burgueses liberales, campesinos, obreros, católicos, regionalistas del sur y minorías étnicas, a quienes no siempre se podía reducir mediante la represión. Si la política parecía inestable, ello se debía a una realidad cambiante, en la que nadie abarcaba un control pleno de los acontecimientos. Bismarck no era tanto un maestro de la estrategia como un hombre dotado de capacidad para comprender el entramado de relaciones y las corrientes en curso. Él mismo se representó con la metáfora de un hombre que caminaba por un bosque sin perder la dirección, aunque no tuviera una idea exacta del camino.

Pero incluso sin Bismarck, la política encontraba su coherencia en las grandes metas. Las once instituciones podrían reducirse a cuatro

funciones difusas, superpuestas y compatibles, que en el capítulo 13 llamo «cristalizaciones de nivel superior», cada una de ellas relativa a las fuentes del poder social. Fue esa compatibilidad lo que unió, en un primer momento, a las facciones del régimen, aunque luego contribuyó a destruirlas.

1. El *capitalismo* constituyó la cristalización económica del Estado. Los que «contaban» eran siempre propietarios de la tierra, la industria o el comercio, es decir, aquellos que empleaban como mercancías todos los factores de la producción. La política de defensa de la propiedad privada era la única posible, de ahí que la modernización de la industria y la agricultura se realizara con el fin de garantizar el beneficio privado y los ingresos estatales.

2. El *militarismo* había creado también el Estado-nación alemán. La corte y el entorno del káiser se engalanaba de uniformes, medallas y espadas. La burocracia estaba rigurosamente uniformada y dividida en rangos. Los capitalistas eran oficiales en la reserva; sus hijos participaban en clubes de estudiantes, donde vestían uniformes, y se batían en duelo en las universidades. No se trataba de un Estado compuesto por reaccionarios patrioteros y agresivos; de hecho, los mandos del ejército eran hombres cultivados, a menudo de ideas liberales, como Caprivi, el general prusiano que fue canciller durante un breve periodo, pero las soluciones militaristas a los problemas externos e internos se habían aplicado antes en el Estado alemán que en la mayoría de los estados del sur o del oeste. Cuando Weber, Hintze y otros observadores posteriores escribían que el capitalismo alemán se estaba «feudalizando» no empleaban el término correcto; en realidad, el adjetivo «feudal» implicaría un modo de producción distinto, y Alemania era capitalista. Sería mejor decir que se estaba «militarizando», lo cual es perfectamente compatible con el capitalismo porque no supone un modo alternativo de producción. En definitiva, socializaba a sus súbditos mediante concepciones militaristas del interés, tanto en el terreno nacional como en el internacional, y sacralizaba un «orden» —más allá de la mera defensa de la propiedad privada— proclamado con orgullo por el régimen y repetidamente criticado por los extranjeros que visitaban Alemania.

3. La *monarquía semiautoritaria*, fundamentalmente dual en el terreno de la «representación» y centrada en la figura del rey. Los actores políticos se veían obligados a operar dentro de redes orientadas desde arriba, dependientes de la figura del káiser y engalanadas con

adornos monárquicos. Un monarca resolutivo habría podido ser un formidable actor de poder, pero el irascible Guillermo II (como observó el propio Weber) resultaba más bien errático, cuando no peligroso; había que contar con sus preferencias, aunque fuera para manipularlas, y ello pese a que la monarquía alemana era menos dinástica y se encontraba mejor institucionalizada que la rusa o la austriaca. Pero la constitución era también parlamentaria, al final y al cabo, había que consultar al *Reichstag* no soberano, de ahí las fantasías golpistas de los monárquicos. De esta dualidad procedía, precisamente, la ausencia de una localización neta de la soberanía dentro del Estado.

Aunque las tres cristalizaciones de nivel superior conllevan en sí mismas ideologías, el régimen desarrolló sucesivamente otros planteamientos ideológicos:

4a. El *luteranismo*. Los luteranos alemanes tendían a sacralizar el Estado [3], aunque el fracaso de la *Kulturkampf*, que obligó al régimen a buscar la reconciliación con los católicos, debilitó en parte esta corriente; sin embargo, el socialismo marxista se impuso entre los obreros luteranos. El luteranismo como ideología se vio desplazado a partir de 1880 por:

4b. El *estatismo nacionalista*. A medida que se ampliaba la ciudadanía y los partidos se tranformaban en organizaciones electorales de masas, el nacionalismo estatista arraigó en algunas clases y regiones que reclamaban del Estado una actitud agresiva contra los *Reichfeinde* interiores y las potencias rivales. En un principio, sostuvo el capitalismo, el militarismo y la monarquía, pero a partir de 1900 ejerció sobre ellos una presión «popular» tan independiente como desconcertante (véase el capítulo 21).

Así pues, el Estado alemán tuvo una cierta autonomía, no tanto como una sola elite coherente, sino como una serie de elites y partidos polimorfos que encarnaban cristalizaciones compatibles, aunque distintas entre sí, a lo que cabría añadir una quinta cristalización, relativa a la cuestión nacional, incoherente y volátil. La monarquía, res-

[3] También los nazis, el último partido representante del nacionalismo estatista, recibirían mayor apoyo de los luteranos que de los católicos.

paldada por el luteranismo y el nacionalismo estatista, impuso una centralización mayor de lo que permitía la constitución.

¿Podremos reducir ahora esas cristalizaciones a las líneas generales examinadas en el capítulo 3? ¿Se impuso alguna de ellas, en última instancia, a las restantes? ¿Se vio el *Kaiserreich* forzado a elegir? Los marxistas contestan afirmativamente; en última instancia los intereses de clase del capital habría impuesto los «límites». No obstante, todos los Estados europeos eran capitalistas, como demostraron en 1848, pero sólo el alemán continuó demostrándolo, tanto en 1914 como en posteriores ocasiones, interviniendo de modo intermitente en las disputas industriales, siempre al lado de los empresarios, para suprimir los movimientos democráticos y obreros. Y si es cierto que abocaba a una crisis, todos los Estados europeos antes de 1917 tenían los mismos límites.

Pero tales Estados no eran sólo capitalistas, ni tampoco era ésta la cristalización que concitaba mentes y emociones. El *Kaiserreich* no temió en exceso ni a los campesinos ni a los obreros. Para los contemporáneos, la propiedad era un fenómeno obvio y «natural» —que no necesitaba una vigilancia eterna—, al menos tanto como lo era para los marxistas la viabilidad de la alternativa socialista. Es cierto que el «orden» constituía en 1848 una prioridad absoluta, pero también lo es que a partir de ese momento no se plantearon más desórdenes graves desde la base social. Ni siquiera hubo que emplear a las tropas contra los obreros, como estaba ocurriendo en los Estados Unidos, y, cuando se hizo, ni el grado de violencia ni el número de muertos resulta comparable, sin duda, gracias al comportamiento ordenado y ritual del ejército alemán (véase el capítulo 18). Bismarck no promulgó las leyes antisocialistas ni elaboró su legislación asistencial por miedo al socialismo, sino por la propia lógica de su estrategia divisoria, emanada de la cristalización semirrepresentativa. Las leyes buscaban la división de los partidos burgueses; el programa de bienestar intentaba separar al liderazgo socialdemócrata de su base y a los trabajadores cualificados de los que carecían de cualificación (Taylor, 1961b; Gall, 1986: II, 93 a 103, 128 y 129).

El punto más débil de la teoría de Blackbourne y Elye está en afirmar que el miedo al socialismo de las masas provocó la alianza de la burguesía con el antiguo régimen. Como veremos en el capítulo 18, más bien se trató de lo contrario, la alianza provocó el socialismo marxista de las masas desde el momento mismo en que los sindicatos y las asociaciones políticas de carácter obrero no encontraron tantos aliados entre los liberales, como en Francia o Gran Bretaña. En reali-

dad, no se necesitaba la represión, porque existían formas de conciliación que daban sus frutos y que este Estado militarista, capitalista y semiautoritario consideraba naturales. Fue la autosuficiencia del Estado lo que movió al núcleo luterano de la clase obrera a abrazar el marxismo revolucionario, legitimando con ello una represión mayor de la probablemente necesaria.

Estas actitudes políticas surtieron efectos involuntarios para el capitalismo y, en ocasiones, para los «límites» que supuestamente era capaz de imponer. El Estado no era sólo capitalista; las cristalizaciones no eran idénticas, pero tampoco chocaban de frente, eran, sencillamente, distintas. No hubo que realizar elecciones «últimas», entre otras razones, porque lo permitió la opacidad de la soberanía. El régimen nunca se enfrentó a ellas de lleno, ni tampoco eligió. Sólo el luteranismo entró en decadencia, aunque enseguida fue sustituido por el nacionalismo estatista. El régimen aplicó entonces una estrategia integradora del capitalismo y el nacionalismo estatista, militarista y semiautoritario. El carácter polimorfo de las instituciones se debió, sin duda, a esta ausencia de elección, lo que no les impidió encarnar una forma de capitalismo más agresivo, autoritario, centralista y territorial. El *Kaiserreich* supo superar los supuestos «límites» capitalistas.

Para probarlo emplearé varios capítulos. En el 14, desarrollaré la idea en relación con el bienestar social y el desarrollo económico; en el 16, en relación con el nacionalismo supuestamente burgués; y en el 18, en relación con la clase obrera. En todos ellos espero demostrar con mi análisis la fuerza interior de esta deriva de carácter aditivo, capaz de reunir las cuatro cristalizaciones en un capitalismo nacional y autoritario, existoso y estable. En el capítulo 21, sin embargo, me ocuparé de su punto débil: la política exterior, que refleja el fracaso del régimen a la hora de elegir las distintas alternativas y el aumento de los enemigos exteriores que provocaron estas cristalizaciones aditivas. Fue entonces cuando eligió la guerra que iba a destruirle. Después (en un periodo que excede a este volumen) la guerra produjo el fascismo en Alemania y el bolchevismo en otras partes, cuyos regímenes sí infringieron o derrocaron los «límites» del modo capitalista de producción.

Una conclusión prusiana

He analizado el auge de Alemania como la incorporación autoritaria a una sociedad industrial, es decir, como un compromiso entre

las relaciones de clase «verticales» y las relaciones «horizontales» de poder segmental. El capital industrial y comercial y gran parte de la clase media se integraron en el régimen o permanecieron en sus fronteras; gracias a las estrategias divisorias, se neutralizó a los partidarios de la descentralización por razones religiosas o regionales; en cuanto a la clase obrera y las minorías étnicas, quedaron excluidas y aisladas o fueron reprimidas. La modernización del régimen en un marco de complejas luchas nacionales y de clase creó involuntariamente una nueva forma de capitalismo nacional y autoritario dentro de una sociedad moderna. El régimen fue siempre capitalista, militarista y semiautoritario, porque nunca realizó una elección «última» entre estas cristalizaciones de nivel superior. Sólo cambió su cristalización ideológica, cuyo luteranismo acabó por convertirse en un nacionalismo estatista. Los poderes autoritarios de naturaleza segmental fueron decisivos. El militarismo se desplegó en la represión interna de la clase obrera, las minorías étnicas y otros grupos, aunque en este último caso fue más selectivo, y en el enfrentamiento con las potencias rivales y los capitalistas extranjeros. El nacionalismo transformó el conservadurismo liberal del régimen en un sentimiento xenófobo de la comunidad, incorporando continuamente concepciones económicas del interés. El capitalismo fue más represivo, territorial y nacionalista aquí que en otros países. Es probable que no hubiera fracasado de no haber sido por sus propias tendencias militaristas.

Su auge no fue inevitable, ni tampoco estuvo exento de contestación; su triunfo no fue total. No tengo la intención de ofrecer una imagen simplista de la Alemania autoritaria o militarista, ni tampoco de una Gran Bretaña transnacional y liberal, porque las diferencias sólo fueron una cuestión de grado. Por el contrario, Alemania abandonó el conservadurismo liberal y transnacional poco a poco, siempre conforme al cambiante entramado de las fuentes del poder. Las ventajas prusianas no fueron más que un mero accidente hasta que la habilidad militar, política y diplomática, especialmente de Bismarck, les dio trascendencia. El desarrollo de mediados de siglo respondió, ciertamente, a una lógica autónoma, pero estuvo estructurado por las mismas fuerzas. Pero esa combinación de estatismo, nacionalismo y modernización no estaba en la mente de los protagonistas de los grandes compromisos políticos entre el antiguo régimen prusiano, las clases capitalistas y los descentralizadores religiosos y regionales, sin embargo, transformó sus respectivas identidades. El éxito de la combinación residió en hacer de Alemania un Estado-nación grande y

próspero. Más tarde tuvo que ampliarse para hacer frente a las luchas nacionales y de clase y a las potencias rivales (como veremos en el capítulo 21). Alemania había institucionalizado una vía alternativa al industrialismo avanzado, distinta a las del liberalismo o el reformismo, aunque sus instituciones fueran incoherentes. Nadie había descubierto aún su talón de Aquiles.

No obstante, resta aún una posbilidad metodológica de explicar el desarrollo alemán del siglo XIX, porque existía otro Estado germánico que, en muchos aspectos, encarnaba su antítesis. Narrar la historia de Alemania sin hacer alusión a la de Austria, sería como contar *Hamlet* sin mencionar la fatal indecisión de un príncipe, sin embargo, osado.

Bibliografía

Ashley, P. 1970: *Modern Tariff History: Germany - United States - France.* Nueva York: Howard Fertig; reedición, 1920, ed.

Austensen, S. 1980: «Austria and the struggle for supremacy in Germany: 1848-1864». *Journal of Modern History*, 52.

Barkin, K. D. 1983: «Social control and the *Volksschule* in *Vormärz* Prussia. *Central European History*, 16.

— 1987: «The second founding of the Reich, a perspective». *German Studies Review*, 10.

Beetham, D. 1985: *Max Weber and the Theory of Modern Politics.* Cambridge: Polity Press. [Ed. cast.: *Max Weber y la teoría política moderna.* Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1979.]

Berchardt, K. 1976: «Germany, 1700-1914». En *The Fontana Economic History of Europe.* Vol. 4: *The Emergence of Industrial Societies*, 1.ª parte, ed. C. M. Cipolla. Brighton: Harvester.

Berghahn, V. 1973: *Germany and the Approach of War in 1914.* Londres: St. Martin's Press.

Blackbourne, D. 1980: *Class, Religion and Local Politics in Wilhelmine Germany.* Wiesbaden: Steiner.

Blackbourne, D., y G. Eley, 1984: *The Peculiarities of German History.* Oxford: Oxford University Press.

Böhme, H. 1978: *Introduction to the Social and Economic History of Germany.* Oxford: Blackwell.

Born, K. E. 1976: «Structural changes in German social and economic development at the end of the nineteenth century». En *Imperial Germany*, ed. J. J. Sheehan. Nueva York: Franklin Watts.

Calleo, D. 1978: *The German Problem Reconsidered.* Cambridge: Cambridge University Press.
Craig, G. 1964: *The Battle of Königgrätz.* Filadelfia: Lippincott.
Dahrendorf, R. 1968: *Society and Democracy in Germany.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Diefendorf, J. 1980: *Businessmen and Politics in the Rhineland, 1789-1834.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Draper, H. 1977: *Karl Marx's Theory of Revolution: State and Bureaucracy.* Nueva York: Monthly Review Press.
Eley, G. 1980: *Reshaping the German Right.* New Haven, Conn.: Yale University Press.
— 1983: «State formation, nationalism and political culture in nineteenth-century Germany». En *Culture, Ideology and Politics,* ed. R. Samuel y G. Stedman Jones. Londres: Routledge & Kegan Paul.
— 1988: «In search of the bourgeois revolution: the particularities of German history». Ponencia presentada en el Centro de Estudios de Teoría Social e Historia Comparada, University of California, Los Ángeles.
Epstein, K. 1967: «The socio-economic history of the second German Empire». *Review of Politics,* 29.
Evans, R. (ed.), 1978: *Society and Politics in Wilhelmine Germany.* Londres: Croom Helm.
— 1987: *Rethinking German History.* Londres: Unwin Hyman.
Fremdling, R. 1983: «Germany». En *Railways and the Economic Development of Europe, 1830-1914,* ed. P. O'Brien. Londres: Macmillan.
Gall, L. 1986: *Bismarck: The White Revolutionary,* 2 vols. Londres: Allen & Unwin.
Geiss, J. 1976: *German Foreign Policy, 1871-1914.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Gerschenkron, A. 1962: *Economic Backwardness in Historical Perspective.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Hamerow, T. S. 1958: *Restoration, Revolution, Reaction: Economics and Politics in Germany, 1815-71.* Londres: Oxford University Press.
Henderson, W. 1959: *The Zollverein.* Chicago: Quadrangle Books.
— 1975: *The Rise of German Industrial Power, 1834-1914.* Londres: Temple & Smith.
Hobson, J. 1991: «The Tax-Seeking State: Protectionism, Taxation and State Structure in Germany, Russia, Britain and America, 1870-1914». Tesis doctoral, London School of Economics and Political Science.
Hohorst, G. von, *et al.* 1975: *Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs, 1870-1914.* Munich: Beck.
Hope, N. M. 1973: *The Alternative to German Unification: The Anti-Prussian Party, Frankfurt, Nassau and the Two Hessen, 1859-1867.* Wiesbaden: Steiner.
Howard, M. 1965: *The Theory and Practice of War.* Londres: Cassell.

Jessop, B. 1978: *The Capitalist State.* Oxford: Martin Robertson.
Kindleberger, C. 1978: *Economic Response: Comparative Studies in Trade. Finance and Growth.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Kitchen, M. 1978: *The Political Economy of Germaay, 1815-1914.* Londres: Croom Helm.
Kocka, J. 1981: «Capitalism and bureaucracy in German industrialization before 1914». *Economic History Review,* 2.ª ser., 34.
— 1986: «La bourgeoisie dans l'histoire moderne et contemporaire de l'Allemagne». *Mouvement Social,* 136.
Krasner, S. 1984: «Approaches to the state: alternative conceptions and historical dynamics». *Comparative Politics,* 16.
Lipset, S. M. 1980: *Political Man: The Social Bases of Politics.* Baltimore: Johns Hopkins University Press.
List, F. 1885: *The National System of Political Economy.* Londres: Longman Group.
McNeill, W. H. 1983: *The Pursuit of Power.* Oxford: Blackwell.
Mann, M. 1988: «The decline of Great Britain». En *States, War and Capitalism.* Oxford: Blackwell.
Marx, K., y F. Engels, 1968: *Selected Writings.* Londres: Lawrence & Wishart. [Ed. cast.: *Obras escogidas* (2 vols.). Madrid, Ayuso, 1975.]
Milward, A., y S. B. Saul, 1977: *The Development of the Economies of Continental Europe, 1850-1914.* Londres: Allen & Unwin. [Ed. cast.: *El desarrollo económico de la Europa Continental.* Madrid, Tecnos, 1979.]
Mommsen, W. J. 1976: «Domestic factors in German foreign policy before 1914». En *Imperial Germany,* ed. J. J. Sheehan. Nueva York: Franklin Watts.
— 1984: *Max Weber and German Politics.* Chicago: University of Chicago Press. [Ed. cast.: *Max Weber. Sociedad, política e historia.* Barcelona, Laia, 1981.]
Moore, B., Jr. 1973: *Social Origins of Dictatorship and Democracy.* Harmondsworth: Penguin Books. [Ed. cast.: *Orígenes sociales de la dictadura y la democracia.* Barcelona, Ed. 62, 1991.]
Perkins, J. 1984: «The agricultural revolution in Germany, 1850-1914». *Journal of European Economic History,* 10.
Pflanze, O. 1976: «Bismarck's *Realpolitik*». En *Imperial Germany,* ed. J. J. Sheehan. Londres: Franklin Watts.
Poulantzas, N. 1973: *Political Power and Social Classes.* Londres: New Left Books. [Ed. cast.: *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista.* Madrid, Siglo XXI, 1978.]
Pounds, N. 1959: «Economic growth in Germany». En *The State and Economic Growth,* ed. H. G. Aitken. Nueva York: Social Science Research Council.
Price, R. 1989: *The Revolutions of 1848.* Atlantic Higlands, N. J.: Humanities Press International.

Ross, R. J. 1984: «Enforcing the Kulturkampf in the Bismarckian state and the limits of coercion in imperial Germany». *Journal of Modern History,* 56.

Rothenberg, G. 1976: *The Army of Francis Joseph.* West Lafayette, Ind.: Purdue University Press.

Rueschemeyer, D., E. Stephens, y J. Stephens, 1992: *Capitalist Development and Democracy.* Chicago: University of Chicago Press.

Schumpeter, J. 1939: *Business Cycles,* vol. I. Nueva York: McGraw-Hill.

Senghaas, D. 1985: *The European Experience: A Historical Critique of Development Theory.* Leamington Spa: Berg.

Sheehan, J. L. 1978: *German Liberalism in the Nineteenth Century.* Chicago: University of Chicago Press.

— 1981: «What is German history?: Reflections on the role of the nation in German history and historiography». *Journal of Modern History,* 53.

Snyder, L. 1978: *Roots of German Nationalism.* Bloomington: Indiana University Press.

Stearns, P. 1974: *The Revolutions of 1848.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.

Taylor, A. J. P. 1961*a*: *The Course of German History.* Londres: Methuen.

— 1961*b*: *Bismarck: The Man and the Statesman.* Londres: Arrow Books.

Tilly, R. 1978: «Capital formation in Germany in the nineteenth century». En *Cambridge Economic History of Europe.* Vol. 7: *The Industrial Economies: Capital, Labour and Enterprise,* 1.ª parte, ed. P. Mathiason y M. Postan. Cambridge: Cambridge University Press.

Tipton, F. B. 1974: «National consensus in German economic history». *Central European History, 7.*

Trebilcock, C. 1981: *The Industrialization of the Great Powers, 1780-1914.* Londres: Longman Group.

Weber, M. 1978: *Economy and Society,* 2 vols. Berkeley: University of California Press.

Wehler, H.-U. 1976: «Bismarck's imperialism, 1862-1890». En *Imperial Germany,* ed. J. J. Sheehan, Nueva York: Franklin Watts.

— 1985: *The German Empire, 1871-1918.* Leamington Spa: Berg.

Capítulo 10
LA LUCHA POR ALEMANIA: II. AUSTRIA Y LA REPRESENTACIÓN CONFEDERAL

El problema de la denominación

Aunque la unidad política que pretendo analizar[1] en estas páginas tuvo una historia larga y gloriosa, resulta difícil asignarle un nombre preciso. La designación más adecuada sería una dinastía, no un territorio, ya que durante el largo periodo comprendido entre el siglo XIII y el XX los Habsburgo gobernaron por herencia el país que hoy llamamos Austria, con su capital en Viena. Utilizaré ese nombre en el presente capítulo porque tiene, al menos, el mérito de la brevedad, aunque, en realidad, hablaré de la gran potencia que llegó a ser gracias a su expansión feudal y dinástica. Desde 1438, los Habsburgo, elegidos sin solución de continuidad como emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, conservaron el liderazgo del mundo germánico. Varias alianzas matrimoniales y algunas muertes oportunas produjeron dos extraordinarias ampliaciones: en occidente, Borgoña, Flandes y España cayeron en manos de la dinastía; en el este

[1] Las fuentes generales de este capítulo son Kann (1964, 1974), Sugar y Lederer (1969), Macartney (1971), Bridge (1972), Gordon y Gordon (1974), Katzenstein (1976) y, en especial, Sked (1989).

sucedió lo mismo con las coronas de Bohemia, Hungría y Croacia. Las ganancias occidentales se perdieron, pero las orientales se conservaron desde 1526-1527 hasta el momento final.

En 1760 los Habsburgo mantenían estas posesiones (salvo Silesia, perdida en favor de Prusia), además de Bélgica, parte del norte de Italia y algunos territorios procedentes del desmembramiento de Polonia y de la decadencia otomana. Gran parte del imperio ya no era alemán, de modo que en 1806, Francisco I se proclamó emperador de Austria y abandonó su título germánico (del cual le había privado, por otra parte, Napoleón). Pero Hungría y Bohemia eran reinos con instituciones propias, entre ellas, las asambleas que recibían el nombre de Dietas. En 1867 Austria se vio obligada a conceder a Hungría una autonomía más amplia y a remodelarse una vez más. Su título abreviado aludía ahora a la monarquía dual de Austria-Hungría (el título completo ocuparía varias líneas). El *Reichshalf* húngaro comprendía Croacia, Eslavonia y Rumania; el *Reichshalf* austriaco, todo lo demás, en un arco que abarcaba desde la Bucovina en Ucrania, pasando por Galitzia (en el sur de Polonia) y Bohemia (en Checoslovaquia), hasta Austria y la costa del Adriático (aunque ya se habían perdido gran parte de los territorios italianos y Bélgica). En cuanto a esta parte, resulta más adecuada la fórmula constitucional que la territorial para «las tierras y reinos representados en el *Reichsrat*» (Hungría tenía su propia Dieta). En 1917 Carlos I proclamó finalmente la denominación de Austria para esta mitad, pero al año siguiente abdicaba y con él desaparecía su Estado.

La nomenclatura revela el carácter del Estado que nos ocupa, como en otra época la dificultades denominativas del gran duque de Borgoña revelaron el carácter del suyo (véase Volumen I: 618 y 619). No se trataba de un Estado como los de Francia y Gran Bretaña, ni tampoco como el que llegaría a ser Alemania, entre otras razones, porque no poseía una constitución única. Los Habsburgo eran coronados por separado y pronunciaban diferentes juramentos en las dos provincias principales. José II se negó a hacerlo en Hungría, pero su fracaso (véase capítulo 13) volvió más cautos a los sucesores. De este modo, en 1760, el Estado había cristalizado de cuatro formas:

1. Respecto a la cuestión «nacional» cristalizó en la forma *confederal* (tal como se ha definido en el cuadro 3.3). Los Habsburgo juraban defender ambas provincias y respetar sus costumbres, leyes, privilegios y religión tradicionales. Conforme al cuadro 3.1, sus poderes

estructurales para cumplir tales promesas eran también débiles y particularistas, siempre dependientes de las relaciones con los partidos de las clases dominantes y las iglesias de cada provincia.

2. En cuanto a la cuestión «representativa», cristalizó como una *dinastía monárquica*. Los Habsburgo fueron reyes absolutistas, libres de gobernar a su criterio, aunque dentro de las leyes que hemos apuntado en el párrafo anterior. Su poder despótico como *Hausmacht*, casa reinante, fue casi absoluto. El monarca, la corte, los ministros y el alto mando formaban una elite estatal bastante autónoma y aislada, que ejercía un poder despótico. Se trataba de una dinastía menos inserta en la sociedad civil que, por ejemplo, los Hohenzollern de Prusia, y, por eso mismo, con menor capacidad de movilizar poderes infraestructurales. Las provincias aceptaron a la dinastía porque su alternativa habría sido el gobierno de otra potencia menos benévola (Rusia, Prusia o los turcos otomanos) o de Estados más pequeños que sólo representaban a un grupo de notables «nacionales» (checos, magiares, serbios). Estamos ante el eterno problema del este europeo: un territorio inmovilizado entre grandes potencias, en el que conviven «naciones» incompatibles, con poderes distintos. Si los Habsburgo actuaron siempre como protectores, en épocas más modernas demostraron constituir la mejor solución para la inestabilidad regional.

3. Naturalmente, esto implicaba también una cristalización *militarista*, tanto para la defensa geopolítica como para la protección de las «naciones» pequeñas contra las grandes. El ejército se transformó en la clave infraestructural de los Habsburgo; no en vano lo calificaron de «guardia de corps de la dinastía» y «escuela de lealtad» los observadores del siglo XIX.

4. En términos económicos, el Estado gobernaba unos territorios relativamente atrasados, en transición de la cristalización *feudal* a la *capitalista*, puesto que los terratenientes y los comerciantes urbanos comenzaban a tratar como mercancías los recursos económicos. La práctica ausencia de conflicto político entre el feudalismo y el capitalismo se debió en este caso a que el dinasticismo de los Habsburgo se mantuvo al margen de los privilegios feudales en mayor medida que, por ejemplo, el absolutismo francés.

La ideología de los Habsburgo cristalizó débilmente, aunque se vio reforzada en algunas provincias por un catolicismo que ellos mismos perjudicaron con su política de secularización, en tanto que

mantenían con otras iglesias unas relaciones cautas y se mostraban incapaces de movilizar tendencias nacionalistas, porque su inveterado dinasticismo determinó siempre el carácter «reaccionario» de sus preferencias.

A lo largo del siglo XIX, los Habsburgo mantuvieron el militarismo y se abrieron sin dificultad a la economía capitalista. Sus problemas residían en las cuestiones nacional y representativa. Las presiones los obligaron a aceptar de mala gana un federalismo representativo que reconocía las libertades y los derechos «nacionales» de las provincias bajo la monarquía centralizada. Cuando el régimen cayó en 1918, se fragmentó en una serie de pequeños estados, que han vuelto a formarse con la desaparición del Imperio soviético.

Esto nos plantea varios interrogantes. ¿Desaparecieron los estados confederales en el enfrentamiento con el poder de la nación? ¿O perecieron los Habsburgo a causa de la incompatibilidad de su versión dinástico-monárquica del confederalismo con las reivindicaciones representativas de las clases y las naciones? ¿Fue contingente, incluso accidental, su desaparición? ¿Ofrecieron los Habsburgo una forma confederal viable para las sociedades industriales avanzadas?

Nunca ha resultado fácil contestar a estas preguntas con objetividad. Se oponen a ello la nostalgia de la elegancia y el esplendor de la antigua Viena y la convicción que siempre han abrigado los europeos del este de que habrían vivido mejor con los Habsburgo que con los fascistas o los comunistas. Por otra parte, no faltan prejuicios teleológicos que juzgan inevitable la caída de los Habsburgo a causa de su reaccionarismo; así, los historiadores destacan puntos de inflexión entre 1790, cuando José II revocó la mayor parte de las reformas ilustradas, y 1914, cuando Francisco José se precipitó en la Gran Guerra que iba a destruir la dinastía (véase Sked, 1981). Ante la Viena de Freud, de los pintores secesionistas, de Musil y de Kafka (aunque este último naciera en Praga, capital de una de las provincias), del vals y de los uniformes blancos, los autores históricos populares se empantanan en metáforas alusivas a su encanto para los extranjeros y su borrascosa vida interior, su irracionalidad y su decadencia.

Mi argumentación comparte algo de las dos posiciones. La fatalidad de los Habsburgo no estuvo en la lógica del desarrollo de la moderna sociedad industrial. De hecho, la cristalización capitalista del Estado resultó todo un éxito. La inferioridad de su militarismo frente a otras potencias no se debió a razones económicas, sino fiscales, y no tuvo por qué acabar necesariamente en la catástrofe de 1918. Tam-

bién se ha exagerado el poder desintegrador del nacionalismo regional, que fue más la creación que el creador de los problemas de los Habsburgo. Me acojo a un argumento pasado de moda para mantener que la razón de su caída estuvo en el dinasticismo militarista, incapaz de crear una ciudadanía adecuada para la sociedad moderna. Mas, para ello, habría debido ser liberal o semiautoritaria, confederal o federal, por el consenso o por la fuerza. En este periodo, Prusia y los Estados Unidos resolvieron problemas de clase y nación muy semejantes gracias a esas combinaciones. Los Habsburgo, sin embargo, idearon soluciones particularistas e inconsistentes que acabaron por destruirlos, primero con la guerra, después, con su inesperado desenlace. Cuando la guerra destruye a los dinastas militaristas no conviene achacarlo a la fatalidad, sino a su orgullo intrínseco y desmedido.

El capitalismo de los Habsburgo

El fracaso económico del siglo XIX pagó un alto precio político y militar. En la comunidad ideológica que formaba Europa, un fracaso de estas dimensiones respecto a las restantes potencias era demasiado visible y se pagaba en el campo de batalla, donde resultaban esenciales los recursos agrarios e industriales de una sociedad moderna. ¿Explica el fracaso económico la decadencia y caída de los Habsburgo? Así lo cree Alexander Gerschenkron, el gran historiador de la economía. El título de su obra, *An Economic Spurt That Failed* (1977), avanza la idea de que Austria, uno de los exponentes más débiles del desarrollo tardío, no supo «despegar». Aunque su explicación ha encontrado un amplio eco en otros historiadores, los estudios más recientes la desmienten.

En primer lugar, acepta la teoría de Gerschenkron, Rostow y Kondratieff, según la cual las economías en proceso de industrialización «despegan» (Rostow) o «se aceleran» (Gerschenkron) súbitamente en la fase ascendente de un «ciclo de onda larga» (Kondratieff). Por muy adecuada que resulte esta teoría para los casos británico, alemán o estadounidense —aunque los escépticos crecen de continuo (véase Tipton, 1974, sobre Alemania)— ni puede aplicarse al caso francés (como hace tiempo se ha reconocido) ni mucho menos al austriaco. Austria conoció una tasa de crecimiento constante a lo largo de toda la centuria, interrumpida por las recesiones de comien-

zos de la década de 1860 y 1873-1879 (Rudolph, 1972, 1975, 1976; Good, 1974, 1978, 1984; Gross, 1976; Ashworth, 1977; Huertas, 1977; Bairoch, 1982; Komlos, 1983, en especial su áspero apéndice C). En segundo lugar, el fracaso austriaco parece menor cuando se compara a este país con la Alemania prusiana, su principal enemigo. En efecto, el crecimiento austriaco se rezagó hacia 1850, pero ocurrió lo mismo en las restantes potencias. Las tasas de crecimiento alemán fueron prácticamente únicas. En otras comparaciones, sin embargo, Austria sale mejor parada. Como indica el cuadro 8.1, mantuvo el quinto lugar en el producto nacional bruto. Good (1984: 240) sostiene que de 1870 a 1914 la tasa anual del 1,3 por 100 sólo resulta comparable con la de Alemania, Suecia y Dinamarca. La economía de los Habsburgo fue un éxito capitalista.

No obstante, pueden achacársele dos fracasos de tipo económico. El primero es de índole fiscal. La recesión de origen fiscal a comienzos de la década de 1860 tuvo consecuencias geopolíticas que se materializaron en la derrota de 1866-1867 a manos de Prusia, y supuso, además, un estancamiento del valor real añadido per cápita en la producción industrial, a causa de los compromisos militares. Prusia se mantuvo en paz de 1815 a 1864, pero Austria se vio envuelta en los conflictos italianos y en otros menores —con las consiguientes necesidades de impuestos y recursos humanos—, al tiempo que los bonos del Estado agotaban los recursos destinados al desarrollo económico. La crisis empeoró con la restauración de la paridad plata de la moneda anterior a 1848. Pero la emisión de deuda austriaca excluyó la inversión privada, mientras que ésta tuvo en Alemania un desarrollo ascendente uniforme (Huertas, 1977: 36 a 48).

Sin embargo, la acusación de fracaso fiscal resulta incompleta. Los gastos militares austriacos no superaron a los prusianos o a los de otras potencias (véase capítulo 11), ni pusieron necesariamente en peligro la economía; por el contrario, la ineficiencia del sistema fiscal estuvo en no conseguir suficientes ingresos para el ejército. La antigua contribución militar, negociada con las Dietas provinciales, era demasiado engorrosa para satisfacer la escalada de los costes bélicos anteriores a 1815 (véase capítulo 11). La necesidad de tomar dinero prestado, en mayor medida que otras potencias, condujo a la bancarrota de 1811. El descenso de las presiones fiscales en otras potencias a partir de 1815 no se produjo en Austria, de ahí que volviera a hablarse de bancarrota en las décadas de 1840 y 1850 y, con más intensidad en 1859.

Las finanzas austriacas se parecían a las del antiguo régimen francés, no tanto en el nivel absoluto de recaudación como en las interminables negociaciones con los grupos particularistas de poder, que provocaban un visible descontento con la carga fiscal, continuas crisis fiscales y políticas y, en definitiva, la necesidad de recurrir al préstamo. Por una parte, el deseo de preservar los privilegios, las Dietas y otras asambleas dificultaba la recaudación de nuevos impuestos; por otra, la monarquía carecía de infraestructuras locales capaces de recaudarlos sin consenso. Aunque las Dietas aceptaron el aumento del número de soldados, no pudieron satisfacerse las necesidades impuestas por las nuevas presiones nacionales y geopolíticas. El Estado recurrió de nuevo al préstamo y agotó los recursos para la inversión (Huertas). Las tensiones fiscales representaban un problema más representativo que económico, como veremos más adelante.

La segunda acusación de fracaso económico se refiere a la desigualdad entre las provincias. En 1914 Checoslovaquia, con una potencia industrial superior en caballos a la francesa, contribuía con el 56 por 100 de la producción industrial austro-húngara. Los ahorros depositados dentro de Austria decuplicaban los de Galitzia, la renta per cápita era tres veces mayor y la alfabetización ascendía al doble (Good, 1984: 150, 156). Kennedy (1988: 216), fiel a su teoría economicista sobre la rivalidad de las grandes potencias (véase capítulo 8), afirma que las desigualdades regionales constituían el «defecto fundamental» del poder austriaco. Es probable que produjeran tres consecuencias negativas: la explotación de la periferia por los núcleos checo y austriaco pudo retrasar su desarrollo; el atraso de la periferia pudo refrenar a los núcleos; o las desigualdades pudieron reducir la integración económica del conjunto. Sólo la tercera posibilidad tuvo auténtica trascendencia.

Los nacionalistas prefirieron las dos primeras acusaciones (según donde vivieran), aunque probablemente se equivocaron. A partir de 1850 el desarrollo austriaco siguió el modelo alemán y se rezagó durante veinte o treinta años (Pollard, 1981: 222 a 229). Los territorios checos y el interior de Austria fueron los primeros intermediarios, porque importaban maquinaria y productos semifacturados de la Europa avanzada y vendían los productos acabados en el sureste. Luego, se hicieron industrialmente autónomos y suministraron trenes, máquinas y alta tecnología al sureste. Los carteles bancarios y los programas de crédito estatal al estilo alemán canalizaron la inversión en el sureste, especialmente en el ferrocarril. La industrialización se

benefició de las estrategias del desarrollo tardío (de la nacionalización del ferrocarril, los aranceles y los bancos de crédito), es decir, los Habsburgo «reaccionarios» supieron apreciar las ventajas del capitalismo industrial. Tomemos el ejemplo de Hungría: al principio, intercambiaba productos agrícolas por manufacturas austriacas y aprovechaba su eficiente agricultura para introducirse en los mercados internacionales. Luego, a partir de 1900, creó industrias ligeras, alimentadas por electricidad, que no necesitaban la cercanía a fuentes de energía primarias, y empleó los beneficios agrícolas y la experiencia de los Habsburgo en las finanzas y las infraestructuras de comunicación para exportar (Komlos, 1983). Los valores de la serie cronológica de Good para 1867-1913 (1981, 1984: 245 a 250) muestran que las regiones se beneficiaban mutuamente de modo general; de hecho, disminuyeron las desigualdades como en todos los países del periodo. Hacia 1900 se asemejaban a las americanas y eran inferiores a las italianas o las suecas. ¿Podríamos decir que los Estados Unidos padecieron durante este periodo un fracaso capitalista?

Sin embargo, el éxito capitalista produjo un problema imprevisto, porque hizo innecesaria la integración económica de los distintos territorios. Más aún, la economía adoptó un carácter *transnacional* al integrarse directamente en el resto de Europa. Las industrias checas y húngaras se encontraban tan vinculadas al extranjero como a las restantes regiones habsbúrguicas. La expansión económica exacerbó, por otro lado, los conflictos lingüísticos de la monarquía cuando los hablantes de idiomas distintos al alemán accedieron a los órganos públicos de la sociedad civil (lo veremos más adelante). Austria desarrolló dos economías capitalistas, la transnacional y la de los Habsburgo (la palabra nacional no resulta adecuada aquí); la primera retiró su lealtad a la dinastía al abrazar la teoría atomizada del *laissez-faire* propia de la escuela austriaca de economistas (Menger, von Mieses, Hayek), que atacaba el sustantivismo y el nacionalismo de los sucesores alemanes de List (Roscher, Knies, Schmoller) (Bostaph, 1978). Mientras que sus sociólogos se fijaban en las semejanzas del régimen —Gumplowicz, en Prusia, y Ratzenhofer, en Austria, subrayaban los fundamentos militares del poder—, sus economistas destacaban las diferencias de las respectivas economías. Los Habsburgo fomentaron el éxito capitalista en sus territorios, pero, al contrario que los Hohenzollern, no buscaron la integración económica. Pero quizás esto tuvo poca relevancia política porque el regionalismo ha-

bría encontrado apoyos en otros lugares de haber representado una amenaza para el centralismo de los Habsburgo.

Nacionalismo y representación, 1815-1867

Con todo, las crisis políticas de los Habsburgo se hicieron «nacionales». Húngaros, eslovacos y eslovenos (a los que pocas veces se califica en función de la clase, el sector económico o la religión) aparecen en las páginas de todas las obras históricas como actores que lucharon entre sí y contra el Estado de los Habsburgo hasta destruirlo. Las «nacionalidades» fueron invariablemente comunidades lingüísticas, y algunas veces, religiosas, pero también tenían raíces en las instituciones políticas regionales. Puede decirse que no existían al principio del periodo que tratamos, ni siquiera como «comunidades imaginadas», sin embargo, hacia el final se habían transformado en comunidades auténticas con considerables poderes colectivos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las cuatro fuentes del poder social confirió importancia social tanto a las comunidades lingüísticas (o religiosas) como a las instituciones políticas regionales, y las unieron en «naciones».

Durante el periodo que nos ocupa, el reino habló múltiples lenguas. De una población de veinticuatro millones en 1780, el 24 por 100 hablaba alemán; el 14 por 100, magiar; el 11 por 100, checo; el 8 por 100, flamenco o valón; el 7 por 100, italiano; el 7 por 100, ruteno ucraniano; el 7 por 100, rumano; el 7 por 100, serbio o croata; el 5 por 100, eslovaco; el 4 por 100, polaco; y un 6 por 100, otras lenguas menores. Cuando perdió a los flamencos, los franceses y a una parte de los italianos, adquirió varios idiomas eslavos. De los cincuenta y un millones de 1910, el 23 por 100 hablaba alemán; el 20 por 100, magiar; el 13 por 100, checo; el 10 por 100, polaco; el 9 por 100, serbio o croata; el 8 por 100, ruteno; el 6 por 100, rumano; el 4 por 100, eslovaco; y un 7 por 100, otras lenguas menores. Ningún otro Estado presentaba tal diversidad. Pero estas «lenguas» no eran al principio unitarias, porque la mayor parte de la población era iletrada y hablaba dialectos mutuamente ininteligibles. La mayoría se encontraban en proceso de gramaticalización y fijación por escrito. Con todo, y como vimos en el capítulo 7, las clases dominantes de algunas provincias compartían en 1815 una lengua escrita y hablada; al mismo

tiempo que un grupo de intelectuales comenzaba a reivindicar derechos políticos colectivos para su comunidad «étnico-lingüística».

Sin embargo, estos disidentes carecían aún de importancia. Antes de 1848, escaseaban los «nacionalistas». En su mayoría, formaban pequeños grupos de intelectuales y profesionales que lamentaban la «indiferencia nacional» del resto de la población. La disidencia «nacional» adquirió cuerpo sólo cuando se vio reforzada por la cohesión de clase del antiguo régimen de una determinada provincia —por ejemplo, los nobles magiares— o cuando el gobierno de los Habsburgo era reciente y aún no estaba plenamente institucionalizado en la sociedad civil (el caso de Italia). En Bohemia, por ejemplo, apenas existió una identidad étnica checa o alemana. La lengua alemana pertenecía al espacio de lo público y de las oportunidades económicas —la administración, la ley, la educación y el comercio—; el checo, al ámbito de la vida familiar. Las categorías del censo realizado por los Habsburgo no conferían en este periodo una identidad étnica total. Muchos individuos de apellido checo se clasificaban a sí mismos como hablantes de alemán por ser ésta la lengua de las oportunidades (Cohen, 1981: capítulo 1). A partir de 1867, por las mismas razones pragmáticas, muchos habitantes del *Reichshalf* húngaro se clasificaron como hablantes de magiar, así se desprende del aumento de estos hablantes en las cifras del censo.

Pero no conviene dar por sentada la existencia de estos actores «nacionales» sin explicar cómo aparecieron. Varios procesos de modernización provocaron su nacimiento en toda Europa: la expansión capitalista, la modernización del Estado, las luchas por la representación, la expansión de las infraestructuras comunicativas y la movilización de las masas para la guerra. En Austria, lo decisivo fue la lucha por la ciudadanía, cuya base era *territorial* y de clase.

Gran parte de la política de finales del siglo XVIII y principios del XIX afectaba al sistema impositivo y la tenencia de cargos, es decir, los costes y los beneficios del gobierno. En Austria esta política fue confederal y territorial. Las provincias tenían o habían tenido Dietas o asambleas con tradición histórica. La Dieta húngara defendió con vigor sus derechos; las restantes, que se mantuvieron a medias, solían resucitar durante las crisis fiscales. Estas instituciones «parlamentarias» —cuyo sufragio limitado y, por lo general, hereditario, dominaba la nobleza— produjeron una peculiaridad austriaca más comparable al mundo anglosajón que a otras monarquías absolutistas como Prusia o la Francia del siglo XVIII. Los Habsburgo también tuvieron

que oír lemas como «No a los impuestos sin representación» en boca de los nobles reaccionarios que dominaban las provincias atrasadas o de las alianzas de la nobleza y la alta burguesía de las más avanzadas. Como en otras partes, representación quería decir aquí sufragio limitado para los parlamentos y tenencia de cargos (véase capítulo 13). Hasta 1848 los «liberales» no exigieron más que el derecho de la Dieta a vetar los impuestos y la participación en el reparto de cargos. Pero en un Estado confederal esto resultaba amenazador porque el descontento regional, al contrario que el malestar de clase, encontraba su cauce expresivo en los notables locales que mantenían fuerzas paramilitares e incluso regimientos regulares. Lo que afrontaban los Habsburgo era, pues, un conjunto de guerras civiles, y para reprimirlas no tenían más remedio que recaudar impuestos y reclutar hombres en las provincias no rebeldes. Pero éstas eran sospechosas (pronto podrían encontrarse en la misma situación) y lentas en las recaudaciones; de modo que el régimen tenía que elegir entre tomar préstamos, reprimir con un ejército inadecuado o conceder derechos particularistas a las provincias.

El *régimen estudió otras alternativas* durante largo tiempo. Su fracaso no dependió de la falta de conciencia o de voluntad, al contrario que el fracaso definitivo del régimen alemán. Una de las soluciones podía llegar de la reducción del militarismo geopolítico y de economizar hasta que se alcanzara un acuerdo constitucional, como proponían los ministros de finanzas, en especial Kolowrat, que fue también un primer ministro virtual para las cuestiones internas durante gran parte del periodo comprendido entre 1815 y 1848. Kolowrat era sensible, pero el consejo implicaba que los Habsburgo no habrían de adoptar aún la actitud de otras grandes potencias. Y podía tener consecuencias internas. Estallaron rebeliones étnico-lingüísticas en las fronteras, respaldadas por potencias vecinas. A finales del siglo XVIII, los rebeldes de Flandes habían recibido la ayuda de los revolucionarios franceses, y los húngaros establecieron acuerdos con Prusia. Los italianos, por su parte, obtuvieron el apoyo de Francia y el Piamonte durante el siglo XIX, y los eslavos del sur, la de Rusia a comienzos del siglo XX. Las cristalizaciones nacional y militar eran geopolíticas e internas. *Un perfil bajo en el terreno geopolítico habría estimulado* a los disidentes internos y a las potencias rivales, según el parecer de Metternich, que dominó la política exterior a partir de 1815. Los monarcas comprendían la necesidad de economizar en gastos militares, pero también *deseaban mantener una posición* diplomá-

tica fuerte. Su incapacidad para encontrar soluciones a esta contradicción, inserta en diferentes departamentos del Estado, resultó a la postre muy perjudicial.

Tres posibles estrategias constitucionales habrían podido combinar las cuestiones representativa y nacional:

1. La *centralización dinástica*. El absolutismo dinástico habría podido consolidarse gracias a los poderes infraestructurales que le brindaba la modernización. La elite estatal podría haber impuesto la centralización a través del ejército y de la administración civil. Pero ambos estaban dirigidos por austro-alemanes. Esto habría hecho del alemán la lengua oficial del Estado. Esta «inserción» del gobierno en la cultura austro-alemana minó el confederalismo y la neutralidad de la dinastía y exacerbó el descontento contra el fisco y la tenencia de cargos entre las comunidades lingüísticas que había creado el crecimiento económico. La sociedad civil y el Estado se encontraron frente a frente.
2. Una *democracia de partidos confederal*. Formada mediante un acuerdo integrador con las Dietas provinciales, habría podido universalizar el voto y los derechos relativos al fisco y a los cargos, concediendo, al mismo tiempo, una considerable autonomía provincial.
3. Una *federación semiautoritaria*. Un compromiso entre las soluciones 1 y 2, que hubiera aceptado una constitución semidemocrática como la alemana, aunque con un mayor federalismo de hecho, es decir, el americano, pero con un centro más autoritario.

Aunque el régimen no estaba unido al respecto, Metternich y los monarcas se inclinaron hacia la primera solución hasta 1848 extendiendo la centralización dinástica sin pretender una constitución acordada. El propio Metternich expresaba sin ambages su desconfianza hacia el federalismo: «Sólo centralizando las distintas ramas de la autoridad será posible la unidad y la fuerza. El poder que se distribuye, ya no es poder» (Sked, 1981: 188). La dinastía ganó tiempo con el acuerdo de 1815, que disminuyó la presión geopolítica y el descontento interno. Con algunas economías, el acuerdo funcionó también fuera de Hungría, donde se hicieron concesiones a la Dieta. Pero la estrategia usurpaba la concepción esencialmente confederal del Estado, y el año 1848 trajo una resistencia masiva.

La revolución de 1848 constituyó un movimiento paneuropeo de reivindicación de la ciudadanía civil y política encabezado por todas

aquellas clases que se encontraban excluidas, pero coincidió con el descontento que las malas cosechas, la subida de precios, la caída de la producción industrial y el desempleo habían extendido entre los campesinos y los trabajadores. En Francia y en Gran Bretaña, con el cartismo, esta coincidencia reforzó su carácter de lucha de clases. Pero en los regímenes más confederales se fusionó con las cuestiones «nacionales», como hemos podido comprobar en el caso alemán. Cuando la revolución se extendió a la confederal Austria, adquirió una organización más territorial, provincial y «nacional», que produjo los enfrentamientos más graves del año, en los que murieron unas 100.000 personas[2].

Las provincias italianas (apoyadas por otros Estados italianos) y Hungría exigieron sus propios parlamentos y formaron ejércitos rebeldes a partir de los imperiales y de las milicias de las regiones. Pero en Viena y en Praga estallaron también los habituales conflictos de clase de 1848, en los que la pequeña burguesía y los radicales artesanos y obreros exigían la democracia de partidos y la reforma social, al mismo tiempo que la alta burguesía dudaba antes de engrosar el «partido de orden». Praga se dividió en grupos checos y alemanes porque allí el radicalismo sumaba a la lucha de clases el descontento por la cuestión de la lengua. En Viena, donde el radicalismo era completamente alemán, la división se produjo (como entre sus iguales alemanes) entre las dos democracias alternativas: la *Grossdeutsch*, que miraba al Parlamento de Fráncfort y quería la ciudadanía para todos los alemanes; y la leal a Austria y a los Habsburgo, que reivindicaba una monarquía constitucional en Viena. En todo caso, la nacionalidad dominante era la alemana, de modo que ninguna de esas alternativas veía con agrado la autonomía provincial, de ahí su escaso atractivo para otras provincias.

Así pues, la revolución se dividió por razones de clase y de «nacionalismo» provincial. Los notables descontentos por su exclusión de los cargos y de los tribunales de justicia, que dirigían la mayor parte de los movimientos de las provincias, adoptaron los lemas nacionalistas, en especial si aludían a la cuestión de la lengua, vital en el caso de los hablantes alfabetizados de otros idiomas para acceder a la abogacía y los cargos públicos, en un intento de evitar las concesio-

[2] Las principales fuentes para las revoluciones en los territorios austriacos han sido Rath (1957), Pech (1969), Deak (1979) y Sked (1979, 1989: 41 a 88).

nes económicas al pueblo llano. Exigieron que las escuelas públicas enseñaran las lenguas locales y cualesquiera otra «lenguas imperiales» que se acordaran. De este modo, el nacionalismo cultural de una exigua intelectualidad se transformó en una ideología universalizante, exaltadora de la comunidad entre las clases de las provincias.

En los debates de los insurgentes habría podido surgir un compromiso entre las clases y las naciones para establecer unos parlamentos federales de sufragio limitado, pero las guerras civiles no respetan los debates. El régimen se enfrentaba a cuatro enemigos —italianos, húngaros y radicales de Praga y de Viena— y luchaba por obtener la colaboración militar y elaborar programas compatibles. Pero la mayor parte del ejército permaneció leal a la dinastía. El cuerpo de oficiales controlaba los regimientos más combativos, entre ellos la mitad de los regimientos italianos estacionados en ese país. Hábilmente mandadas por Radetzky, las tropas imperiales derrotaron a los rebeldes italianos (cuyos notables urbanos cometieron la imprudencia de excluir a los campesinos). Los rebeldes húngaros resistieron más, dominaron el territorio húngaro y llegaron hasta Viena, que se encontraba cerca de la frontera, pero los notables reaccionarios que los dirigían encontraban poco predicamento entre los radicales de Viena y de Praga.

Mientras, los acontecimientos vieneses evolucionaban como en París, Berlín o Fráncfort. Los notables burgueses, la pequeña burguesía y los obreros luchaban en las calles entre sí y contra el régimen formando milicias y comités centrales. El régimen, aunque desconcertado, intentó dividirlos con la concesión de un Parlamento (excluyendo a húngaros e italianos). Los votos de los campesinos con propiedades (compradas durante la abolición de las cargas feudales) y los eslavos leales podrían derrotar a los radicales alemanes. Pero entonces la monarquía hizo un descubrimiento terrible: la mitad de sus guarniciones vienesas eran bandas de músicos. Después de una caótica actuación en las calles, las tropas se retiraron a las afueras de la ciudad. El régimen contemporizó hasta que las tropas húngaras que avanzaban sobre la capital fueron rechazadas por las fuerzas imperiales y croatas (el odio croata se dirigía contra los magiares, sus opresores regionales). El régimen cometió el error de reclamar el apoyo del ejército ruso para someter a Hungría. Viena fue tomada, y los radicales, ferozmente reprimidos. La revolución se había acabado, destruida por la incapacidad para coaligarse de los insurrectos nacionales o de clase y por la lealtad del ejército.

Como en Prusia, la dinastía victoriosa prometió reformas, simbolizadas por la abdicación del emperador Fernando en favor de su sobrino Francisco José, que contaba a la sazón dieciocho años. El debate sobre las dos constituciones rivales continuó. La «constitución de Kremsier», de índole liberal, proponía una semidemocracia confederal, que dejaba la guerra y los asuntos exteriores en manos del monarca, aunque limitaba sus funciones en materia de política interna. Los ministros debían rendir cuentas ante el Parlamento; el monarca podía retrasar la legislación, pero no vetarla. La constitución garantizaba la igualdad de las lenguas en la enseñanza, la administración y la vida pública, aunque dentro de un solo Imperio: «Todos los pueblos del Imperio tienen los mismos derechos. Todos disfrutan del derecho inviolable a defender y cultivar su nacionalidad, en general, y su lengua, en particular». La constitución de Kremsier se aplicaría a todas las provincias, excepto a Hungría e Italia, que redactarían sus propias constituciones.

La contrapropuesta más conservadora, la «constitución de Stadion», concedía parlamentos con veto monárquico. Establecía el gobierno según una jerarquía federal: bajo el parlamento bicameral y los ministros, unas asambleas y unas administraciones provinciales y locales. Contaba con Hungría y preveía la entrada de las provincias italianas para más adelante. Ofrecía, en realidad, una versión más genuinamente federal de la incorporación semiautoritaria alemana. Varios ministros la apoyaron. Con la balanza de las fuerzas inclinada a favor de los conservadores, pero con vagas expectativas de reforma, la constitución de Stadion parecía bastante viable.

Sin embargo, el joven Francisco José se opuso a las concesiones y favoreció la centralización dinástica. Una dinastía poderosa siempre puede hacerse con una facción ministerial, especialmente después de una victoria militar. Nombró gobernadores provinciales a sus generales y situó a los austro-alemanes en la administración central y provincial. Sólo rendían cuentas ante un «consejo real» de ministros y asesores nombrado por el emperador, es decir, ante un cuerpo no ejecutivo, cuya composición y estatus constitucional eran inseguros.

Pero las derrotas bélicas de 1859 y 1866 trajeron nuevas crisis fiscales y nuevas presiones en favor de la reforma de los notables provinciales y los liberales alemanes. La monarquía concedió un *Rechtstaat* (como en Alemania) que implicaba derechos civiles individuales, pero mantuvo las restricciones de los derechos colectivos. Las asociaciones tenían que registrarse en los organismos policiales y solicitar

permisos de manifestación y reunión. Como en Alemania (hasta 1908), los policías asistían normalmente a los mítines de protesta, dispuestos a clausurarlos a la menor muestra de «subversión». En 1860 Francisco José estableció por decreto un Parlamento, asambleas y consejos municipales, y resucitó las Dietas, todo ello con soberanía y sufragio limitados. Al año siguiente, otro decreto reducía el poder de las Dietas. En cuanto a las constituciones, las cambió siempre que no funcionaban a su satisfacción, de modo que el Imperio careció siempre de una constitución política inequívoca.

En realidad, Francisco José practicó durante su largo reinado (1848-1916) la política del «divide y vencerás» propia de los reyes dinásticos. Concedía hasta cien audiencias a la semana, pero las terminaba cuando le apetecía. Solicitaba y leía con diligencia durante su jornada de diez horas cientos de informes. Utilizaba (y permitía utilizar a sus ministros y cortesanos) privilegios particularistas como la *Protektion*, para interferir en la burocracia. Fomentó el secreto en su administración (prohibía, por ejemplo, la redacción de memorias). Intervino repetidamente en la administración de la ciudad de Viena, supuestamente autónoma, y destituyó radicalmente a varios ministros discutidores (Johnston, 1972: 30 a 44, 63; Deak, 1990: 60). Francisco José no institucionalizó la intriga de las facciones como hicieron los Hohenzollern, porque la ejemplificaba en su persona. Desconfiaba de las constituciones, pero no de las instituciones que le permitían ser un auténtico rey dinástico. No podría enumerar aquí las instituciones de los Habsburgo, como, sin embargo, hice con las de los Hohenzollern, porque en este Estado polimorfo las cristalizaciones estaban menos institucionalizadas que en Alemania. El Estado fue, pues, dinástico, militarista y capitalista; en cuanto a su cristalización multinacional, se mantuvo fluida, pero todas ellas se agrupaban y dirimían sus conflictos en torno a la persona de Francisco José, en los ministerios, los Parlamentos y las Dietas.

Una mirada retrospectiva consideraría sin duda erróneo este grado de discreción dinástica; el propio Francisco José intentó cambiar las cosas cincuenta años más tarde. En efecto, el error fue suyo, pero la centralización dinástica también dependió de sus dos infraestructuras: el ejército y la administración. Ambos tenían poderes y limitaciones que analizaré en términos generales en los capítulos 11 y 12. Sorprendentemente, mantuvieron un Imperio bien administrado, pero no pudieron tomar dos iniciativas clave: la reforma de las finanzas estatales para recaudar mayores impuestos y llevar a cabo la mo-

dernización militar que imponía la rivalidad con otras potencias, y la industrialización de la guerra. Tampoco lograron concitar lealtades, sino a cambio de concesiones particularistas, como las concedidas a los magiares, los polacos de Galitzia o los judíos (cuya carencia de nacionalidad política garantizaba la lealtad). Estos grupos se dividieron la tarea de reprimir a otras «naciones».

Para que funcionara la centralización dinástica, Francisco José se vio obligado a ganar tiempo manteniendo un bajo perfil geopolítico. Las economías militares podrían haber reducido las quejas de las Dietas y los nobles de las provincias, mientras el emperador institucionalizaba el autoritarismo; sin embargo, no economizó (Katzenstein, 1976: 87 y 88). Durante la guerra de Crimea, Austria adoptó una actitud de neutralidad armada, por si surgía la oportunidad de obtener ganancias en los Balcanes. El régimen vendió gran parte de los ferrocarriles estatales para pagar la movilización, lo que redujo los ingresos durante el periodo siguiente. «La venta de la plata de la familia» no es precisamente una estrategia económica, como ha afirmado cáusticamente Harold Macmillan ante un ejemplo más reciente (el thatcherismo). Cuando aumentaron las tensiones con el Piamonte, Austria adoptó una actitud resueltamente belicosa. La guerra comenzó en 1859; al principio fue bien, pero, como cabía esperar, Francia intervino y derrotó en Solferino a los austriacos, sellando así la pérdida de la mayoría de las provincias italianas. La guerra condujo al Estado a la bancarrota. Hubo que conceder reformas menores a cambio de una subida de los impuestos. Ahora ya no quedaba otro remedio que economizar. Pero era el momento de Bismarck, y Austria no supo reconciliarse con él. Prusia y el Piamonte invadieron Austria en 1866; la consiguiente derrota produjo el colapso económico y obligó a realizar grandes concesiones a la nobleza húngara. Todo esto puso fin a la centralización dinástica, derrotada por la representación provincial con la ayuda de las grandes potencias y la excesiva ambición militar.

En el «compromiso» de 1867, la nobleza húngara aceptó entregar el 30 por 100 del presupuesto conjunto (principalmente para el ejército común mandado por el emperador) a cambio del control de la Dieta y la administración civil de su *Reichshalf*, el derecho a ser consultada en materia de política exterior y a formar el *Honved*, su propio ejército en la reserva. Los húngaros tenían las manos libres para reprimir a sus minorías. El compromiso afectó a tres instituciones, las administraciones de los dos *Reichshalf* y el monarca. Cuando las administraciones no se ponían de acuerdo en cuestiones de responsabi-

lidad compartida, Francisco José decidía por ellas. Sin embargo, nada afectó al control exhaustivo de la política exterior y el ejército por parte del emperador. Por eso la he separado en este análisis de la política interior.

La política interior en la monarquía dual, 1867-1914

La posición de Francisco José en materia de política interior cambió sustancialmente. Aunque la dinastía gobernaba los dos *Reichshälfe*, la carencia de infraestructuras centralizadoras adecuadas obligaba al emperador a renegociar cada diez años la contribución húngara al presupuesto conjunto. Pero aún le quedaba la posibilidad de aplicar la política segmental de «divide y vencerás» enfrentando a las provincias y las nacionalidades mediante un sistema selectivo de castigos y recompensas. Como afirmaba uno de los participantes:

> En este vasto conglomerado que llamamos monarquía austro-húngara ... los factores de la vida social y política: países, provincias, naciones, confesiones, clases sociales y grupos de interés venden en pública subasta su lealtad a la corte [Mocsary, en Jaszi, 1961: 135].

Pero ahora la política del «divide y vencerás» tenía que incluir a las clases y las naciones. Como en otros regímenes semiautoritarios del siglo XIX, se hicieron más concesiones a los parlamentos local-regionales que a los centrales, porque aquéllos eran soberanos en las cuestiones locales y disponían de sufragios más amplios. Pero en Austria esto tuvo consecuencias inesperadas. La participación en la administración local se abrió a grupos distintos a los alemanes o los notables locales. Especialmente en los territorios checos, el comercio y la industria ampliaron el poder local. Las lenguas provinciales, como las clases medias, abandonaron la esfera familiar y comunitaria para acceder a la pública. La identidad nacional podía configurarse ya como una totalidad y la cuestión de la lengua estaba en condiciones de movilizarla. Aumentó el número de individuos clasificados como checos, al tiempo que disminuía el de quienes se clasificaban como alemanes. Los notables alemanes en territorio checo, en especial los partidos liberales, comenzaban a perder poder (Cohen, 1981).

Estos hechos transformaron la táctica segmental de poder de la propia monarquía, porque de haber continuado apoyándose en los

austro-alemanes habría espantado a las minorías locales y regionales que ahora gozaban de poderes políticos y económicos, en especial a los checos, furiosos por no haber podido lograr un grado de representación comparable al de los húngaros. Así pues, disminuyó la solidaridad de Francisco José con los notables austro-alemanes y la de éstos con él. A partir de 1867, el dominio magiar de su *Reichshalf* sembró el descontento entre los eslavos. En 1880 húngaros y austro-alemanes reprimieron otras aspiraciones políticas en mayor medida de lo que hubiera querido el emperador.

En 1879-1880 Francisco José abandonó a los partidos «liberales» austro-alemanes (a los que, por otra parte, aún no se les había permitido demostrar mucho liberalismo) y pidió al conde Taaffe que formara un ministerio «nacionalista-conservador», desde el que la dinastía recibiera el apoyo de checos y polacos. En 1882 el ministerio amplió en gran medida el sufragio local, consciente (por conocer la provincia) de que serían los nobles o los nacionalistas, no los notables burgueses y liberales, quienes ejercían los controles segmentales sobre el campesinado y las masas pequeño burguesas. Pronto entrarían también a formar parte del personal de las administraciones locales y provinciales. Como en otras partes (véase capítulo 16), los empleados públicos formaban ahora el grueso del nacionalismo. Los disidentes provinciales se legitimaban en términos de nación, incluso allí donde, como en Hungría, pertenecían a la nobleza, o donde, como en Eslovaquia, tanto la «nación» como la lengua eran inventos de un pequeño grupo de intelectuales. Las naciones se habían convertido en comunidades *reales* gracias a la evolución de las luchas por la representación federal y a la existencia de auténticas comunidades lingüísticas y religiosas. En ese momento, el nacionalismo presentaba una curiosa contradicción, porque estaba fragmentando la monarquía con la que pactaba a menudo.

Con la centralización dinástica en la ruina, Francisco José optó por un semiautoritarismo federal. El sufragio austriaco se extendió en 1897, aunque según el sistema prusiano que he descrito en el capítulo 9, muy sesgado en función de la clase. Finalmente, en 1905 el emperador anunció: «He decidido introducir la institución del sufragio universal en las dos mitades de la monarquía», y así lo hizo en el *Riechshalf* austriaco en 1907. La nobleza húngara, no obstante, se mostró reacia, sabedora de que esto podía minar su hegemonía en su *Reichshalf*. Francisco José estaba elaborando una versión más confederal de la constitución del *Reich* alemán, pero tenía ante sí opciones muy

variadas. Puesto que la oposición más conservadora llegaba ahora de la atrincherada nobleza húngara y de la burguesía alemana, en determinadas cuestiones, sus aliados eran las naciones y las clases oprimidas. Más aún, como reaccionario genuino que era, comenzaba a perder las simpatías por las clases dominantes nacionales y se sentía tentado por una legislación social de corte paternalista que moderara la cristalización capitalista del régimen, pero las restricciones presupuestarias le impidieron su realización, y la dinastía continuó negando la soberanía parlamentaria y los derechos civiles colectivos a la clase obrera.

Con todo, el entrelazamiento de la dinastía con las clases y las naciones había impedido el desarrollo del liberalismo. Originalmente centrados en la resistencia alemana al absolutismo, los partidos liberales defendían ahora un *statu quo* que privilegiaba su identidad nacional. Así, los partidos de clase, representantes de la pequeña burguesía, de los obreros y los campesinos, nacieron tan opuestos al liberalismo como a la monarquía. La explotación de clase se asoció a la explotación nacional en varios partidos «sociales», desde el socialismo cristiano antisemita (Boyer, 1981), al populismo eslavo y campesino (que describiré en el capítulo 19), el pangermanismo, el sionismo y el socialismo marxista (Schorske, 1891: 116 a 180). Entre todos ellos destaca por su singularidad la postura del partido socialista marxista austriaco. El proletariado del marxismo es transnacional. A partir de 1899 los socialistas, bajo la tutela ideológica de Renner y Bauer, tacharon de burgueses a los nacionalismos alemán y magiar. Otras naciones explotadas se consideraron durante algún tiempo análogas al proletariado. Por tanto, los socialistas se oponían al nacionalismo y apoyaban la democracia confederal. Implícitamente estaban coadyuvando a la supervivencia de los Habsburgo como monarquía potencialmente constitucional.

Las constituciones prosperaron en algunas provincias; sin embargo, al mismo tiempo que la Dieta húngara se negaba a ampliar el voto, su extensión en Bohemia y Austria producía el caos en el *Reichstag* y la Dieta bohemia porque los checos y los alemanes fueron incapaces de ponerse de acuerdo en la cuestión de la lengua o del reparto de los cargos públicos. El obstáculo ya no era tanto la monarquía reaccionaria como la doble explotación de las clases dominantes húngaras y alemanas, que se oponían al sufragio univeral masculino porque cada una de ellas sólo contaba en su *Reichstag* con un 20 o un 25 por 100 de la población, aunque controlaban las respectivas admi-

nistraciones centrales. Para evitar más concesiones, el compromiso se gestionó con métodos particularistas. Su éxito bloqueó el posible desarrollo de una democracia plena, porque a menos que estas nacionalidades atrincheradas se prestaran a hacer concesiones, en especial a checos, rumanos, croatas y serbios, la democracia quedaba confinada dentro de un Estado que ya no era dinástico, militarista, capitalista y multiprovincial, asediado por las naciones, sino un Estado dinástico, militarista, capitalista y nacionalista, dividido en facciones internas. Conservó su carácter polimorfo, pero no pudo resolver la proliferación de facciones en su seno.

La dinastía prolongó su política de división segmental entre las clases y las naciones. Dudo de que Francisco José adoptara de corazón la estrategia semiautoritaria después de haber sido durante cincuenta años un rey dinástico que había declarado con orgullo: «Soy un príncipe alemán» (aunque se había calculado que sólo tenía de alemán un 3 por 100), sin manifestar nunca una simpatía sincera por las naciones oprimidas. Finalmente, reasumió los poderes dinásticos con los que se sentía a gusto disolviendo el *Reichstag* y la Dieta en 1913 y 1914. Una solución poco perspicaz. Sus herederos (Francisco Fernando, asesinado en 1914, y Carlos, que le sucedió en 1917) querían que los húngaros se comprometieran, aunque su forma de entender el conflicto checo-alemán fue menos clara, pero ¿disponían de medios para obligarlos a ello? Es probable que para entonces los Habsburgo hubieran perdido la posibilidad de elegir entre las tres estrategias. Si los húngaros habían bloqueado la centralización dinástica, varias nacionalidades bloqueaban ahora estrategias más democráticas.

No obstante, quedó abierto un nivel más modesto de viabilidad política. Taaffe, primer ministro de 1879 a 1893, definía el éxito político como «el mantenimiento de todas las nacionalidades de la monarquía en una situación de descontento parejo y bien regulado» (Macartney, 1971: 516). El Estado estaba en condiciones de inventarse su propio camino para lograrlo —que Victor Adler calificó de «absolutismo atemperado por la confusión»— desempeñando dos funciones, nacional y geopolítica, que la mayoría de las clases y las nacionalidades encontraban útiles.

Desde el punto de vista interno, la monarquía influyó decisivamente en administraciones «nacionales» potencialmente más represivas. Húngaros, alemanes, checos, croatas y polacos penetraron eficazmente en sus administraciones y sociedades civiles local-regionales, de modo que sin esa limitación habrían oprimido en mayor medida a sus

minorías, tal como ocurrió en Hungría a partir de 1867 (y como las minorías centroeuropeas han tenido ocasión de volver a comprobar a finales del siglo XX). No faltaron clases que lo vieran así; por ejemplo, los trabajadores checos, que pidieron que se les protegiera de los capitalistas alemanes, o los campesinos rutenos, que hicieron lo mismo respecto a los terratenientes polacos. Puesto que las soluciones de principio resultaban difíciles de alcanzar entre una tal profusión de lenguas y clases —unas mayoritarias, otras minoritarias— esparcidas por una geografía compleja, la situación prolongó el gobierno segmental y «confuso». Su Estado central fomentó el desarrollo económico y su administración civil creció rápidamente a comienzos del siglo XX (véanse cuadros 11.1 a 5 y cuadro del apéndice A.1); salvo en la cuestión de la lengua, el crecimiento fue consensuado (como en otros Estados del periodo; véase capítulo 14) y cumplió útiles funciones civiles para unos súbditos cuyo descontento era, en efecto, «parejo y bien regulado».

Pero la principal función del Estado de los Habsburgo fue el militarismo geopolítico. Por sí misma, cada nacionalidad sólo habría sido capaz de formar un Estado de pequeñas dimensiones; por otro lado, si los Habsburgo no las hubieran gobernado, otros lo habrían hecho. La misión histórica de la dinastía había consistido en coordinar la defensa de los cristianos de la zona contra los turcos, pero ahora la amenaza llegaba desde Rusia y Alemania (Taylor, 1967: 132). Incluso los eslavos del sur, recientemente anexionados y con un compromiso dudoso, temían a la Rusia reaccionaria. El partido mayoritario, una coalición serbo-croata, consideró la cuestión eslava un asunto interno de la monarquía dual hasta que en 1914 se dividió y surgió el separatismo. A partir de 1873, los polacos, que disfrutaban de autonomía local, proclamaron su lealtad al moderado gobierno de Austria hasta que pudieran recobrar su propio Estado, lo que constituía un desafío a Rusia y Alemania. Por su parte, checos, eslovacos y rutenos también desconfiaban de Rusia y Alemania. Muchos preferían una federación de naciones centroeuropeas bajo los Habsburgo, con un Estado central encargado del ejército, de la diplomacia y de ciertos asuntos relacionados con los presupuestos. Y eso, más una política económica progresiva, fue lo que consiguieron.

Al no poder concertar una constitución capaz de construir un Estado adecuadamente representativo y responsable, tampoco fue posible llegar a un compromiso entre ciudadanos de pleno derecho, pero quizás no importaba demasiado. Nada resulta más enigmático

cuando se observa al Imperio austro-húngaro desde la perspectiva de un Estado-nación moderno que la tranquilidad con que los diputados checos, alemanes y de otras nacionalidades convirtieron en un caos los Parlamentos y luego renunciaron a ellos durante años. La realidad era que el absolutismo de los Habsburgo defendía sus intereses básicos y que ellos podían influir en el Estado desde dentro, a través del capitalismo y las administraciones locales y regionales. Pese a las disputas parlamentarias y los altercados entre las administraciones húngara y austriaca, la disidencia contra el régimen *disminuyó* entre 1867 y 1914 (Sked, 1989: 231). En cuanto a los socialistas, si bien es cierto que predominaban entre la clase obrera de las dos áreas industriales, se mantuvieron, como en Alemania, confinados en sus guetos, de modo que la violencia obrera también disminuyó desde la década de 1880. Al contrario que en 1848 o 1867, no existió ningún movimiento provincial que reclamara la autonomía, ni se produjeron rebeliones en ninguno de los territorios históricos, salvo en las nuevas provincias balcánicas. La «crisis constitucional» con los húngaros, que había durado diez años, acabó en 1908, gracias a un acuerdo eminentemente pragmático por el que Hungría aumentó su contribución presupuestaria del 30 al 36,4 por 100. Las clases y las naciones provinciales habían encontrado un acomodo bajo el mandato de los Habsburgo, pero la geopolítica dictaba otra cosa.

La arrogancia final: geopolítica militar, 1867-1918

El compromiso de 1867 dejó en manos de Francisco José el ejército y el control de la política exterior, de modo que la contradicción militar continuaba pesando sobre él, ya que las fórmulas fiscales no suministraban los recursos adecuados a la estrategia de una gran potencia (véase cuadro 11.6; *cf.* Deak, 1990: 64). La desconfianza húngara hacia el ejército conjunto disminuyó los suministros y situó a Austria por detrás de sus rivales en cuanto a la calidad del equipamiento, la artillería y el apoyo logístico, lo que proporcionó al alto mando la excusa para no adoptar tácticas modernas. Sin embargo, el compromiso no indujo a Francisco José a acometer políticas de ahorro. El final de las pretensiones alemanas en 1867 trasladó las prioridades al sureste, donde Austria y Rusia se aprovechaban de la decadencia otomana en los Balcanes. El régimen se autoconvenció de que la solución a la cuestión interna de los eslavos del sur consistía en ad-

quirir más territorios eslavos, lo que pareció a muchos un síntoma inequívoco de su naturaleza dinástica y reaccionaria, pues, al fin y al cabo, ¿no es la conquista de nuevos territorios el cometido intrínseco de los reyes dinásticos?, como se pregunta Sked (1989: 265). Por mi parte, dudo de que cualquier otro gobierno de principios del siglo XX hubiera rechazado esos despojos territoriales, como revelan la pelea por África y la expansión estadounidense en el Pacífico. Como veremos en el capítulo 21, la extensión del territorio constituía un dato implícito de la geopolítica.

Pero esto no proporciona un bajo perfil diplomático ni una política de ahorro. Habría resultado más tolerable de haber acordado con Rusia el reparto de los Balcanes entre estados clientes; sin embargo, Austria se incorporó a la estructura de las alianzas enemigas. A partir de 1867 pudieron más los lazos económicos y culturales y la similitud del régimen político con Alemania; se solucionaron, pues, las diferencias y se estableció una alianza que parecía tan natural como la anglosajona, aunque en este caso la diferente actitud de las dos potencias respecto a Rusia la privaba de contenido geopolítico. Alemania temía la rápida modernización militar y económica de Rusia y su política de amistad con Francia. A medida que el nacionalismo adquiría tintes racistas se planteaba una lucha a muerte entre germanos y eslavos por el dominio de la Europa central. En este clima, los regímenes germánicos se asociaron a los magiares para reprimir a los pueblos eslavos, pero los hechos en nada favorecían a los Habsburgo, por el contrario, irritaban a Rusia en un momento en el que Austria no habría podido resistir su ataque. Es probable que el antieslavismo de la diplomacia austriaca respondiera en parte a la influencia húngara en materia de política exterior, pero no debemos exculpar a Francisco José, cuyos sentimientos no menos antieslavos le empujaban a ver en Rusia un «enemigo natural». La diplomacia austriaca no sólo había sido incapaz de ahorrar, sino que se estaba creando un terrible enemigo.

Los acontecimientos se precipitaron. En 1912-1913 cayó el Imperio turco en los Balcanes. Rusia apoyó a los nuevos Estados eslavos, en particular a Serbia, que tenía intereses en territorio austriaco. Resulta irónico que fueran patriotas serbios quienes asesinaran a Francisco Fernando, porque el heredero había manifestado su deseo de ampliar los derechos de los pueblos eslavos y de practicar una diplomacia menos militarista. Ahora, Austria se vio obligada a tomar represalias para no demostrar debilidad frente a los disidentes nacionalistas. La respuesta rusa podía ser temible, pero se contaba con la

protección alemana. Como veremos en el capítulo 21, la decisión austriaca de atacar coincidió con la de Alemania, en un intento de impedir que Rusia completara la modernización de su ejército. Las dos potencias centrales se empujaron mutuamente al desastre de la Gran Guerra que iba a suponer su fin, lo que probablemente habrían evitado con una diplomacia capaz de demostrar su fuerza sin necesidad de entrar en guerra. Puede que Rusia hubiera esperado a otro momento para demostrar a los eslavos la debilidad austriaca. Pero en materia de diplomacia, mañana es otra época.

Al analizar en el capítulo 21 el proceso que condujo a la Primera Guerra Mundial sostendré que en los regímenes autocráticos y semiautoritarios la decisión política se encuentra en manos de facciones. Alemania, al menos, entró en el conflicto con una formidable máquina bélica que estuvo a punto de proporcionarle la victoria, mientras que Austria lo hizo con el ejército peor equipado y más pequeño entre los de las grandes potencias, gran parte del cual se subió a los trenes sin saber a qué frente acudir mientras los generales intentaban ponerse al día de las instrucciones diplomáticas para saber con quién estaban luchando, con los serbios o con los rusos. El continuo fracaso del acuerdo constitucional nos habla de un Estado particularista y polimorfo, adecuado para salir del paso sin saber cómo, pero escasamente capacitado para afrontar la guerra y las crisis diplomáticas, es decir, para la toma de decisiones tras un rápido examen y el despliegue racional de las infraestructuras que requiere su cumplimiento. Durante el siglo XVIII, las necesidades bélicas de Austria crearon una de las primeras administraciones estatales modernas (véase el capítulo 13), que la crisis constitucional había destruido ya en 1914, impidiéndole evitar la guerra o hacerla con eficacia.

Pero antes del hundimiento la guerra trajo consigo el entusiasmo patriótico. Sigmund Freud expresó oportunamente su propia emoción: «Toda mi libido se encuentra en este momento depositada en la Monarquía» (Gerschenkron, 1977: 64). Los soldados austriacos siguieron una y otra vez a sus oficiales en los ataques frontales contra las posiciones rusas con un soporte artillero insuficiente (la artillería no se había beneficiado de los fondos de la modernización). Durante el primer año, murieron más de la mitad de los hombres y muchos de los mejores oficiales y suboficiales; un asombroso índice de bajas, que no conoció parangón. Después, sin embargo, se recuperaron y, fortalecidos por el mando de los oficiales prusianos, lucharon muy bien hasta el verano de 1918, sopor-

tando fuertes bajas en los tres frentes (ruso, serbio e italiano) pero con menos deserciones y motines que los rusos. No obstante, la prolongación de la guerra enfrió las lealtades; los desertores checos y rumanos formaron pequeños ejércitos para luchar contra los Habsburgo; los eslovacos y los croatas permanecieron fieles por temor a un gobierno checo y magiar. En definitiva, los ejércitos austriacos en suelo extranjero tuvieron que rendirse; sólo habían luchado con entusiasmo durante el primer año de la guerra. Al contrario que a los ejércitos de la Entente, no se les había ofrecido la posibilidad de una sociedad mejor, pero no les faltó valor, lucharon con el profesionalismo de la tradición militar de los Habsburgo, más propio de las fuerzas armadas de un antiguo régimen que de un ejército de ciudadanos (Zeman, 1961; Luvaas, 1977; Plaschka, 1977; Rothenberg, 1977; Deak, 1990: 190 a 204).

De haber ganado las potencias centrales, Austria habría sobrevivido, pero se equivocó de compañero en esta guerra de alianzas. Sus enemigos la desmembraron acogiéndose a los más altos principios morales. Los aliados occidentales, separados de la Rusia autocrática y multinacional desde 1917, asociaron victoria a democracia y autodeterminación nacional. En enero de 1918, los catorce puntos del presidente Wilson prometieron «a los pueblos de Austria-Hungría ... las mayores oportunidades de desarrollo autonómico», aunque éste se concebía aún dentro de una constitución confederal austro-húngara. En el verano, la Entente reconoció a los comités nacionales en el exilio, que pidieron la independencia convencidos de que aquélla les defendería de Rusia y Alemania. Los socialdemócratas apoyaron la ruptura a cambio de la paz (Zeman, 1961; Valiani, 1973; Mametey, 1977). Con la rendición se obligó a abdicar al emperador Carlos y las nacionalidades mayoritarias tuvieron su propio Estado. El Estado-nación había triunfado definitivamente en todas partes.

La debilidad potencial del régimen en 1900 sólo se explica porque la lealtad geopolítica de la mayoría de las nacionalidades fue tan contingente como interesada. Puesto que hasta 1914 las luchas por la nacionalidad se libraron pensando siempre en la supervivencia de Austria, la acción de las clases se encaminó a conseguir una posición dentro del Imperio. Pero en 1914 Austria parecía ya un Estado cliente de Alemania incapaz de preservar su escudo protector. Si quedaba alguna duda, se despejó cuando el inesperado desenlace de la guerra contribuyó al hundimiento de Rusia y Alemania y a la implantación del nuevo orden europeo auspiciado por los vencedores.

Inmediatamente, las nacionalidades decidieron continuar adelante sin los Habsburgo. El régimen, que no había sabido pactar una constitución representativa o semirrepresentativa con las clases y las naciones, no pudo movilizar la lealtad de la ciudadanía, y si esta circunstancia resultó siempre problemática (aunque no esencial) en la paz, y desventajosa (aunque no decisiva) en la guerra (dejando aparte el hecho de que Austria luchara bien), en la derrota y en el marco del nuevo orden europeo significó el fin instantáneo.

Estrategias contrafactuales del régimen

Austria pereció en unas circunstancias imprevistas. Para apreciar mejor su viabilidad, tendremos que adentrarnos en el peligroso terreno de la historia contrafactual. ¿Habría podido sobrevivir? De ser así, ¿en qué condiciones? ¿Representaba un anacronismo aquel Estado confederal y mal vertebrado en un mundo en el que la modernización y el capitalismo avanzado exigían un Estado-nación más orgánico? Creo que Austria habría podido mantenerse mediante alguna de estas dos fórmulas: bien elaborando una de las tres constituciones ideales que ya he especificado en estas páginas, bien saliendo del paso como había hecho siempre.

Si la fórmula constitucional fue difícil antes, no lo habría sido menos en esta circunstancia. Pero puede que la centralización dinástica que siempre prefirió la monarquía no se hubiera visto afectada por una fórmula «neutral» en materia de nacionalidades. El error estuvo en buscar una centralización austro-germana, que suscitó la oposición provincial, y en no haber ganado tiempo manteniendo un perfil diplomático bajo y economizando en el terreno militar. Pero Austria, como les suele ocurrir a las grandes potencias que decaen, tenía un concepto exagerado de su capacidad militar. Su propia diplomacia bloqueó las repetidas oportunidades de encontrar un compromiso entre constituciones rivales, de 1848 a 1866. Al final, se establecieron compromisos meramente particularistas, en especial con la nobleza húngara, que imposibilitaron la existencia de un confederalismo basado en los principios, atrapado, como estaba, en el abrazo de las dos nacionalidades dirigentes. En los momentos decisivos, la dinastía dejó escapar la oportunidad de elaborar una versión de la constitución de Stadion que le habría permitido sobrevivir con un gobierno federal y semiautoritario.

En cierto sentido, sin embargo, habría podido encontrarse un compromiso constitucional. Una constitución no es otra cosa que una base autoritaria para el reparto de la soberanía, pero no ha de ser autoritaria en términos absolutos. El éxito interno del *Reich* alemán se debió al margen discrecional que la constitución confería al régimen. Pero los Habsburgo habrían necesitado una institucionalización política mayor de la que fueron capaces de ofrecer, especialmente a partir de la década de 1870, cuando la industrialización expandió el nacionalismo lingüístico y se amplió el sufragio local-regional y la administración estatal. La representación multinacional habría podido ser compatible con el gobierno de los Habsburgo, pero la táctica del régimen particularista no produjo una constitución satisfactoria cuando la lucha *entre* las distintas nacionalidades empeoró la situación. Finalmente, cuando Francisco José comprendió —quizás más con la cabeza que con el corazón— la necesidad de una constitución, ya era tarde porque el particularismo polimorfo se encontraba atrincherado en el seno del Estado. Los Habsburgo comenzaban a considerar el problema cuando su locura diplomática, nacida del militarismo, los arrolló.

Así pues, Austria no fue destruida por la lógica «interna» de la modernización o del desarrollo del capitalismo avanzado. Superficialmente parece que los Habsburgo no murieron de causa natural, fueron asesinados; el heredero en 1914; el régimen en 1918. En efecto, en otras circunstancias habría podido sobrevivir a su modo, saliendo del paso, y proporcionar todo tipo de funciones políticas y militares incluso a los disidentes nacionalistas. Habrían sobrevivido también en la era de los nacionalismos burgueses y las luchas de clases proletarias y campesinas, para adentrarse en el siglo XX como un Estado confederal semirrepresentativo. Puede que Austria hubiera sido incapaz de movilizar el grado de compromiso y de sacrificio que lograron de sus ciudadanos los Estados-nación más centralizados, pero estas demostraciones sólo se necesitan en caso de guerra. El destino de los Habsburgo nos recuerda que la modernización convivió con muchas de las formas del régimen y que la desaparición de gran parte de ellas se debió sólo a la geopolítica y la guerra.

Pero la auténtica debilidad del régimen austriaco, la que realmente lo destruyó, era interna. No cabe duda de la responsabilidad del emperador en la abdicación de su sucesor, puesto que él gobernó todo el periodo de las oportunidades perdidas y, como rey dinástico activo, favoreció la confusión particularista constitucional y el fatal

militarismo de la diplomacia. Su identificación, propia de la agresividad de una gran potencia, con la política de control de las nacionalidades fronterizas ocasionó guerras costosas para las que el régimen no estaba preparado y que lo desviaron erráticamente entre estrategias políticas contradictorias. Nunca buscó el confederalismo como tal, sino una forma de confederalismo dinástico y militarista que tardó mucho en ser compatible con el grado necesario de representación multinacional. El dinasticismo estaba obsoleto; sólo era capaz de gobernar con una extrema dificultad y empleando los antiguos métodos particularistas cuando se enfrentaba a las clases y las naciones.

Las presiones por la modernización exigían un acuerdo universal con las clases y las naciones. La constitución podía establecer una democracia de partidos, como en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, o un régimen semiautoritario como el *Reich* alemán; podía ser centralista, como la británica o la francesa; o federal, como la estadounidense. Pero el dinasticismo era incapaz de asumir los derechos y deberes universales adecuados a las cuatro fuentes del poder social en una sociedad moderna, es decir, al Estado burocrático, a la economía capitalista industrial, a los ejércitos de masas y a la comunidad ideológica imaginada de una ciudadanía compartida. Las presiones no fueron insoportables en tiempos de paz, pero la guerra constituye siempre la prueba de fuego de los Estados. Los Habsburgo se sometieron con un afán excesivo a pruebas militares y diplomáticas, pero no pasaron el examen. Las cristalizaciones de este Estado polimorfo, al contrario que en Alemania, acabaron por chocar frontalmente. El dinasticismo y el militarismo colisionaron con la representación confederal. Cuando la monarquía reconoció la contradicción, no supo resolverla, porque carecía de una estrategia sólida y su deriva fue desastrosa. Grillparzer, el poeta, había escrito su epitafio veinte años antes:

> De nuestra noble Casa parece el destino
> apostar a medias por hazañas medias
> y quedarse a medio camino.

Conclusiones alemanas y globales

En este capítulo y en el número 9 he analizado la viabilidad de las tres alternativas de modernización del mundo germánico centroeuro-

peo. Todas eran capitalistas, pero implicaban también cristalizaciones políticas que, a su vez, estructuraban el capitalismo. Triunfó la estrategia de incorporación semiautoritaria y fracasaron las alternativas democrática y confederal dinástica. Así pues, el capitalismo del mundo germánico parece más autoritario, territorial y nacional que difuso, transnacional y mercantil, una tendencia que probablemente el triunfo de cualquiera de las otras formas de régimen podría haber desviado.

Pero no se trató de un hecho singular. En lo que parece una coincidencia extraordinaria, otros países situados ante alternativas semejantes adoptaron también las de carácter autoritario, territorial y nacional durante el mismo cuarto de siglo posterior a 1848. Los Estados Unidos, no menos acosados por las disputas regionales, se tambalearon en una guerra civil, cuyo resultado produjo una moderada centralización nacional (aunque aún parcialmente confederal). En Italia, una vez lograda la unidad, el nuevo régimen se esforzó en crear un Estado-nación. Japón superó su feudalismo centralizado a partir de 1867, gracias a la restauración Meiji, es decir, a una versión adaptada de la incorporación semiautoritaria alemana. En México y Argentina el confederalismo fue igualmente derrotado. Por el contrario, las democracias británica y francesa comenzaron a centralizarse. Así pues, lo ocurrido en Alemania parece responder a la lógica de la modernización, es decir, a la evolución global de un Estado-nación unitario, tal como lo ha descrito Giddens (1985).

Pero dada la multiplicidad de contingencias, prefiero considerarlo una deriva global, reversible en principio, que se realizó empíricamente durante el periodo (y que en la actualidad se ha invertido). La deriva operó a través de la conjunción de dos procesos de poder distintos aunque entrelazados:

1. La comercialización y la industrialización capitalista, al entrelazarse con la modernización del Estado, derivó hacia el Estado-nación «naturalizando» con sus infraestructuras a la sociedad y generando la lucha de las clases emergentes contra el sistema impositivo y de cargos públicos. Las reivindicaciones de una democracia de partidos (parlamentos y derechos a los cargos) se fusionaron a veces con la necesidad del propio régimen de modernizar el Estado para crear un sentido de ciudadanía nacional limitada. Los regímenes confederales, dinásticos o casi democráticos se mantuvieron a duras penas en esta fusión de las clases y la nación que parecía tan «moderna» a sus

disidentes internos. No obstante, la supervivencia de Austria muestra que, como el Estado centralizado y semiautoritario de Prusia supo desviar del liberalismo a la burguesía, así un régimen confederal de éxito sólo moderado se conservó a pesar de la aparición de las clases y las naciones. Con unos recursos muy débiles, los Habsburgo pudieron, al fin y al cabo, confinar al nacionalismo transgresor en espacios retóricos, políticamente manejables.

2. En ese momento intervino una segunda fuerza. El militarismo geopolítico obligó a los Estados a efectuar grandes movilizaciones de todos los recursos del poder. El Estado-nación, que coordinaba la industrialización capitalista con la ciudadanía nacional, representó un cierto avance logístico respecto a los Estados confederales como el austriaco o el del Japón Tokugawa, sentados a horcajadas sobre unas redes regionales de poder con las que sellaban compromisos ideológicos o materiales consagrados por las tradicionales prácticas particularistas. El poder de los barcos negros del comodoro Perry en Kanagawa, del ferrocarril prusiano y las bayonetas de Königgrätz parecía a los partidarios de la reforma auténticas encarnaciones de la modernización y la movilización nacional. Los vencedores también se sentían impulsados por la «modernidad» de la ideología del Estado-nación. Para ser una gran potencia —o sobrevivir, como en Japón o Europa central— resultaba útil contar con un gobierno central capaz de coordinar las infraestructuras de sus territorios como no podían hacerlo los regímenes confederales. Los presuntos modernizadores lo consideraban esencial en todas partes. Pero ni las confederaciones germánicas o japonesas ni las dinastías transnacionales lo conseguían fácilmente, de ahí que la guerra pusiera en peligro su supervivencia. Tilly ha analizado de esta forma el triunfo del Estado-nación europeo: la guerra requería y producía Estados centralizados, diferenciados y autónomos, y destruía otras formas alternativas (1990: 183, 190 y 191). El caso de la Confederación de Estados Americanos resulta el más irónico, porque allí se fue a la guerra por defender un confederalismo débil (y un sistema esclavista), pero al encontrarse con un enemigo superior, generó un Estado más centralizado, coercitivo y movilizador que el de su adversario (Bensel, 1990). También el sur se consolidó gracias a un nacionalismo regional que era un incipiente Estado-nación (sólo para blancos).

Vemos, pues, el enorme cometido del militarismo político para el desarrollo de la sociedad moderna, pero también la influencia de las *cuatro* fuentes del poder social, que pocas veces resultó transparente

para los protagonistas. Los resultados, como suele ocurrir, no fueron los esperados por ellos. La fusión de la clase y la nación en la ciudadanía, la aparición de estrategias de incorporación democrática o semiautoritaria por parte del régimen, la sucesiva adaptación de las estrategias de los regímenes confederales fueron momentos de claridad hacia la modernización. Particularmente tenebroso resultó el impacto de la guerra y la diplomacia. Allí la «estrategia» no sólo dependía de la capacidad de las instituciones para enfrentarse al entramado de las reivindicaciones de las clases y las regiones, sino también de la habilidad de, en primer lugar, predecir la diplomacia de otras potencias con las que el entendimiento era, en ocasiones, mínimo e influir en ella; y, en segundo lugar, predecir el resultado de las guerras de alianzas que se libraban en condiciones militares cambiantes. Hemos atisbado la dificultad que tuvo Francisco José para tomar la decisión más acertada (sólo obvia desde nuestro sillón del siglo XX) cuando se enfrentó a esta situación. Volveré sobre ello en el capítulo 21.

Bibliografía

Ashworth, W. 1977: «Typologies and evidence: has nineteenth century Europe a guide to economic growth?». *Economic History Review,* 30.

Austensen, R. 1980: «Austria and the struggle for supremacy in Germany: 1848-1864». *Journal of Modern History,* 52.

Bairoch, P. 1982: «International industrialization levels from 1750 to 1980». *Journal of European Economic History,* 11.

Bensel, R. 1990: *Yankee Leviathan: The Origins of Central State Authority in America, 1859-1877.* Cambridge: Cambridge University Press.

Bostaph, S. 1978: «The methodological debate between Carl Menger and the German historicists». *Atlantic Economic Journal,* 6.

Boyer, J. 1981: *Political Radicalism in Late Imperial Vienna.* Chicago: University of Chicago Press.

Bridge, F. R. 1972: *From Sadowa to Sarajevo: The Foreign Policy of Austria-Hungary, 1866-1914.* Londres: Routledge & Kegan Paul.

Cohen, G. 1981: *The Politics of Ethnic Survival: Germans in Prague, 1861-1914.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Deak, I. 1979: *The Lawful Revolution: Louis Kossuth and the Hungarians, 1848-49.* Nueva York: Columbia University Press.

— 1990: *Beyond Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848-1918.* Oxford: Oxford University Press.

Gerschenkron, A. 1977: *An Economic Spurt That Failed.* New Haven,

Conn.: Yale University Press.
Giddens, A. 1985: *The Nation-State and Violence.* Cambridge: Polity Press.
Good, D. F. 1974: «Stagnation and "take-off" in Austria, 1873-1913». *Economic History Review,* 27.
— 1977: «Financial integration in late nineteenth-century Austria». *Journal of European Economic History Review,* 37.
— 1978: «The Great Depression and Austrian growth after 1783». *Economic History Review,* 31.
— 1981: «Economic integration and regional development in Austria-Hungary, 1867-1913». En *Disparities in Economic Development Since the Industrial Revolution,* ed. P. Bairoch y M. Lévy-Leboyer. Londres: Macmillan.
— 1984: *The Economic Rise of the Habsburg Empire, 1750-1914.* Berkeley: University of California Press.
Gordon, H. J., y N. M. Gordon, 1974: *The Austrian Empire: Abortive Federation?* Lexington, Mass.: D. C. Heath.
Gross, N. T. 1976: «The Industrial Revolution in the Habsburg monarchy, 1750-1914». En *The Fontana Economic History of Europe.* vol. 4: *The Emergence of Industrial Societies,* 1.ª parte, ed. C. Cipolla. Brighton: Harvester.
Huertas, T. 1977: *Economic Growth and Economic Policy in a Multi-National Setting: The Habsburg Monarchy, 1841-1865.* Nueva York: Arno Press. (Reimpreso en *Journal of Economic History,* 38, 1978.)
Jaszi, O. 1961: *The Dissolution of the Habsburg Monarchy.* Chicago: University of Chicago Press.
Johnston, W. 1972: *The Austrian Mind: An Intellectual and Social History, 1848-1938.* Berkeley: University of California Press.
Kann, R. A. 1964: *The Multinational Empire,* 2 vols. Nueva York: Octagon Books.
— 1974: *A History of the Habsburg Empire, 1576-1918.* Berkeley: University of California Press.
Katzenstein, P. 1976: *Disjointed Partners: Austria and Germany Since 1815.* Berkeley: University of California Press.
Kennedy, P. 1988: *The Rise and Fall of the Great Powers.* Londres: Unwin Hyman. [Ed. cast.: *Auge y caída de las grandes potencias.* Esplugues Llobregat, Actualidad y Libros, 1989.]
Komlos, J. 1983: *The Habsburg Monarchy as Customs Union: Economic Development in Austria-Hungary in the Nineteenth Century.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Luvaas, J. 1977: «A unique army: the common experience». En *The Habsburg Empire in World War I,* ed. R. A. Kann *et al.* Nueva York: Columbia University Press.
Macartney, C. 1971: *The Habsburg Empire, 1790-1918.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Mametey, V. S. 1977: «The union of Czech political parties in the *Reichsrat,*

1916-1918». En *The Habsburg Empire in World War I*, ed. R. A. Kann *et al.* Nueva York: Columbia University Press.

O'Brien, P. K. 1986: «Do we have a typology for the study of European industrialization in the nineteenth century? *Journal of European Economic History*, 15.

Pech, Z. 1969: *The Czech Revolution of 1848.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Plaschka, R. 1977: «Contradicting ideologies: the pressure of ideological conflicts in the Austro-Hungarian army of World War I». En *The Habsburg Empire in World War I*, ed. R. A. Kann *et al.* Nueva York: Columbia University Press.

Pollard, S. 1981: *Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe, 1760-1970.* Oxford: Oxford University Press.

Rath, R. J. 1957: *The Viennese Revolution of 1848.* Austin: University of Texas Press.

Rothenberg, G. 1977: «The Habsburg army in the First World War: 1914-1918». En *The Habsburg Empire in World War I*, ed. R. A. Kann *et al.* Nueva York: Columbia University Press.

Rudolph, R. L. 1972: «Austria, 1800-1914». En *Banking in the Early Stages of Industrialization*, ed. R. E. Cameron. Londres: Oxford University Press.

— 1975: «The pattern of Austrian industrial growth from the eighteenth to the early twentieth century». *Austrian History Yearbook*, 11.

— 1976: *Banking and Industrialization in Austria-Hungary.* Cambridge: Cambridge University Press.

Schorske, C. 1981: *Fin-de-Siècle Vienna. Politics and Culture.* Nueva York: Vintage.

Sked, A. 1979: *The Survival of the Habsburg Empire: Radetsky, the Imperial Army and the Class War, 1848.* Londres: Longman Group.

— 1981: «Historians, the nationality question, and the downfall of the Habsburg Empire». *Translations of the Royal Historical Society*, 31.

— 1989: *The Decline and Fall of the Habsburg Empire, 1815-1918.* Londres: Arnold.

Sugar, P. F., y I. J. Lederer (eds.), 1969: *Nationalism in Eastern Europe.* Seattle: University of Washington Press.

Taylor, A. J. P. 1967: «The failure of the Habsburg monarchy». En *Europe: Grandeur and Decline.* Harmondsworth: Penguin Books.

Tilly, C. 1990: *Coercion, Capital and European States, AD 990-1990.* Oxford: Blackwell Publisher.

Valiani, L. 1973: *The End of Austria-Hungary.* Londres: Secker & Warburg.

Wangermann, E. 1969: *From Joseph II to the Jacobin Trials.* Londres: Oxford University Press.

Zeman, A. 1961: *The Break-up of the Habsburg Empire.* Londres: Oxford University Press.

Capítulo 11
EL SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO: I. DATOS CUANTITATIVOS

Aunque el surgimiento del Estado moderno constituye un lugar común en las obras sociológicas e históricas, el análisis ha sido siempre pobre. Lo que se entiende por Estado moderno comprende cuatro procesos de crecimiento relativos a su *tamaño*, la *esfera de acción* de sus funciones, la *burocratización* administrativa y la *representación* política. En general, la lucha por la representación se separa de los tres procesos administrativos, y éstos se engloban en un único proceso de modernización acaecido con mayor o menor continuidad durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, Beer, 1973: 54 a 70; Eckstein, 1982). En 1863 Adolf Wagner formuló su «ley» de la expansión siempre creciente del Estado moderno, que continúa influyendo en los estadísticos, obligados, por otra parte, a contemplar un aumento cada vez mayor de los presupuestos estatales (por ejemplo, Andic y Veverka, 1963-1964). El desarrollo del Estado moderno se describe, pues, como una evolución «progresiva y ascendente».

Puesto que tanto los economistas como los politólogos se han concentrado en las estadísticas financieras disponibles, es decir, en las del siglo XX, explican el crecimiento en términos pluralistas y funcionales. Higgs (1987) distingue en sus teorías cuatro variantes: *la teoría de la modernización* (el Estado crece para coordinar la creciente com-

plejidad y diferenciación de las sociedades); *la teoría de los bienes públicos*, centrada en la defensa nacional (el Estado proporciona bienes públicos porque, aunque son de interés general y el disfrute de un consumidor no disminuye su disponibilidad para los restantes, los intereses privados no se prestan a financiarlos); *la teoría del Estado asistencial o del bienestar* (el Estado interviene porque en las sociedades complejas el mercado socava la caridad privada); y *la teoría de la redistribución política* (el voto permite que la mayoría reste algunos recursos de la minoría). Higgs demuestra que durante el siglo XX el crecimiento ha sido más irregular en los Estados Unidos de lo que pretende cualquiera de estas teorías. Más bien, ha recibido el impulso de tres grandes crisis: dos guerras mundiales y una gran depresión. A raíz de estas crisis, la intervención del Estado entró a formar parte de las ideologías políticas (Peacock y Wiseman, 1961, llegan a la misma conclusión en el caso de Gran Bretaña), y este hecho, combinado con el atrincheramiento de los intereses burocráticos (un préstamo de la teoría auténticamente elitista del Estado), impidió el retorno a niveles inferiores de gobierno.

El papel de la guerra en la expansión de los Estados es muy antiguo, lo cuestionable es si aquélla puede subsumirse en una noción más general de «crisis» (Rasler y Thompson, 1985, establecen también este punto). No cabe duda de que antes de 1850 hubo crisis sociales y económicas no asociadas a guerras, pero lo cierto es que no produjeron un crecimiento del Estado; antes de esa fecha sólo lo produjo la guerra. El intervencionismo político como respuesta a la Gran Depresión parece un hecho peculiar que no forma parte de un fenómeno generalizado. Prácticamente por primera vez en la historia las clases socialmente subordinadas reivindicaron lo que Marshall ha llamado «ciudadanía social». Pero, dejando aparte la guerra, el crecimiento estatal del siglo XIX no constituyó una respuesta a las crisis. Higgs, dicho sea en su honor, lo percibe y concluye: «El desarrollo del Gran Gobierno no respondió a ninguna lógica, por muy complicada y multidimensional que la imaginemos, sino a la Historia ... La política [real] y las dinámicas socioeconómicas son "más confusas", están más abiertas a las influencias exógenas y a los cataclismos y producen resultados menos determinados de lo que los teóricos suponen» (1987: 259). Y tiene razón. Pero sus cuatro teorías sobre el crecimiento del Estado comparten los defectos de toda teorización pluralista. Los Estados no reflejan de forma sistemática sus sociedades, ni se limitan a cumplir una modernización fundamental, bienes

públicos, bienestar, redistribución o funciones en las crisis. Tampoco reflejan automáticamente los intereses de sus elites o la lucha de clases dialéctica. Hacen, es verdad, todo esto —y aun más—, pero en el marco de una complejidad funcional e institucional que requiere un análisis riguroso.

También Weber elaboró una teoría sistémica del crecimiento estatal. A su parecer, habría formado parte de un único «proceso de racionalización» que se prolongó durante siglos en Occidente. Weber, que temía el poder «arrollador» de una burocracia estatal cuyo tamaño y esferas de acción aumentan sin cesar, se refirió brevemente a tres causas distintas pero vinculadas entre sí del crecimiento: la necesidad de un ejército estable, una ley y una fiscalidad uniformes; la necesidad, por parte de las empresas capitalistas, de disponer de servicios técnicos previsibles; y la presión de la ciudadanía para obtener un trato uniforme. El planteamiento es perspicaz, pero Weber subordinó el análisis a una teoría esencialmente progresiva y ascendente (aunque nunca estuvo seguro de que le gustara el resultado).

La teoría estatal del elitismo auténtico (véase capítulo 3) ofrece también un relato progresivo y ascendente en lo fundamental. Para Poggi (1990), son las propias tendencias «invasoras» del Estado las que generan el crecimiento, aunque en la interacción con mecanismos pluralistas y de clase y otras contingencias. Skocpol (1979) ofrece una teoría elitista más discontinua, pues sostiene que fueron los revolucionarios quienes aumentaron a partir de 1789 tanto el tamaño como las funciones o la burocratización estatal (otra versión de la teoría de la crisis de Higgs), (expondré mis dudas sobre su explicación en el capítulo 13). Giddens mezcla a Weber con Foucault (1975) para describir el surgimiento de un Estado-nación que todo lo puede, lo supervisa y lo disciplina, al que considera el mayor «receptáculo de poder» del mundo moderno. Este Estado «absorbe» a la sociedad; en realidad, «es» la sociedad misma (1985: 21 y 22, 172). Sin embargo, no especifica dónde y cuándo nació este Leviatán. Ni él ni Foucault, por otra parte, aclaran quién es el Leviatán, esto es, ¿quién lo controla?, ¿*quién hace qué a quién*?, ¿existe de veras una elite estatal que lo dirige?

Los marxistas ofrecen una teoría progresiva y ascendente, relacionada con el desarrollo del capitalismo. No apuntan a un «Estado arrollador», sino a un capitalismo en continua expansión. El propio Marx no analizó en serio el Estado, pero condimentó la descripción de los Estados francés y alemán con diatribas victorianas contra las «burocracias hinchadas». Describió el Estado francés como «un de-

testable cuerpo parasitario, que atrapa a la sociedad francesa en su red y obstruye todos sus poros» (1968: 169). Sin embargo, los cuadros del presente capítulo muestran que el Estado francés no era mayor que los restantes Estados europeos del periodo. Los marxistas posteriores escribieron invariablemente sobre el «Estado capitalista». Miliband (1969) comienza así su obra: «La gran inflación del poder del Estado y su actividad en las sociedades capitalistas avanzadas ... se ha convertido en uno más de los lugares comunes del análisis político». Su título, *El Estado capitalista*, adelanta cómo explica él esa inflación. La historia de Wolfe sobre el Estado capitalista atribuye el crecimiento y la burocratización a la necesidad de concentrar y centralizar el capital para conseguir bienes públicos racionalizados y previsibles, así como una especie de agencia que regule la lucha de clases y la aminore con reformas de tipo asistencial (1977: 59 a 79, 263). Su historia, como casi todos los estudios marxistas, apenas menciona la actividad militar del Estado.

Tales teorías progresivas y ascendentes reflejan la creencia de que el Estado creció masivamente a lo largo del periodo y aportan como prueba algunos datos (por ejemplo, Poggi, 1990: 109 a 111). Algunos estudios se refieren al crecimiento continuo del número de funcionarios (por ejemplo, Anderson y Anderson, 1967), a cuyo efecto suelen citar la compilación debida a Flora (1983) de las estadísticas históricas del empleo público o las inestimables compilaciones fiscales de Bruce Marshall (1975, 1983; Mitchell y Deane, 1980), que demuestran el enorme aumento de los desembolsos en metálico de la mayoría de los Estados occidentales a lo largo del periodo. La historia fiscal de Gabriel Ardant sostiene, además, que los gastos estatales crecieron en proporción al producto nacional bruto, aunque éste se expandió considerablemente durante el siglo XIX (1975: 221). Tras presentar brevemente ambos tipos de estadística y destacar la irregularidad del crecimiento decimonónico, Grew (1984) aborda sus dos preguntas fundamentales: ¿Por qué se expandió de tal forma el Estado durante el siglo XIX, con un parecido tan asombroso en países tan distintos? Grew parece creer que los Estados crecían, sencillamente, sin medida.

¿Fue así, en realidad? En este capítulo presento los datos cuantitativos sistemáticos del empleo y las finanzas estatales, separando cuidadosamente el tamaño, la esfera de acción y la burocratización para conocer cuál de estos elementos aumentó, y dónde y cuándo lo hizo. El surgimiento del Estado moderno se produjo mediante un proceso complejo, diferenciado e irregular. Pero, sorprendentemente, el Es-

tado no creció en relación con su sociedad civil durante el «largo siglo XIX». No obstante, esta ausencia de una tendencia general confunde tres procesos: un ejército en decadencia y cada vez más aislado, un aumento de la burocracia y un gran crecimiento de las funciones civiles. En este capítulo los analizaré por separado.

He reunido datos sistemáticos para los cinco países referentes al tamaño, esfera de acción y burocratización, tanto en el gobierno central como en los gobiernos local-regionales, es decir, todos aquellos niveles de gobierno por debajo del central o federal. En los territorios austriacos, el «gobierno central» antes de 1867 se refiere sólo al gobierno de Viena; después de 1867, se refiere a los dos ámbitos de la doble monarquía, el de Viena y el de Budapest. Ampliaré la metodología del Volumen I para fundamentar el análisis de los Estados en sus propias estadísticas y analizaré también aquí los gastos y los ingresos. Estos últimos nos ofrecen pistas sobre la relación del Estado con los actores de poder de la sociedad civil, que nos permiten conocer si se encontraba aislado o inserto en las redes de poder de la sociedad (expuse estos conceptos en el capítulo 3). El gasto revela las funciones que cumple el Estado y ofrece un índice fiscal de su tamaño global y de la importancia relativa de sus funciones. He ajustado los totales fiscales a la inflación y el crecimiento demográfico, y los he relacionado con el PNB o la renta nacional, que miden el tamaño de la economía del país.

En la época moderna es posible añadir las estadísticas sobre el empleo estatal. Parece que el número de funcionarios sirve también para medir el tamaño del Estado. No obstante, las cifras relativas al funcionariado son poco fidedignas, y puede que nos digan más sobre la competencia burocrática que sobre el tamaño. Analizaré los datos del funcionariado en el capítulo 13, con el objetivo de conocer el estatus de su empleo, funciones, redes de organización y procedencia social, para establecer su homogeneidad en cuanto elite o burocracia y su aislamiento o inserción en la sociedad civil. Podemos llamar «estadísticas» a estas cifras sin temor al anacronismo, ya que el término se acuñó poco antes de 1800 en inglés y en todas las lenguas europeas con el significado de datos relativos al Estado, lo que demuestra que el proceso de modernización se hallaba en marcha.

En este volumen asistiremos a un relato paradójico del desarrollo del Estado moderno. Por un lado, el siglo XIX asistió a la aparición de un Estado justamente llamado moderno, no mayor en relación con su sociedad civil, sino encargado de muchas más funciones civiles, casi

representativo, más centralizado, burocrático y meritocrático, cuyas infraestructuras penetraban con eficiencia en todo el territorio. Por otro lado, la modernización no fue unitaria sino polimorfa, y respondió en cada una de las fases a distintas cristalizaciones políticas. Todo ello produjo un Estado con infraestructuras muy potentes y, en ciertos aspectos, menos coherentes que sus predecesores.

El tamaño del Estado: tendencias del gasto

Utilizaré en primer lugar las tendencias del gasto como indicador del crecimiento total del Estado. ¿Por qué creció en el sentido de gastar sumas cada vez mayores de dinero?

El cuadro 11.1 presenta las cifras disponibles del gasto a precios corrientes, expresadas en las monedas nacionales de mediados del siglo XIX (algunos países las cambiaron durante el periodo). Para los Estados centrales de Austria, Gran Bretaña, Francia y Prusia-Alemania se dispone de cifras prácticamente desde el principio; en cuanto a las del gobierno federal de los Estados Unidos, se remontan a 1790, inmediatamente después de su constitución. Las austriacas deben emplearse con cuidado, ya que unas veces se refieren a la totalidad de los territorios de los Habsburgo y otras sólo a la mitad occidental (el *Reichshalf* austriaco, que comprendía más del 60 por 100 de la población total). Los gobiernos locales y regionales están documentados con mayor regularidad. Los datos disponibles de las autoridades locales británicas, las provincias y municipios franceses, así como los relativos a los *Länder* y *Gemeinde* alemanes o las estimaciones para los estados americanos y sus gobiernos locales corresponden a varios momentos de mediados del siglo XIX. Algunas de las cifras locales disponibles para Austria datan de finales de siglo, pero confieso que no he comprendido por entero su estructura; consecuentemente, las he omitido.

Como todas las cifras que aparecen en este capítulo, las relativas al gasto deben tratarse con cierta reserva. Las cifras más tardías son también más fiables, y las correspondientes al gobierno central lo son más que las de las instituciones locales y regionales. Por lo general, me he dejado guiar por los historiadores especialistas en lo referente al significado y precisión de los datos que han sobrevivido. No pretendo afirmar, como es lógico, que todas las cifras sean exactas, pero sí que constituyen los datos más completos que se han reunido para

CUADRO 11.1. *Gasto total de los Estados centrales y de todos los niveles de gobierno, 1760-1910, a precios corrientes*

	Austria	Prusia Alemania		Francia		G. Bretaña		EE.UU.	
Año	Central (Millones de florines)	Central (Millones de marcos)	Todos	Central (Millones de francos)	Todos	Central (Millones de libras)	Todos	Central (Millones de dólares)	Todos
1760	58	61		506		18,0			
1770		51		333		10,5			
1780	65	64		411+		22,6			
1790	113	90		633+		16,8	23,0	4,3	
1800	167	106		726		51,0	67,0	11,0	
1810	216			934		81,5	94,0	8,7	
1820	160	201		907		57,5	70,0	19,3	27,7
1830	138	219		1.095		53,7	65,0	17,0	33,1
1840	165	204	234	1.363		53,4	64,0	28,9	67,6
1850	269	252	334	1.473		55,5	66,0	44,8	89,2
1860	367	323	496	2.084		69,6	87,0	71,7	171,7
1870	332	1.380	2.360	2.482	3.348	67,1	92,0	328,5	611,7
1880	432	519	1.851	3.141	4.180	81,5	112,0	301,0	621,1
1890	560	1.044	2.690	3.154	4.289	90,6	123,0	378,9	854,1
1900	803	1.494	4.005	3.557	4.932	143,7	265,0	607,1	1.702,1
1910	1.451	2.673	6.529	3.878	5.614	156,9	258,0	977,0	3.234,0

Notas: Todos los gobiernos = federales + estatales + locales. Para los Estados Unidos, en todos los cuadros, 1900 es en realidad 1902, y 1910 es 1913.

Fuentes:

Austria: Gastos netos, normales y extraordinarios, del gobierno central.

1760 Janetschek, 1959: 188.

1780-1860 Czoerning, 1861: 123 a 127 (en este y en los cuadros siguientes, 1780 es realmente 1781, y 1860 es 1858). Las cifras se refieren a todo el Imperio austriaco.

1870-1910 Wysocki, 1975: 109; el *Reichshalf* austriaco (que desembolsó cerca de un 70% de los ingresos fiscales de la monarquía dual austro-húngara). No hay cifras disponibles para Hungría.
En 1858, 100 florines antiguos valían 105 florines nuevos. No he ajustado estas cifras ni en este ni en los siguientes cuadros.

Prusia-Alemania: He utilizado en este y en los siguientes cuadros los años: 1821, 1829, 1852, 1862, 1872, 1881 y 1892.

1760-1860 Cifras correspondientes al gobierno central de Prusia y a todos los gobiernos alemanes de 1870-1910: Riedel 1866: cuadros XV-XX; Leineweber, 1988: 311 a 321; y Weitzel, 1967: cuadro 1a. Nótese que Andic y Ververka, 1963-1964, aportan cifras algo más elevadas que Leineweber y Weitzel para los gobiernos locales.

1870-1910 Cifras del gobierno central alemán: Andic y Veverka, 1963-1964.*Francia*

Francia

1760-1770 Riley, 1968: 56 y 57, 138 a 148, para 1761 y 1765.

1780-1790 Morineau, 1980: 315, gastos ordinarios sólo para los años 1775 y 1788, por tanto, atenúan ligeramente los gastos totales (porque no hubo guerra en esos años).

1800-1810 Marion, 1927: IV, 112 y 113, 325; los años son 1799-1800 (*L'an* VII de la Revolución) y 1811.

1820 Block, 1875: I, 495 a 512.

1830-1860 *Annuaire statistique de la France*, 1913, «Résumé Rétrospectif», 134.

1870-1910 Delorme y André, 1983: 722; 1870, 1900 y 1910 son, en realidad, 1872, 1902 y 1909.

Gran Bretaña

1760-1910 Gobierno central: Mitchell y Deane, 1980: cuadros de las finanzas públicas; hasta 1800 gastos netos, a partir de ese momento gastos brutos.

1790-1910 Todos los gobiernos: Veverka, 1963: 114, para el Reino Unido, incluida Irlanda. Puesto que Veverka no proporciona referencias, no he podido contrastar su fuente material. Sus cifras sobre la población no son precisas. 1800 es en realidad 1801 en todos los cuadros.

Estados Unidos

1790-1910 Gobierno central (federal), 1790-1910, y todos los gobiernos, 1900 y 1910: Oficina del Censo de los Estados Unidos, 1975: cuadros Y350 a 356. Puesto que esta fuente estándar sólo comprende los beneficios postales, los he deducido y he añadido los gastos postales totales del Departamento Norteamericano del Tesoro, 1947: 419 a 422.

1820-1890 Gobierno estatal, 1820-1890: calculados a partir de los datos en Holt, 1977. Sus datos incompletos para los estados fueron convertidos en cifras per cápita y luego agregados al total de la población estadounidense.

1820-1890 Gobierno local, 1820-1890: calculadas a partir de Legler *et al.*, 1988: cuadro 4, y Legler *et al.*, 1990: cuadro 3. Nótese: (a) son cifras de ingresos totales, no de gastos, y (b) he estimado las cifras para 1820-1840, asumiendo que los ingresos per cápita para todos los gobiernos locales fueron el 8 por 100 de las cifras per cápita para las ciudades en 1820; el 9 por 100 en 1830; y el 10 por 100 en 1840 (la proporción fue del 12 por 100 en 1850, del 16 por 100 en 1860, del 21 por 100 en 1870, y continuaron ascendiendo lentamente). Por tanto, las cifras son sólo aproximaciones.

sí que constituyen los datos más completos que se han reunido para el periodo.

Todos los Estados centrales crecieron masivamente en términos monetarios. En 1760 el Estado central británico gastó 18 millones de libras; en 1911, casi 160 millones. Un aumento igualmente espectacular tuvo lugar en Francia. Los restantes Estados crecieron incluso más: Austria y Prusia-Alemania se multiplicaron por cuarenta (teniendo en cuenta que, a partir de 1870, las cifras austriacas del cuadro 11.1 se refieren sólo al *Recihshalf* austriaco); y los Estados Unidos por más de doscientas veces (a partir de un tamaño minúsculo).

La adición de los gobiernos locales y regionales aumenta el crecimiento, si bien de una forma problemática. En la última parte del periodo existieron gobiernos locales, pero, como los gobiernos centrales de entonces, tampoco nosotros podemos conocer su tamaño o su coste, ya que la autonomía era efectiva (un hallazgo significativo que estudiaré más adelante). La parte de los gobiernos locales y regionales que conocía el Estado central en un primer momento fue muy pequeña, y, por otro lado, hacia el final del periodo, creció aún más que el gobierno no central.

Es poco probable que los costes del gobierno local-regional cayeran durante la primera parte del periodo, de modo que los costes de todos los gobiernos (central y local-regional) debieron de aumentar incluso más de lo que muestra el cuadro 11.1.

Estas cifras proporcionan la prueba fundamental para las historias progresivas y ascendentes. Sin embargo, no son significativas. Deberíamos contar con la inflación, que erosionó el valor de todas las monedas del periodo, y el crecimiento demográfico, muy rápido en todas partes, aunque mayor en Prusia-Alemania y Estados Unidos, debido a la expansión territorial o la inmigración masiva. Si la población crecía a mayor rapidez que los gastos, la auténtica habilidad de los Estados para penetrar en la vida de sus súbditos debería haber disminuido. Cuento con la inflación y el crecimiento demográfico en el cuadro 11.2, que expresa los gastos como porcentaje de sus niveles pér capita en 1911 a precios constantes.

Estas dos rectificaciones eliminan gran parte del crecimiento estatal, si bien en distintos grados según el país y el nivel de gobierno. En términos reales per cápita, el gobierno local-regional creció en mayor medida y más tarde que el gobierno central, salvo en el caso francés, donde no se aprecian diferencias significativas entre sus tasas de crecimiento. Éste fue sustancial y estable en Francia y Austria. Gran

CUADRO 11.2. *Tendencias del gasto per cápita de los Estados a precios constantes, 1780-1910. Estado central y todos los gobiernos (1910 = 100)*

	Francia		Gran Bretaña		EE. UU.		Prusia-Alemania		Austria
Año	Central	Todos	Central	Todos	Central	Todos	Central	Todos	Central
1780			70						
1790			45	32	12		63		
1800			74	51	14		86		21
1810			96	61	9				19
1820	27		77	50	18	8	94		19
1830	31		76	48	14	8	80		14
1840	35		68	42	16	13	68	32	19
1850	43		87	53	22	14	82	46	25
1860	50		86	57	23	18	69	44	25
1870	67	63	69	50	57	35	118	83	35
1880	85	81	71	67	56	37	32	48	41
1890	92	89	75	63	68	51	63	66	54
1900	99	96	103	118	91	80	78	86	72
1910	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuentes: Fuentes de los gastos y notas como en el cuadro 11.1. Las siguientes son fuentes para los precios constantes:

Francia: Lévy-Leboyer, 1975: 64. Precios fijados hasta 1908-1912.

Prusia-Alemania: 1790-1860, Prusia: 1870-1910, Alemania, 1790 es realmente 1786; 1800 se calcula a precios de 1804; 1820 corresponde a 1821.
1790-1800, Weitzel, 1967: cuadro 1a.
1820-1910, Fischer *et al.*, 1982: 155 y 157. Precios fijados hasta 1913.

Gran Bretaña: 1780-1840, Lindert y Williamson, 1983: 41 —su índice de precios «estimado para las ciudades del sur»— empalma con 1850-1910, Deane, 1968. Ambos índices difieren ligeramente durante su periodo de coincidencia parcial, 1830-1850.

Estados Unidos: Oficina del Censo de los EE.UU., 1975; cuadros E52 a 89. El índice de precios al por mayor Warren, Pearson para 1790-1890 empalma con el *Bureau of Labor Statistics Index* para 1890-1910.

Austria: Mühlpeck *et al.*, 1979: 676 a 679. Precios fijados hasta 1914.

Bretaña y Prusia apenas experimentaron algún crecimiento de su Estado central en todo el periodo, y conocieron una pronunciada decadencia a partir de mediados de siglo, pero sus gobiernos locales-regionales crecieron constantemente. En América hubo dos tendencias, una modesta tendencia al crecimiento, exagerada por el efecto cohete de la Guerra Civil sobre las cifras. Explicaré estas tendencias más

adelante. Por el momento, quiero destacar que si bien el crecimiento estatal resulta indudable, presenta muchas variaciones. Cuando se calcula en función de los gastos, el crecimiento estatal no parece haber sido espectacular a lo largo del siglo; por otra parte, el estado local-regional creció más que el central.

En el cuadro 11.3 se investiga esta posibilidad expresando los gastos estatales como porcentaje de la economía nacional, de la renta nacional, el producto nacional bruto (PNB) o la producción total de mercancías.

En este punto debo hacer una advertencia: las estimaciones del tamaño de las economías nacionales son incluso menos precisas que las cifras del gasto. Los economistas, que no se ponen de acuerdo al respecto, trabajan a veces con fuentes rudimentarias que difieren según los países. Sus cifras agregan los datos de la producción, ventas o rentas de las industrias, áreas u ocupaciones concretas al conjunto de los sectores económicos. En este periodo resulta extremadamente difícil estimar la producción del sector de servicios. Algunos historiadores de la economía afrontan la dificultad haciendo estimaciones relativas al producto (PNB); otros, a la renta (renta nacional); y otros aún prescinden por completo de los servicios (producción de mercancías). Así pues, a menos que las diferencias sean grandes, la comparación entre unos países y otros resulta arriesgada. Por mi parte, soy cauto a la hora de comparar distintos conjuntos de estimaciones a lo largo del tiempo, ya que suelen basarse en métodos diferentes. De ahí que esas cifras no puedan emplearse con propósitos sutiles. Por fortuna, la tendencia general es nítida.

Pero la tendencia resulta, además, sorprendente. Contra lo que imagina la mayoría de los lectores —estoy completamente seguro de ello—, las actividades estatales *disminuyeron* como proporción de la actividad económica nacional desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XX. No se trata de datos completos o unánimes, pero muchos de ellos apuntan en la misma dirección.

Las cifras británicas son las más completas. Durante el siglo XVIII se mueven continuamente entre los niveles altos y medios, hasta alcanzar el punto más alto a principios del siglo XIX, para luego decaer de modo constante. Sin embargo, soy algo escéptico respecto al grupo más extremo de las cifras británicas del cuadro 11.3, columna b, que proceden de las estimación de Crafts (1983) sobre la renta nacional durante la Revolución Industrial. Su ajuste a la baja de las estimaciones de Deane y Cole (1962) tendría que traducirse en todos los

gastos gubernamentales para 1811 (año para el que tenemos cifras precisas), equivaliendo al 43 por 100 de la renta nacional. Aunque en 1811 se produjo una gran actividad bélica, dudo de que antes del siglo XX existiera un gobierno con el poder infraestructural necesario para extraer esa proporción de la renta nacional. Incluso durante la gran movilización de la economía que se llevó a cabo en Gran Bretaña con motivo de la Primera Guerra Mundial, con unas fuerzas armadas más voluminosas en términos relativos, se extrajo sólo el 52 por 100. En un determinado momento, la adicción de los historiadores de la economía a los números debe ceder el paso a la verosimilitud sociológica. Pero cualquiera que fuera la proporción exacta de la actividad del gobierno británico, decayó en gran medida durante el largo siglo XIX.

La tendencia resulta aún más marcada para el caso de Prusia-Alemania. Solo su gobierno central anterior gastó un porcentaje mucho más alto del PNB que el resto de los niveles de gobierno en la posterior Alemania imperial. La cifra austriaca más elevada es también anterior, de 1790 (aunque las de 1800 y 1810, de estar disponibles, serían sin duda mayores). No existe una tendencia global en Francia, aunque más adelante sostendré que las cifras disponibles subestiman la actividad estatal durante las guerras revolucionarias y napoleónicas. En cuanto al Estado federal norteamericano no experimentó apenas crecimiento, aparte del impacto de la guerra civil sobre las cifras de 1870. Pero lo llamativo en este caso es la enorme diferencia en términos comparativos, es decir, la escala menor del gobierno americano, a todos los niveles, en comparación con los Estados europeos. Como establece el juicio convencional, los Estados Unidos tenían «menos gobierno» que Europa; en efecto, no cabría esperar otra cosa de lo que hemos calificado en el capítulo 5 de régimen liberal-capitalista.

Es probable que los Estados de finales del siglo XVIII implantaran las más elevadas tasas de exacción fiscal que ha conocido el mundo con anterioridad a las guerras del siglo XX. Aunque no contamos con estimaciones acertadas del PNB para periodos previos, casi todas las conjeturas sitúan los gastos estatales europeos anteriores al siglo XVII muy por debajo del 5 por 100 del producto o la renta nacionales (Bean, 1973: 212; Goldsmith, 1987: 189). Los primeros cálculos pueden aventurarse para 1688, cuando Gregory King estableció una estimación del PNB para Inglaterra y Gales, cuyas cifras han sido revisadas por Lindert y Williamson (1982: 393). Por mi parte extiendo sus

estimaciones al conjunto británico y lo divido por la media de los gastos estatales en 1688-1692 (los primeros años cuyos datos están disponibles; véase Mitchell y Deane, 1980: 390). Esto arroja una exacción por parte del Estado británico del 5,5 por 100 del PNB. Rasler y Thompson (1985) han debido de realizar un cálculo parecido, aunque, por desgracia, no ofrecen detalles de sus métodos. Estiman los gastos en un 5 por 100 del PNB en 1700.

King calcula igualmente el PNB y el gasto holandés para 1695, pero el primero se considera demasiado bajo y el segundo demasiado alto. Sitúa los ingresos del gobierno en el 25 por 100 del PNB (Goldsmith, 1987: 226, lo acepta al valor nominal), lo que supone una cifra excesiva. Aumentando las cifras del ingreso per cápita para la provincia de Holanda (Riley, 1980: 275) y manteniendo una actitud agnóstica hacia las dos escuelas de pensamiento respecto al PNB holandés, arroja un ingreso estimado del 8 al 15 por 100 del PNB. Me causa más impresión la escuela del PNB alto (Maddison, 1983; de Vries, 1984) que aquellos que se aproximan más a King (es decir, Riley, 1984). Finalmente, me decido por una cifra cercana al 10 por 100, en un país cuyos impuestos se consideran altos. De modo que los Estados del siglo XVII debieron de gastar del 5 al 10 por 100 del PNB, y es probable que el porcentaje se mantuviera en los primeros años del siglo XVIII. Rasler y Thompson estiman el gasto británico al 9 por 100 del PNB en 1720, aunque tampoco esta vez explican sus métodos. Podemos establecer el gasto francés de 1726 alrededor del 6,5 por 100 del PNB (gasto en Morineau, 1980: 315; PNB según Goldstone, 1991: 202), aunque posteriormente creció; Riley (1986: 146) lo estima durante los años de paz de 1744 a 1765 del 8 al 10 por 100, y del 13 al 17 por 100 en tiempos de guerra.

Así pues, la tendencia al alza del siglo XVIII que demuestran los cuadros había comenzado con anterioridad. La conclusión es tan clara como lo permite la imperfección de las fuentes. Si se mide por las finanzas, se aprecia una rápida expansión de los Estados durante todo el siglo XVIII, antes de 1815, y una importancia social que no volverían a tener hasta la Primera Guerra Mundial; luego, en el siglo XIX decaen. *El primer cambio de gran importancia para la vida del Estado —en cuanto a su tamaño— tuvo lugar durante el siglo XVIII.* Como demostraré en el Volumen III, la siguiente fase de crecimiento tuvo lugar a mediados del siglo XX, a raíz de la Primera Guerra Mundial, de modo que el temor de Weber al carácter «arrollador» del Estado no refleja la realidad de su propia época, tanto si se refería a la

CUADRO 11.3. *Porcentaje de los gastos gubernamentales en relación con la renta o el producto nacional, 1760-1910*

	Prusia-Alemania RN		Gran Bretaña RN				Gran Bretaña PNB		Austria PNB	Estados Unidos PNB		Francia PNB		Francia PM
Año	Central	Todos	Central		Todos		Central	Todos	Central	Central	Todos	Central	Todos	Central
			a	b	a	b								
1760	35			22								12		16
1770	23			11								7		9
1780	22			22					17			8		
1790	24			12		16			27	2,3		12		13
1800	23		19	27	29	36				2,4		9		12
1810			27	37	31	43				1,5		10		14
1820	19		20	23	24	28				2,9	4,2	7		14
1830	17		16	19	19	23	12	15	9	1,8	3,5	7		12
1840	12	14	12		14		11	13	9	1,7	4,0	8		12
1850	9	12	10		13		10	12	11	1,7	3,4	9		13
1860	8	12	11		13		9	10	11	1,9	4,5	9		13
1870	15	18	7		10		6	9	11	4,5	8,3	10	13	14
1880	4	13	8		11		6	9	12	2,9	5,9	13	16	18
1890	5	13	7		10		7	9	13	2,9	6,5	14	18	19
1900	5	14	9		16		8	14	15	2,8	7,9	12	16	19
1910	6	16					7	12	17	2,5	8,2	11	15	15

Notas: A finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, el producto nacional bruto sobrepasó la renta nacional aproximadamente en un 15 por 100, y la producción de mercancías en un 25 por 100.

RN = renta nacional; PNB = producto nacional bruto; PM = producción de mercancías.

Fuentes: Fuentes de los gastos y notas como en el cuadro 11.1

Producto nacional bruto, renta nacional y producción de mercancías.

Prusia-Alemania

1760-1800 Weitzel, 1967: cuadro 1a, empleando las extrapolaciones que él sugiere para los años que faltan.

1820-1910 Leineweber, 1988: 311 a 321, producto nacional al coste de los factores.

Estados Unidos: Todos los años: Mitchell, 1983: 886 a 889 (PNB).

Austria:

1780-1790 Renta nacional: Dickson, 1987: I, 136 y 137, estimando la renta nacional de 1780 en 357 millones de florines (el punto medio de su banda estimada), y la de 1790 en 410 millones de florines. No he empleado las estimaciones del porcentaje de Dickson. Se refieren a los ingresos ordinarios en tiempo de paz, que son inferiores a los gastos reales.

1830-1910 PIB para el *Reichshalf* austriaco: Kausel, 1979: 692. He calculado el 70 por 100 de los gastos de Czoernig para 1830-1860. Con posterioridad a la división del Imperio en 1867, Austria contribuyó con el 70 por 100 del presupuesto conjunto y Hungría con el 30 por 100 (en 1908 la contribución húngara había aumentando hasta el 36,4 por 100, pero no he ajustado mi cifra para 1910).

Gran Bretaña: Renta nacional estimada: (a) Deane y Cole, 1962: 166; (b) Crafts, 1983, extrapolando para los años 1770, 1790, 1810, 1820, 1830-1910. PNB: Deane, 1968: 104 y 105.

Francia: PNB para 1760-1790: Goldstone, 1991: 202. PNB 1800-1810 (calculado en realidad a partir de las cifras para 1781-1790 y 1803-1812): Markovitch, 1965: 192. Para el gasto de 1788, Morineau, 1980: 315; para 1820-1910, Lévy-Leboyer, 1975: 64. Producción de mercancías = valor de mercado de los productos agrícolas e industriales (es decir, excluyendo los servicios). 1740-1767: Riley, 1986: 146 (la cifra de 1770 corresponde en realidad a 1765). 1790-1910: Marczewski, 1965: LXX.

Primera Guerra Mundial como si estaba prediciendo el futuro (murió en 1920). De igual modo yerran las historias progresivas y ascendentes sobre un Estado de crecimiento ilimitado, cuya presencia era cada vez más importante para la sociedad del periodo del capitalismo industrial. Aunque el tamaño financiero absoluto del Estado crecía a precios corrientes, y en la mayoría de los casos aumentaba modestamente en términos reales per cápita, su tamaño fiscal relativo a la sociedad civil era en ese momento estático o se encontraba en decadencia.

Se trata, pues, de un descubrimiento importante y poco previsible, que merecería algún tiempo más para evaluar las fuentes de datos y los métodos, con el fin de comprobar su validez y fiabilidad; sin embargo, no lo haré, ya que la tendencia a la baja se interpreta fácilmente y se adecua a otras tendencias. Veremos que existieron en el siglo XIX dos tendencias contrarias que, por lo general, no se anularon entre sí: el gran aumento de las funciones civiles del Estado se vio suficientemente contrarrestado en la mayoría de los países por la disminución del militarismo.

¿Por qué decayó la tradicional cristalización militar del Estado, después de haber aumentado espectacularmente durante el siglo XVIII? Tres son las razones que explican la tendencia a la baja y las excepciones del cuadro 11.3. En primer lugar, los gastos estatales variaron, como había ocurrido durante milenios, en función de la paz o de la guerra, y siempre se dispararon al comienzo de los conflictos. El cuadro 11.3 lo evidencia sólo en parte, ya que a veces oscurece el papel de la guerra en las finanzas gubernamentales de los Estados Unidos y de Austria. En este último país, las cifras de gasto suben en 1790, por la necesidad de sofocar las rebeliones de Flandes y Hungría. Pero las dos décadas siguientes de lucha contra Napoleón revelarían cifras incluso mayores para las estimaciones disponibles del PNB. Los Estados Unidos disfrutaron de paz durante todos los años enumerados en el cuadro, pero si añadiéramos los gastos del periodo de la guerra civil, encontraríamos sin duda un aumento disparado. En 1860, conforme al cuadro 11.1, los gastos federales de los Estados Unidos ascendieron a 72 millones de dólares.

En 1864-1865 se multiplicaron por treinta los gastos de las dos facciones enfrentadas, hasta alcanzar 1,8 billones de dólares; siendo los de la Unión de 1,3 billones en 1865, de ellos, el 90 por 100 militares (Oficina del Censo de los Estados Unidos, 1961: 71); y los de la Confederación, de algo menos de 500 millones en 1864 (Todd, 1954:

115, 153). Este total excede en mucho a los gastos federales en cada uno de los años sucesivos (pese al aumento de la población y la riqueza) hasta 1917, durante la Primer Guerra Mundial, momento en que absorbieron el 28 por 100 del PNB. Como muestra el cuadro 11.3, se trata de la media de los Estados empeñados en grandes guerras. La paz redujo casi siempre el Estado americano, en tanto que las guerras lo agigantaban súbitamente.

El cuadro 11.3 muestra también el impacto de la guerra sobre los restantes Estados. En el caso de Prusia-Alemania, el gasto mayor se produjo en 1760, con motivo de la Guerra de los Siete Años, y el crecimiento de 1870 se debe a la guerra franco-prusiana, que representa el mayor gasto real per cápita del cuadro 11.2. En Gran Bretaña se alcanzó el punto máximo del siglo XVIII en 1760 y 1780, por la Guerra de los Siete Años y la Revolución Americana, mientras que las elevadas cuantías de 1800 y 1811 indican la enorme carga de las guerras napoleónicas. Para Francia la primera cifra máxima data de 1760, la Guerra de los Siete Años, pero las de 1800 y 1811 no reflejan el coste de la revolución o de las guerras napoleónicas, porque Francia se encontraba subvencionada por sus países ocupados. De 1740 a 1815, la mayor parte de los Estados participaron en grandes guerras durante los dos tercios del periodo, con el consiguiente aumento progresivo de la demanda de recursos humanos, impuestos y producción agrícola e industrial. Sus Estados se militarizaron. Pero decir esto de Prusia no deja de ser un convencionalismo, y Brewer (1989) lo ha subrayado también para la Gran Bretaña constitucional, aunque podría decirse de *todos* los Estados de finales del siglo XVIII. El proceso de modernización que abordaron los Estados no fue mucho más allá de redes elaboradas de sargentos instructores, oficiales de reclutamiento, bandas de reclutamiento forzoso y oficiales encargados de los impuestos.

Durante el siglo XIX el Estado no rebajó sus actividades. Poco después de que acabara el periodo, la Primera Guerra Mundial produjo los efectos acostumbrados. En 1918 los gastos totales del gobierno británico se dispararon al 52 por 100 del PNB, y los costes militares y de la deuda de guerra contribuyeron en más del 90 por 100 (Peacock y Wiseman, 1961: 153, 164, 186). No resulta fácil calcular el PNB francés durante la guerra, pero los costes militares y de la deuda contribuyeron también en un 90 por 100 al inflado presupuesto estatal (*Annuaire Statistique de la France*, 1932, 490 y 491). Un aumento similar se produjo en Alemania y probablemente en

Austria (donde sólo han sobrevivido las cifras del primer año de guerra; véase *Österreichisches Statistisches Handbuch*, 1918: 313). Sólo los Estados Unidos se apartan algo de la tendencia durante la Primera Guerra Mundial, ya que la proporción del PNB de su gobierno central se triplicó, pero sólo del 2 al 6 por 100 de 1914 a 1919.

Los datos apuntan directamente a la causa principal de la disminución relativa del Estado decimonónico: la frecuencia y duración de las guerras europeas, que habían sido altísimas durante el siglo XVIII, disminuyeron de 1815 a 1914. Nada hubo en Europa que pudiera compararse a la Revolución Francesa o las guerras napoleónicas, ni siquiera a las luchas de mediados del siglo XVIII: la Guerra de Sucesión austriaca y la de los Siete Años. Las guerras que enfrentaron a Austria con Prusia y con Francia implicaron a grandes ejércitos, pero sólo durante periodos cortos. Ni la guerra de Crimea ni las perennes campañas de sus respectivos imperios exigieron un gran esfuerzo a Francia o Gran Bretaña (aunque todo ello se reflejó en los gastos estatales durante los años más relevantes). Sólo los Estados Unidos libraron una guerra (civil) comparable a las de épocas anteriores. Así se explica por qué aumentaron allí los gastos, mientras disminuían en Austria, Gran Bretaña y Prusia-Alemania.

La segunda causa de las tendencias que indica el cuadro 11.3 residió en que el desarrollo de las tácticas militares, de la organización y de la tecnología rebajaron los costes militares en los momentos de paz del siglo XIX. La feliz idea bonapartista de arrojar contra el enemigo masas de soldados inexpertos dotados de cañones demuestra que la cualificación de los soldados estaba en decadencia. En realidad, ya no se necesitaban muchos profesionales. En época de paz, el ejército permanente consistía en un cuadro de profesionales fijos, junto a unas cohortes rotativas de jóvenes conscriptos y reservistas, que se agrandaba rápidamente al comienzo de la guerra. A mediados del siglo XVIII los ejércitos prusiano, austriaco y francés se habían duplicado a los pocos meses de la guerra; durante los conflictos napoleónicos, austroprusiano y francoprusiano, se multiplicaron entre cuatro y cinco veces. La tendencia continuó durante la Primera Guerra Mundial, hasta multiplicarse por ocho en dos años del comienzo. Sin embargo, el crecimiento de los ejércitos no afectó a las armadas, que mantuvieron su composición profesional. Pero Gran Bretaña, ante todo una gran potencia naval, ahorró poco durante la paz. En el capítulo 12 analizaré la naturaleza cambiante del militarismo estatal.

La tercera causa de las tendencias que presenta el cuadro 11.3 constituye un fenómeno tradicional. El efecto de la guerra sobre los gastos estatales se prolongó durante la paz, como había ocurrido durante gran parte del milenio anterior. Los Estados pedían créditos durante la guerra y al llegar la paz tenían que afrontar la deuda. Al acabar las guerras napoleónicas, los gastos militares directos de Gran Bretaña disminuyeron, pero el servicio de la deuda correspondiente a los empréstitos del periodo bélico absorbió una proporción enorme del presupuesto durante los cincuenta años siguientes. Como muestra el cuadro 11.3., el gasto del gobierno británico en relación con la renta nacional y PNB decayó lentamente, pero no tocó fondo hasta 1870. Pero cuando arreciaban las guerras, como ocurrió en gran parte de Europa de 1740 a 1815 o en la Austria del siglo XIX, apenas se tocaba fondo estallaba un nuevo conflicto. Hasta que no llegó el siglo XIX no cambió la situación para la mayoría de los Estados.

Combinando las tres razones militares se explican las principales corrientes que podemos discernir en el cuadro 11.3. En efecto, son capaces de explicar por qué el gasto estatal no disminuyó de modo más espectacular. La respuesta es que los Estados gastaban cada vez más en otras funciones, especialmente civiles (*cf.* Grew, 1984). El cuadro 11.4 detalla la proporción de los gastos del gobierno central en funciones civiles y militares y de todos los gobiernos (central más local-regional) para las funciones civiles (los gobiernos locales-regionales gastaban menos en la guerra). El residual, que no aparece en el cuadro, corresponde al servicio de la deuda. El endeudamiento oscurece la distinción entre gastos militares y civiles, puesto que durante el siglo XIX los empréstitos no fueron tanto a la financiación de las guerras como al pago de grandes proyectos públicos como escuelas y ferrocarriles. Puesto que en el caso de Alemania las fuentes estadísticas proporcionan la finalidad exacta de cada deuda podemos corregir esta atenuación; no obstante, incluso sin la corrección el cuadro revela una tendencia muy clara para todo el siglo.

Todas las columnas muestran que los gastos civiles aumentaron relativamente durante el periodo. En 1911, entre el 60 y el 80 por 100 del total de los gastos gubernamentales se destinaba a funciones civiles. Si añadimos la deuda civil, la cifra correspondiente a Alemania ascendería del 67 al 75 por 100 (Leineweber, 1988: 312 a 316), por consiguiente, la auténtica banda para el conjunto de los gastos civiles en todos los Estados va del 70 al 85 por 100. La ausencia de datos del gobierno local-regional nos impide contar con una cifra neta para la primera parte del

periodo, pero las tendencias de los datos disponibles me llevan a pensar que la banda fue, a mediados del siglo XVIII, sólo ligeramente más elevada que a las cifras del Estado central que aparecen en el cuadro, es decir, entre el 15 y el 35 por 100. *El porcentaje aumenta en los gastos civiles —desde casi el 25 por 100 en la década de 1760 hasta aproximadamente el 75 por 100 en la década de 1900—, lo que indica un segundo cambio de gran trascendencia en las esferas de acción del Estado moderno, cuya importancia no encuentra parangón en la historia.* El crecimiento fue continuo desde mediados del siglo XIX en adelante. No se vio muy afectado por el ciclo económico: la gran depresión agrícola que comenzó a partir de 1873 no surtió un efecto muy marcado (como podría sugerir la teoría de la crisis de Higgs). Tampoco, como tendremos oportunidad de ver, crecieron los gastos asociados a la respuesta a la crisis, tales como los de tipo asistencial.

Aparte de Austria, el crecimiento civil se produjo sobre todo en los gobiernos locales y regionales, en correspondencia con una especie de división del trabajo: las nuevas funciones civiles incumbían a los gobiernos locales y regionales, en tanto que el gobierno central retenía su militarismo histórico, especialmente aquellos de menos tamaño. Encontramos el caso extremo en los Estados Unidos posteriores a la guerra civil, cuyo modesto Estado federal era predominantemente militar incluso en 1910. Los Estados centrales de tamaño moderado, Alemania, Francia y Gran Bretaña, se dividían con bastante equidad las funciones militares y civiles. En los territorios austriacos, como vimos en el capítulo 10, la incapacidad para alcanzar un acuerdo constitucional con las provincias permitió conservar al gobierno central de los Habsburgo gran parte de sus poderes y la mayoría de las nuevas funciones civiles (compartidas desde 1867 con el gobierno central húngaro de Budapest).

La división de las funciones entre los gobiernos centrales o locales variaba según los países. El gobierno federal americano gastó menos que los gobiernos de los estados desde el momento mismo en que empezamos a disponer de cifras. En el *Reich* alemán, los gobiernos locales y regionales superaron pronto al central, aunque este caso tiene una significación especial. La propia Prusia, el mayor de los *Länder* regionales, gastó más dinero que el gobierno central del *Reich*, pero en cierto sentido se trataba también del Estado «alemán». Tal disparidad no se invirtió hasta que ambos países entraron en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados centrales de Austria, Francia y Gran Bretaña superaron los gastos locales y regionales durante todo el periodo. Y

también difirió la coordinación. En los países centralizados, como Francia y Gran Bretaña, todos los niveles de gobierno coordinaron sus actividades a finales del siglo XIX, al tiempo que las cuentas locales-regionales se sometían al gobierno nacional. En la Alemania parcialmente federal, la coordinación y la contabilidad se retrasaron más. En la Austria confederal, fue más particularista y variada según la provincia y el *Reichshalf*. En cuanto a los Estados Unidos, el gobierno federal no sólo tuvo escaso contacto con los gobiernos locales, sino que apenas supo nada de sus cuentas durante todo el periodo. La coordinación se habría considerado una injerencia en las libertades que el Tribunal Supremo no habría consentido. Los Estados variaban, pues, de modo considerable en lo que he llamado su cristalización «nacional»: la centralización o el confederalismo.

Tales variaciones hacen más notables las tendencias generales. Como ha observado Grew (1984), la ampliación de los campos de acción se produjo en Estados europeos con diferentes constituciones y niveles de desarrollo económico. Todos los gobiernos del siglo XIX abordaron nuevos gastos no militares. En contraste con los siglos anteriores, los gastos civiles aumentaron en los periodos de paz, en lugar de constituir, como en otras épocas, un subproducto de la guerra. En 1846 el gasto civil del Estado central británico era más o menos el de 1820 y de los restantes años de intervención. Pero a partir de 1847 el aumento se produjo casi todos los años, con independencia de la guerra o de la paz. La pauta se confirma en todas las estadísticas nacionales a disposición. La guerra había dejado de ser el único motor del crecimiento estatal.

Podríamos establecer fechas simbólicas para la transición del Estado central: el punto en el que los gastos civiles sobrepasaron por primera vez a los militares, controlando los efectos del servicio de la deuda. En las cuentas se produce ya en 1820 para el caso de Prusia, pero resulta un dato engañoso porque el ejército se utilizaba en la administración principal, que lo financiaba en parte. Sin embargo, Gran Bretaña alcanzó sin lugar a dudas su posición en 1881; quizás la primera vez en la historia de los Estados organizados en que la gran potencia de una determinada época dedicó una mayor parte de las finanzas de su Estado central a una actividad pacífica. El Estado central era aún una máquina de guerra, pero ahora dedicaba al menos la mitad de su energía a las funciones civiles. Podemos comenzar el viaje hacia el modelo polimorfo de Estado moderno (como prometí en el capítulo 3) calificando este Estado a medias civil y a medias mi-

CUADRO 11.4. *Porcentajes de los presupuestos asignados por todos los gobiernos a los gastos civiles y militares, 1760-1910*

	Austria		Prusia-Alemania			Francia			Gran Bretaña			Estados Unidos		
	Central		Central		Todos	Central		Todos	Central		Todos	Central		Todos
Año	Civil	Militar	Civil	Militar	Civil	Civil	Militar	Civil	Civil	Militar	Civil	Civil	Militar	Civil
1760			9	86		14	50		6	75				
1770			9	90					15	39				
1780	28	51	8	84		24	33		7	66				
1790	21	62	25	75		21	27		13	31	36	26	19	
1800	14	61	22	74		24	64		5	31	36	12	56	
1810	15	57				9	75		11	59		16	49	
1820	33	35	45	38		48	25		17	29	31	16	56	60
1830	35	33	50	34		47	30		18	28	31	34	65	66
1840	35	33	53	35		49	34		19	26	31	34	65	72
1850	34	47	48	37		29	35		22	27	35	42	49	75
1860	39	51	49	36		17	39		34	25	41	49	46	79
1870	46	24	22	40	35	32	26	49	28	32	50	24	35	81
1880	45	19	15	82	63	39	30	54	35	53	61	24	41	80
1890	39	19	25	78	65	32	34	50	37	36	59	34	55	75
1900	47	17	35	59	64	36	38	54	36	48	65	28	64	74
1910	60	16	40	52	67	40	37							

Nota: Gastos civiles + gastos militares + servicio de la deuda (no aparecen en el cuadro) = 100%.

Fuentes: Véase también cuadro. 11.1.

Austria

1780-1860 Czoernig, 1861: 123 a 127

1870-1910 Wysocki, 1975: 109 a 113; Wagner, 1987: 300, 590 y 591; Mischler y Ulbrich, 1905: II, 95 (sólo el *Reichshalf* austriaco). A veces se han vuelto a calcular las cifras de las fuentes. Las cifras de 1870 y 1910 y los gastos totales son de Wysocki; los gastos militares de Wagner, calculados de nuevo para excluir la contribución militar de Hungría al ejército conjunto y a la fuerza de reserva Honved. Las cifras de la deuda de 1880-1900 son de Mischler y Ulbrich. Los gastos civiles = el resto. De ahí que las cifras austriacas deban tratarse con cautela.

Prusia-Alemania: 1820-1870 = Prusia: 1880-1910 = Alemania.

1760-1860 Riedel, 1866: cuadros XV, XVI, XVIII, XX.

1820-1910 Andic y Veverka, 1963-1964: 262; Leineweber, 1988: 312-316. He ajustado sus cifras de 1820-1870 para eliminar los «costes de la deuda civil» de los gastos civiles (para permitir la comparación de las cifras alemanas con las de los restantes países).

Francia

1760 Riley, 1986: 56 y 57, 138 a 148 (el año es 1761).

1780-1790 Morineau, 1980: 315, sólo gastos ordinarios (es probable que exagere los gastos civiles en un 30 por 100 aproximadamente) para los años 1775 y 1788.

1800-1820 Marion, 1927: IV, 234, 238, 241 y 242, 325, 1928: V, 14, 19; Block, 1875: I, 495 a 512. Presupuestos promedios de 1800 para 1801, 1802 y 1803, que asignan del 23 al 25 por 100 a los gastos civiles. 1810 es en realidad 1811; 1820 es una mezcla de partidas de los presupuestos de 1821 y 1822 para las que se dispone de cifras, pero es sólo aproximado.

1830-1860 *Annuaire statistique de la France*, 1913; Block, 1875: I, 491 a 493.

1870-1910 Delorme y André, 1983: 722, 727.

Gran Bretaña: Las fuentes para el gobierno central como en el cuadro 11.1. Mitchell y Deane dan sólo las «principales partidas integrantes» del presupuesto. He asumido que las restantes partidas son civiles. En 1860 estas partidas alcanzan el 12 por 100 del presupuesto total, y muchos menos en los restantes años. La cifra del gobierno local en el Reino Unido, durante 1790 se debe a Veverka, 1963; otros gobiernos locales, a Mitchell y Deane, 1980: cuadros de las finanzas públicas. Se dispone de datos completos a partir de 1880 (en realidad, 1884). Procedimientos estimados para los años anteriores: 1820-1860, entradas por la Ley de Pobres de Inglaterra y Gales más entradas de los condados de Inglaterra y Gales más el 12,5 por 100 del gasto adicional de Escocia. Nótese que Veverka, 1963: 119 estima los gastos del Reino Unido en un 34 por 100 para 1840 y en un 47 por 100 para 1890.

Estados Unidos: Fuentes como en el Cuadro 11.1. Los pagos a los veteranos se cuentan como gastos militares. No considero gastos militares para los gobiernos locales (los gobiernos estatales costeaban la guardia nacional).

litar de «Estado diamorfo». Como tal, se trata de una novedad en la historia de los grandes Estados. No encontramos nada semejante en el Volumen I. A finales del siglo XIX y principios del XX el Estado no era sencillamente un ente aislado que se arriesgaba a perecer cuando reducía sus ejércitos, como había ocurrido antes en Sajonia o Polonia. *Todas* las grandes potencias lo hicieron, y lo mismo puede decirse de las pequeñas: Bélgica, Noruega y Suecia (*Annuaire Statitisque de la Belgique*, 1895; Woytinsky y Woytinsky, 1955; *Norges Offisielle Statistikk*, 1969: cuadro 234; Therborn, 1978: 114 a 116).

La semejanza resulta asombrosa. Las potencias menores fueron sólo ligeramente menos militaristas que las grandes, mientras que el gobierno total de los Estados Unidos lo es sólo algo menos y su gobierno central lo es mucho más que las grandes potencias europeas. Pero no encontramos otras diferencias significativas. Ni estos hechos ni las estadísticas relativas al funcionariado permiten sostener la idea frecuentemente expresada del mayor volumen de los Estados francés, austriaco y británico. Anteriormente he citado a Marx respecto a Francia, pero Kennedy (1988: 217) dice lo mismo sobre Austria en el siglo XIX, y Bruford (1965: 98 y 99) y Blanning (1974: 11 a 15) lo sostienen para los Estados alemanes del siglo XVIII. Ningún dato sobre el fisco o el personal fundamenta tales estereotipos.

Comparto también la afirmación de Davis y Huttenback (1986), repetida por O'Brien (1988), respecto a que los compromisos militares del Imperio británico disminuyeron a finales del siglo XIX. Es cierto que los gastos británicos per cápita fueron los más altos, pero también lo fueron sus gastos civiles. Gran Bretaña era el país más rico de Europa y podía permitirse ambas cosas, como observa también Kennedy (1989). Como proporción del PNB, ni los gastos civiles ni los gastos militares de Gran Bretaña diferían significativamente de los de otras grandes potencias europeas. En 1910 los gastos militares como proporción del PNB se movían en una banda del 4,1 por 100 de Francia, aproximadamente el 2,9 por 100 de Alemania, el 2,8 por 100 de Gran Bretaña, el 2,7 por 100 en Austria y el 1,2 por 100 en los Estados Unidos [1]. Francia (como Rusia) agotaba sus recursos económicos para mantener el estatus de gran potencia, en tanto que el aisla-

[1] Las cifras no se apartan mucho de los cálculos que hizo Hobson (1991) de los gastos militares como porcentaje de la renta nacional: Francia 4,0 por 100, Alemania 3,3 por 100, Gran Bretaña 3,0 por 100, Estados Unidos 1,1 por 100 y Rusia moviéndose en una banda del 3,5 al 3,8 por 100.

miento hemisférico aliviaba la presión en América. Son las únicas desviaciones de la corriente principal.

Hemos asistido a dos enormes cambios en la vida del Estado moderno. Durante el siglo XVIII se formó un Estado masivamente militarista que a finales del siglo XIX se había transformado en un Estado diamorfo, civil y militar. Los Estados del siglo XVIII habían sido los primeros en penetrar por completo en sus territorios, gracias a las redes de funcionarios de reclutamiento y de asesores y recaudadores de impuestos. Todas estas cosas se mantuvieron, pero ya no eran sólo el «Estado», sino un conjunto de instituciones estatales compartidas con una multitud de funcionarios civiles.

La esfera de acción del Estado

El paso del gasto (y también del personal) en actividades militares al gasto en actividades civiles no suele verse como un aumento de las esferas de acción del Estado (como subraya Grew, 1984), Pero ¿qué funciones civiles aumentaban en ese momento? No resulta fácil comparar los datos con tanto detalle, de hecho sólo podré proceder en parte sistemáticamente para el periodo comprendido entre 1870 y 1911, mas, por fortuna, se trata de la época de mayor *crecimiento.*

El Estado tradicional, dominado por la guerra, había cumplido también tres tareas principales (en el capítulo 4 hemos comprobado que también generó más legislación local particularista). La casa y la corte del monarca constituían el corazón; los nervios, el aparato fiscal que sostenía las actividades militares; y la cabeza, la administración de la ley y el orden. A mediados del siglo XVIII, los tres desembolsaban más del 75 por 100 de los gastos civiles de menor cuantía en Austria, Francia y Gran Bretaña (falta una crisis prusiana, y los Estados Unidos aún no existían). Pero el cuadro 11.5 muestra que en 1910 esto había disminuido hasta una banda comprendida entre el 5 y el 20 por 100 de gastos civiles; un cambio bastante significativo. A partir de 1870 aumentó en términos monetarios (no en Francia), pero no en términos reales o relativos. De hecho, debieron de existir menos recaudadores de contribuciones en 1910 que en 1760; también las cortes y las casas reales eran más pequeñas, cuando no estaban abolidas, como en Francia o los Estados Unidos; y aunque las fuerzas de la policía civil se encontraban en pleno crecimiento, no era este el caso de los funcionarios judiciales.

CUADRO 11.5. *Porcentaje del aumento de las partidas correspondientes al gasto civil, 1870-1910, y contribución porcentual al presupuesto total del Estado en 1910*

	Austria Central		Francia Central		Alemania Todos		Gran Bretaña Todos		Estados Unidos Todos	Estados Unidos Gobierno central
	Aumento	Contr.	Aumento	Contr.	Aumento	Contr.	Aumento	Contr.	Contr.	Aumento
Administración/Ley y orden	11	6	(33)	14	42	21	21	6	11	183
Educación	67	3	429	9	248	19	531	19	18	400
Otras clases de asistencia			70	3	151	10	152	8	5	432
Transporte	398	29	34	9	89	11	338	12	17	238
Otros servicios económicos	14	2	83	2	188	2	385	14	13	
Correo y telégrafos	74	6					259	8	8	
Otros		14		1		4		0	8	

Nota: Las cifras agrupadas indican una disminución.

Fuentes. Véase también el cuadro 11.1.

Austria: Wysocki, 1975: 230 a 241. Cifras del *Reichshalf*. El elevado número de categorías englobadas en «otros» se debe a la naturaleza incompleta de la presentación de Wysocki. Sospecho que la mayor parte del epígrafe «otros gastos» son desembolsos del Ministerio de Finanzas hacia otros departamentos.

Gran Bretaña: El periodo corresponde a 1880-1910: sólo hay cifras disponibles para el periodo de 1880 (1884 para algunas partidas) a 1910 y para el gobierno central del Reino Unido más los locales de Inglaterra y Gales. De ahí que las cifras exageren algo la contribución de las partidas provistas principalmente por el gobierno central (es decir, los servicios postales). También minimizan los costes administrativos, al no separarlos del gobierno local.

Estados Unidos: Contribución de 1913 a los gastos de los gobiernos federales, estatales y locales (Oficina del Censo de los Estados Unidos, 1976: cuadro Y533 a 566). Sólo se dispone del crecimiento del periodo 1870-1900 en el nivel estatal de gobierno, calculado a partir de Holt, 1977.

El cuadro 11.5 muestra que esas funciones tradicionales del Estado se habían visto superadas en todas partes por dos áreas principales de crecimiento, la educación y el transporte, seguidas de otras dos menores, los servicios postales y telegráficos y «otros servicios económicos», primordialmente actividades ambientales y subsidios agrícolas e industriales. El fenómeno aparece con la misma fuerza en todos los países, aunque la división de las funciones entre el gobierno central y el local-regional difiere bastante.

El crecimiento de los gastos centrales en Gran Bretaña aparece asociado sobre todo al aumento de la alfabetización discursiva: educación, correos y telégrafos. En 1901 representaba el 70 por 100 del gasto civil total.

Las comunicaciones, materiales y simbólicas, la educación y las carreteras encabezaban el gasto local y regional. En los presupuestos franceses predominaban también la educación, el correo y el servicio de telégrafos, los caminos y los puertos; en los americanos, sobresalían la educación, las carreteras y el servicio postal, aunque sólo este último era de competencia federal. En los estados individuales americanos, la mayor expansión correspondió con mucho al ámbito educativo (Holt, 1977).

En Alemania la educación es de nuevo el área mayor de crecimiento, seguida de la subvención estatal, cuando no de la propiedad, de varias empresas, entre ellas los ferrocarriles. Aquí el ferrocarril desempeñó un cometido especial en el gobierno más grande del país, el gobierno regional de Prusia, donde absorbió algo menos de la media de su gasto total (y bastante más que su ingreso, como veremos más adelante). El ferrocarril copó la mayor parte del presupuesto civil austriaco, seguido (como en Alemania) por el gasto en otras empresas estatales o privadas. Un modelo similar aparece en algunas de las potencias menores, como Noruega y Bélgica, donde predominan la educación, el ferrocarril y las empresas dirigidas por el Estado. Recuérdese que se trata de gastos *brutos*; las industrias nacionalizadas aportaban también ingresos, incluso beneficios. Volveré sobre ello más adelante.

Los presupuestos revelan tres formas de crecimiento: una universal, otras dos más variables de lo que reconoce Grew (1984):

1. El principal crecimiento corresponde en todas partes a lo que denomino funciones *infraestructurales* del Estado (como hace Wysocki, 1975, al comentar el crecimiento austriaco). Las infraestructu-

ras permiten al Estado la extensión de sus comunicaciones materiales y simbólicas por todo el territorio. En términos fiscales no existe otra función mayor ni más universal durante el periodo.

2. Pero existían grandes diferencias entre uno y otro Estado en cuanto a la extensión de la *nacionalización* de los recursos e infraestructuras materiales, en especial de los ferrocarriles. Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos no los nacionalizaron, aunque los regulaban y subvencionaban con frecuencia; Francia poseía las vías, pero no el material móvil; otros Estados gestionaban los ferrocarriles, y otros aún, muchas otras empresas.

3. El cuadro 11.5 recoge los inestables comienzos del *Estado asistencial*, especialmente en Alemania. El gobierno local participó con una pobre contribución (mal conocida, además, por lo inadecuado de los archivos que han sobrevivido). Desde mucho atrás, algunos gobiernos centrales proporcionaban asistencia a sus soldados veteranos (hecho que aparece aquí oscurecido por la presentación de mis datos), pero en este momento los Estados centrales comenzaban a conceder los primeros derechos de ciudadanía social.

Aunque analizo y explico el aumento de las tres esferas de acción civiles en el capítulo 14, permítaseme establecer ahora una cuestión preliminar: cuando se las compara con las tradicionales funciones civiles del Estado, cabe pensar que debieron de resultar muy populares y suscitar un elevado consenso, al menos entre los actores que tuvieron poder político durante el periodo. Entre las antiguas funciones del Estado, los ejércitos, la ley y el orden presentaban una dosis considerable de militarismo interno; armadas y ejércitos se empleaban también en el extranjero a mayor gloria del rey y del antiguo régimen; y la corte gastaba en consumo personal. Pero la utilidad de los nuevos gastos infraestructurales podía defenderse cómodamente tanto para fines económicos como militares; en cuanto a los de tipo asistencial contribuían supuestamente al bienestar del pueblo en su conjunto. La nueva esfera de acción del Estado moderno debió de encontrar un consenso desconocido para las metas menos ambiciosas del Estado tradicional. Aunque analizaré esta argumentación en el capítulo 14, adelanto ya que el consenso dependía de como se costeara.

Ingreso y representación

Al narrar las luchas políticas, como, por ejemplo en el Volumen I[2], he empleado con mucha frecuencia las cifras del ingreso estatal. El intento de ampliar o racionalizar los ingresos causaron una revolución en Francia y en América, varias revueltas nacionales en Austria y una reforma en Inglaterra, en tanto que la habilidad de Prusia para manejar los ingresos tradicionales le permitía minimizar tanto la reforma como la revolución. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, como había ocurrido durante muchos siglos, la política *era* lucha fiscal.

Esa intensa relación entre la fiscalidad y la política se debilitó considerablemente durante el siglo XIX. Como hemos podido apreciar, la paz de una centuria, sumada a la expansión de la economía capitalista, redujo la tensión fiscal. El Estado necesitaba, en términos relativos, menos ingresos que antes (como destacan también Webber y Wildavsky, 1986: 207), la exacción ya no provocaba gritos, sino apenas murmullos de protesta (salvo en la tormentosa Austria). Al disminuir el agravio, había ocurrido algo que hubiera sorprendido tanto a los revolucionarios como a los reaccionarios de antaño. Las democracias de partidos demostraron ser más flexibles que las monarquías a este nivel bajo de exacción de recursos. Las constituciones otorgaban a los parlamentos la facultad de revisar las cuentas, éstos aceptaban la necesidad de dinero, debatían las alternativas posibles y votaban los ingresos. La representación hizo más consensuadas las exacciones moderadas. Los monarcas tenían que soportar más restricciones de carácter particularista, que les obligaban a aceptar el rendimiento de unos impuestos tradicionales y las exenciones de sus aliados políticos. En teoría, establecían tantos impuestos como les viniera en gana, pero en la práctica —como no me canso de subrayar— la monarquía implicaba una continua negociación entre las facciones, y puede que quedara en todas partes más atrapada en la política de la crisis fiscal que las democracias de partidos, pero la salvación llegó por una vía inesperada.

---

[2] La mejor historia general de los ingresos estatales se debe a Webber y Wildavsky (1986), que analizan este periodo en los capítulos 6 y 7. Véanse también Ardant (1975) y Woytinsky y Woytinsky (1955: 713 a 733). Con todo, sus cifras son más parciales y menos fiables que las que se ofrecen aquí. Hobson (1991) ha realizado el mejor análisis comparado del ingreso del periodo 1870-1914.

El cuadro 11.6 muestra la tendencia general en las fuentes de los ingresos ordinarios brutos obtenidos por los Estados centrales. Cabría establecer tres puntos preliminares:

1. «Bruto» significa que, siempre que resulta posible, se han añadido al rendimiento de una fuente de ingresos (es decir, al ingreso neto) los costes de su recaudación. Esto significa que en ocasiones me he desviado de las estadísticas más empleadas, por ejemplo, añadiendo los gastos totales de la oficina postal de los Estados Unidos al beneficio, que aparece sólo en las fuentes al uso para las estadísticas de los ingresos estadounidenses.

2. «Ordinario» significa que he excluido todos los empréstitos (y el excedente ocasional aplazado de los años anteriores) del cálculo. La exclusión de los empréstitos no constituye un método ideal, pero las fuentes de datos varían enormemente de un país a otro y con frecuencia son incompletas. Con todo, los datos disponibles al respecto revelan una tendencia: los empréstitos fueron más frecuentes en la primera parte del periodo porque también lo eran las guerras. Reaparecen a mediados de siglo para financiar los ferrocarriles y luego decaen de nuevo, para volver sólo en tiempos de crisis (con mayor frecuencia en Austria que en cualquier otro lugar). El préstamo y la emisión de dinero —ya, por lo general, en papel moneda— perdieron parte de su carácter de recurso ad hoc de cara a los prestamistas, ricos aliados extranjeros, y a la falsificación de moneda, para constituir un intento sistemático y consciente de financiar el gasto a través de una tímida expansión inflacionaria. La política indicaba una conciencia limitada de la existencia de un «sistema» económico y (junto con la política de aranceles) un mínimo sentido de la responsabilidad económica del Estado. Mientras creció la economía, lo que sucedió con frecuencia, la política se defendió bastante bien a la hora de proporcionar sumas moderadas de dinero sin causar dolor. De ahí que en el cuadro 11.6 no aparezca otro analgésico fiscal de menor entidad, aunque no por eso menos útil.

3. Aunque mis datos franceses, británicos y austriacos son claros, los relativos a América y Prusia-Alemania resultan problemáticos. Tanto Alemania (a partir de 1871) como los Estados Unidos eran regímenes federales donde se transferían constitucionalmente al gobierno central algunos ingresos específicos: la práctica totalidad de los derechos de aduanas y los impuestos sobre el consumo y las ventas. Pero sus gobiernos regionales se nutrieron de las variadas fuentes

CUADRO 11.6. *Porcentaje de los ingresos estatales correspondiente a los impuestos directos e indirectos y la propiedad del Estado, 1760-1910*

	Austria			Gran Bretaña			Francia			Prusia			Estados Unidos		
Año	Dir.	Indir.	P.E.	Dir.	Indir.	P.E.	Dir.	Indir.	P.E.	Dir.	Indir	P.E	Dir.	Indir.	P.E.
1760	53	35	12	26	69	4	48	45	7						
1770	48	33	19	16	70	4									
1780	41	37	23	20	71	5	41	49	10						
1790	27	36		18	66	9	35	47	18						
1800	29	45		27	52	12									
1810	30	42		30	57	11									
1820	44	50	6+	14	68	16				36	33	30	10	62	26
1830	39	45	16	10	73	17	40	22	38				5	71	21
1840	25	49	29	8	73	19	c30			24	34	41	18	42	37
1850	29	44	22	18	65	16	c28			22	32	46	23	58	20
1860	27	42	35	18	64	16	c23						26	54	18
1870	35	30	26	26	59	12	26	31	44	20	24	55	26	58	16
1880	32	31	37	25	61	16	21	38	41	17	25	58	15	67	17
1890			26	50	18	18	36	42	8	30	62	16	64	20	
1900	28	20	42	27	47	22	21	36	43	7	28	65	16	58	26
1910	28	29	43	(44)	(36)	(17)	22	33	45	9	22	69			

Notas: Las cifras francesas, británicas y austriacas corresponden sólo al gobierno central. Las prusianas y estadounidenses combinan los gobiernos centrales y regionales como se explica en el texto y en los cuadros A.6 y A.12 de los apéndices. Para los estados americanos, los impuestos sobre sociedades se han incluido en los directos. Las cifras británicas para 1910 corresponden en realidad a 1911; la de 1910 aparece también en el cuadro A.7 de los apéndices.

Fuentes: Véanse los cuadros A.6 a A.12 de los apéndices para cada uno de los países.

que encontramos a todos los niveles de gobierno en otros países. Así pues, comparar las fuentes de ingresos del gobierno central en Estados Unidos y Alemania con los de otros países, sin incluir los datos de sus gobiernos regionales, arrojaría resultados artificiales. Mi solución para el caso alemán en el cuadro 11.6 consiste en seguir contando con los datos de Prusia a partir de 1871 (cuando se convirtió en uno de los gobiernos regionales del nuevo *Reich*) y añadir su contribución estimada a los ingresos del Estado federal del *Reich*. Estas sumas aparecen separadas en el cuadro A.9 de los apéndices. Prusia había sido, al fin y al cabo, el Estado más importante antes de 1871, y aún comprendía casi los dos tercios de la Alemania posterior. Puesto que en los Estados Unidos no existía como en Prusia un estado individual dominante, he calculado unas cifras per cápita para aquellos estados cuyos ingresos conocemos, añadiéndolos a los del gobierno federal. He realizado alguna agregación estimada, ya que en la primera parte del periodo no todos los estados conservaban las cuentas de sus ingresos. Los detalles aparecen en los cuadros A.11 y A.12 de los apéndices. Estos dos niveles de gobierno en Prusia-Alemania y los Estados Unidos corresponden aproximadamente al gobierno central en los restantes países.

Cada país presenta su propia combinación característica de ingresos. No existe una sola explicación para las diferencias. El nivel de desarrollo económico no hace previsibles las fuentes de ingresos. Las cristalizaciones representativas del Estado ayudan a explicar una preferencia de ingresos —las monarquías prefirieron la «propiedad estatal»—, pero los regímenes industrializados parecen haber tenido varias posibilidades y experimentar distintas influencias. La pauta más común, salvo en el caso de los Estados Unidos, es que los impuestos disminuyeran como proporción de los ingresos totales a medida que aumentaban los procedentes de la propiedad estatal. En Austria, Francia y Prusia descendieron espectacularmente los impuestos directos, pero no tanto los indirectos. En Gran Bretaña y los Estados Unidos, los impuestos directos fluctuaron alrededor de una norma moderada, y los indirectos decayeron ligeramente (de forma sólo marginal en Estados Unidos). Veamos ahora por separado los tres tipos de ingreso:

1. Los *impuestos directos* pasaron por tres fases modernas, dominadas por los impuestos sobre la tierra, sobre la riqueza y, final-

mente (aunque no hasta pasado este periodo), sobre la renta. Los impuestos que gravaban la tierra, recaudados sobre su tamaño total y sobre el valor que se le asignara en el plano local, constituyeron durante mucho tiempo el principal impuesto directo; los propios terratenientes fijaban los suyos y los de sus campesinos. En Gran Bretaña y Estados Unidos, donde prosperaba el mercado de la tierra, la evaluación podía realizarse con cierta precisión. Puesto que todas la elites estatales se encontraban profundamente insertas en sus clases terratenientes no les resultaba fácil zafarse de éstas en un asunto que afectaba de tal manera a sus intereses económicos. Cuando la industrialización debilitó la colaboración de los terratenientes y el sometimiento de los campesinos, éstos protestaron: ¿por qué debía ser la agricultura y no la industria el sostén del Estado? Al final, hubo que escuchar las advertencias de los partidos de notables sobre el peligro de insurrección campesina. Gran Bretaña abolió los impuestos sobre la tierra en 1816. Las economías menos avanzadas los conservaron en las cotas más bajas de exacción, como, por ejemplo, en el principal de los impuestos austriacos de esa naturaleza: la contribución militar. El Estado tuvo que buscar los grandes ingresos en otra parte.

Entonces volvió la mirada a las manifestaciones externas de riqueza, tales como las casas o los edificios industriales. Los primeros intentos de gravar el lujo de los carruajes o los criados datan de finales del siglo XVIII, pero el alto coste de la valoración los hizo poco rentables. Los revolucionarios franceses llevaron su radicalismo a extender los impuestos sobre la riqueza a lo que luego se conocería por *les quatre vieilles*, que se mantuvieron inalterables desde 1799 hasta la Primera Guerra Mundial. Aquellas «cuatro ancianas» eran los impuestos sobre los bienes raíces, sobre el valor del arriendo de los hospedajes, sobre los derechos de las licencias comerciales y profesionales y sobre el número de puertas y ventanas de la propiedad inmobiliaria. En otros Estados se improvisó a partir de estos modelos, aunque allí donde faltó la revolución no resultaba fácil recaudar impuestos a una clase en la que aquéllos se encontraba insertos. Hacia 1900 Gran Bretaña, Francia y Alemania añadieron el impuesto sobre la herencia recogida en documentos probatorios. Los Estados Unidos crearon los impuestos sobre las empresas, especialmente aquellas que se beneficiaban de la regulación estatal, como los ferrocarriles y las compañías de seguros. En Francia el impuesto sobre la riqueza no llegó a generar, en el mejor de los casos, más del 20 por 100 de los in-

gresos, y hubo países con menor éxito. Así pues, no parecía la solución a sus necesidades.

Al contrario que la mayoría de los especialistas en la historia de los impuestos (por ejemplo, Webber y Wildavsky, 1986: capítulo 6), pasaré rápidamente por el impuesto sobre la renta, por su escasa significación para los ingresos totales. Los políticos de la Guerra Civil americana habían depositado grandes esperanzas en esta modalidad, pero lo cierto es que fue poco rentable y se declaró anticonstitucional. Hasta 1911 no se recuperó con carácter permanente. Los gobiernos británicos fueron pródigos en programas de impuestos sobre la renta, a partir del de Pitt en 1799 (Levi, 1988: capítulo 6). En el momento culminante de las guerras napoleónicas, proporcionaba casi el 20 por 100 de los ingresos totales. Fue abandonado en 1816 y recuperado con moderación por Peel en 1842; ampliado intermitentemente a partir de ese momento e imitado por Alemania y Escandinavia.

En realidad, nunca resultó rentable, ya que no era más que una modesta extensión del impuesto sobre la riqueza. Sólo se recaudaba en tasas muy bajas sobre ciertas fuentes de riqueza y sobre niveles muy altos de renta. Por otra parte, los evaluaba el propio contribuyente, que, bajo juramento, declaraba su fortuna a los comisarios locales. Así se hizo durante las guerras napoleónicas, cuando las clases altas se identificaron con la lucha por su «nación», pero no pudo mantenerse en época de paz. De hecho, presentaba muchas dificultades, no pudo deducirse «en la fuente», excepto en el caso de los empleados estatales, hasta que predominó el empleo asalariado y su contabilización. La mayoría de los individuos no percibían una renta regular, formalmente registrada en alguna parte. En casi todos los países el impuesto sobre la renta no gravó más que a una minoría de las familias (con la excepción de Dinamarca) hasta la Primera Guerra Mundial (Kraus, 1981: 190 a 193).

El cuadro 11.6 muestra que sólo Gran Bretaña y Estados Unidos mantuvieron su nivel de impuestos directos durante casi todo el periodo, pero el nivel de partida era muy bajo. Dado que en el resto de los países también descendieron los niveles, éstos se equipararon en gran medida hacia 1910 (con excepción de Prusia) en una banda del 16 al 28 por 100 del ingreso total. Pero un año más tarde, en 1911, encontramos un repentino ascenso, del 27 al 44 por 100 del ingreso total británico, debido a la radical extensión del impuesto sobre la renta y la herencia debida a Lloyd George, en un intento consciente, el primero desde la Revolución Francesa, de cargar la mano con los ricos.

El partido liberal representaba a un electorado formado por una mezcla de clase, religión y regionalidad, partidaria de las políticas de redistribución para financiar el aumento de los gastos mediante un sistema progresivo de impuestos directos, en detrimento de los indirectos procedentes de los aranceles y las ventas (Hobson, 1991). Los intentos de realizar una reforma similar por parte de los progresistas americanos se saldaron sin éxito.

En las democracias de partidos comenzaba a manifestarse una estrategia reformista del sistema, basada en los impuestos redistributivos sobre la renta, que llegó a predominar, si no en la práctica, sí en la teoría del gobierno. El impuesto sobre la renta se convirtió en un eficaz método de redistribución social y de ingresos para el Estado en el momento en que su recaudación adquiría legitimidad y se burocratizaba, durante la Primera Guerra Mundial y después de ella, lo que indica un considerable aumento de los poderes infraestructurales del Estado.

Pero, al margen de esta excepción, los impuestos directos no encontraron gran predicamento entre los Estados del siglo XIX. La sociedad no era ya agraria, pero tampoco plenamente industrial. Las formas sencillas de recaudación directa sobre la agricultura rentaban poco, y la industria ofrecía pocas oportunidades por la escasez de empleo remunerado. Por otra parte, durante la industrialización, la *recaudación directa sólo resultaba técnicamente viable sobre los ricos*, y éstos controlaban el Estado y sentían poco aprecio por los impuestos.

2. ¿Podían volver los regímenes a los *impuestos indirectos*, el sostén regresivo tradicional de los Estados agrarios, para descargar a la clase en la que se encontraban insertos? Los aranceles y los impuestos sobre las ventas y el consumo se recaudaban a partir de los productos en tránsito visible, en las fronteras, los puertos y los mercados donde los Estados agrarios habían tenido algún poder infraestructural. Pero incluso en tales ámbitos las técnicas de recaudación eran todavía primarias y particularistas. Así pues, al menos la mitad de los impuestos indirectos gravó en todas partes un pequeño conjunto de productos, tales como la sal, el azúcar, el tabaco y el alcohol. La imposición sobre los dos últimos resultaba más fácil, ya que encontraba (y aún encuentra) su mayor justificación en la desaprobación moral del vicio. A esto habría que añadir, por lo general, los ingresos por aranceles, especialmente en el caso de los alimentos importados. De este modo, los impuestos indirectos gravaron sobre

todo ciertos artículos de primera necesidad y las drogas de consumo universal como el alcohol y el tabaco. Su carácter regresivo afectaba sobre todo a las masas de pobres urbanos. Los Estados del siglo XVIII habían sido reaccionarios desde el punto de vista fiscal, en especial los más ricos, como Gran Bretaña o los Países Bajos, que obtenían un 70 por 100 de sus ingresos de los impuestos indirectos (Mathias y O'Brien, 1976). Pero las décadas revolucionarias habían enseñado a los «ricos» a temer las revueltas de la «plebe» contra la subida de los precios en los artículos de primera necesidad, lo que explica las sucesivas subidas de los impuestos sobre la renta durante las guerras napoleónicas. Fue esa memoria lo que llevó a las clases dirigentes de 1848 a rebajar la carga impositiva sobre los productos. El sistema indirecto decayó entonces en todas partes.

De este modo, encontramos a los Estados atrapados de nuevo en una versión corregida y aumentada de su tradicional dilema fiscal: indisponerse con sus partidarios más ricos o con la plebe excluida, es decir, arriesgarse a un golpe desde dentro o a una revolución desde abajo. Por fortuna para ellos, disponían de dos soluciones: el descenso relativo de los gastos totales y el crecimiento de un tercer tipo de ingreso.

3. La *propiedad estatal* consistía en el ingreso procedente tanto de la propiedad real o nacionalizada como de la venta de privilegios y monopolios gubernamentales. Tradicionalmente, esta propiedad había consistido sobre todo en las tierras de la corona, complementadas por las tasas legales y la venta de privilegios. Tales partidas habían decaído enormemente en términos relativos (y, en ocasiones, absolutos), aunque el gobierno federal de los Estados Unidos se benefició de ellas a mediados del siglo XIX gracias a su excepcional habilidad para vender lo que denominaba tierras «vírgenes», haciendo caso omiso de la propiedad de los indios sobre la tierra.

Pero las *regalías* se modernizaron y se extendieron. Se cargaron cuotas y se cedieron privilegios y monopolios, supuestamente «regulados», sobre un abanico cada vez mayor de servicios económicos y profesionales, que abarcaban desde la banca, los seguros y el transporte a los servicios médicos, legales y arquitectónicos. El Estado lo solemnizó con toda una gama de sellos y pólizas. Estos ingresos se superponían con frecuencia a los impuestos directos sobre las corporaciones (lo que a veces hace arbitraria mi asignación a una partida de ingresos de una u otra categoría, impuestos directos o propiedad estatal). Pero existían otras formas de propiedad estatal de fácil identifi-

cación. El monopolio de correos podía generar grandes beneficios. Tendríamos que añadir, además, la característica tradicional de que la propiedad privada sólo había dominado de verdad cuando se basaba en el «suelo». Las regalías de la corona incluían una parte del beneficio de la minería y los puertos, cuya expansión aumentó los ingresos, incluso en aquellos casos en que la propiedad no era completamente estatal. Las carreteras, los canales y, en especial, los ferrocarriles del Estado proporcionaban también ingresos por pasajes y portazgos. Los canales predominaban en la partida de ingresos de algunos estados americanos a comienzos del siglo XIX; y lo mismo ocurrió después con el ferrocarril en casi todas partes. Por otro lado, estos nuevos servicios estatales gozaban de gran popularidad y suscitaban poca oposición. Por el lado de los ingresos, presentaban la ventaja de autofinanciarse e incluso arrojar algún beneficio.

Todos los Estados obtuvieron ingresos de sus propiedades, aunque no en idéntico grado; se beneficiaron sobre todo aquellos que poseían y gestionaban los ferrocarriles y otras industrias (por lo general, minas e industrias relacionadas con las comunicaciones). El ferrocarril representó el mayor caudal de dinero, que Prusia supo aprovechar como nadie tomando posesión de todos los ferrocarriles privados a comienzos de la década de 1880. En 1911 recaudaba por esa vía no menos del 58 por 100 de su cuenta de ingresos y el 47 por 100 de sus ingresos totales (incluida la contribución del *Reich*). Fremdling (1980: 38) observa que el Estado prusiano constituía probablemente el mayor empresario del mundo, aunque su concepto del «beneficio» fuera completamente estatista. Sus necesidades fiscales y políticas influyeron en las tarifas por fletes y pasajeros, porque éstas le permitían eludir los impuestos directos o indirectos que habría tenido que negociar con las autoridades legislativas de Prusia o del *Reich*.

Gran Bretaña y los Estados Unidos dependían menos de las propiedades estatales, aunque no resulta fácil saber si se debió a la filosofía económica del *laissez-faire* o a la democracia de partidos. Esta última implicaba la ausencia de preferencias políticas entre las fuentes de ingresos en todo tipo de recaudación, incluyendo las que procedían de las propiedades estatales, dado que se necesitaba la aprobación de los parlamentos. Lo que no ocurría ni en las dos monarquías ni (hasta cierto punto) en la estatista Francia. En Prusia, la elección de los ingresos fue siempre tan política como técnica. Como destaca Richard Tilly (1966), los impuestos directos e indirectos y los em-

préstitos implicaron siempre un cierto grado de consenso por parte de algunos cuerpos organizados de la sociedad civil, que el régimen prefería evitar. Las propiedades estatales ofrecían la ventaja de unas fuentes fiscales «aisladas». Sin embargo, el régimen austriaco no sacó el suficiente provecho, porque a finales de la década de 1850 tuvo que vender parte de su infraestructura ferroviaria para obtener liquidez. El mayor aislamiento de los ingresos se produjo en la Rusia autocrática, donde en 1910 un tercio procedía de los ferrocarriles y otro tercio de su monopolio sobre la venta de bebidas (Hobson, 1991).

Las propiedades estatales encerraban un atractivo especial para las monarquías, por ofrecer recursos fiscales potencialmente autónomos a la elite y parecer menos ofensivas que los impuestos a los partidos políticos. En este punto la cristalización representativa podía resultar decisiva; como ya hemos visto, permitía a las democracias no tener preferencias en materia de ingresos. Otros regímenes prefirieron la vía de la propiedad estatal porque con ello obtenían un poder aislado de la sociedad civil. Por consiguiente, la monarquía había encontrado un respiro fiscal.

Durante este periodo, los Estados se libraron de las crisis fiscales que durante varios siglos habían constituido el acicate para las luchas por la representación. Pero con la paz, el progreso económico y la posibilidad de inflar tímidamente la moneda, les llegó la demanda de realizar nuevas funciones, que a menudo financiaban ellos mismos y que incluso les proporcionaban algunos beneficios; el pulso por la representación no había terminado. ¿Cómo habría podido ser de otro modo en el momento en que el capitalismo industrial y comercial generaba clases extensivas? Sin embargo, la lucha había perdido mordiente fiscal porque estaba encontrando otros bocados, y, mientras, el Estado de finales del siglo XIX disfrutaba de un respiro fiscal a escala internacional.

Burocracia y personal civil y militar

Resta aún otra de las medidas que utilizan las teorías progresivas y ascendentes en relación con el tamaño del Estado: la dimensión del personal. Pero este elemento presupone que nosotros —y, desde luego, los Estados del periodo— tenemos la posibilidad de medirla, lo que constituye un detalle trascendente, pues el hecho de que un Estado no pueda contar su personal significa que no está burocrati-

zado. El cuadro 11.7 proporciona los totales que he sido capaz de descubrir. Aunque incompletos, sobre todo en el caso de los empleados civiles, se ajustan más a la realidad que las compilaciones anteriores.

Los Estados conocían, al menos, el tamaño de sus ejércitos. A este respecto, disponemos de tres clases de cifras: las más bajas comprenden los ejércitos de tierra y las armadas operativas, las más altas denotan «fuerzas sobre el papel», o las movilizables en principio; y las cifras intermedias indican las realmente disponibles con fines militares (es decir, no sólo las tropas de combate). He tratado de hacer algunas estimaciones sobre estos números medios: fuerzas realmente sometidas a disciplina militar en cualquier momento, es decir, ejércitos de campaña, guarniciones, oficialidad de los cuarteles generales y de suministros, así como tropas de reserva y milicias, en caso de encontrarse movilizadas («incardinadas» en la fuente material británica), más el personal activo de las armadas en los puertos y en altamar, así como los efectivos de aprovisionamiento.

No he utilizado las fuerzas sobre el papel ni avanzo estimaciones en cuanto a los fondos extraídos por los parlamentos. Las fuerzas sobre el papel del *Grundbuchstand* se han traducido en evidentes exageraciones de las fuerzas austriacas, y la confianza en las estimaciones, en pequeñas inexactitudes respecto a Gran Bretaña (empleadas, por ejemplo, en Flora, 1983, y en Modelski y Thompson, 1988, para la armada hasta 1820). He excluido las milicias y los reservistas que no fueron efectivamente llamados a filas, pero incluyo a los nacionales que servían en el extranjero, entre ellos los de las colonias, así como a los mercenarios europeos financiados por el Estado. Se trata de un hecho que durante el siglo XVIII tiene importancia para Gran Bretaña, cuyos contingentes, esencialmente de Hesse y Hannóver, suelen olvidarse. Pero excluyo las tropas reclutadas en las colonias. Por consiguiente, el total de las fuerzas armadas del Imperio británico, por ejemplo, será en realidad superior a lo que indican mis cifras, pero su tamaño en relación con la población del Imperio resultará menor. En este caso, el modesto ejército que se necesitaba para conservar la India, comparado con su población de 200 millones de habitantes, proporcionaría un cálculo muy errado del militarismo británico respecto a otros Estados occidentales. La validez y el crédito de los datos militares a estos efectos comparativos es suficiente.

No puede decirse otro tanto del personal civil. El hallazgo más importante de mi indagación, que subraya el cuadro 11.7, es que el

Estado ignoró el número de sus empleados hasta finales del siglo XIX. Y aunque un registro minucioso de los archivos aportaría más cifras comparables a éstas, nunca proporcionaría el número *total* de los empleados públicos. Mis cifras más antiguas, dejando aparte el caso de Francia, totalizan sólo los funcionarios calculados por el Estado central. Cuando las cuentas son absurdamente bajas, no las he incluido. Así, los archivos del gobierno prusiano para 1747-1748 y 1753-1754 permiten a Johnson (1975: apéndice I) elaborar un total de unos 3.000 individuos considerados responsables ante el rey y los ministros. Esto calcula realmente el número de «funcionarios» prusianos, pero representa una proporción exigua de aquellos que realizaban funciones públicas en Prusia. Representa también mucho menos de los 27.800 empleados que trabajaban en las haciendas reales prusianas en 1804 (Gray, 1986: 21). De tal modo, el Estado civil prusiano consistía en un núcleo administrativo de pequeñas dimensiones, controlado desde el centro; una administración descentralizada de la heredad real; y una zona administrativa de sombra, bastante amplia, desconocida e incontrolable. Los dos primeros ámbitos estarían potencialmente aislados de la sociedad civil (de formas muy variadas); el tercero, completamente inserto en ella. Resulta, pues, absurdo calificar de «burocrático» al Estado prusiano, como hacen muchos historiadores (profundizaré en la cuestión en el capítulo 12).

Austria (junto con Suecia) se adelantó en la elaboración de censos ocupacionales, entre ellos, el de los funcionarios, a mediados del siglo XVIII. Después, hacia 1800, lo hicieron Gran Bretaña y Estados Unidos. Todas las evaluaciones se referían a los empleados a tiempo completo por encima de un cierto nivel. Las cifras francesas de mi cuadro difieren. Se trata de las estimaciones de los historiadores actuales respecto al número total de los individuos que ejercían funciones públicas, mucho más altas que las de los contemporáneos de cualquier país. Si pudiéramos realizar tales estimaciones para otros países llegaríamos también a cifras mucho más elevadas en todos los casos. Por ejemplo, en el cuadro 11.7 la cifras británicas hasta la década de 1840 no incluyen a los recaudadores locales del impuesto sobre la tierra, por la sencilla razón de que nadie sabía cuántos eran. Se supone que estarían entre los 20.000 y los 30.000, un número superior al del total de los funcionarios registrados (Parris, 1969: 22). En Francia, Necker, el ministro de Finanzas, estimó en 250.000 el número de individuos que participaban en la recaudación de los ingresos, pero aventuró —confesando que no se trataba de un recuento exacto—

que probablemente sólo 35.000 de ellos lo hacían a tiempo completo y dependían del cargo para su sustento (1784: 194 a 197). Sólo con la llegada de la burocratización a mediados del siglo XIX (que analizaré más adelante) se llevó a cabo el recuento de los funcionarios.

De hecho, no cabe aplicar antes de finales del siglo XIX el propio concepto de empleo estatal, y, consecuentemente, tampoco el de burocracia. ¿Quién se hallaba «dentro» del Estado? La elite estatal comprendía un pequeño conjunto de individuos que trabajaban en los cargos más altos de los ministerios, departamentos y juntas de la capital, a lo que cabe añadir un grupo de importantes funcionarios regionales. También los cortesanos ocupaban el centro del Estado, puesto que la corte encarnaba la institución política central en casi todas las capitales, pero no eran propiamente empleados del Estado. Se trataba de los nobles privilegiados y su clientela, que, en general, disfrutaban de su posición por herencia. Lo que podríamos denominar «elite local del Estado» comprendía algunos funcionarios asalariados, aunque no eran necesariamente los de mayor rango, sino notables locales dedicados a tiempo parcial a las tareas de jueces de paz, *Landräte*, *maires*, etc. ¿«Pertenecían» al Estado? ¿Se encontraban «dentro» del Estado los miembros semiautónomos de las organizaciones corporativas como los jueces de los *parlements* franceses? La duda universal reside aquí en si los notables insertos localmente, que solían ejercer las principales funciones civiles del Estado en la localidad o la región, se hallaban realmente «dentro». Casi todos se dedicaban a tiempo parcial, pero sus tareas eran imprescindibles para la existencia misma del Estado. La única respuesta es que cuando las administraciones del Estado se encuentran insertas hasta ese punto en la sociedad civil, carece de sentido hablar de aquél, pues no se trata de una totalidad en tanto que elite coherente, distinta de la sociedad civil; por consiguiente, el «Estado» no existe.

No menos oscuro parece el alcance del «empleo estatal» en los niveles más bajos. Las tareas rutinarias, manuales o de oficina, estuvieron durante mucho tiempo en manos de trabajadores eventuales, que no constaban en los registros oficiales. La oficina gubernamental mejor organizada del momento fue probablemente el *British Excise Department*, cuya sede central empleaba en 1779 casi 300 funcionarios a tiempo completo. Pero cierto documento revela que en el mismo año había más de 1.200 realizando tareas eventuales de oficina (Brewer, 1989: 69). Thuillier (1976: 11 a 15) apunta que los *auxiliaires* eventuales eran al menos tan numerosos como los *employés* del Ministerio de

Finanzas todavía en 1899. Aunque por entonces se incluían ya en el censo francés (y así aparecen en el cuadro 11.7), no sabemos con certeza cuándo comenzaron a constar en las estadísticas oficiales. Van Riper y Scheiber (1959: 56 a 59) estiman que el personal americano se subestimó en un 50 por 100 hasta 1816, y en un 25 por 100 durante el resto del periodo.

Tales estimaciones oscurecen también el acceso de las mujeres al empleo público. Al acabar la centuria, las mujeres formaban el grueso de los trabajadores eventuales, pero no sabemos cuál era su alcance. En 1910 las mujeres constituían la mitad de los empleados públicos en Gran Bretaña y los Estados Unidos, pero sólo una cuarta parte en Austria y Francia. ¿Son reales estas diferencias? No podemos confiar en el censo francés, el más pormenorizado del periodo, que proporciona una repentina discontinuidad del empleo público femenino. Tras aumentar regularmente hasta las 330.000 mujeres en 1891, desciende a 140.000 en el siguiente censo, el de 1901, antes de volver a crecer de nuevo con regularidad. Nos encontramos probablemente con el engaño que resulta de la exclusión repentina del empleo a tiempo parcial y de los maestros de escuela. El censo referido a las mujeres durante el periodo es, por lo general, poco fiable. Bose (1987) ha vuelto a analizar los manuscritos del censo estadounidense de 1900 para descubrir que la cifra oficial del 20 por 100 para las mujeres empleadas podría doblarse. No es posible establecer tendencias generales sin una indagación posterior de los procedimientos exactos del censo, de la organización del trabajo y del género en cada país.

Mis primeras cifras proceden de ejercicios limitados de cálculo —de lo que los dos Estados germánicos denominaban *Beamten*, y el francés, *fonctionnaires*— respecto a los varones con una condición casi profesional empleados por la jerarquía estatal (excluyendo a los profesionales independientes que aparecen entre los *Beamten*). Más tarde, a mediados de siglo, el recuento mejora y se extiende a los gobiernos locales y regionales y a los trabajadores manuales y oficinistas. Hacia 1890, prácticamente todos aquellos que ejercían funciones públicas —*excepto* en las categorías superpuestas del nivel más bajo y el empleo femenino— aparecen integrados en los censos, tal como apreciamos en el cuadro 11.7. El crecimiento consiguiente de las funciones civiles parece un hecho real.

Así pues, no podemos interpretar la tendencia al aumento del empleo civil en función de las apariencias (como hacen la mayoría de los autores, es decir, Anderson y Anderson, 1967: 167; Flora, 1984; Gre,

CUADRO 11.7. *Empleo estatal para Austria-Hungría, Francia, Gran Bretaña, Prusia-Alemania y los Estados Unidos, 1760-1910 (como porcentaje de la población total)*

	Personal civil										Personal militar				
	Estado central					Todos los niveles									
Año	Austria Hungría	Francia	Gran Bretaña	Prusia Alemania	Estados Unidos	Austria Hungría	Francia	Gran Bretaña	Prusia Alemania	Estados Unidos	Austria Hungría	Francia	Gran Bretaña	Prusia Alemania	Estados Unidos
1760	0,06		0,26			0,17					1,66	1,78	2,36	4,14	
1770											1,17	0,82	0,58		
1780	0,05						1,29				1,41	0,89	2,76	3,76	
1790					0,02		1,01				1,52	0,85	0,79	3,42	0,02
1800			0,18	0,37	0,04		0,91				1,35	2,93	4,91	3,73	0,12
1810			0,24		0,05	0,12					2,38	3,66	5,30	3,88	0,16
1820			0,22		0,07								1,02	1,33	0,16
1830	0,35		0,17		0,09	0,37					1,38	1,23	1,01	1,15	0,09
1840	0,37	0,26		0,11+	0,11	0,41		0,29			1,56	1,02	1,10	1,05	0,13
1850	0,40	0,41	0,24	0,20+	0,11	0,45	0,84	0,41	0,33		1,56	1,09	1,20	1,04	0,09
1860					0,12	0,57		0,41	0,47		1,60	1,23	1,74	0,82	0,09
1870		0,60		0,55	0,13	0,50	1,11	0,53	1,15		0,86	1,66	1,14	0,98	0,13
1880		0,87			0,19	0,53	1,53	0,46	1,56		0,73	1,40	0,96	0,96	0,07
1890	1,06	0,91	0,32		0,25	2,92	1,83	0,99	1,70		0,79	1,47	0,96	1,07	0,06
1900	1,14	1,10	0,40		0,31	3,30	1,80	1,66		1,36	0,88	1,59	1,51	1,12	0,17
1910	1,17	1,40	0,64		0,42	3,15	2,14	2,60	1,57	1,68					

Para las fuentes y las notas a pie de página véanse los cuadros de los apéndices A.1-A.5, que contienen datos de cada uno de estos países.

1984). La tendencia absoluta y relativa al crecimiento es llamativa, pero también progresaba la habilidad para el recuento. Hasta después de 1870 no podemos dar por seguro el crecimiento, pero entonces se produce con rapidez, especialmente en el plano local y regional del gobierno. Este hecho refuerza la conclusión a que hemos llegado a propósito de los gastos. Las actividades civiles del Estado a finales del siglo XIX aumentaron sustancialmente. Antes, el crecimiento fue menor tanto en la dimensión real como en la capacidad para calcular el número de funcionarios. Sin embargo, esa capacidad resulta en sí misma significativa, porque refleja un aumento real del empleo estatal a tiempo completo. Los Estados contaban ya con funcionarios dispersos en una banda del 5 al 10 por 100 de las familias de sus territorios, responsables ante sus superiores (quienes ya podían contarlos) en el gobierno central, local y regional. Al margen de los Estados Unidos, y en ocasiones de Austria, había también un considerable grado de coordinación entre los distintos niveles. El Estado ya no se basaba en aquella amplia panoplia de «leales», cuya política característica he analizado en el capítulo 16.

Las tendencias del ámbito militar son más claras. A excepción de los Estados Unidos, las mayores fuerzas armadas, tanto en términos absolutos como en los relativos a su población, aparecieron antes, durante las guerras napoleónicas y la Guerra de los Siete Años. El compromiso militar americano fue bastante inferior, salvo en el momento de la guerra civil, cuando alcanzó proporciones superiores al de los restantes países del periodo: el 4,3 por 100 de la población del norte, el 3,7 por 100 de la Confederación, y el 7,1 por 100 de esta última excluyendo a los esclavos (apenas hubo soldados esclavos en el ejército confederado)[3].

La expansión se produce en paralelo al empleo civil de los Estados. El Estado federal calculó 37.000 funcionarios en 1860. En 1861-1862, los dos Estados en guerra calcularon cerca de 170.000 (Van Riper y Scheiber, 1959: 450). A este propósito, la guerra civil americana presenta mayor semejanza con la Primera Guerra Mundial que con

[3] Las cifras de la guerra civil están tomadas de Coulter (1950: 68, población); Kreidberg y Henry (1955: 95, militares al servicio de la Unión en 1865); y Livermore (1900: 47, militares al servicio de la Confederación en 1864, donde se asume que el 80 por 100 de los enrolados estaban en armas, como en el ejército de la Unión). Se trata de individuos enrolados en cualquier momento. Como es lógico, la proporción enrolada en un determinado momento de la guerra civil fue mucho más alta.

las guerras europeas precedentes (que no produjeron una escalada del personal civil).

La calidad de las cifras militares permite establecer comparaciones entre los Estados y descubrir grandes diferencias. Prusia comenzó el periodo con la mayor movilización militar; más tarde decayó, para recuperarla de nuevo en el posterior *Reich* alemán. Contra los estereotipos liberal-populares, Gran Bretaña puso en marcha durante las guerras napoleónicas el mayor grado de movilización conocida en Europa durante el periodo. Después, Francia tuvo, en proporción, el mayor ejército de las potencias europeas, y Austria el menor entre ellas. La decadencia de Austria como gran potencia se aprecia en la incapacidad para situarse a la altura de la movilización de sus rivales, como percibieron sus contemporáneos.

Las cifras permiten establecer también dos conclusiones. En primer lugar, confirman, aun admitiendo su imperfección, las tendencias fiscales. Y si bien no estamos seguros de la naturaleza del empleo civil, el crecimiento total del empleo estatal resulta menos llamativo que los cambios en su composición interna. El empleo militar decayó de modo notable (con la excepción de Estados Unidos), mientras que el civil crecía formalmente en los primeros años del periodo, y sustancialmente en los últimos. Esto concuerda con los datos relativos a los gastos. En segundo lugar, si tomamos la habilidad para el cálculo del personal como un grado mínimo de burocratización, ésta se produjo en 1760 para el ámbito militar, pero tardó cien años más en abarcar el Estado civil.

Conclusiones provisionales

Hemos asistido a dos grandes cambios en la vida del Estado moderno. Los Estados del siglo XVIII crecieron súbitamente en relación con sus sociedades. En cuanto a su crecimiento durante el siglo XIX, depende de la medida que tomemos. Los gastos crecieron en gran medida si juzgamos las cuantías en dinero, pero sólo de forma moderada si contamos con la inflación y el crecimiento demográfico. Pero en relación con el aumento de la sociedad civil durante el periodo, la realidad es que la mayoría de los Estados entraron en decadencia. Aquel largo siglo XIX estuvo dominado por el crecimiento económico privado, no por la expansión estatal, a menos que la guerra dic-

tara lo contrario. Y esto confirma los otros dos cambios ocurridos en la naturaleza del Estado decimonónico:

1. Las funciones estatales pasaron de su tradicional cristalización militar a tres tareas civiles más amplias. La mayor y más uniforme de ellas consistió en la capacidad de proporcionar nuevas estructuras de comunicación, tanto simbólicas como materiales. La segunda, especialmente en las monarquías y en los países que llegaron más tarde a la industrialización, fue el aumento de la intervención estatal en la economía. La tercera y última, justo al final del periodo y en algunas de las economías más avanzadas, consistió en la creación de las formas modernas de Estado asistencial. Juntas, estas tres tareas civiles marcan con toda claridad la transición hacia un nuevo Estado diamorfo, es decir, mitad civil y mitad militar.
2. Me he limitado a sugerir provisionalmente el segundo cambio espectacular. Los Estados se burocratizaron durante el periodo, pero lo hicieron antes en la administración militar que en la civil, y esa burocratización rebajó la inserción directa en los cargos. ¿La sustituyó una forma de inserción menos directa y quizás más democrática? ¿O condujo la burocratización al aislamiento respecto de la sociedad civil de un gran número de «leales» al Estado? ¿Se aprecian las mismas pautas en las instituciones civiles y militares del Estado?

El desarrollo del Estado moderno constituyó un proceso más complejo y diferenciado de lo que están dispuestas a aceptar las teorías progresivas y ascendentes. Surge así un Estado que recauda menos impuestos y cuenta con un consenso mayor. Pero esta tendencia general aparece a lo largo de tres procesos distintos: un ejército que decae relativamente pero que se burocratiza, se hace profesional y queda potencialmente aislado de la sociedad civil; una burocracia que crece, primero en el ámbito militar, luego en el civil; y un Estado civil que, quizás por consenso, amplía sus funciones. Tales serán, respectivamente, los temas de los tres próximos capítulos.

Bibliografía

Esta bibliografía incluye las referencias citadas en los cuadros de los apéndices. Excluye las fuentes estadísticas oficiales, que aparecen adecuadamente descritas en las notas a los cuadros de este capítulo y del Apéndice A.

Abramovitz, M., y V. Eliasberg, 1957: *The Growth of Public Employment in Great Britain.* Princetn, N. J.: Princeton University Press.
Addington, L. 1984: *The Pattern of War Since the Eighteenth Century.* Bloomington: Indiana University Press.
Albrow, M. 1970: *Bureaucracy.* Londres: Pall Mall Press.
Anderson, E., y P. R. Anderson, 1967: *Political Institutions and Social Change in Continental Europe in the Nineteenth Century.* Berkeley: University of California Press.
Andic, S., y J. Veverka, 1963-4: «The growth of government expenditure in Germany since the unification». *Finanzarchiv,* N. F. 23, 2.
Ardant, G. 1975: «Financial policy and economic infrastructures of modern states and nations». En *The Formation of National States in Western Europe*, ed. C. Tilly. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Bean, R. 1973: «War and the birth of the nation-state». *Journal of Economic History,* 33.
Beer, A. de, 1871: *Die Finanzen Osterreiches,* Praga: sin publicar.
Beer, S. 1973: «Modern political development». En *Patterns of Government: The Major Political Systems of Europe.* Nueva York: McGraw-Hill.
Blanning, T. C. W. 1974: *Reform and Revolution in Mainz, 1743-1803.* Londres: Cambridge University Press.
Block, M. 1875: *Statistique de la France Comparée avec les Divers Pays de l'Europe,* 2.ª ed., 2 vols. París: Guillaumin.
Bolognese-Leuctenmuller, B. 1978: *Bevölkerungsentwicklung und Berufsstruktur, Gesundheits - und Fürsorgewesen in Österreich, 1750-1918.* Munich: Oldenbourg.
Bose, C. E. 1987: «Devaluing women's work: the undercount in employment in 1900 and 1980». En *The Hidden Aspects of Women's Work*, ed. C. E. Bose *et al.,* Nueva York: Praeger.
Brandt, H.-H. 1978: *Die Osterreichische Neoabsolutismus und Politik, 1848-1860.* Gotinga: Vandenhoeck und Ruprecht.
Brewer, J. 1989: *The Sinews of Power.* Londres: Unwin Hyman.
Bruford, W. H. 1965: *Germany in the Eighteenth Century: The Social Background of the Literary Revival.* Cambridge: Cambridge University Press.
Bulow-Cummerow, E. 1842. *Preussen, seine Verfassung, seine Verwaltung, sein Verhältnis zu Deutschland.* Berlín: sin publicar.
Chandler, D. G. 1966: *The Campaigns of Napoleon.* Nueva York: Macmillan.
Church, C. H. 1981: *Revolution and Red Tape: The French Ministerial Bureaucracy, 1770-1850.* Oxford: Clarendon Press.
Corvisier, A. 1979: *Armies and Societies in Europe, 1494-1789.* Bloomington: University of Indiana Press.
Coulter, E. M. 1950: *The Confederate States of America, 1861-1865.* Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Crafts, N. F. R. 1983: *British Economic Growth During the Industrial Revolution.* Oxford: Oxford University Press.
Czoernig, C., Freiherr von, 1861: *Statistisches Handbuchlein fur die Oesterreichische Monarchie.* Viena: K. K. Hof- und Staatsdruckerei.
Davis, L. E., y R. Huttenback, 1986: *Mammon and the Pursuit of Empire.* Cambridge: Cambridge University Press.
Davis, L. E., y J. Legler, 1966: «The government in the American economy, 1815-1902: a quantitative study». *Journal of Economic History,* 26.
Deane, P. 1968: «New estimates of gross national product for the United Kingdom, 1830-1914». *Review of Income and Wealth,* 3.
Deane, P., y W. A. Cole, 1962: *British Economic Growth, 1688-1695.* Cambridge: Cambridge University Press.
Delorme, R., y C. André, 1983: *L'État et l'économie: Un essai d'explication de l'évolution des dépenses publiques en France (1870-1980).* París: Editions du Seuil.
Dickson, P. G. M. 1987: *Finance and Government under Maria Theresa 1740-1780,* 2 vols. Oxford: Clarendon Press.
Dull, J. R. 1975: *The French Navy and American Independence: A Study of Arms and Diplomacy, 1774-1787.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Dupeux, G. 1976: *French Society, 1789-1970.* Londres: Methuen & Co.
Eckstein, H. 1982: «The idea of political development: from dignity to efficiency». *World Politics,* 35.
Fabricant, S. 1952: *The Trend in Government Activity Since 1900.* Nueva York: National Bureau of Economic Research.
Finer, H. 1949: *The Theory and Practice of Modern Government,* 2.ª ed. Nueva York: Holt.
Fischer, F. W., *et al.* 1982: *Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch.* Vol. I: *Materialien zur Statistik des Deutschen Bundes, 1815-1870.* Munich: Beck.
Flora, P. 1983: *State, Economy and Society in Western Europe, 1815-1975,* 2 vols. Chicago: St. James Press.
Fortescue, J. W. 1915: *A History of the British Army,* 13 vols. Londres: Macmillan.
Foucault, M. 1975: *Discipline and Punish.* Londres: Lane.
Fremdling, R. 1980: «Freight rates and state budget: the role of the national Prussian railways, 1880-1913». *Journal of European Economic History,* 9.
Giddens, A. 1985: *The Nation-State and Violence.* Cambridge: Polity Press.
Goldsmith, R. W. 1987: *Premodern Financial Systems: A Historical Comparative Study.* Cambridge: Cambridge University Press.
Goldstone, J. 1991: *Revolutions and Rebellions in the Early Modern World.* Berkeley y Los Ángeles: University of California Press.
Gratz, A. 1949: «Die österreichische Finanzpolitik von 1848-1948». En *Hundert Jahre Wirtschaftsentwicklung, 1848-1948,* ed. H. Mayer. Viena: Springer Verlag.

Gray, M. 1986: «Prussia in transition: society and politics under the Stein reform ministry of 1808». *Transactions of the American Philosophical Society, 76.*

Grew, R. 1984: «The nineteenth-century European state». En *Statemaking and Social Movements*, ed. C. Bright y S. Harding. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Hampson, N. 1959: *La Marine de l'an II: Mobilisation de la flotte de l'Océan, 1793-1794.* París: M. Rivière.

Hansemann, D. J. L. 1834: *Preussen und Frankreich: Staatswirtschaftl. u. polit., unter vorzuegl. Beruecks. d. Rheinprovinz.* Leipzig: sin publicar.

Heitz, W. (ed.), 1980: *Quellen zur Deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 18 Jahrhundert bis zur Reichsgrundung.* Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.

Higgs, R. 1987: *Crisis and Leviathan. Critical Episodes in the Growth of American Government.* Nueva York: Oxford University Press.

Hobson, J. 1991: «The Tax-seeking State». Tesis doctoral, London School of Economics and Political Science.

Hohorst, G., *et al.* 1975: *Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs, 1870-1914.* Munich: Beck.

Holt, C. F. 1977: *The Role of State Government in the Nineteenth-Century American Economy, 1840-1902.* Nueva York, Arno Press.

Janetschek, K. 1959: «Die Finanzierung des Siebenjährigen Krieges. Ein Beitrag zur Finanzgeschichte des 18. Jahrhunderts. Tesis doctoral, Universidad de Viena.

Jany, C. 1967: *Geschichte der Preussischen Armee,* 4 vols. Osnabrück: Biblio Verlag.

Johnson, H. C. 1975: *Frederick the Great and His Officials.* New Haven, Conn.: Yale University Press.

Julien-Lafferrière, F. 1970: *Les députés fonctionnaires de France.* París: Presses Universitaires de France.

Kausel, A. 1979: «Österreichs Volkseinkommen 1830 bis 1913». En *Geschichte und Ergebnisse der Zentralen Amtlichen Statistik in Österreich 1829-1979. Beiträge zur Österreichischen Statistik,* vol. 550.

Kennedy, P. 1988: *The Rise and Fall of the Great Powers.* Londres: Unwin Hyman. [Ed. cast.: *Auge y caída de las grandes potencias.* Esplugues Llobregat, Actualidad y Libros, 1989.]

— 1989: «Debate: the costs and benefits of British imperialism, 1846-1914». *Past and Present,* núm. 125.

Kennett, L. 1967: *The French Armies in the Seven Years' War.* Durham, N. C.: Duke University Press.

Kraus, A. 1980: *Quellen Zur Bevölkerungstatistik Deutschlands, 1815-11875.* Boppard am Rhein: Harold Boldt.

Kraus, F. 1981: «The historical development of income inequality in Western Europe and the United States». En *The Development of Welfare States in*

Europe and America, ed. P. Flora y A. J. Heidenheimer. New Brunswick, N. J.: Transaction Books.
Kreidberg, M., y M. Henry, 1955: *History of Military Mobilization in the United States.* Washington, D.C.: U.S. Department of the Army.
Kunz, A. 1990: «The state as employer in Germany, 1880-1918: from paternalism to public policy». En *The State and Social Change in Germany, 1880-1980*, ed. W. R. Lee y E. Rosenhaft. Nueva York: Berg.
Legler, J. B. *et al.* 1988: «U.S. city finances and the growth of government, 1850-1902». *Journal of Economic History*, 48.
— 1990: «Growth and trends in U.S. city revenues, 1820-1902». Monografía no publicada, Department of Economics, University of Georgia.
Leineweber, N. 1988: *Das säkulare Wachstum der Staatsausgaben.* Gotinga: Vandenhoeck und Ruprecht.
Levi, M. 1988: *Of Rule and Revenue.* Berkeley: University of California Press.
Lévy-Leboyer, M. 1975: «Histoire économique et histoire de l'administration». *Histoire de L'Administration Française Depuis 1800*, 23.
Lindert, D. H., y J. G. Williamson, 1982: «Revising England's social tables, 1688-1812». *Explorations in Economic History*, 19.
— 1983: «English workers' living standards during the Industrial Revolution: a new look». *Economic History Review*, 36.
Livermore, T. L. 1900: *Numbers and Losses in the Civil War in America, 1861-65.* Boston: Houghton Mifflin.
Lynn, J. A. 1984: *The Bayonets of the Republic: Motivation and Tactics in the Army of Revolutionary France, 1791-94.* Urbana: University of Illinois Press.
Macartney, C. A. 1971: *The Habsburg Empire, 1790-1918.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Maddison, A. 1983: «Measuring long term growth and productivity change on a macro-economic level». En *Productivity in the Economies of Europe*, ed. R. Fremdling y P. K. O'Brien. Munich: Klett-Cotta.
Marczewski, J. 1965: «Le produit physique de l'économie française de 1789 à 1913». *Cahiers de Institut de Science Economique Appliquées* I, núm. 163.
Marion, M. 1927: *Histoire Financière de la France Depuis 1715*, 6 vols. París: Rousseau.
Markovitch, T. 1965: *L'industrie française de 1789 à 1964.* París: Institut de science économique appliqué.
Marx, K. 1968: «The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte». En *Selected Works*, K. Marx y F. Engels. Londres: Lawrence & Wishart. [Ed. cast.: *Obras escogidas.* Madrid, Ayuso, 1975.]
Masson, P. 1968: *Napoléon et la Marine.* París: Peyronnet.
Mathias, P., y P. O'Brien, 1976: «Taxation in England and France». *Journal of European Economic History*, 5.
Miliband, R. 1969: *The Capitalist State.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.

Mischler, E., y J. Ulbrich, 1905: *Österreichisches Staatswörterbuch,* 2.ª ed., 5 vols. Viena: Hölder.
Mitchell, B. R. 1975: *European Historical Statistics, 1750-1970.* Nueva York: Columbia University Press.
— 1983: *International Historical Statistics. The Americas and Australasia.* Detroit: Gale Research.
Mitchell, B. R. y P. Deane, 1980: *Abstract of British Historical Statistics,* 2.ª ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Modelski, G. y W. R. Thompson, 1988: *Seapower in Global Politics, 1494-1993.* Seattle: University of Washington Press.
Morineau, M. 1980: «Budgets de l'état et gestion des finances royales en France au dix-huitième siècle». *Revue Historique,* 263.
Mühlpeck, V., *et al.* 1979: «Index der Verbraucherpreise 1800 bis 1914». En *Geschichte und Ergebnisse der Zentralen Amlichen Statistik in Osterreich 1829-1979. Beitrage zur Osterreichischen Statistik,* 550.
Necker, J. 1784: *De L'Administration des Finances de France,* 3 vols. París: sin publicar.
O'Brien, P. K. 1988: «The costs and benefits of British imperialism, 1846-1914». *Past and Present,* núm. 120.
Parris, H. 1969: *Constitutional Bureaucracy: The Development of British Central Administration Sine the Eighteenth Century.* Londres: Allen & Unwin.
Peacock, A. T., y J. Wiseman, 1961: *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Poggi, G. 1990: *The State: Its Nature, Development and Prospects.* Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Prochnow, P.-M. 1977: «Staat im Wachstum. Versuch einer finanzwirtschaftlichen Analyse der preussischen Haushaltsrechnungen, 1871-1913». Tesis doctoral, Universidad de Munster.
Rasler, K., y W. Thompson, 1985: «War making and state making: governmental expenditures, tax revenues, and global wars». *American Political Science Review,* 79.
Riedel, A. F. 1866: *Der Brandenburgisch-Preussische Staatshaushalt in den letzten beiden Jahrhunderten.* Berlín: sin publicar.
Riley, J. C. 1980: *International Government Finance and the Amsterdam Capital Market.* Cambridge: Cambridge University Press.
— 1984: «The Dutch economy after 1650: decline or growth?» *Journal of European Economic History,* 13.
— 1986: *The Seven Years' War and the Old Regime in France.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Rothenberg, G. E. 1978: *The Art of Warfare in the Age of Napoleon.* Bloomington: Indiana University Press.
Scott, S. 1978: *The Response of the Royal Army to the French Revolution.* Oxford: Clarendon Press.

Skocpol, T. 1979: *States and Social Revolutions.* Cambridge: Cambridge University Press.

Tegeborski, M. L. de, 1843: *Des Finances et du Crédit Public de l'Autriche, de sa dette, de ses ressources financières et de son système d'imposition, avec quelques rapprochements entre ce pays, la Prusse et la France,* 2 vols. París: Jules Renouard.

Therborn, G. 1978: *What Does the Ruling Class Do When It Rules?* Londres: New Left Books.

Thuillier, G. 1976: *Bureaucratie et bureaucrates en France au XIXe siècle.* Ginebra: Droz.

Tilly, R. 1966: «The political economy of public finance and the industrialization of Prussia, 1815-1866». *Journal of Economic History,* 26.

Todd, R. C. 1954: *Confederate Finance.* Athens: University of Georgia Press.

Turner, R. S. 1980: «The *Bildungsbürgertum* and the learned professions in Prussia, 1770-1830: the origins of a class». *Histoire Sociale-Social History,* 13.

U.S. Bureau of the Census, 1975: *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970,* Edición del Bicentenario, 2.ª parte. Washington, D.C.

U.S. Department of the Treasury, 1947: *Annual Report.* Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.

Van Riper, P. P., y H. N. Scheiber, 1959: «The Confederate civil service». *Journal of Southern History,* 25.

Veverka, J. 1963: «The growth of government expenditure in the United Kingdom since 1790». *Scottish Journal of Political Economy,* 10.

Vivien, A. F. A. 1859: *Etudes administratives,* 3.ª ed. París: Guillaumin.

Vries, J. de, 1984: «The decline and rise of the Dutch economy, 1675-1900». *Research in Economic History,* supplement 3.

Wagner, W. 1987: «Armee-Gliederung und Aufgabenstellung, 1848-1866». En *Die Habsburgermonarchie, 1848-1918.* Vol. 5: *Die Bewaffnete Macht,* ed. A. Wandruszka y P. Urbanitsch. Viena: Verlag der Österreichischer Akademie der Wissenschafter.

Webber, C., y A. Wildavsky, 1986: *A History of Taxation and Expenditure in the Western World.* Nueva York: Simon & Schuster.

Weitzel, O. 1967: «Die Entwicklung der Staatsaugaben in Deutschland». Tesis doctoral, Universidad de Erlangen-Nurnberg.

Wolfe, A. 1977: *The Limits of Legitimacy: Political Contradictions of Contemporary Capitalism.* Nueva York: Free Press.

Woytinsky, W. S., y E. S. Woytinsky, 1955: *World Commerce and Governments: Trends and Outlook.* Nueva York: Twentieth Century Fund.

Wrigley, E. A., y R. Schofield, 1981: *The Population History of England, 1541-1871: A Reconstruction.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Wysocki, J. 1975: *Infrastruktur und wachsende Staatsaufgaben. Das Fallbeispil Österreich, 1868-1913.* Stuttgart: Fischer.

Capítulo 12
EL SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO: II. LA AUTONOMÍA DEL PODER MILITAR

Hemos visto en el capítulo 11 que en 1760 predominaban en el Estado las funciones militares, y que aún en 1910 absorbían la mitad de los recursos. El militarismo continuó desempeñando un cometido de primer orden dentro del Estado moderno hasta 1914, que no ha perdido durante el siglo XX. Con todo, el insólito periodo de paz social y geopolítica conocido en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial ha permitido a muchos sociólogos descuidar el papel de la organización militar en la sociedad moderna. En el presente capítulo abordaré tres cuestiones decisivas en el terreno del poder militar: quién controla los ejércitos, cuál es su organización interna y qué funciones cumplen[1].

1. En primer lugar, plantearé la cuestión relativa al *control* conforme a las teorías del Estado analizadas en el capítulo 3. ¿Se encontraban las fuerzas armadas controladas por las clases dominantes, por las democracias de partidos o por una elite estatal autónoma? Y, al-

[1] Las fuentes generales del capítulo son: Vagts (1959), Janowitz (1960), Gooch (1980), Best (1982), McNeill (1983), Strachan (1983), Bond (1984), Anderson (1988) y Dandeker (1989).

ternativamente, ¿se institucionalizaron de forma autónoma respecto a cualquier control externo, formando una «casta militar»? No bastaría una sola respuesta para los distintos lugares, épocas y regímenes que abordamos aquí.

2. La *organización* militar comporta la interacción de dos jerarquías —las relaciones entre la oficialidad y sus hombres y las relaciones externas con las clases sociales— con dos procesos modernizadores: la profesionalización y la burocratización. Suele argumentarse que el surgimiento de los «ejércitos de ciudadanos» debilitó ambas jerarquías (por ejemplo, Best, 1892). Sin embargo, y puesto que la disciplina resulta imprescindible para que el soldado arriesgue su vida y se encuentre dispuesto a arrebatar la del enemigo, la organización militar es, por naturaleza, «coercitiva y concentrada». Así pues, la mayoría de los ejércitos se componen de jerarquías disciplinadas; con mayor razón durante un periodo en el que lucharon en campañas y formaciones ordenadas. Los ejércitos constituían entonces organizaciones segmentales de poder que coartaban, y a menudo reprimían, ciertas concepciones populares, tales como las de clase y ciudadanía. Pero la burocratización los insertó en el Estado, sin disminuir su autonomía institucional, al tiempo que la profesionalización los entrelazaba con las clases sociales.

3. Una vez monopolizadas por el Estado, las *funciones* militares produjeron lo que he denominado «cristalización militar», que en el caso que nos ocupa fue doble: geopolítica, porque se empleaba en la guerra exterior, y nacional, porque reprimía el descontento ciudadano. Ambas se conservaron, al tiempo que sufrían una profunda transformación.

Encontramos, pues, una tendencia tan paradójica como sorprendente: pese a la incorporación formal del poder militar al Estado, y a despecho del crecimiento de la ciudadanía nacional, la autonomía de la casta militar y su poder segmental *aumentaron* durante todo el periodo, y este hecho tuvo profundas consecuencias, algunas de ellas peligrosas, para la sociedad occidental. No han faltado críticos que me preguntaran por qué separo el poder político del militar (por ejemplo, Runciman, 1987 y Erik Wright, durante varios intercambios amistosos de opiniones). La respuesta es sencilla: porque en la época que estamos estudiando fueron autónomos. Este capítulo acaba precisamente cuando los ejércitos occidentales se preparan para realizar una demostración de poder «única en la historia del mundo».

Las funciones: I. Militarismo interno

A pesar del intenso cambio que experimentaron a lo largo del periodo [2], los ejércitos, y más raramente las armadas, continuaron representando un elemento esencial del orden interno. A este respecto, distingo cuatro niveles de represión. La de grado menor correspondería a los Estados capaces de resolver el problema del orden público *sólo mediante la conciliación, el arbitrio y la persuasión*, es decir, sin represión alguna. Con todo, no existen Estados enteramente pacíficos, que nunca hayan practicado, de forma continua u ocasional, la represión. El segundo nivel correspondería al *servicio policial* en el sentido moderno, es decir, la lucha contra el delito y el desorden mediante una fuerza disciplinada que dispone de armas sencillas, sin el recurso a una demostración de fuerza militar. Este cometido ha estado pocas veces en manos del ejército. La policía del siglo XVIII constaba de guardias nombrados y controlados por los notables locales. Incluso Londres, la mayor ciudad de Europa, estaba vigilada por un grupo heterogéneo de vigilantes parroquiales. En cambio, cuando se producían disturbios, se recurría al tercer nivel de demostración de fuerza mediante el empleo de tropas regulares, milicias y otras formaciones esencialmente *paramilitares*.

Tales disturbios constituían sobre todo manifestaciones que, al encontrarse frente a fuerzas más poderosas, optaban por dispersarse, y era entonces cuando las autoridades se planteaban los remedios. Se trataba de un intercambio ritual de violencia. Pero cuando esto no surtía efecto, se alcanzaba el cuarto nivel, es decir, el de la escalada de la represión militar, y entonces las fuerzas regulares hacían uso de sus armas. No obstante, la solución no agradaba ni a los regímenes ni al ejército por constituir la prueba evidente de su incapacidad para imponer un orden sistemático. Por otra parte, el control de los instrumentos represivos era muy relativo, ya que nadie podía predecir cómo acabarían los enfrentamientos callejeros cuando las armas escupían fuego, se desenvainaban los sables y cargaban los caballos. El remedio podía ser peor que la enfermedad; de hecho, los gobernantes destituyeron en más de una ocasión a los oficiales que ordenaron las cargas.

[2] Me he servido para esta sección del estudio comparativo de Emsley (1983) sobre los cuerpos policiales.

De 1600 a 1800, a medida que el ejército sustituía a los notables locales y sus secuaces, los Estados centrales emplearon más el tercer y cuarto nivel de represión. Los regímenes absolutistas del siglo XVIII crearon luego nuevas organizaciones paramilitares para mantener el orden en las capitales y, en ocasiones, en toda la nación. Las más famosas fueron las *Maréchaussée* francesas, formadas por más de tres mil hombres a las órdenes del Ministerio de la Guerra. En la década de 1780 un cuerpo de policía militar formado por más de trescientos hombres guardaba la ciudad de Viena. La presencia de estos paramilitares constituía una demostración rutinaria de fuerza, pensada para aumentar la vigilancia general y reprimir el delito y el desorden (Axtmann, 1991). Los regímenes constitucionales, temerosos de los ejércitos estables, pusieron estas milicias, más o menos coordinadas con el ejército, a las órdenes de la baja nobleza local.

Uno de los principales acontecimientos del siglo XIX fue la aparición de fuerzas policiales municipales, regionales y nacionales, con una capacidad de organización paralela a la de las fuerzas armadas, aunque sin su volumen, arsenales o recursos potenciales para el cuarto nivel de violencia, que ya no eran responsables ante el ejército o la parroquia, sino ante las autoridades civiles. En uno de los extremos se encontraba la policía británica, desarmada y dirigida en el plano local y regional por los municipios y los condados, aunque coordinada desde Londres en caso de urgencia. En otras partes se desarrollaron en paralelo organizaciones civiles y paramilitares. En Francia, la *Sûreté Nationale*, de origen parisiense y a las órdenes del Ministerio del Interior, abarcaba toda la fuerza policial urbana, mientras que la *Gendarmerie*, heredera de la *Maréchaussée*, portaba armas y dependía del Ministerio de la Guerra. La policía prusiana tuvo un tinte más militar, aunque oficialmente estuvo separada del ejército y, desde 1900, pasó a depender en mayor medida de la autoridad civil. La colaboración del ejército estadounidense con las milicias de los estados dio origen a la guardia nacional, que a su vez colaboraba con la policía local. Estas fuerzas policiales y paramilitares tendían a desplazar al ejército del tercer nivel de represión, que, en este momento, se especializaba, en estrecha colaboración con otras autoridades, en el cuarto nivel, el de los grandes estallidos de violencia organizada.

Los sociólogos contemporáneos han estudiado estas evoluciones influidos por las dos teorías dominantes y relativamente pacíficas de la época moderna, el marxismo y el liberalismo. De ahí que las hayan interpretado, en especial respecto al aumento del servicio policial sis-

temático, como una transformación social más profunda y esencialmente difusa: la «pacificación» de la propia sociedad civil a través de la fuerza policial institucionalizada y la «disciplina interna». Foucault (1979) sostiene que la sociedad cambió el castigo de carácter autoritario, abierto, punitivo, violento y espectacular por otro difuso, escondido, rutinizado, disciplinado e interiorizado. Pero sólo aporta pruebas relativas a las prisiones y los manicomios, de dudosa importancia para sociedades más amplias. No obstante, Giddens (1985: 181 a 192) y Dandeker (1989) enriquecen los argumentos de Foucault y sostienen que el aumento del «poder disciplinario» se debió a la capacidad de «vigilancia» sistemática que brindaban los ficheros y los horarios de las administración públicas y privadas, esto es, a la organización de fábricas y oficinas y a las prácticas contables, al imperio de los horarios, la ley escrita y racionalizada, las imposiciones de los mercados económicos (sobre todo a través de los contratos de los trabajadores libres) y a la capacidad de control de los centros de enseñanza. Es decir, se disciplinaba a los recalcitrantes mediante la interiorización de la obediencia en el momento de la tensión inicial, antes del estallido violento.

Giddens, al subrayar la importancia del puesto de trabajo, cita el comentario de Marx respecto a la introducción por parte del capitalismo industrial de una «coacción económica solapada» en las relaciones de clase, lo que se adapta bien a la argumentación de marxistas como Anderson y Brenner, quienes afirman que al capitalismo le basta el propio proceso de producción y no necesita, como otros modos históricos de producción, el respaldo de métodos violentos para extraer la plusvalía del trabajo. La violencia se aleja de las relaciones de clase, como sostiene también Elias (1983) en su análisis del desarrollo del «proceso civilizador» de Occidente. De este modo, habría quedado oculta e institucionalizada en todas las sociedades modernas (aunque las feministas insisten en su supervivencia dentro de la familia); es decir, en vez de contar los muertos, la sociedad moderna psicoanaliza a las víctimas.

Ni Elias ni los marxistas han demostrado interés por las consecuencias de estos acontecimientos para el ejército, pero sí lo han hecho Giddens y Dandeker. Giddens afirma que «el fenómeno no supuso el fin de la guerra, sino la concentración del poder militar "dirigido hacia el exterior" contra otros Estados, dentro del sistema del Estado-nación» (1985: 192). Tilly (1990: 125) lo apoya, aunque añade que durante el siglo XX no se ha producido una transición se-

mejante en el Tercer Mundo, donde los ejércitos emplean a menudo las armas contra sus propios compatriotas sin las inhibiciones que encontramos en los regímenes occidentales, que, según este autor, han conseguido reducir la doble función del poder militar (guerra-represión) a una función única (la guerra), y, con ello, han apartado a los ejércitos de la lucha de clases.

¿Fue realmente así? Podemos estar de acuerdo en lo esencial, mas no para este periodo ni en primer lugar por las razones que aducen Foucault, Giddens, Dandeker y Elias. Es cierto que el mantenimiento del orden de la sociedad occidental contemporánea —salvo en las ciudades del interior de Estados Unidos— depende mucho menos de la represión que el de la mayoría de las sociedades históricas, y, también, que este hecho ha permitido a los ejércitos dedicarse en exclusiva a una actividad exterior, pero se trata de un logro del *siglo XX* que debemos relacionar con otras dos formas de poder: la ciudadanía política y social y la conciliación institucional de las relaciones laborales. En efecto, si el proceso comenzó durante el periodo que nos ocupa, en realidad se ha materializado en la segunda mitad del siglo XX. El hecho de que el ejército se encargue de la represión interna en los países del Tercer Mundo se explica, precisamente, por la escasa implantación de la ciudadanía social y política[3]. Las pruebas demostrarán que ni la «disciplina» ni el apartamiento de los militares de la represión interna se produjeron antes de 1914.

Para justificar la disminución de la violencia expresa, Dandeker y Giddens recurren a dos fuentes, las descripciones contemporáneas de las sociedades del siglo XVIII, plagadas de robos de menor entidad, pendencias e inseguridad en los caminos, y las pruebas de Gurr *et al.*, entre otros, sobre la disminución de los delitos comunes de carácter violento durante el siglo XIX. Aunque las estadísticas sobre la delincuencia son notoriamente poco fiables, es probable que se produjera un descenso real (compensado en parte por el aumento de los delitos no violentos contra la propiedad; Emsley, 1983: 115 a 131). En efecto, los actos cotidianos y las relaciones interpersonales suelen ser más pacíficos en las sociedades capitalistas avanzadas que en las ante-

[3] El hecho de que la institucionalización de las relaciones laborales no haya contribuido a desmilitarizar en igual medida las sociedades del Tercer Mundo se debe quizás a que la industrialización tiene allí una base inferior a la de Occidente. Por ejemplo, la clase trabajadora industrial de algunos países hispanoamericanos es, en proporción, menor que la de sus equivalentes históricos en Occidente.

riores. El proceso comenzó durante el siglo XVIII y continuó a lo largo del XIX, tal como afirman Dandeker, Giddens y Foucault (Elias sostiene que empezó mucho antes). Pero la represión del delito común (mi segundo nivel policial) no afectaba al ejército, salvo en las zonas más atrasadas de Europa, donde actuaban los bandidos organizados. La represión de las pendencias y los robos constituía el cometido de guardias, magistrados y secuaces de los notables locales; otras veces, estos delitos se toleraban como una condición normal de la vida en sociedad. Sólo se requería una demostración de fuerza cuando la violencia alcanzaba el tercer nivel, por ejemplo, durante las revueltas por la escasez, los desórdenes relacionados con el contrabando, las disputas laborales y los levantamientos contra el reclutamiento militar (como vimos en el capítulo 4).

Tilly (1986) aporta la mejor prueba de lo que ocurrió entonces en el caso francés. Lo que él describe no es la decadencia de la protesta colectiva, sino el paso de las revueltas por el pan a la huelga laboral y de la organización local a la organización nacional, es decir, las respuestas al desarrollo capitalista y al Estado nacional. Puesto que ambas quedaron institucionalizadas en la década de 1950, ni la agitación política de los sindicatos ni la de los partidos se ve sometida a la represión de un ejército regular. Pero antes de 1914 las cosas eran distintas. Huelguistas y manifestantes políticos se encontraban con los soldados con la misma frecuencia que los revoltosos del pan. En 1830, 1848 y 1871 murieron más de mil manifestantes en enfrentamientos con las tropas. Y aunque después no se conocen «revoluciones» equiparables, Tilly afirma que en numerosas ocasiones los manifestantes asaltaron lugares públicos y desafiaron a las tropas durante un día entero. Algunos de los peores episodios tuvieron lugar casi al final del periodo, durante los disturbios ocasionados por obreros y agricultores de 1905 a 1907. Hubo también golpes en 1851 y 1889 (fallido).

Tilly etiqueta como «siglo rebelde» al XIX (1986: 308 y 309, 358 a 366, 383 y 384). En efecto, las fuerzas armadas francesas se mostraron tan activas en materia de represión como en los cien años anteriores a 1789, pero no es menos cierto que los distintos departamentos del Estado actuaron también en el extremo opuesto, es decir, el de la conciliación. Como tendremos ocasión de comprobar en el capítulo 18, los prefectos y subprefectos franceses, respaldados a finales de siglo por el Ministerio del Trabajo, intentaban resolver los problemas

laborales antes de que estallara la violencia. El militarismo interior de Francia comenzaba a diversificarse.

Aunque Francia presenta características propias, la historia de la violencia no fue distinta en otros lugares. En el caso de los Estados Unidos, el exterminio de los indios constituyó el principal cometido del ejército hasta 1860; a partir de esa fecha lo fue la guerra civil. Mientras, una guardia nacional reconstituida y ampliada abandonaba las matanzas de indios y esclavos para ocupar el sur y luego abortar las huelgas y los levantamientos en la ciudades (Hill, 1964: capítulo 4; Dupuy, 1971, esp. 76). Goldstein (1978: 1 a 102, 548) documenta la «continua represión a gran escala» de los trabajadores americanos desde 1870 hasta la década de 1930, con el despliegue de la guardia nacional, apoyada por el ejército en caso de necesidad. Estos episodios alcanzaron su punto culminante en las décadas de 1880 y 1890, para luego disminuir ligeramente a raíz de que el régimen y los empresarios desarrollaran una doble estrategia consistente en reprimir la protesta de carácter general y socialista y buscar la conciliación en los casos de protesta seccional de los trabajadores cualificados (véase el capítulo 18). La represión interior continuó siendo militar y paramilitar en los Estados Unidos, pero se hizo más selectiva. Hasta comienzos del siglo XX no hubo instituciones gubernamentales que iniciaran la conciliación laboral.

La violencia experimentó pocos cambios en Austria. El ejército, que contaba con guarniciones en las principales ciudades, reprimió los desórdenes internos en todas las décadas. Es cierto que no se repitió una revolución como la de 1848-1849, pero ni la protesta ni la represión decrecieron, y el régimen nunca dejó de confiar más en el ejército conjunto que en los paramilitares de las provincias (Deak, 1990: esp., 65 a 67). Los Estados austriaco o prusiano-alemán apenas practicaron un genuino arbitrio laboral; por el contrario, sus militares intervenían incluso en las cuestiones civiles. Las guarniciones de las ciudades alemanes fueron los principales represores de los levantamientos hasta entrado el siglo XX. A partir de 1820, los comandantes locales del ejército alemán tenían derecho a intervenir a su arbitrio, sin necesidad de haber sido convocados por la autoridad civil (aunque solían actuar juntos). La situación culminó en 1913 con el conocido incidente de Zabern, donde un coronel local dispersó por su cuenta a los manifestantes y encarceló a los dirigentes. Estalló la protesta pública y el coronel se sometió a un tribunal militar, pero fue absuelto y el poder arbitrario del ejército adquirió nuevos bríos. La

intervención del ejército alemán no decayó en todo el siglo. En 1909 encontramos aún a los soldados, armados de ametralladoras, municiones y bayonetas fijas, intimidando a los mineros en huelga. Pero, de momento, el ejército alemán no se había visto obligado a emplear mucha violencia real. Su actividad consistía, sobre todo, en una demostración ritualizada de lo que podía hacer una fuerza esencialmente paramilitar (R. Tilly, 1971; Ludtke, 1989: esp., 180 a 198; véase también el capítulo 18).

En gran parte de los países, la represión militar *se unió* ahora a una nueva policía y unas autoridades paramilitares en expansión, a lo que cabe añadir en el caso de las democracias de partidos una mayor conciliación por parte del Estado de los conflictos de clase. Así pues, los ejércitos no participaban sistemáticamente en los niveles intermedios de disturbios. Éstos abundaban tanto como en el siglo XVIII, pero los regímenes habían encontrado nuevas formas de represión específicas para el grado real de la amenaza. De hecho, eran pocos los Estados o comandancias militares interesados en cargar o hacer fuego contra la multitud. Sólo en Rusia se practicó con frecuencia, y sólo en los Estados Unidos, dentro de su tradición de violencia individual y local, se hizo sistemáticamente (véase el capítulo 18). El militarismo represivo conservó sus tres formas tradicionales —primordialmente, como *presencia*; secundariamente, como *demostración*; y sólo en ocasiones, como *violencia* real— pero ahora disponía de un repertorio más amplio.

De hecho, sólo el caso británico se distingue de todos los demás, porque sólo allí disminuyó de verdad la represión militar. Durante el siglo XVIII el ejército de las épocas de paz, de 10.000 a 15.000 hombres bien armados, se empleó repetidamente contra los revoltosos, sobre todo con ocasión de los levantamientos de Gordon en 1780, en los que murieron doscientas ochenta y cinco personas, y se mantuvo listo para la represión durante las guerras con Francia desplazando los cuarteles desde las zonas de contrabando y distribuyéndolos según una estrategia que iba tanto contra los franceses como contra los radicales del interior. Estaba formado por dos milicias de la baja nobleza, los *Volunteers* y la *Yeomanry*. Los soldados reprimieron a los revoltosos en 1816, 1821 y 1830-1832, y a los cartistas de 1839 a 1848. Irlanda constituía una colonia en pie de guerra con un ejército de ocupación. Con posterioridad (y algo más tarde, también en Irlanda) hubo un periodo de paz relativa hasta la oleada de huelgas acaecida de 1889 a 1912, pero estos episodios recibieron ya otro tratamiento.

A partir de la década de 1840, las autoridades británicas recurrieron tambien a las fuerzas policiales de los municipios y los condados. Cuando la numerosa fuerza de Manchester (un guardia por cada 633 habitantes en 1849) no podía con los huelguistas locales, se enviaba en veinticuatro horas a la policía metropolitana de Londres; el Ministerio del Interior, por su parte, podía multiplicar por diez el número de policías en una sola jornada. Aunque el ejército actuó por lo menos veinticuatro veces de 1869 a 1910 (Emsley, 1983: 178), la mayoría de los huelguistas se enfrentaron a demostraciones de fuerza por parte de los «hombres de azul», no de los «casacas rojas» (que para entonces ya vestían de color caqui). La represión militar aún se hacía notar, pero estaba en decadencia desde 1848.

Comenzaba a complementarse con instituciones estatales encargadas de la conciliación en materia laboral (véase el capítulo 17). ¿Por qué ocurrió sólo en Gran Bretaña este cambio de lo militar a lo policial (más la normal conciliación de las democracias de partidos) y qué clase de pacificación representó? Existen tres causas principales:

1. Cuando la urbanización capitalista aumentó el temor de las clases altas, ya incapaces de dominar sus ciudades a través de las redes tradicionales del patronazgo segmental respaldadas por ocasionales llamadas al ejército, éstas no tuvieron más remedio que superar otro de sus miedos, el que les inspiraban unas fuerzas militares centralizadas y «despóticas». Lo superaron antes que en ningún otro país porque las perturbaciones introducidas por el capitalismo urbano primero e industrial después coincidieron sólo aquí con los disturbios políticos de las guerras francesas y el periodo de reformas del cartismo (véanse los capítulos 14 y 15). Por otra parte, Irlanda había representado una inquietante amenaza durante el siglo XVIII, y allí los protestantes habían olvidado su pánico a la centralización para crear una fuerza policial que iba a constituir un modelo para el resto del territorio británico (Axtmann, 1991).
2. El propio ejército quiso abandonar la actividad represiva, convencido de que dañaba la moral de las tropas e interfería en los compromisos imperiales. Gran Bretaña contaba con el ejército interior más pequeño, en términos relativos, y también más profesionalizado. No disponía de regimientos de frontera u otras fuerzas especializadas en tareas de pacificación de baja intensidad que pudieran improvisar el control de los desórdenes.
3. El fracaso del cartismo en 1848-1849 desmoralizó a los radi-

cales y proporcionó a las nuevas fuerzas de policía un periodo de preparación suficiente para afrontar con eficacia los niveles más bajos de amenaza y la represión de los delitos comunes, antes de ser movilizada una vez más contra los desórdenes. El nuevo sistema dio resultados. Cuando se produjo en Londres la huelga de los muelles de 1889, la policía había desarrollado ya la táctica del «por favor, manténgase en movimiento», que permitía continuar la marcha y los gritos sin llegar al enfrentamiento (McNeill, 1983: 187 y 188). El régimen había logrado evitar el efecto desestabilizador y deslegitimador que produce el empleo a fondo de la violencia, y el ejército quedaba libre para defender el Imperio.

¿Se debió también el éxito del nuevo sistema policial a la interiorización de la «disciplina» por parte de la sociedad? Giddens subraya con razón el desarrollo decimonónico de los poderes comunicativos y administrativos. Pero el fenómeno fue más autoritario que difuso, de modo que podría resaltarse también el otro aspecto. Mientras se reducía la violencia local espontánea, crecía la guerra organizada de clase, como demostraron los acontecimientos del periodo cartista. Por otra parte, la organización autoritaria beneficiaba al sindicalismo seccional que surgió de las ruinas del cartismo. La policía ganó también poderes autoritarios y respondió con enorme rapidez y flexibilidad en el número de agentes que actuaban en demostraciones de fuerza adecuadas a los niveles intermedios de rebelión. Las armas y los caballos se abandonaron con un suspiro de alivio.

Hay pocos indicios de que los revoltosos potenciales se «disciplinaran» en el sentido de Foucault-Giddens, o de que fueran explotados por medios puramente económicos, a la manera de Marx. Los cartistas experimentaron una derrota física y organizativa (como explicaré en el capítulo 15); los trabajadores agrícolas se acobardaron porque disminuyó su número y su capacidad de trasladarse para organizar localmente la protesta (Tilly, 1982); el capitalismo redujo el descontento de la escasez porque logró abastecer de alimentos a las ciudades; y los trabajadores cualificados cambiaron sus formas de protesta por otras más seccionales y más responsables (véase el capítulo 15). Tales cosas no son el resultado de una mayor «disciplina» difusa, sino de una organización autoritaria del poder. Otros regímenes necesitaron el respaldo del ejército a sus nacientes fuerzas policiales porque no pudieron organizarse con esa superioridad contra los oponentes nacionales.

Cuando observamos la represión, tanto desde el punto de vista histórico como desde sus distintos niveles, llegamos a conclusiones más complejas que la simple transformación histórica que defienden Foucault, Giddens y los marxistas. Deberemos incorporar, pues, las características de la organización militar y policial y las estrategias del régimen que ellos descuidan en sus análisis. En realidad, el periodo anterior, desde 1600 a 1800, conoció quizás la mayor transformación cuando los ejércitos controlados por el Estado se hicieron responsables del segundo y el tercer nivel de represión. Después, hubo que reconocer que el ejército era un instrumento inadecuado, especialmente en las ciudades y en un momento en el que el progreso técnico de las armas dejaba menos lugar al espectáculo y más a la muerte real de la muchedumbre. Veremos en los capítulos siguientes que la guerra se hacía también más profesional, se concentraba en el fuego y abandonaba el sable.

La guerra comenzaba también a diferenciarse netamente de la represión interior. Los regímenes comprendieron que ambas funciones militares divergían en cuanto a táctica, armamento, disciplina e instalaciones, y que esa diferencia dañaba la eficacia de su actividad exterior, que había constituido siempre el cometido principal. Por eso fueron los regímenes absolutistas —más relacionados con lo militar y que no gobernaban mediante una disciplina difusa— los que se adelantaron a implantar la policía en sus principales ciudades (en el capítulo 13 comprobaremos que también fueron los primeros en plantearse una administración burocratizada) y a institucionalizar paramilitarmente una policía nacional. Gran Bretaña creó su fuerza policial en parte por la experiencia irlandesa y en parte porque su ejército era el que se encontraba más atrapado por los dos cometidos.

La segunda transformación comenzó hacia 1800, cuando la industrialización y las sediciones del periodo revolucionario pusieron de manifiesto la inadecuación del instrumento militar. En la primera mitad del siglo XIX se produjo la división tripartita del trabajo (aún existente) en policía, fuerzas paramilitares y ejército regular, para afrontar los distintos niveles de amenaza contra el orden. A esta transformación siguieron dos «pacificaciones». Es probable que la amenaza de bajo nivel, el delito común, comenzara a disminuir, en parte por la eficacia de las nuevas policías y quizás también por ciertos procesos disciplinarios y sociales del tipo que defienden Giddens, Foucault y Marx. En segundo lugar, el desarrollo de la ciudadanía y la conciliación en las relaciones laborales hicieron después menos ne-

cesarias las fuerzas de alto nivel, si bien con grandes variaciones entre los distintos países. Goldstein (1983) demuestra que a partir de 1900 el ejército intervenía aún en todos los países, aunque lo hacía cada vez menos en las democracias de partidos, más constitucionales, del noroeste de Europa.

Goldstein resalta también un efecto de «válvula de escape», sin el cual las cosas habrían empeorado sensiblemente: cuarenta millones de europeos jóvenes, vigorosos y probablemente descontentos emigraron al Nuevo Mundo de 1850 a 1914. Sin embargo, atribuye a la política la parte más importante del descenso de la represión. Los regímenes habían fomentado la industrialización, la urbanización y el aumento de la población alfabetizada, pero estos procesos habían dado lugar a una pequeña burguesía y una clase obrera disidentes. Después de casi cincuenta años de disturbios y represiones, cambiaron de táctica y comenzaron a practicar la conciliación selectiva y la incorporación de aquellas demandas de la clase obrera y la clase media compatibles con el orden. La represión militar quedaba ahora reservada para los auténticos extremistas; una política selectiva que habría de tener graves consecuencias para los movimientos obreros (véase el capítulo 18). La disminución de la represión militar se produjo en las tres democracias de partidos que institucionalizaron la ciudadanía política y las relaciones de trabajo. La clase media británica se había incorporado a mediados de siglo; la República Francesa y la Unión Americana se atrincheraron bastante después. Las relaciones industriales en Gran Bretaña eran las más institucionalizadas, seguidas de las francesas, aunque los mayores cambios no se produjeron hasta después de la guerra (veánse los capítulos 17 y 18). Alemania y Austria no habían resuelto sus cristalizaciones representativas, ni la segunda, su cristalización nacional, por tanto, continuaban necesitando a los militares tanto como antes.

Antes de continuar, permítaseme detenerme en la naturaleza sesgada de la muestra de «mis» Estados, ya que todos ellos fueron grandes potencias, de modo que superaban a las pequeñas en fuerza militar. La mayoría de estas últimas compartieron en Occidente varias características: baja capacidad del régimen para reprimir, bajos niveles de represión real, precoz transición a la democracia plenamente representativa (incluido el sufragio femenino), temprana institucionalización de las relaciones laborales y transición al Estado asistencial. Parece difícil creer que los habitantes de Australia, Nueva Zelanda, Escandinavia y (con posterioridad a 1830) los Países Bajos interiori-

zaran mejor las «disciplinas coercitivas» de la sociedad moderna que los alemanes o los americanos. Más fácil es pensar que padecieron una menor coerción militar y que este hecho les permitió acceder a unos derechos ciudadanos superiores (como sostiene Stephens, 1989).

La mayor parte de los ejércitos de las grandes potencias actuaban tanto en el interior como en el exterior, pero ahora contaban con el complemento de las organizaciones policiales y paramilitares y, en algunos países, con una cierta dosis de conciliación. Puede que la sociedad se hiciera algo más disciplinada, pero gran parte de esa disciplina se imponía aún mediante unas organizaciones autoritarias, jerárquicas y coercitivas, y no difusamente, a través de la propia interiorización de los ciudadanos. A largo plazo, el desarrollo del Estado tendía a hacerlo «más civil» y a reducir su militarismo interno a los niveles más bajos. Gran parte de su personal se componía de «individuos de costumbres y atavío tradicionales, que no operaban al modo militar» y que relegaron a un segundo plano la fuerza bruta (Poggi, 1990: 73 y 74). Pero, en realidad, durante este periodo los funcionarios civiles relegaron a la fuerza bruta a un cometido especializado, junto a una policía «semibruta» e igualmente especializada y (en algunos casos) a unos cuantos conciliadores «civiles», con la conformidad de las propias fuerzas brutas. Así fue en la mayoría de los países hasta 1945. Es cierto que casi todas las cristalizaciones militaristas internas decayeron en favor de otras fuerzas de nivel más bajo, pero esto no implicó en ningún caso la desaparición del militarismo interno.

En algunos países, ciertos grupos sociales mostraron un consenso activo y voluntario, pero se debió siempre a que disfrutaban de derechos civiles, no al funcionamiento inconsciente de la vida social moderna. Los distintos niveles y tipos de represión militar variaron en la medida en que lo hicieron el equilibrio de los poderes autoritarios y la obtención de derechos civiles en los diferentes países. Por su parte, los regímenes tuvieron que afrontar los mismos desórdenes de siempre, pero ahora disponían de recursos represivos mucho más precisos que los sables y los mosquetes, y dejaban a los ejércitos la posibilidad de concentrarse en la guerra exterior, lo cual modificó su antigua función dual, pero no acabó con ella. La represión militar interna se mantuvo siempre contra las cristalizaciones étnicas, regionales y de clase, así como contra todas aquellas minorías religiosas que reivindicaran la ampliación de los derechos de la ciudadanía. Por consiguiente, las dos jerarquías de la estratificación del ejército —la composición de clase y las relaciones entre la oficialidad y la tropa—

continuaron siendo fundamentales para la represión interna. Demostraré más adelante que el militarismo geopolítico produjo la tendencia a formar una casta militar, atemperada sólo por su estrecha relación con las clases altas y conservadoras en materia de represión interna.

Las funciones: II. Militarismo geopolítico

La guerra y su preparación habían constituido siempre la función predominante del Estado. En el capítulo 11 vimos que fue así hasta mediados del siglo XIX. Durante el siglo XVIII la amenaza y el empleo de la fuerza militar representaba una parte incuestionable de la política exterior. La guerra no constituye siempre la sustancia de las relaciones exteriores, de hecho, los diplomáticos se esfuerzan por evitarla, pero en aquel siglo las grandes potencias estuvieron en guerra en el 78 por 100 de los años, y las del siglo XIX, en el 40 por 100 (Tilly, 1990: 72). Puesto que se trata quizás de la forma más despiadada de competición que han conocido las sociedades humanas, ha existido un proceso de continuo aprendizaje de lecciones, de modernización de los ejércitos y de capacidad de afrontar las amenazas, ya fuera a través de la participación en el conflicto o simplemente mediante la observación. Un régimen que no prestara atención a estos hechos y no modernizara su ejército estaba destinado a desaparecer. El militarismo impregnaba también la diplomacia pacífica, que negociaba alianzas, bodas reales y tratados comerciales. Nadie aceptaba un acuerdo diplomático sin considerar antes el equilibrio militar de las potencias y la seguridad del propio Estado. La guerra y el ejército eran fundamentales para el liderazgo del Estado y la política exterior. En consecuencia, todos los Estados tuvieron su cristalización militarista, como ocurre en nuestra época con la mayoría.

¿Quién controlaba el militarismo geopolítico tomando las decisiones de la guerra y de paz? Las prácticas tradicionales de los regímenes absolutistas de finales del siglo XVIII eran muy claras. La política exterior, incluida la guerra, era prerrogativa privada del monarca. Federico II de Prusia describe la conquista de Silesia, decisiva para el ascenso histórico de Prusia, en 1740:

Cuando murió mi padre, me encontré con una Europa en paz ... La minoría de edad del zar Iván me hizo concebir la esperanza de que Rusia estaría más

preocupada por sus asuntos internos que por garantizar la Pragmática Sanción [el tratado que permitía a una mujer, María Teresa, acceder al trono de Austria]. Por mi parte, disponía de fuerzas altamente entrenadas, de una Hacienda próspera y de un temperamento personal muy vivaz. Estas razones me movieron a declarar la guerra a Teresa de Austria, reina de Bohemia y Hungría ... La ambición, la ventaja y el deseo personal de fama me decidieron a ello [Ritter, 1969: I, 19].

Al margen de la afectación de Federico, el pasaje demuestra que la guerra dependía en gran parte del criterio personal; la referencia a los enemigos por su nombre propio constituye otro atributo de la diplomacia dinástica.

A esta prerrogativa constitucional vino a añadirse una segunda. El monarca comenzaba a ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas. María Teresa (r. 1740-1783) fue la primera gobernante austriaca que logró imponer su autoridad por encima de cualquier otra, puesto que los soldados austriacos le juraban lealtad antes que a sus comandantes. La reina no los dirigía en la batalla, como tampoco lo hacían los reyes franceses o británicos e iban a dejar de hacerlo pronto los monarcas de Prusia; de hecho, todos ellos necesitaban cadenas de mando (que describiré más adelante).

¿Cómo superó la democratización del siglo XIX estas prerrogativas monárquicas? En una palabra, precariamente. Los monarcas conservaron la dirección de la política militar y exterior. Como vimos en el capítulo 10, cuando en 1867 los Habsburgo concedieron una autonomía amplia al *Reichshalf* húngaro, la política exterior era aún prerrogativa de Francisco José, y puede decirse que el ejército era *suyo*. Aunque se suponía que debía consultar los tratados comerciales, eludió la obligación prescindiendo de los ministros de asuntos exteriores que mostraban su desacuerdo. Los presupuestos y las cuestiones relacionadas con el ejército estuvieron en manos del emperador durante su largo reinado, y siempre contaron para él más que los asuntos internos (Macartney, 1971: 565 a 567, 586, *passim*). Naturalmente, Austria constituía un caso distinto, una trampa gigantesca y protectora, centrada en la arbitrariedad de la dinastía y en su poder militar para defender a sus enfrentados pueblos de las grandes potencias que los rodeaban. Pero el poder de los Habsburgo no constituía un caso atípico. En el *Reich* alemán, el rey de Prusia mandaba los ejércitos y no estaba obligado a consultar al *Reichstag* en materia de guerra o política exterior, sólo necesitaba un consentimiento formal de los otros

gobernantes alemanes en el *Reichsrat* que su dominio tenía garantizado. En estos países (como en Rusia) un monarca con personalidad podía ejercer un estrecho control de la política exterior o delegarlo en los cancilleres y ministros de exteriores que le ofrecieran confianza.

Podemos aceptar que la democratización de los regímenes cambió las cosas, pero sólo en parte. Tomemos el ejemplo de Noruega tras su independencia en 1905, una de las monarquías constitucionales más democráticas de Europa. La constitución preservaba de modo típico la prerrogativa real de los poderes ejecutivos y extraordinarios para movilizar las tropas, declarar la guerra y la paz, sellar y disolver alianzas y mandar y recibir enviados. A todos los efectos, debía consultar formalmente al Parlamento, pero en la práctica éste se mostraba bastante indiferente. El Ministro de Exteriores «no veía con claridad que la política exterior incumbiera también al pueblo en una sociedad democrática», concluye Riste (1965: 46). En Noruega, también las clases y los restantes grupos de interés se mostraban indiferentes, ya que se encontraban organizadas en el plano *nacional* y absortas en él, como fue norma en el siglo XIX y continúa siéndolo en nuestros días.

Con la aparición de los Estados-nación, las clases y otros grandes grupos de interés quedaron confinados nacionalmente, dejando la dirección de la policía exterior en manos de unos jefes ejecutivos supuestamente «democráticos», que en esta materia recordaban más a los monarcas absolutos. En Italia, mayoritariamente democrática, el monarca perdió gran parte de sus poderes internos hacia 1900, pero no el control de la diplomacia. Según Bosworth (1983: 97): «La política exterior era asunto del rey y de sus consejeros más íntimos. La "opinión pública" nacionalista molestaba, a menos que estuviera organizada y dirigida, pues entonces se le encontraban virtudes positivas, pero nunca decidió nada».

Puesto que Gran Bretaña era la mayor democracia de partidos de la época, sus decisiones encierran para nosotros un significado especial. También allí la política exterior, «el gobierno, el mando y la disposición del ejército» constituían prerrogativas reales, como era norma en las monarquías constitucionales. En cambio, desde 1688, las realizaciones militares estaban muy reguladas. El Parlamento determinaba el tamaño del ejército y de la armada, su financiación y regulación interna. Para trasladar tropas extranjeras al suelo británico o mantener un ejército estable en tiempos de paz se requería el consentimiento parlamentario (Brewer, 1989: 43 y 44). Así pues, la decisión

«última» respecto a la política exterior descansaba formalmente en el Parlamento.

Sin embargo, la política exterior *normal* no necesitaba ese consentimiento, a no ser que transgrediera la ley de la tierra o causara nuevas obligaciones financieras (Robbins, 1977a). En 1914 el Parlamento tuvo que aprobar la declaración de guerra (también en Francia, aunque no en otros países combatientes), pero la dirección diaria de la política exterior durante la crisis de julio y agosto fue en gran parte privada. Delante del Ministro de Asuntos Exteriores sólo estaba el Primer Ministro, y el Parlamento apenas ejercía algún control sobre él. Normalmente se trataba de un par por herencia, que se sentaba en la Cámara de los Lores, no en la de los Comunes; una estratagema deliberada para evitar el debate público. Las demandas de información por parte de los Comunes se desechaban una y otra vez con la fórmula «no es de interés público». El Ministro de Exteriores consultaba regularmente con el Primer Ministro y de forma intermitente, a su discreción, con los colegas más importantes del gabinete y los estadistas expertos. Pocas veces pedía la opinión del gobierno al completo. Una figura de la comandancia como lord Rosebery podía dirigir su propia política exterior (Martel, 1985), y una medianamente perezosa como sir Edward Grey funcionó sin molestarse en consultar con «intrusos». Las pocas personas que se daban a sí mismas el título de «estadistas» se comunicaban por una correspondencia establecida entre las principales fincas del país y por las conversaciones en los clubes de caballeros. Estos últimos, y no la Cámara de los Comunes, sustituyeron a la corte en la democracia liberal (Steiner, 1969; Steiner y Cromwell, 1972; Robbins, 1977a; Kennedy, 1985: 59 a 65, aportan pruebas al respecto). En contraste con este reducido grupo de caballeros, la opinión pública era demasiado amorfa, y se encontraba demasiado desunida y dificultada para aportar algún apoyo a las cuestiones concretas (Steiner, 1969: 172 a 200; Robbins, 1977a). En consecuencia, un ejecutivo estilo antiguo régimen en materia de política exterior convivía con los parlamentarios congregados en los Comunes. Las clases británicas se encontraban absortas en lo nacional y dejaban el funcionamiento de la política exterior a los expertos.

De la democracia de partidos más avanzada, los Estados Unidos, habríamos podido esperar algo distinto. Al fin y al cabo, se había hecho una revolución para acabar con tales prácticas, en especial contra los impuestos decretados sin consenso por el ejecutivo para financiar la política exterior. De hecho, la constitución le privaba explícita-

mente de ese poder y confería al Congreso la capacidad de gestionar los asuntos relacionados con la guerra y de establecer tratados. Sin embargo, el artículo II de la Constitución otorgaba al presidente todos los poderes ejecutivos que no se encontraban explícitamente limitados por otros artículos. Estos poderes residuales fueron asumidos por entonces y confirmados por los tribunales supremos del siglo XIX, con el objetivo de centrar la dirección de la política exterior. Esto suponía que, en la práctica, el presidente podía elaborar su propia política exterior mientras no se tratara de una declaración de guerra, de algún tratado o de una necesidad de dinero adicional a la de los fondos secretos de la administración. La situación parece ser la misma todavía —y así, más o menos, fue convenida por ambas partes en 1990-1991 cuando hubo que afrontar la Guerra del Golfo—, aunque aún suscita controversias (véase el intercambio entre Theodore Draper y el consejero legal del presidente Bush en *The New York Review of Books*, 1 y 17 de marzo de 1990).

Pero el poder de los presidentes de comienzos del siglo XIX se encontraba restringido en la práctica por el hecho de que gran parte de las cuestiones militares y exteriores —las relaciones con Francia, España, México, Gran Bretaña y los indios— afectaban directamente al territorio de América del Norte y a la vida de los colonos y otros grupos de interés. No obstante, a medida que el continente se poblaba, la política exterior se encauzó hacia un imperialismo más distante, bastante ajeno a las principales preocupaciones nacionales (o continentales) de los americanos. La autonomía del ejecutivo aumentó. A partir de 1900 algunos presidentes como McKinley y Theodore Roosevelt manipularon al Congreso y a la opinión pública para que apoyaran políticas exteriores que eran en esencia obra del ejecutivo. En 1908 Woodrow Wilson sostenía que el imperialismo había cambiado la práctica constitucional: «La iniciativa en materia de asuntos exteriores, que el presidente posee sin restricción alguna, es en la práctica un poder de control absoluto» (La Feber, 1987: 708, de quien me he guiado en este párrafo). Una vez que las clases y otros grupos de interés quedaron organizados nacionalmente, incluso en el Estado más constitucional, la política exterior estuvo dominada por un Estado ejecutivo en gran medida aislado, con el respaldo formal de la Constitución. Antes de la Primera Guerra Mundial (Hilderbrand, 1981), la opinión pública y los partidos políticos desempeñaron un escaso papel en la formulación de la política exterior, que quedaba en manos de un pequeño grupo de notables y de grupos de

interés específico, encargados de asesorar a los pocos políticos que aspiraban a ser «estadistas» (como veremos en los capítulos 16 y 21). Así pues, en las democracias de partidos, el funcionamiento rutinario diplomático se encontraba, como en las monarquías semiautoritarias, en manos de una elite estatal.

Las cosas cambiaban en presencia de una crisis. En los Estados Unidos, las grandes decisiones sobre la guerra y los nuevos impuestos dependían (y aún dependen) del Congreso. En Gran Bretaña (entonces y ahora), del gobierno en su conjunto, donde se discutían (y se discuten) según el partido, el Parlamento o la opinión pública del momento. Cuando se cernía la amenaza de la guerra, aparecía la restricción fundamental a la libertad de acción de cualquier régimen: el dinero. Aun en aquellos casos en que la propuesta de una política exterior costosa procedía de un rey absolutista, se requería normalmente el consentimiento de quienes pagaban los impuestos o concedían los préstamos; sólo entonces adquiría peso la opinión pública para otros actores de poder.

Pero el control en situaciones de crisis o de guerra es siempre limitado. La diplomacia está siempre menos regulada y resulta menos previsible que la política nacional. La diplomacia multiestatal vincula a los Estados autónomos con lazos normativos limitados, obligándolos a revisar continuamente las opciones geopolíticas. Los actos de cualquiera de ellos —el sonido de sables; la entrada en una nueva alianza; el despliegue de maniobras de una flota o un ejército; el aumento del número de tropas por encima de las que establecen unas sanciones políticas o económicas o aconseja la mera defensa del territorio; la iniciativa unilateral de ofrecer apoyo a grupos de presión con carácter agresivo, formados, por ejemplo, por comerciantes o por colonos blancos— pueden parecer una provocación a las restantes potencias, pero lo contrario podría parecer debilidad; ambas cosas pueden suscitar reacciones impredecibles. Los regímenes descubren durante las crisis que la rutina diplomática los sitúa contra las cuerdas, enfrentándolos a enemigos o aliados no queridos o a lo que Hobson ha llamado la elección entre echarse atrás o actuar agresivamente. Luego, la diplomacia secreta reduce las opciones.

En tales momentos, las crisis enfrentan súbitamente a los parlamentos, a las clases dominantes o contribuyentes y a la opinión pública con elecciones políticas limitadas que, sin embargo, tienen una enorme trascendencia. Como veremos en el capítulo 21, los distintos gobiernos de 1914 presentaron, por lo general, dos alternativas a los

parlamentos y a la opinión pública: ir a la guerra o retroceder y sufrir la humillación, toda una situación contra las cuerdas a la que estamos bastante acostumbrados (y que en tiempos recientes volvió a repetirse con efectos desastrosos en la Guerra del Golfo, tanto para los Estados Unidos como para Irak). Así se explica por qué los gobiernos obtienen apoyo para hacer la guerra. La elite estatal que domina la diplomacia rutinaria y los despliegues militares se impone a los controles democráticos. En efecto, son los ejecutivos, y no las naciones o las clases, quienes dominan la diplomacia británica, francesa o americana, tal como hacían los monarcas austriacos o prusianos. Las constituciones y las cristalizaciones representativas tienen menor importancia para la política exterior que para la nacional. La ciudadanía demostró entonces ser un fenómeno nacional y estrecho de miras, como continúa demostrándolo en la actualidad.

Pero ni los monarcas ni los ejecutivos decidían solos la política exterior; en realidad, siempre recurrieron al consejo de los diplomáticos profesionales, individuos procedentes de una estrecha base social, mayoritariamente del antiguo régimen: familiares del rey, aristócratas, hombres de la baja nobleza o del capitalismo de mayor raigambre (para un análisis general, véase Palmer, 1983). En Austria y Alemania, donde mejor sobrevivió el antiguo régimen, el servicio diplomático estuvo dominado por la aristocracia hasta entrado el siglo XX. Cuando Preradovich (1955) intentó establecer una comparación estandarizada de ambos países entre 1804 y 1918, descubrió que la proporción de nobles entre los «altos diplomáticos» prusianos fluctuaba sólo entre el 68 y el 79 por 100 (71 por 100 al acabar el periodo). En Austria fluctuaba entre el 63 y el 84 por 100 (el 63 por 100 al final del periodo). Las tendencias eran similares cuando se medían sólo entre la antigua nobleza (para evitar la posibilidad de que los diplomáticos se hubieran ennoblecido precisamente gracias al servicio). El cuerpo de embajadores alemán de 1914 constaba de ocho príncipes, veintinueve condes, veinte barones, cincuenta y cuatro nobles sin título y sólo once hombres del común. El servicio consular, de menor rango, se componía al completo de plebeyos, si bien generalmente ricos y reclutados en las universidades y clubes de estudiantes de derechas. Pero de la totalidad de los 548 funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 69 por 100 disfrutaba de títulos de nobleza y copaba los grados más altos. El único cambio apreciable de 1871 a 1914 fue la disminución de *Junkers* y de títulos adquiridos antes de 1800, en oposición a los nobles más recientes y más occidentales. Ambas

tendencias eran, sin embargo, el resultado de la escasez de antiguos nobles prusianos a medida que se ampliaba el servicio, no de un intento de apertura. La solidaridad del grupo se reforzaba a través de las conexiones con el rey, la camaradería en las distintas asociaciones reaccionarias, el predominio de los protestantes y la completa ausencia de judíos (Rohl, 1967: 106 a 108; Cecil, 1976: 66 a 68, 76, 79 a 86, 174 a 176).

En Francia, el antiguo régimen soportó varias revoluciones. De todos los embajadores nombrados entre 1815 y 1885, el 73 por 100 exhibía apellidos aristocráticos. Durante el Segundo Imperio (1851-1871), cerca del 70 por 100 de los altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores cuyos antecedentes conocemos procedían de ambientes de hacendados, banqueros o puestos elevados de la administración, lo que constituye la proporción más alta de cualquiera de los restantes ministerios (Wright, 1972; Charle, 1980a: 154, 172). Pero llegó un momento en que la situación cambió sensiblemente; mientras que el 89 por 100 de los embajadores fueron aristócratas durante el periodo 1871-1878, en 1903-1914 sólo lo era el 7 por 100. Por desgracia, no poseemos detalles de ese grupo, pero supongo que representaba el equivalente republicano de la aristocracia, esto es, el «dinero antiguo», pero no dispongo de pruebas (podrían encontrarse en el estudio inédito citado por Cecil, 1976: 67). Durante todo el periodo, tanto el *Foreign Office* británico como el servicio diplomático estuvieron dominados por el antiguo régimen y copados en la cumbre por los hijos segundones de la aristocracia y de la *gentry* acaudalada, educados en los internados de elite (especialmente Eton) y, cada vez más, en Oxford y Cambridge (Cromwell y Steiner, 1972).

Los Estados Unidos se distinguieron poco pese a haber perdido a su aristocracia durante la revolución y a tener un servicio exterior de menor prestigio que el de otros países. Sus diplomáticos y su Departamento de Estado procedían del «dinero antiguo», del *Establishment* del este, quizás en sus vástagos más cultos y menos dinámicos (se dijo en la época que los hijos más capacitados se destinaban a la banca). Incluso en el siglo XX, ha sido necesario poseer una renta personal para entrar en el cuerpo diplomático debido a la baja cuantía del sueldo. Ilchman (1961) afirma que el cuerpo estuvo copado por los hijos de las antiguas familias ricas durante todo el periodo. Aun cuando los exámenes eliminatorios habían sustituido al patronazgo personal, la «buena crianza» se seguía considerando esencial; de 1888 a 1906, al menos el 60 por 100 había frecuentado Harvard, Yale o

Princeton, y el 64 por 100 era del noreste (que en ese momento sólo contaba con el 28 por 100 de la población estadounidense).

Ese desequilibrio de clase se defendió en todos los países por supuestas razones técnicas: los miembros del antiguo régimen hablaban otros idiomas, viajaban continuamente, se casaban con extranjeras y disfrutaban de una cultura cosmopolita, en consecuencia, se entendían entre sí. Sin embargo, hubo pocas protestas. Se trató —y todavía se trata— de un aspecto extravagante del Estado moderno. En una época en que todas las actividades nacionales padecían los ataques de las clases subordinadas, cuando gran parte de los ministerios y asambleas parlamentarias se poblaban de una mezcla de clases profesionales y burguesas (véase el capítulo 13), la política exterior se nutría de una estrecha base social y apenas estaba sometida a controles. Así pues, conservó el aislamiento y la intimidad, y estuvo dominada por la alianza particularista de un partido de la elite del ejecutivo estatal con un partido del antiguo régimen cuyo poder económico se encontraba en decadencia.

Por consiguiente, la geopolítica, función primordial del ejército, empujó a éste en una dirección distinta a la de su función interna y secundaria. La importancia del militarismo para la política exterior lo llevó a entablar una estrecha relación privada con el núcleo del antiguo régimen estatal, mientras que la represión lo inclinaba hacia las clases altas como conjunto, en especial hacia la protección de los intereses de los terratenientes capitalistas y del moderno capital industrial contra los descontentos de la clase obrera. El ejército pudo ser un vínculo importante entre estas clases económicas dominantes, antiguas y nuevas. Examinemos ahora el propio ejército.

El ejército: clase, burocratización y profesionalización, 1760-1815

Examinaré en primer lugar la composición social de los cuerpos de oficiales del siglo XVIII. Era muy sencilla: prácticamente todos los altos oficiales pertenecían a la nobleza como la inmensa mayoría de los oficiales de menor graduación, salvo en las armadas y la artillería y en Gran Bretaña (que tenía la armada más grande y la nobleza más reducida). La oficialidad era noble, como lo había sido siempre. Sólo entre el 5 y el 10 por 100 de los oficiales franceses eran plebeyos, aunque no todos los nobles eran oficiales, salvo en Prusia (donde lo eran alguna vez en su vida). En otros lugares, el cuerpo de oficiales se ha-

bía convertido en una red especializada de nobles, aunque no de las más poderosas desde el punto de vista social. Como vimos en el capítulo 6, en Francia se produjo una evolución controvertida, que se resolvió concediendo privilegios a la antigua *noblesse de l'épée*, a menudo empobrecida. En Austria, María Teresa intentó, con éxito limitado, elevar los títulos aristocráticos concedidos a sus oficiales, procedentes, por lo general, de la nobleza de servicios más pobre. La guerra había dejado de ser el primer cometido de los nobles. El ejército, aunque todavía mayoritariamente formado por el antiguo régimen, no era ya todo su núcleo.

Gran Bretaña tenía sin duda alguna el antiguo régimen menos militarizado. Con todo, la oficialidad del ejército interno pertenecía casi por completo a él, pues en sus rangos más altos predominaban los aristócratas, y por debajo de ellos, la baja nobleza rural (Razzell, 1963). Se necesitaba riqueza para comprar el cargo y vivir en el regimiento. La vida era más barata y menos atractiva en el ejército de la India, mucho más marginal, cuyos oficiales procedían sobre todo de familias de profesionales y comerciantes. La armada se mostraba aún más abierta; sus oficiales procedían de la baja nobleza, profesionales, comerciantes y grupos relacionados con el mar de las regiones costeras (como en la armada francesa). En este caso no se necesitaba una riqueza previa, ya que la oficialidad podía vivir de la paga complementada por su prima característica: el dinero de las presas. Muchos miembros eran los hijos más jóvenes de familias respetables, aunque no ricas. Todos los oficiales servían como marineros durante dos años, si bien con la categoría de guardia marina o segundo de a bordo. Alrededor del 10 por 100 procedía de familias «no respetables», entre ellos el famoso capitán James Cook, que era hijo de un labriego (Rodger, 1896: 252 a 272), cuya carrera habría resultado imposible en el ejército y probablemente en las fuerzas armadas de cualquier otro país.

En general, todos los ejércitos y algunas armadas disponían aún de elementos de una nobleza mercenaria e internacional de «servicio» procedente de las familias de exiliados y de las «marcas» o zonas marginales, como los estados alemanes de menor tamaño, Escocia e Irlanda, y dotada de una gran movilidad. Tal fue el caso de Federico von Schomberg, que prestó sus servicios en cinco ejércitos extranjeros (Brewer, 1989: 55 y 56). En 1760 había signos de que el cuerpo de oficiales constituía aún un grupo social distinguido, no como casta

inserta en el antiguo régimen, sino como grupo profesional cuyas prácticas no eran ya las de las clases altas en su conjunto.

Las distancias entre los oficiales y sus subordinados eran inmensas. La literatura contemporánea presenta a la clase de tropa y a la marinería como la hez de la sociedad (Brodsky, 1988), una denominación que se ha prolongado entre los estudiosos actuales (Jany, 1967: 619 y ss.; Rothenberg, 1978: 12; Dandeker, 1989: 79; Holsti, 1991: 102, 104; Berryman, 1988 lo discute en el caso de los Estados Unidos), aunque no es del todo exacto. Conviene dudar de la objetividad de los autores contemporáneos. Si, como acabamos de ver, los oficiales procedían de estratos sociales muy elevados, los hombres del común debieron de parecerles la «hez», en especial los conscriptos y los forzados, atrapados contra su voluntad como animales enjaulados y sometidos a una cruel disciplina. Al fin y al cabo, el ejército suponía para los civiles la amenaza de las levas forzosas y los cuarteles, y naturalmente se trataba de una relación hostil. Hasta un tercio de los soldados eran mercenarios extranjeros que apenas compartían valores con la población local. Se comprende, pues, que los civiles detestaran a unos soldados y marineros que, en cierta forma, vivían apartados de la sociedad.

Poseemos sólo datos suficientes para la segunda mitad del siglo XVIII sobre los ejércitos inglés y francés. Los estudios de este último revelan que sus soldados no pertenecían a la «hez», sino un conjunto de hombres procedentes en gran medida del artesanado y las ciudades, que sabían leer y escribir, y en el que los campesinos estaban escasamente representados. Hacia 1789 el 63 por 100 de aquellos cuya actividad ha quedado registrada eran artesanos y empleados de comercio (Corvisier, 1964: I, 472 a 519; Scott, 1978: 14 a 19; Lynn, 1984: 46 y 47). Las ciudades disponían de un excedente de jóvenes, formado, quizás, por los hijos más pequeños de familias de comerciantes, y el ejército acogía de buen grado a estos hombres letrados. Los reclutamientos del ejército inglés se producían sobre todo entre los obreros de la manufactura; probablemente predominaban entre ellos los escoceses y los hombres de las ciudades, con un grado de alfabetización ligeramente inferior a la media inglesa. Tenemos, pues, una clase trabajadora que se adapta mal al calificativo de «hez de la sociedad» (véanse los datos en Floud *et. al.*, 1990: 84 a 118; como destacan los autores, el grado inferior de alfabetización de los reclutados es un mito, pues cuando los oficiales expresaban su juicio sobre este hecho estaban buscando quizás una competencia mayor que la

mera capacidad de plasmar la firma). Es muy probable que los ejércitos de Europa central estuvieran formados por hombres menos preparados y más analfabetos que el británico y el francés, porque sus levas excluían, por lo general, los oficios cualificados (Austria excluyó al principio a los campesinos propietarios) y porque la posibilidad de pagar a un sustituto contribuía a rebajar el nivel social. Con todo, en algunas zonas de reclutamiento masivo, como los pequeños estados alemanes, la tasa de alfabetización era bastante alta. En época de paz, los marinos de las armadas británica y francesa procedían de una sección característica de oficios relacionados con el mar, pero en tiempo de guerra se reclutaba a la fuerza a los más pobres, como los contramaestres de muralla (Hampson, 1959; Rodger, 1986). Puede que las fuerzas armadas francesas y británicas tuvieran mayor representación de otras clases, pero sospecho que el fenómeno se daba más entre la oficialidad que entre la tropa.

El vínculo intermedio entre los rangos extremos estaba en los suboficiales, que solían ser letrados y generalmente procedentes de las clases medias. Éstos se reclutaban entre los rangos y formaban la auténtica elite de la soldadesca, ya que la promoción a la oficialidad, incluso en los niveles más bajos, constituía un fenómeno poco común. En tiempos de paz, los oficiales no desempeñaban muchos cometidos en sus regimientos; los franceses disfrutaban de siete meses y medio de permiso cada dos años; en cuanto a los británicos, el periodo de licencia era largo y se prestaba a muchos abusos. En ausencia de sus superiores, eran los suboficiales quienes mantenían relaciones más estrechas con la tropa. Para las armadas la situación era distinta, ya que en alta mar se estrechaban necesariamente las relaciones con los oficiales. Rodger (1986) dibuja un panorama muy relajado en el interior de los barcos británicos, donde la oficialidad, más que mandar, trataba de convencer a sus hombres, y la pericia profesional contaba tanto como el poder del rango. Una de dos, se trata de una interpretación romántica o las cosas cambiaron a partir de 1797, porque los motines navales de aquel año demuestran una profunda hostilidad hacia una disciplina altamente punitiva.

Dadas las distancias sociales y el contacto limitado, tanto los Estados como los cuerpos de oficiales creían en la disciplina punitiva. Las tácticas de mediados del siglo XVIII requerían soldados capaces de soportar a pie firme la exposición a un fuego poco preciso, errática y acumulativamente letal. En los enfrentamientos navales, también los marineros se exponían a ráfagas de corto alcance y gran poder homi-

cida, pero al menos continuaban con sus ocupaciones bajo el fuego, mientras que los soldados esperaban pasivamente en pie o andando lentamente hacia la proa. Cabe pensar que unas fuerzas enfrentradas a tales peligros necesitarían un entrenamiento constante para dominar el comprensible terror en el límite de la consciencia; de ahí que la instrucción constituyera uno de los aspectos más notables de los ejércitos del siglo XVIII. Pero, incluso así, la «disciplina» no estaba completamente interiorizada. Los soldados desertaban en masa, no durante la batalla, dadas las dificultades del caso, sino en las épocas de paz. Se dice que un tercio del ejército prusiano —uno de los más eficaces— se empleaba en acosar a otro tercio que había desertado (el último tercio estaba siempre preparado para entrar en batalla). Los oficiales del siglo XVIII afrontaban la situación aplicando una disciplina brutal y arbitraria en materia de castigo corporal, con escasísimos detalles de humanidad; así fue en el caso de muchos mandos navales, cuya autoridad en alta mar era arbitraria por completo. Scott (1978: 35) afirma que muchos soldados franceses establecían su primer contacto con los oficiales con ocasión de un acto disciplinario.

La sociedad militar era, pues, característica y cruelmente jerárquica, y estaba formada por dos clases vinculadas por un poder arbitrario y punitivo. En tal sentido podemos hablar de una institución segregada que ya no reflejaba la complejidad social. En esa situación hubo de enfrentarse a tres procesos de cambio: burocratización, profesionalización y democratización. Los dos primeros ejercieron un influjo continuo durante todo el periodo; el último lo hizo de modo repentino, a raíz de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, y se vio supuestamente reforzado durante el siglo XIX por el desarrollo de la sociedad industrial (a Huntington, 1957 y Janowitz, 1960, se deben los estudios clásicos; a Dandeker, 1989, el más actual).

Al principio del capítulo 13 presentaré mi hipótesis sobre el problema de la burocratización. La burocracia comprende cinco elementos: dos relativos al personal; otros dos, a la ordenación de los cargos; y un quinto relativo a la estructura general. El *personal* burocrático cobra un salario, sin propiedad o derechos de apropiación sobre la administración; tanto el principio y el final de su contrato como sus ascensos se producen según medidas impersonales de competencia. Los cargos de los departamentos burocráticos se organizan racionalmente conforme a la función y la jerarquía, como ocurre con los departamentos, organizados en una sola administración centralizada. Por último, el conjunto permanece *aislado* de las luchas políticas de

la sociedad civil, salvo en la cumbre, donde se reciben las directrices políticas. La burocratización militar estuvo dirigida desde el principio por el Estado.

No hay duda de que la profesionalización constituye un atributo general del proceso modernizador que no se limita a las fuerzas armadas, pero Teitler (1977: 6 a 8) observa que los ejércitos añadieron un tercer elemento profesional a los dos de carácter general. Como otros profesionales, soldados y marinos adquieren un monopolio de ciertos conocimientos especializados que relega a todos los demás al nivel de aficionados incompetentes; en segundo lugar, este grupo de especialistas desarrolla un espíritu de cuerpo característico, enraizado en la tradición y el sentido del honor. Pero, en tercer lugar, los servicios militares se prestan siempre al Estado. De este modo, tanto la profesionalización como el proceso burocrático se desarrollaron en el seno de los Estados.

Los sociólogos han observado con frecuencia que la burocracia y la profesionalización se encuentran íntima aunque conflictivamente conectadas (Parsons, 1964). Las burocracias, en la medida en que se aislan de la sociedad, desarrollan un espíritu de cuerpo y un carácter peculiar, de ahí la posibilidad del conflicto entre la sociedad y la racionalidad burocrática formal. En el caso de los ejércitos modernos, este carácter burocrático-profesional comporta también una peculiar solidaridad de clase. La combinación de los tres elementos estimuló el surgimiento de una casta de oficiales.

Aunque la burocratización es un fenómeno antiguo, el momento culminante de su historia coincide con el periodo que nos ocupa. En gran parte, se originó al margen del Estado; al principio, en la Iglesia; luego, en las compañías privadas de las Indias, aunque la primera de ellas, la Casa de Contratación de Sevilla, constituyera un monopolio controlado por el Estado español[4]. Sus metódicos sistemas de contabilidad, cadenas específicas de mando y funcionarios civiles y militares asalariados fueron la respuesta de unas administraciones de tamaño moderado enfrentadas a la realización de numerosas tareas en una inmensa extensión geográfica. Es probable que superado un

[4] No cabe duda de que el Estado español del siglo XVII podría reivindicar el adelanto de muchas de las innovaciones que atribuyo aquí a ciertos Estados del siglo XVIII, aunque, curiosamente, estos antecedentes parecen haber influido poco en ellos. La concentración en un grupo de países, como es el caso del presente volumen, implica siempre el riesgo de exagerar su significación colectiva.

cierto tamaño el control administrativo resulte imposible sin una amplia normalización racionalizada. Sin embargo, en un estudio de diez organizaciones modernas entre los 65 y los 3.096 empleados, Hall (1963-1964) no ha encontrado relaciones significativas entre el volumen y seis medidas de burocratización muy semejantes a las mías. De forma parecida, en el periodo premoderno, la burocratización no vino impuesta por el tamaño, sino por el problema funcional que plantea la organización de diversos cometidos en espacios muy extensos.

La Revolución Militar de 1500-1640 introdujo la burocratización en el Estado. En 1760 los ejércitos y las armadas se dividían en unidades de tamaño estandarizado y funciones especializadas relacionadas entre sí y con los cuarteles generales mediante dos líneas de mando vinculadas. Una de ellas, surgida en el siglo XVIII, caracteriza la organización del mundo de los negocios moderno: la división entre la dirección y el personal subordinado. La otra constituye una jerarquía integrada, formada por rangos estandarizados, que pasa, en línea descendente, por generales, coroneles, comandantes, capitanes y tenientes hasta los suboficiales y soldados rasos. Las dos cadenas de mando se integran en las divisiones (unidades del ejército que contienen todas las especialidades, coordinadas por un estado mayor y subordinadas a un solo jefe), que a su vez están coordinadas con otras por un estado mayor «general» a las órdenes de un oficial «general». También la armada estrechó la coordinación, con el objetivo de superar la dificultad táctica que imponía la dispersión de los barcos en la inmensidad de los océanos. De ahí la especialización y estandarización del sistema de suministros, la artillería, el cuerpo de infantes de marina, los manuales y el método de señales; todo ello integrado en un sistema formal de «mando, control, comunicación e inteligencia» (Dandeker, 1989: 77). Los cargos se organizaron burocráticamente, aunque, en la cúspide, reyes y parlamentos se resistían a confiar la totalidad del mando operativo a un oficial general. Preferían aplicar el principio de «divide y vencerás». Los empresarios, nobles ricos que reunían varios regimientos a sus órdenes, sobrevivieron en el ejército (no en la armada, por lo general), aunque los reyes y los ministros de la guerra del siglo XVIII, en Austria, Francia, Prusia y Gran Bretaña, decretaron regulaciones centralizadoras contra ellos. María Teresa fue quizás la última de los monarcas europeos en eliminar a los últimos dueños de ejércitos, cuando en 1766 se aseguró el control de los

ascensos dentro del ejército (Kann, 1979: 118 a 119; *cf.* Scott, 1978: 26 a 32; Brewer, 1989: 57 y 58).

La administración militar, relativamente centralizada y disciplinada, homogénea y burocrática era, sin lugar a dudas, la organización de poder más «moderna» del siglo XVIII (Dandeker, 1989: capítulo 3). Tales características habían surgido directamente de la lógica de la eficiencia dentro del poder militar, de las exigencias de una guerra librada entre fuerzas armadas geográficamente dispersas y muy variadas en sus cometidos. Una vez más, el tamaño importó menos que la finalidad funcional o geográfica, ya que la revolución militar se centró en una tajante división formal entre la infantería, la caballería y la artillería y sus departamentos de ingeniería y suministros. La especialización impuso nuevas formas de coordinación en grandes distancias, especialmente en las armadas. Su crecimiento, como el de los ejércitos, fue más un resultado que una causa, porque fue la burocratización lo que les permitió aumentar su tamaño. La burocratización vencía a medida que la antigua organización militar, más relajada e informal, perecía en el campo de batalla.

La política de personal se encontraba menos burocratizada, aunque los salarios se convirtieron en una práctica normal. Marineros y soldados eran «empleados» a sueldo subordinados a una cadena oficial de mando. El estatus de los oficiales presentaba grandes variaciones. La mayoría de ellos eran empleados estatales con salario fijo, pero podían comprar la graduación inicial y los posteriores ascensos. Los oficiales prusianos aún tenían autorización para apropiarse de los recursos fiscales que fluían entre los mandos. Con todo, se trataba de prácticas en franca decadencia.

El proceso de burocratización se retrasó en el segundo criterio relativo al personal: los estándares de competencia. Se requería saber leer y escribir, pero era rara otra formación extensiva o cualificación formal, salvo en los casos de la artillería y de la oficialidad naval. Se fundaron las primeras academias de cadetes: la academia militar de María Teresa, en 1748; la *École Militaire*, en 1751 (imitada en doce provincias en 1776); y muchas otras escuelas militares en Prusia, a lo largo de todo el siglo; en 1802, Gran Bretaña superó su atraso con Sandhurst. Pero el criterio principal a la hora del reclutamiento era la procedencia social. Se suponía que los orígenes en la aristocracia o la baja nobleza garantizaban buenos oficiales por la experiencia en el ejercicio físico (en especial, la equitación), la valentía, la dignidad, la familiaridad en dar órdenes a los inferiores y el sentido del honor. En

cierta ocasión, el mismo mariscal de campo austriaco que distinguió a sus oficiales burgueses por el valor demostrado en el combate, se negó a elogiar a sus oficiales nobles porque, decía, la bravura en ellos se daba por descontado (Kann, 1979: 124). La mayor parte de los oficiales aprendían con la experiencia, ayudados por los libros de disciplina o manuales corrientes de entrenamiento, de modo que entraban en combate siendo jóvenes e inexpertos. Los ascensos se decidían entonces por una mezcla de conexiones (justificadas por la adecuación al rango) y por el comportamiento en la batalla.

La creciente intensidad de la guerra creó una oficialidad endurecida por la lucha, que constituyó el núcleo de una nueva profesionalidad. Los aficionados habían caído en el desprestigio y se encontraban en vías de desaparición; los profesionales se jactaban de ser los únicos que conocían la guerra. Estaba apareciendo un nuevo estilo profesional, aún aristocrático, pero ya menos particularista y genealógico.

El impacto generalizado de la revolución y las guerras napoleónicas contribuyó a consolidar la burocracia y la profesionalidad, y a introducir una democratización limitada que parecía amenazar tanto el predominio de los nobles como la disciplina punitiva. La intensidad de la guerra aumentó la presencia de los expertos. Los *amateurs* perecían a manos de las tropas de Napoleón, en tanto que los libros y el aprendizaje en las escuelas producían pocos progresos. Aunque las relaciones seguían siendo importantes, eran pocos los aristócratas diletantes e incompetentes o los intelectuales de la guerra que lograban un ascenso. La rivalidad y los celos entre los oficiales, como saben todos los lectores de autobiografías militares, se concentraban en los ascensos, lo cual dependía ahora menos de las relaciones familiares, aunque no se trataba aún de cualificaciones formales, sino de la mayor o menor pericia en la realización de la tarea.

Como es lógico, el efecto fue mayor en el ejército revolucionario francés. Las purgas y el exilio de los nobles ampliaron de golpe las posibilidades de ascenso para los suboficiales, los pocos *officiers de fortune* promocionados e incluso para los soldados rasos. Hacia 1793 un 70 por 100 de los oficiales, si bien de baja graduación, habían servido algún tiempo como soldados, en comparación con el 10 por 100 de 1789. Los grados altos permanecían aún en manos de antiguos nobles: del 40 al 50 por 100 de los coroneles y tenientes-coroneles del ejército de línea, en comparación con el 10-20 por 100 de los capitanes y los tenientes. Pero compartían los rangos con los profesionales de clase media, funcionarios, hombres de negocios y rentistas de la

burguesía, que formaban el 40 por 100 de los grados más altos y el 30 por 100 de los bajos. Artesanos, trabajadores del comercio, asalariados y campesinos modestos constituían prácticamente el resto, proporcionando el 5 y el 33 por 100. Entre los soldados disminuyeron los burgueses, los grupos medios y los artesanos, y aumentaron los campesinos, aunque aún estaban escasamente representados (Scott 1978: 186 a 206; Lynn, 1984: 68 a 77).

De pronto, el ejército, hasta entonces caricatura de una sociedad muy antigua, comenzaba a parecerse a la nueva. La disciplina se codificó para ser aplicada en todos los rangos; los oficiales franceses tenían más posibilidad de encontrarse ante el pelotón de ejecución que sus propios hombres. Estos hechos equilibraron el castigo y el entusiasmo y contribuyeron a individualizar e interiorizar parcialmente un elevado rendimiento en el combate. Los hombres de la tropa, concluye Lynn (1984: 118), ya no recibían un trato de «súbditos, sino de ciudadanos». Por mi parte, encuentro exageradas estas afirmaciones. La tropa que se enfrenta a una posibilidad real de morir casi nunca interioriza por completo la disciplina; por el contrario, se necesitan formas de coerción concentrada que la *estimulen* a cargar o mantenerse bajo el fuego en vez de huir o replegarse [5]. No obstante, acepto las conclusiones de Lynn como una tendencia desde el siglo XVIII hasta la aparición de los ejércitos revolucionarios.

En las dos décadas siguientes, el cuerpo de oficiales se hizo más burgués a medida que aumentaba la movilidad en la escala jerárquica. En 1804 sólo tres de los dieciocho mariscales de Napoleón eran antiguos nobles y la mitad de los oficiales procedían de los rangos (Chandler, 1966: 335 a 338; Lefevre, 1969: 219). Tras la caída de Napoleón, la procedencia social varió según los regímenes. La monarquía borbónica, restaurada en 1815, aumentó el número de nobles en los grados más altos, pero no pudo purgar al ejército burgués de sus simpatías republicanas. Después de dos décadas de problemas, se halló finalmente el expediente para hacerlo: la represión de los clubes republicanos del ejército y los incentivos procedentes de las posibilidades de promoción que brindaba la conquista de Argelia, el aumento de las pensiones y el fin del derecho ministerial a cesar a los oficiales. El ejército francés quedó dividido, incapaz de enfrentarse a

[5] Consideraré con más detalle estas técnicas coercitivas en el Volumen III, al presentar una excelente investigación sobre la moral de los soldados de la Primera Guerra Mundial.

la revolución de 1848 o a Luis Bonaparte en 1851, pero perdió gran parte de su radical carácter «ciudadano» (Porch, 1974: esp. 115 a 117, 138 y 139). ¿Transformaron las guerras revolucionarias a otros ejércitos?

Hacia la formación de una casta militar

Las guerras revolucionarias transformaron el control sobre la tropa e integraron y modernizaron a los cuerpos de oficiales, sin necesidad de aquellas grandes concesiones a la «ciudadanía nacional» que tanto habían temido los regímenes y los mandos.

Las relaciones entre los oficiales y la tropa experimentaron una transformación paulatina. La efectividad de la moral de la movilización de masas y la menor crueldad de la disciplina son tan patentes que nadie puede ignorarlas. De hecho, reforzaron las creencias de las facciones «ilustradas» en todos los cuerpos de oficiales. Las campañas navales y coloniales mostraron una y otra vez que cuando la oficialidad compartía con sus hombres los privaciones materiales aumentaba el rendimiento en la batalla. Tres años después de su humillación en Jena, el ejército prusiano abandonó la práctica del castigo corporal arbitrario, extendió el empleo de los manuales y comenzó a plantear en ellos un cierto trato humanitario. En 1818 se refirieron por primera vez a la necesidad de una disciplina coherente con el sentido del «honor» del soldado individual, lo cual representa una concepción bastante radical (Craig, 1955: 48; Demeter, 1965: 178 a 180). Bajo el reinado de María Teresa se había introducido, ya en 1759, un código ilustrado, donde se instaba a estimular al soldado «mediante el apego al honor y el buen trato, no con la brutalidad de la bofetada y los golpes intimidatorios». Pero hasta 1807 no se extendió este código a la infantería, y hasta finales del siglo XIX no se puso en práctica con la frecuencia que habría requerido el fin de los malos tratos (Rothenberg, 1982: 117 y 118; Deak, 1990: 106 y 108). La disciplina continuó siendo coercitiva en lo sustancial —como lo es hoy—, pero poco a poco se hizo más racional y más sometida a normas. Los oficiales no estaban ya tan apartados de sus hombres; ambos grupos comenzaban a someterse a la racionalidad de una sola casta militar emergente.

Durante 1805-1807 y 1813-1814, Austria y Prusia llegaron más lejos; se transformaron también en «naciones en armas» capaces de movilizar el entusiasmo patriótico y de permitir unas relaciones más

libres entre los oficiales y la tropa. Al rebajar el reclutamiento de mercenarios extranjeros, el ejército se hizo «nacional» en un sentido elemental. Ambos países crearon fuerzas de reserva, los *Landwehr*. Pero a partir de 1815 todos los regímenes se replantearon el mantenimiento de ejércitos de ciudadanos, espantados por la idea de entregar las armas a un pueblo libre. Un gran general austriaco, el archiduque Carlos, sugirió con modestia que se ampliara el fondo de reclutas al tiempo que se reducían a ocho los años de servicio en el ejército (en muchos Estados se servía de por vida). Se rechazó la idea porque los licenciados podían convertirse en líderes expertos para las revueltas. El conde de Colloredo lo argumentó en la corte con la siguiente observación: «En cualquier momento puedo tapar la boca de un enemigo victorioso con una provincia, pero armar al pueblo significa literalmente jugarse el trono» (Langsam, 1930: 52; Rothenberg, 1982: 72). El *Landwehr* austriaco fue abandonado en 1831. Los prusianos conservaron el suyo, pero lo mantuvieron disciplinado. Durante todo el siglo XIX, tanto los prusianos como otros alemanes debatieron los méritos del ejército «profesional» frente al ejército «ciudadano». Los profesionales ganaban siempre que el debate se planteaba en estos términos.

Pero la idea de una «ciudadanía militar» disciplinada desde arriba conoció algunos progresos. En Alemania, influyó en la concesión del sufragio universal masculino (en condiciones controladas) a cambio del servicio militar (Craig, 1955; Ritter, 1969: I, 93 a 119). La definición francesa de ciudadanía como el «impuesto de la sangre» cruzó Europa y llegó hasta América. Ningún país sostuvo ejércitos populares de ciudadanos como el que derrotó a los prusianos en Valmy (véase capítulo 6). Por el contrario, los ejércitos de masas suponían una forma más segmental de participación, definida por sus dirigentes políticos y disciplinada por una jerarquía militar racionalizada. Como tendremos ocasión de comprobar, con las armas no eran ya «ciudadanos», sino «leales al Estado-nación».

Sin duda, dentro de la jerarquía militar los oficiales profesionales del siglo XIX trataban mucho mejor a sus soldados que sus antepasados. Los cambios ocurrieron en dos fases, cuando disminuyó el tamaño del ejército a partir 1815, y cuando volvió a aumentar a mediados de siglo. En la primera, disminuyó la escasez presupuestaria y se generalizaron los programas de bienestar para comprar la lealtad de los oficiales y suboficiales, que incluían pensiones y otros cargos civiles para los veteranos (véase capítulo 14). Los salarios se equipararon

a los de los empleos civiles, que los oficiales y soldados licenciados también podían desempeñar (salvo quizás en el caso de los oficiales austriacos). Las fuerzas armadas ofrecían también un empleo más seguro a causa de la duración del servicio (Porch, 1974, 1981: 89; Berryman, 1988: 26 y 27; Deak, 1990: 105 y 106, 114 a 125).

Después, cuando llegó la segunda fase de expansión, los Estados reaccionaron ampliando sus fuerzas de reserva. Los profesionales con servicio de larga duración a todos los niveles se transformaron en un cuadro encargado de la dirección y entrenamiento de la corriente de reservistas conscriptos que pasaba por sus manos durante un periodo más breve (tres años en Prusia) y que luego iban a la reserva y a las formaciones territoriales bajo la supervisión del ejército regular. Los reservistas movilizados formaban ahora el grueso de los ejércitos en caso de guerra. A mediados del siglo XIX, creció el reclutamiento entre la población agraria, en cuya lealtad confiaban los ejércitos, lo que eximió a un mayor número de trabajadores cualificados de la industria y las ciudades. Con la extensión de la conscripción de corto plazo en toda Europa, disminuyó también este sesgo. Pero en ninguna de las grandes guerras se llamó a filas al núcleo organizado de la clase trabajadora. Durante la Primera Guerra Mundial no se necesitó tanto a la «vanguardia» obrera —trabajadores cualificados de la minería, el transporte y la industria del metal— para luchar como para producir. Sólo las armadas reclutaron hombres de esa procedencia social. Así pues, los soldados, en especial las tropas de mayor valor para el frente, procedían de las zonas rurales, de las ciudades pequeñas o de aquellas industrias en las que la identidad de la clase obrera era más débil. La deslealtad de esta última afectó a los ejércitos menos de lo que habían predicho Engels y un buen número de comentaristas conservadores.

Giddens (1985: 230) sostiene que al tiempo que los oficiales se transformaban en un grupo aislado de especialistas, los soldados pasaban a ser una masa de ciudadanos. Pero no fue así. En realidad, los comandantes *imponían rigurosamente* la organización militar a sus soldados para impedir que se consideraran ciudadanos o miembros de una clase. Las guerras de mediados de siglo habían enseñado una lección: la planificación meticulosa y la coordinación de los mapas y los horarios habían dejado obsoleta la coordinación flexible de las divisiones (desplegada por Bonaparte, como vimos en el capítulo 8). La organización prusiana había destruido el *élan* francés en 1870. Desde entonces, los generales impusieron inflexiblemente la disciplina in-

cluso a soldados menos entrenados que sus antepasados del siglo XVIII. Ahora, la organización autoritaria sustituyó al entrenamiento directo. El ferrocarril, el telégrafo (después, el telégrafo por radio) y los sistemas del estado mayor permitían a los comandantes coordinar un gran número de unidades, cada una de las cuales formaba el horizonte más amplio del soldado individual. Puesto que muchas unidades se reclutaban territorialmente, su moral se basaba en la solidaridad y la camaradería local y regional.

El poder de esta moral local quedó patente en la Guerra Civil Americana, donde los reclutas locales lucharon y murieron creyendo defender los valores propios de su comunidad natal, no los del sur o el norte (o los que les atribuían). Seiscientos mil muertos y una tasa ridícula de deserciones atestiguan el sorprendente poder de esta disciplina, incluso entre soldados con escaso entrenamiento.

Pero aparte de la movilización masiva que representó la Guerra Civil Americana y de la que se produjo en la Inglaterra urbana e industrial, el reclutamiento se dirigía ahora a las regiones más atrasadas y conservadoras, capaces de brindar un excedente de mano de obra habituada a recibir órdenes de los superiores. Después de la guerra franco-prusiana, estalló en Francia un debate político sobre la proposición republicana de sustituir el sistema de reclutamiento regional. Pero los republicanos perdieron frente a la combinación de conservadores y altos mandos del ejército, y las fuerzas armadas conservaron su carácter regional y reaccionario.

Por si esto fuera poco, la estructura del mando reforzó su conservadurismo. La organización de las unidades locales y regionales quedó al mando de suboficiales reclutados en el mismo fondo territorial, que unieron a la camadería local la disciplina jerárquica. Los oficiales y suboficiales desarrollaron entonces unas relaciones de poder *segmental y local-regional* altamente eficaces en el núcleo mismo de unos ejércitos de ciudadanos, en expansión, y supuestamente «nacionales» y «de clase». Fuera de las relaciones directas con sus propios oficiales, la organización era un misterio para los soldados. Las unidades y los barcos obedecían las órdenes de un alto mando que perseguía metas desconocidas para ellos. Los soldados apenas tenían capacidad para llevar a cabo actos colectivos fuera de su propia unidad o de su propio barco. Como veremos en el Volumen III, contaban con pocas alternativas de organización para presentar quejas, incluso bajo las terribles condiciones de la Primera Guerra Mundial, e incluso ante la ineptitud del mando, salvo en los casos de deslealtad por

parte de los oficiales. Tanto las fuerzas regulares como las reservistas demostraron una absoluta lealtal en la guerra durante el periodo.

McNeill (1983: 260) afirma que una sociedad industrial encierra en sí la «primacía del principio de autoridad». La opinión peca de generalizadora en lo relativo a la sociedad civil, pero describe bien a sus fuerzas armadas en expansión, que sólo engañosamente eran «ciudadanas», «nacionales» o «de clase». En realidad, se trataba de organizaciones de poder *segmental*, disciplinadas por conservadores sociales. Hacia 1910 probablemente el 20 por 100 de los varones adultos habían experimentado esa disciplina en la mayoría de los países. El porcentaje iba a elevarse mucho más con la Primera Guerra Mundial. Los Estados modernos estaban creando una masa de leales en sus ejércitos (al igual que en las administraciones civiles; véanse los capítulos 13 y 16). De 1848 a 1917, no hubo prácticamente un solo ejército que flaqueara en sus lealtades segmentales; un hecho importante, incluso decisivo, para la guerra y la represión, las funciones primordiales del ejército decimonónico.

La valoración del conocimiento experto produjo también un cambio fundamental dentro del cuerpo de oficiales. Ya desde comienzos del siglo XIX la cartografía, la logística y el estudio histórico y comparativo de las tácticas habían sido parte de la formación de los cadetes y de los estados mayores, pero el aumento de la potencia de fuego durante la industrialización de la guerra imponía ahora unos conocimientos básicos de ingeniería incluso fuera del arma artillera. Las victorias prusianas proporcionaron lecciones tecnocráticas muy claras, que los franceses aprendieron con particular rapidez. A partir de 1870 fue obligatorio el paso por las escuelas militares para entrar en el ejército, y la realización de otros cursos se convirtió en una parte normal del ascenso, sobre todo entre la elite del estado mayor. El mantenimiento de archivos con el historial y las cualificaciones de los oficiales demuestra la importancia que habían adquirido los criterios tecnocráticos universales en detrimento de las prácticas del patronazgo.

Por razones distintas, Gran Bretaña y Austria presentaban un cierto retraso. Como veremos más adelante, la composición social de la oficialidad británica conservó su carácter rural y reaccionario y siempre se mantuvo al margen de la sociedad más industrializada del mundo. El conservadurismo básico del ejército británico le llevó a despreciar las escuelas militares superiores y los esfuerzos de la facción reformadora, hasta que los desastres de Crimea y de la guerra de

los bóers impusieron una profesionalización rezagada (Bond, 1972; Harries-Jenkins, 1977; Strachan, 1984; Brodsky, 1988: 72 a 82). El atraso austriaco se debió a los disturbios políticos. Habiendo constituido la seguridad interna su principal misión, el ejército era conservador y desconfiaba de una profesionalidad que le parecía «liberal» (Rothenberg, 1976), aunque a partir de 1870 se vio obligado a cambiar. Hacia 1900 las escuelas de su elite militar y los cursos de formación para posgraduados constituían los principales elementos de la promoción (Deak, 1990: 187 a 189).

Al fin y al cabo, los reaccionarios tenían poco que temer. Lejos de sustituir los antiguos criterios de nobleza o de radicalizar la política militar, la educación quedó plenamente integrada. Anticipando tendencias de la movilidad dentro del ejército que se desarrollarían en el siglo XX, se convirtió en la principal vía de ascenso, ya que la promoción directa a partir de los rangos se había reducido. En el ejército francés, el porcentaje de los generales de división procedentes de los rangos era del 14 por 100 en 1870, pero en 1901 bajaba del 3 por 100 (Serman, 1978: 1325; Charle, 1980b). Los nobles no tuvieron más remedio que ceder, entre otras razones, porque su número era ya insuficiente para la expansión de finales del siglo XIX. Dadas las circunstancias, no salieron tan mal parados; abundaron incluso en los rangos más altos de la Francia republicana. En 1870 el 39 por 100 de los generales de división eran de origen noble; en 1901, representaban aún un 20 por 100. En los grados inferiores aumentaba necesariamente el origen burgués, pero se reclutaba más a ex alumnos de las escuelas católicas que a los de las escuelas estatales. Se trataba, pues, de un cuerpo de oficiales tan reaccionario desde el punto de vista político como el anterior. Los continuos choques con los gobiernos republicanos culminaron en el asunto Dreyfus, y no pudieron establecerse compromisos políticos para salvar la república hasta poco antes de 1914 (Girardet, 1953; Charle, 1980a).

Naturalmente, hubo un ejército sin aristócratas. Los Estados Unidos tenían, además, la experiencia única de una guerra civil que rápidamente formó, en ambos bandos, una oficialidad representativa del conjunto de los varones blancos, ricos y educados. Pero con la paz volvió el predominio de las formaciones más pequeñas y los oficiales americanos perdieron su carácter representativo. En la marina, predominaban los mandos procedentes de las clases altas urbanas, esto es, de las clases medias capitalistas y profesionales del nordeste, especialmente los hijos (en orden descendente) de militares de alto

rango, banqueros, fiscales y jueces, industriales, funcionarios, profesionales de la «ciencia» (físicos, ingenieros, farmacéuticos) y comerciantes (Karsten, 1972: cuadros 1 y 2).

Por el contrario, entre los oficiales del ejército abundaban de forma sorprendente —a la vista del resultado de la guerra civil— los hombres del sur y del ámbito rural, del antiguo régimen probablemente en decadencia. Trece de los catorce oficiales de alto rango de 1910 habían nacido en el sur, la mayoría en zonas rurales. Aunque los datos posteriores resultan insuficientes, parece que muchos de ellos eran, a su vez, hijos de oficiales, de plantadores o de los profesionales de las ciudades, tanto grandes como pequeñas: abogados, médicos, maestros, funcionarios y ministros religiosos. Janowitz sintetiza la identidad de los oficiales como «anglosajones, protestantes, rurales, de familia antigua y de clase media alta», es decir, lo más cercano a un antiguo régimen que cabía encontrar en el caso de un país como los Estados Unidos. No obstante y puesto que aquella clase hacía tiempo que no gobernaba América (salvo en el sur), estamos de nuevo ante un grupo en cierta forma segregado. Según un estudio de 1890, realizado en el norte, el ejército era «independiente y se encontraba aislado por su disciplina y sus peculiares costumbres; una especie de aristocracia formada mediante la selección y la aureola de las tradiciones» (las citas son de Janowitz, 1960: 90, 100; *cf.* Huntington, 1957: 227; Karsten, 1980; Skelton, 1980).

Este minúsculo cuerpo, parecido a una casta, disponía de métodos propios para controlar a sus hombres. Éstos no eran conscriptos, sino voluntarios profesionales, entre los que predominaban los inmigrantes, en especial los de origen alemán e irlandés (¿descendientes de antiguos mercenarios?), pero también los negros, contentos de que el ejército les proporcionara la oportunidad de acceder a la sociedad (blanca) americana (Berrymen, 1899: capítulo 2). Aunque no era ni grande ni influyente, el ejército estadounidense permaneció fiel a sus jefes conservadores, como veremos en el capítulo 18.

El predominio de los nobles y los reaccionarios en los restantes países resulta impresionante. Gran Bretaña y Prusia presentaban la situación más extrema, compartida al principio por Austria. Razzel (1963) ha demostrado lo poco que cambiaron los orígenes sociales del ejército británico, donde la aristocracia y la baja nobleza terrateniente (que sumaban menos del 1 por 100 de la población) proporcionaban el 40 por 100 de los oficiales del ejército interior en 1780, y el 41 por 100, en 1912. En los rangos más altos (de general de división

en adelante) el predominio descendió ligeramente desde el 89 por 100 de 1830 al 64 por 100 de 1912, pero la tendencia se vio contrarrestada por el aumento de la estratificación entre los regimientos, donde la composición de las elites respondía cada vez más al antiguo régimen y su tono social era reaccionario. También los altos mandos del ejército prusiano continuaban siendo nobles. En la comparación debida a Preradovich (1955) de los estados mayores prusianos y austriacos, entre 1804 y 1918, los nobles representan alrededor del 95 por 100 de los generales austriacos de 1804 a 1859, aunque la proporción se derrumba hasta el 41 por 100 en 1908. Sin embargo, en Prusia se mantiene en el 90 por 100 hasta 1897, y sólo desciende al 71 por 100 en 1908 (durante la Primera Guerra Mundial ambas cifras descendieron en los estados mayores ampliados). Al descender en la escala jerárquica, el predominio aristocrático disminuye, en especial hacia 1900, como cabía esperar del número fijo de nobles. La proporción entre los generales y coroneles era del 86 por 100 en 1860 y del 52 por 100 en 1913. Con la integración en 1860 de la fuerza de reserva del *Landwehr*, mucho más burguesa, se produjo un gran cambio en los rangos más bajos de la oficialidad. En 1873, sólo el 38 por 100 de los tenientes era de origen aristocrático, y el porcentaje descendió al 25 por 100 en 1913, lo que representa la única caída en términos absolutos. En el conjunto de los oficiales, los nobles descendieron del 65 al 52 por 100 (Demeter, 1965: 28 y 29).

Así pues, el fenómeno se produjo más tarde en Alemania y Gran Bretaña, donde el predominio de los aristócratas sólo cedió cuando el número de oficiales superó el suyo, aunque se conservó en la cumbre de la jerarquía y produjo una ausencia total de hijos de los capitalistas del comercio o la industria. La clase económica dominante dejó el ejército en manos del antiguo régimen. Aquél (y la diplomacia) proporcionó al antiguo régimen una cabeza de puente en el corazón mismo del Estado alemán, que garantizaba, como no habría podido ser de otro modo, la continuidad del militarismo en materia de política exterior y de relaciones de clase.

No obstante, también había cambiado el propio significado de «nobleza», pues la mezcla con el espíritu profesional que compartían todos los oficiales rebajó su particularismo característico. Ya desde finales del siglo XVIII, la pertenencia a la nobleza alemana había dejado de ser decisiva para que ciertos títulos de menor riqueza y abolengo, los Gneisenau, los Scharnhorst o los Clausewitz, escalaran la cumbre, pero las reformas de principios del XIX y la educación militar

vinieron a institucionalizar la igualdad profesional. La educación en los cuerpos de estudiantes universitarios, los clubes de duelistas y las escuelas superiores del ejército reforzaron el espíritu de cuerpo. El término *Bildung* no significa sólo «educación», sino también cultivo, lo que en el mundo militar significa cultivo del honor. El atributo distintivo de los oficiales tenía ahora un carácter moral; la «nobleza» se había convertido en «honor».

El resultado puede percibirse en la rápida expansión de la marina de guerra alemana, el cuerpo más notoriamente burgués de las fuerzas armadas en aquel país. La armada requería un entrenamiento técnico extensivo y se reclutaba en las ciudades portuarias. Al ser de reciente creación, faltaban el estatus y las tradiciones, de ahí la escasa presencia de nobles. De 1890 a 1914 sólo del 10 al 15 por 100 de las clases ejecutivas de los cadetes navales procedían de familias nobles, aunque se trataba de un porcentaje superior al de los procedentes del capitalismo industrial o comercial. En la clase mejor documentada, de 1907 predominaban los antecedentes profesionales: el 55 por 100 eran hijos de académicos, y el 26 por 100, de oficiales del ejército o la marina de origen plebeyo. Pero aún se prefería a los jóvenes de «buena familia», hasta el punto de rechazar explícitamente las solicitudes de otras clases sociales por miedo a desalentar la entrada de los más ricos, aunque la riqueza sólo se valoraba en segundo término, siempre detrás de la nobleza. El éxito de los oficiales ejecutivos se premiaba con títulos nobiliarios, y la oficialidad trataba a los marineros con la típica arrogancia prusiana, lo que le costó varias rebeliones al acabar la Primera Guerra Mundial. Los oficiales ingenieros procedían de clases más bajas, en especial de las categorías bajas y medias del funcionariado, y recibían el trato de personal «práctico», no aptos para los puestos de «mando». Los judíos (salvo los bautizados) y los socialistas eran, como en el ejército, anatema. Aunque el espíritu no era aquí idéntico al del ejército —el militarismo naval se mostraba más antibritánico e imperialista—, la marina «abrió el camino a la "feudalización" de la alta burguesía» (Herwig, 1973: 39 a 45, 57 a 60, 76 a 78, 92, 103 y 104, 132). El predominio de los nobles reaccionarios en las fuerzas armadas era tal que incluso sus ramas más burguesas los imitaban. Así pues, en el momento en que Alemania lideraba el capitalismo industrial, los capitalistas industriales y comerciales daban la espalda a sus fuerzas armadas, que les pagaban con la misma moneda.

La Primera Guerra Mundial demostró que Alemania poseía el mejor ejército del mundo, lo que quizás resultó ya evidente en 1866 y

1870. También su armada disfrutaba de un extraordinario nivel técnico, aunque era demasiado pequeña para el cometido que se le había asignado. Lo paradójico es que se alcanzara esta extraordinaria modernidad profesional en una marina del antiguo régimen. Al nivel técnico, la alta cualificación de los oficiales y, según las estadísticas contemporáneas, la alfabetización universal de sus filas (*Annuaire Statitisque de la France*, 1913: 181) se sumaba la profunda comprensión de la industrialización de la guerra por parte del estado mayor, lo que consintió, por ejemplo, un excelente empleo de la logística del ferrocarril. La confianza que inspiraba la cohesión social de sus oficiales y suboficiales permitió a éstos tomar sus propias iniciativas en mayor medida que, por ejemplo, en el ejército francés, desgarrado por los conflictos. La diferencia se hizo patente en las campañas de 1870-1871 (Gooch, 1980: 107). Esta paradoja ha encontrado su expresión común en la fórmula «eficacia prusiana», que recoge adecuadamente el hecho de que los cuerpos de oficiales fueran al mismo tiempo técnicamente avanzados y socialmente reaccionarios. La combinación generó un desarrollado espíritu de casta, pero también el mejor cuadro de suboficiales del mundo, capaz de imponer segmentalmente sus valores a la tropa. Pero esto es sólo la versión extrema de una paradoja más general: el hecho de que esa oficialidad socialmente reaccionaria movilizara los instrumentos técnicos más avanzados del capitalismo industrial y poseyera la cualificación tecnocrática más evolucionada.

El cuerpo de oficiales austriacos también era socialmente conservador, pero poseía características únicas a causa de las cristalizaciones de su Estado (véase el capítulo 10). El Estado austriaco era dinástico y (desigualmente) multinacional. Todavía en 1859, una mayoría de los oficiales se reclutaba en el extranjero, especialmente en Alemania, aunque también contaba con un contingente numeroso de británicos. La dinastía se apoyaba también en los católicos, pero sobre todo en los austro-alemanes, que formaban en 1910 el 79 por 100 de los oficiales regulares, aunque sólo el 23 por 100 de la población. Las restantes nacionalidades se encontraban poco representadas. El predominio de los nobles declinó también aquí cuando, al igual que en Prusia-Alemania, el número de aristócratas alemanes resultó insuficiente para cubrir la expansión del estado mayor. En 1870 sólo pertenecían a la nobleza el 20 por 100 de los tenientes de carrera; la mayor parte, de familias recientemente ennoblecidas en premio a sus servicios públicos. La disminución del número de nobles en el generalato

se produjo más tarde, como era lógico esperar. Se hicieron concesiones a los magiares a partir de 1867, que llegaron a dominar el *Honved*, el ejército de reserva de su *Reichshalf*. Los escasos nobles magiares del ejército regular conjunto se beneficiaron también de ciertas ventajas a la hora del ascenso.

A partir de 1870, las fuerzas armadas austriacas conocieron una enorme expansión, al tiempo que comenzaban a aburguesarse a medida que la educación se convertía en el requisito fundamental para el ascenso. Este hecho sustituyó la mayoría católica por una mayoría protestante, redujo el predominio alemán (al 60 por 100), aumentó a proporciones más adecuadas el número de checos y magiares y acrecentó en gran medida la participación de los judíos (del 17 al 18 por 100 de los oficiales de reserva, aunque sólo del 4 al 5 por 100 de la población). Las restantes nacionalidades y religiones se encontraban mal representadas (Rothenberg, 1976: 42, 128, 151; Deak, 1990: 156 a 189).

Se trataba, pues, de un cuerpo de oficiales peculiar, de elevada educación, burgués y tecnocrático, cuya lealtad esencial a la dinastía estaba mediatizada por identidades nacionales y religiosas de carácter particularista. El ejército se hallaba más vinculado a la monarquía dual que a las clases dominantes de sus territorios, y mucho menos a la «nación». El aislamiento social y los rituales poco prácticos (como el blanco inmaculado de los uniformes) aumentaron el sentido de casta y de solidaridad interna. Los oficiales austriacos, incluso los extranjeros, cualquiera que fuese el rango y la condición, demostraban la comunidad de sus intereses tratándose con el familiar *Du* (el tú que en otros ámbitos sólo se empleaba con los íntimos y los sirvientes) en vez de utilizar el *Sie* (usted), más formal y típico de otras esferas de la sociedad alemana. Esta costumbre daría pie a lamentables escenas durante la Primera Guerra Mundial, en las que los oficiales alemanes se creyeron insultados y relegados por sus aliados austriacos.

El aislamiento social de la oficialidad austriaca no constituía un fenómeno único. En el ejército ruso, la proporción de oficiales no aristócratas aumentó también del 26 por 100 de 1895 al 47 por 100 de 1911, por otra parte, los nobles que quedaban dentro del ejército apenas estaban vinculados a la gran aristocracia rusa. En 1903, el 91 por 100 de los que eran al menos generales de división no poseían ni propiedades ni tierras, ni siquiera una vivienda urbana (Wildman, 1980: 23 y 24). También el cuerpo de oficiales ruso comenzaba a distanciarse de la estructura de clase.

Pero los oficiales austriacos estaban más apartados de sus hombres. Puesto que los soldados se reclutaban proporcional y territorialmente en todas las nacionalidades, y puesto que la monarquía desconfiaba de los regimientos nacionales homogéneos, los oficiales no solían hablar la lengua de sus hombres. Así, la estructura de mando del ejército no se reforzó con las jerarquías sociales que brindaban tanto la estructura de clase como la comunidad lingüística local y regional. Otto Bauer, el dirigente socialista, describe lo que, según él, fueron los efectos del aburguesamiento (pero no de la nacionalidad, ya que su descripción parece ajustarse a un regimiento enteramente alemán), que conoció durante su propia instrucción como oficial. El espíritu profesional del ejército exigía a los oficiales un trato respetuoso hacia el soldado raso, pero:

> la jerarquía de clase ... distingue a los caballeros de los trabajadores y los campesinos ... Toda la estructura del antiguo ejército está pensada para marcar esta distinción entre la clase de los caballeros y la clase trabajadora, y con tanta claridad que a veces, más que de clase, parece una separación de casta. [Pero, al contrario que el soldado prusiano frente a su oficial *Junker*, el] campesino austriaco está obligado a ver en el hijo de un pequeño burgués, armado de sable, al individuo que encarna un orden superior. Esto resulta especialmente absurdo ... en la relación con los oficiales de la reserva [Kann, 1979: 122 y 123].

Absurdo o no, la jerarquía militar austriaca —que los contemporáneos consideraban la más débil de las grandes potencias— se manifestaba aún con una espantosa prepotencia. Nada atestigua mejor el profesionalismo de casta, el poder segmental y disciplinario de este cuerpo de oficiales aburguesado y dinástico, y el de sus suboficiales-clientes, que la habilidad con que dirigieron a los campesinos en las repetidas cargas suicidas de la infantería contra las posiciones artilleras de los rusos que causaron la destrucción de la mitad del ejército austriaco durante el primer año de la Gran Guerra.

Los ejércitos del antiguo régimen absorbieron con éxito todo lo que les brindó la época de la revolución y la industria, sin por ello ceder mucho en materia de ciudadanía democrática. Los hijos de los burgueses necesitaban cultivar sus maneras para llegar a ser oficiales; los pequeños burgueses, los campesinos y los trabajadores con talento necesitaban los privilegios de los suboficiales; otros rangos necesitaban mandar y gobernar más que imponer la disciplina arbitra-

ria. ¿Fueron éstas grandes concesiones? En todo caso, resultaron menos significativas que las que se hicieron en las redes civiles de poder de los países en proceso de modernización. Esta diferencia se suma a la separación y al aumento del poder segmental dentro de los ejércitos del siglo XIX. Una casta de oficiales llegaba, a través de los suboficiales y los cuadros de servicio a largo plazo, hasta la masa de ciudadanos disciplinada segmentalmente, a la que convirtieron en un grupo de leales al Estado. La «ciudadanía» no fue simplemente la obtención de los derechos universales de Marshall, ni inauguró tampoco el internacionalismo pacífico. Por el contrario, llegaba entrelazada con las relaciones militares de poder. La «nación» se organizó, en parte, segmentalmente y fue estatista y violenta.

Hacia el poder militar autonómo

Pero estas formas de autonomía profesional, cercanas a la casta militar, con excelentes cuadros y un control segmental sobre los soldados, podrían haber carecido de importancia. Muchas sociedades históricas y algunas de las contemporáneas (como Gran Bretaña) poseyeron y poseen una casta militar profesional que no daña en exceso a la sociedad civil. En realidad, sólo cuando estalla la guerra demuestra un considerable poder social, pero en la paz, aunque autónoma respecto a la sociedad civil, no ejerce ningún poder sobre ésta. Pero en las épocas de paz de la Europa del siglo XIX esa «autonomía de» podía significar «poder sobre». Hemos visto poco antes que la sociedad civil apenas ejercía algún control sobre la diplomacia, ya que ésta era un asunto privado de los ejecutivos del Estado y estaba dominada por un funcionariado semejante a la oficialidad estilo antiguo régimen. Sin embargo, no se trató de un hecho especialmente desastroso. Los mandos, que conocían bien el caos y la destrucción que podía producir la guerra y se habían enfrentado a la muerte, solían ser cautos en sus planteamientos geopolíticos. Los cuerpos de oficiales preferían las aventuras coloniales para jugar a la guerra de verdad y abrir expectativas de ascenso, pero cuando se trataba de grandes potencias demostraban cautela. La industrialización de la guerra aportó una nueva razón para la prudencia porque el aumento de la potencia de fuego en manos de soldados pocos entrenados aumentó también el tamaño de los ejércitos movilizables, lo que significaba ir más allá de los campesinos y las áreas marginales y armar a la clase trabajadora,

con todos los riesgos que esto implicaba; al menos así lo creían (exagerando bastante) los oficiales reaccionarios.

Pero la industrialización aumentó el poder *tecnocrático* y el peligro de los ejércitos. El proceso se produjo por dos vías. En primer lugar, los cuerpos de oficiales se situaron a la vanguardia del desarrollo científico e industrial del siglo XIX, se sirvieron de los productos más avanzados y las normas de organización del capitalismo y compartieron su concepción optimista de las cosas. Comenzaban a creer que la coordinación y los planes meticulosos producían resultados exactos, y, por consiguiente, en condiciones calculables, una victoria segura. Si la modernización benefició a los ejércitos, también produjo en ellos un exceso de confianza. Puede que la gran lección de la guerra sea que no se puede prever cómo será la próxima, ya que los cambios en las tácticas y el armamento, el hecho de que no se luche exactamente en el mismo terreno y contra el mismo enemigo, hace que la fortuna de cada guerra sea siempre insegura. Un ejército auténticamente sensible —que puede calibrar si la capacidad de destrucción de la guerra está en consonancia con la obtención de un objetivo político concreto— sólo aconsejaría entrar en conflicto cuando se posea una superioridad aparente sobre el enemigo. Tal superioridad es, por lo general, materia de la diplomacia, que capta aliados poderosos o priva al enemigo de ellos. Pero los ejércitos más «modernos», tecnocráticos y absortos en sí mismos tienen mayor tendencia a despreciar a los aliados y contar sólo con sus recursos internos. Aunque se reclute en la misma clase a diplomáticos y comandantes, su aprendizaje y su experiencia profesional son distintos. Los diplomáticos saben poco de los avances tecnocráticos de la guerra, y los generales ignoran por completo cómo se elabora una alianza. A finales del siglo XIX, no existía un ejército más moderno, tecnocrático, absorto en sí mismo y políticamente ignorante que el alemán, hasta el punto de olvidar en qué medida había contribuido con su eficacia la diplomacia de Bismark a las victorias de 1865-1867 y 1870-1871 (véase el capítulo 9) y despreciar los cambios ocurridos en otros países cuando no eran meramente tecnocráticos, en especial la consolidación de la república en Francia y de su nueva disciplina militar. Aquel ensimismamiento iba a convertirse en un orgullo desmedido.

En segundo lugar, a finales del siglo XIX, la tecnocracia militar prefería el ataque a la defensa. «Entrar en guerra» había supuesto tradicionalmente tres fases: movilizar las propias fuerzas, concentrarlas en orden de combate y lanzarlas a la batalla real. Pero la industriali-

zación, el ferrocarril y la artillería posibilitaron el traslado al frente de grandes contingentes de hombres y armas de fuego. Esto dio ventaja al ataque rápido y coordinado desde las cabezas de línea. El primero en atacar podía conseguir una gran concentración de fuego, pero la defensa había de ser también rápida y coordinada para concéntrar el fuego sobre los atacantes. Los planes del estado mayor, que se habían vuelto complicados y agresivos, detallaban tres actos preventivos en caso de necesidad: movilizar a los reservistas, tomar el control de la red ferroviaria y servirse del espacio terrestre y marítimo, por lo general, sin tener en cuenta las fronteras estatales o las aguas territoriales. Apoderarse del ferrocarril entrando en los Estados limítrofes era un acto de provocación que, sin necesidad de declarar la guerra, constituía una invasión de hecho. Obruchev, el general ruso, juzgaba que la movilización equivalía a la guerra. Como escribió en su famoso informe de 1892, en la guerra moderna la victoria es para quien logra desplegarse con mayor rapidez y «golpear al enemigo con toda su fuerza»; y concluye: «La movilización no puede considerarse ya un acto pacífico; por el contrario, constituye el acto más decisivo de la guerra».

Oscurecer la línea que separa la agresión de los preparativos para la defensa es también labor de la diplomacia preventiva. La alianza franco-rusa de 1894 dotó a los altos mandos de poderes autonómos. Si Austria, Alemania o Italia se movilizaban contra cualquiera de ellas, Francia y Rusia responderían inmediatamente. En 1900 la alianza se redujo al caso de la movilización alemana, y el acuerdo se cumplió por entero en 1914. Los pasos más importantes hacia la agresión, que si no eran la guerra la estaban precipitando, escapaban al poder de los diplomáticos y políticos civiles (Kennan, 1984: 248 a 253, reproduce el informe de Obruchev en la pág. 264). De igual modo, las discusiones independientes de 1909 entre los generales Moltke (de Alemania) y Conrad (de Austria) amenazaron con convertir la alianza defensiva de Bismarck entre ambos países en un mutuo estímulo a la agresión (Albertini, 1952: I, 73 a 77, 268 a 273). La *entente* anglo-francesa produjo acuerdos militares entre ambas potencias que durante mucho tiempo se mantuvieron en secreto (véase el capítulo 21).

La posibilidad de que la confianza tecnocrática y los planes del alto mando se adelantaran realmente a los estadistas dependía de los cauces por donde se canalizaban las responsabilidades. Como veremos en el capítulo 21, las instituciones de las democracias de partidos

exigían a sus ejércitos una rendición de cuentas mayor que las monarquías. La secuencia de movilizaciones preventivas de julio de 1914 por parte de Austria, Rusia y Alemania arrolló primero a sus propios regímenes y luego a toda Europa. En aquella ocasión, las castas militares, autónomas y cohesivas, demostraron ejercer un poder decisivo sobre la sociedad. Como la ideología durante la Revolución Francesa, fue sólo un «momento en la historia mundial del poder», pero sembró la destrucción en el Viejo Continente.

Conclusión

He trazado hasta aquí el desarrollo de las relaciones del poder militar durante el largo siglo XIX. La mayor parte de los desarrollos internos apoyan la teoría de la existencia de una casta militar, esto es, de una autonomía institucional de las fuerzas armadas tanto respecto al control civil como al estatal. La organización del ejército y de la marina se hizo más rigurosa y se distanció de la sociedad y del Estado. En cuanto al reclutamiento, entrenamiento y espíritu de cuerpo, la oficialidad se replegó sobre sí misma. Al fusionar a los hijos de la burguesía con los del antiguo régimen y someter a los primeros al dominio ideológico de los últimos, el cuerpo de oficiales se distinguió de las principales clases de la sociedad industrial avanzada. El aumento de la burocracia interna, la profesionalidad y la tecnocracia confirmó el carácter íntimo y secreto de sus actividades. Los cuadros de suboficiales de servicio a largo plazo, sumados a la mayor severidad de la estructura del mando que coordinaba las unidades militares locales y regionales, garantizaron el efectivo control segmental sobre las masas de soldados y marineros, sin necesidad de hacer concesiones fundamentales a los ciudadanos, las naciones o las clases. Los Estados se las arreglaron para establecer infraestructuras militares cuyos tentáculos aseguraban los territorios y las poblaciones y disciplinaban sus lealtades. Las fuerzas armadas, particularistas, segregadas y cohesivas, formaron una casta en la moderna sociedad industrial, donde produjeron una cristalización *militarista*, esencialmente autónoma, dentro del Estado moderno y en la sociedad civil.

No obstante, estas afirmaciones requieren alguna precisión. Las funciones del ejército también se mezclaban con la sociedad y el Estado, contradiciendo y reduciendo en cierta forma la autonomía de la casta. El modo más persistente de inserción en la sociedad vino de su

función secundaria, la represión interior, que insertó a los cuerpos de oficiales en redes más amplias de poder político y en la clase económica dominante. Puesto que los oficiales estaban imbuidos de los valores reaccionarios del antiguo régimen, compartieron con frecuencia la hostilidad de éste y de los capitalistas hacia los levantamientos urbanos y la rebeldía de los trabajadores. Pero, aunque reaccionarios rurales, los oficiales no fueron meros hombres de paja de los capitalistas. Su profesionalidad los hacía también poco partidarios de emplear la fuerza más allá de una cuidadosa demostración de la capacidad real de las armas. La reticencia los llevó a colaborar con la policía, que se formaba en ese momento, y las instituciones paramilitares del Estado. La cautela profesional les aconsejó a veces buscar el compromiso entre las clases urbanas. Este pragmatismo y las formas moderadas de represión, unidos a sus estructuras segmentales de disciplina les proporcionaron casi siempre soldados leales. En las funciones represoras, el ejército representaba la integración de la antigua y la nueva clase dominante. En 1900 las redes de poder militar, actuando como mediadoras, habían ayudado a integrar dos cristalizaciones estatales de clase, la capitalista y la del antiguo régimen. Su cohesión de casta y el control segmental sobre sus hombres dio una seguridad mucho mayor a las clases dominantes.

Esta estrecha relación de los ejércitos con el antiguo régimen y el capital impregnó hasta cierto punto la guerra, su función primaria. Colaboraron en materia de política exterior con el ejecutivo y su camarilla de diplomáticos y estadistas del antiguo régimen, con una significativa independencia de los partidos políticos de masas o de la opinión pública (documentaré estos particulares en los capítulos 16 y 21). Y también colaboraron desde el punto de vista tecnocrático con los capitalistas de la industria, que producían sus armas, sus medios de transporte y sus suministros (analizados en el capítulo 14). Este «complejo militar-industrial» incluía a veces unas relaciones más amplias con el Estado y con los grupos de presión «estatistas» de clase media (véase capítulo 21). Pero en otros aspectos de la guerra, el ejército era también privado. La tecnocracia militar estimuló la intimidad de la casta y el aislado exceso de confianza, pero también contribuyó a ese aislamiento una secreta bomba de relojería que llevaba en su interior: el desarrollo de las tácticas que favorecían el ataque en detrimento de la defensa, y, en especial, la movilización a escala.

Esta combinación avivó un dualismo en el seno de la cristalización militar: a la autonomía propia de la casta se unió la defensa del

capitalismo y del antiguo régimen. La autonomía dio sus frutos más amargos en 1914. La mezcla de burocracia, profesionalización y tecnocracia militar-industrial, el dominio del alto mando y la diplomacia por parte del antiguo régimen, y el aislamiento de las decisiones diplomáticas y militares recrearon una autonomía del poder militar que su incorporación formal al Estado no hizo más que enmascarar. La cristalización militar del Estado tuvo una significativa independencia de las restantes y un gran poder sobre ellas.

Hubo quien temió que esto sería contraproducente para otras dos cristalizaciones, la del capitalismo y la del antiguo régimen. Muchos comandantes no aconsejaban una guerra de movilización masiva por temor al peligro de clase. La revolución amenazaba tanto a la casta militar como al antiguo régimen, al Estado o al capitalismo. Pero la mayoría de los comandantes se preocupaban innecesariamente, porque sólo unos pocos vieron cumplirse sus pesadillas. Incluso durante la inútil matanza de la Primera Guerra Mundial, el poder segmental de la casta militar se mantuvo unido. Sólo los ejércitos rusos se separaron y fomentaron la revolución. En los restantes casos, el militarismo segmental sobrevivió: en las tropas victoriosas, reforzando el conservadurismo social; entre los vencidos, fomentando el autoritarismo radical de la derecha, y posteriormente el fascismo. El conflicto de clase que se abatió sobre Europa en la posguerra se sumó al conflicto entre los militares descontentos y los leales. Los primeros eran, en su mayoría, soldados inactivos y tropas de reserva, sobre los que se había relajado la disciplina durante el último año de la guerra, en tanto que los leales pertenecían a las tropas de primera línea. Esta diferencia en la disciplina moral habría de dar un tinte decisivo a los *squadristi* y los *Freikorps* de la derecha autoritaria y fascista. El poder militar —a despecho de la indiferencia que ha demostrado la sociología del siglo XX— tuvo una grandísima influencia y unos efectos demoledores para la sociedad del siglo XX. En efecto, aquel momento histórico de 1914 iba a durar mucho más de lo previsto.

Bibliografía

Albertini, L. 1952: *The Origins of the War of 1914.* Vol. I. Oxford: Oxford University Press.

Anderson, M. 1988: *War and Society in the Europe of the Old Regime.* Londres: Fontana. [Ed. cast.: *Guerra y sociedad en la Europa del renacimiento (1618-1789).* Madrid, Ministerio de Defensa, 1990.]

Annuaire Statistique de la France. 1913.

Axtmann, R. 1991: «Geopolitics and Internal Power Structures: The State, Police and Public Order in Austria and Ireland in the Late Eighteenth Century». Tesis doctoral, London School of Economics and Political Science.

Berryman, S. 1988: *Who Serves? The Persistent Myth of the Underclass Army.* Boulder, Colo.: Westview Press.

Best, G. 1982: *War and Society in Revolutionary Europe: 1770-1870.* Leicester: Leicester University Press. [Ed. cast.: *Guerra y sociedad en la Europa revolucionaria (1770-1870).* Madrid, Ministerio de Defensa, 1990.]

Bond, B. 1972: *The Victorian Army and the Staff College, 1854-1914.* Londres: Eyre & Methuen.

— 1984: *War and Society in Europe, 1870-1970.* Londres: Fontana. [Ed. cast.: *Guerra y sociedad en Europa (1870-1970).* Madrid, Ministerio de Defensa, 1990.]

Bosworth, R. 1983: *Italy and the Approach of War.* Londres: Macmillan.

Brewer, J. 1989: *The Sinews of Power.* Londres: Unwin Hyman.

Brodsky, G. W. S. 1988: *Gentlemen of the Blade: A Social and Literary History of the British Army Since 1660.* Nueva York: Greenwood Press.

Cecil, L. 1976: *The German Diplomatic Service, 1871-1914.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Chandler, D. 1966: *The Campaigns of Napoleon.* Nueva York: Macmillan.

Charle, C. 1980*a*: *Les hauts fonctionnaires en France au XIX*^{ième} *siècle.* París: Gallimard.

— 1980*b*: «Le recrutement des hauts fonctionnaires en 1901». *Annales, Economies, Sociétes, Civilisations,* núm. 2.

Corvisier, A. 1964: *L'armée française de la fin du XVII*^{ième} *siècle au ministère de Choiseul: Le soldat.* 2 vols. París: Presses Universitaires de France.

Craig, G. 1955: *The Politics of the Prussian Army, 1640-1945.* Oxford: Clarendon Press.

Dandeker, C. 1989: *Surveillance, Power and Modernity.* Oxford: Polity Press.

Deak, I. 1990: *Beyond Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848-1918.* Nueva York: Oxford University Press.

Demeter, K. 1965: *The German Officer Corps in Society and State, 1650-1945.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.

Dupuy, R. E. 1971: *The National Guard: A Compact History.* Nueva York: Hawthorn Books.

Elias, N. 1983: *The Court Society.* Nueva York: Pantheon Books.

Emsley, C. 1983: *Policing and Its Context, 1750-1870.* Londres: Macmillan.

Floud, R. *et al.* 1990: *Height, Health and History.* Cambridge: Cambridge University Press.
Foucault, M. 1979: *Discipline and Punish.* Harmondsworth: Penguin Books.
Giddens, A. 1985: *The Nation-State and Violence.* Cambridge: Polity Press.
Girardet, R. 1953: *La société militaire dans la France contemporaine, 1815-1939.* París: Plon.
Goldstein, R. J. 1978: *Political Repression in Modern America.* Cambridge, Mass.: Schenkman.
— 1983: *Political Repression in Nineteenth Century Europe.* Londres: Croom Helm.
Gooch, J. 1980: *Armies in Europe.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Gurr, T. R. *et al.* 1977: *The Politics of Crime and Conflict: A Comparative History of Four Cities.* Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.
Hall, R. H. 1963-4: «The concept of bureaucracy: an empirical assessment». *American Journal of Sociology,* 69.
Hampson, N. 1959: *La Marine de l'an II: Mobilisation de la flotte de l'Océan, 1794-4.* París: M. Rivière.
Harries-Jenkins, G. 1977: *The Army in Victorian Society.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Herwig, H. 1973: *The German Naval Officer Corps.* Oxford: Clarendon Press.
Hilderbrand, R. C. 1981: *Power and the People: Executive Management of Public Opinion in Foreign Affairs, 1897-1921.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Hill, J. D. 1964: *The Minute Man in Peace and War. A History of the National Guard.* Harrisburg, Pa.: Stackpole.
Holsti, K. 1991: *Peace and War: Armed Conflicts and International Order, 1648-1989.* Cambridge: Cambridge University Press.
Huntington, S. 1957: *The Soldier and the State.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Ilchman, W. 1961: *Professional Diplomacy in the United States.* Chicago: University of Chicago Press.
Janowitz, M. 1960: *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait.* Nueva York: Free Press. [Ed. cast.: *El soldado profesional.* Madrid, Ministerio de Defensa, 1989.]
Jany, C. 1967: *Geschichte der Preussischen Armee,* 4 vols. Osnabrück: Biblio Verlag.
Kann, R. 1979: «The social prestige of he officer corps in the Habsburg Empire from the eighteenth century to 1918». En *War and Society and East Central Europe.* Vol. I, ed. B. Kiraly y G. Rothenberg. Nueva York: Brooklyn College Press.
Karsten, P. 1972: *Naval Aristocracy: The Golden Age of Annapolis and the Emergence of Modern American Navalism.* Nueva York: Free Press.
— 1980: «Father's occupation of West Point cadets and Annapolis midship-

men». En *The Military in America: From the Colonial Era to the Present*, ed. P. Karsten. Nueva York: Free Press.
Kennan, G. 1984: *The Fateful Alliance: France, Russia and the Coming of the First World War*. Manchester: Manchester University Press.
Kennedy, P. 1985: *The Realities Behind Diplomacy*. Londres: Fontana.
LaFeber, W. 1987: «The Constitution and United States foreign policy: an interpretation». *Journal of American History*, 74.
Langsam, W. C. 1930: *The Napoleonic Wars and German Nationalism in Austria*. Nueva York: Columbia University Press.
Lefebvre, G. 1969: *Napoleon: From 18 Brumaire to Tilsit, 1799-1807*. Nueva York: Columbia University Press.
Ludtke, A. 1989: *Police and State in Prussia, 1815-1850*. Cambridge: Cambridge University Press.
Lynn, J. 1984: *The Bayonets of the Republic*. Urbana: University of Illinois Press.
Macartney, C. A. 1971: *The Habsburg Empire, 1790-1918*. Londres: Weidenfeld & Nicolson.
McNeill, W. 1983: *The Pursuit of Power*. Oxford: Blackwell.
Martel, G. 1985: *Imperial Diplomacy. Rosebery and the Failure of Foreign Policy*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
Palmer, A. 1983: *The Chancelleries of Europe*. Londres: Allen & Unwin.
Parsons, T. 1964: «The professions and social structure». En su *Essays in Sociological Theory*. Ed. rev. Glencoe, Ill.: Free Press.
Poggi, G. 1990: *The State. Its Nature, Development and Prospects*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Porch, . 1974: *Army and Revolution. France, 1815-1848*. Londres: Routledge & Kegan Paul.
— 1981: *The March to the Marne: The French Army, 1871-1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
Preradovich, N. von. 1955: *Die Führungsschichten in Österreich und Preussen, 1804-1918*. Wiesbaden: Steiner.
Razzell, P. E. 1963: «Social origins of officers in the Indian and British home army: 1758-1962». *British Journal of Sociology*, 14.
Riste, O. 1965: *The Neutral Ally: Norway's Relations with Belligerent Powers in the First World War*. Londres: Allen & Unwin.
Ritter, G. 1969: *The Sword and the Sceptre*. Vol. I: *The Prussian Tradition, 1740-1890*. Coral Gables, Fla.: University of Miami Press.
Robbins, K. G. 1977*a*: «The foreign secretary, the cabinet, parliamet and the parties», y
— 1977*b*: «Public opinion, the press and pressure groups». Ambos en *British Foreign Policy Under Sir Edward Grey*, ed. F. H. Hinsley. Cambridge: Cambridge University Press.
Rodger, N. 1986: *The Wooden World*, Londres: Collins.

Rohl, J. 1967: «Higher civil servants in Germany, 1890-1900». *Journal of Contemporary History,* 2.
Rothenberg, G. 1976: *The Army of Francis Joseph.* West Lafayette, Ind.: Purdue University Press.
— 1978: *The Art of Warfare in the Age of Napoleon.* Bloomington: Indiana University Press.
— 1982: *Napoleon's Great Adversaries: The Archduke Charles and the Austrian Army, 1792-1814.* Londres: Batsford.
Runciman, W. G. 1987: «The Old Question». *London Review of Books,* febrero, 19.
Scott, S. 1978: *The Response of the Royal Army to the French Revolution.* Oxford: Clarendon Press.
Serman, S. 1978: «Le corps des officiers francais sous la Deuxième République et la Second Empire». Tesis, Universidad de Lille III.
Skelton, W. 1980: «Officers and politicians: the origins of army politics in the United States before the Civil War». En *The Military in America: From the Colonial Era to the Present,* ed. P. Karsten. Nueva York: Free Press.
Steiner, Z. 1969: *The Foreign Office and Foreign Policy, 1898-1914.* Cambridge: Cambridge University Press.
Steiner, Z., y V. Cromwell, 1972: «The Foreign Office before 1914: a study in resistance». En *Studies in the Growth of Nineteenth Century Government,* ed. G. Sutherland. Londres: Routledge & Kegan Paul.
Stephens, J. 1989: «Democratic transition and breakdown in Western Europe, 1870-1939». *American Journal of Sociology,* 94.
Strachan, H. 1983: *European Armies and the Conduct of War.* Londres: Allen & Unwin. [Ed. cast.: *Ejércitos europeos y la conducción de la guerra.* Madrid, Ejército, 1985.]
— 1984: *Wellington's Legacy: The Reform of the British Army, 1830-54.* Manchester: Manchester University Press.
Teitler, G. 1977: *The Genesis of the Professional Officers Corps.* Beverly Hills, Calif.: Sage Publications.
Tilly, C. 1982: «Proletarianization and rural collective action in East Anglia and elsewhere, 1500-1900». *Peasant Studies,* 10.
— 1986: *The Contentious French.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
— 1990: *Coercion, Capital and European States, AD 990-1990.* Oxford: Blackwell.
Tilly, R. 1971: «Popular disorders in nineteenth-century Germany: a preliminary. *Journal of Social History,* 4.
Vagts, A. 1959: *A History of Militarism.* Glencoe, Ill.: Free Press.
Wildman, A. 1980: *The End of the Imperial Russian Army.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Wright, V. 1972: *Le conseil d'état sous le Second Empire.* París: Colin.

Capítulo 13
EL SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO: III. BUROCRATIZACIÓN

El término «burocracia» aparece continuamente en los estudios históricos sobre el surgimiento del Estado moderno, donde, sin embargo, se malinterpreta con frecuencia y casi nunca se define, lo cual es una pena, ya que, desde Weber, los sociólogos han empleado el término con toda exactitud. Weber (1978: I, 220 y 221) estableció diez elementos constitutivos:

1. Los funcionarios son libres y sólo están sujetos a una autoridad en lo relativo a las tareas oficiales.
2. Los funcionarios están organizados según una jerarquía de cargos claramente definida.
3. Cada cargo tiene una esfera de competencia claramente definida.
4. Los cargos se cubren por contrato libre.
5. Los candidatos se seleccionan mediante la valoración de sus cualificaciones, normalmente exámenes y formación técnica.
6. Los funcionarios reciben un salario y tienen garantizada una pension.
7. El cargo constituye la actividad única o primordial del titular.

8. El cargo constituye una carrera, en la que se asciende por antigüedad o por méritos.
9. El funcionario no posee la propiedad de los medios de administración.
10. El funcionario está sometido a una disciplina sistemática y a un control de su conducta oficial.

La descripción es más prolija de lo necesario, ya que una indagación de las administraciones modernas nos revelaría que la mayor parte de estas condiciones están interrelacionadas (Hall, 1963-1964). A efectos de una generalización macrohistórica, he reducido a cinco los diez puntos de Weber: dos relativos al personal; dos, a los cargos; y una que indica sus relaciones con el resto de la sociedad:

Los *burócratas* son funcionarios (1) separados de la propiedad de los recursos con los que opera por el estatus de empleado asalariado, y (2) contratados, ascendidos y cesados según criterios objetivos de competencia.

Los *cargos burocráticos* se organizan (3) dentro de los departamentos, cada uno de los cuales está centralizado y encarna una división funcional del trabajo; (4) los departamentos se integran en una sola administración y representan también una división funcional del trabajo, así como una jerarquía centralizada.

Por último, la burocracia supone (5) el *aislamiento* de las luchas de valores que se producen en el resto de la sociedad. Para Weber, la burocracia estaba dominada por una racionalidad «formal» o «instrumental», que la aislaba de la racionalidad «sustantiva» propia de la política y los valores de la sociedad. Las burocracias son eficientes cuando cumplen fines sustantivos que se establecen fuera de su propia administración. Cuando penetra en la administración alguna forma de racionalidad sustantiva o basada en el valor o una lucha de partidos, se inserta en la sociedad y reduce su racionalidad formal. La burocracia presupone que la administración y la política son cosas separadas.

Estos cinco elementos pueden aparecer en diversos grados, y cada uno de ellos puede estar presente sin los demás, aunque el elemento 2 es improbable sin el 1, y el 5 tiende a presuponer los restantes. La administración puede ser más o menos burocrática, pero una burocracia plena requiere el cumplimiento de los cinco puntos. Es también un tipo universal y nacionalmente uniforme de administración civil. La

burocratización ha acompañado y estimulado el crecimiento de los Estados nacionales.

Puesto que la mayoría de los Estados occidentales son en la actualidad burocráticos, plantearé en este capítulo dos sencillas preguntas de carácter empírico: ¿Cuándo comenzaron a serlo y por qué? No aspiro a la originalidad en las respuestas, sino a realizar una síntesis de la literatura de investigación. Como es bien sabido, los Estados se burocratizaron durante este periodo, pero cada uno de los cinco que aquí trato demostró ser pionero en un determinado momento, dado que todos ellos reaccionaron a los entrelazamientos de las fuentes del poder social. Pero la burocratización fue incompleta (como aún lo es hoy), en especial en la cima de la pirámide administrativa. Como en los ejércitos, la burocratización y la identidad social de los funcionarios se moderaron mutuamente para producir una cristalización dual dentro de la administración del Estado: como elite, fue ligeramente tecnocrática y burocrática; como «partido», reflejó ampliamente la política de las clases dominantes. Los Estados aún no eran unitarios.

La administración del antiguo régimen

Como he indicado en el capítulo 12, en gran parte la burocracia llegó al Estado a través de las fuerzas armadas, que habían experimentado ese mismo proceso mucho antes que las administraciones civiles. Las reformas militares de 1760 afectaron a la administración civil, sobre todo en lo relativo a los departamentos fiscales y a los encargados de los suministros de la marina, pero la situación no fue a más, pues resulta dudoso que existiera un concepto de «empleo» en la administración del siglo XVIII. Entre los cargos existían cinco estatus y cuatro formas de remuneración.

Cargos

1. En los niveles más altos predominaba la propiedad por herencia; naturalmente, se trataba de la posición del propio monarca. Los altos cargos pasaban directamente a los herederos varones. Aparte de las familias reales y de sus damas de honor, no hubo mujeres durante este periodo en los altos cargos.

2. El funcionario podía ser elegido, generalmente por sus pares, para desempeñar el cargo de por vida o a término fijo.
3. Los cargos podían comprarse. Ciñéndose a la ley, por lo general, no podían ser transmitidos a los herederos, pero en la práctica se hicieron con frecuencia hereditarios como el estatus 1.
4. Los cargos se adquirían a través del patronazgo de un alto funcionario, al que se solía ablandar con sobornos. El patrocinador retenía los derechos de la propiedad y determinaba la finalización del cargo.
5. El cargo también se podía adquirir o perder como en la actualidad, por criterios impersonales basados en la eficacia o la experiencia, en cuyo caso no existía un propietario.

Remuneración

1. Eran muchos los funcionarios que no recibían una remuneración formal, sino que desempeñaban funciones honoríficas procedentes de su rango social.
2. Los funcionarios se beneficiaban de los frutos del cargo, es decir, se apropiaban de los honorarios y las prebendas que les brindaba su situación.
3. El salario no se pagaba a la persona que realizaba el trabajo propio del cargo (a la manera moderna), sino al dueño de la sinecura, quien empleaba y pagaba a un suplente para que realizara el trabajo.
4. Se pagaba un salario a la manera moderna al funcionario que trabajaba.

Aunque son muchas las combinaciones posibles en cuanto al estatus y la remuneración de los cargos, en realidad predominaban sólo unas cuantas. Únicamente una —la de los funcionarios que trabajaban por un salario sin la propiedad del cargo— se puede considerar potencialmente burocrática, pero en el siglo XVIII afectaba a una exigua minoría de los funcionarios estatales. El resto se encontraban insertos en formas segmentales, particularistas y descentralizadas de control administrativo. Como ya apreció Weber, la burocracia presupone la separación del funcionario de los medios de administración (parafraseando la definición marxista del proletariado). Para que la administración pueda considerarse burocrática, los funcionarios no deben sacar provecho de sus decisiones, por el contrario, han de estar

controlados por la jerarquía administrativa y pueden ser cesados si no cumplen las normas administrativas impersonales. Tales condiciones no se encuentran en el siglo XVIII, porque los funcionarios o sus patronos *poseían* los cargos y extraían beneficios de ellos. El derecho de propiedad de dueños y patronos bloqueaba el proceso de centralización, racionalización y aislamiento de las administraciones estatales.

Esos derechos nos parecen hoy una forma de «corrupción», y así se reconocería después, cuando fueron abolidos, pero en el siglo XVIII constituían un modo de «representación administrativa», que reducía el despotismo real permitiendo a los partidos locales y regionales de las clases dominantes compartir la administración estatal. Las democracias de partidos embrionarias de Gran Bretaña y Holanda no significaban sólo la existencia de un Parlamento; en cuanto a las absolutistas Prusia, Austria y Francia, la propiedad de los cargos representaba la mayor restricción al despotismo central y rebajaba la autonomía del Estado. En efecto, la situación hace muy difícil hablar del «Estado» como actor. Los funcionarios del antiguo régimen estaban bien insertos en la sociedad civil.

Más tarde, se produjeron dos intentos de reforma, la primera desde el absolutismo, la segunda, conforme a una redefinición revolucionaria y reformista de la representatividad, hacia la democracia.

Primera fase: la monarquía dinástica y la guerra, 1700-1780

Los primeros reformadores modernos de la burocracia fueron los reyes dinásticos, quienes intentaron llevarlo cabo en sus ejércitos y poderes civiles por encima de la sociedad local y regional. La administración de la casa real y de sus dominios privados correspondía al monarca, que en ese momento era también el comandante en jefe indiscutible de las fuerzas armadas. La elite estatal existía sólo en potencia, como un «ello» o un actor, en los personajes del entorno real, sus amigos, parientes y criados. Pero ese «ello» no comprendía a todo el Estado, sino únicamente a una pequeña parte del núcleo monárquico. Fuera estaban los partidos de nobles, el alto clero y los notables locales que gestionaban la administración de sus respectivas esferas con una autonomía efectiva. El auténtico poder despótico padecía la limitación de varios poderes infraestructurales más débiles, cuya situación típica era su dependencia de los funcionarios locales y regionales —con frecuencia, también de los centrales— que poseían la

propiedad de los cargos. Las monarquías dinásticas cristalizaron, pues, en forma dual: como dinastías centralizadoras y como partidos del antiguo régimen descentralizadores, que mataban su tiempo formando facciones e intrigando en la administración y en la corte.

Por razones algo distintas, los dos regímenes menos representativos, los Hohenzollern y los Habsburgo, dinastías de Prusia y Austria, respectivamente, lanzaron una ofensiva burocrática durante el siglo XVIII, a la que pronto se unieron Suecia, Rusia y otros estados alemanes. El primer movimiento ideológico a gran escala por la reforma del Estado, el cameralismo, surgió principalmente de las universidades luteranas del norte de Alemania y de las católicas de Austria (Johnson, 1969; Raeff, 1975; Krygier, 1979; Tribe, 1984, 1988). Los cameralistas del siglo XVIII desarrollaron una «ciencia de la administración» que planteaba la racionalización y centralización de unos departamentos estatales *(Kammer)* informados mediante estadísticas sistemáticas y sometidos a normas fiscales y administrativas de carácter universal, para conseguir tres objetivos: lograr un buen orden, estimular las actividades económicas de los súbditos (no ciudadanos) y extraer ingresos sistemáticos de su riqueza. Sus metáforas favoritas se relacionaban con las máquinas.

> El Estado bien constituido deberá parecerse a una máquina en la que todos los engranajes se ajustan perfectamente; el gobernante será el capataz, el motor, el espíritu ... que pone todo el conjunto en movimiento [Justi, un cameralista citado por Krygier, 1979: 17].

Los cameralistas de principios del siglo XVIII eran juristas, profesores universitarios, funcionarios destacados o sus consejeros, que urgían a los monarcas a abandonar el particularismo. Estos «burócratas serviles» (según el término de Johnson) demandaron del absolutismo ilustrado centroeuropeo la reforma del Estado. El cameralismo austriaco se caracterizó también por un fuerte sentimiento anticlerical. En 1790 había más de treinta profesores de cameralismo en las universidades austriacas y alemanas, y unos sesenta publicaban libros de texto sobre el tema. Luego, el cameralismo dejó paso al influjo de los fisiócratas franceses y los teóricos británicos de la economía política (Tribe, 1988). La fase estatista centroeuropea de la teoría de la «modernización» fue sustituida por la fase capitalista británica.

El Estado de los Habsburgo era más dinástico y estaba más aislado de la sociedad civil que ningún otro en Occidente. Se trataba de

una gigantesca confederación, en la que tanto el gobierno central del monarca como el ejército constituían un nivel distinto al de los estados individuales, dominados por los nobles y las administraciones señoriales de sus múltiples provincias. Como demuestro en el capítulo 10, los Habsburgo eran una especie de trampa protectora para las provincias, que aceptaban su gobierno despótico para defenderse de otros despotismos potencialmente peores, bien de otras potencias, bien de ellas mismas entre sí. El núcleo real era un «ello» de carácter neutral, relativamente flexible, como lo demuestra el hecho de que siendo un país católico muchos funcionarios y oficiales profesaran la fe protestante o fueran extranjeros «neutrales», y, más tarde, incluso judíos.

La primera oleada de reformas llegó como respuesta a la Guerra de Sucesión austriaca (1740-1748), el intento concertado de las potencias limítrofes para desmembrar los dominios de los Habsburgo aprovechando el acceso de una mujer, María Teresa, al trono. Enfrentada a su eliminación y obligada a retroceder al corazón de sus dominios reales, la enérgica reina economizó y logró maximizar los recursos fiscales siguiendo al mismo tiempo los modelos del cameralismo y de la administración militar prusiana. Los altos funcionarios se sintieron aguijoneados por el ejemplo del ejército prusiano, que había logrado duplicar en Silesia los ingresos que ellos recaudaban antes de 1740, cuando era una provincia austriaca (Axtmann, 1991). Finalmente, el ejército austriaco estaba profesionalizado y subordinado a la monarquía. La mayor parte de los altos funcionarios reales recibían un salario, y dispusieron antes que en otras partes de un único fondo de pensiones racionalizado. Los oficiales de alta graduación tuvieron que dar pruebas desde 1776 de haber estudiado el cameralismo. Se liberalizaron y secularizaron la prensa y las universidades, mientras que gran parte de los departamentos del Estado central —en especial, el Banco de la Ciudad de Viena (en realidad, la hacienda pública), los departamentos de minas y acuñación de moneda, y el *Camerale* (los ministerios esenciales)— se organizaban según principios burocráticos, como demuestra la temprana aparición de las estadísticas del censo austriaco que incluyo en el cuadro 11.7.

Pero la burocratización austriaca presenta dos limitaciones. En primer lugar, los departamentos no estaban integrados en una sola estructura jerárquica y funcional; coexistían en Viena con las antiguas instituciones estatales centradas en la corte. No había un solo gabinete, ni un primer ministro efectivo, sino varios consejos y ministros

que competían por acceder al monarca e influir en la corte. Los vínculos sociales entre la monarquía, la corte, la Iglesia, los militares de alta graduación y los administradores eran tan estrechos que cabe identificarlos como una elite estatal, aunque pocas veces se mostraran unidos. Pero el Estado austriaco no consistía en una sola burocracia, sino en una monarquía cuyas metas se realizaban a través de unas administraciones que penetraban las unas en las otras, y en las que se infiltraban los partidos.

En segundo lugar, esta burocratización parcial caracterizaba sólo al nivel central, es decir, al gobierno real, especialmente en Viena, asentado sobre las administraciones regionales y locales de Austria, Bohemia, Hungría, etc., cuyos cargos eran elegidos por los estados o retenidos en propiedad por los notables locales y los dignatarios eclesiásticos. Como indica el cuadro 4.2, en las provincias, la administración real contaba con menor poder infraestructural que otros Estados. Ni María Teresa ni su hijo José II fueron capaces de imponer en el mayor Imperio de Europa sus ambiciosos proyectos «ilustrados». José II perdió una batalla en la que había puesto mucho esfuerzo contra el particularismo regional. Los nobles húngaros y de los Países Bajos, los comerciantes y el clero se rebelaron en nombre de las libertades particularistas y los privilegios representativos, y comenzaron a negociar con Prusia (que ofrecía una trampa protectora alternativa) cuando José quiso llegar demasiado lejos. Leopoldo, su sucesor, restauró las libertades y los cargos; desde ese momento, el absolutismo ilustrado se retiró a la capital (Macartney, 1969; Beales, 1987; Dickson, 1987; Axtmann, 1991). El Estado autonómo y protoburocrático del siglo XVIII padeció una radical debilidad de tipo infraestructural. A ello se debe, en gran medida, que la modernización austriaca no avanzara más.

Las indagaciones empíricas de los historiadores que he consultado (Rosenberg, 1958; Fischer y Lundgreen, 1975: 509 a 527; Gray, 1986; aunque Johnson, 1975, difiere) califican de «burocrática», casi invariablemente, a la administración prusiana. En efecto, el núcleo de su Estado real realizó también una burocratización temprana de su personal, debido, una vez más, a la presión de la guerra. En su caso la innovación no vino directamente del cameralismo, sino del ejército. Cuando Prusia pasó triunfalmente la prueba de las guerras de mediados de siglo, la administración fiscal y militar se extendió a los dominios reales, las regalías (las minas y la ceca), los estados y los municipios. Bajo el gobierno de Federico Guillermo I, un directorio general

de cuatro ministros supervisaba las juntas provinciales de la guerra y los dominios, para vigilar a los comisarios de los impuestos y los condados *(Landräte).* Oigamos el famoso comentario de un ministro: «Prusia no era un país con un ejército, sino un ejército con un país que le servía de cuartel general y almacén de vituallas» (Rosenberg, 1958: 40).

Así pues, a partir de 1750, disminuyó la propiedad de los cargos. Los funcionarios del Estado central y los altos funcionarios de las localidades y las regiones recibían salarios y pensiones y eran nombrados y cesados por el rey. Bajo el influjo del cameralismo, los jueces tuvieron que formarse y someterse a examen desde finales de la década de 1730. En 1780 se les exigió un grado universitario, dos años de prácticas y un examen final (Weill, 1961; Johnson, 1975: 106 a 133); este último requisito se amplió a los niveles más altos de la administración de 1770 a 1800. Una vez convertida en cualificación normal, la licenciatura universitaria cohesionó a los oficiales con la cultura de la «nación», ya que las universidades eran los principales transmisores de la identidad «alemana». El código legal de 1794 vino a consolidar estos hechos y garantizó a los funcionarios el desempeño legal del cargo condicionado a la realización competente de sus deberes. Ya no se les llamaba servidores reales, sino «funcionarios profesionales del Estado» *(Beamten des Staats).* De hecho, fueron quizás los únicos burócratas auténticos de su época. Prusia había aventajado a Austria en la carrera por la burocracia, y había logrado «nacionalizarla» antes que nadie.

Con todo, también el caso prusiano tuvo sus limitaciones. La burocracia cristalizó allí, igual que su progenitor, el ejército, como un fenómeno del *antiguo régimen* a causa de su compromiso con los nobles, en particular con los *Junkers.* Como indica el cuadro 4.2, las infraestructuras del Estado prusiano funcionaron con eficacia porque coordinaban desde el centro a la elite con los partidos de la clase dominante. Pero entonces aparecieron las tensiones propias de la modernización del Estado y la expansión burguesa. Puesto que hasta la década de 1820 no habían sido muchos los nobles que frecuentaban la universidad, estalló el conflicto entre los notables o funcionarios «prácticos», formados privadamente, y los «nacionales», educados en la universidad y de origen plebeyo, aunque ricos. Los reyes se las arreglaban para gobernar entre ambos grupos, siempre temerosos del exceso de control y de la amenaza de una casta burocrática. En Prusia

(como más tarde en Rusia) las luchas entre el antiguo régimen y la alta burguesía se libraban dentro de la administración estatal.

Las luchas en Prusia se resolvieron con éxito gracias al compromiso. Se admitió a los profesionales burgueses y se complementó la educación de los nobles. Los niveles más altos del funcionariado civil y militar permanecieron en manos aristocráticas hasta que la expansión del ejército, la armada y la administración civil de los últimos años del siglo XIX superó la natalidad de esa clase (Bonin, 1966; Koselleck, 1967: 435; Gillis, 1971: 30; los datos militares aparecen en el capítulo 12). En efecto, la pérdida de poder económico de los *Junkers* los empujó a las carreras del servicio público (Muncie, 1944). Por otro lado, los exámenes eran más cualificativos que eliminatorios, de modo que los altos funcionarios podían seleccionar a sus preferidos y ayudarlos a aprobar. Como es lógico, escogieron entre los suyos, de modo que la administración permaneció inserta en el antiguo régimen. Los funcionarios servían a la corona al tiempo que disfrutaban de la independencia que les confería su clase. Al igual que en otros estados alemanes, se negaron con frecuencia a desarrollar directrices con las que no estaban de acuerdo (Blanning, 1974: 191).

La administración civil de Prusia también cristalizó como *militarista*. Los administradores vestían uniformes y recibían una graduación formal de rangos. El militarismo se extendió incluso por los niveles bajos y medios (Fischer y Lundgreen, 1975: 520 y 521). Dado que la movilización del ejército dependía de un grupo amplio de reservistas entrenados, entre los que abundaban los suboficiales, el problema era qué hacer con ellos al acabar una guerra y cómo mantenerlos motivados para la próxima; a este respecto, los Hohenzollern habían pedido a los ministros ya en el siglo XVIII que concedieran empleos públicos a los veteranos. Por lo general, tenían preferencia para realizar ciertas funciones tales como interventores situados a la entrada de las ciudades, inspectores de fábricas, policías, maestros de las escuelas elementales e incluso clérigos y, más tarde, empleados de los ferrocarriles. Desde 1820 los suboficiales con nueve años de servicio tenían preferencia también para las tareas burocráticas y contables de la administración, siempre que supieran leer, escribir y contar. Más tarde, Austria imitó estas normas para los suboficiales con doce años de servicio, y Francia les concedió categoría de ley en 1872. Muchas de las leyes alemanas del siglo XX relacionadas con el empleo público recogían aún la regulación de la disciplina y el castigo, asegurando la total primacía del orden público sobre cualquier otro asunto

y el empleo del ejército para conservarlo. La administración de Prusia-Alemania no conoció una norma más persistente que la ley marcial (Ludtke, 1989).

El militarismo y el antiguo régimen crearon una casta netamente «prusiana» dentro la administración, donde impusieron un férreo control que no se debió tanto a los procedimientos de la responsabilidad racional que destaca Weber como a esa combinación de espíritu de cuerpo y miedo disciplinado que constituye el sello inconfundible de una aristocracia militar efectiva. Era, sin duda, una administración moderna, pero estaba conformada por una clase tradicional y unas relaciones típicas del poder militar.

La tercera limitación de la burocracia prusiana apunta en la dirección contraria, a la reducción de la homogeneidad del Estado. Prusia, como Austria, no supo integrar a los distintos departamentos administrativos. Dentro de éstos se creó una estructura jerárquica, de órdenes y carreras, pero sus relaciones nunca fueron claras. Por ejemplo, los ministros del directorio general, surgido en tiempos de guerra e invasión, tenían distintas esferas de competencia, unas de carácter territorial y otras de carácter funcional. Al principio se reunían en el consejo privado del rey, pero el cuerpo cayó en desuso bajo Federico el Grande, a quien no interesaba compartir el poder. Su política basada en el «divide y vencerás» redujo la burocratización e impidió la posible rivalidad de un primer ministro (Anderson y Anderson, 1967: 37). Los llamados gabinetes no constituían consejos de ministros, sino reuniones de consejeros de corte, vinculados a los ministerios de modo independiente. Cuando Prusia comenzó su expansión, proliferaron los nuevos departamentos junto a los antiguos ministerios:

> Existían cinco burocracias principales con funciones cruzadas, que se enfrentaban entre sí y sólo reconocían la autoridad del rey ...: A partir de 1740 no hubo una única burocracia; las funciones no se repartieron siguiendo un criterio lógico ni se asignaron a individuos organizados dentro de una jerarquía burocrática. El gobierno prusiano se descentralizaba cada vez más ... y se dividía en cuerpos antagónicos [Johnson, 1975: 274].

La administración reunía los dos principios de la responsabilidad: la decisión colegial de los cuerpos de funcionarios y el «principio de un solo hombre» planteado por muchos reformadores. No existía en Prusia una administración única y centralizada. En sus niveles más al-

tos, se integró en una corte aristocrática centrada en un monarca dispuesto a conservar el segmentalismo. Los ministros —incluso los cancilleres, cuando se creó esta figura— se valían tanto de las intrigas de corte como de su posicion administrativa; en todo caso, la meta era siempre garantizarse el acceso directo al monarca. El absolutismo sólo dispuso de la unidad ficticia del monarca, y nunca, cualquiera que fuese el estatus de sus funcionarios, fue burocrático.

Sin embargo, los Estados de Prusia y Austria fueron los más burocratizados del siglo XVIII. Uno nació del confederalismo dinástico austriaco y otro del militarismo prusiano, pero ambos consolidaron la dinastía monárquica dotándola de una mayor autonomía. En Francia, pese a su condición formalmente absolutista, no se produjo el aislamiento. Siglos de acomodación a los privilegios de los nobles de provincias y los grupos corporativos habían insertado incluso los niveles más altos del Estado en la sociedad civil, en lo que podríamos describir como una forma peculiarmente corrupta y particularista de «representación» (Bosher, 1970; Mousnier, 1970: 17 y ss.; Fischer y Lundgreen, 1975: 490 a 509; Church, 1891).

En el Estado francés, el empleo presentaba dos estatutos fundamentales. La mayoría de los funcionarios denominados *officiers* poseían la propiedad del cargo, generalmente por compra, cuyos derechos estaban protegidos por corporaciones. Existía también una minoría de los llamados *commissaires* o empleados asalariados. Pero la frontera entre ambos grupos se hizo imperceptible a medida que, por un lado, los *commissaires* buscaban la propiedad y, por otro, el rey luchaba por reducir la venalidad en los empleos. En la década de 1770 había al menos 50.000 asalariados o funcionarios que podían ser cesados, especialmente en los ministerios, puestos de aduanas y oficinas postales, por lo general, subordinados a los *officiers*. Necker (1784) estimaba 51.000 empleos venales sólo en los tribunales, municipios y oficinas financieras, a los que podemos añadir los de la casa real, recaudadores de impuestos y otras compañías financieras utilizadas por el Estado, más los cargos de los inspectores de gremios, otros inspectores e incluso peluqueros. Taylor (1967: 477) y Doyle (1984: 833) estiman un total del 2 al 3 por 100 de la población de los varones adultos, alrededor de 200.000 personas. Podríamos añadir quizás a 100.000 de los 250.000 recaudadores de ingresos a tiempo parcial estimados por Necker (los restantes pueden estar incluidos en los empleos venales ya citados). Algunos eran asalariados; otros tenían carácter venal. Por mi parte, calculo que más del 20 por 100 de

los funcionarios eran *commissaires* asalariados, pero se trata sólo de una estimación porque en realidad no estamos seguros (como he destacado más en general en el capítulo 11).

No existían normas objetivas para el nombramiento o la promoción en ningún departamento. Muchos altos funcionarios tenían conocimientos previos de leyes, pero esto no indica una formación técnica (como, en parte, existía en Prusia) porque se trataba de un hecho normal entre los hombres educados. Quizás podríamos calificar de burócratas al 5 por 100 de los funcionarios franceses siguiendo los dos índices de Weber respecto al personal. Así pues, el Estado estaba plagado de derechos de propiedad privada y corporativa, plenamente insertos en la sociedad civil.

Tampoco existía una organización burocratizada, ni dentro de los departamentos ni entre ellos. En los ministerios más importantes se estableció una jerarquía a partir de la década de 1770, que fijó los diferenciales de los salarios y las líneas de las carreras. Pero incluso allí, y mucho más en otras partes, los derechos de propiedad superaron las corrientes jerárquicas y funcionales de información y control, tal como ocurría con las relaciones entre los distintos departamentos. La administración francesa mezcló la dirección individual con la colegiada, para después abortar ambas cosas. El antiguo *conseil d'état* se había especializado en varios consejos, algunos de los cuales fueron absorbidos por la corte. Como en la mayoría de los países, el ministro de finanzas se convirtió en un funcionario clave, sin embargo, no contaba con un estatus especial ni en los consejos ni en la corte, y apenas tenía autoridad sobre gran parte de una administración financiera muy extensa. En las provincias, casi todo dependía de la energía de un intendente y su pequeño equipo, obligados a colaborar amistosamente con los notables de la localidad que disfrutaban de privilegios particularistas.

Los reformistas sabían cómo había de ser una administración racional y moderna; al fin y al cabo, la Ilustración francesa se había inspirado en el cameralismo (aunque sus demandas políticas fueran más explosivas). En ministerios como el de Necker contaron con patronos que calculaban cifras y costes, eliminaban en la medida de lo posible la corrupción y trataban de reorganizar ámbitos administrativos más amplios (aunque ninguno de ellos abarcaba el conjunto), pero tales progresos eran limitados, como reconoce el propio Necker:

> Subdelegados, funcionarios de la *election*, gerentes, síndicos e inspectores de los *vingtièmes*, comisarios y recaudadores de la taille, funçionarios de las ga-

belas, inspectores, ujieres, jefes de la corvée, agentes de las *aides*, el *contrôle* y los impuestos de reserva; todos estos hombres del fisco, cada uno según su carácter, someten a su insignificante autoridad y confunden con su ciencia fiscal al ignorante contribuyente, que nunca sabe cuándo le están timando, pero que siempre lo sospecha [citado en Harris, 1979: 97].

Una opinión que suscribe el mayor estudioso del siglo XX: «El antiguo régimen nunca confeccionó un presupuesto o una ley donde se previeran y autorizaran los ingresos y gastos de un periodo concreto ... Sólo conoció Estados fragmentados e incompletos» (Marion, 1927: I, 448).

Por eso me parece extravagante que algunos historiadores se dejen tentar por la palabra «burocracia» al describir este tipo de Estado. Por ejemplo, Harris califica a los *Royal General Farms* —aquel monumento a la obtención de cargos en propiedad, útil para el provecho privado— de «enorme aparato burocrático» (1979: 75). El antiguo régimen francés presentaba pocas características burocráticas.

El dinasticismo produjo alguna modernización burocrática, pero, en Prusia y especialmente en Austria, la administración sólo permaneció aislada de las clases en los niveles más altos del ámbito real. Pero, en el conjunto, lo significativo fue la dominación de los partidos por un antiguo régimen formado al mismo tiempo por clases politizadas y funcionarios insertos en ellas. Una situación particularmente cierta para el caso francés, aunque también la encontramos en Gran Bretaña y sus colonias americanas, pero allí existía un embrión de democracia de partidos, que tenía tantas facciones parlamentarias como funcionarios corruptos. Esta combinación produjo en Gran Bretaña una administración tan cohesionada como la de Prusia, pero mucho menos burocratizada (para la comparación entre Prusia y Gran Bretaña, véase Mueller, 1984).

Casi hasta el año 1800 el número de altos funcionarios asalariados que trabajaban realmente era muy inferior al de los dueños de las sinecuras, beneficiarios del salario y los frutos del trabajo de un suplente. Prácticamente los trescientos cargos de la Hacienda estaban cubiertos por estos sustitutos (Binney, 1958: 232 y 233). En el Ministerio de Marina, el tesorero nombraba y pagaba a su propio oficial pagador para que hiciera su trabajo, y los dos auditores del fondo fijo retenían gran parte de sus considerables sueldos (más de 16.000£ y 10.000£ anuales) aun después de haber abonado todos los gastos del departamento. En 1780 se hizo público que nadie había supervisado

el trabajo de aquel departamento durante más de treinta años. En la oficina del secretario de Estado, hasta el empleado de la limpieza contrataba a otra persona (Cohen, 1941: 24 a 26). No se requerían cualificación o exámenes, ni existían criterios formales para los ascensos, excepto en la recaudación de derechos de aduanas y arbitrios y en los departamentos técnicos de la marina. El patronazgo estaba tan formalizado que la recomendación se realizaba por escrito (Aylmer, 1979: 94 y 95).

La autonomía de los derechos de propiedad sobre el empleo frustraba en todos los niveles la posibilidad de que existieran cadenas de mando entre los distintos departamentos o dentro de cada uno de ellos. Pero el siglo XVIII aportó varios cambios. El Primer Lord del Tesoro se transformó poco a poco en «primer» ministro y representó al monarca ante el Parlamento en la Cámara de los Lores. Tras él venían los dos secretarios mayores de Estado, los subsecretarios y los consejos que regían departamentos específicos. Pero el monarca y los miembros de las dos cámaras poseían cauces independientes de influencia y patronazgo dentro de los departamentos.

> Los asuntos públicos se gestionaban mediante un número de cargos más o menos independientes, que no estaban sometidos a ningún tipo de supervisión, ni en cuanto a los métodos de trabajo ni en los pormenores del gasto ... El Primer Lord del Tesoro no podía hacer un cálculo aproximado de los gastos del gobierno para un determinado año [Cohen, 1941: 34].

Antes de 1797 no hubo ningún intento de contar a los funcionarios.

Como en Francia, la «corrupción» se defendió con tenacidad, pero en Gran Bretaña era nacional y estaba centralizada, ya que sus fuentes eran el soberano y sus ministros con el Parlamento. Proporcionó grandes beneficios a los dueños y patronos, pero también permitió a la administración real funcionar sólo *a través de* los partidos «protonacionales» de las clases altas. La administración no era un asunto aparte de la política o de la clase. Su forma de «representación», corrupta y particularista, se adecuaba a las sociedades agrarias tardías como Francia o Gran Bretaña. Por una parte, éstas carecían de la capacidad de comunicación y de la disciplina de los partidos que más tarde consolidaría la representación parlamentaria en el capitalismo industrial; y por otra, tanto la población como las distintas formas de capitalismo se regían allí por redes particularistas de paren-

tesco que irradiaban hacia abajo desde el Consejo Real o el Parlamento. En Francia, la representación administrativa produjo una administración ineficaz; en cambio, en Inglaterra fue bastante eficiente. En todo caso, se mantuvo prácticamente intacta hasta la década de 1780, a despecho de la extraordinaria transformación que había experimentado la sociedad civil.

Pero el gran estímulo de la burocracia británica fue la escalada de la presión fiscal impuesta por el militarismo de Estado, primero en las ramas técnicas de la marina (no en el ejército, más aristocrático) y luego en las oficinas de aduanas y arbitrios. Brewer (1989) demuestra que el departamento de arbitrios se convirtió en la primera administración civil directamente controlada por altos funcionarios estatales. Cuatro mil ochocientas personas, en su mayor parte asalariadas, compartían un «esquema de protoorganización» compuesto por canales formales de comunicación y control funcional y jerárquico, que presentaba informes regulares por escrito y proporcionaba ingresos previsibles (algo insólito en el siglo XVIII), en contraste con la corrupta administración del venerable impuesto sobre la tierra que gravaba precisamente a los propietarios, es decir, a los inventores, en defensa propia, de la propiedad de los cargos. El arbitrio era la obra de un Estado despótico, la *Commonwealth* de Cromwell, que había demostrado una eficacia insólita. Aunque controvertida desde el punto de vista constitucional, su extracción no causó un gran daño en el antiguo régimen; gravaba los beneficios extraordinarios del comercio y el consumo de los indefensos pobres y sirvió para financiar una expansión global muy provechosa. Sin embargo, el departamento de arbitrios resultó ser una especie de caballo de Troya, así pues los reformadores que exigían comisiones indagadoras al Parlamento alabaron su modelo burocrático durante la década de 1780.

Ya existían presiones favorables a la creación de una burocracia y, con mayor ambivalencia, de una administración nacional. En el capítulo 4 he examinado el auge de un movimiento por la «reforma económica» nacional contra el derroche y la corrupción, que se inspiró en dos fuentes. La primera, como en otras partes, llegó con la presión fiscal de la guerra moderna. El movimiento nació a raíz de la Guerra de los Siete Años y produjo las primeras reformas auténticas bajo el influjo de la Revolución Americana. La segunda era la ideología implícita en la alianza nacional de los «excluidos» del antiguo régimen y la pequeña burguesía emergente, no menos «excluida» con anterioridad; una alianza que debía mucho —igual que su teoría de la admi-

nistración eficaz— a la difusión del capitalismo, comercial primero, e industrial después. El utilitarismo se distinguía del cameralismo en que su racionalidad era formal, sistémica y descentralizada, gobernada por principios que subrayaban las relaciones en el seno de la sociedad civil, con una menor guía autoritaria del Estado. Detecto en ello la influencia de la «mano invisible» de la economía más capitalista del mundo.

He trazado hasta aquí una primera fase de modernización y burocratización del Estado, ambas basadas en la existencia de funcionarios cualificados, que realizaban un trabajo real, recibían un salario y podían contarse, así como en la racionalización funcional y jerárquica de cada departamento. Hasta entonces hubo pocos cambios respecto a los cuatro o cinco criterios sobre la burocracia integradora de los distintos departamentos, que separa la administración de los partidos políticos. Las grandes reformas llegaron desde ciertas relaciones de poder que no parecen a simple vista muy «modernas». Los primeros intentos se dieron en las monarquías menos representativas, Austria y Prusia, dinastías absolutas y mal equipadas en materia de comercio, industria y urbanización (como también destaca Aylmer, 1979: 103). El dinasticismo fue un «ello», un actor aislado y centralizado capaz de reorganizarse a sí mismo con la ayuda de una ciencia consciente de la administración. Lo que consolidó el dinasticismo austriaco y prusiano fueron sus cristalizaciones militares y confederales. Por el contrario, en la democracia de partidos británica (embrionaria), la administración era real *y* se hallaba integrada, es decir, centralizada y descentralizada a un tiempo, ni más ni menos que el Parlamento, dividido entre los partidos de la corte y del país, entre los que disfrutaban de los cargos y la baja nobleza de los condados. Ninguna reforma podría prosperar sin el consentimiento de ambos grupos. Ahora bien, su compromiso histórico había institucionalizado la corrupción comprando la influencia de la corona y la libertad de los notables frente al despotismo. A este respecto, el régimen francés, formalmente dinástico pero inserto y «corruptamente representativo» hasta los niveles más altos, recordaba al británico. Pero los monarcas austriacos y prusianos disponían de administraciones más grandes, que podían modernizar a su antojo. Por eso el cameralismo se abrió paso allí y no en Gran Bretaña. En realidad, los monarcas dinásticos sólo podían penetrar en sus reinos mediante el compromiso con los nobles y la Iglesia, porque ellos sí se hallaban insertos en las administraciones locales y regionales. Sin embargo, al contrario que en Gran

Bretaña (o que en sus colonias americanas), nadie cuestionaba el derecho del rey a administrar a su modo.

Los reyes dinásticos se vieron también lanzados a la reforma por la presión de las guerras por la tierra, que fueron mucho más duras en la Europa central. El ritmo de la modernización del Estado se aceleró por la necesidad de dinero y hombres que impuso el militarismo, de ahí que las administraciones fiscales-militares fueran las primeras en racionalizarse (la judicatura prusiana, que podría parecer una excepción, estaba estrechamente vinculada a la administración militar), y que, especialmente en Prusia, el ejército brindara los modelos de organización. Esta presión no faltó en Francia, pero allí el régimen fue incapaz de incorporar las reformas militares a los departamentos del fisco. Cuando las guerras napoleónicas impusieron a Gran Bretaña unas cargas fiscales y militares comparables, la reforma podría haber llegado a través de un camino muy parecido.

Así pues, la primera fase de la burocratización no se debió tanto a la existencia de una sociedad civil, capitalista y «moderna» como a las cristalizaciones militares tradicionales de los Estados, que las monarquías menos representativas sintieron con especial intensidad. Existe, sin embargo, una excepción: las presiones que ejercieron los burgueses británicos y los reformistas de la pequeña burguesía, sin éxito durante este periodo. La burocratización llegó en primer lugar del antiguo Estado monárquico y militar, no de la nueva sociedad civil, y sus límites fueron las propias contradicciones del Estado: administración racional contra el principio segmental de «divide y vencerás», y autonomía y al mismo tiempo dependencia de la nobleza.

Segunda fase: revolución, reforma y representación, 1780-1850

Durante este periodo, la modernización del Estado tomó el camino que habían definido previamente las luchas revolucionarias por la representación política y la ciudadanía nacional. La Revolución Americana sentó un precedente histórico [1]. Una vez alcanzada la independencia, resultaba imposible volver a la «antigua corrupción». La forma de evitar el despotismo era construir un Estado de peque-

[1] Mis fuentes principales sobre las administraciones americanas han sido Fish (1920), White (1951, 1954, 1958, 1965), Van Riper (1958), Keller (1977), Shefter (1978) y Skowroneck (1982).

ñas dimensiones, responsable ante los cuerpos elegidos. La racionalización del Estado resultó políticamente aceptable por vez primera. El cameralismo, la Ilustración y las ideas utilitarias impregnaban también el pensamiento de los federalistas; por ejemplo, Alexander Hamilton era un ávido lector de Jacques Necker (McDonald, 1982: 84 y 85, 135 y 136, 234, 382 y 383). Es decir, la comunidad ideológica europea había traspasado el Atlántico.

La Constitución contribuyó al desarrollo de cuatro de los cinco índices de burocratización que he planteado en estas páginas, si bien sólo en el plano deferal. *Todos* los funcionarios federales han recibido un salario desde finales de la década de 1780 hasta nuestros días, y todos los departamentos se organizaban racionalmente conforme a la función y a la jerarquía. La autoridad estaba investida del principio de un solo hombre de Hamilton. En cuanto a la jerarquía, culminaba en tres secretarios (del Tesoro, de Estado y de la Guerra), más tarde, seguidos de las cabezas de los servicios postales y la marina y por el fiscal general. Tales departamentos respondían de sus finanzas ante el Tesoro y se reunían en gabinete presidido por el jefe del Ejecutivo, es decir, el presidente. Estaban obligados a presentar informes por escrito al presidente y al Congreso, e imponían lo mismo a los subdepartamentos. Una separación formal de poderes alejaba a la administración de la política, con la sola excepción del jefe ejecutivo era también un dirigente político. En contraste, el Estado y los gobiernos locales crearon administraciones mucho más integradas. Pero en el plano federal, las oficinas gubernamentales formaban una burocracia plenamente desarrollada; la única en el mundo durante al menos cincuenta años. La comunidad internacional de los reformistas ilustrados y utilitarios la elevaron a categoría de ideal. El motor de la burocracia había saltado el Atlántico.

Pero la práctica no igualó a la teoría. Los estudios de White demuestran que, al principio, la administración depèndió tanto de las redes de clientelismo como de las jerarquías formales. Los reformistas trataron de recortarlo mediante normas reguladoras de las funciones contables, las donaciones de tierras y la oferta de contratos. En 1822 el Congreso pidió a los jefes de los departamentos un informe sobre la eficacia de los empleados, que el Secretario de la Guerra remitió con estas palabras:

El único empleado ineficaz es el coronel Henley, que tiene setenta y cuatro años y ha servido ... desde 1775 ... La edad le impide realizar las tareas pro-

pias de un empleado, pero su conocimiento de los sucesos de la revolución le hace muy útil para examinar las reivindicaciones de los revolucionarios [*American State Papers*, 1834: Vol. 38, 983].

Puede que el coronel Henley fuera en realidad el tío del secretario, o bien que en el departamento disfrutaran escuchando sus aventuras durante la revolución, pero el hecho es que el secretario tenía que dar cuentas de él, lo que con toda probabilidad no hacía en ningún otro país un hombre de su rango.

Sin embargo, la burocratización del personal no fue tan completa como se hizo durante casi todo el siglo XIX. Recibía un salario, es cierto, pero los criterios que determinaban el nombramiento, el ascenso y el cese eran poco claros. Washington no fue capaz de imponer otras leyes que las referidas a los casos de «relación familiar, indolencia y embriaguez», aunque, no cabe duda, se trataba de un progreso. Como observa Finer (1952: 332) con ironía: «En Gran Bretaña, los dos últimos criterios no representaban un impedimento; en cuanto al primero, era una recomendación positiva». No obstante, el nombramiento según la cualificación sufrió un retraso. Las cualificaciones y los exámenes se introdujeron en la administración militar en 1818, pero (salvo en el caso de algunos contables) no llegaron al servicio civil hasta 1853. No se normalizaron hasta 1873, ni se hicieron universales hasta 1883. Al principio se estableció la permanencia en el cargo condicionada al buen comportamiento, pero la extensión del famoso sistema de reparto de empleos entre los miembros del partido victorioso lo convirtió en papel mojado.

Todos los presidentes repartieron cargos entre sus amigos políticos. A medida que se democratizaba el país, el gobierno de los notables dejaba paso a los partidos en el control de los cargos. Durante la purga de Jackson en 1828-1829, del 10 al 20 por 100 del conjunto de los funcionarios federales y el 40 por 100 de los altos funcionarios fueron cesados y sustituidos por leales de su facción republicana. Las purgas de los partidos se prolongaron hasta mediados de siglo, y el patronazgo dominó gran parte de los gobiernos estatales y locales. Y puesto que el partido presidencial podía subvertir la burocracia, el Congreso y la judicatura hicieron lo propio. Los departamentos federales se vieron obligados a presentar presupuestos a los comités de gastos del Congreso, lo cual socavaba el control centralizado del Tesoro. La regulación de la competición entre los partidos y las administraciones pasó a los tribunales, que se convirtieron así en susti-

tutos en materia de procedimiento de una administración burocratizada (Skowroneck, 1982: 24 a 30). Mientras la reforma británica avanzaba con firmeza, la burocracia de los Estados Unidos retrocedía, avasallada por la burocracia de los negocios, especialmente en los ferrocarriles (Finer, 1952; Yeager, 1988).

Tres razones explican el retroceso del gobierno federal. En primer lugar, el hecho de que los Estados Unidos apenas participaran en guerras extranjeras determinaban un escaso presupuesto militar. En otras partes, las presiones fiscales-militares continuaban aumentando el tamaño de la administración central y racionalizando su estructura. En Estados Unidos, la guerra de 1812 forzó la reorganización del ejército y de los departamentos contables, pero aquel modesto Estado careció de rivales continentales hasta el siglo XX. La Guerra Civil aumentó enormemente el volumen del Estado en ambos bandos, pero fue un fenómeno temporal, porque sus resultados no cambiaron las cosas en la Unión. En segundo lugar, se produjo una peculiaridad imprevista. Aquel Estado constitucionalmente legitimado, con unos ingresos por aduanas cada vez mayores, que se había revelado sorprendentemente opulento, y que a menudo se veía bendecido con todo tipo de excedentes, no necesitaba la «organización económica o eficaz» que, en teoría, demandaba el Congreso. El militarismo geopolítico no tuvo allí la importancia que en otros lugares fomentó la burocratización.

En tercer lugar, la Constitución no había resuelto las dos cristalizaciones netamente políticas —la representación y la cuestión nacional—, lo que supuso el bloqueo de una burocracia que parecía potencialmente despótica. La Constitución demuestra que los contemporáneos percibieron la viabilidad técnica de la burocracia mucho antes de la aparición de una sociedad industrial, pero demuestra también que no la deseaban. A los hombres adultos y blancos no les gustaba lo que podría haber hecho en ese caso el gobierno, en especial el central. Las redes de poder político cristalizaron en facciones políticas complejas y en partidos que representaban la clase, la religión, el sector económico, la economía regional y los estados individuales. Es muy probable que la política estadounidense generara la mayor proliferación de estos grupos pluralistas de interés. Para asegurarse de que el gobierno representaba realmente sus intereses, los partidos y las facciones restringieron el poder del Estado central y se insertaron ellos mismos en múltiples cargos y cuerpos colectivos, tanto en el nivel federal como en el estatal o el local.

La solución «confederal» se estableció en ausencia de un partido fuerte capaz de controlar el Estado, de manera que al crecer el gobierno, los partidos institucionalizados en todos los niveles de gobierno lo fragmentaron. Luego, el resultado de la Guerra Civil produjo una nueva centralización, lenta y parcial (aún dentro de los límites de la constitución federal). El entrelazamiento de la política de clase con la política local y regional (y con la segregación de los esclavos, la religión, etc.) dio paso, durante todo el periodo, a un Estado insignificante, dividido y débilmente burocratizado.

Francia fue la tierra de la segunda revolución, más ambiciosa en sus metas. El 4 de agosto de 1789, los revolucionarios franceses abolieron a un tiempo la venalidad de los cargos y el «feudalismo». Querían reducir el número de cargos a un pequeño núcleo de funcionarios asalariados y delegar el resto de las funciones públicas en los ciudadanos comprometidos, sin estipendio. Su racionalidad sería tan sustantiva como formal, porque encarnaría la moral y los valores de la nueva ciudadanía. Pero ni el idealismo ni la economía sobrevivieron al Terror o a la guerra revolucionaria, que necesitaban armar a los ciudadanos y a las ciudades para dar caza a los contrarrevolucionarios e imponer las numerosas leyes nuevas que recrearon en gran parte el Estado del antiguo régimen, que ahora pagaba a sus cargos, no venales, comprometidos con principios racionales de función y jerarquía y ostensiblemente centralizados. Tales fueron sus mayores modernizaciones. Poca cosa si lo comparamos con las metas iniciales y las reivindicaciones de modernidad.

«Como el agua que al extenderse en una inundación se va ensuciando a medida que se hace menos profunda, así se evaporó la revolución dejando únicamente tras de sí el fango de una nueva burocracia. Las cadenas de la sufriente humanidad son ahora cintas rojas.» La amarga denuncia de Kafka contra la revolución bolchevique (Janouch, 1953: 71) expresa el desengaño del siglo XX respecto a la herencia revolucionaria, es decir, el triunfo del despotismo y la burocracia estatal, no de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La Revolución Francesa no condujo a la libertad, sino al nacionalismo militante y al comunismo estatista, dice O'Brien (1990). Para Skocpol, tanto la Revolución Francesa como la rusa o la china aumentaron los poderes del Estado, especialmente en materia de racionalización y centralización. En Francia, la revolución creó un «Estado burocrático-profesional», que tenía «una presencia total en la sociedad ... como una estructura administrativa uniforme y centralizada»

cuyo poder sólo limitaba la economía capitalista descentralizadora (1979: 161 y 162). Tilly (1990: 107 a 114) sostiene que la revolución produjo «un fenomenal movimiento» hacia el gobierno «directo» y centralizado, que los ejércitos revolucionarios impusieron después al resto de los países, con variantes regionales.

Pero la comparación de Skocpol con las revoluciones del siglo XX no es acertada. Como vimos en el capítulo 11, los poderes infraestructurales del Estado no se desarrollaron hasta finales del siglo XIX. Aún estaban restringidos por la competencia de los partidos, las cristalizaciones rivales del Estado y el capitalismo de mercado (Skocpol destaca esta última limitación). Es lógico que la captura del Estado por los revolucionarios del siglo XX, para abolir o evitar la influencia del capital y de los partidos competidores (como hicieron los bolcheviques y los fascistas), se saldara con una expansión y un enorme aumento del poder despótico, pero los revolucionarios del siglo XVIII y de comienzos del XIX no contaron con un poder semejante.

Los revolucionarios franceses disponían, en primer lugar, del poder ideológico que hemos visto en el capítulo 6. *Proclamaron* programas muy ambiciosos de regeneración social dirigida por el Estado y lograron un gran apoyo político. Como los americanos, sabían previamente lo que debía ser un Estado burocratizado, porque se inspiraban en los modelos cameralistas de administración mecánica (Bosher, 1970: 296 y 297). Mientras duró el fervor revolucionario fueron capaces de limpiar el Estado aboliendo la propiedad de los empleos y el particularismo de las administraciones regionales, y sustituyéndolos por los salarios y los *départements*, lo cual no carece de importancia. Como ha destacado Tilly, nivelaron las ciudades francesas, que dejaron de ser poblaciones burguesas y comerciales subordinadas a la administración del antiguo régimen. En segundo lugar, centralizaron la representación política, de forma que las facciones dominantes de la asamblea y los dos grandes comités legislaron para el conjunto de Francia. No cabe duda de que con tales poderes, muy superiores a la capacidad del antiguo régimen, modernizaron y burocratizaron la administración. Aspiraban al gobierno directo, y en ciertos aspectos lo consiguieron.

Pero todo ello no aumenta ni el tamaño ni la finalidad del conjunto de la administración. Skocpol (1979: 199) se sirve de las cifras de la Iglesia en cuanto a los funcionarios asalariados para analizar su crecimiento. En cambio, como demuestran los cuadros 11.7 y 4.3 de los apéndices, el número *total* de cargos no alcanzó el nivel del anti-

guo régimen hasta después de 1850. El personal de los ministerios más importantes aumentó con rapidez a partir de 1791, y la Convención y el Comité de Salvación Pública introdujeron las escalas salariales y la racionalización de los empleos. El fisco, con toda su importancia, quedó integrado conforme a la función y la jerarquía (Bosher, 1970, lo llama simplemente «burocracia» ya en 1794), pero sus criterios burocráticos se mezclaban aún con los de los partidos, ya que cuando el comité reguló las cualificaciones, aquéllos insistieron en someterlas a la presentación de un *curriculum vitae* que demostrara la lealtad revolucionaria.

Más aún, la *materialización* de un Estado revolucionario, fuera de la esfera militar o del Terror errático, resultó mínima. Margadant (1988) ha demostrado que su capacidad para recaudar impuestos resultaba patética. ¿Puede llamarse burocrática una administración que sólo lograba recaudar el 10 por 100 de los impuestos que ella misma establecía? Como vimos en el capítulo 6, el Estado revolucionario se vio obligado —en el momento culminante de su supuesta centralización, bajo el Comité de Salvación Pública— a depender políticamente de los *députés en mission* para dirigir bandas armadas, y a permitirles la mayor discreción táctica para recaudar lo necesario para su subsistencia. Lo vemos con toda claridad en las memorias de madame de la Tour du Pin (1985: 202), donde, después de describir sus redes contrarrevolucionarias, extendidas por toda Francia, subraya la extrañeza que le produce el hecho de que no les intercepten la correspondencia. Sus hombres vivían clandestinamente en sótanos y casas de labor abandonadas; durante la noche se deslizaban hasta los buzones de los pueblos y al día siguiente el sistema postal revolucionario —heredado del antiguo régimen— hacía el resto. La mano izquierda del Terror no sabía lo que estaba haciendo su mano derecha con el servicio postal.

Algunos de los poderes estatales que subraya Skocpol sólo se hicieron reales cuando, bajo el Directorio y Bonaparte, se alcanzó el compromiso político y la consolidación. Ministros, prefectos y funcionarios asalariados gobernaron entonces Francia conforme a las normas impersonales del código civil napoleónico (Richardson, 1966; Church, 1981). Woolf (1984: 168) afirma que la Francia de Napoleón se puso a la cabeza de las estadísticas oficiales (aunque yo dudo de que los datos aventajaran a los que ya se habían reunido en Austria). No encontramos aún en Francia los rasgos netamente burocráticos: cualificación impersonal, exámenes y mayor integración en los distintos ministerios. Los ministros sólo informaban al Consejo de Estado,

un cuerpo formado por notables leales sin responsabilidad ministerial, o al propio Bonaparte, que siempre se acogió a la estrategia del «divide y vencerás» precisamente para evitar el desarrollo de una burocracia unificada, recurriendo, por ejemplo, a los convenios con financieros privados —un vestigio del antiguo régimen— en materia de recaudación de impuestos (Bosher, 1970: 315 a 317). La fragmentación ministerial sobrevivió a Bonaparte, y durante todo el siglo XIX, afirma Charle (1980: 14), Francia no dispuso de una administración, sino de una pluralidad de ministerios, donde los ministros impusieron sus criterios en materia de contratación, ascensos y ceses hasta después de la revolución de 1848.

Pero la práctica más generalizada de la administración francesa fue sin duda su inserción en los partidos políticos, por la que que mantuvo durante todo el siglo la división entre *employés* y *fonctionnaires* (Charle, 1980). Los *employés* eran los descendientes de los *commissaires* del antiguo régimen, «burócratas» en el sentido peyorativo que tiene hoy la palabra, funcionarios de los niveles medios y bajos que cumplían las normas impersonales impuestas desde arriba por los *fonctionnaires,* descendientes a su vez de aquellos *officiers* del antiguo régimen emparentados (metafóricamente) con los ciudadanos-funcionarios de la revolución. Los *fonctionnaires* ocupaban los altos cargos y se organizaban en *corps*. Como a la oficialidad del ejército, se les suponía algún tipo de compromiso con los ideales comunes. Bonaparte quiso asegurarse de ello reclutando sólo a jóvenes de las familias de los notables imperiales, que entraban en la administración para realizar un aprendizaje. Aunque sus sucesores también beneficiaron a los leales, proporcionaron, por lo general, una educación generalista de elite en las *grandes écoles*, y desde 1872 en la academia que aún se conoce como «*Sciences Po*» (Osborne, 1983). Los *corps* colegiales incorporaron la racionalidad sustantiva de los partidos, reduciendo así la burocratización formal.

Puesto que ninguno de los regímenes que conoció Francia durante el siglo XIX duró más de dos décadas, los partidos administrativos cambiaron continuamente los altos cargos de ministerios, prefecturas, judicatura y ejército, prácticando, como en las elecciones americanas, el sistema de repartos. Los notables monárquicos sustituyeron a los *fonctionnaires-députés* (Julien-Laferrière, 1970); sin embargo, el republicanismo conservó su solidez en los gobiernos locales, lo que produjo varios conflictos a mediados de siglo entre los ministerios centrales y los municipios, en los que mediaban a me-

nudo los prefectos (Ashford, 1984: 49 a 68). Pero la tendencia republicana del siglo acabó por producir una burocratización paulatina, pues a medida que se institucionalizaban, los regímenes republicanos fomentaban la meritocracia y separaban la administración de la política. El sistema de exámenes eliminatorios, que a partir de 1848 se sumó a las prácticas informales de aprendizaje en el puesto, tuvo que resistir aún una reacción final bajo Luis Bonaparte (Thuillier, 1976: 105 a 115; 1980: 334 a 362. Finalmente, en la década de 1880 los republicanos lograron dominar la administración civil, que si bien se regía aún por un *corps* colegiado de partidos, era casi predominantemente burocrática.

Así pues, la Revolución Francesa, como la americana, prometió más burocratización de la que fue capaz de crear, y por las mismas razones, esto es, porque no se pudo separar a los partidos políticos de la administración. Ni las clases ni la política nacional se encontraba aún bien asentadas. Las democracias de partidos eran polimorfas y cristalizaron en formas político-administrativas cambiantes y entrelazadas. Pero con la complejidad de estos desarrollos administrativos ocurre como con la botella medio llena o medio vacía. Skocpol y Tilly subrayan la burocratización y el poder del Estado; yo destaco sus limitaciones. La comparación podría resultar una medida más acertada. ¿Alcanzó Francia —mediante la revolución, el directorio o Bonaparte— un grado de burocratización mayor que el de otros países? Sin embargo, la cuestión no puede plantearse así, porque, como apunta Tilly, la revolución y sus consiguientes guerras influyeron también en la burocratización de otros Estados. Éstos no constituyeron casos únicos susceptibles de comparación, sino unidades interdependientes de la comunidad geopolítica, económica e ideológica europea. De momento, continuaré examinando los casos aislados, para pasar después al asunto de la interdependencia.

Como vimos en el capítulo 4, las luchas británicas por la representación política estaban vinculadas a la reforma económica administrativa. A medida que el militarismo geopolítico aumentaba las necesidades fiscales, éstas hacían prosperar la reforma económica, que, a su vez, arrastraba la reforma del sufragio. Los contribuyentes ricos, que financiaban la guerra, concluyeron que la «antigua corrupción» era demasiado cara. El antiguo régimen se reformó a sí mismo, ayudado por la presión de clase que llegaba desde abajo. Los comisarios parlamentarios declararon la guerra a la corrupción desde comienzos de la década de 1780; el Parlamento legisló desde finales de la década

de 1780; y los ministros reformistas comenzaron a reducirla gradualmente en la de 1790. Las ganancias procedentes de salarios de los *veinte funcionarios más altos* del Ministerio del Interior pasaron del 56 por 100 en 1784 al 95 por 100 en 1796 (Nelson, 1969: 174 y 175). En 1832 los salarios constituían ya un hecho normal y había desaparecido prácticamente la propiedad de los empleos. La abolición de las sinecuras permitió una reorganización jerárquica y funcional de casi todos los departamentos. La legislación prohibía el reparto y excluía de los cargos a los miembros del Parlamento. A raíz de la guerra, comenzó a reunirse lo que constituía ya prácticamente un gobierno presidido por un primer ministro responsable ante el Parlamento. Los ministros dedicaron más tiempo al gobierno y al Parlamento, dejando sus departamentos en manos de secretarios permanentes asalariados. Una ley de 1787 integró las finanzas de los ministerios que antes se cubrían mediante fondos reservados independientes. Para 1828 todos los ingresos y la práctica totalidad de los gastos se integraban o se extraían de un mismo fondo y el Parlamento recibía regularmente las cuentas (aunque los desembolsos continuaban siendo políticos, ya que no los regulaba el Tesoro). En 1832 la administración se había transformado (Cohen, 1941; Finer, 1952; Parris, 1969).

Pero en Gran Bretaña la normalización de la competencia para la obtención del empleo o para la promoción no se introdujo hasta mediados de siglo, e incluso entonces la reforma fue insignificante, pese a las reivindicaciones en ese sentido de los reformistas utilitaristas y radicales. Cabía esperar que el antiguo régimen conservara parte de su patronazgo, por mucho que quisiera reformarse a sí mismo, al fin y al cabo el estímulo sólo dio para recortar la administración y ahorrar dinero. El cuadro 11.7 demuestra el éxito obtenido. Los servidores del Estado aumentaron menos que la población de 1797 a 1830, y los comisarios informaron al Parlamento de que la «antigua corrupción» había terminado y no se podían efectuar muchos más recortes. Al ceder el movimiento por la reforma, el proceso de burocratización se estancó en la segunda mitad del siglo. El compromiso estaba salvado.

Durante esta segunda fase, la burocratización británica respondió a dos causas. En primer lugar, las tradicionales presiones fiscales y el militarismo geopolítico obligaron al antiguo régimen a subir los impuestos, recortar los gastos, racionalizar, centralizar y desistir de sus principios ideológicos. En segundo lugar, las clases burguesas en ascenso ejercieron una presión característicamente capitalista y mo-

derna para conseguir la ciudadanía política y la administración utilitaria. Cada una de las causas reforzó a la otra, ya que el Estado capitalista más avanzado peleaba por tener una vida geopolítica. La solución fue un compromiso entre las clases emergentes y el antiguo régimen más estabilizador que el de Francia y más centralista que el de Estados Unidos. Si sumamos a ello las presiones de la tercera fase (que veremos enseguida) la burocratización llegó más lejos en Gran Bretaña que en otras partes. El motor burocrático había traspasado ahora las costas del continente.

Después de unos inicios prometedores, el dinasticismo prusiano no produjo más que una burocratización limitada durante el siglo XIX. Hacia 1800 las disputas de los partidos la habían fragmentado. Los reformistas, nobles en su mayoría, aunque había entre ellos varios burgueses profesionales, reivindicaron la racionalización administrativa. En el plano local, los obstáculos eran el particularismo de los nobles y el control de la baja nobleza; a un nivel más alto, lo era la corte. Usando de discreción y cautela, sugirieron la formación de asambleas representativas y la apertura de la administración. La guerra estaba a su favor. Cuando Napoleón destruyó al ejército prusiano en Jena y Auerstadt, en 1805-1806, la monarquía intentó la reforma para aumentar la eficacia y evitar las convulsiones sociales, sin enemistarse con su nuevo amo francés. Los reformistas querían asambleas limitadas y una administración única que abarcara desde la cancillería hasta los pueblos más pequeños. Durante un tiempo muy breve llevaron la iniciativa, pero en 1808 se habían ganado la enemistad de los franceses y de gran parte de la aristocracia. En cuanto a la burguesía y la pequeña burguesía, eran demasiado débiles en la atrasada Prusia para ejercer una presión popular significativa. Los modernizadores absolutistas podían hacer poco sin su monarca, y éste los abandonó para aplacar al francés.

Tras la derrota de Napoleón, se alcanzó un compromiso (Mueller, 1984: 126 a 166; Gray, 1986). En el plano local y regional los cambios fueron mínimos porque tanto las instituciones de la Iglesia como las de los *Junkers* sobrevivieron intactas hasta la revolución de 1848. En cuanto a la administración central, se impusieron las cualificaciones académicas y los exámenes y se reformaron las universidades. Los nobles comenzaron a frecuentar la universidad, disminuyó gradualmente el antiguo faccionalismo y se consolidó la integración cultural y nacional de los funcionarios. Los órganos colegiados decayeron en favor de la dirección individualizada. Ministros y cortesanos se senta-

ban juntos en un resucitado Consejo de Estado, donde mandaban los ministros más expertos. Durante el débil gobierno de Federico Guillermo III (1797-1840) los *Beamten* acumularon todo el poder, pero no se trataba tanto de una burocracia racionalizada como de la «aristocracia de servicio, en parte noble y en parte burguesa» de Hintze, que «feudalizó» a sus miembros burgueses (Muncie, 1944) e «ilustró» a la nobleza prusiana. Pero con la revitalización del absolutismo, volvieron las costumbres particularistas, renacieron los «gabinetes» y el *Immediatstellung* o derecho del comandante militar a ver a solas al rey, se extendió a los funcionarios civiles. La burocracia permaneció subordinada al criterio del monarca para elegir a los hombres que le inspiraban confianza, ya fuera ministros profesionales o compinches de la nobleza. Los conflictos entre partidos acabaron por reducir la unidad burocrática, como se comprobó en 1848, cuando maestros y funcionarios civiles participaron en los dos bandos de la abortada revolución (Gillis, 1971).

El Estado continuó siendo un foco de intrigas formado por partidos insertos en la sociedad civil. Hasta que no se abordó de nuevo resueltamente el asunto de la representación nacional y de clase, contando con la burguesía, la pequeña burguesía y los católicos, a finales del siglo XIX, no se creó el Estado moderno dentro del semiautoritaritarismo que describo en los capítulos 9 y 21. Aunque Prusia había sido pionera, durante la mayor parte del siglo el Estado como «burocracia universal» fue más ideología hegeliana que realidad alemana.

Austria, el primer motor burocrático, fracasó antes y de modo más completo. La administración dinástica, menos inserta en las redes de poder de la nobleza provincial, retrocedió espantada ante la Revolución Francesa y los movimientos por la representatividad. En la década de 1790, los sucesores de José II optaron por la reacción; el mayor grado de burocratización se produjo entonces en la administración de la policía (Wangerman, 1969; Axtmann, 1991). Vencidos, aunque no humillados, por Napoleón, los austriacos limitaron la reforma al ejército y buscaron la ayuda de la iglesia católica para movilizar al pueblo contra los franceses. Para 1815 el régimen austriaco se había convertido en el martillo de la reforma en toda Europa. En los capítulos 7 y 10 hemos visto a este Estado dinástico y multirregional luchando contra los movimientos fragmentadores, pero en 1867 también el gobierno real quedó dividido en dos partes.

Se trató de un periodo de transición desde el predominio militar hasta la constitución de un Estado diamorfo, militar y civil. El motor

de la burocracia ya no eran las monarquías o el militarismo geopolítico, sino la ciudadanía nacional y representativa, pues aunque el militarismo continuó planteando la necesidad de una burocracia eficaz, los dinasticismos habían alcanzado su límite burocrático hacia 1810, bloqueados por la contradicción entre el despotismo monárquico y la centralización burocrática y por la debilidad de las presiones de clase que reclamaban la ciudadanía. En contraste con lo que acabamos de ver, Francia y los regímenes «anglosajones», que contaban con sociedades formadas por clases extensivas y políticas, fueron capaces de institucionalizar el compromiso entre el antiguo régimen, la burguesía y la pequeña burguesía que permitió ampliar la democracia de partidos y, por tanto, la responsabilidad burocrática de la administración. Pero ni siquiera allí hubo una total armonía entre la burocracia y la democracia de partidos, donde estos últimos chocaban frecuentemente con la burocracia de la elite tecnocrática. Los Estados continuaron siendo polimorfos. Aunque la mayoría de los partidos se oponían al antiguo régimen, no temían menos a la eficacia del Estado. ¿Por qué dotar al Estado de unas infraestructuras más eficaces, cohesionadas y burocráticas? ¿No acabarían por estimular la estrategia despótica de la elite estatal o por ayudar a los partidos rivales? Los partidos estadounidenses cambiaron de estrategia para asegurarse un Estado más inserto en la sociedad y menos burocratizado. Los británicos optaron por el compromiso. En cuanto a los franceses se comprometieron una vez que la república se encontró a salvo.

¿Qué decir, pues, de las afirmaciones de Kafka, Skocpol y Tilly sobre la tendencia de la revolución a extender el poder del Estado? Acudiré en su ayuda. La revolución permitió a Francia superar la burocratización austriaca y prusiana. Sin ella, Francia podría haber tenido un Estado más atrasado que el de Austria en ese momento. El Estado francés se transformó, quizás por su retraso y su languidez anterior, pero la modernización fue inferior a la estadounidense y menos extensa que la británica. El ímpetu revolucionario americano puede discutirse (aunque Skocpol lo ha negado en otro lugar), pero en Gran Bretaña no hubo ninguna revolución, y Austria y Prusia no fracasaron en el proceso burocratizador porque carecieran de revoluciones. Mi conclusión es que la modernización del Estado no las necesitó, y que éstas no supusieron un impulso único para el poder estatal (como argumentan Tilly y Skocpol). Pero en esta fase (aunque no en la primera) el movimiento hacia la democracia de partidos aumentó la burocratización del Estado, unas veces a través de la reforma y otras a

través de la revolución. Al contrario que en el caso de la revolución bolchevique, la francesa no tuvo en ello su lado negativo y dictatorial, sino el positivo y democrático. Las democracias de partidos creyeron en la burocracia porque estaban convencidas de poder controlarla. Los regímenes que fueron capaces de dar una salida estable a las disputas nacionales y representativas confiaron más en ella.

A estas comparaciones añado ahora otra sobre la interdependencia, un fenómeno que aumentó, en efecto, la importancia militar de la Revolución Francesa, lo que encaja a la perfección con los modelos teóricos más generales de Skocpol y Tilly, donde se resalta el papel del militarismo en el desarrollo social. Las guerras continuaron modernizando los Estados pero, esta vez, el actor principal, el ejército francés, era distinto a sus predecesores. Su carácter politizado y popular resultaba amenazante para los antiguos regímenes. Los efectos no fueron los mismos en Gran Bretaña que en la Europa continental. Aquélla experimentó desde el punto de vista militar la guerra semitotal que sufrieron Austria y Prusia a mediados del siglo XIX, y que produjo la modernización de los antiguos regímenes. No obstante, resulta más difícil examinar los efectos políticos sobre Gran Bretaña, aunque en el capítulo 4 he sostenido que las guerras revolucionarias y francesas adelantaron la unión del antiguo régimen con la burguesía, y que este hecho permitió institucionalizar un gobierno representativo limitado (impidiendo al mismo tiempo la aparición de otro más popular y democrático). Y a su vez esto facilitó la modernización burocrática paulatina. Así pues, cabe la posibilidad de que la Revolución Francesa acelerara la modernización del Estado británico, y que, sin embargo, la retrasara en la Europa central, donde suscitó más la modernización de los ejércitos que la de los Estados e hizo retroceder la representación política y, con ella, la burocracia corrompiendo a los reformistas moderados y debilitando a las burguesías y pequeñas burguesías con el jacobinismo. Los regímenes volvieron a la reacción. A pesar de Kafka, Skocpol y Tilly, la Revolución Francesa dejó una herencia decididamente mixta respecto al desarrollo del Estado.

Tercera fase: las infraestructuras del Estado y el capitalismo industrial, 1850-1914

Hemos visto en el capítulo 11 que todos los Estados de finales del siglo XIX aumentaron enormemente su personal y sus esferas de ac-

ción civiles, sobre todo, en los niveles medios y bajos y en los gobiernos locales y regionales. La burocratización comenzó a desarrollarse en la década de 1880 intentando armonizar el caos. Hacia 1910 Gran Bretaña y Francia habían alcanzado ya el grado más alto de burocracia de su historia; los Estados Unidos comenzaban las reformas que culminarían en la década de 1920; y las dos monarquías se habían burocratizado hasta donde les permitían sus posibilidades. Esta fase respondió a dos causas relacionadas entre sí. La institucionalización de la ciudadanía (en distintos grados) y la industrialización capitalista fomentaron los poderes infraestructurales del Estado, la integración económica nacional y la incorporación del modelo de la burocracia de los negocios. Ambos fenómenos tendieron a reducir (sin eliminarlo) el conflicto planteado por el papel del Estado y la utilidad de la eficacia administrativa. La burocracia creció, pues, con menos oposición directa.

Con todo, los aspirantes a burócratas se enfrentaban a una tarea ingente. ¿Podría permanecer leal a la jerarquía un número tan grande de funcionarios? ¿Representarían, por el contrario, sus propios intereses o los de una clase, religión o comunidad lingüística determinada? ¿Decaería la coordinación central, dado que la expansión se produjo sobre todo en el plano de los gobiernos locales? Y puesto que ningún Estado era una democracia plena de partidos, ¿quedaría la política en manos de las redes particularistas formadas por las instituciones académicas, los tecnócratas o los grupos de presión por la reforma, segando las instituciones formales del Estado?

La ciudadanía implicaba tanto la cuestión representativa como la nacional, con variaciones en los distintos países. En 1850 los Estados Unidos habían institucionalizado una democracia bipartidista para los hombres blancos, precisamente en la fase más amarga de su lucha nacional. En un momento en que arreciaban las disputas sobre las relaciones entre el poder federal y los estados, la administración no podía separarse de la política, porque la coordinación de los distintos niveles de gobierno dependía tanto de la lealtad de los partidos como de la burocracia. Durante el gobierno de Lincoln, el sistema de repartos del partido ganador alcanzó su apogeo. El presidente sustituyó al 88 por 100 de los funcionarios sujetos a su autoridad (Fish, 1920: 170). La cuestión nacional se decidió primero por la fuerza, en la guerra civil; luego, se llegó al compromiso de 1877. Este hecho redujo la necesidad política de una administración federal combativa, aunque los partidos volvieron a mutilar el Estado y los niveles locales a corto

plazo. Gran Bretaña y Francia, por su parte, experimentaron lo contrario: una mayor unanimidad en el apoyo al Estado-nación, y mucho menor respecto a la representación (de clase). Pero después de las *Reform Acts* de 1867 y 1884, en Gran Bretaña, y de la consolidación de la República en Francia, durante al década de 1880, los obstáculos habían desaparecido. Las tres democracias de partidos habían conseguido localizar con mayor precisión la soberanía y someterla a un proceso parcial de burocratización.

En las dos monarquías semiautoritarias la ciudadanía fue un hecho restringido. En Prusia, se afrontaron a mediados de siglo las cuestiones nacional y representativa. Hacia 1880, como vimos en el capítulo 9, ya estaban semiinstitucionalizadas. En Austria la combinación de ambas amenazó continuamente con politizar la administración, pero, a fin de cuentas, las nacionalidades disidentes se atacaron más entre sí que a los Habsburgo (véase el capítulo 10), y se produjo un compromiso de facto que permitió cierta autonomía a la administración central de los Habsburgo, pese a la persistencia del conflicto por la ciudadanía política y la cuestión de la lengua en el ámbito administrativo.

El crecimiento infraestructural del Estado reforzó en alguna medida esta deriva más consensuada en todos los países, compensando el retraso de las monarquías. No existieron controversias respecto al correo, el telégrafo, los canales y el ferrocarril, aunque sí sobre las escuelas, porque allí se reproducía el desencuentro entre un Estado central, relativamente secular, y las iglesias locales y regionales (a lo que debemos sumar en Austria la cuestión de la lengua). Pero poco antes de 1900 se resolvieron a favor del Estado central. Las monarquías semiautoritarias emplearon las infraestructuras estatales para patrocinar un desarrollo tardío, para satisfacción general de los principales actores de poder (véase el capítulo 14). Las clases y los grupos de interés locales y regionales apoyaron en general la eficacia burocrática que expandía las ramas técnicas y el nivel más bajo de la administración (véase el capítulo 11). Una vez que se adoptaron en algunos departamentos los exámenes y los salarios, la expansión se produjo con relativa facilidad.

Desde el gran progreso del ferrocarril y durante la Segunda Revolución Industrial, tanto el Estado como la gran empresa capitalista convergieron en las economías nacionales y la organización burocrática. La economía nacional (véase el capítulo 17 para el caso británico) redujo las diferencias locales y regionales y amplió la «naturali-

zación» de la población. El esquema organizativo de la corporación, su carácter multidivisional y la estandarización del catálogo de ventas se parecían a las estadísticas estatales, la división del personal y el control de la hacienda, todas ellas respuestas burocráticas para controlar organizaciones cada vez mayores, cuyas funciones y esferas de acción geográficas habían experimentado un enorme crecimiento (Yeager, 1980). La institucionalización de las luchas por la nación y la representatividad, el consenso sobre las funciones del Estado y los modelos del capitalismo industrial contribuyeron a expandir la soberanía nacional y la burocratización.

En esta fase, la burocratización influyó más si cabe sobre el gobierno local y regional: los municipios y condados británicos, los estados y gobiernos locales americanos, los *Länder* y los *Gemeinde* austriacos y alemanes, y los *départements* y *communes* franceses. La mayoría quedó bajo el control de los propietarios locales de cargos y de los notables honoríficos, pero las funciones infraestructurales y asistenciales del Estado generaron una administración local estandarizada incompatible con los notables no remunerados. Se desarrolló también la división del trabajo en las administraciones centrales, a raíz del crecimiento de la participación de los ingresos, salvo en el gobierno federal de los Estados Unidos.

La burocratización fue más débil en las zonas más altas de la política central, sobre todo en los casos austriaco y prusiano, donde la monarquía semiautoritaria prolongó las tácticas partidistas del «divide y vencerás» y bloqueó los gabinetes gubernamentales integrados. Los grupos políticos de presión proliferaron debido a que los ministros, la corte y los parlamentos conservaron su autonomía política. Aparecieron entonces tanto en el *Reich* como en los servicios civiles prusianos importantes asociaciones por la reforma académica y tecnocrática, que, en algunos casos, recibieron el calificativo de «socialistas de la cátedra» (Rosenhaft y Lee, 1990). El freno a la fragmentación dependía tanto de la solidaridad social de estos *Bildungsbeamten* como de la burocracia. Hacia 1900 los grupos nacionalistas más agresivos habían «colonizado» parte de la administración burocrática (véase el capítulo 16). La primera fragmentación se produjo en la política exterior, con resultados desastrosos para el mundo (que comprobaremos en el capítulo 21).

Pero ni siquiera en las democracias de partidos se produjo una burocratización completa. El Estado británico era ya ostensiblemente meritocrático. Las reformas, iniciadas en 1850 con la intención de au-

mentar la eficacia ministerial, se ajustaron a menudo al modelo colonial, sin consultar con el Parlamento, donde aún contaba el patronazgo. Aumentó entonces la práctica de las auditorías internas; la contratación y la promoción por los méritos se institucionalizó en 1853, se amplió en 1879 y acabó por predominar en 1885 (Cohen, 1941). Junto con las reformas meritocráticas en los internados privados, en Oxford, Cambridge y la Iglesia, esto abolió el patronazgo en materia de contratación. Aunque los «grados intelectuales» más altos del servicio civil se alcanzaban ya por méritos, aún estaban restringidos, ya que la mayoría procedían de las escuelas privadas y de letras y de las dos universidades más antiguas. Al contrario que en Prusia, estas instituciones académicas se encontraban ya en manos de la baja nobleza y de las familias de profesionales cuando llegó la reforma. Esto confirma la composición de clase y la solidaridad nacional de los planos más altos de servicio civil (Mueller, 1984; 108 a 125, 191 a 223). De 1904 a 1914, el 80 por 100 habían frecuentado las aulas de Oxford y Cambridge.

La promoción a partir de los «grados mecánicos» era poco frecuente; de 1902 a 1911, la posibilidad fue del 0,12 por 100 anual, y se concentró en los departamentos menos prestigiosos, tales como las aduanas. No hubo promociones en la Oficina Colonial ni en la de la Guerra (Kelsall, 1955: 40 y 41, 139, 162 y 163), cuyos hombres actuaban por una ideología racional y desinteresada del servicio público. El Estado había dejado de ser un instrumento de la autoridad patriarcal al que se accedía a través de un patronazgo «corrupto»; por el contrario, sus «servidores» se declaraban individuos neutrales, comprometidos con los intereses de la sociedad civil nacional. La clase universal de burócratas que gustaba a Hegel, y que siempre había constituido un concepto curioso aplicado únicamente a su tiempo y a su país, comenzaba a constituir una presencia posible, aunque aún ideológica, a finales del siglo XIX en una administración como la británica, confinada a la clase dominante.

Como hemos visto en el capítulo 11, el gobierno americano fue, durante más de un siglo y con la única salvedad de la guerra civil, pequeño, barato y fácilmente financiable. El rápido crecimiento que tuvo lugar a finales del siglo XIX extendió la corrupción y la práctica del sistema de reparto, especialmente en los gobiernos locales y regionales, que, a falta de control burocrático, cumplían sus funciones recurriendo al soborno (Keller, 1977: 245). Pero también aquí, aunque mucho después que en Gran Bretaña, surgió la demanda de efica-

cia y ahorro (Skowronek, 1982). La corporación, invento americano por excelencia, disponía de modelos de eficacia burocrática al alcance de la mano (Yeager, 1980). En 1882, la *Pendleton Act* «clasificó» varios trabajos de la administración federal para protegerlos de las purgas políticas, mediante la selección por examen eliminatorio. Los puestos clasificados pasaron del $10^1/_2$ por 100 de 1884 al 29 por 100 de 1895, para saltar al 45 por 100 al año siguiente y al 64 por 100 en 1909. Después de la Primera Guerra Mundial, alcanzaron el 80 por 100, donde aún permanecen hoy en día.

En un principio, los motivos, más allá de la protección, eran bastante variados, ya que al salir del gobierno los partidos buscaban situar a sus leales dotándoles del estatus de empleados civiles (Keller, 1977: 313). Pero, siguiendo el modelo empresarial, el funcionariado se adhirió poco a poco a las ciencias de la «administración del personal» (ordenamiento de los cargos, carreras, salarios, ascensos, pensiones e informes sobre el rendimiento) y de la «gerencia administrativa» (homologación de las cuentas, archivos, aprovisionamiento y procedimientos de contratación), que se impusieron en los estados del norte y en los gobiernos locales. La comisión Taft de 1913 recomendó, a partir de la experiencia de Chicago, la elaboración de un único presupuesto y la creación de los departamentos de personal para homologar las cuentas federales, los criterios relativos a los exámenes y los ascensos, así como la clasificación de los puestos y el sistema de salarios, el registro del rendimiento personal y las normas disciplinarias para todos los organismos federales, aunque muchas de estas cosas, como la consolidación de un único presupuesto federal, no se impusieron hasta la década de 1920, acuciadas por el caos administrativo que produjo el esfuerzo de guerra en Estados Unidos (van Riper, 1958: 191 a 223).

Gran parte del proceso burocratizador se realizó gracias a los progresistas, que buscaban en las reformas administrativas una mayor «eficacia nacional», desde el punto de vista ideológico una coalición entre los empleados de carrera y los profesionales de las clases medias en auge (Wiebe, 1967) y el liberalismo corporativo (Weinstein, 1968; Shefter, 1978: 230 a 237). La ideología de un ejecutivo nacional, neutral y eficaz, tenía más de un siglo, pero ahora se imponía al confederalismo y al patronazgo de los partidos gracias al apoyo de poderosos actores de clase de la sociedad civil nacional. Resultó decisiva la intervención de los presidentes Theodore Roosevelt y Taft, que contaban con una experiencia previa en la reforma administrativa. El patronazgo no desa-

pareció —de hecho, aún existe— en la cúspide de los tres niveles de gobierno, puesto que los nombramientos políticos se realizaron siempre combinando la cualificación técnica con la lealtad al partido.

Este dualismo caracterizó también a la cúspide del gobierno central de Francia y Gran Bretaña, donde, al contrario que en Estados Unidos, el nivel local y regional estaba subordinado al gobierno central. La selección de los altos funcionarios británicos se realizaba casi por completo en las escuelas públicas de elite (es decir, privadas) y en Oxford y Cambridge, entre las clases medias altas leales al *establishment* nacional. La selección francesa se llevó a cabo en *les grandes écoles* y la de «*Sciences Po*», donde se daba una buena educación acompañada de una alta cualificación técnica, pero donde también se inculcaba la lealtad a aquella combinación de capitalismo progresista y republicanismo centralizado que ha caracterizado a los gobiernos franceses del siglo XX.

La cumbre de la administración quedó, pues, inserta en la clase y los partidos nacionales leales durante todo el siglo XX. Los regímenes lucharon denodadamente tanto contra el confederalismo como contra la burocracia plena al estilo weberiano. La separación de la administración y la política se completó durante este periodo en los niveles medios y bajos del nivel central, y en casi todos los países en el plano local y regional, pero no en la cumbre del Estado-nación. La noción común de «burócrata» como un escribiente de bajo nivel encerraba alguna verdad. La cúspide fue tan política como burocrática, pero la interiorización de la ideología del servicio público desinteresado escondía en parte el interés político partidista.

Conclusión

Durante el largo siglo XIX, los cinco componentes burocráticos que he destacado aquí se desarrollaron de la siguiente forma:

1. Hacia 1914 casi todos los funcionarios centrales y la mayor parte de los adscritos a los gobiernos locales y regionales recibían un salario. La compra o la herencia de cargos había desaparecido por completo. Sólo sobrevivieron algunos de carácter honorífico a tiempo parcial en los niveles locales.
2. La selección y los ascensos mediantes pruebas impersonales de competencia se desarrolló igualmente, aunque con mayor lentitud,

hasta el punto de que en algunos países aún era un sistema incompleto en 1914.

3. La organización dentro de los departamentos varió considerablemente al principio, pero en la década de 1880 todos se asemejaban ya al modelo burocrático de la división por funciones bajo la autoridad de una jerarquía centralizada.

4. La integración de todos los departamentos en una única administración central y nacional se cumplió primero en Estados Unidos, aunque después sufrió un franco retroceso. Más tarde llegó a Francia y Gran Bretaña, y nunca se implantó por completo en Alemania ni en Austria durante el periodo que estamos analizando.

5. La separación de los partidos políticos y la administración se produjo más tarde, pero fue incompleta en la cúspide del gobierno central en todos los países, y más débil aún en Alemania y Austria.

Así pues, durante el periodo se produjo algún grado de burocratización en los cinco niveles y en todos los países. En 1760 ningún Estado era burocrático; en 1914 la burocratización nacional y el aislamiento de la administración se habían institucionalizado aumentando el poder infraestructural del Estado y, en menor medida, la cohesión interna de sus administraciones civiles. La del Estado central se hizo unitaria en dos sistemas distintos: uno semiautoritario —formado por burócratas que cumplían las decisiones de un régimen monárquico— y otro de democracia de partidos, compuesto por burócratas que cumplían la legislación del Parlamento nacional.

En todas partes la burocratización se vio precedida de las correspondientes ideologías: cameralismo, Ilustración, utilitarismo, pensamiento progresista y otros radicalismos propios de la clase media, nacidos entre los funcionarios de alto nivel del antiguo régimen y las clases medias profesionales. Todos clamaban por lo que ellos llamaron «administración racional» y nosotros denominamos burocracia. Sorprende la conciencia del proceso burocratizador y la claridad de su formulación por los ideólogos occidentales antes de su implantación, cuyo éxito se debió en parte al carácter funcional de la burocracia. Se trataba de una respuesta eficaz al enorme crecimiento de la administración, a su diversidad y a su nuevo alcance geográfico. La capacidad de los ideólogos para comunicarse internacionalmente permitió a los actores poder aprender las técnicas burocráticas de otros países antes de llevarlas a la práctica en el propio (aunque no he inda-

gado sistemáticamente este punto). El moderno Estado burocrático fue primero una idea que, inexorablemente, se hizo realidad.

Pero un examen profundo de estos Estados modificaría las apariencias. Visto en perspectiva, el auge de la administración del Estado moderno no fue ni evolutivo ni unidimensional. Las causas estructurales variaron de un periodo a otro. Las ideologías habrían fracasado sin ellas, porque influyeron también en los cambios ideológicos (cameralismo, utilitarismo, radicalismo, etc.). Cada uno de los cinco países que estudiamos aquí se burocratizó en distintos periodos, y en todos hubo que superar distintas barreras. Por mi parte, distingo tres fases del proceso, la dominada por (1) las cristalizaciones monárquica y militarista, (2) por las cristalizaciones representativa y nacional, y (3) por la cristalización capitalista industrial. Y en la base de todo ello, la transformación del Estado central moderno desde la primacía militar al Estado diamorfo, en parte militar y en parte civil.

La administración civil constituyó también la vía principal de penetración de las elites estatales en la sociedad. En 1760 era también la forma más importante de penetración de los partidos en los Estados absolutistas y puede que incluso en las democracias de partidos (junto con las asambleas parlamentarias). Ningún Estado del siglo XVIII contó con infraestructuras capaces de imponer su despotismo formal a la sociedad, porque «su» administración civil estaba bloqueada por los derechos de propiedad de las iglesias y las clases dominantes. Después de la Revolución Militar, se desbloquearon las administraciones militares y quedaron sometidas en mayor medida al control del Estado (aunque en el capítulo 11 tuvimos ocasión de comprobar que éste perdió el control sobre una casta militar parcialmente autónoma).

A raíz de estos controles militares impuestos por la guerra, los reyes dinásticos acometieron la ofensiva burocrática. No obstante, coartaba sus posibilidades la estrategia segmental del «divide y vencerás» y la dependencia de los partidos del antiguo régimen. Durante la segunda fase, la de transición, la presión popular de los movimientos ciudadanos (basados sobre todo en la clase) y de la guerra dieron la delantera a los regímenes revolucionarios y a las democracias de partidos, que barrieron la «corrupción» de los cargos. Pero esta segunda ofensiva burocrática tuvo también sus limitaciones, porque no se encontró una solución satisfactoria de los problemas nacionales y representativos que habría permitido crear un Estado burocrático, centralizado, cohesivo y eficaz. En la tercera fase, la del capitalismo

industrial, algunos regímenes hicieron progresos en la institucionalización de la democracia de partidos y en la burocratización. Pero ésta, especialmente en los niveles medios y bajos de la administración, se vio ahora respaldada por la existencia de nuevas infraestructuras, ampliamente consensuadas, que favorecían la industrialización nacional (y el rearme nacional del ejército). Sólo los niveles más altos de la administración se resistieron, porque todos los regímenes necesitaban a los leales de los partidos.

Lejos de perder cohesión, las administraciones civiles la ganaban a medida que comenzaban a crecer, si bien con dos restricciones. En primer lugar, la cohesión no era tanto la característica de un Estado autónomo como una relación entre el Estado y la sociedad civil, como he sostenido en el capítulo 3. Pero la eficacia y la cohesión de los Estados dependía tanto de sus propias capacidades burocráticas como de que los funcionarios estuvieran insertos en la cohesión nacional de las clases dominantes y constituyeran su expresión. Las formas de inserción y expresión cambiaron a lo largo del periodo, desde un sistema de cargos particularista y descentralizado a una meritocracia supuestamente universal y predominantemente nacional.

Como observamos en el cuadro 4.2, Gran Bretaña y Prusia fueron en el siglo XVIII ejemplos de Estados que expresaban la existencia de unas sociedades civiles relativamente cohesivas y nacionales, y, por ello, efectivos desde el punto de vista infraestructural. El Estado francés del antiguo régimen fue menos eficaz porque expresaba una incoherencia social a la que, además, él mismo contribuía. En cuanto al austriaco, resultó todo lo eficiente que podía ser un Estado *no inserto* en su sociedad civil, lo cual no es mucho. Más tarde, los tres Estados democráticos crecieron en eficacia al disponer de una representatividad genuina (limitada a los varones) de las clases dominantes, organizadas nacionalmente y típicas de la primera sociedad industrial, en especial los capitalistas y los profesionales de las clases medias. Hasta ahora no hemos encontrado el Estado como actor autónomo que propugna la teoría elitista. Cuando era relativamente cohesivo, se debía en gran parte a que los actores del Estado central permanecían insertos en las redes de poder de la sociedad civil, sobre todo entre las clases nacionales. Cuando los Estados actores presentaban una mayor autonomía respecto a la sociedad civil, encontraban también mayor dificultad en actuar cohesivamente. El capítulo 3 muestra que los Estados autónomos anteriores (es decir, feudales) fueron, por lo general, cohesivos pero débiles. Puede que el poder

político autónomo de la sociedad moderna sea en realidad autonomía de un Estado faccionalizado en partidos, como intentaré demostrar en el capítulo 20.

En segundo lugar, los Estados no fueron totalmente unitarios porque sus redes de poder se extendieron más allá de los departamentos de la administración civil que hemos visto en este capítulo. Sus fuerzas armadas disfrutaron en parte de mayor autonomía y estuvieron más integradas en el antiguo régimen que los administradores civiles. El cuerpo diplomático era el más cercano al antiguo régimen y al poder ejecutivo supremo del Estado. Las cortes y los partidos políticos de las monarquías (de clase, sector, localidad, región o religión) añadieron su faccionalismo característico, su integración en la sociedad y su supuesta capacidad para coordinar tales cosas. En realidad, sólo podemos calificar de moderada la habilidad de los administradores civiles para la coordinación, que, como hemos visto, tuvo su punto débil en la propia conexión de los múltiples departamentos. Cuando se consiguió, fue tanto a través de la burocracia como de las lealtades partidistas —en cuyo caso, se introducía también una fuente de división—; pero otras veces no pudo imponerse, y entonces, las capacidades profesionales y tecnocráticas se aplicaron a finalidades más definidas por una cristalización estatal burocrático-tecnocrática más estrecha que por las necesidades y esferas de acción del «conjunto del Estado». En el capítulo 14 analizaré estas posibilidades.

Bibliografía

Albrow, M. 1970: *Bureaucracy.* Londres: Pall Mall Press.

American State Papers, 1834: *Documents, Legislative and Executive, of the Congress of the U.S., 1809-1823.* Vol. 38, miscelánea, vol. 2, p. 983.

Anderson, E., y P. R. Anderson, 1967: *Political Institutions and Social Change in Continental Europe in the Nineteenth Century.* Berkeley: University of California Press.

Ashford, D. 1982: *British Dogmatism and French Pragmatism. Central-Local Policymaking in the Welfare State.* Londres: Allen & Unwin.

Axtmann, R. 1991: «Geopolitics and Internal Power Structures: The State, Police and Public Order in Austria and Ireland in the Late Eighteenth Century». Tesis doctoral, London School of Economics and Political Science.

Aylmer, G. E. 1979: «From office-holding to civil service: the genesis of modern bureaucracy». *Transactions of the Royal Historical Society,* 30.

Beales, D. 1987: *Joseph II.* Vol. I: *In the Shadow of Maria Theresa, 1740-1780.* Cambridge: Cambridge University Press.
Binney, J. 1958: *British Public Finance and Administration, 1774-92.* Oxford: Clarendon Press.
Blanning, T. 1974: *Reform and Revolution in Mainz, 1743-1803.* Cambridge: Cambridge University Press.
Bonin, H. von, 1966: «Adel und Burgertum in der hoheren Beamtenschaft der Preussischen Monarchie 1794-1806. *Jarhbuch für die Geschichte Mittle- und Ostdeutschlands,* 15.
Bosher, J. F. 1970: *French Finances, 1770-1795.* Cambridge: Cambridge University Press.
Brewer, J. 1989: *The Sinews of Power: War, Money and the English State.* Nueva York: Knopf.
Charle, C. 1980: *Les Hauts Fonctionnaires en France au XIXe siècle.* Gallimard/Julliard.
Church, C. H. 1981: *Revolution and Red Tape: The French Ministerial Bureaucracy, 1770-1850.* Oxford: Clarendon Press.
Cohen, E. W. 1941: *The Growth of the British Civil Service, 1780-1939.* Londres: Allen & Unwin.
Dickson, P. G. M. 1987: *Finance and Government Under Maria Theresa, 1740-1780,* 2 vols. Oxford: Clarendon Press.
Doyle, W. 1984: *The Origins of the French Revolution.* Oxford: Oxford University Press.
Finer, S. E. 1952: «Patronage and the public service: Jeffersonian bureaucracy and the British tradition». *Public Administration,* 30.
Fischer, W., y P. Lundgreen, 1975: «The recruitment and training of administrative and technical personnel». En *The Formation of National States in Western Europe,* ed. C. Tilly, Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Fish, C. R. 1920: *The Civil Service and the Patronage.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Gillis, J. R. 1971: *The Prussian Bureaucracy in Crisis, 1840-1860: Origins of an Administrative Ethos.* Menlo Park, Calif.: Stanford University Press.
Gray, M. 1986: «Prussia in transition: society and politics under the Stein reform ministry of 1808». *Transactions of the American Philosophical Society,* 76, 1.ª parte.
Hall, R. H. 1963-4: «The concept of bureaucracy: an empirical assessment». *American Journal of Sociology,* 69.
Harris, R. D. 1979: *Necker, Reform Statesman of the Ancien Régime.* Berkeley: University of California Press.
Janouch, G. 1953: *Conversations with Kafka.* Londres: Derek Verschoyle.
Johnson, H. C. 1969: «The concept of bureaucracy in Cameralism». *Political Science Quarterly,* 79.

— 1975: *Frederick the Great and His Officials.* New Haven Conn.: Yale University Press.
Julien-Laferrière, F. 1970: *Les députés fonctionnaires sous la monarchie de juillet.* París: PUF.
Keller, M. 1977: *Affairs of State: Public Life in Late Nineteenth Century America.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Kelsall, R. K. 1955: *Higher Civil Servants in Britain, from 1870 to the Present Day.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Koselleck, R. 1967: *Preussen zwischen Reform und Revolution.* Stuttgart: Klett.
Krygier, M. 1979: «State and bureaucracy in Europe: the growth of a concept». En *Bureaucracy: The Career of a Concept,* ed. E. Kamenka y M. Krygier. Londres: Arnold.
Ludtke, A. 1989: *Police and State in Prussia, 1815-1850.* Cambridge: Cambridge University Press.
Macartney, C. A. 1969: *The Habsburg Empire, 1790-1918.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
McDonald, F. 1982: *Alexander Hamilton: A Biography.* Nueva York: Norton.
Margadant, T. W. 1988: «Towns, taxes, and state-formation in the French Revolution». Ponencia presentada en el undécimo Seminario Anual de Irvine sobre Historia Social y Teoría, Department of History, University of California, Davis.
Marion, M. 1927: *Histoire Financière de la France Depuis 1715.* París: Rousseau.
Mousnier, R. 1979: *The Institutions of France Under the Absolute Monarchy, 1598-1789.* Chicago: University of Chicago Press.
Mueller, H.-E. 1984: *Bureaucracy, Education, and Monopoly: Civil Service Reforms in Prussia and England.* Berkeley: University of California Press.
Muncie, L. W. 1944: *The Junker in the Prussian Administration Under William II, 1888-1914.* Providence, R. I.: Brown University Press.
Necker, J. 1784: *De l'Administration des Finances de France,* 3 vols. París: sin publicar.
Nelson, R. R. 1969: *The Home Office, 1782-1801.* Durham, N. C.: Duke University Press.
O'Brien, C. C. 1990: «The decline and fall of the French Revolution». *New York Review of Books,* febrero, 13.
Osborne, T. R. 1983: *A Grande École for the Grands Corps: The Recruitment and Training of the French Administrative Elite in the Nineteenth Century.* Nueva York: Columbia University Press.
Parris, H. 1969: *Constitutional Bureaucracy: The Development of British Central Administration Since the Eighteenth Century.* Londres: Allen & Unwin.

Raeff, M. 1975: «The well ordered police state and the development of modernity in seventeenth- and eighteenth-century Europe: an attempt at a comparative approach». *American Historical Review,* 80.

Richardson, N. J. 1966: *The French Prefectoral Corps, 1814-1830.* Cambridge: Cambridge University Press.

Rosenberg, H. 1958: *Bureaucracy, Aristocracy, and Autocracy.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Rosenhaft, E., y W. R. Lee, 1990: «State and society in modern Germany - *Beamtenstaat, Klassenstaat, Wohlfahrtstaat.* En *The State and Social Change in Germany, 1880-1980,* ed. E. Rosenhaft y W. R. Lee. Nueva York: Berg.

Shefter, M. 1978: «Party, bureaucracy, and political change in the United States». En *Political Parties: Development and Decay.* Nueva York: Sage.

Skocpol, T. 1979: *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China.* Cambridge: Cambridge University Press.

Skowronek, S. 1982: *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920.* Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, G. V. 1967: «Non-capitalist wealth and the origins of the French Revolution». *American Historical Review,* 72.

Thuillier, G. 1976: *La Vie Quotidienne dans les Ministères au XIXième Siècle.* París: Hachette.

— 1980: *Bureaucratie et Bureaucrates en France au XIXième Siècle.* Ginebra: Droz.

Tilly, C. 1990: *Coercion, Capital and European States, AD 990-1990.* Oxford: Blackwell.

Tour du Pin, Madame de la, 1985: *Memoirs.* Londres: Century.

Tribe, K. 1984: «Cameralism and the science of government». *Journal of Modern History,* 56.

— 1988: *Governing Economy: The Reformulation of German Economic Discourse, 1750-1840.* Cambridge: Cambridge University Press.

Van Riper, P. P. 1958: *History of the United States Civil Service.* Nueva York: Row, Peterson.

Wangerman, E. 1969: *From Joseph II to the Jacobin Trials,* 2.ª ed. Londres: Oxford University Press.

Weber, M. 1978: *Economy and Society,* Edición inglesa, 3 vols. Nueva York: Bedminster Press.

Weill, H. 1961: *Frederick the Great and Samuel von Cocceji.* Madison: University of Wisconsin Press.

Weinstein, J. 1968: *The Corporate Ideal in the Liberal State: 1900-1918.* Boston: Beacon Press.

White, L. D. 1951: *The Jeffersonians: A Study in Administrative History, 1801-1829.* Nueva York: Macmillan.

— 1954: *The Jacksonians: A Study in Administrative History, 1829-1860.* Nueva York: Macmillan.
— 1958: *The Republicans: A Study in Administrative History, 1869-1901.* Nueva York: Macmillan.
— 1965: *The Federalists: A Study in Administrative History, 1789-1801,* 2d ed. Nueva York: Free Press.
Wiebe, R. H. 1967: *The Search for Order, 1877-1920.* Nueva York: Hill & Wang.
Woolf, S. J. 1984: «Origins of statistics: France 1789-1815». En *States and Statistics in France,* ed. J. C. Perrot y S. J. Woolf. Chur, Suiza: Harwood.
Yeager, M. A. 1988: «Bureaucracy». En *Encyclopedia of American Economic History.* Vol. III, ed. G. Porter. Nueva York: Scribner's.

Capítulo 14
EL SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO: IV. LA EXPANSIÓN DE LA ESFERA CIVIL

Hemos asistido en el capítulo 11 a dos profundos cambios en el desarrollo estatal. El primero de ellos, que se prolongó desde el siglo XVIII hasta 1815, produjo un enorme aumento del Estado, debido casi por completo al militarismo geopolítico. Los capítulos anteriores han demostrado que este aumento de la politización de la vida social fomentó el desarrollo de las clases y las naciones. Analizaré ahora el segundo cambio de importancia, que comenzó hacia 1870 y afectó no sólo el tamaño sino también a la esfera civil del Estado. Aunque éste conservó su carácter militarista (reduciéndolo) y sus funciones relativas a la justicia y la caridad, desempeñó tres nuevas funciones civiles relacionadas también con el proceso de burocratización, como hemos visto en el capítulo 13:

1. Todos los Estados extendieron a gran escala sus infraestructuras de comunicación material y simbólica: caminos, canales, ferrocarriles, servicios postales, telégrafos y educación de las masas.
2. Algunos adquirieron la propiedad de ciertas infraestructuras materiales e industrias productivas.
3. Poco antes de acabar el periodo, comenzó el proceso de integración de sus funciones caritativas en programas de asistencia más

generales, formas embrionarias de la «ciudadanía social» de Marshall.

Así pues, aumentó su implantación en la vida social y la sociedad se politizó, pese a que había disminuido el esfuerzo fiscal. A partir de ese momento, nadie pudo ignorar el Estado. El enjaulamiento de la clase y la nación se hizo más pacífico, menos dramático, pero nunca desapareció. La vida social se «naturalizó» y los Estados adquirieron mayor poder; pero, ¿en qué sentido? ¿Se trataba de Estados autónomos que «intervenían» con mayor despotismo en la sociedad civil, respaldados ahora por un inmenso poder infraestructural, como propone la teoría gerencialista-elitista del Estado? ¿O fue el crecimiento estatal una mera respuesta funcional e infraestructural al capitalismo industrial? ¿Pudo esto aumentar no sólo el poder infraestructural del Estado, sino también el poder colectivo de la sociedad civil (la teoría pluralista), o subordinó el Estado al poder distributivo de la clase capitalista (la teoría de las clases)? ¿O cristalizaron estos Estados ampliados y diversificados, y ahora más polimorfos, en formas plurales entre las que no se hicieron elecciones «últimas»? ¿Y si fueron más polimorfos, se hicieron también menos coherentes?

El crecimiento de las infraestructuras, la nación y la democracia de partidos

Las infraestructuras estatales crecieron menos en las democracias de partidos. Estas últimas sólo en contadas ocasiones nacionalizaron los recursos económicos; por el contrario, los pusieron a disposición de las necesidades del capital y se mostraron más reticentes al principio a la concesión de la ciudadanía social. Como es natural, las tres democracias de partidos diferían entre sí —los Estados Unidos contaban con el gobierno más débil y más federal; Francia, con el Estado más activo—, pero también compartieron numerosas características. Analizaré en primer lugar lo referente a Gran Bretaña, cuyo Estado considero más polimorfo por haber cristalizado como militarista, capitalista, nacional-federal, ideológico-moral y, más plenamente, una democracia de partidos. En el presente capítulo trataré sólo algunas repercusiones internas del militarismo geopolítico. ¿Hubo unas relaciones bien definidas, quizás de «primacía última», entre tales cristalizaciones? Hemos visto en el capítulo 3 que las cristalizaciones estata-

les pocas veces se enfrentaban en un conflicto directo y dialéctico, forzando la elección política directa o el compromiso. ¿Ocurrió así en la Inglaterra victoriana y en otros países durante este periodo?

No cabe duda de que el Estado victoriano fue capitalista, como esperaban casi todos sus contemporáneos. Ni siquiera los partidarios del *laissez-faire* dudaban de las ventajas de la regulación estatal. Adam Smith quería que el Estado proporcionara los bienes públicos que los actores privados no tenían interés personal en financiar: la defensa exterior, la seguridad interior, la educación nacional y la red de caminos. Añadamos el ferrocarril y tendremos las realizaciones del Estado decimonónico. Smith percibió, con razón, que todo ello suponía menos una intervención estatal que la coordinación de la sociedad civil (que para él quería decir el capitalismo de mercado). A principios del siglo XIX, tanto en Gran Bretaña como en la mayor parte de los países, declinaba la actividad de las elites autónomas del Estado, a medida que decaían también la corte y las redes de patronazgo y de concesión de licencias reales. Luego, desde 1830 surgió un activismo estatal, más de «partido» colectivo que elitista, bastante comprometido con el apoyo y el desarrollo del capitalismo industrial. La legislación se hizo más programática, se debatió en sesiones parlamentarias y fue recogida en leyes públicas (no privadas) del Parlamento a iniciativa de los ministros del gobierno. El Parlamento se servía regularmente de comités selectos y comisiones reales para investigar las condiciones sociales y la legislación recomendada. Otras democracias de partidos crearon agencias de planificación semejantes. En la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a crecer también las infraestructuras administrativas, aunque de nuevo más para coordinar que para intervenir en la sociedad civil.

Pero la sociedad civil y la acción del Estado suponían mayor dosis de capitalismo, y los debates morales y religiosos resonaban con fuerza en la política victoriana (Marsh, 1979; Weeks, 1981: 81; Cronin, 1988). Weeks y Foucault (para el caso francés) sostienen que esto prueba la «coerción» de las clases dominantes sobre un amplio abanico de la vida social, lo que supone una concepción económica reduccionista de la cristalización moral-ideológica. Pero con el aumento de la industrialización y la ampliación de la esfera civil del Estado, la retórica moral se hizo más compleja y conflictiva. Eran muchos los victorianos que distinguían los asuntos comerciales, en los que el Estado debía limitarse a apoyar la autorregulación capitalista, de las cuestiones sociales, que constituían una parte legítima de

la intervención del Estado, incluso mediante la coerción. Oigamos el discurso de lord Macaulay defendiendo la *Ten Hours Bill* en el Parlamento:

> Me encuentro totalmente de acuerdo con los caballeros de esta Cámara que defienden el libre comercio adecuadamente regulado ... y en que no resulta deseable que el Estado interfiera en los contratos establecidos entre individuos adultos y en plena posesión de sus facultades, cuando afectan a cuestiones comerciales. No creo en ninguna excepción a tal principio, pero ... incluso el principio de no interferencia tiene restricciones cuando están en juego la salud y la moral pública [Taylor, 1972: 44].

En realidad, como se ha observado en otras contribuciones al debate, la división del trabajo entre el capitalismo y «la salud y la moral públicas» no era tan sencilla, ya que ambas cosas estaban íntimamente relacionadas. La moral victoriana mezclaba varias corrientes ideológicas con distintos grados de afinidad con el capitalismo: la moral protestante, la Ilustración, las teorías utilitarias del progreso, los conceptos de «mejora» individual y social, la idea de que el Imperio británico tenía responsabilidades globales y el temor del régimen al «peligro» que representaban las clases bajas. Cuando no se atravesaba por una época de revueltas (como el cartismo de 1848), los regímenes no solían concentrarse en sus intereses políticos de clase. En general, el «peligro» de las clases bajas no se sentía como una mera amenaza económica, como demuestra el hecho de que los debates sociopolíticos abundaran en metáforas que vinculaban los intereses personales y de clase con la salud y la moralidad, como en el discurso de lord Macaulay. Los problemas sociales producían «degeneración» y «enfermedades», que extendían la «corrupción» y las «infecciones». El industrialismo y la urbanización habían acrecentado grandemente la densidad social, de ahí que la inmoralidad de las clases bajas pudiera infectar a todas las demás, como, en efecto, ocurría con los gérmenes. El censo de 1851, que reveló el escaso número de asistentes a la iglesia entre los trabajadores y sus familias, impresionó de verdad al régimen. No hay duda de que la clase gobernante tenía interés en encaminar a las clases bajas hacia la salud, la pureza, la moralidad y la religión, pero tampoco de que lo creía un deber.

En efecto, la economía política clásica y el movimiento por la salud pública culminaron en la teoría de los gérmenes, que compartía en realidad la misma metateoría: existían unas fuerzas invisibles que

se difundían a través de una abundante interacción social, produciendo efectos benignos, malignos y caóticos al mismo tiempo. El Estado tenía que fomentar sus aspectos benéficos, con preferencia a través de una infraestructuras relativamente discretas, cuya mejor representación sería quizás la introducción de tuberías de barro vidriado subterráneas para canalizar el agua y el alcantarillado de las ciudades. La llegada de las tuberías se saludó como un progreso real de la humanidad, que fulminó las tasas de mortalidad a partir de la década de 1870. La política comenzó a ocuparse de la salud pública, el alumbrado de las ciudades, el alcantarillado, la construcción de viviendas según unos estándares mínimos, una sanidad rudimentaria, una fuerza policial, la supervisión de las prisiones y las Leyes de Pobres, la regulación de los horarios y las condiciones laborales y la educación primaria, e incluso secundaria, para la mayoría de los niños. La eficacia de las comunicaciones, la salud pública y la alfabetización masiva se consideraban funcionales para el capitalismo, el poder nacional y el desarrollo humano en general. Como vimos en el capítulo 11, cedió incluso la resistencia fiscal contra el Estado, a medida que su expansión se veía superada por el crecimiento económico. Así pues, el aumento de las metas estatales de carácter civil se produjo con el consenso parcial de aquellos que podían organizarlo eficazmente, esto es, de las clases dominantes, las regiones, los grupos étnicos y las distintas iglesias. Como ha observado Grew (1984), el crecimiento masivo de las infraestructuras fue compatible con la aparición de la ideología de la «neutralidad del Estado» y la preservación de la libertad desde el momento en que se definieron nuevos «campos de actuación» en los que los actores de la sociedad civil actuarían sin la intervención del Estado.

No obstante, el capitalismo y la moralidad podían entrar en conflicto e imponerse ciertas limitaciones mutuas que fluctuaban conforme al desarrollo de un proceso político muy complejo. A medida que el siglo se acercaba a su fin, el militarismo comenzó a influir en esas interacciones sociales. En general, se consideraba que el poder imperial británico dependía sobre todo de la «eficiencia de la nación», y ésta se basaba (hasta cierto punto) en la salud de las madres y de sus hijos y en un nivel básico de educación nacional. Naturalmente, el concepto de eficiencia nacional tendía a eliminar la rivalidad capitalista y militar, en especial cuando Alemania demostró que se estaba convirtiendo en una potencia enemiga. El Estado capitalista se reafirmaba mediante la represión siempre que la reivindicación de las re-

formas se planteaba, como en el cartismo, en el contexto de un choque frontal entre las clases; pero cuando las reformas se presentaban como un compromiso racional, que interesaba a todos, para solucionar la lucha de clases, tampoco conseguían cambiar el sistema, es decir, el liberalismo del antiguo régimen. El secreto estaba en presentar las reformas como una disminución del conflicto de clase *con* objetivos morales y nacionales; sólo entonces se podía denunciar a los capitalistas y contribuyentes por inmorales o antipatriotas e introducir divisiones en el régimen gobernante. Esto explica el éxito de las *Factory Acts,* que denunciaron, al mismo tiempo que el cartismo, la explotación a que se sometían en las fábricas la salud y la moral de los niños y las mujeres, y con ello, al conjunto de la vida familiar (véase capítulo 15.) Gran parte de la legislación estaba motivada al mismo tiempo por razones de control social y de caridad, así como por el reconocimiento de que la mayor densidad social hacía útiles para todos algunos servicios estatales. La vida social era ya un hecho ineludiblemente colectivo. La «jaula» nacional aumentaba el grosor de sus barrotes, al tiempo que, paradójicamente, crecían las libertades; a fin de cuentas, las tuberías alargaban de modo espectacular la esperanza de vida de los fetos, los niños y las madres.

Sin embargo, pocos eran los que pensaban en términos de lo que Marshall ha llamado «ciudadanía social», es decir, en una garantía de la participación activa de los ciudadanos en la vida económica y social de la nación, más allá de la alfabetización y de una sanidad mediocre. Puesto que hasta 1910 no hubo un sistema progresivo de impuestos capaz de financiarlos, los programas redistributivos resultaron poco eficaces. No obstante, existió un programa legislativo de reformas que fue apasionadamente discutido por partidarios, oponentes y defensores del compromiso, y que poco a poco logró hacer muchos conversos dentro del Estado y entre las elites de los partidos. Hacia la década de 1860 eran los ministros, y no los miembros privados, quienes presentaban las leyes de reforma. El capitalismo liberal, influido por la moralidad secular y cristiana, y más tarde, por el nacionalismo y los partidos competitivos que respondían a las presiones del electorado, podía producir una reforma social, siempre que no se realizara en nombre de ninguna clase enfrentada directamente con el capitalismo.

Ni el capitalismo ni la reforma moral o el militarismo se opusieron frontalmente a la posterior cristalización del Estado: una nación moderadamente centralizada pero «federal». Como muestra el cua-

dro 3.3, Gran Bretaña era aún bastante «federal» en la práctica (si no en su Constitución), y sus gobiernos locales disfrutaban de un poder considerable. En realidad, las leyes victorianas, los comités y las comisiones también dieron lugar a una elite consciente de «burócratas-tecnócratas» partidarios de ampliar la intervención del gobierno central (Lubenow, 1971), pero las reformas sólo llegaron en la medida en que aquéllos cedieron y se limitaron a atajar con medidas *ad hoc* las enfermedades sociales tras la pantalla de humo de la retórica moralista y nacional; en cambio, cuando pedían la intervención estatal como principio general de mejora social, se indisponían con los notables locales de los partidos que controlaban el Parlamento y el proceso electoral.

Por lo general, cuando la cuestión nacional estallaba en una confrontación directa, perdían los centralistas. Lo más que pudieron hacer fue dejarse llevar por el pragmatismo y crear infraestructuras estatales regidas por los notables locales. En las comisiones reales, los aristócratas contrarrestaban a los tecnócratas, y tanto la legislación parlamentaria como su posterior cumplimiento aguaban las recomendaciones de centralización. Cuando Edwin Chadwick, el mayor tecnócrata de la era victoriana, pidió abiertamente la intervención del Estado en materia de higiene municipal cayó en un tal descrédito que acabó con su carrera dentro de la administración. Desde la reforma de la Ley de Pobres hasta las *Factory Acts* y la salud y la educación pública, la reforma social fue proclamada en el plano nacional por el gobierno y el Parlamento, pero materializada por los notables de los municipios, los condados, las parroquias y otros 25.000 instrumentos locales con que contaba el gobierno local a mediados del siglo XIX (Sutherland, 1972; Mac-Donagh, 1977; Digby, 1982). La administración continuó siendo federal, aunque la «Constitución» británica estuviera supuestamente dominada por la doctrina de la soberanía parlamentaria (centralizada). Las administraciones británicas —Estado, elites y partidos, centrales o locales— seguían coordinando y debatiendo la moral y las inquietudes materiales de la nación-clase dominante, sin intervenir como Estado central autónomo en la sociedad civil.

A mediados de siglo, tres de las cristalizaciones del Estado —capitalista, moral-ideológica y Estado-nación federal— comenzaron a imponerse límites mutuos y a imponérselos a la posible autonomía estatal. Luego, a partir de la década de 1880, el federalismo cedió ante las presiones de las identidades nacionales (que veremos más ade-

lante), del militarismo imperialista y de la democracia de partidos, la quinta cristalización. Naturalmente, Gran Bretaña no era una democracia electoral plena, ni siquiera para los hombres, pero a partir de 1832 su sufragio se amplió lo suficiente para obligar a los notables de los partidos de algunas zonas a entrar en una competición programática y abandonar la organización segmental propia del clientelismo. En 1867 y 1884 se aceleró el proceso, cuando los dos partidos extendieron el sufragio para competir entre sí. La presión regional, religiosa y de masas era ahora más constante. Los conservadores eran anglicanos e ingleses; los liberales, celtas y hasta cierto punto inconformistas. La pequeña burguesía y los trabajadores cualificados accedieron al voto, al tiempo que se hacía sentir más que nunca el influjo de los profesionales y los empleados de carrera pertenecientes a la clase media. La lucha ideológica se niveló cuando algunos dirigentes de partidos liberales y conservadores cambiaron de opinión respecto a la cuestión nacional. El partido moderado y la elite de los centralistas encabezaban ahora la retórica de la «modernidad», mientras que los notables locales se acogían a la bandera de la «libertad». Hacia 1900 los partidos parcialmente centralizados, que disponían de propaganda y plataformas nacionales, se dirigían a la masa electoral por encima de los notables locales, un hecho que redujo la autonomía de estos últimos y moderó sus preferencias por el federalismo.

La mayor responsabilidad interna del gobierno era ahora la educación, vinculada (véase capítulo 16) a la clase media, la mayoría del electorado. Aparecía una «ciudadanía ideológica» cuyos mensajes presentaban la diversidad característica del electorado de clase media: lealtad al capitalismo, eficacia nacional, anticonformismo y anglicanismo, «pureza social», temperancia y caridad, incluso feminismo. Estos elementos imprimieron un giro al liberalismo; empujaron al partido liberal a una mayor aceptación del Estado asistencial y a los inconformistas a rebajar sus tendencias federalistas en favor de la actividad estatal (siempre que la educación se protegiera contra el anglicanismo); por otra parte, echaron los cimientos de la unión de Escocia, Gales y el Ulster con Inglaterra (sin duda, gracias a las alianzas de los partidos con la religión). La educación politizó también a un gran número de trabajadores en el plano local; a nivel nacional su actividad política se centraba en la reforma del sufragio y los derechos de sindicación. Las mayores presiones por la creación de una asistencia pública llegaron de las filas de los moralistas y la clase media liberal (Cronin, 1988). Pero fue la unión de las luchas de la clase media y de

la clase trabajadora lo que generó la política del último gobierno liberal antes de la guerra.

Como veremos en el capítulo 17, la intervención activa del Estado en las relaciones industriales comenzó también en la década de 1890, en respuesta a las presiones de clase que llegaban desde abajo, aunque sólo resultó eficaz cuando pudo encontrar una base común, a un tiempo pragmática y moral, que trascendiera los intereses «egoístas» de patronos y sindicatos. Las presiones morales complementaron la escasa capacidad coercitiva de la legislación laboral. Paralelamente, aumentó la intervención, por lo general mediante incentivos fiscales, en la educación, al descubrirse la escasa efectividad de la política consistente en rellenar los agujeros que dejaban las escuelas gestionadas privadamente. La medicina pública consiguió imponerse a través de las Leyes de Pobres hasta lograr, en efecto, un servicio de salud mínimo, financiado por el Estado, como último recurso. La reforma del gobierno local produjo unos servicios más uniformes, sobre todo en materia de salud pública nacional, aunque las decisiones que afectaban al grado concreto de los servicios continuaban tomándose en el plano local, donde estaban las administraciones. Todo ello indica una mayor centralización nacional y una limitada «intervención» democrática y partidista en el capitalismo, por lo general, mediante la persuasión moral, los incentivos fiscales y una tecnocracia encubierta, aunque también a través de la coerción legislativa directa y de una limitada autonomía estatal que no procedía de desafíos frontales al capitalismo o al federalismo, ni de la lucha de clases directa, sino de las consecuencias involuntarias de las políticas de partido, en la que se mezclaban el moralismo y el nacionalismo con las cristalizaciones regional, religiosa y de clase. Puesto que ninguna de estas cosas había desafiado de frente al capitalismo o al federalismo, resultó imposible que surgiera un estatismo autónomo (tal como lo define la teoría elitista). Para que hubiera aparecido un Estado intervencionista, de carácter burocrático-tecnocrático, se habría necesitado una presión mucho mayor de la clase trabajadora y una movilización masiva para la guerra, cosas que no se produjeron hasta 1914. El «estatismo» anterior a la guerra fue predominantemente moral y de clase media; un compromiso implícito entre un Estado-nación federal y centralizado, que modificó moderadamente la cristalización capitalista.

Francia y Estados Unidos recorrieron caminos paralelos, aunque los partidarios de la centralización fueron más fuertes en la primera. Sus principales cristalizaciones estatales se parecieron mucho a las

británicas, salvando el hecho de que el militarismo geopolítico americano fue menos pronunciado a partir de la década de 1870. A finales de siglo, los partidos centralistas republicanos se habían asegurado el control del Estado francés contra la resistencia del clero, la aristocracia y el capital financiero. Como en las anteriores repúblicas, diseñaron un Estado más centralizado y algo más intervencionista que el británico o el estadounidense. Pero sus principales intervenciones no estaban dirigidas contra el capitalismo o la clase, porque el Estado-nación centralizado luchó ante todo en el terreno ideológico-moral, contra el poder de la iglesia católica en la educación, la legislación familiar y el bienestar social, y contra el control de las fuerzas armadas por parte del antiguo régimen (recuérdese el caso Dreyfus). Mientras, el capitalismo continuaba dominando la economía política. De nuevo encontramos un resultado dual: el triunfo en materia de economía política del Estado capitalista, mediatizado por la capacidad de las democracias de partidos para transformar una segunda cristalización estatal, la moral-ideológica —basada ahora en principios seculares de asistencia social centralizada—, y por un último intento de transformar el Estado militarista.

Los Estados Unidos eran la patria del liberalismo capitalista, del confederalismo y de la democracia de partidos, pero tuvieron el Estado más débil de Occidente hasta que la Guerra Civil imprimió un giro abrupto a la situación. El norte, y muy especialmente el sur, experimentaron la mayor intervención estatal del siglo XIX. La Confederación interfirió despóticamente en los derechos del trabajo libre y la propiedad privada, y trató sin miramientos tanto las costumbres como los gobiernos locales y estatales; una actitud paradójica en un régimen que decía luchar por los derechos de los estados. La Unión, mucho más grande y más rica en recursos, se aplicó en mayor medida a incentivar el mercado de productos manufacturados. Pero este «Leviatán yanqui» se mostró especialmente intervencionista en la creación del primer sistema de crédito nacional y de una clase capitalista financiera independiente de Gran Bretaña (Bensel, 1990: capítulo 3). El fin de la guerra trajo el rápido desmantelamiento de las administracionales estatales, pero no disminuyó la cohesión de la Unión victoriosa, que patrocinaba el desarrollo económico nacional y dirigía la reconstrucción del sur. Como ha observado Bensel, durante la guerra civil se convirtió en un Estado de partido único, que coparon los notables del partido republicano procedentes de las finanzas, la industria y la agricultura del norte, basada en la tierra libre. De nuevo

comprobamos que la efectiva combinación del poder despótico e infraestructural de los Estados no depende de unas elites autónomas, sino de unas elites institucionalizadas en un partido de la sociedad civil.

Pero esta alianza por un «Estado fuerte» demostró ser, a fin de cuentas, bastante débil, porque los conservadores republicanos con raíces locales perdieron el interés por la reconstrucción y se prepararon a entenderse con los demócratas del sur. Resurgió, entonces, el faccionalismo partidista. Para conservar la presidencia, los republicanos tuvieron que establecer en 1877 un pacto electoral que restauró la autonomía de los estados sureños. Se recuperó la situación prebélica: un gobierno de «cortes y partidos», pequeño y predominantemente confederal, controlado por las facciones enraizadas en el plano local, por unos tribunales dominados por el localismo y el *laissez-faire,* con su facción partidista más cohesionada y resuelta (los demócratas del sur) opuesta con firmeza al poder del Estado central (Keller, 1977; Skowronek, 1982: 30; Bensel, 1990: capítulo 7).

El capitalismo americano se desarrolló según el modelo del norte una vez pacificado el sur, con un racismo institucionalizado que confirió matices característicos al capitalismo local, aunque el poder siempre se mantuvo allí atrincherado contra el Estado federal. Desde la década de 1880, este capitalismo del norte vivió ciertas tensiones con el moralismo religioso de la clase media, pero tuvo que enfrentarse sobre todo a una mayor, el hecho de que, pese a su fuerte individualismo liberal, las corporaciones crecieran más que en ningún otro país. Cuando éstas se entrelazaron con el faccionalismo partidista e intervinieron en los sufragios de los gobiernos locales y estatales, apareció la «corrupción corporativa». De ahí que tanto los reformistas como sus oponentes extremos, los demócratas del sur, intentaran reducir las infraestructuras gubernamentales (Orloff, 1988). No obstante, Washington se distinguía de las otras cuatro capitales (cinco, si contamos Budapest) por no ser una ciudad moderna, sino una localidad sureña, pequeña y preindustrial, es decir, difícil de controlar por las corporaciones modernas, de modo que algunas de ellas apoyaron las reformas «modernizadoras», comenzando por el nivel federal. El movimiento progresista encabezó estas corrientes, a menudo contradictorias, a las que se añadieron los intereses de la clase media en materia de educación, feminismo y bienestar social sectario religioso, así como los de los trabajadores cualificados, organizados en sindicatos. Todos ellos (salvo las feministas) se agrupaban

en los dos partidos. La complejidad de estas relaciones de poder, expresadas de formas muy diferentes en los distintos niveles de gobierno, que obligaba a establecer continuos acuerdos con los demócratas del sur, dificulta enormemente una evaluación de los progresistas (tanto para los historiadores como para este inexperto intruso). Pero los poderes atrincherados del liberalismo capitalista y los derechos de los estados del sur, una vez que se estableció una regulación mínima de las corporaciones, permitieron imponer menos restricciones morales al capitalismo en general, y al racista en particular, que en otros países.

La cristalización capitalista continuó prosperando en las tres democracias de partidos, en tanto que la intervención del Estado fue limitada, cuando no favorable al capitalismo (con la excepción de América del Sur), y, por tanto, la redistribución, escasa. La teoría elitista no entra en este campo, el pluralismo se encuentra limitado por el dominio del capital sobre el trabajo, y la teoría de las clases no se aplica. Pero centrarse en las limitaciones de la intervención estatal significaría subestimar la realidad de los Estados-nación como cristalizaciones emergentes. Los Estados británico y francés —incluso el Estado insignificante de la América confederal— representaron una novedad histórica radical. La expansión de sus infraestructuras durante el siglo XIX no cambió en mucho el balance del poder distributivo entre el propio Estado y la sociedad civil o entre las clases sociales. Si todo hubiera acabado ahí, la cristalización capitalista habría tenido la primacía última, pero estos Estados *también* cambiaron las relaciones colectivas de poder, es decir, la auténtica identidad de la sociedad civil y del propio capitalismo. Cada infraestructura tendía a aumentar la cohesión y los límites del territorio, así como los sujetos del Estado existente, en contra de las dos redes históricas y alternativas de interacción, las comunidades locales y regionales y el escenario internacional.

Aunque el capitalismo también cambió los particularismos locales por un mayor universalismo, sus ideólogos clásicos (y sus oponentes) esperaban que fuera mucho más transnacional. Sin embargo, y aunque muchos no lo buscaran, la regulación «nacional» del ferrocarril, los caminos, la salud y los servicios públicos, las fuerzas de policía, los tribunales y las prisiones y, sobre todo, la educación y la alfabetización discursiva en la lengua dominante del Estado crearon unas infraestructuras centralizadas y territorializadas que contribuyeron al desarrollo del Estado-nación. Si la nación americana tuvo un indiscutible

tinte norteño, se debió, precisamente, a que los notables locales del sur refrenaron a propósito la implantación de estas infraestructuras. En la mayor parte de Occidente, el capitalismo y la sociedad civil evolucionaron involuntariamente hacia una organización nacional del poder.

La expansión nacional de las infraestructuras no se produjo sólo en las democracias, sino en todos los países. En los veinticinco años que median de 1882 a 1907 el número de cartas enviadas por una sola persona se multiplicó de dos a cuatro veces en los cinco países. En 1907 la media francesa por persona era de 34 cartas o tarjetas anuales; la austriaca, de 46; la alemana, de 69; la británica, de 88; y la americana, de 89 (*Annuaire Statistique de la France,* 1913: 205). Casi todas estas redes extensivas de comunicación íntima y comercial se producían dentro del territorio estatal. La escolarización masiva creció hasta alcanzar un sorprendente grado de uniformidad en todo Occidente. La proporción de niños escolarizados entre los cinco y los catorce años alcanzó, por ejemplo, el 74 por 100 en el *Reichshalf* austriaco y el 88 por 100 en Francia (Mitchell, 1975: 29 a 54, 750 a 759; aunque en el *Reichshalf* húngaro se estancó en el 54 por 100). Comenzó entonces la disminución de las desigualdades regionales que ha continuado durante todo el siglo XX. Las variaciones en el nivel regional de salarios se estancaron o crecieron en la primera fase de la industrialización, para comenzar a disminuir hacia 1880 en los cinco países; encontramos una trayectoria semejante en el caso del valor tasado de las viviendas (Good, 1984: 245 a 250; Sodeberg, 1985: cuadros 1 y 2). No ya el mundo de la imprenta, sino incluso el de la reproducción fotográfica intervino en la integración nacional. La fotografía del presidente o del monarca colgada de la pared simbolizaba la integración de las oficinas de la administración local en el Estado nacional, mientras que revistas y periódicos reproducían escenas de ceremonias y coronaciones, revistas de tropas y aperturas de Parlamentos.

Las estadísticas demográficas —fertilidad femenina, tasas de hijos ilegítimos y edad de los matrimonios— podrían considerarse al margen del Estado nacional, puesto que son indicadores de un comportamiento íntimo cuyo regulador explícito no era tanto éste como las iglesias transnacionales y la costumbre local, sin embargo, Watkins (1991) ha demostrado que en casi todos los países europeos comenzaron a disminuir las diferencias demográficas regionales entre la década de 1870 y la de 1960, a medida que los Estados-nación adquirían su característico perfil demográfico nacional. Watkins no ofrece datos de hasta dónde llegó la naturalización antes de la Primera Guerra

Mundial (o en cualquier otra fecha intermedia), pero lo importante es que, a largo plazo, el sexo se convirtió en un asunto nacional.

No deberíamos sorprendernos, a la vista de lo analizado en el capítulo 7, donde he descrito el poder de movilización de las clases y las naciones como un resultado de su habilidad para vincular la organización extensiva a la intensiva, propia de la intimidad familiar y la comunidad local, lo que constituía ya un hecho evidente para los políticos de finales del siglo XIX. Los reformadores británicos, por ejemplo, alimentaron la esfera intensiva sabedores de su importancia para la formación de ciudadanos nacionales; influyeron en la legislación relativa a la vida familiar, las responsabilidades paternas, la moral sexual, la «salud» física y moral, la «maternidad» y la «salubridad» (también en el sentido físico y moral) de la vivienda, la escuela y el vecindario. La ideología que vinculó más estrechamente la reproducción familiar a la nación fue la eugenesia. Los políticos y escritores populares de la década de 1900 lo expresaron con un lenguaje sorprendentemente imperialista:

> Porque me consta que el Imperio no puede levantarse sobre ciudadanos raquíticos y hundidos de pecho, y porque sé «que no provendrá de las pistolas o los rifles la fuerza que ha de paralizar al Enemigo y al Vengador, sino de la boca de los niños de pecho ...»
>
> La historia de las naciones no se decide en los campos de batalla sino en las cunas, y las victorias más duraderas son las que ganan los batallones de niños [Davin, 1978: 17, 29].

Pero existió otra versión más suave y más permisiva de la eugenesia. La Inglaterra eduardiana, en un movimiento contrario a la pudibundez anterior, estimuló a las mujeres a desarrollar su sexualidad dentro del amor marital y procreador (Bland, 1982). Por su parte, las feministas británicas, alemanas, americanas y francesas de la época emplearon una especie de retórica «maternal-nacionalista» para reivindicar medidas de bienestar social (Koven y Michel, 1990; sin duda lo hicieron también las austriacas). La nación ya no era sólo para los ciudadanos políticos (hombres), sino de las familias y los vecindarios de todas las clases, como comunidad unida por la interacción y los sentimientos.

Aunque no he indagado este punto en profundidad, el sentimiento de la identidad personal debió de experimentar un gran cambio durante el siglo XIX, puesto que la vida personal, pública o pri-

vada, quedó confinada en los límites de la nación, las identidades locales y transnacionales tuvieron que sufrir un retroceso, en gran parte inconsciente y sin una expresión abierta del conflicto. Incluso aquellos cuyo poder procedía de organizaciones formalmente locales o transnacionales —los notables, los curas católicos o los militantes marxistas— parecen haber adquirido un sentido más «nacional» de su propia identidad. Así ocurrió con toda claridad entre los notables de los partidos políticos, como veremos en el capítulo 21. Incluso la retórica transnacional de las organizaciones sindicales se vio afectada. La organización *nacional* de la sociedad civil y del capitalismo y sus clases creció enormemente. El Estado de las infraestructuras alimentó el desarrollo del Estado-nación.

Naturalmente, cada Estado constituyó un caso único. En Gran Bretaña, el Estado y la «nación de la clase dominante» habían coincidido durante más de un siglo antes de la industrialización y la expansión de las funciones estatales. En 1800 esta nación-clase era ya homogénea en toda Inglaterra y, en menor medida, en Gales y Escocia, en tanto que su clientela protestante gobernaba Irlanda. Hablaba y escribía sólo en inglés, y producía, intercambiaba y consumía en una economía capitalista de mercado que era, a efectos prácticos, el territorio del Estado británico, y confiaba en su brazo armado para conservar el comercio de ultramar; comenzaba, además, a organizarse políticamente en Westminster y en Whitehall. En este contexto, la industrialización y el auge de la burguesía, seguidos por el crecimiento del poder infraestructural del Estado y la clase media, representan las dos fases de la fusión de la nación con el Estado. La vida social británica se naturalizó (en sus dos formas características, la británica y la inglesa-galesa-escocesa).

Francia y los Estados Unidos presentan ciertas características distintas. La nación francesa, encarnada por la burguesía urbana, se había politizado antes, durante el periodo revolucionario y napoleónico. La clase media dispuso allí, mucho antes que en otros países, de un modelo republicano a seguir (o al que oponerse). Eugen Weber (1976) demuestra que esta nación burguesa no consiguió difundirse por las provincias o entre el campesinado hasta finales del siglo XIX, a través de las infraestructuras materiales y simbólicas que ya he señalado: caminos, ferrocarriles, correos y educación. Cabría añadir también el papel desempeñado por un ejército masivo de ciudadanos (en proporción, el mayor de los europeos durante gran parte del periodo) y por el movimiento político republicano en un país dividido. En

efecto, los gobiernos republicanos extendieron conscientemente las infraestructuras nacionales con el objetivo de consolidar su propio régimen. Sus oponentes (en especial, la iglesia católica) defendían la descentralización porque se hallaban mejor implantados en las comunidades locales. Por esa razón, uno de los principales motivos de la construcción de ferrocarriles fue mejorar la comunicación de los dispersos reductos republicanos, entre sí y con la capital. El Estado-nación republicano triunfó a partir de la década de 1880.

La clase dominante estadounidense también compartía una lengua y una cultura, pero, fuera del sur, las infraestructuras estatales tuvieron una finalidad característica: la creación de una nación exclusivamente anglófona, que implicaba la marginación de los inmigrantes de clase baja y de su abanico de lenguas. La mayoría de las instituciones educativas eran competencia de los estados individuales, aunque se basaban en un modelo uniforme creado por redes nacionales de educadores profesionales. El relativo aislamiento americano respecto a otros países avanzados facilitó también un capitalismo nacional más autosuficiente, que generó una organización también más nacional de los mercados y las corporaciones. Las infraestructuras federales del gobierno pudieron ser tanto la consecuencia como la causa de aquella sociedad civil nacional (Skowronek, 1982 afirma que fueron más la consecuencia, pero véase más adelante). La nación americana fue más capitalista y menos estatista que las restantes.

Pero el servicio postal, las escuelas y los ferrocarriles estimularon en todo Occidente el desarrollo de la nación y de la organización nacional de las clases. Algunos servicios estatales —regulación sanitaria, policía, tribunales de justicia y prisiones— supusieron también una intervención autoritaria más sustantiva. Aunque en la mayor parte de los casos se limitaron a brindar mejoras como la red de tuberías de loza, transformaron un difuso entramado de diversidades locales y regionales (o de inmigrantes) en redes de poder con una demarcación nacional. Las infraestructuras estatales favorecieron el surgimiento del Estado-nación, aunque muchos no se lo habían propuesto.

Hubo, sin embargo, un pequeño grupo de países menos favorables a la consolidación del nuevo Estado. Allí, las comunidades religiosas y lingüísticas contrarrestaron el poder estatal y el de las clases dominantes. Más aún, como veremos en el siguiente párrafo, los que llegaron relativamente tarde a la industrialización experimentaron un desarrollo capitalista más desigual, ya que ciertas esferas económicas se hallaban mejor integradas en la economía transnacional. Así ocu-

rrió, en particular, con los imperios ruso, austriaco y otomano. En los territorios austriacos, el Estado, la industrialización, las lenguas y las luchas por la ciudadanía política impulsaron diferentes direcciones territoriales (véase capítulo 10). La monarquía deseaba la industrialización, pero ésta, lejos de aumentar la interdependencia de sus territorios, podía estimular dependencias regionales o transnacionales. Quería fomentar la alfabetización, pero ¿en qué lenguaje, si algunas lenguas del Imperio implicaban un nacionalismo provincial disidente? Si cedía a las demandas de participación política de la clase media y la clase trabajadora, ¿aumentaría con ello la lealtad a su Estado (como en los Estados-nación) o a los Estados rivales de las provincias? Las cuatro fuerzas que habían creado en otros lugares el Estado-nación —el Estado dotado de una fuerte coordinación infraestructural; la difusión relativamente desigual de la industrialización capitalista; las comunidades lingüísticas compartidas; y las reivindicaciones de participación política por parte de clases masivas y universales— no lo consiguieron en estos Imperios.

Desarrollo tardío y complejo militar-industrial

Occidente constituía una única «civilización de múltiples actores de poder» donde circulaban mensajes culturales, bienes y servicios regulados por la rivalidad geopolítica, la diplomacia y la guerra. Una vez que la industrialización se puso en marcha en algunos Estados, se difundió con rapidez a otros, y puesto que implicaba un aumento del poder colectivo fue recibida e imitada por todas las redes dominantes de poder, en un movimiento consciente y apoyado por las redes de comunicación de una intelectualidad tecnocrática emergente. Los intelectuales de los países «rezagados» descubrieron los puntos fuertes y débiles de la primera industrialización y, consecuentemente, exigieron a los partidos y elites del Estado que realizaran sus propias adaptaciones. Surgió entonces un proceso interactivo, en el que las soluciones ideadas por los rezagados obligaron a los más precoces a una posterior readaptación. Y, aunque los medios fueron primordialmente económicos (aprovechando la enorme capacidad de la industria), las metas y los actores de poder presentan una enorme variación. Los cuatro tipos de actor dominante —ideológico, económico, militar y político— colaboraron en el desarrollo de estrategias, creando tendencias que, inconscientemente, conducían al desarrollo del

Estado-nación centralizado; sólo Estados Unidos y Austria quedaron rezagados a este respecto.

Como de costumbre, los historiadores de la economía han estudiado estas estrategias desde el punto de vista económico. Gerschenkron (1962, 1965) se acoge a la clásica teoría del desarrollo tardío, atribuyendo el éxito de la industrialización en los países rezagados a (1) un repentino «acelerón» del crecimiento en el caso británico, (2) un mayor énfasis en la producción de bienes, (3) una mayor escala de las empresas y las plantas industriales, (4) una mayor presión en los niveles de consumo masivo, (5) un menor papel de la agricultura, (6) una participación más activa de los grandes bancos, y (7) un papel más activo del Estado. Así pues, el crecimiento más rápido de los rezagados se vio considerablemente apoyado por la estrecha colaboración entre un Estado activo y unas empresas financieras e industriales autoritarias. Las elites estatales y los partidos reorganizaron las finanzas del Estado persiguiendo políticas macroeconómicas crediticias moderadamente inflacionistas; después, patrocinaron créditos bancarios para la industria y la agricultura, invitaron a los trabajadores cualificados británicos y subvencionaron modelos productivos. Construyeron o subsidiaron ferrocarriles y otras infraestructuras de transportes y extendieron la educación. Finalmente, fomentaron las fusiones y los carteles para obtener empresas grandes que invirtieran en ciencia y maquinaria. Era, ante todo, una alianza entre las elites estatales y los partidos capitalistas con una meta común de beneficio (Senghaas, 1985, ha puesto al día esta teoría del desarrollo tardío).

Una mirada retrospectiva percibe también una condición previa de aquel éxito: la relativa uniformidad económica del territorio estatal. Cuando la ayuda estatal al desarrollo se retrasaba o era en exceso desigual, las distintas regiones o sectores económicos se hacían más dependientes de la economía transnacional que de la nacional. En esta vía al desarrollo, cada vez más corriente entre los países desarrollados del siglo XX, las clases «compradoras» estarían interesadas en tener Estados débiles y aliarse con el capital extranjero o incluso con otros Estados. Aunque los alineamientos transnacionales de clase no llegaron tan lejos durante el siglo XIX, un desarrollo desigual podía desestabilizar un Estado, obligando a los partidos y a las elites a concentrarse en las tensiones sociales internas y a descuidar el desarrollo geoeconómico.

Entre la primera oleada de países rezagados, Prusia-Alemania, Suecia, Japón y el norte de Italia poseían sociedades civiles bastante

comercializadas, pero desigualmente difusas. El éxito alemán dependió de sus particulares relaciones entre la agricultura y la industria, mediatizadas por el Estado (véase capítulo 9). No cabe duda de que los casos sueco, japonés e italiano (del norte) pudieron ser igualmente contingentes. Pero después de estas potencias viene una línea divisoria. Los imperios ruso y austriaco, de mayor tamaño y diversidad, utilizaron el repertorio del desarrollo tardío para evolucionar rápidamente al precio de la desestabilización. En Rusia, el Estado hizo esfuerzos por fomentar la industrialización en las décadas de 1870, 1890 y después de 1908; los dos primeros dirigidos por capital extranjero y el último por capital interior. La industrialización rusa obtuvo bastante éxito en esta última fase (McKay, 1970), pero la agricultura era decisiva porque las exportaciones de trigo financiaban el capital importado y los bienes de capital. La reforma agraria preocupó siempre al régimen, pero lo sumió en una espantosa turbulencia social. Austria tuvo ocasión de comprobar que la ayuda estatal al desarrollo económico no aumentaba la cohesión de sus territorios (véase capítulo 10). Las estrategias del desarrollo tardío produjeron crecimiento económico, pero también desestabilización. El modelo alemán de desarrollo tardío se exportaba con dificultad al este de Europa.

¿Por qué adoptaron los partidos y las elites estatales estas estrategias de desarrollo tardío? ¿Por qué fue relativamente estatista el desarrollo? La planificación territorial y centralizada no constituye un aspecto necesario del desarrollo. En el Volumen I analicé dos tipos de desarrollo social en las sociedades agrarias, uno producto de los «imperios de dominación» estatistas, y otro, de las «civilizaciones de múltiples actores de poder» descentralizadas. Europa ha sido un rotundo ejemplo de lo último, que alcanzó su apogeo gracias a la «mano escondida» de la Revolución Industrial. Los imperios de dominación se crearon ante todo mediante la conquista militar; obviamente, la Europa del siglo XIX conoció una forma más pacífica de desarrollo económico estatista. Por mi parte, identifico seis causas, de las cuales, las cuatro primeras resultan coherentes con la literatura economicista del desarrollo tardío (me baso especialmente en Pollard, 1981; *cf.* Kemp, 1978), y la quinta y la sexta proceden de cristalizaciones estatales no económicas.

1. *Se conoce el desarrollo que se pretende conseguir y se puede planificar autoritariamente.* En la Europa del desarrollo tardío y en

los países no europeos relativamente desarrollados, influidos por Europa, el futuro parecía claro. En el marco de una geopolítica competitiva, los países industrializados movilizaron un mayor poder colectivo; otros tuvieron que reaccionar o ser dominados. Prácticamente todos los actores de poder consideraron que «el señor Ciencia y el señor Industria» —como escribieron los autores chinos— eran necesarios para aumentar su poder.

2. *Las fuentes del desarrollo se benefician de la organización autoritaria y centralizada.* Algunas industrias progresaron con toda claridad gracias a la organización autoritaria a gran escala. La inmensa inversión de capital que exigió el ferrocarril fomentó las industrias de capital intensivo: hierro, carbón, minería y maquinaria. A partir de 1880 la Segunda Revolución Industrial amplió la escala, en especial en la minería y las industrias química y metalúrgica. Puede que las corporaciones complementaran la organización autoritaria, pero el Estado tuvo que estar preparado para aportar recursos territorialmente centrados como los aranceles, la moneda y las grandes empresas de crédito. Los ferrocarriles, así como otras comunicaciones materiales y simbólicas, contaron con una base territorial, a menudo «nacional». En este caso, la logística de la competición fue muy importante, porque cuando los Estados construían una red nacional de ferrocarriles, estimulaban el comercio interno. La industria del siglo XIX se diseminó siguiendo las líneas de comunicación que partían de la fuente primordial: el carbón. Aunque el hierro, el acero y la maquinaria localizados cerca de los yacimientos producían con menor eficiencia que los británicos, resultaban competitivos para el mercado interior gracias al ahorro en transporte. Lo mismo vale para los productores agrícolas y artesanos. Las redes de transporte de finales del siglo XX son globales, pero las comunicaciones del XIX se parecían a aquellas telas de araña nacionales que hemos comentado en el capítulo 9. Los mercados quedaron integrados en el territorio estatal.

3. *Los actores de la sociedad civil no pueden organizar estos recursos centralizados y territoriales.* Su capacidad ha variado considerablemente conforme al tiempo y el espacio, pero a lo largo del siglo XIX la escala de la organización estatal y su planificación excedieron en mucho a las de las instituciones económicas privadas. Comparada con los Estados, la empresa capitalista era insignificante. Hacia 1910, la Krupp era la mayor empresa capitalista de Europa, con 64.000 empleados y un volumen de negocios de 600 millones de marcos (Feldenkirchen, 1988: 144), pero el ferrocarril del Estado de Hesse-Prusia

empleaba a 560.000 trabajadores y gastaba 3 billones de marcos, y uno solo de los departamentos del gobierno, el Ministerio de Obras Públicas prusiano era el mayor empresario del mundo, algo superior a las fuerzas armadas con sus 680.000 hombres (Kunz, 1990: 37). Existían otras administraciones y ejércitos comparables en tamaño, pero la mayor corporación capitalista de Francia, la compañía Schneider, sólo contaba con 20.000 empleados (Daviet, 1988: 70).

En todos los países, las grandes corporaciones eran ballenas aisladas en medio de una multitud de empresas pequeñas. Hacia 1910, sólo el 5 por 100 de la fuerza de trabajo francesa, el 8 por 100 de la alemana y el 15 por 100 de la americana se empleaba en establecimientos de más de 1.000 personas. A comienzos de la década de 1960, las cifras alcanzaban el 28, el 20 y el 30 por 100 (Pryor, 1973: 153; Mayer, 1981: 35 a 78; Trebilcock, 1981: 69). Los ratios de concentración aumentaron durante la Segunda Revolución Industrial, pero sólo entre la mitad y un tercio de los niveles de la década de 1960. Hacia 1910 las cien mayores empresas de Francia contribuían con el 12 por 100 a la producción nacional de manufacturas, con el 15 por 100 en Gran Bretaña y con el 22 por 100 en Estados Unidos (Hannah, 1975; Prais, 1981: 4, apéndice E; Daviet, 1988: 70 a 73). Estas cifras demuestran que sólo en el caso estadounidense el Estado no fue un agente obvio de la planificación económica, precisamente porque en ese país el/los Estado(s) era(n) más pequeño(s), y las empresas, más grandes.

Aunque bancos, carteles y monopolios también movilizaron capital, las elites estatales disponían de mayores medios. La clase capitalista británica había financiado básicamente su primer desarrollo industrial, pero en los países más atrasados o menos centralizados, los inversores privados sólo se arriesgaban cuando contaban con apoyo político. Las elites estatales protegían la producción con aranceles, organizando carteles de banqueros e inversores locales, coordinando los créditos de los bancos extranjeros y empleando los impuestos para subvencionar y garantizar los tipos de interés. La planificación de un desarrollo económico a gran escala estaba en manos del Estado.

4. *Las elites estatales y/o los actores no económicos de poder de la sociedad civil favorecen el desarrollo* [1]. Entre los actores dominantes

[1] Puede haber casos en que sólo actúen en su favor ciertas elites estatales con capacidad para *imponer* la colaboración a otros, como hicieron los bolcheviques, pero ningún Estado del siglo XIX dispuso de semejante poder despótico.

del siglo XIX existió un consenso económico. Sólo la iglesia católica volvió la espalda durante algún tiempo al Estado y al «modernismo». Pero otros muchos saludaron con entusiasmo el desarrollo industrial de mediados de siglo, porque las infraestructuras del Estado se consideraban técnicamente útiles para la industria. Podríamos añadir una concepción marxiana a la concepción neoclásica de interés: los antiguos regímenes y las clases capitalistas buscaban también un Estado que defendiera sus derechos de propiedad contra los desposeídos. Richard Tilly (1966) sostiene que la solidaridad entre el régimen y la burguesía se fraguó durante la revolución de 1848, y que a partir de ese momento apoyaron conjuntamente la expansión de las infraestructuras estatales de Prusia.

Pero ni siquiera estas cuatro formas de presión combinadas requerían una coordinación estatal del desarrollo. Las oligarquías de financieros se bastaban para coordinar la mayor parte de las tareas con una pequeña ayuda reguladora *ad hoc* del Estado. A finales del siglo XX ha surgido, junto a los de cada Estado-nación, una multitud de organismos de planificación: corporaciones multinacionales que actúan en colaboración, organizaciones no gubernamentales, la Comunidad Económica Europea, etc. Los intentos de desarrollo tardío en el Tercer Mundo tienden a oscilar entre ciclos de un relativo estatismo y de unas relativas estrategias de mercado. Las relaciones y los intereses económicos, aunque necesarios, no bastan para explicar por qué el desarrollo tardío del siglo XIX dependió en tal medida del Estado central. Veamos, pues, otras dos influencias.

5. *La cristalización militarista del Estado favoreció el desarrollo económico estatista.* Las cifras de los gastos que aparecen en el capítulo 11 demuestran que los Estados de finales del siglo XIX fueron fundamentalmente militaristas en un principio y que acabaron siéndolo a medias. Las presiones geopolíticas y militares fomentaron la organización autoritaria entre los últimos en llegar al desarrollo, y posteriormente lo hicieron en todos los países (Sen, 1984). En todos ellos, sin excluir a los Estados Unidos, las fuerzas armadas fueron con mucho la mayor organización autoritaria del siglo. En tiempos de paz, los ejércitos superaron en diez veces —cincuenta, en tiempos de guerra— el tamaño del mayor empresario privado. En la mayoría de los países industrializados, el consumidor por excelencia fue el Estado, que compraba armamento, uniformes y vituallas para los soldados y los marineros, además de los objetos de lujo para los oficiales, la corte y las capitales del reino. Los principales productos de las

grandes empresas eran sobre todo bienes militares. En principio, los suministros militares procedían de los arsenales y astilleros dirigidos por el Estado o de una multitud de talleres a cargo de subcontratistas autónomos. Ambas cosas dependían de organismos estatales separados de las grandes empresas capitalistas, lo que redujo el primer desarrollo económico estatista, pero durante el siglo XIX aparecieron los primeros «complejos industriales-militares» integrados en el sentido moderno, que se desarrollaron en dos fases.

El ferrocarril participó en la primera fase aunando los motivos militares a la intervención en el desarrollo económico. Superada una etapa de desconfianza, el alto mando descubrió las enormes posibilidades logísticas de las líneas férreas, hasta el punto de que la planificación del ferrocarril en Gran Bretaña se vio influida por las presiones de la marina para asegurarse las comunicaciones de los puertos y los astilleros. En otras partes, los altos mandos, la elite estatal y la clase capitalista colaboraron más estrechamente en la construcción de una red nacional. Cuanto más tardío fue el desarrollo más intervinieron los militares en la planificación de los caminos, alertados por las guerras en las que la movilización por ferrocarril había inclinado los resultados, del lado francés en la campaña italiana de 1859, a favor del norte en la Guerra Civil Americana, y del lado prusiano en 1866 y 1870. A partir de entonces, el trazado de nuevas líneas necesitó el permiso y la participación de los ejércitos en Francia, Rusia, Austria y Alemania, lo que aumentó la supervisión estatal (Pearton, 1984: 24).

La segunda fase comenzó con la carrera de armamento de la década de 1880, y desarrolló lo que McNeill (1983: 279) llama la «tecnología directora», que se vio precedida hacia mediados de siglo por la producción capitalista masiva de balas y armas cortas: las armas prusianas de retrocarga, las balas alargadas Minié en Francia y el Colt y el Springfield americanos, empleando partes intercambiables. Cuando, más tarde, los astilleros navales franceses comenzaron a fabricar barcos de guerra de hierro, se inició la carrera. La escala de la producción aumentó gracias a la participación de las fusiones y los carteles (fomentados por el Estado). Los industriales disponían (como en el caso actual de los Estados Unidos) de un cliente mayoritario para el que el producto tenía más un valor de uso que de cambio. Los Estados militares necesitaban el producto a cualquier precio, por tanto «intervinieron» mediante la inducción y la concesión de crédito público con el fin de cubrir un grado de fabricación que probablemente no habrían asumido los capitales privados. Trebilcock

(1973) cree que de 1890 a 1914 esta inversión rivalizó con la que antes se había destinado al ferrocarril. El desarrollo tecnológico se vio, pues, «dirigido» por la demanda militar. Desde las armas con piezas intercambiables, pasando por la transformación del hierro en acero, debida a Bessemer, hasta el amplio abanico de aleaciones de metales ligeros, las turbinas, los diesel y la maquinaria hidráulica, la mayoría de los adelantos tecnológicos de la época recibieron el estímulo del complejo industrial-militar. La seguridad de la demanda y la dinámica competencia internacional permitieron realizar a estas industrias grandes inversiones en investigación (Trebilcock, 1969: 481; Pearton, 1984: 77 a 86).

Cuando vemos las fotografías del *Dreadnought* nos resulta difícil concebir que aquel buque de guerra de Su Majestad británica, con su casco grande y bulboso, su superestructura angular y sus innumerables protuberancias se considerara tan avanzado técnicamente y tan futurista como podemos considerar hoy un lustroso F-17 o un submarino de la clase *Trident,* en cambio aquellos acorazados fueron el *símbolo* de la Segunda Revolución Industrial, ya que se construyeron en las mayores empresas industriales de la época, empleando la tecnología más avanzada para producir la mayor concentración de fuego de la historia. Y, al contrario que sus equivalentes actuales, generaron un empleo masivo.

El desarrollo militarista y estatista americano sólo difirió al principio en la forma, pero después se estancó. Los gobiernos federales y estatales se encontraban más interesados en la expansión y la integración de la Unión continental que en la rivalidad militar con las grandes potencias, y los resultados no variaron en mucho durante gran parte del siglo. Los gobiernos programaron y subvencionaron canales y ferrocarriles para introducirse en el continente, con el objetivo de enviar al ejército en calidad de ingeniero y exterminador de indios. La guerra civil produjo un súbito desarrollo del complejo industrial-militar y preservó a la Unión, integrando el continente y aumentando la concentración industrial. La deuda de guerra, financiada con valores públicos, expandió la Bolsa, que prestaba a las compañías de ferrocarriles subvencionadas. Como afirma Bensel (1990), el Estado creó el capitalismo financiero americano.

La prosperidad de la gran corporación estadounidense suele explicarse en razón de una lógica puramente técnica y capitalista (Chandler, 1977; Tedlow, 1988), pero como ha observado Roy (1990: 30): «El actor decisivo en la creación de empresas fue el gobierno».

En realidad, quiere decir los gobiernos, ya que fueron los estados individuales quienes llevaron a cabo gran parte de la regulación. Pero a finales de siglo, cuando aún era escasa la presión geopolítica y el continente se encontraba ya totalmente controlado, la economía americana fue menos estatista que la del resto de los países nacionales. Su enorme mercado continental generó las innovaciones empresariales por todos conocidas —la cadena de montaje del Ford T, el catálogo de la Sears Roebuck, la bombilla—, lo que no constituye necesariamente un aspecto del desarrollo capitalista en sí mismo. Alemania, el otro pilar de las empresas durante la Segunda Revolución Industrial, contaba con una economía esencialmente «dirigida».

6. *La cristalización monárquica del Estado favoreció el desarrollo económico estatista.* Al contrario que en los países tempranamente industrializados, los Estados rezagados eran monarquías centradas en el antiguo régimen. Los poderes autónomos de la monarquía contaban con el apoyo de los partidos del antiguo régimen, más particularista que el de las clases dominantes. La alianza de la monarquía con el antiguo régimen tenía sus propias finalidades e intereses privados, que no eran otros que obtener recursos fiscales al margen de las asambleas representativas. Los capítulos 8 y 11 demuestran que tales Estados se sirvieron de los aranceles y los ingresos procedentes de las propiedades estatales con ese objetivo. Los ferrocarriles del Estado concedieron entonces una bonificación fiscal, que contribuyó en gran parte a los ingresos del Estado prusiano. Otras infraestructuras estatales e industrias nacionalizadas se nutrían de todos estos ingresos.

Así pues, las estrategias del desarrollo tardío se vieron impulsadas en primer lugar por los ejércitos y en menor medida por la monarquía; pero, más tarde, las razones militaristas y capitalistas se trasladaron a las democracias de partidos a través de la rivalidad geopolítica. Las relaciones entre las principales cristalizaciones del Estado estuvieron, pues, ampliamente consensuadas y reforzaron la cuarta condición que acabamos de enumerar. Paulatinamente, la política (aunque en menor medida la retórica) de las elites estatales y los partidos, los altos mandos y las clases capitalistas implicaba que su meta común, la construcción de una sociedad industrial (unida en Estados Unidos a la integración de la Unión continental), se estimulaba mejor si la «mano invisible» transnacional del mercado no quedaba abandonada a su propia lógica.

Así, una vez más, estamos ante un extraño caso de intervención estatal *contra* los actores de poder de la sociedad civil. Como sostiene

Giddens (1985), el Estado dotado de nuevos poderes se convirtió en un auténtico Leviatán. Desaparecidos los obstáculos logísticos para la penetración en el territorio, las infraestructuras estatales se expandieron irregularmente por la sociedad civil, reduciendo su tradicional separación del Estado y convenciendo a muchos elementos de las clases dominantes de las ventajas de la regulación, incluso de la iniciativa política del regímen en materia económica. Pero en las democracias de partidos «intervención» no significaba tanto coerción como coordinación y persuasión. Las monarquías, por su parte, explotaron las oportunidades fiscales no contra la clase capitalista, sino con el objetivo de eludir la democracia.

La idea no solía ocurrírseles a ellos. Los monarcas, los partidos del antiguo régimen, los altos mandos y los partidos burgueses tenían intereses distintos, y a veces contrapuestos, pero no se enfrentaron directa ni dialécticamente. Los capitalistas saludaron el crédito estatal, la protección y las infraestructuras de comunicación. La carrera de armas aseguró los mercados para los bienes de capital, y el pleno empleo creó grandes mercados de consumo; aunque les preocupaba el hecho evidente de que sus intereses no eran los mismos que los de la elite estatal y los altos mandos, el balance general de la transacción fue positivo. Los Estados monárquicos aseguraban que su actividad en la construcción de los ferrocarriles, el establecimiento de industrias estatales y las licencias para las industrias privadas respondía a un espíritu tecnocrático y neutral. Un ministro prusiano de comercio declaraba que «con tal de que se construyan ferrocarriles no importa quien lo haga» (Henderson, 1958: 187). Los países rezagados respaldaron el capitalismo privado para estimular el desarrollo económico general, y los ejércitos lo aseguraron y probablemente lo extendieron. Ambos emplearon los ingresos en impedir la aparición de las democracias de partidos.

Puesto que las metas capitalista, militar y monárquica eran compatibles con las cristalizaciones, no hubo que elegir entre éstas. Las cristalizaciones estatales eran *complementarias,* aunque, como veremos, resultaron también desastrosas. Ni las elites estatales ni los partidos se opusieron al capitalismo; al fin y al cabo, necesitaban industrias provechosas para sus productos e ingresos procedentes de los impuestos. Durante siglos habían apoyado también el derecho a la propiedad privada. Cuando los Estados debieron afrontar el choque frontal entre las clases, tomaron el partido de la clase dominante, quizás mitigado por su tendencia al orden público y la moral. Tendre-

mos oportunidad de comprobar más adelante que la autonomía estatal fue mayor en la política exterior que en la nacional, y que esta última ejerció ante todo sobre las clases subordinadas.

Pero el Estado no se limitó a apuntalar la propiedad capitalista, pues la mitad de sus recursos se invirtieron en el enfrentamiento militar con otros países. Cuando se entrelazaron las cristalizaciones militares y capitalistas, tanto el capital como el Estado aportaron una mayor organización nacional y unas concepciones de interés basadas en el territorio. Pero se trató de un hecho inconsciente por ambas partes. Cuando la rivalidad geopolítica comenzó a influir en la economía política de los primeros en industrializarse, *su* organización se hizo más nacional, y *su* concepción del beneficio más territorial. Ésta fue la principal autonomía del poder estatal del siglo XIX, no una estrategia consciente de la elite, sino, ante todo, el resultado involuntario de cuatro cristalizaciones estatales entrelazadas: capitalista, militarista, democracia de partidos o monarquía y Estado-nación emergente.

Ciudadanía social, militarismo y monarquismo

Vemos en el cuadro 11.5 las tres grandes ampliaciones de la esfera civil del Estado. Una vez analizada la expansión de las infraestructuras y la nacionalización de los recursos, entraré a examinar la última de ellas, el Estado asistencial, y los primeros pasos hacia la «ciudadanía social» de Marshall. Como indica el cuadro 11.5, las democracias de partidos no invirtieron más que otros regímenes en bienestar. En realidad, Francia y Gran Bretaña estaban comenzando a organizar la asistencia, y la segunda no adoptó decididamente un sistema progresivo de impuestos hasta el final del periodo. El mayor gasto en asistencia de la época corresponde a Alemania, cuyo elemento más significativo fue el programa de seguridad social de Bismarck, aunque hasta 1913 su gasto no sobrepasó la administración de una asistencia social en el plano local o el programa de la Ley de Pobres (Steinmetz, 1990a, 1990b). En el cuadro 11.5 no se recogen los sustanciosos beneficios asistenciales que desembolsaron Francia y Estados Unidos por gastos militares. Los primeros pasos del Estado asistencial tuvieron algo de monárquico y de militar.

Pero los regímenes afrontaban ahora un problema «político» de mayor calado. Tanto el capitalismo como la urbanización habían debilitado los controles locales y regionales de carácter segmental sobre

las clases bajas. Los trabajadores sin propiedades, sometidos a los mercados capitalistas, recibían con frecuencia el trato deparado a indigentes, trashumantes o rebeldes, y los campesinos soportaban las pesadas cargas que impuso la comercialización. Pero, puesto que el capitalismo también había dado nuevos poderes a la acción colectiva de campesinos y trabajadores (véanse los capítulos posteriores), se imponían nuevas formas de control social, especialmente en las ciudades más florecientes.

La intención de «conservar el orden» por parte del régimen combinaba la «acción policial» con la «asistencial». Como hemos visto en el capítulo 12, las fuerzas encargadas de mantener el orden se hicieron muy variadas, primero fueron paramilitares y luego policía civil, y lo mismo ocurría en la acción asistencial. Lo tradicional había sido la Ley de Pobres aplicada en el plano local, pero la industrialización, la movilidad geográfica y el aumento del desempleo sectorial introdujeron tensiones de expresión irregular. Tanto en Gran Bretaña como en Alemania (y quizás también en otros países cuyos testimonios son más escasos) las Leyes de Pobres constituyeron la mayor partida de gasto civil durante la primera mitad del siglo XIX, pero, además de conseguir resultados insignificantes, no reconocían que los pobres tuvieran derechos, mucho menos de ciudadanía civil. Los indigentes, los enfermos o los muy viejos sólo se libraban de la inanición si demostraban «merecerlo», a menudo clasificándose ellos mismos en los asilos. No obstante, aparecieron otras dos formas de asistencia: el seguro privado y el Estado del bienestar selectivo. Es decir, no se trataba de una ciudadanía social universal, sino de una asistencia segmental y seccional, que intentaba crear redes de individuos leales entre los campesinos y los trabajadores.

El autoseguro nació desde la base, en las mutuas de socorro, la principal función «proteccionista» de los primeros sindicatos, (véanse los capítulos 15 y 17), que prosperaron entre los trabajadores relativamente cualificados y los oficios más seguros, y fueron aprobadas, y a veces estimuladas, por las clases dominantes, como un signo de frugalidad y respetabilidad que separaba a los artesanos de las «clases peligrosas». Es probable que fomentaran el seccionalismo entre las clases bajas, y no implicaron al Estado hasta finales del periodo.

Pero ya antes de que aparecieran estas mutualidades, algunos Estados habían creado organizaciones asistenciales. Puesto que Francia y Estados Unidos entraron en la modernidad con la movilización masiva para la guerra y las luchas armadas revolucionarias, muchos

varones adultos habían perdido la vida o quedaron lisiados en defensa de «sus» Estados. Entonces se habilitó el pago de gratificaciones a los mutilados y las viudas y huérfanos de los muertos. En Francia, los revolucionarios habían introducido un sistema de pensiones para los heridos y los veteranos, sancionado después por Napoleón, que en 1813, suponía el 13 por 100 del presupuesto militar y beneficiaba a más de 100.000 veteranos. Tanto el número como el porcentaje se mantuvieron hasta 1914 (Woloch, 1979: 207 y 208).

El gobierno federal de los Estados Unidos pagó gratificaciones por mutilación o muerte a los veteranos y a sus herederos desde la década de 1780, cuyo presupuesto superaba en 1820 el conjunto de los gastos civiles federales. Estas sumas alcanzaban su punto culminante durante la segunda y la tercera décadas posteriores a cada guerra, pero luego disminuían. Con la guerra civil se creó un auténtico sistema de pensiones para la vejez, del que se beneficiaba en 1900 la mitad de los varones ancianos y blancos. Los veteranos constituían del 12 al 15 por 100 del electorado más reivindicador en los estados del norte y del medioeste. Los miembros del Gran Ejército de la República ascendían a 428.000 en 1890, más de la mitad de los miembros del conjunto de los sindicatos. Las pensiones militares superaron de nuevo el total de los gastos civiles federales de 1892 a 1900, antes de comenzar a disminuir. Pero de 1882 a 1916 absorbieron del 22 al 43 por 100 del total de los gastos federales. Aunque el Estado confederado, mucho más pobre, no pagaba pensiones, muchos estados sureños las garantizaron (modestamente) a partir de la década de 1890. Es decir, aunque se trate de un hecho poco conocido, los Estados Unidos tuvieron el primer Estado asistencial, pero sólo para los que le habían demostrado lealtad (este párrafo debe mucho a las investigaciones de Orloff y Skocpol; véase Orloff, 1988).

En efecto, Francia y Estados Unidos dieron un tinte militar a la ciudadanía, que los franceses definieron en ocasiones como *l'impôt du sang* (el impuesto de sangre). La Constitución estadounidense establece la existencia de una milicia ciudadana, en una cláusula que a veces viene interpretada como la garantía del derecho a llevar armas (incluidas las automáticas). Tales estados se encontraban realmente insertos en una ciudadanía formada por soldados, a la que se premiaban los servicios prestados y se le compraba el apoyo político. Los regímenes burgueses de la Francia decimonónica carecían de implantación entre las masas campesinas, de modo que siempre contaron con un ejército grande y bien armado en cada pueblo francés. En

1811 la mayor parte de los *départements* tenían al menos tres pensionistas por cada mil habitantes (Woloch, 1979: 221 a 229). No parecen muchos, pero muy probablemente era lo más lejos que podía llegar en su implantación en la sociedad civil un Estado del siglo XIX. En América las cosas eran distintas. El sufragio para los hombres adultos blancos y el sistema bipartidista introdujeron la competición por el voto de los trabajadores y los campesinos. En el norte apareció una coalición republicana entre los trabajadores blancos y el capital industrial. El consentimiento de los trabajadores del norte a los aranceles se compró en parte con las pensiones de los veteranos. Tenemos, pues, una «ciudadanía social» selectiva y segmental, no universal. El régimen no obtenía ya, como en las sociedades agrarias, una lealtad particularista al linaje y la región por parte de campesinos y obreros, sino una nueva fidelidad al Estado-nación universal.

Prusia-Alemania y Austria no siguieron en esto a Francia y Estados Unidos, pero allí los veteranos, especialmente en el nivel de los suboficiales, disfrutaban de derechos especiales en los empleos civiles del Estado (lo que también ocurría en Francia), como sabemos por el capítulo 13. A esta política vino a sumarse una segunda: los programas asistenciales selectivos que introdujo Bismarck por primera vez en la historia.

Los rezagados estaban en condiciones de aprender de otros y de prever tanto los peligros como los beneficios. Los extranjeros que habían visitado Gran Bretaña no hablaban sólo del desarrollo técnico, del dinamismo económico o del Parlamento, sino también de la miseria de las ciudades, la delincuencia y el enfrentamiento de las clases. Los intelectuales alemanes, cada vez más incorporados al Estado, estaban bien informados y aprendieron la lección del cartismo y de lo que podía pasar cuando la industrialización se dejaba a la «mano invisible». Diagnosticaron el «mal británico», es decir, la lucha de clases, que, según Bismarck, había debilitado fatalmente a los ejércitos franceses en 1870. Estudiaron las Leyes de Pobres inglesas, las cooperativas, las mutualidades de socorro, los talleres nacionales de Francia, los fondos aseguradores de las pensiones de vejez y enfermedad de Francia y Bélgica y las sociedades de seguros mutuos belgas. Los sistemas de seguros circulaban en Alemania como un modelo liberal de autoayuda en competición con el modelo «social» o «monárquico patriarcal» (Reulecke, 1981). Las monarquías dinásticas habían practicado la asistencia particularista. La Prusia de 1776 redujo la jornada laboral de los mineros a ocho horas, garantizó un sueldo fijo, prohi-

bió el trabajo de los niños y las mujeres y estableció un sistema de beneficencia, todo ello como sucedáneo de la exección del servicio militar a los mineros. Los ministros austriacos de María Teresa y José II habían introducido varias medidas asistenciales, que tuvieron que restringir por falta de fondos.

Pero Alemania fue la primera en dar un carácter general a los beneficios particulares. La legislación sobre la seguridad social debida a Bismarck absorbió el 10 por 100 de los gastos del *Reich* desde los comienzos en 1885; el 20 por 100, después de diez años de funcionamiento; y el 30 por 100, en 1910. Teniendo en cuenta que lo restante se dedicaba a los gastos militares, podemos apreciar su importancia. Ayudar a los trabajadores a protegerse a sí mismos de la indigencia, y convencer a sus empresarios de que los apoyaran llegó a ser una de las metas fundamentales del régimen. Los restantes países no los imitaron enseguida. Austria lo hizo en 1885-1887, pero estableció una cobertura mínima (Macartney, 1971: 633; Flora y Alber, 1981). Ni siquiera la legislación alemana era tan generosa, ya que preveía sólo pagos en los casos menores de enfermedad o accidente, cubría algo más de la mitad de los trabajadores que tenían un empleo y garantizaba una pensión apenas adecuada a los setenta años (más tarde, a los sesenta y seis), siempre que el trabajador hubiera estado activo durante 300 días anuales durante 48 años. Sólo la pensión contenía una contribución estatal, de modo que, en gran parte, el sistema consistió en un autoseguro obligatorio. No trataré aquí el asunto, mucho más debatido, de la seguridad en las fábricas y las inspecciones del trabajo, encaminados en primer lugar a prevenir los accidentes y las enfermedades (Tampke, 1981), y que podían transgredir los derechos de propiedad.

Bismarck intentaba ejercer un control segmental sobre los trabajadores, tratando de seducir a los más cualificados y organizarlos al margen del socialismo. La legislación de la seguridad social era su zanahoria; las leyes antisocialistas, su palo. No buscaba el entusiasmo de los trabajadores, sino sólo que la lucha de clases no socavara al Estado ni a sus ejércitos. Aliviar la indigencia de los trabajadores más cualificados de la industria parecía una medida adecuada al propósito.

Pero había aún otra razón más general: la concentración económica del capitalismo. La legislación de Bismarck no hizo más que ampliar ciertas políticas que encontramos en algunas grandes industrias (Ullman, 1981). Los grandes industriales fueron los primeros partidarios de una legislación que introdujera pensiones de vejez e in-

capacidad y seguros en caso de accidente (aunque más tarde se opusieron al seguro de desempleo), que al principio se impusieron contra los intereses de los patronos más débiles. En efecto, la escasez de fondos obligó a Bismarck a adoptar en mayor medida de lo que él mismo había pensado el principio el autoseguro que propugnaban los grandes empresarios. Después, el sistema asistencial recibió un considerable apoyo de un sector más nuevo, el de la industria ligera. Puesto que sus términos de eligibilidad conllevaban incentivos a los trabajadores, tendieron a dar un carácter de «mercancía» a la asistencia, en la línea capitalista (Steinmetz, 1990a, 1990b). La legislación de Bismarck no anticipó tanto el Estado asistencial (como suele afirmarse) como el sistema de las empresas japonesas o estadounidenses de finales del siglo XX, donde los trabajadores que se benefician de los mercados de trabajo de las corporaciones interiores permanecen leales al capitalismo (y, en ocasiones, al militarismo) y rechazan el socialismo y los sindicatos. Trataba de institucionalizar el conflicto de clase, como sostiene Marshall, pero sólo neutralizando a la clase mediante organizaciones segmentales que vinculaban a los trabajadores privilegiados con sus empresarios y con el Estado.

Así pues, los sistemas francés, americano y alemán, que mitigaban la pobreza, encarnaban también dos principios: el derecho, derivado de la nación, del ciudadano-soldado, y el autoseguro, fomentado tanto por las monarquías como por el capitalismo de empresa. Ninguno cubrió a todos los ciudadanos (y mucho menos a los adultos), ya que se trataba de derechos selectivos, sólo para quienes proporcionaban recursos militares o económicos decisivos para el régimen y el capital. La intención, y a veces el efecto, era reconducir segmentalmente la conciencia de clase hacia el nacionalismo o el seccionalismo.

Con todo, ambos sistemas extendieron de modo radical las actividades del Estado muy por encima de las redes de poder local y segmental. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, muchos liberales británicos, demócratas estadounidenses y radicales franceses vincularon el Estado asistencial a los impuestos progresivos. Sólo el partido liberal, dirigido por políticos creativos con gran capacidad persuasiva, fue capaz de legislarlo antes de 1914. Lloyd George unió el esquema sindicalista y el de las compañías privadas de seguros en un sistema más completo, regulado por el gobierno. Las ventajas aún no llegaban a todos los ciudadanos, porque estaban restringidas a los hombres con empleo estable, pero eran ya demasiado generales para cualquier estrategia segmental de «divide y vencerás», aunque la in-

tención era dejar sin argumentos al partido laborista. Pero lo importante es que se complementaron con un sistema progresivo de impuestos sobre la renta, que permitía mitigar sistemáticamente la pobreza de unos con la riqueza de otros, ni más ni menos que el primer reconocimiento de la ciudadanía social por parte estatal. El Estado moderno comenzaba a realizar su tercer cambio trascendental.

Tres condiciones fundamentales estaban en la base de los distintos sistemas: el desarrollo de unas clases bajas extensivas y políticas, la movilización de una asistencia social masiva y el capitalismo de las corporaciones. Cuando persistían los tres, aquellos derechos segmentales social-militares y seccionales de clase podrían transformarse en una ciudadanía social universal, y, en efecto, persistieron. De hecho, en las dos guerras mundiales, la movilización de masas se convirtió en guerra total en toda Europa, que afectaba a la totalidad de los ciudadanos. Sólo en Estados Unidos resistieron de forma significativa los derechos segmentales al tercer gran cambio en la vida del Estado, la aparición de la ciudadanía social. Pero esto ocurrió en tiempos mucho más recientes, con posterioridad al periodo que analizamos en estas páginas.

Conclusión a los capítulos 11 a 14

En estos cuatro capítulos he documentado los dos grandes cambios que experimentaron los Estados occidentales. A lo largo del siglo XIX también su tamaño aumentó espectacularmente. Sorprende el hecho de que hacia 1800 hubieran alcanzado el mayor volumen en relación con sus respectivas sociedades, fecha en la que comenzaron a decaer. Sin embargo, su esfera de acción continuó siendo la tradicional, predominantemente militar. El Estado era poco más que un recaudador de ingresos que reclutaba sargentos, sin embargo, hacía mella en la vida social y la politizaba. En la segunda transformación, que comenzó a finales del siglo XIX, no creció tanto en tamaño (relativo) como en el conjunto de sus funciones. La vida social estaba ahora muy politizada, aunque la intensidad y el conflicto eran menores que en el siglo XVIII. En 1914 había ya Estados duales, es decir, civiles y militares. Los grandes cambios que experimentó influyeron intensamente en sus relaciones con la sociedad civil; el Estado se burocratizó y se hizo más representativo, a medida que las elites y los partidos se dedicaron a coordinar sus funciones en expansión. La sociedad civil,

por su parte, se «naturalizó» en el Estado-nación y quedó enjaulada dentro de las fronteras de la soberanía estatal.

El segundo cambio de importancia, la expansión de las funciones civiles no supuso ni un aumento de la autonomía ni tampoco del poder despótico de las elites estatales, como ha resaltado la teoría elitista; por el contrario, el Estado fue dual, un centro que irradiaba a todo el territorio, donde convivían las elites y los partidos, aunque la politización reforzó en mayor medida a estos últimos. Las teorías reduccionistas de las clases sobre el «Estado capitalista» sólo sería posible si nos limitáramos a observar sus actividades civiles internas en relación con las de la clase dominante. Entre tales teóricos dotados de anteojeras destaca Marx cuando describe el Estado británico del siglo XIX como un «pacto burgués de seguro mutuo» o un «comité ejecutivo para gestionar los negocios de la burguesía», aunque subestimó en cierta forma las restricciones que impusieron al capitalismo la cristalización moral-ideológica y la democracia de partidos, que obligaron al Estado a realizar ciertas «intervenciones» contra las libertades capitalistas, aunque siempre con la persuasión y la acción encubierta más que a través de una legislación abiertamente hostil. En general, puede decirse que estos Estados habían cristalizado antes que ninguna otra cosa como Estados capitalistas, y que, desde el punto de vista interior, no eran tanto actores como lugares de poder. Y esta finalidad dio cohesión a las distintas instituciones.

Lo mismo puede decirse en gran parte del Estado francés y del americano, aunque las elites y los partidos estadounidenses se encontraban dispersos en varios gobiernos —con la excepción del sur—, mientras que Francia los centralizó en su capital. Por descontado, en las monarquías semiautoritarias de Prusia y Austria, y más aún en la autocrática Rusia, las elites y los partidos monárquicos disfrutaban de una mayor autonomía (aunque pocas veces de cohesión). Pero ante todo, por razones históricas muy concretas, *el* Estado —allí donde tuvo mayor importancia en este periodo, es decir, entre los europeos occidentales y los norteamericanos— puede reducirse en términos de lucha abierta por el poder político interior a la clase capitalista dominante en la sociedad civil. No siempre ha sido así, pero, sin duda, la teoría reduccionista y economicista tiene su mayor fuerza en la política interior del siglo XIX.

Tal reduccionismo, sin embargo, podría descuidar gravemente dos cristalizaciones estatales posteriores que al combinarse revolucionaron el capitalismo y la vida social en todo el planeta. En primer lu-

gar, el crecimiento del poder infraestructural del Estado no fue neutral, sino que consolidó una politización y una naturalización de la vida social que ya estaba en marcha desde antes. No a través de una lucha directa como la que Marx atribuye a las clases, sino, una vez más, de forma inconsciente, sin proponérselo, las redes de poder fueron reconducidas al campo del territorio estatal y, consiguientemente, *enjaularon* y naturalizaron la vida social hasta en sus esferas más íntimas, y territorializaron los conceptos sociales de identidad y de interés. El Estado moderno cristalizó en el *Estado-nación.* Este hecho se entrelazó entonces con una lucha política destinada a tener una larga vida sobre el carácter centralizado y nacional o descentralizado y federal del Estado, que produjo formas intersticiales de centralización nacional (aunque, en este punto, los Estados Unidos se estancaron y Austria se desvió hacia el confederalismo). El reduccionismo de la teoría de las clases descuida también la tercera cristalización del Estado moderno, el *militarismo,* que si ya no dominaba al Estado como en otras épocas, había adquirido una enorme autonomía y una capacidad no menor de aislar el control infraestructural sobre «sus» fuerzas armadas y era, por tanto, más peligroso en potencia (como he sostenido en el capítulo 12 y probaré en el 21).

Durante todo el siglo XIX, estas dos cristalizaciones confinaron, aunque de forma irregular, el capitalismo y la vida social en formas más nacionales y territoriales. Parece que las tres cristalizaciones —capitalismo, militarismo y Estado-nación— operaron a un nivel más alto de causalidad general que las restantes, sin embargo, nunca colisionaron frontalmente, de modo que, partiendo de los resultados, o bien debemos conferirles la categoría de «últimas» o bien debemos entender que se produjo un compromiso sistemático al que podríamos aplicar la teoría pluralista. La mayoría de los Estados *parecían* relativamente armoniosos, ya que sus elites y partidos compartían un amplio consenso sobre las finalidades del gobierno, que en Gran Bretaña se realizaron hacia mediados de siglo, y en Francia, Alemania y los Estados Unidos dos o tres décadas más tarde, y sólo faltaron en Austria. Sin embargo, se trató de un consenso casual, irreflexivo y no probado. Las cristalizaciones se sumaban unas a otras sin considerar seriamente las contradicciones últimas, en especial, como hemos atisbado en los capítulos 9 y 10, en las monarquías semiautoritarias. La cristalización monárquica, como la democracia de partidos, añadieron otras influencias más variables y peculiares a lo largo del periodo, como tendremos ocasión de comprobar en los siguientes capítulos,

pero dado que ningún Estado fue plenamente representativo, la teoría pluralista sólo ha brindado explicaciones limitadas.

Cuando el Estado se hizo más polimorfo, su aparente cohesión comenzó a desmoronarse. En épocas anteriores, la mayoría de los Estados estuvieron realmente cohesionados por encontrarse sometidos al control de elites pequeñas y de partidos característicos: príncipes, oligarquías de comerciantes, clero o grupos de guerreros. Disfrutaron de una considerable autonomía en la esfera política que dominaban, pero no eran capaces de enjaular la vida social, que se producía fuera de su alcance. Hemos visto, sin embargo, que a medida que disminuía esta autonomía aumentaba el enjaulamiento, ya que el Estado se convirtió en la irradiación de la elite central y de los partidos, a través de los que se organizaba gran parte de la vida social. Pero al producirse este fenómeno, el Estado perdió su anterior coherencia particularista.

Uno de los datos básicos de mi trabajo es la convicción de que las sociedades no son sistemas, porque no hay una estructura que determine en última instancia la existencia humana, al menos ninguna que los actores o los observadores sociales sean capaces de discernir desde el interior. Lo que llamamos sociedades son sólo agregados elásticos de distintas redes de poder que se superponen y se cruzan. La actividad de los Estados del siglo XIX se dirigió a representar y organizar burocráticamente esa diversidad, pero sin recurrir sistemáticamente al enfrentamiento, la jerarquización o el compromiso de las consiguientes cristalizaciones polimorfas. El peligro para la existencia humana está en que reunieron un terrible poder colectivo, difícil de dominar por su control soberano o por cualquier otra forma de control. En el Capítulo 21 comprobaremos que en julio de 1914 el polimorfismo aditivo casual de los Estados europeos superó a toda una civilización de múltiples actores de poder.

Bibliografía

Bensel, R. 1990: *Yankee Leviathan: The Origins of Central State Authority in America, 1859-1877.* Cambridge: Cambridge University Press.

Bland, L. 1982: «"Guardians of the race" or "vampires upon the nation's health"?: female sexuality and its regulations in early twentieth-century

Britain». En *The Changing Experience of Women*, ed E. Whitelegg *et al.* Oxford: Oxford University Press.
Chandler, A. D. 1977: *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business.* Cambridge, Mass.: Belknap Press. [Ed. cast.: *La mano visible.* Madrid, Ministerio de Trabajo y S.S., 1988.]
Cronin, J. E. 1988: «The British state and the structure of political opportunity». *Journal of British Studies*, 27.
Daviet, J.-P. 1988: «Some features of concentration in France (end of the nineteenth century/twentieth century)». En *The Concentration Process in the Entrepreneurial Economy Since the Late Nineteenth Century*, ed. H. Pohl. Wiesbaden: Steiner.
Davin, A. 1978: «Imperialism and motherhood». *History Workshop*, 5.
Digby, A. 1982: *The Poor Law in Nineteenth-Century England and Wales.* Londres: Historical Society.
Feldkirchen, W. 1988: «Concentration in German industry, 1870-1939». En *The Concentration Process in the Entrepreneurial Economy Since the Late Nineteenth Century*, ed. H. Pohl. Wiesbaden: Steiner.
Flora, P., y J. Alber, 1981: «Modernization, democratization, and the development of welfare states in Western Europe». En *The Development of Welfare States in Europe and America*, ed. P. Flora y A. J. Heidenheimer. New Brunswick, N. J.: Transaction Books.
Gerschenkron, A. 1962: *Economic Backwardness in Historical Perspective.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
— 1965: «Typology of industrial development as a tool of analysis». *Second International Conference on Economic History.* París: Mouton.
Giddens, A. 1985: *The Nation-State and Violence.* Cambridge: Polity Press.
Good, D. F. 1984: *The Economic Rise of the Habsburg Empire, 1750-1914.* Berkeley y Los Ángeles: University of California Press.
Grew, R. 1984: «The nineteenth-century European state». En *Statemaking and Social Movements*, ed. C. Bright y S. Harding. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Hannah, L. 1975: *The Rise of the Corporate Economy.* Londres: Methuen & Co.
Henderson, W. O. 1958: *The State and the Industrial Revolution in Prussia, 1740-1870.* Liverpool: Liverpool University Press.
Keller, M. 1977: *Affairs of State: Public Life in Late Nineteenth-Century America.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Kemp, T. 1978: *Historical Patterns of Industrialization.* Londres: Longman Group.
Koven, S., y S. Michel, 1990: «Womanly duties: maternalist politics and the origins of the welfare states in France, Germany, Great Britain, and the United States, 1880-1920». *American Historical Review*, 95.
Kunz, A. 1990: «The state as employer in Germany, 1880-1918: from paternalism to public policy». En *The State and Social Change in Germany,*

1880-1980, ed. W. R. Lee y E. Rosenhaft. Nueva York: Berg.
Lubenow, W. C. 1971: *The Politics of Government Growth: Early Victorian Attitudes Toward State Intervention, 1833-1848.* Hamden, Conn.: Archon Books.
Macartney, C. A.1971: *The Habsburg Empire, 1710-1918.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
MacDonagh, O. 1977: *Early Victorian Government, 1830-1870.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
McKay, J. P. 1970: *Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization, 1885-1913.* Chicago: University of Chicago Press.
McNeill, W. H. 1983: *The Pursuit of Power.* Oxford: Blackwell.
Marsh, P. (ed.), 1979: *The Conscience of the Victorian State.* Siracusa, N. Y.: Syracuse University Press.
Mayer, A. 1981: *The Persistence of the Old Regime.* Nueva York: Pantheon. [Ed. cast.: *La persistencia del antiguo régimen.* Madrid, Alianza Editorial, 1986.]
Mitchell, B. R. 1975: *European Historical Statistics, 1750-1970.* Nueva York: Columbia University Press.
Orloff, A. 1988: «The political origins of America's belated welfare state». En *The Politics of Social Policy in the United States,* ed. M. Weir *et al.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Pearton, M. 1984: *Diplomacy, War and Technology Since 1830.* Lawrence: University of Kansas Press.
Pollard, S. 1981: *Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe, 1760-1970.* Oxford: Oxford University Press.
Prais, S. J. 1981: *The Evolution of Giant Firms in Britain.* Cambridge: Cambridge University Press.
Pryor, F. L. 1973: *Property and Industrial Organization in Communist and Capitalist Nations.* Bloomington: University of Indiana Press.
Reulecke, J. 1981: «English social policy around the middle of the nineteenth century as seen by German social reformers». En *The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany,* ed. W. J. Mommsen. Londres: Croom Helm.
Roy, W. G. 1990: «Functional and historical logics in explaining the rise of the American industrial corporation». *Comparative Social Research,* 12.
Sen, G. 1984: *The Military Origin of Industrialization and International Trade Rivalvy.* Nueva York: St. Martin's Press.
Senghaas, D. 1985: *The European Experience: A Historical Critique of Development Theory.* Leamington Spa: Berg.
Skowronek, S. 1982: *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920.* Cambridge: Cambridge University Press.
Soderberg, J. 1985: «Regional economic disparity and dynamics, 1840-1914:

a comparison between France, Great Britain, Prussia and Sweden». *Journal of European Economic History,* 14.

Steinmetz, G. 1990*a*: «The local welfare state: two strategies for social domination in urban imperial Germany». *American Sociological Review,* 55.

— 1990*b*: «The myth and the reality of an autonomous state: industrialists, Junkers and social policy in imperial Germany». *Comparative Social Research,* 12.

Sutherland, G. (ed.), 1972: *Studies in the Growth of Nineteenth Century Government.* Londres: Routledge & Kegan Paul.

Tampke, J. 1981: «Bismarck's social legislation: a genuine breakthrough?». En *The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany,* ed. J. Mommsen. Londres: Croom Helm.

Taylor, A. J. 1972: *Laissez-Faire and State Interventon in Nineteenth Century Britain.* Londres: Economic History Society.

Tedlow, R. S. 1988: «The process of economic concentration in the American economy». En *The Concentration Process in the Entrepreneurial Economy Since the Late Nineteenth Century,* ed. H. Pohl. Wiesbaden: Steiner.

Tilly, R. 1966: «The political economy of public finance and the industrialization of Prussia, 1815-1866». *Journal of Economic History,* 26.

Trebilcock, C. 1969: «"Spin-off" in British economic history: armaments and industry, 1760-1914». *Economic History Review,* 2.ª ser., 22.

— 1973: «British armaments and European industrialization, 1890-1914». *Economic History Review,* 2.ª ser., 26.

— 1981: *The Industrialization of the Continental Powers, 1780-1914.* Essex: Longman Group.

Ullman, H.-P. 1981: «German industry and Bismarck's social security legislation». En *The Emergence of the Welfare State in Britain and Germany,* ed. W. J. Mommsen. Londres: Croom Helm.

Watkins, S. C. 1991: *From Provinces into Nations. Demographic Integration in Western Europe, 1870-1960.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Weber, E. 1976: *Peasants into Frenchmen.* Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Weeks, J. 1981: *Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality Since 1800.* Londres: Longman Group.

Woloch, I. 1979: *The French Veteran from the Revolution to the Restoration.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Capítulo 15
LA RESISTIBLE ASCENSION DE LA CLASE OBRERA BRITÁNICA, 1815-1880

Teorías sobre el movimiento obrero

La mayor parte de las historias del movimiento obrero comienzan en Gran Bretaña, la única nación industrial del siglo XIX, que contaba también con la clase obrera más numerosa. Como indica el cuadro 15.1, ya en 1815, fecha de la batalla de Waterloo, es decir, cien años antes que el resto de las grandes potencias, el número de trabajadores de la industria superaba el de la agricultura (véase también el cuadro 19.1).

La temprana aparición de la clase obrera británica la convierte en un hecho único. Cuando, a comienzos del siglo XX, otras potencias alcanzaron un alto grado de industrialización, con fuerzas obreras comparables, la naturaleza de la industrialización, del Estado y de la clase se había transformado sensiblemente. Lo que vivió el primer proletariado en Gran Bretaña, en especial durante la experiencia cartista, no conoce parangón. En efecto, aquella clase obrera se ha considerado siempre —y aún se considera— el prototipo de todas las posteriores. Marx y Engels (que dirigió una fábrica en Stockport), exiliados en Gran Bretaña, elaboraron su teoría a partir de su expe-

riencia británica e influyeron con sus escritos en los autores posteriores. Sus tesis principales eran las siguientes:

1. El capitalismo difundió una división cualitativa entre el capital y el trabajador como «clases universales» *semejantes* de la sociedad civil.
2. El capitalismo industrial masificó la mano de obra y creó una situación de interdependencia de los trabajadores, tanto en el lugar de la producción como en el mercado laboral, tranformándolos en «trabajadores colectivos» *interdependientes,* que se agruparon en sindicatos y emprendieron acciones colectivas de clase.
3. La semejanza y la interdependencia se veían reforzadas fuera del trabajo por la existencia de *comunidades* densas y capaces de organizarse cultural y socialmente de forma autónoma.
4. Estas tres capacidades para la acción colectiva generaron una política de clase y un *partido socialista* preparado para tomar el poder político, si era necesario, mediante una revolución.

Aunque estoy de acuerdo con gran parte de las tesis de Marx y Engels, me aparto de su modelo en cinco puntos:

1. Si bien es cierto que los trabajadores se convirtieron en «trabajadores colectivos», este hecho no produjo por lo general una sola clase obrera, especialmente en el conflicto económico relativamente puro. Como sostuvo Weber, los trabajadores contaban con recursos económicos de poder más diversos de lo que creía Marx. Aunque no tenían la propiedad de los medios de producción, muchos controlaban la oferta del mercado de trabajo de su oficio, practicando lo que Parkin (1979) ha llamado «cierre» del mercado para los que pretendían ejercer la misma profesión. Puesto que el siglo XIX conoció una abundante oferta de trabajo, las posibilidades de cerrar un mercado dependían de la capacidad para impedir el empleo de «esquiroles». Marx y Engels creyeron que el capitalismo, al homogeneizar las distintas cualificaciones laborales, transformaba a los trabajadores en elementos intercambiables y fáciles de sustituir. Así pues, para llevar a cabo el cierre, los trabajadores tendrían que haber extendido sus prácticas a toda la clase obrera y rechazar en bloque a los esquiroles. Pero el desarrollo del capitalismo no produjo una pérdida uniforme de la especialización, sino dos colectividades alternativas:

CUADRO 15.1. *Porcentaje de la mano de obra británica por sectores, 1801-1881*

	1801	1821	1841	1861	1881
Agricultura[a]	35	29	23	19	13
Industria y minería	29	39	44	49	49
Servicios	29	31	34	32	38

[a] Incluye pesquerías y silvicultura.

Fuentes: 1801-1821: Evans (1983: 412), que proporciona también cifras algo más bajas para 1841 y 1861 en la industria. Para 1841 y 1861: Bairoch *et al.* (1968).

A. Los trabajadores se hicieron *segmentalmente* interdependientes respecto a sus compañeros *y* sus patronos, no respecto a todos los obreros. Las relaciones de trabajo son duales por naturaleza: aunque los patronos y los trabajadores entren en conflicto, se ven obligados a colaborar diariamente, los primeros para conseguir un beneficio, los segundos, su salario. El conflicto y la interdependencia son las dos caras de Jano de las relaciones laborales. La interdependencia se intensifica cuando el trabajador tiene una baja especialización que resulta específica para un determinado empresario o cuando la especialización se adquiere a través de un aprendizaje en el puesto de trabajo. El trabajador carece entonces de la libertad de despedirse, porque no tiene conocimientos para ejercer fuera de su ámbito. Pero durante las huelgas, el empresario puede ser poco propicio a emplear esquiroles, porque implica costes de aprendizaje e ineficacia a corto plazo. Empresarios y trabajadores pueden desarrollar mutuamente *mercados internos de trabajo*, donde las tareas se encuentran estratificadas en función de la experiencia y el aprendizaje, y la promoción se realiza desde dentro a todos los niveles. El conflicto no se acaba, pero la interdependencia se intensifica, porque el empleado está aislado de la masa de trabajadores del exterior, y el conflicto se produce entonces con un empresario específico, pero no se generaliza a toda la clase.

B. La segunda forma de interdependencia no afecta a los empresarios, sino sólo a los trabajadores, pero se produce dentro de pequeños colectivos *seccionales*, definidos por el oficio, la ocupación o la industria. En especial, los sectores más cualificados de los oficios o la artesanía pueden actuar colectivamente para controlar la oferta dentro de su actividad. Cuando lo hacen, son menos vulnerables a los es-

quiroles, por tanto, no necesitan el apoyo de otros trabajadores para luchar contra esa amenaza exterior. Se trata, pues, de la estrategia puramente seccional de una «aristocracia del trabajo». Los trabajadores especializados disponen de una fuerza real para enfrentarse al empresario, pero esto no garantiza que se sientan miembros de una totalidad de clase. Por otra parte, tanto los empresarios como los distintos regímenes pueden conciliarse con los obreros que disponen de estos poderes en el mercado, y reservar la represión para los menos favorecidos. Es decir, el seccionalismo de los obreros invita a sus oponentes a practicar estrategias de carácter segmental.

Los obreros que carecen de esta interdependencia resultan más vulnerables ante los esquiroles, por tanto, habrán de buscar una unidad más amplia para restringir la oferta de trabajo alternativo, y para ello desarrollan definiciones de clase, relativas a la identidad y la oposición. Por el contrario, los dos colectivos más limitados perciben la existencia de dos oponentes: el empresario *y* los trabajadores ajenos a su ámbito. Los privilegiados que se mantienen dentro luchan contra la amenaza que representan quienes pueden sustituirlos. Este punto débil, de carácter seccional-segmental, separa los oficios especializados de los no especializados y los sindicatos artesanos o de empresa de los industriales o generales. Tales divisiones aparecerán continuamente en estos capítulos junto a otros elementos característicos de una organización de clase más amplia.

2. Marx y Engels dejaron sin resolver la tensión entre los aspectos difusos y autoritarios del capitalismo. Unas veces subrayaron su naturaleza difusa; otras, el aspecto particularmente autoritario de la lucha de clases, a la que describen variadamente como el proceso de trabajo, el punto de la producción y las relaciones directas de producción. Hasta tiempos recientes, la mayoría de los marxistas eran «productivistas»; sostenían que las relaciones de producción determinan la clase y la política de clase, considerando, por lo general, el modelo de relación característico de la fábrica. Sin embargo, los procesos productivos generan tanto conflictos segmentales y seccionales como de clase. Al tratar más adelante de los movimientos de clase, me centraré menos en las fábricas y los procesos productivos que en la difusión de las relaciones capitalistas de mercancía en la sociedad civil. Los capítulos posteriores demostrarán que no se trata de un debate meramente académico. Las ideologías productivistas, en especial el

marxismo, han reducido el interés potencialmente mayor de la identidad proletaria y los partidos socialistas.

3. El marxismo tiende también al reduccionismo económico. Las tesis 3 y 4 —relativas a la política y a las comunidades de la clase obrera— podrían haberlo corregido, pero Marx, Engels y sus seguidores las consideraron determinadas fundamentalmente por las relaciones económicas de poder implícitas en las tesis 1 y 2. Por mi parte, como muchos otros autores, estoy en desacuerdo.

Las cristalizaciones del poder político también han configurado las clases y el conflicto entre ellas. Marx, Engels y otros autores posteriores no prestaron atención al Estado, porque consideraban que la política de los trabajadores estaba determinada por sus condiciones económicas. Algunos autores más recientes lo han rectificado en parte al observar que esa política puede ser el resultado de las propias luchas, y no simplemente de las condiciones económicas originarias. Pero no basta. Los conflictos entre empresarios y obreros afectan al Estado, y las restantes cristalizaciones de este último estructuran los movimientos de la clase obrera, debilitando o reforzando sus puntos débiles. El considerable cambio que experimentó el Estado durante el periodo, como hemos visto en el capítulo 11, se reproduce en su capacidad para estructurar políticamente a la clase obrera. Las relaciones del poder político configuraron la aparición o la ausencia de aquélla.

4. De igual modo, las comunidades de trabajadores no se limitaron a ser receptores pasivos de las relaciones de poder centradas en la producción, sino que configuraron también las relaciones de producción mismas, como ha demostrado la investigación sobre los trabajadores americanos (que analizaré en el capítulo 18). Pero esto nos conduce, además, al influjo de las relaciones sociales más íntimas, la familia y el género. Marx no demostró un gran interés por este último, al contrario que Engels, pero, en todo caso, la clase trabajadora fue para ambos masculina y universal. Sin embargo, la clase aparece siempre entrelazada con la familia y el género. Como veremos en este capítulo, la orientación hacia la familia y la comunidad de la clase obrera británica fue sustituida durante el siglo XIX por una orientación hacia el puesto de trabajo, esencialmente masculina, de enormes consecuencias para el enfrentamiento entre la organización seccional-segmental y la organización de clase.

5. Por consiguiente, el conflicto de clase raras veces se transforma en una lucha dialéctica frontal, ya que integra numerosos as-

pectos cuya lógica es distinta, aunque no contradictoria. Sostendré que aun en aquellos casos en que se produjo un conflicto directo no se resolvió de la forma revolucionaria y dialéctica que pretende Marx, porque la clase capitalista percibió con toda claridad la amenaza que llegaba desde abajo y redujo sus divisiones internas. La clase obrera tiene más posibilidades de perder una lucha directa que de ganarla.

Me centraré, por lo general, en la organización de clase, pero también me serviré del modelo IOTA de la conciencia de clase subjetiva que introduje en el capítulo 2. Recuérdese que identidad, oposición, totalidad y alternativa son tipos ideales, que subrayan elementos que sólo encontramos parcial e imperfectamente en la realidad social. La concepción de pertenecer a una clase trabajadora que se opone a la clase capitalista competirá normalmente dentro de la conciencia del trabajador con otras oposiciones e identidades colectivas; un sentimiento fuerte de totalidad de clase es poco frecuente, incluso entre los militantes. Exploraré ahora otras alternativas. El cuadro 15.2 clasifica las más importantes entre las que idearon los trabajadores (y los campesinos) durante los siglos XIX y XX al capitalismo.

Los distintos movimientos obreros se distinguen por su grado de «radicalismo» —movimientos competitivos, reformistas y revolucionarios— y en que su objetivo sea transformar tanto las relaciones industriales como el Estado. Esto proporciona tres pares de alternativas.

CUADRO 15.2. *Alternativas obreras y campesinas al capitalismo*

Lugar táctico de la lucha	Estrategia respecto al capitalismo		
	Competitiva	Reformista	Revolucionaria
Economía	Proteccionismo	Economicismo	Sindicalismo
Estado	Mutualismo	Socialdemocracia	Marxismo

El primer par es el más «moderado» porque no aspira a cambiar el capitalismo, sino a ofrecer a los trabajadores mayores posibilidades para «competir» con aquél. Cuando los obreros aceptan las reglas y condiciones del mercado, emplean su solidaridad colectiva sólo para adquirir ventajas en el mercado. Llamo a esto *proteccionismo*. Las cooperativas, como las fábricas modélicas de Robert Owen, el *Land Plan* de los cartistas o, en la actualidad, el grupo Mondragón, son

proteccionistas, es decir, colectivistas en su interior, pero empresas capitalistas en su actuación en los mercados exteriores. El proteccionismo más característico es el de los fondos de seguro de los sindicatos, que durante el siglo XIX recibieron el nombre de *friendly societies* en Gran Bretaña, *benevolent societies* en Estados Unidos y *Unterstützungsverein* en Alemania.

Pero el sesgo de las leyes y normas del mercado empujó muy a menudo a los trabajadores a superar el proteccionismo. Exigieron entonces el reconocimiento legal de los sindicatos y una legislación que les facilitara el acceso al crédito para resolver los problemas de capital de las cooperativas. Estamos, pues, ante el *mutualismo*, tal como lo propugnó Proudhon. Gran parte de lo que se ha considerado socialdemocracia fue en realidad mutualismo, que exigía la regulación estatal para preservar los derechos y las libertades de las organizaciones obreras. Los sindicatos lucharon ante todo por sus propios derechos colectivos. Los ciudadanos del siglo XIX no solían considerar «accesible» al Estado, y tendían a definir la libertad como independencia de él. Es muy probable que la mayoría de los sindicatos de trabajadores no buscaran otra cosa que el reconocimiento de los derechos mutualistas y la existencia de empresarios razonables y conciliadores. A lo largo de todo este volumen destaco el hecho de que los individuos no tendieron a ser políticos ni en éste ni en anteriores momentos de la historia. De hecho, habrían preferido eludir el Estado, pero se politizaron cuando éste interfirió en su vida. Marshall ha sostenido que el derecho a la organización sindical resulta una anomalía dentro de su concepción de la ciudadanía civil, pues, aunque legal, es esencialmente colectivo. Pero el hecho de que los distintos regímenes se opusieran a ellos sin ahorrar ferocidad en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XIX vicia los estadios de la evolución hacia la ciudadanía de Marshall. En algunos casos, los derechos de organización colectiva no se garantizaron hasta bien entrado el siglo XIX, mucho más tarde que otros derechos políticos y civiles. La resistencia del sistema al reconocimiento de los sindicatos constituyó la mayor causa de politización del mundo obrero, una vez que las exacciones fiscales comenzaron a decaer a principios del siglo XIX. Si el Estado no hubiera permitido la libertad de organización, probablemente se habría visto abocado al cambio, pues en ese caso, los trabajadores se inclinaban por otras de las alternativas que aparecen en el cuadro 15.2.

El segundo par de alternativas trata de modificar el capitalismo mediante la reforma desde dentro. El término *economicismo* se refiere

a la práctica sindical que busca extraer ventajas de la negociación directa con los empresarios, pero no se limita a las demandas salariales, sino que suele plantear cuestiones de control en el lugar de trabajo. El término *socialdemocracia* indica reformismo político (aunque en principio se empleó erróneamente para nombrar a los partidos marxistas revolucionarios). El tercer par de alternativas intenta destruir el capitalismo por medio de la revolución. Llamaré *sindicalistas* (a veces *anarcosindicalistas*) a aquellos que propugnaron la revolución por medios económicos —la insurrección industrial o la huelga general—, y marxistas a los que plantearon la toma del Estado. Los primeros renunciaron deliberadamente al Estado; los segundos propugnaron un socialismo centralizado y estatista (como fase «temporal»). Veremos que, al enfrentarse a la hostilidad de los regímenes y de los capitalistas, numerosos militantes abandonaron el mutualismo por las dos alternativas revolucionarias, abandonando la opción reformista, que no encontró su propio camino hasta después de la Primera Guerra Mundial.

Se trata de tipos ideales que, por lo general, no defendieron los trabajadores, quienes, al contrario, combinaron distintos elementos de todas las alternativas. Tales combinaciones formaron lo que en su tiempo se conoció por «socialismo». Cuando el movimiento obrero adoptó alternativas políticas, se transformó en predemocrático. Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992) han sostenido que los trabajadores ejercieron fuertes presiones en todo el mundo por la democracia. Ante la actitud hostil del Estado controlado por las clases dominantes, exigieron el acceso del pueblo (formado inicialmente sólo por los hombres) al control estatal. En este capítulo documentaré uno de los primeros movimientos democráticos.

Dos detalles más para acabar. Puesto que el capitalismo industrial se expandió por Gran Bretaña durante el siglo XIX, el «productivismo» marxista creyó que también el movimiento obrero se desarrollaría con firmeza. Pero el empuje inicial, que culminó en el movimiento cartista de las décadas de 1830 y 1840, se transformó en un movimiento más modesto y seccional. Es probable que la clase obrera británica no haya estado tan unida ni haya sido tan militante como durante la primera fase cartista. ¿Por qué este desarrollo no lineal? En segundo lugar, el desarrollo de la clase obrera implica una novedad de tipo organizativo: los trabajadores contrarrestaron la debilidad organizativa que antes había reforzado la estratificación social. El pueblo ha sido pocas veces un actor histórico, porque la es-

tructura de clase ha sido asimétrica; las clases dominantes tenían la posibilidad de organizarse extensivamente en mayor medida que las subordinadas, pero esta debilidad acabó a principios de siglo en Gran Bretaña y a finales del XIX y principios del XX en los demás países. ¿Cómo y por qué?

Capitalismo empresarial y política popular, 1760-1832

Tres hechos revolucionarios del siglo XVIII que hemos analizado en el capítulo 1 transformaron las relaciones de clase en Gran Bretaña: la aparición del capitalismo empresarial, el Estado moderno y la alfabetización discursiva de masas. Examinaré las dos primeras por separado y la tercera en el curso de esa narración [1].

La agricultura británica constituyó un caso único, ya que hacia 1760, cuando se componía de terratenientes, agricultores arrendatarios y familias campesinas sin tierras, era plenamente capitalista. Entre los que carecían de tierra, muchos hombres y mujeres se vieron ahora abocados a vender su mano de obra a los empresarios, que poseían la propiedad absoluta de los recursos industriales y comerciales. Para estos trabajadores, la distinción entre los sectores industrial y de servicios o entre la fábrica, el taller o la calle como lugar de trabajo carecía de significado.

Pero el empresariado representaba también una amenaza para muchos artesanos, quienes, como hemos visto en el capítulo 4, pertenecían a una clase ambigua situada entre el «pueblo» de propietarios y la «plebe» desposeída. Ubicados históricamente en las zonas más bajas de la pequeña burguesía, contaban con sus propias organizaciones tradicionales, los *gremios,* que vinculaban la vecindad urbana con el trabajo especializado dentro de la comunidad constituida por la casa del «maestro», su familia y sus «hombres», todos ellos federados de un modo poco preciso en una organización política nacional. La regulación y las licencias de los gremios eran competencia del Estado, que les aseguraba el monopolio de la oferta de la especialidad profesional. Los obreros móviles del mantenimiento, los trabajadores especializados de la madera, la piedra, el cuero y (cada vez más) el me-

[1] Las principales fuentes de esta sección han sido Thompson (1968), Perkin (1969: 176 a 217), Musson (1972), Prothero (1979), Hunt (1981) y Calhoun (1982).

tal se organizaron como *journeymen,* que recorrían el país para supervisar colectivamente los accesos y los tipos salariales (Leeson, 1979).

Con posterioridad, muchas de estas organizaciones se fusionaron en asociaciones profesionales más amplias y continuaron con la práctica, que recibió el nombre de *tramping*. Los artesanos explotaban así las diferencias del trabajo local, sirviéndose de estas redes móviles para abandonar el trabajo en una determinada localidad, recibir los beneficios de su viaje y encontrar empleo en otra. Todas estas organizaciones eran en esencia *proteccionistas,* establecían sus propios salarios y apenas tenían que negociar con los empresarios. La práctica del *tramping* capacitó a los oficios del siglo XVIII para organizarse más extensivamente que los empresarios. En 1764, por ejemplo, seiscientos sastres londinenses en huelga «desaparecieron» a través de estas redes en dirección a otras zonas del país. De este modo, se evadían también las *Combination Acts* (que proscribieron los sindicatos de 1799 a 1824). La movilidad y la organización extensiva permitieron a los artesanos defender su independencia de los empresarios y los comerciantes.

Con todo, los artesanos no representaban más que del 5 al 10 por 100 de la mano de obra y sus organizaciones no eran de clase, sino seccionales, limitadas a un oficio concreto. Entre ellos y las masas de trabajadores agrícolas o de obreros urbanos eventuales había existido siempre una profunda separación. A esto debemos añadir la presión que ejercieron los empresarios sobre los artesanos a comienzos del siglo XIX. Cuando el mercado de trabajo se hizo nacional, disminuyó la capacidad del *tramping* para mantener la independencia; al mismo tiempo, los artesanos perdieron el control de la adquisición de materiales y de las ventas de sus productos. Algunas profesiones industriales, en especial los mecánicos y los tejedores, perdieron también su puesto de trabajo y el control del acceso, ya que los empresarios coparon los mercados y talleres, sustituyendo, además, la maquinaria y los trabajadores no especializados. En las dos grandes industrias modernas, el hierro y el algodón, apareció entonces la fábrica de proletarios, que en el caso del segundo contrataba sobre todo a niños y jóvenes mujeres solteras. Las guerras napoleónicas, que causaron un desempleo masivo y una reducción de los salarios, empeoraron para todos las condiciones del mercado de trabajo, a lo que se añadió el crecimiento demográfico y la emigración masiva a las ciudades (O'Brien, 1989). El aumento de la mortalidad (por las enfermedades

contagiosas) en las urbes contribuyó también a nivelar la población trabajadora.

La ofensiva niveladora de los empresarios forzó a los artesanos a bajar los salarios, y con ello a emplear a niños y mujeres, introducir el sistema de aprendices controlados por el patrón y perder su acceso directo a los consumidores y a las materias primas. Los oficios se vieron «abarrotados». Algunos artesanos tuvieron que emplearse como trabajadores a domicilio; otros sobrevivieron trabajando en los talleres de las fábricas.

Pero conviene que analicemos con detenimiento la naturaleza de lo que estaba convirtiéndose en una clase obrera. La parte menor trabajaba en las fábricas, salvo en el sector del algodón, aunque incluso allí eran una minoría. En 1851 la media de las casas textiles contaba con algo más de cien trabajadores, aunque disponían de más de trescientos que combinaban el trabajo de la hilatura con las labores de tejido. En 1890 la media había ascendido a algo menos del doble (Farnie, citado en Joyce, 1980: 158; las restantes cifras de este párrafo son de Clapham, 1939: I, 184 a 193, II, 22 a 37, 116 a 133). Había también unas cuantas minas y fundiciones grandes. En 1838 las minas de estaño de Cornish disponían de una media de ciento setenta obreros; en el carbón la media nacional era sólo de cincuenta, pero cada una de las doce minas del noreste empleaba a más de trescientos. En 1814 las fundiciones Carron daban empleo a dos mil («la mayor manufactura de Europa»), pero la media de las fundiciones escocesas sólo contaba con 20. Existían unas cuantas fábricas de vidrio, cerámica, lana o cuchillería. El censo de 1871 estimaba que la mitad de los trabajadores de la industria (una cuarta parte del total) trabajaba en «fábricas» que empleaban sólo una media de ochenta y seis obreros. La mayor parte del trabajo de la manufactura se realizaba en talleres pequeños, la mayoría de los cuales no utilizaban la energía del vapor. Por lo general, las piezas sueltas de la maquinaria se fabricaban manualmente por separado. «A mediados de la época victoriana no existía un equilibrio entre el empleo de la energía del vapor y la técnica manual» (Samuels, 1977: 58; Greenberg, 1982).

Tampoco era mayor el empleo en las industrias «modernas». En el censo de 1851 los sectores de mayor tamaño eran con mucho la agricultura y el servicio doméstico, seguidos del algodón, la construcción, los trabajadores generales, sombrereros, zapateros, mineros, sastres, marineros, lavanderas y trabajadores de la seda. Entre ellos había casi tantas mujeres como hombres. La mayoría de los empleados de

las fábricas eran niños y mujeres jóvenes y solteras. Los hombres salían a distribuir los productos que ellos o sus familias elaboraban en casa o en pequeños talleres, a comprar las herramientas para el servicio de la maquinaria o a negociar los precios del trabajo realizado dentro de la fábrica. En los pueblos y las ciudades pequeñas la mayoría de las familias combinaban la manufactura con la actividad agrícola. Aunque los artesanos habían perdido casi toda su autonomía, continuaron siendo agentes de contratación libres, que pagaban a sus propios empleados, a menudo pertenecientes a su familia. Pero su dominio de la situación era ya muy inseguro. La mayoría del trabajo en las fábricas, en casa, en el taller, el campo, la mina o la calle tenía carácter eventual. La diversidad y la irregularidad se habían convertido en fenómenos endémicos.

Así pues, Joyce (1990: 145 a 153) concluye que la proletarización y el sentimiento de clase fueron escasos. Sin embargo, yo llego a la conclusión contraria porque la fase emprendedora del capitalismo produjo una paradoja: la heterogeneidad contribuyó a unir a los trabajadores. No obstante, para entenderlo deberemos abandonar nuestros hábitos de pensamiento sobre el productivismo y el empleo o la profesión en el sentido moderno, y entrar en el mundo de la comunidad y la familia. El seccionalismo artesanal sobrevivió, al tiempo que el empresariado fomentaba el segmentalismo, pero estos hechos no produjeron un sentimiento totalizador de identidad entre las familias de trabajadores. La «fábrica» apareció junto al «taller», la «casa» y la «calle», y el trabajo formal, junto al «oficio» y el empleo «eventual»; las fronteras no eran impenetrables. Todo lo contrario, la mezcla impidió que se desarrollara un solo estatus de empleo para todas las familias o comunidades locales. El seccionalismo más evidente habría podido enfrentar a los hombres con las mujeres y los niños, pero todos ellos vivían juntos y con frecuencia constituían una unidad de producción familiar que se mezclaba con el taller y la fábrica.

Durante este periodo, la casa contribuyó en gran medida a extender la solidaridad de clase en procesos de trabajo muy diferentes, estrechando la relación entre el trabajo, el hogar y la comunidad. La relación entre el trabajo seguro y el eventual vendría a separar posteriormente la fábrica de la casa y la calle, al trabajador de su esposa y al obrero especializado del que no lo estaba. Pero la heterogeneidad de la primera industrialización alcanzó a todos los puestos de trabajo, casas y familias, homogeneizando a los obreros de un modo característico y poco evidente, es decir, no tanto por el proceso de

trabajo de la fábrica como mediante la difusión de un capitalismo emprendedor a lo largo y ancho de procesos muy diferentes entre sí, que tenían lugar en el lugar de trabajo, en la casa y en la comunidad.

Esta formación de clase, sólo parcial, no habría podido producir por sí misma una acción de clase relevante, pero las tres cristalizaciones del Estado británico —el capitalismo del antiguo régimen, el federalismo y el militarismo (véase el cuadro 3.3) constituyeron un gran estímulo, al que vinieron a añadirse las tendencias centralizadoras. Durante el periodo, el régimen recogió en el estatuto legislativo del Estado central una economía política clásica que acabó con los gremios y las «restricciones de los oficios» impuestas por los *journeymen*. De 1799 a 1813, el acceso a los oficios quedó definido por el salario mínimo y las normas de aprendizaje, y se suprimieron los precios fijos; en 1799 y 1800 las *Combination Acts* prohibieron los sindicatos. Los artesanos se vieron privados de protección legal contra las nuevas fuerzas del mercado. Indignados moralmente, pero aún apolíticos, intentaron una resistencia seccional, oficio a oficio. Sin embargo, la mayoría de los oficios padecían una amenaza similar, como, en aquellos momentos, los trabajadores menos especializados. De este modo, los sindicatos profesionales abandonaron el proteccionismo por la negociación economicista, mediante huelgas y cierres regionales, como los de los zapateros londinenses en 1818 y 1824; las hilaturas de algodón de Lancashire en 1824 y 1828; los carpinteros de ribera en 1824; los cardadores de lana de Bradford en 1825; los tejedores manuales y mecánicos en 1826; los tejedores de alfombras de Kidderminster en 1828; los sastres de Londres en 1834. Todas ellas huelgas derrotadas, que trajeron más recortes en los salarios, explotación laboral y empleo en las fábricas y el trabajo «en casa» de niños y muchachas, adulteraron la especialización profesional y abarrotaron los mercados. Las acciones en la industria aumentaron en alguna medida el sentimiento de clase de los trabajadores, pero tampoco surtieron efecto.

Así fue como los trabajadores se vieron forzados a recurrir al Estado nacional, en primer lugar mediante las manifestaciones al modo tradicional y las peticiones al Parlamento. Los oficios de mayor nivel y mejor organizados tomaron la delantera: relojeros, zapateros, trabajadores de la seda, carpinteros, sastres, impresores, cordeleros, ebanistas y guarnicioneros, quienes encabezaron la expasión de las infraestructuras de alfabetización discursiva entre los trabajadores y dominaron los institutos industriales, los «paraninfos de la ciencia»

owenianos (de los que existían 700 con 500 salas de lectura en 1850), las sociedades de socorro mutuo, las organizaciones religiosas, los periódicos y otras publicaciones. El liderazgo económico, político y literario se extendió a otros grupos afectados por la ofensiva, en especial a los que trabajaban en casa para las empresas, como los tejedores. Las reivindicaciones tenían ahora un carácter *mutualista*, que demandaba el reconocimiento por parte del Estado central de los derechos colectivos de sindicación, la regulación del aprendizaje, el establecimiento de precios y salarios «justos» y la compensación a los trabajadores desplazados por la maquinaria.

En el Parlamento encontraron la simpatía de los dos extremos: los radicales y los *High Tories*, pero los resultados fueron escasos. En efecto, las *Combination Acts* fueron rechazadas en 1824, pero una inmediata oleada de huelgas produjo en 1825 una ley que limitaba los derechos de los trabajadores de un modo, como tendremos ocasión de comprobar, típicamente burgués: la garantía de los derechos de organización colectiva sólo cuando se consideran estrechamente conectados con la expresión del interés individual, lo que se tenía por moralmente legítimo. Sólo aquellos trabajadores que se reunían estrictamente en función de sus horarios y salarios tenían el derecho de hacerlo. El resto de las combinaciones se consideraba una conspiración delictiva. Esto significaba la proscripción de todos los sindicatos generales y nacionales, así como de la mayoría de las asociaciones profesionales que aún ejercían algún control sobre la producción. Los tribunales reconocieron que no podía prohibirse la convocatoria de reuniones locales, pero sí las huelgas, que inmediatamente se ilegalizaron. La represión de los sindicatos no fue menor que la de la época de las *Combination Acts*, por el contrario, se efectuó con mayor uniformidad sobre trabajadores y artesanos, ya incapaces de oponerse a las leyes. El antiguo régimen pensaba que la simpatía moral por las condiciones de los trabajadores no debía frenar el progreso, y los economistas políticos estaban convencidos de la moralidad de las leyes de la libertad de los oficios. La negativa del Parlamento a legislar supuso un freno al mutualismo.

Como veremos más adelante, siempre que los regímenes centralizados reprimían a los trabajadores proteccionistas o mutualistas sin hacer distingos (aunque no con la violencia suficiente para destruir la resistencia), la agitación obrera alcanzaba un nivel nacional y de clase. Durante algún tiempo, predominó entre los trabajadores el pensamiento *reformista*, esto es, un Estado que no podía protegerlos debía

ser reformado. En el capítulo 4 hemos visto que las demandas de sufragio aparecían unidas a algunas tradiciones populares. E. P. Thompson (1968: 213) observa que la clase trabajadora no se formó a partir de «una materia prima humana indiferenciada e inclasificable». Otras identidades sociales procedentes de tradiciones históricas, la religión, la política popular y ciertas nociones nacionales como «los derechos de los ingleses libres de nacimiento» o la equidad moral de los protestantes (más adelante encontraremos el caso de las tradiciones republicanas de Francia y América) alimentaron la protesta obrera, aunque no siempre la conciencia de clase. Para la tradición radical de los derechos naturales, de Locke a Paine, la reivindicación del sufragio había sido reforzada por las demandas sociales: el derecho a la subsistencia y a las tierras comunales y la necesidad de limitar la riqueza. Como vimos en el capítulo 4, la aparición de la sociedad civil, del Estado moderno y de las rivalidades geopolíticas fomentaron la difusión del populismo, una identidad más popular, radical y centralizada en lo nacional.

A todo ello contribuyó la cristalización militarista del Estado. Hemos comprobado en el capítulo 11 que las guerras del siglo XVIII impusieron fuertes exacciones de recursos económicos y humanos. Gran Bretaña, con una armada capital e intensiva y con un ejército reclutado en gran parte en Irlanda y el extranjero, necesitó más dinero que hombres. Obtuvo sus ingresos conforme a las prioridades establecidas por su cristalización como un capitalismo de antiguo régimen. Tomó prestado de los más ricos y les devolvió la deuda; aumentó los impuestos, en especial los arbitrios sobre el consumo cotidiano: cerveza, tabaco, sal, azúcar, té, carbón y vivienda. De 1800 a 1834 (hasta que comenzó a disminuir la deuda), la carga resultó onerosa y regresiva, porque distribuía el dinero desde los que no podían ahorrar a los que tenían ahorros; un hecho de grandes consecuencias económicas. Durante las guerras, la inflación subió al 3 por 100 anual, en tanto que disminuían los salarios. Puesto que la paz no acabó con el desempleo masivo, el Estado tuvo que asumir la carga de aliviar la pobreza que solicitaba casi un millón de personas, sometidas al humillante control de la clase dominante local, con las familias rotas y recluidas en asilos para pobres. La política, como la economía, no sólo explotaba al trabajador, sino también a toda su familia. Las prioridades del gobierno central eran muy claras; de 1820 a 1825, la ayuda a los pobres absorbió el 6 por 100 de sus gastos, mientras que las transferencias de dinero a los obligacionistas absorbían el 53 por

100 (O'Brien, 1989). ¿Cómo no habrían de politizarse las familias de trabajadores sometidas a una explotación fiscal que hacía mella directamente en su vida y encarnaba una desigualdad tan evidente entre las clases? La agitación vinculó la reforma del sufragio con la reforma económica del Estado y de la política social. Las infraestructuras artesanas de alfabetización discursiva denunciaron que el Estado era nocivo para el pueblo, entendido aquí en el sentido de plebe.

Coincidieron entonces tres tipos de agitación: la protesta encabezada por los artesanos y los trabajadores a domicilio dirigida a la explotación de los empresarios capitalistas; la transmisión de este descontento a la política democrática y mutualista contra la política económica del Estado; y la protesta populista contra la explotación fiscal y política del pueblo por el Estado capitalista del antiguo régimen. Cundió entre los trabajadores un radicalismo nacional y un mayor sentimiento de clase. A partir de 1800 comenzaron a emplear los términos «clase obrera» y, más comúnmente, «clases obreras» (Briggs, 1960). Se apropiaron de la teoría del valor del trabajo de la pequeña burguesía: «nosotros trabajamos para que los ociosos reciban los frutos». En 1834 el periódico oweniano *Crisis* calculaba el número de las dos «clases»: la «población trabajadora», los «productores de toda la riqueza» y las «clases productivas» sumaban 8.892.731 personas; los «no productores» eran 8.210.072, y se quejaba de que mientras los productores recibían 100 millones de libras de riqueza anual, los no productores se embolsaban 331 millones (Hollis, 1973: 6 a 8). Los escritores artesanos proclamaban la dicotomía «nosotros»–«ellos». El «nosotros» dependía de una acción colectiva basada en su ética de la protección mutua, lo que les confería una superioridad moral sobre el egoísmo de los oponentes (E. P. Thompson, 1968: 456 a 469).

Pero ¿poseían una conciencia clara de sus adversarios de clase? No antes de 1832, porque el adversario político y el económico podían no coincidir. En efecto, los aliados políticos resultaban a veces enemigos económicos. La pequeña burguesía, incluyendo a los empresarios modestos, era más consumidora que ahorradora, y también estaba excluida del sufragio. La lucha por la reforma no respondía tanto a las etiquetas de clase como al populismo jacobino o al de los *Levellers*. Los radicales no estaban tanto contra el empresario como contra el rentista poseedor de cargos de la «antigua corrupción», que vivía de las rentas y de los monopolios cedidos por el Estado; ante los capitalistas activos demostraban una gran perplejidad. *Crisis* distin-

guía una tercera «clase» intermediaria, compuesta de «distribuidores, superintendentes y manufactureros», que suscitaba una queja en tono menor, «eran necesarios, pero demasiado numerosos». Algunas de las publicaciones de los artesanos identificaban a los empresarios como una clase enemiga: «Los intereses de los patronos y sus subordinados son tan opuestos entre sí como la luz y las tinieblas»; o bien: «Los capitalistas no producen otra cosa que a sí mismos; su alimento, su vestido y su vivienda dependen de la clase obrera» (Hollis, 1973: 45, 50). Pero los trabajadores se enfrentaron también al Parlamento, a los magistrados y clérigos locales, a los economistas políticos, espías, provocadores, tropas regulares y milicias de los terratenientes locales. La «antigua corrupción», la «Iglesia y el rey» o la «economía política» les parecían enemigos mayores y más violentos que sus propios patronos. A estos ataques podía sumarse una ayuda que llegaba desde arriba, a veces en forma de alianza segmental con las «clases industriosas» contra la «antigua corrupción», otras con los elementos paternalistas del orden antiguo contra la economía política (casi siempre con posterioridad), otras aún con el populismo protestante o disidente.

Estos vínculos, difundidos segmental y localmente, restaban valor a cualquier forma pura de conciencia de clase (Prothero, 1979: 336; Stedman-Jones, 1983; Joyce, 1991). En efecto, antes de 1832 el adversario no era una sola clase. Aunque los intereses de ese adversario se agrupaban contra la clase obrera, el sufragio los dividía intensamente respecto al carácter protestante del Estado y a qué clases debían estar representadas (como vimos en el capítulo 4). Esto debilitó el control segmental sobre los trabajadores, cuyo descontento político fomentaban los empresarios radicales y, a partir de 1850, incluso los *whigs*.

Tales alineamientos políticos disminuyeron las posibilidades de concebir una alternativa de clase. Robert Owen planteó la alternativa económica popular más radical; su ideario basado en las cooperativas de producción atrajo a los artesanos y los trabajadores a domicilio, deseosos de acceder al mercado en condiciones equitativas. A ésta debemos añadir algunas corrientes mutualistas. Durante la década de 1820, John Gray, Thomas Hodgkin y William Thompson atacaron a los capitalistas desde *The Poor Man's Guardian* y *The Pioneer,* calificándolos de intermediarios parásitos que interferían en aquel legítimo derecho de los artesanos para actuar en el mercado que el Estado debería garantizar. Noel Thompson (1988) los llama «socialistas smithianos». La mayoría de ellos no propugnaron reorganizar la pro-

ducción sino las relaciones de mercado; lo contrario no se habría adecuado a los problemas de los artesanos de la época. Pero el aspecto económico de la cuestión quedó subsumido en las luchas políticas por el sufragio. Aunque muchos obreros expresaban su escepticismo ante la alianza política con la burguesía radical (en especial, a la vista de los términos de las *Reform Acts*), no les quedaban muchas alternativas. Sin ella, las posibilidades de lograr una legislación mutualista eran pocas. Se estaba formando una clase que unía a familias de trabajadores dedicadas a procesos laborales muy distintos, pero la política confundía su percepción de las alternativas y los adversarios.

La famosa frase de E. P. Thompson en la que califica a este periodo de «momento de la formación de la clase obrera británica» ha recibido muchas críticas. Currie y Hartwell (1965) lo consideran «un mito, una construcción hecha de fantasía determinadora y presupuestos teóricos». Ellos, como otros autores para el caso de Inglaterra (Prothero, 1979: 337) y de Francia (Sewell, 1974: 106), consideran que los movimientos laborales de principios del siglo XIX afectaron normalmente sólo a los artesanos; que Thompson da por sentado erróneamente la unión de los artesanos con los obreros; y que las «masas apáticas y silenciosas», sometidas a los notables locales, no intervinieron en la turbulenta protesta (Currie y Hartwell, 1965: 639; Church y Chapman, 1967: 165; Morris, 1979 analiza los aspectos conceptuales). Hablar de una sola «clase obrera» en 1830 sería, en efecto, una actitud ahistórica; para que ello fuera así se requeriría que la lucha política popular se dirigiera contra el mismo adversario que la lucha económica, lo que no ocurrió hasta 1832.

Las insurrecciones proletarias cartistas, 1832-1850

Los militantes obreros vieron confirmadas sus peores expectativas respecto a la *Great Reform Act*. Como he analizado en el capítulo 4, gran parte de la pequeña burguesía acomodada formó junto al antiguo régimen una sola clase capitalista, al mismo tiempo que el Estado institucionalizaba el capitalismo y se hacía más centralista. Aunque las clases medias con derecho al voto conservaron su carácter heterogéneo y su división en fracciones, la *Reform Act* rebajó su interés político por las clases inferiores. Cuando un pequeño grupo de miembros radicales del Parlamento intentaron una reforma más generosa del sufragio, el electorado burgués de 1837 votó en contra

de ellos. El Parlamento creía que la cuestión del sufragio estaba zanjada. Ser «radical» significaba ahora dos cosas distintas: para los grupos de artesanos, como los que formaban la *London Working Men's Association,* y para algunos activistas de la clase media aún quería decir extensión del sufragio y protección estatal para garantizar unas ciertas condiciones de vida, mas para muchos otros sólo significaba *laissez-faire.*

La nueva Ley de Pobres de 1834, que imponía fuertes controles sobre las familias de los trabajadores y reducía el poder de los notables para distribuir la caridad particularista, personificaba al nuevo régimen. En los mítines, la protesta obrera la acusaba de «disolver los vínculos matrimoniales, aniquilar el afecto doméstico y ejercer una opresión contra los pobres desconocida en cualquier otro lugar del mundo» (citado en D. Thompson, 1984: 35). El general Napier, comandante de las tropas del norte contra el cartismo, se refiría a la Ley de Pobres al explicar la insurrección: la clase obrera «excluida del poder representativo», con sus recursos «agotados por los impuestos indirectos para el servicio de la deuda», «ha sido reducida a la condición de un fantasma» con la Ley de Pobres (Napier, 1857: II, 1, 9). Pero las reformas de la administración municipal y las nuevas autoridades policiales consolidaron también el poder local del nuevo régimen y le confirieron mayor representatividad de la que habían tenido las clases dominantes locales. La *Newspaper Act* recortó la concesión de licencias a la prensa. La *Irish Coercion Act* demostró una voluntad abiertamente represora. Se suprimieron los sindicatos generales, acusados de «conspiración», en especial la *Grand National Consolidated Trades Union* de 1834, que parece haber contado con 500.000 miembros.

Así pues, el nuevo régimen fomentó la identidad, la oposición e incluso el sentido de totalidad de la clase obrera durante la década de 1830. La ofensiva económica rebajó la dosis de seccionalismo de los oficios y avivó el coraje moral de las familias. La ofensiva política, especialmente la Ley de Pobres, perjudicó directamente a los más necesitados, pero los militantes artesanos fueron los más amenazados por el acoso al derecho de organización. Todos querían el sufragio, y como éste era ahora de clase, también ellos se organizaron como tal. Cuando disminuyó el seccionalismo y los controles segmentales, se desarrolló la clase obrera, cuya principal manifestación fue el cartismo, un movimiento «masivo», «de clase» y con una finalidad «revolucionaria» que no volveremos a encontrar en estas páginas.

El cartismo se formó en torno a una sola cuestión, la democracia para los varones adultos, y a un solo documento, la Carta[2], que reclamaba en seis puntos el sufragio universal masculino, los Parlamentos anuales, el voto secreto, el fin de las restricciones económicas para los miembros del Parlamento, la igualdad de los distritos electorales parlamentarios y el sueldo de los miembros del Parlamento. No faltaron entre los cartistas los partidarios del sufragio femenino, pero los dirigentes adujeron que la mezcla de las dos reivindicaciones podría resultar contraproducente. Sin embargo, las reivindicaciones cartistas no se pararon en el voto. Como he subrayado a lo largo de este volumen, la ciudadanía política no se tenía por una meta deseable en sí misma, y eran muchos los ciudadanos que aún preferían evitar el Estado. Pero cuando éste comenzó a explotarlos y los enjauló políticamente, ellos también se politizaron. Los cartistas querían votar para librarse de la nueva explotación social y económica; querían unos impuestos más bajos, un sistema fiscal progresivo, la reforma de la Ley de Pobres, un gobierno local y una policía menos poderosos, la ley de las «diez horas» y una protección de tipo mutualista contra los «salarios de esclavos», incluyendo el derecho a la organización sindical. Su lema más popular fue: «La Carta y algo más». Oigamos las palabras de un cartista arrestado a la persona que lo interroga en la prisión:

> La causa de nuestro descontento no es otra que la gran miseria que padecemos; si los salarios fueran los que deben ser, no se oiría un solo grito por el sufragio, y si los patronos fueran capaces de mover un dedo para que los trabajadores viviéramos dignamente, seríamos las criaturas más satisfechas de la tierra [D. Thompson, 1984: 211].

Las clases que ya disfrutaban del derecho al voto dieron poco apoyo a los cartistas porque éstos se oponían a sus intereses socioeconómicos. Los reformistas radicales de la clase media los respaldaron al principio con su liderazgo y más tarde reaparecieron, con escaso éxito, en un intento de moderar el movimiento. Las mociones procartistas encontraron en la Cámara de los Comunes el apoyo de entre un 10 y un 46 por 100 de los parlamentarios, aunque sólo unos

[2] Las fuentes principales para el cartismo han sido: Briggs (1959b), Prothero (1971), Jones (1975); varios ensayos en Epstein y Thompson (1982), Stedman-Jones (1983) y D. Thompson (1984).

pocos llevaron más lejos la ayuda. El cartismo fue, pues, un movimiento mayoritariamente obrero.

El movimiento acogió a una masa heterogénea de trabajadores. Las listas de militantes, miembros y manifestantes arrestados que han llegado hasta nosotros dan una idea de sus oficios (véase D. Thompson, 1984, para los pormenores). Aunque ninguna constituye una muestra representativa, resultan coherentes entre sí. Había un grupo de desclasados, unos cuantos profesionales —maestros de escuela, ministros religiosos, algún que otro médico o abogado— y muchos más tenderos. Pero el grueso estaba compuesto de obreros. Sólo los trabajadores agrícolas y los sirvientes domésticos se encontraban poco representados, a causa del control segmental que los patronos ejercían sobre ellos. Por otro lado, en Gran Bretaña había muy pocos campesinos independientes con tierras, como aquellos que consiguieron organizarse radicalmente en otros países (véase capítulo 19). El resto de los trabajadores industriales y de servicios sí estaban bien representados, en especial, los trabajadores a domicilio más pobres, tejedores, tricotadores, cardadores de lana, etc., así como los artesanos de los antiguos sindicatos, zapateros, sastres y algunos oficios relacionados con la construcción. Los mineros y trabajadores de las fábricas textiles, que representaban bien las actividades «modernas», aportaron un puñado de organizadores, capacitados por su familiaridad con la rutina laboral, que fueron arrestados con frecuencia. Los mineros adquirieron reputación de violentos, en tanto que los sastres, los carpinteros y los trabajadores del metal predominaban en las manifestaciones pacíficas.

Casi todos los artesanos estuvieron presentes con sus organizaciones sindicales. Sólo los que se sentían más seguros dentro del oficio mostraron alguna reticencia. En Londres, casi todos los sindicatos estaban federados en organizaciones cartistas, tanto los más amenazados por la situación: zapateros, carpinteros y sastres, como los «aristócratas», relativamente afectados: canteros, sombrereros, peleteros, tallistas, doradores y mecánicos (Goodmay, 1982). En Lancashire, al sudeste, sólo los sindicatos más firmes —impresores, encuadernadores y carroceros— permanecieron al margen. Prácticamente, el resto de los sindicatos federados: hilanderos del algodón, tintoreros, impresores de calicó, sastres, zapateros, trabajadores de la construcción y mecánicos (Sykes, 1982). Se unieron numerosos oficios de Nottingham, en especial, los más amenazados, tricotadores y zapateros (Epstein, 1982: 230 a 232). La práctica totalidad de las ramas de cada ofi-

cio, concluye Dorothy Thompson, «desde los trabajadores más especializados hasta el último hombre, se encontraban en el cartismo, incluso entre los líderes» (1984: 233). La naturaleza comunitaria del movimiento (que analizaré enseguida) puso la dirección en manos de los oficios predominantes en cada localidad, pero esta heterogeneidad de los oficios no privó a la acción de su carácter de clase.

Pero la distribución por oficios no agota el alcance de este movimiento de clase, que se basó también en la familia y la comunidad, como lo había hecho el primer capitalismo manufacturero y como lo hicieron la mayoría de los movimientos obreros radicales (así lo subraya Calhoun, 1982). Muchas zonas industriales estaban formadas de una ciudad o un pueblo rodeado de aldeas obreras, lo que proporcionaba un espacio relativamente libre del control segmental, como el propio Napier destacó alarmado. A las manifestaciones masivas se sumaban contingentes que marchaban bajo los estandartes de las aldeas. En los distritos obreros, el movimiento se centraba en los lugares de encuentro de las redes de comunicación oral y discursiva: iglesias, salas de lectura, escuelas, cervecerías y puestos de vendedores de periódicos. La organización no se centraba tanto en el empleo como en la comunidad.

Existieron, pues, muchas asociaciones de hombres y mujeres cartistas. Las autoridades no solían arrestar a estas últimas (de ahí nuestra falta de datos), pero cuando la sociedad victoriana se volvió contra la agitación feminista, su papel quedó minimizado en las memorias posteriores. Todo hace pensar que en este primer movimiento obrero se produjo la mayor representación femenina de los que tuvieron lugar hasta mediados del siglo XIX. La destrucción de la familia del trabajador, el trabajo en las fábricas de las mujeres y los niños, la Ley de Pobres, y la explotación de las familias a través de un sistema regresivo de impuestos acabaron con el predominio masculino. Pero incluso los hombres tenían ideas muy claras al respecto, como se desprende de uno de los principales lemas del movimiento (citado en Bennett, 1982: 96):

> Si por la mujer y los hijos
> luchamos hasta la muerte,
> ¡Dios se apiadará
> de nuestra suerte!

Las mujeres patrocinaron también dos reivindicaciones cartistas menores: un mayor control de la enseñanza y del alcoholismo. Do-

rothy Thompson (a quien debo gran parte de este párrafo) cree que la participación de las mujeres decayó en la década de 1840, momento en que la Ley de Pobres se hizo más humana y se establecieron las condiciones del trabajo en las fábricas (1984: capítulo 7). Más adelante sostendré que las *Factory Acts* masculinizaron el cartismo, que nunca abogó por la igualdad de los sexos. Tanto su programa como su liderazgo, en especial la propia Carta, reflejaban un predominio del hombre, normal en la época. Pero la explotación contemporánea se ejerció sobre las familias, hombres y mujeres que no estaban claramente separados al respecto, y hombres y mujeres que compartían los remedios. El primer movimiento obrero de clase, mucho más fuerte que los posteriores, estuvo menos dominado por los hombres.

En efecto, los cartistas se movilizaron. Tres veces se presentó la Carta ante el Parlamento, respaldada por numerosas peticiones. El nivel inferior de participación en el movimiento fue la firma, plasmada por casi un millón trescientas mil personas en 1839, tres millones en 1842 y de dos a cinco millones en 1847-1848 (ambos bandos se disputan la cifra). Se trata de números muy altos. Algunos firmantes pudieron ser trabajadores agrícolas y del servicio doméstico. Puesto que la población adulta empleada en la manufactura no llegaba a los cinco millones, es probable que una mayoría firmara al menos una petición (no hubo muchos firmantes entre la clase media). En todo el siglo XIX no se conoció otra actividad política de este alcance.

El número de militantes fue, naturalmente, más bajo, pero no menos impresionante. En 1842 la *National Charter Association* (NCA) contaba con 50.000 miembros repartidos en 400 clubes locales. A finales de la década de 1840, la *Chartist Land Company* tenía unos 70.000. El principal periódico cartista, el *Northern Star,* tuvo 60.000 lectores en los años de mayor auge. Los funerales públicos de los militantes muertos durante la represión reunían multitudes de 50.000 personas. Los militantes lograron convocar repetidamente manifestaciones de 4.000 a 70.000 personas (aunque las cifras son inseguras y ya se discutieron en su propia época) en distintas ciudades al mismo tiempo. En 1842 el secretario de la NCA, que asistió a mítines multitudinarios en los alrededores de Birmingham, declaraba que en ellos «el grito universal era "queremos la Carta", aunque, ¡oh, maravilla de las maravillas!, nadie entre aquellos miles de personas tenía un *carné* de miembro» (Epstein, 1982: 229). La agitación tuvo tres momentos culminantes: en 1839-1840, 1842 y 1848. No conocemos el número exacto de participantes, pero los que anticiparon los hechos en 1839

estaban dispuestos a acudir a la huelga general hasta que el liderazgo cambió de opinión en el último momento; en cuanto a la huelga de 1842, fue la más amplia y general del siglo XIX en Gran Bretaña.

El cartismo no se organizó autoritariamente, en el sentido de tener una dirección central determinada. De ahí que su ideología y su alternativa (más allá de la Carta) estuvieran poco formalizadas y fueran fluctuantes y diversas. Pero el movimiento tuvo un carácter agresivo, hostil a los capitalistas y consciente de su clase. Aun el propio Feargus O'Connor, que nunca se consideró socialista, tronaba contra los empresarios capitalistas, a los que calificaba de «traficantes de sangre humana y explotadores de niños». Uno de los asistentes ha dejado escrito: «O'Connor dividía la sociedad en dos clases: los ricos opresores y los pobres oprimidos. Para él, la cuestión se resolvía en la guerra entre el capital y el trabajo» (D. Thompson, 1984: 251). Bronterre O'Brien denunciaba «la actitud bélica de los capitalistas». Los militantes ya no clamaban contra la «antigua corrupción», sino contra «la legislación clasista» y la «dictadura de los millones», la «dictadura de las ventas» y «cualquiera otra que se alimente de la vida humana» como declaraba el *Northern Star* (Stedman-Jones, 1982: 14).

Los dirigentes nacionales temían los discursos inflamados en público o en las reuniones (por miedo a los espías policiales), pero los militantes no se andaban con rodeos ni en los actos ni en las palabras. Las huelgas de 1842 se declararon generales para forzar a todos los trabajadores. Como decía una carta interceptada:

> Es la hora de la Libertad. Queremos que se nos paguen los mismos salarios que en 1840, porque, de lo contrario, los sastres, los fabricantes de cepillos, los carreteros, los zapateros remendones, los constructores, los carboneros, los albañiles, los barrenderos, los hojalateros y todos los demás sindicatos llevaremos la Revolución hasta el final y paralizaremos todos los oficios.

Así describía una reunión que tuvo lugar en Manchester uno de los militantes:

> La huelga podía y debía ser seguida de un cierre general. Las autoridades del país intentarían reprimirla, pero nosotros estábamos dispuestos a resistir. Sólo cabía ya el enfrentamiento físico. Teníamos que impulsar la lucha, y si nos manteníamos unidos, ésta sería irresistible [D. Thompson, 1984: 287, 297].

Los cartistas han recibido con frecuencia el espaldarazo de los escritores modernos porque pocos fueron socialistas en el sentido marxiano o productivista (es decir, Hobsbawm, 1962: 252, 255; Musson, 1976; Stedman-Jones, 1983). Pero se trata de una visión partidista y teleológica que parece responder a su propia desilusión de la «democracia burguesa» y del Partido Laborista. Pero a la vista del desastroso futuro del marxismo, esta actitud no convence ni siquiera desde una perspectiva teleológica. Puesto que el Estado central era la causa inmediata de la explotación de aquellas gentes, resulta *lógico* que fuera el principal objetivo de su ataque. Entonces, como ahora, el voto tenía una importancia real, y su consecución ofrecía la oportunidad de cumplir los deseos de los militantes: una Ley de Pobres más humana, los derechos mutualistas para organizarse en sindicatos y un sistema fiscal más progresivo.

En las décadas de 1830 y 1840 la combinación cartista de objetivos políticos claros y metas económicas de carácter mutualista parecían muy apropiadas para aliviar la explotación de las familias de los obreros. Como concluye Dorothy Thompson (1984: 337) en su perspicaz estudio, el cartismo contó incluso con un programa más amplio y verosímil: una centralización menos rápida (aparte de la propiedad estatal de la tierra y los transportes), una mayor autonomía local, una revisión del tamaño de las unidades económicas y un freno al imperialismo; a lo que cabe añadir un trato más humano a los niños, el aumento de la escolaridad y de las restricciones al alcohol. Thompson está convencida de que, de haberse realizado, el programa habría ralentizado el crecimiento económico, pero, desde el punto de vista de los problemas industriales, podía haber remediado el sesgo comercial del capitalismo británico (véase el capítulo 4).

Algunos cartistas estaban dispuestos a llegar más lejos y emplear métodos revolucionarios para lograr sus metas. La facción partidaria del empleo de la «fuerza física» organizó clubes armados con varios miles de picas y cientos de mosquetes, que exhibían en desfiles militares y procesiones a la luz de las antorchas para intimidar a las autoridades locales. En 1839 hubo intentos de organizar una revuelta general, que debía comenzar en Newport, Newcastle y el West Riding, pero la medida chocó con la oposición de casi todos los dirigentes nacionales, aunque muchos de ellos eran partidarios de una instrucción lenta y sistemática en las armas. Sin embargo, algo falló en la planificación, ya que los conspiradores se dispersaron como conejos asustados cuando el levantamiento de Newport fracasó por la mala

organización y no pudo extenderse. En Newport había unos 5.000 piqueros dispuestos a todo para liberar a los prisioneros cartistas de la cárcel antes de que 20.000 más bajaran de las colinas circundantes. En 1840 se produjo un estallido de violencia, durante el cual se libraron batallas de picas en Bury, Birmingham y los yacimientos de carbón del noreste, así como asaltos a las tiendas de comida y a los asilos, incendios de casas parroquiales y comisarías y lapidamientos de las tropas. En 1842 las masas cartistas tomaron Birmingham durante cuatro días, antes de ser dispersados por el ejército, que hizo 400 prisioneros. Tomaron también las *Potteries* durante dos jornadas, con el resultado de 116 prisioneros y 49 deportaciones; en Halifax, la muchedumbre hirió gravemente a ocho dragones antes de ser dispersada. En 1848 hubo planes de insurrección en Lancashire, el West Riding y Londres. En Glasgow, las tropas abrieron fuego contra la multitud que se manifestaba contra la Ley de Pobres, causando seis muertos. Una muchedumbre armada puso en un aprieto a la policía y a la guardia especial en Bradford. Sólo las armas de fuego y los sables de los dragones a caballo lograron dispersarla.

Los cartistas no fracasaron porque fueran pocos, incoherentes o tímidos o porque estuvieran organizados por secciones. Es cierto que la organización nacional fue débil y que pocos de ellos buscaban la revolución, pero también lo es que antes de 1917 no existió un movimiento más genuinamente «revolucionario». Los pueblos se vuelven revolucionarios sólo cuando los regímenes rechazan sus demandas y, en una escalada confusa, deciden que es posible destruir el sistema. En realidad, el cartismo padeció de una debilidad intrínseca de tipo organizativo que se manifestó sobre todo en la capital, un hecho fundamental para un movimiento dirigido contra el Estado (lo que se hizo evidente durante la debacle de 1848). Cuando la población londinense subió de un millón a dos millones setecientas mil almas, entre 1801 y 1851, diminuyeron las posibilidades de movilización masiva en la capital y se ahondó el abismo entre la organización en el espacio del taller y del vecindario y el nivel político de toda la ciudad (Goodmay, 1982). La base del movimiento estuvo en la comunidad, pero la lucha definitiva se desarrolló en la gran metrópoli. No obstante, salvando esta excepción, el fracaso de la revolución no se debió a sus propios fallos. La agitación tuvo la misma fuerza que cualquiera de las que se produjeron en la Francia de 1789 o en los movimientos de clase de 1848 (aunque no tuvo el mismo carácter nacional). Los cartistas poseían de modo especial (y lo compartían con muchos disi-

dentes nacionalistas) la moral y el fervor emocional que les proporcionaba la familia y la organización comunitaria.

Lo que faltó fue la debilidad o la división en el bando contrario, aunque muchos historiadores lejos de buscar las razones en las clases altas, las sitúen en las clases bajas. Al contrario que en los acontecimientos de 1789, 1848 o los de principios del siglo XX en Rusia, esta vez no se dieron escisiones significativas ni en el antiguo régimen ni en las clases dominantes. Hemos visto en el capítulo 5 que las divisiones del régimen —en la corte, en los Estados Generales y en la Asamblea Nacional, en la Iglesia y en el ejército— constituyen un elemento decisivo tanto para un desarrollo auténticamente revolucionario de las crisis como para que se produzca en el liderazgo insurgente un deslizamiento hacia la izquierda. Pero el Parlamento británico no llegó siquiera a discutir la Carta. No cabía ya una evolución desde los derechos individuales de ciudadanía a los derechos políticos, como ha sostenido Marshall. Por el contrario, los primeros se opusieron firmemente a los segundos.

Ninguna autoridad nacional o regional sintió la suficiente simpatía como para defender la concesión de algunos de los puntos que propugnaba la Carta. Los esfuerzos de los cartistas más moderados para aliarse con los reformadores de la pequeña burguesía obtuvieron pocos frutos. Al sentirse amenazadas, las clases medias escogieron la propiedad y el orden, y se enrolaron a miles como guardias especiales. Se produjo, como resume John Saville en su inteligente estudio sobre la respuesta del régimen «un cierre de filas de los que disfrutaban de propiedades en el país, por pequeñas que éstas fueran» (1987: 227; *cf.* Weisser, 1983). Al producirse el colapso de la última manifestación masiva de 1848, que marcó el fin del cartismo, la esposa de un ministro del gobierno escribía así a la esposa de otro ministro: «Me alegro de que haya ocurrido todo esto, porque ha servido para demostrar el sentido común de nuestras clases medias» (Briggs, 1959a: 312).

Así pues, el fin del cartismo nos remite más a la persistencia burguesa que a la conciencia de clase proletaria. Este ejemplo de lucha frontal de clases no representó, como de costumbre, una síntesis dialéctica y revolucionaria, sino la victoria de la clase dominante.

La unidad de los burgueses permitió llevar a cabo una represión tan consistente como juiciosa; estamos ante una cristalización militarista, ordenada y blanda, del Estado. El cartismo no tuvo nada que ver con el tan cacareado genio inglés para el compromiso y su sentido

pragmático. A este respecto resultan preciosos algunos puntos que se pusieron de manifiesto a partir de 1832. La represión mesurada salió adelante; hubo algunos desacuerdos en tono tranquilo sobre la táctica dentro del gobierno, pero ni se produjeron cambios de política entre las facciones, ni situaciones de pánico súbito que suscitaran una sobrerreacción o el empleo de una brutalidad exagerada. El ejército buscó infligir el menor daño posible. Las sentencias condenatorias sólo se aplicaron en casos de violencia y en procesos legales, aunque la ferocidad de los ofensores empalidecía al compararla con sus condenas (ejecución, deportación y largas penas de cárcel). Los que sólo habían participado en la organización o en las acciones fueron acusados de delitos de «sedición», «incitación» o «conspiración», sometidos a procesos legales y condenados sólo a uno o dos años de prisión. De los veinte delegados cartistas elegidos en 1848, catorce fueron arrestados inmediatamente y encarcelados durante más de un año (Saville, 1987: 162).

Conviene entender a este respecto la importancia del cometido de la ley británica y su carácter centralizado. Como dice Saville, las instituciones jurídico-policiales quedaron centralizadas y firmemente subordinadas al Parlamento de la democracia de partidos, soberano en la elaboración de leyes. Al contrario que muchos países del resto del Continente, el ejército, la policía y la judicatura no tuvieron una cristalización autónoma en el Estado. Como veremos más adelante al analizar el caso estadounidense, la ley y la Constitución eran soberanas. No compartían el Estado con otros pragmatismos o con otras preocupaciones monárquicas; el control de los disturbios no permitía manipular la ley en nombre del orden o de metas políticas más altas. Las constituciones británica, durante ese periodo, y estadounidense, durante todo el siglo, no presentaban muchos puntos comunes, pero compartían la democracia de partidos (restringida) y una ley soberana que encarnaba las normas de la propiedad capitalista. Ambos países reprimieron las agitaciones sociales, acusándolas de «conspiraciones», haciendo gala de una gran consistencia por parte del régimen y de un enorme fariseísmo por parte de la clase dirigente, sin parangón en otros países. Como veremos en los próximos capítulos, el Estado británico perdió después algo de esa hipocresía (no así el americano) que en estos momentos alcanzaba su punto culminante, como ejemplifica el caso del general Napier, un *tory* que simpatizaba con los cartistas, tronaba contra los *whigs* por la insurrección y sostenía que la Constitución debía ser defendida a cualquier precio.

El ejército de Napier era profesional y contaba con un historial de éxitos único en el mundo, en el que no faltaba siquiera la represión de los disturbios populares en Irlanda y el Imperio. Napier confiaba en la disciplina de sus soldados y disponía de una táctica clara, concentraba las tropas para impedir el aislamiento de los regimientos pequeños en sus puestos, convencido de que los cartistas podrían convertir un incidente de este tipo en una nueva «Bastilla», cuya fuerza simbólica bastaría para producir nuevos levantamientos. Contra los piqueros empleó la caballería con la orden de usar sólo la parte plana de la espada siempre que fuera posible, y la infantería con sus mosquetes y bayonetas cuando los piqueros se resistían. Para reducir las muertes, sólo empleó perdigones. «Lo importante es derrotar sin matar» (Napier, 1857: II, 4). Ni la policía ni la milicia ni las tropas desobedecieron las órdenes, y prácticamente ningún magistrado, soldado u oficial se dejó llevar por el pánico. El éxito del levantamiento —y probablemente de cualquier revolución o insurrección— dependió de esta circunstancia. Ni siquiera se entregaron al pánico los treinta y tantos soldados cercados en Newport por 5.000 manifestantes armados de picas, por el contrario, se limitaron a disparar, y cuando se despejó el humo de la segunda carga (esta vez no eran perdigones), la muchedumbre se dio a la fuga dejando tras sí al menos veintidós muertos.

Las principales agitaciones cartistas fueron derrotadas por un ejército profesional, disciplinado y seguro de sí mismo, que contaba con un mando inteligente; por la milicia de una clase burguesa consciente de sí misma; por la nueva organización de las autoridades de los gobiernos locales y por las nuevas autoridades policiales, que cumplieron adecuadamente con la ley de la tierra. ¿Qué habrían podido aquella muchedumbre, aquella oratoria y aquellas picas (que según Napier eran demasiado cortas) contra la movilización de una fuerza centralizada y eficaz como ésta? Puesto que no se tomó ninguna Bastilla, no se comenzó ninguna revolución. Ésta suele ser más el producto de un régimen indeciso, sumado a una insurgencia perspicaz, como bien sabía Lenin. No hubo revolución inglesa porque el régimen británico no tuvo dudas.

Cuando los acontecimientos de 1839 evidenciaron el estado de la cuestión, la respuesta cartista se dividió. El argumento del mérito moral contra la fuerza bruta ya se había oído antes[3]. Muchos dirigen-

[3] Puede que se oyera por primera vez durante las luchas por la emancipación irlandesa, ya que muchos de los dirigentes cartistas lo eran.

tes creyeron que la fuerza moral de la primera petición no bastaría en el Parlamento. Se limitaron a dilatar al máximo las decisiones más difíciles, ¿serían capaces de dar el siguiente paso lógico y aplicar las presiones insurreccionales? Es probable que incluso la facción más partidaria de la fuerza física viera en ello más una presión que una incautación del poder del Estado, como en el caso francés entre 1789 y mediados de 1791. Pero ahora los dirigentes cartistas habían probado ya los amargos frutos de la fuerza física. ¿Qué les quedaba por hacer ante un régimen que se manifestaba tan unido e insensible a las presiones?

Muchos, como Wade, rechazaron la fuerza física con argumentos «realistas»: «El grito de las armas, sin el precedente de la opinión moral y la unión con las clases medias, sólo traerá miseria, sangre y ruina» (Jones, 1975: 151). O'Connor ha sostenido repetidamente que una muchedumbre, cualquiera que sea su tamaño, se derrumbará siempre ante una tropa adiestrada. Es decir, lo principal no fueron las cuestiones políticas e ideológicas, sino la táctica. Desde sus inicios, el cartismo había contado con una base seccional: entre los oficios más especializados y seguros, y los más débiles y numerosos, favorables al empleo de la fuerza física (Bennett, 1982: 106 a 110). Esto marcó el principio de otras divisiones y puntos débiles que pondrían fin al ataque de la clase obrera en las décadas de 1840 y 1850. Mas para entenderlo debemos ampliar el enfoque.

La explicación convencional de la decadencia del cartismo suele sumar a la eficacia de la represión y la consiguiente aparición de divisiones tácticas dentro del movimiento, las mejoras que se produjeron en las condiciones de vida del pueblo en las décadas de 1840 y 1850. En primer lugar, se dice, la economía se recuperó y no volvió a entrar en crisis hasta la década de 1870, lo que puso fin a una época de desesperación para los trabajadores. En segundo lugar, el gobierno moderó su cruel política social, lo que restó fuerza a los líderes radicales que reivindicaban soluciones políticas.

Tales argumentos encierran alguna verdad, pero no son suficientes. No existe una relación necesaria entre las tendencias macroeconómicas y los movimientos sociales. Las insurrecciones no siempre se producen porque la economía vaya mejor o peor. La mejor explicación es la famosa curva J que propone Davies (1970), según la cual las revoluciones ocurrirían después de un largo periodo de prosperidad económica, seguido de un momento breve y agudo de caída, cuando después de producirse un aumento de las expectativas de las masas,

éstas quedan abruptamente frustradas. En efecto, estas curvas J se producen a menudo, no siempre, antes de las revoluciones. Pero según esta teoría tendría que haberse producido una nueva insurrección de masas en Gran Bretaña a mediados de la década de 1870, después de que la prosperidad de la década de 1860 sufriera un repentino revés, lo que, sin embargo, no ocurrió. Las insurrecciones son organizaciones (como dicen los teóricos de la movilización de los recursos), de ahí que necesiten una explicación específica de cómo se vincula el progreso económico a la organización insurgente, lo que veremos enseguida.

¿Moderó en realidad el gobierno su política social para socavar el cartismo? (como sostiene Stedman-Jones, 1982: 50 a 52). El cambio decisivo estuvo en el descenso de la carga impositiva sobre el consumo durante la década de 1840 (véase capítulo 11). Pero no se trató de un cambio de los sentimientos del gobierno, sino del final (véase capítulo 11) del ciclo de la deuda contraída durante las guerras napoleónicas, a lo que no se añadió en este caso ninguna guerra nueva. Puesto que la financiación regresiva de la guerra había sido responsable en alto grado de la politización de clase desde la década de 1760, su descenso despolitizó considerablemente a las familias obreras. En el capítulo 11 vimos que la disminución de los impuestos ocurría en ese momento a escala mundial. El cartismo fue uno de los últimos movimientos en los que el sistema fiscal desempeñó un papel de primer orden, al menos en su fase inicial. A finales del siglo XIX aparecieron nuevas formas de politización de clase, pero a mediados de siglo se produjo una tregua. La agitación obrera adquirió un carácter más económico, más confinado a las relaciones directas de producción, y este hecho, contra lo que sostuvo Marx, la moderó y la despolitizó.

Con frecuencia se apunta también a la mayor moderación del régimen, a una administración más indulgente de la Ley de Pobres (D. Thompson, 1984: 336) y a una mayor colaboración entre las «clases industriosas» (en especial entre los disidentes), que unió a los trabajadores con los empresarios contra el antiguo régimen para lograr el rechazo de las Leyes del Trigo en 1846 y para urgir la reforma de la educación y las leyes contra el alcohol. No obstante, hubo levantamientos contra la Ley de Pobres todavía en la década de 1840, cuando unos cuantos militantes cartistas se dejaron seducir por los movimientos colaboracionistas, lo que no influyó en la caída del cartismo. También se produjo una colaboración entre las clases con mo-

tivo del movimiento por las *Factory Acts,* pero esto —como la mejora económica y fiscal— fue menos un progreso que un refuerzo del seccionalismo en el que acabaría por desintegrarse finalmente un cartismo ya derrotado. Consideremos ahora el proceso en toda su complejidad.

Los movimientos por las *Factory Acts* nacieron para protestar contra la explotación de los tres grupos de trabajadores: hombres, mujeres y niños. Un puñado de radicales burgueses apoyó los «salarios justos» y los «horarios razonables» para los tres grupos, pero eran muchos más los que querían regular el trabajo de las mujeres en las fábricas o acabar con él, y más aún —incluidos los dueños de las fábricas y sus mujeres, entre los que abundaban los activistas del protestantismo evangélico y el movimiento contra el alcohol— los que atacaban el trabajo infantil. El respaldo llegaba de los dos extremos, los radicales izquierdistas y los *high tories.* En ocasiones convergían ambas identidades en la misma persona, como en el caso de Michael Sadler, parlamentario de Leeds, que propugnaba una «ley de diez horas», apoyado por los cartistas contra los oponentes liberales en las elecciones parlamentarias, y que tenía su alter ego en el propietario de la fábrica de algodón de Rochdale, un radical y, sin embargo, partidario del *laissez-faire,* John Bright, que se opuso a las *Factory Acts* porque «restringían los oficios» y «transgredían la libertad». En el Parlamento, los *whigs* y los *high tories* patricios clamaban desde sus condados contra la inmoralidad de los dueños de las fábricas. Esta cristalización política *patriarcal* constituía el único resquicio del régimen que podían aprovechar los obreros. Y, en efecto, todos sus éxitos llegaban por vías intersticiales, no a través de la confrontación dialéctica o el compromiso sistémico.

El Parlamento siempre había legislado a favor de los niños. El título de la última ley de Peel el Viejo, en 1802, *Health and Morals of Apprentices Act,* evidencia la carga de moralidad paternalista. Peel era *tory* y probablemente el único empleador de aprendices de la Cámara en ese momento. Apeló a la moral paternalista hacia los niños sin conseguir superar la hostilidad de un grupo de interés atrincherado en el Parlamento. Después se promulgó la ley *tory* de 1819 que prohibía el trabajo de los menores de nueve años en las hilanderías. Cuando en 1832 el Parlamento representó adecuadamente a los dueños de las fábricas, se intensificó el enfrentamiento, pero el movimiento por las *Factory Acts* dio publicidad al espantoso sufrimiento de los niños en las minas y la industria textil, apelando al patriarcado

para denunciar las fatigas de las mujeres; ellas, las responsables de la moral doméstica, eran para los cristianos y los conservadores igualmente esenciales para la fábrica moral de la sociedad; en cuanto a las solteras, pensaban que debían dedicarse a tareas que las prepararan para la futura maternidad, como el servicio doméstico o el comercio al por menor. Las casadas deberían permanecer en casa.

Para asegurarse estos fines morales-patriarcales, se aprobaron las leyes a lo largo del periodo cartista. Las leyes *whig* de 1833 y 1836 crearon la figura del comisario de fábrica para regular el trabajo y los horarios infantiles. La Ley de Minas de 1842, que no estaba vinculada a ningún partido, prohibía el trabajo clandestino de las mujeres y los niños menores de diez años y creaba un cuerpo de inspección para imponerla. La *Factory Act tory* de 1844 para la industria textil, fijaba un máximo de seis horas y media para los niños menores de trece y un máximo de doce para las mujeres, además de ampliar el cuerpo de inspectores y proteger la maquinaria. La ley independiente de 1847 redujo el horario de las obreras textiles a diez horas, y fue seguida de dos leyes más, en 1850 y 1853, que impusieron una nueva reducción. Estas leyes aceptaban, además, la responsabilidad de la educación de los niños fuera del horario de trabajo, aunque el cumplimiento fue irregular. Todas ellas se aprobaron en la Cámara de los Lores con el apoyo de los obispos. El Parlamento extendió la legislación a todas las industrias de 1860 a 1867. Hasta 1874 no se aplicaron a los hombres.

Esta secuencia legislativa revela las distinciones seccionales impuestas por la moral patriarcal a la situación de hombres, mujeres y niños. Éstos fueron los primeros en beneficiarse de una regulación que encontró pocos desacuerdos. Los testimonios que se recogieron entre los hombres y las mujeres de la clase obrera se pronunciaban unánimemente: los niños no debían utilizarse en un trabajo esclavo que los degradaba física y moralmente, destrozaba la familia y la autoridad paterna y constituía una competencia que hacía bajar los salarios. El apoyo entusiasta del Parlamento a las dos primeras razones permitió pasar por alto la tercera, pese a su carácter «restrictivo de los oficios». Quedó, pues, eliminada una de las grandes causas del exceso de mano de obra y se pensó en elevar los salarios para que los niños pudieran ser mantenidos en casa. Criterios morales muy parecidos lograron restringir también el trabajo de las mujeres, aunque en menor medida que el de los niños. Nuevamente, los trabajadores se mostraron unánimes en este punto, ya que la reducción de los hora-

rios y la mejora de las condiciones representaba siempre una ganancia, aunque fuera exclusivamente para las mujeres. Y de nuevo volvieron a pasarse por alto las restricciones de la mano de obra y se subieron los salarios.

Pero estos logros produjeron también resultados involuntarios. La restricción del horario para un grupo tenía consecuencias para el otro. Puesto que hombres y mujeres trabajaban juntos, la diferencia de horarios y condiciones afectó a la eficacia de la producción (sobre todo a partir de las leyes de 1850 y 1853). Cuando el movimiento tuvo conciencia de la nueva situación, exigió también un recorte del horario laboral para los hombres, que en ocasiones se llevó a cabo. El aumento de los costes en el empleo de niños (en especial en lo relativo a la provisión para educación) redujo el atractivo de éstos y de las mujeres para los empresarios. En las fábricas desaparecieron los niños y disminuyó la presencia femenina. Los hombres estuvieron de acuerdo, convencidos de que sus salarios subirían lo suficiente para mantener a toda la familia; la opinión de las mujeres no fue unánime, sobre todo entre las viudas y las solteras maduras, que perdieron parte de su autonomía económica. Los trabajos «modernos» —fábricas, minas y talleres ferroviarios— quedaron regulados y en manos de los hombres. En la industria textil se mantuvo una mayor presencia de las mujeres, pero dentro de una división jerárquica del trabajo entre ellas y los hombres (sin niños).

Se trata, pues, de una historia en la que no sólo hubo factores de progreso para los obreros, sino también consecuencias imprevistas para las cristalizaciones capitalista, moral-ideológica y patriarcal del Estado, que contribuyeron a debilitar aquella solidaridad de clase del cartismo que había estado basada en la comunidad y la familia y redujeron la acción propia de la clase obrera a una hermandad de carácter seccional. Gran Bretaña es el único país en el que podemos seguir la huella de este proceso, ya que en otros países el moralismo patriarcal desplazó a las mujeres y los niños del mundo del trabajo antes de que apareciera una clase obrera consistente, y porque el movimiento obrero sólo allí tuvo una base familiar. Ahora, sin embargo, se había seccionalizado antes de desaparecer definitivamente, gracias también a la mejora de la economía y a la disminución de la carga impositiva. Los obreros se despolitizaron y volvieron a la acción limitada al puesto de trabajo, donde les esperaba una cartera de pedidos repleta que reforzó sus armas económicas. En este ambiente seccionalista y economicista nació la *Chartist Land Company*, a mediados de la dé-

cada de 1840, con el objetivo de comprar tierras de labranza para los trabajadores, como reacción a la derrota política y recuperación nostálgica de un tipo de acción económica más limitada. En efecto, de aquella derrota de la lucha frontal de clases que representó el cartismo iba a nacer a mediados de siglo el «sindicalismo respetable».

El surgimiento del sindicalismo seccional, 1850-1880

Desde mediados de siglo [4], el crecimiento del sindicalismo fue lento pero acumulativo. Webbs (1920: 472, 748) estima una afiliación de algo menos de 100.000 miembros a comienzos de la década de 1840, y otros cálculos más recientes han arrojado de 500.000 a 600.000 hacia 1860, 800.000 en 1867 y un millón seiscientos mil (probablemente una cifra exagerada) en 1876 (Fraser, 1974: 16). Pero junto a los sindicatos existían otras formas de asociación de mayor tamaño como las cooperativas o las sociedades de «socorro mutuo», que según una comisión real de 1874 contaban con cuatro millones de miembros y ocho millones de beneficiarios de la ayuda mutua (Kirk, 1985: 149 a 152). La mayoría de los trabajadores se encontraban vinculados a una u otra forma de proteccionismo, ninguna de las cuales despertaba los recelos del régimen.

Pero cambió también el carácter intrínseco de los sindicatos. En 1860 gran parte se había convertido en organizaciones economicistas y seccionales, y para muchos escritores, conservadoras o aristocráticas. Aunque en su mayoría no plenamente ilegales, continuaban sometidas a las leyes contra la conspiración. Como veremos más adelante en el caso de los Estados Unidos (capítulo 17) resultaba mucho más fácil dividir a través de las leyes a estas organizaciones profesionales privilegiados que a los sindicatos industriales o generales, en especial cuando controlaban la oferta de trabajo. Así pues, quedaron limitadas a los niveles más altos de especialización laboral. A este núcleo urbano de artesanos hay que añadir los trabajadores mecánicos especializados, los mineros y los trabajadores del metal, que se encontraban en los talleres y las fábricas, los obreros de la industria textil y otros cuya especialización profesional se adquiría en las fábri-

[4] Las fuentes principales para este periodo han sido Pelling (1963), Parkin (1969), Musson (1972), Fraser (1974), Tholfsen (1976), Hunt (1981), Evans (1983) y Kirk (1985).

cas. El centro de gravedad de los sindicatos se desplazó desde los talleres artesanales a la minería y los talleres mecanizados. Los mercados internos de trabajo crecieron sobre todo en el ferrocarril, el hierro y el acero. Muchos sindicatos intentaron restringir el acceso al oficio, bloqueando a los «ayudantes»; restringir el empleo femenino y reivindicar un «sueldo familiar» sólo para los hombres (Savage, 1987), institucionalizando las normas que regían en los talleres y las fábricas para reconciliarse con el patrón, conciliar en caso de huelga, garantizar la eficacia del trabajo de los miembros y conferirles respetabilidad. Se produjeron huelgas violentas, especialmente en la minería, pero la identificación con su sector y con la empresa segmental fue mayor que con la clase (Joyce, 1980: 50 a 89). Oigamos los versos de un calderero (citados en Fraser, 1974: 59):

El capital y el trabajo,
tal como Dios los pensó,
¿no son dos fuerzas gigantes
que buscan un mismo albor?
¿Qué es el trabajo en sí mismo?
Dar vueltas siempre al molino.
Y el capital, ¿qué será,
abandonado al destino,
sino semilla de oro
que jamás produce trigo?
Para ascender la colina
del progreso, es necesario
que las dos cosas se engarcen
como cuentas de un rosario.
Marchemos, pues, en concordia,
por bien de la humanidad.
Del capital y el trabajo
haciendo alas y remos
que nos conduzcan a todos
al progreso que queremos.

(Fraser, 1984: 59)

Sin embargo, estas organizaciones respetables estaban incorporando uno de los elementos del socialismo moderno: la concepción de la sociedad como una *totalidad*. El capitalismo fue para ellos un sistema desde el momento en que descubrieron que las condiciones de su empleo estaban vinculadas a los ciclos de la producción que

ellos podían explotar (Hobsbawm, 1964: 350). Otra prueba de su creciente sentido de la totalidad —«un punto destacado en la historia del sindicalismo», como lo ha llamado Pelling (1963: 42)— fue la creación en 1851 del primer sindicato nacional destinado a durar, la *Amalgamated Society of Engineers* (ASE), que, si bien limitada a los trabajadores especializados de sexo masculino, reconocía ya una comunidad nacional de intereses. La ASE creó un modelo de organización para otros sindicatos, capaz de superar el plano regional.

Las normas de la ASE manifestaban abiertamente la paradoja central del sindicalismo profesional:

> Si nos vemos obligados a establecer restricciones para la admisión en nuestro sindicato de aquellos que no han adquirido el derecho mediante un periodo de prueba (es decir, en régimen de aprendizaje), lo hacemos porque sabemos que tales abusos redundan en nuestro daño, y cuando no existe un control, se rebajan las condiciones del artesano a las de un trabajador sin cualificación, y las ventajas duraderas de los admitidos [Clegg *et al.*, 1964: 4].

Aunque el sindicato creía verse «obligado» a excluir a los obreros no especializados, lo cierto es que la exclusión reforzaba el seccionalismo. Pero la organización también extendía y a veces politizaba las identidades colectivas de sus miembros. Al principio, la ASE se implicó más que nada en la homologación de los beneficios del socorro mutuo, pero cuando los patronos emprendieron un boicot nacional a la ASE en 1852, tanto sus miembros como otros artesanos se vieron abocados a crear organizaciones más amplias y más políticas. La lucha de clases tenía un elemento acumulativo y dialéctico. La participación del sindicato en las protestas por los horarios de nueve y diez horas empujó a la patronal a organizarse en el plano regional y nacional, lo cual, a su vez, produjo una nueva tendencia a la organización nacional del sindicalismo. La afiliación ascendió de los 5.000 miembros iniciales a los 45.000 de 1880. La respetabilidad de lo que se llamó el «nuevo modelo de sindicato» no era en realidad nueva (Musson, 1972), pero sí lo eran las organizaciones *nacionales*. El Estado-nación se convertía así en una *totalidad* de los trabajadores.

Sin embargo, la politización no fue principalmente un fenómeno de clase. En la década de 1850 los sindicatos colaboraron con los reformadores de la clase media en la *Reform League,* cuyo lema era «los trabajadores merecen el derecho a votar». A finales de la década de 1860, el liberalismo había sucedido al cartismo en el ideario polí-

tico de la mayor parte de los afiliados, que participaban también en movimientos cooperativos y educacionales y en ligas contra el alcohol de carácter interclasista (Kirk, 1985: 70, 132 a 173). En contrapartida, consiguieron una legislación mutualista que garantizaba los derechos de las cooperativas y de las sociedades de socorro mutuo y aumentaba la educación. Los reformadores burgueses comenzaron a valorar la reivindicación mutualista que exigía la garantía de derechos civiles a las organizaciones sindicales, porque el orden social, más seccional y estable que antes, había relajado la férrea unión de clase de la burguesía, y el régimen volvía a dividirse en facciones, entre las que no faltaron quienes abogaban por la «incorporación liberal» de los trabajadores respetables.

De hecho, en relación con los trabajadores, el Estado británico cristalizaba ahora como una democracia de partidos. Tanto los *tories* como los liberales apoyaron la concesión del voto a estos hombres respetables. Los propios partidos se masificaron, redujeron su dependencia de los notables y se comprometieron con una competencia electoral genuina. Sus facciones declaraban que el apoyo a la reforma les proporcionaría ganancias electorales. La *Conservative Act* de 1867 garantizó el sufragio al cabeza de familia en los municipios, dejando intacto el poder conservador en el campo; como afirmaba lord Derby, aquella ley «confundía a los *whigs*». Los liberales reaccionaron ampliando la ley a los condados en 1884, y consiguieron que la concentración geográfica de las minas de carbón les proporcionara la mayoría en algunos distritos electorales. Los mineros, presentados a las elecciones por sus sindicatos y leales al partido liberal, llegaron al Parlamento en 1885. Con ello accedían a la Cámara como consecuencia de la colaboración segmental entre los sindicatos y el régimen de democracia de partidos.

El *Trade Union Congress* (TUC) simbolizó el ascenso de estas organizaciones nacionales, moderadamente mutualistas y colaboracionistas. Fundado en 1868-1869 como una sociedad de debate, amplió sus actividades (como había ocurrido con las organizaciones laborales en las décadas de 1820 y 1830) a raíz de la represión legal de los sindicatos. Cuando la *Criminal Law Amendment Act* de 1871 criminalizó los piquetes, amenazando incluso a los sindicatos profesionales, el TUC presionó con éxito entre sus aliados burgueses para que fuera rechazada en 1875.

Los sindicatos compartieron también los intentos de entender la naturaleza de la «sociedad» que se realizaron en la época victoriana,

esto es, la idea de que aquélla constituía un todo sistemático y delimitado cuyas leyes intrínsecas podían comprenderse tanto a través de la economía política como de la nueva disciplina sociológica. Los positivistas ingleses popularizaron a Comte, el inventor del término, y los libros de Spencer sobre la evolución social alcanzaron elevadas ventas, en tanto que Marx debatía la naturaleza del sistema capitalista con otros socialistas, y éstos, a su vez, lo hacían con los radicales y los sindicalistas. La mayor parte de sus teorías aceptaban una totalidad social doble: la «sociedad» era al mismo tiempo un sistema industrial o capitalista y un Estado-nación, tal como lo ha sido desde entonces para el socialismo y para la sociología.

El sindicalismo respetable no fue en realidad una «aristocracia obrera», ni mucho menos una «traición» (como sostiene Foster, 1974), porque el cartismo y el movimiento de clase habían desaparecido antes de que los sindicatos se volvieran respetables. Los distritos electorales insurgentes desaparecieron como resultado de una derrota, en especial de los trabajadores manuales de la industria textil, prácticamente extinguidos durante la década de 1850. Por el contrario, la respetabilidad fue una respuesta racional y seccional a (1) el fracaso total de las tendencias de *clase* del cartismo; (2) la consiguiente conversión de la solidaridad de clase en estrategias economicistas *seccionales;* (3) el descubrimiento por parte de algunos elementos del régimen de la democracia de partidos de que el seccionalismo, lejos de representar una amenaza, encarnaba grandes virtudes; y (4) el estímulo que, a mediados de siglo, supusieron para el seccionalismo las nuevas formas de *heterogeneidad* económica en un clima de crecimiento. Analizaré estos cuatro elementos, comenzando por las fábricas.

El crecimiento de las fábricas desde mediados de siglo no reforzó la identidad de clase, como esperaba Marx. Joyce (1980) demuestra que las fábricas de algodón fomentaron el paternalismo segmental, incluso la vuelta a la deferencia, lo que coincide con las pruebas que aporta Calhoun (1982) respecto a que el radicalismo anterior sobrevivió mejor en las ciudades donde abundaban los pequeños talleres artesanales que donde predominaban las fábricas, y con la evidencia de Rudé (1964) de que las masas más radicales (salvo en el momento culminante del cartismo) estaban compuestas por los trabajadores más móviles y menos sujetos a la disciplina de las fábricas, así como con la argumentación de F. M. L. Thompson (1981), según la cual de 1840 a

1880 las grandes fábricas constituyeron el principal mecanismo de control segmental ejercido sobre los trabajadores.

Todas estas aportaciones son coherentes con el modelo de «deferencia» de Newby (1977). Ésta, como observa el autor, tiene más que ver con las relaciones que con las actitudes, como se desprende de la situación de la agricultura en el siglo XX (su campo de estudio), en los casos en que el dueño de la explotación domina la unidad familiar de sus trabajadores. El agricultor del siglo XX y el industrial de finales del XIX no eran únicamente propietarios y gerentes activos, sino también magistrados y líderes de las instituciones sociales, educativas y políticas en el plano local. Los obreros no conquistaron un poder extensivo suficiente para desafiar este hecho, pero lograron objetivos limitados mediante la manipulación de un estilo respetuoso, llegando incluso a interiorizarlo, ya que cuando la única realidad posible es la dominación del patrón, ésta se convierte en un hecho «natural», en el doble sentido factual y normativo del término. Joyce demuestra que los trabajadores de las fábricas de algodón incluidos en el sufragio votaban lo mismo que sus patronos liberales o conservadores. Las empresas más pequeñas presentaban un grado más alto de conflictividad porque sus dueños controlaban peor la comunidad que los artesanos. El radicalismo se dio más en las grandes ciudades de obreros que en las de tamaño medio, porque las oligarquías de los dueños de las fábricas controlaban mejor Rochdale, Halifax y Walsall que Manchester, Leeds, Nottingham o Londres. La comunidad de la fábrica disminuía la posibilidad de organizarse en función de la clase y aumentaba las organizaciones segmentales. La superioridad de las clases altas sobre la capacidad organizativa de los trabajadores no había cambiado. Marx acertó al percibir el poder desafiante de la fábrica, pero si su aparición había planteado el desafío, su institucionalización contribuyó a refrenarlo. Así pues, más que una «escuela de socialismo», la fábrica representó el equivalente industrial del señorío medieval, y los obreros se transformaron en dependientes segmentales de su señor.

Más aún, cuando la actividad de las factorías y las firmas prósperas y estables entró en estrecha interrelación con los controles artesanales de la oferta de trabajo, los sindicatos dieron un sesgo de «género» a las relaciones laborales. Los sindicatos eran mayoritariamente masculinos, aunque las mujeres formaban una sustanciosa minoría de empleados. La idea del salario suficiente para mantener a una familia y el concepto de camaradería eran tan masculinos como las tabernas

donde muchos sindicatos celebraban sus reuniones (Hart, 1989: 39 a 60). Fuera de la fábrica y de la empresa estable, predominaban los trabajadores eventuales no organizados, enfrentados a las inseguridades del mercado, entre los que predominaban los hombres, aunque no faltaban las mujeres. En algunas zonas, la mayoría de los trabajadores eventuales de sexo masculino eran inmigrantes irlandeses, que constituían una fuente continua de disturbios y divisiones étnico-religiosas (Kirk, 1985: 310 a 348). Antes, cuando la heterogeneidad aún no se había transformado en un seccionalismo estable, los obreros irlandeses habían contado con una fuerte representación en el movimiento cartista, pero, ahora, por ejemplo en Lancashire, se enfrentaban a los militantes de la otra comunidad.

Los victorianos percibieron las nuevas divisiones, aunque sólo las que se producían entre los hombres. Marx analizó las divisiones entre los trabajadores y el lumpemproletariado eventual en la Francia de mediados de siglo y, posteriormente, el conflicto entre los obreros ingleses e irlandeses. Otros contemporáneos introdujeron el plural «clases obreras». Como escribía el radical *Bee-Hive* en 1864:

> Las clases obreras ... están divididas en dos grandes secciones, una comprende a los artesanos especializados y mecánicos; la otra, a los peones, los vendedores ambulantes, los hombres que se ganan a diario la vida por medios que ellos mismos no podrían describir con facilidad ... y las gentes de toda laña [Fraser, 1974: 209].

Mayhew apuntaba que en los muelles sólo conseguían trabajo y salarios regulares los artesanos especializados:

> Los artesanos son hombres peligrosos y muy politizados ... Los obreros no especializados son otra clase de personas, ya que están tan despolitizados como los lacayos ... No parecen sustentar opiniones políticas sobre casi nada ... y cuando opinan, se manifiestan más partidarios de dejar «las cosas como están» que del poder de los trabajadores [Evans, 1983: 170].

La mezcla de género y especialización profesional constituyó el gran punto débil de la clase obrera victoriana. Los contemporáneos dividieron a los trabajadores en «respetables» y «gente de mal vivir». Gray (1976) y Crossik (1978) demuestran que los artesanos (hombres) formaron sus propias asociaciones, se casaron en su ambiente y

transmitieron el oficio a sus hijos; ahorraron moderadas cantidades de dinero a través del socorro mutuo y cultivaron la respetabilidad. Estaban tan apartados de la clase media como de los trabajadores sin especialización, no exactamente «aburguesados», sino confinados en una fracción de clase aparte, gracias a sus enormes ventajas sobre los no especializados: la seguridad del empleo que les proporcionaba su control del mercado. Los no especializados eran eventuales que no ganaban un salario suficiente para mantener una familia, y este hecho les impedía contribuir a las mutuas de socorro y otras organizaciones profesionales. Puede que la comparación más elocuente sea el taller, la bestia negra de los trabajadores del periodo victoriano (Crossik, 1978: 112 y 113). En Greenwich, las posibilidades de admisión eran cinco veces y media la media de la población; la de un artesano tradicional (sastre, albañil o tonelero) representaba sólo dos tercios de la media; y la de un artesano mecánico, una cuarta parte. Las posibilidades de la vida de un mecánico eran veinte veces mejor que las de un peón.

Las diferencias de género, los sindicatos artesanos, el trabajo a domicilio y el trabajo eventual en la fábrica —además de la agricultura y el servicio doméstico, más controlados segmentalmente— generaban una escasa identidad de clase. La acción colectiva era prácticamente un lujo de los «hermanos» especializados. También el Estado nacional contribuyó a desdibujar la clase fomentando las alianzas segmentales. Para que pudiera reaparecer una auténtica clase obrera, habrían de desaparecer el seccionalismo y el segmentalismo. Durante la Segunda Revolución Industrial, a partir de 1880, no habían desaparecido, pero estaban muy menguados, como veremos en el capítulo 17.

Conclusión

Puesto que el temprano desarrollo del movimiento obrero británico constituyó un fenómeno único, no encontraremos en los siguientes capítulos una descripción tan prolija de estas relaciones de poder. La precoz difusión del capitalismo industrial, reforzada por un Estado militarista, dio paso a una cristalización más «federal» que nacional. Estas tres fuerzas, al entrelazarse, generaron un movimiento obrero único, orientado a la familia y la comunidad. A finales de la década de 1830 y comienzos de la de 1840, estalló el cartismo, un mo-

vimiento de tipo insurreccional que volveremos a encontrar en otros países, pero la revuelta se enfrentó a una clase capitalista y un régimen excepcionalmente resueltos, conscientes y farisaicos, que practicaron un militarismo fuerte y disciplinado. El choque consiguiente no tuvo una resolución dialéctica, por el contrario, la clase obrera perdió éste como perdería los siguientes. Su derrota fue tan definitiva que ni siquiera dejó residuos aparentes en las siguientes décadas, porque el seccionalismo de los trabajadores alivió las condiciones de los artesanos, que disponían de poderes exclusivos en los mercados internos y externos de trabajo. En el capítulo 17 comprobaremos que este seccionalismo propició un posterior desarrollo de las organizaciones de clase durante la Segunda Revolución Industrial, aunque mucho más moderadas que el cartismo.

La sustitución de la acción de clase por el seccionalismo a mediados de siglo afectó también a la vida familiar. Mientras que el primer movimiento obrero produjo un aumento de la prosperidad tanto en la comunidad como en la familia —mayor del que percibió Marx—, el posterior seccionalismo fue predominantemente masculino, productivista y centrado en el puesto de trabajo.

He analizado la situación desde el punto de vista de las relaciones de clase, como recomendaban Marx y Engels. Pero ni el régimen, ni la clase capitalista ni los trabajadores mantuvieron una estrategia consistente a lo largo del periodo, ya fuera ésta reaccionaria, pragmática o progresista. Las estrategias y las derivas —de hecho, la verdadera identidad de los tres elementos citados— se produjeron en la interacción. El régimen, por ejemplo, cambió sus concesiones pragmáticas en el ambiente del faccionalismo de la *Great Reform Act* por el militarismo disciplinado y farisaico del periodo cartista y, después, por un reforzamiento de las concesiones pragmáticas de la democracia de partidos a partir de la década de 1860. Y lo hizo a medida que fueron cambiando su propia identidad, las presiones externas y la identidad del movimiento obrero.

Al contrario que Marx y Engels, no he tratado esta interacción de clases como un fenómeno dialéctico, formado por el enfrentamiento y la resolución del conjunto de las clases organizadas, sino que califico esta dialéctica en dos sentidos. En primer lugar, tanto el segmentalismo como el seccionalismo impregnaron a las clases y las debilitaron interiormente. En el caso que nos ocupa, el resultado decisivo de la lucha fue la sólida unidad y el fuerte militarismo del régimen, ayudado por las consecuencias imprevistas de la división seccional del

mundo obrero. Más tarde, cuando el régimen se relajó, también éste generó sus propias facciones. En segundo lugar, el conflicto de clase no suele ser ni puro ni frontal, porque en él se ven implicadas múltiples redes de poder, cuya interrelación no resulta para los actores ni sistemática ni transparente. Así pues, sus resoluciones producen resultados imprevistos para todos. Me he concentrado en el entrelazamiento no sistémico de la familia y la clase en el marco de las cristalizaciones capitalista, moral-ideológica, patriarcal y democrática de partidos del Estado. Aunque las *Factory Acts*, por ejemplo, representaron para los obreros una ventaja, no era ésa la intención del régimen; como tampoco había sido la intención de nadie que el movimiento obrero resultara esencialmente masculino. A todo ello debo añadir otro conjunto de interacciones no sistémicas entre la clase y el Estado-nación, que se produjeron durante el periodo, aunque aún no he descrito sus consecuencias.

Bibliografía

Bairoch, P. *et al.* 1968: *The Working Population and Its Structure.* Bruselas: Éditions de l'Institut de Sociologie de l'Université Libre.

Bennett, J. 1982: «The London Democratic Association, 1837-1841: a study in London radicalism». En *The Chartist Experience: Studies in Working-Class Radicalism and Culture, 1830-60,* ed. J. Epstein y D. Thompson. Londres: Macmillan.

Briggs, A. 1959*a*: *The Age of Improvement 1783-1867.* Londres: Longman Group.

— 1959*b*: *Chartist Studies.* Londres: Macmillan.

— 1960: «The language of "class" in early nineteenth-century England». En *Essays in Labour History,* ed. A. Briggs y J. Saville. Londres: Macmillan.

Calhoun, C. 1982: *The Question of Class Struggle.* Oxford: Blackwell.

Church, R. A., y S. D. Chapman, 1967: «Gravener Henson and the making of the English working class». En *Land, Labour and Population in the Industrial Revolution,* ed. E. C. James y G. E. Mingay. Londres: Arnold.

Clapman, J. H. 1939: *An Economic History of Modern Britain.* Cambridge: Cambridge University Press.

Clegg, H. A. *et al.* 1964: *A History of British Trade Unions Since 1889.* Vol. I. Oxford: Clarendon Press.

Crossick, G. 1978: *An Artisan Elite in Victorian Society.* Londres: Croom Helm.

Currie, R., y R. M. Hartwell, 1965: «The making of the English working

class». *Economic History Review,* 2.ª ser., 18.
Davies, J. C. 1970: «The J-curve of rising and declining satisfactions as a cause of some great revolutions and a contained rebellion». En *Violence in America,* ed. H. D. Graham y T. R. Gurr. Nueva York. Bantam.
Epstein, J. 1982: «Some organizational and cultural aspects of the Chartist movement in Nottingham». En *The Chartist Experience: Studies in Working-Class Radicalism and Culture, 1830-60,* ed. J. Epstein y D. Thompson. Londres: Macmillan.
Epstein, J., y D. Thompson (eds.), 1982. *The Chartist Experience.* Londres: Macmillan.
Evans, E. J. 1983: *The Forging of the Modern State: Early Industrial Britain, 1783-1870.* Londres: Longman Group.
Foster, J. 1974: *Class Struggle and the Industrial Revolution.* Nueva York: St. Martin's Press.
Fraser, W. H. 1974: *Trade Unions and Society.* Londres: Allen & Unwin.
Goodmay, D. 1982: *London Chartism, 1838-1848.* Cambridge: Cambridge University Press.
Gray, R. Q. 1976: *The Labour Aristocracy in Victorian Edinburgh.* Oxford: Clarendon Press.
Greenberg, D. 1982: «Reassessing the power patterns of the Industrial Revolution: an Anglo-American comparison». *American Historical Review, 87.*
Hobsbawm, E. J. 1962: *The Age of Revolution, 1789-1848.* Londres: Mentor. [Ed. cast.: *La era de la revolución: 1789-1848.* Barcelona, Labor, 1991.]
— 1964: *Labouring Men.* Londres: Weidenfeld & Nicolson. [Ed. cast.: *Trabajadores.* Barcelona, Crítica, 1979.]
Hollis, P. 1973: *Class and Conflict in Eighteenth-Century England, 1815-1850.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Hunt, E. H. 1981: *British Labour History, 1815-1914.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Jones, D. 1975: *Chartism and the Chartists.* Londres: Allen Lane.
Joyce, P. 1980: *Work, Society and Politics: The Culture of the Factory in Later Victorian England.* Brighton: Harvester.
— 1990: «Work». En *The Cambridge Social History of Britain, 1750-1950.* Vol. 2: *People and Their Environment,* ed. F. M. L. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press.
— 1991: *Visions of the People. Industrial England and the Question of Class, 1848-1914.* Cambridge: Cambridge University Press.
Kirk, N. 1985: *The Growth of Working Class Reformism in Mid-Victorian England.* Londres: Croom Helm.
Leeson, R. A. 1979: *Travelling Brothers.* Londres: Allen & Unwin.
Morris, R. J. 1979: *Class and Class Consciousness in the Industrial Revolution, 1780-1850.* Londres: Macmillan.
Musson, A. E. 1972: *British Trade Unions 1800-1875.* Londres: Macmillan.

— 1976: «Class struggle and the labour aristocracy, 1830-60». *Social History,* núm. 3.
Napier, Sir W. F. P. 1857: *The Life and Opinions of General Sir Charles James Napier,* 4 vols. Londres: Murray.
Newby, H. 1977: *The Deferential Worker.* Londres: Allen Lane.
O'Brien, P. 1989: «The impact of the revolutionary and Napoleonic wars, 1793-1815, on the long-run growth of the British economy». *Review* (Ferdinand Braudel Center), 12.
Parkin, F. 1979: *Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique.* Londres: Tavistock. [Ed. cast.: *Marxismo y teoría de clases.* Madrid, Espasa-Calpe, 1984.]
Pelling, H. 1963: *A History of British Trade Unions.* Londres: Macmillan.
Perkin, H. 1969: *The Origins of Modern English Society, 1780-1880.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Prothero, I. 1971: «London Chartism and the trades». *Economic History Review,* 24.
— 1979: *Artisans and Politics in Early Nineteenth-Century London.* Londres: Methuen & Co.
Rudé, G. 1964: *The Crowd in History 1730-1848.* Nueva York: Wiley. [Ed. cast.: *La multitud en la Historia.* Madrid, Siglo XXI, 1989.]
Rueschemeyer, D.; E. Stephens, y J. Stephens, 1992: *Capitalist Development and Democracy.* Chicago: University of Chicago Press.
Samuels, R. 1977: «The workshop of the world: steam power and hand technology in mid-Victorian Britain». *History Workshop Journal,* núm. 3.
Savage, M. 1987: *The Dynamics of Working-Class Politics.* Cambridge: Cambridge University Press.
Saville, J. 1987: *1848: The British State and the Chartist Movement.* Cambridge: Cambridge University Press.
Sewell, W. H. 1974: «Social change and the rise of working-class politics in nineteenth-century Marseilles». *Past and Present,* 65.
Stedman-Jones, G. 1975: «Class struggle and the industrial revolution: a review article». *New Left Review,* núm. 90.
— 1982: «The language of Chartism». En *The Chartist Experience: Studies in Working-Class Radicalism and Culture, 1830-60,* ed. J. Epstein y D. Thompson. Londres: Macmillan.
— 1983: *Languages of Class.* Cambridge: Cambridge University Press.
Sykes, R. 1982: «Early Chartism and trade unionism in south-east Lancashire». En *The Chartist Experience: Studies in Working-Class Radicalism and Culture, 1830-60,* ed. J. Epstein y D. Thompson. Londres: Macmillan.
Tholfsen, T. 1976: *Working Class Radicalism in Mid-Victorian England.* Londres: Croom Helm.
Thompson, D. 1984: *The Chartists.* Nueva York: Pantheon.
Thompson, E. P. 1968: *The Making of the English Working Class.* Har-

mondsworth: Penguin Books. [Ed. cast.: *La formación de la clase obrera en Inglaterra* (2 vols.). Barcelona, Crítica, 1989.]
Thompson, F. M. L. 1981: «Social control in Victorian Britain». *Economic History Review*, 2.ª ser., 34.
Thompson, N. 1988: *The Market and Its Critics: Socialist Political Economy in Nineteenth Century Britain.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Webb, S., y B. Webb, 1920: *History of Trade Unionism.* Londres: Longman Group.
Weisser, H. 1983: *April 10: Challenge and Response in England 1848.* Lanham, Md.: University Press of America.

Capítulo 16
LA NACIÓN DE LA CLASE MEDIA

Cuestiones teóricas

En los capítulos 4 y 9 hemos analizado los regímenes del siglo XIX, fundamentalmente compuestos de unos cuantos miles de familias, y, por tanto, necesitados de apoyos para conservar el poder. En realidad, los obreros no supusieron una amenaza organizada hasta finales de siglo; los campesinos se organizaron antes, pero (como veremos en el capítulo 19) raras veces resultaron subversivos. A este respecto no importa mucho que la mayoría de los trabajadores sintieran entusiasmo por el rey, la patria o la capital; en realidad, sus creencias carecieron de relevancia mientras no crearon organizaciones estables de poder. Pero si el régimen quería conservar su superioridad organizativa continuaba necesitando en los niveles medio y bajo aquellos administradores leales que antes le proporcionaban las redes segmentales particularistas, menguadas ahora por el universalismo típico del capitalismo y el Estado moderno. En efecto, desde mediados de siglo, el Estado pudo continuar gobernando cómodamente gracias a la aparición de un grupo de subalternos leales, la clase media.

Desde entonces, esta clase ha mostrado continuamente su lealtad al capitalismo. Parece que los regímenes temieron de esta clase lo que

muchos autores han calificado de tendencia intermitente al extremismo nacionalista. Por mi parte, no creo mucho en el nacionalismo burgués, ya que encuentro una localización social mucho más particularista, que denomino estatismo entusiasta y radicalmente leal. Dada esta imperecedera lealtad de clase, romperé con frecuencia los límites cronológicos en el presente capítulo para generalizar sobre la recurrencia del fenómeno (allí donde exista) hasta nuestra propia época. El Estado-nación de la clase media, creado a finales del siglo XIX, es, en muchos aspectos decisivos, el nuestro. En la formación de la sociedad occidental, la clase media ha sido tan importante como la clase obrera.

La definición de la clase media ha suscitado siempre grandes controversias. El auge de los «grupos medios» presentó enseguida problemas conceptuales a los observadores del siglo XIX, muchos de los cuales emplearon el plural «clases medias», precisamente por su heterogeneidad. El sufragio intensificó el problema de la definición: había que conceder el voto a la clase media, pero ¿quiénes eran sus componentes? Pero el interrogante se planteó más en el terreno de la política práctica que en el conceptual. Los contemporáneos nos han legado algunas definiciones, pero no puede decirse que los historiadores modernos hayan resultado de gran ayuda. Ryan (1981: 13) se lamenta de que los historiadores americanos utilicen la expresión «clase media» como una mera «categoría residual». Entre los historiadores británicos, Gray piensa que las «relaciones de producción» distinguen a los capitalistas y a los trabajadores, pero afirma que la «distinción de los estratos medios» no acepta una aplicación «mecánica» (1977: 134 y 135). Crossik se hace eco de esta vaga advertencia cuando afirma que el concepto de «clase media baja» es «analíticamente» débil aunque útil para «describir una realidad contemporánea observada» (1977: 14). Harrison (1971: 101) se muestra de acuerdo en la dificultad de la definición para el siglo XX, pero afirma que «en la Inglaterra de comienzos de la época victoriana las pruebas de la pertenencia a esa clase eran más objetivas ..., aunque en ningún caso rígidas o netamente definidas». ¿Puede ser indefinida la objetividad? ¿Pueden aportar los sociólogos conceptos más adecuados?

Ciertamente, los sociólogos aportan *más* conceptos: la pequeña burguesía, con sus fracciones nuevas, antiguas y tradicionales; la clase media, nueva, antigua y disgregada; la nueva clase obrera; la clase de servicios; la clase de los profesionales y los gerentes; todas ellas posibles «designaciones contradictorias de una clase». Alternativamente,

existen también muchos estratos medios, estratos ocupacionales o gradaciones de estatus; o estratos de clase mixtos, denominados mediante expresiones como «cuello blanco», «profesiones» o «semiprofesiones». Los términos franceses están más o menos en esta línea; en cuanto a los alemanes, combinan clase y «estado»: *Mittelstand, Burgertum,* divididos en *Besitzburgertum* (burguesía acaudalada) y *Bildungsburgertum* (burguesía de educación elevada). Esta plétora de términos encarna, en realidad, cinco teorías alternativas:

1. Los grupos medios estarían encuadrados en la clase obrera, conforme a la conclusión marxista ortodoxa.
2. Formaría parte de la burguesía dirigente o clase capitalista, según algunas respuestas marxianas de carácter pesimista.
3. Presentarían una localización de clase ambigua y contradictoria (Wright, 1985: 42 a 57).
4. Se encontrarían «disgregados», de modo que cada grupo medio caería dentro de clases o *Stände* distintos, según el punto de vista más común (es decir, Dahrendorf, 1959).
5. Formarían una clase aparte, propiamente una clase media (es decir, Giddens, 1973).

Las cinco suscitan un número infinito de debates (que han examinado Abercrombie y Urry, 1983: primera parte). Por mi parte, tomo prestado de las cinco teorías, pero establezco una combinación de la 4 y la 5, para sostener la existencia de una clase media separada de las restantes, aunque, como todas ellas, «impura», que contendría tres fracciones, cada una con sus propias organizaciones de poder, y afirmo también que gran parte de la sociología anterior no ha sabido apreciar suficientemente la complejidad de esta clase, debido a tres razones:

1. La mayor parte de los autores que han participado en el debate han introducido un ulterior problema de clase: la relación entre las clases obrera y capitalista (Blumin, 1989: 6 y 7, y Mayer, 1975, también critican este punto). Las clases medias (como su propio nombre indica) se juzgan así en relación con la lucha entre el capital y el trabajo, que, se supone, es la característica definitoria de las relaciones de clase en el mundo moderno. Desde esta perspectiva, los grupos medios carecerían de independencia, porque la mayoría se alinean con el capital (véase la crítica a la teoría de la «clase profesional-

gerencial» de Ehrenreichs, 1979; Aronowitz, 1979; o Goldthorpe, 1982). Si nos centramos sólo en las relaciones entre el capital y el trabajo, la idea es correcta, pero, como he sostenido repetidamente, las sociedades no son unitarias ni pueden reducirse a una sola fuente de poder social, porque la sociedad occidental moderna no puede reducirse al capitalismo, ni las relaciones entre sus clases, a las del capital con el trabajo.

2. La mayoría de los marxistas, y algunos que no lo son, comparten un «productivismo» estricto, basado en las relaciones directas de producción, de modo especial, en las predominantes dentro de la industria manufacturera. Algunos identifican la clase obrera con el «trabajo productivo», y sitúan a casi todos los grupos medios del lado capitalista, por ejercer «funciones globales de capital» (Poulantzas, 1975; Carchedi, 1977). Wright (1985) ha intentado conciliar la diversidad de esta zona media de la sociedad con un modelo bastante original de «relaciones de producción». Este autor identifica tres fuentes de poder relativas al empleo —la propiedad, el poder de organización y la especialización—, cada una de las cuales procede de un modo concreto de producción de la sociedad moderna (aunque considera dominante el poder de la propiedad y, por ende, el modo de producción capitalista). Los grupos medios tenderían a ser elevados en una ellas, no en las tres, por eso se encuentran en una «localización de clase contradictoria». Acepto muchos de los argumentos de Wright, pero opino que su teoría es funcionalista y productivista, ya que para él sólo cuentan en realidad las relaciones del empleo, e introduce la autoridad y la educación sólo en la medida en que ambas cosas contribuyen de modo funcional a la producción económica.

Algunos no marxistas han compartido la preocupación por las relaciones laborales. Dahrendorf (1959) aduce que las relaciones de autoridad en el empleo han sustituido a la propiedad como factor determinante de la clase en las sociedades modernas. Goldthorpe (1982) define una «clase de servicios» formada por profesionales, gerentes y técnicos superiores a los que se otorga confianza. Aprecia también otras características de esta clase de servicios, tales como la experiencia educacional, pero esto no ayuda a definir su clase, que no es otra cosa que un agregado de ocupaciones. Una vez más, las «relaciones con los medios de producción», interpretadas como relaciones del empleo, se proponen como guía a esta laberíntica zona media de la sociedad.

3. Los neoweberianos no parecen haber llegado mucho más allá en esta materia. Para ellos cuentan tanto las formas y los estilos de vida, la instrucción, la interacción social, el matrimonio mixto como las relaciones laborales formales, por tanto superan la mera función económica. Sin embargo, tienden a integrar esta diversidad en el concepto de la común «posición en el mercado», que se define ante todo por la instrucción. Parkin (1979) sostiene que las «credenciales» educacionales permiten practicar a la clase media el «cierre» de los mercados de trabajo. Como Collins (1979), tampoco él es un funcionalista, pero su idea resulta bastante curiosa, porque la educación no constituye una mera respuesta a las necesidades económicas, sino, en sí misma, una forma de poder.

Giddens inserta el poder educacional en una teoría más amplia sobre la definición de las clases según los poderes del mercado, es decir, estos poderes forman las clases cuando *«el cierre de la movilidad se produce en relación con cualquier forma específica de capacidad de mercado»* (la cursiva es suya). En paralelo con Wright, especifica tres formas de poder de mercado: propiedad, educación o especialización técnica y fuerza manual de trabajo. Esto brinda tres clases básicas para el mundo moderno: capitalistas, trabajadores y clases medias definidas por la educación, pero deja sin resolver el problema concreto de la pequeña burguesía clásica —comerciantes modestos y artesanos independientes—, que permanece fuera de la clase media, lo que constituye, sin duda, una extraña conclusión. Giddens matiza en parte su modelo añadiendo secundariamente «estructuraciones aproximadas a las relaciones de clase» como las relaciones de autoridad dentro de la empresa y las pautas de consumo. Pero, ante todo, su teoría sustituye las relaciones centradas en los medios de producción respecto al empleo por el poder del mercado que viene dado por la educación (1973: 107 a 110).

Abercrombie y Urry (1983) han observado con agudeza que deberíamos combinar ambas cosas, porque la acción colectiva que nace de ellas ayudaría también a definir a la clase media. Son pasos necesarios, pero todavía insuficientes. Por mi parte, daré tres más:

1. Tres tipos de relación de una «impureza» variable afectan a los grupos medios: (1) la propiedad capitalista, (2) las jerarquías específicas de las corporaciones capitalistas y la burocracia del Estado moderno, y (3) las profesiones licenciadas autoritariamente por el Estado. Suelo establecer una distinción dentro de la relación 2 entre je-

rarquías privadas y públicas, pero el conjunto de las relaciones de producción descansa en tres grupos distintos:

1. La *pequeña burguesía:* propietarios de negocios pequeños y familiares.
2. Los *empleados de carrera:* asalariados con capacidad de promoción dentro de las jerarquías burocráticas o corporativas.
3. Los *profesionales:* con «alta especialización educativa» y colectivamente organizados en ocupaciones autorizadas por el Estado.

Como cabía esperar, son muchas las personas que quedan en una situación de clase «contradictoria»; otras mezclan varias posibilidades (los profesionales empleados en las corporaciones); y otras aún pueden practicar una actividad idiosincrásica. Pero si nos atenemos por completo al nivel de las relaciones directas de producción, podemos considerar a los tres grupos como clases separadas, ya que las relaciones del empleo son diferentes. Con todo, podría producirse una situación común de clase en los pasos 2 y 3.

2. Vuelvo ahora a la distinción entre las relaciones del poder *difuso* y el poder *autoritario*. El capitalismo no genera únicamente organizaciones de empleo autoritarias, puesto que éstas se encuentran insertas en circuitos difusos de capital que incluyen el consumo (como han observado muchos autores). Tendremos ocasión de comprobar que este hecho ayuda a integrar nuestras tres fracciones de clase.

3. El capitalismo no es un fenómeno autoconstituido. Como he sostenido repetidamente, se encuentra inserto en redes de poder ideológico, militar y político. Veremos que la ciudadanía político-nacional e ideológica integró también a la clase media.

Naturalmente, los tres criterios —relaciones del empleo, relaciones de poder difuso y todas las fuentes del poder social— confieren una nueva característica común a los individuos de clase media, esto es, sus relaciones con las clases dominantes son predominantemente segmentales, lo que refuerza su lealtad, un fenómeno que en algunos casos llegó a ser preocupante. Éstas son fracciones de una sola clase media definida mediante la fórmula: *participación intermedia segmental en las jerarquías del capitalismo y del Estado-nación*. Comenzaré por las relaciones económicas.

Las fracciones de la clase media

La pequeña burguesía

La pequeña burguesía posee y controla sus medios de producción y su propio trabajo, pero no emplea mano de obra asalariada libre (como en las definiciones marxianas). El típico negocio pequeño burgués emplea a los miembros de la familia, a precios que están fuera del mercado (por lo general, a la baja). El «dueño» puede ser una persona, una familia o una asociación de individuos vinculados por la amistad, generalmente sin bases contractuales, de forma que los beneficios, las pérdidas y las obligaciones que impone el trabajo se comparten según el criterio normativo difuso de la familia o de la asociación, al contrario que en la sociedad, mucho más impersonal, que predomina en los grandes negocios. La pequeña burguesía posee una propiedad capitalista, pero contrata una mano de obra que no es «libre», sino familiar y particularista.

Resulta evidente que la demarcación entre la pequeña burguesía y la clase capitalista no es absoluta. Los negocios presentan todo tipo de tamaños, de modo tal que las zonas más elevadas de la pequeña burguesía se mezclan de modo imperceptible con la clase capitalista. Puesto que el capitalismo es relativamente difuso, no suele ser excluyente, al contrario que otros modos de producción.

En el capítulo 4 hemos visto que la organización del primer capitalismo industrial fue esencialmente pequeña y difusa. La Revolución Industrial se debió a los artesanos, pequeños comerciantes, intermediarios y negocios familiares. El pequeño «capital» se confundió con el «trabajo especializado», y lo mismo ocurrió entre el trabajo manual y el no manual, sobre todo entre los artesanos, que eran mayoritarios en las «clases-rangos medios». He analizado en los capítulos 4 y 15 la disgregación del mundo artesano, que desplazó a los situados en los sectores más inseguros hasta la clase obrera, al tiempo que en los oficios más prósperos de mediados del siglo XIX, no menos de un 20 por 100 accedió en una década a dirigir sus pequeños negocios. Esta nueva pequeña burguesía, «no manual», procedente de los «trabajadores», era más rica, se encontraba más segura y disfrutaba de un estatus más elevado (Blumin, 1989: 66 a 137). Los pequeños propietarios dominaban aún en los grupos medios, pero los «detallistas» formaban más de la mitad de lo que se llamó en la época victoriana la

clase media, que aumentó desde mediados de siglo (Booth, 1886; Best, 1979: 98 a 100, 104 a 106).

Esta pequeña burguesía no manual disfrutaba sólo de una riqueza y un estatus moderados y no tenía acceso a los círculos escogidos, pero colaboraba con los capitalistas. Hasta el surgimiento de la gran corporación, a partir de 1880 en Alemania y Estados Unidos (a partir de 1900 en Gran Bretaña, Francia y Austria), incluso las grandes empresas generaron pequeños intermediarios a ambos lados de la cadena de la oferta. Predominaron las compañías y asociaciones privadas no limitadas, los subcontratistas y el trabajo eventual, y tanto los grandes como los pequeños capitalistas se preocuparon de transmitir la propiedad familiar a sus herederos. El pequeño negocio sirvió de intermediario al grande y dominó las industrias del consumo, los servicios y la construcción; invirtió sus ahorros en títulos del Estado o acciones, a través de procuradores, agentes, bancos y compañías de seguros. La pequeña burguesía participó, pues, encantada en la difusión del capital.

Su lealtad ayudó a derrotar al cartismo y las revoluciones de 1848. Mayer (1975) afirma que a partir de 1871 sólo supo mirar hacia atrás, pero, como sostiene Wiener (1976) esta opinión es exagerada. Sus miembros adoptaron siempre una actitud conservadora, pero no reaccionaria. En la Gran Bretaña victoriana parecían satisfechos. «El liberalismo maduro de la clase media» se combinaba con el auge económico y el Imperio británico (Tholfsen, 1976). La pequeña burguesía formó la práctica totalidad del electorado de 1832 a 1867, y casi un tercio, más delante, pero las elecciones continuaron organizándose segmentalmente durante mucho tiempo, a través de la «estructura tradicional de las redes de deferencia en las comunidades» (Moore, 1976). El consenso político se mezclaba con un idealismo sentimental, que reflejan con acierto los cuadros de los salones pequeño burgueses, donde se representaban escenas de paz doméstica, de un romanticismo medieval, al estilo de las Highland escocesas, y la inocencia de los niños. Blumin (1989: 138 y 139) y Ryan (1981) trazan un cuadro similar del hogar pequeño burgués en los Estados Unidos.

Sin embargo, ¿refleja esto una Edad de Oro de la pequeña burguesía? Con la Segunda Revolución Industrial llegó el desarrollo de las corporaciones, los carteles, las asociaciones profesionales y el proteccionismo, todo ello en un clima de intensa competencia internacional. Suele aducirse que este «capitalismo organizado» fue enemigo

de la pequeña burguesía (por ejemplo, Gellatelt, 1974 y Lash y Urry, 1987, sintetizan la literatura al respecto). El capitalismo francés o británico estuvo menos «organizado» que el americano o el alemán, pero en un sector pequeño burgués tan importante como la venta al por menor, los grandes almacenes amenazaron en todos los países a los pequeños comerciantes e intermediarios; en Francia y Gran Bretaña sufrieron más a causa de la competencia internacional. Se supone, pues, que a partir de 1880 la pequeña burguesía se vio amenazada por el capitalismo corporativo, que menguó su número y su poder y produjo una vociferante reacción, acompañada de una política paranoica —volátil y, por lo general, derechista, susceptible de abocar al nacionalismo extremo o al fascismo— y de la agitación de esta fracción de clase.

Pero todo esto no es más que un mito. La pequeña burguesía anterior a la guerra no estaba irritada, sino aburrida. En efecto, apenas ha existido un descontento *económico* organizado pequeño burgués desde entonces hasta hoy mismo. En los países que examino aquí, la mayor organización se produjo entre los nacionalistas austro-húngaros y los *Mittelstand* alemanes, sobre todo en la forma de acciones colectivas, políticamente estructuradas, cuya estricta manifestación económica tendía a la moderación y el pragmatismo. Por ejemplo, cuando los tribunales alemanes establecieron que la seguridad social de Bismarck se aplicara en exclusiva a los trabajadores, los *Mittelstand* protestaron y consiguieron su propia ley de seguro en 1911 (Kocka, 1980: 258 y 259). Pocas veces se produjeron agitaciones políticas entre la pequeña burguesía británica y estadounidense, que ni siquiera participaron en las controversias del movimiento progresista. Chapman (1981: 236) no ha encontrado grandes conflictos entre las firmas británicas de pequeño y gran tamaño desde 1720 hasta la década de 1970. Las mayores enfrentamientos se produjeron en lo relativo al mantenimiento de los precios al por menor, pero allí los principales rivales eran las cooperativas, de modo que la protesta pequeño burguesa proclamó la ideología liberal-capitalista (Crossik, 1977: 17). Como veremos más adelante, esta fracción de clase se hallaba pobremente representada en los movimientos nacionalistas de clase media del periodo. Incluso cuando se sentía descontenta, raramente formó sus propios partidos.

¿Decayó la pequeña burguesía frente a la superior eficacia de la corporación? Después de medio siglo de énfasis en las economías de escala por parte de los economistas, la cuestión de la eficacia ha

vuelto a plantearse en la década de 1980. Prais (1981) no han encontrado economías de escala: las grandes absorben a las pequeñas no porque sean más eficaces, sino porque ejercen un poder autoritario en los mercados y por las características del mercado de valores. Nikolaou (1978) ha descubierto en su estudio de las empresas griegas que las firmas pequeñas y medias fueron más eficaces; Kiyonari (1981) ha encontrado empresas rentables y no rentables entre las japonesas de menor tamaño. Para épocas anteriores apenas contamos con datos. La literatura histórica abunda en el relato de los infortunios pequeño burgueses, pero no constan ni las pérdidas ni las ganancias, ni tampoco prueba alguna de la decadencia económica (Gellately, 1974, es un ejemplo típico). La mortalidad de los negocios modestos era alta, pero probablemente lo había sido siempre, sin duda a partir de la década de 1850 (Blumin, 1989: 115).

Aunque los negocios pequeños explotaban intensamente el trabajo familiar, este hecho apenas se percibía como tal. Bertraux y Bertraux-Wiame (1981) describen con realismo la vida de los panaderos franceses. El panadero y su mujer llevaban una vida de trabajo infatigable; durante seis días a la semana, el marido trabajaba en el horno desde las 3 o las 4 de la mañana hasta después del mediodía, y la mujer vendía en la tienda desde las 7 o las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde; sin embargo, su oficio era un medio de vida y de progreso, que combinaba para ellos dos conceptos: uno idealista, relacionado con el «sentido» de la vida, y otro materialista y práctica, de autoexpresión creativa. En la actualidad, existen muy pocas personas que disfruten de autonomía y satisfacción en el trabajo, aunque tales cosas continúan valorándose en extremo. Aun cuando los beneficios o los salarios fueran bajos, muchos deseaban entrar en el oficio, y la mayoría lo vivían con un elevado grado de satisfacción, a pesar de los apuros. Así pues, ni la ausencia de descontento ni el elevado número de horas de trabajo facilitaban la aparición de una organización de clase.

A falta de datos sobre los beneficios, suelen ofrecerse cifras que indican un proceso de proletarización. La conclusión ha sido casi unánime: la caída de los números hasta la década de 1980 indicarían proletarización y decadencia económica. La famosa predicción de Marx y Engels al respecto (en el *Manifiesto comunista*) ha influido tanto en sus críticos como en sus discípulos. Sirviéndose de pruebas muy débiles, Poulantzas proclamaba «un proceso masivo de empobrecimiento y proletarización de esta pequeña burguesía» (1975: 152), pero incluso los críticos de Marx están de acuerdo, aunque aña-

dan la aparición de una nueva clase asalariada para compensar (Geiger, 1969: 92 a 94). Giddens intenta ser más preciso:

> Las cifras ... sugieren una pauta general que se aplica, si bien con grandes discrepancias, a la mayoría de las sociedades capitalistas: una disminución relativa y sostenida del pequeño negocio ... desde las últimas décadas del siglo XIX hasta los primeros años de la década de 1930. A partir de ese momento, la caída continúa, aunque con una considerable reducción de la pendiente [1973: 177 y 178].

Pero la década de 1980 imprime un giro a este cuento ortodoxo: el aserto de que a una época de capitalismo corporativo «organizado» sucedió otra de capitalismo «desorganizado», en la que volvieron a prosperar los negocios modestos. Lash y Urry (1987) afirman que el capitalismo de empresa fomentó la decadencia de los pequeños burgueses desde la década de 1880 a la de 1950, momento en el que el proceso se invirtió.

Sin embargo, nada de esto es cierto. La decadencia del pequeño burgués ha estado limitada a la industria, y ello en proporciones relativas, no en números absolutos. Giddens destaca el último punto, pero malinterpreta el calendario de la decadencia relativa. La mayor parte de los censos revelan una caída de la pequeña manufactura hasta la década de 1970. En 1930, existían en Gran Bretaña 93.000 establecimientos que empleaban menos de 10 personas; en 1968, sólo 35.000. En Francia, Alemania y Estados Unidos se produjo una caída algo menor. Sólo Italia y Japón se salvaron. En la década de 1960 los establecimientos con menos de 10 empleados suponían sólo el 2,1 por 100 del empleo industrial británico; el 2,4 del americano; el 6,2 del alemán occidental; el 10,8 del francés; el 12,2 del japonés; y el 18,2 del italiano (Pryor, 1973: 153; Kiyonari, 1981: 980; Prais, 1981: 10 y 11, 160). Pero las tendencias totales del empleo son complejas y difieren en los distintos países y periodos.

El censo británico de 1911 distinguía «empresarios», «trabajadores por cuenta propia» y «empleados». Las dos primeras categorías entran aproximadamente en la pequeña burguesía (aunque la primera incluye también a los escasos grandes capitalistas). De 1911 a 1931 aumentaron en términos absolutos un 14 por 100, manteniendo su contribución relativa exacta a la mano de obra. De 1931 a 1951 las cifras disminuyen al 21 por 100; y algo más en la contribución relativa. La exclusión de la agricultura exorbita la caída absoluta al 28 por 100,

con mayor fuerza en la minería y la industria. Pero los «empresarios» disminuyeron antes y en mayor medida que los «trabajadores por cuenta propia». Estos últimos aumentaron al principio, ya que la cifra de 1951 fue el 141 por 100 de la de 1911, más en la agricultura, seguida del transporte, el abastecimiento de comida y el comercio distributivo (Routh, 1965: 20). De 1951 a 1971, las tendencias se invirtieron: los empresarios aumentan hasta cerca del 50 por 100, casi el nivel de 1931 (la proporción subió un 25 por 100), mientras que el número de trabajadores por cuenta propia cayó ligeramente. El aumento de los empresarios se produjo en casi todos los sectores, incluida la industria (Rouyh, 1980: 6 y 7, 18 a 20). Los números absolutos aumentan en conjunto a partir de 1911, aunque la contribución relativa a la mano de obra cae ligeramente.

Vemos, pues, tres tendencias británicas: (1) Aunque a mediados de siglo la pequeña burguesía acomodada (empresarios) cae ligeramente, la situación se equilibra gracias al aumento de una pequeña burguesía familiar (trabajadores por cuenta propia). (2) El conjunto de las tendencias generales puede enmascarar cambios sectoriales. Hacia 1900 las oportunidades fueron mayores en el sector de la construcción, y después, en otros sectores de servicios. (3) Los negocios modestos fueron relativamente mejor en las épocas de pobreza económica. Por ejemplo, de 1962 a 1978, las pequeñas firmas textiles afrontaron mejor los periodos difíciles, llegando incluso a obtener grandes beneficios (Chapman, 1981: 241). En la actualidad, los pequeños industriales vuelven a aumentar (como en todos los países) en un clima de estancamiento económico.

Si existieran estadísticas completas para periodos anteriores, no cabe duda de que describirían otra forma de decadencia pequeño burguesa. El censo de 1911 presenta unos cuantos trabajadores por cuenta propia entre gerentes y administradores, trabajadores de oficina y trabajadores especializados, semiespecializados y sin especialización, y sólo un 3 por 100 de los trabajadores manuales y un 6 por 100 de los manuales con especialización (Routh, 1965: 4 y 5). Antes, el autoempleo era mucho más alto, sobre todo entre los artesanos especializados. Se trata con toda certeza del cambio profesional más llamativo de los que afectaron a la pequeña burguesía, y que rompió su vínculo histórico con los artesanos manuales. Los pequeños burgueses se convirtieron también en patronos (Bechhofer y Elliott, 1976). Se trata, pues, de un fenómeno contrario a la proletarización, que, hacia 1900, agrandó las diferencias que separaban a la pequeña burgue-

sía de la clase trabajadora; después, nada ocurrió que contribuyera a superarlas.

Así, la pequeña burguesía británica se convirtió con toda claridad en una *fracción* de clase, aislada de los de abajo y, en una medida más variable, de los de arriba. La caída relativa de los negocios modestos redujo el solapamiento con la clase capitalista hasta mediados del siglo XX, aunque la tendencia se está invirtiendo en la actualidad. Por debajo de ella, el primer colapso del autoempleo artesano redujo fuertemente el solapamiento con la clase obrera y la movilidad intrageneracional entre ambas. Hubo un desfase entre ambas barreras. Hasta la década de 1930, con la reducción del contacto con la clase trabajadora y el continuo acceso a un nivel más alto de capitalismo, debió de aumentar la lealtad de la pequeña burguesía al orden establecido. Aunque la época resultó dura para muchos, se prosperó en varios sectores. La diversidad evitó que se produjera una actitud política colectiva. Desde la década de 1930 el reforzamiento de la barrera superior pudo intensificar el carácter de fracción de esta clase, centrada en la organización familiar y en un acuerdo normativo informal con la familia y los amigos, así como en una explotación laboral compartida.

En otros países se produjo un desarrollo distinto, como revela la compilación de los censos históricos de Bairoch *et al.* (1968). Sus categorías de «empresarios e independientes» y «trabajadores familiares» son propias de la pequeña burguesía; los datos resultan más fidedignos cuando se refieren a un solo país que en el caso de las comparaciones internacionales, por la enorme variedad en las definiciones de los censos. A ello añado la investigación de la *Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales* (1981), donde se detalla la organización y la política de los pequeño burgueses.

En primer lugar, en los restantes países la agricultura tenía mayor importancia. Para Bélgica, Francia y Alemania poseemos datos agrícolas a largo plazo. Aunque el grueso del empleo agrícola ha caído a lo largo del siglo XX, el número de campesinos propietarios («empresarios e independientes») ha disminuido en menor proporción. De hecho, aumentó su presencia en la agricultura hasta la década de 1960, cuando los grandes establecimientos agrícolas invadieron la Comunidad Económica Europea gracias a las subvenciones. El número de campesinos propietarios se redujo en más de la mitad de 1960 a 1983, pero su historia rebasa la finalidad de este volumen.

En otros sectores, las primeras cifras proceden de Bélgica, donde se manifiesta una decadencia relativa de los pequeño burgueses a largo plazo: el 40 por 100 de la mano de obra no agrícola en 1846; el 30 por 100 en 1880; el 23 por 100 en 1910, que se estabiliza hasta 1945, para descender al 19 por 100 hacia 1961. La caída se produce en todos los sectores, aunque es mayor en la manufactura. Pero las cifras absolutas difieren. Puesto que la mano de obra no agrícola aumentó en más del 250 por 100 de 1846 a 1910, el número de pequeño burgueses creció también en un 50 por 100, para quedar después estabilizado. Los negocios modestos pasaron de la industria pesada y textil a la producción para el consumo y el comercio al por menor, de modo que no competían con el gran capital, sino que lo complementaban. La organización política autónoma aparece como una «tercera fuerza» entre el capital y el trabajo, pero en realidad constituyó un eficaz grupo pragmático de presión en la política multipartidista y dividida de Bélgica (Kurgan, 1981: 189 a 223).

De 1866 a 1936 no existió en Francia una tendencia de conjunto, ni absoluta ni relativa. La pequeña burguesía flutuó del 33 por 100 al 43 por 100 de una mano de obra no agrícola bastante estática. Se produjo después una fuerte caída relativa hasta el 19 por 100 hacia 1954, y al 16 por 100 en 1962. Aunque la caída afectó a muchos sectores, la construcción creció. Pero las cifras absolutas se mantuvieron estables por el crecimiento de la mano de obra no agrícola. Francia fue el único país en el que los artesanos independientes sobrevivieron por mucho tiempo. En tanto que otras naciones giraban hacia la producción masiva, Francia continuaba suministrando productos de lujo a todo el mundo (en las grandes plantaciones de Luisiana no faltaba nunca un piano adquirido en París (Guillard, 1981: 131 a 188; Jaeger, 1982)). Incluso las grandes empresas producían en colaboración con las pequeñas, que crecieron de 1901 a 1931, aunque las unidades familiares disminuyeron ligeramente (Bruchey, 1981: 68). La empresa pequeña resistía mejor la recesión. Las conexiones de los artesanos contribuyeron a mantener el carácter radical republicano de la política pequeño burguesa del siglo XIX, aunque finalmente se desplazó a la derecha después de la Primera Guerra Mundial. La decadencia de la pequeña burguesía fue tardía, sólo relativa y bastante irregular.

Las cifras alemanas se interpretan con dificultad a causa de los cambios territoriales y de los sistemas de clasificación. De 1882 a 1936 parece haberse producido un aumento, grande en términos absolutos y pequeño en términos relativos, de la pequeña burguesía.

Después, ambas tendencias se invierten hasta 1946, año en que el ligero aumento absoluto se reanuda por la expansión de la mano de obra. La distribución fue desigual: los servicios aumentaron en más de la mitad, decayó la industria y se mantuvieron estables la construcción y el transporte. Kaufhold (1981: 273 a 298) fecha el desplome de los artesanos independientes de la manufactura poco antes de 1900. Este súbito hundimiento suele emplearse para explicar el desplazamiento de los restos de la pequeña burguesía hacia la extrema derecha (Haupt, 1981: 247 a 272). Pero, como no podía ser de otro modo, también creció durante este periodo, y sólo conoció la decadencia precisamente en el momento en que los nazis, a quienes supuestamente habría apoyado, tomaron el poder.

Kiyonari (1981: 961 a 989) demuestra que el empleo en los negocios modestos creció en el Japón de forma masiva en términos absolutos, y ligeramente en términos relativos, durante el siglo XX, pero en ese caso fueron los sucesivos crecimientos económicos, no las recesiones, lo que produjo el aumento. El pequeño negocio, que contiene más déficit y más empresas productivas, participó plenamente en todas las fases del desarrollo nacional; durante la última, se produjo una participación simbiótica en la forma de subcontratistas para las industrias de montaje, la innovación de alta tecnología y la expansión de los servicios con intensidad de trabajo. Así pues, no hemos encontrado hasta ahora la política de una pequeña burguesía autónoma, y mucho menos descontenta.

El censo estadounidense no permite realizar estos análisis detallados, pero Bruchey ha resumido los estudios de casos americanos (1981: 995-1035). El desplome de los artesanos, la decadencia de la pequeña industria y la resistencia de los pequeños servicios ocurrieron allí como en otras partes. El crecimiento de la industria, tanto grande como pequeña, durante la expansión económica de 1870-1900, refleja el modelo japonés; sin embargo, durante el auge económico posterior a 1945, la caída de los números se aproxima más al modelo francés. La importancia del negocio modesto para la banca ha sido una característica americana, propia de su liberalismo capitalista y de su sistema federal.

Por encima de las peculiaridades nacionales, se distinguen tres tendencias:

1. La pequeña burguesía sólo ha disminuido en términos relativos, nunca en cifras absolutas, durante los últimos cien años.

2. La mayor caída relativa se produjo a mediados del siglo XX, no antes, como han sugerido el calendario de Giddens y la idea de una era de «capitalismo organizado», y ocurrió, naturalmente, después de la principal fase extremista, después del periodo de fascismo político de la clase media, en las décadas de 1920 y 1930. De tal modo que la significativa decadencia económica (tal como se desprende de las cifras) de la pequeña burguesía no pudo determinar tales acontecimientos políticos [1].

3. La decadencia, relativa o absoluta, se distribuyó desigualmente y produjo un movimiento fluido a través de los distintos sectores.

Estas tendencias demuestran que la supuesta decadencia de la pequeña burguesía, su desesperación económica y la consiguiente actitud política de pánico son únicamente mitos. La situación presenta una gran semejanza en todos los países, pues en una economía fundamentalmente transnacional, el enorme crecimiento del periodo benefició a todas las clases. Es cierto que hubo crisis y recesiones, pero la prosperidad que se expandió por todos los sectores llegó también a la pequeña burguesía, que si bien ya no constituía una punta de lanza, crecía en términos absolutos. En la mayoría de los países quedó desplazada a la zona fronteriza de la industria, pero puede decirse que colonizó el sector de servicios, tanto los nuevos como los tradicionales. Retomando un argumento del capítulo 4, las empresas industriales conservaron su pequeño tamaño en Gran Bretaña antes de la Primera Guerra Mundial, gracias a que se especializaron en aquellas actividades para las que no habría resultado adecuado un tratamiento de corporación. Este argumento se ha empleado contra la fijación de los científicos sociales en la corporación, el monopolio y la organización autoritaria de la sociedad capitalista; la misma obsesión ha exagerado la decadencia pequeño burguesa.

Esta clase sobrevivió por dos vías alternativas: (1) conforme al modelo de Japón y Estados Unidos de 1870 a 1900 (y al de Italia después de 1945; Weiss, 1988) —participación plena del negocio modesto en el crecimiento, descubrimiento de nuevos productos renta-

[1] En las décadas de 1920 y 1930 se cernieron sobre la pequeña burguesía otras amenazas económicas, tales como la inflación o las políticas impositivas, pero no antes de 1914, es decir, durante la época que abarca este volumen.

bles y nuevas líneas de servicio— o (2) el modelo francés, más común en Europa, es decir, pequeña empresa que resiste mejor en los periodos de recesión, aumento de la explotación laboral y privación de beneficios. Berger (1981) encuentra en ello una simbiosis normal del pequeño y el gran capital. Allí donde las partes del producto son tecnológicamente primarias y se da un proceso con intensidad de trabajo, o cuando la demanda se comporta de modo errático, las empresas de gran tamaño contratan empresas «sumergidas», que emplean mano de obra barata y no sindicada. Son respuestas a las oportunidades del mercado que reflejan la organización más difusa que autoritaria de los mercados capitalistas.

La simbiosis del capital grande y pequeño se ha producido sin grandes conflictos. Restando los campesinos y la política del *Mittelstand* (que analizaré en el capítulo 19), la pequeña burguesía ha realizado una escasa acción política que pueda calificarse de característica o radicalmente enemiga del gran capital. Por el contrario, permaneció siempre vinculada al capitalismo y a los distintos regímenes, por la sencilla razón de que dependía económica y segmentalmente de ellos. Su lealtad tuvo compensaciones; algunas conscientes, para obtener su colaboración en el enfrentamiento con los obreros, como en la Italia de la posguerra (véase Weiss, 1988); otras, al modo de una afirmación espontánea del liberalismo capitalista, por ejemplo, en la legislación *antitrust* de los Estados Unidos o en la política del thatcherismo.

Las enormes distancias que separaban a la pequeña burguesía de la clase obrera se agrandaron pronto, en el momento mismo en que desapareció el artesanado. Aparte de este último, la pequeña burguesía no se proletarizó, por el contrario, participó segmentalmente en los circuitos de capital. Su actividad económica conservó la característica vinculación de la familia al trabajo, pero su poder económico dependió del capital, y supo aprovecharse bien de esa dependencia. Su conservadurismo no fue el producto del pánico por la pérdida del estatus, ni de la ideología o de cualquier otra reacción semiparanoica de carácter psicológico, como han sostenido, entre otros autores, C. Wright Mills (1953) o Poulantzas (1975). No fue el fracaso, sino un éxito moderado y un trabajo constante, que absorbió grandes energías, lo que la mantuvo leal al capitalismo. Tendremos ocasión de comprobar que, contra todo estereotipo, esta clase no tuvo una participación mayoritaria en los movimientos más nacionalistas del periodo.

Los empleados de carrera

Denomino así a los individuos que trabajan en las organizaciones jerárquicas de las corporaciones capitalistas y las distintas burocracias del Estado moderno, con movilidad para pasar de unas a otras. Antes de 1914, las diferencias entre estas jerarquías tenían, en ocasiones, mucha importancia, aunque más por la política del régimen que por las relaciones de empleo. Lo que distingue a este grupo de otras clases o fracciones es su permanencia dentro de una escala jerárquica, segmental y disciplinada. Tal permanencia constituye al mismo tiempo una jaula y una oportunidad; es una *jaula* porque impide al empleado la participación en una acción colectiva y confiere al capital o al régimen una absoluta superioridad sobre él; y es una *oportunidad* porque le proporciona la posibilidad de realizar una carrera de ascensos (y, en principio, de descensos) dentro de la jerarquía (*cf.* Abercrombie y Urry, 1983: 121). El grupo abarca un gran número de trabajadores de cuello blanco, no manuales, gerentes, funcionarios, agentes de ventas, técnicos superiores, etc. Disfrutan de un salario semanal o mensual, nunca son pagados por horas como ocurre normalmente entre los trabajadores manuales; algunos puestos de trabajo les confieren una identidad colectiva característica, que los obliga a vestir y comportarse de forma similar y determina su estilo de vida. Pero, ante todo, sus oportunidades no dependen tanto de un determinado puesto de trabajo como del acceso a una *carrera*.

Dahrenhorf afirma que las carreras dentro de la empresa y la burocracia definen una «nueva clase media», que «ha nacido disgregada», y concluye (al contrario que yo) que sus dos mitades principales pertenecen a dos clase distintas, la clase obrera y la clase dirigente:

> Podría trazarse una línea neta y significativa entre los empleados asalariados que forman parte de una jerarquía burocrática y los que no forman parte de ella. El puesto de un empleado de correos, de un contable y, por descontado, de un alto ejecutivo constituye el peldaño de una escalera de puestos burocráticos; el de dependienta ... [no]. La teoría de la clase dirigente se aplica sin excepciones a la posición social de los burocrátas, y la de la clase obrera generaliza igualmente la posición social de los trabajadores de cuello blanco [1959: 55].

El aserto resulta a la vez sensato y extravagante. Aunque el puesto de trabajo de una dependienta se parezca a muchos de la «clase

obrera», ¿por qué considerar «clase dirigente» a quienes tienen acceso a una carrera? La calificación no deja de parecer exótica para un empleado de correos (el propio Dahrendorf cambió de parecer en 1969). Las jerarquías muy formalizadas, como la del empleado de correos, se «disgregan» en distintas secciones. Muchos de estos empleados sólo pueden moverse en las zonas más bajas de esas secciones, aunque están mejor vistos que el trabajador manual del acero, que puede ascender en un mercado interno de trabajo manual, donde pocas veces accede a una posición elevada. Pero si los trabajadores del acero son siempre trabajadores del acero, los empleados de correos no son gerentes, ni mucho menos miembros de la clase dirigente. En realidad, las oportunidades de hacer una carrera suelen ser mayores en las estructuras menos burocratizadas, como veremos más adelante. De nuevo, porque el capitalismo no se organiza con un alto grado de autoritarismo.

El empleo de carrera es una figura reciente. La organización jerárquica que controla centralmente a su personal constituyó un hecho raro en las sociedades agrarias, salvo en algunos ejércitos o iglesias. En el capítulo 13 hemos visto que los primeros Estados modernos no fueron burocráticos. Por otra parte, las dos revoluciones industriales produjeron un desarrollo lento de este tipo de empleo. El censo británico de 1851 arroja de un 1 a un 2 por 100 de individuos ocupados en empleos asalariados (excluidos el ejército y las iglesias), la mayor parte en correos y ferrocarriles, seguidos del comercio y las finanzas. A partir de 1870 los empleados de comercio, viajantes, contables, trabajadores de la banca y los seguros formaban una categoría de asalariados que crecía a gran rapidez en todo Occidente. La manufactura y el funcionariado ofrecían aún pocas carreras reguladas. Hacia 1911 los gerentes y oficinistas representaban el 7 por 100 de la mano de obra en Gran Bretaña, la mayor parte en el comercio y el transporte. Bairoch estima un 9 por 100 para Bélgica, un 12 por 100 para Francia y un 13 por 100 para Alemania, pero las diferencias pueden deberse a los distintos sistemas de clasificación. En todas partes, las cuatro quintas partes del empleo asalariado era masculino, pero en otros aspectos presentaba una gran variación. Distinguiré entre empleo de oficina, de ventas y de gerencia.

1. Tanto los Estados como el comercio y las corporaciones generaron *empleados.* Las relaciones entre el trabajo y el cliente se hallaban normalizadas por normas escritas relativas a la conservación,

memorización y archivo de las actividades pasadas y presentes. Esto requería un tipo básico de alfabetización discursiva que escaseaba en un principio (Perkin, 1962). En un primer momento, las tareas letradas no se encontraban separadas de otras más elevadas para las que se necesitaba experiencia; así, la promoción desde los puestos de oficina (y de ventas) hasta los de gerencia fue frecuente en el comercio, la industria y en el cuerpo de funcionarios a mediados de siglo, y mayor que las posibilidades de ascenso de los trabajadores manuales (Blumin, 1989: 120 y 121). Pero con la mayor normalización, la simple capacidad de leer y escribir quedó separada de otros conocimientos. La educación masiva de la clase media, para niñas y niños, acabó con el exceso de la demanda. Las mujeres solteras se convirtieron en un «ejército de reserva» alfabetizado, al que los hombres no consideraban susceptible de promoción. Todo ello deterioró el empleo de oficina, si bien más en unos sectores que en otros: en 1909, el 46 por 100 de los empleados varones de seguros ganaban más de 160£ al año (el mínimo del impuesto sobre la renta) frente a las 10£ de los empleados del ferrocarril (Klingender, 1935: 20).

2. La difusión de los bienes y servicios al cliente aumentó el personal de *ventas*, que necesitaba saber leer y escribir y ser «respetable», como su clientela de clase media. De nuevo, un exceso de demanda temporal dio paso a las tres presiones habituales. La educación y la mujer ejercieron las mismas presiones a la baja en los mismos periodos. Pero también disminuyeron las exigencias técnicas cuando las ventas se hicieron masivas, rutinarias y de menor valor en las tiendas de gran tamaño. Allí donde las ventas afectaban a la fortuna de la empresa, se conservó la conexión con los niveles altos y se mantuvo la posibilidad de realizar una carrera.

3. Las organizaciones complejas y coordinadas produjeron *gerentes*, instruidos y expertos en relacionar distintos aspectos de la información en un entorno inseguro. Parte de esa información se aprendía en el puesto de trabajo, pero otras cualificaciones se adquirían en la educación moderna secundaria y superior, tanto desde el punto de vista técnico como desde la investigación de las conexiones de un mundo de fenómenos empíricos excesivamente extenso para ser memorizado. La estratificación dentro de las instituciones educativas (que veremos más adelante) afectó a la oferta de gerentes: el reclutamiento a todos los niveles, estratificado según un diferencial educativo, ahondó las divisiones dentro del mundo asalariado. Hacia 1900 se habían agrandado las distancias entre el empleo de oficina o

el de las ventas y la gerencia; y dentro del funcionariado, entre los grados «mecánicos» e «intelectuales» (véase capítulo 13).

Las organizaciones grandes que combinaban las tres posiciones aparecieron en todos los sectores hacia 1900. Las especializaciones de oficina y ventas, entre otras, se separaron de las funciones de coordinación desempeñadas por los gerentes. En la administración del Estado y en la industria con mercados estables de productos, las jerarquías de «distancia corta» se formaron en función de los conocimientos y la formación. En aquellas organizaciones que vendían a clientes de la clase media, se preferían los empleados de la misma clase. En un clima de incertidumbre del mercado, las carreras se desarrollaron ante todo en las finanzas y el comercio. La clase media asalariada se disgregó porque los cambios en la educación y en las relaciones de género reforzaron el crecimiento de las organizaciones grandes, y las oportunidades de carrera crecieron en los sectores financiero y comercial. Los empleados de carrera y la «baja clase media» —con puestos de trabajo proletarizados y capacidad potencial de acción colectiva— se separaron poco antes de 1900.

Así pues, los empleos de cuello blanco se proletarizaron durante el siglo XX. Pero el aspecto sociológico de mayor importancia, que podía provocar la acción de la clase media, está en si se produjo o no la proletarización de sus miembros. Recuérdese que todos los empleos asalariados se expandieron. De 1911 a 1971 los empleados no manuales crecieron casi cuatro veces en números absolutos en Gran Bretaña, y tres veces en su contribución relativa a la mano de obra. La tasa de expansión fue tan alta en el caso de las ventas como en las oficinas o la gerencia (Routh, 1980: 6 y 7). Puesto que aumentó la movilidad de las oportunidades puede que nadie perdiera en el curso de su vida laboral o en comparación con la de sus padres.

Stewart y sus colaboradores deducen lo siguiente de su revisión de los datos británicos, americanos y australianos a partir de 1920: «No se proletarizó ningún grupo concreto de individuos o clase de empleados» (1980: 194). La expansión del empleo de ventas y oficinas se disgregó en tres niveles. En primer lugar, la mayor parte de los empleos degradados, donde no se podía aspirar a carrera alguna, pasaron a las mujeres, reclutadas en el mundo de las tareas manuales o al margen de la mano de obra (a medida que crecía la participación de la mujer en la educación y en el mercado formal de trabajo). Sólo podremos conocer el auténtico significado de este hecho para la estrati-

ficación social analizando las relaciones de género (que caen fuera de mi propósito), pero no supuso ni una movilidad a la baja ni se vivió subjetivamente como una proletarización. En segundo lugar, en otros muchos empleos degradados, especialmente en la industria, abundaban los hombres de mayor edad, procedentes del trabajo manual, que se desplazaban lateralmente hacia las tareas de esfuerzo físico menor, lo que tampoco significa proletarización. En tercer lugar, las auténticas carreras quedaron a disposición de los hombres jóvenes que comenzaban en los niveles bajos de los puestos de oficina o de ventas. Sus posibilidades de ascenso de 1920 continuaban siendo las mismas en 1970. Un empleo corriente, como el de auxiliar de ventas, no indica una posición de clase inequívoca, ya que el destino del grupo mayor en tareas de esa índole, las mujeres, ha dependido más del género que del oficio; en cuanto a los hombres más jóvenes, continúan siendo empleados de carrera de clase media. Puesto que el empleo, la educación y las relaciones de género se entrelazaron, la degradación de los *empleos* de oficina y ventas no proletarizó a los *individuos.*

Estos datos pertenecen al periodo que comienza en 1920. Algunos autores británicos han sostenido que la proletarización tuvo lugar antes, pero sus pruebas carecen de consistencia porque se basan en las quejas de ciertos jóvenes empleados: «¿Cómo puede un hombre vivir y mantener a su mujer con esta miseria y al mismo tiempo vestir con decencia?» (citado en Price, 1977: 98; *cf.* Lockwood, 1958: 62 y 63; Crossik, 1977: 20 a 26). Pero es que nunca ha sido fácil para un joven mantener con su primer salario una casa, una esposa que no trabaja y unos hijos; el empleado ha dependido siempre de los ascensos y subidas anuales de su sueldo. No existen evidencias de que en Gran Bretaña faltaran ambas cosas para los hombres jóvenes antes de la Primera Guerra Mundial; sí las hay de que no faltaron en Estados Unidos (Blumin, 1989: 267 a 275, 291 y 292). Y también existen pruebas relativas a otros países (Crew, 1973, 1979) de que no hubo una movilidad hacia abajo, desde el empleo no manual al manual. Sin embargo, la carga que supuso la Primera Guerra Mundial produjo una redistribución a la baja porque gravó sobre todo los salarios más modestos, a lo que vino a sumarse en la Alemania de Weimar la inflación galopante. Este empeoramiento relativo pudo empujar a la clase media a respaldar a la extrema izquierda y el partido nazi (Blackbourn, 1977; Kocka, 1980: 28 y 29), pero antes y después del fascismo, y en otros países, resulta difícil encontrar grandes padecimientos entre los trabajadores de cuello blanco.

Los académicos ocupamos un espacio incómodo entre la profesión y el empleo de carrera. A muchos de nosotros no nos gusta esta última situación, de ahí que decidamos que los empleados de carrera *tuvieron que* sufrir bastante. Los historiadores, por su parte, los han descrito con frecuencia como personalidades poco atractivas, de tipo neurótico, supuestos inventores de un «clásico» sistema de valor medio-bajo, cuyas características sobresalientes serían un espantoso temor al empobrecimiento y una desmedida ambición personal, madurados en el ambiente duro y, según se afirma, aislado, de los barrios periféricos de la clase media, donde abundaba la obsesión por las apariencias, la limpieza y la propiedad, y se padecía la represión, el tedio, la frustración y la soledad. Crossik (1977: 27) traza este impresionante catálogo de rasgos neuróticos partiendo de un conjunto de autobiografías escritas por individuos de este grupo. Puede que los académicos, que pertenecen en su mayoría a esta clase (en especial, desde la masificación universitaria posterior a la guerra), compartan una cierta aversión por sus propios orígenes. La cultura de cuello blanco se considera patológica; por tanto, sólo se describe como una situación de gran padecimiento social que produce represión. La aversión distorsiona las interpretaciones, como en el caso del empleo que hace Crossik de algunas biografías contemporáneas:

> La clase media baja [se sentía] frustada y sola. Especialmente en el caso de las autobiografías, encontramos una atmósfera de aislamiento y soledad impuestos por ella misma. Como escribió Masterman: «Sólo existe un hogar auténtico: el afecto intenso de la familia, un modesto jardín, un chalet decorativo y la ambición para el futuro de los hijos» [1977: 27].

Frustración y soledad o intenso afecto familiar, ¿en qué quedamos?

Resulta fácil burlarse de este tipo de empleado, porque la carrera integra al gerente y al burócrata en una jerarquía segmental que es imprescindible respetar si se pretende prosperar dentro de ella. Aparte de la familia, es con toda probabilidad la organización de la que depende el individuo en mayor medida. Desde los Grosmmith de *The Diary of a Nobody* (1892, 1965) al Whyte de *The Organization Man* (1956), los escritores han ridiculizado su conformismo, su pulcritud, su deferencia ansiosa aunque interesada hacia los superiores, su mimetismo del género de vida y los valores de las clases altas, que los induce a cometer errores divertidos. Pocas cosas se han ridiculi-

zado tanto como esta falta de «masculinidad» en una ocupación casi siempre mayoritariamente masculina. Sin embargo, nada de lo que acabamos de ver responde a una patología, sino, en efecto, al hecho de que la principal fuente de poder de estos empleados sea la promoción dentro de una organización jerarquizada que determinan sus superiores; y a que sus «familiares» dependan precisamente de esto. Su concepción del mundo está muy influida por los niveles jerárquicos que conoce y por los que puede imaginar (o quizás percibir distorsionadamente). Ha sido un subalterno leal y disciplinado del capitalismo y la burocracia; como parece que lo serán también las mujeres a partir de ahora.

Así pues, (junto con otros muchos) rechazo la idea de la «revolución gerencial» que han elaborado Berle y Means (1932), Burnham (1942), Chandler (1977) y Galbraith (1985). Todos ellos sostienen que los gerentes de las empresas se han convertido en una clase distinta, opuesta con frecuencia a los capitalistas, dueños de las accionistas, y capaz de cambiar las metas empresariales, que maximiza el crecimiento de la empresa a larzo plazo (porque de ello dependen los salarios) y no el beneficio empresarial a corto. Sin embargo, los estudios no confirman la existencia de grandes diferencias en las metas o los logros de las firmas dirigidas por empresarios o gerentes, y pocos de estos últimos identifican sus intereses en oposición a los de los accionistas (Nichols, 1969; Scott, 1979). Las pruebas son anteriores a las recientes oleadas de fusiones, de compras de empresas en crisis para vender sus bienes, los bonos-basura, etc., que han demostrado una vez más el carácter esencialmente capitalista de las corporaciones. Incluso el punto culminante del «capitalismo organizado» ha sido mejor descrito por la idea de C. Wright Mill sobre la «reorganización gerencial del capital». Como dice Scott:

> En virtud de su situación estructural en la gran empresa, el gerente ejecutivo está comprometido con las formas de cálculo y contabilidad monetaria, los criterios de beneficio y crecimiento ... que requiere la producción capitalista moderna ... La empresa está cercada por las limitaciones objetivas del mercado, que la mantienen en la línea de la racionalidad capitalista [1982: 129].

Los empleados de carrera dependen directamente de la jerarquía autoritaria de la empresa, pero ésta se basa en mercados de mercancías difusos, y no se experimenta como una limitación, sino como racionalidad. La lealtad del empleado es racional y sincera. Si el capi-

talismo funciona, él se beneficia. La expansión económica y la estabilidad que proporcionan la empresa capitalista y el Estado burocrático se reflejan en el desarrollo de la carrera. En tanto que individuos, unos empleados sustituyen a otros, a medida que éstos fracasan, pero como colectivo han copado las organizaciones responsables de gran parte del desarrollo económico del siglo XX.

Aunque muchas de mis pruebas proceden del ámbito británico, puede decirse que no existieron grandes diferencias económicas entre los empleados de carrera ni, desde luego, entre los trabajadores de cuello blanco más modestos, en los cinco países que nos ocupan. La comparación que ha realizado Kocka (1980) entre el trabajador americano de cuello blanco y sus equivalentes alemán, británico y francés revela ciertas diferencias nacionales en la organización de clase, pero las atribuye a las diferencias de los regímenes políticos o a las de las clases trabajadoras nacionales (yo mismo las achaco fundamentalmente en el capítulo 18 a las relaciones del poder político), en absoluto a las diferencias económicas de los distintos capitalismos nacionales. La experiencia social del empleado de carrera ha sido positiva y optimista en todo Occidente (como subraya Blumin para el siglo XIX). De hecho, sus valores han dominado nuestra época. La movilidad individual y el deseo de prosperar no se limitan al emprendedor, su forma original, también caracterizan al empleado de carrera que asume la organización de la empresa. Este último no se sitúa en la historia en tanto que individuo (como el pequeño empresario que hizo la Revolución Industrial), sino como un subalterno leal, inmerso en amplias organizaciones de poder segmental.

Los profesionales

El carácter único de la profesión no se adapta con facilidad a las teorías generales de la clase. El término «profesión» se emplea rutinariamente para definir distintas actividades que se reputan de privilegiadas, sin embargo, no existe una definición que encaje por completo en todas y cada una de ellas —médico, oficial del ejército, enfermero, bibliotecario, agrimensor, etc.— o sirva para todos los países. No obstante, la descripción ideal de una profesión incluye una «instrucción» (es decir, un conocimiento técnica o culturalmente valorado) adquirida mediante una educación específica, cuya práctica se formaliza mediante acuerdos entre el Estado y la organización profe-

sional correspondiente. Por mi parte, distingo varios grados de poder profesional, según que la profesión disfrute de un mayor o menor control real de la licencia estatal que restringe el acceso y regula la práctica. Así pues, el poder profesional es, en esencia, autoritario y particularista, lo que distingue a la mayoría de los profesionales de los empleados de carrera, aunque Goldthorpe (1982) y Abercrombie y Urry (1983) los consideren una sola «clase de servicios».

Me serviré aquí de muchas ideas de los sociólogos que al estudiar el mundo de la profesión han hecho mayor hincapié en el poder que en la función (Freidson, 1970; Johnson, 1972; Rueschemeyer, 1973), aunque acepto también un argumento funcionalista: una profesión depende en parte de unos conocimientos relevantes y socialmente valorados, para los que resulta funcional un aprendizaje especializado. Estos conocimientos no son nunca puramente objetivos o científicos, ya que el poder social influye en nuestra forma de clasificarlos. En Occidente, el conocimiento sobre los aspectos trascendentes de la existencia se organiza como una profesión oficinesca porque las iglesias son un poder organizado; los conocimientos sobre la salud y la enfermedad se han visto significativamente influidos por el poder de los médicos; por otra parte, no resulta obvio por qué las profesiones necesitan de una educación generalista de «elite» tanto como de una preparación técnica en sentido estricto. Es decir, lo que confiere al profesional sus elevadas credenciales, y constituirá la materia de mi análisis, son las clasificaciones parcialmente funcionales, aunque construidas culturalmente, de sus conocimientos.

La sociedad moderna genera conocimientos especializados, cuyos practicantes pueden desarrollar un poder profesional. Que lo consigan o no depende de la habilidad de los usuarios para organizar autoritariamente la oferta de tales conocimientos. Los usuarios son de tres tipos: la empresa capitalista, la burguesía/clase media y el Estado. Las dos primeras se encuentran organizadas difusamente (véase capítulo 4), en cuanto a la tercera constituyó una organización débil durante el siglo XIX (véase capítulo 4). Ninguna de ellas controló autoritariamente lo que generaba su propia demanda, pero cuando las distintas actividades se organizaron de forma colectiva en los intersticios del poder autoritario, se convirtieron en profesiones. No obstante, las oportunidades menguaron a comienzos del siglo XX con el aumento del poder autoritario de las empresas capitalistas y las burocracias estatales. Después, las profesiones de mayor autonomía, en especial, la medicina, se ejercieron entre los individuos y las familias de todas las

clases; y las que podríamos llamar «semiprofesiones», más débiles, se ejercieron para las empresas y los Estados. Pero este balance del poder autoritario sólo explica el poder individual; para llegar a la situación común de las profesiones dentro de la clase media, tendré que analizar otras redes de poder difuso.

La palabra «profesión» se refirió en un principio a quienes profesaban la fe cristiana como vocación de vida, pero hacia 1700 se extendió a cuatro tipos de organización: la Iglesia, la ley, la medicina y el ejército. Estas profesiones se hicieron (1) intelectuales y (2) técnicas, (3) con espíritu de cuerpo (más débil en la medicina) y (4) una ética del servicio a la sociedad mediatizada por (5) el servicio al Estado (más débil en el caso del clero). En el capítulo 12 hemos visto cómo se profesionalizaron los militares hasta formar una casta dentro del Estado. Finalmente, la industrialización capitalista generó otras ocupaciones profesionales con las cinco características que acabamos de enunciar.

La industrialización del capitalismo aumentó su base técnica a medida que crecían tanto la inversión en equipos y maquinaria como los requisitos técnicos de la mano de obra. Los artesanos y los mecánicos intermediarios habían formado la vanguardia de la primera Revolución Industrial codo a codo con los empresarios; después, cuando se disgregaron sus gremios y organizaciones (véase capítulo 15), aquellos cuyas habilidades resultaban imprescindibles para el proceso productivo de la empresa capitalista, en suyo seno se regulaban y aprendían, pasaron a ser meros artesanos. Pero los que tenían cualificaciones intersticiales respecto a la empresa, y demasiado generalistas para que resultara provechoso enseñarlas dentro de ella, adquirieron autonomía profesional. La mayor parte de las empresas necesitaban ahora conocimientos científicos, por ejemplo, para extraer el hierro de las minas con el menor contenido posible de fósforo o para convertir la electricidad en energía para el telégrafo. Otros problemas eran de naturaleza más técnica, por ejemplo, la existencia de edificios y vehículos que requerían innovaciones arquitectónicas y planimétricas para alojar maquinaria pesada y vibrante. La complejidad de la financiación de los negocios aumentó la necesidad de contables, y los problemas legales, la de abogados de empresa, pero las empresas conservaron su pequeño tamaño, de modo que tales servicios no podían constituir el punto central de su actividad.

Tanto los usuarios como los suministradores de conocimientos recurrieron al Estado con el objetivo de obtener licencias para los

cuerpos de especialistas competentes. Como muestra el capítulo 11, los Estados se avinieron porque las licencias suponían una fuente de ingresos. En Gran Bretaña, la oleada de licencias duró de 1818 (ingenieros civiles) a 1848 (arquitectos) y de 1865 (agrimensores diplomados) a 1880 (contables diplomados), pasando por los químicos y los ingenieros del gas, la electricidad y el municipio. Todos los cuerpos profesionales dispusieron de controles de acceso negociados con las instituciones educativas estatales (y privadas), como continúan haciéndolo en la actualidad.

La corporación emergente extendió después sus controles autoritarios al trabajo de su equipo de profesionales, que quedó sometido a la gerencia de «línea» (una distinción más fuerte que la de su originaria manifestación militar). El equipo se situó entonces a medio camino entre la profesión y la carrera. Desde 1900 la contabilidad formó parte también de la empresa, primero como una medida de control interno, luego como una forma de afrontar el riesgo que suponía para las sociedades anónimas la auditoría pública. Durante el siglo XX numerosas firmas de profesionales se convirtieron ellas mismas en grandes corporaciones. En la década de 1930 existía ya un pequeño grupo de empresas contables que auditaban los libros de la mayoría de las grandes corporaciones, en paralelo a la aparición de una enorme actividad jurídica dedicada a la corporación (Galanter, 1983). Contables y abogados conservaron su autonomía profesional quizás porque prestaban sus servicios a una clientela dispersa de familias de clase media y negocios modestos. Pero en las profesiones relacionadas con el Estado y la empresa, la práctica (aunque no el acceso inicial) de los profesionales no se distinguía en exceso de la de los empleados de carrera de la empresa o la burocracia.

Cada país definió sus propias prácticas profesionales. La resistencia de los revolucionarios americanos a los monopolios profesionales y la débil regulación estatal, combinados con una temprana concentración económica, aumentaron el poder de la corporación sobre los profesionales. En otros lugares, la industrialización tardía produjo grandes corporaciones y una mayor regulación estatal, que redujeron la autonomía educacional de los profesionales. Las cualificaciones requeridas en Francia y Alemania se encontraban muy relacionadas con la educación de la elite estatal y las carreras dentro del cuerpo de funcionarios: en Francia, a través de las *grandes écoles;* en cuanto a Alemania, el Estado controlaba aún más al *Akademiker* y, a través del concepto de «burócratas profesionales», a los *Beamten.* Pero todo

esto no son más que variaciones sobre el mismo tema, pues en todas partes el poder de los profesionales fue útil, aunque siempre intersticial, para las primeras organizaciones del capitalismo y del Estado moderno, y siempre dependiente del creciente poder autoritario de éstas.

El poder de la profesión médica no decayó nunca. Antes del siglo XVIII habían practicado el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades físicos, cirujanos, boticarios, barberos, tenderos, curas de aldea y curanderos locales de ambos sexos. Con el progreso de la ciencia y el aumento de los conocimientos aparecieron las asociaciones médicas locales, que homologaron las reglas. Cuando la densidad urbana esparció enfermedades amenazantes para todas las clases, el interés de clase, la caridad y la fe ilustrada y utilitaria en el progreso científico coincidieron en reclamar la creación de una licencia estatal. En 1855 la *Medical and Surgical Society* de Worcester se transformó en la *British Medical Association.* La legislación de 1858 sometió a todas las corporaciones autorizadas a lo que llegó a ser el consejo general de la asociación, que mantenía un registro de los practicantes especializados. Este cuerpo autorizado por el Estado define aún al médico: «Médico es aquella persona dotada por la ley de un Estado soberano de ciertos derechos, deberes y privilegios, que no confiere a otras personas dentro de su jurisdicción» (MacKenzie, 1979: 55). Freidson comenta con ironía: «La característica más estratégica y apreciada de la profesión —su autonomía— se debe, pues, al Estado soberano, del cual, en última instancia, no es autónoma» (1975: 23 y 24).

Pero, como documenta Freidson, a la larga, los poderes autoritarios no pudieron imponerse a la profesión médica, que creó sus propio sistema de licencias en todos los países occidentales cuando fallaron los intentos por parte del Estado y de los usuarios. Aunque los radicales defendieron el control de estos últimos sobre el cuidado de su propia salud (Illich, 1977), acabó por imponerse un modelo altamente tecnificado que el paciente no puede evaluar y que responde más a una acumulación de poder por parte de los médicos que a una necesidad funcional, ya que la medicina ha contribuido mucho menos a la mejora de la salud de los últimos 150 años que los avances en el terreno de la dieta, los salarios, la vivienda y el medio (McKeown, 1976; Hart, 1985). Pero el poder de la profesión fue anterior a la institucionalización del modelo médico. A lo largo del siglo XIX no dejó de aumentar, pues si los médicos habían tratado antes a las familias

poderosas, ahora prestaban sus servicios a un gran número de familias burguesas y de clase media en los anónimos barrios urbanos. El hecho de que los pacientes ya no pudieran comunicarse colectivamente permitió a los médicos definir sus servicios en términos técnico-profesionales (Waddington, 1977). Goode (1969) observa también que el médico —y otros profesionales autónomos como el psicoanalista, el clérigo, el abogado y el profesor universitario— se introduce en la vida íntima. El temor del cliente a la enfermedad, la locura, el delito, el castigo y la valoración de su capacidad intelectual le produce ansiedad y lo coloca en una situación muy vulnerable, difícil de compartir con otras personas. Cuando los clientes no disponen de la suficiente organización, se ven obligados a mantener una actitud deferente. La necesidad de intimidad personal garantiza el poder profesional, que siempre sobrevive mejor cuando se ejerce sobre una clientela dispersa.

También el Estado perdió el poder de otorgar licencias. Como he subrayado en el capítulo 14, los Estados del siglo XIX no solían intervenir en la sociedad civil. El Estado británico podía hacer muy poco sin la presión ciudadana, y esta presión exigía infraestructuras neutrales, no intervención gerencial, salvo para aliviar la situación de los pobres. El Estado carecía, además, de un conocimiento experto que le permitiera supervisar las profesiones, y sus escasos especialistas eran ellos mismos médicos. El Consejo Privado se fundó para supervisar las licencias de 1858, pero después de un momento inicial de intenso interés por la salud pública, su oficina médica cayó bajo el poder de la profesión, que impuso un nivel más elevado de preparación, un determinado grado de salud pública y la Ley de Pobres. Los hospitales de la Ley de Pobres constituyeron un anticipo de la «cirujía heroica» del siglo XX. Este poder profesional se ha prolongado gracias a la creación de los servicios nacionales de salud.

El poder de los médicos sobre la práctica profesional y (en menor medida) sobre las cualificaciones se encuentra homologado actualmente en el mundo moderno, por encima de las relaciones laborales formales que resaltan muchos teóricos de la clase. Los médicos conservan su carácter de profesionales tanto si trabajan para el Estado, como si lo hace para la sanidad privada, o se establecen por su cuenta, solos o en asociación. Sus servicios, que en un principio disfrutaron sólo las familias burguesas, alcanzan ahora a todos los ciudadanos del siglo XX. Ni los ciudadanos ni el Estado ejercen control alguno sobre

ellos, salvo, probablemente, en países como Estados Unidos, donde las grandes compañías de seguros gozan de un gran poder autoritario.

El Estado ha sido más rígido con los recientes aspirantes a profesionales. El crecimiento de las funciones estatales que hemos descrito en el capítulo 14 —y que ha continuado durante el siglo XX— creó nuevos conocimientos especializados. El primero de los grandes grupos, aparecido a finales del siglo XIX, fue el de los maestros de escuela, cuya importancia política se hizo evidente más tarde. A éstos siguieron, hacia 1900, otras ocupaciones intelectuales —trabajadores sociales, bibliotecarios, planificadores urbanos, etc.— que nunca tuvieron tanto poder y que se han llamado «semiprofesiones». El Estado, con frecuencia un empresario en régimen de monopolio, controla más directamente la oferta de servicios. En el siglo XX las semiprofesiones se han feminizado; las mujeres forman ahora la mayoría, pero las mujeres tienen poco poder en la sociedad. Los semiprofesionales se mantienen en una zona de nadie, en los límites entre el empleado de carrera y el modesto empleado de cuello blanco.

Pero las «relaciones de producción» directas de los profesionales de alto rango difieren de las de otras clases y fracciones, y se apartan más de las relaciones del capitalismo que de las predominantes en las organizaciones pequeño burguesas o de los empleados de carrera burocráticos, de modo que no encajan en los sistemas de clasificación marxiana como el de Wright. No obstante, los profesionales comparten también la implicación común en las organizaciones, más difusas, de los Estados-nación capitalistas. Teniendo esto en cuenta, veamos ahora el papel integrador del poder difuso en las tres fracciones.

1. Los profesionales cobran unos honorarios determinados en parte por la profesión (probablemente a través de negociaciones con el Estado, las compañías de seguros, etc.) y en parte por las fuerzas difusas del mercado. Están menos dominados por las organizaciones segmentales de empleo orientadas al ascenso que los empleados de carrera. Los honorarios les permiten, además, vivir entre los miembros de la clase media alta, contraer matrimonio en ese ambiente y disfrutar de un consumo privilegiado. La reciente tendencia de las empresas a subcontratar ciertos servicios exteriores ha supuesto un aumento de las posibilidades para los profesionales que viven de sus honorarios.

2. El acceso a la profesión depende de dos características difusas del Estado-nación capitalista: una educación elevada y una formación

específica, y (menos universalmente) unos medios económicos para financiarse el aprendizaje no retribuido y las asociaciones profesionales. Esto limita la participación a las familias relativamente privilegiadas, y la educación elevada permite la participación de los profesionales en la cultura de elite. Pero la dependencia de la formación puede separarlos de la auténtica clase capitalista. Como observa Parkin (1979: 54 a 73), la mayor parte de la propiedad capitalista se hereda de los padres, mientras que la herencia de las credenciales educacionales es indirecta e imperfecta. La educación empuja a los hijos de los profesionales a competir junto con los otros hijos de la clase media, y luego, cuando llegan a adultos, les permite situarse en grupos sociales más altos. Tales diferencias reducen lo que de otra forma podría formar una única clase profesional-capitalista.

3. Como ya hemos visto, el cliente influye en el poder profesional. La demanda procede de las familias y los negocios capitalistas y de la clase media, con la sola excepción de las semiprofesiones y la medicina (puesto que el Estado o los seguros médicos facilitan el acceso general al mantenimiento de la salud). Los profesionales proporcionan a sus clientes servicios de clase. Como observa Cain en el caso de los abogados ingleses:

> Los clientes constituyen la institución típica (personas jurídicas) de la sociedad capitalista y de la clase media, [así pues los abogados son] ideólogos conceptuales ..., que piensan y por tanto dan forma a las relaciones que surgen en la sociedad capitalista ..., son los intelectuales orgánicos de la burguesía [1983: 111 y 112].

Los abogados participan difusamente en los circuitos del capital.

4. La difusión afecta también a las organizaciones profesionales que trabajan para el Estado o para el mundo de los negocios o bien operan dentro de una sociedad, constituyendo ellas mismas empresas capitalistas (donde se establecen escalas de honorarios para la profesión, se convierten en corporaciones que fijan los precios en régimen de monopolio). Parte del poder de los profesionales se expresa a través de organizaciones que son casi empresas capitalistas o casi ministerios estatales.

Así pues, los Estados-nación capitalistas ejercen un dominio difuso sobre los profesionales, que, de otro modo y gracias a la índole directa de su «proceso de trabajo», disfrutarían de autonomía, de

modo que en materia de economía política, los profesionales suelen ser aliados fieles del capital. En cuanto a la redistribución, sus intereses están del lado de los ricos, los seguros, los bien educados y los que ejercen su control sobre el trabajo. En cuanto a la propiedad, se resisten a los controles colectivos. En realidad, en las cuestiones morales y humanitarias siempre han sido liberales, en parte por su educación elitista, pero en el siglo XX ha aumentado su liberalismo. En algunos aspectos, los semiprofesionales disfrutan de mayor autonomía, poseen más clientela y pueden dividir su rol profesional entre las necesidades del ciudadano y el control social; dependen también de la educación, pero de un tipo más generalista, menos privilegiada y protegida; y raramente, de una organización rica en recursos y con espíritu corporativo. Sus ingresos suelen ser menores, aunque suficientes para llevar una vida cómoda. Entre ellos abundan las mujeres. Por tales razones, han desarrollado en este siglo ideas políticas moderadamente radicales.

Tres fracciones de una misma clase

Las tres fracciones de clase presentan distintas relaciones de producción. Si se emplea, como en algunas teorías productivistas, únicamente el criterio de la posición de clase, tendríamos tres clases separadas, sin embargo, comparten la participación segmental en el capitalismo y el Estado-nación. Empezaremos por el primero.

1. Las tres fracciones participan en la jerarquía económica. Dahrendorf cree que esto justifica una teoría de la desintegración. Entre los asesores de inversiones y los trabajadores intermediarios de la construcción, en la pequeña burguesía; entre los cirujanos y los maestros de primera enseñanza, en las profesiones; entre el director del departamento de mercadeo y el vendedor, en los empleos de carrera, las diferencias son muy grandes. Sin embargo, paradójicamente, todos ellos forman la clase media. Para los empleados de carrera se trata de un hecho evidente: la «socialización anticipadora» garantiza una conciencia común a todos los niveles de la jerarquía. También actúa como elemento integrador de la clase la aspiración pequeño burguesa al desarrollo. Muchos negocios modestos prosperan elevando el nivel de su clientela, desarrollando una simbiosis con negocios más grandes o clientes más ricos. La jerarquía profesional suma los honores a

la seguridad de la asociación. Las tres estructuras se mueven hacia arriba a lo largo de la clase media. La obstrucción puede empujar al sindicalismo a los empleados de carrera antiguos y radicalizar moderadamente a los semiprofesionales, pero la movilidad jerárquica ata a la clase media a la lealtad disciplinada que impone la lógica de los ascensos.

2. La clase media consume característicamente (como observan los neoweberianos). La de finales del siglo XIX participó en una economía de consumo adquiriendo vestidos y artículos alimentarios, comprando o alquilando en condiciones seguras una vivienda y contratando una sirvienta. El cabeza de familia disfrutó, por lo general, del derecho al voto conforme al sistema del sufragio basado en la propiedad. Cuando éste se amplió, la clase media comenzó a dominar la política local urbana. La posibilidad de contratar el trabajo de otros constituyó una divisa fundamental de clase. En 1851, en York, el 60 por 100 de los «comerciantes modestos, pequeños profesionales, granjeros, etc.» empleaban al menos un sirviente, frente al 10 por 100 de los trabajadores especializados y prácticamente semiespecializados o sin especialización (Armstrong, 1966: 234, 272 y 273). Las cuentas que hizo mi abuela en 1901 demuestran que una mujer que no trabajaba, casada con el dueño de un modesto negocio de jardinería, pagaba un sueldo semanal de «2 chelines y 6 peniques» (aproximadamente el precio de una gallina) a una muchacha que dormía en la cocina.

El consumo característico de la clase media sufrió una transformación antes de entrar en decadencia. Por un lado, el sistema progresivo de impuesto sobre la renta y la Primera Guerra Mundial redujeron el servicio doméstico. Poco a poco, las masas se incorporaron a la economía del consumo seguro y variado. La clase obrera imitó el consumo de la clase media de una o dos décadas antes en todas sus características, salvo en el empleo de sirvientes. Los trabajadores podían adquirir productos alimentarios, vestidos, mejores viviendas, coches, seguros e hipotecas —y, más tarde, sustancias cancerígenas—, es decir, las cosas que siempre estuvieron asociadas a la clase media.

3. Las tres fracciones están en condiciones de convertir su renta en una pequeña inversión de capital, lo que ya ocurrió, por ejemplo, durante el auge del ferrocarril de la década de 1840 (véase capítulo 4). La inversión en sus propios negocios es esencial para la pequeña burguesía, y muchos profesionales adquieren una sociedad o una clientela. Los empleados de carrera reciben acciones de sus empresas

y se sirven de la experiencia personal para el asesoramiento o la inversión. Muchos pueden dejar un modesto capital a sus hijos. Desde la década de 1930 hasta principios de la de 1960 el matrimonio de clase media se distinguió en Gran Bretaña del matrimonio obrero por recibir ayuda de sus padres para la adquisición de la vivienda (Bell, 1969). En el siglo XX, los ahorros de la clase media han ido a parar sobre todo a los planes de pensiones, seguros e hipotecas. En Estados Unidos, hacia la década de 1950, algo más tarde que en Europa, estas inversiones distinguían a las familias de clase media de las de clase obrera. Sus ahorros, deudas y proyectos de vida (vivienda, carrera, retiro) entraron en los circuitos centrales del capital y se beneficiaron del auge capitalista. Pocos eran los trabajadores con ahorros, y no faltaban entre ellos los que contraían deudas con el mundo subcultural de los prestamistas o casas de empeño. Los ahorros de la clase media, por el contrario, adoptaron una forma idéntica a los de los verdaderos ricos.

Así pues, pese a sus peculiaridades y diversidad interna, las tres fracciones de la clase media compartieron la participación capitalista difusa en las jerarquías segmentales, la marca de consumo de clase y la conversión de la renta excedente en capital complementario de inversión. En 1900 la clase media conoció en todas partes una enorme expansión, prosperó y participó en una nueva forma de sociedad económica. La sociedad civil *era* la sociedad de la clase media, como refleja el término común en alemán *burgerlich Gesellschaft*. Pero esta sociedad se encontraba también entrelazada con una ciudadanía política e ideológica, que en parte la definía.

La ciudadanía ideológica de la clase media

En los primeros capítulos he sostenido que las «naciones» aparecieron a comienzos del siglo XIX por las alianzas entre la pequeña burguesía y los antiguos regímenes que se modernizaron. Los funcionarios y profesionales liberales formaban el núcleo de los modernizadores. Gran parte de la organización nacional se produjo a través de redes de alfabetización discursiva, es decir, de la ciudadanía ideológica. Ahora las nuevas clases exigían la ciudadanía política, y la ciudadanía ideológica —extendida gracias a la educación financiada o regu-

lada por el Estado— contribuyó a fusionar la nación y el Estado en un Estado-nación[2].

Como acabamos de ver, la prosperidad de la clase media dependía cada vez más de la educación formal. La pequeña burguesía había sido menos dependiente, pero los otros dos grupos dependieron de la educación más que la clase obrera o la capitalista, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial. La expansión de la educación estatal formaba parte de los requisitos profesionales que imponían el capitalismo y los Estados modernos, como he tenido ocasión de describir, pero también reflejaba el deseo de control social por parte de las clases dominantes y el de «ciudadanía ideológica» por parte de las clases subordinadas, reveladoras de las cristalizaciones nacional y de clase del Estado. El «credencialismo», que suele identificarse como un hecho característico de la vida de la clase media, fue un hecho configurado por estos elementos.

El sesgo de clase era evidente en la educación. En toda Europa (no en América) hubo una segregación tripartita de las escuelas. Puesto que el pago de tasas era casi universal, también se estratificó la riqueza. El nivel más bajo, la enseñanza elemental, no constituía, por lo general, una preparación para la enseñanza secundaria, sino la totalidad de la experiencia educativa de las clases bajas. La enseñanza secundaria se dividió en dos escuelas «modernas», menores, y una «clásica», superior, que decidía la entrada a la universidad. La enseñanza alemana era la más controlada por el Estado. Desde el gobierno se regía el *Gymnasium* clásico y el *Realgymnasium* y la *Oberrealschule*, modernos, y se establecían las cualificaciones necesarias para el acceso (por lo general, desde el primero) a las universidades, y de allí al cuerpo de funcionarios y las profesiones. El gobierno francés controlaba los *lycées* clásicos y las escuelas «especiales» —desde 1891 las escuelas «modernas»— y las distintas cualificaciones que concedía cada una de ellas. Los *lycées* constituían un ejemplo típico de la escuela clásica en toda Europa; en ellos, los estudios de filosofía, letras, historia y geografía abarcaban el 77 por 100 del horario docente en 1890.

[2] Las fuentes del siglo XIX han sido: para Gran Bretaña, Musgrove (1959), Perkin (1961), Sutherland (1971), Middleton y Weitzman (1976), Hurt (1979), Reeder (1987), Simon (1987) y Steedman (1987); para Francia, Harrogan (1975), Gildea (1980) y Ringer (1987); para Alemania, Muller (1987) y Jarausch (1982, 1990); para Estados Unidos, Krug (1964), Collins (1979), Kocka (1980) y Rubinson (1986); además de los análisis comparados de Ringer (1979), Kaelble (1981) y Hobsbawm (1989: caps. 6 y 7).

En Gran Bretaña, la mayor parte de las escuelas eran privadas, aunque desde 1902 aumentó la regulación estatal. Tres comisiones reales separadas encarnaban la división tripartita británica. La comisión Clarendon (1861) evaluó las nueve grandes escuelas públicas (es decir, privadas) donde se formaban los dirigentes nacionales. La comisión Taunton (1864) se encargó de hacerlo en el caso de las escuelas destinadas a «las numerosas clases de la sociedad inglesa que ocupan el espacio entre los humildes y los poderosos». La comisión Newcastle (1858) examinaba las escuelas baratas donde los hijos de las «clases obreras» estudiaban hasta los once años.

En América, la ausencia de aristocracia y de profesiones eruditas, así como de un gran cuerpo de funcionarios retrasó el desarrollo de la educación pública. Hasta mediados de siglo, las escuelas y universidades habían generado una escasa estratificación, salvo en los centros de elite. Pero incluso cuando se creó la educación pública, la segregación de clase se vio reducida por la politización de los asuntos escolares propia de la democracia de partidos. La mayor parte de los centros de enseñanza estaban regidos por los gobiernos locales, el más democrático de los tres niveles de la política federal americana. Una vez más se repitió la excepción del sur, con una escolarización efectiva sólo para los blancos.

En este periodo la mayor parte de los individuos de clase media habían obtenido una ciudadanía política plena o casi plena, cuyo resultado fundamental fue la expansión de la educación, y con ello la posibilidad para las familias de clase media de compartir la vida cultural de la nación y distinguirse con toda claridad de los obreros y los campesinos. Esto afectó tanto a los niños como a las niñas. La educación primaria subvencionada por el Estado y la enseñanza secundaria moderna se multiplicaron de dos a cinco veces, y el número de estudiantes universitarios se triplicó en todos los países occidentales desde finales de la década de 1870 hasta 1913. Pero la expansión europea no superó la segregación. Los niños británicos aprendían en las escuelas privadas de enseñanza elemental a «leer un párrafo breve de un periódico, escribir un pasaje similar, en prosa y al dictado, y calcular sumas "practicando con facturas de compras"». Era la formación que necesitaba el joven para convertirse en empleado y participar en la vida cultural de la nación. Entre los hijos de los trabajadores, sólo unos cuantos podían asistir a estas escuelas, y no todos ellos aprendían a leer y escribir. De 1870 a 1902 se proclamaron varias leyes para extender la educación estatal elemental, que se

estratificó entre los hijos de la clase media y los de la clase trabajadora; a estos últimos se les enseñaba tanto disciplina, modales y limpieza como conocimientos académicos, ya que su educación no solía ser preparatoria para la enseñanza secundaria; por el contrario, los hijos de la clase media, entre ellos muchas niñas, continuaban generalmente los estudios secundarios.

La expansión introdujo también la segregación entre los oficios de clase media y los de la clase alta. Los miembros del alto funcionariado alemán y los profesionales de rango superior se formaban mayoritariamente en las universidades y escuelas clásicas; los niveles medios de la función pública, los profesionales más modestos y los gerentes, lo hacían en las escuelas modernas; entre ellos, los que abandonaban las escuelas o las universidades tendían a ocupar posiciones más bajas que los que completaban sus estudios, en el caso concreto de las escuelas modernas, los que ahorcaban los libros ocupaban puestos bajos de cuello blanco. Resulta evidente la semejanza de los modelos francés y británico, con la excepción de que también se accedía a los puestos de tipo comercial y financiero desde el liceo clásico. Las universidades europeas y americanas se nutrieron del mundo de los negocios; eran más los hijos de los empresarios que entraban a las universidades que los licenciados que salían de ellas para incorporarse a los negocios. En cualquier caso, todas conservaron su estratificación; las más antiguas (Oxford, Cambridge, la Ivy League, etc.) mantuvieron su carácter elitista; los clubes de estudiantes insuflaron los valores tradicionales en lo que de otra forma habría sido una «burguesía reciente».

Así pues, los profesionales formados en las universidades, los funcionarios y los empleados de carrera en el mundo del comercio o de las finanzas, accedieron a una cultura y una erudición no meramente técnicas, como, en cambio, era el caso del mundo de la industria o de otros trabajadores por debajo de ellos en la escala social. La segregación educacional permitió también la separación de los «gerentes» como categoría aparentemente funcional, distinta a la de los empleados y vendedores, y el acceso de un elevado número de mujeres de la clase media a estas actividades. La separación entre los trabajadores manuales y los no manuales, que, de hecho, aumentó, quedó enmascarada por las relaciones de género. Las relaciones de clase en el empleo se entrelazaban ahora con la segregación educativa.

Casi todos los participantes en el confuso debate sobre la movilidad social del periodo coinciden en que la segregación educacional

respondió a una actitud deliberada de los gobernantes, al objeto de prevenir una movilidad hacia arriba de gran alcance. El hecho de que las posiciones más elevadas aumentaran mucho menos que las posiciones medias y técnicas, y la expansión que experimentó la educación, hicieron temer a los distintos regímenes que se produjera una «superpoblación» de los oficios eruditos; es decir, la segregación fue un modo de proteger a sus propios hijos. Sin embargo, esto no sembró el descontento entre la clase media; puesto que las mayores oportunidades se daban en los empleos de nivel medio, la segregación los protegía también de la competencia, al tiempo que la escolarización socializaba y disciplinaba a los niños en la lealtad a la jerarquía tripartita de «estudios clásicos», «técnica moderna» y «mera alfabetización».

Durante el siglo XX ha desaparecido gran parte de la segregación formal de la educación. Excepto en los niveles más altos, se garantizó el acceso universal gratuito; a partir de ese momento el progreso fue meritocrático. Con posterioridad a la Primera Guerra Mundial dejó de ser un privilegio de las clases medias y altas, ya que la expansión de la enseñanza selectiva secundaria incorporó a un elevado porcentaje de hijos de trabajadores. Ahora la influencia de los antecedentes de clase se hizo menos directa. La asistencia a las escuelas secundarias selectivas de Gran Bretaña se mantuvo, durante el siglo XX, en casi un 70 por 100 entre los hijos de los profesionales, gerentes y grandes propietarios; en el 40 por 100 entre los trabajadores no manuales de nivel más bajo; y del 20 al 25 por 100 entre los hijos de los obreros (Little y Westergaard, 1964; Halsey *et al.*, 1980: 18, 62 a 69). Las comparaciones internacionales revelan pocas diferencias en la desigualdad del acceso a los grados más altos de la educación (aunque el sistema estadounidense parece algo más abierto que el de los países europeos). Todos admitieron un elevado número de hijos de trabajadores a comienzos del siglo XX, sin perder el predominio de la clase media. Primero la educación secundaria selectiva, y luego la superior, integraron a la clase media del siglo XX.

Todo ello no son sino variaciones sobre un tema único: el aumento de la ciudadanía ideológica de la clase media. El poder económico dependía de la educación estatal, por tanto, también de la lucha por la ciudadanía. La clase media participó de una ciudadanía ideológica cuyo contenido y oportunidades definieron sus superiores.

Pero no se trata únicamente de una educación reforzadora de la clase. También debemos tener en cuenta la cristalización *nacional.*

Por otra parte, he sostenido en todo momento que las luchas políticas influyen siempre en la actividad estatal de cualquier época. En el capítulo 14 vimos que la educación constituyó el factor esencial del crecimiento del Estado y su principal actividad civil a finales del siglo XIX. En la mayoría de los países, el gobierno (central, local o regional) asumió la enseñanza privada o amplió la suya propia, con lo que las escuelas privadas se transformaron en islas dentro de un sistema cada vez más público. Así, el periodo conoció un fuerte conflicto político (en ocasiones, muy grave) entre el Estado centralizado y secular y la alianza regional-religiosa de los descentralizadores y las iglesias. Donde existía una iglesia establecida, la alianza de los disidentes se produjo normalmente entre los regionalistas y las minorías religiosas, como en Alemania y Gran Bretaña. Los grupos que dependían de la educación —en primer lugar, empleados de carrera dentro del Estado y maestros, seguidos de otros profesionales y, posteriormente, de los empleados de carrera del sector privado— manifestaron una mayor lealtad al Estado centralizador y secular, y se identificaron mejor con el Estado-nación emergente. Ahora bien, puesto que el Estado era en sí mismo polimorfo y los individuos de clase media tenían también identidades locales, regionales y pertenecían a comunidades religiosas, la ciudadanía ideológica y el nacionalismo presentaron grandes variaciones.

El nacionalismo político de la clase media

He apuntado ya que las relaciones de poder económico pudieron empujar a la clase media al conservadurismo. La lealtad a las jerarquías segmentales, la prosperidad, los privilegios culturales y la autosatisfacción, la escasa proletarización, la integración en los cauces de inversión capitalista, y el deseo de distinguirse de la clase obrera en sus hábitos de consumo, en la cultura y la especialización profesional constituían elementos estimuladores de un conservadurismo soportable, del que no cabe esperar apasionamiento o extremismo político, ni alianzas con el proletariado o simpatías socialistas. Si el capitalismo hubiera constituido la única cristalización del Estado, la clase media habría aburrido a los historiadores.

Pero no ha sido así. Los historiadores han percibido un apasionado *nacionalismo político* en las clases medias. La práctica totalidad de los estudios sobre el nacionalismo o sobre los grupos nacionalistas

de presión del periodo concluye que esta actitud política caracterizó a la pequeña burguesía o clase media, antes que a ninguna otra, (con la peculiaridad de que, como en cualquier otra asociación voluntaria que no perteneciera a la clase obrera, la dirección de estos grupos de presión estaba en manos de los notables). Sin embargo, los estudios aportan pocas pruebas que avalen este aserto, salvo en el caso alemán, donde las evidencias, como hemos visto aquí, ponen de manifiesto un modelo distinto. Pero cuando tratan de otros países, estos estudiosos lanzan afirmaciones no documentadas para explicar el *porqué* del nacionalismo de las clases medias.

Hobsbawm (1990: 121 y 122), al defender que el nacionalismo *previo a la guerra* fue esencialmente de cuño pequeño burgués, se refiere, en realidad, a la evidencia de la Alemania nazi *posterior a la guerra*, pero también en esto se equivoca: la evidencia de los nazis muestra los mismos modelos (no pequeño burgueses) que yo mismo he documentado para la Alemania anterior al conflicto. Coetzee (1990) constituye una excepción al admitir que sus datos no permiten una generalización sobre los nacionalistas. Se supone que el nacionalismo pequeño burgués o de clase media refleja el temor, la inseguridad y el deseo de una figura autoritaria en el timón de la patria; así, se habla de «frustración», «infelicidad», «pánico por la pérdida de estatus», como respuestas a la concentración económica y los abusos de los obreros (Howard, 1970: 103 y 104; Wehler, 1979: 131 y 132; Hobsbawm, 1989: 152, 158 y 159, 181; Hobsbawm, 1990: 117 a 122). Otros juzgan ese nacionalismo como una sublimación de frustraciones económicas y sexuales, que habría transferido el mal a fuerzas externas. Yo, que he rechazado las teorías patológicas del comportamiento económico de la pequeña burguesía, haré ahora lo mismo respecto a su comportamiento político.

Las teorías patológicas perciben un patrón común para todo Occidente, determinado por el impacto que el proletariado y la Segunda Revolución Industrial habrían tenido sobre la clase media. Sin embargo, el nacionalismo burgués no fue un fenómeno uniforme, sino bastante variado, que, en ocasiones, reflejó con una cierta exageración, los dilemas de los distintos regímenes.

En primer lugar, me ocuparé de la amenaza que llegaba desde abajo. Los movimientos masivos de campesinos y obreros tuvieron consecuencias desde la década de 1880. En el capítulo 19 veremos que la política del campesinado no representaba una amenaza para la pequeña burguesía. El caso de los trabajadores resulta más problemá-

tico. Con todo, en sus relaciones directas de producción, la clase obrera se enfrentó sólo a la pequeña burguesía interesada en contratar mano de obra barata y opuesta a los derechos de organización sindical. Los profesionales se mantuvieron relativamente al margen del conflicto entre el capital y el trabajo, sólo los empleados de carrera se implicaron hasta cierto punto, pero, en general, no tuvieron intereses directos en una solución concreta a las relaciones laborales. Y si bien es cierto que los gerentes y los burócratas podían ejercer las «funciones globales del capital» (Carchedi, 1977), no lo es menos que podían hacerlo con métodos represivos o conciliadores. Puesto que en la práctica los partidos obreros querían el mutualismo y la regulación, no la caída del capitalismo, no representaban una carga insoportable para gerentes y burócratas. Así pues, en el terreno de las relaciones directas de producción, cabe esperar hostilidad pequeño burguesía, pero también un comportamiento variado por parte de los profesionales y empleados de carrera hacia el mundo obrero.

La clase media y la clase trabajadora se enfrentaron, una vez más, en el terreno de la «economía política», es decir, de la economía del Estado. Si se concedía a los obreros la ciudadanía formal y efectiva, el Estado dejaría de pertenecer a la clase media, el voto obrero, más numeroso, acabaría por reconducir la economía política hacia sus propios intereses, y, como ya he subrayado repetidamente, los intereses políticos se centraban en los costes y los beneficios del Estado.

Los *costes* estatales significan ingresos; en ese momento, la elección entre unos impuestos directos potencialmente progresivos y unos impuestos indirectos regresivos, junto a las entradas procedentes de la «propiedad estatal». Como hemos visto en el capítulo 11, la carga impositiva se había hecho muy gravosa y continuaba siendo regresiva. Cuando aumentaron los gastos militares a partir de 1890, creció también la protesta obrera y campesina. La fuente de los *beneficios* estatales cambió considerablemente a lo largo del siglo. Los «frutos del cargo» no existían ya en su sentido tradicional de corrupción, pero burocratización significa reparto de los cargos entre los individuos educados, y de los mejores puestos entre los más «instruidos». Así ocurrió en el caso de los empleados de carrera en el comercio y la manufactura, e igualmente en el de los monopolios profesionales. Las credenciales técnicas estaban insertas en la vida cultural de la nación, que disfrutaban los hombres de clase media (e incluso algunas mujeres), pero muy pocos trabajadores. La principal reivindicación del movimiento obrero cara al Estado era la ciudada-

nía ideológica, es decir, el derecho a la educación, en mayor medida que cualquier otra, aparte de la demanda de derechos sindicales, pero el aumento de las funciones civiles del Estado aportó una serie de servicios que representaban un beneficio adicional. La clase obrera comenzaba a reconducir esas funciones hacia sus intereses, e intentaba convertir los controles estatales en servicios (por ejemplo, transformar la Ley de Pobres en derechos de ciudadanía social). No obstante, aunque el conflicto entre las clases por la economía política apareció hacia 1900, no representó una amenaza grave hasta los últimos momentos de la Primera Guerra Mundial. La redistribución fiscal y la educación universal empujaron a la clase media al enfrentamiento con la clase obrera.

Sin embargo, no ocurrió siempre, y cuando lo hizo pocas veces condujo a un choque frontal. En América, la división de clase no hizo mella en los principales partidos políticos; en Francia y Gran Bretaña se dejó sentir algo más. Otras cristalizaciones políticas redujeron el conflicto de clase, que, a su vez, difirió entre los distintos países y regiones. Kocka (1980) ha demostrado que mientras los trabajadores americanos de cuello blanco no demostraban ningún temor hacia el proletariado, los alemanes sí lo hacían. En Estados Unidos, las dos «clases» se agrupaban en los mismos partidos políticos, y cuando los empleados tenían quejas que exponer se afiliaban a los mismos sindicatos, en tanto que los alemanes militaban en partidos y sindicatos antagónicos de los obreros y se sentían sus adversarios. Los casos de Francia y Gran Bretaña se situaron entre ambos extremos, aunque de forma distinta. Estas diferencias nacionales se explican porque las clases y la economía política se entrelazaban con las tres cristalizaciones políticas principales:

1. Aunque la clase media adquirió durante el siglo XIX la *democracia de partidos,* lo hizo en distintos grados y con modos muy diferentes. En la década de 1880 (antes en Estados Unidos) existía una ciudadanía política plena en los tres países liberales, donde, hacia 1900, las elecciones se encontraban menos dominadas por los notables y los partidos clientelistas y segmentales que por los partidos de afiliación masiva y los grupos de presión. La clase media había sido la primera en acceder a la celebración de mítines masivos y campañas electorales impersonales. En Austria y Alemania, por el contrario, el sufragio sometido a restricciones cortesanas o de propiedad y las limitaciones de la soberanía parlamentaria, impidió el desarrollo de de-

mocracias de partidos y permitió a sus regímenes continuar ejerciendo su política basada en la práctica del «divide y vencerás». La clase media fue admitida en el Estado de modo parcial, en tanto que se excluía mediante la represión a la clase obrera. En Austria, la política de «divide y vencerás» afectó también a las nacionalidades y, en ocasiones, excluyó a las clases medias nacionales. Los Estados Unidos se encontraban en el extremo opuesto, sin exclusión de ninguna clase. Gran Bretaña y Francia mantenían una posición intermedia. Aunque las sucesivas ampliaciones del sufragio en Gran Bretaña a lo largo del siglo y los cambios que experimentó el régimen francés durante la década de 1880 se tradujeron en una asignación de la ciudadanía en función de la propiedad, este hecho no supuso una neta separación de las clases. En 1900, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores especializados británicos disfrutaban, como la clase media, del derecho al voto (y del derecho de organización colectiva), sólo estaban marginados los trabajadores sin especialización. La democracia de partidos estadounidense se sostenía en las alianzas interclasistas, lo que puede aplicarse parcialmente a Francia y Gran Bretaña, mientras que en Austria y Alemania (hasta donde existió) implicaba una fuerte división entre las clases.

De este modo, el grado de enfrentamiento entre las clases en razón de la economía política fue muy intenso en Austria y Alemania, menor en Francia y Gran Bretaña, y menor aún en Estados Unidos. Es decir, unas clases medias con condiciones económicas muy parecidas establecieron relaciones de poder económico muy distintas con las clases por debajo de ellas, a causa de su diferente grado de inserción en la democracia de partidos.

2. Como he indicado, la educación produjo también cristalizaciones *nacionales* muy variadas, centradas en las redes regionales y religiosas. Este hecho posibilitó un abanico también muy diferente de alianzas interclasistas; por ejemplo, la alianza progresista entre los centralizadores seculares (Francia), o entre éstos y las minorías religiosas (Gran Bretaña), o la alianza antiestatista entre los obreros excluidos, los regionalistas y las religiones minoritarias (que no se materializó por completo en Alemania, pero cuya posibilidad afectó profundamente al nacionalismo). Tales cristalizaciones dominaron de hecho la política austriaca, produciendo entrelazamientos de clase, localidad, región y religión subvertidores del Estado.

3. Los nacionalismos anteriores a la guerra se diferenciaron entre sí tanto como las cristalizaciones *militaristas* de los distintos Esta-

dos. América practicó una política expansionista, pero nunca contra las grandes potencias. Gran Bretaña no deseaba otra cosa al principio que preservar la libertad de los mercados y defender el Imperio global que había conquistado, pero hubo de endurecer sus defensas contra el poder creciente de Alemania. Francia cambió la expansión colonial por la defensa de su propio territorio y el de sus vecinos ante la amenaza alemana. Aunque ninguna de las potencias del periodo se tenía por agresora, los regímenes de Austria y Alemania llegaron a la conclusión de que la mejor defensa era un buen ataque. El temor en unos casos a los nacionalismos fronterizos (Austria), y, en otros, a quedar aislados en un cerco (Alemania) generó una geopolítica agresiva. La única prueba del carácter irracional y paranoico de la clase media habría sido la aparición de un idéntico nacionalismo militarista en tan diferentes circunstancias geopolíticas, pero esto no se produjo porque la interacción de las tres cristalizaciones políticas con el conflicto de clase creó nacionalismos muy distintos.

La expansión imperial de los Estados Unidos durante el siglo XIX no implicaba un riesgo de guerra tal alto como el de las restantes potencias. Los Estados Unidos sólo hundieron la flota de madera española; su modesta y poco arriesgada intervención en Cuba, China y Filipinas apenas suscitó alguna movilización popular a favor o en contra del imperialismo. Los grupos nacionales de presión eran débiles y particularistas. Por otra parte, la dirección del imperialismo era asunto del poder presidencial y del apoyo de senadores y geoestrategas interesados, como el almirante Mahan, de unos cuantos magnates de la prensa, grupos de misioneros y, sobre todo, de ciertos sectores del mundo de los negocios con intereses en esas áreas geográficas. La oposición se componía de una variopinta colección de grupos con intereses comerciales antagónicos, los liberales, los racistas, preocupados por la mezcla con otras etnias, y los inmigrantes irlandeses y alemanes que habían huido del militarismo y las levas en sus propios países (Lasch, 1958; Healy, 1963, 1970; LaFeber, 1963; Beisner, 1975; Welch, 1979; véanse también los ensayos de Hollingsworth, 1983). Rystad (1975: 167) disiente en parte al subrayar el creciente antiimperialismo del partido demócrata durante el periodo. En todo caso, resulta difícil encontrar en América un nacionalismo político de clase media. Puesto que, como veremos más adelante, la educación estatal constituyó un factor esencial para la aparición del nacionalismo en otros países, la dispersión de los centros de enseñanza americanos y

su control por parte de la autoridad local pudieron impedir un desarrollo mayor de la ideología nacionalista.

En Gran Bretaña tampoco encontramos un nacionalismo mucho más agresivo que el estadounidense durante el siglo XIX. El Imperio estaba ya conquistado y las necesidades nacionales de defensa eran mínimas. La tenaz resistencia india se contenía por medio de ejércitos profesionales de pequeño tamaño, reforzados por pequeños contingentes de «nativos», tanto en la India como en otras partes del Imperio. El nacionalismo inglés respondía más a un firme sentimiento de identidad que de oposición (contando siempre con la peculiaridad de sus dobles identidades: inglesa-británica, escocesa-británica, etc.). Tanto Gran Bretaña como los Estados Unidos desarrollaron un nacionalismo idealizado y liberal, notoriamente pacífico. Gran Bretaña había extendido por el mundo la civilización, el Parlamento y la *Pax Britannica;* América, le había proporcionado la «ciudad de la colina» y el faro luminoso del «pueblo más libre de la tierra». Aunque ambas naciones habían demostrado una terrible crueldad contra los «nativos», las democracias de partidos pocas veces se distinguieron por atacar a las grandes potencias (en el capítulo 21 analizaré la creencia generalizada sobre el carácter pacífico de los Estados «liberales»).

El nacionalismo francés del siglo XIX demostró mayor agresividad, pero no dependía de la clase media. En realidad, *la grande (et bourgeoise) nation* había inventado un imperialismo popular, pero después de 1815 lamentó aquel ímpetu. La clase media se mantuvo relativamente indiferente al imperialismo de los régimenes monárquicos, de Luis Bonaparte y de los grupos económicos de presión que perseguían beneficios en el extranjero; luchaba, precisamente, por defender la república contra estas fuerzas. Con el éxito posterior a 1870, la nación de la clase media no perdió sus tendencias republicanas, seculares y predominantemente antimilitaristas. Destacó la lealtad de los profesionales y los empleados de carrera, ya que las instituciones educativas hacían gala de un firme republicanismo. En contraste, las organizaciones pequeño burguesas se desplazaron a la derecha a partir de la década de 1890, hacia un catolicismo social y un nacionalismo conservador, aunque no extremista (Nord, 1981). Pero en Francia, el nacionalismo fue una ideología contestada. Los funcionarios y los maestros formaban la esencia de lo «nacional», que no significaba otra cosa que la lealtad a la república. Desde la década de 1870, la educación entró en un proceso de secularización y homologación encaminado a inculcar las virtudes republicanas a todo el país

(Moody, 1978). En las ciudades francesas, grandes o pequeñas, el maestro de escuela personificaba la república, el patriotismo y los deberes cívicos seculares (Weber, 1976: 332 a 338; Singer, 1983), que no tenían ningún contenido agresivo; los libros de texto, donde los niños aprendían que la misión cultural de Francia era civilizar a las razas primitivas, manifestaban poca hostilidad contra las restantes potencias occidentales (Maingueneau, 1979).

La teoría de la paranoia ignora el éxito de la civilización liberal burguesa y el carácter ensalzador de sus nacionalismos: sentimental, moralista, romántico, pero poco agresivo en Gran Bretaña; afirmador de la libertad y de virilidad individualista en América; y esencialmente «moderno» y secular en Francia. Todas estas clases medias habían accedido a la ciudadanía plena, transformando las naciones de las clases dominantes en Estados-nación. Su sentido de la comunidad nacional no expresaba el fracaso de la burguesía, sino su éxito.

Los Estados Unidos mantuvieron el *statu quo* hasta la Primera Guerra Mundial, pero, hacia 1900, los sentimientos nacionales franceses y británicos desarrollaron un militarismo ligeramente superior, a causa de las aspiraciones alemanas. Los franceses recordaron la invasión y consiguiente derrota de 1870-1871. La derecha desplazó ahora a la izquierda en la vanguardia del patriotismo que aquélla había ocupado hasta la década de 1870, pero su carácter monárquico y clerical restó atractivo a su llamada al nacionalismo. Por otra parte, la clase media francesa se encontraba también dividida por lo que percibía como dos enemigos, la clase alta y la clase obrera. Su antipatía por el antiguo régimen provocó la alianza del partido radical con la izquierda para asegurarse el triunfo de la educación estatal y secular y el control republicano del ejército. Una vez lograda esta meta, inmediatamente después de 1900, los partidos burgueses se desplazaron a la derecha, coincidiendo con la revitalización de la amenaza alemana; pero este hecho no hizo más que trasladar el nacionalismo colonialista y global a la defensa local de la nación. Antes de la guerra, el nuevo patriotismo de los gobiernos franceses y de las facciones republicanas y radical-centristas, y su consiguiente aceptación de un rearme puramente defensivo ante la posibilidad de un ataque alemán, habían hecho desaparecer de la escena nacional a los partidos nacionalistas más agresivos (aunque conservaron su importancia en los ambientes universitarios). Numerosos patriotas franceses (con algún exceso de confianza) deseaban recuperar la Alsacia-Lorena, pero ningún político importante pregonaba un ataque contra Alemania (datos

tomados de Eugen Weber, 1968). Llegaron a compromisos sobre la economía política y la conscripción, justo a tiempo de realizar el esfuerzo defensivo de 1914. El nacionalismo francés de clase media y de clase obrera, lejos de poner en un aprieto al régimen, contribuyó a consolidarlo y lo salvó, gracias al heroísmo y al sacrificio de muchas vidas que dieron nueva savia al Estado-nación.

El imperialismo británico, seguro de sí mismo y más partidario del *laissez-faire,* mantuvo siempre una ideología liberal y notoriamente pacífica. Antes de 1880 era un imperialismo de estatuas y monumentos, con poca participación popular. Las escasas manifestaciones estaban organizadas por grupos humanitarios y religiosos adversarios de la política imperial (Eldridge, 1973), o bien en el contexto de la política de partidos o de grupos de presión con intereses económicos en el extranjero, o de la expansión del ejército. La muerte del general Gordon en el Sudán, en 1885, selló una nueva fase de la tenaz resistencia «nativa» y llevó a la calle las primeras grandes manifestaciones imperialistas. En la década de 1890, el imperialismo era «una panacea popular contra la depresión económica y el desempleo, un alivio de la inseguridad nacional y una garantía de grandeza futura», dice Robinson (1959: 180).

La ideología imperialista fue antes «antinativa» que antieuropea, pero llegó el momento en que Francia, y después Alemania, se convirtieron en objetivos. Tanto el imperialismo como «la exigencia de una mayor eficacia nacional» influyeron en ambos partidos, en el clima del darwinismo social del periodo. Los liberales imperialistas hacían hincapié en la construcción de una nación fuerte a través de la educación y la «salud» física y moral de la clase obrera; los conservadores, en el Imperio y el poder exterior. He mostrado en el capítulo 14 que todo ello canalizaba las intensas emociones de la familia y el «maternalismo» hacia la nación extensiva.

Después de 1900, el racismo desarrolló una ambivalencia peculiar. Antes había articulado una teoría de la superioridad europea (a veces mezclada con vulnerabilidad) sobre los pueblos «atrasados». El fenotipo físico definía la raza: la blanca dominaba a la amarilla, la negra y la cobriza. Aunque el racismo imperial había pervertido en gran medida los ideales de la Ilustración, no era menos transacional, pero el aumento de la densidad social, de las infraestructuras estatales y de la comunidad lingüística y también religiosa confirió al racismo una definición nacional, sobre todo entre las naciones reforzadoras del Estado (lo que, de momento, incluía también a Alemania). Los ideólo-

gos de la «raza» anglosajona, teutona, franca o eslava crearon una historia mítica de la descendencia común. En la década de 1900, los políticos británicos y los autores populares empleaban el término «raza» de forma rutinaria para referirse al pueblo británico, tanto al discutir los problemas del Imperio como en relación con la rivalidad económica con Alemania, e incluso con Estados Unidos. Así, el racismo no constituyó un fenómeno unitario, sino dividido, como lo había estado siempre Europa, entre la dimensión nacional y la transnacional.

Pero el paso de una concepción racial de la nación de uso común a un nacionalismo agresivo y casi racista no se dio con facilidad, por el contrario, encontró menos apoyos de los que habría encontrado el racismo imperial en la ciencia biológica contemporánea. En Gran Bretaña recibió a menudo el respaldo de los magnates de la prensa y de los grupos de presión derechista como la *Naval League,* la *National Service League,* la *Imperial Maritime League* y la *Primrose League.* Algunos historiadores sostienen que tales grupos de presión tenían arraigo en la clase media, aunque ninguno de ellos aporta pruebas reales de la composición de clase de sus miembros o activistas (Fieldhouse, 1973; Fest, 1981; Summers, 1981). Los *Officer Training Corps and Reserves,* los *Boy Scouts* y las organizaciones culturales a escala nacional crearon un ambiente más respetable, predominantemente de clase media en el que medraron los nacionalistas agresivos (Kennedy, 1980: 381 a 383). El estudio más reciente, debido a Coetzee (1990), responde sin duda a este modelo de «nacionalista de clase media», atemperado en su caso por la insuficiencia de pruebas. De hecho, los datos limitados de Coetzee sobre los orígenes de clase de los activistas de esos grupos de presión muestran un predominio de oficiales retirados del ejército, clérigos, periodistas y hombres de negocios con intereses materiales muy concretos. Mangan (1986) ha destacado que la propaganda imperial circulaba más por las escuelas públicas (es decir, privadas) a las que asistían los hijos del régimen, no los de la clase media. Cuando abordemos el nacionalismo alemán, mejor documentado, aportaré una interpretación distinta de la composición de los grupos de presión.

Price (1977) sostiene sin aportar pruebas que la patriotería fue un fenómeno de la clase media. De ahí que lo interprete como la consecuencia del pánico a la amenaza que representaba para su estatus la clase obrera en ascenso y la movilidad bloqueada. Por mi parte, he negado ya los fundamentos económicos de tal argumentación —las condiciones de la clase media baja fueron buenas durante el pe-

riodo—, al tiempo que acepto la realidad de la amenaza procedente de la clase obrera en el terreno de la economía política. Como cabía esperar, la clase media quiso defender *su* Estado, conservar los impuestos regresivos y mantener excluida a la clase obrera.

Pero en la democracia de partidos británica, el peso de la clase fue menor a causa de la cristalización nacional, que movilizó las regiones, las religiones y los sectores. El liderazgo conservador no sentía simpatías por la clase obrera y se oponía a los gastos sociales, por el contrario, era anglicano, agrario y comercial y partidario de los gastos militares. Así pues, la clase media británica se dividió. Sus bastiones industriales, inconformistas y célticos —así como muchos profesionales educados en el concepto humano y liberal que de sí misma tenía la Inglaterra victoriana— siguieron siendo liberales. Algunos se apuntaron al imperialismo liberal de un Rosebery o un Haldane, pero otros aceptaron el «nuevo liberalismo» (igualmente dominado por profesionales) y exigieron un entendimiento electoral con los laboristas, lo que produjo posteriores defecciones de los industriales y lo que algunos llaman la «alta clase media» hacia el conservadurismo. Pero con ello no acabaron las tensiones de clase dentro del partido. A pesar de que fue un auténtico partido redistributivo de izquierdas desde 1906, los «hombres de negocios inconformistas continuaron siendo la piedra angular del partido liberal en la Cámara de los Comunes» (Bernstein, 1986: 14; *cf.* Clarke, 1971; Emy, 1973; Wald, 1983). Las secciones liberales de la clase media quedaron aisladas del nacionalismo agresivo. Los grupos de presión nacionalistas que hemos mencionado antes mantuvieron estrechas relaciones con los círculos conservadores de derechas, pocos de ellos con el partido conservador oficial. Y, del mismo modo, los internacionalistas pacíficos se relacionaban con la izquierda liberal. Imperialistas y nacionalistas progresaban a medida que la actitud de Alemania parecía confirmar sus argumentaciones, pero en 1914 la mayoría estaban en la oposición, mientras que los pacifistas estaban en el gobierno liberal.

Naturalmente, el régimen británico tuvo que enfrentarse a un dilema ideológico: conservar el antiguo liberalismo moral y transnacional o reforzar el militarismo. Pero cabía una solución de compromiso, la de mantener una vigilancia *defensiva*, consistente en ir preparando las defensas para estar en condiciones de responder en caso de ataque. Tal era la idea de diplomáticos como Nicolson y Eyre Crowe y la de los dirigentes de ambos partidos. Todos estaban de acuerdo con los nacionalistas moderados en practicar una política de

firme defensa nacional. Así, ni el nacionalismo británico tuvo un contenido agresivo ni fue característico de la clase media, aunque tampoco de la clase obrera (véase el capítulo 21).

El 1914 el gobierno liberal se sentía más presionado por su propio pacifismo extremo que por los extremistas del nacionalismo. De haber estado en el gobierno, también los conservadores habrían experimentado la presión de sus nacionalistas (como en Alemania). La clase media británica mantuvo su lealtad a las cristalizaciones ambiguas de su Estado. Por mi parte, creo que los empleados de carrera estatales de alto nivel mantuvieron una lealtad «esquizofrénica», atrapados entre el liberalismo tradicional de su Estado y su nuevo imperialismo. Aunque no tengo pruebas evidentes, esta situación presentaría un paralelismo con la alemana, que detallaré enseguida, y lo mismo podríamos decir de la política interior que practicaron los empleados de carrera del Estado; muchos de ellos, atrapados en su imagen de un Estado-nación como única forma de compromiso y evolución pragmática, mediaron más en el conflicto de clase de lo que habrían deseado sus líderes (como veremos en el capítulo 17). Las clases medias más educadas y los empleados del Estado interiorizaron doctrinas estatales antagónicas, contra los deseos de sus jefes políticos. Sin embargo, cuando ambos partidos tuvieron que ir a la guerra, la clase media se unió y (dejando aparte un escaso número de pacifistas) vertió lealmente su sangre, promoviendo así la espiral descendente del Estado-nación británico.

En Alemania y Austria el entrelazamiento de las cristalizaciones monárquica, nacional y de clase generó un nacionalismo de clase media perturbador y desleal (véase el análisis de Austria en el capítulo 10). Puesto que la nacionalidad y la clase se entrelazaban en las lealtades al régimen, ninguna de ellas por separado bastó para apoyar a los Habsburgo. Sólo allí, a finales del siglo XIX, el régimen enfrentó deliberadamente unas con otras a muchas clases dominantes de las provincias, a las clases subordinadas y las naciones. Las lealtades nacionales y de clase respondieron a intereses calculados. Los grupos regionales de clase media raramente contaron con jerarquías claras en las que basar su lealtad y su conservadurismo. Como cabía deducir de lo que hemos visto en este capítulo, no hubo ninguna posibilidad de alianza entre la clase media austro-húngara y el proletariado socialista, pero sí se produjeron otras combinaciones. Algunos notables de la clase media (en especial, entre los profesionales checos y eslovacos y los burócratas de la administración local) lograron dominar los mo-

vimientos nacionalistas disidentes; otros (sobre todo, pequeño burgueses) se aliaron con los campesinos, los obreros no socialistas y la clase media baja de la disidencia social y populista cristiana (en especial, los checos y los austro-alemanes); otros aún (la mayor parte en Hungría y las provincias más atrasadas) establecieron una alianza con el antiguo régimen local en contra de los Habsburgo; y los industriales, financieros, gerentes de empresas y burócratas del Estado central (especialmente austro-alemanes o judíos) apoyaron a los Habsburgo y su agresión final. Un análisis de todas estas cuestiones ocuparía demasiadas páginas, pero la lealtad conservadora raramente encontró un objetivo apropiado. Los nacionalismos austro-húngaros de clase media, conservadores en parte, característicamente agresivos y, por lo general, subvertidores del Estado, condujeron a la creación de numerosos Estados-nación de nuevo cuño tras la derrota de la guerra.

La política alemana del «divide y vencerás» fue distinta, porque el régimen atrajo a la clase media a los bordes del Estado con el objetivo de dejar fuera a la clase trabajadora y las minorías étnicas, obligándola así a adoptar actitudes derechistas y hostiles a la clase obrera, y empujó a la clase media luterana del norte (y al campesinado) a una lealtad incondicional al Estado central, en tanto que los católicos del sur matenían su moderada deslealtad local y regional. Pero, al mismo tiempo, mantuvo a los partidos de la clase media fuera del corazón del Estado, que conservó su carácter capitalista y del antiguo régimen. Como en el caso de Austria, pero al contrario que los países liberales, los partidos de masas no controlaron el Estado. Así pues, aunque la clase media experimentaba fuertes sentimientos antisocialistas y predominantemente conservadores y estatistas, no tuvo una fuerte identificación con el régimen. Contribuyó también a esta autonomía su organización característicamente corporativista. La política de los *Mittelstand* (estados medios) fue a veces radical y siempre antiproletaria (Gellately, 1974; Winkler, 1976; Blackbourne, 1977; Kocka, 1980) y su autonomía recibió el respaldo de la política monárquica del «divide y vencerás», que contrarrestó a sus enemigos.

La influencia de los grupos de presión nacionalistas se dejó sentir a partir de 1900, a medida que crecía la sensación de cercamiento por parte de Alemania. Hacia 1911 la Sociedad Colonial, la Liga Panalemana, la Sociedad de las Marcas Orientales, la Liga Naval y la Liga de Defensa contaban con más miembros que los nacionalistas de otros países. Algunos grupos pequeños (asociaciones de veteranos, la Unión de Jóvenes Alemanes) constituían las mejores armas de propa-

ganda del régimen. Algunos (como la Sociedad de las Marcas Orientales) eran grupos vinculados a los *Junkers*, la corte y el ejército. Pero los más grandes e insistentes (la Liga Naval y la Liga Panalemana) se hicieron autónomos, populistas y agresivos, cuya actitud obligó al régimen y a los partidos a renunciar a la diplomacia conciliadora. Los conservadores y el partido liberal nacional, que antes habían despreciado ese nacionalismo, tuvieron que ceder ante su presión electoral (Eley, 1978, 1980, 1981).

Se ha descrito a estos grupos como típicos de la clase media a causa de la escasa representación de obreros y campesinos (Wehler, 1979; Eley, 1981). Sin embargo, los datos (en Eley, 1980: 61 a 67, 123 a 130, y Chickering, 1975: cuadros 5.1 a 5.12; *cf.* Kehr, 1977) permiten una precisión mayor.

El mayor de todos ellos fue la Liga Naval. Fundada por prósperos hombres de negocios, profesores y ex oficiales, cuyos dirigentes nacionales fueron siempre notables. De los veintiséis miembros de su Presídium entre 1900 y 1908, diez fueron grandes hombres de negocios; cinco, terratenientes de la aristocracia; nueve, antiguos oficiales del ejército y la armada; un profesor; y un funcionario retirado. Todos ellos, graduados universitarios. De los novecientos miembros de su rama de funcionarios de 1912, el 20 por 100 ocupaban altos cargos de gobierno (por lo general, alcaldes y *Landräte*); el 19 por 100 eran maestros; el 18 por 100, funcionarios de categoría media y baja (aunque como siempre en las estadísticas alemanas, estas categorías incluían a varios oficinistas del sector privado); el 11 por 100, pequeños burgueses; el 9 por 100, profesionales; el 8 por 100, terratenientes y ex oficiales militares; el 8 por 100, industriales y gerentes; más unos cuantos clérigos, artesanos y granjeros; y una práctica ausencia de obreros. Llama la atención la elevada representación de empleados estatales, que siendo del 2 al 3 por 100 de la población, constituían del 50 al 60 por 100 de los funcionarios de la Liga Naval (incluyendo a los maestros y a unos cuantos clérigos protestantes), y sorprende también el elevado nivel de su educación, ya que del 1 por 100 de la población con estudios universitarios, ellos representaban el 61 por 100 de los líderes locales.

La Liga Panalemana tenía una composición similar: de los casi 2.500 dirigentes locales, muy pocos eran trabajadores, campesinos o artesanos. Un 66 por 100 había recibido educación universitaria, y un 54 por 100 eran empleados del Estado (la mitad de ellos maestros). Los activistas más antiguos presentaban un sesgo similar; de ellos, el

77 por 100 habían frecuentado una institución de nivel universitario. Chickering muestra que la mayor parte de los funcionarios que militaban en los grupos de presión nacionalistas procedían de la zonas medias-altas de la administración, y muy pocos de los niveles más altos.

La Sociedad de las Marcas Orientales, concentrada en el área más rural de la Prusia oriental, contaba con un número mayor de campesinos y artesanos; cada uno de estos grupos aportaba un 20 por 100 de los miembros. Pero incluso allí predominaban los maestros y los funcionarios, como se desprende de una muestra de veintiséis ramas de la sociedad en la que alcanzaron casi el 50 por 100 de 1894 a 1900, aunque la proporción aumentó después. Sólo los maestros suponían el 10 y el 14 por 100 de los miembros, el 22 por 100 de los funcionarios de la sociedad y el 25 por 100 de su comité general; otros funcionarios ocupaban más del 30 por 100 del comité. En la muestra de los dirigentes locales que aporta Chickering, el 74 por 100 de ellos habían frecuentado una institución de nivel universitario.

Sobre la composición de los miembros ordinarias de las otras organizaciones sólo se han establecido conjeturas. Eley cree que la Liga Naval tenía una alta representación pequeño burguesa, pero no dice por qué; Chickering afirma que la Liga Panalemana estaba formada por miembros de la clase media, en especial, de los niveles más educados y del sector público. Todos los grupos de presión pertenecían a la Alemania del norte y a las zonas luteranas. El campo y la pequeña burguesía católica apenas se vieron afectados por el imperialismo social (Blackbourne, 1980: 238). El hecho de que el luteranismo fuera la religión oficial de Prusia, explica su tendencia al estatismo.

El estudio de Chickering (1975: 73 a 76) sobre el movimiento pacifista permite establecer un interesante contraste con los nacionalistas radicales. La mayor parte de los defensores de la paz procedían de las «clases medias y medias-bajas no rurales», pero había también algunos comerciantes y, sobre todo, un gran número de empresarios (por lo general, con intereses en el extranjero), seguidos de maestros de enseñanza primaria y profesionales. Muy al contrario de lo que pretenden las teorías basadas en el pánico a la pérdida de estatus, la pequeña burguesía fue mayoritariamente pacifista. Un tercio de los miembros eran mujeres, mientras que los grupos de presión nacionalistas eran predominantemente masculinos. Chickering llega a la conclusión de que los pacifistas eran los más apartados de las principales

instituciones del Estado nacional, es decir, de la burocracia, el ejército y las universidades.

La educación estatal era oficialmente nacionalista e inculcaba en las escuelas un sentido militar de la nación. Como decía el káiser en una conferencia dirigida a los educadores: «Busco soldados. Lo que queremos es una generación robusta que nos provea tanto de dirigentes intelectuales como de oficiales de la nación» (Albisetti, 1989: 3), aunque no sabemos con exactitud si le obedecieron todos los maestros. En muchas escuelas (especialmente en Baviera) los católicos se resistieron, y el mensaje no pareció cuajar entre los discípulos de la clase obrera, pero en las escuelas secundarias del Estado los maestros sí lo intentaron y obtuvieron un gran éxito entre sus discípulos de clase media. Con todo, lo que despertaba el entusiasmo infantil no era tanto el régimen o el káiser como un *Volk* y un *Reich* abstractos (Mosse, 1964; Albisetti, 1983; Schleunes, 1989). La influencia sobre las universidades fue tal que desapareció el pensamiento liberal del siglo XIX, lo que supuso la decadencia del antiguo ideal de *Bildung* humanista y cultivada. Los académicos se hicieron nacionalistas, y aunque pocos se dedicaban a la política, la mayor parte de ellos eran de derechas. Aumentaron las sociedades estudiantiles de carácter «monárquico-conservador», el *Korps,* entre otras organizaciones nacionalistas. El liberalismo desaparecía y el socialismo tuvo un escaso impacto. «Lo que estimuló el "renacer espiritual" de la juventud universitaria no fue el régimen sino dos lemas: *deutschnational* y *Weltpolitik*» (Jarausch, 1982: 365), es decir, la convicción de que los veinte millones de alemanes que vivían en el extranjero justificaban la expansión del *Reich.* De este modo, la educación estatal no se limitó a socializar la lealtad en favor del régimen, sino que originó un nacionalismo estatista más abstracto.

No fue, pues, la pequeña burguesía o la clase media, sino los empleados gubernamentales —los más dependientes del Estado— y los luteranos de elevada educación —los más socializados en las ideologías estatistas— quienes se convirtieron en nacionalistas agresivos. Chickering (1984: 107, 111) sostiene que estos hombres fueron los guardianes culturales del *Kaiserreich,* pero es muy posible que fueran mucho más allá del káiser. La pequeña burguesía no acató mayoritariamente el nacionalismo. Ni los artesanos, campesinos y modestos hombres de negocios que componían el *Mittelstand* antiguo, ni los trabajadores de cuello blanco del nuevo *Mittelstand* estuvieron bien representados en los grupos nacionalistas.

Esto dio una contextura distinta al nacionalismo, hasta el punto de que quizás convendría denominarlo estatismo. Es más, el espíritu de aquellos movimientos se adapta pocas veces a la imagen negativa que han creado las teorías del miedo paranoico a la pérdida de estatus; lo que realmente encarnaban era una exagerada lealtad estatista de gentes que estaban dentro del Estado pero que no pertenecían al núcleo del régimen. Las áreas medias-altas estaban «colonizadas» por un grupo particularista de presión, que exigía al régimen la realización de lo que había determinado era su verdadero espíritu, y que las miserias de la práctica política, es decir, el «divide y vencerás», la diplomacia y las limitaciones del poder del káiser, habían subvertido. Este tipo de lealtad no se consideraba a sí misma ansiosa o reaccionaria, sino moderna y positiva, con una imagen de futuro del auténtico Estado-nación movilizado, unido y solidario como ningún otro régimen (y, desde luego, ninguna dinastía real) lo había estado antes. Judíos, católicos, socialistas y minorías étnicas intrigaban para destruir la unidad de la nación, pero si el régimen entregaba su liderazgo a la auténtica nación, ésta se encargaría de arrojarlos al cubo de basura de la historia. Pese a todo, no sería adecuado cargar a estos nacionalistas con el peso de los acontecimientos posteriores; la mayoría no tenía intención de levantar la mano contra los *Reichsfeinde*. Pero cuando cayó el régimen en 1918 y sus enemigos se hicieron más fuertes en Weimar, los sucesores de aquellos nacionalistas —ahora con más apoyo capitalista y rural, aunque igualmente luteranos y empleados estatales— se volvieron muy peligrosos.

Entre todas estas variantes, tal vez existe un modelo común de nacionalismo, por lo menos en los casos británico, alemán y francés, según el cual se trata de un fenómeno menos relacionado con la clase media y más específicamente estatista de lo que se ha sostenido. En los asuntos relacionados con la clase, las tres fracciones de la clase media demostraron su lealtad al régimen, pero cuando las distintas identidades regionales y religiosas afectaron a su postura respecto a la cuestión nacional desarrollaron políticas distintas. Y también influyó el propio carácter del régimen. Los nacionalismos exageraron las preferencias del régimen, pero incluso en Alemania no hicieron otra cosa que pedir a un antiguo régimen que ya era notoriamente agresivo que dejara la retórica a un lado y se hiciera más populista. En Francia y Gran Bretaña produjeron varias facciones distintas, encarnadas por diferentes partidos que sólo se unieron ante la amenaza exterior. Austria y los Estados Unidos desarrollaron variantes únicas, una

contra el Estado, otra aún no articulada por la geopolítica. Las variaciones no se deben a las relaciones directas de producción, que apenas difirieron de un país a otro, sino a los diferentes cruces de la ciudadanía política e ideológica. El nacionalismo fue más político que económico, y la política introdujo en el Estado facciones que debilitaron «su» cohesión. En el capítulo 21 comprobaremos hasta qué punto fue significativo este fenómeno en las causas de la Primera Guerra Mundial.

Conclusión

En la sociedad capitalista industrial ha existido durante casi cien años una clase media. Sólo dos de estos grupos medios se proletarizaron, pero ninguno de ellos produjo agitaciones sociales. La mayoría de los artesanos se proletarizaron tan pronto y con tanta rapidez que apenas pudieron ejercer alguna influencia sobre esta clase. Aunque algunos empleos técnicos o relacionados con las oficinas o las ventas y sin perspectivas de carrera decayeron al nivel de los trabajadores manuales, pocas de las mujeres que los ejercían en número mayoritario lo vivieron como un proceso de proletarización. Si los trabajadores de cuello blanco de nivel bajo participaron en el movimiento obrero menos que los trabajadores manuales no se debió a que tuvieran una conciencia de estatus propia de la clase media, sino a los tres factores que redujeron también la participación entre los trabajadores manuales: la alta proporción de mujeres, el predominio de las organizaciones laborales de pequeño tamaño y su localización en zonas dominadas por la clase media. En una palabra, la clase media no se proletarizó, y la apariencia de una «disgregación» responde sobre todo a las diferencias de género.

Esta clase, dominada por los hombres, tenía tres fracciones, cada una de ellas definida por unas relaciones determinadas de producción: la pequeña burguesía, los empleados de carrera en las empresas o la burocracia y los profesionales. Las tres fracciones compartían aspectos difusos de los Estados-nación capitalistas, sobre todo en el terreno económico: la participación en los niveles medios de un empleo segmental y jerarquizado y en las relaciones de mercado, la señal distintiva del consumo privilegiado y la posibilidad de convertir la renta en pequeñas inversiones de capital. Pero en este periodo compartieron también una ciudadanía ideológica que vinculaba la educación es-

tatal a los derechos del empleo y una ciudadanía política que negaba los derechos de sus inferiores. Si el capital gobernó las sociedades civiles nacionales y los Estados-nación, la clase media abasteció el nivel subalterno de su personal. Donde esta alianza se encontraba institucionalizada en 1914, como en las tres democracias de partidos, no se produjeron rebeliones de clase. La ciudadanía política y social de la clase obrera se institucionalizó entonces sobre el modelo de la ciudadanía nacional de la clase media.

La clase media se ha mantenido generalmente leal a la clase capitalista en su lucha contra los obreros. En ninguno de los países aquí examinados se produjo la alianza proletaria que han concebido muchos marxistas. Sólo se aproximaron a ello cuando pudieron aliarse sobre la base de cristalizaciones políticas no relacionadas con la clase, como la región o la religión. En los próximos capítulos veremos cómo afrontaron los campesinos y los obreros el conservadurismo de la clase media que se oponía a sus metas, aunque no me gustaría caer en los mismos errores que critico, por ejemplo, el de estudiar a la clase media sólo en relación con el capital y los obreros (y campesinos). La clase media no se puede reducir a un conjunto de meros secuaces del capitalismo y el régimen. A comienzos del siglo XX, fue también el pilar del Estado-nación. Por otra parte, dos subfracciones —los empleados de carrera estatales y los profesionales de elevada educación— formaron el grueso de los nacionalismos con distintos grados de estatismo.

En Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos hubo pocos socialistas de clase media (hasta la expansión del empleo estatal que tuvo lugar a mediados del siglo XX), por el contrario, abundaron las concepciones, a veces enfrentadas, del Estado-nación, desde el nacionalismo conservador (en parte defensivo) al pacifismo liberal. Las clases medias alemanas y austro-húngaras, en especial los más educados y los empleados de carrera estatales, desarrollaron un nacionalismo más abstracto, autónomo y agresivo, capaz de imprimir un giro dramático al régimen gobernante, que se hizo realidad en Austria-Hungría. En cuanto a Alemania, la exagerada lealtad estatista, ya incómoda con el régimen, se convirtió en un hecho revolucionario en el espacio de veinte años. La Primera Guerra Mundial acrecentó la construcción nacional en los países liberales e intensificó los conflictos sobre el significado del concepto de nación en otros países. Los Estados-nación y las naciones demostraron ser tan decisivos como el capitalismo y las clases para la estructura de la civilización del siglo XX, que si bien

se nutrió en parte de la clase media, debió a las fracciones más estatistas de ésta algunos de sus acontecimientos más intensos y devastadores.

Apareció una clase media con una relación característica con los recursos del poder, con sus propias organizaciones y su conciencia colectiva, una relación que podemos resumir mediante una doble fórmula «impura»: la participación segmental en las zonas medias de organizaciones generadas por los circuitos difusos del capital y la participación, más independiente y variada, en el Estado-nación autoritario. Una vez más, el entrelazamiento del capitalismo difuso con los Estados autoritarios configuró el mundo moderno.

Bibliografía

Abercrombie, N., y J. Urry, 1983: *Capital, Labour and the Middle Classes.* Londres: Allen & Unwin.

Albisetti, J. 1983: *Secondary School Reform in Imperial Germany.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Armstrong, W. A. 1966: «Social structure from the early census returns». En *An Introduction to English Historical Demography,* ed. E. A. Wrigley. Londres: Weidenfeld & Nicolson.

Aronowitz, S. 1979: «The professional-managerial class or middle strata?». En *Between Labor and Capital,* ed. P. Walker. Boston: South End Press.

Bairoch, P. *et al.* 1968: *The Working Population and Its Structure.* Bruselas: Éditions de l'Institut de Sociologie de l'Université Libre (en inglés y francés).

Bechhofer, F., y B. Elliott, 1976: «Persistence and change: the *petite bourgeoisie* in the industrial society». *European Journal of Sociology,* 17.

Beisner, R. 1975: *From the Old Diplomacy to the New, 1865-1900.* Arlington Heights, Il.: Harlan Davidson.

Bell, C. 1969: *Middle Class Families.* Londres: Routledge & Kegan Paul.

Berger, S. 1981: «The uses of the traditional sector in Italy». En *The Petite Bourgeoisie: Comparative Studies of the Uneasy Stratum,* ed. F. Bechhofer y B. Elliott. Londres: Macmillan.

Berle, A., y G. Means, 1932: *The Modern Corporation and Private Property.* Nueva York: Macmillan.

Bernstein, G. 1986: *Liberalism and Liberal Politics in Edwardian England.* Boston: Allen & Unwin.

Bertaux, D., e I. Bertaux-Wiame, 1981: «Artisanal bakery in France: how it lives and why it survives». En *The Petite Bourgeoisie: Comparative Stu-*

dies of the Uneasy Stratum, ed. F. Bechhofer y B. Elliott. Londres: Macmillan.
Best, G. 1979: *Mid-Victorian Britain.* Londres: Fontana.
Blackbourn, D. 1977: «The Mittelstand in German society and politics, 1871-1914». *Social History,* núm. 4.
Blumin, S. 1989: *The Emergence of the Middle Class. Social Experience in the American City, 1760-1900.* Cambridge: Cambridge University Press.
Booth, C. 1886: «On occupations of the people of the United Kingdom, 1801-81». *Journal of the Statistical Society,* 49.
Bruchey, S. 1981: «Remarques complétant les conclusions générales» [y] «États Unis». En Commission International d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, *Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIXe et XXe Siècles,* 2 vols. París.
Burnham, J. 1942: *The Managerial Revolution.* Londres: Putnam.
Cain, M. 1983: «The general practice lawyer and client: towards a radical conception». En *The Sociology of the Professions,* ed. R. Dingwall y P. Lewis. Londres: Macmillan.
Carchedi, G. 1977: *On the Economic Identification of Social Classes.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Chandler, A. D., Jr. 1977: *The Visible Hand.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press. [Ed. cast.: *La mano visible.* Madrid, Ministerio de Trabajo y S.S., 1988.]
Chapman, S. 1981: «Royaume-Uni». En Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, *Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIXe et XXe Siècles.* 2 vols. París.
Chickering, R. 1975: *Imperial Germany and a World Without War.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
— 1984: *We Men Who Feel Most German: A Cultural Study of the PanGerman League, 1886-1914.* Boston: Allen & Unwin.
Clarke, P. 1971: *Lancashire and the New Liberalism.* Cambridge: Cambridge University Press.
Coetzee, F. 1990: *For Party or Country: Nationalism and the Dilemmas of Popular Conservatism in Edwardian England.* Nueva York: Oxford University Press.
Collins, R. 1979: *The Credential Society.* Nueva York: Academic Press. [Ed. cast.: *La sociedad credencialista.* Torrejón de Ardoz, Akal, 1988.]
Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, 1981: *Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIXe et XXe Siècles,* 2 vols. París.
Crew, D. 1973: «Definitions of modernity: social mobility in a German town, 1880-1901». *Journal of Social History, 7.*
— 1979: *Town in the Ruhr: A Social History of Bochum, 1860-1914.* Nueva York: Columbia University Press.

Crossick, G. 1977: «The emergence of the lower middle class in Britain: a discussion». En *The Lower Middle Class in Britain, 1870-1914*, ed. G. Crossick. Londres: Croom Helm.

Cunningham, H. 1971: «Jingoism in 1877-88». *Victorian Studies*, 14.

Dahrendorf, R. 1959: *Class and Class Conflict in Industrial Society.* Londres: Routledge & Kegan Paul. [Ed. cast.: *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial.* Madrid, Rialp, 1979.]

— 1969: «The service class». En *Industrial Man*, ed. T. Burns. Harmondsworth: Penguin Books.

Ehrenreich, B., y J. Ehrenreich, 1979: «The profession-managerial class». En *Between Labor and Capital*, ed. P. Walker. Boston: South End Press.

Eldridge, G. C. 1973: *England's Mission.* Londres: Macmillan.

Eley, G. 1978: «The Wilhelmine Right: how it changed». En *Society and Politics in Wilhelmine Germany*, ed. R. J. Evans. Londres: Croom Helm.

— 1980: *Reshaping the German Right.* New Haven, Conn.: Yale University Press.

— 1981: «Some thoughts on the nationalist pressure groups in Imperial Germany». En *Nationalist and Racialist Movements in Britain and Germany Before 1914*, ed. P. Kennedy y A. Nicholls. Londres: Macmillan.

Emy, H. V. 1973: *Liberals, Radicals and Social Politics, 1892-1914.* Cambridge: Cambridge University Press.

Fest, W. 1981: «Jingoism and xenophobia in the electioneering strategies of British ruling elites before 1914». En *Nationalist and Racialist Movements in Britain and Germany Before 1914*, ed. P. Kennedy y A. Nicholls. Londres: Macmillan.

Fieldhouse, D. K. 1973: *Economics and Empire, 1830-1914.* Londres: Weidenfeld & Nicolson. [Ed. cast.: *Economía e imperio: la expansión de Europa (1830-1914).* Madrid, Siglo XXI, 1990.]

Freidson, E. 1970: *Profession of Medicine.* Nueva York: Dodd, Mead.

— 1975: *Doctoring Together: A Study of Professional Social Control.* Nueva York: Elsevier.

Gaillard, J. 1981: «France». En Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, *Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIXe et XXe Siècles*, 2 vols. París.

Galanter, M. 1983: «Mega-law and mega-lawyering in the contemporary United States». En *The Sociology of Professions*, ed. R. Dingwall y P. Lewis. Londres: Macmillan.

Galbraith, J. K. 1985: *The New Industrial State*, 4.ª ed. Boston: Houghton Mifflin. [Ed. cast.: *El nuevo estado industrial.* Barcelona, Ariel, 1984.]

Geiger, T. 1969: «Class society in the melting pot». En *Structured Social Inequality*, ed. C. S. Heller. Nueva York: Macmillan.

Gellately, R. 1974: *The Politics of Economic Despair: Shopkeepers and German Politics, 1890-1914.* Londres: Sage.

Giddens, A. 1973: *The Class Structure of the Advanced Societies.* Londres: Hutchinson.
Gildea, R. 1980: «Education and the classes Moyennes in the nineteenth century». En *The Making of Frenchmen,* ed. D. Baker y P. Harrigan. Waterloo, Ont.: Historical Reflections Press.
Goldthorpe, J. H. 1982: «On the service class, its formation and future». En *Social Class and the Division of Labour,* ed. A. Giddens y G. Mackenzie. Cambridge: Cambridge University Press.
Goode, W. J. 1969: «The theoretical limits of professionalization». En *The Semi-Professions and Their Organization,* ed. A. Etzioni. Nueva York: Free Press.
Gray, R. Q. 1977: «Religion, culture and social class in late nineteenth and early twentieth century Edinburgh». En *The Lower Middle Class in Britain, 1870-1914,* ed. G. Crossick. Londres: Croom Helm.
Grossmith, G., y W. Grossmith, 1892 y 1965: *The Diary of a Nobody.* Harmondsworth: Penguin Books.
Halsey, A. H. *et al.* 1980: *Origins and Destinations.* Oxford: Clarendon Press.
Harrigan, P. 1975: «Secondary education and the professions in France during the Second Empire». *Comparative Studies in Society and History,* 17.
Harrison, J. F. C. 1971: *The Early Victorians, 1832-1851.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Hart, N. 1985: *The Sociology of Health and Medicine.* Ormskirk, Lancs.: Causeway Press.
Haupt, H.-G. 1981: «République Fédérale Allemande». En Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, *Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIXe et XXe Siècles,* 2 vols. París.
Healy, D. F. 1963: *The United States in Cuba, 1898-1902.* Madison: University of Wisconsin Press.
— 1970: *U.S. Expansionism: The Imperialist Urge in the 1890s.* Madison: University of Wisconsin Press.
Hobsbawm, E. 1989: *The Age of Empire, 1875-1914.* Nueva York: Vintage. [Ed. cast.: *La era del imperio.* Barcelona, Labor, 1990.]
— 1990: *Nations and Nationalism Since 1780.* Cambridge: Cambridge University Press. [Ed. cast.: *Naciones y nacionalismo desde 1780.* Barcelona, Crítica, 1991.]
Hollingsworth, J. R. (ed.), 1983: *American Expansion in the Late Nineteenth Century: Colonialist or Anticolonialist?* Malabar, Fla.: Krieger.
Howard, M. 1970: «Reflections on the First World War». En *Studies in War and Peace.* Londres: Temple Smith.
Hurt, J. S. 1979: *Elementary Schooling and the Working Classes, 1860-1918.* Londres: Routledge & Kegan Paul.

Illich, I. 1977: *Disabling Professions.* Londres: M. Boyars.
Jaeger, C. 1982: *Artisanat et Capitalisme.* París: Payot.
Jarausch, K. H. 1982: *Students, Society, and Politics in Imperial Germany: The Rise of Academic Illiberalism.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
— 1990: «The German professions in history and theory». En *German Professions, 1800-1950,* ed. R. Cocks y K. H. Jarausch. Oxford: Oxford University Press.
Johnson, T. J. 1972: *Professions and Power.* Londres: Macmillan.
Joll, J. 1984: *The Origins of the First World War.* Londres: Longman.
Kaelble, H. 1981: «Educational opportunities and government policies in Europe in the period of industrialization». En *The Development of Welfare States in Europe and America,* ed. P. Flora y A. J. Heidenheimer. New Brunswick, N. J.: Transaction Books.
Kaufhold, K. H. 1981: «République Fédérale Allemande». En Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, *Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIXe et XXe Siècles,* 2 vols. París.
Kehr, E. 1977: *Economic Interest, Militarism and Foreign Policy.* Berkeley: University of California Press.
Kennedy, P. 1980: *The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860-1914.* Londres: Allen & Unwin.
Kiyonari, T. T. 1981: «Japan». En la Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, *Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIXe et XXe Siècles,* 2 vols. París.
Klingender, F. D. 1935: *The Condition of Clerical Labour in Britain.* Londres: M. Lawrence.
Kocka, J. 1980: *White-Collar Workers in America, 1890-1940.* Londres: Sage.
Krug, E. 1964: *The Shaping of the American High School.* Nueva York: Harper & Row.
Kurgan van Hentenryk, G. 1981: «Belgique». En Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, *Petite Entreprise et Croissance Industrielle Dans le Monde Aux XIXe et XXe Siècles,* 2 vols. París.
LaFeber, W. 1963: *The New Empire: An Interpretation of American Expansion, 1860-1898.* Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.
Lasch, C. 1958: «The anti-imperialists, the Philippines, and the inequality of man». *Journal of Southern History,* 24.
Lash, S., y J. Urry, 1987: *The End of Organized Capitalism.* Oxford: Blackwell.
Little, A., y J. Westergaard, 1964: «The trend of class differentials in educational opportunity in England and Wales». *British Journal of Sociology,* 15.

Lockwood, D. 1958: *The Blackcoated Worker.* Londres: Allen & Unwin. [Ed. cast.: *El trabajador de la clase media.* Madrid, Aguilar, 1962.]
Mackenzie, W. 1979: *Power and Responsability in Health Care.* Oxford: Oxford University Press.
McKeown, T. 1976: *The Modern Rise of Population.* Londres: Arnold.
Maingueneau, D. 1979: *Les Livres d'école de la République, 1870-1914.* París: Sycomore.
Mangan, J. 1986: «"The grit of our forefathers": invented traditions, propaganda and imperialismo». En *Imperialism and Popular Culture.* ed. J. MacKenzie. Manchester: Manchester University Press.
Mayer, A. J. 1975: «The lower middle class as historical problem». *Journal of Modern History,* 47.
Middleton, N., y S. Weitzman, 1976: *A Place for Everyone.* Londres: Gollancz.
Mills, C. W. 1953: *White Collar.* Nueva York: Oxford University Press. [Ed. cast.: *White-collar. Las clases medias en Norteamérica.* Madrid, Aguilar, 1973.]
Moody, J. 1978: *French Education Since Napoleon.* Siracusa, N. Y.: Syracuse University Press.
Moore, D. C. 1976: *The Politics of Deference.* Hassocks, Sussex: Harvester.
Mosse, G. L. 1964: *The Crisis of German Ideology.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Muller, D. 1987: «The process of systematisation: the case of German secondary education». En *The Rise of the Modern Educational System,* ed. D. Muller, F. Ringer, y B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.
Musgrove, F. 1959: «Middle-class education and employment in the nineteenth century». *Economic History Review,* 12.
Nichols, T. 1969: *Ownership, Control and Ideology.* Londres: Allen & Unwin.
Nikolaou, K. 1978: *Inter-size Efficiency Differentials in Greek Manufacturing.* Athens: Center of Planning and Economic Research.
Nord, P. 1981: «Le mouvement des petits commerçants et la politique en France de 1888 à 1914». *Mouvement Social,* 114.
Parkin, F. 1979: *Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique.* Londres: Tavistock. [Ed. cast.: *Marxismo y teoría de clases.* Madrid, Espasa-Calpe, 1984.]
Perkin, H. 1961: «Middle-class education and employment in the nineteenth century: a critical note». *Economic History Review,* 14.
Poulantzas, N. 1975: *Classes in Contemporary Capitalism.* Londres: New Left Books. [Ed. cast.: *Clases sociales en el capitalismo actual.* Madrid, Siglo XXI, 1977.]
Prais, S. J. 1981: *The Evolution of Giant Firms in Britain.* Cambridge: Cambridge University Press.
Price, R. N. 1977: «Society, status and jingoism: the social roots of lower

middle class patriotism, 1870-1900». En *The Lower Middle Class in Britain, 1870-1914*, ed. G. Crossick. Londres: Croom Helm.
Pryor, F. L. 1973: *Property and Industrial Organization in Communist and Capitalist Nations.* Bloomington: Indiana University Press.
Reeder, D. 1987: «The reconstruction of secondary education in England, 1869-1920». En *The Rise of the Modern Educational System*, ed. D. Muller, F. Ringer, y B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.
Ringer, F. 1979: *Education and Society in Modern Europe.* Bloomington: Indana University Press.
— 1987: «On segmentation in modern European educational systems: the case of French secondary education, 1865-1920». En *The Rise of the Modern Educational System*, ed. D. Muller, F. Ringer, y B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.
Robinson, R. E., 1959: «Imperial problems in British politics, 1880-95». En *The Cambridge History of the British Empire.* Vol. III, ed. E. A. Benians *et al.* Cambridge: Cambridge University Press.
Routh, B. 1965: *Occupation and Pay in Great Britain 1906-1960.* Cambridge: Cambridge University Press.
— 1980: *Occupation and Pay in Great Britain, 1906-1979.* Londres: Macmillan.
Rubinson, R. 1986: «Class formation, politics, and institutions: schooling in the United States». *American Journal of Sociology*, 92.
Rueschemeyer, D. 1973: *Lawyers and Their Society: A Comparative Study of the Legal Profession in Germany and in the United States.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Ryan, M. 1981: *Cradle of the Middle Class: The Family in Oneida County, New York, 1790-1865.* Cambridge: Cambridge University Press.
Rystad, G. 1975: *Ambiguous Imperialism: American Foreign Policy and Domestic Politics at the Turn of the Century.* Estocolmo: Scandinavian University Books.
Schleunes, K. 1989: *Schooling and Society: The Politics of Education in Prussia and Bavaria, 1750-1900.* Oxford: Berg.
Scott, J. 1979: *Corporations, Classes and Capitalism.* Londres: Hutchinson.
— 1982: *The Upper Classes. Property and Privilege in Britain.* Londres: Macmillan.
Simon, B. 1987: «Systematisation and segmentation in education: the case of England». En *The Rise of the Modern Educational System*, ed. D. Muller, F. Ringer, y B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.
Singer, B. 1983: *Village Notables in Nineteenth-Century France: Priests, Mayors, Schoolmasters.* Albany: State University of New York Press.
Smith, R. J. 1969: «Education, society and literacy: Nottinghamshire in the mid-nineteenth century». *University of Birmingham Historical Journal*, 12.
Steedman, H. 1987: «Defining institutions: the endowed grammar schools

and the systematisation of English secondary education». En *The Rise of the Modern Educational System*, ed. D. Muller, F. Ringer, y B. Simon. Cambridge: Cambridge University Press.

Stewart, A. *et al.* 1980: *Social Stratification and Occupations.* Londres: Macmillan.

Summers, A. 1981: «The character of Edwardian nationalism: three popular leagues». En *Nationalism and Racialist Movements in Britain Before 1941*, ed. P. Kennedy y A. Nicholls. Londres: Macmillan.

Sutherland, G. 1971: *Elementary Education in the Nineteenth Century.* Londres: Macmillan.

Tholfsen, T. 1976: *Working Class Radicalism in Mid-Victorian England.* Londres: Croom Helm.

Waddington, I. 1977: «General practitioners and consultants in early nineteenth century England: the sociology of an inter-professional conflict». En *Health Care and Popular Medicine in Nineteenth Century England*, ed. J. Woodward y D. Richards. Londres: Croom Helm.

Wald, K. 1983: *Crosses on the Ballot: Patterns of British Voter Alignment Since 1885.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Weber, E. 1968: *The Nationalist Revival in France, 1905-1914.* Berkeley: University of California Press.

— 1976: *Peasants Into Frenchmen.* Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Wehler, H.-U. 1979: «Introduction to imperialism». En *Conflict and Stability in Europe*, ed. C. Emsley. Londres: Croom Helm.

Weiss, L. 1988: *Creating Capitalism: The State and Small Business Since 1945.* Oxford: Blackwell.

Welch, R., Jr. 1979: *Response to Imperialism: The United States and the Philippine-American War.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Wertheimer, M. 1924: *The Pan-German Leage 1890-1914.* Nueva York: Columbia University Press.

Whyte, W. M. 1956: *The Organization Man.* Nueva York: Simon & Schuster.

Winkler, H. A. 1976: «From social protectionism to National Socialism: the German small-business movement in comparative perspective». *Journal of Modern History*, 48.

Wright, E. O. 1985: *Classes.* Londres: Verso.

Capítulo 17
LA LUCHA DE CLASES DURANTE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 1880-1914: I. GRAN BRETAÑA

La Segunda Revolución Industrial

De 1880 a 1914 la mayoría de los países occidentales experimentaron el crecimiento económico más rápido de su historia (véanse los cuadros 8.2 y 8.4). La transformación de la agricultura produjo los mayores índices de emigración a las ciudades y países de ultramar. Con la «Segunda Revolución Industrial» apareció el gran capital y nacieron una ciencia y una tecnología complejas, aplicadas sobre todo a las industrias del hierro y el acero, el metal y la química. Gracias al ferrocarril, la distribución de productos industriales y agrarios abarcó la totalidad del territorio nacional, al tiempo que los barcos de vapor transportaban mercancías por todo el mundo. La banca y los mercados de valores canalizaron los ahorros hacia la inversión global, cuyos beneficios fomentaron el consumo. De esta forma, la segunda revolución facilitó la integración de las distintas economías, aunque su doble carácter nacional e internacional introdujo factores de ambigüedad en el conjunto.

Esta segunda revolución del poder económico cambió la sociedad. Los poderes *colectivos* se transformaron cualitativamente. En todo Occidente se elevaron los niveles de vida, manteniéndose cons-

tantes por encima de la subsistencia. El resultado fue un aumento rápido y espectacular de la esperanza de vida, cifrada en cerca de 40 años en 1870 —lo que debió de representar sólo el punto más alto de otro ciclo histórico maltusiano— y en casi 70 hacia 1950. La esperanza de vida de las mujeres superó la de los hombres. En todas las sociedades se desencadenó un proceso de industrialización y urbanización. Estamos, en definitiva, ante el cambio social más profundo que ha conocido la historia, producido por la revolución de las relaciones del poder económico propia de la fase industrial del capitalismo, lo que explica, en parte, el residuo de determinismo económico que presentan nuestras actuales teorías.

La revolución económica transformó también las relaciones del poder *distributivo*, que constituirá la materia de los tres próximos capítulos. Tal como predijo Marx, las clases continuaron progresando y se hicieron más extensivas y políticas. En primer lugar, los propietarios de la tierra, el comercio y la industria se fusionaron en una sola clase capitalista, como hemos podido comprobar en el caso británico (véase capítulo 4). En segundo lugar, se puso en marcha el proceso de consolidación de la pequeña burguesía, los profesionales y los empleados de carrera dentro de la clase media (véase el capítulo 16). En tercer lugar, las clases agrarias se integraron en el capitalismo comercial global y, como cabía esperar, participaron en los consiguientes conflictos de clase (véase capítulo 19). La mayor parte de las economías nacionales se hallaban ahora divididas en dos grandes sectores, el agrícola y el industrial (dejaré para los dos capítulos siguientes el estudio de este dualismo, dado que Gran Bretaña, el único país enteramente industrializado, constituye la excepción del periodo). En cuarto lugar, surgió el movimiento obrero, centrado en las industrias del metal, la minería y el transporte, y colectivamente organizado tanto en el terreno laboral como en el político. La lucha entre la clase capitalista, apoyada por los distintos regímenes, y la clase obrera adquirió una dimensión extensiva y política. El crecimiento de los poderes infraestructurales del Estado, la implantación de la ciudadanía y el parcial enjaulamiento del capital dentro de las fronteras del Estado-nación canalizaron el conflicto a través de organizaciones nacionales. Cuando las clases se hicieron más simétricas, su enfrentamiento resultó inevitable. El proceso de transformación de las relaciones del poder distributivo, iniciado a finales del siglo XVIII, se completó a comienzos del XX.

Sin embargo, el auge de las clases y la «revolución» de las relaciones del poder distributivo resultaron mucho más ambiguas de lo que

creía Marx. Hemos visto en el capítulo 16 que la clase media surgió políticamente fragmentada y tendremos ocasión de comprobar en el capítulo 19 que las clases agrarias (salvo en el caso de los grandes hacendados) mantenían unas relaciones muy diversas, tanto entre sí como con las clases urbanas e industriales. En este capítulo y en el siguiente comprobaremos la existencia de una ambigüedad semejante entre los obreros, en sus organizaciones colectivas y sus distintas ideologías y prácticas políticas. La Segunda Revolución Industrial consolidó la capacidad de organización obrera en sus tres formas: la clase, la sección y el segmento. De hecho, las industrias nucleares, que generaron de modo especial las tendencias de clase, fueron también las más seccionalizadas, divididas en artesanos especializados y obreros sin especialización, y las más segmentadas por el mercado interno de trabajo. Las tres constituyeron formas extensivas y políticas de una organización de nuevo cuño, que respondía a una revolución genuina en las relaciones del poder económico. Pero no se combinaron en una totalidad dialéctica, capaz de culminar en la revolución prevista por Marx —ni simplemente en el reformismo evolucionista que han sostenido otros autores—, sino en una tremenda ambigüedad de las relaciones del poder distributivo. Las sociedades occidentales «resolvieron» estas ambigüedades de múltiples modos, cuya descripción constituirá el propósito teórico de los próximos capítulos.

La ambigüedad se hace más evidente en la ideología y la política obrera del periodo. En el cuadro 15.1 he distinguido tres pares de estrategias alternativas obreras (y campesinas) enfrentadas al capitalismo, vigentes durante todo el periodo. Las dos estrategias competitivas no pretendían cambiar el capitalismo, sino competir con él. Las que respondían a motivaciones económicas fueron de naturaleza proteccionista y se hallaron presentes en todas las formas del movimiento obrero, especialmente en sus manifestaciones más moderadas. Mediante este tipo de estrategia los trabajadores se agruparon en cooperativas y sociedades de socorro mutuo, que les brindaban seguridad y beneficios. Cuando la estrategia adquiría un tono político, reclamaban la ayuda del Estado a las empresas de los trabajadores y los derechos de organización (ciudadanía civil colectiva). He llamado mutualismo a este tipo de estrategia. Los reformistas elaboraron también dos tácticas; he llamado socialdemocracia a la de naturaleza política —redistribución social de la riqueza y el poder mediante el sistema impositivo y la provisión de seguridad social—, aunque

constituyó un fenómeno raro en este periodo. Mucho más comunes eran las tácticas económicas —conciliación industrial y negociación colectiva del sueldo y las condiciones laborales—, que he denominado economicismo. Las estrategias revolucionarias fueron de dos tipos: una encaminada al logro de un socialismo estatista mediante la revolución política, propuesta por Marx, y varias concepciones sindicalistas y anarcosindicalistas que prescindían del Estado y planteaban la huelga económica general como vía a la revolución.

Las seis estrategias ejercieron una atracción evidente sobre el mundo de las relaciones laborales modernas; a fin de cuentas, incluso los revolucionarios se ven obligados a ganarse la subsistencia diaria y colaborar con su empresario, y no suelen rechazar las mutualidades, las urnas electorales, el seguro de desempleo, la enseñanza gratuita o cualquiera de las ventajas del reformismo o del proteccionismo. Por otra parte, hasta los obreros más conciliadores acaban por descubrir que el capitalismo concede una prioridad absoluta a los derechos de la propiedad, y que el trabajador se halla continuamente expuesto a recibir un trato arbitrario o a perder el empleo cuando las fuerzas del mercado lo decretan. Descubren entonces la explotación, la teoría del valor del trabajo y las alternativas radicales al capitalismo. Sin embargo, pocos de ellos abrazaron durante este periodo las soluciones estatistas, porque en su experiencia el Estado era enemigo de la clase obrera. Como apunta Holton (1985), el sindicalismo resultó especialmente apropiado durante estas décadas, especialmente a medida que los controles gerenciales se extendían entre los obreros no industriales, poco acostumbrados a la disciplina de la fábrica o del sindicato. En 1914 ninguna de las estrategias de la clase obrera o de la patronal había logrado institucionalizarse en ningún país, pero todas parecían viables y atraían a grupos rivales de militantes, confiriendo una gran ambigüedad a las relaciones del poder distributivo.

La atracción de estas alternativas dependía, a su vez, de las estrategias-derivas del régimen gobernante. Como es evidente, los capitalistas eran partidarios de no hacer concesiones, y el Estado, que cristalizó como capitalista en todas partes, los apoyaba con medios legales e incluso militares cuando era necesario. Pero la tenaz resistencia de los trabajadores, su capacidad de organización colectiva para explotar la escasez de trabajo y formar alianzas con otras clases plantearon auténticos dilemas al régimen. Cuando éste recurría a la represión, todos los trabajadores se encontraban en la misma situación y la reforma y el mutualismo no bastaban. Entonces podían

ocurrir dos cosas, o bien aceptaban de mala gana su impotencia y se acogían quizás a una cobertura mínima, o bien seguían a los predicadores de la huelga masiva o la revolución política, como ocurrió en la Rusia zarista. Pero los empresarios y los regímenes disponían de estrategias alternativas, por ejemplo, podían ejercer una represión selectiva y segmental. Los capitalistas necesitaban la colaboración de los obreros; las elites estatales, el acuerdo en materia de impuestos, conscripción y orden público; y los partidos necesitaban votos. A veces eran los propios capitalistas quienes adoptaban una actitud conciliadora; otras, las elites estatales o los partidos, persuadidos por sus restantes cristalizaciones, presionaban a favor de la conciliación. Puesto que tanto los obreros como los campesinos contaban con varias alternativas de organización, los capitalistas, las elites estatales y los partidos respondían selectiva y pragmáticamente, fomentando el seccionalismo y los acuerdos con los trabajadores especializados, con propiedades o derecho al voto, al tiempo que reprimían a todos los demás.

Una vez en marcha estas estrategias segmentales de *incorporación,* los partidarios del proteccionismo, el economicismo y el mutualismo aventajaron a los revolucionarios. La huelga general y la revolución política —incluso la presión agresiva para obtener reformas estructurales— requieren participación masiva y unidad de clase. Por el contrario, para que surja el seccionalismo o cualquiera de las opciones «moderadas» basta con que algunos capitalistas, una parte de la elite o una facción de partido hagan ciertas concesiones a un determinado grupo de trabajadores. Las ventajas los hacen entonces menos proclives a dar apoyo a los revolucionarios, se rompe la unidad de clase y con ello se desvanece el fantasma de la revolución. *Siempre que* un sector de los capitalistas, la elite estatal o los partidos han alcanzado un compromiso con un sector de los trabajadores, lo que se ha producido a largo plazo no ha sido la revolución, sino el proteccionismo, las reformas moderadas, el segmentalismo, el seccionalismo y la disminución de los militantes revolucionarios.

Pero esta posibilidad estaba disminuyendo. Poco después de la muerte de Marx, en 1883, parecía que su teoría estaba a punto de cumplirse. La Segunda Revolución Industrial generó su «trabajador colectivo». En realidad, ésta era la segunda aparición. Pero al contrario que en la primera forma, el cartismo, esta vez la clase obrera estaba formada por trabajadores empleados en las grandes empresas capitalistas o estatales, especialmente en las industrias del metal, la

minería y el transporte. Los artesanos habían desaparecido. Se mantenían las diferencias de especialización, pero habían surgido numerosos oficios semiespecializados, todos integrados por un salario único y un sistema de control gerencial. Esta revolución surtió también efectos macroeconómicos, que intensificaron la competencia internacional. Los empresarios lanzaron su ofensiva contra lo que creían una forma obsoleta de proteccionismo artesanal e inventaron técnicas «científicas de gerencia» para ejercer un control sistemático sobre la clase obrera, con el respaldo ocasional de la represión policial y política. Tales agresiones fomentaban la identidad de clase entre los trabajadores, pero también reducían su capacidad de respuesta.

La cuestión vital residía en la respuesta de los trabajadores especializados. ¿Emplearían sus organizaciones y el poder que aún les quedaba en el mercado de trabajo para proteger sus intereses seccionales y proteccionistas? ¿O se unirían a los trabajadores menos o nada especializados en un único movimiento de clase, como pensaba Marx? Los capitalistas, las elites y los partidos se enfrentaban a dos elecciones paralelas: reprimir a todos los trabajadores, arriesgándose a polarizar la lucha de clases, o practicar la conciliación segmental con los más respetables y reprimir al resto. En los dos capítulos siguientes examinaré las distintas formas en que interactuaron estas estrategias-derivas. A mi parecer, para explicar los resultados conviene tener en cuenta el papel de las cristalizaciones *políticas*. La revolución económica de las relaciones del poder distributivo fue siempre intrínsecamente ambigua, porque necesitaba el complemento de otras fuentes del poder social. Comenzaré por Gran Bretaña, la «punta de lanza» de la primera mitad del periodo, la única sociedad industrial y el país que contó con el mayor movimiento sindical del mundo.

El surgimiento del movimiento obrero británico

Los rasgos generales de la clase obrera británica pueden resumirse brevemente [1]. El primer cambio de importancia llegó a finales de la década de 1880 de la mano del «nuevo sindicalismo», mucho más agresivo y capaz de reagrupar tanto a los trabajadores especializados

[1] Las fuentes generales para el análisis de los sindicatos han sido: Webbs (1926), Pelling (1963: 85 a 148), Clegg *et al.* (1964), Cronin (1979, 1982) y Martin (1980: 58 a 131); para el partido laborista, McKibbin (1974) y Moore (1978).

como a los que contaban con escasa o nula especialización, y también más extensivo y político que seccional. El movimiento nació antes de 1890, para luego estabilizarse y crecer, en especial a partir de 1910. Pero los sindicatos continuaban siendo masculinos en un 90 por 100. La participación de las mujeres aumentó sólo del 2 al 10 por 100 de 1888 a 1914, pero incluso en la industria del algodón y en la enseñanza la mayoría de los oficiales eran hombres. El crecimiento de la sindicación entre los trabajadores manuales adquirió proporciones espectaculares, pasando del 12 al 32 por 100. Es posible que entre los cinco millones de hombres que formaban el núcleo de la clase obrera —en las fábricas supervisadas por el *Factory Inspectorate*, en la minería y el transporte— los sindicalistas representaran una mayoría. En el terreno de la política, los sindicatos colaboraron al principio con el partido liberal, y posteriormente formaron un partido laborista con el objetivo de defender sus intereses. Hacia 1914, más de la mitad de los miembros del conjunto de los sindicatos estaban afiliados al partido laborista. En 1910, durante las últimas elecciones anteriores a la guerra, el partido venció en 42 de los 56 distritos electorales obreros, gracias a un pacto electoral con el partido liberal. Por lo general, se ha considerado reformista a la clase obrera británica de ésta y de todas las épocas, por haber combinado el sindicalismo economicista y el partido de la socialdemocracia, pero en realidad fue aún más moderada, ya que sus tácticas económicas oscilaban entre el economicismo y el proteccionismo, en tanto que el mutualismo predominaba en su práctica política. A ello habría que añadir algunas tendencias minoritarias: la agitación complementaria de marxistas y otros sindicalistas, y el reformismo involuntario de las organizaciones implicadas en la administración del Estado.

Empecemos por los sindicatos. Muchos historiadores explican su crecimiento sirviéndose de las cuatro tesis marxistas que he destacado en el capítulo 15:

1. La división cualitativa entre el capital y el trabajo se difundió por el conjunto de la economía, sustituyendo a otras relaciones de producción más complejas.
2. La transformación del proceso de trabajo durante la Segunda Revolución Industrial produjo la aparición del «trabajador colectivo», es decir, de una única clase obrera.
3. La situación se consolidó por la creciente densidad y segregación de las comunidades urbanas de trabajadores, aunque algunos

sostienen que produjo una solidaridad predominantemente «defensiva».

4. Las reivindicaciones políticas emanadas del proceso de trabajo y reforzadas por la comunidad obrera llevaron a la creación de un partido laborista, de carácter reformista.

En el capítulo 15 he criticado este modelo desde cinco puntos de vista:

1. No surgió un «trabajador colectivo», sino tres, competidores entre sí —la clase obrera, el artesanado *seccional* y la interdependencia empleado-empleador, de carácter *segmental,* fomentada por el mercado interno de trabajo.

2. Existe una tensión dentro del modelo entre la *difusión* del capitalismo en el conjunto de la economía y el aspecto organizativo *autoritario,* que representa el proceso de trabajo en las fábricas. En épocas anteriores, la difusión determinó en mayor medida el desarrollo de la clase obrera que el desarrollo del proceso de trabajo. Son muchos los historiadores de este periodo que subrayan la transformación del proceso de trabajo, con los que yo no estoy de acuerdo.

3. Puesto que esta economía fue también de modo predominante el terreno del Estado nacional, sus *cristalizaciones políticas* contribuyeron a determinar el movimiento obrero.

4. Este movimiento obrero emergente tuvo un carácter seccional, en el sentido de que fue predominantemente *masculino* y centrado en el empleo. Al transformarse la producción, el hecho influyó en las relaciones entre el empleo y los aspectos comunitarios del movimiento.

5. Como resultado de todo ello, el conflicto entre las clases no suele ser frontal, ni tiene una resolución dialéctica, como opina Marx. El régimen gobernante también se divide en secciones y facciones, de modo que los resultados son complejos y contradictorios. Como he sostenido ya, la clase obrera no sale normalmente vencedora de un choque frontal.

En este capítulo defenderé la idea de que la Segunda Revolución Industrial consolidó la identidad de la clase obrera, pero sólo de forma parcial, porque separó el puesto de trabajo de la familia y la comunidad, y a las mujeres de los hombres. Pero el resultado se estructuró también en función de las cristalizaciones políticas. La cris-

talización capitalista del Estado pudo ser ambigua, pero no lo fueron otras. La desmilitarización del Estado, esto es, la ampliación de sus funciones civiles y el desplazamiento del interés militar a zonas alejadas, en este caso, a Irlanda, sumada a la democracia de partidos se cruzó con la solución centralizada de la cuestión nacional (salvo para Irlanda). Estos elementos empujaron a la clase obrera a un mutualismo moderado. Debido, en gran parte, a las consecuencias involuntarias de la práctica de los distintos actores, el reformismo dominó prácticamente la estrategia obrera británica durante la Gran Guerra y después de ella.

La comunidad obrera y la sociedad civil nacional

Hacia 1900 la industrialización afectó intensamente a las comunidades residenciales urbanas, reduciendo el control segmental, local y particularista y estableciendo una separación ecológica entre los trabajadores. El crecimiento de las ciudades superó la concentración económica. En 1901 eran muchos los obreros que trabajaban con menos de cincuenta compañeros, pero vivían en ciudades de más de 20.000 habitantes. Existían setenta y cinco urbes con más de 50.000 almas. En todas ellas había numerosos empresarios que habían perdido la cohesión y el control segmental sobre la comunidad. La mayor parte de los conflictos organizados se producían ahora en los talleres y establecimientos fabriles de estas ciudades, y afectaban aproximadamente a la mitad de los trabajadores, mientras que la otra mitad se veía sometida al control segmental y el empleo eventual. La aparición de los tranvías y el ferrocarril llevó a la clase media a las afueras, lejos de los barrios obreros. La jerarquización no era ya local, sino interlocal e incluso interregional. Los capitalistas se concentraban en Londres, en el sur o en zonas salubres y cercanas al mar; los trabajadores, en la suciedad del norte industrial. En una situación en que los trabajadores quedaban al albur de su propia conciencia y cultura, el orden social imponía el desarrollo de formas de control a distancia.

Según Stedman-Jones (1974) la cultura «defensiva» característica de la clase obrera, que dominó las grandes ciudades a partir de la década de 1890, se componía de controles segmentales tradicionales, tales como escuelas de la beneficencia, enseñanza nocturna, bibliotecas, mutualidades de socorro, tabernas, prensa deportiva, hipódromos,

partidos de fútbol y teatros de variedades. Las canciones de este tipo de espectáculos, siempre según Stedman-Jones, demuestran el carácter defensivo de su cultura. La identidad de la clase obrera se estaba formando en su propio ambiente interno y al margen de un socialismo agresivo, muy alejada del supuesto destino socialista que ocupa a los historiadores marxianos.

Veamos algunas pruebas. Dentro de su comunidad, los trabajadores reconocían su condición distinta incluso a la de los maestros más modestos. Aunque los votantes obreros de Preston eligieron a los *tories* antes de 1900, crearon sus propios clubes conservadores para no mezclarse con los de clase media (Savage, 1987: 143). Sin embargo, estas comunidades no eran precisamente barricadas; las familias obreras comenzaban a consumir en los mercados de masas que surgieron entre la década de 1870 y la de 1880. De 1870 a 1890 los precios del comercio al por menor cayeron en un 20 por 100, lo mismo que aumentaron los salarios semanales (Feinstein, 1976: cuadro 65). Las tiendas y los mercados distribuidores estaban integrados en un sistema de marketing nacional y de publicidad homologada, en todas las ciudades y regiones del país. No es que faltaran las redes de protección del crédito o del consumo local, pero las familias accedieron también al mercado nacional de consumo, cuyo control era difuso e impersonal (F. M. L. Thompson, 1988). La práctica deportiva, que se trasladó de las áreas rurales a las urbanas, creó una industria nacional del ocio, basada fundamentalmente en el fútbol profesional. Aquí, las fuerzas del mercado se diluyeron en controles segmentales directos, debido a que la dirección de los clubes, de fútbol o cricket, por ejemplo, estaban en manos de los notables locales (Hargreaves, 1986). La actividad política de todas las clases se nutría de metáforas deportivas —«Esto no es el cricket», «por debajo del cinturón», etc.— como prueba de la aceptación general de las «reglas del juego» (McKibbin, 1990b). Parece evidente que tales cuestiones lejos de segregar a los trabajadores, los insertaron en la corriente nacional.

La segregación ecológica de clase, el sufragio de la mitad de los trabajadores varones y la lucha electoral abierta introdujeron a los obreros en el mundo de la política. Pero la colaboración interclasista se redujo a una cooperación de los trabajadores especializados con los liberales e inconformistas de la clase media. La política miraba ahora a la educación, que se había convertido en la principal actividad civil del Estado. Socialistas y sindicalistas se sentaban en los consejos de las escuelas locales junto a los inconformistas y los liberales. La al-

fabetización se disparó. En 1900 sólo el 3 por 100 de los matrimonios eran incapaces de estampar la firma en el registro, frente al 30 por 100 de 1860 (Stone, 1969). A partir de 1892 la escolaridad obligatoria aumentó la participación obrera en la vida cultural de la nación.

La separación de los hombres y las mujeres en las comunidades de la clase trabajadora estaba aumentando. El periodo conoció enormes cambios en la vida femenina. El último gran avance de la alfabetización discursiva se había producido entre las hijas de los obreros, abriendo para ellas nuevas posibilidades de acceso a la vida cultural de la nación. Los nuevos métodos de control de natalidad comenzaban a infiltrarse entre las clases bajas, al mismo tiempo que disminuían las tasas de mortalidad, y con ello la esperanza de vida de las mujeres comenzaba a superar a la de los hombres. Con el descenso de los precios y la subida de los salarios dejó de ser necesario que la mujer contribuyera a la manutención familiar. Ahora era el hombre, cabeza de familia, quien soportaba la economía de la casa, aunque su papel dentro de ella había perdido parte de su importancia anterior. Existían dos fórmulas: o bien el hombre aportaba a la mujer una parte de su salario para cubrir los gastos caseros, reteniendo el resto a su criterio, o entregaba el salario completo y recibía una suma asignada para sus gastos. Muchas mujeres encontraron empleos a tiempo parcial, cuyas modestas ganancias invertían en mejorar las condiciones de la familia y en gastos personales, es decir, se produjeron dos esferas separadas: la del consumo discrecional del hombre y la del consumo femenino para la casa y la familia. Las industrias de la cerveza, el deporte y el tabaco abrieron un mundo de ocio para los hombres: «Los trabajadores respetables acudían con ropa distinta a la del trabajo a sus propios grupos de reunión, tan alejados del lugar de trabajo como del mundo doméstico de las mujeres», destaca Davidoff (1990: 111).

¿Se hizo más segregada y conflictiva la vida común de los hombres y las mujeres, debilitando la comunidad *intensiva*, a causa de la polarización *extensiva* de clase que tenía lugar en el puesto de trabajo? En este punto, conviene evitar una mirada romántica al periodo anterior. El movimiento por la abstinencia del alcohol, que constituyó una de las formas más importantes del feminismo del siglo XIX, había introducido ya un cierto grado de separación y conflicto, pero la segregación parcial entre los mundos femenino y masculino se ahondó durante el periodo de la polarización en el puesto de trabajo. Hemos visto en los capítulos anteriores que durante la rebelión de la pequeña burguesía y el cartismo, la comunidad había reforzado

la unidad de los movimientos de clase, pero esta fuerza faltó en gran parte durante la Segunda Revolución Industrial.

Esto introdujo una gran complejidad en las tendencias de la comunidad. Existía una segregación cultural y residencial de clase, que, si por una parte, parece responder a una reacción de defensa y repliegue, por otra, fomentó la práctica política agresiva o la participación en la vida económica, cultural y democrática de la nación. Los hombres y las mujeres lo vivieron de forma distinta. Pero, ante todo, la vida de la comunidad y de la familia no se limitó a reforzar las tendencias del empleo a la polarización de clase. Al contrario que la nación, la clase se estaba haciendo más extensiva y menos intensiva.

Las estrategias económicas del capital y del trabajo

La tesis del colectivo de trabajadores destaca los efectos estimuladores de la conciencia de clase inherentes al proceso destructor de la especialización propio de las fábricas de la Segunda Revolución Industrial, que me propongo criticar aquí. Según esta teoría, los empresarios mecanizaron y racionalizaron la producción para atacar los privilegios artesanales, empobrecer a los artesanos y contratar nuevos trabajadores semiespecializados. Ambos grupos comenzaron a asemejarse y muchos de ellos participaron juntos en los mercados internos de trabajo. Los obreros especializados se radicalizaron, los semiespecializados (y algunos sin especialización) crearon sus primeras organizaciones sindicales, que paulatinamente se fusionaron, primero con los «nuevos sindicatos», y más tarde en los antiguos sindicatos radicalizados y en el partido laborista de carácter socialdemócrata. En ello reside la parte fundamental de la explicación que brindan la mayoría de los historiadores, en especial, Price (1983, 1985) y en cierto sentido Pelling (1963: 85 y 86, 98 a 100), Gray (1976: 167 a 169), Crossik (1978: 248), Baines (1981: 162), Hunt (1981) y Thane (1981: 230).

Sus argumentos se encuentran también en las teorías sobre el proceso laboral y en las que se ocupan de los obreros no especializados, predominantes entre los sociólogos industriales durante la década de 1970 (es decir, Braverman, 1974; Friedman, 1977; y Burawoy, 1979; Hill, 1981: 103 a 123, ofrecen un análisis crítico). El cuadro que trazan dibuja el proceso de trabajo que predomina en las grandes corporaciones de la industria manufaturera del siglo XX. En muchas de es-

tas teorías, los sociólogos subrayan el «fordismo» del periodo, correspondiente a la cadena de ensamblaje del modelo T que la *Ford Motor Company* puso en marcha en 1907. Tomando ideas de la teoría clásica de Hilferding, Lash y Urry (1987) caracterizan el periodo desde la década de 1880 hasta la de 1950 como la era del «capitalismo organizado», en contraste con la actual, en la que encuentran un «capitalismo desorganizado», «posfordista» y «reestructado con flexibilidad».

Pero las empresas de la Inglaterra de Eduardo no se adaptan con facilidad a este modelo. Joyce (1989) y McKibbin (1990) observan que sólo la mitad de la mano de obra se empleaba en los sectores «modernos» de la manufactura, minería y transporte. La otra mitad lo hacía en el comercio y los establecimientos modestos o trabaja aún «en las calles», completamente al margen de los sindicatos. Incluso la empresa típicamente manufaturera era una firma familiar o una federación de familias (la compañía privada). Las sociedades anónimas no predominaron hasta la década de 1920. De las 50 grandes empresas manufactureras de 1905, 18 se dedicaban a la elaboración de cerveza y a la destilación de licores (cuya importancia para la comunidad ya he apuntado); 10, al textil; y sólo 23 a la producción de mercancías (Payne, 1967: 527; *cf.* Ashworth, 1960: 90 a 102). Unas trescientas firmas empleaban más de tres mil trabajadores cada una, distribuidos en una media de tres fábricas por firma.

Como en los restantes países, incluso las fábricas de mayor tamaño quedaron superadas por las organizaciones estatales. Tras las fuerzas armadas, el mayor departamento estatal eran los servicios de correos, cuyos empleados, en número de 114.000 (1908), cuadruplicaban a los de la mayor empresa privada. El Estado poseía dos de las diez mayores empresas manufactureras (los *Royal Dockyards* y las *Royal Ordnance Factories*). Las ocho restantes, cada una con 13.000 empleados, eran distintas: dos de ellas, conglomerados textiles, contaban con más de veinticinco establecimientos cada una; tres eran compañías o talleres ferroviarios; dos, fábricas de armas estrechamente vinculadas al Estado; y otra, una firma de maquinaria. Once formaban la *Cooperative Wholesale Society* (Shaw, 1983). Si incluimos la minería, dos de sus empresas se contaban entre las diez mayores (Taylor, 1968: 63 a 65). ¿Había algo común en esta diversidad?

Sí, las más importantes compartían el uso de la fuerza de vapor, el *símbolo* de la Primera Revolución Industrial, que no predominó hasta la segunda. Fuera de la industria del transporte, el empleo de la

máquina de vapor se incrementó en un 25 por 100 de 1870 a 1896. En 1870 más de la mitad de las máquinas de vapor se encontraban en la industria textil; en 1907 eran ya menos de la quinta parte. La fuerza del vapor se utilizaba sobre todo en la minería, el hierro y el acero, la maquinaria, la construcción, el ferrocarril y los servicios públicos. Sin embargo, aparecían nuevas fuentes energéticas. En 1907 la electricidad aportaba una cuarta parte de la capacidad de la máquina, y el gas y los motores de combustión interna (con gas de hulla y aceite) rivalizaban en los establecimientos más pequeños (Ashworth, 1960: 86; Musson, 1978: 166 a 170).

Las tecnologías comunes emplearon estos primeros motores para transformar los centros de trabajo, eliminando el artesanado del proceso central de producción, reduciendo el trabajo a domicilio al 2 por 100 del empleo según el censo de 1901 (sobre todo mujeres que trabajaban fuera de casa en la confección de ropa, aunque probablemente se trata de un cálculo a la baja) y mecanizando las tareas individuales (aunque más raramente las conexiones entre las máquinas).

En las industrias nucleares, y alrededor de ellas, estas novedades cambiaron las tareas y el trabajo no cualificado, y aumentaron la presión de la máquina y la gerencia, pero también homogeneizaron el empleo en toda la economía nacional, no simplemente en la industria. Las máquinas motrices necesitaban alimentarse de grandes dosis de

CUADRO 17.1. *Distribución industrial de la mano de obra británica (porcentajes)*

	1851	1881	1911
Agricultura, silvicultura y pesca	21,6	13,0	8,6
Minería, cantería	4,1	4,6	6,5
Manufactura	33,0	32,1	33,3
Construcción	5,2	6,9	6,5
Comercio y transporte	15,5	21,4	21,5
Servicios públicos y profesionales	5,2	6,1	8,1
Servicios domésticos y personales	13,4	15,3	14,0
Porcentaje total	100,0%	100,0%	100,0%
Total de la población trabajadora (en millones)	9,7	13,1	18,6

Fuente: Deane y Cole, 1969: 143.

carbón, transportadas y depositadas en el exterior del centro de trabajo. Se produjo un gran crecimiento de la minería, el transporte y la distribución, aunque la industria se mantuvo estática, como vemos en el cuadro 17.1.

El único grupo en decadencia eran los trabajadores agrícolas, pero los puestos industriales se mantenían sólo al ritmo del crecimiento del conjunto de la población y el empleo, superados por la tasa de aumento de la minería, el comercio y el transporte, el empleo público y las profesiones. El censo de 1907 sobre la producción arroja un rendimiento neto para la minería de 106 millones de libras, que empequeñece a las grandes industrias, la maquinaria (50 millones), el algodón (45 millones), la construcción (43 millones) y el hierro y el acero (30 millones). El empleo creció en las minas más que la producción durante el periodo comprendido entre 1850 y 1913, lo que indica más un aumento de la mano de obra que una intensificación de la ya existente, probablemente válido también para la mayoría de los sectores terciarios.

Bain y Price (1980) ofrecen estadísticas sobre la afiliación de los sindicatos a partir de la década de 1890; a las que añado aquí las cifras de 1888, procedentes de Clegg *et al.* (1964: 1). Identifico dos indicadores brutos de la fuerza sindical por su nivel de densidad, es decir, por la proporción de la afiliación potencial que podía reunir un sindicato. Para una organización individual, esto significaría la mano de obra de su sector industrial; para el movimiento obrero en conjunto, sería la mano de obra nacional no agrícola.

1. A un nivel de densidad de cerca del 25 por 100, los sindicatos se convierten en actores *seccionales* de poder bastante significativos, y aunque los empresarios pueden aún eludirlos y dirigir a sus trabajadores con métodos paternalistas, esto implica ya algún riesgo porque la movilización de los militantes es capaz de provocar conflictos. En circunstancias críticas, pueden arrastrar también a otros trabajadores no militantes y crear un grave conflicto de clase. El riesgo disminuye en el caso de que los miembros del sindicato se encuentren separados de los trabajadores no sindicados por razones de especialización, industria, religión, etnia o por la identidad de sus respectivas comunidades. Los patronos pueden emplear la táctica del «divide y vencerás»; hacer concesiones a los trabajadores organizados que controlan los mercados y tratar con dureza al resto. El seccionalismo británico se dividía ante todo por la especialización, aunque en ciertas áreas

hay que contar con la comunidad étnica (es decir, con el enfrentamiento entre británicos e irlandeses).

2. Alrededor del 50 por 100 de densidad, los sindicatos se convierten en actores *de clase,* con pretensiones de liderar una única clase trabajadora. En este caso, los regímenes preferirán institucionalizar la negociación local y nacional. La práctica del «divide y vencerás» se hace más difícil, y la principal alternativa a la conciliación es una escalada represiva muy costosa.

En 1888 la densidad nacional era sólo del 5 por 100. Las tres cuartas partes de la afiliación sindical se concentraba en cuatro industrias: maquinaria y construcción naval (un 25 por 100 de sindicados), minería y cantería (20 por 100), textil (16 por 100) y construcción (12 por 100). Las tasas de afiliación en la industria estaban muy por debajo del 20 por 100, excepto en la minería, donde alcanzaban el 50 por 100. Sólo los sindicatos mineros accedían a todos los grados de la solidaridad de clase, aunque los artesanos de distintas industrias disfrutaban de una fuerte presencia seccional. En términos nacionales, esto significa una elástica confederación de actores de poder seccional, por lo general especializados, capaces de crear graves conflictos en industrias decisivas pero no una lucha frontal de clases, como el resto de los movimientos obreros de la época en cualquier país. El régimen y los capitalistas podían recurrir a la represión con ciertas posibilidades de éxito; por ejemplo, cabía la posibilidad de emplear tropas contra los mineros o contra algunos artesanos, siempre que estos focos de resistencia estuvieran aislados. Alternativamente, la incorporación segmental de estos sindicatos evitaba las concesiones con carácter general.

En sólo cuatro años a partir de 1888, el «nuevo sindicalismo» logró doblar su afiliación a un millón y medio de trabajadores, y su densidad al 11 por 100. La minería del carbón y la maquinaria-construcción de barcos contribuyeron cada una con el 21 por 100 de la afiliación nacional, dos veces más que el algodón, la construcción y el transporte. La curva de la densidad estaba aumentando. A partir de 1901 se equilibró en el 18 por 100. En 1911 la filiación alcanzaba los tres millones cien mil, con una densidad del 19 por 100. Ahora la minería se encontraba en cabeza, seguida del transporte: el ferrocarril (cuya densidad crecía constantemente) y el transporte por mar y carretera (donde aumentó en dos oleadas, de 1888 a 1892 y con posterioridad a 1910). Los trabajadores de la construcción se habían visto

superados por los trabajadores de la educación y del gobierno local. En 1914 la afiliación volvió a crecer hasta los cuatro millones cien mil, con una densidad del 25 por 100. En todas estas industrias, más las del gas, la imprenta y los servicios postales, la densidad era ahora de más del 50 por 100.

Pero el sindicalismo continuaba en manos de los hombres. En 1901 las mujeres representaban el 30 por 100 de la mano de obra y sólo el 8 por 100 de los sindicalistas. En 1914 la densidad masculina era del 32 por 100, y la femenina del 9 por 100. Todos los porcentajes de densidad que aparecen aquí podrían ser mucho más bajos en el caso de las mujeres, casi un 30 por 100 más altos en el caso de los hombres, y mucho más si éstos pertenecían al núcleo manufactura-minería-transporte. Las mujeres contaban con tan escasas posibilidades de acceder a los puestos de trabajo como de crear un sindicato. En 1911, el 39 por 100 de las mujeres empleadas eran todavía sirvientas, pese a lo cual muchos militantes compartían el sexismo de Will Thorne, dirigente de los trabajadores del gas: «Las mujeres no son buenas sindicalistas, por eso creemos que es mejor emplear nuestras energías en las organizaciones de hombres» (Hinton, 1983: 32).

En resumen, los sindicatos pasaron de constituir un seccionalismo significativo a ser actores de clase en las principales industrias, pero esto sólo para los hombres. Los sindicatos más poderosos se encontraban en la minería del carbón, la construcción de maquinaria y de buques y el ferrocarril, seguidos del algodón, la construcción y el empleo gubernamental. Una represión seccional en la minería podía resultar ya muy peligrosa, y no lo era menos en otras industrias fundamentales. Sin embargo, en la relación con las empleadas, los empresarios se imponían con relativa facilidad.

Analizaré ahora si las luchas de los sindicatos individuales con las industrias ofrece algún apoyo a las tesis del trabajador colectivo. Los primeros sindicatos de la construcción nacieron en un marco de lugares de trabajo pequeños y dispersos, con mano de obra móvil. Como se ve en el capítulo 15, la organización intersticial fue común al primer sindicalismo. Los sindicatos de la construcción entraron en decadencia, pero justo antes de la Primera Guerra Mundial, los obreros no especializados, especialmente los albañiles, ampliaron las organizaciones, introduciendo un sindicalismo radical, que iba a sufrir una grave derrota (Holton, 1976: 155 a 163).

La industria de la maquinaria se vio muy afectada en una doble dirección por el cambio en los procesos de trabajo (Burguess, 1985).

Desde la década de 1880 la producción masiva causó un fuerte impacto en los talleres de máquinas. Gran parte de los nuevos tornos de cabrestante, las fresadoras mecánicas y otras máquinas de manejo rutinario se asignaban a mecánicos semiespecializados, que habían sustituido a los torneros y ajustadores cualificados. El sistema de aprendizaje disminuyó a medida que aumentaba la formación en el propio puesto de trabajo. Sin embargo, estas máquinas enriquecieron la especialización de los trabajadores de mantenimiento y de los que participaban en el proceso manufacturero.

Todo ello introdujo grandes cambios en la especialización, dividiendo a los sindicatos entre los antiguos dirigentes seccionalistas y los nuevos militantes que deseaban la unidad de todos los grados. Los empresarios aprovecharon la desunión durante el periodo para atacar, reivindicando su derecho a ser «los amos de sus talleres», como lo eran ya sus competidores alemanes y americanos. En la década de 1890, se organizaron a nivel nacional, lo que provocó en 1897 una huelga por la jornada de ocho horas de la *Amalgamated Society of Engineers* (ASE). Los empresarios escogieron una época de baja demanda. Seis meses después, la ASE capitulaba, renunciaba a la jornada de ocho horas y aceptaba el derecho de los patronos a asignar hombres a las máquinas. La ASE aceptó también la desaparición de los aprendices, una mayor contratación de trabajadores semiespecializados (el 20 por 100 de la mano de obra hacia 1914) y el destajo. Incapaz de destruir el mercado interno de trabajo, el sindicato quedó dividido. Muchas de sus ramas demandaron la regulación colectiva de los mercados internos de trabajo y aceptaron a obreros semiespecializados o sin ninguna especialización en sus filas. La victoria de los patronos fomentó una mayor unidad de los grados. En 1911, sin embargo, la ASE se había recuperado y volvía a amenazar el conflicto.

La ofensiva de los empresarios se extendió a otras industrias manufactureras, donde también existían sindicatos artesanos atrincherados: construcción de buques, imprenta, botas y zapatos y muebles. Presionados por la competencia internacional, los patronos se organizaron a nivel nacional durante la década de 1890, aprovechando siempre el ciclo comercial para elegir el momento de la confrontación. Desarrollaron así dos de sus principales técnicas: la organización nacional y autoritaria y la explotación de mercados internacionales no planificados y difusos, es decir, las dos fuentes territoriales de su poder de clase: la nacional (que pronto sería su ámbito más débil) y

la transnacional (que acabaría por convertirse en el terreno de su fuerza).

Aunque algunos empresarios intentaron romper los sindicatos, pocas veces lo consiguieron. La estrategia de los patronos británicos fue al principio más o menos la de cualquier otro país, pero los sindicatos artesanos de Gran Bretaña disponían de armas que no tenían otros trabajadores especializados del extranjero. Poseían una larga tradición de atrincheramiento, tanto en la negociación dentro del taller o la fábrica como en los aledaños de las elites estatales y los partidos, que les había permitido influir en la legislación y ampliar sus derechos civiles colectivos. A partir de 1874 y nuevamente después de 1906, las leyes británicas fueron más favorables para los sindicatos, las huelgas y los piquetes que las de cualquiera de los países más prósperos. Los empresarios británicos se vieron obligados a adoptar tácticas de tipo económico porque les faltaban los apoyos judiciales y la represión policial. La opinión pública tampoco les era completamente favorable, y las elites y los partidos los presionaban para que mostraran una actitud conciliadora en los conflictos laborales.

Ninguna de las dos partes contaba con armas económicas para declarar una guerra a muerte. Los procesos de racionalización y mecanización se implantaron en aquellas firmas no tradicionales donde los empresarios no tenían que enfrentarse a los bien atrincherados sindicatos artesanos. Las industrias más nuevas, como la del papel, el calzado, el vestido, los metales preciosos, las bicicletas, la industria eléctrica y del motor, la industria alimentaria y la química, generaron nuevos grados de cualificación, que supusieron un ascenso para los trabajadores de la producción pero no degradaron a los artesanos. Estas especializaciones eran, en realidad, escasas, pero la formación se producía más en el puesto de trabajo que mediante el aprendizaje. Pero en su feudo, los sectores más antiguos de la mecánica, los artesanos soportaron menos desafíos y conservaron el control sobre el aprendizaje y los diferenciales del salario, que se mantuvieron bastante estables (Penn, 1985).

Con todo, algunos cambios tuvieron un alcance universal. Los artesanos perdieron en todas partes su capacidad de subcontratar y los trabajadores sin especialización se vieron arrojados al empleo eventual dentro de las mismas organizaciones de producción. Todos los grados eran ya trabajadores asalariados, en condiciones muy similares de empleo, no miembros de clases distintas, como lo habían sido los artesanos. Los sindicatos de artesanos pudieron mantener el seccio-

nalismo a costa de abandonar de mala gana las industrias más nuevas y los nuevos trabajadores especializados o semiespecializados. Los empresarios contaban con menos oportunidades de contratar esquiroles que sus iguales en otras partes. Con el campo prácticamente vacío de mano de obra, sólo los irlandeses constituían ahora la fuerza de trabajo que en Gran Bretaña se llamó «verde» (muchos empresarios compartían los estereotipos ingleses sobre la escasa seriedad del carácter irlandés). Los patronos confirieron también poderes a los nuevos especializados, reclutando para estos grados a los hombres más responsables dentro de su oficio en los mercados internos de trabajo. Por medio de este intercambio, el empresario logró el control sobre el trabajo, a cambio de depender de los especializados. Los obreros disfrutaron de una mayor seguridad en el empleo y los empresarios perdieron parte de su poder arbitrario.

No cabe duda de que si los empresarios británicos hubieran podido recurrir a los tribunales y a las fuerzas paramilitares como hicieron sus iguales estadounidenses (véase capítulo 18), muchos habrían luchado resueltamente por desterrar el sindicalismo de sus fábricas. Pero no podían, porque Gran Bretaña era el país que un mayor grado de civilidad había introducido en la regulación del orden público (como vimos en el capítulo 12). Así pues, muchos negociaron. En 1875, mucho antes que en los restantes países occidentales, la legalidad de los sindicatos y las reglas de la negociación estaban aseguradas. Los empresarios reconocían tanto ante las comisiones reales como en conversaciones con algunos interlocutores contemporáneos que los sindicatos estaban allí para quedarse. Como observara un autor en 1906:

> Ni en Alemania ni en Estados Unidos he oído nunca una sola palabra favorable a los sindicatos de boca de un empresario ... Los empresarios temen y odian el sindicalismo. Sólo en Inglaterra lo viven de otra forma. Allí he tenido ocasión de oír a algunos empresarios criticar y a veces condenar a los sindicatos, pero nunca con acritud, por el contrario, han sido más las veces en que empresarios y gerentes me han hablado de ello con naturalidad, incluso con expresiones de simpatía [citado en McKibbin, 1990].

Los sindicatos también buscaron alianzas, en el liberalismo de la clase media y mediante la afiliación de los menos especializados, incorporando así las dos características del «nuevo sindicalismo»: la política y la participación de los obreros no especializados.

Éstas son las únicas pruebas de la aparición del trabajador colectivo en el proceso de trabajo centrado en la fábrica. Pero el crecimiento sindical en otras áreas no admite esta explicación, que ni siquiera sirve por sí sola para comprender el carácter de la emergente conciencia de clase, incluso en esas industrias. Veamos ahora lo que ocurría en otras.

La minería del carbón era la más importante. Un sindicato, la *Miners Federation of Great Britain,* creció allí a expensas de las federaciones regionales, en parte como respuesta a la organización nacional de los dueños de las minas, presionados por la competencia internacional, y en parte porque la federación encabezaba dos reivindicaciones tradicionales tendentes a lograr la unión de todos los grados: la insistencia en la jornada de ocho horas y la oposición a la escala móvil que vinculaba los salarios al precio del carbón. También el sindicalismo minero se encaminaba a la incorporación política, que permitió en 1884 la *County Suffrage Act.* El carácter único de su concentración geográfica permitió a estos sindicatos influir en la democracia de partidos británica eligiendo miembros liberales y laboristas para el Parlamento.

Todo ello se puso de manifiesto en la gran huelga de 1893. La federación de los mineros se opuso a la reducción del 25 por 100 de los salarios, según la escala móvil, y se produjo un cierre nacional, en el que 300.000 mineros se encontraron en la calle durante dieciséis semanas. Alarmado y presionado por los parlamentarios liberales y laboristas, el gobierno realizó lo que quizás fue su primera intervención en una disputa laboral desde la época del triunfo del *laissez-faire.* El compromiso que siguió fue en realidad una victoria sindical. La huelga aumentó la solidaridad entre los obreros de la superficie (hasta entonces dominantes en los sindicatos) y los que trabajaban bajo la tierra. La federación se renovó y admitió a los no especializados. La unidad de clase se lograba gracias a la presión internacional que obligaba a los empresarios a organizarse nacionalmente, a las reivindicaciones tradicionales de los trabajadores y a la cristalización política de la democracia de partidos. La mecanización y la pérdida de especialización apenas incidieron. Los mineros se deshicieron de los esquiroles porque estaban unidos en la jornada y los salarios y porque aquellas aisladas y solidarias comunidades de las minas no sentían empacho en utilizar la violencia. Fueron mutualistas —regulación política de las relaciones industriales, salario mínimo y jornada limitada— y mantuvieron su apoyo a los laboristas y a los li-

berales. Hasta 1909 no se afiliaron al partido laborista, dentro del cual conservaron su autonomía hasta después de la guerra.

Aunque el proceso de trabajo en las minas constituye un caso único, las reivindicaciones de los sindicatos mineros fueron típicas. Todos los sindicatos del siglo XIX habían demandado la jornada de diez, nueve y ocho horas, sucesivamente. Cuando, a partir de 1880, la competencia internacional impuso una reducción de los salarios durante las épocas de recesión, los sindicatos reivindicaron el salario mínimo. La escala móvil era normal en el algodón, el calzado y las fundiciones. Los trabajadores del algodón no imponían restricciones a la entrada en sus sindicatos, pero éstos estaban dominados por los hilanderos cualificados, de modo que los grados bajos se escindieron para formar un «nuevo sindicato» casi socialista. La inserción de los hilanderos en la democracia de partidos estaba a medio camino de la de los mineros. El voto se concentraba en Lancashire, aunque aún padecían algunas formas de control por parte de los empresarios (Joyce, 1980) ejercieron presiones moderadas sobre ambos partidos a través de la *United Textile Factory Workers Association,* al contrario que los tejedores radicales de Yorkshire, que fundaron el *Independent Labour Party* (ILP), precursor del partido laborista. La nueva ofensiva a escala nacional contra los salarios volvió a estar bajo la dirección de las asociaciones de empresarios fundadas en respuesta a la competencia internacional. La huelga general del algodón de 1893 unió estrechamente a todos los grados. Se llegó a un acuerdo por el que se reducía la rebaja del 10 por 100 del salario propuesta en un principio a menos del 3 por 100 y se institucionalizaban procedimientos a escala nacional para resolver los conflictos antes de llegar a la huelga. Este *Brooklands Agreement* creó el modelo de negociación conciliadora a nivel nacional.

Es decir, cuando los empresarios, presionados por las fuerzas de los mercados internacionales, crearon organizaciones más extensivas, se produjo un refuerzo de la unidad obrera en el seno de los principales «sindicatos antiguos». Se trataba de una cuestión de vida o muerte, incluso para muchas hermandades de artesanos exclusivas. Las reivindicaciones eran las tradicionales, aunque en algunos sectores también se planteó el problema de la descualificación. Los diferenciales de especialización y los privilegios en el puesto de trabajo habían quedado arrinconados por fuerzas económicas más amplias que estaban produciendo organizaciones de clase más ambiciosas en ambos lados. Los sindicatos tuvieron que plantearse un tipo de organi-

zación más extensiva y política, pero lo que dio su estructura a los resultados políticos fueron las diferentes inserciones parcialmente democráticas, no las variaciones que experimentó el proceso de trabajo.

El nacimiento de los «nuevos sindicatos» suele relacionarse con las huelgas de los estibadores y los trabajadores del gas de 1899 (Hobsbawm, 1968: 158 a 178; Lovell, 1985; Pollard, 1985). Dirigido por Will Thorne, miembro de la *Marxist Social Democratic Federation* (SDF), con la asistencia en la secretaría de Eleanor Marx, hija de Karl, el sindicato de trabajadores del gas había reunido en Londres 2.000 miembros a los cuatro meses de su fundación. La producción del gas había aumentando a costa de la dureza del trabajo y los horarios. Como observa Hobsbawm (1985: 18) la pauta entre los nuevos sindicatos no era la desespecialización, sino la intensidad del trabajo. El sindicato reivindicó que los dos turnos se ampliaran a tres para reducir la jornada de doce a ocho horas. Los fogoneros cualificados que componían el núcleo sindical, con bastante experiencia en el trabajo y capaces de controlar la producción, no eran fácilmente sustituibles por esquiroles, de modo que las compañías londinenses del gas se rindieron sin lucha. El mercado interno de trabajo se volvía contra su creador. Los sindicatos del gas se esparcieron por todo el país, con frecuencia ayudados por la SDF, y contagiaron con su ejemplo. En agosto de 1889 estalló en los muelles de Londres un conflicto por la paga, cuyas manifestaciones, masivas y ordenadas, levantaron simpatías entre los ciudadanos y suscitaron la intervención del alcalde y el cardenal Manning. El compromiso resultante significó un triunfo para el sindicato, cuya afiliación se disparó hasta los 30.000 miembros. Con la ayuda de las organizaciones socialistas, los nuevos sindicatos se extendieron a escala nacional entre los estibadores, los marineros, los porteadores, los carreteros, los trabajadores del ferrocarril y otros muchos grupos de la industria, la construcción, la albañilería, los empleados de cuello blanco e incluso de la agricultura. En 1890 estos sindicatos decían tener más de 350.000 miembros.

Pero la mayoría no pudo mantener tales cifras. Los episodios más exitosos ocurrieron en el gas, el ferrocarril y los empleados de cuello blanco. Entre estos últimos, los sindicatos crecieron más que entre los trabajadores manuales a partir de 1901, gracias a la afiliación de los empleados estatales, en especial maestros (donde había muchas mujeres) y trabajadores de correos. No existían apenas organizaciones entre los empleados del comercio y la industria; en cuanto al sector de las ventas, se mantenía confinado al movimiento cooperativo.

Los empleados públicos continuaron dominando los sindicatos de cuello blanco durante el siglo XX, ya que el Estado se mostró siempre más conciliador que los empresarios privados (Bain, 1970). Incluso esta democracia de partidos, de sufragio limitado, surtía el efecto de empujar a los empleados públicos a adoptar posturas conciliadoras.

Los sindicatos de ferroviarios siempre se habían considerados muy restrictivos, pero en 1889 nació un rival, la *General Railway Workers Union,* abierto a todos los grados, que ridiculizaba agresivamente el proteccionismo: «El sindicato ha de ser combativo; no debe cargar con ninguna mutua de enfermedad o accidente». Su actividad se centró en la jornada, forzando a los sindicatos artesanos a hacer otro tanto. Los empresarios respondieron, presionados, decían, por el enorme aumento del ratio de los gastos de explotación en relación con los ingresos brutos. El *General Union* se tambaleó ante su ofensiva, pero en la década de 1890 vino a sumarse a su causa un sindicato artesano. La *Amalgamated Society of Railway Servants* —el antecedente del actual *National Union of Railwaymen*— se renovó abriéndose a todos los grados. La nueva organización había innovado felizmente a la antigua. También esta vez la unidad se debió más a una cuestión tradicionalmente politizada, la jornada, que a las transformaciones del proceso de trabajo, y la innovación se consiguió con organizaciones más extensivas y más de clase, que reivindicaban la regulación conjunta. Hacia el final del periodo, los distintos gobiernos habían persuadido a los empresarios para que la aceptaran (Bagwell, 1985).

Pero también fracasaron muchos sindicatos nuevos, bien porque desaparecieran rápidamente, bien porque entraran en un lento proceso de decadencia (hasta que resucitaron durante la oleada de huelgas de 1911-1914, cuando se gestaron los *General Unions* del siglo XX). A partir de 1891, los empresarios coordinaron las ofensivas nacionales, y los nuevos sindicatos no contaron a menudo con el apoyo de los antiguos; sus condiciones podían despertar la simpatía de la clase media, pero sus ideas socialistas la retraían. Durante la recesión en 1893, los despidos y los cierres patronales destruyeron un gran número de organizaciones sindicales, que, sin embargo, iban a triunfar después de muertas porque las antiguas heredaron su conciencia de clase. Lo expresaré conforme a mi modelo IOTA:

1. Los sindicatos, antiguos o nuevos, buscaron la ampliación de su solidaridad a todos los grados para crear una gran organización, y

este hecho situó la *identidad* de clase (más precisamente industrial) por encima de la identidad seccional.

2. Movilizaron una solidaridad agresiva para impresionar a los empresarios y a la opinión pública con su fuerza y su determinación de impedir el trabajo esquirol, pero al no poder controlar por completo el acceso, los empresarios se acogieron a la contratación de esquiroles y ellos respondieron con violencia. Se enfrentaron a su *adversario* de clase con fuerza y extensivamente, aunque en última instancia buscaron la conciliación.

3. La evolución de estos acontecimientos fomentó la *totalidad* de clase, aunque de modo más extensivo que intensivo. Los sindicatos crecieron, aumentó su plantilla a tiempo completo, la elección de los órganos ejecutivos se realizó entre la totalidad de los miembros, no sólo entre los afiliados locales, prosperaron las federaciones intersindicales y los acuerdos nacionales sobre el modelo de la industria del algodón. El TUC *(Trade Union Congress)* llevó representantes al Parlamento y a los comités gubernamentales (Martin, 1980: 58 a 96). Aumentó la participación sindical en la política local. Las ramas de los sindicatos, las juntas sindicales, los comités políticos obreros, los clubes de trabajadores, las cooperativas, las sociedades de socorro mutuo, los clubes socialistas, todos estos ambientes, donde se combinaba el mutualismo y el reformismo, contribuyeron —especialmente en las elecciones a los consejos de las escuelas públicas— a que apareciera una «conciencia obrera» estable (Thompson, 1967; Crossik, 1978: 245). En todos predominaban los hombres: la familia, la comunidad y el puesto de trabajo estaban separados por el género. La identidad que le confería su trabajo no era el único elemento de la vida de un militante, pero faltaba aquel intenso compromiso que había caracterizado al cartismo y que era el fruto de la explotación tanto en la fábrica como en la vida familiar o de la comunidad.

4. La formación de clase aumentó en los tres primeros elementos del modelo IOTA, pero el cuarto la rebajó. Los sindicatos buscaron el apoyo de los partidos y la elite estatal contra los empresarios renovando las alianzas interclasistas segmentales normales en la reciente democracia de partidos británica. Los tecnócratas del Estado y algunos de la clase media demostraron su simpatía. Es probable que la mitad de los sindicalistas tuvieran derecho al voto y que los dos partidos compitieran por ellos para evitar la aparición de un partido laborista independiente. El lenguaje de la democracia de partidos in-

terclasista comprometió las reivindicaciones y rebajó las *alternativas* socialistas.

Así pues, el desarrollo de los sindicatos llevó en sí la contradicción entre el reformismo socialista y las alianzas segmentales con un liberalismo incorporador. No había una sola clase obrera. La mayor parte de los afiliados recibían salarios por encima de la media y disfrutaban de seguridad y de especialización profesional. Unos eran hombres y estaban dentro; otros, o estaban fuera o eran mujeres. Sin embargo, la unidad y la agresividad continuaron aumentando. Los sindicatos y las huelgas contaban con un apoyo masivo que no habían conocido las organizaciones artesanas tradicionales, y ampliaban los grados dentro de una misma industria o localidad para crear algo más que lo que Hobsbawm ha llamado «alianzas de monopolios locales de empleo y de fábricas cerradas» (1968; 179 a 203). Para no perdernos en lo específico de cada industria, recordemos que el modelo se repetía a escala nacional: prácticamente todos los sindicatos aumentaron la densidad y la afiliación con el TUC y el partido laborista; la mayor parte de los aumentos tuvieron lugar en dos asaltos, 1889-1892 y 1911-1914 (como en todos los países, a medida que el desarrollo, la concentración y los ciclos comerciales del capitalismo se producían por todo Occidente); y hacia 1914, la densidad varió menos entre las industrias que a principios del periodo. En casi todos ellos la densidad estaba ahora por encima del nivel seccionalista del «25 por 100». Los sindicatos formaban ya parte, con toda naturalidad, de las relaciones laborales, lo cual resulta sin duda impresionante, dada la variabilidad de las condiciones y de los procesos de trabajo de una a otra industria. Ello nos obliga a explicar el auge de la clase obrera no tanto como una respuesta al proceso de trabajo directo sino a las características difusas del conjunto de la economía y el Estado.

Las relaciones de producción importan en el sentido más general: se había extendido en la economía una diferencia cualitativa y dicotómica entre el capital y el trabajo, en tanto que comenzaban a desaparecer otras formas de empleo —trabajo doméstico externo, subcontrataciones, empleo eventual—, especialmente entre los hombres. Las dos primeras quedaron de hecho relegadas a las minorías; la tercera era predominantemente femenina, no ya típica de todo trabajador no especializado. Una gran mayoría de los trabajadores capaces de desarrollar una acción colectiva, cualquiera que fuera su grado de cualifi-

cación o aunque no tuvieran ninguna, establecían contratos formales de trabajo con un empresario-gerente. Existían, pues, dos clases, en el sentido específico que dieron al concepto Marx y Engels, dentro de un sistema extensivo y difuso, reconocido como tal por ellas mismas. Auges y retrocesos económicos, jornadas, salarios, costes, precios, oferta, demanda, producción, consumo y competencia, nacionales e internacionales, imponían la uniformidad de la respuesta por parte de ambas. Los cierres y las huelgas nacionales, el arbitraje del gobierno y los acuerdos a escala nacional se hicieron costumbre. En 1899 hubo un amplio acuerdo respecto a la industria; en 1910 se firmaron siete (Marks, 1989: 86).

Estas mismas fuerzas expandieron la identidad de clase de los empresarios. Su ofensiva coordinada, que sólo movilizó una represión policial y legal, se basaba ante todo en la organización económica: cierres nacionales, organización nacional del trabajo esquirol (protegido por la ley y la policía) para aguantar los conflictos largos sin entrar en competición mutua. Cuando los empresarios se organizaron a escala nacional, desaparecieron los intersticios. Finalmente, el seccionalismo artesano estaba derrotado.

Pero las victorias de los empresarios tuvieron un precio. Creció la capacidad de organización de los trabajadores, especialmente en las cuatro industrias (mecánica, minería, transporte y empleo estatal) que formaban ahora el núcleo de la clase obrera. La inserción de los artesanos mecánicos en la industria los transformó en líderes gracias a la organización y el control del mercado de trabajo. La fábrica grande, los talleres ferroviarios o las minas, localizados en comunidades donde residía una sola clase, brindaron a los obreros un espacio donde desarrollar su solidaridad colectiva sin encontrarse con el patrón. La sociedad anónima, especialmente en la minería, proporcionó aún mayor espacio porque situó a las «masas aisladas» fuera del control directo del dueño (lo que, según demostraron de modo clásico Kerr y Siegel, 1954, aumentó la solidaridad de clase). La movilidad característica de los trabajadores del transporte les permitía organizar contactos entre los oficios dispersos; los obreros necesitaban una economía nacional conjunta y estos transportistas se encontraban en una situación idónea para transmitir mensajes discursivos que abarcaran una mano de obra nacional. La importancia del empleo estatal también contribuyó, porque los trabajadores de un inmenso astillero naval, de una pequeña oficina de correos o de una escuela no suelen interactuar con un «patrón», sino con una administración imperso-

nal, responsable ante unos jefes políticos divididos en facciones, y a menudo tendentes al compromiso. Ambos bandos se enfrentaban en el mismo terreno, el territorio del Estado nacional; cada uno de ellos tenía que asumir los nuevos poderes del otro; ambos se sentían inseguros cara al futuro y ambos mostraban un comportamiento ambiguo en sus propias estrategias económicas.

Las estrategias políticas del régimen y de la clase trabajadora

Cuando el trabajador colectivo (masculino) se vio abocado a la política para luchar por sus intereses, se encontró con las cristalizaciones del Estado. Algunas de las tradiciones políticas que se habían salvado de la quema estuvieron vigentes durante todo el periodo. Los trabajadores podían verse obligados a elegir entre la economía política liberal o el paternalismo conservador (que aún tenía muchos partidarios entre ellos), pero la mayoría de los cabezas de familia fueron admitidos a la democracia de partidos en los municipios, en 1867, y en los condados (junto a los trabajadores agrícolas con domicilio fijo), en 1884. El 66 por 100 de los hombres adultos eran ahora elegibles para el voto, incluyendo a más del 40 por 100 de los trabajadores manuales (aunque muchos no pudieron votar debido a ciertas manipulaciones de los procedimientos de registro). Puede que los trabajadores formaran la mitad del electorado. La disminución de los controles particularistas produjo un cambio en la política de los partidos. El sufragio se había extendido seccionalmente, en función de la propiedad, porque los partidos competían por el apoyo obrero. La ley de 1867 fue *Tory*; la de 1884, liberal. En algunas áreas los conservadores dieron satisfacción al economicismo y el mutualismo de los trabajadores (para Preston véase Savage, 1987: 134 a 161), pero en general lo hicieron los liberales (para Londres véase P. Thompson, 1967). Las divisiones partidistas respecto a los aranceles consolidaron las alianzas interclasistas seccionales: en Birminghan, la mecánica favorecía la protección; en Lancashire, el algodón prefirió el libre comercio.

La ampliación de las funciones civiles del Estado hizo que la democracia de partidos adquiriera una gran importancia para la cristalización regional-religiosa «nacional», centrada ahora en el control de la educación de las masas: los trabajadores anglicanos e ingleses se inclinaban más hacia el partido conservador; los celtas e inconformistas eran liberal-laboristas. Fuera de Irlanda esto garantizaba la pertenen-

cia de la mayoría de los disidentes regionales (potencialmente nacionales) a una democracia de partidos nacional. Los dos partidos de masas institucionalizaron por fin una solución casi centralizada a la cuestión nacional. Gran Bretaña era ya un Estado-nación completo (en los términos del cuadro 3.3), al menos en su territorio continental. Pero las nuevas funciones civiles aumentaron también el número de trabajadores del Estado, lo que promovió la sindicación y una conciliación relativamente centralizada, como ha continuado ocurriendo en el siglo XX. Los ayuntamientos, sometidos a la presión electoral de los consejos locales de los sindicatos, aceptaron las tarifas sindicales para los empleados municipales. En 1891 la «resolución sobre el salario justo» del gobierno conservador estableció que los contratos del gobierno central se ajustaran a las tarifas sindicales. Los funcionarios eran conciliadores activos, especialmente en el departamento de Comercio y Exportación. En 1904 el departamento se había acogido a la *Conciliation Act* de 1896 para crear 162 comités de negociación colectiva en la industria. De 1909 en adelante, la legislación liberal las extendió: las bolsas de trabajo ampliaron la consulta de las juntas con los sindicatos y los empresarios, y la inclusión de los fondos sindicales de compensación en la *Health and Unemployment Insurance Act* de 1911 introdujo el núcleo proteccionista de los sindicatos en la administración estatal (Davidson, 1972). La incorporación nacional —reformas centralizadas a cambio de responsabilidad— aseguró la paz.

No obstante, la incorporación a los partidos existentes comenzó a desfallecer en la década de 1890, coincidiendo con una mayor inquietud de los militantes obreros. El congreso del TUC de 1899 votó por una diferencia corta el apoyo a un partido laborista independiente. El *Labour Representation Committee,* fundado al año siguiente, no elaboró otra política que la «vuelta de los miembros obreros al Parlamento» y ninguna organización que no fuera la puramente sindicalista. Pero el juicio Taff Vale de 1901 significó un descubrimiento definitivo: bajo «la ley y el orden de los conservadores» los tribunales consideraban que los sindicatos eran legalmente responsables de los daños que causaran sus miembros durante las huelgas, otra expresión del concepto individualista burgués de los derechos civiles. Los posteriores juicios apoyados por el gobierno conservador descargaron un serio golpe sobre los trabajadores. Desapareció el sindicalismo conservador y los miembros de la LRC se duplicaron en dos años. Los conservadores habían constituido siempre un partido de clase, y

aunque los trabajadores continuaran votándole —especialmente en el sur de Inglaterra, en los *Midlands* y entre los anglicanos—, no lo hacían en calidad de tales, de modo que sus intentos de integrar a los obreros organizados habían fracasado, y ello pese a que conservaba un cierto poder gracias a sus redes de control segmental en las ciudades pequeñas y en las regiones agrícolas.

Pero el partido liberal respondió. Su ala izquierdista, los «nuevos liberales» ofreció garantías mutualistas para los derechos de organización y ciertas reformas sociales: alivio de la pobreza, más educación y otro tipo de asistencia estatal. Así fue como se entrelazó la cristalización ideológico-moral del Estado británico con un nuevo inconformismo liberal. Los estudios sociales de Booth aumentaron en los liberales y los grupos religiosos el escándalo ante la pobreza y el desempleo, que ya se reconocían como hechos estructurales, no achacables a quienes los padecían. También los periodistas, los profesionales y, en contadas ocasiones, los hombres de negocios contribuyeron a aumentar la simpatía moral de los liberales hacia estas situaciones (Emy, 1973: 53). El propio Booth llamó a este programa «socialismo limitado» y, en efecto, era prácticamente mutualista. Con Lloyd George, el partido obtuvo sustanciosos resultados, como puede observarse en su proyecto de 1911 para un seguro de enfermedad y desempleo, así como en el importante cambio hacia un sistema impositivo más directo y progresivo. El Estado pretendía redistribuir y estimular el esfuerzo personal a través de una seguridad regulada por él mismo. Los seguros cubrían sólo a los trabajadores empleados en grandes empresas, pero suponían la unión del Estado, la mayor parte de los sindicatos, los grandes empresarios y las compañías privadas de seguros. Estamos ante el primer reformismo auténtico de la historia, en el sentido que le hemos conferido durante el siglo XX, pero no se debió tanto a la clase obrera como a un partido interclasista, capaz de agrupar a los trabajadores, la clase media y algunas regiones y religiones.

Sin embargo, el partido liberal no era un instrumento ideal para el avance del reformismo. Los dos grandes partidos habían heredado los intereses del antiguo régimen, ya que los *tories* habían sido siempre el partido de la iglesia anglicana, de la agricultura y del capital comercial, y los liberales, el de la industria y el inconformismo. Los *tories* se implantaron mejor en el sur de Inglaterra; los liberales eran más norteños y más celtas (aunque no estaban implantados en Irlanda). En este sentido, ambos eran interclasistas e incluían tanto a

trabajadores como a empresarios. Durante el periodo se produjo el abandono del partido conservador por parte de numerosos empresarios, los liberales incluían a los sindicatos y a los industriales (porque la industria era más septentrional y más celta). Esto creó muchas facciones dentro de los partidos en una época de creciente confrontación industrial. Aparte de Lloyd George, los dirigentes del partido liberal se ocuparon de separar la política de la estrategia social global, por miedo a las divisiones. Se realizaron algunas reformas, pero no se implantó por completo la alternativa global del nuevo reformismo liberal. La evasión resultaba más difícil en los partidos locales. Todos los movimientos obreros consideraban primordial para demandar la ciudadanía política la elección de trabajadores —en la práctica, de los burócratas sindicales— para que los representaran en el terreno político. En Gran Bretaña esta actitud se vio apoyada por el fuerte sentimiento de clase de los militantes. De hecho, la clase obrera británica se preocupó más de su personal y sus medios que de las alternativas, ya que sus tres grandes reivindicaciones afectaban al sufragio universal (aunque el movimiento, dominado por los hombres, apenas prestó apoyo a las sufragistas), los derechos colectivos para los sindicatos y la elección de burócratas sindicales para los cargos públicos. Los liberales se vieron obligados a concederlo para incorporar a la clase obrera.

Los nuevos poderes infraestructurales del Estado acabaron con la antigua irrelevancia de éste para la vida de los ciudadanos. Si no se podía permanecer al margen, era mejor participar en el control de los múltiples y variados costes y beneficios que afectaban a numerosas áreas de la vida social. El sufragio se hacía ahora deseable como símbolo principal de la ciudadanía, y así lo manifestaron sin ambages tanto las feministas como los trabajadores en todos los países. Pero también había desaparecido la explotación política que habían experimentado los trabajadores a mediados de siglo. La carga impositiva y la Ley de Pobres ya no eran tan gravosas; los representantes obreros participaban en el gobierno local y la mitad de la clase tenía derecho a votar. La clase obrera quería el voto para todos los trabajadores. Los liberales no se opusieron, pero tampoco se dieron prisa (en público ponían las mismas objeciones que los trabajadores en privado: el voto femenino), y no habrían extendido mucho el voto de no haber intervenido la guerra. El liderazgo liberal no tuvo otro remedio que reconocer la importancia obsesiva que los derechos colectivos tenían para los sindicatos, y consecuentemente promulgó en 1906, nada más recuperar el poder, la *Trade Disputes Act,* que remediaba el juicio Taff

Vale. Los sindicatos disfrutaban ya de sus derechos de organización, la última gran reivindicación mutualista de la historia británica (hasta el periodo thatcherista), institucionalizada gracias a la tradición liberal-laborista. Si esto hubiera ocurrido en 1820, los trabajadores se habrían sentido incluso contentos de no tener que votar, pero la historia del cartismo y las posteriores luchas por la democracia de partidos, reforzadas por la ampliación de las metas civiles del Estado, lo convirtieron en la pieza clave de la política de clase.

El problema real residía en la selección de los candidatos liberales. ¿Para qué servía el voto si sólo se podían elegir industriales o abogados? Precisamente en aquellos distritos electorales industriales donde los candidatos liberales contaban con mayores posibilidades de resultar elegidos, la clase dividía en mayor medida a sus activistas. En el West Riding de Yorkshire, por ejemplo, los magnates de la industria, no los nuevos liberales, controlaban el partido excluyendo a los candidatos de la clase obrera (Emy, 1973: 289; Laybourn y Reynolds, 1984). Incluso los activistas obreros más moderados sabían que en su supuesto partido se les mantenía lejos del poder real. Por muchas que fueran las reformas políticas y los principios mutualistas que planteara el liberalismo integrador, la camaradería no se veía por ninguna parte. Sus radicales eran tecnócratas racionalistas que se sentían a disgusto con el electorado de masas y se mostraban confundidos ante la mezcla de solidaridad colectiva y ausencia de política del partido laborista. El partido liberal era un partido de notables, no un movimiento social. Y en ello residía su principal debilidad.

La camaradería que brindaba el socialismo —coherente, emocional y totalizadora— se basaba en la idea de que los trabajadores debían dominar su destino. El laborista era, ante todo, un partido con identidad de clase, cuyos dirigentes habían sido obreros. No existía en él la militancia individualista, sino la afiliación colectiva de los sindicatos. Muchos de sus militantes se daban cuenta de quién era su adversario de clase cuando se enfrentaban a la ofensiva coordinada de los empresarios, respaldada por las leyes de los tribunales que declaraban ilegales las acciones de los sindicatos, sentían la amenaza del desempleo y de los ciclos económicos y percibían el patronazgo que los liberales ejercían sobre ellos. El socialismo británico nació del populismo y del inconformismo radical, pero comprendió el nuevo sistema económico. Así, «marxificó» la teoría del valor del trabajo, originalmente pequeño burguesa, y la camaradería de una clase obrera completamente masculina con el concepto de la sociedad como un

todo. Todos los socialistas británicos —desde Hyndman, el discípulo de Marx, al eclecticismo de Tom Mann y William Morris, y el pragmatismo de Keir Hardie, el primer dirigente del partido laborista— compartían una creencia: los males materiales y morales de los trabajadores procedían de las leyes de la economía capitalista, por tanto, había que enfrentarse a ella como una totalidad. La segunda revolución había aumentado la homogeneización de la clase. La ideología y la camaradería socialista estaban en condiciones de proporcionar una comprensión más profunda de las cosas. Tom Jones recordaba el sur de Gales durante las décadas de 1880 y 1890 con estas palabras:

> Durante aquella cruzada, el socialismo se extendió por todos los valles como una nueva religión. Los hombres jóvenes se preguntaban unos a otros ¿eres socialista?, con el mismo tono que emplean los miembros del Ejército de Salvación cuando se preguntan ¿estás salvado? Las perspectivas de los mineros se habían transformado en una sola generación.

Joyce comenta sagazmente:

> Es muy probable que el socialismo no funcionara como un cuerpo de ideas que viene de fuera, sino como una fuerza que rompía décadas de paternalismo y deferencia. Irrumpió en el dominio de la situación que siempre había tenido el patrón ... imponiéndose en la inmediatez cerrada de la comunidad de la fábrica. De esta capacidad para definir los horizontes de los individuos había dependido en gran medida el paternalismo [1980: 229, 335].

Los obreros se organizaban ahora en el plano nacional, como los empresarios, y tenían a su disposición una ideología sistémica para entenderlo. La economía, los empresarios, las leyes hostiles de los tribunales y la ampliación de las funciones del Estado empujaron a los obreros al Estado nacional.

¿Cuál podía ser su alternativa? En este punto, el socialismo se agotó y la clase obrera volvió la mirada al liberalismo y a sus rasgos mutualistas. Antes de 1914 la mayoría de los líderes de la clase obrera carecían incluso de una alternativa reformista. Lo que llevaban ante el Parlamento se debatía poco. Como comentaba cierto funcionario a propósito de sus negociaciones con los dirigentes obreros sobre la *National Insurance Act* de 1911: «No hablan por los suyos, ni saben lo que quieren sus hombres ni pueden obligarlos a obedecerles; es difícil tratar con gente así» (Moore, 1978: 113). No había un proyecto político, ni siquiera abundaban los debates sobre las ideas. El partido

laborista y el TUC lucharon más por los medios y por el mutualismo que por las metas reformistas. Se sabía que los impuestos directos eran mejores que los indirectos (aunque los nuevos liberales llevaban la delantera en este punto) y que las obras públicas aliviaban el desempleo, pero no existía un auténtico programa. Los sindicatos preferían la negociación colectiva voluntaria a la intervención estatal, para desconcierto de los liberales radicales (Emy, 1973: 264, 293 y 294). La clase trabajadora, como en la mayoría de los países, demostraba poco interés por el Estado asistencial. Todos los movimientos obreros desconfiaron de la acción estatal porque ésta los había beneficiado pocas veces y los había dañado muchas.

A todo ello hay que añadir que la cuestión nacional, inserta ahora en una democracia de partidos centralizada, vino a aumentar la desconfianza del partido laboralista hacia el Estado. El nuevo núcleo de la industria, y por tanto del trabajo, se concentraba en Escocia, Gales y el norte de Inglaterra, regiones recelosas del poder del capital. Esto se entrelazó con la mano de obra inconformista, recelosa de la iglesia anglicana oficial. Hasta la Primera Guerra Mundial los obreros no pudieron identificarse con el Estado-nación inglés-británico. Hasta entonces la ideología del Estado pareció siempre conservadora; mejor evitarla (Pelling, 1968: 1 a 18; Heclo, 1974: 89 y 90; Cronin, 1988; Brown, 1971, disiente de esta opinión).

Pero una vez institucionalizados los esquemas del bienestar, los sindicatos participaron en su administración (Marks, 1989: 105 y 106). La participación aumentó enormemente durante la guerra. La clase obrera se topó con los usos reformistas del Estado, y el proceso de incorporación liberal se cambió por el socialismo reformista a raíz de las dos guerras.

Las divergencias entre marxistas, socialdemócratas y mutualistas reflejaron la identidad ambigua de los trabajadores y del movimiento obrero en su sociedad civil-Estado nacional. ¿Era la clase obrera un ciudadano participativo? Después de 1867 y 1884, muchos obreros habían accedido al derecho al voto. Los mineros determinaban sus propios parlamentarios; otros, con una fuerte presencia local, estaban en condiciones de ejercer presiones. Había muchos militantes en el gobierno local y en las juntas escolares. La ciudadanía civil colectiva de los sindicatos se había conseguido, pero había que defenderla de los jueces. El reconocimiento práctico por parte del Estado era mayor que el de los empresarios e incluso, en ocasiones, mayor que el de los políticos. Sin embargo, este Estado conciliador no era *su* Estado,

no era el Estado de una genuina ciudadanía nacional, como demostraban el sufragio restringido, los jueces y el *establishment* anglicano de Londres. Los dirigentes sabían que por muy cauto que fuera su comportamiento moderado estaban siempre fuera de los órganos de decisión del reino.

Resultaba difícil para todos, excepto para los revolucionarios duros o los leales a la alianza liberal-laborista, decidir qué camino tomar desde la ambigüedad de su situación. Las divisiones, la incorporación parcial y la ciudadanía parcial hacían imposible el sindicalismo, pero sobre todo el marxismo. En 1913-1914, en un momento de gran confrontación industrial en el que la política de los liberales y los laboristas no estaba obteniendo concesiones (los políticos dedicaban todo su interés a la crisis irlandesa), el sindicalismo se agrupó. Casi dos mil militantes sindicalistas provocaron una oleada de huelgas nacionales y se formaron sindicatos industriales de mayor tamaño, que, no obstante, cuando se implicaron en la negociación colectiva respaldada por el Estado, no se distinguieron de otros sindicatos. Así pues, la práctica apagó aquel incendio que había sido por poco tiempo el sindicalismo británico (Holton, 1976: 210; Hinton, 1983: 90 a 93). El hecho de que muchos obreros no hubieran estado sindicados antes provocó huelgas «que no iban sólo contra los controles del sindicalismo» (Hyman, 1985: 262).

La negociación colectiva simbolizaba el progreso de la clase obrera, pero apagaba el odio contra el oponente. Como dice Stedman-Jones (y yo he reivindicado en el capítulo 15), con toda su agresividad, el «nuevo sindicalismo» nunca concibió al Estado como «una máquina de coerción, corrupción y explotación, hecha de carne y hueso», tal como se había percibido de 1790 a 1850. El Estado, añade este autor, se consideraba ahora un agente neutral del que se obtenía lo que se deseaba (1974: 479). En el presente capítulo vemos que se trata de un aserto correcto: el Estado era menos coercitivo y menos corrupto, y su explotación no afectaba ya a la vida de los trabajadores en su conjunto.

Se discutió hasta el cansancio si continuar la alianza liberal-laborista o seguir presionando con un partido laborista. Pero era simplemente una cuestión de táctica. En 1906 se había producido un gran avance electoral (este párrafo depende de McKibbin, 1974). Resultaron elegidos veintinueve parlamentarios del Comité de Representantes Laboristas, todos ellos trabajadores y burócratas de los sindicatos, que contrastaban con el resto de la Cámara de los Comunes. Sin em-

bargo, veinticuatro de ellos fueron elegidos como resultado de un pacto electoral con los liberales. El partido laborista creía que si mantenía su presión responsable, los liberales concederían el sufragio universal. En el sufragio limitado, el pacto reportó a los dos partidos ganancias reales aunque restringidas, lo cual era preferible a hacerse una oposición mutua que provocara una victoria conservadora. En las dos elecciones de 1910 el partido laborista obtuvo 40 y 42 escaños, pero sólo una tuvo un candidato liberal. De 1910 a 1914 el partido laborista aumentó su cuota de voto, pero no ganó las elecciones parciales; aún dependía de los sindicatos, pero éstos sólo contaban con una escasa mayoría de miembros para soportar la leva política. Los liberales sólo conservaron los escaños en las zonas mineras en virtud del pacto, pues su activismo de base popular había decaído en los distritos industriales.

Hinton (1983: 80 y 81) cree que si no se hubiera producido la Primera Guerra Mundial la secuencia más probable habría sido el fin del pacto (provocado por la antipatía de los activistas), el desastre electoral para ambos partidos y la reconstitución de un partido liberal centrista, junto a un laborismo genuinamente socialista, que habrían mantenido durante mucho tiempo una democracia de tres partidos. McKibbin (1990) cree que el partido liberal ya no contaba con los votos obreros. La extensión del sufragio, opina, hubiera provocado su decadencia, y la democracia de dos partidos (conservador-laborista) habría reaparecido. Pero la extensión del sufragio se habría producido entre las mujeres y entre los más pobres, es decir, los menos sindicados y probablemente los menos atraídos por el laborismo. Podría haberse implantado una democracia de tres partidos.

Pero intervino la guerra. A partir de 1920 el partido laborista intentó obtener el poder por sus propios medios entre un electorado que había crecido espectacularmente. El partido liberal se había desintegrado, debido en parte a sus divisiones internas de clase y el parte a la política facciosa de Lloyd George y de Asquith. Habría podido evitarse si los dirigentes hubieran sido más astutos. Pero el caso es que los militantes laboristas y la clase trabajadora querían sus propios parlamentarios y los liberales no podían dárselos.

La clase obrera británica se vio empujada por otros hechos hacia el reformismo. Se vio presionada hacia la organización nacional por la represión civil del Estado, ampliada gracias a sus nuevas funciones, y por la agresión de los empleadores. Cuando fue posible, colaboró con los dos partidos para institucionalizar el mutualismo y la incor-

poración. Cuando los conservadores decidieron convertirse en un partido hostil de clase, la clase obrera abandonó el liberalismo por la indiferencia de los activistas liberales y la enemistad de los dirigentes de ese partido. Se convirtió al Estado asistencial mediante la implicación administrativa en los esquemas de los gobiernos liberales y de guerra. Con posterioridad al periodo que estamos estudiando, su programa y sus perspectivas electorales se adaptaron a las consecuencias imprevistas de la guerra total y el sufragio universal, masculino primero y femenino después. Entonces, ideó un programa de socialdemocracia estatista. La política de clase quedaba olvidada, pero a espaldas de sus hombres.

Conclusión

La estrategia de la clase obrera británica, elegida o impuesta, tuvo cuatro determinantes principales:

1. Durante la Segunda Revolución Industrial surgió parcialmente una clase obrera colectiva, como sostiene la teoría marxista. En el terreno económico, esto no se debió tanto a las transformaciones del proceso de trabajo en el lugar de la producción como a la aparición de una economía difusa y total. Los capitalistas experimentaron esta totalidad como un hecho internacional, pero reaccionaron ante ella organizando a escala nacional la agresión de clase contra el trabajo. Para defenderse, se formó una clase obrera más nacional, aunque dirigida por trabajadores especializados con intereses en parte seccionalistas y en parte organizados en mercados internos y segmentales de trabajo. Los sindicatos nacieron en Gran Bretaña como actores de clase, aun cuando perseguían metas seccionales y segmentales. No se resolvieron las ambigüedades de las relaciones del poder económico.
2. Este movimiento en expansión, de carácter masculino, redujo su visceral sentido de la explotación cuando la polarización del empleo lo segregó de las redes familiares y comunitarias. La clase se hacía extensiva, pero, al mismo tiempo, reducía su carácter intensivo.
3. Dado su carácter nacional y político, la ambigua y siempre masculina lucha de clases se «resolvió» en gran parte a través de las cristalizaciones políticas de Gran Bretaña, en primer lugar gracias a la democracia de partidos interclasista, a la cuestión nacional y a la am-

pliación de las funciones civiles del Estado. Estos factores disminuyeron la represión por parte del régimen y del capitalismo, y el socialismo revolucionario y «doppelgängeriano» restringió las variantes sectoriales y regionales de las estrategias de clase y fomentó la institucionalización centralizada del conflicto de clase. La moderación nacional hubo de predominar para impedir un desastre mayor, como habría sido la derrota en la guerra.

4. La forma que habría de adoptar esa moderación nacional de la clase obrera no se había decidido aún en 1914, aunque las posibilidades eran ya menos numerosas. Habría de ser predominantemente mutualista, con ciertos rasgos liberales y reformistas, encarnados en una o dos alternativas políticas, bien en el partido liberal, bien en un partido laborista autónomo.

La mayor parte de los parámetros de la lucha de clases de Gran Bretaña en el siglo XX parecía establecida ya en 1914; la resolución de las ambigüedades se produjo en la interacción entre el capitalismo que dirigió la Segunda Revolución Industrial, y que dio impulso a un movimiento obrero extensivo y político pero ambiguo, y las cristalizaciones civil, democrática y nacional del Estado. He ignorado una importante peculiaridad británica porque, en realidad, se trata de una ausencia: sólo Gran Bretaña careció de unas clases agrarias importantes por sus consecuencias o por su tamaño.

Bibliografía

Ashworth, W. 1960: *An Economic History of England, 1870-1939.* Londres: Methuen & Co.

Bagwell, P. 1985: «The new unionism in Britain: the railway industry». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914*, ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.

Bain, G. 1970: *White Collar Trade Unionism.* Oxford: Clarendon Press.

Bain, G., y R. Price, 1980: *Profiles of Union Growth.* Oxford: Blackwell.

Baines, D. E. 1981: «The labour supply and the labour market, 1860-1914». En *The Economic History of Britain Since 1700.* Vol. 2, ed. R. Floud y D. McCloskey. Cambridge: Cambridge University Press.

Braverman, H. 1974: *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century.* Nueva York: Monthly Review Press.

Brown, K. D. 1971: *Labour and Unemployment, 1900-1914.* Newton Abbott: David & Charles.

Burawoy, M. 1979: *Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism.* Chicago: University of Chicago Press. [Ed. cast.: *El consentimiento en la producción.* Madrid, Ministerio de Trabajo y S.S., 1989.]

Burgess, K. 1985: «New unionism for old? The Amalgamated Society for Engineers in Britain». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.

Clegg, H. A. *et al.* 1964: *A History of British Trade Unions Since 1889.* Vol. I. Oxford: Clarendon Press.

Cronin, J. 1979: *Industrial Conflict in Modern Britain.* Londres: Croom Helm.

— 1982: «Strikes, 1870-1914». En *A History of British Industrial Relations, 1875-1914,* ed. C. Wrigley *et al.* Brighton: Harvester.

— 1988: «The British state and the structure of political opportunity». *Journal of British Studies, 27.*

Crossick, G. 1978: *An Artisan Elite in Victorian Society.* Londres: Croom Helm.

Davidoff, L. 1990: «The family in Britain». En *The Cambridge Social History of Britain, 1750-1950.* Vol. 2: *People and Their Environment,* ed. F. M. L. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press.

Davidson, R. 1972: «Government administration». En *A History of British Industrial Relations, 1875-1914,* ed. C. Wrigley *et al.* Brighton: Harvester.

Deane, P., y W. A. Cole, 1969: *British Economic Growth, 1688-1959.* Cambridge: Cambridge University Press.

Emy, H. V. 1973: *Liberals, Radicals and Social Politics, 1892-1914.* Cambridge: Cambridge University Press.

Feinstein, C. 1976: *Statistical Tables of National Income, Expenditure and Output of the United Kingdom, 1855-1965.* Cambridge: Cambridge University Press.

Friedmann, A. 1977: *Industry and Labour: Class Struggle at Work and Monopoly Capitalism.* Londres: Macmillan.

Gray, R. Q. 1976: *The Labour Aristocracy in Victorian Edinburgh.* Oxford: Clarendon Press.

Hargreaves, J. 1986: *Sport, Power and Culture.* Cambridge: Polity Press.

Hart, N. 1989: «Gender and the rise and fall of class politics». *New Left Review,* núm. 175.

— 1991: «Female vitality and the history of human health». Ponencia presentada en el tercer congreso de la Sociedad Europea de Sociología Médica, Marburg.

Heclo, H. 1974: *Modern Social Politics in Britain and Sweden.* New Haven, Conn.: Yale University Press.

Hills, S. 1981: *Competition and Control at Work: The New Industrial Sociology.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Hinton, J. 1983: *Labour and Socialism.* Sussex: Wheatsheaf.

Hobsbawm, E. J. 1968: *Labouring Men. Studies in the History of Labour.* Londres: Weidenfeld & Nicolson. [Ed. cast.: *Trabajadores.* Barcelona, Crítica, 1979.]

Holton, R. 1976: *British Syndicalism, 1900-1914.* Londres: Pluto Press.

— 1985: «Revolutionary syndicalism and the British labour movement». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.

Hunt, E. H. 1981: *British Labour History, 1815-1914.* Londres: Heinemann.

Hyman, R. 1985: «Mass organization and militancy in Britain: contrasts and continuities». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Histrical Institute/Allen & Unwin.

Joyce, P. 1980: *Work, Society and Politics: The Culture of the Factory in Later Victorian England.* Brighton: Harvester.

— 1989: «Work». En *The Cambridge Social History of Britain, 1750-1950.* Vol. 2: *People and Their Environment,* ed. F. M. L. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press.

Kerr, C. y A. Siegel, 1954: «The inter-industry propensity to strike: an international comparison». En *Industrial Conflict,* ed. Kornhauser *et al.* Nueva York: McGraw-Hill.

Lash, S., y J. Urry, 1987: *The End of Organized Capitalism.* Madison: University of Wisconsin Press.

Laybourn, K., y J. Reynolds, 1984: *Liberalism and the Rise of Labour, 1890-1918.* Londres: Croom Helm.

Lovell, J. 1985: «The significance of the great dock strike of 1889 in British labour history». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.

McKibbin, R. 1974: *The Evolution of the Labour Party, 1910-1924.* Oxford: Oxford University Press.

— 1990: «Why was there no Marxism in Great Britain?». En *Ideologies of Class. Social Relations in Britain, 1980-1950.* Oxford: Clarendon Press.

Marks, G. 1989: *Unions in Politics: Britain, Germany and the United States in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Martin, R. 1980: *T.U.C.: The Growth of a Pressure Group, 1868-1976.* Oxford: Clarendon Press.

Moore, R. 1978: *The Emergence of the Labour Party, 1880-1924.* Londres: Hodder & Stoughton.

More, C. 1980: *Skill and the English Working Class, 1870-1914.* Londres: Croom Helm.
Musson, A. E. 1978: *The Growth of British Industry.* Londres: Batsford.
Payne, P. L. 1967: «The emergence of the large scale company in Great Britain». *Economic History Review,* 2.ª ser., 20.
Pelling, H. 1963: *A History of British Trade Unionism.* Londres: Macmillan.
— 1968: *Popular Politics and Society in Late Victorian Britain.* Londres: Macmillan.
Penn, R. 1985: *Skilled Workers in the Class Structure.* Cambridge: Cambridge University Press.
Pollard, S. 1985: «The new unionism in Britain: its economic background». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.
Price, R. 1983: «The labour process and labour history». *Social History,* 8.
— 1985: «The new unionism and the labour process». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.
Savage, M. 1987: *The Dynamics of Working-Class Politics.* Cambridge: Cambridge University Press.
Shaw, C. 1983: «The large manufacturing employers of 1907». *Business History,* 25.
Stedman-Jones, G. 1974: «Working-class culture and working-class politics in London: 1870-1900. Notes on the remaking of a working class». *Journal of Social History,* 7.
Stone, L. 1969: «Literacy and education in England, 1640-1900». *Past and Present,* 42.
Taylor, A. J. 1968: «The coal industry». En *The Development of British Industry and Foreign Competition, 1875-1914,* ed. D. H. Aldcroft. Londres: Allen & Unwin.
Thane, P. 1981: «Social history, 1860-1914». En *The Economic History of Britain Since 1700.* Vol. 2, ed. R. Floud y D. McCloskey. Cambridge: Cambridge University Press.
Thompson, F. M. L. 1988: *The Rise of Respectable Society: A Social History of Victorian Britain, 1830-1900.* Londres: Fontana.
Thompson, P. 1967: *Socialists, Liberals and Labour: The Struggle for London, 1885-1914.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Webb, S., y B. Webb, 1926: *History of Trade Unionism.* Londres: Longman Group.

Capítulo 18
LA LUCHA DE CLASES DURANTE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 1880-1914: II. ANÁLISIS COMPARADO DE LOS DISTINTOS MOVIMIENTOS OBREROS

Teoría

Con la Segunda Revolución Industrial se produjo la integración nacional de las economías, se endureció la competencia internacional y se comercializó la agricultura en todo Occidente. En todas partes tuvo lugar la concentración del capital, se desarrolló la ciencia aplicada a la industria y evolucionaron las industrias químicas y metalúrgicas, la minería, el transporte y la corporación. Todo ello amplió y masificó la fuerza de la mano de obra urbana e industrial, permitió a los empresarios presionar en materia de salarios y jornadas y causó la pérdida de la especialización de los artesanos. Esta revolución económica, que presenta una sorprendente semejanza en todos los países, obligó a los trabajadores a dar una respuesta igualmente similar —aunque ambigua— a través de organizaciones colectivas.

Expondré en este capítulo los resultados del conflicto entre trabajadores y capitalistas en distintos países, centrándome en un resultado curioso: las semejanzas económicas entre ellos generaron ideologías muy variadas entre los trabajadores —los seis tipos que he distinguido en el capítulo 15— y distintos resultados de la lucha de clases industrial. Rusia se encontraba en el camino de la revolución; Alemania re-

corría una vía casi revolucionaria distinta; Gran Bretaña se encauzaba hacia un mutualismo moderado; los Estados Unidos, hacia un seccionalismo desprovisto de connotaciones socialistas; y Francia debatía aún acaloradamente las seis opciones. El capítulo 19 nos servirá para conocer las luchas no menos variadas en la agricultura del periodo. En ambos casos emplearé el método comparativo, tomando los distintos Estados nacionales como casos independientes. Dejaré a un lado los aspectos no comparativos de los movimientos obreros —la interacción entre las organizaciones nacionales, transnacionales y nacionalistas— hasta llegar al capítulo 21. Abordaré el conflicto de clase en este periodo desde el punto de vista de la interacción de economías agrarias e industriales, similares en lo esencial, contando con la variedad procedente ante todo de las cristalizaciones políticas y, en menor medida, con la estructura de las distintas comunidades de la clase obrera. Esto refuerza una de las principales generalizaciones del presente volumen: la sociedad moderna se estructuró por el entrelazamiento de las organizaciones de poder político y económico.

Como hemos visto en el capítulo 17 para Gran Bretaña, la Segunda Revolución Industrial aceleró los tres tipos competitivos de organización obrera: seccional, segmental y de clase. Dado que todas se influyeron mutuamente, las relaciones entre el capital y el trabajo fueron profundamente ambiguas y no siguieron una única lógica de desarrollo. Con todo, la lucha por la ciudadanía había generado soluciones distintas cien años antes de que las organizaciones de la clase obrera se le unieran. Como ha observado Rokkan (1970: 102 y 103), la lucha entre el capital y el trabajo fue la última en aparecer de las cuatro grandes divisiones del proceso modernizador de Occidente, después de las luchas entre la construcción del Estado central y los regionalismos periféricos, el Estado y la Iglesia y los antiguos regímenes basados en la tierra y la burguesía manufacturera emergente. Por mi parte, añado que los Estados habían sido durante mucho tiempo primordialmente militaristas. Los Estados modernos cristalizaron, así, en las cuestiones «representativa», «nacional» y «civil-militar», antes de que apareciera la clase obrera. Mientras que capitalistas y trabajadores respondieron de modo semejante, y ambiguo, en todo Occidente a los cambios igualmente similares en el terreno de la producción, la política de la clase trabajadora difirió considerablemente por el influjo de estas cristalizaciones.

A este complejo político-económico subyace una tendencia fundamental. Cuando el Estado favoreció la incorporación al menos de

una parte de los trabajadores a la democracia de partidos, las reivindicaciones políticas de aquéllos quedaron separadas de las demandas económicas. En este contexto, las organizaciones seccionales, segmentales y de clase se desarrollaron en paralelo, y las dos primeras disminuyeron la potencial unidad de clase. En consecuencia, también las ideologías socialistas se hicieron más economicistas y moderadas, abocando la mayoría de las veces al mutualismo o al sindicalismo, e incluso cuando se plantearon metas revolucionarias carecieron de la unidad de clase imprescindible para lograr sus fines. Sólo allí donde el régimen no hizo concesiones democráticas a una parte de los trabajadores, pudo imponerse la unidad de clase al seccionalismo y al segmentalismo. Y sólo en estos casos se llegó al reformismo agresivo o a la revolución.

La argumentación no es original. Naturalmente, está tomada de la famosa declaración de Lenin de 1902: «La historia de todos los países demuestra que cuando la clase obrera cuenta únicamente con sus propias fuerzas, sólo es capaz de desarrollar una conciencia sindicalista» (1970: 80).

Por «conciencia sindicalista» Lenin quiere decir economicista, ya que los estrictos intereses sindicales requieren también una legislación mutualista que garantice la libertad de organización. Pero Lenin añade que los elementos del socialismo llegan desde fuera a las luchas obreras, «a través de los representantes cultos de las clases altas, es decir, de los intelectuales», «con independencia del crecimiento espontáneo del movimiento obrero».

En parte tenía razón. Las tesis centrales del marxismo ortodoxo, su énfasis en las relaciones de producción, el proceso de trabajo y la plusvalía, no bastan para explicar la aparición del socialismo de la clase obrera. Tales experiencias económicas no producen por sí mismas un socialismo revolucionario, en determinadas ocasiones ni siquiera generan reformismo, ya que la agitación puede ser más seccional que de clase (*cf.* Marks, 1989: 15). Pero la segunda mitad de la argumentación leninista —el socialismo como aportación de una intelectualidad exterior— no es correcta (como el propio Lenin acabó por comprender). El socialismo es tanto un producto de las clases trabajadoras *como* de la intelectualidad, pero sólo cuando estas experiencias distintas desde el punto de vista productivo se fusionan a causa de una explotación política común.

A este propósito, me serviré también de otros autores más recientes. Wuthnow (1989, tercera parte) ha destacado la influencia de los

Estados en el socialismo del periodo, aunque no ha elaborado una teoría general de ellos. Lipset sostiene, como es bien conocido, que la democracia de partidos desactivó el socialismo obrero (1977, 1984). Lipset cree que los Estados constituyen un continuo político, que va del Estado feudal al liberal y que permite predecir el alcance y la forma del socialismo de los trabajadores. Así, afirma que los regímenes «feudales» generaron un socialismo revolucionario; los mixtos, un socialismo reformista; y los liberales, ninguno. En efecto, tiene, como veremos, bastante razón. Lo que yo rechazo es su empleo exagerado del término «feudal» y su concepto excesivamente benévolo de la historia de la clase trabajadora y la democracia (especialmente en América), que minimiza la represión y descuida las diferencias civiles y militares entre los Estados. Y, como todos los demás, descuida también la cuestión nacional.

Los Estados no son unidimensionales. En este volumen hemos visto cuatro tipos principales de cristalización estatal. Puesto que la cristalización capitalista se dio en todos los casos, no resultará muy útil para predecir la variabilidad de los resultados de clase a lo largo del periodo (excepto para el caso extremo de los Estados Unidos). El militarismo y la creciente implicación civil de los Estados ayudarán más, aunque de forma irregular. Pero son las cristalizaciones nacional y representativa las que explican mejor la variabilidad de las luchas entre el capital y el trabajo.

Datos comparativos sobre los movimientos obreros nacionales

Veamos unos cuantos datos sobre los movimientos obreros en los cinco países que estudiamos, añadiendo en este caso Suecia. Después, abordaré un análisis detallado de cada uno de ellos, prefiriendo Rusia a Austria, ya que sobre esta última existen muchos menos estudios que sobre la primera[1].

El cuadro 18.1 muestra la proporción de miembros de los sindicatos respecto a la mano de obra civil no agrícola a partir del momento en que contamos con datos para todos los países.

[1] En los dos casos existe una carencia de datos, que quizás remedien las recientes revoluciones ocurridas en el este de Europa, debido a la despreocupación por el componente *nacional* de las luchas de sus respectivos proletariados.

CUADRO 18.1. *Afiliación sindical como porcentaje de la mano de obra civil no agrícola, 1890-1914*

	Austria	Gran Bretaña	Francia	Alemania	Estados Unidos	Suecia
1890	1,0	12,2	2,2	3,2	3,5	1,2
1895	2,0	11,6	4,0	2,7	3,5	1,6
1900	2,3	13,7	4,2	5,9	7,8	7,0
1905	3,4	14,0	6,6	10,2	14,3	10,2
1910	6,5	18,8	8,1	13,5	12,5	11,0
1914	6,5	23,6	8,3	12,5	13,4	12,2

Nota: Las cifras de mano de obra no agrícola (MONA) excluyen también a las fuerzas armadas. Todas las estimaciones proceden de extrapolaciones en línea recta de los datos disponibles para otros años.
Austria: Afiliación sindical - *Annuaire Statistique de la France* (1913: 183); 1914 es en realidad 1912. MONA - Bairoch *et al.* (1968: 85). Todas las cifras pertenecen sólo al *Reichshalf* austriaco.
Gran Bretaña: Afiliación sindical - Bain y Price (1980: 37). MONA - Mitchell (1983: 171). Los años son 1891, 1896, 1901, 1906, 1911 y 1914. MONA estimada para 1896, 1906 y 1914.
Francia: Afiliación sindical - Shorter y Tilly (1974: apéndice B). MONA - Mitchell (1983: 163). MONA estimada para 1890 y 1914.
Alemania: Afiliciación sindical - Bain y Price (1980: 133) excluyendo las asociaciones de empleados asalariados. MONA - Mitchell (1983: 164). Las cifras son para 1882, 1895 y 1907. Las cifras de la MONA se estiman a partir de éstas.
Estados Unidos: Lebergott (1984: 386 y 387). Es imposible comparar las cifras de la mano de obra estadounidense con las de otros países. Las fuentes de Lebergott excluyen a los sirvientes domésticos (Bain y Proice los incluyen, pero entonces cuentan dos veces a los individuos con dos trabajos en el mismo año; los números de su afiliación incluyen a los miembros canadienses). Puede que la densidad de mis cifras sea algo alta, quizás en un 1 ó 2 por 100.
Suecia: Afiliación sindical - Bain y Price (1980: 142). MONA - Bairoch *et al.* (1968: 114).

Las cifras son sólo aproximadas. Los registros sindicales y gubernamentales contienen muchas imprecisiones y las estadísticas nacionales se elaboraron empleando métodos distintos. Aquí excluiré la agricultura y las fuerzas armadas, pues aunque las cifras de sindicación son muy bajas en estos ámbitos para todos los países, presentan inmensas variaciones de un país a otro.

La afiliación fue minoritaria en todos los países a lo largo del periodo. En 1914 las tasas británicas, que eran, con mucho, las más elevadas, ascendían a sólo una cuarta parte de la mano de obra no agrícola. Dado que la mayoría de los afiliados eran hombres en todas partes, la densidad femenina era menor al menos en un tercio. Pero el cuadro muestra un crecimiento continuo de la afiliación durante el periodo. El análisis por industrias revela una vanguardia similar a la británica (examinada en el capítulo 17): en 1914 la densidad se apro-

ximaba al 50 por 100 entre los trabajadores especializados (hombres) de la minería, el transporte, la construcción y la industrial metalúrgica. en todas partes. Debido a la sorprendente semejanza que presentan las distintas industrias y ocupaciones en todos los países, pocas veces analizaré en este capítulo las relaciones dentro de una industria concreta. A menos que me interese destacar lo contrario, el análisis de Gran Bretaña puede considerarse una aproximación a lo que ocurría en las industrias de vanguardia de otros países.

CUADRO 18.2. *Porcentaje de mano de obra civil no agrícola en huelga, 1891-1913 (promedio de cinco años)*

	Austria	Gran Bretaña	Francia	Alemania	Estados Unidos
1891-1895	—	2,5	1,0	0,1	2,7
1896-1900	1,4	1,1	1,1	0,7	2,3
1901-1905	1,2	0,6	1,6	1,2	2,9
1906-1910	2,2	1,3	2,5	1,4	—
1911-1913	2,2	5,0	2,0	2,0	—

Fuentes: Mano de obra: Véanse notas al cuadro 18.1. *Huelgas:* Austria - *Annuaire Statitisque de la France* (1913: 184). Gran Bretaña - Cronin (1989: 82 y 83). Francia - Perrot (1974: I, 51). Alemania - Cronin (1985: Cuadro 3.4); cifras de los sindicatos libres, 1890-1889; cifras oficiales, 1899-1913. Estados Unidos -Edwards (1981).

Las diferencias entre las densidades de los sindicatos nacionales proceden en gran parte de los distintos niveles de urbanización e industrialización. No existen retrasos significativos que resulten particularmente compatibles o incompatibles con los sindicatos según las simpatías o antipatías ideológicas, aunque la densidad sindical en Francia es algo más baja de lo esperado. Esto puede atribuirse tanto a errores en los datos franceses como a la temprana aparición de un sindicalismo francés característico, donde la afiliación se limitaba a los militantes, que movilizaban a trabajadores no afiliados en las huelgas y manifestaciones. Ante todo, con la industrialización, los sindicatos se convirtieron en el normal instrumento de los trabajadores varones, primero, y de las mujeres y hombres no especializados, después, para organizarse con el objetivo de poner remedio a sus problemas. El sindicato fue la respuesta colectiva del trabajador al capitalismo industrial, un elemento importante del concepto marxista de trabajador colectivo.

Las tasas de huelga se emplean de modo convencional para indicar la militancia económica de este trabajador colectivo. El cuadro 18.2 presenta la proporción de la mano de obra civil no agrícola que participó en huelgas. He preferido esta medida a otras dos. El número de jornadas perdidas se ve afectado por cada una de las grandes huelgas, de ahí que fluctúe erráticamente, mientras que el número de huelgas aparece hinchado por muchas huelgas pequeñas, que reducen la militancia general.

Las huelgas no abundaban; de hecho, la frecuencia anual no rebasó el 4 por 100 de la mano de obra, aunque una oleada, como la que se produjo en 1912 en Inglaterra, podía doblar el porcentaje. La revolución rusa de 1905 las multiplicó por diez. A lo largo del periodo aumentaron, aunque no de modo uniforme, y no hubo un crecimiento significativo en los Estados Unidos. En la mayor parte de las décadas hubo una frecuencia similar de huelgas, pese a los distintos niveles de industrialización que presentaba cada país.

En todos los países se notó la difusión transacional del capitalismo, y ello a pesar de las diferencias entre los niveles de industrialización y progreso. Aunque el desarrollo del capitalismo industrial presentaba distintos estilos nacionales (los carteles y *trusts* en Alemania y América, la industria rural en Francia, etc.), todos los capitalistas reaccionaron ante las tecnologías y las condiciones del mercado transnacional. Rusia habría debido pertenecer al pelotón de los atrasados, pero contaba con grandes fábricas dotadas de una maquinaria muy moderna y con métodos de contabilidad y gerencia puestos al día. Los tres sectores más modernizados, el transporte, la minería y las industrias metalúrgicas presentaban un aspecto doble. Aunque en ellos trabajaba el núcleo principal de la clase obrera organizada, habían generado (junto a la industria química) las mayores empresas, con los mercados internos de trabajo más desarrollados, y esto fomentaba una relación de tipo segmental entre el trabajador y el empresario, por la que este último ofrecía una fuerte resistencia a los sindicatos. Pero, como ha observado Grüttner (1985: 126), este dualismo no impidió que la acción de los trabajadores fuera «sorprendentemente parecida» dentro de una misma industria en países muy distintos.

Puesto que los ciclos comerciales y la competencia empresarial rebasaban las fronteras estatales, ocurrió lo mismo con la agresión de los empresarios o los sindicatos. Las huelgas se expandieron por todo Occidente. Los cuatro o cinco países cuyos datos se encuentran dis-

ponibles experimentaron una oleada de huelgas en 1889-1890 y 1899-1900; para cinco tenemos pruebas en 1906, y en 1910-1912 para los seis; entre estas fechas no se produjeron nuevas oleadas en ninguno de ellos (Boll, 1985: 80, 1989; Cronin, 1985; estos autores sugieren una oleada transnacional anterior, en 1870-1873). Los dirigentes socialistas (como vemos en el capítulo 21) crearon también una densa red de comunicación transnacional que ratificaba la teoría marxista esencialmente transnacional de la organización de clase obrera.

Si las relaciones del poder económico se asemejaban, la política, incluida la transnacional, no presentaba un gran parecido. El cuadro 18.3 muestra las variadas fortunas electorales de los partidos socialistas y laboristas. Es cierto que aumentaron sus votos, pero en tasas muy diferentes. Alemania, Austria y Suecia (y otros países escandinavos)[2] se encontraban en un extremo, ya que sus respectivos partidos socialistas eran los más numerosos en 1914, gracias al voto de los trabajadores varones. Al otro extremo, el partido socialista americano luchaba por conquistar el 5 por 100, quizás el 10 por 100 del voto trabajador entre los varones blancos. El partido laborista británico se afanaba también contra los dos partidos burgueses establecidos, con la desventaja de un sufragio restringido. Su voto real minimizaba el apoyo obrero, ya que más de la mitad de los trabajadores varones estaban fuera del sufragio y el partido sólo contaba con candidatos en los distritos electorales mayoritariamente obreros. He ajustado el voto laborista en la segunda línea referente a Gran Bretaña del cuadro 18.3; aunque el ajuste sólo puede ser una conjetura, estimo que el voto laborista británico era comparable al voto socialista francés (e italiano) y algo menor que el de la Europa nórdica.

La cuantificación de las ideologías del empresariado resulta mucho más difícil. Podríamos tomar como indicador aproximado de su extremismo el número de trabajadores muertos por actos de comisión (hubo muchos más por omisión, como demuestran las espantosas tasas de accidentes en minas y fábricas). No existen archivos sistemáticos de los muertos en los conflictos laborales, de modo que he

[2] En 1912 el partido laborista noruego obtuvo el 26 por 100 de los votos, y el 32 por 100 en 1915; en 1913, los socialdemócratas daneses lograron el 30 por 100. Muchos otros países europeos se mantuvieron en los índices anglo-franceses de voto; en 1909 los socialistas italianos obtuvieron el 19 por 100, luego, en 1913, aliados con los reformistas e independientes, lograron el 23 por 100 (las cifras son de Cook y Paxton, 1978).

CUADRO 18.3. *Porcentaje del electorado masculino que votaba a los partidos socialistas en las elecciones nacionales, 1906-1914*

	1906-1908	1909-1911	1912-1914
Austria	21	25	—
Francia	10	13	17
Alemania	29	—	35
Gran Bretaña	5	7[a]	—
ajustado[b]	10-15	14-21	—
Suecia	15	29	33[d]
Estados Unidos[c]	—	—	6

[a] En las dos elecciones de 1910 el partido laborista obtuvo el 6,4 y el 7,6 por 100.
[b] El ajuste se debe a la exclusión de cerca del 34 por 100 de los hombres británicos (casi la totalidad de la mano de obra) del sufragio. Contando con el sufragio masculino adulto, el partido laborista habría duplicado sus candidatos.
[c] Nótese que casi todos los varones negros carecían de derecho al voto.
[d] En las dos elecciones de 1914, los socialistas obtuvieron el 30,1 y el 36,4 por 100.

Fuente: Cook y Paxton (1978).

elaborado unas estimaciones nacionales aproximadas combinando la literatura secundaria de cada país que aparece en la bibliografía del capítulo (véase cuadro 18.4). La violencia contra las personas comenzaba siempre del lado de los empresarios y las autoridades, y prácticamente todas las víctimas fueron trabajadores.

Gran Bretaña presenta el menor número de víctimas; las siete muertes ocurrieron en la década de 1870 y en 1910-1913. Sorprendentemente, es posible que la Alemania semiautoritaria ocupe el segundo puesto. Ocho de las muertes ocurrieron en 1889; tres, en 1899; dos, en 1905; y tres, en 1910-1911. En Francia se produjeron una o dos víctimas en 1872; nueve, en 1891; una, en 1905; y diecinueve y «algunas» más, en 1907. Cabe la posibilidad de que las cifras alemanas, francesas y británicas estén algo infravaloradas, pero, en todo caso, su alcance fue muy inferior al de Rusia o América. Para los Es-

CUADRO 18.4. *Trabajadores muertos en conflictos laborales- 1872-1914*

Gran Bretaña	Alemania	Francia	Estados Unidos	Rusia
7	16	*ca.* 35	*ca.* 500-800	*ca.* 2.000-5.000

Fuentes: Véase texto.

tados Unidos contamos con las estimaciones de los historiadores americanos de la clase obrera, aunque pueden estar infravaloradas, dado que gran parte de los tiroteos y linchamientos de negros en el sur (excluidos de mi total) pudieron deberse a conflictos laborales. Pero ni siquiera en América alcanzó la violencia las proporciones de Rusia. La estimación para este último país es sólo aproximada, ya que los conflictos laborales estallaron en un ambiente generalizado de protestas urbanas y sublevaciones campesinas y nacionales. Pero las diferencias son tales, que debemos creer en su veracidad. Parece que tanto los empresarios como los distintos regímenes respondieron a las acciones industriales de forma muy distinta. Sin embargo, el grado de militarismo interior no se corresponde por completo con sus posiciones en la cristalización representativa del Estado: Rusia era la monarquía más autoritaria, pero los Estados Unidos eran la democracia de partidos más avanzada.

La densidad sindical, las huelgas, los muertos y el voto a los partidos de determinadas ideologías constituyen sólo mediciones aproximadas del socialismo y la militancia obrera. Sin embargo, demuestran una tendencia real: las relaciones económicas tendían a difundir modelos comunes por todo Occidente, mientras que las relaciones políticas diferían. Examinaré ahora de cerca cada uno de los países, concentrándome en sus cristalizaciones políticas. A menos que establezca lo contrario, parto del hecho de que la Segunda Revolución Industrial se difundió de forma muy parecida por todos ellos.

Los Estados Unidos: las cristalizaciones políticas y la decadencia del socialismo

Trece respuestas a la pregunta: ¿por qué fue tan débil el socialismo?

Los estudios de la historia de la clase obrera estadounidense se han centrado tradicionalmente en la suposición del carácter «excepcional» del caso americano, especialmente en la ausencia de socialismo. La pregunta clásica se debe al libro de Sombart *Why Is There No Socialism in America?* (1906, 1976) y ha suscitado al menos trece respuestas (para las revisiones véanse: Lipset, 1977; Fober, 1984; y varios ensayos en Laslett y Lipset, 1974), que cabe organizar en tres grupos, según se achaque esta ausencia al individualismo, al seccionalismo o a la democracia.

Individualismo

1. *Predominio de la pequeña propiedad.* La mayor parte de los colonos eran propietarios de pequeñas granjas, que constituyeron un elemento nuclear de la revolución y de los movimientos jeffersoniano y jacksoniano. La ideología de estos pequeños propietarios se impuso desde el principio. América fue primero incompatible con el «feudalismo», y después con el socialismo (Hartz, 1955; Grob, 1961 subrayan los cinco argumentos basados en el individualismo).
2. *La tesis de la frontera,* propuesta originalmente por Turner en 1893, sostiene que las luchas por la extensión de las fronteras americanas en un clima de violencia, contra un enemigo al que se daba un trato de guerra, produjo un individualismo radical y hostil a cualquier forma de colectivismo. Cuando la frontera se convirtió en un mito de resonancia universal para toda la sociedad estadounidense, generó antes que un enfrentamiento de clase, una lucha por el espacio entre las razas (Slotkin, 1985).
3. *Moral protestante* fomentó el individualismo. Sin una religión oficial, pero con un gran número de sectas protestantes, la sociedad americana empujó a los individuos a resolver con sus propios recursos morales a los problemas de carácter social.
4. *Posibilidades de movilidad* que estimulaban la búsqueda del progreso personal por encima del colectivo.
5. *Prosperidad capitalista* que, difundida entre los ciudadanos americanos, los habría hecho reacios a estorbar las relaciones de la propiedad privada, y los trabajadores habrían desarrollado un espíritu materialista individual.

Seccionalismo

6. *Racismo.* La esclavitud dividió pronto a la clase obrera. La supervivencia de la segregación racial en el sur hasta después de la Segunda Guerra Mundial dificultó la unión de clase entre los trabajadores de las dos razas, especialmente durante la masiva emigración de negros al norte a comienzos del siglo XX. (Laslett, 1974, destaca todas las explicaciones seccionalistas).
7. *Inmigración.* Las oleadas de inmigrantes añadieron divisiones étnicas, lingüísticas y religiosas. Los primeros inmigrantes se habrían atrincherado laboralmente, reforzando el seccionalismo con la estra-

tificación étnica. La inmigración católica de finales del siglo XIX impidió el desarrollo de esta ideología porque la Iglesia se encontraba inmersa en una cruzada antisocialista. Kraditor (1981) afirma que los inmigrantes sentían más apego a la raza que a la clase. Su meta no era crear una comunidad de clase, sino unos enclaves étnico-culturales autosuficientes. Las comunidades de trabajadores, lejos de consolidar al trabajador colectivo, impidieron su aparición.

8. *Diversidad continental.* El tamaño y la diversidad de América produjeron una industrialización muy distinta de una región a otra. Los trabajadores quedaron confinados espacialmente dentro de sus industrias, y la industria en general continuó expandiéndose por regiones donde no existían los sindicatos. Por otra parte, el hecho de que los trabajadores emigraran más impidió el asentamiento de comunidades de clase obrera hereditarias. Nunca hubo, en realidad, una solidaridad nacional de clase.

9. *Sectarismo.* La clase obrera americana se encontraba internamente dividida por facciones enfrentadas, tales como los *Knights of Labor,* la *American Federation of Labor,* los sindicalistas, los partidos socialistas rivales, el *Congress of Industrial Organizations* y el partido comunista. Si hubieran luchado más contra el capital y menos entre sí, los resultados habrían sido distintos (Weinstein, 1967; Bell, 1974).

La democracia americana

10. *La temprana democracia masculina.* Los Estados Unidos contaban con un sistema democrático para los hombres adultos de raza blanca en la década de 1840, antes del surgimiento de la clase obrera. En famosa expresión de Perlman (1928: 167), «el regalo gratuito del voto». Pero se trata de una concepción optimista que avala el punto de vista de la democracia americana, según la cual los trabajadores podían resolver sus problemas a través de la democracia de partidos, sin necesidad de recurrir a otras alternativas ideológicas como el socialismo (Lipset, 1984).

11. *Federalismo.* La Constitución estadounidense establece la división de poderes entre un gobierno federal relativamente débil (con una capital pequeña y no industrial) y unos gobiernos estatales más fuertes, así como en tres ramas de gobierno: presidencia, las cámaras del congreso y el poder judicial. La atención de los trabajado-

res hubo de dividirse, pues, entre los distintos organismos gubernamentales, y este hecho debilitó la unidad y la politización de clase a escala nacional (Lowi, 1984).

12. *El sistema bipartidista.* Los dos partidos interclasistas se encontraban ya institucionalizados cuando surgió la clase obrera. Las elecciones al Congreso se producían en distritos electorales muy amplios; las presidenciales, en un solo distrito nacional. Los terceros partidos, incluidos los obreros, no pudieron avanzar partiendo de una representación minoritaria en la política nacional. Puesto que la clase obrera no tenía al principio fuerza suficiente para elegir al presidente o a los senadores, volvió la mirada a los partidos pequeño burgueses que podían ganar las elecciones, en vez de crear su propio partido, que no habría podido ganarlas. No obstante, la debilidad de los partidos era mayor en el sistema federal que en las políticas más centralizadas, y este hecho redujo la disciplina de los partidos y los hizo menos sensibles a un programa de clase más amplio.

13. *La represión.* Existe un punto de vista más pesimista sobre la democracia americana que resalta el extraordinario nivel de represión, jurídica y militar, que se ejerció contra los movimientos de la clase obrera americana (Goldstein, 1978; Forbath, 1989).

Los trece argumentos ayudan a explicar la debilidad del socialismo americano en términos comparativos. Pero, ¿determinaron, en última instancia, el resultado? Es decir, ¿cómo podrían haber triunfado los socialistas con todos estos enemigos en su contra? Sin embargo, ni los enemigos ni las peculiaridades fueron tan grandes en América como se ha pretendido. La excepción americana no justifica que llegara a representar uno de los extremos de un continuo en las relaciones de clase. Los Estados Unidos nunca difirieron cualitativamente de otros casos nacionales. En todo caso, las diferencias fueron de grado, y ya hemos visto que el socialismo británico fue mínimo antes de 1914. Así pues, las explicaciones que se basan en la excepcionalidad y el extremismo americanos —la mayoría en lo primero—, como fenómenos originales y duraderos, sólo aportan una verdad limitada. El extremismo americano nació durante este periodo, como veremos enseguida.

El desarrollo de la clase obrera americana hasta la Primera Guerra Mundial

Me centraré en primer lugar en la naturaleza y duración del extremismo americano. Varios autores coinciden en que se basó más en las relaciones políticas que en las económicas (Montgomery, 1979; Foner, 1984: 59; Marks, 1989: 198). Los Estados Unidos se distinguieron de los países continentales de Europa en que allí el socialismo nunca superó el 6 por 100 de los votos obtenidos por el partido de Eugene Derby en las elecciones presidenciales de 1912. Nunca tuvo tampoco, como Gran Bretaña y su *Commonwealth* blanca, un partido laborista dominado por los sindicatos; en definitiva, ni un socialismo significativo ni un partido laborista dominado por el sindicalismo. Pero el extremismo no fue únicamente político, ya que durante el siglo XX también los sindicatos americanos han sido extremistas y, sin embargo, débiles. En 1990 la afiliación sindical americana no llegaba al 15 por 100 de la mano de obra, muy lejos de los porcentajes de los países capitalistas avanzados, y parece ser que continúa decayendo. En 1958 el presidente Eisenhower —con motivo de la aprobación de la *American Federation of Labor* (AFL)— rebautizó el *May Day* como *Law Day* a la luz de la historia de la clase obrera americana (como ya hemos visto). Yo mismo, como residente extranjero, me he sentido siempre sorprendido por la total ausencia de los sindicatos de la política nacional o estatal. El *Manifiesto comunista* les resulta tan extraño a los estudiantes de las universidades americanas como el poema épico de Gilgamesh.

¿Cuándo aparecieron los extremismos político y económico? Los cuadros 18.1 y 18.2 muestran que la sindicación y la participación en las huelgas antes de 1914 era en Estados Unidos más o menos la que cabría esperar de su grado de industrialización. En efecto, conforme al estudio comparado más preciso, el que elaboró Holt (1977: 14 a 16) sobre las industrias del hierro y el acero, la densidad sindical americana era del 15 por 100 en 1892, en la misma época en que Gran Bretaña contaba con un 11-12 por 100. Las primeras estimaciones contemporáneas de la afiliación nacional indican que, desde mediados de la década de 1850 a mediados de la década de 1860, la densidad británica era de casi un 6 por 100 y la americana del 5 por 100. En la década de 1870 la densidad británica alcanzaba un 10 por 100 y la americana un 9. En 1880 la densidad americana estaba por debajo del 4 por 100, la mitad de la cifra británica, antes de iniciar una nueva

subida. (Ulman, 1955: 19; Rayback, 1966: 104, 111; Montgomery, 1967: 140 y 141; Fraser, 1974: 76). Puesto que la industrialización era mayor en Gran Bretaña, cabría esperar que su densidad sindical hubiera sido más alta y más estable. Sin embargo, las cifras demuestran que los sindicatos americanos no eran más débiles al principio que los británicos, como cabría suponer del menor grado de industrialización de los Estados Unidos.

Las cifras son aproximadas, pero incluso otras más precisas no nos proporcionarían más que mediciones toscas de la organización de clase. Una densidad sindical o una tasa de huelgas elevadas podrían indicar tanto una fuerte conciencia de clase trabajadora como ese potente «sindicalismo de los negocios» que suele considerarase un hecho típicamente americano. Un análisis del carácter de la clase trabajadora americana del siglo XIX debería comenzar por establecer tres puntos:

1. Durante gran parte del siglo XIX, los trabajadores americanos no mostraron ningún atraso respecto a los europeos, dentro de una industrialización comparable. Participaron activamente en las primeras luchas por el sufragio. Es cierto que no necesitaron movimientos como el cartismo o las insurrecciones de 1848, pero también lo es que el republicanismo populista creó una actitud marcadamente radical en los militantes americanos. Dado que los trabajadores se encontraban sobre todo en el norte, la decisiva cuestión de los derechos de los estados no introdujo divisiones entre ellos. Radicales, aunque no revolucionarios, los sindicatos americanos se diferenciaron poco de los británicos. Las pequeñas hermandades artesanas cultivaron la respetabilidad y los planes de cobertura, intentaron imponer prácticas unilaterales de fijación de tarifas, emplear sus propios obreros, restringir la entrada a su oficio y conseguir una organización a escala regional, primero, y nacional, después. Se dieron, además, varios intentos de crear sindicatos industriales generales, que fueron vulnerables a los ciclos comerciales y las ofensivas del empresariado. Algunos sindicatos demostraron simpatía por el socialismo, aunque la mayoría fueron proteccionistas o moderadamente mutualistas, con la esperanza de consolidar su propia «legislación», una experiencia muy similar a la de Gran Bretaña durante el siglo XIX. Antes de la década de 1870 no existía apenas en América un extremismo de izquierdas o de derechas (Ulman, 1955; Rayback, 1966: 47 a 128; Montgomery, 1967, 1979: 9 a 13; Wilentz, 1984).

Sin embargo, aparecía ya uno de los elementos divisorios en la vida de la clase obrera americana. En otros países industrializados, los lazos de la familia y de la comunidad local sostenían la solidaridad obrera, pero en las ciudades americanas, las comunidades étnico-religiosas, cuyas organizaciones llegaban con mayor facilidad que los sindicatos a la política local de patronazgo que practicaban los dos partidos, disminuyeron ese apoyo (Hirsch, 1978; Katznelson, 1981).

2. Los trabajadores americanos respondieron entonces al modo clásico a una Segunda Revolución Industrial más intensiva que la británica. Gracias a la implantación masiva del ferrocarril, las industrias americanas, la minería y los bancos se consolidaron en unidades más grandes a partir de 1870. Mientras se proscribían de forma errática *trusts* y monopolios, prosperaban los *holdings.* Hacia 1900 comenzó un periodo de fusiones y apareció el concepto de gestión científica de la empresa. En 1905 las cien primeras compañías copaban el 40 por 100 del capital industrial del país, el mayor porcentaje en comparación con cualquier otro país. La corporación representó quizás la ofensiva empresarial más fuerte contra la autonomía artesana, las cualificaciones, los salarios y las condiciones laborales en cualquier parte. La acometida se produjo especialmente contra los artesanos y los sindicatos. La desespecialización y el antisindicalismo tuvieron su punta de lanza en la contratación masiva de esquiroles, en su mayor parte inmigrantes o emigrantes de la agricultura. Los empresarios mejoraron su capacidad de organización, que se hizo más agresiva e ingeniosa. Infiltraron espías en todos los niveles sindicales; ni siquiera se salvó el comité ejecutivo de la AFL. La empresa Goodyear Rubber contrató un «escuadrón volante» de 800 hombres, a los que formó durante tres años para desempeñar cualquier trabajo en la planta, en caso de huelga (Montgomery, 1979: 35, 59). A finales del siglo XIX, los extremistas eran los empresarios, no los trabajadores.

Conforme a la argumentación expuesta en los capítulos 15 y 17, el extremismo de los empresarios habría debido aumentar la unidad y la agresividad del movimiento obrero. Y así fue. Los trabajadores respondieron con oleadas de huelgas y la expansión de los sindicatos. La huelga de masas, el arma más potente del sindicalismo, fue tan común en Estados Unidos como en Gran Bretaña o Alemania durante las tres décadas posteriores a 1870. En 1872, 100.000 trabajadores de la construcción se pusieron en huelga en Nueva York para reivindicar la jornada de ocho horas. Al año siguiente hubo manifestaciones masivas contra el desempleo al menos en las ocho mayores ciudades del

norte. Una huelga ferroviaria en 1877, apoyada por otras que se convocaron en solidaridad y de manifestaciones populares en muchas ciudades, reunió «al mayor número de personas participantes en un conflicto laboral durante el siglo XIX» y dotó a los «obreros de una conciencia de clase a escala nacional», dice Rayback (1966: 135 y 136). La década de 1880 conoció un «gran movimiento sindical», los *Knights of Labor,* que reivindicaron la solidaridad de clase entre los artesanos, las líneas industriales y la oposición de clase al capital. En 1886, los *Knights* contaban con 703.000 miembros, el 10 por 100 de la mano de obra no agrícola. En el *May Day* de 1886 se celebró una huelga general por la reducción de la jornada; participaron 190.000 trabajadores y otros 150.000 se beneficiaron de la reducción sin huelgas. Al acabar el año, estaban en huelga 100.000 *Knights.*

Como muchos sindicatos de masas anteriores, los *Knights* no pudieron estabilizar su organización. La AFL comenzaba ahora a coordinar predominantemente los sindicatos artesanos. Hubo otras oleadas de huelgas. Las secundarias de 1889-1894 fueron dos veces mayores que cualquiera de las siguientes (Montgomery, 1979: 20 y 21). En 1892 una huelga general paralizó durante tres días Nueva Orleans; en 1894 el norte y el sur se vieron afectados igualmente por una oleada de huelgas y marchas de «ejércitos de desempleados», a las que siguió la huelga de la Pullman que afectó la red nacional de ferrocarriles. En 1897 y 1898 se declararon en huelga 100.000 mineros. En 1902-1904, la *Western Federation of Miners* entró en huelga, llamando a la «revolución total de las actuales condiciones sociales y económicas». En todos los casos hubo participantes que no eran miembros del sindicato en las huelgas y las manifestaciones, muchos de las cuales estuvieron dirigidas por socialistas.

Ni las cifras ni la militancia socialista demuestran un retraso del movimiento obrero americano desde la década de 1870 hasta casi 1900 (el cuadro 18.2 demuestra la primera parte de mi aserto). En Alemania participaron en huelgas 109.000 trabajadores en 1872; 394.000 en 1889-1890; 132.000 en 1900; y casi medio millón en 1905 y 1912. Francia conoció un aumento semejante del número de huelgas (Boll, 1989). Gran Bretaña tuvo oleadas comparables a comienzos de la década de 1870 y en 1889-1893; algo menores en 1894-1895, 1898 y 1908; y un nuevo aumento en 1910-1912, momento en el que partiparon más de un millón de trabajadores (Cronin, 1989: 82 y 83). Las diferencias americanas sólo son patentes al final del periodo, ya que no se produce una escalada del malestar obrero hasta después de

1905. Los observadores socialistas extranjeros, como Engels, Edward Aveling y Eleanor Marx, destacaron la temprana militancia y anotaron aspectos republicanos peculiares del socialismo americano. Los *Knights of Labor* establecían en su constitución: «Declaramos que existe un conflicto inevitable entre el sistema de salarios de los trabajadores y el sistema republicano de gobierno». Pero los socialistas extranjeros esperaban un compromiso creativo entre el republicanismo nativo y el marxismo de los pequeños partidos socialistas, como el de DeLeon y el de Debs. Un partido marxista socialista no parece que hubiera sido posible en América, pero ¿por qué no un partido al estilo del laborista británico y una alianza entre el sindicalismo industrial y el artesano que hubiera dado vida a un único movimiento de clase?

3. La política obrera no estuvo por detrás de la británica (el país con una historia ideológica y política más comparable) hasta casi 1900. En la década de 1870, antes que en Gran Bretaña, los socialistas americanos encabezaron grandes huelgas. Sus ideas influyeron en los *Knights of Labor* para fusionar lo político y lo económico en lemas tales como «abolición del sistema de salarios» y «emancipación de la clase trabajadora». Hubo varios intentos de formar partidos obreros unidos por parte de los sindicatos de la AFL, los *Knights of Labor,* los agricultores y los políticos radicales (véase capítulo 19), lo que reportó éxitos en las elecciones locales y estatales de las ciudades industriales y las zonas agrícolas, antes de que se produjera el avance electoral en Gran Bretaña. Los socialistas británicos consideraban a los americanos un ejemplo a imitar.

En 1893-1894 la AFL estuvo a punto de llegar más lejos. Debatió un programa reformista de once puntos que incluía la jornada de ocho horas, la propiedad pública de los servicios, el transporte y las minas, la abolición de las fábricas explotadoras, los contratos de trabajo y la enseñanza obligatoria. En el preámbulo se exigía un «principio de independencia para la política obrera» y culminaba en una llamada a la «propiedad colectiva para el pueblo de todos los medios de producción y distribución». El documento debía someterse al análisis de cada sindicato y, después, al voto en la reunión de 1894. La mayor parte de las organizaciones lo aprobaron, pero los dirigentes de la AFL, en especial Samuel Gompers, su presidente, se opuso a la politización y organizó su derrota. La constitución de la AFL permitía el voto delegado en mayor medida a los sindicatos nacionales que a los estatales y locales, las principales bases socialistas (Grob, 1961: 141).

La convención de 1894, en parte amañada, no tomó decisiones fundamentales. Se ratificaron las cláusulas concretas, pero la reivindicación de la propiedad pública quedó rebajada a una referida a la nacionalización de la tierra. El preámbulo fue derrotado por 1.345 contra 861 votos, y el programa total, por 1.173 contra 735. Los socialistas se desquitaron votando la salida de Gompers del cargo.

El congreso de 1895 comenzó a definir cuál iba a ser el futuro. Gompers recuperó la dirección concediendo las cláusulas concretas, pero organizó una votación global contra la política de partido. En su ayuda vinieron las constituciones de muchos sindicatos que prohibían la aprobación de candidatos para los cargos políticos, una herencia del sistema de dos partidos interclasistas, en el que los miembros sólo pueden repartirse en función de la política de partido. Además, Gompers retuvo la presidencia hasta su muerte en 1924. Aunque los socialistas movilizaron fuertes minorías (más de un tercio) en varias ocasiones, la AFL rechazó con tenacidad un partido obrero. Por muchas propuestas legislativas que consiguieran pasar los socialistas, el hecho de que la AFL se basara en los dos partidos existentes para realizarlas las convertía en letra muerta.

A mediados de la década de 1890, los sindicatos americanos se habían acercado a la creación de un partido reformista obrero antes que sus iguales británicos. El TUC británico no votó, por poca diferencia, hasta 1899 a favor de un partido laborista, que, en la práctica, carecía de política. El resultado americano quedó bloqueado desde el principio, pero no podemos atribuirlo a la larga lista de explicaciones a la excepción estadounidense ni tampoco, en exclusiva, a las maquinaciones de Gompers. El voto respondía a dos pautas relacionadas entre sí:

1. La «nación» americana estaba muy fragmentada. El factor religioso, importante también en otros países, se encontraba aquí reforzado por la concentración racial, local y comunitaria. La mitad de los miembros y de los líderes de la AFL eran católicos, cuyos delegados ofrecieron muy poco apoyo a las opciones socialistas en los congresos, que, sin embargo, recibieron el respaldo de dos tercios de los protestantes y de los judíos. Describiré las diferencias entre católicos y protestantes durante el periodo en la conclusión a este capítulo.
2. Las diferencias seccionales que separaban a los artesanos de otros trabajadores tuvieron un gran peso. Cinco sindicatos industriales generales, abiertos a todos los grados en la minería, la industria textil y las fábricas de cerveza, aportaban menos del 25 por 100 de la

afiliación de la AFL, pero del 49 al 77 por 100 del voto de izquierdas en los congresos. Los sindicatos artesanos que perdían el monopolio de los mercados laborales, tales como el de los confeccionarios de botas y zapatos, los maquinistas y los carpinteros, ofrecieron un apoyo intermitente. Los sindicatos cerrados, como los de impresores, moldeadores y mecánicos de locomotoras votaron como un solo hombre el «sindicalismo puro y simple» de Gompers (Marks, 1989: 204 a 210, 235 a 237; Laslett, 1974). La constitución de la AFL permitía dominar las elecciones a estos sindicatos artesanos nacionales.

Así pues, el «trabajador colectivo» de la AFL se desgajó a causa de la comunidad local, las características étnicas y religiosas y el seccionalismo artesano. Trataré de explicar ahora por qué no existió un fuerte movimiento nacional de clase.

A partir de este periodo, la clase obrera americana se escindió en distintos «partidos» organizativos. Competían tres tendencias, cada una de ellas predominante en organizaciones diferentes, un desarrollo muy distinto al de otros movimientos obreros. La mayoría de la AFL, y por tanto del movimiento en su conjunto, favorecía el sindicalismo artesano *proteccionista* y *seccional.* En segundo lugar, los sindicatos industriales generales, una minoría dentro de la AFL, intentaron una acción *mutualista* y *de clase.* La afiliación combinada de ambos, como indica el cuadro 18.1, no se aparta de la de los países afines antes de la Primera Guerra Mundial, y sus divisiones no son en sí mismas peores que las que padecían los sindicatos franceses o británicos. Pero los sindicatos industriales de carácter radical apoyaron también a la *International Workers of the World* (los *«wobblies»,* es decir, los *indecisos*), de carácter sindicalista. A partir de 1905, los *wobblies* organizaron huelgas de corta duración de trabajadores poco especializados y marginales, por lo general, mujeres sin derecho a voto e inmigrantes. Los *wobblies* no se empleaban a fondo a la hora de exigir que se pagara a sus miembros (tuvieron sólo 18.000 en 1912, su mejor momento) ni en la negociación de contratos con los empresarios, pero su retórica y las tumultuosas huelgas que provocaron atemorizaron a las clases altas (Dubofsky, 1969). La guerra contribuyó a destruirlos. Entonces, la división adoptó una nueva forma. Los sindicatos industriales fundaron un rival de la AFL, el *Congress of Industrial Organizations.*

La tercera tendencia estuvo representada por el *socialismo reformista* que llevó a la creación de un partido socialista por parte de una

minoría, sobre todo en los sindicatos industriales del oeste. El partido alcanzó los 118.000 miembros en 1912, antes de estancarse. En 1914 se eligieron 1.200 representantes para los cargos de las ciudades y los estados y controló las alcaldías y los municipios de los condados en más de treinta ciudades, casi todas pequeños centros industriales, mineros o ferroviarios. Sin embargo, a partir de 1920 comenzó a decaer y se escindió, y su grupo más activo creó el partido comunista (Weinstein, 1984).

Así, al dividirse en facciones disminuyeron las tres tendencias: el sindicalismo artesano, el sindicalismo industrial y el socialismo reformista. Aunque recibieron un fuerte estímulo de afiliación y militancia en la década de 1930, ni siquiera este fenómeno puede compararse con el equivalente europeo. Fragmentado, el movimiento obrero americano se encuentra agonizante desde la década de 1960. En la actualidad, la forma que domina las relaciones laborales en los Estados Unidos es la ausencia de sindicatos, el predominio de los mercados internos de trabajo y la presencia de privilegios concedidos por el empresario en el sector más estable y empresarial y de un altísimo grado de explotación en el sector secundario.

De este modo, en materia de acción política y económica, tanto la década de 1890 como la de comienzos de 1900 representan el principal punto de inflexión [3]. La identidad de clase a escala nacional y el socialismo emergente retrocedieron entonces dejando paso a una fusión predominante y característicamente americana de localismo, seccionalismo y faccionalismo. Aunque en todas partes encontramos la falla del seccionalismo que separó a los trabajadores cualificados de los no cualificados y en algunos países (por ejemplo, Francia y Alemania) un faccionalismo ideológico, sólo en América los encontramos fusionados, con el añadido de un localismo muy pronunciado. Allí el seccionalismo se correspondió como en ninguna otra parte con las facciones ideológicas y las comunidades locales, debilitando enormemente la identidad y la potencia de la clase obrera. Ahora

[3] Como han tratado de convencerme a menudo algunos colegas estadounidenses, puede que se produjera un segundo punto de inflexión en la década de 1950 (aunque, en mi opinión, menos importante), momento en el que se invirtió (fatalmente, en apariencia) el crecimiento de los años treinta y cuarenta, pero, de nuevo, respondería menos al desarrollo de la economía americana que al resultado de las cristalizaciones políticas. A mi parecer, la suerte del sindicalismo estadounidense estaba echada antes de 1914, pero habría que fundamentar esta afirmación analizando ciertos desarrollos del siglo XX que no abordaré en este volumen.

bien, ¿por qué esa fusión? La cronología invalida en gran parte las explicaciones del primer grupo —por lo general, versiones de la autosatisfacción americana—, que subrayan la pervivencia del «americanismo» y el «individualismo» interiorizado por los trabajadores durante ese periodo (también Wilentz, 1984), pero los obreros americanos del siglo XIX demostraron tener una organización de clase semejante a la de cualquier otro país, e incluso un socialismo más temprano que en algunos. ¿Qué pasó con ambas cosas justo a finales de la centuria? Mi respuesta tiene que ver con las cuatro cristalizaciones políticas características de los Estados Unidos.

Cuatro cristalizaciones políticas estadounidenses

1. *Militarismo interno.* Hemos entrevisto ya el extremismo de los empresarios americanos. Así, una de las posibles explicaciones sería que la clase obrera americana fue reprimida por la fuerza. La mayor parte de las grandes huelgas acabaron con una derrota violenta. Después de un comienzo de siglo relativamente pacífico (según Katznelson, 1981: 58 a 61), América se vio lanzada al otro extremo a raíz de la guerra civil. Taft y Ross (1970: 281) establecen taxativamente el dato esencial: «Los Estados Unidos han tenido la historia obrera más feroz y sangrienta del mundo industrializado». En realidad, la Rusia zarista fue aún peor, pero, aparte de este caso, lo excepcional en los Estados Unidos de la época es su nivel de violencia en el ámbito industrial y de represión paramilitar. La mayor parte de los autores que destacan la excepcionalidad americana apenas mencionan este hecho o —lo que es aún más grave— sostienen que no existió un alto grado de violencia (Perlman, 1928; Hartz, 1955; Grob, 1961; Lipset, 1977, 1984), cuando la realidad nos dice todo lo contrario.

Desde la década de 1870, los trabajadores americanos se enfrentaron a dos formas de represión. En primer lugar, a las interpretaciones jurídicas (liberal-capitalistas) de la Constitución y de la libre contratación. Los derechos civiles se consideraban fundamentalmente individuales, no colectivos, como ya hemos visto a principios del siglo XIX en el caso británico. Aunque los sindicatos y las huelgas eran legales en principio, desde 1842 las acciones secundarias, como huelgas de apoyo, boicoteos de productores y consumidores, etc., se definieron como «conspiraciones» que impedían a los empresarios ejercer el derecho a gestionar su propiedad. Cuando éstos empleaban a

esquiroles, la consiguiente acción de los piquetes se consideraba ilegal. Los empresarios solicitaban la intervención policial para forzar el cumplimiento de las leyes, con la amenaza de recurrir a los tribunales para obtener un mandato judicial. Los jueces describían las tácticas obreras en términos de «tiranía», «usurpación» y «dictadura» contra el derecho a la propiedad privada. Las leyes laborales se habían establecido a escala de los estados individuales, pero a partir de 1894, el Tribunal Supremo intervino, reconduciendo la intención original de la *Sherman Act* desde la prevención de los monopolios empresariales a la de los monopolios sindicales. Cuando las huelgas o los boicoteos no reivindicaban salarios o mejoras de las condiciones laborales, y por tanto no procedían de derechos individuales legitimados, se les atribuía una finalidad «maliciosa». Durante la década de 1890 se recurrió al mandato judicial contra más del 15 por 100 de las huelgas de apoyo, y contra más del 25 por 100, en la de 1900. Sin embargo, no se proscribieron ni los cierres patronales ni las tácticas de contratar a trabajadores no sindicados; los empresarios podían hacer prácticamente lo que quisieran con sus propiedades.

Los tribunales manifestaron idéntica hostilidad hacia la legislación que favorecía a los sindicatos. Desde 1900 los tribunales federales y estatales invalidaron unas sesenta leyes laborales, en especial las promulgadas contra las represalias y el pago del salario en vales (a canjear en los almacenes de la empresa), aquellas que establecían la duración de la jornada y las condiciones laborales para los hombres (aunque solían mantener una responsabilidad moral hacia los niños y las mujeres) y las que limitaban la conspiración como finalidad, todas quedaron abolidas por esta «legislación de clase». Se endureció la represión legal contra los sindicatos generales o los socialistas que convocaban huelgas y boicoteos ajenos a la reivindicación de intereses individuales. El mandato judicial se empleó prácticamente contra todas las huelgas que agrupaban a los trabajadores especializados o no, consideradas «dictatoriales» y contrarias a la libertad (Fink, 1987; Forbath, 1989; Woodiwiss, 1990).

En segundo lugar, la ley se reforzó con la fuerza militar o paramilitar. Los arrestos durante las grandes huelgas ascendieron a 1.000 y 2.000 trabajadores, y a 100 ó 200, en las de menor entidad. En la mayor parte de los casos bastaban las autoridades policiales, apoyadas generalmente por fuerzas complementarias, pero cuando la protesta era mayor o supuestamente peligrosa o cuando había que proteger a los esquiroles, intervenían tanto el ejército regular como las milicias

de los estados o los ejércitos privados de los empresarios, a menudo con poderes legales, una práctica que apenas se conocía en Europa. Las milicias de los estados, ocasionalmente respaldadas por las tropas federales, intervinieron en más de quinientos conflictos de 1877 a 1903; por su parte, el mayor de los ejércitos privados, la *Pinkerton Detective Agency*, contó con más hombres que el ejército estadounidense.

Pero no sólo había arrestos. La cifra de muertos que produjeron las relaciones laborales americanas del periodo sólo se vio superada por la de la Rusia zarista, como indica el cuadro 18.4. ¿Por qué tanta violencia? Puede que la razón estribe en la abundancia de armas. Como es bien sabido, en una huelga se exacerban los sentimientos y no resulta difícil que se llegue al enfrentamiento físico, especialmente con los piquetes apostados a la puerta de las fábricas; póngase un arma en las manos de los hombres de ambos bandos y será inevitable que se produzcan las muertes. Mi propia opinión, después de contemplar las escaramuzas contra la policía tanto de los *hooligans* británicos como de los revoltosos de los guetos americanos, es que si se producen más muertes en Estados Unidos no se debe a que los jóvenes americanos sean más «violentos», sino sencillamente a que llevan armas. Pero en el periodo que nos ocupa debemos añadir otro elemento: el hecho de que ni los empresarios ni la policía se avinieran a cualquier tipo de compromiso produjo una ritualización de las tendencias violentas en «demostraciones de fuerza» permitidas, aunque limitadas. La inflexibilidad americana del periodo sólo encuentra parangón en la Rusia zarista.

Tanto en Rusia como en América, la violencia contra las personas procedía siempre en primer lugar del lado de los empresarios y las autoridades, y casi todas las víctimas eran trabajadores. Una sola huelga americana, la del ferrocarril de 1877, causó al menos noventa muertos a manos de los 45.000 hombres de la milicia estatal y los 2.000 de las tropas federales que intervinieron. En la huelga del ferrocarril de 1894, murieron 34 trabajadores. En la oleada de 1902-1904, momento para el que ya poseemos cifras fiables, hubo no menos de 198 víctimas mortales, 1.966 heridos y más de 5.000 arrestados. Esto representó el punto culminante de un periodo de violencia, que se repitió esporádicamente, sobre todo en el oeste, donde, por ejemplo, murieron 74 mineros durante una huelga acaecida en Colorado en 1914.

La violencia, como la represión legal, se concentraba contra las huelgas encabezadas por socialistas y contra los intentos de crear

grandes sindicatos industriales que agruparan a los trabajadores con especialización o sin ella. No puede asombrarnos que Robert Goldstein, el principal cronista de la violencia, concluya que la represión desempeñó un papel importante en la debilitación de la clase obrera americana y le achaque la culpa de la desintegración del socialismo y el radicalismo obrero (1978: IX, 5 y 6, 550). Wilentz (1984: 15) sostiene concretamente que el punto de inflexión fue la derrota de la clase obrera mediante la represión del periodo 1886-1894. Shefter (1986: 252 y 253) coincide en que el sindicalismo artesano de la AFL se impuso al socialismo y al sindicalismo general porque éstos sufrieron una derrota física. Holt (1977) afirma que la represión explica las diferentes trayectorias de los sindicatos británicos y americanos en las industrias del hierro y el acero. Aunque los sindicatos americanos del acero fueron en principio mucho más potentes que los británicos, quedaron prácticamente pulverizados por la represión durante la huelga de Homestead de 1892; una labor que completó la U.S. Steel en 1901, aunque la compañía tuvo en este caso el cuidado de emplear tácticas divisorias ofreciendo primero a los trabajadores artesanos pensiones y participación accionarial en la empresa (Brody, 1960: 78 a 95). Los trabajadores manifestaron al principio una actitud solidaria, pero carecían de respuestas definitivas ante la resuelta actitud empresarial de emplear a esquiroles, utilizar a los hombres de la Pinkerton o a las tropas estatales y recurrir a las listas negras y al espionaje industrial. Al final, consiguieron romper la solidaridad de clase de muchos trabajadores artesanos, y reprimieron al resto. No cabe duda, pues, de la existencia de un extremismo americano, que la cultura política y académica se ha encargado de silenciar.

El militarismo constituye un elemento necesario de nuestra explicación, pero no suficiente. ¿Por qué no produjo la represión americana, como sí hizo la europea, un aumento de la solidaridad obrera y del socialismo? Tendremos que recurrir a las otras tres cristalizaciones políticas de los Estados Unidos, y comprobar después cuál fue la respuesta de la clase obrera.

2. *Liberalismo capitalista.* La cristalización capitalista fue también extrema en América (como sostiene la primera de las trece explicaciones que hemos mencionado). El Estado encargado de la represión tenía un sistema jurídico esencialmente liberal-capitalista, que encarnaba una concepción de la legalidad capitalista prácticamente sacralizada. La Constitución unía los dos principios legales de la li-

bertad, el personal y el de la propiedad, y los sacralizaba en un documento que podemos calificar de *atrincherado.* Aunque el nivel de represión sólo puede compararse al de la Rusia zarista, la diferencia entre ambos Estados es patente. La represión rusa procedía de una monarquía autocrática, cuyas leyes configuraba la voluntad del zar, moderada por el expediente político, y aunque los capitalistas rusos celebraban la represión de sus trabajadores, no eran ellos quienes la iniciaban o la dirigían. Incluso los capitalistas austriacos y alemanes, con mayor poder en sus correspondientes Estados, tenían que compartir el régimen con los monarcas y la nobleza cuyo compromiso con el orden y la fuerza se encontraba vinculada a principios superiores al de la libre propiedad privada. Los capitalistas americanos, en tanto que «partido» en el sentido weberiano, controlaban su Estado, en especial a través del poder judicial. Una vez sacralizada la ley, su fuerza policial se dedicó a defender sus libertades y su derecho a la propiedad.

Como apunté en el capítulo 5, el orden y la ciudadanía en los Estados Unidos han sido siempre más legales que políticos; lo que no ha ocurrido en ningún otro país. Pese a que a partir de 1900 la mediación de los presidentes en las huelgas de la minería y el ferrocarril para impedir la interrupción de la economía nacional (como hicieron los restantes regímenes, incluso en Rusia y Alemania) aminoró ligeramente la tendencia, lo cierto es que la concepción legal se manifiesta claramente en la contratación de esquiroles. Los empresarios europeos que importaban esquiroles no podían contar ni con protección militar ni con un apoyo inquebrantable por parte de la policía. Es probable que las elites estatales encargadas de preservar el orden público llegaran a la conclusión de que la auténtica amenaza no procedía de las huelgas, sino de los esquiroles, de ahí que presionaran con frecuencia a los empresarios para que adoptaran una actitud conciliadora (véanse en Shorter y Tilly, 1974, las pruebas cuantitativas para un periodo posterior en Francia). Esto no ocurrió casi nunca en América, donde las elites estatales se encontraban rigurosamente sometidas a la ley de la propiedad. Los empresarios gozaban de una libertad absoluta para establecer contratos de trabajo privados a su criterio y cuando entraban en contacto con los esquiroles contaban con la protección incondicional de la ley y el Estado. La cristalización militarista del Estado predominó en este caso sobre la civil-militar.

Pero la ley consagrada contribuyó, a su vez, a reforzar las propias creencias del capitalismo americano, que estaba convencido de

la legitimidad de una ecuación que unía sus intereses económicos al imperio de la ley y a los valores fundamentales de la libertad. Dios aparecía con frecuencia en sus argumentaciones. Oigamos las palabras que pronunció en 1902 un dirigente de los propietarios de minas de antracita: «Quienes han de proteger y cuidar los derechos y los intereses de los trabajadores no son los agitadores, sino aquellos cristianos a quien Dios, en su infinita sabiduría, ha concedido el gobierno de los intereses de la propiedad en este país» (Rayback, 1966: 211).

Los capitalistas americanos se encontraban, además, en la cresta de la ola económica y política. Su invento característico, la economía de la corporación, progresaba sin límites, dominando la política nacional y la de los estados no sureños. Dubofsky (1974: 298) dice: «Los *wobblies* y los socialistas fracasaron no porque la sociedad americana fuera excepcional, sino porque alcanzaron sus respectivos momentos culminantes cuando los dirigentes de la nación se encontraban también en su momento de mayor unidad y confianza en sí mismos».

Ya hemos visto que la solidaridad de clase de los grupos dirigentes destruyó el cartismo británico en la década de 1840, pero ahora no existía una clase capitalista nacional que manifestara una solidaridad tan radical. Por el contrario, los empresarios británicos, como observaba el sindicalista John Hodge (más tarde, ministro del gobierno laborista), «basan su crédito en haber sabido siempre jugar al cricket» (citado en Holt, 1977: 30). La metáfora resulta adecuada. Los industriales no tenían muchas oportunidades porque el núcleo de los partidos y las elites estatales no eran ellos, sino el antiguo régimen que jugaba al cricket. Después de destruir a una clase obrera insurgente, el régimen se enfrentaba ahora a un movimiento obrero responsable y seccionalizado, cuyos votos necesitaba y con el que se encontraba preparado para llegar a compromisos. Ni los conservadores ni los liberales habrían permitido a los empresarios gestionar su propia política de clase, porque para ellos la ley era el instrumento de su finalidad política, como, en efecto, suponía la soberanía parlamentaria. Las elites y los partidos estatales de América defendían la ley, y en esta circunstancia el cambio resulta mucho más difícil que en un clima de cálculo de las ventajas políticas. Es decir, quienes interiorizaron el individualismo no fueron los trabajadores (como sostiene el primer grupo de explicaciones a la excepcionalidad americana), sino las elites estatales y la clase capitalista.

Pero la feroz represión jurídica de los Estados Unidos no fue sólo característica de este periodo; hoy en día prosperan aún ciertas versiones. En la actualidad, los tribunales siguen intimidando a los sindicatos, aunque no recurran con tanta frecuencia como en otros tiempos a la policía o los grupos paramilitares. La clase obrera baja, predominantemente negra o latina, se encuentra condenada a la inercia de su propia desesperación por la terrible presencia policial y paramilitar, aunque la represión no ocupa un lugar en la agenda de la democracia de partidos, porque estos grupos sociales nada tienen que ver con éstos y pocas veces votan.

Estos hechos arrojan muchas dudas sobre las tradicionales concepciones unidimensionales del Estado. La tradición predominante en la sociología política comparada divide los regímenes en monarquías autoritarias frente a monarquías constitucionales, regímenes autoritarios frente a regímenes democráticos, dentro de un solo continuo que va de la izquierda a la derecha, lo que yo he llamado cristalización representativa. Esta idea impregna la obra de Moore (1973) y Lipset (1984), de Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992) e incluso mis últimos capítulos del Volumen I y otros más recientes (Mann, 1988). Pero, como reconocen Rueschemeyer, Stephens y Stephens, la historia de los Estados Unidos se adapta mal a esta tradición. Siguiendo a Moore, estos autores se preguntan por qué los Estados Unidos se convirtieron en un sistema democrático, teniendo en cuenta, sobre todo, la presencia en el sur del país de una agricultura basada en mano de obra cautiva. Y como él, tratan de explicarse por qué no se produjo una alianza autoritaria al estilo alemán entre los capitalistas industriales y los agrarios. Las razones que aducen son correctas y semejantes a las mías.

En primer lugar, el federalismo permitió que los propietarios del sur continuaran empleando la represión; en segundo lugar, los industriales fueron capaces de reprimir con éxito incluso en una democracia. Pero yo voy más allá. La diversidad de las instituciones políticas americanas, a las que el federalismo (que analizaré más adelante) dio rienda suelta, permitió la existencia de cristalizaciones polimorfas que restringieron considerablemente la expresión de la soberanía popular, puesto que, como hemos podido comprobar en el capítulo 5, se habían creado con ese fin. La primera de estas cristalizaciones había sido el liberalismo basado en el sistema judicial que expresaba el poder de la clase capitalista, constriñendo la realidad social y las opciones estratégicas de los actores de poder rivales. Pero tales constriccio-

nes no procedían del «exterior» de las instituciones políticas, como se desprende de la mayor parte de las concepciones marxistas del «Estado capitalista». Las redes del poder judicial forman parte de los Estados, pero éstos son polimorfos. Veamos ahora la tercera cristalización política estadounidense:

3. *La democracia de partidos.* Los Estados Unidos fueron la democracia bipartidista más institucionalizada del siglo XIX. Y ambos partidos ejercieron la represión. Las mujeres no votaban; los negros del sur habían perdido el derecho que disfrutaron durante un breve periodo. Pero los sindicatos estaban formados por hombres nacidos en el norte, que en su mayoría podían votar. El republicanismo y el predominio masculino en los puestos de trabajo debieron de ser mayores que en otros países. Como ha destacado Montgomery, la principal característica de la clase obrera estadounidense fue una relación de tipo «viril» entre obreros y empresarios, «con las consiguientes connotaciones de dignidad, respetabilidad, desconfianza del igualitarismo y supremacía del poder patriarcal» (1979: 13). La forma de moverse de los trabajadores americanos, el tono enérgico de su habla, su costumbre de llevar las herramientas colgadas del cinturón, en las pistoleras, todo llama la atención del observador extranjero como una exhibición masculina de poder. Los trabajadores americanos podían creer que el Estado tenía culpa de su empobrecimiento, pero al contrario que los rusos o los alemanes, no consideraban que la violencia o la coerción legal fueran atributos de un Estado ajeno que debieran derribar. Hasta 1896 hubo una alta asistencia a las urnas —mayor del 85 por 100 (75 por 100 en las ciudades)—, y los inmigrantes pudieron registrarse con facilidad. La mayor parte de los obreros, entre ellos los miembros de los sindicatos, votaban «libremente» a los dos partidos cuyas administraciones ejercían la represión sobre ellos. La ausencia de quejas políticas explica que los trabajadores americanos no politizaran su descontento económico, es decir, que no llegaran al socialismo, dice Lipset (1984). A partir de 1896 la democracia masculina y blanca comenzó a debilitarse. Los requerimientos de residencia y ciudadanía a los inmigrantes y la legislación progresista dirigida contra la maquinaria política de las ciudades redujeron la concurrencia a las urnas, especialmente entre los trabajadores (Burnham, 1965, 1970: 71 a 90).

¿Supuso algún beneficio para los trabajadores americanos este ligero debilitamiento de la democracia de partidos? ¿Fue este Estado

tan pacífico y tan comprensivo como sostiene Lipset? La represión parece demostrar lo contrario. Recuérdense los dos aspectos de la organización de la democracia americana. En primer lugar, los partidos se encontraban más arraigados en las redes local-regionales y religioso-étnicas de poder segmental que en la clase o la nación. Pero los trabajadores no votaban ni en pro ni en contra de la represión, sino a favor de los beneficios *diferentes* relacionados con el sistema de repartos de los cargos y los intereses de sus comunidades locales, religiosas y étnicas. Una vez que los sindicatos se convirtieron en organizaciones seccionales de trabajadores establecidos, ellos mismos apoyaron con frecuencia la política contra los inmigrantes. Y puesto que quienes sostenían la represión no eran los políticos, sino los tribunales, arropados por la Constitución, la situación no parecía relacionada con las elecciones (como aún ocurre hoy).

En segundo lugar, los trabajadores, como en todos los países salvo en Gran Bretaña, continuaban siendo minoría. En 1914 comprendían algo más de un tercio de la población, un porcentaje igual al de los granjeros, y quizás el doble de una clase media que se encontraba en plena prosperidad. Los sindicatos obreros representaban, pues, una exigua minoría que debía despertar el interés de masas de trabajadores no organizadas, en gran parte dominadas por los notables locales, así como de los otros dos grupos de clase. Al final, fracasaron. La clase trabajadora propugnaba una reducción de la libre propiedad, pero los granjeros y la clase media estaban profundamente vinculados a ella y ejercían una fuerte influencia sobre la mano de obra local que empleaban. La clase obrera fracasó en su lucha ideológica para separar la defensa de la pequeña propiedad de la propiedad grande y empresarial, y por eso perdió el apoyo electoral de los granjeros, de la clase media y de muchos trabajadores no organizados. La pérdida de los granjeros fue muy dañina. Aunque existía una oposición a la violencia con que las autoridades castigaban a los obreros, que abrigaba también sus propias quejas contra los «monopolios» de las corporaciones, nunca llegaría al punto de apoyar una solución que hubiera implicado la creación de «monopolios sindicales». El fracaso de unos partidos que representaran a la clase obrera y a los granjeros (véase capítulo 19) resultó decisivo, porque la ausencia de esa alianza permitió a las clases propietarias reprimir sin trabas a la minoría trabajadora. Una vez más, comprobamos que no fueron tanto los trabajadores como las clases propietarias (y los dependientes de su poder

segmental) quienes interiorizaron el individualismo americano del periodo.

La democracia de partidos americana no fue benevolente con los trabajadores. No les dio más, sino menos. Tanto el partido demócrata como el republicano eran coaliciones interclasistas, local-regionales, étnico-religiosas y segmentales. Los trabajadores apoyaron efectivamente a los candidatos que les eran favorables (Bridges, 1986), pero los partidos no estaban en condiciones de expresar los intereses de clase, especialmente durante un periodo en el que el partido demócrata se estaba haciendo más rural y católico, y se dividía en dos facciones: la del sur, característicamente reaccionaria, y la del norte, predominantemente industrial (trabajadores y manufactureros) y protestante. Al segmentalismo vinieron a sumarse muchas excepciones locales. La unidad nacional del partido se quebró por la separación *federal* característica entre los partidos y el ejecutivo, por la cual es el presidente, y no el partido, quien forma el gobierno y plantea un programa. De ahí que sea menor la disciplina en unos partidos que, al contrario que en los países donde la Constitución establece la soberanía parlamentaria, no necesitan elaborar un programa coherente, y son, con mayor facilidad, pasto de las facciones.

La clase obrera tenía que presionar individualmente a los políticos de ambos partidos: «Premia a tus amigos y castiga a tus enemigos», decía Gompers. Aunque esta actitud despertara las simpatías de algunos políticos en los distritos electorales industriales y urbanos, no fue capaz de movilizar un partido nacional con un programa legislativo. Ni pudo elegir senadores, salvo el presidente, o nombrar jueces de los tribunales superiores. Sus éxitos se limitaron a la política local y estatal, pero los tribunales se encargaron de neutralizar su legislación.

La influencia directa de la clase obrera en el plano federal fue probablemente menor que la de su equivalente británica o alemana en sus respectivas políticas nacionales. Este aserto desmiente algunas de las interpretaciones más frecuentes (por ejemplo, Rayback, 1966: 250 a 272), aunque parezca ilógico, ya que Alemania era una monarquía autoritaria y la mitad de los trabajadores británicos carecía de derecho al voto. Pero el régimen alemán tuvo que emplear toda su astucia para movilizar una coalición contra los obreros, y se vio obligado a elaborar programas progresistas, como la seguridad social, para mantener a raya el socialismo. La clase obrera británica elegía miembros del Parlamento, donde ambos partidos ejercían su influencia, especialmente los liberales, que necesitaban los distritos electorales de la

clase obrera. Los partidos del Parlamento eran también soberanos frente al ejecutivo y los tribunales. Sólo cinco años después de que los jueces anularan ciertos derechos de organización sindical con motivo del caso Taff Vale, la elección de un gobierno liberal, en 1906, garantizó de un plumazo la aprobación de una *Trade Disputes Act* que aseguraba a los sindicatos la libertad de organización que demandaban. Al contrario que la gran mayoría de la legislación liberal, esta ley pasó con toda facilidad la votación de una Cámara de los Lores conservadora.

En contraste, los sindicatos americanos obtuvieron pocos beneficios de los partidos políticos nacionales. La Cámara de Representantes simpatizaba con la posibilidad de elaborar leyes que restringieran los mandatos judiciales contra las huelgas, pero el Senado se oponía a ello. Las administraciones elaboraron leyes muy severas en lo relativo al trabajo infantil y a las condiciones de las mujeres en el puesto de trabajo porque, como en otros países, existía una moral interclasista y un consenso por parte de los hombres respecto a la «protección» de las mujeres y los niños, pero la regulación de la seguridad en las fábricas fue menor y más tardía que en Francia o Gran Bretaña. Hasta 1914, mucho más tarde que en esos dos países, no se creó el Ministerio de Trabajo, que introdujo procedimientos de conciliación y llevó a los sindicatos a los aledaños administrativos del poder. La jornada de ocho horas en la compañía interestatal de ferrocarriles y las mejoras de los trabajadores del gobierno federal y de los marineros representaron auténticos progresos. La *Clayton Act* de 1914, que regulaba las corporaciones, suele considerarse también un adelanto para los obreros porque afirmaba que «el trabajo de los seres humanos no es una mercancía o un artículo comerciable» y que los sindicatos no eran ilegales ni representaban una violación de las leyes antitrust; sin embargo, dejaba las «conspiraciones» y las actuaciones secundarias de apoyo exactamente donde se habían encontrado hasta entonces (Sklar, 1988: 331). De hecho, la tasa de mandatos judiciales contra los sindicatos aumentó después de esta ley hasta el 46 por 100 de las huelgas de apoyo durante la década de 1920 (Forbath, 1989: 1252 y 1253). El organizador *wobbly* demostró su escepticismo hacia las nuevas leyes laborales con una sencilla pregunta: «¿Cómo se van a *ejecutar*?» (Dubofsky, 1969: 158).

Hasta 1932 no se concedieron a los sindicatos, mediante la *Norris-La Guardia Act*, los derechos garantizados en Gran Bretaña desde 1906. La democracia americana concedió a sus trabajadores los

derechos civiles colectivos después de que la represión hubiera ocasionado muchas víctimas entre ellos. Según Laslett (1974: 216 y 217) las concesiones de la administración Wilson debilitaron fatalmente al partido socialista, ya que la mayor parte de sus sindicatos afiliados se pasaron a los demócratas. Si así fue, les fascinó más la promesa que su realización, y, por otra parte, ya se habían conformado con menos que sus iguales europeos. Los trabajadores ganaron poco, menos como clase trabajadora que como masa de votantes, junto a otros electorados masivos como el de los granjeros o la clase media. Las reformas ampliaron el poder electoral mediante la elección directa de los senadores, regularon los monopolios empresariales, la enseñanza universal gratuita y el sistema de impuestos progresivo, gracias a las coaliciones interclasistas de los progresistas, en las que la clase obrera organizada desempeñó un papel subsidiario (Lash, 1984: 170 a 203; Mowry, 1972; Wiebe, 1967). No toda la «ciudadanía social» de Marshall ha procedido de la acción de clase. El sistema progresivo de impuesto sobre la renta se implantó en 1913 (aunque hasta la guerra tuvo poca importancia) gracias al sistema de competición de los partidos, sin que existiera una gran presión por parte de los sindicatos (como ocurrió también en Gran Bretaña), pero, ante todo, durante el periodo de mayor depresión no se protegieron los intereses de los trabajadores, por el contrario la democracia de partidos americana los lesionó con frecuencia.

4. *Federalismo.* En Estados Unidos la «cuestión nacional» cristalizó en un primer momento como confederal y después como federal. El Estado que ejecutó la represión no fue un Estado-nación centralizado, sino un Estado descentralizado. La resistencia de los trabajadores tuvo que fragmentarse frente a los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y local, y de cara a las administraciones políticas y los tribunales. Durante este periodo, la ampliación de las funciones civiles del Estado, que tendió en la mayoría de los países a nacionalizar el movimiento obrero, sirvió en América para fragmentarlo. Gran parte de las nuevas funciones se dividieron entre los gobiernos estatales y locales. El hecho de que hasta la década de 1930 el gobierno federal apenas tuviera importancia para las cuestiones laborales (me baso aquí en Lowi, 1984) quebró la potencial unidad nacional de clase. Las leyes laborales solían elaborarse a iniciativa de los estados. En 1900 los estados industrializados como Massachusetts e Illinois contaban con un cuerpo de leyes conciliadoras mayor que el

del Estado federal. Muchas tenían un carácter represivo, en ocasiones feroz. A este respecto no podemos perder de vista las dimensiones continentales del país. Algunos estados del norte pudieron aprobar todos los años una legislación progresista, abriendo caminos en la legislación reaccionaria de los tribunales, al mismo tiempo que en los estados del oeste se tiroteaba a los *wobblies,* en los del suroeste se perseguía a los populistas y en los del sur se intensificaba el racismo. Era, pues, difícil que surgiera una idea de *totalidad* de clase extensiva a escala nacional, incluso para las víctimas de los tiroteos.

El sur constituía un problema federal de especiales características. Allí, en un clima predominantemente agrario, se reforzó el militarismo interno para derrotar los intentos de movilización de clase. Esto significa que en el plano federal un sólido bloque de senadores y congresistas, prácticamente sin oposición en las elecciones, aprovecharon el sistema de los comités del Congreso para atrincherar sus políticas reaccionarias. Como el propio Franklin D. Roosevelt tendría ocasión de comprobar más adelante, resultaba muy difícil establecer al margen de ellos una legislación favorable a los trabajadores. Su «Estado de un solo partido» en el sur constituía cada vez más un voto oscilante en la colina del Capitolio, ya que era al mismo tiempo demócrata y reaccionario.

La organización de la comunidad y del partido local-regional prosperó bajo la Constitución federal atrincherada, alimentada por las oleadas de inmigración étnico-religiosa. El gobierno de la ciudad proporcionó ventajas a su clientela segmental, en especial promulgando «variantes» de las leyes de los estados, otorgando licencias y ejerciendo el patronazgo en materia de beneficios económicos. Gran parte de los intereses de los trabajadores —los intereses de la comunidad en materia de vivienda, salud pública, control de los transportes y servicios públicos y trabajo manual en el sector público— se determinaban en el plano municipal, filtrados no por las relaciones de clase, sino por las relaciones de poder segmental. Las ventajas llegaban de la mano de las comunidades étnico-religiosas y la maquinaria de patronazgo de las ciudades. Los obreros especializados y nacidos en el país ejercían una notable influencia local en estas maquinaria y en las alianzas interclasistas, dirigidas por lo general contra los nuevos trabajadores inmigrantes. La interacción del federalismo, los partidos políticos segmentalistas y la etnia contribuyeron a fragmentar la conciencia totalizadora de clase. La clase y la nación no son cosas opuestas; por el contrario, se refuerzan entre sí, y cuando falta alguna

de ellas la otra se debilita, como ocurrió en los Estados Unidos. La reducción de la clase a las relaciones en el puesto de trabajo, una de las tendencias comunes del periodo, llegó aquí más lejos que en ningún sitio.

Militarismo interno, liberalismo capitalista, democracia de partidos y federalismo fueron los elementos que contribuyeron a fragmentar las clases y su actividad política en los Estados Unidos. Skowronek (1982) observa con razón que este «Estado de partidos y tribunales» dificultó el desarrollo de una burocracia en el Estado nacional americano, pero también contribuyó el federalismo. El Estado nacional americano fue, ante todo, militar, como han revelado los datos del capítulo 11. Así pues, respecto a la cuestión civil-militar, los Estados Unidos cristalizaron en la forma de un militarismo interno.

La respuesta de los trabajadores: el seccionalismo

Pero este militarismo federal, liberal-capitalista y democrático de partidos logró un éxito sin parangón contra los trabajadores porque reforzó sus tendencias internas a responder no con una actitud de clase, sino con el *seccionalismo.* La represión se concentró principalmente en el socialismo y el sindicalismo general, y menos en el sindicalismo artesano. Los artesanos lo eludieron mejor. Los empresarios se sirvieron tanto de la represión selectiva como de la generalizada, según el ciclo económico. Cuando las carteras de pedidos demandaban un aumento de la producción, reconocieron a los sindicatos artesanos y la AFL exigió un acuerdo nacional. La presión de los sindicatos artesanos fue local y se aplicó contra los empresarios individuales, con apoyo de la política municipal y sin necesidad de muchas huelgas. La solidaridad de los artesanos estaba bien asentada y al mismo tiempo era informal y relativamente invulnerable a la infiltración policial o a la represión (Marks, 1989: 53). La represión selectiva amplió la división normal entre los artesanos y otros trabajadores en un seccionalismo táctico y organizativo [4]. Los artesanos construyeron su propia vía, dejando a sus compañeros con menos suerte abandonados a su destino.

[4] Se trata del elemento que falta en el análisis de Marx, por otra parte excelente, sobre el seccionalismo estadounidense. Erróneamente, clasifica a los Estados Unidos como un país poco represor, en la línea de Gran Bretaña o Escandinavia (1989: 75).

Los Estados Unidos se distinguieron claramente de la Rusia zarista en dos aspectos. En primer lugar, la violencia del régimen ruso se aplicó a todos los niveles de especialización. En segundo lugar, la rapidez de la industrialización rusa no permitió a la organización artesanal madurar lentamente. Los trabajadores especializados no contaban con recursos para trazar su propio camino. Mientras la represión desunía a la clase obrera americana, unía a la rusa. De ahí que Lenin, el mayor táctico del socialismo, analizara el caso ruso, mientras que el analista del caso americano fuera Samuel Gompers, el mayor táctico del seccionalismo.

Gompers y su Federación Americana del Trabajo impidieron por lo general el surgimiento de una política obrera. El pequeño grupo de presión que la AFL consiguió establecer en Washington en 1908 apenas tuvo vida activa. Los dirigentes como Gompers y Mitchell depositaron toda su confianza en su pertenencia a la *National Civic Foundation* (NCF); un grupo de presión de dirigentes progresistas. Gompers y Mitchell querían contar con el NCF para persuadir a los líderes empresariales de que accedieran a establecer acuerdos nacionales entre los sindicatos de la AFL y las asociaciones de empresarios que hiciera innecesarias las huelgas masivas. Mientras que muchos sindicatos locales buscaban activamente una legislación favorable a su clase, tanto en el plano estatal como en el local, la AFL propugnaba un «voluntarismo» a escala nacional (Fink, 1973; Rogin, 1961-1962). Esto se hizo en parte con asesoramiento legal, puesto que la ley proscribía la «coerción» ejercida por los sindicatos, los acuerdos voluntarios informales se convirtieron en el único poder sindical (Fink, 1987: 915 a 917). Gompers llegó más lejos. Se opuso a una legislación de la seguridad social porque reducía la independencia de los trabajadores. Pero no fue el único; puesto que los sindicatos tenían unos orígenes fuertemente proteccionistas y mutualistas, muchos de sus líderes sospechaban de la intervención estatal. Pero la oposición de Gompers a la regulación de las fábricas y al arbitrio de los conflictos industriales fue tan extrema porque temía que la clase obrera cayera en la trampa del «archilegalismo». Llegó a oponerse incluso a las leyes que prohibían las represalias contra los miembros de los sindicatos:

> Dudo de la oportunidad de apoyar la aprobación de una ley que interfiera en el derecho que tiene un empresario a deshacerse de un empleado ... Si apoyamos la promulgación de una ley ilegalizando este acto, nuestros enemigos aducirán sin duda que el derecho a suspender el trabajo, individual o colecti-

vamente (es decir, como sindicato), por determinadas razones habrá de ser también ilegal y actuarán para garantizar la aprobación de una ley al efecto [Fink, 1973, pág. 816].

Puede parecer una opinión extravagante, pero su experiencia como organizador del sindicato de confeccionadores de puros le había enseñado a desconfiar de la política y la legislación y a concentrarse en la presión económica directa sobre el empresario individual. El sindicato había presionado con fuerza para aprobar una ley en el estado de Nueva York que aboliera la vivienda industrial (las familias de los obreros que confeccionaban puros vivían y trabajaban en bloques pertenecientes al patrón). Los tribunales juzgaron inconstitucional la ley, el sindicato luchó con éxito por una revisión y los tribunales volvieron a establecer su inconstitucionalidad. Gompers lo cuenta así:

Hablamos de la posibilidad de una acción legislativa posterior y decidimos concentrarnos en el trabajo de organización. Mediante nuestros sindicatos podemos presionar a los empresarios con la huelga y la agitación hasta que se convenzan ... de que sería menos costoso para ellos abandonar el sistema de vivienda industrial y llevar las industrias a unas fábricas decentes. Sólo así obtendremos mediante el poder económico lo que no hemos conseguido con la legislación [1967: I, 197].

Es decir, puesto que la ley había perjudicado a la clase trabajadora, convenía evitarla y luchar por el «poder económico». Su mentor en el *Cigarmakers Union,* Adolph Strasser, declaraba en 1894:

No podemos lograr que se apruebe la jornada de ocho horas sin cambiar la Constitución de los Estados Unidos y las de cada uno de los estados de la Unión ... Me niego a perder el tiempo exigiendo una legislación que quizás se llegue a promulgar cuando estemos muertos [Forbath, 1989: 1145].

Las alianzas con los socialistas y los radicales habían perjudicado a la clase obrera, como se desprende de la autobiografía de Gompers, donde hay tanta hostilidad hacia los socialistas como hacia los capitalistas. Aunque siempre dijo respetar las ideas de Marx, afirma que su desconfianza hacia los socialistas había comenzado durante las revueltas de Tompkins Square, en 1874, cuando evitó por poco la porra de un policía saltando a un sótano. Aquella experiencia

se convirtió en un indicador para mi forma de entender el movimiento obrero en los años siguientes. Entonces me di cuenta de que las manifestacio-

nes radicales y sensacionalistas concentran todas las fuerzas de la sociedad organizada contra el movimiento obrero, contrarrestando su lógico avance y su necesaria actividad ... Y percibí el peligro que representan las alianzas con los intelectuales, quienes no comprenden que experimentar con la clase obrera supone hacerlo con vidas humanas [1967: I, 97 y 98].

Gompers propugnaba la vuelta al sindicalismo «puro y simple», consciente de que era una retirada. Como afirmaba en 1914, la AFL «se guía por la historia de los hechos pasados, porque de ella extrae lecciones ... y trabaja en la línea de menor resistencia» (Rogin, 1961-1962: 524).

Gompers creía que los movimientos de masas de la décadas de 1880 y 1890 se había extendido demasiado. La clase obrera debía reconstruirse poco a poco a partir de sus reductos más fuertes, con una organización «permanente», capaz de proporcionar a sus miembros seguros de desempleo, de entierro y de enfermedad y cajas para las huelgas. Aunque todas estas cosas eran deseables en sí mismas, su fin principal era mantener una relación permanente entre el sindicato y sus afiliados (Gompers, 1967: I, 166 a 168). Sólo unas organizaciones bien financiadas podrían hacer frente a las huelgas y cierres prolongados. Era inútil sacar a la calle a unas masas que carecieran de estos recursos, porque la derrota estaba asegurada. Ésta era, en opinión de Gompers, la gran lección de la época. Por eso despreciaba y detestaba a los *wobblies,* que habían empujado a la huelga a unos obreros sin cajas de apoyo y sin cobertura, que en ocasiones ni siquiera eran miembros de un sindicato. *Ellos,* y no los dirigentes de la AFL, eran los traidores de la clase obrera, argumentaba.

Pero las tácticas de Gompers no beneficiaron a toda la clase trabajadora, porque, de hecho, se basaban en la inexistencia de una identidad de clase. El abandono de la política redujo las metas y debilitó al «trabajador colectivo» porque suponía, en realidad, abandonar las políticas sociales que habrían beneficiado a las familias y las comunidades obreras. El movimiento quedó confinado, como en ninguna otra parte, a un economicismo centrado en el puesto de trabajo de los hombres. Incluso en este punto, la táctica de Gompers fue más seccionalista que otra cosa, ya que requería obreros que dispusieran de cajas para hacer frente a las huelgas y de empresarios sin posibilidad de contratar esquiroles. Esto se habría evitado, en principio, con un «gran sindicato» que agrupara a toda la clase, pero esta táctica había fracasado por la violencia de las masas y la consiguiente represión.

Gompers creía que las masas organizadas de trabajadores sin especialización había perjudicado a los miembros de su sindicato. Algunas organizaciones americanas del siglo XX, en especial los camioneros, han reducido la presencia de los esquiroles empleando la violencia, pero, en realidad, estos últimos casi nunca han podido minar con éxito el trabajo cualificado.

Aunque Gompers sostenía que la paciencia y la continuidad en la organización acabarían por reportar recursos financieros y profesionales a otros trabajadores, en la práctica, pocos que no fueran artesanos se beneficiaron de los fondos sindicales o de la restricción del aprendizaje en sus puestos de trabajo. En realidad, la táctica aumentó el proteccionismo de los artesanos. La AFL se había retirado a las posiciones que habían ocupado los sindicatos británicos de 1850 a 1890, después del fracaso del cartismo y antes de la aparición del nuevo sindicalismo. A partir de 1900 el movimiento obrero americano fue el más débil de todos los países avanzados, en parte porque Gompers y la AFL practicaban el arte de lo posible frente a una represión implacable y eficaz.

Pero aún podemos achacar al proteccionismo de la AFL otra debilidad del movimiento obrero, debido a su obsesión por concentrarse en restringir la oferta trabajo alternativo. Los nuevos mercados laborales se estaban formando a partir de grupos étnico-religiosos de inmigrantes. Así pues, el segundo grupo de explicaciones del extremismo americano, referente al seccionalismo «natural» de aquel país, resulta válido cuando se aplica al periodo que comienza en 1900. Como cabía esperar, ni el racismo ni la diversidad de los inmigrantes favorecían la unidad de la clase obrera americana, sobre todo en el terreno político. La división entre blancos y negros se limitaba prácticamente al sur, pero el enfrentamiento más duradero durante este periodo se centró en la lucha económica entre los inmigrantes asiáticos y todos los demás. La mayoría de las organizaciones obreras demostraban una profunda hostilidad hacia los chinos, en parte por un racismo visceral contra los «amarillos» y en parte porque los contratos de aprendizaje de los chinos perjudicaban gravemente a los obreros anglosajones en el oeste. Pero, aparte de estos casos, las divisiones étnico-religiosas no eran privativas de los Estados Unidos, ya se habían producido a una escala parecida en Lancashire, entre los trabajadores ingleses e irlandeses, y en Alemania, entre católicos y protestantes o entre alemanes y polacos.

América no constituyó, al principio, un caso excepcional a este respecto. Por el contrario, entre los *Knights of Labor,* o durante las

grandes huelgas de 1877 o de la *Homestead Act,* o entre los mineros, tanto los diferentes grupos étnicos, incluidos muchas veces los negros, como los hombres y las mujeres habían demostrado un alto grado de solidaridad. Pero, ahora, las tensiones económicas entre las razas habían empeorado, en parte por el aumento de la inmigración procedente del sur y del este de Europa. Los oficios y los barrios comenzaron a dividirse en función de la etnia, y a ello se unió el propio seccionalismo de la clase obrera; por un lado, la AFL, predominantemente artesana, reclutaba sobre todo a los nacidos en Estados Unidos y a los europeos del norte; por otro, los sindicatos generales y los grupos políticos se nutrían ante todo de negros y trabajadores procedentes del sur y del este de Europa (Shefter, 1986: 205 a 207, 228 a 230). El grupo de presión antiinmigrante de la AFL tenía ahora una gran actividad legislativa que reforzaba el seccionalismo.

Conclusiones americanas

Aunque no he repasado la totalidad de las trece explicaciones sobre el carácter excepcional del caso americano, espero haber hecho patente mi punto de vista: los Estados Unidos no contaron con ninguna excepcionalidad que no estuviera presente en los restantes países. No se situaron en un extremo desde su nacimiento, se hicieron extremistas después. El punto de inflexión se produjo hacia el año 1900, cuando apareció un seccionalismo obrero característico debido a las «cuatro cristalizaciones de nivel superior»: militar, liberal-capitalista (centrada en el aparato judicial), federal y democrática de partidos. Como afirma Lipset, la forma que adoptó el régimen fue decisiva. Pero ésta no resultó tan benéfica para los trabajadores ni tan compatible con ellos —ni tan unidimensionalmente «democrática»— como él mismo sostiene. Los Estados no son unitarios, sino polimorfos. Enfrentado a una implacable represión, el movimiento americano se dividió más profundamente que los restantes, ampliando así el punto débil del seccionalismo que dividía a los artesanos y los no artesanos. El seccionalismo de los estratos especializados y de los mercados internos de trabajo coincidió especialmente con el faccionalismo ideológico. La división institucionalizó el faccionalismo de las organizaciones obreras y se ahondó porque la facción dominante en la AFL redujo las metas de clase y aumentó el seccionalismo y el segmentalismo étnico-religioso.

Aunque aún quedaban batallas por librar y decisiones tácticas por tomar, y aunque aún se produjo un renacer obrero en las décadas de 1930 y 1940, la identidad de clase se convirtió en un fenómeno antiamericano. Los obreros nunca empleaban la expresión «clase obrera» para referirse a sí mismos, y, por otra parte, se sentían significativamente motivados por el individualismo burgués (Halle, 1984). Por mi parte, he sostenido que esto fue más que una causa una consecuencia de su alejamiento del socialismo.

Naturalmente, como sostiene Lipset, y confirman estos capítulos, el Estado americano, al contrario que los otros Estados reaccionarios, no reforzó la identidad de la clase obrera. La lucha común por una ciudadanía nacional no produjo, como en la mayoría de los países europeos, identidad de clase; de ahí que las divergencias normales entre los obreros con especialización y sin ella, entre las distintas industrias y regiones, y entre las comunidades étnicas y religiosas, no desaparecieran ante unas necesidades políticas compartidas. Por el contrario, se vieron reforzadas por el federalismo y el faccionalismo. En algunos países de la Europa continental, la clase obrera quedó excluida de la ciudadanía nacional y padeció también la represión cuando reivindicó la ciudadanía civil y política, pero los trabajadores desarrollaron entonces la idea de la lucha total y se vieron forzados a la unidad nacional de clase y el Estado nacional mediante estrategias que unían a esta clase centralizada a los enemigos del régimen. Esta unidad de clase nacional, forzada políticamente, faltó en los Estados Unidos. Los efectos fragmentadores del predominio de la ideología pequeño burguesa, la frontera y las divisiones étnicas determinaron más adelante el resultado, pero la temprana inclusión de los trabajadores blancos (hombres) en un Estado federal, militarista, liberal-capitalista y democrático de partidos ahondó las divisiones por facciones y sectores y decidió probablemente la desaparición de la identidad de clase.

Las ideologías socialistas requieren un sentido de la totalidad y de la alternativa, pero las relaciones capitalistas de producción no proporcionan la experiencia de una totalidad social. Lo más parecido a una totalidad real es la empresa individual o los mercados y las industrias concretos, es decir, organizaciones que continuamente se interponen. La única red delimitada que proporciona el capitalismo es el conjunto de su penetración global, que nadie vive como una comunidad. De ahí que no todos los individuos experimenten de la misma forma las tendencias macroeconómicas. Los auges y las depresiones

económicas influyen de forma distinta en cada empresa, industria o grado de especialización laboral. Aunque la respuesta obrera sea agresiva, se producirá seccionalizada, por mercados, industrias o regiones. La agitación contra el gobierno nacional totaliza estos movimientos dispares. La clase y la nación se refuerzan una a otra, como lo hacen también el seccionalismo y las identidades locales y regionales. Sin esto, la clase obrera se divide en trabajadores especializados y organizados en sindicatos y trabajadores sin especialización y sin organizaciones. Tal división predominó en la historia de la clase obrera estadounidense. porque fracasó a la hora de articular un sentido de totalidad de las relaciones de poder y una alternativa a ellas, como era ya evidente en 1914.

Pero si los Estados Unidos no constituyeron un caso excepcional, sí se convirtieron en un caso «extremo», no porque los trabajadores no tuvieran quejas que exponer, sino porque las cristalizaciones políticas reforzaron las tendencias seccionales y segmentales. Su extremismo revela lo que habría ocurrido en el caso hipotético y contrario de que el capitalismo hubiera sido auténticamente transnacional, es decir, si las batallas por el Estado hubieran permanecido al margen del proceso de trabajo. Lejos de conducir a la aparición de la clase obrera unida en lucha por el socialismo que veía Marx, habría producido un conjunto de luchas profundamente seccionales y segmentales. Sin la batalla por la democracia de partidos, la clase capitalista habría disfrutado de una hegemonía total, como amenaza con ocurrir ahora, en un mundo mucho más transnacional.

La Rusia imperial: militarismo autocrático y revolución

La transformación de la agricultura rusa por la vía de la industrialización se produjo de forma intensa e irregular en variadas oleadas a lo largo de este periodo [5]. La abolición de la servidumbre en 1861 avivó las luchas agrarias que analizaré en el capítulo 19. Cuando, ha-

[5] Para la clase obrera me he servido principalmente de los estudios de Bonnell (1983), Mandel (1983), Smith (1983: 5 a 53) y Swain (1983). Para una comparación interesante entre el régimen de las fábricas en Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos véase Burawoy (1984). Para las divisiones entre el régimen y los intelectuales véase Haimson (1964-1965), Besançon (1986) y Hobson (1991). Para la política laboral de los zares véase McDaniel (1988) y para su acción represora, Goldstein (1983: 278 a 287).

cia 1900, llegó la Segunda Revolución Industrial, la primera se encontraba aún en pañales. Las ciudades se poblaron de grandes fábricas y abarrotados suburbios proletarios. Los historiadores han apuntado como una de las causas de la revolución el hecho de que el capitalismo industrial ruso generara una clase obrera más concentrada desde el punto de vista logístico que la de otros países, y, por tanto, con un formidable arraigo en la comunidad de clase, superior en todo caso a lo que cabría esperar del grado de desarrollo ruso y del porcentaje de trabajadores industriales dentro del conjunto de la mano de obra. Pero las auténticas causas de la revolución se explican mejor por sus cristalizaciones políticas que por el tamaño de sus fábricas.

En materia de representación política, Rusia ocupaba el extremo opuesto a los Estados Unidos. En 1900 era la única monarquía autocrática de Europa, que, además, no abrigaba pretensión alguna de convertirse en una democracia de partidos y donde las elites estatales y los partidos se interrelacionaban como facciones de corte. También difería su militarismo, ocupado en conservar un imperio que circundaba el núcleo «ruso» de su territorio (aunque también el militarismo británico sostenía el dominio de Irlanda). Así pues, encontramos un militarismo muy pronunciado, tanto en el plano interior como en el geopolítico. El Estado ruso cristalizó como capitalista, pero también como militarista, monárquico y centralista (las etiquetas «nacional» o «Estado-nación» se adaptan mal a su caso).

Pero incluso en las zonas más orientales de la comunidad ideológica occidental se había experimentado la herencia liberal de la Ilustración. Como vimos en el capítulo 14, cuanto más tardío es el desarrollo económico, mayor es la posibilidad de que aparezca una intelectualidad tecnocrática con pretensiones de conocimiento científico y proyección de futuro. Y así, apareció entre los profesionales, los aristócratas, la baja nobleza y los administradores del Estado ruso una intelectualidad consciente y parcialmente autónoma, que planteó versiones alternativas de progreso. Las elites estatales se dividieron en facciones. A la derecha estaban los partidos de la corte que, en su deseo de un despotismo ilustrado, planteaban al zar estrategias propias del siglo XVIII, tales como la universalización de la enseñanza, la ciudadanía civil y la propiedad para los antiguos siervos. Este conservadurismo tenía también un barniz populista que situaba al zar a la cabeza del pueblo ruso o eslavo o de la iglesia ortodoxa. Existía también un populismo de izquierdas. Los liberales propugnaban la concesión de una ciudadanía civil y parcialmente política. Del en-

cuentro entre el populismo indígena y el socialismo europeo nacieron los socialistas y los anarquistas revolucionarios. En otros países, estas estrategias diferentes aparecieron en ambientes sociales igualmente distintos, pero los intelectuales rusos debatían al mismo tiempo todas las soluciones patentadas, como revelan vívidamente las narraciones de Dostoievski. Las políticas alternativas se confundían, restringiendo su capacidad de penetración.

El asedio al Estado procedía tanto de la turbulencia exterior como de los partidos internos, de modo que a medida que se expandían sus funciones civiles a lo largo del siglo XIX, lo hacían también las facciones. Como en otras partes, las nuevas funciones del Estado produjeron políticas conciliadoras, pero sólo por parte de una facción, y no precisamente la dominante. Los distintos ministerios y funcionarios, con distintos antecedentes, sugerían unas veces la represión militar y otras el paternalismo; la regulación política o la conciliación limitada y la autonomía para las organizaciones obreras. Los ministerios encargados de la seguridad y las finanzas no se ponían de acuerdo.

Las decisiones que adoptó el régimen no fueron inevitables porque disponía de un elevado número de opciones. Puesto que constituía un Estado autocrático, el autócrata ratificaba las estrategias decisivas del poder, su palabra era ley, sus ministros le rendían cuentas; sus preferencias, carácter y decisiones tenía una enorme importancia. Pero el talento de los últimos Romanov no estuvo a la altura. El último zar que elaboró una estrategia clara hacia un absolutismo ilustrado, aunque conservador, había sido Alejandro II, asesinado en 1881. Alejandro III, que reinó hasta 1894, combinó la industrialización con la represión instintiva. Nicolás II se enfrentó a una situación mucho más confusa con indecisión, tanto en su matrimonio como en los asuntos de Estado, y entre los autócratas estas cosas tienen trascendencia. A falta de ideas personales y asediado por las de otros —entre las que no se deben olvidar las opiniones histéricamente reaccionarias de su esposa Alejandra—, Nicolás y su corte se acogieron a un militarismo irresoluto.

Pero dignificar la política de estas facciones de elite con el nombre de estrategias podría constituir un error. Los instintos y las tradiciones predominantes en Rusia eran reaccionarios y autocráticos. Enfrentadas a los problemas, las elites vacilaron entre llevar a cabo una reforma mínima o ejercer una represión brutal, una lucha interior que se resolvió generalmente a favor de la represión militar por miedo instintivo a los nuevos poderes que surgían en la sociedad civil. La re-

presión autocrática rusa era más una deriva que una estrategia y no contaba con auténticos fundamentos para imponer el orden, satisfacer las demandas que llegaban desde el exterior del Estado o reforzar la moral de los que estaban dentro. Un zar mejor habría obtenido mejores resultados.

La situación rusa no dependió de los capitalistas, sino de las elites estatales. Fueron éstas quienes respondieron a las huelgas, los sindicatos, los partidos socialistas y, en general, a cualquier manifestación de organización colectiva, prohibiendo su existencia por considerarla una amenaza contra el orden público. Se empleó sistemáticamente a la policía armada y al ejército para dispersar a manifestantes y huelguistas. De 1895 a 1905 el ejército intervino no menos de dos mil veces. El gobierno entregaba pasaportes a los trabajadores que emigraban a las fábricas y se los quitaba si perdían su contrato de trabajo; redactaba manuales con normas para regular la actividad de los trabajadores. El castigo físico y la servidumbre personal respecto a los empresarios y los gerentes formaba parte de ese código, derivado del ejército ruso. Una experiencia común a obreros y campesinos-soldados que habría de volverse contra el régimen y los capitalistas en 1917. Por otro lado, los intentos de conciliación que llevaron a cabo las elites se caracterizaron por un desmañado paternalismo. Uno de los sindicatos más curiosos que produjo el capitalismo ruso fueron las sociedades de Zubatov, patrocinadas por el jefe de la policía de Moscú en 1896, que encarnaba las contradicciones, por un lado, del deseo genuino de reformistas como Zubatov de establecer un paternalismo «neutral» en las relaciones laborales, y, por otro, de la toma de partido por la propiedad y las fuerzas del orden. Estas sociedades desaparecieron en el clima revolucionario de 1905 (McDaniel, 1988: 64 a 88). No hubo ciudadanía civil, ni mucho menos política, para los trabajadores, pero tampoco para los campesinos o para la clase media.

Así pues, *ninguna* estrategia moderada por parte de los trabajadores —proteccionismo, mutualismo, reformismo o economicismo— les habría reportado ventaja alguna; ni tampoco podía surgir una estructura legal o institucional que gestionara las relaciones laborales. Dentro de los muros de las fábricas se produjo una intensa colaboración encubierta, ante la que muchos ministros, gobernadores provinciales o jefes de policía se hacían los ciegos. Algunos de ellos hicieron promesas de reforma que ninguna administración fiable era capaz de cumplir. No podía existir un sindicalismo que pretendiera conseguir

algo de este Estado con huelgas, aunque su ala anarquista se acogiera al terrorismo. Los demócratas burgueses se vieron atraídos por el socialismo estatista a causa de su común experiencia del militarismo. En 1900 todos los demócratas, burgueses o proletarios, se llamaban a sí mismo «socialistas», analizaban las ideas de Marx y sostenían que la democracia requería una transformación general económica y política. La mayor parte de los socialistas, impelidos a los sueños revolucionarios clandestinos, perseguían soluciones estatistas.

Puesto que el ritmo de la industrialización no permitió madurar al artesanado, la organización artesanal y el seccionalismo fueron muy débiles al principio. Después, quedaron literalmente pulverizados por la represión estatal. Ni los empresarios ni las elites distinguieron, como en otros países, entre trabajadores más o menos «responsables» o «respetables». Por otra parte, los trabajadores especializados recibieron pocas ventajas que los apartaran de las masas. Apenas hubo seccionalismo entre la clase obrera rusa. Incluso cuando se aireaban proyectos mutualistas de seguridad social con apoyo estatal —una cuestión que dividió en otros países a los trabajadores conforme al nivel y a la seguridad de su renta—, todas las organizaciones obreras demandaron un proyecto universal patrocinado por el Estado. Las elites y los capitalistas, inconscientemente en muchas ocasiones, estaban empujando a los trabajadores a militar en organizaciones de clase dirigidas por revolucionarios. Lenin lo supo en 1899:

> La clase obrera rusa soporta un doble yugo. Por un lado, el despojo de los capitalistas y los terratenientes, por otro, la agresión de la policía que, para evitar el levantamiento, la mantiene amordazada y atada de pies y manos, y persigue todo intento de defender los derechos del pueblo. Cada vez que se produce una huelga, los capitalistas echan al ejército y a la policía contra los obreros. Cada lucha económica se convierte necesariamente en una lucha política, por tanto, la socialdemocracia deberá combinarlas en *una sola lucha de clase del proletariado* [1969: 36, la cursiva es suya; volverá a repetir la idea en 1902, en su libro *¿Qué hacer?*, 1970: 157].

En 1905 las elites estatales adquirieron una mayor conciencia de la situación, porque su capacidad de gobierno había quedado muy menguada por la derrota frente a Japón. En las provincias del lejano oriente, el ejército, mal dirigido y pobremente equipado, acabó desmoronándose; en las ciudades faltó la comida; en las zonas rurales,

los campesinos, aprovechando el vacío de autoridad, requisaban las tierras. Las huelgas de 1905 reunieron una cifra aproximada de 2,8 millones de trabajadores, más del doble que en cualquier otro país en cualquiera de los años del periodo. A esta protesta se sumaron manifestaciones con base comunitaria, levantamientos por la carestía del pan y movimientos regionales por la autonomía «nacional» (que ni los historiadores occidentales ni los soviéticos han estudiado adecuadamente). Los disturbios y manifestaciones de 1905 y 1917 recordaban más en muchos aspectos a las anteriores revoluciones burguesas y a la época cartista, por su arraigo en la calle y en la comunidad, que a las luchas centradas en el empleo de la clase obrera moderna. Las revoluciones rusas echaron a la calle tanto a hombres como a mujeres, y la intensidad de los sentimientos que estuvieron en juego se debió más al apoyo de la familia y de la comunidad que a las luchas exclusivamente políticas y económicas. La conciencia de clase se convirtió en Rusia, y sólo allí entre todos los países del periodo, en una *totalidad* dirigida contra un Estado que practicaba una explotación política y económica centralizada en todos los aspectos de la vida.

Sin embargo, no existía aún ningún grupo que sustentara una idea revolucionaria, ni mucho menos una alternativa coherente más allá de las quejas expresadas al modo tradicional. En los centros urbanos, la revolución de 1905 fue, en efecto, una auténtica demostración de quejas, pero no un movimiento nacional. Los soldados rebeldes, los campesinos, los manifestantes de las ciudades, los disidentes nacionales y regionales se organizaron por separado, en el plano local y regional, por eso sufrieron también por separado la represión. Bastó con que muchos regimientos respondieran con disciplina. En San Petersburgo, sólo durante el «domingo sangriento», las tropas mataron a un mínimo de 130 manifestantes e hirieron a 300. Ante esta situación, Lenin (contradiciendo las palabras que hemos citado al comienzo del capítulo) señalaba: «La educación del proletariado avanzó más en un día que en muchos meses y años de existencia gris, rutinaria y desgraciada» (Kochan, 1966: 80). Las tropas causaron 2.500 víctimas mortales al año siguiente, suprimiendo con ello la protesta polaca, que unía a los agravios de clase las tendencias nacionalistas, y el Estado respondió al subsiguiente terrorismo con ahorcamientos masivos.

Pero el zar se mostraba ahora asustado, con razón, por la coincidencia de protestas masivas de campesinos y trabajadores, en las ciu-

dades o en las regiones, que demandaban la ciudadanía agotando los recursos represivos de un régimen recién derrotado en la guerra. Los moderados aprovecharon la ocasión para convencerle de que sólo podría vencer a rivales como Japón o Alemania sumando las reformas al desarrollo agrario e industrial, de modo que el Estado pudiera garantizar una parcial ciudadanía política y civil. Se convocó a la Duma (el Parlamento ruso), aunque con un sistema de sufragio muy sesgado. Se introdujeron concesiones mutualistas en la industria: durante un breve periodo a partir de marzo de 1906 se legalizaron los sindicatos, a condición de que se mantuvieran alejados de la política y evitaran las huelgas secundarias. Al fin y al cabo, una concepción paternalista del sindicalismo era mejor que nada. El movimiento obrero se dividió en dos; por un lado, con mayor optimismo, los mutualistas y los reformistas (que coincidían con los liberales del régimen en su deseo de conquistar un sindicalismo «occidental», hecho de retórica socialista y compromiso pragmático) y, por otro, los revolucionarios escépticos.

El cerebro del régimen se puso en marcha, con el objetivo aparente de imitar una incorporación autoritaria al estilo alemán, pero esto requería saber combinar la represión con la conciliación segmental. La táctica evidente era reconciliarse con las demandas burguesas de ciudadanía, crear un programa agrario capaz de introducir divisiones entre los campesinos y reprimir a los trabajadores y a los disidentes nacionales y regionales. Sin embargo, al régimen le traicionó su desprecio del liberalismo burgués y su terror a las masas. Para que los liberales mantuvieran el control sobre el movimiento reformista, era imprescindible reprimir a los obreros, los campesinos y los disidentes. Pero incluso los sindicatos economicistas, los llamados «legalistas», presionaron para lograr la extensión de los derechos de organización y la ciudadanía política, y tales pretensiones eran imposibles de asumir por el zar y la corte. Nicolás vaciló y escuchó los consejos de su mujer. La Duma se disolvió por dos veces, al tiempo que se modificaba su constitución en un intento inútil de someterla. Los liberales perdieron la influencia sobre los obreros. Entonces apareció, en la figura de Stolypin, un cerebro alternativo que propuso desarrollar la economía, la modernización del ejército y la reforma agraria para dividir a los campesinos, resistirse a la ciudadanía y reprimir la protesta urbana e industrial. La constitución de la Duma se restringió por tercera vez, mediante la concesión del 50 por 100 de sus escaños al 1 por 100 de los terratenientes. Finalmente, se había logrado una Duma sometida, capaz de completar los cinco años de su mandato. La

estrategia de Stolypin, basada en el segmentalismo, suponía asumir la represión de la clase obrera.

En junio de 1907, la prohibición de los sindicatos causó un profundo resentimiento en los legalistas, que aún mantenían sus organizaciones a nivel nacional. Los dirigentes obreros y los intelectuales radicales de la burguesía encontraron más razones para buscar alternativas revolucionarias, pese a que apenas tenían capacidad de arriesgarse en una acción abierta. Hacia 1910 todas las alternativas importantes habían quedado reducidas al marxismo estatista que propugnaban tres partidos ilegales: los socialrevolucionarios, los mencheviques y los bolcheviques. Pero la opresión estatal en la comunidad y en las fábricas impidió tanto a los economicistas, como a los mutualistas, los reformistas y los sindicalistas anarquistas o revolucionarios progresar entre los trabajadores y las comunidades de la clase obrera.

Con el misterioso asesinato de Stolypin en 1911, el régimen volvió a caer en la vacilación. Creció la censura y los sindicatos volvieron a vivir en precario, entre la legalidad y la persecución intermitente. Los legalistas volvieron a experimentar la misma contradicción que en 1906-1907: podían organizarse, pero no conseguían reformas. Cuando las manifestaciones y las huelgas llegaron demasiado lejos, las tropas volvieron a la calle. Pero esta represión militar dio el liderazgo obrero a los revolucionarios, sobre todo después de la matanza de las minas de oro del Lena, en 1912, donde la muerte de doscientos mineros provocó huelgas masivas en los principales centros industriales que continuaron hasta 1914.

El régimen quiso realizar la reforma después de modernizar el ejército y llegó a completar la reforma agraria de Stolypin, curiosamente, en febrero de 1917, pero el ataque alemán vino a desbaratarlo todo (véase capítulo 21). Al principio, la guerra reforzó a los conservadores y aumentó la represión, pero las primeras derrotas produjeron la desintegración del ejército, del abastecimiento del pan y del gobierno. Cuando estalló la revolución, en 1917, su base se había ampliado; a los trabajadores, los campesinos, los nacionalistas y los manifestantes por la escasez se añadieron los oficiales descontentos y los soldados y marineros insurrectos. El núcleo de los bolcheviques, apoyados por los obreros, se formó a partir de los antiguos legalistas, ya marxistas revolucionarios.

La secuencia de represión, disturbios, proyectos de reformas moderadas, vacilación y aumento de la represión marginó a los liberales

y los moderados que había en el seno de la clase obrera, de la burguesía y de la intelectualidad. En 1914, cuando sus enemigos ya proliferaban, el régimen aún no había acabado de establecer su estrategia. No había denegado las principales reivindicaciones de ciudadanía nacional, incluso aceptó erráticamente los detalles prácticos. Las cristalizaciones estatales fueron variadas e inconsistentes. Sólo en las épocas de crisis se evidenciaba la auténtica naturaleza del régimen. Los revolucionarios estaban preparados para dirigir una situación que ya no controlaban los reformistas.

No cabe duda de que la mayoría de los trabajadores rusos de 1914, incluso de comienzos de 1917, tenían una mentalidad mucho más «conservadora» que la de los agitadores, tanto por su escepticismo hacia las alternativas revolucionarias como por las esperanzas puestas en la posibilidad de que los legalistas, los moderados del régimen e incluso el zar llevaran a cabo las reformas necesarias. Pero hacía ya una década que no había entre los trabajadores un movimiento moderado o seccionalista significativo. Los historiadores han señalado el punto débil más común a toda clase obrera: las diferencias entre los obreros metalúrgicos especializados y los obreros fabriles más jóvenes, sin especialización, procedentes del campo, incluso mujeres y proletariado urbano (como ha destacado recientemente McKean, 1990). Sin embargo, este punto débil no produjo aquí distintas organizaciones, como ocurrió en Estados Unidos y, hasta cierto punto, en Gran Bretaña. Por el contrario, generó un liderazgo de los primeros sobre los últimos, en el marco de una lucha común que paulatinamente se hizo revolucionaria.

Sin un movimiento reformista que hubiera conducido a la monarquía por un camino más integrador, al estilo occidental —alemán o angloamericano— el movimiento obrero estaba en condiciones de entrar en una fase revolucionaria; naturalmente, lo hizo, y como en el caso de otra superpotencia extrema, los Estados Unidos, con unas enormes consecuencias globales. En la evolución hubo dos papeles decisivos y necesarios, el de la guerra y el del campesinado. Por sí mismos, ni el modesto proletariado ruso ni sus dirigentes marxistas habrían podido abordar con éxito la revolución. Analizaré el caso del campesinado en el capítulo 19 (y la guerra y la revolución bolchevique en el próximo volumen), pero incluso sin la guerra y el campesinado, los obreros rusos habrían constituido una clase al borde de la insurrección, unidos a la burguesía radical y a los nacionalistas regionales, por su experiencia común de un Estado vacilante y, sin em-

bargo, militarista, autocrático y centralizado, que no sólo se dejaba sentir en el empleo, sino también en la vida cotidiana de toda la familia. La explotación en Rusia era al mismo tiempo intensiva y extensiva. Un régimen como éste, cuando pierde en una derrota bélica su brazo armado, se enfrenta necesariamente a la insurrección, con resultados impredecibles.

Francia: cristalizaciones políticas contestadas y socialismos rivales

Atribuyo gran parte de las características distintivas del movimiento obrero francés, desde el punto de vista convencional, a las cristalizaciones políticas [6] de ese país. No obstante, hubo otras influencias decisivas que contribuyeron a formar las peculiaridades de la industrialización francesa; en primer lugar, fue muy temprana, pero luego evolucionó con una lentitud insólita. Por ejemplo, los tejedores manuales sobrevivieron por miles incluso después de la depresión de su oficio en 1882-1890, mucho después de que hubieran desaparecido en Alemania y Gran Bretaña. Las organizaciones obreras de este tipo demostraron, como en otros países, una enorme capacidad de supervivencia, hasta el punto de que las de carácter artesano dominaron durante mucho tiempo a los sindicatos. Apoyadas por la revolución, las familias campesinas habían defendido con tenacidad su trabajo y sus haciendas, lo que retardó el crecimiento urbano e industrial. Según las muestras de trabajadores de cinco ciudades del área de Lyon durante la década de 1850, del 54 al 66 por 100 practicaban el mismo oficio que sus padres. Entre el 43 y el 53 por 100 lo hacían aún en los diez años posteriores a 1902 (Lequin, 1977: I, 222, 251). Dada la escasa mano de obra, tampoco abundaba el trabajo esquirol, pero había una elevada proporción de mujeres casadas que trabajaban. La industria se extendió por la Francia rural para acercarse a la oferta de trabajo y de consumo.

Así pues, el proletariado nació bastante descentralizado. La industria, la agricultura, el empleo y la comunidad no estaban separadas, y eran pocas las familias que vivían sólo de salarios industriales. La industrialización produjo las acostumbradas organizaciones sindicales, desintegrando las *compagnonnages* o asociaciones móviles, que

[6] Para la historia de la clase obrera francesa me he servido libremente de Noland (1956), Lefranc (1967), Ridley (1970), Perrot (1974) y Moss (1976).

fueron reemplazadas por sociedades de socorro mutuo, ya que los artesanos se sentían amenazados por la utilización capitalista de máquinas y mano de obra femenina e infantil. La proletarización fue más gradual que en Inglaterra, especialmente en la industria textil del norte, donde se conservó la organización familiar y el control por parte del empresario, al contrario que en los centros de los artesanos manufactureros, concentrados en París y Lyon (Aminzade, 1981, 1984). Hasta la aparición de las «nuevas fábricas» de maquinaria pesada en la década de 1900 no se produjo una división clara entre el espacio de la casa, la fábrica y la ciudad, que confinara a los sindicatos en las fábricas donde predominaban los hombres, aunque éstos siempre influyeron en los «suburbios rojos» (Perrot, 1986; Cottereau, 1986).

Tales aspectos característicos de la industrialización francesa habrían debido ralentizar también el desarrollo del movimiento obrero. Y probablemente lo hicieron en cuanto a su volumen, pero en cuanto a organización y conciencia de clase los militantes franceses fueron muy precoces, en gran parte debido a que la contestación a las cristalizaciones políticas mantuvo viva la tradición revolucionaria. Sólo la cristalización nacional se resolvió, porque todos los partidos en liza apoyaron un Estado centralizado. Pero la representación contó con la oposición de los demócratas republicanos, los monárquicos y los bonapartistas, lo que dio un tinte reaccionario al capitalismo francés y fomentó el militarismo interno.

Enfrentados a estos desafíos, los socialistas tomaron pronto la iniciativa dentro de las organizaciones de París y de Lyon. Cuando los artesanos exigieron la democracia de partidos y los derechos de organización a los regímenes monárquicos del periodo 1815-1848, la organización nacional de clase tuvo un alcance que no cabía esperar de una industrialización tan vacilante. El movimiento de los *sansculottes* se transformó en socialismo artesano antes que en cualquier otro país, como descubrió un Marx exiliado, de veinticinco años, en 1843, durante lo que constituyó su primer encuentro con la clase obrera, en París y Bruselas. En la década de 1830, los socialistas republicanos habían desarrollado entre los artesanos una red de poder ideológico, primero en París y luego a escala nacional, compuesta de periódicos, clubes con salas de lectura y cafés. En la década de 1840 integraron las sociedades de socorro mutuo en una sola organización centralizada y nacional, que se extendió en una versión rudimentaria a los trabajadores con menor especialización.

En 1848 las asociaciones artesanas formaron «pequeñas repúblicas» de tendencias izquierdistas, en la vanguardia de la revolución (Gossez, 1967; Lequin, 1977; Aminzade, 1981: capítulo 6; Sewell, 1986; Traugott, 1988). Aunque la represión los obligó a volver al plano local y regional, los socialistas dominaron clandestinamente las organizaciones laborales durante todo el reinado de Napoleón III (1851-1870), rechazando el intento del monarca de integrar sus asociaciones de ayuda mutua, con el que esperaba separar a los trabajadores especializados de los no especializados. Apenas hubo un sindicalismo respetable y seccional, porque la tradición revolucionaria alimentó la organización de clase en un ambiente de represión generalizada. La clase obrera transformó, pues, la retórica revolucionaria del jacobinismo pequeño burgués, a través de las formas artesanales del blanquismo y del mutualismo de Proudhon, en un sindicalismo y un marxismo más proletarios.

A partir de 1875 Francia presentaba una semejanza superficial con los Estados Unidos, ya que ambos países compartían una democracia de partidos masculina. Los trabajadores varones disfrutaban de la ciudadanía política. Pero aquella democracia restringida no estaba completamente institucionalizada porque sobrevivía gracias a coaliciones centristas inestables. En 1875 la república había triunfado por un solo voto en el Senado contra los monárquicos divididos, y no tuvo un mandato electoral claro hasta 1879. El régimen resistió concediendo a los trabajadores el derecho a organizarse. Para la izquierda, la década de 1870 estuvo dominada por la represión militar contra la Comuna de París (30.000 muertos) y la continua hostilidad del régimen hacia la clase obrera. El rojo, color de la sangre, habría de convertirse en el color de los trabajadores. La extrema izquierda tenía un gran vigor y comenzaba a abrirse al exterior, bien arraigada en las comunidades obreras a nivel local y regional. Hacia 1880 el régimen intentó la conciliación en materia de ciudadanía civil, concediendo la amnistía a los *comunards* supervivientes, primero, y legalizando la huelga y los sindicatos en 1884. Pero la amenaza monárquica y bonapartista seguía en pie, estimulada por un ejército dividido en facciones, por el clericalismo y por el contencioso que mantenían la Iglesia y el Estado. El Estado de la democracia de partidos limitada tenía enemigos a izquierda y derecha, algunos de ellos (como los derechistas del cuerpo de oficiales) atrincherados en su propio seno.

A partir de la década de 1880 el Estado amplió sus funciones civiles, como en los restantes países, coincidiendo con el atrinchera-

miento del republicanismo centrista. Su militarismo interior se hizo más cauteloso e imparcial. Los partidos dominantes y las elites estatales estaban interesados en mantener el orden; ésta era, en realidad, su principal función nacional, porque si faltaba el orden faltarían también ellos. Podían responder al descontento popular con concesiones o con represión paramilitar. Si creían que la peor amenaza para el orden estaba más en las revueltas que en la satisfacción de las quejas del pueblo —y si temían también al propio ejército— se inclinarían por las concesiones. El Estado quedaba autorizado para optar por la conciliación, siempre que ésta no afectara al derecho básico a la propiedad. Muchos Estados del siglo XIX no estuvieron completamente dominados por el capital industrial, y, salvo Rusia y Estados Unidos, sus redes de poder judicial y policial intervinieron a menudo para lograr la conciliación. El Estado francés fue sensible en esta cuestión porque el régimen era ya una democracia de partidos y temía tanto a la izquierda como a la derecha, incluida la de su cuerpo de oficiales.

El análisis cuantitativo de Shorter y Tilly (1974: 30 a 32) sobre las huelgas francesas del siglo XIX revela la repetida intervención de los prefectos, por lo general a petición de los trabajadores, para evitar o poner fin a los disturbios, y muestra también que los trabajadores solían obtener mayor satisfacción a sus demandas cuando intervenía el gobierno. Los actos de los prefectos y subprefectos fueron muy variados; algunos buscaban la conciliación; otros, la mayoría, se pusieron del lado de los empresarios, pero en la mayor parte de los casos les interesaba pacificar sus distritos y preservar su récord administrativo de mantenimiento del orden (Perrot, 1974: II, 703 a 714). Los partidos republicanos burgueses adoptaron también una actitud errática hacia los trabajadores, alternativamente represiva y conciliadora, según buscaran o no su apoyo contra la derecha.

En respuesta a estas cristalizaciones estatales erráticas, que, al contrario que en Rusia, no adoptaron una forma definitiva, nació la característica distintiva de la clase obrera francesa, esto es, su faccionalismo ideológico, por el que osciló entre el mutualismo y la colaboración reformista con la burguesía radical y las alternativas revolucionarias surgidas a raíz de la desilusión respecto a los partidos republicanos y las elites del Estado. Una frustación que adoptó tres formas principales: la versión socialista de la tradición jacobina, en la que predominaba lo político frente a lo económico; el terrorismo anarquista, abatido en la década de 1890; y el sindicalismo. Este úl-

timo recibió, además, el empuje de una expansión industrial relativamente descentralizada. Pero tanto el economicismo, como el mutualismo, el sindicalismo, el marxismo y la socialdemocracia no hicieron otra cosa que competir entre sí, y con ello debilitar la cohesión de la clase obrera.

Los capitalistas franceses, como sus iguales en otros países, aguantaron una ofensiva hacia 1900, en el momento en que la Segunda Revolución Industrial amenazaba los controles de los artesanos. Éstos se vieron forzados a defender el sindicalismo. Como en la mayoría de los países, los sindicatos y las huelgas proliferaron en las fábricas de tamaño medio antes que en las grandes (mejor controladas por los dueños) hasta entrado el siglo XX (Lequin, 1977: II, 129); y los movimientos tuvieron mayor alcance en las ciudades medias donde había artesanos y trabajadores industriales que allí donde no existían los primeros (Hanager, 1980). No obstante, la mayoría de los sindicatos franceses carecían de una afiliación y de una unidad suficientes para enfrentarse a los empresarios y esto también estimuló el faccionalismo ideológico.

La debilidad formal de los sindicatos no disminuyó, por el contrario, se mantuvo una afiliación de cuotas muy bajas, prácticamente masculina, aunque el seccionalismo no cundió entre los obreros especializados (hombres). Los militantes miraron más hacia el Estado que hacia los sindicatos a la hora de pedir seguridad social y otros beneficios colectivos, lo que constituye un fenómeno poco habitual en el siglo XIX. Cuando, a finales del siglo, los sindicatos crearon bolsas de trabajo proteccionistas aumentó inmediatamente su base y se convirtieron en organizaciones de «acción directa». El compromiso político aumentó entre los obreros durante la lucha por el sufragio masculino, en el periodo de la coalición radical-socialista de la década de 1890 y durante la época posterior a 1906, dirigida por el socialismo reformista. Esta dirección acrecentó las divisiones de los militantes respecto a la relación con los partidos radicales burgueses, así como la concentración en el plano político y el descuido de la faceta industrial, que empujó a algunos militantes al sindicalismo revolucionario. La organización más importante, la CGT, estuvo dirigida por sindicalistas puros desde sus comienzos en 1895, quienes mantuvieron el poder contra una probable mayoría reformista entre sus filas, sirviéndose del mismo sesgo institucional (que privilegiaba a las organizaciones nacionales frente a la afiliación local) que sostuvo al conservador Gompers en los Estados Unidos.

La entrada del socialista Alexandre Millerand en un gobierno burgués en 1899, por primera vez en la historia de Occidente, reforzó la tendencia sindicalista. La incorporación de la derecha a los gobiernos radicales en los que participaba Millerand dividió a los socialistas, cuya izquierda se sumó a los esquemas políticos de los sindicalistas y proclamó la huelga general como arma revolucionaria (Brecy, 1969). Aunque la afiliación de la CGT era escasa (menos de la mitad de los trabajadores organizados, y menos del 5 por 100 del conjunto de los obreros) llevó la dirección de casi todas las manifestaciones y huelgas masivas. Sin embargo, conviene recordar en este punto que durante este periodo la cristalización política en Francia no se produjo tanto en torno a la clase como al concepto radical de *nación*, encabezado por la idea republicana de control secular de la educación y de las leyes referentes a la familia, contra la iglesia católica, anticentralista y arraigada en el plano local y regional. El hecho de que los militantes obreros apoyaran esta idea impidió a los sindicalistas movilizar una conciencia *totalizadora* de clase; el sindicalismo se preocupaba de los asuntos económicos; los partidos, de los políticos. Una división que no se debió tanto a las características especiales de la industria francesa como a las cristalizaciones políticas del Estado.

Pero, al contrario que en la América federal, la confianza en la tradición republicana revolucionaria, especialmente en el jacobinismo, fomentó las ideologías nacionales, centralizadoras y totalizantes. Los dirigentes se jactaban de llamarse «revolucionarios», percibían la totalidad del capitalismo nacional francés y proclamaban distintas formas de socialismo alternativo. Aunque no faltaron los puntos débiles tradicionales, es decir, las divisiones entre los oficios, las industrias y los grados de especialización, ninguna de ellas se convirtió en una organización seccional aparte ni reforzó las facciones ideológicas. A raíz de la derrota de la huelga general de 1906, los militantes saludaron la llegada de un hombre del talento unificador de Jean Jaurès. Su partido socialista de 1905 armonizó la retórica revolucionaria con el reformismo político: sufragio universal, socialismo municipal y extensión de la asistencia social. Consiguió, incluso, mejorar las relaciones con la CGT, que aprendió a combinar la retórica revolucionaria con la organización centralizada y los convenios colectivos. En 1914 existía ya un movimiento ideológico que aunaba el sindicalismo y el socialismo, y que pretendía hacer la revolución, aunque cabe dudar de su capacidad para lograrlo (Gallie, 1983: 182 a

195[7], y Lequin, 1977: II, 297 a 370 manifiestan su escepticismo al respecto).

El socialismo francés también se concentró en los aspectos políticos y económicos del empleo masculino. La clase obrera ignoró a las numerosas mujeres casadas que trabajaban y que raramente formaban parte de los sindicatos. Los «suburbios rojos», pese a sus fiestas y a sus banderas, no desarrollaron una política común capaz de activar al conjunto de las familias obreras. Como en los Estados Unidos, debemos buscar una de sus causas principales en la existencia del sufragio masculino. Los socialistas y los sindicalistas activos disfrutaban ya de derecho al voto y mostraban un escaso interés por el movimiento feminista, predominantemente burgués, cuyas demandas se concentraban en cuestiones que no afectaban al empleo, tales como el sufragio femenino o las leyes relativas al matrimonio. Fueron muchos los países en los que la temprana obtención del voto masculino retrasó el sufragio para las mujeres. En un periodo en el que la lucha, dominada por los hombres, se centraba en el empleo, y el enfrentamiento político tenía lugar en regímenes con sufragio masculino, la separación entre hombres y mujeres era inevitable. Así pues, las distintas ideologías socialistas no arraigaron en la vida cotidiana de la clase obrera. Ante todo, este socialismo dividido en facciones, pero no en secciones al uso, se explica por la inserción de los trabajadores franceses en un Estado institucionalizado y altamente centralista, aunque dividido en cualquier otro aspecto, especialmente en lo relativo a la democracia de partidos y el militarismo interno.

Alemania: la incorporación semiautoritaria

En 1914 Alemania no sólo se estaba convirtiendo en la mayor potencia industrial de Europa, sino que contaba también con el mayor partido socialista del mundo. Su caso representa un claro ejemplo de

[7] Creo necesario establecer desde este momento mi desacuerdo fundamental con Gallie. Aunque me parece correcta su opinión sobre la escasa fuerza revolucionaria del movimiento obrero francés anterior a la guerra (atribuye su potencia posterior a la Primera Guerra Mundial, como yo mismo sostendré en el Volumen III de esta obra), no acierta al minimizar su carácter revolucionario o, mejor dicho, sus caracteres, dada la proliferación de facciones. El sindicalismo y el marxismo se encontraban ya firmemente asentados en Francia antes de 1914, no fueron producto de la Primera Guerra Mundial.

modernización calculada del militarismo represivo interno. Si las relaciones laborales en la Rusia zarista se habían distinguido tanto por la vacilación como por la reacción instintiva, los gobiernos alemanes practicaron una estrategia de modernización capaz de amansar a la clase obrera manteniéndola, al mismo tiempo, fuera del régimen, lo que Roth (1963) ha llamado «incorporación negativa». La fortuna de la guerra convirtió esta estrategia en la forma predominante de institucionalización del conflicto de clase en el capitalismo industrial.

El avance de la industria alemana estuvo siempre unido a las relaciones del poder político y militar, como hemos visto en el capítulo 9. La industrialización, fomentada por la *Zollverein* prusiana y por la infraestructura de las comunicaciones y la unificación nacional, llegó más lejos precisamente en aquel estado y en otros luteranos y conservadores como Sajonia que en los estados liberales o católicos, y tuvo desde el principio el sello del estatismo semiautoritario. Pero hubo también ciertas peculiaridades económicas. La pequeña industria artesana, el trabajo a domicilio y el servicio doméstico que, comparados con sus equivalentes en Gran Bretaña o Estados Unidos, sobrevivieron mejor en Alemania, junto a una industria pesada con un elevado grado de concentración, produjeron un marcado dualismo en la estructura industrial. Dado que muchos trabajadores especializados comenzaron en los oficios artesanos antes de incorporarse a la gran industria, conservaron los valores de su temprana socialización en aquellas organizaciones. Y hubo también una profunda división entre hombres y mujeres, porque ellas apenas participaban con regularidad en el empleo industrial, aunque su trabajo eventual en los restantes sectores constituía un elemento esencial para la supervivencia de la familia. Los trabajadores organizados de la industria conservaron tanto como en el caso francés sus principios artesanos, pero el predominio del sexo masculino fue aún mayor. La afiliación femenina a los sindicatos socialistas no superaba el 2 por 100.

Hechas estas salvedades, se puede afirmar que el perfil económico de la clase obrera alemana se asemejó a cualquier otro (Kocka, 1986). Como en los restantes casos, el trabajo móvil y a domicilio produjo las primeras revueltas laborales; los artesanos de los oficios más seguros dominaron las primeras organizaciones estables, mientras los obreros fabriles (la mayoría en el sector textil) se mostraron relativamente dóciles, debido a la facilidad del control patronal y a las derrotas de las huelgas. Los artesanos sufrieron las consabidas presiones económicas derivadas de la Segunda Revolución Industrial. Hacia

1900 los obreros de la industria metalúrgica y de la minería (aunque no los del ferrocarril, estrechamente vinculados al Estado y al ejército) se unieron a los obreros semiespecializados o sin especialización de las fábricas y a los trabajadores en un movimiento masivo, cuyas características se debían sobre todo a las relaciones del poder político (como sostiene también Tenfelde, 1985).

En el capítulo 9 he analizado las cristalizaciones políticas, representativa y nacional, de Alemania. La revolución de 1848 forzó a los estados y las clases a adoptar decisiones vitales. Los estados alemanes aceptaron su inclusión en un Estado nacional y parcialmente federal, bajo la hegemonía prusiana, e hicieron la concesión de una democracia de partidos limitada con el objetivo de integrar a la burguesía. Los notables de los partidos burgueses dudaron al principio, pero atemorizados por el radicalismo obrero optaron por el orden social, apoyados por gran parte de la pequeña burguesía. El consiguiente aislamiento de los artesanos radicales acrecentó su izquierdismo; se describían a sí mismos como «clase obrera» y mantenían clubes, sociedades educativas y sindicatos locales en continuo contacto, a través de los exiliados políticos, con los socialistas europeos más avanzados. Sin embargo, formaban un exigua minoría, reprimida y neutralizada, incapaz de luchar contra la autoridad estatal o de movilizar simpatías políticas suficientes para abortar el militarismo. El control directo que las autoridades locales del ejército y la policía, apoyadas por los numerosos puestos de frontera interiores, ejercían sobre las asociaciones obreras, en mayor grado que en los restantes países occidentales (Ludtke, 1979), creó en los trabajadores una fuerte conciencia defensiva de clase. Pero en la zonas prusianas y luteranas interiorizaron también un sentido relativamente nacional y estatista de la política.

Una vez que la autoridad prusiana se vio completamente institucionalizada, el régimen relajó en parte su conducta. En la década de 1860 la mayoría de los estados alemanes legalizó los sindicatos (en general, sociedades de socorro mutuo) e incluso las huelgas que expresaban de modo directo los intereses obreros, pero nunca disminuyó la vigilancia policial de las organizaciones (los trabajadores agrícolas y domésticos no disfrutaron de estos derechos hasta después de 1914). La consiguiente expansión de huelgas y sindicatos se produjo de forma seccionalizada, en función del oficio, y faccionalizada, en función de la política y la religión regional. De los 70.000 afiliados de 1870, el 40 por 100 pertenecían a las asociaciones libera-

les; otro 40 por 100, a las socialistas; y el 20 por 100 eran independientes o católicos. Los partidos políticos obreros aparecieron en la década de 1860 a partir de asociaciones educativas inquietas por el fracaso liberal a la hora de apoyar la demanda de ciudadanía civil y política plena. La repentina introducción del sufragio universal masculino en 1867 enfrió los intentos liberales de incorporar a los trabajadores, tal como esperaba el régimen. Pero los trabajadores organizados no estaban dispuestos a apoyar a los partidos del régimen, de modo que la representación proporcional tuvo el efecto imprevisto de beneficiar electoralmente a los partidos obreros, que desarrollaron un socialismo reformista más tardío que el francés, pero anterior al de Gran Bretaña o Estados Unidos y a la formación de sindicatos a escala nacional. Los partidos se coaligaron en 1875, para crear el precursor del partido socialdemócrata y ayudaron a los sindicatos locales federados a unirse en una sola federación nacional. La concepción nacional, estatista e implícitamente luterana del partido ejerció desde el principio una intensa influencia sobre la clase obrera.

En este punto la situación se encontraba abierta. Durante la creación del *Reich* alemán, de 1867 a 1871, Prusia hizo concesiones a los liberales y en lo relativo a los derechos de los estados. Este proceso complejo creó en el régimen una conciencia poco habitual de las estrategias alternativas nacionales y de clase. A pesar de la existencia de un sufragio universal masculino, la monarquía prusiana retuvo enormes poderes sobre el *Reichstag* y sobre los *Länder* (los antiguos estados). Cuando se puso en marcha un proceso electoral, característico de una democracia de partidos masiva, el régimen continuó eligiendo los partidos que estaba dispuesto a admitir en sus organismos asamblearios. La clase obrera, mayoritariamente masculina, que ya disfrutaba de una ciudadanía civil sólo parcial, obtuvo ahora una parcial ciudadanía política. Los socialdemócratas ganaban las elecciones en las áreas urbanas e industriales, pero el partido aún no había adoptado los principios marxistas que habrían de caracterizarlo en adelante, así pues, se incorporó como «oposición leal» junto a los partidos burgueses y católicos, tal como había ocurrido en Gran Bretaña y (en menor medida) en Francia.

Fue entonces cuando Bismarck tomó conscientemente las riendas de la estrategia de incorporación semiautoritaria. Como canciller del *Reich* de 1871 a 1890, ofreció una mezcla de derechos ciudadanos diseñada para «dividir y vencer», con el objetivo de excluir a la clase obrera radical, a las minorías étnicas y a los separatistas del poder po-

lítico, en tanto que neutralizaba a los liberales de la clase media, a los católicos y a cierto tipo de trabajadores. Su política respondía a cuatro aspectos fundamentales:

1. La extensión de la hegemonía prusiano-alemana en toda Europa central distraería la atención de la lucha de clase interna. La expansión económica se identificó con la expansión militar del Estado, como veremos en el capítulo 21.
2. La división de los liberales, tal como vimos en el capítulo 9, consistente en incorporar al régimen a la mayoría de los partidos de notables burgueses y excluir a los pocos liberales-radicales que intentaban aliarse con los trabajadores.
3. Las leyes antisocialistas que restringieron la ciudadanía civil y política de la clase obrera de 1878 a 1890, ilegalizando al partido socialdemócrata, su prensa y la práctica totalidad de sus principales sindicatos, al tiempo que se concedía a todos los hombres una ciudadanía parcial, política y militar, que les permitía organizarse durante las campañas electorales. Sin embargo, la táctica no tuvo éxito. El seccionalismo que el régimen quería fomentar, disminuyó porque los trabajadores, especializados o no, recibieron el mismo trato (al contrario que en el sufragio según la propiedad de los países más liberales). Las excepciones electorales entregaron la hegemonía sindical a los socialdemócratas. Los trabajadores no disfrutaron de una ciudadanía civil plena ni siquiera después de que se abolieran las leyes antisocialistas. Los derechos de asociación fueron siempre incompletos, y la policía y las autoridades militares intervinieron en los conflictos laborales a favor de los empresarios. El militarismo estaba institucionalizado. Aunque los soldados iban armados, su fuerza era más ritual que práctica. Como ya hemos visto, murieron menos trabajadores en Alemania que en Francia, y muchos menos que en Estados Unidos, aunque ambos países eran también democracias masculinas. No se trató, pues, de la represión de una autocracia o una democracia de partidos, sino de una integración autoritaria. Por ejemplo, siguiendo la legislación austriaca, un agente de policía asistía a las reuniones de los trabajadores, donde tomaba notas para un posterior informe. Cuando barruntaba la subversión, se ponía el casco, en señal de que la actividad era ilegal y los asistentes debían dispersarse, lo que ocurría casi siempre. Aquel casco del policía colocado sobre la mesa del orador constituye el mejor símbolo de la incorporación semiautoritaria de la clase obrera.

La común exclusión y el liderazgo de los socialistas mantuvieron la unidad de los artesanos y los trabajadores no especializados y estimularon la aparición de una identidad de clase en el partido socialdemócrata, que paulatinamente adoptaba las concepciones marxistas. El partido abrazó entonces el estatismo y un marxismo ostensiblemente revolucionario en su programa de Erfurt en 1891. Aunque no faltaron las tradicionales divisiones entre los monopolios artesanales y los trabajadores «de dentro» y «de fuera», los sindicatos nunca desarrollaron una organización seccional. La principal división fue ideológica, entre los «sindicatos libres», mayoritariamente socialistas (e implícitamente luteranos), los católicos y los «amarillos», patrocinados por los empresarios, como expresión de los mercados interiores de trabajo de la industria pesada. En definitiva, un tipo de sindicalismo que no pudo impedir la alianza de la monarquía, el militarismo y el capitalismo durante todo el periodo (Saul, 1985).

4. Bismarck pretendió neutralizar la llamada al socialismo y a la identidad de clase mediante una legislación que concedía la ciudadanía social. El seguro de enfermedad nacional fue introducido en 1883; el seguro de accidentes, en 1884; la cobertura para la vejez y los casos de incapacidad, en 1889. Como vimos en el capítulo 14, este primer Estado asistencial beneficiaba sólo a los trabajadores especializados y a los que disfrutaban de los privilegios de los mercados interiores en la industria pesada. Los grandes empresarios, por su parte, proporcionaban viviendas y otros beneficios asistenciales para retener una mano de obra estable. Muchos de ellos apoyaron la legislación. Esta colaboración entre los grandes industriales y las elites del Estado (apuntada en el capítulo 9) confirió importancia política al seccionalismo de los mercados internos de trabajo. Las huelgas y la actividad del partido y los sindicatos socialistas se concentraron en los trabajadores especializados de las pequeñas y medianas empresas hasta 1914, más tarde que en otros países. En las empresas de gran tamaño, los privilegios del mercado interno aislaban a los trabajadores de la solidaridad de clase (aunque muchos protestantes votaban al partido socialdemócrata). Bismarck fue explícito respecto a su política asistencial; sostuvo que las pensiones debían ajustarse a la renta porque «esto será más útil para el empresario, pues beneficiarán a los trabajadores de mayor nivel, es decir, el apoyo más importante de la empresa en la seguridad general, y, por tanto, fomentará el esfuerzo por acceder a ella» (Crew, 1979: 127). Así pues, se concedió una mínima «ciudadanía social seccional» a los «trabajadores de mayor nivel».

Bismarck fue un «estadista» poco común, muy sensible al objetivo de la creación de un Estado moderno, por eso elaboró una combinación de estrategias interiores y exteriores. Aprendió la lección política a raíz de la demostración de debilidad del ejército francés en 1870. Así pues, al contrario que Napoleón III, intentó ganar a la mayor parte de la clase media y a algunos trabajadores para el militarismo alemán. Creía que la falta de alianzas disparaba las fantasías revolucionarias de los trabajadores y de la clase media, y estaba dispuesto a evitar que aquéllas se realizaran o llegaran a influir en la potencia exterior de Alemania. Gall (1986) se muestra impresionado por la coherencia de la estrategia bismarckiana, a la que califica de «revolución blanca». Sin embargo, fue contradictoria en su actitud hacia los trabajadores especializados, hasta el punto de que el propio Bismarck quiso rectificarla. El temor a la autoridad rival de la iglesia católica, que fomentaba el separatismo en el sur, le llevó a atacarla con la *Kulturkampf*, pero esto desplazó a la izquierda a los socialistas católicos. Su desprecio por el Parlamento le introdujo desde 1888 en las intrigas golpistas y acabó por causar su caída. Resultaba muy difícil mantener una monarquía autoritaria en una sociedad semiindustrializada sin entablar un compromiso al menos con dos de estas fuerzas: los campesinos con propiedades, la clase media y las minorías religiosas importantes. Puesto que aún no se había inventado el corporativismo fascista, las instituciones parlamentarias eran el precio.

Tras la caída de Bismarck, se reprodujo en parte la estrategia. Se recuperó el apoyo de los católicos y los campesinos y se consiguió aislar a la clase obrera y a los separatistas radicales, como veremos en el capítulo 19. Se reconoció el fracaso de las leyes antisocialistas, que habían permitido a éstos organizarse clandestinamente y nutrirse de las elecciones, pero no se abolieron las restricciones de la ciudadanía social para los obreros. El Estado asistencial continuó el camino abierto por Bismarck e incluso amplió la cobertura, pero no pudo introducir el seccionalismo entre los trabajadores ni impedir que éstos continuaran sintiendo la común exclusión de la ciudadanía política y civil.

Sin embargo, el partido socialdemócrata quedó aislado; le fallaron las alianzas, porque en realidad él mismo las espantaba. Su productivismo marxista disuadió a los campesinos (véase capítulo 19); su implícito estatismo luterano y su ateísmo marxista alejaron a la iglesia católica, uno de los mejores aliados potenciales entre los enemigos del régimen. La iglesia católica patrocinó sus propios movimientos de

campesinos y trabajadores, de carácter mutualista; sus organizaciones obreras englobaban del 20 al 25 por 100 de los obreros católicos. El socialismo y la identidad proletaria quedaron aislados en los enclaves urbanos e industriales de religión luterana. Alemania no era un país completamente industrializado ni siquiera en 1914. Su electorado se encontraba dividido casi por igual entre la clase trabajadora, la clase media y la clase agraria, y en una proporción de 6,5 a 3,5 entre las religiones protestante y católica. El partido socialista, predominante entre la clase obrera protestante y competidor por los votos católicos —es decir, con bastantes diputados—, se mostraba incapaz de influir en el gobierno para imponer políticas mutualistas o reformistas.

Después de la caída de Bismarck, algunos católicos y liberales, incluso algunos industriales, apoyaron la liberalización. La libertad de asociarse —el último bastión de la ciudadanía civil individual— se garantizó finalmente en 1908. Al aumentar la afiliación a los sindicatos, éstos ganaron autonomía respecto al partido socialista y fomentaron el mutualismo (Mommsen, 1985). Pero el régimen no estaba dispuesto a una conciliación mayor y contaba con suficiente capacidad de ejercer el patronazgo institucional con el objetivo de dividir a los liberales que sí la querían. Estimulados por los ministros y las autoridades policiales, los empresarios continuaron estorbando la asociación colectiva, de modo que las concesiones en materia de ciudadanía civil eran poco reales en la práctica. Aunque el cuadro 18.1 muestra el crecimiento de los sindicatos, los empresarios solían reconocer únicamente a los «amarillos». Los sindicatos ayudaban a administrar los beneficios de la asistencia social, ahora ampliada, y eran reconocidos de hecho cuando los empresarios se veían forzados a negociar durante las huelgas. Sin embargo, no abundaban los convenios colectivos (las cifras exactas varían, véanse Schofer, 1975: 137 a 164; Stearns, 1975: 165, 180 y 181; Crew, 1979: 146, 218, 250 y 251; y Mommsen, 1985: 382; Spencer, 1976, sostiene que en 1914 proliferaron en el Ruhr los partidarios de convenio colectivo). Así, el partido socialdemócrata y los sindicatos socialistas fueron hostigados y excluidos del poder, carecieron de aliados significativos y permanecieron aislados.

Se han descrito a menudo los efectos sobre la clase obrera (Roth, 1963; Morgan, 1975; Geary, 1976; Kocka, 1986; Nolan, 1986; y varios ensayos en Evans, 1982). Excluida, pese a su crecimiento durante la Segunda Revolución Industrial, el núcleo de la clase obrera, luterano y marxista, se encerró en sí mismo y desarrolló una subcultura socialista, las comunidades de obreros organizados celebraban festivales y

mantenían clubes gimnásticos, bandas y bibliotecas. Se trataba de un ocio primario, pero totalizaba la identidad de la vida social de los *Arbeiter* (trabajadores) (Lidtke, 1985). Aunque la mayor parte de los miembros de los sindicatos tenían especialización laboral, los socialistas y la Comisión Central de los Sindicatos Libres desalentaron la formación de organizaciones seccionales. Los sindicatos inclinaron la cabeza y dejaron en manos del partido las estrategias y las alternativas (Schönhoven, 1985). Como en otros países donde la mayoría de los hombres estaban excluidos de la ciudadanía política en la práctica, el partido socialista apoyó la soberanía parlamentaria universal y plena, incluido el voto femenino. Como reacción a los valores patriarcales de las elites del Estado, el partido elaboró también un programa familiar progresista, aunque sus asociaciones locales continuaban siendo mayoritariamente masculinas (hasta 1980 el Estado prohibió la participación de las mujeres y los menores en las organizaciones políticas). Aunque tanto el partido como la cultura de la clase obrera encarnaban las desigualdades de género típicas del periodo, la segregación entre el empleo masculino, la familia y las organizaciones comunitarias fue muy inferior a la media contemporánea. El régimen patriarcal fomentó un intenso sentimiento de totalidad en el socialismo alemán.

El partido socialdemócrata se convirtió en una gran fuerza electoral; contaba con un tercio de los votos y constituía en 1912 el mayor grupo político del *Reichstag;* sus ideas políticas, es decir, el productivismo, la retórica estatista y el marxismo revolucionario a largo plazo, dominaban los sindicatos más importantes. En cambio, carecía de aliados para elaborar tácticas extraparlamentarias e incluso para reformar el Parlamento. Continuó haciendo lo que mejor sabía hacer, pelear en las elecciones, pero dentro de un sistema amañado por el régimen. La «integración negativa», dice Roth, «permitió la existencia legal de un movimientos hostil de masas, pero le impidió el acceso a los centros del poder» (1963: 8). La derecha del partido apoyó el compromiso con el régimen y el reformismo moderado, pero sólo lo realizó durante el breve mandato del canciller Caprivi y ocasionalmente durante el de Bethmann-Hollweg. La minoritaria ultraizquierda propugnaba la revolución, pero carecía de poder y de aliados contra un régimen bien equipado en materia de represión. La mayoría sostuvo ideas de centro-izquierda, partidarias de la revolución aplazada al futuro. Supuestamente, Alemania llegaría a industrializarse por completo y el partido obtendría la mayoría. Como lo ex-

presó Kautsky, el partido, más que organizar *la* revolución, se organizó *para* la revolución.

La integración semiautoritaria de la clase obrera que el régimen llevó a cabo con tanto éxito fue en parte una estrategia consciente y en parte una deriva. En este caso la estrategia-deriva se desvió incluso más que en el caso estadounidense del esquema evolutivo de la ciudadanía de Marshall, porque el régimen concedió una ciudadanía civil y política parcial, al tiempo que experimentaba con ciertas dosis parciales y seccionales de ciudadanía social. Pero la ineptitud de la clase obrera, con sus orejeras marxistas y estatistas, se lo hizo mucho más fácil (lo veremos con mayor detalle en el capítulo 19).

Ni el aislamiento ni la «integración negativa» de la clase obrera parecen un camino evidente hacia el liberalismo o la socialdemocracia, como supone Marshall, o hacia la revolución, como supusieron Marx y Kautsky. La situación fue el resultado de una confrontación de la monarquía militar y absolutista con las clases que reivindicaban la democracia de partidos y con los estados regionales y la Iglesia que reinvindicaban la descentralización. Alemania no se distinguió por su cristalización económica, sino por las cristalizaciones nacional y representativa, y, hasta cierto punto, por su ritualizado militarismo interno. En realidad, el «capitalismo nacional autoritario» y la «integración negativa» habrían sido inconcebibles sin la aceleración de la Segunda Revolución Industrial. Sin embargo, la única revolución industrial comparable es la estadounidense, donde se produjeron unas relaciones de clase muy distintas. La variedad que presentan las formas de institucionalización de la lucha de clases en el capitalismo avanzado se explica menos por la industrialización que por las distintas cristalizaciones del Estado.

Otros países europeos

La mayor parte de los países industrializados se situaron a medio camino entre el semiautoritarismo alemán y la democracia de partidos británica o francesa. Austria-Hungría se asemejó a Alemania en la represión de los sindicatos y los partidos obreros hasta 1891, lo que produjo un desplazamiento de los trabajadores a la izquierda, hacia el partido socialista marxista, pero la monarquía se enfrentó con mayor resolución a los confederalistas. Este hecho influyó también en la clase obrera, que de una formación única y transnacional pasó a

representar un conjunto de movimientos regionales o nacionales (Gulick, 1984: 21 a 24; Shell, 1962). Los regímenes de Suecia y Dinamarca, centralistas pero con una nobleza terrateniente y un ejército bastante débiles, ya habían concedido algunos derechos de la democracia de partidos a los campesinos y a los liberales burgueses; la clase obrera emergente se alió con ambos grupos y fue capaz de superar el mutualismo británico y de generar un reformismo socialdemócrata (véase capítulo 19). Los regímenes español e italiano, semidemocráticos, copiaron de modo vacilante e irregular el modelo francés, pero tuvieron que afrontar una mayor contestación «nacional». En el Japón, la restauración Meiji modificó la estrategia alemana.

En todos estos países, la monarquía y el antiguo régimen intentaron conservar sus poderes autoritarios centralizados en el interior de unos regímenes semiparlamentarios (sin éxito en Escandinavia). La clase media no estaba tan plenamente integrada en la democracia de partidos como en Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, pero tampoco completamente excluida o reprimida, como en Rusia. Como es lógico, hubo entre ellos grandes variaciones. En un extremo, las burguesías regionalistas radicales reivindicaban aún derechos fundamentales al Estado monárquico, como en España o (con variaciones, según la nacionalidad regional) en Austria-Hungría. En el otro, la burguesía se integró en el Estado con mayor dependencia incluso que en Alemania, como en Japón. El primer extremo amplió el confederalismo; el segundo centralizó los Estados-nación.

Como en el caso alemán, podemos deducir los derechos de la clase trabajadora a partir de las cristalizaciones nacional y representativa. En términos de clase, los movimientos obreros no se integraron parcialmente en el Estado (como en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos), pero tampoco quedaron totalmente excluidos o sufrieron una represión militar como la rusa. Puesto que el *Sonderweg* del Imperio alemán traspasó sus fronteras y se adaptó en gran parte de Europa y en Japón, la viabilidad de su fórmula resultó decisiva para el desarrollo de la sociedad moderna, y los efectos sobre la clase obrera fueron muy profundos. Todos estos países desarrollaron un socialismo más agresivo que el británico; una estrategia más unida, más consistente y más política que la francesa (con la excepción de España); y un movimiento menos comprometido con la revolución que el ruso. En todos, la organización de clase se impuso al seccionalismo, y en todos ellos (salvo en España) el paralelismo más cercano fue la incorporación negativa de la Alemania imperial, es decir, la

concesión de una ciudadanía civil y política parcial y nominal, pero la exclusión del Estado y la integración negativa.

España constituyó una excepción debido al peculiar entrelazamiento de la representación de clase con la cuestión nacional [8]. El sindicalismo español fue el más fuerte de Europa; y su desarrollo del siglo XX representa una desviación. ¿Serviría para explicar esta desviación mi modelo centrado en la dimensión política? Creo que sí. La fuerza originaria del sindicalismo español se debió a la especial constitución política del país, es decir, al conflicto entre la ciudadanía nacional y la ciudadanía regional. Se planteó entonces la misma pregunta que en Austria, ¿a qué Estado tenían que pedir las clases la ciudadanía?

España era una monarquía constitucional desde 1876 que contaba con un sufragio masculino formal (aunque corrupto) y unos sindicatos legales (con las restricciones que normalmente impuso la burguesía a los derechos de organización). Pero estaba atrasada desde el punto de vista económico (aproximadamente, en el grado de desarrollo ruso) y carecía de una burguesía extensiva. La lucha política no se producía entre las clases, sino entre redes segmentales formadas por patronos y clientes. Los partidos liberales y conservadores se alternaban en la administración, respaldados por una mezcla de fracciones de clase pertenecientes a la banca y la industria y por los notables terratenientes, es decir, los caciques. Los notables de los partidos practicaban un patronazgo segmental, controlaban los medios locales de la violencia y reclutaban clientes entre todas las clases. Un modelo común a todos los países en la semiperiferia del industrialismo (Mouzelis, 1986). ¿Cómo encajaba en esta situación la clase obrera emergente? La política también tenía un contenido de clase y no faltaban las ideologías de izquierda y de derecha, que apelaban, respectivamente, a la burguesía radical y a sus enemigos. El movimiento obrero tuvo que alinearse con ese radicalismo, así pues desarrolló un socialismo moderado al estilo del francés o del británico, que de nada sirvió en los casos en que los caciques se encontraban bien atrincherados. Cuando la política nacional frustró las expectativas tanto de los campesinos como de los obreros organizados, éstos volvieron la vista a las alternativas sindicalistas y anarquistas.

[8] Estos párrafos dependen fundamentalmente de Malefakis (1970), que sobreenfatiza la clase, y de Meaker (1974) y Giner (1984).

Es muy probable que la situación se radicalizara porque los resentimientos regionales contra la primacía de Castilla fomentaron en ocasiones el separatismo nacionalista. Las estrategias anarquistas y sindicalistas, una vez de espaldas al Estado, parecían tener futuro en algunas zonas de España; el anarquismo progresaba en las zonas rurales desafectas, y el sindicalismo lo hacía en las áreas industriales. Aunque no soy experto en las complejas diferencias que distinguen a las regiones españolas, estoy convencido de que estas dos causas políticas —la ciudadanía civil y política parcial anterior a la aparición de las organizaciones de clase más el separatismo regional— influyeron en la división del movimiento obrero español en dos facciones: el sindicalismo y el socialismo marxista. Por otra parte, la Segunda Revolución Industrial ahondó las diferencias regionales, acentuando la industrialización en Cataluña —donde aumentaron el separatismo y el sindicalismo— y el socialismo estatista, de raíz marxista, en Castilla y Asturias. El escenario de la tragedia para los divididos movimientos socialistas se levantó en 1917-1918 y 1936-1939. Los pormenores del caso español representan una desviación, pero el modelo global no se diferencia. Las particularidades de la lucha de clases española no se debieron tanto al proceso de trabajo como a la contestación política contra la ciudadanía nacional; en su caso, como en el de Austria-Hungría, el problema político de la ciudadanía entrelazaba la lucha de clases con un grave conflicto sobre la cuestión «nacional».

Conclusión

No es preciso entrar en los múltiples detalles locales para demostrar la tesis principal de este capítulo: la lucha de clase entre el capital y el trabajo se desarrolló a partir de una transformación industrial muy semejante, que, en cada caso, se entrelazó, en primer lugar, con las distintas variaciones de las cristalizaciones representativa, nacional, política y civil-militar, y, en segunda instancia, con varias formas de comunidades obreras. En los capítulos 15, 17 y 18 he adelantado una descripción tripartita de la transformación industrial de la clase obrera durante el siglo XIX:

1. El capitalismo industrial no generó una sola clase obrera, como profetizó Marx, sino tres, que competían entre sí. Como el propio Marx observó, en todos los casos surgió en la clase obrera una

identidad clara de sí misma y de su rival, la clase capitalista. En algunos trabajadores se produjo incluso una conciencia de que aquella clase determinaba por completo su vida, y en esos casos se llegó al concepto de una sociedad alternativa (en versiones muy variadas). Pero la industrialización fomentó también la aparición de dos trabajadores colectivos menores, los colectivos *seccionales,* formados a partir de las cualificaciones y los mercados de trabajo, y los distintos tipos de interdependencia *segmental* entre los trabajadores y los empresarios. Las clases, es cierto, evolucionaron extensiva y políticamente, pero sólo de un modo imperfecto y en continua competencia con el segmentalismo y el seccionalismo.

2. He examinado las dos fases de consolidación de la identidad de clase. La primera (capítulo 15) tuvo lugar durante la Primera Revolución Industrial solamente en Gran Bretaña, y presentó un tipo peculiar de colectivización, ya que la revolución generó un heterogéneo conjunto de empleos en fábricas y mercados artesanos, así como otras formas de trabajo en la calle y trabajo a domicilio, que se interpenetraban. Pero el hecho de que esta situación afectara a la práctica totalidad de los estratos especializados, a los barrios y a los miembros de la familia produjo un sentimiento familiar de la identidad de clase, que sumó el conflicto en el puesto de trabajo a la situación de la familia y de la comunidad contra la explotación que llegaba desde el exterior. Segundo (capítulos 17 y 18), la Segunda Revolución Industrial llegó a todos estos países (independientemente de que hubieran tenido una primera), y en todos ellos produjo una concentración de capital, fábricas de gran tamaño, una ofensiva de los empresarios contra los trabajadores no especializados y un aumento del grado de especialización de los trabajadores eventuales que los introdujo en el empleo formal y en la semiespecialización. Este fenómeno fomentó el desarrollo de los grandes sindicatos, pero enjauló a los trabajadores en sus comunidades de residencia. En respuesta, éstos se organizaron en formas extensivas y políticas de tendencias socialistas.

La clase obrera apareció dos veces, pero de forma limitada. En la primera, estuvo centrada en los artesanos; en la segunda, en los obreros metalúrgicos especializados y semiespecializados, mineros y trabajadores del transporte de los grandes núcleos urbanos. Fuera de estos núcleos —en la primera fase, los mercados laborales no amenazados, la mayor parte de las áreas rurales y los sirvientes domésticos; y en la segunda, otras industrias y ciudades menores— la mayoría de los trabajadores continuaban sometidos a los controles

segmentales, inconscientes de su identidad de clase u hostiles a ella. La militancia fue, pues, cautelosa, habida cuenta de su escasa influencia sobre las masas de electores y, mucho menos, sobre las fuerzas armadas. Pero incluso en el núcleo, los sindicatos y los controles de los mercados de trabajo seccionales redujeron la identidad y tendieron a mantener una oposición de compromiso al margen de la clase. El punto débil se localizaba ahora en las diferencias que dividían a los obreros especializados de los semiespecializados o de los que carecían de cualificación alguna. El mercado interno de trabajo se desarrolló en el núcleo, creando nuevas interdependencias segmentales entre los empresarios y los trabajadores, y un fuerte seccionalismo entre el empleo estable y los trabajadores organizados, por un lado, y los trabajadores eventuales y a domicilio, no organizados. Cuando cayó sobre estos últimos la acusación de esquiroles, el seccionalismo se hizo violento, aun cuando conservara sus pretensiones socialistas. Vemos, pues, que el proletariado industrial no emergió exactamente como una clase, sino como un conjunto de *segmentos* y *secciones*. La batalla por la identidad y el alma de los trabajadores no había terminado.

3. Pero tampoco se produjo, al acabar esta fase, aquella solidaridad mutua entre el empleo y la vida de la familia y la comunidad que había esperado Marx. Durante la Segunda Revolución Industrial, el empleo formal creó dos formas de vida separadas, porque los hombres disfrutaban de un puesto asalariado, especialmente en las industrias y los estratos especializados donde progresaban los sindicatos. El trabajador colectivo vio cómo se reducía su esfera, su organización y su conciencia, y quedó limitado al productivismo y a la lucha centrada en el empleo. Así pues, el socialismo no pudo enraizarse en las distintas esferas de la vida obrera, ni tampoco producir aquellas intensas movilizaciones revolucionarias que vimos cuando el movimiento se generaba, al mismo tiempo, en la calle, en el empleo y en la comunidad, al principio de la era burguesa y la época cartista. Los marxistas no disponían en la misma medida del fervor moral, ni de la «moral inmanente» que tuvieron los cartistas o los jacobinos. Como veremos en el capítulo 19, el estatismo y el productivismo no hicieron otra cosa que rebajar las miras de la clase obrera en muchos países, impidiéndole conectar de modo eficaz con la población agraria.

El desarrollo económico de la clase obrera fue ambiguo, podía, quizás, adoptar la vía que Marx esperaba o deseaba; o, quizás también, otros caminos más conservadores o divididos. Como tendremos oportunidad de comprobar, los trabajadores no resultaron me-

nos maleables que los campesinos; como éstos, se vieron abocados a tomar varios caminos, cuya diferencia sólo estuvo determinada en pequeña medida por las variaciones de la industrialización capitalista. Alemania y Estados Unidos, las dos vanguardias de la Segunda Revolución Industrial, tuvieron, respectivamente, el mayor y el menor partido socialista de Occidente. Por el contrario, Francia, con su atrasada industrialización, conoció un movimiento obrero precozmente socialista.

El factor decisivo que explica tales variaciones entre los movimiento obreros fueron las cristalizaciones del poder político derivadas de las primeras luchas entre las monarquías militaristas y sus enemigos representativos y nacionales. Pero tales cristalizaciones presentan también una enorme variedad; en la mayoría de los casos los Estados fueron capitalistas y ampliaron sus funciones civiles, pero institucionalizaron distintas estrategias que suscitaron entre la clase obrera respuestas de varios tipos: en tanto que actor seccional, segmental o de clase y con variadas formas de ideología socialista. Cuando el régimen chocaba frontalmente con los trabajadores constituidos en clase, se desencadenaban cuatro estrategias o derivas fundamentales, en las que se mezclaban distintos grados de capitalismo, militarismo y representación:

1. *Militarismo autocrático.* Ejemplificado por la Rusia zarista, donde la ciudadanía se negó a los trabajadores en bloque (aunque con variada consistencia) y se adoptó una actitud represiva contra ellos. Como reacción, el seccionalismo, el segmentalismo y las alternativas socialistas moderadas nacieron muy limitadas y tuvieron un desarrollo errático. Los trabajadores rusos sí se constituyeron en clase obrera, y sus militantes abrazaron el marxismo revolucionario.
2. *Militarismo liberal-capitalista.* El ejemplo en este caso son los Estados Unidos, donde la ciudadanía concedida a los trabajadores fue muy irregular. Aunque la ciudadanía política y civil estaban firmemente institucionalizadas, se restringieron mediante una feroz represión selectiva los derechos colectivos, y los trabajadores se dividieron. La unidad de los obreros americanos se rompió en sectores y facciones; ni formaron una sola clase ni generaron tendencias predominantemente socialistas.
3. *Incorporación liberal-reformista.* Tuvo lugar en Gran Bretaña, en sus dominios de raza blanca y en los Países Bajos y Bélgica. El modelo francés se asemeja en parte, pero presenta una mayor

complejidad que ya hemos analizado. El liberalismo capitalista no llegó a institucionalizarse por completo en Europa (el caso suizo sería el más cercano). La democracia liberal se impuso poco a poco, prestando gran atención a las clases (y a los estados). En los antiguos regímenes se incorporaron a las instituciones soberanas de la democracia de partidos las clases medias y el campesinado. Los partidos burgueses del régimen comprendieron la necesidad, e incluso a veces la ventaja, de llegar a compromisos seccionales y segmentales con los trabajadores, estrato por estrato, organización por organización, tal como aparecieron durante las dos primeras revoluciones industriales. Reacios al despliegue de la fuerza militar interna, adquirieron compromisos entre el liberalismo y las formas moderadas de mutualismo y de socialismo reformista, y entre los distintos modos de clase y sección de la organización obrera. Más tarde, los países escandinavos transformaron estas estrategias-derivas en una *incorporación reformista* a gran escala.

4. *Incorporación semiautoritaria.* En la Alemania imperial, y luego en Austria-Hungría y Japón (en Italia y España se produjo una incorporación a medias liberal y a medias semiautoritaria), las respectivas monarquías sobrevivieron al primer enfrentamiento con la burguesía, la pequeña burguesía y el campesinado sin necesidad de hacer concesiones decisivas en materia de soberanía democrática. El resultado constituyó todo un éxito porque dividió a estos grupos, incorporando a una mayoría al régimen con la ayuda de las instituciones semiparlamentarias que establecieron firmes estrategias de «divide y vencerás» e hicieron gala de un moderado militarismo en demostraciones rituales de fuerza. Los pocos radicales pequeño burgueses que quedaron excluidos se unieron a los artesanos o para formar sindicatos y partidos socialistas claramente revolucionarios. Pero el aislamiento y la escasa participación en una democracia de partidos limitada les impidió llevar a efecto una alternativa revolucionaria, e incluso formas significativas de reformismo o de mutualismo.

Pero las derivas o estrategias que venimos comentando no explicarían por completo los resultados si no contáramos con las distintas cristalizaciones *nacionales.* Veamos, pues, los dos resultados extremos, según la presencia o la ausencia de una firme identidad de clase y una ideología socialista. El fuerte centralismo de la autocracia rusa dio a la represión y a la explotación un carácter total y «nacional» que desarrolló en los trabajadores una intensa identidad nacional y de

clase, así como una neta comprensión de quién era su enemigo en el puesto de trabajo, en la calle y en la comunidad. Fue entonces cuando sus militantes optaron por la alternativa revolucionaria estatista que Marx esperaba. Puede que el régimen hubiera sido capaz de reprimir indefinidamente estas aspiraciones revolucionarias, pero no supo ganarse a los liberales de las ciudades, ni a los nacionalistas de las regiones ni a los campesinos y perdió una guerra de movilización nacional. El proletariado y la nación aparecieron juntos para derrocarlo. Al otro extremo, encontramos a los Estados Unidos, pero se trata del segundo caso más grave de militarismo interno. Allí la represión se combinaba con un capitalismo intenso y con los fenómenos radicalmente distintos al caso ruso: el federalismo y la democracia de partidos. El éxito estuvo en intensificar el seccionalismo local-regional y étnico-religioso, y en aprovechar las divisiones entre los grados de especialización y los mercados internos de trabajo; como resultado, el socialismo americano se dividió en facciones y acabó por desintegrarse. Estos dos casos extremos iban a desempeñar un papel fundamental a mediados del siglo XX, cuando ambos países se convirtieron en potencias dominantes.

Los resultados intermedios se produjeron también en parte por los distintos entrelazamientos de las cristalizaciones nacional y representativa. En Alemania, la exclusión de los trabajadores de la ciudadanía civil colectiva y política fue parcial. Como en Rusia, confirmó la identidad de clase y debilitó el seccionalismo, pero el marxismo de los militantes estaba más comprometido por su electoralismo. Más aún, la clase se debilitó por la contestación a las cristalizaciones nacionales. Aunque este hecho reforzó la identidad de clase entre los luteranos del norte, surtió el efecto contrario entre los católicos del sur, rebajando la posibilidad de una alianza proletaria entre obreros y campesinos. Cabe la posibilidad de que la clase obrera alemana estuviera tan organizada y fuera tan socialista como Marx pretendía, pero, en todo caso, era más pequeña y estaba peor dirigida de lo que él esperaba. Según las distintas combinaciones de la cristalización nacional, mediatizada por la inserción regional-religiosa de la industria y el trabajo, los movimientos obreros optaron unas veces por un fuerte estatismo (como en Alemania), otras por todo lo contrario (como en algunas zonas de España), pero, con mayor frecuencia, llegaron a compromisos.

Junto a la cuestión campesina, las cristalizaciones nacionales ayudan a comprender las diferencias *religiosas*. ¿Por qué fueron más rea-

cios al socialismo los católicos que los protestantes? En primer lugar, porque su jerarquía eclesiástica se mostró combativa en ese sentido. Ahora bien, ¿por qué lo hizo? Porque el socialismo y, muy especialmente, el marxismo eran ateos, pero esto habría debido alejar a todas las iglesias. Puede que en el caso de la católica estemos ante un mayor «conservadurismo», que favorecía el mantenimiento de la jerarquía, pero también se jerarquizaron los luteranos, que, sin embargo, no entraron en contradicción con los distintos socialismos estatistas de la socialdemocracia ni con el marxismo (ni, después, con el fascismo) en el norte de Europa, dado el enorme número de marxistas y socialdemócratas (y, posteriormente, fascistas alemanes) procedente de la cultura luterana.

Todo esto es cierto, pero no bastaría si no consideráramos el doble antiestatismo de la iglesia católica. Al fin y al cabo, se trataba de una organización de poder *transnacional,* que en el terreno de la política «nacional» abogó siempre por el *localismo* y el *regionalismo.* Por otro lado, la secularización del Estado y su intrusión en las dos grandes áreas de predominio católico hasta este periodo, es decir, la familia y la enseñanza, aumentaron sus resistencias. La enseñanza oficial y las leyes civiles, en especial las relativas a la familia, asustaron a la Iglesia; sólo así se explica la agresividad de su oposición a cualquier forma de estatismo centralizado, obviamente en Francia, pero también, y con gran persistencia, en Austria, Alemania y Estados Unidos. El socialismo marxiano representaba una nueva alternativa estatista, por tanto, la Iglesia era su enemiga. Así, la Iglesia patrocinó sus propios sindicatos proteccionistas, economicistas e incluso mutualistas. Encontramos, pues, una tendencia (aunque no en perfecta asociación) a las formas estatistas de socialismo —el marxismo y la socialdemocracia más agresiva— entre los luteranos del norte de Europa y como parte de una ofensiva del Estado-nación contra el poder católico de la Europa del sur. Contrariamente, el protestantismo antiestatista (como el inconformismo inglés o las iglesias protestantes americanas) aparecen asociadas a un sentido economicista y mutualista moderado de la lucha obrera. En el capítulo 19 ampliaré esta tesis al campesinado. La actitud política de las iglesias no dependió tanto de sus dogmas como de su implantación mayoritaria o no en una zona y de que el Estado incorporara o no a su identidad la secularización. En este periodo, la política de las iglesias cristalizó en torno a la cuestión nacional. Y ello ocurrió incluso en mayor medida entre las clases agrarias.

Bibliografía

Aminzade, R. 1981: *Class, Politics and Early Industrial Capitalism.* Albany: State University of New York Press.

— 1984: «Capitalist industrialization ad patterns of industrial protest». *American Sociological Review,* 49.

Bain, G. S., y R. Price, 1980: *Profiles of Union Growth.* Oxford: Blackwell.

Bairoch, P. *et al.* 1968: *The Working Population and Its Structure.* Bruselas: Editions de l'Institut de Sociologie de l'Université Libre (en inglés y francés).

Bell, D. 1974: «The problem of ideological rigidity». En *Failure of a Dream?,* ed. J. H. M. Laslett y S. M. Lipset. Garden City, N. Y.: Anchor Books.

Besançon, A. 1986: «The Russian case». En *Europe and the Rise of Capitalism,* ed. J. Baechler, J. A. Hall, y M. Mann. Oxford: Blackwell.

Boll, F. 1985: «International strike waves: a critica assessment». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.

— 1989: «Changing forms of labour conflict: secular development or strike waves?». En *Strikes, War and Revolution,* ed. L. Haimson y C. Tilly. Cambridge: Cambridge University Press.

Bonnell, V. 1983: *Roots of Rebellion: Worker's Politics and Organizations in St. Petersburg and Moscow, 1900-1914.* Berkeley: University of California Press.

Brecy, R. 1969: *La grève générale en France.* París: Études et Documentation Internationales.

Bridges, A. 1986: «Becoming American: the working classes in the United States before the Civil War». En *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States,* ed. I. Katznelson y A. R. Zolberg. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Brody, D. 1960: *Steelworkers in America: The Non-union Era.* Nueva York: Russell & Russell.

Burawoy, M. 1984: «Karl Marx and the satanic mills: factory politics under early capitalism in England, the United States and Russia». *American Journal of Sociology,* 90.

Burnham, W. D. 1965: «The changing shape of the American political universe». *American Political Science Review,* 59.

— 1970: *Critical Elections and the Mainspring of American Politics.* Nueva York: Norton.

Cook, C., y J. Paxton, 1978: *European Political Facts, 1848-1918.* Londres: Macmillan.

Cottereau, A. 1986: «The distinctiveness of working-class cultures in France, 1848-1900». En *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns*

in Western Europe and the United States, ed. I. Katznelson y A. R. Zolberg. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Crew, D. F. 1979: *Town in the Ruhr: A Social History of Bochum, 1860-1914.* Nueva York: Columbia University Press.
Cronin, J. E. 1985: «Strikes and the struggle for union organization: Britain and Europe». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.
— 1989: «Strikes and power in Britain, 1870-1920». En *Strikes, War and Revolution,* ed. L. Haimson y C. Tilly. Cambridge: Cambridge University Press.
Dubofsky, M. 1969: *We Shall Be All.* Chicago: Quadrangle Books.
— 1974: «Socialism and syndicalism». En *Failure of a Dream?,* ed. J. H. M. Laslett y S. M. Lipset. Garden City, N.Y.: Anchor Books.
Edwards, P. K. 1981: *Strikes in the United States, 1881-1974.* Oxford: Blackwell Publisher. [Ed. cast.: *Las huelgas en Estados Unidos, 1881-1974.* Madrid, Ministerio de Trabajo y S.S., 1987.]
Evans, R. J. (ed.) 1982: *The German Working Class, 1880-1933. The Politics of Everyday Life.* Londres: Croom Helm.
Fink, G. M. 1973: «The rejection of voluntarism». *Industrial and Labor Relations Review,* 26.
— 1987: «Labor, liberty, and the law: trade unionism and the problem of the American constitutional order». *Journal of American History,* 4.
Foner, E. 1984: «Why is there no socialism in the United States?» *History Workshop Journal,* 17.
Forbath, W. E. 1989: «The shaping of the American labor movement». *Harvard Law Review,* 102.
Fraser, W. H. 1974: *Trade Unions in Society: The Struggle for Acceptance, 1850-1880.* Londres: Allen & Unwin.
Gall, L. 1986: *Bismarck, The White Revolutionary.* Londres: Allen & Unwin.
Gallie, D. 1983: *Social Inequality and Class Radicalism in France and Britain.* Cambridge: Cambridge University Press.
Geary, D. 1976: «The German labour movement, 1848-1919». *European Studies Review,* 16.
Giner, S. 1984: *The Social Structure of Catalonia.* Sheffield: Anglo-Catalan Society.
Goldstein, R. J. 1978: *Political Repression in Modern America.* Cambridge, Mass.: Schenkman.
— 1983: *Political Repression in Nineteenth Century Europe.* Londres: Croom Helm.
Gompers, S. 1967: *Seventy Years of Life and Labor: An Autobiography,* 2. vols., 2.ª ed. Nueva York: Augustus M. Kelley Publishers.
Gossez, R. 1967: *Les ouvriers de Paris.* Vol. I: *L'organisation, 1848-1851.* París: Bibliothèque de la révolution de 1848.

Grob, G. N. 1961: *Workers and Utopia.* Evanston, Il.: Northwestern University Press.

Grüttner, M. 1985: «The rank-and-file movements and the trade unions in the Hamburg docks from 1896-97». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.

Gulick, C. A. 1948: *Austria from Habsburg to Hitler.* Vol. I: *Labor's Workshop of Democracy.* Berkeley: University of California Press.

Haimson, L. H. 1964-5: «The problem of social stability in urban Russia, 1905-1917». *Slavic Review,* 23 (1964), 24 (1965).

Halle, D. 1984: *America's Working Man: Work, Home, and Politics Among Blue-Collar Property Owners.* Chicago: University of Chicago Press.

Hanager, M. P. 1980: *The Logic of Solidarity: Artisans and Industrial Workers in Three French Towns.* Urbana: University of Illinois Press.

Hartz, L. 1955: *The Liberal Tradition in America.* Nueva York: Hardcourt, Brace & World.

Hirsch, S. 1978: *Roots of the American Working Class.* Filadelfia: University of Pennsylvania Press.

Hobson, J. 1991: «The Tax Seeking State: Protectionism, Taxation and State Structures in Germany, Russia, Britain and America, 1870-1914. Tesis doctoral, London School of Economics and Political Science.

Holt, J. 1977: «Trade unionism in the British and U.S. steel industries, 1880-1914: a comparative study». *Labor History,* 18.

Katznelson, I. 1981: *City Trenches: Urban Politics and the Patterning of Class in the United States.* Nueva York: Pantheon.

Kochan, L. 1966. *Russia in Revolution, 1890-1918.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.

Kocka, J. 1986: «Problems of the working-class formation in Germany: the early years, 1800-1875». En *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States,* ed. I. Katznelson y A. R. Zolberg. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Kraditor, A. S. 1981: *The Radical Persuasion, 1890-1917:* Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Lash, S. 1984: *The Militant Worker: Class and Radicalism in France and America.* Londres: Heinemann.

Laslett, J. H. M., y S. M. Lipset (eds.), 1974: *Labor and the Left.* Nueva York: Basic Books.

Lebergott, S. 1984: *The Americans: An Economic Record.* Nueva York: Norton.

Lefranc, G. 1967: *Le Mouvement Syndical Sous la Troisième République.* París: Payot.

Lenin, V. I. 1970: *What Is to Be Done?* Manchester: Panther Books. [Ed. cast.: *¿Qué hacer?* Madrid, Akal, 1976.]

Lequin, Y. 1977: *Les ouvriers de la région lyonnaise (184-1914),* 2 vols. Lyon: Presses Universitaires de Lyons.

Lidtke, V. L. 1985: *The Alternative Culture: Socialist Labor in Imperial Germany.* Nueva York: Oxford University Press.
Lipset, S. M. 1977: «Why no socialism in the United States?» En *Sources of Contemporary Radicalism,* ed. S. Bialer y S. Sluzar. Boulder, Colo.: Westview.
— 1984: «Radicalism or reformism: the sources of working-class politics». En *Consensus and Conflict: Essays in Political Sociology.* New Brunswick, N. J.: Transaction Books.
Lowi, T. J. 1984: «Why is there no socialism in the United States? A federal analysis». En *The Cost of Federalism,* ed. R. T. Golembiewski y A. Wildavsky. New Brunswick, N. J.: Transaction Books.
Ludtke, A. 1979: «The role of state violence in the period of transition to industrial capitalism: the example of Prussia from 1815-1848». *Social History,* 4.
McDaniel, T. 1988: *Autocracy, Capitalism and Revolution in Russia.* Berkeley: University of California Press.
McKean, R. 1990: *St. Petersburg Between the Revolutions.* New Haven, Conn.: Yale University Press.
Malefakis, E. M. 1970: *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain.* New Haven, Conn.: Yale University Press. [Ed. cast.: *Reforma agraria y revolución campesina.* Barcelona, Ariel, 1982.]
Mandel, M. 1983: *The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime,* Londres: Macmillan.
Mann, M. 1988: «Ruling class strategies and citizenship». En M. Mann, *States, War and Capitalism.* Oxford: Blackwell.
Marks, G. 1989: *Unions in Politics: Britain, Germany, and theUnited States in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Meaker, G. H. 1974: *The Revolutionary Left in Spain, 1914-1923.* Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Mitchell, B. R. 1983: *International Historical Statistics. The Americas and Australasia.* Detroit: Gale Research.
Mommsen, H. 1985: «The free trade unions and social democracy in imperial Germany». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: Germa Historical Institue/Allen & Unwin.
Montgomery, D. 1967: *Beyond Equality.* Nueva York: Knopf.
— 1979: *Workers' Control in America.* Cambridge: Cambridge University Press.
— 1980. «Labor and the republic in industrial America: 1860-1920». *Le Mouvement Social,* núm. 111.
Moore, B., Jr. 1973: *Social Origins of Dictatorship and Democracy.* Harmondsworth, Middlesex: Penguin. [Ed. cast.: *Orígenes sociales de la dictadura y la democracia.* Barcelona, Ed. 62, 1991.]

Morgan, D. W. 1975: *The Socialist Left and the German Revolution.* Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.

Moss, B. H. 1976: *The Origins of the French Labor Movement, 1830-1914: The Socialism of Skilled Workers.* Berkeley: University of California Press.

Mouzelis, N. 1986: *Politics in the Semi-Periphery: Early Parliamentarianism and Late Industrialization in the Balkans and Latin America.* Nueva York. St. Martin's Press.

Mowry, G. E. 1972. *The Progressive Era, 1900-20.* Washington, D.C.: American Historical Association.

Nolan, M. 1986: «Economic crisis, state policy, and working-class formation in Germany, 1870-1900». En *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Wester Europe and the United States,* ed. I. Katznelson y A. R. Zolberg. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Noland, A. 1956: *The Founding of the French Socialist Party, 1893-1905.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Perlman, S. 1928: *A Theory of the Labor Movement.* Nueva York: Macmillan.

Perrot, M. 1974: *Les ouvriers en grève.* París: Menton.

— 1986: «On the formation of the French working class». En *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States,* ed. I. Katznelson y A. R. Zolberg. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Rayback, J. G. 1966: *A History of American Labor.* Nueva York: Free Press.

Ridley, F. F. 1970: *Revolutionary Syndicalism in France.* Cambridge: Cambridge University Press.

Rogin, M. 1961-62: «Voluntarism: the political functions of an antipolitical doctrine». *Industrial and Labor Relations Review,* 15.

Rokkan, S. 1970: *Citizens Elections Parties.* Oslo: Universitetsforlaget.

Roth, G. 1963: *The Social Democrats in Imperial Germany.* Totowa, N. J.: Bedminster Press.

Rueschemeyer, D.; E. Stephens, y J. Stephens, 1992: *Capitalist Development and Democracy.* Chicago: University of Chicago Press.

Saul, K. 1985: «Repression or integration? the state, trade unions and industrial disputes in imperial Germany». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.

Schofer, L. 1975: *The Formation of a Modern Labor Force: Upper Silesia, 1865-1914.* Berkeley: University of California Press.

Schönhoven, K. 1985: «Localism —craft union— industrial union: organizational patterns in German trade unions». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914,* ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.

Sewell, W. H., Jr. 1986: «Artisans, factory workers, and the formation of the French working class, 1789-1848». En *Working-Class Formation: Ninete-*

enth Century Patterns in Western Europe and the United States, ed. I. Katznelson y A. R. Zolberg. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Shefter, M. 1986: «Trade unions and political machines: the organization and disorganization of the American working class in the late nineteenth century». En *Working-Class Formation: Nineteenth Century Patterns in Western Europe and the United States*, ed. I. Katznelson y A. R. Zolberg. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Shell, K. L. 1962: *The Transformation of Austrian Socialism.* Nueva York: University Publishers.

Shorter, E., y C. Tilly, 1974: *Strikes in France, 1830-1968.* Cambridge: Cambridge University Press. [Ed. cast.: *Las huelgas en Francia de 1830 a 1968.* Ministerio de Trabajo y S.S., 1986.]

Sklar, M. J. 1988: *The Corporate Reconstruction of American Capitalism, 1890-1916.* Cambridge: Cambridge University Press.

Skowronek, S. 1982: *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920.* Cambridge: Cambridge University Press.

Slotkin, R. 1985: *The Fatal Environment: The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800-1890.* Nueva York: Atheneum.

Smith, S. A. 1983: *Red Petrograd: Revolution in the Factories, 1917-18.* Cambridge: Cambridge University Press.

Sombart, W. 1976: *Why Is There No Socialism in the United States?* Londres: Macmillan.

Spencer, E. G. 1976: «Employer response to unionism: Ruhr coal industrialists before 1914». *Journal of Modern History*, 48.

Stearns, P. 1975: *1848: The Revolutionary Tide in Europe.* Nueva York: Norton.

Swain, G. 1983: *Russian Social Democracy and the Legal Labour Movement, 1906-14.* Londres: Macmillan.

Taft, P., y P. Ross, 1970: «American labor violence: its causes, character and outcome». En *Violence in America*, ed. H. D. Graham y T. R. Gurr. Nueva York: Praeger.

Tenfelde, K. 1985: «Conflict and organization in the early history of the German trade union movement». En *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914*, ed. W. J. Mommsen y H.-G. Husung. Londres: German Historical Institute/Allen & Unwin.

Traugott, M. 1988: «The crowd in the French Revolution of February, 1848». *American Historical Review*, 93.

Ulman, L. 1955: *The Rise of the National Trade Union.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Weinstein, J. 1967: *The Decline of Socialism in America, 1912-1925.* Nueva York: Monthly Review Press.

— 1984: *The Decline of Socialism in America, 1912-1925*, 2.ª ed. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press.

Wiebe, R. H. 1967: *The Search for Order, 1877-1920.* Nueva York: Hill & Wang.

Wilentz, S. 1984: «Against exceptionalism: class consciousness and the American labor movement, 1790-1920». *International Labor ad Working Class History,* núm. 26.

Woodiwiss, A. 1990: *Rights v. Conspiracy: A Sociological Essay on the History of American Labour Law.* Oxford: Berg.

Wuthnow, R. 1989: *Communities of Discourse. Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment, and European Socialism.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Capítulo 19
LA LUCHA DE CLASES DURANTE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 1880-1914: III. EL CAMPESINADO

No existen muchos estudios comparados sobre las clases agrarias, que parecen olvidadas entre los innumerables análisis de la clase obrera. Sin embargo, los agricultores constituyeron en muchos países el grupo de población más numeroso, el mayor electorado y la principal fuente de reclutamiento militar. En el presente capítulo [1] compararé la lucha de las clases agrarias en los cuatro o cinco países que estudio, a los que añadiré los casos ruso, danés, noruego y sueco con el objetivo de representar adecuadamente la tendencia «izquierdista» del campesinado. El único país que no responde al modelo es Gran Bretaña, de cuya experiencia se han extraído, precisamente, la mayor parte de las teorías de la estratificación a partir de Marx. El cuadro 19.1 demuestra hasta qué punto eran erróneas.

Lo que encontramos en Gran Bretaña (excluyendo su colonia irlandesa) es una desviación de lo ocurrido en cualquier otro país durante el siglo XIX y principios del XX. En 1911, sólo un 9 por 100 de la mano de obra británica se dedicaba a la agricultura, menos de una

[1] Para la investigación de este capítulo he contado con la colaboración inestimable de Anne Kane, con quien me encuentro en deuda. Posteriormente publicamos un artículo conjunto sobre sus resultados (véase Kane y Mann, 1992).

CUADRO 19.1. *Distribución de la mano de obra nacional por sectores (porcentaje en cada sector)*

Nación	Año	Agricultura a	Manufactura	Servicios	Total
Gran Bretaña	1871	15	47	38	100
	1911	9	52	40	100
Francia	1866	45	29	27	100
	1911	41	33	26	100
Dinamarca	1870	48	22	13	83[b]
	1911	42	24	30	96
Alemania	1871	49	29	22	100
	1910	36	37	27	100
Estados Unidos	1870	50	25	25	100
	1910	31	32	37	100
Suecia	1870	61	8	12	81[b]
	1910	46	26	14	96
Austria	1869	65	19	16	100
	1910	57	24	19	100
Hungría	1870	70	9	21	100
	1910	64	18	15	100
Rusia	1897	59	14	25	100

[a] La agricultura incluye pesca y silvicultura.
[b] Las cifras de los censos danés y sueco contienen una gran cantidad de ocupaciones «mal descritas», especialmente en los primeros años.

Fuentes: Austria - Kausel (1979: 698). Alemania - las cifras de 1871 proceden de Fisher *at al.* (1982: 52). El resto es de Bairoch *et al.* (1968).

tercera parte del porcentaje de las restantes potencias (Bélgica, una potencia menor, aparece inmediatamente detrás con un 23 por 100). En las otras dos economías más avanzadas, Alemania y Estados Unidos, la mano de obra empleada en la manufactura y la minería comenzaba a superar en ese momento a la empleada en la agricultura, lo que no ocurría en ningún otro lugar, salvo en Bélgica y Gran Bretaña. La escasa importancia de la agricultura para las relaciones de clase de comienzos del siglo XX en Gran Bretaña no se reprodujo en ningún otro lugar. El resultado de las luchas entre el capital, el trabajo y la clase media, que he analizado en los capítulos anteriores, se modifica de modo decisivo cuando interviene también el campesinado. Así pues, para establecer una teoría adecuada de las relaciones de clase en la época moderna, tendremos que analizar la población agraria.

La imposibilidad de elaborar una teoría general de la práctica política de las clases agrarias se debe a tres obstáculos principales. En primer lugar, el legado marxista ha resultado desastroso. Marx esperaba que la población agraria disminuyera, como había ocurrido en Gran Bretaña. Y así fue en parte, pero no hasta la segunda mitad del siglo XX, una vez institucionalizadas las relaciones entre el capital y el trabajo. De igual forma erró al considerar que los campesinos eran incapaces de organizarse como clase. Estos malentendidos llevaron a los socialistas a cometer errores políticos de bulto, como veremos más adelante.

En segundo lugar, el pensamiento occidental ha estado dominado por esta tendencia que considera a los agricultores partidarios de la tradición más conservadora, reacios a la modernización y condenados al desván de la historia (Gerschenkron, 1943; Moore, 1973; E. Weber, 1978; Kenkins, 1986). En tercer lugar, la política campesina enfrenta —en realidad por todo lo contrario— a la teoría con una tarea formidable. ¿Qué marco teórico podría integrar las tendencias clericales, monárquicas, fascistas, populistas, republicanas, socialdemócratas, anarquistas y comunistas de esta clase?

La teoría se ha desarrollado mejor en el plano económico que en el político, y más respecto a los países tercermundistas del siglo XX que respecto a Occidente. Linz (1976), Paige (1976), Sorokin *et al.* (1930), Stinchcombe (1961) y Wolf (1969) han analizado sobre todo los intereses económicos del Tercer Mundo, sus capacidades colectivas y las respuestas a la comercialización global. Sin embargo, como no me canso de subrayar, las luchas de clases son también políticas. Algunas respondieron a grandes cuestiones políticas del periodo, tales como la exacción fiscal y la conscripción militar, pero incluso las cuestiones meramente económicas presentan un lado político, ya que los partidos intentaban capturar todas las formas de Estado —central, local o regional— para alcanzar sus metas. Así pues, las cristalizaciones políticas estructuraron también los movimientos agrarios. Aunque todos estos autores reconocen la insuficiencia de las variables económicas a la hora de explicar los resultados, tratan el aspecto político como una influencia «externa» (Wolf, 1969: 290 y 291; Paige, 1976: 43, 47) o lo añaden como un detalle empírico (Linz, 1976). Otros teorizaron los aspectos políticos, pero sólo en lo relativo a la política de clase (Moore, 1973; Rueschemeyer, Stephens y Stephens, 1992). Por mi parte, sostendré que las variaciones de la política campesina dependieron del entrelazamiento de las dos cristalizaciones

políticas, nación y democracia de partidos, que han estructurado de modo decisivo el mundo moderno.

Las clases agrarias

Identificaré aquí tres clases agrarias principales. En esta sección analizaré sus intereses y poderes económicos; en la siguiente, el influjo que ejerció sobre ellas la dinámica agrícola del periodo correspondiente a la Segunda Revolución Industrial, esto es, la comercialización global del capitalismo. Finalmente, examinaré el cruce de las relaciones de poder político con estas relaciones de tipo económico. Empecemos por enumerar las clases:

1. *Hacendados* —nobleza, baja nobleza o plebeyos—, que poseen grandes extensiones de tierra y emplean mano de obra a gran escala o a escala moderada.
2. Pequeños propietarios —*campesinos* en la terminología de la Europa continental; *granjeros*, en la terminología anglosajona—, que emplean como mano de obra a su propia familia.
3. *Braceros sin tierras,* que venden su fuerza de trabajo a las clases 1 y 2, de forma eventual, estacional o permanente, a cambio de un salario o de un pago en especie, libremente o por vínculos establecidos.

Dos advertencias. En primer lugar, el régimen de arriendo crea posiciones intermedias. Los arrendatarios que tienen una situación segura y disfrutan de privilegios legales convergen con las clases 1 y 2, según el tamaño de la tierra y el empleo o no de mano de obra. Por el contrario, aquellos menos seguros o cuya pobreza los sitúa en peligro de perder sus derechos se encuentran más cerca de los braceros. En segundo lugar, el campesinado presenta una enorme heterogeneidad, que va desde los agricultores más ricos, orientados al mercado, a los propietarios de minifundios, que trabajan por la subsistencia. La mayor parte de los campesinos ricos alquilan braceros de fuera de su explotación, quizás con carácter estacional; en cuanto a los más pobres, se alquilan ellos mismos a los ricos, libremente, como aparceros o conforme a cualquier otro vínculo, sin dejar de trabajar sus pequeña propiedad. Estudiaré aquí el caso de los arrendatarios y los minifundistas.

Dedicaré poco tiempo a dos de estas tres clases, ya que los intereses y el poder de la clase 1 superan mi propósito. Hacendados y terratenientes formaban parte del núcleo de todos los regímenes europeos (antiguos y nuevos), dominaban América del Sur e influían en los partidos relacionados con los grandes negocios de otras regiones del mundo. En todas partes organizaron «partidos de orden» conservadores encargados de preservar las relaciones de propiedad y oponerse a la democracia (Rueschemeyer, Stephens y Stephens, 1992).

Los intereses y los poderes de la clase 3, la de los braceros sin tierra, se establecen con la misma facilidad aunque presentan algunas contradicciones. Estos proletarios trabajaban para los grandes agricultores; su explotación era patente: cobraban poco, estaban sometidos a una autoridad arbitraria y apenas tenían derechos legales. Casi todos los partidos socialistas que operaban en las áreas rurales concentraban en ellos sus esfuerzos. Pero, ¿cómo habrían podido desarrollar organizaciones colectivas aquellos trabajadores prácticamente analfabetos, territorialmente dispersos, que vivían y trabajaban bajo el control directo del patrón, instalados a menudo en sus tierras, donde solían tener lazos de servidumbre, y que, además, se encontraban sometidos al control segmental de la caridad pública, la Iglesia, el gobierno y la magistratura? Aunque formaban una clase latente, los braceros sin tierra casi nunca constituyeron una clase extensiva o política.

El capítulo 15 confirma el análisis de Newby (1977), según el cual el control segmental produce mayor «deferencia» que conciencia de clase; las necesidades de los trabajadores del campo se satisfacían a través de los propietarios, no contra ellos, por eso desarrollaron e interiorizaron estrategias de deferencia. En realidad, los agitadores socialistas de los pueblos debieron de representar una amenaza contra los buenos resultados de esa deferencia. Los trabajadores (y los arrendatarios) se identificaban a sí mismos más como miembros de la comunidad de una hacienda o de la sociedad interclasista de un pueblo pequeño que como miembros de una clase. La identidad de clase y la política radical emergieron por lo general allí donde faltaban los terratenientes, y los trabajadores y arrendatarios disfrutaban de autonomía local, especialmente en el régimen de aparcería, común en el sur de Europa (véase, por ejemplo, Malefakis, 1970, sobre España). En los países que analizo aquí, este fenómeno sólo se produjo en el sureste francés y en los estados del oeste americano, donde generó

tendencias radicales. El proletariado rural fue una clase latente, salvo cuando faltaron los controles segmentales del terrateniente.

La clase 2, la de los campesinos propietarios, constituye un problema, porque su posición económica en relación con las restantes clases es poco clara. Aunque la mayoría de los campesinos tienen un fuerte sentido de identidad colectiva, distinto al de los grandes terratenientes, los braceros sin tierra y las clases urbanas, les falta una clase intrínsecamente adversaria en el sentido marxista, es decir, en el proceso productivo, porque en ellas la producción es un hecho autónomo. La explotación productiva se produce en su mayor parte dentro de la casa, y normalmente el explotador es el varón con mayor poder. Lo cierto es que la mayoría de los minifundistas sufren alguna forma de explotación en el trabajo, pero raramente desarrollan una identidad de clase total, precisamente porque también ellos tienen propiedades.

Un análisis de clase weberiano, basado más en las luchas por el crédito en los mercados que en la lucha en el plano de la producción, se aplica mejor al campesinado. Weber creía que la clase había experimentado una transformación histórica desde las luchas por «el crédito a las luchas competitivas en el mercado de mercancías, primero, y a los conflictos por el salario en el mercado laboral, después». Históricamente, «campesinos y ... artesanos se vieron siempre sometidos a la servidumbre de las deudas y lucharon contra sus acredores urbanos» (1978: II, 931). Como veremos, la situación se prolongó más de lo que Weber esperaba.

A finales del siglo XIX los campesinos sufrieron una gran explotación por el crédito y los precios —ejecuciones de hipotecas, sistemas de embargo de las cosechas y precios impuestos por las corporaciones monopolísticas—, que los configuró como una clase deudora enfrentada a una clase capitalista acreedora. Marx observó lo mismo entre los campesinos franceses del siglo XIX, amenazados de proletarización. Sin embargo, pasó sobre ello, como es bien sabido, en su *18 Brumario,* porque dudaba de que fueran capaces de organizarse como clase. Los campesinos, aunque muy semejantes entre sí, no eran interdependientes, aducía. Su modo de producción los separaba, la «mera interconexión local» los hacía estar como las patatas que se juntan en un saco, como un bulto grande pero informe e inerte, incapaz de organizarse. Lo cual es falso, porque los campesinos se organizaron con gran eficacia (como ha sostenido Wolf, 1969).

Con todo, por muy distintos que sean los intereses de las tres clases agrarias, también comparten una identidad *seccional.* Todos dependen del clima y de las malas cosechas. Están «más cerca de la tierra», en el sentido más ideológico y subcultural de la expresión. Se encuentran territorialmente separados en sus pueblos, donde cuentan con organizaciones y practican políticas característicamente *locales* y *regionales.* Mientras que los trabajadores de la industria se organizan por empresas u oficios, la población rural lo hace por localidades y comunidades. Comprobaremos que las escisiones de carácter religioso y político, entre el centro y la periferia, se prolongaron más de lo que imagina Rokkan (1970), exactamente hasta el siglo XX. Finalmente, las poblaciones agrarias europeas (no las americanas) eran más tradicionales que las urbanas-industriales, y sus relaciones con la Iglesia y el antiguo régimen se hallaban institucionalizadas desde hacía siglos. La política rural estaba mucho más relacionada, para bien o para mal, con el clericalismo y el antiguo régimen.

El sectorialismo enfrentó a los agricultores, en tanto que productores, con los consumidores de las urbes industriales. Los primeros querían precios altos; los segundos, bajos. La diferencia se politizaba fácilmente porque los precios eran ajustables por subvención, impuestos y aranceles. Pero los agricultores compraban también algunos productos agrarios y no todos los mercados agrarios variaban al mismo tiempo. Cuando los productores de trigo buscaban protección, los de vino, leche o tubérculos podían tener interés en abrir los mercados. De ahí la estrechez de las metas de estos intereses económicos sectoriales. Pero las clases agrarias vivían en una subcultura distinta a la de las clases urbanas industriales. Cuando estallaba el conflicto entre sus intereses económicos, las diferencias ideológicas se encargaban enseguida de ampliarlos.

Resulta, pues, muy difícil deducir una política o una identidad colectiva *necesaria* en las clases y sectores agrarios, aparte del conservadurismo de los hacendados. La división típica de Marx en grandes hacendados y campesinos sin tierras, es, en realidad, la que se resiste con mayor fuerza a la organización. Otras líneas de conflicto resultan ambiguas. La de Rokkan, la tierra frente a la industria, lo es de modo especial porque se trata de una mezcla de lucha de clases en función del crédito con una lucha sectorial entre el productor y el consumidor, cada una de las cuales enfrenta a los campesinos con distintos adversarios. En realidad, fue así, ya que la transformación global del

capitalismo comenzó a influir en la agricultura de finales del siglo XIX.

La comercialización global de la agricultura

La agricultura aportó productos y recursos humanos al Occidente en proceso de comercialización, industrialización y urbanización. El ferrocarril (desde la década de 1840) y los barcos de vapor (desde la de 1870) integraron comercialmente incluso a las masas campesinas continentales. El desarrollo favoreció a los agricultores con capital de inversión, de modo que se intensificó la estratificación rural. Los hacendados y los campesinos ricos agrandaron sus propiedades a expensas de las tierras comunales, de los campesinos pobres y de la Iglesia. Como observa Tilly (1979), la mayor parte de la proletarización que se produjo durante la Segunda Revolución Industrial ocurrió en la agricultura. Los campesinos sin tierras emigraron a ultramar o a las zonas industriales. La industria y el artesanado rural decayeron a medida que la manufactura se concentraba en las ciudades (menos en Francia y Suecia, lo que tuvo consecuencias de gran alcance). La polarización de la sociedad rural se produjo con mayor rapidez que la de la sociedad urbana e industrial anticipada en el *Manifiesto comunista.*

Pero el proceso de polarización acabó pronto. De 1860 a 1880 los censos y las comisiones revelan que los campesinos, contra lo que se esperaba, no habían desaparecido. Este hecho produjo el mejor análisis de clase contemporáneo, *La cuestión agraria,* de Karl Kautsky (1899, 1988). Kautsky comprendió que el trabajo familiar del campesino era susceptible de explotación en mayor medida que el trabajo libre. Para conservar sus tierras, las familias del campo sobrevivían a las crisis trabajando más y consumiendo menos. Esta autoexplotación —en realidad, explotación patriarcal, ya que el cabeza de familia determinaba el subconsumo de las mujeres, los niños y los varones jóvenes— y la resistencia a vender sus tierras convencieron a un marxista ruso, Chayanov, de la existencia de «un nuevo modo de producción de los campesinos». Pero Kautsky también percibió que las familias campesinas no eran autonómas, porque su producción se entrelazaba con el capitalismo. La familia del pequeño propietario, del aldeano y del trabajor-campesino realizaba una jornada laboral en una explotación grande o en la industria, al tiempo que completaba lo

necesario para su subsistencia (y quizás algún excedente para el mercado) en su propia parcela. El pequeño agricultor engendraba emigrantes, trabajadores eventuales y soldados para el ejército. Se desarrolló, pues, una relación simbiótica entre las familias campesinas, el capitalismo y el Estado militar. Kaustky fue siempre un marxista ortodoxo que esperaba la total decadencia del empleo agrícola ante el avance del empleo industrial, pero supo ver que la polarización rural había terminado.

La argumentación de Kautsky era correcta, incluso comedida. Había razones de peso para que el campesinado progresara. La concentración de las tierras tenía límites de costes y eficiencia. Weber observó en sus tesis de 1894 que los *Junkers* prusianos se vieron forzados a vender tierras a los campesinos con el objetivo de acumular capital para invertir en lo que quedaba de sus haciendas. Por otro lado, la competencia de la industria por la mano de obra produjo un aumento de los salarios agrícolas. Los trabajadores de las haciendas ahorraron para invertir en pequeñas porciones de tierra, y el coste de los salarios de los agricultores hacendados subió por encima del de los campesinos que explotaban sus tierras (Grantham, 1975), como resultado, muchos cultivos se producían al mismo precio en una granja pequeña que en una hacienda grande. Esto era menos cierto en el caso del cultivo de cereales —y, por supuesto, entre los agricultores del medio oeste americano—, pero los campesinos europeos podían especializarse en cultivos de raíz (como en la Alemania occidental; Perkins, 1981), los productos lácteos (Dinamarca) o vino (en el sur de Francia; Smith, 1975). Los campesinos podían formar también cooperativas para adquirir maquinaria y procesar y distribuir productos, otro tipo de organización que desmiente la metáfora marxista del «saco de patatas». En 1900 la mayoría de las áreas con grandes haciendas no eran economías agrarias avanzadas, sino atrasadas y reaccionarias: la Europa al este del Elba, Rusia, sur de Italia, España y Suramérica. En las regiones adelantadas, la economía de los hacendados, los campesinos y los trabajadores sin tierras se encontraba vinculada a los sectores industriales y financieros más avanzados.

Esta situación produjo dos alternativas en materia de política rural: el populismo de clase y el segmentalismo sectorial. Cuando el capitalismo global integró en su red al campesino, se intensificaron los conflictos crediticios. Los préstamos aumentaron por la seguridad de la tierra (para los propietarios) o de las cosechas (para los arrendatarios). En las praderas americanas, los granjeros hipotecaron la tierra

para comprar acciones del ferrocarril, auténtica savia de sus mercados, pero la connivencia de las compañías ferroviarias con los bancos puso en peligro sus inversiones y se cernió sobre ellos la amenaza de ejecución de las hipotecas. Los pequeños granjeros tomaron entonces prestado de los más ricos y de los bancos. Los arrendatarios se vieron abocados al sistema de embargo preventivo de las cosechas o a la aparcería. Los más pobres corrían mayor peligro, en especial cuando las herencias divisibles fragmentaban la tierra. Los campesinos se daban cuenta de que el gran capital rural y urbano los explotaba, reinvindicaron, pues, la cancelación de las deudas o las ayudas para pagarlas, unos términos más favorables para el crédito y la regulación de los bancos, compañías ferroviarias y grandes empresas suministradoras de la maquinaria y los fertilizantes. Esto es *populismo de clase;* un conflicto weberiano basado en el crédito y las relaciones de mercado, que enfrentó al «pueblo» con el capitalismo de corporación, y produjo la posibilidad de una unión de los campesinos y los obreros, con adversarios semejantes, en una alianza de izquierdas.

Pero la competencia del mercado también aumentó la identidad *sectorial* de los campesinos. Las depresiones agrícolas se exportaban rápidamente porque los productores tuvieron que reducir los precios. Con el progreso de un determinado continente fluían bienes más baratos hacia los mercados locales, como ocurrió en Europa hacia 1880 con el trigo americano y la carne argentina. La especialización aumentó la vulnerabilidad a los cambios en los mercados de producto. ¿Qué ocurría cuando se desataba un desastre natural (como la filoxera que arrasó las viñas francesas en la década de 1880) o aumentaba la eficacia de los competidores extranjeros (como el perfeccionamiento de las técnicas de la molienda entre los granjeros americanos en la década de 1880, que obligó a malvender el centeno de Prusia)? Se recurría a un remedio político: la protección estatal contra las fuerzas del mercado mediante subsidios, préstamos y aranceles. Pero los aranceles agrarios invitaban a los extranjeros a tomar represalisas que perjudicaban a otros sectores de la producción, de modo que el sector urbano-manufacturero solía oponerse a ellos. La política sectorial enfrentaba, por lo general, a campesinos y trabajadores; si éstos eran de izquierdas, aquéllos se hacían de derechas. Dependía en gran parte de quién encabezara la protesta sectorial de los campesinos. Los que tenían haciendas lideraban movimientos conservadores y *segmentales;* los más pobres se acogían al populismo sectorial.

Así, la economía política agraria generaba clases contradictorias e intereses sectoriales, politizados por la deuda, el crédito y las demandas de aranceles que aumentaron a partir de 1873 a causa de la gran depresión agrícola. Muchos autores consideran que fue esta depresión lo que hizo conservadores a los campesinos porque se resistían a la modernización capitalista que amenazada su existencia (por ejemplo, Jenkins, 1986). Pero pocos campesinos se opusieron a la modernización, una vez que disminuyó el peligro de proletarización. No querían ni reacción ni revolución, sino una limitada intervención estatal que aliviara a corto plazo su padecimiento y les permitiera una participación equitativa, a largo plazo, en la modernización. Las quejas se radicalizaban cuando estaban dirigidas contra los actores del capitalismo, como los bancos o las compañías ferroviarias, pero planteaban remedios políticos de carácter pragmático: ajuste de aranceles, créditos y asistencia cooperativa. Cuando aumentó en todos los Estados esta actividad política, ¿a qué cristalizaciones políticas tuvieron que enfrentarse las clases agrarias?

Los Estados y las clases agrarias: cuatro modelos generales

Como hemos visto en capítulos anteriores, la política de finales del siglo XVIII y del siglo XIX estuvo dominada por las luchas representativas y nacionales por la ciudadanía. Rokkan (1970) ha sostenido con razón que tales conflictos no se produjeron únicamente entre las clases y los sectores, sino también entre los centralistas y los descentralizadores y entre el Estado y la Iglesia. Los movimientos por la representación se opusieron a la monarquía absoluta de dos formas: reduciendo los poderes del Estado central o aceptando la centralización y democratizándola, es decir, haciendo hincapié en la cuestión nacional y en la cuestión de la democracia de partidos. En estas luchas, las iglesias fueron muy importantes para el mundo rural, donde proporcionaron las principales infraestructuras de la movilización local-regional. Las iglesias católicas y protestantes reaccionaron ante la democracia de partidos y la cuestión nacional según fueran oficiales (más en el caso de los protestantes), mayoritarias o minoritarias.

Aunque las cristalizaciones políticas que conciernen a las clases agrarias fueron únicas y complejas, en cierto aspecto resultan más simples que las que afectaban a las clases industriales. Puesto que los campesinos alimentaban los ejércitos europeos, la mayor parte de los

regímenes se habían avenido al compromiso hacia 1900 (en parte con el objetivo de impedir una alianza entre campesinos y trabajadores). El resultado fue una disminución del militarismo en las relaciones de clase agrarias, salvo en los momentos en que el regionalismo las inflamaba (en el caso de los países que analizo aquí: las provincias austriacas y rusas; en un caso completamente distinto, América del Sur). He simplificado las cristalizaciones políticas agrarias en un espacio bidimensional, distinguiéndolas según las tres posiciones que adoptaron en cada una de las dos dimensiones: la democracia de partidos y la cuestión nacional. En este periodo, la democracia de partidos desafió a las monarquías de todos los países avanzados. Los resultados variaron según el equilibrio de fuerzas, en un arco que abarca desde las monarquías con problemas evidentes a las monarquías ya abolidas y debilitadas por la democracia de partidos institucionalizada. La cuestión nacional produjo resultados más diversos, pero aquí distinguiré los tres que afectan a los países que nos ocupan. El cuadro 19.2 muestra los nueve tipos ideales resultantes, aunque estos países sólo ocupan seis casillas.

CUADRO 19.2. *La democracia de partidos y la cuestión nacional en los Estados agrarios del siglo* XIX

	Monarquía contra democracia de partidos		
Centralización contra Confederalismo	Irregularmente contestada	Debilitamiento de la monarquía	Democracia de partidos institucionalizada
Partidos mayoritariamente centralistas	Alemania Austria-Alemania	Escandinavia Rusia	Francia
Monarquía centralizada, demócratas confederales	La mayor parte de los territorios austriacos	Minorías y nacionalidades del Imperio ruso	
Partidos mayoritariamente confederales			Estados Unidos

Las variaciones internacionales de la política agraria puede predecirse a partir de la combinación de estas dos cristalizaciones políticas. Ahora bien, puesto que aquí no me ocupo de un conjunto numeroso de países y puesto que resulta más adecuado analizarlos como totalidades concretas, lo simplificaré en cuatro modelos más generales:

1. Casos en que la democracia de partidos (para la mayoría de los hombres) y la cuestión nacional estaban institucionalizadas. En Francia, las instituciones políticas nacieron centralizadas; en Estados Unidos, confederalizadas; pero en ambos casos existían partidos políticos fírmemente institucionalizados y los nuevos —entre ellos, los campesinos— fueron relativamente ineficaces. Puesto que el Estado confederal permite una mayor variedad regional, las principales excepciones se encuentran en América, en la política local y de los estados, temporalmente capturada por los partidos agrarios.
2. Casos en que la democracia de partidos aún era cuestionada por unas fuerzas en equilibrio inestable, la mayoría de las cuales aceptaban la centralización del Estado. En esta situación se enfrentaban ante todo la monarquía autoritaria, con el apoyo de la burguesía nacional, y una clase obrera igualmente estatista, mientras que los movimientos campesinos oscilaban, aunque, en general, optaban por la derecha, bien uniéndose a los partidos del antiguo régimen, bien formando partidos autónomos de carácter conservador o de centro derecha aceptables para la monarquía. Se trata del modelo predominante en Alemania y en el corazón de los territorios austro-alemanes de Austria-Hungría.
3. Casos en que la democracia de partidos aún estaba en cuestión entre una monarquía autoritaria centralizada y unos partidos democráticos confederales. Aquí la política campesina practicó un populismo de clase; de izquierdas cuando estaba encabezado por los propios campesinos, y de tendencias derechistas en el caso contrario. Se trata del modelo del resto de los territorios austro-húngaros, que fracasó en las tierras del sur y del oeste de Alemania.
4. Casos en que la democracia de partidos aún era cuestionada, pero enfrentaba una monarquía débil con el posible triunfo de una alianza de los liberales urbanos con los campesinos y los trabajadores; siendo ambos bandos centralistas. Aquí, los campesinos se desplazaron a la izquierda, convirtiéndose en aliados potenciales de los socialistas. Donde el antiguo régimen se vino abajo pacíficamente, hubo socialdemocracia, como en Escandinavia; donde la caída nece-

sitó de una revolución, campesinos y obreros se desplazaron más a la izquierda, como en Rusia. La escasez de investigaciones sobre los nacionalismos minoritarios del Imperio ruso me impide atender adecuadamente a la lucha de la monarquía contra sus oponentes confederales.

La democracia de partidos en Francia y Estados Unidos

La Francia del siglo XIX tuvo un Estado centralista y una democracia de partidos institucionalizada a partir de 1880. Su economía era muy distinta a otras. La agricultura variaba de una región a otra, y la industrialización se produjo de modo lento y descentralizado, dispersada por pequeñas ciudades donde se combinaba el trabajo industrial con las tareas agrícolas en la propia parcela. En 1789 la alianza de los revolucionarios con los campesinos había institucionalizado la propiedad en el campo, pero cuando aquéllos reivindicaron la subida de impuestos, el descenso del precio de los alimentos y la conscripción, éstos les volvieron la espalda. Los arrendatarios del oeste llegaron más lejos; organizaron un levantamiento armado bajo el control segmental del clero y los terratenientes, que se mantuvo en el siglo XIX (Bois, 1960). La descristianización de la cultura francesa se produjo en algunas ciudades y regiones al mismo tiempo; en otras, la Iglesia aumentó sus controles segmentales a través de las escuelas, la caridad, los hospitales y las fiestas de la comunidad. Puesto que no cabía desafiar directamente la centralización, el clericalismo se escondía tras una cobertura confederalista, con el objetivo de recortar las funciones del Estado central ampliando las suyas. Había enormes diferencias entre el oeste conservador y el sureste radical; a lo que cabe añadir numerosos microcismas en otras zonas, donde las ciudades y su entorno se dividían en facciones representadas por partidos republicanos y clerical-conservadores (Garrier, 1973: I, 515 y 516; Merriman, 1979). Pero en Francia la política era demasiado compleja —rural frente a urbana, agraria frente a industrial— para ser sectorial.

Así pues, la depresión agrícola canalizó las quejas del campo en distintos movimientos local-regionales. En el sureste, la especialización de los campesinos y los minifundistas (en la uva, la aceituna, la fruta o las flores) los hizo vulnerables a las fluctuaciones del mercado, a la superproducción que tuvo lugar a partir de 1900, la competencia de los grandes cultivadores (que redujo los salarios de los pe-

queños propietarios) o a las restricciones que imponían al crédito y a los precios los comerciantes intermediarios (Smith, 1975; Judt, 1979; Brustein, 1988). A partir de 1880 cambiaron su republicanismo por el socialismo. La izquierda francesa (elástica, como he descrito en el capítulo 18) se especializó en elaborar programas que armonizaban la necesidades de crédito de los campesinos con las reivindicaciones más orientadas a la producción de braceros y campesinos pobres. Silenció el problema de la redistribución de la tierra, amplió las concesiones en materia fiscal y los consiguientes subsidios, propugnó los impuestos progresivos, fomentó las cooperativas (no la propiedad colectiva de la tierra), atacó los monopolios y movilizó el anticlericalismo en algunas zonas (Loubère, 1974: 206 a 233; Brustein, 1988: 107, 169).

Puesto que la depresión se cernía también sobre la base rural de la derecha, ésta tuvo que aumentar su agilidad política. Los notables locales movilizaron a los campesinos y los arrendatarios con créditos, seguros y proyectos cooperativos (Berger, 1972; Garrier, 1973: I, 518 a 522). La Iglesia, temerosa (como en el centro católico de Alemania) de que el descontento económico rural minara su capacidad de control segmental, respondió también. Una de sus facciones abandonó las ideas monárquicas y la alianza con los terratenientes para crear un eficaz movimiento social-cristiano en el mundo rural.

Brustein (1988) ha ofrecido una interpretación de clase del cisma entre el oeste y el sureste, demostrando que durante más de cien años se produjo una correspondencia positiva entre aquellas zonas en que los campesinos contaban con propiedades y las que votaban a la izquierda, y entre aquellas zonas de pequeños y medios arrendatarios (con presencia de terratenientes) y las de voto derechista. Al reinterpretar anteriores estudios (Bois, 1960; Tilly, 1967; Le Goff y Sutherland, 1983), sostiene que la diferencia de los arrendatarios sustentaron también el apoyo o el rechazo a la revolución, y llega a la conclusión de que los campesinos son intrínsecamente de izquierdas y los arrendatarios, de derechas. Judt (1979: 113 y 114, 134 a 136, 279 y 280) concluye de forma semejante su estudio sobre los campesinos de izquierda en el sureste: «El campesinado *siempre* ha manifestado una tendencia al fervor revolucionario mayor que la de los otros grupos constituyentes de las sociedades modernas». Si, como vemos por este capítulo, se trata de una generalización excesiva, ¿por qué parecía tan adecuada al caso francés?

Brustein afirma que las diferencias en las relaciones de producción determinan que los *intereses* empujan a la izquierda a los campe-

sinos y a la derecha a los arrendatarios. Describe las relaciones de los terratenientes del oeste con sus empobrecidos campesinos en términos demasiado idílicos, ya que, según él, «los arrendatarios [y los aparceros] establecían [con sus señores] acuerdos beneficiosos para la asunción de riesgos», y los trabajadores dependientes de un señor vivían con mayor seguridad que el resto de los braceros del país. Pero este planteamiento minimiza la explotación que experimentaron los tres estratos y la agresión de ciertas políticas derechistas contra sus intereses, por ejemplo, los impuestos regresivos y la oposición a la democracia en el mundo rural. De hecho, como sostiene la argumentación general de este capítulo, los «intereses» económicos agrarios fueron ambivalentes y más maleables desde el punto de vista político de lo que piensa Brustein. Las relaciones de producción implican tanto el interés como el control. El control local segmental que los terratenientes activos ejercían sobre sus dependientes resultó decisivo a la hora de encauzarlos hacia políticas conservadoras. Como en otros países, las relaciones del poder político y económico se entrelazaban para producir resultados en el mundo agrario. La transmisión de estas variadas definiciones de intereses rurales al siglo XX constituye una característica francesa, que se explica por los resultados local-regionales incompletos de su revolución.

El confederalismo y la democracia de partidos americana se institucionalizaron pronto, aunque a costa de una guerra civil y de un periodo de fracasada reconstrucción en el sur. El periodo bélico fomentó también la comercialización agraria (Bruchey, 1965: 155 y 158; Danhof, 1969: 11). Los mercados internacionales del algodón y los artículos alimentarios estimularon la producción de cosechas para la venta inmediata en los mercados. Cuando los agricultores del este se especializaron en actividades como los productos lácteos, los del oeste y las llanuras cambiaron el cultivo autosuficiente por la producción para la venta inmediata de trigo y maíz. Los campesinos necesitaban crédito y transporte, pero eran vulnerables a las deudas y los precios agrícolas bajos. La guerra civil no hizo más que empeorar la situación con la escasez de moneda y de crédito, la elevación de los impuestos (para proteger las industrias) y el agotamiento de la agricultura del sur.

Aunque este conjunto de problemas no era insuperable, por desgracia la política americana no dejaba lugar para los agricultores. Como vimos en los capítulos 5 y 18, este Estado cristalizó en la forma liberal capitalista (que sacralizaba los derechos de la propie-

dad), federal y democrático de partidos. Su democracia se encontraba en las manos de dos partidos. El partido demócrata había heredado la defensa de los intereses agrarios, pero había perdido poder con la guerra. La subsiguiente realineación del electorado se produjo más en función de las comunidades local-regionales y étnico-religiosas que según los intereses de clase (Burnham, 1974: 688). Los republicanos dominaban ahora los estados del norte y el gobierno federal; en tanto que los demócratas conservaban su imperio sobre los estados del sur. Puesto que para competir en el plano federal estos últimos necesitaban el apoyo del comercio y del mundo de los negocios, descuidaron la representación de la clase obrera y mantuvieron la del campesinado sólo esporádicamente.

La negligencia política provocó un aumento de las quejas campesinas. Cuando subieron los costes, arreciaron las reivindicaciones de una regulación del ferrocarril. Los altos precios de los productos manufacturados que los campesinos se veían obligados a adquirir intensificaron su resentimiento hacia los intereses de las ciudades industriales y los comerciantes locales. La banca nacional perjudicaba a la agricultura. La vuelta al sistema monetario del patrón oro benefició a los negocios, pero los campesinos tuvieron que pagar más caros los bienes que compraban y el servicio de la deuda, al tiempo que obtenían menos por la venta de sus productos. La falta de liquidez aumentó el endeudamiento hipotecario y la dependencia de los prestamistas y comerciantes acreedores. El sistema de embargo preventivo de las cosechas para obtener crédito se extendió por todo el sur entre los pequeños agricultores y los arrendatarios, aumentando dos conflictos de clase: el basado en el crédito y el basado en los aranceles sectoriales. Al contrario que en gran parte de Europa, los aranceles americanos protegían la manufactura y perjudicaban a los agricultores, sobre todo en el sur y el oeste (Buck, 1913: 21).

Como los dos partidos se mostraban impotentes, los campesinos se organizaron por su cuenta. Los agricultores *(grangers)* de la década de 1870 se quejaban de los precios bajos y los altos costes impuestos por las corporaciones del ferrocarril, la industria mecánica y los intermediarios. Entonces volvieron la mirada hacia un conjunto de terceros partidos de escasa entidad: el partido reformista, el partido anti-monopolios y el *Greenback*. A finales de la década de 1880 la alianza de agricultores, más radical, atacó el arrendamiento y la dependencia de una sola cosecha, especialmente en el sur, reivindicando subvenciones para las cooperativas e intercambios agrícolas. La do-

minación que ejercía el mundo de los negocios en los dos partidos los empujó a adoptar una postura de izquierda y a aliarse con los grupos de trabajadores en el partido del pueblo y el partido populista, más fuertes en el sur y en el oeste, aunque también contaban con ciertos baluartes en el medio oeste. Esta plataforma antimonopolista reivindicaba tierras más seguras para los pequeños agricultores, protección contra las grandes corporaciones y un «subtesoro» federal que protegiera a los campesinos de la caída de los precios y los altos costes del crédito.

Este movimiento de izquierda se prolongó hasta comienzos del siglo XX en el partido socialista, cuya faceta rural se centraba en Oklahoma, Texas, Arkansas y Louisiana, estados donde los agricultores se habían visto arrojados al arriendo y a la retención de cosechas, obligados a cultivar algodón y dominados por la política local de los más ricos, terratenientes, comerciantes y acreedores. Al contrario que los populistas, explotados por intereses financieros, comerciales y metropolitanos ajenos a los suyos, los arrendatarios y pequeños campesinos del sur y del suroeste se encontraban en manos de sus notables locales; una situación determinada más por la clase que por el sector y avivada por el control capitalista de los demócratas, que dominaban todo el suroeste (Rosen, 1978). Como sus iguales en Francia, Escandinavia y Baviera, los socialistas del suroeste propugnaban un socialismo agrario moderado; para ellos los pequeños campesinos con tierras no eran capitalistas sino gentes que producían con su propio trabajo. Adoptaron entonces un populismo radical de clase —«la tierra para quien la trabaja»— y compitieron en las elecciones con los demócratas. Finalmente, superaron el populismo y exigieron el fin del control capitalista.

Estos partidos pequeños recibieron un apoyo extensivo local y regional que les permitió ganar muchas elecciones locales y estatales (Fine, 1928; Dyson, 1986). Pero, al fin y al cabo, su incapacidad para romper en las elecciones federales el sistema bipartidista, debido al tamaño de los distritos electorales y a la servidumbre liberal-capitalista de estos partidos, los condujo a la derrota. La alianza entre el campo y el trabajo resultaba necesaria para ambos, sin embargo, el adversario común no creó una auténtica solidaridad. Los partidos de campesinos y trabajadores sólo lograron implantarse con éxito en Wisconsin y Minnesota. Al contrario que en Rusia, Escandinavia y algunas partes de Austria-Hungría no hubo una exclusión común de

la ciudadanía política capaz de fomentar programas económicos diferentes pero compatibles.

La fragilidad de la alianza se demostró frente a los partidos profundamente impregnados de liberalismo capitalista. En el capítulo 18 hemos visto que el hecho de que la AFL diera la espalda a los terceros partidos en 1894-1895 dejó al partido socialista una exigua minoría entre la clase trabajadora. Los granjeros también estaban divididos. También se dividieron los campesinos. El partido populista, cooptado por los demócratas, quedó adulterado. Aunque los socialistas del suroeste habían moderado su política fueron derrotados por los demócratas locales (Burbank, 1976: 188; Green, 1976: 382). En el sur, un populismo multirracial protestó contra el sistema de embargo preventivo de cosechas, pero la exclusión de los negros del sufragio debilitó el movimiento y acabó por dividirlo. El sur permaneció bajo el dominio político local de las oligarquías de comerciantes-plantadores hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Sus representantes en el Congreso, que continuaban manteniendo su cohesión y su conservadurismo en Washington, bloquearon toda legislación favorable a los trabajadores y pequeños agricultores. También en este caso la continua debilidad de la clase obrera americana condenó al fracaso a los movimientos radicales agrarios. De nuevo nos encontramos ante los efectos represivos característicos de las cristalizaciones democrática de partidos y liberal-capitalista del Estado americano.

En este periodo, los movimientos de los agricultores estadounidense consiguieron pocas reivindicaciones; sería más tarde, en el siglo XX, cuando, una vez desaparecidos los movimientos de arrendatarios y aparceros, una combinación de agricultores ricos y medios adquirió una considerable influencia canalizada en los dos partidos. Gran parte de las reivindicaciones sectoriales del campesinado se obtuvieron entonces, aunque en formas predominantemente conservadoras y segmentales.

Las grandes monarquías: Alemania y Austria-Hungría

Como he subrayado en los capítulos 9 y 18, la representación en Alemania estuvo siempre vinculada a las cuestiones religiosa y nacional, ya que el Estado fue prusiano y protestante. Después de que la *Kulturkampf* del régimen contra la iglesia católica fracasara en la década de 1870, el problema religioso vino a menos, pero nunca dejó de

influir en la cuestión nacional. La monarquía autoritaria centralizada dependía de los capitalistas, los terratenientes y, cada vez más, de la clase media, que se convirtieron en los principales partidarios del centralismo nacional; frente a estos grupos estaban el movimiento obrero y las minorías locales y regionales partidarias del confederalismo o incluso de la existencia de sus propios Estados-nación (separatistas polacos, daneses, alsacianos y hannoverianos).

Los campesinos se encontraban en una posición intermedia, ni pertenecían por completo al régimen ni se encontraban entre sus enemigos. Pero el régimen no podía permitirse mantener enfrente un tercer de grupo de población, además de los obreros y los confederalistas, y mucho menos cuando consideraba que los grandes agricultores podrían suponer un eficaz control segmental de los trabajadores y los arrendatarios; por tanto, introdujo un sufragio universal masculino pensado contra las ciudades. En el medio rural, los hombres tenían un enorme peso electoral, de ahí que los campesinos mostraran una cierta ambigüedad respecto a la extensión de la democracia (Rueschemeyer, Stephens y Stephens, 1992: capítulo 4). Aunque los trabajadores alemanes estaban unidos en una lucha común de clase por la ciudadanía política, no se produjo la unión con los campesinos, al contrario que en Escandinavia.

Así, el campesinado se desplazó hacia la derecha, si bien con grandes diferencias regionales, ya que sus condiciones variaban mucho del este al oeste. La abolición de la servidumbre en el este empujó a los antiguos siervos a emplearse como mano de obra de los *Junkers*, pero los campesinos de la zona occidental, que disfrutaban desde hacía mucho tiempo de libertad, conocieron una época de progreso (Conze, 1969: 54; Brenner, 1976) desde mediados de siglo hasta la depresión de 1873. Este hecho produjo un descenso de los precios y un aumento del endeudamiento y extendió tanto el conflicto sectorial entre las clases agrarias y urbano-industriales como el populismo de clase, suscitado por el problema del crédito, contra los capitalistas. A partir de 1882 más de la mitad de los campesinos alemanes, que eran pequeños propietarios, se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo como braceros. Cuando se abatió sobre ellos la conscripción militar, aparecieron sentimientos antimilitares tan fuertes como los de los socialistas; tanto unos como otros se opusieron también al sistema regresivo de impuestos indirectos que propugnaban los conservadores. Sin embargo, si los campesinos adoptaban una posición contra los impuestos sobre la tierra y reivindicaban aranceles proteccionistas

contra la competencia exterior, podría formarse una alianza segmental con los *Junkers* y otros hacendados. ¿Hacia dónde se desplazarían?

Las clases agrarias al este del Elba, donde mandaban los *Junkers*, optaron por la derecha, pero en occidente y en la Alemania católica contaron con una política autónoma (Blackbourn, 1977, 1984). Pero también aquí se mostraron ambivalentes ante la lucha de las clases urbanas e industriales, con las consabidas variaciones regionales y religiosas. Los luteranos del norte prusiano optaron por un Estado-nación centralizado. La mayor parte de los católicos —el 37 por 100 del *Reich* en 1905— de los estados del sur eligieron el confederalismo; la Iglesia los movilizó tanto contra las tendencias estatistas de los luteranos del antiguo régimen como contra las del proletariado estatista y ateo. Las clases agrarias del norte luterano no tenían un interés especial en reprimir a los trabajadores, pero eran tan partidarias del Estado-nación como contrario el agro católico del sur.

El partido socialdemócrata marxista contribuyó a esta decisión (Hussain, 1981). Aunque durante mucho tiempo había sostenido la teoría de la desaparición de las clases agrarias, según el modelo inglés, y por tanto las había ignorado, en 1890 comenzó a contar con el electorado rural. Consiguió algunos éxitos en las protestantes tierras de Hesse y en las zonas rurales de influencia de sus bases urbanas, entre los braceros de Mecklenburgo y ciertas partes del este de Prusia, donde los luteranos aceptaban bien su socialismo estatista. No obstante, el dogma marxista de la socialización de la tierra y la oposición sectorial de su electorado urbano contra el proteccionismo y los subsidios a las clases agrarias le restaban atractivo para los campesinos. Puesto que la mayor parte de los braceros poseían una pequeña parcela de tierra no eran partidarios de abolir la propiedad privada, sino de defenderla. Las clases agrarias, que no comprendían la ideología de los socialdemócratas, trataron en vano de obtener concesiones sectoriales de ellos (Eley, 1980: 23 y 24, enfatiza sus escasos éxitos). El partido habría podido hacerlo mejor, como demostró su hermano bávaro en el sur, que volvió a obtener representantes en el *Landtag*, gracias a que, dejando a un lado la socialización, ofreció a los campesinos protección em materia de hipotecas.

Los campesinos del sur, como sureños y como católicos, favorecieron el confederalismo. El partido católico de centro encabezó sus reivindicaciones. Al principio, el liderazgo de los notables urbanos le habían impedido asumir el descontento campesino, hasta el punto de

que sus votantes le abandonaron cuando apoyó la reducción de los aranceles del gobierno liberal de Caprivi, a principios de la década de 1890, para formar ligas y asociaciones de disidentes campesinos en Westfalia, Renania y Baviera. Las ligas bávaras fueron radicales, anticlericales y antimilitaristas, reivindicaban los impuestos progresivos y la protección agraria, todo lo cual dejaba abierta una posibilidad de alianza de izquierdas con la socialdemocracia. Fue entonces cuando el alarmado partido de centro creó sus propias asociaciones campesinas católicas, moderó su postura respecto a los aranceles y patrocinó programas de crédito agrario, provocando la decadencia de las ligas (Farr, 1978). El centro se rehízo transformándose a sí mismo en un partido en cierta forma agrario para satisfacer las reivindicaciones sectoriales y presionó al régimen en favor de los campesinos aliándose con los conservadores del norte. Así, los campesinos del sur obtuvieron muchas de sus demandas a través de un partido de centro con influencias en el régimen.

En el norte, el gobierno de Caprivi, detestado por los campesinos, había dependido de los liberal-nacionales y los progresistas, cuyas alas agrarias se encontraban en decadencia. Los partidos conservadores dominados por los agricultores más ricos abogaban por la protección, buscando el apoyo campesino en sus ligas agrarias. En aquellas áreas protestantes donde los conservadores eran débiles, los campesinos abrazaron, por el contrario, un populismo de derechas cuya retórica antiurbana y antimonopolista militaba en las filas del luteranismo, el nacionalismo y el antisemitismo. Los judíos constituían un objetivo fácil para el populismo contra los acreedores en Prusia y la agrícola Hesse, las mismas zonas en que los socialdemócratas habían logrado establecer un punto de apoyo y donde dominarían más tarde los nazis (Eley, 1980; Farr, 1986).

Así pues, los campesinos alemanes rechazaron el socialismo en mayor medida que sus iguales de otros países y adoptaron bien la ideología «social cristiana» moderada del centro católico, bien un segmentalismo sectorial dominado por los agricultores conservadores y ricos, bien un populismo derechista de clase. Su descontento los desplazó hacia la derecha a causa de dos aspectos del régimen y uno del partido socialdemócrata. En primer lugar, por la política rural de la monarquía autoritaria, basada en un segmentalismo impuesto desde arriba y la adopción de la estrategia del «divide y vencerás». Cuando los partidos de notables respondieron a las quejas campesinas —como lo hicieron los conservadores y el centro católico, pero

no los progresistas o los liberal-nacionales— su influencia cerca del régimen les procuró ciertas ventajas sobre los excluidos partidos populares, y entonces se hicieron de derechas. En segundo lugar, cuando los partidos de notables no respondieron, nacieron movimientos autónomos influidos por la cuestión nacional y, por tanto, por la región y la religión. Los luteranos del norte apoyaron la centralización del Estado nacional; algunos desde un nacional populismo de derechas, otros, los menos, desde una izquierda socialista de corte estatista. Así comenzó la fuerte competencia entre la extrema derecha y la extrema izquierda en la Alemania luterana que contribuiría a la destrucción de la República de Weimar. Curiosamente, el sur confederal y católico demostró tener un mayor potencial para el surgimiento de un movimiento agrario radical, pero el partido socialista ateo no pudo dirgirlo y fue el partido de centro quien recuperó el control. En tercer lugar, la indiferencia hacia las quejas de los agricultores en materia crediticia del marxismo productivista de los socialdemócratas apoyó sin quererlo el desplazamiento a la derecha. Todas estas situaciones demuestran la importancia de las cristalizaciones políticas.

Los territorios austriacos, predominantemente agrarios, estaban dominados por latifundios en los que trabajaban los campesinos sin tierra o minifundistas. La explotación a que los sometían los terratenientes, los elevados intereses y el atraso de algunas de sus provincias produjeron pobreza y un grave endeudamiento, que los empujó a emigrar masivamente al Nuevo Mundo. Las luchas generadas por la producción agraria y el crédito, sectoriales o de clase, fueron sin duda feroces —a menos que el control segmental de los señores lograra imponerse mediante la represión—, pero su estructura respondía ante todo a las tres cristalizaciones austro-húngaras características en relación con la cuestión nacional y la democracia de partidos (véase capítulo 10).

En primer lugar, los Habsburgo no eran sólo monarcas, sino reyes *dinásticos* con poderes arbitrarios pero limitados. Aunque se habían resistido a la democracia durante casi todo el siglo, intentaron un cambio concediendo una limitada democracia de partidos, con el ánimo de imponerse segmentalmente dividiendo a las clases, las regiones y las naciones. Después de varios experimentos en el plano del gobierno local, en 1896 y 1907, el régimen concedió el sufragio masculino para la elección de asambleas con soberanía limitada (cuya realización se retraso en Hungría). Antes de esto los partidos conserva-

dores del campo y los liberales de las urbes habían manifestado un interés escaso en los campesinos sin derecho al voto y los trabajadores sin tierras, pero con la súbita obtención del sufragio aparecieron partidos agrarios e industriales que aún no estaban segmentalmente controlados por los antiguos, y este hecho les permitió reivindicar la democracia de partidos, es decir, la soberanía parlamentaria. Al contrario que en Alemania, y al igual que en Escandinavia, la común exclusión política podía unir a los trabajadores con los campesinos y los radicales de la burguesía.

En segundo lugar, a falta de instituciones parlamentarias, las *iglesias* habían representado informalmente a la mayoría de las provincias, y ahora patrocinaban partidos políticos. El hecho de que la iglesia católica constituyera casi un Estado en algunas provincias no le obligó a perder su carácter transnacional y antiestatista. En otras provincias canalizaba el descontento local-regional. Las iglesias de las minorías protestantes lo hicieron con mayor frecuencia. Los movimientos rurales podían ser clericales o anticlericales, según la posición de sus iglesias locales, pero nunca indiferentes a la religión.

En tercer lugar, muchos demócratas apoyaron el *confederalismo* (lo que encaja en el tercero de mis modelos), salvo en el corazón del territorio austro-alemán (lo que se ajusta a mi segundo modelo). Mucho después se convertirían en disidentes nacionalistas. Este hecho llevó a la monarquía a una mayor dependencia de los austro-alemanes y, después de 1867, al compromiso con otras nacionalidades-clientes. De este modo, también las relaciones entre los terratenientes y los campesinos y las de los deudores con los acreedores se hicieron «nacionales» y «regionales», porque los explotadores solían ser los alemanes, los judíos o la clientela húngara (atrincherados en la banca y la administración del Estado), mientras que los explotados eran las nacionalidades locales. Las quejas económicas y el nacionalismo se reforzaron mutuamente. Los partidos democráticos austro-alemanes se mantuvieron centralistas; los no alemanes apoyaron el confederalismo y luego la autonomía nacional. Los húngaros se mostraban ambivalentes, dada su posición de nuevos explotadores del sureste.

Así pues, la política rural presenta enormes variaciones de una región a otra. En la baja Austria alemana todos los partidos estaban por la centralización, polarizados por las divisiones sectoriales y de clase que impuso la rápida industrialización y la secularización de la vida urbana. El partido social-cristiano, católico, conservador, antisemita y predominantemente agrario, obtuvo una mayoría de dos tercios en

el *Landtag* en 1903, donde defendió vigorosamente los intereses campesinos y la moratoria de las deudas, el límite a las hipotecas, las leyes relativas a las granjas y las cooperativas. Su principal oponente, el partido socialista, contaba con el respaldo de algunos campesinos sin tierras, pero, en general, no recibía los votos del campo. Como a sus compañeros alemanes, el dogma estatista del marxismo impidió a los socialistas austriacos la elaboración de un programa agrario (Lewis, 1978).

Bohemia constituía otra gran área industrial. La clase obrera checa, como su hermana austro-alemana, abrazó primero la ideología estatista del partido socialista, pero con la expansión del nacionalismo checo, los socialistas (como en el caso bávaro) adoptaron una actitud ambivalente. Puesto que gran parte de los agricultores con hacienda eran alemanes y la mayoría de la iglesia católica estaba implicada en el gobierno de los Habsburgo, el nacionalismo se hizo anticlerical. Este hecho debilitó la resistencia rural al socialismo. En ninguna otra zona de Europa tuvo tanto atractivo para los campesinos sin tierra un partido marxista. Naturalmente, su gran competidor era el partido nacional-socialista, que combinaba ambas ideologías, como se desprende de su nombre (y que nada tenía que ver con el de Hitler). Muchos campesinos se afiliaron al partido agrario de centro-derecha, partidario de la autonomía checa y de una democracia más amplia, pero antisocialista e indiferente a los campesinos sin tierra (Pech, 1978).

En Eslovenia, mucho más atrasada, la disidencia «nacional» estuvo encabezada por la iglesia católica. Allí gran parte de los campesinos apoyó al partido esloveno del pueblo, de carácter clerical, comprometido con las reformas democráticas y los intereses económicos campesinos. Los socialistas ganaron algunos adeptos en las zonas donde se mezclaban las etnias y el nacionalismo carecía de importancia. La Galitzia polaca también era atrasada y rural, con una historia de insurrecciones campesinas y autonomía provincial, donde los nobles polacos y los campesinos ricos explotaban a los braceros y pequeños propietarios rutenos. Es decir, el nacionalismo polaco estaba silenciado, la iglesia católica era neutral y la política estaba dominada por la clase. Los partidos socialistas católicos y mutualistas competían por el voto del campesinado y con el partido socialista por los campesinos sin tierras.

La situación húngara dentro de la monarquía era especial, tanto desde el punto de vista económico como desde el político, porque

contaba con las haciendas más grandes y con un control de su *Reichshalf* por parte de la nobleza sólidamente institucionalizado desde 1867. El nacionalismo magiar estaba silenciado y el control de la nobleza dificultó las organizaciones de clase entre los campesinos y los trabajadores húngaros (Eddie, 1967: Macartney, 1969: 687 a 734; Hanak, 1975). Pero los graves perjuicios que causó la depresión hicieron estallar varias insurrecciones rurales en 1894 y 1897. Su organización se debió en parte al partido socialdemócrata húngaro, plenamente consolidado, aunque decayó cuando un partido radical populista de los pequeños propietarios comenzó a competir con los partidos de los terratenientes.

Pero en las restantes zonas de este *Reichshalf,* el descontento rural abarcó el plano «regional-nacional» contra la dominación magiar. Las iglesias protestantes primero y la católica después encabezaron la resistencia nacional eslovaca (Pech, 1978). Los liberales y los socialistas no influyeron hasta después de la Primera Guerra Mundial. Los campesinos y los trabajadores sin tierra descontentos fueron ignorados por la política nacional-religiosa. En Croacia se produjo una reacción campesina casi opuesta. Sus notables locales —una nobleza débil, una burguesía y una jerarquía católica— eran clientes de los grandes señores magiares. Debido a este compromiso de los notables, surgió un potente nacionalismo disidente entre las clases agrarias excluidas, que glorificaba a los campesinos, ya fueran radicales, anticlericales o incluso socialistas. En todas las provincias y estados de los Balcanes, la nobleza y la baja nobleza, diezmadas por el poder turco, presentaban también una gran debilidad. Los campesinos y los minifundistas dominaban los movimientos radical-populistas (Mouzelis, 1986: 35 a 38).

Así, todos los intereses de clase o sector austro-húngaros (por la producción o el crédito) raramente encontraron organización política. La cuestión nacional —un debate sobre la democracia de partidos centralizada en un Estado parcialmente confesional— se interpuso para generar distintos resultados. El descontento nacional checo reforzó la lucha de clase y produjo una alianza de los proletarios industriales y agrarios. En los Balcanes, las luchas nacional y de clase por el crédito se reforzaron entre sí para producir un populismo radical de clase entre los campesinos. Entre los austro-alemanes, donde el industrialismo estaba muy avanzado y el nacionalismo era sólo centralista, este hecho ayudó a consolidar un socialismo marxista, de corte estatista, entre los trabajadores de la industria. Pero los socialis-

tas austriacos estaban atrapados, como sus camaradas alemanes, en los enclaves urbanos e industriales. En otras partes, los resultados fueron más conservadores. Fuera de Hungría y de Eslovaquia, las reivindicaciones de autonomía nacional debilitaron el conservadurismo clerical y aristocrático, pero los campesinos permanecieron por lo general al margen del populismo radical de clase a causa del nacionalismo. Junto con la burguesía urbana y la pequeña burguesía, se desplazaron hacia el populismo de centro y de derecha. Su posterior alianza con el antisemitismo habría de producir resultados lamentables.

Las monarquías débiles: Rusia y Escandinavia

Incluyo Dinamarca, Noruega y Suecia en mi análisis porque desarrollaron las alianzas de mayor éxito del siglo XX entre los campesinos y los socialistas urbanos. Aunque la economía fue distinta en los tres países, las políticas se asemejaron, ya que numerosos campesinos se desplazaron a la izquierda y hacia las alianzas, primero con elementos liberales de la burguesía, luego, con los trabajadores. En todos ellos la nobleza terrateniente presentaba una relativa debilidad, que acabó siendo importante porque liberó a las clases agrarias de los fuertes controles segmentales. Los campesinos más ricos contaron, por lo general, con derechos políticos colectivos, que, al fin y al cabo, se extendieron también a los campesinos más pobres durante todo el siglo XIX. Cuando Noruega alcanzó la independencia en 1905, los tres países se encontraban bastante centralizados y eran homogéneos en el plano étnico y religioso. Su destino común parece el producto de regímenes estatales semejantes, y se explica mejor por las alianzas políticas que por sus respectivas económicas. Tanto la política urbana como la rural cristalizó en democracias de partidos y centralización nacional.

Dos cuestiones, una política y otra económica unieron a los campesinos con los liberales de las ciudades y, después, con los trabajadores. En primer lugar, muchos pequeños propietarios eran librecambistas, «liberales» en el sentido decimonónico. En Dinamarca se debió al éxito de su ganadería y sus productos lácteos en los mercados internacionales. Los liberales urbanos y los socialistas daneses apoyaron también las libertades legales para los arrendatarios de pequeñas granjas, que formaban un grupo importante de campesinos-

obreros. El campesinado noruego apoyó el libre comercio porque esto significaba libertad para los mercados internos y ausencia de impuestos por parte de los Estados extranjeros que los gobernaron hasta 1905. Los granjeros suecos, ricos o pobres, fueron más proteccionistas. Con todo, poco conflictos sectoriales separaron al campesinado de los trabajadores de la industria urbana en Escandinavia, al contrario que en el resto de Europa. La industrialización sueca y danesa (igual que la francesa) se caracterizó por su dispersión territorial, lo que favoreció el contacto entre ambos sectores, precisamente porque no se concentró en guetos urbanos.

En segundo lugar, los campesinos se aliaron con los liberales urbanos para luchar por la ciudadanía política contra las noblezas terratenientes y las monarquías, relativamente débiles. Los liberales suecos procedían sobre todo de las iglesias libres (disidentes) y de los movimientos contra el alcoholismo. Sus contactos con los campesinos con propiedades se produjeron a través de su patrocinio de programas de educación nacional. Cuando creció la clase obrera, parte de la clase media urbana en expansión, que se había desplazado a la derecha, se opuso a la extensión de la democracia. Pero lo que quedaba de los liberales y los campesinos con pequeñas propiedades establecieron alianzas democráticas con los partidos socialistas obreros. Puesto que se trataba de países centralizados y luteranos, los socialistas se sintieron atraídos al principio por las versiones estatistas del socialismo, muchos de ellos por las posiciones marxistas, pero las alianzas con el liberalismo urbano y el radicalismo agrario diluyeron su ortodoxia productivista (el socialismo danés nunca la sostuvo). Los socialdemócratas suecos, por ejemplo, cambiaron el programa Erfurt que habían tomado de los socialdemócratas alemanes para desterrar las alusiones a la revolución violenta.

De modo que se desarrolló una política tripartita: los capitalistas urbanos y rurales y gran parte de la clase media formaron partidos conservadores; los campesinos y una minoría de la clase media formaron partidos radicales y liberales; y los trabajadores (manuales primero y de cuello blanco después) se hicieron socialdemócratas. Las alianzas pragmáticas entre los dos últimos grupos consiguieron el primer triunfo electoral que condujo a la formación de la única izquierda que conoció el éxito en la civilización moderna, la socialdemocracia escandinava (Munch, 1954; Semmingsen, 1954; Holmsen, 1956; Kuuse, 1971; Osterud, 1971; Kuhnle, 1975; Thomas, 1977; Castles, 1978; Stephens, 1979: 129 y 139; Duncan, 1982; Esping-Ander-

sen, 1985; y Rueschemeyer, Stephens y Stephens, 1992: Capítulo 4)[2]. Las clases agrarias no eran intrínsecamente socialistas, pero sus intereses sectoriales, de crédito y, sobre todo, los de la ciudadanía política las desplazaron a la izquierda.

Hasta aquí la política campesina se ha centrado en las amenazas económicas a la propiedad agrícola; y el activismo campesino, en la democracia de partidos y la cuestión nacional. Rusia representa una desviación, porque la carencia de todas estas condiciones creó un campesinado revolucionario; allí la fusión de reivindicaciones políticas y económicas tuvo un carácter distinto y único.

Como indica el capítulo 18, la monarquía dinástica y autocrática rusa no comenzó a plantearse la democracia de partidos hasta después de 1905, y aun así con gestos insignificantes. La oposición al régimen procedía ahora de los movimientos urbano-industriales y regional-nacionales por la representación. El Estado parecía fuera del alcance de los campesinos. Sin embargo, nos faltan datos sobre el nacionalismo disidente dentro del Imperio ruso y sobre los campesinos de las minorías nacionales, que quizás, como su iguales partidarios de la descentralización en otros países, tuvieron un compromiso político mayor de lo que se pretende. Pero los nobles los dominaban a través de los *zemstvos,* unidades gubernamentales de carácter local creadas en 1864, en tanto que en los pueblos pequeños aún estaban vigentes los históricos *mir* o comunas igualitarias. Como en la Francia anterior a la revolución, los nobles se encontraban ausentes de la mayoría de los pueblos.

La emancipación de los siervos de 1862 no dio a los campesinos la autonomía. La vinculación a la tierra se mantuvo de muchas formas y sofocó la productividad agraria (para los campesinos rusos véase Pavlovsky, 1930; Robinson, 1932; Volin, 1960; Wolf, 1969; Shanin, 1972, 1985; Haimson, 1979; y Skocpol, 1979). Al contrario que en Austria-Hungría, la abolición de la servidumbre produjo pocas haciendas comerciales de gran tamaño. La depresión agrícola y la caída de los precios forzaron a los nobles a vender o alquilar sus tierras a los campesinos sedientos de ellas. Pero el campesino tuvo que comprar

[2] Estas generalizaciones se adaptan mejor a Noruega que a Dinamarca o Suecia. En Noruega una economía más dividida en sectores y un pueblo más variado en el terreno lingüístico produjeron fundamentalismos regionales y religiosos y un socialismo marxista. Hasta 1935 el DNA (la socialdemocracia) no abandonó el marxismo y se alió con los campesinos.

su emancipación con pagos, rentas y adquisiciones de tierras. La rápida industrialización patrocinada por el régimen produjo un aumento de impuestos y aranceles y, por tanto, de los precios. Esto obligó a los campesinos a vender sus productos en los mercados, y a los mercados a exportar para pagar las importaciones industriales y los préstamos extranjeros. La presión económica mermó el número de vacas y bueyes y obligó a agotar la tierra (generalmente de poca calidad) con el sistema tradicional de cultivo que no dejaba campos en barbecho. Los *mir* se polarizaron entre campesinos ricos *(kulaks)* y una gran mayoría de pobres. La mayor parte poseía poca tierra fértil para alimentarse, generar un excedente para el mercado y pagar un variado conjunto de impuestos estatales. Los planes de modernización del régimen sólo sirvieron para agravar su crítica situación y politizarlos.

En 1905, con el Estado marginado por la derrota bélica, los campesinos manifestaron sus quejas en el plano local. La insurrección nació contra los terratenientes y la administración del gobierno local. La mayor parte de las huelgas rurales, los ataques contra la propiedad y las confiscaciones de tierras de 1905 iban dirigidos contra los grandes propietarios, especialmente en la región central de las tierras negras y en las pocas zonas donde las grandes haciendas capitalistas habían desplazado a los campesinos. El apoyo más consistente llegó de las filas de los campesinos medios y de los más jóvenes, expuestos a las ideas revolucionarias por su trabajo en la ciudad (Perrie, 1972: 127; Wolf, 1979). Reivindicaban la redistribución de la tierra y la abolición o reducción de rentas, impuestos y servicios obligatorios. La violencia no se dirigió contra los *kulaks,* porque éstos trabajaban las tierras que poseían, al contrario que la baja nobleza. La ideología campesina, resumida en el lema «la tierra para quien la trabaja», impidió la división en facciones. Fue una sublevación *campesina,* en la que la agitación política exterior no tuvo éxito y los ataques se organizaron con frecuencia en los propios *mir* (Walkin, 1962; Perrie, 1972).

La revolución de 1905 fue reprimida, pero el régimen, alarmado, instauró una Duma limitada. El régimen y los terratenientes de la nobleza comprendieron entonces el peligro que encerraba el mundo agrícola. Se abolieron los pagos para redimir la servidumbre; los terratenientes redujeron las rentas y continuaron vendiendo las haciendas. En vista de que las reivindicaciones campesinas continuaban, tanto en la Duma como a través de acciones violentas, el régimen cambió de dirección. Revocó la mayor parte de las reformas políticas,

retiró a los campesinos la representación en la Duma y elaboró las reformas agrarias de Stolypin en un intento de introducir a los campesinos ricos en la agricultura capitalista.

Stolypin faccionalizó las comunas induciendo a los campesinos a «separar» de éstas sus títulos de propiedad. Los más ricos obtuvieron ventajas y los más pobres se «separaron», vendieron sus pequeñas parcelas y emplearon el dinero en emigrar a las ciudades o al extranjero. La mayoría, formada por campesinos medios, preferían que la comuna se conservara como un todo y se opusieron a la separación. Este conflicto interno, generado por el Estado, evitó que las pequeñas propiedades se consolidaran en explotaciones privadas más grandes. La comuna unía a los campesinos individuales y constituía una poderosa fuente de acción colectiva. Los campesinos medios veían con buenos ojos la expropiación de las tierras de la nobleza, incluso su nacionalización, pero no deseaban reorganizarlas ni según el modelo capitalista ni conforme al colectivismo bolchevique. La comuna local era su ideal. Cuando el régimen la atacó se desencadenó la furia de 1917.

La representación temporal de la Duma, posteriormente abolida, afectó en profundidad a la política campesina (Haimson, 1979; Vinogradoff, 1979). Los campesinos entraron ahora en contacto con los partidos políticos de izquierdas. La exclusión común de ambas clases las arrojó a la ideología izquierdista, tal como hemos visto en otros países. Mencheviques y bolcheviques se encontraban limitados por su concepción marxista ortodoxa de las relaciones de producción, pero el partido socialrevolucionario, que tenía un concepto más weberiano de las clases, en función del crédito y la distribución de la renta, representó un papel muy importante en la revolución de 1917 a través de sus asociaciones agrarias. El régimen volvió a desmoronarse una vez más, como en 1905, con la derrota de la guerra y el fracaso administrativo; como en 1905, la insurrecciones campesinas fueron decisivas para el proceso revolucionario; como en 1905, los campesinos medios tomaron la delantera; y como en 1905, la base de los desórdenes fue la reivindicación de la tierra.

La causa del movimiento campesino ruso ha de atribuirse a su exclusión prácticamente total, junto con la clase obrera, de la ciudadanía, y a la interferencia del régimen en su situación económica local. La mayor parte de ellos no eran propietarios independientes, pero tampoco querían serlo. Su demanda de tierra y de gestión comunitaria no se generó en la inseguridad que produjo la modernización ca-

pitalista, como sostienen Wolf y Jenkins, sino en la experiencia negativa de un capitalismo autocrático que no les reportó ningún beneficio. Al contrario que en otros países, la agricultura capitalista no tuvo éxito en Rusia, ni siquiera en las grandes haciendas. Sólo el campesinado ruso se resistió a la modernización, reivindicando sólo tierra, oponiéndose a romper los fuertes vínculos comunales, tanto antes como después de 1917. El campesinado ruso quería mantenerse al margen de la política, pero el régimen le empujó a defenderse con la revolución.

Conclusión

Hasta aquí hemos comprobado la complejidad de la política agraria. El problema no reside ni en los grandes hacendados, uniformemente conservadores, ni en los campesinos sin tierra, cuyas actitudes políticas variaban conforme a su habilidad para liberarse de los controles segmentales. Los campesinos propietarios, muchos de ellos de pequeñas parcelas, plantean el mayor problema teórico, como ya ocurrió para la política contemporánea. Poseían un fuerte sentido de su identidad colectiva y se organizaron con eficacia para defender sus intereses, prácticamente lo opuesto al «saco de patatas» de Marx. En sí mismos no fueron ni conservadores (como sostienen Marx, Moore, Paige y Stinchcombe) ni revolucionarios (como defienden Wolf, Brustein y Judt). La mayor parte de sus reivindicaciones económicas constaban de un reformismo moderado en el que se mezclaban las clases en función del crédito de Weber con intereses sectoriales. La clase definida por la producción sólo apareció entre ellos cuando predominaron el arriendo y la aparcería y encontraron espacio para organizarse. El conflicto de clase entre deudores y acreedores aumentó a medida que la agricultura se comercializaba, reforzado por las divisiones sectoriales, ya que muchos acreedores pertenecían a la clase capitalista urbana. En ese caso, la clase capitalista fue su principal adversaria.

Pero los campesinos fueron, por lo general, reformistas que buscaban una intervención estatal concreta contra los mercados internacionales no regulados, dominados por el gran capital. Fuera de Rusia, las reivindicaciones se asemejaban, generalmente se referían a la subida de aranceles, y siempre a la reducción del coste del crédito, el transporte y los productos manufacturados, al acceso equitativo a la

tierra y a la protección legal de la pequeña propiedad. Pero junto a esto, los campesinos, como casi todas las clases agrarias, miraban con desconfianza a los Estados centrales y preferían evitarlos. Sólo en la esfera de la educación, aunque ni siquiera de forma regular, aceptaron de buen grado los braceros y los agricultores el aumento de las funciones civiles del Estado de finales del siglo XIX. El suyo no fue un socialismo reformista, aunque reivindicaran una intervención estatal limitada con miras a la redistribución. La identidad y los intereses colectivos de los campesinos manifestaban una profunda ambigüedad, mayor incluso que la de los trabajadores.

De este modo, los movimientos reformistas abarcaron gran parte del espectro político, desde la izquierda hasta la derecha. Las variaciones no dependieron principalmente de factores económicos, como afirman la mayoría de los autores. En realidad, la importancia de éstos, como hemos visto en Francia y Escandinavia, fue menor que la de las cristalizaciones políticas. La política de los campesinos se generó sobre todo a partir de su inserción en las luchas nacionales y representativas por la ciudadanía. Estos hechos los introdujeron en las dos grandes luchas de clases de la política urbana e industrial, la que enfrentó al liberalismo burgués contra el conservadurismo de los terratenientes del antiguo régimen, y la que enfrentó al capital con el trabajo. Pero también se vieron envueltos en las disputas sobre la naturaleza «nacional» y centralizada del Estado. Su dispersión territorial los llevó a respaldar a menudo los movimientos descentralizadores local-regionales.

La importancia de las distintas iglesias no respondía a un mayor sentimiento religioso de los campesinos, aunque la religiosidad estuvo en vanguardia de los principales movimientos agrarios, sino al interés común de algunas iglesias y poblaciones rurales en un Estado confederal relativamente descentralizado, lo que, como vimos en el capítulo 18, fue también el caso de la política obrera. Las políticas campesinas en materia regional y religiosa (y en algunos casos «nacional», como en Austria) se entrelazaban, dando estructura política a las distintas identidades e intereses que nacieron de la comercialización global de la agricultura. Esto los hizo ambivalentes en relación con las funciones civiles del Estado, que en este periodo se centraban en la provisión estatal o la regulación de la enseñanza de las masas.

Los campesinos formaron a veces la mayoría política, pero la restricción de los sufragios y de la soberanía parlamentaria les impedía siempre la conquista de un poder correlativo. Entonces se eviden-

ciaba la necesidad de establecer una o más de las cuatro principales alianzas sectoriales o de clase: con los liberales burgueses, los conservadores del antiguo régimen, los capitalistas o la clase obrera. En varios países y regiones se aliaron con los cuatro grupos; en el norte de Alemania, con los conservadores del antiguo régimen, y luego con los capitalistas; en Suecia, con los burgueses liberales, y luego con la clase obrera; en Francia se dieron las cuatro alianzas; y en otros países y regiones, distintas combinaciones de ellas. Parece que los campesinos podían establecer alianzas con casi todos los grupos sociales, un tercer factor que, junto a su número y tendencia a la moderación pragmática, explica por qué constituyeron el voto oscilante decisivo durante todo el periodo.

¿Por qué eligieron —o se vieron impulsados a elegir— una alianza y no otra? La definición de la clase en función del crédito, de la identidad sectorial o de los adversarios era muy elástica. En algunos casos fueron los adversarios y los aliados quienes eligieron. La clase obrera industrial constituía un aliado problemático, pues, aunque compartía el mismo adversario: el capitalismo empresarial, sus reivindicaciones no solían ser idénticas, salvo en lo referente a la conscripción y la reducción de los impuestos. Algunas reivindicaciones campesinas entraban en conflicto con las de los obreros, por ejemplo, los aranceles, la reducción de los impuestos sobre la tierra y la elevación de los precios agrícolas. Más a menudo, fueron sencillamente distintas. Los movimientos de izquierda y derecha en el mundo urbano e industrial olvidaron a menudo que los campesinos compartían sus intereses. Los conservadores se equivocaron al suponer que les bastaba con manipular sus formas tradicionales de control segmental, porque los campesinos propietarios raras veces aceptaron la imposición sin pedir algún beneficio a cambio. El descuido de los partidos de izquierdas se comprende peor, ya que habrían podido tener más atractivo para el campesino del que realmente tuvieron, y, sin duda, se habrían establecido más alianzas entre los campesinos y los obreros, pero la izquierda estaba cegada por su experiencia en los guetos industriales de las ciudades y concentrada en las necesidades mutualistas de los sindicatos y en el debate de los distintos socialismos productivistas.

La culpa mayor hay que achacarla a los partidos marxistas, los socialdemócratas alemanes y los socialistas austriacos. Su productivismo, que he analizado en los capítulos 15 y 17, no fue sólo académico, tuvo también consecuencias prácticas. Su concepción del

desarrollo social se centraba exclusivamente en la industria. Creían que la agricultura estaba en decadencia y que los campesinos habían entrado en un proceso de proletarización. Ni siquiera las teorías más pragmáticas, como las de Lenin o Kautsky, pudieron superar este prejuicio. Dos hechos habían generado en los partidos marxistas un socialismo de corte estatista: la naturaleza autoritaria de la producción industrial y su exclusión de la ciudadanía en los Estados autoritarios. Pero tales ideas carecían de interés para las poblaciones rurales. La mayor parte de los campesinos apoyaban la constitución de Estados descentralizados o confederales. Tanto en el este como en el oeste, los trabajadores rechazaron el socialismo estatista al mismo tiempo que los campesinos le daban la espalda mucho antes de finales del siglo XX.

El movimiento obrero cometió en este punto su mayor error. La clase obrera quedó desarmada en todas partes, y, salvo en Gran Bretaña, se convirtió en una minoría. Nada podía contra sus adversarios de clase sin el apoyo del campesinado, pero las ideologías productivistas y estatistas bloquearon la alianza, y con ello la clase obrera perdió la oportunidad de llevar a cabo un cambio revolucionario. Sin los campesinos, los obreros progresaron poco durante los cincuenta años posteriores —hasta que realmente disminuyó el número de agricultores y se les pudo ignorar sin riesgo, al estilo británico—, pero entonces era ya demasiado tarde. Lo que quedó para la revolución proletaria del siglo XX se resume en el enorme y grosero oportunismo de Lenin y Stalin, en su manipulación de la rebeldía nacional y campesina contra el militarismo y la autocracia centralista, que ellos subordinaron al marxismo estatista, productivista y, más tarde, autoritario.

Sin embargo, en otros lugares se produjeron distintos desarrollos. En Escandinavia, el territorio checo y algunas partes de Francia, se logró establecer alianzas entre los campesinos y los obreros, debido a circunstancias muy especiales. En primer lugar, estos Estados fueron nacionales relativamente pronto; no se produjeron movimientos confederales o descentralizadores entre la población rural (es decir, entre los checos por debajo del nivel de la dieta provincial-nacional). En segundo lugar, en Suecia, Dinamarca y Francia la industrialización se extendió también por el campo. No hubo una separación completa de los sectores urbano-industriales y rural-agrarios, por el contrario, ambos se interpenetraban dentro de cada casa. En Suecia y Dinamarca, este hecho estimuló un concepto difuso de ciudadanía social que en estos casos encabezaron socialistas no marxistas; en Francia,

produjo una fuerte división en facciones ideológicas. En ninguno de estos países se formaron dos movimientos independientes, por un lado el de los trabajadores de la industria, y por otro el de los campesinos. Este resultado no habría sido imposible en otras partes, donde también se expusieron argumentaciones contrarias al estatismo y al productivismo, pero se vieron abocados al fracaso. Los movimientos obreros, como los antiguos regímenes, cometieron errores desastrosos y perecieron allí donde otros aprendían y se adaptaban, pero cuando eran los revolucionarios quienes cometían fallos, lo pagaban a menudo con su vida.

Así pues, los errores de la derecha y sobre todo de la izquierda cambiaron los resultados. Cuando los campesinos no encontraban un partido que se ajustara a ellos creaban el suyo propio, como hicieron los populistas americanos (sin éxito) y varios grupos austro-húngaros (algunos con bastante éxito). Alternativamente, otros partidos más duchos, como el centro católico alemán, los socialdemócratas suecos (a la larga) y los partidos franceses rivales entre sí, comprendieron la importancia del apoyo campesino (especialmente cuando se ampliaban los sufragios) y modificaron sus plataformas para conquistar su voto.

Las cuestiones económicas, aunque motivadoras en primera instancia de la acción política, no solían decidir la política de los campesinos. Por el contrario, fueron las cristalizaciones de los distintos Estados en que los campesinos luchaban por sus intereses las que explican los distintos tonos que adoptó el conflicto en el campo. No pretendo afirmar que la política decida sin más la lucha de clases, sino ponderar, en última instancia, las variables económicas frente a las políticas. Los resultados estarían, pues, determinados por (1) las *semejanzas* de clase y de intereses sectoriales que, bajo el influjo de la comercialización global, esencialmente idéntica, producida por capitalismo, interactuó con (2) cristalizaciones políticas muy *distintas* respecto a las cuestiones nacional y representativa, conectando a los campesinos con los regímenes y las alianzas de partidos de formas muy diversas. Lo que resulta sorprendentemente parecido a las conclusiones que ya habíamos establecido para la lucha de clases en el ámbito industrial.

Bibliografía

Anderson, P. 1974: *Lineages of the Absolutist State.* Londres: New Left Books.
Bairoch, P. *et al.* 1968: *The Working Population and Its Structure.* Bruselas: Éditions de l'Institut de Sociologie de l'Université Libre.
Barral, P. 1968: *Les Agrariens Français de Méline à Pisan.* París: Librairie Armand Colin.
Berger, S. 1972: *Peasants Against Politics.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Blackbourn, D. 1977: «The Mittelstand in German society and politics, 1871-1914». *Social History,* núm. 4.
— 1984: «Peasants and politics in Germany, 1871-1914». *European History Quarterly,* 14.
Bois, P. 1960: *Paysans de l'Ouest.* Le Mans: Vilaire.
Boyer, J. W. 1981: *Political Radicalism in Late Imperial Vienna.* Chicago: University of Chicago Press.
Brenner, R. 1976: «Agrarian class structure and economic development in preindustrial Europe». *Past and Present,* núm. 70.
Bruchey, S. 1965: *The Roots of American Economic Growth, 1607-1861.* Nueva York: Harper & Row.
Brustein, W. 1988: *The Social Origins of Political Regionalism: France, 1849-1981.* Berkeley: University of California Press.
Buck, S. 1913: *The Granger Movement.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Burbank, G. 1976: *When Farmers Voted Red.* Westport, Conn.: Greenwood Press.
Burnham, W. 1974: «The United States: the politics of heterogeneity». En *Electoral Behavior: A Comparative Handbook,* ed. R. Rose. Nueva York: Free Press.
Castles, F. 1978: *The Social Democratic Image of Society.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Conze, W. 1969: «The effects of nineteenth-century liberal agrarian reforms on social structure in central Europe». En *Essays in European Economic History, 1789-1914,* ed. Crouzet, Chaloner, y Stern. Londres: Arnold.
Danhof, C. 1969: *Change in Agriculture: The Northern United States, 1820-1870.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Dovring, F. 1965: *Land and Labor in Europe in the Twentieth Century.* La Haya: Nijhoff.
Duncan, S. 1982: «Class relations and historical geography: the creation of the rural and urban questions in Sweden». *Research Papers in Geography* (University of Sussex), núm. 12.
Dyson, L. 1986: *Farmers' Organizations.* Nueva York: Greenwood Press.
Eddie, S. 1967: «The changing pattern of leadership in Hungary, 1867-1914». *Economic History Review,* 20.

Eley, G. 1980: *Reshaping the German Right: Radical Nationalism and Change After Bismarck.* New Haven, Conn.: Yale University Press.

Esping-Andersen, G. 1985: *Politics Against Markets: The Social Democratic Road to Power.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Farr, I. 1978: «Populism in the countryside: the peasant leagues in Bavaria in the 1890s». En *Society and Politics in Wilhelmine Germany,* ed. Richard J. Evans. Londres: Croom Helm.

— 1986: «Peasant protest in the empire - the Bavarian example». En *Peasants and Lords in Modern Germany: Recent Studies in Agricultural History,* ed. R. Moeller, Boston: Allen & Unwin.

Fine, N. 1928: *Labor and Farmer Parties in the United States, 1828-1928.* Nueva York: Rand School of Social Science.

Fischer, F. W. *et al.* 1982: *Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch.* Vol. I: *Materialien zur Statistik des Deutschen Bundes, 1815-1870.* Múnich: Beck.

Garrier, G. 1973: *Paysans du Beaujolais et du Lyonnais, 1800-1970.* Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.

Gerschenkron, A. 1943. *Bread and Democracy in Germany.* Berkeley: University of California Press.

Goodwyn, L. 1976: *Democratic Promise: The Populist Moment in America.* Nueva York: Oxford University Press.

Grantham, G. 1975: «Scale and organization in French farming, 1840-1880». En *European Peasants and Their Markets,* ed. E. L. Jones y W. N. Parker. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Green, J. 1976: *Grass Roots Socialism.* Baton Rouge: Louisiana State University Press.

Haggard, H. R. 1971: *Rural Denmark and Its Lessons.* Londres: Longman Group.

Haimson, L. 1979: «Introduction: the Russian landed nobility and the system of the third of June, and Conclusion: observations on the politics of the Russian countryside (1905-14)». En *The Politics of Rural Russia,* ed. L. Haimson. Bloomington: Indiana University Press.

Hanak, P. 1975: «Economics, society, and sociopolitical thought in Hungary during the age of capitalism». *Austrian History Yearbook,* 9.

Hicks, J. 1931: *The Populist Revolt.* Minneapolis: University of Minnesota Press.

Hobsbawm, E. 1989: *The Age of Empire.* Nueva York: Vintage Books. [Ed. cast.: *La era del imperio.* Barcelona, Labor, 1990.]

Hohorst, V. G. *et al.* 1975: *Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch.* Vol. I: *Materialien zur Statistik des Kaiserreichs, 1870-1914.* Múnich: Beck.

Holmsen, A. 1956: «Landowners and tenants in Norway». *Scandinavian Economic History Review,* 6.

Hovde, B. 1943: *The Scandinavian Countries, 1720-1865.* Boston: Chapman & Grimes.

Hussain, A. 1981: *Marxism and the Agrarian Question.* Vol. 1: *German Social Democracy and the Peasantry, 1890-1907.* Londres: Macmillan.

Jenkins, J. C. 1986: «Why do peasants rebel? structural and historical theories of modern peasant rebellions». *American Journal of Sociology,* 88.

Jonasson, O. G. 1938: *Agricultural Atlas of Sweden.* Estocolmo. Lantbruks-saellskapets.

Judt, T. 1979: *Socialism in Provence, 1871-1914.* Cambridge: Cambridge University Press.

Kane, A., y M. Mann, 1992: «A theory of early twentieth-century agrarian politics». *Social Science History,* 16.

Kausel, A. 1979: «Osterreichs Volkseinkommen 1830 bis 1913». En *Geschichte und Ergebrisse der Zentralen Amtlichen Statistik in Osterreich 1829-1979. Beitrage zur Osterreichischen Statistik,* 550.

Kautsky, K. 1988: *The Agrarian Question.* Londres: Zwan. (Primera publicación, 1899.)

Kuhnle, S. 1975: *Patterns of Social and Political Mobilization: A Historical Analysis of the Nordic Countries.* Londres: Sage.

Kuuse, J. 1971: «Mechanisation, commercialisation and the protectionist movement in Swedish agriculture, 1860-1910». *Scandinavian Economic History Review,* 19.

Le Goff, T. J. A., y D. M. G. Sutherland, 1983: «The social origins of counter-revolution in western France». *Past and Present,* núm. 99.

Lewis, G. 1978: «The peasantry, rural change and conservative agrarianism: Lower Austria at the turn of the century». *Past and Present,* núm. 81.

Linz, J. 1976: «Patterns of land tenure, division of labor, and voting behavior in Europe». *Comparative Politics,* 8.

Loubère, L. A. 1974: *Radicalism in Mediterranean France, 1848-1914.* Albany: State University of New York Press.

Lyashchenko, P. 1949: *History of the National Economy of Russia to the 1917 Revolution.* Nueva York: Macmillan.

Macartney, C. A. 1969: *The Habsburg Empire, 1790-1918.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.

Malefakis, E. 1970: *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain.* New Haven, Conn.: Yale University Press. [Ed. cast.: *Reforma agraria y revolución campesina.* Barcelona, Ariel, 1982.]

Margadant, T. W. 1979: *French Peasants in Revolt.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Marx, K., y F. Engels, 1968: *Selected Works.* Moscú: Progreso. [Ed. cast.: *Obras escogidas.* Madrid, Ayuso, 1975.]

Medvedev, Z. 1987: *Soviet Agriculture.* Nueva York: Norton.

Merriman, J. 1979: «Incident at the statue of the Virgin Mary: the conflict of the old and the new in nineteenth century Limoges». En *Consciousness and Class Experience in Nineteenth Century Europe,* ed. J. Merriman. Nueva York: Holmes & Meier.

Ministère de l'agriculture, 1897: *Statistique agricole de la France; résultats généraux de l'enquête decennale de 1892.* París.
Moore, B., Jr. 1973: *Social Origins of Dictatorship and Democracy.* Harmondsworth: Penguin Books. [Ed. cast.: *Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia.* Barcelona, Ed. 62, 1991.]
Mouzelis, N. 1986: *Politics in the Semi-Periphery: Early Parliamentarianism and Late Industrialization in the Balkans and Latin America.* Nueva York: St. Martin's Press.
Munch, P. 1954: «The peasant in Norway: a study in class and culture». *British Journal of Sociology,* 5.
Newby, H. 1977: *The Deferential Worker.* Londres: Lane.
Osterud, O. 1971: *Agrarian Structure and Peasant Politics in Scandinavia: A Comparative Study of Rural Response to Economic Change.* Oslo: Universitetsforlaget.
Paige, J. 1976: *Agrarian Revolution.* Nueva York: Free Press.
Pavlovsky, G. 1930: *Agricultural Russia on the Eve of the Revolution.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Pech, S. 1978: «Political parties in Eastern Europe, 1848-1939». *East Central Europe,* 5.
Perkins, J. A. 1981: «The agricultural revolution in Germany, 1850-1914». *Journal of European Economic History,* 10.
Perrie, M. 1972: «The Russian peasant movement of 1905-1907: its social composition and revolutionary significance». *Past and Present,* núm. 57.
Raeff, M. 1966: *Origins of the Russian Intelligentsia: The Eighteenth Century Nobility.* Nueva York: Harcourt, Brace & World.
Robinson, G. 1932: *Rural Russia Under the Old Regime.* Berkeley: University of California Press.
Rokkan, S. 1970: *Cities, Elections, Parties.* Oslo: Universitetsforlaget.
Rosen, E. 1978: «Socialism in Oklahoma: a theoretical overview». *Politics and Society,* 8.
Rothstein, M. 1988: «Farmer movements and organizations: numbers, gains, and losses». *Agricultural History,* 62.
Rueschemeyer, D.; E. Stephens, y J. Stephens, 1992: *Capitalist Development and Democracy.* Chicago: Universit of Chicago Press.
Sandgruber, R. 1978: *Osterreichische Agrärstatistik, 1750-1918.* Munich: Oldenbourg.
See, H. 1929: *Equisse d'une Histoire Economique et Sociale de la France.* París: Alcan.
Semmingsen, I. 1954: «The dissolution of estate society in Norway». *Scandinavian Economic History Review,* 2.
Shanin, T. 1972: *The Awkward Class.* Oxford: Clarendon Press. [Ed. cast.: *La clase incómoda. Sociología política del campesinado en una sociedad.* Madrid, Alianza, 1983.]

— 1985: *Russia as a «Developing Society»: The Roots of Otherness - Russia's Turn of the Century.* Vol. I. Londres: Macmillan.
Sked, A. 1989: *The Decline and Fall of the Habsburg Empire, 1815-1918.* Londres: Arnold.
Skocpol, T. 1979: *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China.* Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, J. H. 1975: «Work routine and social structure in a French village: Cruzy in the nineteenth century». *Journal of Interdisciplinary History,* 3.
Sorokin, P. A. *et al.* 1930: *A Systematic Source Book in Rural Sociology.* Minneapolis: University of Minnesota Press.
Stephens, J. 1979: *The Transition from Capitalism to Socialism.* Londres: Macmillan.
Stinchcombe, A. L. 1961: «Agricultural enterprise and rural class relations». *American Journal of Sociology,* 67.
Thomas, A. 1977: «Social democracy in Denmark». En *Social Democratic Parties in Western Europe,* ed. W. Paterson y A. Thomas. Londres: Croom Helm.
Tilly, C. 1967: *The Vendée,* 3.ª ed. Nueva York: John Wiley.
— 1979: «Did the cake of custom break?». En *Consciousness and Class Experience in Nineteenth Century Europe,* ed. J. Merriman. Nueva York: Holmes & Meier.
Tomasevich, J. 1955: *Peasants, Politics, and Economic Change in Yugoslavia.* Stanford, Calif.: Stanford University Press.
U.S. Census Bureau, 1910: *U.S. Census, 1910.* Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
Vinogradoff, E. 1979: «The Russian peasantry and the elections to the Fourth State Duma». En *The Politics of Rural Russia,* ed. L. Haimson. Bloomington: Indiana University Press.
Volin, L. 1960: «The Russian peasant: from emancipation to kolkhoz». En *The Transformation of the Russian Peasantry,* ed. C. Black. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Walkin, J. 1962: *The Rise of Democracy in Pre-revolutionary Russia.* Nueva York: Praeger.
Weber, E. 1978: *Peasants Into Frenchmen.* Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Weber, M. 1978: *Economy and Society.* Berkeley: University of California Press.
Wolf, E. 1969: *Peasant Wars of the Twentieth Century.* Nueva York: Harper & Row.

Capítulo 20
CONCLUSIONES TEÓRICAS: CLASES, ESTADOS, NACIONES Y FUENTES DEL PODER SOCIAL

Este volumen tendrá dos capítulos concluyentes. Éste, el primero de ellos, comienza donde se suspendió el capítulo 7, en la generalización sobre el surgimiento de los dos actores principales del mundo moderno —las clases y los Estados-nación— y de las cuatro fuentes principales del poder social durante el periodo. Puesto que los países que analizo aquí (Austria, Gran Bretaña, Francia, Prusia-Alemania y Estados Unidos) difieren entre sí, me veo obligado a buscar el equilibrio entre la generalización y el conocimiento de los detalles particulares, pero, puesto que con la Primera Guerra Mundial la historia estableció su propia conclusión al largo siglo XIX, analizaré en el último capítulo las causas de aquel conflicto, al objeto de ejemplificar y justificar la teoría que he venido sosteniendo en este volumen.

Como ya hemos visto, los Estados se entrelazaron con las clases y las naciones, pero no resumiré aquí de nuevo mis indagaciones sobre aquéllos, para las que remito al lector a la conclusión del capítulo 14, sólo repetiré el punto esencial: cuando el Estado adquirió importancia para la sociedad con la expansión industrial de finales del siglo XVIII y finales del XIX, «naturalizó» parcialmente a todas las clases de Occidente.

Las clases y los Estados

Al estallar la Primera Guerra Mundial, el proceso de industrialización se expandía por todo Occidente. Bélgica y Gran Bretaña ya estaban industrializadas; otros países mantenían un equilibrio irregular entre la industria y la agricultura; y esta última se comercializó por completo. El capitalismo aceleró enormemente los poderes colectivos humanos, sobre todo de forma difusa, a través de esta civilización de múltiples actores de poder. En la segunda oleada industrial, a partir de la década de 1880, mejoraron las condiciones materiales de todas las clases y de los dos sexos, se conquistó la subsistencia y prácticamente se duplicó la esperanza de vida. Aunque desigualmente distribuidos, los beneficios se ampliaron de tal manera que la mayor parte de los actores de poder aceptaron que las instituciones del poder autoritario apoyaran la expansión capitalista. Aumentaron las funciones civiles del Estado, y la burocratización de éste se desarrolló en paralelo al capitalismo de forma semejante en todo Occidente.

El capitalismo transformó también las relaciones del poder distributivo en todos los países y generó clases políticas y extensivas a una escala desconocida en la historia. Surgieron entonces la burguesía, la pequeña burguesía y, posteriormente, la clase media, la clase obrera y la clase campesina, todas ellas clases no dominantes con mayores poderes autoritarios de organización colectiva. No obstante, y a pesar de los beneficios conseguidos, todas ellas se sintieron explotadas por las clases dominantes y los regímenes políticos, y todas se manifestaron colectivamente en busca de alternativas. Marx y otros observadores lo comprendieron, pero no fue menos evidente para los regímenes y las clases dominantes. Sin embargo, los resultados del conflicto distributivo no cumplieron las expectativas de Marx debido a cuatro razones:

1. Puesto que el capitalismo fue predominantemente una organización de poder difuso, su organización autoritaria de clase resultó ambivalente desde el principio. Las burguesías, las pequeñas burguesías y las clases medias eran económicamente heterogéneas. Cuando no intervenían las restantes fuerzas del poder social, sus conflictos con los regímenes y las clases dominantes eran parciales, moderados y particularistas. Durante la primera mitad del periodo se llegó a compromisos, incluso se produjeron mezclas, sin que por ello estallaran situaciones dramáticas. Las clases agrarias, especialmente el cam-

pesinado, evolucionaron con la misma heterogeneidad y generaron tres organizaciones colectivas competidoras entre sí: «clases en función de la producción», «clases en función del crédito» y un sector económico (en alianza segmental con los grandes hacendados, sus adversarios en las otras dos dimensiones). El proletariado también desarrolló tres tendencias organizativas de carácter colectivo: la clase, el seccionalismo y el segmentalismo. Así, el desarrollo económico del capitalismo produjo múltiples organizaciones colectivas, entre ellas, las propias clases, que si bien desarrollaron de forma inherente el conflicto dialéctico que Marx esperaba, no predominaron sobre las demás.

2. Los resultados de la competición entre estas organizaciones económicas se decidieron a causa de las estrategias o derivas de los regímenes y las clases dominantes, organizados de modo más autoritario, quienes, al fin y al cabo, dominaban el Estado y las fuerzas armadas. Cuando éstos se concentraban en la aparición del conflicto entre las clases (lo cual no ocurría siempre, como hemos tenido ocasión de comprobar) elaboraron una contraestrategia defensiva. Como he demostrado ya, allí donde el conflicto entre las clases es relativamente transparente —esto es, donde la lucha se produce frontalmente según el modelo que hizo confiar a Marx en la revolución—, los regímenes y las clases dirigentes emplean con mayor eficacia su inmenso poder institucional para reprimir y dividir al enemigo. Las revoluciones, he sostenido, estallaron cuando los regímenes y las clases dirigentes se sintieron confundidos ante la aparición de múltiples conflictos entrelazados, aunque no dialécticos. En este caso, la estrategia más eficaz del régimen contra el conflicto transparente entre el capital y el trabajo consistía en hacer concesiones a algunos obreros y campesinos a través del segmentalismo y el seccionalismo, al tiempo que reprimía al resto. De esta forma, se evitaba la unidad de clase que requiere toda revolución o reforma agresiva. La aparición simultánea de tres formas de organización obrera menguó la capacidad de la clase porque ésta implicaba la hegemonía sobre los trabajadores, en tanto que las otras dos no.

3. A su vez, las estrategias o derivas de los regímenes y las clases dominantes y, por tanto, de los propios trabajadores, dependían ante todo de las otras tres fuentes del poder social. Remito al lector al capítulo 7, donde resumí los resultados de las luchas económicas hasta las décadas de 1830 y 1840. Allí analicé las fuentes del poder ideológico difuso, pero especialmente las del poder militar y político. Los

capítulos 17 a 19 ofrecen una explicación política de los últimos movimientos obreros y campesinos. Así, hacia 1900, los resultados de la confrontación entre el capital y el trabajo en Occidente estuvieron determinados por (1) una difusión global muy semejante del capitalismo, que generó una común ambigüedad en las organizaciones e intereses colectivos, interactuando con (2) varias cristalizaciones de los Estados autoritarios, la ideológica, la militar, la patriarcal y, especialmente, sus dos cristalizaciones relativas a la ciudadanía, la cuestión «representativa» y la cuestión «nacional».

4. Pero tales influencias mutuas no se producen entre objetos separados, como el choque de las bolas de billar. Las clases, los segmentos y las secciones se «entrelazan de forma no dialéctica» con las cristalizaciones políticas autoritarias, y así se configuran unas a otras. La identidad y los intereses de los actores cambiaron sin que lo percibieran sus protagonistas, a causa de las consecuencias imprevistas de sus actos. En este clima inseguro, los actores eran propensos a cometer «errores sistémicos». En el capítulo 6 vimos que el régimen francés de 1789 cometió errores desastrosos porque no supo apreciar la aparición y el desarrollo de su enemigo. En el capítulo 15 he ilustrado lo contrario. De forma bastante insólita, las clases dominantes que controlaban el Estado se vieron enfrentadas «dialécticamente» a un oponente de clase, bastante homogéneo, el cartismo. Esta vez no cometieron errores, reprimieron con firmeza a sus militantes y empujaron a los trabajadores con mayores poderes en el mercado hacia el seccionalismo. En los últimos capítulos hemos comprobado la persistencia histórica de los errores del exceso de productivismo y de estatismo en los movimientos obreros, bajo la influencia de la ideología marxista o de la religión luterana, incapaces de apreciar la complejidad característica de las luchas agrarias, que acabaron por granjearse la enemistad de quienes habrían debido ser sus aliados potenciales.

Estos cuatro hechos determinantes no son independientes entre sí, sino que se entrelazan y se configuran mutuamente. La importancia de las estrategias-derivas del régimen, de las luchas ciudadanas por la nación y la representatividad, de consecuencias imprevistas, y de los errores dependió siempre de la forma en que reforzaron la identidad de clase, segmental o seccional, según el contexto. El segmentalismo, el seccionalismo y la clase continuaron luchando por la voluntad de los trabajadores y los campesinos. Según sus relaciones con los medios de producción, la batalla se produjo en la industria y la agri-

cultura en términos profundamente ambivalentes, sin resultados decisivos durante el periodo. Como es natural, un segmentalismo y un seccionalismo persistentes minaron la unidad que necesitaba la acción de clase. En un mundo capitalista sin Estados esto habría debilitado permanentemente al trabajo en relación con el capital, y casi con certeza habría impedido la revolución e incluso las reformas profundas. Pero el capitalismo habitaba en un mundo de Estados, y en este periodo las tendencias ambivalentes hacia las organizaciones seccionales, segmentales o de clase se vieron impulsadas o frenadas, a menudo sin intención, por las cristalizaciones políticas representativa y nacional, en especial cuando afectaron a las alianzas entre la clase obrera y el campesinado. Ni las clases eran puramente económicas, ni los Estados puramente políticos.

El capitalismo y el industrialismo se han sobreestimado. Sus poderes difusos excedían sus poderes autoritarios, de ahí que se apoyaran más en las organizaciones de poder político y militar, que, a su vez, configuraron ambos fenómenos. Aunque tanto uno como otro aumentaron los poderes colectivos, los distributivos —la estratificación social— se vieron menos alterados. Las relaciones de clase modernas se galvanizaron a través de la primera y la segunda revoluciones industriales y de la comercialización global de la agricultura, pero se vieron lanzadas por caminos intrínsecamente ambiguos, cuyos variados resultados estuvieron determinados por las cristalizaciones políticas autoritarias, que habían sido institucionalizadas desde mucho antes.

¿Por qué eran ya tan distintos los Estados? Charles Tilly nos recuerda que los Estados europeos adoptaron formas distintas durante el periodo medieval: monarquías territoriales; redes elásticas de relaciones personales entre el príncipe, el señor y el vasallo; Estados de conquista; Ciudades-Estado; Ciudades-Estado eclesiásticas; ligas de ciudades; comunas; etc. Y aunque traza la decandencia de los distintos tipos de Estados a comienzos de la edad moderna, momento en el que se estabilizaron los Estados territoriales, restaba aún una gran variedad. La fragmentación del cristianismo no hizo otra cosa que añadir una mayor variedad religiosa. Los Estados se diferenciaban sobre todo por las relaciones entre las regiones y la capital. En 1760 la Gran Bretaña anglicana constituía un Estado moderadamente homogéneo y centralizado, que absorbió a Escocia, Gales y el regionalismo inconformista, pero tenía una colonia imperial adyacente, la católica Irlanda. Francia, no menos católica, tuvo una monarquía muy centrali-

zada, cuya relación con las regiones presentaba un carácter altamente particularista (que también cae dentro de dos tipos constitucionales distintos). La Prusia luterana era un Estado compacto, que integraba tanto a la monarquía como a la nobleza de la región dominante. Austria, católica, constituía una monarquía confederal, formada de minorías regionales, religiosas y lingüísticas. América constaba de una serie de colonias en expansión y separadas entre sí. Es decir, las diferencias entre los Estados eran enormes. Los Estados eran territoriales y los territorios están configurados de formas muy particulares.

Las economías agrarias reforzaron la particularidad territorial, en tanto que las economías industriales la debilitaron. Hoy en día, en una sociedad industrial avanzada o postindustrial, las distintas actividades económicas de Francia, Alemania o Gran Bretaña se parecen mucho porque las economías modernas transforman reiteradas veces los productos naturales. Pero las economías agrarias dependen de su ecosistema —suelo, vegetación, clima, agua— y estos elementos cambian de una localidad a otra. El ecosistema del agro europeo era sorprendentemente variado en la jerga de los economistas, ofrecía una «cartera dispersa de recursos». Pero con el desarrollo del capitalismo, las economías «nacionales» comenzaron a parecerse (como apunté en el capítulo 14).

El capitalismo representa una forma inusualmente difusa de organización de poder, mientras que los Estados son autoritarios. En su fase industrial, cada vez más liberado de las particularidades territoriales, el capitalismo se expandió por todo Occidente adoptando formas bastante parecidas. Sus poderes difusos permitieron a los actores individuales y colectivos elegir «libremente» estrategias alternativas, dentro de una competencia más incompleta. Los obreros y los empresarios, los campesinos y los hacendados establecieron acuerdos locales que permitieron continuar y competir a las estrategias seccionales, segmentales y de clase. Pero los Estados, por su naturaleza de fuente característica del poder social, las institucionalizaron y las localizaron autoritariamente. Aunque los partidos y las elites estatales podían contestar o reducir la coherencia estatal, las leyes sobre los derechos civiles, el sufragio, la centralización del Estado, la conscripción, los aranceles, los sindicatos, etc. se configuraron autoritariamente.

El Estado moderno fue el primero en institucionalizar las numerosas peculiaridades territoriales de Europa, y se expandió al afrontar dos oleadas de problemas regulatorios, comunes a todos ellos, que

emanaban del creciente militarismo del siglo XVIII y del desarrollo capitalista que se prolongó hasta 1914. Durante este periodo, los Estados se agrandaron, se hicieron relevantes para la sociedad y se «modernizaron». Las formas que adoptaron estas evoluciones ejercieron un fuerte influjo en el desarrollo social. Pero al ampliar sus funciones, el Estado tuvo que enfrentarse también a las instituciones particulares que nacieron en la era más «territorial». En la primera fase de la expansión, de la interacción del militarismo surgieron instituciones «modernizadas» en cada uno de los Estados: América institucionalizó una Constitución única; Francia institucionalizó el conflicto sobre su Constitución; Gran Bretaña, el liberalismo del antiguo régimen; Prusia, el semiautoritarismo; y Austria (con menor éxito) intentó dotar a su dinasticismo de mayores poderes de penetración infraestructural. Los Estados modernos —impulsados por el militarismo del siglo XVIII y el capitalismo industrial del siglo XIX— acentuaron enormemente su significación para la sociedad. Así, el poder estructurador de estas instituciones autoritarias, forjado en la interacción de una época anterior y de una fase militarista, creció igualmente. Hacia la década de 1830, las instituciones políticas de la mayoría de los países se habían consolidado de tal manera que eran capaces de absorber todo lo que la sociedad industrial fuera capaz de generar.

Se produjo entonces un segundo momento dialéctico junto a la lucha de clase marxista, entre lo que he etiquetado como «emergencia intersticial» e «institucionalización». Puesto que la sociedad se compone de múltiples redes de interacción superpuestas, produce continuamente la aparición de actores colectivos, cuyas relaciones con los anteriores no están institucionalizadas en un primer momento. Las clases y las naciones son los actores emergentes por excelencia, que toman por sorpresa a los regímenes y las clases dominantes, quienes, en un primer momento, carecen de instituciones para enfrentarse a ellas directamente, de modo que recurren a las instituciones nacidas con los antiguos fines territoriales. Y aunque los Estados no crecieron en principio para enfrentarse a las clases y las naciones emergentes (sino para luchar en la guerra y, más tarde, para apoyar la industrialización), ampliaron sus instituciones con el objetivo de asumir la mayor cantidad posible de control social. Por eso, determinaron cada vez en mayor medida los resultados de la clase y la nación.

A este propósito, podemos volver sobre un ejemplo extraído de los capítulos 17 y 18: el desarrollo divergente de los movimientos

obreros británico, alemán y estadounidense. Me atengo aquí únicamente a dos formas de poder autoritario, las cristalizaciones representativa y militar del Estado (para un análisis completo véanse los capítulos citados). Gran Bretaña desarrolló durante el siglo XVIII una forma embrionaria de democracia de partidos con el objetivo fundamental de institucionalizar los conflictos religiosos y dinásticos de la «corte» y el «país», pero carecía de un ejército interior eficaz (salvo para Irlanda). De ahí que para hacer frente a las clases medias emergentes dependiera en este caso del Parlamento, que, en efecto, lo hizo. En 1820 Prusia había institucionalizado los conflictos entre nobles y profesionales que acaecían dentro de su ejército y su administración real. Esto también ayudó al régimen a institucionalizar a las clases medias, especialmente cuando el ejército ganó legitimidad convirtiendo a Prusia en Alemania. El régimen alemán empleó con ingenio innovador su limitada democracia de partidos, y esto desplazó a la derecha a sus clases medias. La democracia de partidos americana se creó en principio para institucionalizar las relaciones entre los campesinos pobres y ricos; sus organizaciones militares y paramilitares se desarrollaron para acabar con los indios.

Cuando apareció en escena el proletariado, los regímenes y las clases dominantes de los tres países reaccionaron de formas muy distintas, pero no por «el genio para el compromiso» que supuestamente caracteriza a Gran Bretaña (que en la segunda mitad del siglo recurrió con mayor frecuencia a la represión que al acuerdo), por la naturaleza autoritaria de los alemanes o la esquizofrenia de los americanos, sino porque una inmensa mayoría de los capitalistas y los políticos querían lo mismo en los tres países: preservar el orden y mantener sus privilegios. Mas para cumplir sus propósitos contaban con instituciones autoritarias diversas. Los británicos tenían sufragio y partidos competitivos, cuyas relaciones en las fronteras de la clase habían variado y podían volver a hacerlo, pero carecían de un ejército suficiente. Los alemanes habían institucionalizado una estrategia de partido consistente en la práctica del «divide y vencerás» que excluía a los partidos más radicales, y contaban con un gran ejército cuyas demostraciones de fuerza disfrutaban de una considerable legitimidad entre sus ciudadanos. Los americanos disponían de partidos competitivos, pero también de fuerzas militares y paramilitares expertas en una feroz represión interna. Por tales razones, las distintas instituciones estatales desviaron por caminos también distintos a los movimientos obreros emergentes. Gran Bretaña desarrolló un moderado

mutualismo; Alemania, un encuentro ritualizado entre el capitalismo y el Estado reaccionario, y un marxismo ostensiblemente revolucionario; y los Estados Unidos, el mayor grado de violencia y seccionalismo, y un socialismo escaso.

En todos estos encuentros se transformaron también las instituciones estatales, pero a un ritmo muy inferior al del desarrollo capitalista o al de la aparición de las clases. El modelo teórico apropiado para esta fase de la historia mundial —de difusión compartida de un capitalismo entrelazado con instituciones estatales autoritarias de distinto signo— corresponde a una especie de teoría del «retraso político», que he extraído de la teoría institucional del Estado analizada en el capítulo 3. Las variaciones entre las instituciones estatales fomentaron la aparición de varios «trabajadores colectivos» durante el periodo. Todo esto arroja dudas sobre las teorías según las cuales el desarrollo capitalista produce necesariamente un determinado conjunto de relaciones de poder entre el capital y el trabajo, ya sean marxistas, liberales o reformistas. El trabajador colectivo ha resultado más maleable de lo que todas ellas sugieren, más dispuesto al compromiso con numerosos regímenes (o incapaz de cambiarlos) y más capaz de cristalizar en modos muy variados.

Naturalmente, durante este periodo se institucionalizaron relaciones de clase mucho más diversas que las del reciente capitalismo avanzado, dominado por las democracias de partidos. Los regímenes autoritarios del siglo XX tuvieron un mal fin. La monarquía autocrática y semiautoritaria desapareció como estrategia predominante en Occidente, aunque existen aún regímenes no monárquicos comparables en algunos países en desarrollo. La mayor parte de las teorías occidentales han considerado inevitable esta decadencia de los autoritarismos, ya sea por la «lógica del industrialismo», ya por la «era democrática», ya por la «institucionalización del conflicto de clase», formas variadas de la teoría de la modernización. Las teorías evolutivas han recibido en el siglo XX el impulso de la súbita caída de socialismo autoritario del bloque soviético. Pero, ¿ha existido esa «lógica»? ¿Por qué fracasaron el zarismo y la Alemania imperial? ¿Elaboraron un proyecto de alternativa viable de relaciones modernas de poder a una democracia de partidos? Tales preguntas deberán esperar la aparición del Volumen III, pero cabe establecer una cuestión de partida: puesto que los regímenes autoritarios se sirvieron directamente del militarismo para la regulación de las clases, se mostra-

ron más vulnerables a los fracasos bélicos. Las causas de la Gran Guerra fueron decisivas para apreciar su viabilidad.

La complejidad de las cristalizaciones estatales nos introduce también en la guerra. El control de sus resultados resultó tan difícil para los actores de poder contemporáneos como para nosotros la explicación. Las consecuencias de sus acciones tuvieron a veces un desarrollo no previsto. La lucha de clases —agraria, industrial o ambas cosas al mismo tiempo— no procedió según una lógica pura; en todo momento se entrelazó con las relaciones políticas, ideológicas y militares que, a su vez, contribuyeron a configurar las clases. La situación adquirió mayor complejidad a causa del aumento del militarismo. En el capítulo 21 asistiremos a los primeros momentos de esta desastrosa intervención.

Estados y naciones

En el capítulo 7 he tratado de las tres primeras fases de una teoría de la nación que consta de cuatro. Las fases religiosa y comercial del capitalismo estatista tuvieron lugar antes del periodo que abordo en este volumen; en ellas aparecieron lo que he llamado «protonaciones». Luego, durante la fase militarista, detallada en el capítulo 7, las naciones evolucionaron como actores reales, en parte interclasistas y ocasionalmente agresivos. Pero se manifestaron de tres formas distintas: o bien consolidaron el Estado (por ejemplo, en Inglaterra), o bien crearon el Estado (Alemania) o bien lo subvirtieron (en gran parte de los territorios austriacos). Resumiré ahora la cuarta fase de estas distintas naciones, la *capitalista industrial.*

Durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, la fase industrial del capitalismo, su lucha de clases y su impacto sobre el Estado reforzó a las naciones emergentes. Por primera vez, los Estados asumieron funciones civiles de gran alcance, patrocinaron sistemas de comunicación, canales, caminos, servicios postales, ferrocarriles, sistemas telegráficos y, lo más importante, escuelas, respondiendo así a las necesidades de un industrialismo articulado en primera instancia por la clase capitalista, pero también por otras clases, por los ejércitos y las elites estatales. Todos ellos aceptaron el papel de los poderes colectivos del Estado en la sociedad industrial, por tanto, le exigieron una mayor coordinación social. A su vez, las infraestructuras estatales aumentaron la densidad de la interacción social,

pero la encerraron en los límites de su territorio. Hemos visto que el comportamiento social —incluso el de carácter más íntimo, como las costumbres sexuales— se «naturalizó» y se hizo nacionalmente homogéneo. Aunque en gran parte inconsciente, la actividad del Estado amplió a la nación la experiencia de vida comunitaria, vinculando las organizaciones intensivas y emocionales de la familia y el vecindario a otras organizaciones de poder más extensivas e instrumentales.

La nación no fue una comunidad total. El localismo sobrevivió, como lo hicieron las barreras regionales, religiosas, lingüísticas y de clase dentro de las fronteras nacionales. La comunidad de ideología occidental y el capitalismo global conservaron también la organización transnacional. Puesto que el capitalismo, el Estado moderno, el militarismo, la alfabetización discursiva de masas y el industrialismo aumentaron la densidad social, crearon también nuevas oportunidades de extender la organización nacional y transnacional.

Tampoco faltó la contestación. La nación popular e interclasista implicaba necesariamente una concepción de la ciudadanía (aunque de varios tipos). Pero esto produjo las dos cristalizaciones políticas predominantes del siglo XIX, la cuestión «representativa» —quién disfrutaría de la ciudadanía plena— y la cuestión «nacional», dónde se localizaría la ciudadanía, es decir, cuál habría de ser el grado de centralización de la nación y el Estado. He subrayado en todo momento que la cuestión nacional fue tan importante y tan discutida como la representativa. Pocos Estados comenzaron el periodo con una homogeneidad nacional plena, pues la mayoría de ellos contenían distintas regiones y comunidades lingüísticas y religiosas, y muchas regiones disponían de sus propias instituciones políticas o conservaban la memoria de ellas.

Las fases capitalista-industrial y capitalista-militar de la expansión del Estado intensificaron las cuestiones nacional y representativa. Las consecuencias del aumento del militarismo durante el siglo XVIII, es decir, la conscripción y el sistema fiscal, provocaron un estallido de las reivindicaciones de representación, pero las cristalizaciones de la cuestión nacional abarcaron desde la centralización propugnada por los revolucionarios jacobinos al confederalismo de los disidentes austriacos. A su vez, la posterior fase industrial del capitalismo volvió a incrementar las reivindicaciones nacionales y representativas. La eficacia de la «naturalización» se explica porque se produjo de forma inconsciente, intersticial y, por tanto, no provocó oposición. En ella, una mezcla de emociones y razón instrumental cambió sutilmente la

concepción de las comunidades básicas a las que se siente apegado el individuo normal.

Con todo, se mantuvo la oposición a una de las áreas de la expansión estatal durante la fase industrial del capitalismo. Aunque las infraestructuras estatales se expandieron gracias al consenso, la educación de las masas generó graves conflictos con las minorías religiosas y las comunidades lingüísticas regionales. Allí donde las minorías religiosas se encontraban atrincheradas en el plano regional, se produjo un nacionalismo subvertidor del Estado (como en Irlanda y ciertas zonas de Austria). La expansión de la enseñanza pudo transmitir también un antiestatismo más sutil. La presión de las clases emergentes por la representatividad no permitió a ningún régimen imponer su lengua en aquellas provincias que contaban con una lengua vernácula. La expansión de la enseñanza en la provincia de Bohemia, por ejemplo, lejos de imponer un sentimiento de nación austriaca, produjo un resurgimiento del nacionalismo checo. Por el contrario, en la «gran Alemania» y en Italia, la enseñanza creó un fuerte sentimiento nacional que superó los límites de los pequeños estados. Así, según el contexto, la fase industrial-capitalista de la nación impulsó tres tipos distintos: la nación reforzadora del Estado, la nación creadora del Estado y la nación subvertidora del mismo.

Los conflictos de clase del capitalismo avivaron también estos tres tipos de nación, siempre conforme a las circunstancias locales. La clase media, los campesinos y los obreros se alfabetizaron en las lenguas vernáculas, y, de nuevo según el contexto, o bien naturalizaron el Estado existente o bien lo fragmentaron en naciones regionales de carácter popular (fragmentadoras del Estado), o bien en naciones interestatales (creadoras de Estado). Estas clases reivindicaron la representación política, de nuevo, con las mismas consecuencias alternativas. Pero a finales del siglo XIX, las naciones populares —de los tres tipos— movilizaron a la clase media, al campesinado y a la clase obrera en todos los países europeos.

En esta fase, las naciones se hicieron más apasionadas y agresivas. El apasionamiento se explica porque la intervención estatal en la educación y las infraestructuras sanitarias, educativas y morales aumentó los vínculos entre el Estado y la esfera más intensiva y emocional, la familiar y comunitaria. Las ideologías encontraban en la nación un padre o una madre, una especie de continuidad de la casa familiar. La agresividad se gestó en la cristalización militarista de los Estados; en el plano geopolítico para todos los casos; en el nacional, para algunos.

La violencia del nacionalismo subvertidor del Estado creció en aquellos casos en que los regímenes imperiales represivos no supieron garantizar ni la representación ni las autonomías nacionales o regionales. La protesta de los disidentes se hizo más emocional al mezclarse con ideas religiosas, y los lazos familiares y comunitarios produjeron un sentimiento de diferencia frente al imperio explotador, que encontró en la protesta una justificación para lanzar contra ellos al ejército. En este clima, cada uno de los bandos alimentaba continuamente la pasión y la violencia del otro.

Así pues, el nacionalismo subvertidor del Estado se manifestó con mayor apasionamiento y «fanatismo» allí donde los regímenes imperiales no representativos empezaban a perder las garras represoras. Los Estados occidentales que habían institucionalizado una representatividad de clase, y muy especialmente local y regional, no padecieron la violencia fanática ni siquiera en aquellos casos en que tampoco faltaron los conflictos interétnicos. Bélgica y Canadá podían disgregarse, pero habría ocurrido probablemente sin causar víctimas. En contraste, los cientos de muertos de Irlanda del norte se debieron a la ausencia de representatividad de la comunidad minoritaria y a la separación de las dos comunidades. En Yugoslavia se han producido miles de muertos, y puede que ocurra lo mismo en un futuro en más de un antiguo país soviético, precisamente porque no se ha institucionalizado un gobierno representativo para aquellas comunidades lingüísticas, regionales o religiosas que cuentan, además, con sus propias instituciones políticas históricas. La violencia étnica subvierte al Estado sólo en los regímenes autoritarios, nunca en las democracias de partidos. Así fue durante el largo siglo XIX y así parece ser en nuestra época.

La creciente violencia del nacionalismo reforzador del Estado se ha centrado en las guerras interestatales. En 1900 los Estados dedicaban aún un 40 por 100 de su presupuesto a la preparación de la guerra. La manipulación de la amenaza bélica constituía el factor decisivo de su quehacer diplomático. Las virtudes militares formaban aún una parte fundamental de la cultura masculina, mientras las mujeres permanecían relegadas al papel de portadoras y nutridoras de futuros guerreros. Pero ahora estos Estados eran más representativos y más nacionales. Se ha dicho a menudo que la clase media, el campesinado e incluso, en determinadas ocasiones, los obreros se integraron en el nacionalismo agresivo por su identificación con los intereses y el sentido del honor de su Estado, en oposición a los de otros Estados-na-

ción. Por otro lado, la teoría de las clases se ocupa de analizar quién *disfrutaba en realidad de esa representatividad*, y concluye que quienes tenían la ciudadanía plena, especialmente la clase media, se convirtieron en los portadores del nacionalismo agresivo, en alianza con el antiguo régimen. Por mi parte, he sostenido que también durante este periodo el concepto capitalista de beneficio se fundió con lo que se suponía era el «interés nacional».

No obstante, confieso mi escepticismo hacia todas estas teorías rivales. Existe una diferencia considerable entre el individuo que se considera a sí mismo parte de una comunidad nacional, aunque ésta se sostenga en una mitología de la raza o la etnia común, y el que apoya una determinada política nacional, dentro o fuera de sus fronteras. De hecho, la distintas concepciones de lo nacional encontraron una fuerte oposición. Por ejemplo, el significado de «Francia» era uno para los republicanos y otro para los monárquicos o los bonapartistas. Ni siquiera dentro de Gran Bretaña coincidía el antiguo concepto «protestante» y radical de nación con otros más seculares; ni la concepción conservadora del Imperio se ajustaba a la de los liberales. En todas partes, la experiencia de la represión interna produjo en las clases y las minorías movimientos de oposición al militarismo en general y al nacionalismo agresivo en particular, aunque no es menos cierto que también en todos los países, como defiende la teoría de las clases, los que disfrutaban de la plena ciudadanía identificaron el Estado y el militarismo como algo *suyo*. Pero también he demostrado que tanto el militarismo como la diplomacia estatal conservaron su carácter privado, un hecho sistemáticamente hurtado al escrutinio de los grupos populares, con sufragio o sin él. Es decir, el nacionalismo agresivo (y, desde luego, cualquier compromiso intenso con la política exterior) no se expandió de hecho entre los grupos de la clase media, ni siquiera entre la muy difamada pequeña burguesía.

Pero no podemos negar el atractivo del nacionalismo agresivo. La ampliación de las funciones estatales a raíz de la industrialización expandió por la sociedad nacional dos tipos de tentáculos: las administraciones civiles y las administraciones militares. La vida de cientos de miles de hombres dependía ahora del Estado; millones de jóvenes estaban sometidos a la disciplina militar, unidos por la moral peculiar y coercitiva, pero de gran poder emocional, del moderno ejército de masas. Estos dos grupos masculinos y sus familias —no las clases ni las comunidades— alimentaron el núcleo del nacionalismo extremo. Representan lo que he llamado los «archileales», por su exagerada le-

altad a lo que consideraban los ideales de su Estado. No todos fueron militaristas o nacionalistas agresivos, porque los ideales variaban mucho de un Estado a otro. Los funcionarios británicos se acogieron a las ideas liberales; los franceses, a las republicanas; los alemanes y los austriacos, a ideales más autoritarios. Pero el hecho cierto es que todos los Estados fueron militaristas y que sus servidores eran susceptibles de movilizarse en el mejor de los casos por un militarismo ostensiblemente «defensivo».

En la cuarta fase de su vida relativamente corta, la del capitalismo industrial, la nación avanzó por tres vías fundamentales. En primer lugar, la naturalización inconsciente de la mayor parte de la población creó una comunidad extensiva a la que el pueblo se encontraba emocionalmente unido. Lo que he llamado organización «nacional» creció, ante todo, a expensas de las comunidades locales y regionales (a menos que éstas se convirtieran a su vez en naciones) y, en menor medida, a expensas de la organización transnacional; de ahí su capacidad de integrar a la mayor parte de la población. Por otra parte, muchos ciudadanos —en este momento pertenecientes a las clases medias y altas y a las comunidades lingüísticas y religiosas dominantes— se implicaron en una organización nacionalista, definida precisamente por la diferencia entre sus intereses y su concepto del honor y los de otras naciones. En tercer lugar, el núcleo del nacionalismo se formó en la propia expansión del Estado, entre sus cuadros civiles y militares, y desde esa plataforma se extendió superficialmente entre las familias de los ciudadanos. Combinados, podían aspirar a movilizar al resto. Como veremos en el capítulo 21, el problema residía en que las poblaciones nacionales formaban compartimentos estancos cuyas relaciones con otros compartimentos nacionales no dependía del pueblo en su conjunto, sino, en primer lugar, de las elites privadas y militares del Estado y, en segundo lugar, de los nacionalistas. El nacionalismo agresivo se gestó a espaldas de la mayoría de los componentes de la nación.

En la fase capitalista industrial, podemos representar a la nación reforzadora del Estado mediante tres círculos concéntricos: el círculo exterior se circunscribiría a la totalidad del Estado nacional, y el círculo intermedio aparecería más vinculado al central, es decir, al núcleo estatista. Más gráficamente y más en consonancia con los resultados posteriores, podríamos imaginar la nación como la bomba típica de los anarquistas del siglo XIX, que los creadores de dibujos animados representan como una bola negra cuya mecha va dejando

un rastro de chispas. La mecha serían los nacionalistas estatistas; el combustible, las clases que disfrutaban de ciudadanía plena, cuya agresividad superficial duró lo suficiente para acabar provocando la explosión, que correspondería al enorme poder militar del Estado, cuyos dispersos fragmentos impusieron una disciplina coercitiva a los obreros y los campesinos. Pero la mecha necesita que alguien la prenda, naturalmente.

Mientras que Europa se mostrara incapaz de frenar el militarismo de sus Estados no faltaría quien estuviera dispuesto a ello. La violencia iba a resultar especialmente destructiva cuando se mezclara con el conflicto de clase y, en ocasiones, con las ideologías o las ideas religiosas. Los nacionalistas más extremos podían coincidir entonces con ciertos grupos religiosos o clases que disfrutaban ya de la ciudadanía para identificar como enemigos del Estado-nación a aquellos que permanecían excluidos y presionaban para entrar —la clase obrera y las minorías regionales, lingüísticas y religiosas—, los *Reichsfeinde* de Alemania. El odio de los nacionalistas más violentos se dirigía tanto a los extranjeros como a los *Reichsfeinden* nacionales. Sin embargo, mi modelo no considera los «demonios irracionales» más extremos; se limita a anticipar los acontecimientos que tendremos oportunidad de conocer en el Volumen III: los nazis representarán, como es lógico, la versión más extrema —más violenta, más autoritaria y más racista— del nacionalismo estatista europeo cuya aparición he esbozado aquí. Serán, en definitiva, la forma más intensa del entrelazamiento de las tres cristalizaciones del Estado occidental, la militarista, la capitalista y la autoritaria, respaldados por los empleados estatales y los ex combatientes «archileales» y «traicionados», y su ideología se impondrá mejor entre los burgueses luteranos y agrarios de Alemania.

¿No he expuesto hasta aquí la historia de la evolución convencional del auge del Estado-nación, subrayando siempre su soberanía, sus poderes infraestructurales y su capacidad de movilización nacional? En efecto, el Estado se extendió y profundizó sus raíces en la sociedad. Sin embargo, dudo de que estos Estados más potentes tuvieran en ciertos aspectos la coherencia de los Estados prusiano y británico de finales del siglo XVIII. A medida que la vida social se politizaba lo hacían también sus conflictos y sus confusiones. Cuando el Estado amplió sus funciones, tanto él como los partidos se hicieron más polimorfos. En 1900 la política impregnaba la diplomacia, el militarismo, el nacionalismo, la economía, la centralización, la secularización, la educación de las masas, los programas de asistencia estatal, las

campañas contra el alcoholismo, el sufragio femenino y un sinnúmero de cuestiones, enfrentando a las elites con los partidos de masas, a las clases, los sectores, las confesiones religiosas entre sí y a éstas con el Estado, al Estado central con la periferia y a las feministas con el patriarcado. En comparación, la política del siglo XVIII resulta bastante sencilla.

¿Se encontraban estos Estados en una mera fase de transición en la que coincidían las nuevas cristalizaciones con otras más tradicionales? Así fue en las monarquías semiautoritarias como Austria y Alemania, donde los Parlamentos competían con las cortes y las facciones por el favor de los ministros que podían acercarlos al monarca. Pero la política exterior generó cristalizaciones muy diversas. La diplomacia se encontraba en manos de unas cuantas familias del antiguo régimen, aisladas de las clases y los partidos de masas, aunque erráticamente combatidas por los partidos nacionalistas. Los cuerpos de oficiales, compuestos de miembros del antiguo régimen, cuyo espíritu compartían, conservaron su antigua autonomía burocratizando la profesión. Oficiales y suboficiales formaron una casta militar, que en parte vivía al margen de la sociedad civil y de las funciones civiles del Estado. En general, aunque la democracia, la burocracia y la racionalización de los presupuestos buscaban establecer unas prioridades políticas coherentes, el resultado era aún bastante imperfecto en 1914. El control democrático sobre la diplomacia y el ejército es aún muy débil en nuestra época, y resulta difícil concebir la totalidad del Estado como una única entidad cohesionada; por el contrario, parece un entramado de elites y partidos plurales que se entrelazan de formas tan variadas como confusas.

Las cristalizaciones políticas siguieron diversificándose durante el siglo XX, a medida que el Estado continuaba ampliando sus funciones. El Estado americano puede cristalizar una semana como conservador, patriarcal y cristiano cuando se restringen los derechos al aborto, pero a la siguiente, cuando se regulariza el escándalo de los ahorros y los créditos bancarios cristaliza como capitalista, y aún puede cristalizar días más tarde como superpotencia, cuando envía tropas al extranjero para defender intereses económicos distintos a los nacionales. Estas cristalizaciones no suelen estar en armonía o en oposición dialéctica unas respecto a otras; simplemente difieren. Movilizan, superponiéndose a ellas o interactuando con ellas, distintas redes de poder, en muchos casos involuntarias. La tesis básica de mi trabajo sostiene que las sociedades no son sistemas, es decir, que no

existe una estructura que determine en última instancia el conjunto de la vida social, o al menos, ninguna que nosotros, situados en medio de ella, podamos discernir o localizar. Las elites de los Estados históricos aparecen dominadas por distintos grupos sociales: los príncipes, el clero o los grupos de guerreros. Disfrutaban de una amplia autonomía y encerraban una escasa vida social. Sus Estados presentan distintas características porque responden a sus propias particularidades. Pero cuando éstos se convierten en un centro de irradiación que regula gran parte de la vida social, pierden su coherencia sistémica.

El rasgo más duradero de los Estados modernos es sin duda el polimorfismo. Cuando los Estados regulan la subsistencia material, el beneficio, las ideologías, la vida íntima familiar, la diplomacia, la guerra y la represión, los partidos se hacen políticamente activos. Al tratar cada uno de los Estados, he enumerado sus principales cristalizaciones y he mostrado que las formas en que se entrelazan no son ni sistémicas ni dialécticas. Este hecho estructura la identidad de las clases y las naciones, a menudo sin que los actores puedan percibirlo. Rastrearé este razonamiento «hasta el desbordamiento final», siguiendo los acontecimientos de la realidad, en el capítulo 21.

Las fuentes del poder social

En este volumen he tratado de dotar de contenido a las proposiciones que establecí al comienzo del capítulo 1. Es posible mantenerse entre Marx y Weber para establecer generalizaciones significativas, aunque no materialistas, sobre la estructuración «última» de las sociedades humanas, al menos en el tiempo y el espacio que trato aquí. Una vez hechas todas las críticas y las salvedades, estamos en condiciones de discernir dos fases principales en las que la estructuración de la sociedad occcidental desde 1760 hasta 1914 se manifiesta predominantemente dual.

Durante la primera de ellas, que se prolongó aproximadamente desde el siglo XVIII hasta 1815, las relaciones difusas de poder militar y económico dominaron las sociedades occcidentales. El capitalismo comercial y las consecuencias prolongadas de la revolución militar permitieron a los europeos y a sus colonos dominar la tierra; el capitalismo comercial y los Estados militares completaron la expansión de la alfabetización discursiva de masas que habían comenzado las iglesias, añadiendo con ello densidad social, extensiva e intensiva-

mente, y en las fronteras de la clase. El capitalismo aumentó la capacidad humana para explorar la naturaleza, aumentar la población e impulsar la aparición de la industrialización y de las clases extensivas. El militarismo politizó la sociedad civil, sus clases y sus comunidades lingüísticas y religiosas en torno a las cuestiones nacionales y representantivas; además, consolidó a los grandes Estados y aniquiló a los pequeños.

Después, el Estado nacional (el principal producto de estas determinaciones duales) se desprendió de su débil estructura histórica y emergió intersticialmente —sin responder a una voluntad precisa— como la mayor organización de poder autoritario por derecho propio. A finales del siglo XVIII, las luchas por la ciudadanía se hallaban estructuradas en la medida en que los Estados habían institucionalizado los conflictos relativos al aumento de los impuestos y de la conscripción. El capitalismo del siglo XIX continuó revolucionando los poderes productivos colectivos, ya que la geopolítica se hizo más pacífica y el militarismo más variable de un Estado a otro (especialmente en el plano interno), con un carácter más «privado» y de casta en el interior del Estado. Así, apareció una segunda fase de determinación dual a mediados de siglo. El capitalismo industrial predominante (aunque no regularmente) y el Estado-nación autoritario se convirtieron en los principales reestructuradores de la sociedad occidental, el primero difundiendo avances esencialmente semejantes (y aplaudidos por todos), el segundo aportando soluciones autoritarias muy variadas, principalmente a través de distintas cristalizaciones nacionales y representativas.

Puesto que, en ninguna de las dos fases, los dos fenómenos con mayor capacidad de transformación colisionaban entre sí como las bolas de un billar, sino que se entrelazaban, y puesto que generaron actores colectivos que, a su vez, se interpenetraban —clases, naciones y Estados modernos, así como sus rivales— no es posible sopesar sus interrelaciones. Ni se adaptan tampoco al modelo marxista que les otorga un puesto de «primacía última» en la sociedad, aunque, naturalmente, el poder económico del capitalismo fue el único factor que formó parte de las dos fases del dualismo.

Durante este periodo la civilización que acabamos de ver constituyó un único proceso general de desarrollo en una medida desconocida en otros momentos históricos. En ningún otro tiempo o lugar se expandió con tanta fuerza o rapidez el poder colectivo de los seres humanos sobre la naturaleza o sobre otras civilizaciones. Y en ningún

otro momento o lugar tuvieron los actores de poder —salvo los innovadores inconscientes u oscurantistas— que formaban la punta de lanza una percepción más clara de cómo aumentar su poder. Las últimas y más modernas formas de capitalismo, de Estado, de profesionalismo militar y de ideologías científicas proporcionaron unos modelos de futuro que convencieron a la inmensa mayoría. Así pues, en ningún otro tiempo o lugar se desarrollaron tantas teorías sobre la evolución y el progreso.

Pero este desarrollo no fue ni unitario ni sistémico, ni se produjo en el interior de un solo organismo social. No fue una evolución. En principio, podríamos abstraer una «lógica» ideal típica del capitalismo; podríamos incluso llamarlo «ley de la utilidad marginal» o «ley del valor», según las preferencias. Y lo mismo cabría hacer con el militarismo, en cuyo caso extraeríamos una «lógica» de la concentración de una fuerza coercitiva superior contra el enemigo. Pero tan pronto como unamos ambas cosas en la fase 1, o añadamos los Estados polimorfos y confusos de la fase 2, las lógicas ideales se vuelven decididamente impuras y se oscurecen a los ojos de sus supuestos portadores. He subrayado que la relativa «eficacia» del mercado (es decir, del capitalismo puro) frente las concepciones territoriales (más militares o políticas) de interés y beneficio nunca estuvo clara a lo largo del periodo. Las economías políticas que competían entre sí constituyeron medios viables de consolidación de los poderes económicos colectivos o individuales. A lo largo del periodo podemos distinguir ciertas tendencias seculares: hacia una mayor industrialización capitalista, hacia el profesionalismo militar, hacia la ampliación de la representación política, hacia el aumento de la burocratización del Estado o hacia un Estado-nación más centralizado. Cada uno de estos elementos «compitió» con compromisos estructurales alternativos y salió «victorioso», no en un sentido definitivo, sino como tendencia definida a lo largo del periodo. Su éxito se debió a su capacidad para atraer a un amplio conjunto de actores de poder o a su mayor poder intrínseco. Pero ninguna de estas tendencias nació de una sola «lógica». Todas ellas favorecieron el surgimiento del Estado-nación y de la industrialización capitalista.

Aunque he simplificado los elementos «fundamentales» en dos fases de un determinismo dual, debo añadir ahora dos advertencias. Las restantes fuentes del poder social tuvieron su peso, pero se comportaron de modo más errático y particularista. Las relaciones de poder ideológico, muy importantes a comienzos del periodo, represen-

taron una fuerza sobre todo allí donde las comunidades religiosas y lingüísticas (las últimas recibieron mayores poderes colectivos de las otras fuentes de poder) no coincidían con las fronteras previas del Estado. El poder ideológico hizo contribuciones igualmente decisivas al desarrollo de las clases y las naciones durante el «excepcional momento histórico» que supuso la Revolución Francesa. El militarismo fue importante para las relaciones de Occidente con el resto del mundo, para la política interior de las monarquías que acaparaban poderes despóticos y para los Estados Unidos. La casta militar desarrollaba en secreto la musculatura, a la espera de su propio momento histórico, que llegaría en julio-agosto de 1914. Por todas estas causas, mis generalizaciones son necesariamente limitadas.

Y son también estas razones las que explican que las relaciones del poder distributivo en Occidente resultaran tan poco claras para los actores contemporáneos. Su identidad y su concepción del interés y del honor quedaron sutilmente transformadas por el entrelazamiento de varias fuentes del poder y por las inesperadas consecuencias de sus actos. Por tales razones, también, las relaciones del poder distributivo fueron objetivamente ambiguas y difíciles de desentrañar. Los actores económicos aparecieron simultáneamente como clases, secciones y segmentos, e introdujeron una gran inseguridad en el futuro de la estratificación interior. Sus Estados eran ahora tanto civiles como militares; de hecho, podía ocurrir que cada *Reichshalf* tomara una dirección distinta, y estaban controlados por los distintos equilibrios de poder que establecían las elites y los partidos.

De modo más general, Occidente comprendía al mismo tiempo una serie segmental de «sociedades» con Estado-nación y una civilización transnacional. Las ideologías sobre la paz y la guerra; el conservadurismo, el liberalismo y el socialismo; la religión y el racismo oscilaban irregularmente del plano nacional al transnacional. No hubo una resolución sistemática de las ambivalencias, pero sí una muy particular. Muchas de estas ambigüedades se resolvieron en la práctica, y todos estos actores e ideologías ambivalentes contribuyeron a resolverlas. La realidad se interpuso con la Gran Guerra. Y así, finalmente, llegamos al desbordamiento final.

Capítulo 21
CULMINACIÓN EMPÍRICA EN LAS TRINCHERAS: GEOPOLÍTICA, LUCHA DE CLASES Y PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Este volumen culmina empíricamente con un análisis del cataclismo que puso fin al periodo y que ilustra con su ferocidad mi teoría de la sociedad moderna. La Primera Guerra Mundial constituyó un punto de inflexión en la historia de la sociedad; sus resultados decidieron el curso del siglo XX. Establecer sus causas se nos impone como un hecho esencial para comprender la sociedad moderna. Por otra parte, se trata de un conflicto que ejerce sobre nosotros una terrible fascinación, porque causó un número de víctimas completamente desconocido hasta ese momento. La fuerza de esta guerra como fábula moral excede incluso la importancia de sus causas y la enormidad de la destrucción que produjo, porque en ella estuvo a punto de suicidarse aquella civilización europea compuesta de numerosos Estados y dominadora del mundo durante siglos. Sus sistemas filosóficos optimistas, el liberalismo y el socialismo, parecieron extinguirse durante una sola semana de agosto de 1914. Sus grandes potencias parecían avanzar hacia la destrucción con los ojos abiertos. Los hombres que supuestamente se comportaban según una racionalidad formal, diplomáticos y capitalistas, emplearon sus técnicas en una guerra que estuvo a punto de acabar también con ellos. Aquellos

cuatro años sangrientos nos obligan a plantearnos si los seres humanos y sus sociedades pueden llamarse racionales.

A este respecto existen numerosas respuestas. ¿Qué puede añadir un no especialista a la ingente literatura sobre las causas de la guerra? No podré mejorar, desde luego, la síntesis magistral de la literatura histórica debida a Joll (1984a). Pero un sociólogo puede aportar una contribución característica, relativa a las pautas sociales subyacentes y a la familiaridad con las teorías generales de la sociedad. Incluso los historiadores empíricos reconocen que la teoría puede resultar de alguna ayuda a la hora de identificar las causas de la guerra.

La mayor parte de los debates se plantea entre quienes buscan las causas originales en la política interior y quienes lo hacen en la política exterior. Los partidarios de la primera tesis —*Primat der Innenpolitik* (la argumentación comenzó en Alemania)— han querido ver las razones últimas en dos de las seis economías políticas internacionales que hemos tratado en los capítulos anteriores, el imperialismo económico y el imperialismo social. Bajo el primero, se supone que las necesidades del capital generan la rivalidad económica entre las naciones, y por tanto, la guerra. Bajo el imperialismo social, se supone que la agresión a un país extranjero responde a una estrategia del régimen para reducir los problemas internos, en especial, la lucha de clases. Los que defienden la primacía de la política exterior —el realismo o el *Primat der Aussenpolitik*— también se hallan divididos. La escuela «macrorrealista» subraya la lógica geopolítica que articularon los estadistas representantes de las potencias: la guerra era una solución racional al enfrentamiento de los intereses contrapuestos de los Estados. La escuela «microrrealista» de las crisis geopolíticas se asemeja a la teoría del «embrollo» que he trazado en el capítulo 3, en la que subrayo la incoherencia y la falibilidad del Estado. Los microrrealistas sostienen que las configuraciones geopolíticas concretas sólo conducen a crisis impredecibles y errores de cálculo. Los que reafirman la teoría del embrollo rechazan aún con mayor convencimiento cualquier teoría sobre la guerra, atribuyéndola al mero accidente o a la irracionalidad humana.

El sociólogo, acostumbrado a las teorías del imperialismo, el nacionalismo y la lucha de clases, está en condiciones de aportar generalizaciones al lado *Innen* de la argumentación. De hecho, la mayoría de los sociólogos sienten un interés profesional por llegar a una conclusión *Innen*. Atribuir el cambio social a causas profundamente arraigadas en la estructura social constituye nuestra particular «oferta»;

no obstante, este sociólogo en particular reconoce la importancia de la *Aussenpolitik,* y sabe que conviene asociarla a la *Innenpolitik* para formar una teoría general de las sociedades como múltiples redes de poder que impactan en Estados esencialmente polimorfos. Los acontecimientos de 1914 no se engendraron primordialmente en la lógica de las estructuras internas o en los intereses realistas de las potencias. Ni tampoco fueron un mero producto del accidente o la irracionalidad humana. La Primera Guerra Mundial estalló por las consecuencias involuntarias de la interacción de cuatro de las cinco redes de poder que se superponen entre sí influyendo en la política exterior, tal como hemos podido apreciar en el capítulo 3: las clases, los ejércitos, los «estadistas» y los partidos nacionalistas (el quinto elemento, formado por grupos particularistas de presión, aunque muy importante para la política colonial, apenas desempeñó papel alguno en la preparación de la Primera Guerra Mundial). Puesto que todos ellos se entrelazaron de distintas formas en los distintos regímenes, las potencias tenían una comprensión muy limitada unas de otras, lo que añadió malas interpretaciones y consecuencias imprevistas. En 1914 estos cruces «no dialécticos» produjeron una atmósfera catastrófica para los procesos de poder descritos en este volumen.

En la pendiente de la guerra

La Primera Guerra Mundial se generó en la fusión de dos conflictos. Primero se produjo un enfrentamiento en los Balcanes entre la monarquía austro-húngara y sus disidentes eslavos del sur, apoyados por la vecina Serbia y protegidos por la gran potencia rusa, ambas igualmente eslavas. En segundo lugar, estalló la rivalidad entre dos grupos de potencias, la Triple Alianza de Austria, Alemania e Italia, y la Entente de Rusia, Francia y Gran Bretaña. Dentro de cada campo dos de las potencias se habían comprometido a respaldar a sus aliados en caso de ataque. Italia y Gran Bretaña no tenían un compromiso formal, pero se esperaba su ayuda. El conflicto balcánico no presentaba una negociación fácil, ya que antes o después Austria buscaría el enfrentamiento con su belicoso vecino serbio. Ahora bien, ¿por qué se convirtió en un conflicto mundial librado entre grandes potencias? La fusión de ambos enfrentamientos se produjo como consecuencia de acontecimientos que se precipitaron en un solo mes.

El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, here-

dero del trono austriaco, fue asesinado por los nacionalistas eslavos en Sarajevo, ciudad de la provincia austriaca de Bosnia. Una investigación austriaca demostró que la conspiración estaba dirigida por círculos gubernamentales serbios (aunque el gobierno de Serbia no la había aprobado directamente). Tenemos, pues, un terrorismo cuya estela alcanza siniestramente a gobiernos simpatizantes. Este hecho, poco común en su época, causó una gran alarma. Con el apoyo de su aliado alemán, el gobierno austriaco planteó el 23 de julio un duro ultimátum a Serbia, en el que se imponían severos controles a la actividad política del gobierno serbio que infringían su soberanía territorial. Los serbios pidieron ayuda a Rusia. Cualquier movimiento de esta potencia o de Austria implicaría automáticamente a sus respectivas alianzas.

Las potencias comprendieron que aquella crisis local podía evolucionar hacia un conflicto mayor. El 25 de julio los serbios enviaron una respuesta conciliadora al ultimátum, pero Austria, resuelta a la confrontación, lo rechazó. Ese mismo día Rusia comenzó a plantearse la movilización de su ejército contra Austria e invocó la Entente. Por razones técnicas (que explicaré más adelante), la movilización militar suponía un auténtico paso hacia la guerra abierta. El 28 de julio Austria, incitada ahora por Alemania, declaró la guerra a Serbia. La preparación de la ofensiva austriaca procedió con lentitud, dejando tiempo a la meditación. Pero Austria y Alemania demostraban un escaso interés por ella. El 30 de julio el zar ordenó la movilización general de las fuerzas rusas, tanto en la frontera austriaca como en la alemana. Rápidamente se invocaron los términos de la Triple Alianza y de la Entente. El 31 de julio y el 1 de agosto se produjeron las movilizaciones generales de Austria (contra Rusia y contra Serbia), de Alemania (contra Francia y contra Rusia) y de Francia (contra Alemania). Las declaraciones de guerra se sucedieron con rapidez. La lucha comenzó en el lado occidental el 4 de agosto, con la invasión de Francia y Bélgica por las tropas alemanas. Gran Bretaña se sumó el 6 de agosto. Italia se declaró neutral el 8 de agosto, pero entró en guerra del lado de la Entente en 1915.

Así, algunas potencias se comportaron con mayor agresividad que otras durante la crisis. Serbia, Alemania y Austria iniciaron la provocación, y Alemania y Austria realizaron una invasión en toda regla. Esto ha llevado a mucho a afirmar la responsabilidad de los dos últimos países (Taylor, 1954: 527; Lafore, 1965: 268); otros la achacan al socio más prepotente, Alemania (Stone, 1983: 3426 a 339). Está luego

Rusia, cuyo apoyo a Serbia resultó también una provocación y cuya movilización general supuso el comienzo de la escalada bélica. La responsabilidad directa de Gran Bretaña fue menor, porque entró en guerra en último lugar. Pero Alemania aducía que el imperialismo británico era el culpable de la inestabilidad de las potencias. En 1914 el régimen alemán justificó su «agresión» con el argumento de que Alemania se estaba defendiendo del acoso a que las grandes potencias la sometían desde hacía tiempo. Alemania aspiraba únicamente a conquistar un «lugar bajo el sol» equivalente que Francia o Gran Bretaña no estaban dispuestas a compartir. La guerra, pues, hundía sus raíces en la rivalidad de las grandes potencias, especialmente en la hegemonía británica. Aunque considero el argumento, lo rechazo en gran parte. No cabe duda de que Gran Bretaña tuvo alguna culpa desde el momento en que su diplomacia se mostró incapaz de realizar gestos disuasorios suficientemente claros para Alemania, que dio por sentada la neutralidad británica hasta el 30 de julio. Francia se limitó a mantener la alianza con Rusia y defenderse a sí misma, como siempre dijo que haría, aunque muchos franceses confiaban en la guerra para recuperar la Alsacia-Lorena y la diplomacia secreta francesa también se hizo culpable, como veremos más adelante.

Éste será, pues, el orden de prioridades para establecer las causas inmediatas: ignorando a Serbia, potencia menor, me concentraré en Alemania y Austria, después en Rusia, y en menor medida en Francia y Gran Bretaña. Las tres primeras eran monarquías autoritarias; las dos últimas, regímenes liberales. Esto plantea una cuestión evidente de *Innenpolitik* relacionada con la cristalización representativa de los Estados: ¿Existe algún elemento particularmente peligroso en las monarquías en comparación con las democracias de partidos (recuérdese que he clasificado a Gran Bretaña en el segundo grupo)? Volveré sobre esta pregunta.

El fondo del problema ha quedado planteado. Se produjo un rápido entrelazamiento de varios procesos causales. Un conflicto estructural concreto —el choque de nacionalidades en la monarquía austro-húngara— se fusionó con dos problemas estructurales de carácter general: la rivalidad entre las grandes potencias y el manifiesto militarismo de las monarquías. Este entramado produjo una espiral de frenéticos intentos diplomáticos, de precipitaciones militares, malentendidos y errores de cálculo; todo ello en dos semanas, seguidas por el estallido en cinco días de una guerra mundial. *Innen* y *Aussen* convergieron con estructuras profundas, tácticas, peculiares y desor-

denadas. Puesto que la guerra estalló por evidentes razones geopolíticas, comenzaré mi exposición por una amplia panorámica de la *Aussenpolitik*.

Las teorías realistas sobre la Gran Guerra

La historia diplomática, respaldada por el realismo (y por cualquier teoría de la elección racional) busca las causas generales de la guerra en los intereses geopolíticos de los Estados, tal como los interpretaron los diplomáticos, los «estadistas» y los altos mandos. Establece tres asertos: los Estados tienen «intereses», o al menos estadistas que los articulan; los intereses de los Estados entran continuamente en conflicto; la guerra es un medio normal, aunque arriesgado, de defenderlos. La guerra es siempre un resultado en potencia porque puede constituir un medio racional de lograr las metas que se propone el Estado (salvo cuando por su propia naturaleza resulta destructiva en exceso, como en el caso de la guerra nuclear). Para explicar dónde, cómo y cuándo estallan las guerras reales, el realismo añade un segundo plano del análisis. La guerra se produce porque (1) una potencia la provoca conscientemente para reestructurar el orden internacional (la macroexplicación) o porque (2) porque, en un clima de conflictos complejos, las sospechas y los malos entendidos de las potencias les impiden una comprensión mutua suficientemente clara que las conduce a un conflicto al umbral más bajo de aceptabilidad (la microexplicación). Desde el punto de vista macro, la guerra es perfectamente racional para el agresor; desde el punto de vista micro, mantiene su racionalidad pero al más bajo nivel de conocimiento humano y certeza en el entorno; se convierte en un riesgo aceptable cuando el resto de las alternativas políticas implican también riesgos.

El realismo parte de que los actores del mundo real comparten sus presupuestos. Esto implica dos condiciones previas:

1. Si los estadistas encarnan identidades sociales con presupuestos distintos, el realismo no es eficaz. No cabe duda de que los estadistas encarnan siempre identidades sociales, ya que no son meros símbolos neutrales de los Estados que representan. Pero puede que tales identidades no tengan importancia decisiva o puede que nieguen los presupuestos realistas, en cuyo caso los empujan a actuar de otra forma. Finalmente, puede que sean precisamente sus identidades so-

ciales lo que les convenza para actuar como realistas. Y puede que los cálculos realistas no valgan para todos los seres humanos, y que respondan únicamente a las identidades sociales concretas de los estadistas. En este caso surge el problema porque, como hemos visto en el capítulo 3, existen en realidad dos motivaciones que se mezclan en la diplomacia realista: los intereses materiales y el honor ideológico nacional.

2. Los estadistas han de ser actores de poder responsables; en realidad, se encargan de los acontecimientos políticos. Si son meras marionetas o se ven superados por las presiones de otras facciones de estadistas, puede que su comportamiento no sea realista. La racionalidad pueden ser o no la propiedad de otros actores de poder.

En este capítulo comprobaremos que las identidades sociales tienden en la práctica a reforzar el comportamiento realista, pero tal tendencia puede verse superada por presiones confusas y faccionalizadas y producir un resultado esencialmente incomprensible desde una perspectiva realista.

En el capítulo 12 vimos que la principal identidad social de los estadistas del siglo XIX era el antiguo régimen. Todos ellos eran hombres de raza blanca que pertenecían al círculo de parientes y clientes de los monarcas y procedían de la aristocracia, la baja nobleza, los grupos «más antiguos» de comerciantes y las comunidades regionales, étnicas y religiosas. En las repúblicas habían surgido familias de «notables» no muy distintos, procedentes de la aristocracia superviviente, de los antiguos notables del medio rural y de la alta burguesía más «antigua». Los propósitos «nacionales» de los estadistas se definen en parte por las metas característicamente reaccionarias de su clase y de otras comunidades de pertenencia. Un hecho evidente, por ejemplo, durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, e inmediatamente después de ellas, cuando «orden internacional» significaba Francia y represión de las reformas sociales, y cuando la diplomacia se encontraba fuertemente influida por las ideologías sociales. ¿Era ésta la situación poco antes de 1914?

Los historiadores y los diplomáticos tienden a creer que las identidades sociales carecen de importancia para los cálculos de los estadistas. Incluso llegan a despersonalizarlos, denominándolos *potencias;* de ahí deriva el uso rutinario que encontramos en los documentos y análisis de la diplomacia: «la agresión alemana», «la vacilación británica», etc. Pero detrás de estas expresiones hay una

auténtica transformación de las identidades sociales. Excepto en los casos de Rusia y Austria-Hungría, los estadistas no representaban dinastías, sino Estados-nación. Las «razones de Estado» se convirtieron supuestamente en «interés nacional», incontestable e incluso «sacralizado» en el sentido que le dio Durkheim, es decir, como meta diferenciada y superior a los cálculos materiales de interés. Como ha destacado Kennan, quedaba ya lejos el cinismo de los príncipes: «Desde su punto de vista [el Estado-nación] se admira hasta el narcisismo. *Sus* símbolos exigen el máximo respeto; *sus* causas reclaman el más alto sacrificio; *sus* intereses son sacrosantos ... Estas metas no conocen límites» (1984: 256 y 257).

El Estado no era ya un «ente», sino una personificación que se capitalizaba como figura autoritaria primordial, la Madre o el Padre. La costumbre llegó a asignar género a los Estados, según las convenciones lingüísticas; en Rusia y Gran Bretaña se empleaba el posesivo femenino para hablar de *su* moral, interés, honor, dignidad y seguridad nacional; en la *patria* alemana se utilizaba el posesivo masculino. Los estadistas austriacos se desviaron de la norma sirviéndose del término «la Monarquía», mucho más arcaico, para sus intereses. Los intercambios entre los estadistas aludían también a dos tipos de actor, el estadista y el Estado, y a dos lugares, la capital y la sede de la Cancillería o Ministerio de Asuntos Exteriores (Quai d'Orsay o Wilhelmstrasse). El Estado (Madre o Padre) actuaba, personificado por sus estadistas, domiciliado en los edificios diplomáticos de su capital. El Estado-nación poseía también sus símbolos sagrados, especialmente himnos y banderas. El ritual de los desfiles ante el público se parecía al de las confesiones religiosas: posturas reverenciales (en este caso, la postura de firmes) y fuertes emociones (opresión en el pecho, lágrimas en los ojos). El Estado-nación era ya sagrado, y continúa siéndolo.

Así pues, los intereses nacionales no se calculaban siempre con la frialdad que requieren los asuntos materiales. Por lo general, no se renunciaba explícitamente a ellos en contra de otros intereses, y puede decirse que cuando ocurría era siempre de modo inconsciente. En el fondo, y raramente articulados, se escondían prejuicios y solidaridades normativas, como la alianza informal anglo-americana o la hostilidad compartida por todas las potencias hacia las razas no blancas. Los diplomáticos conocían, como es lógico, los intereses seccionales, especialmente los comerciales, que se barajaban en las colonias o al negociar los tratados relativos al comercio, en los que los grupos de

presión ejercían un fuerte influjo, pero, sorprendentemente, apenas aparecen en las discusiones relativas a la geopolítica. Stone (1983: 331) subraya, exagerando sólo un poco, que los documentos diplomáticos y privados del periodo «revelan un único interés por cuestiones relativas al prestigio, la estrategia y la "alta política"». Como tendremos ocasión de comprobar, el «honor» era asunto de importancia.

Pocos actores comprendieron hasta qué punto esta concepción del mundo centrada en el Estado era una creación social peculiar. Un participante relativamente reflexivo, el general ruso Kireyev, concluía en su diario de 1910 que este hecho formaba parte de un orden natural: «Nosotros, como cualquier otra nación poderosa, queremos extender nuestro territorio, nuestra "legítima" influencia moral, política y económica. Está en el orden natural de las cosas» (Lieven, 1983: 22). Aunque Kireyev se distancia en parte de la palabra "legítima", que entrecomilla, en último término lo achaca al «orden de las cosas». Puesto que muchos otros participantes pensaban igual que él, la geopolítica debió de aproximarse más a un sistema realista racional de reglas y signos comunes. El transnacionalismo residual del antiguo régimen reforzó también los presupuestos realistas. Los lazos de parentesco y cultura aristocrática cosmopolita unían aún a los estadistas. Aunque muchos escribían en sus lenguas vernáculas, casi todos hablaban por lo menos tres lenguas y sus misivas aparecen repletas de galicismos y latinismos. Por lo general, se entendían muy bien unos a otros, aunque no podemos decir lo mismo de lo que entendieron respecto a los Estados.

La ciencia geopolítica de finales del siglo XIX sistematizó también su persecución de los «intereses nacionales». El término *Geopolitik* se debe a Kjellen, que lo acuñó en la década de 1880, para significar «la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno espacial ... Los Estados potentes que cuentan con un espacio limitado obedecen al imperativo político categórico de la expansión mediante la colonización, la fusión y la conquista» (Parker, 1985: 55). Los geopolíticos definían ahora cuatro intereses nacionales «vitales» (es decir, «necesarios para la vida»):

1. Ante todo, la defensa de la integridad territorial del reino
2. La extensión del dominio sobre el territorio mediante el imperialismo geopolítico, las alianzas o el mantenimiento de Estados clientes.
3. El empleo de la revolución del siglo XIX como poder exten-

sivo capaz de establecer una esfera naval y global colonial de control estratégico.

4. Garantizar los tres primeros puntos blandiendo el poder económico y militar dentro del sistema de las potencias.

Estas metas entrañan una concepción marcadamente centralizada y territorial del interés y de la comunidad. El «nosotros» se define territorialmente como los miembros de un Estado, no de una localidad, región o colectividad transnacional. Lo que predomina siempre en estos cálculos o definiciones del interés colectivo no es la adquisición de mercados, sino de territorios, y no porque los estadistas despreciaran el interés comercial, sino porque estaban convencidos de que el dominio del territorio lo producía por añadidura. Lo que servía realmente al interés nacional era el militarismo y el Imperio. La sala de mapas se convirtió en centro de la diplomacia y los altos mandos; los geógrafos eran servidores académicos del poder estatal. Los diplomáticos coincidían en que sus regímenes debían actuar en el plano geopolítico, conforme a la situación geográfica de sus territorios y a su capacidad política para emplear los principales recursos económicos y militares de su territorio para relacionarse con los de otras potencias. Palmer ha definido sucintamente la geopolítica de estos antiguos regímenes como «colegas y mapas» (1983: XI).

Pero no todas las potencias establecían el mismo compromiso con la expansión territorial, y ninguna de ellas excluyó por completo otros propósitos. En el *Reich* alemán, que acababa de consolidarse, se discutía si su apetito territorial se encontraba «saciado» (la pretensión de Bismarck). En efecto, teniendo en cuenta su poderío militar, la política exterior alemana resultó bastante conciliadora de 1871 a 1905. En cuanto a los estadistas americanos se creían bastante pacíficos —para ellos ni los indios americanos ni «las razas amarillas» eran completamente humanos— y en realidad lo parecieron en relación con las restantes potencias occidentales. Gran Bretaña, por su parte, había construido ya su Imperio y de momento aspiraba sólo a mantenerlo en paz, gracias al efecto que producían las maniobras de su marina. En Francia había disminuido el interés por la ampliación de territorios, excepto en el caso concreto de Alsacia-Lorena. Así, los estadistas franceses y británicos preferían las teorías del poder menos territoriales, estos últimos, como demuestra la doctrina del poder naval del almirante Mahan, sólo necesitaban puertos y enclaves coloniales, es decir un Imperio «informal» (Mahan, 1918: 26 a 28). Los

geógrafos se dividieron entre la escuela geopolítica alemana, predominante, y el interés de los franceses por la región, la permeabilidad de las fronteras y la colaboración internacional, una expresión temprana de la teoría de la interdependencia.

Pero, a lo largo del siglo XIX, el crecimiento de los poderes infraestructurales del Estado y la ciudadanía nacional difundieron un sentimiento «nacional» de la identidad y la comunidad. La *Geopolitik* adquirió popularidad cuando se relacionó con el interés colectivo. Mackinder (1904) asociaba a Mahan con el nacionalismo y los geopolíticos territoriales, aduciendo que la historia del mundo se resolvía en un conflicto recurrente entre los hombres de mar y los hombres de tierra. Colón había pasado el testigo a los hombres del mar, pero el ferrocarril acababa de devolverlo. Rusia o Prusia estaban destinadas a fundar un Imperio mundial. El mundo estaba a los pies de los geopolíticos. En el «nuevo imperialismo» de la década de 1890, las potencias se disputaban los áridos territorios de África y establecían alianzas formales y comprometedoras. En 1914 todos los estadistas pensaban en términos geopolíticos y globales, y sus concepciones del «interés nacional» comenzaban a encontrar eco popular.

El surgimiento del Estado-nación moderno, con su carga de ciudadanía, nacionalismo y sagrados intereses geopolíticos, parecía reforzar así los presupuestos realistas. Se supone que los estadistas se comportaban con mayor realismo que, por ejemplo, cuando se dedicaban a reprimir el liberalismo (como en otras épocas). Se supone, pues, que el realismo podría ayudar a establecer una explicación más sociológica a la hora de interpretar los acontecimientos de 1914, pero no todos los realistas coinciden en ello; Morgenthau (1978), por ejemplo, atribuye la guerra a los estadistas que establecieron un peligroso sistema de equilibrio entre las potencias, de forma que el drama habría podido estallar en cualquier momento, al margen de otras identidades y motivaciones. Rosecrance (1986: 86 a 88), sin embargo, cree en el reforzamiento y sostiene que los Estados más territoriales y de mayor tamaño, impregnados de nacionalismo popular, elaboraron definiciones más «político-militares» del interés nacional. Pero ambos autores coinciden en que la geopolítica agresiva fue sistémica y aparentemente realista, cuando se observa desde la perspectiva del equilibrio de las potencias o del mundo político militar, respectivamente. Espero demostrar que el sistema, la racionalidad y la consistencia eran más débiles de lo que pretenden estas teorías.

¿Cuál fue esa configuración supuestamente sistémica y realista de

las potencia que provocó la guerra de 1914? La geopolítica había cambiado algo desde 1915. Entonces, como hemos visto en el capítulo 8, las dos mayores potencias eran Rusia y Gran Bretaña, invulnerables desde el punto de vista defensivo y sentadas a horcajadas en todas las rutas de expansión europeas, la de Rusia hacia Asia, la de Gran Bretaña a través de las líneas marítimas occidentales. El poder comercial británico creció hasta lo que he denominado hegemonía especializada o casi hegemonía. Luego venían Francia, Prusia, Austria y el Imperio otomano. Durante gran parte del siglo, la estabilidad diplomática dependió de Rusia y Gran Bretaña, de la hegemonía especializada de esta última y del Concierto, y, posteriormente, del equilibrio entre las seis potencias. En 1910 Gran Bretaña reinaba aún sobre las olas y dirigía el comercio, pero en el terreno industrial comenzaba a deslizarse por detrás de Alemania, que, tras derrotar a Francia y Austria, dominaba el continente europeo. Francia decaía paulatinamente; Austria, a ritmo más rápido; y los turcos estaban desapareciendo. Rusia, que conservaba su capacidad defensiva, se expandía en la zona asiática y se modernizaba en la europea, pero su régimen era inestable.

La transformación se había producido en dos fases. En la primera, desde finales de la década de 1880 hasta aproximadamente 1902, se mantuvieron dos esferas separadas de conflicto. Las potencias centrales, Austria, Alemania e Italia formaron la Triple Alianza contra la abierta Entente de Francia y Rusia. Alemania y Francia eran rivales en el Rin; Austria y Rusia, en los Balcanes, donde la caída de los turcos había dejado un vacío de poder. En la esfera global cada potencia seguía su propio camino, pero no faltaban los conflictos entre Gran Bretaña, Francia y Rusia (en Asia). No obstante, el progreso continuo de Alemania y su armada, y la derrota de Rusia en 1905 a manos de Japón, produjo un realineamiento y abrió una segunda fase. Gran Bretaña arregló sus principales diferencias con Francia y Rusia, y se acercó a la Entente, sin prometer nada. El alineamiento general se mantenía en 1914, con la única excepción de la neutralidad italiana (que después se uniría a la Entente).

La primera escuela realista afirma la primacía de una lógica geopolítica procedente de estas transformaciones, y se plantea algunas preguntas retóricas concretas: ¿Cómo podrían haberse producido estos cambios fundamentales en el orden mundial *sin* provocar una guerra? ¿No habían provocado *ya* varias guerras —la de Crimea, la austro-prusiana, la franco-prusiana y la ruso-japonesa— el auge y la

caída de estas potencias? ¿No se sellaron también con la guerra otros cambios semejantes en el equilibrio de las potencias en distintos periodos de la historia mundial? ¿No podríamos deducir incluso los dos bandos de 1914 a partir de estos parámetros cambiantes? ¿En el este, no hizo inestables a los Balcanes la rivalidad austro-rusa? ¿No fue la rivalidad occidental entre Gran Bretaña y Alemania lo que convirtió la disputa balcánica en una guerra mundial? ¿No fue el temor de Alemania a la modernización rusa —e incluso a su propia decadencia, una vez alcanzada la cumbre— lo que le impulsó a atacar en primer lugar los dos frentes en 1914, e integrarlos en una guerra mundial?

El macrorrealismo reconoce la dificultad de explicar los acontecimientos reales de julio de 1914. Durante el deslizamiento hacia la guerra, hubo algunos genios de gran valor y muchos fallos humanos. Así, la segunda escuela microrrealista del embrollo enfatiza las inseguridades y los malos entendidos de un escenario que cambiaba rápidamente. En efecto, los errores abundaron: los dirigentes alemanes calcularon mal la neutralidad británica y la resistencia del ejército francés; los británicos no dieron suficientes señales de advertencia; los rusos tomaron decisiones chapuceras respecto a la movilización; los austriacos se comportaron con temeridad. La obra monumental de Albertini (1952, 1953, 1957) sobre la actividad diplomática de junio y julio demuestra la importancia de todos estos elementos, porque sin la estupidez y las malas interpretaciones de Grey, Sazonov, Bethmann y Berchtold, entre otros, la guerra podría haberse evitado.

Pero hubo pautas microrrealistas incluso dentro de esta confusión diplomática. Como destaca Morgenthau (1978: 212 a 218), un sistema de equilibrio de potencias, en especial si se basa en las alianzas, introduce siempre una gran dosis de inseguridad. Ninguna potencia está en condiciones de calcular con exactitud cuánto poder necesita para conservar el *statu quo*, ni puede predecir por completo el comportamiento de sus aliados o de sus supuestos enemigos. Así pues, aunque el sistema requiere una igualdad del poder, cada potencia puede aspirar a un margen de seguridad que le confiere la superioridad de su poder. Pero como el sistema es dinámico y no todas las potencias aumentan su poder en la misma medida, la guerra preventiva (atacar ahora antes de que empeore la proporción relativa) será siempre una posibilidad intrínseca al equilibrio de las potencias, reconocido por éstas como potencialmente racional. Y cuando las potencias pierden su confianza en el equilibrio, una de ellas puede atacar.

Cuando arrecia la crisis, se estrecha la base de las decisiones. Puesto que las potencias no son capaces de predecir los actos de las otras, eligen entre alternativas más restringidas. Y esa elección redunda en los actos de las restantes, restringiendo más aún su capacidad de elección. Durante el deslizamiento hacia la guerra, se produjo constantemente esta espiral diplomática descendente. La agresión que comenzó en los Balcanes envolvió en su rizo a las otras potencias, y las reacciones de éstas, hicieron lo propio a lo largo de una cadena diplomática. La guerra se produjo en parte porque las consecuencias de sus actos hicieron desaparecer a los actores originales. ¿Podemos achacar la responsabilidad de la muerte de 55 millones de europeos y americanos a los asesinos del archiduque, a los serbios o a los austriacos? Poco antes de morir, Gavrilo Princip se hallaba aún aturdido por las consecuencias de sus disparos. Casi al principio de la cadena causal, unos actores desesperados se arriesgaron a una guerra local como el menor de los dos males directos y evidentes, pensando que el conflicto no pasaría de allí, pues, al fin y al cabo, dependía de las respuestas desconocidas de muchos actores.

De este modo, los estadistas austriacos decidieron que dejar sin castigo a Serbia significaría abrir el camino de la rebelión a otras nacionalidades disidentes. Por grande que fuera el peligro de guerra, el régimen no podía aceptar una humillación, a la que probablemente no habría podido sobrevivir. Conrad, el jefe del estado mayor, declaraba: «Cuando se agarró a la monarquía por el cuello, ésta se vio obligada a decidir si se dejaba estrangular o hacía un último esfuerzo por defenderse del ataque» (Albertini, 1953: II, 123). Seguramente el régimen ruso podría haberlo entendido y permitir que Serbia recibiera un castigo por haber fomentado el terrorismo. La idea de los estadistas alemanes era también que Austria, su único aliado fiable, debía sobrevivir, y que la disputa balcánica debía localizarse entre Austria y Serbia. La decisión estaba ahora en manos rusas, cuyo régimen se vio obligado a salir en defensa de Serbia por razones «patrióticas», aunque confiaba en que habría mediación y se llegaría a algún arreglo.

Sólo entonces, del 25 al 28 de julio aproximadamente, cuando se hizo patente que Rusia no daría marcha atrás, se vieron las potencias enfrentadas a una guerra de mayores proporciones. Austria y Alemania encontraron nuevas razones para arriesgarse. Los estadistas austriacos se vieron contra las cuerdas: si querían impedir la guerra habrían de ser ellos, y no Serbia, quienes se retractaran, con las consiguientes secuelas para el nacionalismo. Los dirigentes austriacos

y serbios no parecían dispuestos al compromiso, pero los austriacos estaban presionados por los alemanes. La pelota pasó ahora al tejado alemán, cuyos estadistas temían una respuesta agresiva por parte de Rusia, pero se sentían atraídos por una guerra preventiva. Sorprendentemente, los rusos parecían dispuestos a medirse con Austria y Alemania, pese a saber que con la Triple Alianza Alemania defendería a su aliado. Si Rusia iba a lanzarse por la pendiente, desde el punto de vista alemán era mejor intervenir pronto, antes de que los rusos completaran su modernización militar (en 1917) y antes de que Austria fuera más débil. ¿Habría de quedarse la poderosa Alemania sin su lugar bajo el sol? El canciller Bethmann-Hollweg comentaba con pesimismo: «El futuro pertenece a Rusia, cuyo continuo crecimiento cierne sobre nuestras cabezas una terrible pesadilla». Bethmann y Moltke (el joven, no el vencedor de 1866-1871), el jefe del estado mayor alemán, hablaban del «riesgo calculado» de una guerra preventiva contra Rusia (Stern, 1968; Jarausch, 1969), y culpaban a la «agresión» rusa, lo que hizo mella en su opinión pública, al igual que en la de las restantes potencias, de modo especial en una Gran Bretaña aparentemente vacilante.

La respuesta británica era ahora decisiva. El enfrentamiento de Alemania con Francia y Rusia podía ser un riesgo calculado, pero si se añadía Gran Bretaña se convertiría casi en un suicidio. Sin embargo, los dirigentes alemanes creyeron hasta el 29 de julio que Gran Bretaña demoraría su intervención o se declararía neutral. Para mantener viva a Austria, Alemania debía convencerla de que atacara a Serbia. Alemania debía realizar un ataque repentino contra Francia, empleando a los austriacos para contener a Rusia hasta que se pudieran trasladar los recursos necesarios desde el oeste hasta el este. Para ello debería obligar a Francia al armisticio, como en 1870, antes de que los ingleses resolvieran; luego, se les podría sobornar con las colonias franceses. El riesgo aumentaba porque ahora los futuros enemigos de Alemania eran cada vez mayores. Así pues, los alemanes declararon la guerra, bloqueando la capacidad de decidir de rusos y franceses, obligados a defenderse conforme a las condiciones militares de la Entente. Los estadistas británicos dudaron pero, creyendo que la agresión alemana podía amenazar el Canal de la Mancha, resolvieron luchar. Hasta el último momento, las potencias trataron de demostrar que el agresor era su enemigo.

Nadie se retractó, por razones de peso, aunque de miras estrechas. En cada momento, el razonamiento de los estadistas de las po-

tencias consistió en elegir entre la escalada o algo peor (Remak, 1967: 147 a 150). Incluso en julio de 1914 los estadistas calculaban rápidamente las posibilidades alternativas de actuar dentro de los parámetros geopolíticos que hemos analizado. La racionalidad realista era aún patente; si no se materializó en un final racional pudo ser por la dificultad de predecir la respuesta de los otros en una situación que cambiaba por momentos, y porque la mayor parte de los actos «agresivos» (de Serbia, Austria, Rusia y Alemania) constituyeron el principios de una cadena de acciones y reacciones. La segunda escuela realista del embrollo añade este razonamiento.

Una crítica preliminar de la explicación realista

En esta narración hay algunas omisiones. Sin embargo, los conceptos de las dos escuelas realistas *Aussen* —los sagrados intereses geopolíticos nacionales de los estadistas (y reforzados quizás por un nacionalismo popular), defendidos racionalmente a largo plazo, pero confundidos en las crisis— pueden parecer útiles para la explicación de gran parte de los factores que condujeron a la guerra. Hasta las dos últimas décadas, las explicaciones se centraban casi exclusivamente en la diplomacia y se expresaban en estos términos (Mansergh, 1949; Albertini, 1952, 1953, 1957; Taylor, 1954; Lafore, 1965; Schmitt, 1966). Pero esto plantea al menos tres problemas fundamentales: la guerra no fue una consecuencia inevitable del reordenamiento geopolítico de los equilibrios de poder; la guerra no se percibió como un medio racional de llevar a cabo ese reordenamiento; y tanto la lógica geopolítica realista como los errores diplomáticos fueron moldeados en parte por fuerzas sociales y estructurales.

Dos razones nos permiten pensar que el auge y decadencia de las grandes potencias podrían haberse manejado pacíficamente durante el periodo. La primera es que este «equilibrio de las potencias» se asemeja poco a los restantes estudiados en este volumen e incluso a otros momentos de la historia europea. Por primera vez se parecía a un juego de suma cero, en el que si una potencia ganaba, otra tendría que perder, y ambas podrían resultar devastadas por los efectos de la guerra moderna. Las guerras no son la consecuencia inevitable de un determinado alineamiento de las potencias (como afirma Morgenthau). Una aproximación genuinamente «realista» tendría que comenzar teniendo en cuenta que las guerras se orientan hacia ciertas

metas. Como diría Weber, se libran por «intereses materiales o ideales», para asegurarse el beneficio o imponer valores ideales a otros países. Pero ahora, de pronto, no encontramos nada parecido. Como hemos visto, durante siglos la guerra sirvió para asegurar a las grandes potencias tanto el territorio como los mercados europeos o coloniales. Pero aquí no había colonias fácilmente derrotables (en todo caso, los «nativos» estaban dispuestos a venderse caro). No había tampoco pequeñas potencias que engullir, ya que Europa se encontraba dividida en grandes potencias y las pequeñas contaban con su protección. Sólo los Balcanes estaban menos institucionalizados; una guerra en su territorio, que no supusiera una conflagración general, habría constituido una actividad racional, orientada a la consecución de unas metas. Por otro lado, al contrario que en épocas pasadas (y que en el siglo XX), faltaba una ideología predominante que imponer a los pueblos conquistados: catolicismo, democracia, civilización, socialismo o fascismo. Desde el punto de vista ideológico todas las potencias pretendían estar defendiéndose.

Las guerras más recientes en territorio europeo habían constituido las últimas operaciones de absorción provechosas, me refiero a las de Prusia (dos veces) contra los pequeños estados alemanes. Se trata de un hecho significativo, porque la integración territorial masiva se había llevado a cabo en las décadas de 1860 y 1870, a un coste relativamente bajo y por Alemania. Como he sostenido en otra ocasión (Mann, 1988), las potencias institucionalizan las nuevas situaciones que les reportan más poder. Puede que debamos mirar con mayor interés a los *Estados*, especialmente al alemán, más que a la configuración general de las relaciones entre las potencias si queremos explicarnos las causas de este conflicto.

La segunda razón abunda en la primera. Gran Bretaña se encontraba ahora igualada por dos potencias. La guerra con Alemania era posible, pero un enfrentamiento con los Estados Unidos ni siquiera se planteaba en ninguno de los bandos. Los diplomáticos británicos sopesaron los cambios con realismo y se encogieron de hombros ante la imposibilidad de igualar los recursos militares estadounidenses en el continente americano, retiraron gran parte de la flota y avisaron en secreto a los políticos de que si los Estados Unidos invadían Canadá, Gran Bretaña no intentaría frenarlos (Kennedy, 1985: 107 a 109, 118 a 119). En el medio siglo posterior, la sustitución de la casi hegemonía británica por los Estados Unidos se cumplió pacíficamente, in-

cluso con colaboración. La guerra no acompaña de forma inevitable al reordenamiento geopolítico.

Naturalmente, se podría replicar que los Estados Unidos se encontraban a miles de kilómetros, en tanto que Alemania sólo estaba a unos cientos. La rivalidad industrial, comercial e incluso naval podía ocasionar problemas, pero una amenaza alemana al Mar del Norte, a los puertos del Canal de la Mancha y a las costas inglesas era harina de otro costal. Gran Bretaña no reunía recursos suficientes para defenderse al mismo tiempo de Estados Unidos y Alemania. La lógica geopolítica imponía la concentración sobre la amenaza más cercana. Sin embargo, los americanos ni siquiera consideraron la posibilidad de quedarse con Canadá, ni emplearon su potencia naval para cerrar el continente americano a Gran Bretaña, y no por generosidad —recuérdese su actitud imperialista en el Pacífico—, sino porque la colaboración entre las dos potencias se asentaba en una fuerte solidaridad transnacional, de tipo económico e ideológico. Los dos países hablaban la misma lengua y estaban dirigidos por los mismos grupos étnicos y religiosos, compartían un sistema democrático de partidos y eran socios comerciales e inversores. Sus regímenes *no estaban dispuestos* a enfrentarse, y si lo hubieran estado habrían tenido muchos problemas para convencer a sus respectivos ciudadanos de la necesidad de luchar unos contra otros. La sociedad anglosajona era entonces, como ahora, una comunidad normativa difusa, un conjunto de redes de poder ideológico que no resuelve con la guerra sus disputas familiares.

Estas normas anglosajonas se impusieron a las de naturaleza transnacional. Pero, en cierto sentido, no eran más que una versión extrema de las que existían para todo Occidente. Las potencias de esta civilización de múltiples actores de poder compartían una solidaridad normativa basada en la religión, la cultura, las filosofías laicas, las instituciones políticas, la economía, la monarquía, las genealogías aristocráticas y, cada vez en mayor medida, el racismo. En su época, muchos creyeron que estas cosas impedirían la aparición de definiciones territoriales y geopolíticas del interés; la propia diplomacia estaba diseñada para asegurar la paz mediante la negociación de los conflictos. Por ejemplo, las diferencias en materia colonial solían arreglarse según una secuencia regular, que iba del «incidente», a raíz de un acto temerario, a la «crisis» patriotera, la posterior meditación, la reunión en conferencia y, finalmente, el compromiso. No toda la diplomacia consistía en un conjunto de amenazas y pavoneos dentro

de un anárquico agujero negro; también se cultivaba el compromiso y el entendimiento normativo.

En efecto, la diplomacia conciliadora implicaba difusas normas antibélicas. La herencia de la Ilustración, trasmitida sobre todo por el liberalismo, establecía que las sociedades humanas debían solventar sus diferencias mediante la discusión pacífica y racional. Como subrayaban los liberales, los aspectos transnacionales del capitalismo aumentaban la interdependencia económica de los Estados, formando una especie de grupo de presión dirigido por los liberales y el capital financiero, *cuya* racionalidad evitaría la escalada hacia la guerra.

Estos grupos pacíficos de presión podrían responder a una de las preguntas «realistas» más desconcertantes. ¿Por qué *habría de participar* Alemania en una guerra de semejante capacidad destructiva contra Gran Bretaña si, como los Estados Unidos, ya la había sobrepasado dentro de un orden económico supuestamente dominado por aquélla? Hugo Stinnes, uno de los industriales más importantes de Alemania, lo expresó con estas proféticas palabras: «Si pudiéramos contar con tres o cuatro años más de desarrollo pacífico, Alemania sería la dueña indiscutible de Europa» (Joll, 1984a: 156). Tenía razón, y la habría tenido igualmente para la década de 1930 y probablemente para la de 1990; esperemos que los actuales regímenes alemanes —la *tercera* oportunidad para Alemania y para Europa— escuchen esta vez las sabias propuestas de un dominio pacífico, predominantemente basado en el mercado (la combinación de los tres primeros de mis seis tipos de economía política internacional); escribo esto el 3 de octubre de 1990, fecha de la reunificación alemana. Si las hubieran escuchado los regímenes anteriores, Alemania se habrían ahorrado muchos problemas a sí misma y se los habría evitado al mundo entero.

Así pues, no es cierto que Alemania atacara para obtener alguna ventaja o para defenderse de su acorralamiento o de la hegemonía británica. Como hemos visto en el capítulo 8, aquella hegemonía no estaba vigente; los servicios comerciales especializados y «hegemónicos» ya no eran exclusivamente británicos. En cuanto al acorralamiento, tendremos ocasión de comprobar que fue en parte consecuencia de las acciones de Alemania y en parte de un exagerado nacionalismo. Pero, ante todo, la agresión alemana no constituyó un acto defensivo, porque no había nada de que defenderse. Los intereses realistas y capitalistas de Alemania se hubieran garantizado mejor conservando el *status quo* —aunque queramos llamarlo acorralamiento o hegemonía británica— que provocando una guerra. La

culpa es atribuible a los actores de poder alemanes, como han reconocido muchos historiadores, aunque otras potencias no están exentas. Aún quedan por explicar cómo se superaron los intereses colectivos y las normas más pacíficas de Occidente. Las razones habrá que buscarlas no tanto en meros intereses capitalistas o realistas como en cuestiones sociológicas.

Quizás deberíamos volver a los estadistas, cuyas raíces sociales se ahondaban en un antiguo régimen para el que la guerra había constituido un deporte normal a lo largo de la historia. Pero la agresión no resultó tanto de la salvaje retórica militarista de los soldados del antiguo régimen y los estadistas de las monarquías. Muchos de ellos se pronunciaban por el mantenimiento de la paz, porque el transnacionalismo del antiguo régimen no había muerto. Los monarcas seguían practicando la solidaridad familiar; los notables participaban en una cultura transnacional basada en el parentesco, la Ilustración y la Iglesia. La guerra que exaltaban era limitada, privada y profesional, no el conflicto masivo legitimado por la nación (que tanto les había asustado de 1792 a 1815). El antiguo régimen podía contener una gran dosis de militarismo, pero no buscaba una guerra de movilización masiva capaz de provocar una enorme carnicería, de destruir la economía y derrocar los regímenes. Muchos generales previeron la pesadilla que se avecinaba; los almirantes, por su parte, no deseaban ver en el fondo del mar a sus espléndidos barcos de guerra.

De hecho, muchos estadistas y comandantes de las potencias más agresivas aconsejaban prudencia. En Austria se hablaba de que la monarquía no podría sobrevivir a una guerra contra Rusia. El alto mando austriaco no deseaba que se movilizaran sus ejércitos contra Rusia y Serbia al mismo tiempo, pero los acontecimientos de agosto de 1914 impusieron ambas cosas. Los alemanes reclamaban prudencia ante la posibilidad de que la inestabilidad austriaca empujara a su país la guerra, ante la confianza en el apoyo militar austriaco, ante el enfrentamiento simultáneo con Francia y Rusia y ante la entrada en guerra sin haberse asegurado previamente de la neutralidad británica. Los almirantes alemanes avisaron de que no podría desafiar a la armada británica. Pero, de nuevo, los acontecimientos de 1914 lo impusieron. Los rusos afirmaban que el sigilo era la mejor ruta hacia Constantinopla, mientras que la guerra con Alemania pondría en peligro el régimen político. Los generales rusos avisaban del riesgo de entrar en guerra con el programa de modernización militar a medias,

y los almirantes adelantaban que sus flotas podrían verse atrapadas en el Báltico y el Mar Negro. En efecto, todo iba a ocurrir en 1914.

En realidad, en las tres monarquías existían otras facciones del antiguo régimen menos pesimistas al respecto, y otras aún que cambiaron de opinión o dudaron, pero los malos augurios parecieron intimidarlos también a finales de julio y principios de agosto, cuando aún había paz, se calculaba quiénes eran los enemigos y se esperaba. La historia se encargaría de demostrar que hacían bien y que su miedo estaba justificado. La guerra resultó tan desastrosa para las tres monarquías que ninguna sobrevivió a ella.

Así pues, el conflicto no fue el resultado racional de una geopolítica racional. Sus principales iniciadores —las monarquías austriaca, alemana y rusa— perecerían en él, tal como muchos habían temido. A medida que Europa se deslizaba hacia la guerra, los estadistas encontraban difícil explicar lo que estaba ocurriendo y el papel que ellos desempeñaban en los acontecimientos. Muchos se entregaron a las metáforas del destino. Al anochecer del 3 de agosto, sir Edward Grey, mientras contemplaba la escena que se desarrollaba en la calle desde la ventana del Ministerio de Asuntos Exteriores, pronunció unas famosas palabras: «Las luces se están apagando en toda Europa. No volveremos a verlas alumbrar en lo que nos queda de vida». El canciller Bethmann-Hollweg decía: «Las cosas se nos han ido de las manos y la piedra ha comenzado a rodar ... Una fatalidad más fuerte que cualquier poder humano se cierne sobre Europa y sobre nuestro país». Sazonov, el ministro de asuntos exteriores ruso, confesaba el 25 de julio que se sentía «superado por los acontecimientos». Cuando el embajador alemán previno al zar de que la guerra sería inevitable si no paraba la movilización, éste señaló al cielo y declaró: «Estamos en manos del Altísimo», y su ministro del interior añadió: «No podemos eludir nuestro destino». Hasta los actos más tajantes se atribuían al hado. Finalmente, cuando el emperador Francisco José resolvió que Austria debía castigar a Serbia y afrontar las consecuencias, declaró al jefe del alto mando austriaco: «Si la monarquía está condenada a perecer, hagamos que perezca decorosamente», lo que no deja de ser un curioso sentido del decoro (Albertini, 1953: II, 129, 543, 574; Joll, 1984a: 21, 31).

Estos actores no se plantearon su propia racionalidad porque creían percibir la presencia de fuerzas superiores a la razón humana, pero los críticos posteriores no les han justificado con tanta ligereza. Si la guerra fue formalmente irracional (puesto que no logró ninguna de

sus metas) y sus iniciadores abrigaban fuertes sospechas sobre los resultados o los conocían a ciencia cierta, no cabe duda de que se comportaron como irracionales. La acusación se extiende a los antiguos regímenes y clases dominantes, a los movimientos nacionales e incluso a la civilización europea en su conjunto. La guerra se ha entendido como el producto del orgullo desmesurado del antiguo régimen, auténtico «jinete del apocalipsis ... dispuesto a precipitarse en el pasado» en su continuo «viaje a la regresión» (Mayer, 1981: 322); como el inevitable destino de la monarquía autoritaria y militarista, ejemplificada por Alemania (Fischer, 1967; Berghahn, 1973; Geiss, 1984); como la derrota de la diplomacia a manos de un «nacionalismo agresivo» (Schmitt, 1966: II, 482); como el triunfo del darwinismo social (Joll, 1984c; Koch, 1984); o de la fase corporativa e imperialista del capitalismo «organizado» sobre el liberalismo de la Revolución Industrial (la interpretación de Hilferding y Lenin). A otros, la aparición de las teorías freudianas precisamente en aquellos años y en aquel contexto (Freud fue un patriota austriaco en 1914) les ofrece la oportunidad de deducir que Europa estaba poseída por Tánatos, un instinto de muerte inducido por el «delirio estatista» (Todd, 1979: 60 y 61).

Pero todas estas explicaciones presentan un problema que ha permanecido latente en nuestro análisis. Al contrario que el realismo, no podemos atribuir el lenguaje de la racionalidad o la irracionalidad a las «potencias», porque en la realidad no fueron actores individuales. Aunque formalmente negociaran, amenazaran y declaran la guerra, quienes lo hacían en realidad eran los estadistas. Pero éstos formaban un conjunto plural. «Austria-Hungría» comenzó la guerra cuando Berchtold, su ministro de asuntos exteriores, Stuyck y Tisza, los primeros ministros de Austria y Hungría, y Francisco José, el emperador, aprobaron el ultimátum a Serbia, y cuando este último firmó la orden de movilización general presentada por Conrad, el jefe del alto mando, o cuando firmó los telegramas de declaración de guerra presentados por Berchtold. Sin embargo, estas cinco figuras representaban distintos caracteres y creencias, así como puntos de cristalización de varias redes de poder político. El emperador, anciano y cauto, quería conservar su dinastía, preferiblemente con el consenso eslavo y sin guerra. El jefe del alto mando representaba la facción partidaria de la guerra. Hacía tiempo que estaba convencido de que la monarquía sólo podría salvarse aplastando a Serbia, y, al parecer, quería convertise en un héroe para lograr casarse con su auténtico amor (lo sugiere Williamson, 1988: 816). El dubitativo ministro de exteriores

era sensible a las presiones alemanas; el primer ministro austriaco, inexperto; el premier húngaro sentía poco interés por los asuntos exteriores.

La idea de que era «Austria» quien decidía o actuaba responde sólo a un mito. Austria actuó temerariamente contra Serbia porque las presiones que ejerció Alemania sobre Berchtold (a quien también afectó profundamente el asesinato del archiduque) se combinaron con las presiones de Conrad para imponerse a los escrúpulos del emperador y a la debilidad de los dos primeros ministros. Pero incluso esto minimiza la complejidad de las redes de poder de la política austriaca. Austria, en tanto que «potencia», no era un actor, sino un campo de fuerzas que cristalizaron en diversas formas no dialécticas, con Francisco José en su centro, quien, como vimos en el capítulo 10, dejó deliberadamente en la vaguedad la constitución, las potencias y la composición de su corona con el objetivo de extraer el mayor provecho posible a su práctica segmental de «divide y vencerás». El resultado fue la división en facciones.

El emperador vivió incómodamente su situación de centro de todas estas facciones. En 1911 mantuvo una tormentosa audiencia con Conrad, durante la cual criticó el trato que éste daba a Aerenthal, el ministro de exteriores: «Esos ataques incesantes a Aerenthal, esos alfilerazos, los prohíbo ... Los reproches recurrentes sobre la cuestión de Italia y los Balcanes se dirigen contra mí mismo, contra la política que yo hago ... que es una política de paz» (Albertini, 1952: I, 351). Pero Francisco José no decidía la política. En su Estado polimorfo era sólo un punto central en el que cristalizaban numerosas redes de poder; unas internas, otras procedentes del exterior (como las presiones alemanas), y otras aún, de sus fronteras (como el nacionalismo eslavo del sur). Pedirle, a él y a sus consejeros, «racionalidad» realista sería sencillamente absurdo porque la consistencia de las metas y la selección de medios eficaces para alcanzarlas estaban condicionadas por las luchas entrelazadas de las cristalizaciones de poder que contendían entre sí.

El problema no residía en la supuesta irracionalidad de la sociedad europea. Por el contrario, existían dos grupos de cálculos racionales que interactuaban de forma imprevisible. En primer lugar, la geopolítica y la política interior se cruzaban en todos los Estados de formas distintas y volátiles. En segundo lugar, a las potencias les resultaba muy difícil predecir las reacciones de las demás a sus acciones diplomáticas. El problema no estaba en la irracionalidad de los actores, sino

en su pluralidad, en sus diferentes identidades que les imponían distintas estrategias, cuya interacción era imprevisible y podía resultar desastrosa. Así pues, veremos ahora las principales redes de poder que se escondían tras los estadistas y las «potencias». Para ello me ocuparé de distinguir las dos cristalizaciones estatales relativas a la representación, es decir, las monarquías y las democracias de partidos.

Los estadistas de las monarquías

En el capítulo 12 tuvimos ocasión de comprobar que la guerra y la política exterior habían sido durante siglos un asunto privado y parcialmente «aislado», que entraba de lleno en las prerrogativas del monarca. Puesto que como tal asunto privado fue recogido por las constituciones de las tres monarquías, las opiniones y el temperamento del monarca tenían un peso considerable. El káiser Guillermo II mantuvo unas determinadas relaciones con Gran Bretaña porque respetaba la autoridad de su abuela Victoria, pero le enfurecía el descaro de Eduardo VII, heredero de la reina y tío suyo. Esto, más el temperamento impulsivo y jactancioso de Guillermo y su manía de pavonearse con el uniforme militar, supusieron «una contribución personal muy importante al empeoramiento de las relaciones anglo-alemanas», según dice Kennedy (1980: 400 a 409; *cf.* Steiner, 1969: 200 a 208). Pero en el momento en que Europa se deslizaba hacia la guerra no existía ningún carácter capaz de dominar la política exterior, ni entre los monarcas ni entre los primeros ministros (el último había sido Bismarck). El zar Nicolás II era un hombre débil que tendía a la paz, pero se vio lanzado a la guerra por sus consejeros. A Francisco José, más viejo y más limitado, la experiencia, mayor y más amarga, le había enseñado a ser precavido. Sin embargo, también a él le convencieron. El káiser Guillermo II era inestable, se mostraba militarista y agresivo, hacía gala de una retórica racista, pero las crisis le aterrorizaban y no sabía resolver. Entró en acción por los consejos de otros. Tendremos que descubrir quiénes eran las lenguas viperinas de aquellos regímenes.

El acceso al monarca y la posibilidad de ejercer alguna influencia sobre él constituyó el centro político de los regímenes autocráticos y semiautoritarios. Un proceso que se complicó a medida que se modernizaban los Estados. Hemos comprobado en el capítulo 9 que en Alemania cristalizaron no menos de once redes de poder político dis-

tinto alrededor de este centro. Cuatro de ellas canalizaron su influencia directamente sobre el káiser en materia de política exterior:

1. Las redes civiles, encabezadas por el canciller, el ministro de asuntos exteriores y el ministro prusiano de la guerra, canalizaron el consejo de los ministros y de los diplomáticos. Estas personalidades rendían cuentas, aunque no constitucionalmente, al *Reichstag* y a la Dieta prusiana y, por tanto, a la opinión pública, incluida la que formaba los «partidos» nacionalistas, cada vez más fuertes y atrincherados (como hemos visto en el capítulo 16) dentro de la propia administración del Estado. Las redes civiles eran incoherentes porque en la administración había tantos estadistas realistas como nacionalistas estatistas «archileales», que en este momento reclamaban una política exterior más agresiva que los meros cálculos diplomáticos.
2. Las redes militares, especialmente los altos mandos del ejército, más el almirantazgo y los consejos de guerra *ad hoc*, por ser instituciones vinculadas por una cadena de mando poco clara, resultaban igualmente incoherentes desde el punto de vista institucional, aunque contaban con solidaridad social. Procedían en gran parte de los *Junkers* y otros grupos aristocráticos. En parte representaban a estas clases, y en parte al militarismo de casta que hemos visto crecer a lo largo del periodo.

Puesto que la vaguedad de la constitución no pudo solventar las disputas que estallaban entre las dos redes principales o dentro de ellas, surgieron otras dos redes al efecto:

3. Tres «gabinetes» (civil, militar y naval), nacidos de la propia casa del monarca, canalizaban supuestamente la información entre aquél y los ministros, aunque en realidad eran instituciones cortesanas que operaban con autonomía.
4. El sistema de *Immediatstellung*, originalmente el derecho de los altos mandos del ejército a disfrutar de audiencias personales con el káiser sin la presencia de los ministros, se amplió durante el siglo XIX a otros funcionarios civiles y militares. De este modo, las personas de familia de alto rango eludían los restantes canales y trataban de influir directamente en el emperador.

Las relaciones entre estas cuatro redes, y dentro de ellas, eran opacas e inestables. Surgían como respuestas *ad hoc* en los momentos de crisis, aunque (como vimos en el capítulo 9) formaban también parte de la estrategia segmental de «divide y vencerás» propia de la

monarquía autoritaria, que conservó con tanto éxito el poder de los Hohenzollern en una sociedad industrial moderna. Su objetivo era disminuir la transparencia de la responsabilidad parlamentaria, burocrático-civil y burocrático-militar (para las pruebas, por desgracia dominadas por una controversia sobre el poder personal que acumulaba el káiser, véanse Hull, 1982; los ensayos de Rohl, Kennedy y Deist en Rohl y Sombart, 1982; y Eley, 1985). De ahí «la proliferación de intrigas, cábalas y venganzas» en la política exterior, según Cecil (1976: 322). En los capítulos anteriores hemos asistido a esta tragedia alemana. Al contrario que su antecesor prusiano, el Estado alemán no contaba con una institución donde se adoptaran las decisiones fundamentales. Había un soberano, pero no existía soberanía.

En el capítulo 10 he demostrado que las redes de poder austriacas eran incluso más elásticas, ya que la versión más personal y dinástica del «divide y vencerás» de Francisco José estaba menos institucionalizada que en Alemania. El soberano intentó en este caso institucionalizar la soberanía real en él mismo. Pero (como ya hemos visto) la ampliación de las funciones del Estado moderno —exacerbada por su complejidad multinacional— convirtió la soberanía personal efectiva en una quimera (y no precisamente en la del superhombre nietzschiano). Aunque no he dedicado un estudio en profundidad a la administración rusa, fue también dinástica y autocrática, y produjo un faccionalismo igualmente intrigante para los oídos del zar y una corte no menos chismosa. Ninguna de las tres monarquías pudo institucionalizar una soberanía efectiva.

Pero la intriga y el faccionalismo polimorfo no equivalían al caos. Las redes de poder político alemanas formaron un sólido conjunto en torno a las cuatro cristalizaciones de nivel superior que hemos examinado en el capítulo 9, donde destaqué que como resultado de las distintas estrategias de «divide y vencerás» no se pudo evitar la competencia entre los actores de poder (a los que habría que sumar las metas de socialistas, liberales de izquierda y partidos de las minorías étnicas). Así, como en la política interior, las cristalizaciones no se priorizaban, sino que se perseguían añadiéndose unas a otras. El hecho de que apenas se realizaran elecciones entre ellas sería, como veremos, una de las principales causas de la guerra.

Dos de las cuatro cristalizaron menos directamente. Los estadistas procedían en su mayoría del antiguo régimen, de ahí que fueran sólo moderadamente *nacionalistas*, porque el nacionalismo representaba una ideología más popular. Pero éste presionaba dentro y fuera

de sus filas, desde el ambiente de los funcionarios medios y altos y desde las instituciones educativas del Estado. En segundo lugar, en su calidad de miembros del antiguo régimen no cristalizaron como *capitalistas* netos o al menos no como capitalistas industriales en el sentido moderno. Pero, como reaccionarios, demostraron un odio perdurable hacia los enemigos del capitalismo, los socialistas y la clase obrera. En 1900 estar firmemente asentado en un «partido de orden» significaba ser protocapitalista. Los estadistas cristalizaron como *monárquicos* y *militaristas* más directamente. Casi todos eran cortesanos. En palabras de uno de ellos, constituían la «manada dirigente», pero las manadas huyen de estampida cuando se asustan. Varios cancilleres y secretarios de Estado dudaron de la cordura del káiser y llegaron a discutir la posibilidad de imponerle limitaciones, pero nunca actuaron: «No se atrevían porque, brillantes o vulgares, todos, salvo Bismarck, eran cortesanos antes que estadistas» (Albertini, 1952: I, 160).

Formalmente, el monarca decidía la política exterior; en realidad, lo hacía el monarquismo con el método de «divide y vencerás» y la intriga cortesana. En la víspera de la guerra su actividad fue tan inútil como la de los soldados. Casi todo el entorno del káiser, de sus gobiernos y de los que disfrutaban de la *Immediatstellung* eran oficiales de las familias nobles más conservadoras. El ejército constituía el campo de entrenamiento del antiguo régimen. Los regimientos de elite rodeaban al monarca. La ley marcial que preservaba el orden impregnaba todo el Estado.

Los altos mandos

Algunas de las características del ejército alemán se reproducían en todos los regímenes. El servicio militar dominaba aún el antiguo régimen en todas las monarquías, tanto autoritarias como constitucionales. Los monarcas, las cortes y los altos mandos jugaban juntos, pensaban juntos y luchaban juntos. El ritual de la vida militar enfatizaba aún valores compartidos con la aristocracia y la realeza (muchos todavía lo hacen). Los desfiles de promoción de las escuelas militares superiores, las condecoraciones, las maniobras y las revistas militares se desarrollaban con un espíritu de realeza. Los altos oficiales eran nobles o se habían ennoblecido como premio a sus servicios. En el comedor de oficiales se perpetuaban los usos caballerescos. A medida

que crecía el ejército y se generalizaba la conscripción (salvo en Estados Unidos y Gran Bretaña), los hijos de la clase media accedían a ese universo como cadetes u oficiales de la reserva. Podría parecer una brillante estrategia del antiguo régimen para atraer a la clase media, pero escondía dos amenazas para la solidaridad interior del antiguo régimen; una generalizada, la otra distinta según los países.

La consecuencia variable fue que el cuerpo de oficiales compartía ahora algunas tensiones políticas con la sociedad. El enfrentamiento de la burguesía con la «antigua corrupción» se tradujo en un modernismo tecnocrático opuesto al conservadurismo aristocrático. Donde el conflicto entre el antiguo régimen y la burguesía pudo resolverse, el ejército se modernizó con relativa tranquilidad, como en Alemania y Gran Bretaña. En Francia, la unidad no se logró hasta los enfrentamientos que se produjeron a raíz del caso Dreyfus. El ejército austriaco se mantenía dividido entre las facciones partidarias del control dinástico y las que apoyaban el control parlamentario-ministerial, lo que redujo su coherencia (Stone, 1975: 124; Rothenberg, 1976: 79). En 1914 las divisiones en el seno del alto mando ruso no permitieron imponer una misma estrategia a los diferentes cuerpos del ejército. Cuando Rusia entró en guerra, sus generales tradicionales defendían las fortalezas al tiempo que los modernizadores desplegaban sus fuerzas por frentes definidos en función del ferrocarril, de modo que los frentes del sur y del norte apenas estaban coordinados (Stone, 1975: 17 a 127). Entre los oficiales rusos había ahora tecnócratas liberales que se impacientaban con la monarquía. Su lealtad no iba a resistir tres años de guerra desastrosa.

Pero todos los regímenes, liberales o autoritarios, tuvieron que afrontar un problema más general. Incluso aquellos cuerpos de oficiales que habían incorporado a un tiempo elementos de la clase media y del antiguo régimen, actuaban misteriosamente, a espaldas de todos, pese a que sus actos tenían en potencia la capacidad de destruir tanto al régimen como a la sociedad civil. La formación y las tácticas militares se desarrollaban al margen de la vida cotidiana de la aristocracia y de cualquier otra clase. El deporte y las luchas en el patio de recreo ya no se relacionaban con la guerra. El ejército se había convertido en una fábrica gigantesca, eficazmente jerarquizada, integrada por dentro, escondida del exterior, que sabía poco de lo que ocurría fuera de sus muros. Sin embargo, las cosas que pasaban dentro de ellos eran de enorme importancia a causa del proceso de industrialización de los conflictos bélicos. La táctica se hizo agresiva, típica del

ataque preventivo; sus anteojeras tecnocráticas le impidieron percibir la importancia de la negociación diplomática y de la formación de alianzas para conseguir la victoria.

Los planes tecnocráticos de los altos mandos habrían podido prevenir a los estadistas, pero este hecho dependió siempre de la canalización de la responsabilidad. Las democracias de partidos fueron más conscientes porque se habían formado en la resistencia a las monarquías despóticas que empleaban armas para reprimir a sus ciudadanos. En Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos e Italia, el gobierno revisaba los planes de los altos mandos (Steiner, 1977: 189 a 214; Bosworth, 1983: 44 a 60). En 1914 Poincaré restringió la movilización francesa a 10 kilómetros de la frontera para evitar los choques, sin atender a las quejas de sus generales. El gobierno francés vetó los planes de realizar una ofensiva a través de Bélgica del mariscal Joffre, para no indisponerse con los británicos. Sin embargo, las consultas entre los militares británicos y franceses a raíz de la Entente fueron mantenidas en secreto para el gabinete y condicionaron a los diplomáticos. En las tres monarquías los controles eran mucho menos formales; sin gabinetes de gobierno, con el monarca al frente del ejército y alguno de sus parientes al mando efectivo, el control quedaba en manos de las intrigas cortesanas. En 1914 el ejército austriaco representaba el puntal «transnacional» de la monarquía. Los ejércitos ruso y alemán habían *creado* sus respectivos imperios; el segundo mantuvo un extraordinario grado de influencia en el Estado gracias a una serie de victorias rápidas y deslumbrantes que habían causado pocas bajas. Las potencias tienden a institucionalizar todo lo que aumenta su grandeza. Tras la caída de Bismarck, el ejército alemán eludió su responsabilidad ante el Estado, ya que la autoridad de los gabinetes militares y el alto mando se impuso a la del ministro de la guerra, responsable ante el *Reichstag*. Este organismo podría haber cambiado las cosas rechazando el presupuesto militar para siete años, pero nunca se atrevió a ello (Craig, 1955: capítulo 6).

Sin embargo, no había unanimidad entre los militares respecto al empleo de su poder. Tanto en el ejército como en la armada existían facciones enfrentadas, con escaso control político y consistencia militar (Herwig, 1973: 175 a 182; Kitchen, 1968). Los militares no comprendían la diplomacia, ni estaban interesados en ella. El ejército alemán fue antirruso por casualidad, mientras la armada se mostraba antibritánica; pero la «manada dirigente» prestaba poca atención a la geopolítica, a la *Weltpolitik* o a la *Mitteleuropa* (como veremos más

adelante), al sistema de alianzas o a la movilización económica, y mucha al conservadurismo interno y a la experiencia en el campo de batalla. Parece que durante el famoso gobierno de guerra alemán de diciembre de 1912 los generales intentaron persuadir al káiser de la necesidad de comenzar una «guerra preventiva» contra Rusia, supuestamente un aumento de la escalada de los planes bélicos alemanes. El almirante Tirpitz se opuso aduciendo que la armada no se encontraría lista en dieciocho meses (prácticamente la fecha en que comenzó en realidad la guerra). Pero aquella decisión aparentemente catastrófica no produjo preparativos bélicos inmediatos. No se tuvieron en cuenta ni los preparativos diplomáticos (para aislar a Rusia) ni los problemas de la economía de guerra ni siquiera la coordinación entre el ejército y la armada (Rohl, 1973: 28 a 32; Hull, 1982: 261 a 265). Tanto el uno como la otra formaban los compartimentos estancos de un militarismo tecnocrático estrecho de miras.

Cómo llegaron a la guerra los estadistas monárquicos y los altos mandos

El poder militar alcanzó el momento culminante de su historia a finales de julio y principios de agosto de 1914. De hecho, la guerra comenzó como una serie de movilizaciones militares que provocaron varias declaraciones de guerra entre el 28 de julio y el 4 de agosto. Las movilizaciones rusa y alemana resultaron decisivas para la escalada.

En Rusia, el zar, gran parte de los políticos y el nuevo jefe del estado mayor, Yanushkevich, apoyaban la movilización parcial contra Austria —no la simultánea movilización general contra Alemania— para disuadir a aquélla sin provocar a los alemanes. Yanushkevich sugirió al zar (y a los alemanes) el 25 de julio que era posible realizar una movilización parcial contra Austria, pero su alto mando le informó rápidamente de que el estado de la red ferroviaria impedía toda movilización inferior a la general, lo cual era a todas luces una exageración. La movilización parcial habría sido posible, aunque hubiera obstruido cualquier intento posterior de movilización general. Los generales emitieron un juicio sólo sobre lo que les concernía, la eficacia militar, convencidos de que ciertas repercusiones diplomáticas, por ejemplo, saber a ciencia cierta contra qué potencias iban a enfrentarse, no eran asunto suyo.

Pero esta vez no se produjeron frenéticas intrigas cortesanas. El 29 de julio el zar retrasó su decisión firmando dos órdenes de movilización distintas, una parcial y otra general. Yanushkevich se guardó las dos en el bolsillo; en las treinta y seis horas siguientes recibió el mandato de realizar primero la general, luego la parcial y luego de nuevo la general. A las 5 de la tarde del 30 de julio transmitió la orden de movilización general, un paso decisivo hacia la guerra. Parece ser que los oficiales de los cuarteles generales arrancaron los cables telefónicos ¡para evitar que se cambiara de opinión! Los alemanes conocieron inmediatamente la movilización e interpretaron (conforme a sus propios planes) que significaba el comienzo de la guerra. Pero el alto mando había garantizado al zar que las tropas rusas se mantendrían en sus posiciones defensivas de dos a tres semanas. El 26 de julio, Sazunov, el secretario de asuntos exteriores, parecía desconcertado cuando, durante una entrevista, preguntó al embajador alemán: «Supongo que la movilización no significa una guerra también con ustedes, ¿no es así?». «En teoría puede que no», replicó el embajador, «pero ... una vez que se ha apretado el botón y se ha puesto en marcha es difícil parar la maquinaria» (Albertini, 1953: II, 481). La metáfora del fatalismo adoptaba ahora la forma del botón. Pero ni siquiera estas palabras convencieron a los rusos de que para los alemanes la movilización tenía un significado concreto y peligroso.

Ni los dirigentes rusos ni los alemanes comprendieron que aquellas diferencias que tanto les angustiaban entre la movilización parcial y la general carecían de importancia. Las cláusulas militares de la Triple Alianza habrían empujado a Alemania a la movilización general aunque Rusia se hubiera movilizado sólo contra Austria. Y este hecho habría provocado a su vez la movilización general rusa. Más aún, en tales condiciones *cualquier* movilización rusa era un error; por un lado, provocaba a Alemania; por otro, ignoraba las consecuencias militares de la diplomacia en el frente austriaco. Si Rusia hubiera conservado la tranquilidad, Austria habría movilizado a su ejército contra Serbia, en dirección sur, es decir, más lejos de la frontera rusa. Si Rusia hubiera decidido movilizarse e invadir después, Austria habría sido despojada de sus defensas (Albertini, 1953: II, 290 a 294, 479 a 485, 539 a 581; *cf.* Turner, 1968; Schmitt, 1966: 249 a 256, aporta el punto de vista ruso).

El análisis de las razones de Estado y el interés nacional resulta apropiado para los seminarios y los estudios académicos de los realis-

tas, pero la adopción de decisiones rápidas en una circunstancia cambiante y peligrosa es cosa muy distinta. Lo que ocurrió fue, sencillamente, que aquella corte fue incapaz de enfrentarse a los siguientes hechos: (1) los cortesanos militares no tenían otras miras que la eficacia técnica; (2) el ministro del exterior quería evitar la guerra, pero ignoraba por completo los asuntos militares y carecía de influencia en la corte; (3) los grandes duques estaban divididos; (4) la capacidad de concentración del zar era limitada; y (5) la zarina dependía de la opinión de Rasputín. La escalada rusa se debió tanto a la división de las responsabilidades como a la inadecuación de su monarca y a las intrigas no resolutivas que suelen afectar a las monarquías. La teoría del embrollo se adapta bien al caso ruso.

La segunda escalada corresponde a la respuesta alemana del 31 de julio proclamando su intención de entrar en guerra *(Kriegsgefahr)* y planteando a Rusia un ultimátum de doce horas para que cancelara la movilización. La movilización alemana supondría entonces la guerra sin vuelta atrás. La complejidad técnica y los rígidos calendarios del plan de Schlieffen de 1905 desarrollaron después las tácticas de ofensiva militar que he analizado en el capítulo 12, según la cual las tropas movilizadas habrían de concentrarse *al otro lado* de la frontera, en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, todos ellos países neutrales. La eliminación de Holanda con las modificaciones introducidas por Moltke en 1911, convirtieron a los otros dos países en factores esenciales de la ofensiva. El ferrocarril luxemburgués debía ser ocupado en el primer día de la movilización. Lieja (Bélgica), en el tercer día, según declaraba el plan. Una vez puesta en marcha, la movilización alemana no se pararía ante la violación de la neutralidad, aunque le costara la guerra con Francia y probablemente con Gran Bretaña.

Sorprende, no obstante, que el alto mando alemán no revelara nada de esto. Hasta el 31 de julio no se comunicó al canciller que la movilización implicaba la violación inmediata de la neutralidad belga. Ni siquiera lo sabían con seguridad los aliados austriacos, aunque lo sospechaban su altos mandos. El káiser no supo nada de Lieja hasta que la ocupación se produjo el 4 de agosto. Como el canciller comprendió enseguida, este hecho empujaría a Gran Bretaña a la guerra, pero ya era demasiado tarde para cambiar los planes. Los últimos pasos de Alemania se debieron a la voluntad del alto mando, al margen de los canales políticos. No existía un gabinete que impusiera su autoridad por encima de otras. El canciller Bethmann y el jefe del alto

mando, Moltke, eran equivalentes, cada uno de ellos respondía sólo ante el káiser y disponía de sus propios canales de influencia. El almirante Tirpitz estaba por debajo del jefe del estado mayor, pero como cortesano era más influyente. Todos observaban y explotaban el cambiante humor del káiser. Moltke, que había apoyado la guerra preventiva desde 1912, explotó la belicosidad del soberano persuadiéndole el 30 de agosto de que promulgara el *Kriegsgfahr* y el ultimátum al día siguiente. A través de sus propios oficiales garantizó personalmente al alto mando austriaco el apoyo alemán contra Rusia, a lo que Berchtold, el ministro austriaco de asuntos exteriores, exclamó: «Pero, ¿quién manda en Berlín, Moltke o Bethmann?» (Turner, 1970: 109). La respuesta, según Tirpitz, era que

> nunca se produjeron consultas colectivas entre los dirigentes políticos y militares, ni sobre los problemas político-estratégicos de la dirección de la guerra ni sobre la posibilidad de que ésta adquiriera dimensiones mundiales. Ni siquiera se me informó de la invasión de Bélgica, que desde el momento en que se produjo planteó problemas navales [Albertini, 1957: III, 195, 259 y 251].

Moltke, Jagow, el ministro del exterior, y Bethmann habían propuesto de forma intermitente la guerra preventiva desde 1912, sin una sola consulta a los industriales o los financieros respecto a las consecuencias económicas del conflicto (Turner, 1970: 84 y 85). Militares, diplomáticos y capitalistas recorrían sus propios caminos e influían en sus distintas redes de poder estatal para imponer distintas políticas especializadas. Sólo tenían por encima un káiser volátil. Pero también en Berlín reinaba el embrollo.

En Viena, el mayor embrollo se producía entre las redes de poder militar y diplomático. El mariscal de campo Conrad continuaba dirigiendo los planes militares, pero no tenía competencia ni podía ejercer control alguno sobre la diplomacia que decidía quiénes eran los enemigos de Austria. La presión alemana de última hora forzó la movilización austriaca contra Rusia y contra Serbia. De ahí que el primer día de la Gran Guerra los ejércitos del Estado que la había comenzado, que había preparado durante más tiempo la ofensiva y que quizás contaba con la única estructura de mando unida, se encontraban cambiando frenéticamente de trenes de la frontera serbia a la frontera rusa.

Pero el embrollo no aparece menos entre las numerosas redes diplomáticas. Hartwig, el ministro ruso ante Serbia, había inflamado las

iras de Belgrado contra Austria durante años, valiéndose del apoyo de sus patronos en la corte rusa, aunque su gobierno no aprobaba semejante conducta. El primer ministro serbio había sospechado algo del complot para asesinar al archiduque en Bosnia (organizado por sus enemigos dentro del gobierno). Pero olvidando que el ministro de finanzas austriaco administraba Bosnia, avisó al ministro equivocado, es decir, al belicoso ministro austriaco del interior, que suprimió el mensaje. Tschirschky, el embajador alemán, fomentó la belicosidad austriaca transmitiendo a Viena la opinión de un halcón, Jagow, el ministro de exteriores, en vez de enviar la del vacilante canciller Bethmann. Von Bulow comentaba con ironía que Bethmann y Jagow formaban el «comité de la catástrofe pública» (Turner, 1970: 86). Desde Londres, el embajador alemán, Lichnovsky, aconsejaba cautela a Berlín, pero Jagow, y Bethmann a veces, neutralizaban sus despachos.

La agresión de las monarquías no respondió a un militarismo implacable y sin fisuras. En primer lugar, la agresión representaba una posibilidad para ese militarismo casi informal del régimen, para su disposición, mayor que la de los regímenes liberales, a diferir los asuntos a los hombres uniformados tanto en la política interior como en la geopolítica. Ésta es la parte válida de aquellas tradicionales teorías liberales de la guerra que afirman la culpa de los regímenes autoritarios (volveré sobre ello en breve). En segundo lugar, fue el profesionalismo de aquellos ejércitos que habían formado una casta aislada lo que les condujo a unas prácticas técnicas más agresivas. En tercer lugar, aquella guerra catastrófica constituyó el resultado de las estrategias segmentales de la monarquía, basadas en la práctica de dividir y vencer. No existía ningún poder o autoridad suprema por encima del monarca; sólo un enorme embrollo en medio de un clima general de *ethos* militarista, que volvió muy peligrosas a las monarquías. Nadie controlaba lo suficiente los canales de influencia políticos y militares para tomar decisiones racionales y realistas.

He llevado a cabo una deconstrucción del Estado o de las potencias. Éstas se expresaban como un actor único cuando declaraban la guerra que iba a decidir el futuro del mundo. Pero este «actor» era en realidad polimorfo, estaba formado por redes faccionalizadas de poder, encarnaba cristalizaciones plurales, sobre las que se asentaban unos ejecutivos —reyes mediocres y cancilleres preocupados, ministros y secretarios de asuntos exteriores— que dependían de la intriga

para saber qué estaba ocurriendo. ¿Cómo eran las cosas en las democracias de partidos?

Las democracias de partidos

Desde Kant, los liberales (y, recientemente, los conservadores como Margaret Thatcher) han sostenido que los Estados «republicanos», «constitucionales», «liberales» o «democráticos» son tan intrínsecamente pacíficos como belicosos los Estados autoritarios, lo que se explica en parte porque los liberales siempre han tenido una idea optimista de la naturaleza humana —el individuo libre no quiere ir a la guerra— y en parte porque conciben a los regímenes liberales como capitalistas, y el capitalismo es cosmopolita y transnacional. Aunque en ambos asertos hay algo de cierto, la indagación de Doyle (1983) nos permitirá localizar las cualidades pacíficas del liberalismo con mayor precisión.

Doyle define como liberal aquel régimen que tiene una economía de mercado basada en la propiedad privada, cuyos ciudadanos poseen derechos jurídicos (ciudadanía civil) y un gobierno representativo, cuya rama legislativa desempeña un papel efectivo en la política pública y se forma como resultado de la elección de al menos el 30 por 100 de los hombres o por un sufragio accesible a los que alcanzan un cierto nivel de riqueza (en el siglo XX, añade el criterio del sufragio femenino). Este criterio político viene a coincidir con lo que he llamado aquí democracia de partidos. Doyle reconoce tres regímenes liberales a finales del siglo XVIII: algunos cantones suizos, la República Francesa de 1790 a 1795 y los Estados Unidos. Hacia 1850 había ocho regímenes liberales (incluyendo a Gran Bretaña); diecinueve en 1914; y setenta y dos en 1980. Luego, pasa a considerar si fueron éstos u otros regímenes los que comenzaron las guerras modernas.

Nuestro autor realiza una afirmación aparentemente audaz: ningún régimen liberal ha sostenido una guerra con otro régimen liberal; pero ha escogido con cuidado su terreno, y ello pese a que sus evidencias están mal hilvanadas. Para sus fines no hay que considerar liberal a Gran Bretaña antes de la *Great Reform Act* de 1832, porque poco antes había mantenido cuatro grandes guerras contra dos de los únicos tres únicos regímenes que Doyle clasifica como liberales (la República Francesa y América, ambas antes y después de su independencia). Sin embargo, Gran Bretaña encaja en sus criterios porque su

sufragio estaba (relativamente) abierto al acceso en función de la riqueza y porque cumple el resto de las condiciones. Su marco histórico restrictivo le permite excluir también las guerras navales anglo-holandesas de finales del siglo XVII, que enfrentaron entre sí a las dos potencias más liberales de la época. Comete una pequeña trampa al incluir a Italia pero no a España en 1900, momento en el que ambos países tenían constituciones «corruptas» muy semejantes. Un malintencionado podría pensar que lo hace para eludir la excepción de la guerra hispano-americana. También excluye las guerras civiles, pero la americana fue una guerra civil entre dos regímenes predominantemente liberales (en el sentido que él mismo confiere al término). Si nos limitáramos al siglo XX, la afirmación sería cierta (hasta ahora), lo que seguramente no es un gran hallazgo.

Pero Doyle no se para aquí, como tienden a hacer los apologistas del liberalismo, sino que descubre también que los regímenes liberales han hecho la guerra con mayor entusiasmo contra los no liberales, especialmente en el Tercer Mundo de la actualidad. Desde la Segunda Guerra Mundial, se han lanzado con ferocidad contra lo que ellos definen como regímenes «comunistas» (más recientemente como «dictaduras»). ¿Por qué esta extraordinaria diferencia entre el comportamiento de los regímenes liberales entre sí y el que adoptan hacia otros? En el caso del siglo XX, valdría en gran parte una respuesta marxista. Los regímenes del Tercer Mundo, especialmente los que se designan comunistas, amenazan al capitalismo, lo que no hacen otros, de carácter liberal (aunque no me parece una respuesta completamente satisfactoria; por ejemplo, los Estados Unidos realizaron varias invasiones en América Central durante el siglo XX, mucho antes de la aparición de la amenaza comunista). Pero esto no nos sirve de gran ayuda para el siglo XIX, cuando los regímenes no liberales eran también protocapitalista. Doyle ofrece una respuesta alternativa, aduciendo que los regímenes liberales creen estar dotados de una legitimidad superior porque descansan en el consenso de individuos moralmente autónomos. Los regímenes liberales respetan mutuamente esta autonomía moral, pero no respetan a los que no la tienen, por eso los atacan con celo ideológico.

Encuentro bastantes virtudes en la cualificada defensa que Doyle hace del liberalismo, aunque me parece un poco edulcorada y algo despectiva de la geopolítica realista. Antes de la Primera Guerra Mundial, la política exterior de estos regímenes liberales dependía más de la geopolítica de lo que él está dispuesto a reconocer. Las in-

terrelaciones geopolíticas de las tres mayores potencias liberales —Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia— se habían engendrado en el curso de grandes guerras justo antes, menos mal, de que Doyle las califique de liberales. A fin de cuentas, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos se expandieron libremente gracias al genocidio colonial y las guerras en sus zonas de influencia pactadas. No buscaron la guerra con las potencias europeas, liberales o no, a menos que vieran amenazados su expansión colonial o su poderío naval. Su liberalismo (en el trato mutuo) se definió también en la época como un interés geopolítico duro. Y lo mismo vale para Francia. Como vimos en el capítulo 8, Francia había quedado cuidadosamente neutralizada desde 1815 por el victorioso Concierto de las Potencias, que también garantizó la neutralidad de Bélgica y los Países Bajos (los dos Estados liberales que vienen a continuación). Así pues, habría resultado muy peligroso para Francia atacar a estos países y mucho más intentarlo contra Gran Bretaña (aunque se enfrentó en las colonias).

Cuando Italia-Piamonte se convirtió en un Estado liberal, sus motivaciones fueron muy parecidas. La guerra con Francia constituía una posibilidad geopolítica, de modo que la diplomacia italiana dudó durante todo el periodo. Pero, puesto que Alemania amenazaba a Francia e Italia-Piamonte podía hacerse con los despojos de la guerra contra Austria (y Turquía), durante las guerras de 1859 y 1914 se produjeron alianzas franco-italianas. Italia decidió su posición en 1914-1915 no tanto por solidaridad liberal como por razones geopolíticas (Doyle sostiene lo contrario). Para Italia contaba más el ataque de Rusia (autoritaria) contra Austria que el ataque de las liberales Francia y Gran Bretaña contra Alemania. Aliada con Rusia (y con Alemania neutralizada gracias a Francia y Gran Bretaña), Italia podía arañar territorios austriacos.

Observemos ahora los restantes Estados liberales de Europa. En el capítulo 8 vimos que la economía de los Estados de Escandinavia y los Países Bajos (los siguientes Estados liberales) dependían de la economía global británica. Su política exterior se encontraba dominada en parte por Gran Bretaña, y la de los Países Bajos estaba también sometida por las grandes potencias. Durante el siglo XIX, los únicos Estados escandinavos independientes eran Suecia y Dinamarca. La guerra entre ellos tendría que haber sido naval, pero después de 1805 ninguno contaba con grandes armadas. En cualquier caso, Escandinavia había tenido un disuasivo equilibrio de poder y unos ejércitos pequeños doscientos años antes de ser liberal. Los cantones suizos fue-

ron neutrales, con liberalismo o sin él, por razones geopolíticas tradicionales. Grecia carecía de rivales liberales.

Más allá de Europa, los dominios de raza blanca del Imperio británico, dominados por Londres, estaban imbuidos de un idéntico liberalismo selectivo y no manifestaban ningún interés geopolítico en atarcarse mutuamente. Tampoco Canadá sentía deseos de atacar a los Estados Unidos. En cuanto a Chile y Argentina, desconozco por qué no se hicieron la guerra durante el breve periodo en que Doyle los califica de liberales (después de 1891). No habría sido fácil para Colombia (liberal desde 1910), desde el punto de vista geográfico, declarar la guerra a ninguno de esos países.

Aquí acaba la lista de los regímenes liberales de Doyle antes de 1914. Por mi parte, he brindado razones geopolíticas por las que no lucharon entre sí, que parecen insuficientes sólo en dos casos: la paz anglo-americana y la paz interescandinava (¿por qué no se quebró nunca el equilibrio de las potencias del norte?), fundamentadas en una solidaridad normativa mucho más amplia que la estrictamente liberal. No trato de desmentir a Doyle, sino de enmendarle en dos aspectos:

1. En 1914 las democracias liberales de partidos *eran* menos agresivas y militaristas que los régimenes autoritarios, pero ello se debía a causas políticas y geopolíticas. Los Estados representativos saben evitar *mejor* las guerras, aunque en parte por razones distintas a las que sostienen los liberales como Doyle. No son muchas las guerras comenzadas por un solo beligerante; la mayoría, como en el caso de la primera mundial, estallaron tras una espiral diplomática en la que las circunstancias, que cambiaban a un ritmo frenético, obligaron a realizar rápidos cálculos de interés. Los liberales se equivocan cuando envidian a los regímenes autoritarios por su supuesta capacidad para «la intimidad, la flexibilidad y la rapidez y la resolución de las decisiones y los actos ... que generalmente se necesitan para que los gobernantes de un gran Estado dirijan una política internacional eficaz» (Kennan, 1977: 4; a quien Doyle cita con aprobación).

Pero en este capítulo demostraré lo contrario. Aunque ningún régimen presentaba una coherencia plena (pues todos eran polimorfos), los Estados liberales suelen perseguir con mayor eficacia los intereses realistas (entre ellos, evitar las guerras costosas) que la monarquías. Estoy convencido de que, además, al ser más internacionalistas y menos proclives a la mera represión para solucionar los problemas, su

diplomacia consigue mejores alianzas que la de los regímenes autoritarios. Puede que esto explique por qué las democracias han vencido a las ideologías autoritarias en las grandes guerras del siglo XX. Aunque menos militaristas, disponen de una mayor capacidad de movilizar grandes batallones gracias a las alianzas. Pero esto quedará para el Volumen III.

2. Doyle subraya con razón las normas y las ideologías en materia de geopolítica, pero las normas no se relacionan sólo con la forma del régimen. Las relaciones anglo-americanas e interescandinavas se explican en parte porque los países compartían algo más que su liberalismo. El compartir normas difusas ayuda a evitar las guerras que no se ajustan racionalmente a los esquemas realistas y que nadie quiere librar, como la Primera Guerra Mundial (aunque ayudan a mantener guerras en parte definidas por las ideologías, como las napoleónicas). Por el contrario, la ausencia de tales normas comunes acrecienta los malentendidos de la espiral diplomática. Así, la ausencia de normas compartidas entre las democracias de partidos y las monarquías empeoraron los malentendidos de las grandes potencias y las espirales descendentes de 1914.

En el capítulo 12 vimos que las democracias de partidos dominaron mejor los aspectos internos y militares que los asuntos diplomáticos. De hecho, la relativa indiferencia de las clases y de los partidos hacia los asuntos exteriores debió de conferir una mayor autonomía de la dirección cotidiana de la política exterior en las democracias que en las monarquías, porque el antiguo régimen, cosmopolita pero también más militarista, tenía mayor influencia en la corte y mayores intereses en la política exterior. Pero cuando estallaba la crisis las cosas eran distintas. Quizás no se pueda gastar dinero o establecer compromisos formales con otras potencias o declarar la guerra sin el consentimiento de las mayorías interesadas dentro de los gabinetes y los parlamentos y entre la clase media y la «opinión pública». En el capítulo 3 he distinguido las clases, los grupos de presión y los partidos nacionalistas como las principales redes de poder con capacidad para presionar a los militares y a los estadistas. En las crisis se manifestaban estas presiones. Mas para entonces las opciones políticas pueden estar delimitadas. La potencia liberal puede encontrarse atrapada en ellas por la diplomacia aislada, y con ello verse ante la trágica disyuntiva de Hobson, elegir entre la guerra o «el deshonor nacional» que

supone «retroceder», o, como lo expresó Grey, «entre la guerra y la humillación diplomática».

Por otro lado, los estadistas de las democracias de partidos se ven atrapados por su percepción de lo que la opinión pública acepta, y no suelen percibir belicosidad en la expresión de la opinión pública masiva. Al examinar una época sin elecciones, debemos pararnos a pensar en lo que los expertos políticos creían que era la opinión pública. La mayor parte de ellos en Francia y Gran Bretaña percibían en el electorado indiferencia a la diplomacia rutinaria de las grandes potencias, sin embargo, se daban cuenta de que se oponía a una guerra que no fuera puramente defensiva. Los cañoneros de lo que habría de convertirse en el Tercer Mundo eran sutiles; no existían los «líos extranjeros» ni mucho menos la movilización contra ninguna de las grandes potencias. En 1914 Gran Bretaña tenía un gobierno liberal, formado por tres miembros prácticamente pacifistas y seis internacionalistas liberales. En 1911 este gabinete había votado 15 contra 5 contra la firma de la Entente. A los políticos británicos les preocupaban las huelgas y la posibilidad de una guerra civil en el Ulster (lo mismo que probablemente les preocupará en el año 2014). A los franceses, los debates sobre la conscripción militar les dejaban poco espacio para los Balcanes o la Alsacia-Lorena. Los medios franceses estaban preocupados por un espectacular juicio sobre un asesinato político. En medio de la indiferencia popular, Poincaré se hizo con el control de la política exterior y manipuló «el absoluto apoyo del gabinete a sus decisiones» (Keiger, 1983; *cf.* Bosworth, 1983 sobre Italia). Se esperaba que los estadistas resolvieran la crisis en privado, no amenazando en público con la guerra. Esto creaba problemas a las democracias de partidos, porque aunque creyeran que los intereses políticos exigían firmeza, incluso la disposición a la guerra, no podían decirlo tranquilamente a su público. Sólo los derechistas que no pertenecían a la administración se expresaban con libertad en ese sentido.

Existían entonces —como ahora— dos soluciones al dilema democrático, una de ellas ejemplificada por los estadistas franceses contemporáneos, otra, por los ingleses. El embajador francés en Moscú, Paléologue, personificaba la solución francesa consistente en una firmeza encubierta. El gobierno francés había ofrecido incentivos militares y financieros a los generales y financieros rusos que aconsejaran al zar una alianza con Francia. Creyendo llegada la hora de recuperar Alsacia-Lorena, Paléologue urgió repetidamente a los dirigentes ru-

sos que apoyaran a Serbia, asegurándoles el apoyo de Francia. Pero no comunicó a París ni las vacilaciones rusas ni la provocadora movilización. La opinión pública francesa no conoció ni las dudas ni la agresión de Rusia. La apariencia de una firme autodefensa debía mantenerse, aun al precio de la guerra. No sabemos mucho sobre la diplomacia francesa durante la crisis (es probable que se destruyeran los documentos incriminatorios), por tanto es difícil saber hasta qué punto presionó Francia para que se produjera la movilización rusa; puede que contribuyera, aunque no de forma decisiva.

Los estadistas británicos liberales hicieron lo contrario (véanse especialmente Williamson, 1969, y Wilson, 1985, para las fuentes de los siguientes párrafos). Grey, el secretario de asuntos exteriores, con el apoyo táctico del primer ministro Asquith, no fue capaz de asegurar ni siquiera en privado las intenciones británicas ni a Francia ni a Rusia. Él y sus consejeros del *Foreign Office,* Eyre Crowe y Nicholson, estaban convencidos de que la lógica geopolítica significaba respetar la Entente. Creían que no podría evitarse la confrontación con Alemania. Este grupo de «estadistas» se encontraba completamente socializado en los valores realistas y dedicado a la defensa del honor y el poder británico, no meramente a los intereses materiales. Hacia 1912 ya sabían que Alemania pretendía el dominio de Europa y estaba sustituyendo a Gran Bretaña como potencia hegemónica.

La condición de potencia casi hegemónica parece conducir al cultivo de un alto tono moral (como ocurre hoy con la política exterior de los Estados Unidos). Importaba menos que, aunque Alemania infligiera otra derrota a Francia, su marina fuera inadecuada para amenazar a las Islas Británicas. Importaba más, según las propias expresiones de los estadistas, que el resultado, contando con la inactividad británica, resultara una «humillación» nacional y una «traición» del entendimiento implícito que creían haber alcanzado con los franceses. Éstos, a fin de cuentas, habían retirado su flota del Mediterráneo, asumiendo que la *Royal Navy* mantendría el orden en el Canal de la Mancha. El propio Grey expresó como nadie el sentido del honor de su generación de estadistas británicos: «Cuando las naciones se precipitan por la pendiente hasta tocar fondo, el orgullo no disminuye, puede incluso aumentar. Permanecen apegadas a él como Tácito dijo que Tiberio se aferró a su gusto por la simulación hasta el último aliento» (citado por Wilson al comienzo de su estudio de 1985 sobre la Entente).

Nótese que Grey personifica a las «naciones», atribuyéndoles

sentimientos tan humanos como el orgullo. Pero hay aún en su posición otro dilema realista material. Los intereses geopolíticos británicos consistían en alcanzar el entendimiento con Rusia —para evitar lo que parecía una guerra terrestre imposible de ganar en Asia— y en mantener a Alemania alejada del Canal de la Mancha, lo que implicaba el entendimiento con Francia. Francia y Rusia podrían mostrarse amistosas, pero no contaban con el apoyo británico en caso de guerra, porque entonces se habrían visto tentadas a actuar provocativamente. De ahí que existieran razones políticas para la cautela de Grey.

La *Innenpolitik,* sin embargo, parece haber pesado más. Grey y sus consejeros creían que si Alemania atacaba a Francia y a Bélgica, la consiguiente amenaza a los puertos del Canal movería a la opinión pública a defender el «honor» británico con la intervención militar. Pero, hasta entonces, pensaba Grey, la opinión pública y la mayoría del gobierno rechazarían la guerra. Convertir la Entente en una alianza o amenazar a Alemania por anticipado dividiría al gobierno porque algunos de sus ministros tendrían que dimitir ante la evidencia (como en realidad hicieron dos de ellos cuando se declaró la guerra). El partido conservador apoyaría a Grey y se formaría un nuevo gobierno con el respaldo imperialista liberal. Así, el partido liberal quedaría destruido y podría incluso estallar una guerra civil en Irlanda. De modo que Grey no hizo nada. Informó superficialmente al gobierno y no pidió su consejo colectivo. Los gobiernos extranjeros supieron que Gran Bretaña, lejos de hacer promesas, mantenía abiertas todas las opciones. Las repetidas declaraciones públicas y privadas de Grey al respecto permitieron que Jagow, el halcón, disipara ante el embajador Lichowsky el miedo de la Wilhelmstrasse a la intervención británica (Williamson, 1969: 340 a 342). Los diplomáticos alemanes creyeron hasta el 30 de julio en la neutralidad de Gran Bretaña. Para entonces, habían perdido el control del ejército. Si no hubieran creído en esa neutralidad, no habrían dado los pasos que conducían a la guerra.

Cuando acabó el conflicto, tanto Bethmann como Tirpitz se quejaban amargamente del engaño británico, acusando a los ingleses de haber conducido a Alemania a la destrucción, pero lo cierto era lo contrario. Grey actuó con pusilanimidad, pero fue coherente con su percepción de lo que habría permitido una opinión pública esencialmente liberal. No quería la guerra, porque no existían entre los dirigentes británicos partidarios de la guerra preventiva. Sin embargo, la

situación no requería el honor británico, sino una especie de disimulación al estilo de Tiberio, consistente en callar en público o ante el gobierno en pleno, pero advertir en privado a Alemania de que Gran Bretaña podría intervenir si Francia era atacada, y (al contrario que Francia) avisar a Rusia, igualmente en privado, de que una provocación disminuiría las posibilidades de intervención. Al contrario que la duplicidad francesa, el honor británico habría podido ser una causa necesaria para que la crisis se convirtiera en una guerra mundial. Pero los errores de Grey no eran idiosincrásicos o socialmente inexplicables, sino el producto de un fracaso en la resolución de las cristalizaciones políticas militaristas: los estadistas británicos mezclaron el realismo aislado con un sentido del honor nacional que generó un militarismo mayor que el del partido liberal gobernante y la mayoría de la opinión pública. No se trató de una identidad geopolítica «última» del Estado británico, sino confusión y guerra mundial.

Así pues, la opinión popular desempeñó un papel destructivo en las democracias de partidos durante la crisis. Al estar mediatizada por el sistema de partidos, abandonó al régimen a su aislamiento rutinario, al mismo tiempo que restringía su libertad de acción, especialmente su habilidad para manejar las amenazas militares, sin brindarle una política realista alternativa. La crisis tuvo el efecto de encasillar a los regímenes. Los estadistas monárquicos, que soportaban menos limitaciones, tomaron por indiferencia o cobardía esta pasividad de una democracia de partidos; «virtudes» que, en efecto, había demostrado Gran Bretaña cuarenta o cincuenta años antes, cuando Alemania atacó Dinamarca, Austria y Francia (aunque entonces no existía el peligro de una armada alemana). Una actitud que se ha visto premiada se repite necesariamente, a no ser que quien debe tomar la decisión perciba con claridad el cambio en las circunstancias. La situación facilitó el ataque de los regímenes autoritarios, como volvería a ocurrir en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Doyle ha observado que la ausencia de normas comunes a los regímenes autoritarios y democráticos es de gran importancia. En este caso, sin embargo, lo que acabó por provocar la guerra en un clima diplomático de crisis no fue tanto una negación mutua de legitimidad como una auténtica incapacidad por parte de todos para comprender las cristalizaciones polimorfas de los demás.

Ni los parlamentos ni los partidos solían tomar iniciativas en materia de política exterior. El semiaislamiento inestable del régimen restaba importancia a la geopolítica. Una veces producía vacilaciones,

como en Gran Bretaña; otras, estrategias encubiertas para manipular la opinión y volverla favorable a una meta determinada. Ambas cosas se han producido en la democracia de partidos del siglo XX; la primera en Gran Bretaña, la segunda en Estados Unidos, donde los presidentes Wilson y Roosevelt manipularon a la opinión americana a favor de las guerras mundiales (para el caso de Wilson, véase Hilderbrand, 1981: 133 a 135).

A este respecto, permítaseme citar dos ejemplos actuales relacionados con regímenes que consideramos plenamente democráticos: la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y la implicación de Inglaterra en el conflicto de las Malvinas en 1983. En ambos casos un reducido grupo de políticos y militares tomaron, a lo largo de varios años, decisiones de tipo menor relativas a países muy lejanos, empleando recursos discrecionales y sin consultar o tener en cuenta intereses de dimensión pública. Los Estados Unidos comenzaron a respaldar al régimen de Vietnam del Sur, poco a poco y de modo privado, con «consejeros» y material militar. Gran Bretaña redujo también paulatinamente su presencia militar en el Atlántico Sur sin dejar señales de ningún cometido defensivo. Cuando los vietnamitas del sur perdieron poder y los argentinos atacaron, estallaron las crisis; ni el gobierno británico ni el estadounidense estaban dispuestos a echarse atrás ante el mundo, de modo que manipularon a la opinión pública arropándose en la bandera y en un superficial nacionalismo político. Años más tarde, cincuenta mil americanos muertos en una guerra inútil enfriaron aquellos gestos y los Estados Unidos se retiraron. Los ingleses, con mejor fortuna, se enfrentaron a un enemigo más débil y ganaron antes de agotar el nacionalismo. Ambas fueron guerras de gran alcance, debidas a la decisión autónoma y esencialmente privada de los estadistas; aunque aún es pronto para comprender todos los movimientos que condujeron al conflicto del Golfo Pérsico en 1990-1991, el parecido resulta evidente.

¿Es ingenuo pretender que exista una política exterior auténticamente democrática, sin unos partidos o una opinión pública obsesionados con el nacionalismo, y abierta al debate, que imponga a los regímenes la consideración del interés social general e impida la muerte de miles de ciudadanos en guerras inútiles?

La democracia de partidos fue también polimorfa, y su diplomacia sólo algo menos incoherente que la de las monarquías. En este caso, la incoherencia no se produjo entre las distintas facciones cortesanas, y sólo parcialmente dentro del Parlamento, la institución que

se supone sustituye a la corte, sino en la contradicción entre la rutina privada y realista y la autonomía del régimen y el clima nacional de «indiferencia pacífica» (que se convierte durante las crisis en una retórica nacionalista superficial). Estos hechos plantean varios problemas: ¿Es cierta la indiferencia de las clases y las naciones que permite el aislamiento del régimen? Y si es así, ¿por qué? ¿Existieron diferencias marcadas entre los dos tipos de régimen político? Me centraré ahora en los dos actores del poder popular, especialmente las clases y las naciones.

Las clases, las naciones y la geopolítica

Vuelvo ahora a mis tres tipos ideales de organización de clase:

1. *Transnacional.* Cuando la identidad y la organización de clase sobrepasan las fronteras estatales, las naciones y los Estados resultan irrelevantes para las relaciones de clase. Los intereses personales y colectivos se definen por los mercados globales, no en función del territorio. Las clases transnacionales modernas serían, pues, bastante pacíficas, tendrían intereses en el exterior y pretenderían supervisar la geopolítica del régimen para imponer una diplomacia conciliadora. Si estas clases hubieran predominado en 1914, no habría estallado la guerra. El mismo razonamiento vale para otros actores transnacionales distintos a las clases. Por ejemplo, si la iglesia católica hubiera conservado su poder transnacional en el mundo moderno, es probable que no hubiera habido tantas guerras realistas entre los Estados-nación (aunque tampoco guerras de religión). Esto nos permite sospechar que el transnacionalismo se había debilitado en la época moderna.
2. *Nacionalista.* Cuando se enfrentan los intereses de dos naciones, aparecen casi clases nacionalistas, con intereses característicos respecto a la división internacional del trabajo. Las relaciones de clase nacionalistas fomentan las definiciones territoriales de identidad e interés y la agresividad geopolítica y geoeconómica. Si hubiera dominado este tipo de organización de clase, la Gran Guerra habría sido el resultado del conflicto entre los intereses materiales de los Estados-nación (capitalistas).
3. *Nacional.* En este caso la identidad y la organización de clase se encuentran enjauladas dentro de cada Estado, sin referencias sig-

nificativas al mundo exterior. Aunque intervengan en luchas internas sobre la identidad de la nación, se limitan a observarse desde dentro y carecen de competencia geopolítica; no tienen intereses en ese sentido y no muestran predisposición a la paz o a la guerra. En su ignorancia, las clases abandonan la geopolítica a la experiencia de los estadistas. Desde ese momento, la paz y la guerra se convierten en asunto de profesionales (procedentes del antiguo régimen), no de las masas, y el realismo aislado y la primacía de la *Aussenpolitik* se prolongan en la sociedad moderna. Alternativamente, los sentimientos de las clases nacionales pueden desplazarse hacia un nacionalismo más político que económico, porque, en un movimiento espontáneo, proyectan la frustración interior en lo extranjero (Howard, 1970: 103 y 104); puede ocurrir también que las clases dirigentes y los regímenes manipulen la identidad nacional para desplazar el antagonismo de clase hacia un conflicto internacional (Mayer, 1968, 1981). En ambos casos se agitan las banderas y se ataca a los extranjeros; las clases nacionalmente organizadas producen un nacionalismo esencialmente *político.*

No fueron clases transnacionales las que causaron la Gran Guerra; por el contrario, se opusieron, pero se vieron superadas por otros grupos:

1. Las clases nacionalistas, con una estrategia geopolítica agresiva basada en sus intereses materiales, habrían impuesto su racionalidad, como sostienen las teorías del *imperialismo económico:* cuando la rivalidad económica entre los Estados-nación capitalistas dirige racional y deliberadamente la geopolítica, se plantea un riesgo de guerra alto pero aceptable. En tal caso, los responsables directos del conflicto habrían sido las relaciones económicas de poder.

Pero las clases nacionales habrían podido causar la guerra de otras tres formas alternativas:

2. Según la teoría del *imperialismo social,* los gobernantes habrían desplazado la frustración de las clases internas al enemigo político. En este caso, los intereses de clase procedentes indirectamente de las relaciones económicas internas de poder habrían sido los responsables indirectos.

3. Conforme a la teoría del *nacionalismo político,* las clases nacionales habrían desarrollado espontáneamente una xenofobia belicista, en cuyo caso los responsables serían las identidades y las relaciones políticas de poder.

4. La obsesión nacional de las clases las habría inducido a abandonar la geopolítica en manos del antiguo régimen, presionado sólo por grupos particularistas de poder, responsables de la guerra. Llamaré a esta hipótesis teoría del *antiguo régimen.* Aquí, los actores del poder económico eluden la política exterior, y la responsabilidad caería del lado de los actores del poder político, militar y diplomático, aislados y particularistas.

Las cuatro explicaciones tienen algún fundamento, que varía según los tipos de clases y de regímenes, pero ninguna ofrece una explicación suficiente ni de la guerra ni de la agresión de cada una de las potencias. Puesto que una explicación adecuada tendría que relacionarlas, pasaré al análisis de las principales clases, comenzando por la clase capitalista.

Los capitalistas y el imperialismo económico

Para evitar la guerra, los liberales del siglo XIX depositaron sus esperanzas en la organización predominantemente transnacional e «interdependiente» del capital. Una vez institucionalizadas la propiedad capitalista y las normas del mercado, los emprendedores buscarían el beneficio al margen de las fronteras estatales. Los economistas clásicos no ignoraban a los Estados, pero creían que el comercio internacional generaba interdependencia. Dado que los recursos variaban de un país a otro, cada uno se especializaría en lo que fuera capaz de producir mejor («ventaja comparativa neta»). Aunque las condiciones comerciales suscitaran disputas, nada resultaría tan perjudicial para todas las partes como la interrupción que supondría la guerra. El comercio necesitaba también acuerdos financieros transnacionales para garantizar las monedas, el crédito y la convertibilidad. De modo que los capitalistas serían partidarios de una geopolítica pacífica.

Pero la interdependencia de la economía real no fue tan armoniosa. Las potencias europeas partieron de una base social muy semejante. La Revolución Industrial había quitado importancia a las diferencias naturales y ecológicas, pero había aumentado la de las prácticas de poder colectivo. Cada vez resultaba más fácil imitar las técnicas industriales y agrícolas de otros países. Así pues, los grandes Estados se parecieron mucho más de lo que habían esperado los economistas clásicos, y se intensificó la rivalidad por los mercados. Na-

cieron las teorías del nacionalismo económico que atribuían la definición del interés económico, para bien o para mal, al Estado-nación.

El liberal inglés J. A. Hobson (1902) sostenía que, por desgracia, el imperialismo se generaba por las necesidades corrientes de capital. La plutocrática estructura social de Gran Bretaña negaba a los trabajadores una participación adecuada en el producto nacional y, por tanto, generaba un excedente de capital que luego exportaba al Imperio. Hilferding, Lenin y Rosa Luxemburgo revisaron las ideas de Hobson, a las que añadieron la caída de la tasa de beneficio, no el subconsumo, como causa original de la exportación de capital. Para Hobson y los marxistas, era la rivalidad capitalista lo que empujaba a los Estados al imperialismo territorial y a la guerra; el nuevo imperialismo y la pelea por África habrían ocasionado la Gran Guerra.

Pero esta versión del imperialismo económico partía de varios errores. En primer lugar, no hubo excedente de capital. Las potencias más agresivas, Alemania, Austria y Rusia eran las que tenían menor capital disponible. En todo el periodo, sólo se establecieron algunas colonias por presiones capitalistas específicas; pocas fueron consideradas buenos mercados exportadores y la expansión colonial de finales del siglo XIX no resultó solvente para ningún país. La bonanza colonial del siglo XVIII había dejado paso durante el XIX a la adquisición de territorios mucho más pobres y ferozmente defendidos por los nativos. La rivalidad colonial alcanzó el punto culminante de 1880 a 1900, y enfrentó a Gran Bretaña con Francia y Rusia; sin embargo, la guerra no llegó entonces y cuando lo hizo, en 1914, estas potencias lucharon como aliadas. Aunque Alemania comenzaba a participar ya en las disputas coloniales, y aunque a veces éstas se manifestaban con un tono patriotero, se llegó siempre a un acuerdo diplomático. La rivalidad colonial del periodo no buscaba el beneficio inmediato, ni tampoco causó la guerra (Robinson y Gallagher, 1961; Fieldhouse, 1973: 38 a 62; Kennedy, 1980: 410 a 415; Mommsen, 1980: 11 a 17).

Sin embargo, la teoría del imperialismo económico puede salvarse en parte. Las colonias no eran importantes, pero las rivalidades económicas en sentido amplio sí. Fieldhouse se equivoca al situar tras el imperialismo el poder y la política y no el beneficio. Algunas de las aventuras que califica de políticas, en Egipto, Sudán y Asia central, se diseñaron para proteger las comunicaciones con la India, económicamente vital para Gran Bretaña. Por otra parte, no existe prácticamente ningún imperialismo, ninguna búsqueda del poder «en sí mismo», completamente divorciada de las consideraciones de prove-

cho económico. Aunque el nuevo imperialismo británico no se debiera a la necesidad de exportar capital, incluía un importante motivo económico: mantener el comercio y la financiación británicos en los mercados mundiales, en un clima de auge del proteccionismo y de la competencia alemana y estadounidense (Platt, 1979). Nadie sabía en realidad lo que valían los mercados africanos, pero era mucho más arriesgado dejar que lo averiguaran otros y encontrarse excluido. A fin de cuentas, el descubrimiento de oro y diamantes durante el periodo transformó a Suráfrica en una colonia fructífera. A partir de tales consideraciones, Wehler (1979) y Mommsen (1980) concluyen que economía y política no deben separarse.

En cambio, yo no estoy de acuerdo. Es mejor afinar las definiciones que abandonarlas en bloque. No se trata de aspectos económicos contra aspectos políticos, sino de mezclas variadas de ambos. Me remito a las seis economías políticas internacionales enunciadas en los capítulos 3 y 8.

En un extremo se encuentra el *beneficio de mercado,* una concepción capitalista resultante de la mayor capacidad de explotación en los mercados gracias a las normas institucionalizadas del mercado libre. El mercado no se considera entonces un área geográfica específica, sino un conjunto de actividades definidas funcionalmente, con difusión internacional, que puede abarcar el mundo entero. Los Estados son irrelevantes para el beneficio. Se trata de la concepción de los economistas clásicos, que continua dominando la disciplina. El tipo ideal es de carácter transnacional y pacífico. Se supone que quedó anulado en el camino hacia la guerra.

El resto de las concepciones implican un sentido más territorial de la identidad y el interés, que generan un control autoritario del territorio. La concepción más territorial corresponde al *imperialismo geopolítico,* que define el interés como invasión y dominio de la mayor cantidad de territorio que pueda permitirse una gran potencia para su propia seguridad. Una agresión de este tipo nunca carece por completo de motivaciones económicas; ni siquiera Hitler (que nunca dio importancia a la economía) renunciaba a explotar los recursos de los territorios conquistados, y a veces dirigió los ataques contra objetivos económicos (por ejemplo, el petróleo rumano). Pero su lógica predominante no está impulsada por la economía interna. Los objetivos de la agresión no se seleccionaban en principio por concepciones capitalistas del beneficio, sino por cálculos de estructuras de alianzas geopolíticas y equilibrios militares. Cuando las clases y otros actores

del poder político apoyan este imperialismo geopolítico, se subordinan a concepciones políticas y militares del interés, como hicieron, por ejemplo, los alemanes de la época de Hitler.

Entre estos dos polos hallamos varias concepciones del beneficio que mezclan razones territoriales y de mercado. El *proteccionismo* es la más pacífica porque se limita a emplear los poderes legítimos del Estado para proteger la economía interna en el mercado internacional con aranceles y contingentes de importación. El *mercantilismo* se sirve de técnicas más agresivas, cuya legitimidad se cuestiona internacionalmente, como las subvenciones y la competencia desleal en materia de exportaciones, la dirección estatal de las inversiones interiores y exteriores y el apoyo a monopolios o empresas corporativas nacionales que operan en el extranjero. Allí donde dominan estas dos concepciones, la organización capitalista de clase es moderadamente nacionalista. Las políticas proteccionista y, en especial, mercantilista no suelen provocar grandes guerras, que podrían perjudicar al beneficio; su resultado normal es el compromiso diplomático.

Veamos, pues, dos imperialismos más dirigidos en función del beneficio. El *imperialismo económico* implica el dominio de un territorio extranjero, si es necesario a costa de la guerra, porque está orientado por las necesidades de capital y de la economía interna, como sostienen Hobson y los marxistas. La propia organización del capital se hace entonces nacionalista, y la clase que lo representa dirige la geopolítica y la guerra, no al contrario, aunque este hecho fue muy raro en la adquisición de las colonias de finales del siglo XIX. Finalmente, en el *imperialismo social,* la motivación se encuentra en desalentar el descontento interior de clase (o cualquier otro), desviándolo hacia aventuras exteriores. Las aventuras no son provechosas, pero el aumento de la habilidad para explotar a las clases interiores y los grupos de interés sí lo es.

La guerra puede llegar por dos vías económicas más amplias: o bien el imperialismo geopolítico del régimen político y las castas militares se imponen sobre el mercado, posiblemente amplificando la racionalidad mercantilista de los capitalistas, o bien el imperialismo económico y político del capital se impone sobre su propia racionalidad de mercado y sigue las huellas del imperialismo geopolítico del régimen y el ejército. También es posible una tercera vía de compromiso, en la que la guerra resultaría de la unión de los capitalistas con redes estatales de poder en una concepción mutua y cruzada del beneficio.

¿En qué creían los capitalistas? Pocos pensaban en estas cuestiones de modo sistemático; por el contrario, sostenían ideas muy variadas. Como vimos en capítulos anteriores, el capital estaba dividido en fracciones relativamente nacionalistas y transnacionales. Algunos capitalistas se alineaban con el Estado en el plano nacional para controlar las importaciones, las exportaciones y la inversión extranjera, pero otros preferían el mercado libre y la libertad de acceso a mercados abiertos. Las elecciones dependían del sector económico, de las condiciones del mercado, de su tamaño y rentabilidad, etc. (Gourevitch, 1986: 71 a 123). Muchos apoyaron una política agresiva contra el Tercer Mundo, pero la mayoría mostraron cautela hacia las potencias europeas, porque la interrupción de los mercados por la guerra habría sido mucho más costosa. En Europa, la mayor parte no pasó del proteccionismo pragmático, que no indicaba un antagonismo nacional fundamental. Los aranceles coexistieron con la interdependencia económica y financiera en los mercados globales. La principal excepción (que analizaré más adelante) fue la competencia por el trigo entre Rusia y Alemania, cuyos elevados aranceles contribuyeron a enemistar a los dos países y fomentaron el militarismo alemán.

Pero en otras partes, la alineación de las potencias no se debía al nacionalismo económico. La alianza austro-alemana carecía de contenido económico para Austria, que necesitaba capital extranjero y se alió con la potencia que tenía un menor excedente (Joll, 1984a: 134 y 135). Entre Francia y Rusia hubo una interdependencia financiera, pero fue más la consecuencia que la causa de su Entente. La rivalidad económica entre Francia y Alemania nunca representó un gran problema para ambos países. Entre Alemania y Gran Bretaña también se produjeron situaciones de competencia (con variaciones según los sectores), pero no más que entre cada una de ellas y los Estados Unidos. La rivalidad comercial o industrial no produjo ni en Alemania ni en Gran Bretaña un nacionalismo agresivo mutuo; por el contrario, eran dos economías cada vez más interdependientes. De 1904 a 1914, Gran Bretaña fue el mejor cliente alemán; y Alemania, el segundo de Inglaterra, detrás de Estados Unidos (Steiner, 1977: 41; Kennedy, 1980: 41 a 58, 291 a 305). Ni el proteccionismo ni el mercantilismo ni el imperialismo económico influyeron fundamentalmente en la alineación de las potencias en la guerra.

No obstante, hacia 1914, se extendía por Alemania, como vimos en el capítulo 9, un sentido nacionalista de la rivalidad económica, suspendida entre el mercantilismo y el imperialismo económico.

Los capitalistas apenas defendían ya el *laissez-faire* o el mercantilismo; la mayor parte abogaban por un firme control territorial en el extranjero, como se desprende de los lemas *Mitteleuropa* y *Weltpolitik*, que aludían al supuesto «cerco» creado por las alianzas (lo veremos más adelante). La alianza franco-rusa había consolidado también intereses económicos mutuos, porque cualquiera que fueran los intereses geopolíticos de Francia, ahora tenía buenas razones financieras para apoyar al zar. Cuando existían rivalidades y modelos territoriales y agresivos del interés se exacerbaba el nacionalismo económico, pero la competencia económica era más el producto que la causa de la rivalidad geopolítica. Fueron los actores del poder político y militar, más que lo contrario, quienes convencieron a los capitalistas de la conveniencia del imperialismo.

El poder geopolítico siempre ha influido en la teoría económica. Ninguna concepción del beneficio es «objetiva» y puramente económica. Tanto su adopción como su eficacia dependen de otras fuentes del poder social. El beneficio de mercado ha constituido recientemente una teoría británico-ilustrado-dinástica, que dependía de la ideología y la diplomacia compartidas en Europa y de la potencia comercial y naval británica. List la acusó de enmascarar los intereses británicos. Cuando acabó el poder británico y disminuyó su implicación continental, las teorías del mercado parecieron perder base objetiva. Especialmente en Alemania, se desarrolló un capitalismo más centrado en el territorio, más protector y autoritariamente organizado. Como se vio en el capítulo 9, esto no es ni más ni menos correcto como teoría económica que las alternativas de mercado. Funcionó y fue influyente en parte por la relación que se desarrolló entre el Estado prusiano y la ciudadanía nacional burguesa. Tales relaciones de poder, más que el mercado capitalista, reforzaron el mercantilismo y el imperialismo económico.

Pero ni siquiera cuando la rivalidad económica nacionalista resultó significativa avivó el belicismo de los capitalistas. Algunos de sus grupos de presión se mostraron activos en la política colonial para defender ciertos intereses industriales y comerciales de carácter vital en territorios concretos, por ejemplo, en muchos países existieron grupos pequeños aunque influyentes de partidarios de una ampliación del imperialismo occidental en China (Campbell, 1949). Pero la interdependencia económica entre las potencias grandes continuaba siendo tan intensa como su miedo a los costes de la guerra. En definitiva, pocos capitalistas fueron tan belicosos como la prensa

popular y los «partidos» nacionalistas en relación con otras grandes potencias. No podemos buscar en sus intereses económicos las causas de una guerra que desbarató la economía global. Hasta los fabricantes de armamento preferían las guerras frías a las calientes, porque suministraban a un mercado transnacional (no hubo embargos gubernamentales a los secretos militares). La desorganización económica que podía producir la guerra parecía tan evidente que todas las potencias esperaban que fuera corta; sabían que, en pocos meses, toda la economía internacional se encontraría paralizada.

Pero aunque los capitalistas tendían a aconsejar la paz, formaban un grupo de segundo orden en los centros de decisión: gobiernos, ministerios y cortes. Los gobiernos dieron sólo algunos pasos superficiales para desarrollar una auténtica planificación económica antes del estallido de las hostilidades. En Alemania (como en otras partes de Europa), el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores estaba compuesto de aristócratas con escaso conocimiento o interés en los asuntos económicos. Los nacionalistas del *Reichstag* lo criticaron inútilmente (Cecil, 1976: 324 a 328). Ningún gobierno dispuso de planes económicos de conquista anteriores al estallido (los planes alemanes de anexión, catalogados por Fischer, 1975: 439 a 460, aparecieron durante la guerra). Entre los capitalistas aumentó algo el nacionalismo a expensas de la organización transnacional, más como consecuencia que como causa del auge de las rivalidades geopolíticas. La principal causa de la guerra no fue la racionalidad económica capitalista, ni tampoco el mercantilismo o la variedad imperialista económica.

El imperialismo social y las clases populares

¿Resultó el imperialismo geopolítico del desplazamiento de las tensiones de la *Innenpolitik* al imperialismo social? ¿Vieron los regímenes una solución a estas tensiones en la guerra? Las respuestas son afirmativas en el caso de la monarquía austro-húngara, que concibió la guerra con Serbia como la única solución a sus problemas internos de nacionalidad. Puesto que la agresión austriaca constituyó una de las principales causas del conflicto, su *Innenpolitik*, que, como observa Williamson (1988), apenas se distinguía de la *Aussenpolitik* porque rebasaba sus propias fronteras, fue decisiva. Pero esta monarquía constituía una fenómeno único y el imperialismo social suele

asociarse a distintas estrategias y problemas internos. Los problemas de la monarquía eran de nacionalidad regional, no de clase, y las motivaciones de los Habsburgo eran dinásticas, apenas relacionadas con la legitimación o la manipulación popular. Así pues, convendrá examinar las restantes potencias para saber si el nacionalismo político espontáneo o manipulado de las clases tuvo alguna responsabilidad en la guerra.

Como sabemos por capítulos anteriores, a lo largo del siglo XIX la lucha de clases se hizo más extensiva y política. Las organizaciones representativas de las clases se enfrentaron en la totalidad del territorio estatal; algunas clases obtuvieron la ciudadanía nacional. La opinión pública masiva se institucionalizó a través de las campañas electorales que enfrentaban a los partidos políticos y los grupos de presión, y que mediatizaban los periódicos de gran tirada. La conscripción acercó la experiencia militar a las masas. Así, la *Innenpolitik* de las clases *nacionales* adquirió mayor importancia para la dirección de la política exterior (y viceversa).

La geopolítica de las clases cambiaba según su grado de ciudadanía. El nacionalismo político subía cuando la ciudadanía era plena. Empezaré el análisis por los que tenían menos.

En Rusia, campesinos y obreros se encontraban completamente excluidos; los segundos lo estaban también prácticamente en Austria y Alemania; la exclusión de los primeros variaba sobre todo de una a otra región. Aunque con derecho al voto y representados en los Parlamentos soberanos en las tres democracias de partidos (el sufragio era menor en Gran Bretaña), los sindicatos y partidos obreros no se mostraban satisfechos con la economía política del Estado, y lo mismo vale para muchos agricultores americanos y franceses.

Es decir, gran parte de los campesinos y los obreros no sentían el Estado como algo *suyo*. Naturalmente, sólo unos cuantos militantes obreros fueron socialistas convencidos, aunque estas ideas se difundieron ampliamente en las industrias de mayor importancia (véanse los capítulos 17 y 18), y los campesinos se adhirieron a organizaciones más conservadoras de lo que cabría esperar (véase capítulo 19). Muchos continuaban dependiendo de empresarios paternalistas, iglesias o comunidades étnico-lingüísticas, de modo que debieron seguir lealmente a sus patronos a la guerra, como han hecho durante siglos los secuaces. La alfabetización y los medios de masas pudieron añadir una difusa retórica moderna de apego a la nación, al rey y a la bandera. Pero algunas organizaciones segmentales de poder con capaci-

dad para movilizar a obreros y campesinos, en especial la iglesia católica y las comunidades de las minorías nacionales y regionales, se mostraban ambivalentes hacia el Estado-nación centralizado.

La frecuente actitud antibelicista de los campesinos se explica porque ellos padecían en primer lugar las conscripciones, las heridas y las bajas. Como he destacado en el capítulo 12, su lealtad militar no adquirió tanto la forma del nacionalismo como la de una disciplina que transfirió las fidelidades locales y regionales a los grandes ejércitos, cuyos símbolos eran cada vez más nacionales. Pero el nacionalismo de los soldados y los marineros se generó más en la disciplina militar que en la «libre» adhesión a las ideologías de la ciudadanía nacional.

Por tanto, ni los campesinos ni los obreros se identificaron de un modo intenso y continuo con el Estado-nación. Y puesto que no se trataba de su Estado, tampoco podía interesarles la política exterior. Les interesaban más las luchas nacionales por los derechos sindicales, las oportunidades educativas y los impuestos progresivos, o bien se hallaban aún apegados a sus comunidades locales y regionales. Pero tendían al antimilitarismo porque aún padecían la represión de los ejércitos e identificaban militarismo con centralismo y conscripción (capítulo 12) y porque sus aliados liberales en cuestiones de política interna solían ser fervientes antimilitaristas. Los movimientos obreros se oponían a los presupuestos militares, propugnaban el pacifismo socialista y sostenían que las guerras capitalistas y dinásticas despreciaban los intereses del pueblo. En Rusia, las organizaciones campesinas y de clase media, excluidas también de la ciudadanía, compartían estos sentimientos. En Austria, la exclusión de las nacionalidades surtió efectos muy semejantes en algunos campesinados y clases medias. En las democracias de partidos, donde la exclusión era menor, los trabajadores no fueron militaristas, pero tampoco desconfiaban demasiado del militarismo del régimen.

Pero no existió entre la clase obrera o el campesinado de ningún país un nacionalismo que contribuyera a exacerbar la tensión internacional. Algunos teóricos de la «aristocracia de la clase obrera» aseguran que ésta se implicó en el imperialismo y la rivalidad nacionalista, pero no es cierto. Tanto los obreros como los campesinos estuvieron escasamente representados en los movimientos nacionalistas e imperialistas del periodo, incluida la *totalidad* de los grupos de presión que analicé en el capítulo 16 o las agitaciones relacionadas con aventuras imperiales como la guerra de los bóers o la intervención esta-

dounidense en las Filipinas (Weber, 1968; Price, 1972; Eldridge, 1973; Welch, 1979; Eley, 1980). En efecto, no se puede relacionar a ninguna de estas dos clases con las causas de la guerra.

Los militantes de la clase obrera se identificaron también con una comunidad *transnacional* de mayores dimensiones. De sus seis ideologías principales (véase capítulo 15), mutualismo, sindicalismo, marxismo y socialdemocracia fueron transnacionales de modo casi invariable, y también muchas formas de proteccionismo y economicismo. Gompers no se creía menos transnacional que Marx. Aunque el racismo desfiguraba las tendencias transnacionales de la clase obrera americana, la hizo antiimperialista (se oponía a las aventuras exteriores para impedir el mestizaje). La práctica totalidad de los dirigentes obreros suscribía las palabras que cerraban el *Manifiesto comunista:* «¡Proletarios de todo el mundo, uníos!», y sus himnos eran, por lo general, versiones de la *Internacional,* como esta versión sindicalista de los *wobblies* (Dubovsky, 1969: 154):

> ¡Arriba, esclavos de la necesidad!
> ¡En pie, parias de la tierra!,
> ya truena la Justicia
> anunciando un mundo mejor.
> Habrá un nuevo fundamento;
> los que no éramos *nada*, seremos *todo*.
> Es el conflicto final
> Su puesto cada cual tendrá
> y el Sindicato Industrial
> la Raza Humana será.

Apenas hubo un nacionalismo abierto en los grandes movimientos obreros, ni siquiera racismo (un hecho significativo en este periodo), salvo en el caso estadounidense, porque «la Raza humana era una sola». Incluso la identificación jacobina del socialismo con la nación y la república en Francia —siguiendo la tradición revolucionaria de la Marsellesa y la bandera tricolor— se silenció durante esta época. En realidad, hubo «nacionalistas-regionalistas» de tendencias socialistas —los austro-húngaros y los irlandeses pretendían crear sus propias democracias nacionales—, pero pocos socialistas propiamente dichos apoyaron la agresión militar o la guerra en el extranjero.

Los socialistas contaban, además, con dos infraestructuras transnacionales muy influyentes, que los vinculaban a los exiliados y a los

intelectuales. Los primeros eran transnacionales por necesidad; los segundos, por entusiasmo. Los artesanos militantes, que habían sufrido el exilio en las monarquías durante todo el siglo XIX, se congregaban en los pequeños estados liberales de Alemania, en Londres, París, Bruselas, Suiza y Estados Unidos. Sólo en este último país se disiparon sus tendencias socialistas; en el resto, entraron en contacto con los trabajadores nacionales y con otros desplazados que hablaban su idioma, por lo general, exiliados y profesores y periodistas cosmopolitas, es decir, la intelectualidad socialista, los auténticos herederos de la Ilustración transnacional. Las redes de exiliados de finales del siglo XIX, los intelectuales que se reunían en clubes, cafés y tabernas, y los periódicos se convirtieron en infraestructuras ideológicas muy potentes para la comunicación del socialismo por encima de las fronteras. Pocos lectores de Marx, Blanqui, Bakunin, Fourier, Lenin y Rosa Luxemburgo conocían a estos autores en su propia lengua; los leyeron gracias a un pequeño grupo de cosmopolitas bohemios, generalmente judíos, que hicieron de traductores y editores. Fueron las células de artesanos exiliados y de intelectuales bohemios quienes fundaron la Primera Internacional en 1864, mucho antes de que los sindicatos hubieran consolidado sus organizaciones nacionales. Los militantes y los intelectuales de izquierdas apostaron resueltamente por el transnacionalismo.

Pero las organizaciones obreras de carácter masivo fueron *nacionales*. Con una u otra ideología, su actividad no sobrepasó las fronteras del Estado-nación. Cuando el proteccionismo, el sindicalismo o el economicismo intentaban eludir el Estado, se organizaban en el plano local o regional, casi nunca en el extranjero. Los mutualistas, los socialdemócratas y los marxistas plantearon sus reivindicaciones al Estado nacional, y lo reforzaron. Cada uno de sus éxitos, intensificaba su dimensión nacional, porque el Estado-nación constituía el único contexto realista donde se lograban los derechos civiles colectivos, la redistribución del poder, la salud o la seguridad. La clase obrera fue nacional porque la sociedad civil quedó autoritariamente regulada por el Estado-nación (lo que nunca reconoció Marx). Este hecho apartó a los obreros de los capitalistas, que ahora necesitaban poca regulación política nacional y podían permitirse el lujo de dejar que el mercado estableciera sus propias leyes, que siempre encarnaban las relaciones capitalistas de propiedad. En la práctica, la organización capitalista variaba sensiblemente, y lo mismo podía ser nacional que transnacional o nacionalista. Por el contrario, la actividad y la

organización de los obreros se encontraba confinada por completo a la nación. Como afirmaba Jules Guesde: «Por muy internacionalistas que seamos, el proletariado tiene que organizarse en el plano nacional, dentro de cada país, para trabajar por la emancipación de toda la humanidad» (Weber, 1968: 46).

Aunque la Internacional abrazó ideales transnacionales, en 1890 se había convertido en un comité de organizaciones de carácter nacional, cada una de las cuales representaba sus intereses. El Estado-nación constituía el contexto real de la acumulación de capital y de la regulación del trabajo (Olle y Schoeller, 1977: 61). Estos hechos produjeron dos puntos débiles en los sentimientos antibelicistas de la clase obrera:

1. Puesto que su praxis era enteramente nacional, la geopolítica le resultaba indiferente. En efecto, la actitud de la clase obrera británica ante la guerra de los bóers y el imperialismo no fue tanto de oposición cuanto de indiferencia, concluye Price (1972: 238). La Primera Internacional y otros congresos internacionales obreros no pasaron de grupos de debate, sin estructuras con capacidad de decisión y sin seguimiento masivo. Enfrentadas a la guerra, cada organización obrera adoptó decisiones independientes. Desde el punto de vista organizativo, la clase obrera demostró una escasa capacidad para frenar el deslizamiento hacia el conflicto.
2. El temor al militarismo se explica, en primer lugar, por su papel de represor interno, pero no se temían menos los militarismos extranjeros, que podían parecer incluso más represivos. Los trabajadores franceses temían la agresión alemana porque aquel régimen reaccionario amenazaba a la república; los austriacos y alemanes desconfiaban de Rusia por su hostilidad hacia todas las organizaciones obreras. Sólo los trabajadores rusos, sometidos al régimen más reaccionario, eran inmunes. Pero en otros países el miedo era fácilmente manipulable a favor de la guerra.

En 1914 estos puntos débiles minaron la retórica transnacional de la Internacional y de los dirigentes de la clase obrera. Los líderes socialdemócratas alemanes temían que la oposición a la guerra acarreara la represión contra un partido y una organización sindical construidos con el esfuerzo de varias décadas ante la indiferencia de las clases que apoyaban el conflicto y sin la ayuda del proletariado extranjero. Los trabajadores alemanes sólo contaban con organizaciones alema-

nas, y había que protegerlas a cualquier precio. Tampoco confiaban los dirigentes en su capacidad para contrarrestar la propaganda del régimen que identificaba a la Rusia reaccionaria como el principal enemigo (Morgan, 1975: 31). Encontramos motivos muy parecidos en el partido socialista austriaco. Los socialistas franceses conservaron su oposición formal al militarismo hasta la guerra, pero muchos reconocían que los trabajadores acabarían por defender a la república, e incluso que deberían hacerlo. En cuanto a los británicos, carecían de política exterior, pero seguían la de sus aliados liberales. Las organizaciones de la clase obrera apoyaron a los partidos y regímenes simpatizantes no porque se sintieran agresivamente nacionalistas, ni en el plano político ni en el económico, sino porque se hallaban enjauladas en el Estado-nación. Las clases trabajadoras no pudieron impedir que otros prepararan la Gran Guerra.

Las clases con una ciudadanía más segura también estaban organizadas nacionalmente, pero el Estado era *suyo*, simbolizaba su comunidad imaginaria, por tanto, les resultaba fácil identificarse con su «grandeza», su «honor» y sus intereses geopolíticos. Desde el momento en que el Estado era el Estado-nación, sus sagradas razones se convertían en intereses nacionales no menos sagrados. En los capítulos anteriores hemos visto que las clases medias se sumaron a la sociedad nacional, fueron votantes, oficiales en la reserva y propietarios de sus casas, contrataron sirvientes y participaron en la educación, la cultura y los mercados nacionales. Mommsen (1990: 210 a 224) ha estudiado la gran transformación del liberalismo decimonónico. El siglo comenzó liberal y pacífico, pero desde la década de 1880 las identidades y las emociones nacionales se hicieron agresivas. Aparecieron entonces las ideologías nacionalistas basadas en la superioridad racial, la xenofobia, la lucha a muerte por la supervivencia racial y nacional y el militarismo popular. No obstante, me he mostrado escéptico en el capítulo 16 respecto a la extendida opinión sobre el nacionalismo de la clase media, del que encuentro pocas pruebas. Dentro de esta clase, los grupos más identificados con el nacionalismo corresponden a los de mayor educación y a los empleados de carrera. Puesto que las democracias de partidos se dividieron entre los antiguos cosmopolitas y las nuevas pretensiones imperiales de grandeza nacional, la clase media quedó igualmente dividida.

Así pues, ni el nacionalismo agresivo de masas ni el imperialismo social manipulado por los regímenes de las democracias de partidos resultaron en exceso significativos. La derecha que lo apoyaba ganó

pocas elecciones. Sus principales portavoces fueron unos cuantos xenófobos, entre los que debemos contar a ciertos mandarines de la prensa, que causaron malestar político, pero, en ningún caso, consiguieron cambiar el rumbo político. El nacionalismo británico y francés fue ambiguo porque, aunque lleno de sentimientos imperiales, estaba convencido de que sus países eran portadores de una civilización humanista, cristiana y democrática que tenía mucho que aportar a la humanidad. El imperialismo sólo contenía rasgos racistas respecto a las colonias, pero en Europa, donde realmente estalló la guerra, se mostraba a la defensiva. El nacionalismo político tendía a amplificar las grandes corrientes ideológicas de los partidos y la política de rearme auténticamente defensivo de los gobiernos francés y británico. Los regímenes liberales temían a la opinión pública pacifista más que al nacionalismo agresivo. No faltaron las tensiones sociales —huelgas y conflictos en el Ulster y rebeliones contra el reclutamiento en Francia—, pero los gobiernos no consideraron seriamente recurrir al imperialismo social como solución a estas tensiones.

La identidad nacional se hallaba muy arraigada en prácticas sociales extensivas e intensivas, pero el nacionalismo agresivo no. Ya hemos comprobado que el imperialismo económico hundía sus raíces en la geopolítica. De ahí que el nacionalismo político careciera del atractivo económico que le habría proporcionado una organización de clase. Aunque la opinión británica informada se preocupaba por el proteccionismo que practicaba la competencia alemana, los sentimientos populares contra Alemania eran mucho más difusos. Los nacionalistas situaron la grandeza del imperio y de la armada por encima del interés económico directo. Los franceses, ignorando la competencia económica, se centraron en la recuperación de la Alsacia-Lorena y en la amenaza alemana a la república y su poderío militar. En este nacionalismo poco arraigado la identidad del enemigo cambiaba con rapidez. En menos de una década, los nacionalistas británicos y franceses dejaron de odiarse para odiar a los alemanes. El *chauvinismo* agresivo y en principio belicoso podía entrar en crisis súbitamente y desaparecer con la misma celeridad. Lloyd George comentaba con cinismo a principios de agosto de 1914: «La guerra ha ganado popularidad entre el sábado y el domingo» (Albertini, 1957: 482; *cf.* Weber, 1968: 31 y 32, sobre los rápidos cambios en Francia).

Ante esta actitud superficial, unos regímenes se sentían desconcertados y otros adoptaban un comportamiento manipulador. Puede que si el gobierno declaraba la guerra entre el sábado y el domingo, la

nación (predominantemente de clase media) la acogiera con entusiasmo. En ello residía el ardid manipulador del nacionalismo superficial en una democracia de partidos, y aún es así, con la única salvedad de que la nación incluye ahora a la clase obrera y a la mujeres. Con todo, ese manejo tenía sus limitaciones porque el electorado de clase media no deseaba perder la vida o costear el gasto adicional de una guerra contra otra gran potencia (Steiner, 1977: 250 a 253). Los regímenes británico y francés dudaban también de la lealtad de la clase obrera, aun en el caso de que Alemania atacara primero. El régimen de la democracia de partidos se mostraba cauteloso frente al nacionalismo político, pero no se dejaba confundir por él y sólo recibieron su apoyo con la guerra empezaba.

Al otro extremo, en la Rusia autocrática, el imperialismo social resultaba aún menos evidente (Lieven, 1983: 38 a 46, 153 y 154; Kennan, 1984). A partir de 1900 la crisis balcánica acrecentó el populismo paneslavo que enfrentaba a los dirigentes rusos con el mundo teutónico, representado por Austria y Alemania. El paneslavismo era, en cierto sentido, de clase media, porque le faltaba apoyo obrero, campesino o aristocrático, pero los derechos de ciudadanía de la clase media rusa no estaban claros. Al contrario que el nacionalismo agresivo de carácter burgués, el paneslavismo no se limitó a la derecha política, se extendía desde la veneración al zar hasta el anarquismo más violento. Pero el régimen no quiso acogerlo. La monarquía más reaccionaria de Europa no se molestó en explicar a su pueblo su conducta exterior, y mucho menos en legitimarla mediante principios populares.

Por consiguiente, fuera de Alemania, la manipulación del imperialismo social y del nacionalismo político no estuvieron entre las grandes causas de la guerra. El público y el régimen se hallaban mutuamente aislados, la clase obrera y el campesinado eran indiferentes a la política extranjera y la corriente nacionalista de la clase media se situaba a la defensiva. Las organizaciones nacionalistas o transnacional no predominaron entre estas clases, cuya situación de enjaulamiento nacional o local-regional permitía la existencia de intersticios en los que otros podían organizar la guerra sin su consentimiento, entre una clase media poco entusiasta, un campesino resignado, una clase obrera resentida y una soldadesca disciplinada[1].

[1] Lo que se confirma en los estudios de la respuesta de la opinión pública y los soldados movilizados para la guerra. Esta parte corresponde al análisis del Volumen III; no obstante, vale para mi argumentación sobre el caso francés, véase Becker, 1977.

El imperialismo social y la deriva del régimen en Alemania

Fue la agresión alemana, la que contribuyó a transformar el conflicto balcánico en una guerra mundial. Incluso el imperialismo social que no había prosperado en otras partes, arraigó en Alemania, y también la teoría. Desde que Fritz Fischer afirmó la importancia de la política interior alemana para la guerra en su obra *Der Primat der Innenpolitik* (1961), muchos autores establecen dos puntos básicos: la persistente agresividad del liderazgo alemán, que habría preparado una guerra de grandes dimensiones durante la década anterior a 1914, y su intención de resolver las tensiones de clase internas con un imperialismo social que le conduciría al dominio del mundo (Berghahn, 1973; Gordon, 1974; Geiss, 1976, 1984). Pero el énfasis de Fischer sobre la solidez y coherencia del régimen pierde terreno ante las contradicciones de este último (Wehler, 1970, 1985). No podemos volver al *Der Primat der Aussenpolitik* o rechazar por completo la teoría del imperialismo social en Alemania (Mommsen, 1976; Joll, 1984b).

El militarismo alemán es un hecho indiscutible, que ya había manipulado el propio Bismarck, tratando de aprovecharlo al menor coste posible, es decir, empleando las colonias para distraer las tensiones de clase o de cualquier otro tipo (Pogge von Strandmann, 1969; Wehler, 1981). Los posteriores gobiernos le imitaron, como se desprende de las palabras de un ministro prusiano:

> Abrigaba la esperanza de que la política colonial canalizara nuestra atención hacia el exterior, pero sólo ha ocurrido hasta cierto punto. Deberíamos, pues, introducir cuestiones de política exterior en el *Reichstag*, porque los asuntos exteriores unifican los sentimientos nacionales. Nuestro innegable éxito en esta materia causaría una buena impresión en los debates del *Reichstag* y moderaría las divisiones políticas [Geiss, 1976: 78].

Hablando con uno de los confidentes del káiser, el canciller von Bülow llegaba más lejos:

> La mejor forma de recuperar el apoyo popular a la monarquía es revivir la «idea nacional». Una guerra victoriosa podría resolver muchos problemas, como las de 1866 y 1870 resolvieron la supervivencia de la dinastía [Geiss, 1976: 78].

Max Weber ofreció una versión liberal del imperialismo:

Debemos comprender que la unificación de Alemania fue una especie de travesura infantil que cometió la nación en los años de madurez, de la que habría sido mejor prescindir, dados sus costes, ya que no fue el principio, sino el final de una *Weltmachtpolitik* [política de potencia mundial] alemana [Geiss, 1976: 80].

Weber no planteaba imperialismo *en vez de* reformas, sino imperialismo *más* reformas, con el objetivo de modernizar y estabilizar Alemania (Mommsen, 1974: 22 a 46).

Estas concepciones agresivas no abundaban en otros países. Más aún, el imperialismo social alemán no se limitaba a agrupar la nación contra los extranjeros; los *Reichsfeinde* o enemigos del imperio —socialistas, liberales de izquierdas, minorías étnicas y, al principio, católicos— se consideraban una especie de mezcla de potencia extranjera y enemigo interior, porque se les identificaba, más o menos sinceramente, con los enemigos externos: los socialistas y los judíos, con todo tipo de conspiraciones internacionales; los católicos, con Austria primero y con la curia romana, después; los polacos con Rusia y la raza eslava; los alsacianos, con Francia; los liberales, con Francia y Gran Bretaña (Wehler, 1985: 102 a 113). El régimen del imperialismo social representaba una estrategia típica de la fórmula «divide y vencerás», que integraba un núcleo de leales al que fue añadiendo primero los industriales y agricultores protestantes, luego, las clases medias y los católicos, hasta aislar a los socialistas, liberales de izquierdas y minorías étnicas.

Sin embargo, los gobiernos alemanes no manipularon el imperialismo social buscando la guerra mundial (como afirman Fischer, Geiss y Berghahn); pretendían una «grandeza» que distrajera la atención de las tensiones internas, lo cual es muy distinto a una conflagración en dos frentes contra las otras tres grandes potencias europeas. ¿Podría haber sido una guerra semejante el resultado de un proyecto para solucionar la lucha de clases?

Bülow no lo creía así, como se desprende de la continuación de su anterior parlamento: «Por otra parte, una derrota podría representar el fin de la dinastía». Oigamos lo que añadía en 1911:

La historia demuestra que a una guerra de grandes dimensiones le sigue siempre una época de liberalismo, porque el pueblo exige una compensación

por el sacrificio. Pero cuando acaba en derrota, las dinastías se ven obligadas a hacer concesiones que antes no habrían aceptado ... Por encima de todo, hay que actuar con prudencia y tener en cuenta las consecuencias [Kaiser, 1983: 455 y 456].

Bethmann, su sucesor en la cancillería, llegaba más lejos en julio de 1914:

Los resultados involuntarios de la guerra mundial reforzarán el poder de la socialdemocracia, como recompensa a su pacifismo, y derribarán muchos tronos ..., cualquiera que sea el final del conflicto, acabará por desbaratar el orden anterior [Jarausch, 1973: 151 y 152].

No se trata de consideraciones personales o intrascendentes, sino de la opinión de los dos últimos cancilleres alemanes del periodo prebélico, expresada en el contexto de un debate europeo, tanto de la izquierda como de la derecha, respecto al posible impacto de la movilización masiva sobre la lucha de clases. Aunque algunos extremistas de derechas creían que el conflicto aunaría las voluntades alrededor de la corona, la mayor parte de los conservadores y de la izquierda sostenían lo contrario. Como escribió Lenin desde su exilio austriaco en 1912: «Una guerra entre Austria y Rusia sería muy útil para la revolución en el este de Europa, pero dudo de que Francisco José y Nicolás nos causen ese placer».

Si la victoria hubiera estado garantizada, el imperialismo social habría constituido una excelente estrategia, pero eso es siempre imposible y los estadistas alemanes no entraron en la Gran Guerra con semejante confianza. Sabían que el orden social corría peligro. Así pues, no podemos considerar la agresión alemana de 1914 un acto deliberado de la estrategia propia del imperialismo social.

Pero la *Innenpolitik* y los asaltos del imperialismo social fomentaron la agresión alemana de formas inesperadas (así lo han afirmado Kaiser, 1983, y Wehler, 1985). Como vimos en el capítulo 9 la política exterior y la interior se implican mutuamente. En el plano interno, el régimen practicó la *Sammlungspolitik*, o política de «unificación» de las clases «productivas» (es decir, poseedoras) contra los *Reichsfeinde* de dentro y de fuera del país. Bethmann ha llamado a esta estrategia divisoria la «política de la diagonal». Aparecieron entonces tres combinaciones competidoras de economía política internacional y diplomacia: liberalismo, *Mitteleuropa* y *Weltpolitik*, mez-

cladas con asuntos internos. La política de la diagonal volvió la espalda al primero y abrazó las formas geopolíticas más agresivas, pero nunca se decidió por una de las otras dos últimas alternativas, por eso se vio abocada a un desastre no realista.

El liberalismo, que se centraba en los enclaves comerciales como Hamburgo, al calor de la industria y del capital financiero, encontró algunas simpatías dentro del régimen, especialmente en la Wilhelmstrasse, cuyos diplomáticos aconsejaban en ocasiones la adopción de una postura internacional conciliadora. Su razonamiento era el siguiente: Francia se mostraría hostil mientras Alemania conservara la Alsacia-Lorena; la enemistad de Rusia y Gran Bretaña era peligrosa; por consiguiente, el canciller Caprivi elaboró de 1890 a 1894 un paquete de reformas internas, una economía política basada en el *laissez-faire* y una política de acercamiento a los británicos. Pero el káiser lo despidió antes de aceptar ninguna forma de conciliación con la clase obrera. A partir de ese momento, el liberalismo perdió el favor del régimen; por otra parte, su economía política despertaba escaso interés entre los campesinos o los conservadores, y una enorme hostilidad entre los militares y los nacionalistas políticos.

Las clases agrarias conservadoras, encabezadas por los *Junkers* prusianos, ampliaron el proteccionismo en el expansionismo. Rusia era su principal rival económico; los trabajadores polacos, su constante amenaza interna. Rusia, que necesitaba exportar para pagar la deuda y la importación de productos manufacturados, volvió los ojos a Francia cuando los aranceles cerraron a su trigo el mercado alemán; todo un revés diplomático para Alemania. Los conservadores empeoraron la situación generalizando el conflicto en un enfrentamiento racista entre teutones y eslavos. Fiscal y socialmente conservadores, los *Junkers* se negaron al principio a votar los impuestos y movilizar el ejército masivo que requería la agresión, pero desde 1909, la motivaciones políticas redujeron sus prejuicios, porque vislumbraron la posibilidad de frenar la decadencia de su poder aliándose con los partidos nacionalistas. Eligieron como instrumento el ejército y la ideología patriotera y racista que veía en Rusia un enemigo, en Austria, un aliado y en la dominación alemana de *Mitteleuropa,* una solución. Propugnaban una mezcla de mercantilismo e imperialismo económico y geopolítico contra el este.

Algunos representantes de la industria pesada favorecían también las medidas protectoras y expansionistas. Sus motivaciones solían ser pragmáticas, orientadas por el mercado, pero la incorporación al régi-

men aumentó su concepción territorial del interés. Puesto que Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos eran los grandes competidores, muchos apoyaban la *Weltpolitik,* el mercantilismo a escala mundial. En la década de 1890 este mercantilismo se convirtió en imperialismo económico (en alianza con el propio imperialismo geopolítico del régimen) en el contexto de la lucha por África. Pero pronto se vio que Alemania había llegado al escenario colonial demasiado tarde para sacar provecho, a menos que aceptara entrar en guerra con otros Imperios europeos, y los industriales no estaban dispuestos ni a la guerra ni a la expansión hacia el este. Sin embargo, las presiones del mercado, interpretadas desde el interior de un régimen autoritario, fomentaron el mercantilismo agresivo. En 1897 la situación despertó su interés, y el de otros, en la marina.

La construcción de la marina alemana respondió a causas complejas e idiosincrásicas. El entusiasmo personal del káiser y la mediación de la corte y del almirante Tirpitz tuvieron su importancia, pero la idea de una gran marina alemana despertaba interés político. Pese al militarismo del país, la expansión de las fuerzas armadas creaba conflictos, especialmente entre las clases medias y el sur católico, donde se temía siempre que el ejército sirviera para realizar una represión interna centralizada. Por otro lado, los *Junkers* y el alto mando dudaban en armar a los obreros (la conscripción de los campesinos, supuestamente leales, estaba llegando al límite) o permitir el predominio numérico de la burguesía en una oficialidad ampliada. Pero la marina requería una utilización intensiva de capital y poco factor trabajo, no podía reprimir y beneficiaba la industria pesada, el empleo y la modernización económica. Cuando los industriales comprendieron las ventajas económicas de los acorazados, se avinieron al acuerdo con los *Junkers* conservadores y el centro católico representante de los campesinos. En 1897 éstos obtuvieron un aumento de los aranceles sobre el trigo a cambio de la segunda y decisiva ley naval. Una reforma social mínima ganó para la causa a los liberal-nacionales (Kehr, 1975, 1977: capítulos 1 a 4).

El régimen, la industria y gran parte de la clase media apoyaron la construcción de los acorazados; los católicos del sur la aceptaron; nadie, ni siquiera los socialdemócratas (aumentaba los puestos de trabajo), se opuso con energía. El mundo tradicional de los hombres de negocios liberales, como los magnates de la industria naval de Hamburgo, lo acogió entusiasmado. Satisfacía a las cuatro cristalizaciones de nivel superior —el monarquismo (porque era un nuevo juguete

para el káiser), el militarismo, el nacionalismo y el capitalismo—, sin despertar la oposición de sus enemigos internos tradicionales. A partir de 1900 la marina obtuvo todos los recursos que solicitó. La construcción de acorazados fue un resultado de la *Innenpolitik*, del interés económico seccional, la estrategia divisoria del régimen y del militarismo institucionalizado casi informalmente por el Estado.

No obstante, como política exterior, la *Weltpolitik* naval no demostraba un gran realismo desde el punto de vista material. Se suponía que la flota tendría que proteger los intereses coloniales y comerciales de Alemania, pero los acorazados estaban diseñados para la confrontación con Gran Bretaña en el Mar del Norte. En efecto, el debate no se centró tanto en su utilidad material como en su estatus simbólico. Bethmann aducía la necesidad de la flota para Alemania «porque contribuirá a aumentar nuestra grandeza» (Jarausch, 1973: 141 y 142). Este imperialismo estatal, que mezclaba la economía y la geopolítica con el honor nacional, carecía de una imprescindible racionalidad que le habrían aportado las concepciones realistas o capitalistas del interés. Aunque la flota estaba creada para luchar con los británicos, su construcción no implicó ninguna manifestación de anglofobia, ni tampoco un análisis en frío de su posible impacto en el exterior o de su utilidad militar.

Las consecuencias diplomáticas imprevistas fueron desastrosas. La construcción de los acorazados, acompañada de la retórica sobre el dominio del mundo, hostigó a Gran Bretaña y produjo una carrera de armamento que Alemania tenía que perder. Gran Bretaña podía tomar la delantera y transferir su marina global a las aguas nacionales; su diplomacia se concentró una vez más, como en los últimos ciento cincuenta años, en la política del «agua azul». «Somos peces», declaraba lord Salisbury. La marina real continuó siendo el arma fundamental de Gran Bretaña, y sus aguas jurisdiccionales, la prioridad defensiva absoluta. Grey lo confirmaba en 1913: «La marina es nuestro único medio de defensa; en él nos va la vida». Los estadistas británicos eran partidarios de luchar si Alemania atacaba Francia sin garantizar la neutralidad belga, porque una gran flota alemana en los puertos de los Países Bajos representaría un golpe mortal para el poder de Gran Bretaña.

Si Alemania hubiera sido capaz de disminuir sus cometidos continentales y de reconciliarse con Rusia o Francia, sus recursos habrían permitido alcanzar la meta de Tirpitz, cifrada en una relación de dos a tres entre los barcos alemanes y los británicos. Esto habría neutrali-

zado el poder naval de Gran Bretaña (aunque no podemos prever el final). Pero la *Sammlungspolitik* no sólo agrupó a las clases productivas alemanas, sino también a sus enemigos exteriores. La diplomacia alemana no se reconcilió con Rusia porque los *Junkers* continuaban dentro del régimen; ni tampoco intentó romper la alianza franco-rusa. En el interior, el régimen incorporó a las facciones, añadió cristalizaciones políticas y no rechazó ninguno de sus criterios políticos. Como resultado diplomático, Alemania se vio rodeada de enemigos. A falta de un cometido firme de los recursos, la flota alemana no pudo dominar el Mar del Norte; pero Alemania había empujado a Gran Bretaña a la Entente enemiga, aunque no estaba en condiciones ni de vencerla ni de impedir que ayudara a sus aliados continentales (Kennedy, 1980: 415 a 422).

Por otra parte, la exitosa *Innenpolitik* produjo consecuencias tan inesperadas como desastrosas para la *Aussenpolitik*. El éxito interior aumentó la hostilidad de las potencias extranjeras y contribuyó a aumentar tanto la amenaza objetiva desde el exterior como la paranoia alemana (¿Por qué se vuelven contra nosotros Rusia, Francia y Gran Bretaña, si no queremos perjudicarlas?). A partir de 1906, el régimen subrayó la teoría del «cerco» contra Alemania, de su papel de víctima de una conspiración geopolítica. La escuela de Fischer sostiene que todo respondió a una manipulación para crear un clima favorable, en el que la agresión pasara por «guerra defensiva» (Geiss, 1976: 121 a 138). Yo prefiero la teoría del embrollo a la de la conspiración; en realidad, el régimen partió de decisiones impuestas por la situación interna, que surtieron efectos diplomáticos, y se vio sorprendido por la reacción extranjera. Pero la doctrina del cerco creó una Alemania resistente. Era una metáfora militar y territorial que conducía a lo que el káiser describió como avanzar resueltamente por un «puente levadizo», enarbolando una «espada bien afilada».

En efecto, las estrategias divisorias lograron incorporar a la clase media, al sur y a los católicos, y aislar a los socialistas, los liberales radicales y las minorías étnicas, pero el éxito privó a la política alemana de un centro. Como vimos en los capítulos 18 y 19, el productivismo y el estatismo marxista que desquició a la izquierda excluida, la inhabilitó para establecer alianzas pragmáticas con los liberales centristas y, con ello, para atraer a los campesinos o a los católicos, mientras que los partidos de centro introducidos en el régimen tuvieron que comprometerse con el conservadurismo, no con el liberalismo radical. En el capítulo 16 demostré que el nacionalismo político, centrado

en los funcionarios y las instituciones educativas del Estado, sacralizó el Estado en mayor medida que otros países, y fue más racista. En cierto sentido, esto sencillamente amplificó las preferencias del régimen, pero también recortó su libertad de acción.

Una vez excluidos los trabajadores y las minorías étnicas, el régimen dependía de los votos de la clase media; una vez denegada la soberanía parlamentaria, quedaba en manos de la lealtad de sus administradores. De ahí que las presiones nacionalistas consiguieran influir y desestabilizar (Eley, 1980).

El acoso exterior y los *Reichsfeinde* internos aumentaron las tendencias paranoicas del régimen y de los nacionalistas. Poco a poco, estos últimos perdieron la capacidad de cambiar de enemigo que caracterizaba a los nacionalistas franceses y británicos, y se hicieron menos manipulables desde las definiciones capitalistas o realistas del interés. Esto explica el elemento «paranoico» de la política alemana, no desde el punto de vista del temor económico de las clases o de su supuesto «pánico de estatus» (cuyas teorías he criticado en el capítulo 16), sino desde un punto de vista *político.*

En julio de 1914 Bethmann explicaba de esta forma el apuro en que se hallaba Alemania:

> Los errores anteriores ... el haber desafiado a todo el mundo, el habernos cruzado en su camino sin conseguir debilitarlos. ¿La razón? La ausencia de rumbo preciso, la necesidad del prestigio que proporcionan los éxitos inmediatos y de reconocimiento de la opinión pública. Los partidos «nacionales» pretenden mejorar sus posiciones escudándose en la política exterior [Stern, 1968: 265].

En efecto, pero ya era tarde, porque él mismo había cedido ya la diplomacia a la «espada bien afilada» del káiser.

El imperialismo social fue importante para la diplomacia alemana, pero más como consecuencia imprevista que como estrategia deliberada del régimen. Los historiadores liberales sostienen que el «fracaso» en la solución de los problemas internos derivó en agresión exterior. Por el contrario, fue el *éxito* del régimen a la hora de convertir el absolutismo en una monarquía semiautoritaria moderna lo que produjo el desastre geopolítico. El orden en la corte y el *Reichstag* se compró añadiendo cristalizaciones políticas y permitiendo la incorporación segmental de las facciones para mantener su idea de los enemigos de Alemania. La situación se asemeja a la teoría de Snyder

(1991: 66 y 67) sobre el intercambio de favores políticos entre las «elites *cartelizadas*»: un acuerdo entre las elites con gran concentración de poder e intereses en la expansión imperial, el proteccionismo económico y la preparación militar para trapichear entre sí los votos positivos produjo un resultado más agresivo del que habría producido cualquiera de estos elementos por separado. En consecuencia, Alemania se cruzó «en el camino de todo el mundo», como comprendieron Bülow y Bethmann. Para evitarlo, habría que haber escogido entre los *Junkers,* la monarquía, el ejército, la armada, los capitalistas de la industria y los nacionalistas estatistas. Bülow cayó por atreverse a atacar los privilegios fiscales de los *Junkers.* Bethmann se vio superado y puesto en ridículo por los nacionalistas cuando propugnó la conciliación diplomática.

El régimen continuó su deriva irreflexiva y casi fortuita hacia el militarismo. Las clases agrarias volvieron a integrarse, y desde 1912 el ejército creció más que la armada. En 1914 sólo habían perdido los liberales y los socialistas. No hubo elecciones entre la *Mitteleuropa* y la *Weltpolitik* en razón de sus méritos realistas. Sus facciones continuaron intrigando dentro del régimen porque no habían descartado a sus enemigos exteriores. El régimen continuó siendo capitalista, monárquico y militarista —a lo que añadió el nacionalismo— sin hacer elecciones. Nadie le planteó ninguna prueba final que le obligara a definirse, por el contrario, su éxito entre las facciones integradas y excluidas se debió a esa indefinición. Era popular, pero esa popularidad puso en peligro la paz y su propia supervivencia. Pocas veces ha tenido un éxito consecuencias involuntarias tan desastrosas: el triunfo interior de la estrategia de incorporación semiautoritaria sirvió para aumentar el orgullo geopolítico.

Por si fuera poco, hubo aún otra contribución estrictamente geopolítica a la caída de Alemania: su desafortunada situación geográfica también fue causa de la guerra *mundial.* Rusia, el enemigo de sus señores rurales era su vecino del este y su principal rival por tierra; el de su industria pesada (la construcción de acorazados), era Gran Bretaña, la mayor potencia naval, situada al oeste; Francia ofendida y formidable, aliada evidente de sus rivales, se encontraba al sureste. De nuevo, una potencia situada en el centro de Europa caía en la trampa de atacar en dos frentes al mismo tiempo, con el resultado que ya he mencionado para otras en el capítulo 8. Su posición territorial en la *Mitteleuropa* reforzó el orgullo alemán.

Conclusión

Un hecho singular siempre tiene causas especiales. Si pudiéramos borrar la suerte de Gavrilo Princip (el asesinato había fallado; Princip se había retirado a un café cuando, de repente, el carruaje abierto del archiduque avanzó frente a él) o la imprudencia de unos cuantos austriacos o serbios, o los errores de algunos diplomáticos y generales, la Gran Guerra no habría ocurrido cuando ocurrió o quizás nunca. Para diseccionar las causas más estructurales o generales, trato de explicar el clima general que hizo de la guerra un resultado entre lo posible y lo probable. Los accidentes ocurren, pero siempre dentro de un marco de probabilidades. Lo que pudo parecer aleatorio, especialmente a los participantes, podría responder a un modelo general a largo plazo, *sub specie aeternae,* pero en este volumen no se ofrece ninguna forma de eternidad. Ni siquiera los ciento cincuenta y seis años que cubre ofrecen un plazo suficientemente largo para contrastar completamente esa posibilidad, aunque he comenzado a hacerlo y este capítulo continúa en ese sentido.

Vemos con toda claridad que la explicación no puede concentrarse exclusiva o predominantemente ni en la *Inner* ni en la *Aussenpolitik.* La decisión siempre dependió del entrelazamiento entre ambas políticas dentro de cada Estado-nación y entre ellos. La consolidación del Estado nacional produjo varios nacionalismos políticos opuestos; el desarrollo del capitalismo aumentó el enfrentamiento de las clases extensivas y políticas; y los estadistas y militares representaron todo esto en el contexto geopolítico de las potencias. Ninguno se desarrolló en un vacío aislado de los demás; todos se influían involuntariamente. Nadie controlaba el proceso en su totalidad ni pudo predecir la reacción de las naciones, las clases, los estadistas y los militares.

Las escuelas *Innen* y *Aussen* conciben erróneamente las sociedades y los Estados como sistemas unitarios y homogéneos. En la concepción *Innen,* las clases y otros actores de poder internos elaboran racionalmente proyectos y alcanzan compromisos para defender sus intereses mediante estrategias tales como el imperialismo social o económico. En la concepción realista *Aussen,* los estadistas calculan racionalmente los intereses geopolíticos. Ambas escuelas admiten que los actores cometieron errores, y los realistas pretenden incorporarlos a su microexplicación. Pero el alcance de los errores fue realmente extraordinario. Es cierto que los actores intentaron una acción racio-

nal, que calcularon sus intereses políticos, nacionales y de clase, y que buscaron los medios más económicos para defenderlos, pero también lo es que no tuvieron éxito. En ello radica el fracaso más sistemático de agosto de 1914, resultado de las consecuencias imprevistas de la interacción de redes superpuestas y cruzadas. Los actores se movieron entre estrategias cuya interacción fue impredecible y resultó devastadora.

Esta «confusión pautada» se intensificó por una contradicción institucional localizada en el corazón del Estado. Por una parte, la diplomacia de los estadistas modernos y el profesionalismo de los ejércitos tuvieron consecuencias sistemáticas porque dirigían las infraestructuras masivas de poder que he descrito en los capítulos 11 a 14. Su decisión de ir a la guerra hizo caer a regímenes y potencias, destruyó economías y produjo millones de muertos y mutilados. Las «razones de peso» que aducen los teóricos *Innen* y *Aussen* podrían parecer *incluso* apropiadas a este nivel de riesgo, pero ni los estadistas ni los militares —tampoco las clases o las naciones— pudieron actuar con esas motivaciones, entre otras cosas, porque las estructuras en las que los Estados «soberanos» tomaban «sus» decisiones eran de cuatro tipos. El Estado moderno era unitario en sus consecuencias, pero polimorfo y faccionalizado en su estructura.

1. *Monarquías.* En estos casos, la intriga entretejía complicados modelos tanto en la práctica política normal como en los momentos de crisis, mientras que los militares podían actuar autónomamente durante estas últimas. Los monarcas y sus consejeros habían institucionalizado estrategias divisorias segmentales, que impedían deliberadamente la toma de decisiones últimas por cualquiera de los cuerpos aislados. Cultivaban la intriga, esperando controlarla. Cuando aparecieron en escena los capitalistas de la industria, los parlamentarios burgueses y los nacionalistas, se les incorporó también a la intriga divisoria. En las tres grandes potencias —Alemania, Rusia y Austria-Hungría—, cada una con su responsabilidad en la guerra, las facciones entre los nobles, los generales, los capitalistas, los notables de los partidos y los partidos nacionalistas (ausentes en Rusia) alcanzaron la cima del Estado y accedieron a la persona del monarca, influyendo en él en uno u otro sentido, a veces para aconsejarle cautela, otras para empujarlo a una acción imprudente.

2. *Democracias de partidos.* En las democracias conviene distinguir la rutina política de los momentos críticos. Las decisiones du-

rante las crisis se toman en los Parlamentos y los gobiernos, a quienes se asigna con claridad la responsabilidad última. Pero las decisiones diplomáticas de carácter rutinario del antiguo régimen y los estadistas republicanos son incluso más privadas, aisladas y autónomas que en los regímenes monárquicos, porque las clases y los partidos se encuentran enjaulados por la organización predominantemente nacional o local-regional. Su aislamiento presenta dos grandes limitaciones: los estadistas no pueden asignar a su arbitrio fondos para metas políticas exteriores, ni tampoco amenazar con la guerra. Esto significa que poseen una escasa capacidad de disuasión, si antes han actuado con poca sinceridad o han esperado a que el ataque se produzca antes de actuar agresivamente. La división en las democracias de partidos se produce entre el antiguo régimen casi aislado y el parlamento y el gobierno modernos. Su faccionalismo se reflejó en los cambios de dirección de la política exterior durante las crisis, agravados moderadamente por las dos formas opuestas del nacionalismo político, la liberal y la imperial.

3. *Todos los Estados* practicaron una diplomacia algo más agresiva y territorial. Los estadistas creían que los cambios en las grandes potencias habían creado un mundo más peligroso. Los militares desarrollaron tácticas agresivas, desdeñaron la diplomacia e impusieron una disciplina segmental a las masas de soldados y marineros. Pero el desarrollo de la ciudadanía y de las infraestructuras crearon el Estado-nación y redujeron el aislamiento de los regímenes. La vida social se naturalizó, generando fuertes sentimientos hacia la nación. Surgió entonces un nacionalismo más agresivo, si bien muy limitado a los administradores del Estado y a sus instituciones educativas, y difundido superficialmente entre las clases medias y las comunidades lingüísticas y religiosas. Aumentaron las definiciones nacionales de la comunidad, al tiempo que se debilitaban las de carácter transnacional y local-regional. Las definiciones territoriales del interés económico, que se movían entre el proteccionismo pacífico, el mercantilismo y el imperialismo económico, se entralazaron con la *geopolítica* supuestamente realista del régimen y las concepciones más populares del honor y la identidad nacional.

4. *Todas las políticas* se manifestaron volubles e incompetentes desde el mundo de vista diplomático. Los militares se refugiaron en la competencia tecnocrática. Los estadistas, ahora sólo semiaislados, demostraron una marcada inconsistencia. Unas cuantas organizaciones *transnacionales* defendían aún la diplomacia pacífica; y otro

grupo poco numeroso de *nacionalistas* favorecía una geopolítica agresiva, sobre todo en las colonias. Pero la mayor parte de las clases y de los restantes actores de poder se encontraban enjaulados dentro de una organización y una política *nacionales*, indiferentes a los asuntos exteriores, pero temerosa en los momentos de crisis. Sus ideas sobre la política exterior venían determinadas por problemas internos y eran siempre superficiales y retóricas. La clase obrera y la mayor parte de la clase capitalista y el campesinado, así como parte de la clase media en las democracias de partidos, se oponían al militarismo por razones internas, de modo que fueron partidarias de la paz y dé un transnacionalismo retórico. Otras clases populares, en especial entre las principales comunidades lingüísticas y religiosas concibieron ciertas formas de nacionalismo, igualmente volátil y superficial, aunque agresivo. Pero aunque podían influir irregularmente en los estadistas, nunca tomaron iniciativas en política exterior.

El faccionalismo polimorfo llegó más lejos en Alemania y Austria-Hungría. Estas potencias se hallaban inextricablemente atrapadas entre los monarcas del antiguo régimen, los estadistas y los militares, por un lado, y las clases y las naciones de la sociedad moderna, por otro. Llevaron al extremo la cristalización polimorfa de los Estados modernos. Su agresión (y la de los serbios) causó directamente el estallido de la guerra. Rechazo la acusación alemana basada en la teoría del cerco y de la hegemonía británica, porque Alemania se benefició más de esa situación que de la guerra. La agresión alemana no fue reflexiva ni «realista», sino el resultado de un embrollo nacido en un régimen monárquico, al que debemos añadir la casta militar, la clase y la nación. Austria-Hungría sumó a este desorden el suyo propio: un monarca dinástico desesperado y unos generales airados con los nacionalistas regionales. La corte rusa añadió el embrollo militarista de una movilización en escalada. Las democracias de partidos añadieron el semiaislamiento errático de sus estadistas, limitados por su incapacidad para avisar a los ciudadanos mediante la amenaza de guerra. Todos los regímenes compartieron en una u otra medida la contradicción subyacente al Estado moderno: sus poderes producen efectos agigantados, pero sus procesos son polimorfos y faccionalizados. Pero los Estados eran sólo el reflejo de la sociedad moderna, dotada de poderes colectivos masivos, con sus redes de poder distributivo entrelazadas en forma no dialéctica. La Gran Guerra ejemplifica con su ho-

rror la estructura del Estado y de la sociedad modernos, tal como los he analizado y he teorizado sobre ellos en este volumen.

Los cambios no han sido tantos como para permitirnos una mayor seguridad hoy en día. ¿Habremos aprendido de la Gran Guerra a evitar otra de peores consecuencias? ¿O podríamos repetir el trágico destino de este joven poeta en las trincheras?

A Alemania

También tú estás ciega. Nadie proyectó tu mal,
ni pretendió conquistar tu tierra.
Pero ambos, moviéndonos a tientas por las campos del pensamiento,
tropezamos sin comprender nada.

Tú sólo viste un futuro glorioso previsto para ti,
y nosotros, las sendas —cada vez angostas— de nuestra mente,
y aquí estamos, en los caminos más queridos de cada uno,
y siseamos y odiamos. Y los ciegos luchan contra los ciegos.

[Charles Hamilton Sorley; nacido en 1895, en Aberdeenshire (Escocia) y muerto en 1915 en la batalla de Loos (Flandes).]

Bibliografía

Albertini, L. 1952, 1953, 1957: *The Origins of the War of 1914*, 3 vols. Oxford: Oxford University Press.

Becker, J.-J. 1977: *1914: Comment les Français sont entrés dans la guerre.* París: PUF.

Berghahn, V. R. 1973: *Germany and the Approach of War in 1914.* Londres: St. Martin's Press.

Bosworth, R. 1983: *Italy and the Approach of War.* Londres: Macmillan.

Campbell, C. 1949: «American interests and the open door». En *American Expansion in the Late Nineteenth Century*, ed. J. R. Hollingsworth. Malabar, Fla.: Krieger.

Cecil, L. 1976: *The German Diplomatic Service, 1871-1914.* Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Craig, G. 1955: *The Polities of the Prussian Army, 1640-1945.* Oxford: CLarendon Press.

Deist, W. 1982: «Kaiser Wilhelm II in the context of his military and naval

entourage». En *Kaiser Wilhelm II: New Interpretations*, ed. J. Rohl y N. Sombart. Cambridge: Cambridge University Press.
Doyle, M. 1983: «Kant, liberal legacies and foreign affairs, parts 1 and 2». *Philosophy and Public Affairs*, 12.
Dubovsky, M., 1969: *We Shall Be All.* Chicago: Quadrangle Books.
Eldridge, G. C. 1973: *England's Mission.* Londres: Macmillan.
Eley, G. 1980: *Reshaping the German Right.* New Haven, Conn.: Yale University Press.
— 1985: «The view from the throne: the personal rule of Kaiser Wilhelm II». *Historical Journal*, 28.
Fieldhouse, D. K. 1973: *Economics and Empire, 1830-1914.* Londres: Weidenfeld & Nicolson. [Ed. cast.: *Economía e imperio: la expansión de Europa (1830-1914).* Madrid, Siglo XXI, España, 1990.]
Fischer, F. 1967: *Germany's Aims in the First World War.* Londres: Chatto & Windus.
— 1975: *War of Illusions: German Policies from 1911 to 1914.* Londres: Chatto & Windus.
Geiss, I. 1976: *German Foreign Policy, 1871-1914.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
— 1984: «Origins of the First World War». En *Origins of the First World War*, ed. H. W. Koch. Londres: Macmillan.
Gordon, M. R. 1974: «Domestic conflict and the origins of the First World War: the British and German cases». *Journal of Modern History*, 46.
Gourevitch, P. 1986: *Politics and Hard Times.* Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.
Herwig, H. 1973: *The German Naval Officer Corps.* Oxford: Clarendon Press.
Hilderbrand, R. C. 1981: *Power and the People: Executive Management of Public Opinion in Foreign Affairs, 1897-1921.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Hobson, J. A. 1902: *Imperialism: A Study.* Londres: Nislet. [Ed. cast.: *Estudio del imperialismo.* Madrid, Alianza, 1981.]
Howard, M. 1970: «Reflections on the First World War». En *Studies in War and Peace.* Londres: Temple Smith.
Hull, I. V. 1982: *The Entourage of Kaiser Wilhelm II, 1888-1918.* Cambridge: Cambridge University Press.
Jarausch, K. H. 1969: «The illusion of limited war: Chancellor Bethmann Hollweg's calculated risk, July 1914». *Central European History*, 2.
— 1973: *The Enigmatic Chancellor: Bethmann, Hollweg and the Hubris of Imperial Germany.* New Haven, Conn.: Yale University Press.
Joll, J. 1984*a*: *The Origins of the First World War.* Londres: Longman Group.
— 1984*b*: «The 1914 debate continues: Fritz Fischer and his critics». En *Origins of the First World War*, ed. H. W. Koch. Londres: Macmillan.

— 1984c: «1914: the unspoken assumptions». En *Origins of the First World War,* ed. H. W. Koch. Londres: Macmillan.
Kaiser, D. E. 1983: «Germany and the origins of the First World War». *Journal of Modern History,* 55.
Kehr, E. 1975: *Battleship Building and Party Politics in Germany.* Chicago: University of Chicago Press.
— 1977: *Economic Interest, Militarism and Foreign Policy.* Berkeley: University of California Press.
Keiger, J. 1983: *France and the Origins of the First World War.* Londres: Macmillan.
Kennan, G. F.. 1977: *A Cloud of Danger.* Boston: Little, Brown.
— 1984: *The Fateful Alliance: France, Russia and the Coming of the First World War.* Manchester: Manchester University Press.
Kennedy, P. 1980: *The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860-1914.* Londres: Allen & Unwin.
— 1982: «The kaiser and German Weltpolitik». En *Kaiser Wilhelm II: New Interpretations,* ed. J. Rohl y N. Sombart. Cambridge: Cambridge University Press.
— 1985: *The Realities Behind Diplomacy.* Londres: Fontana.
Kitchen, M. 1968: *The German Officer Corps, 1890-1914.* Oxford: Clarendon Press.
Koch, H. W. 1984: «Social Darwinism as a factor in the new imperialism». En *Origins of the First World War.* Londres: Macmillan.
Lafore, L. 1965: *The Long Fuse: An Interpretation of the Origins of World War I.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
Lieven, D. C. B. 1983: *Russia and the Origins of the First World War.* Londres: Macmillan.
Mackinder, H. 1904: «The geographical pivot of history». *Geographical Journal,* 23 (reeditado por la Real Sociedad Geográfica, Londres, 1951).
Mahan, A. T. 1918: *The Influence of Sea Power upon History 1660-1783.* Boston: Little, Brown.
Mann, M. 1988: «The decline of Great Britain». En M. Mann, *States, War and Capitalism.* Oxfod: Blackwell.
Mansergh, N. 1949: *The Coming of the First World War.* Londres: Longman Group.
Mayer, A. J. 1968: «Domestic causes of the First World War». En *The Responsability of Power: Historical Essays in Honor of Hajo Holborn,* ed. L. Krieger y F. Stern. Londres: Macmillan.
— 1981: *The Persistence of the Old Regime.* Londres: Croom Helm. [Ed. cast.: *La persistencia del antiguo régimen.* Madrid, Alianza Editorial, 1986.]
Mommsen, W. J. 1974: *The Age of Bureaucracy: Perspectives on the Political Sociology of Max Weber.* Oxford: Blackwell.
— 1980: *Theories of Imperialism.* Londres: Weidenfeld & Nicolson.
— 1990: «The varieties of the nation state in modern history: liberal, impe-

rialist, fascist and contemporary notions of nation and nationality». En *The Rise and Decline of the Nation State*, ed. M. Mann. Oxford: Blackwell.

Morgan, D. W. 1975: *The Socialist Left and the German Revolution.* Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.

Morgenthau, H. 1978: *Politics Among Nations.* Nueva York: Knopf. [Ed. cast.: *Escritos sobre política internacional.* Madrid, Tecnos, 1990.]

Olle, W., y W. Schoeller, 1977: «World market competition and restrictions upon international trade union policies». *Capital and Class*, 1.

Palmer, A. 1983: *The Chancelleries of Europe.* Londres: Allen & Unwin.

Parker, G. 1985: *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century.* Londres. Croom Helm.

Platt, D. C. 1979: «Economic factors in British policy during the new imperialism». En *Conflict and Stability in Europe*, ed. C. Emsley. Londres: Croom Helm.

Pogge von Strandman, H. 1969: «Domestic origins of Germany's colonial expansion under Bismarck». *Past and Present*, núm. 45.

Price, R. 1972: *An Imperial War and the British Working Class.* Londres: Routledge & Kegan Paul.

Remak, J. 1967: *The Origins of World War I: 1871-1914.* Nueva York: Holt, Rinehart & Winston.

Robinson, R., y J. Gallagher, 1961: *Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism.* Londres: Macmillan.

Rohl, J. 1973: «Introduction». *1914: Delusion or Design? The Testimony of Two German Diplomas*, ed. J. Rohl. Londres: Elek.

— 1982: «Introduction». En *Kaiser Wilhelm II: New Interpretations*, ed. J. Rohl y N. Sombart. Cambridge: Cambridge University Press.

Rohl, J., y N. Sombart (eds.), 1982: *Kaiser Wilhelm II: New Interpretations.* Cambridge: Cambridge University Press.

Rosecrance, R. 1986: *The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World.* Nueva York: Basic Books. [Ed. cast.: *La expansión del Estado comercial.* Madrid, Alianza Editorial, 1987.]

Rothenberg, G. 1976: *The Army of Francis Joseph.* West Lafayette, Ind.: Purdue University Press.

Schmitt, B. E. 1966: *The Coming of the War 1914*, 2 vols. Nueva York: Fertig.

Snyder, J. 1991: *Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition.* Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.

Steiner, Z. S. 1969: *The Foreign Office and Foreign Policy, 1898-1914.* Cambridge: Cambridge University Press.

— 1977: *Britain and the Origins of the First World War.* Londres: Macmillan.

Stern, F. 1968: «Bethmann Hollweg and the war: the limits of responsibi-

lity». En *The Responsibility of Power: Historical Essays in Honor of Hajo Halborn*, ed. L. Krieger y F. Stern. Londres: Macmillan.
Stone, N. 1975: *The Eastern Front, 1914-1917.* Nueva York: Scribner's.
— 1983: *Europe Transformed, 1878-1919.* Londres: Fontana. [Ed. cast.: *La Europa transformada, 1878-1919.* Madrid, Siglo XXI, España, 1984.]
Taylor, A. J. P. 1954: *The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918.* Oxford: Clarendon Press.
Todd, E. 1979: *Le fou et le proletaire.* París: Laffont. [Ed. cast.: *El loco y el proletario.* Barcelona, Planeta, 1982.]
Turner, L. C. F. 1967: «The significance of the Schlieffen plan». *American Journal of Politics and History*, 4.
— 1968: «The Russian mobilization in 1914». *Journal of Contemporary History*, 3.
— 1970: *Origins of the First World War.* Londres: Arnold.
Weber, E. 1968: *The Nationalist Revival in France, 1905-1914.* Berkeley: University of California Press.
Wehler, H.-U. 1979: «Introduction to Imperialism». En *Conflict and Stability in Europe*, ed. C. Emsley. Londres: Croom Helm.
— 1981: «Bismarck's imperialism, 1862-1890». En *Imperial Germany*, ed. J. J. Sheehan. Nueva York: Franklin Watts.
— 1985: *The German Empire 1871-1918.* Leamington Spa: Berg.
Welch, R. 1979: *Response to Imperialism: The united States and the Philippine-American War.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Williamson, S. R., Jr. 1969: *The Politics of Grand Strategy: Britain and France Prepare for War, 1904-1914.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
— 1988: «The origins of World War I». *Journal of Interdisciplinary History*, 18.
Wilson, K. 1985: *The Policy of the Entente.* Cambridge: Cambridge University Press.

Apéndice
CUADROS ADICIONALES SOBRE LAS FINANZAS Y EL EMPLEO ESTATAL

CUADRO A.1. *Empleo estatal: Austria (Austria-Hungría, 1760-1860, y Austria, 1830-1910)*

	Población (en millones)		Personal civil		Total todos los niveles (miles)		Personal militar			
Año	Austria	Austria-Hungría	Total estado central (miles)	%		%	Austria (miles)	%	Austria Hungría (miles)	%
1760		15,00	10A-H	0,06	26	0,17			250	1,66
1770		17,00							200	1,17
1780		22,00	11A-H	0,05					310	1,41
1790		23,00							350	1,52
1800		24,00							325	1,35
1810		25,00			31	0,12			594	2,38
1820		27,00								
1830	15,83	29,63	55A	0,35	111A-H	0,37	242	1,53	410	1,38
1840	16,86	30,50	62A	0,37	126A-H	0,41	280	1,66	475	1,56
1850	17,82	31,10	72A	0,40	140A-H	0,45	318	1,79	485	1,56
1860	19,13	33,50	190A-H	0,57			308	1,61	535	1,60
1870	20,60	35,90	102A	0,50			177	0,86		
1880	22,14	39,04	118A	0,53			162	0,73		
1890	23,90	42,69	254A	1,06	697A	2,92	188	0,79		
1900	26,15	46,81	297A	1,14	864A	3,30	230	0,88		
1910	28,57	51,39	334A	1,17	899A	315	247	0,86		

Notas:
1. Todas las cifras anteriores a 1830 se refieren a la totalidad del Imperio austriaco (austro-húngaro), mientras que todas las posteriores a 1860 se refieren sólo al *Reichshalf* austriaco (también llamado Cisleitania), y por tanto se excluye a Hungría (para la que generalmente no se dispone de cifras comparables).
2. Hasta 1880 la mayoría de las cifras sobre el personal proceden de fuentes administrativas internas; después proceden de los censos nacionales. Así, el importante aumento del número de funcionarios públicos de 1890 debe tomarse con precaución.
3. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: *Población*: Austria-Hungría, 1760-90, Dickson, 1987: I, 36; 1790-1910, *Beitrage zur Osterreichischschischen Statistik* 550, 1979: I, 13 y 14 - cifras disponibles para 1786, 1828, 1857, 1869 y de 1880 a 1910 (éstas incluyen Bosnia-Herzegovina); se ha realizado una estimación aproximada para las décadas que faltan. *Austria* de 1830-1910, Bolognese-Leuchtenmuller, 1979: II, 1. *Personal militar*: 1760-1790, Dickson, 1987: II, 343 a 355; 1800, Rothenberg, 1978- ejército de campaña más guarniciones y reservas sedentarias aunque movilizadas; 1810, Rothenberg, 1982: 126 -el «plan realista de movilización de 1809»; 1830-1910, Bolognese-Leuchtenmuller, 1979: I, 57 a 60 y II, 5 - fuerzas activas y personal de la armada; 1850 y 1860 (en realidad, 1857) son para Austria-Hungría, excluida Lombardía-Venecia; para los años posteriores las cifras se limitan al *Reichshalf* austriaco. *Personal civil*: 1760-1810 (en realidad, 1806), Dickson, 1987: I, 306 a 310; central de 1830-1850 (en realidad, 1828, 1838 y 1848), *K. K. Statistiche Monatschrift*, 1890: 532 a 534; 1830, todos los niveles (en realidad, 1828), Macartney, 1969: 263; 1840, todos los niveles, proyección entre totales similares ofrecida por Tegeborski, 1843: 360 para 1839, y por Macartney, 1969: 263 para 1842; 1850 todos los niveles, *K. K. Statistiche Jahrbuch*, 1863: 104 y 105 - total de 52.000 *Beamten* (funcionarios civiles permanentes) que se supone contiene el 26 por 100 de todos los funcionarios (como los *Beamten* en 1845 y 1848); 1870-1880 todos los niveles. *K. K. Statistiche Jarhbuch*, 1873: 22, 1881: 54 - incluye funcionarios públicos más 67% de trabajadores sanitarios y jurídicos (clasificados en censos posteriores como pertenecientes al sector público); 1890-1910, *Osterreichisches Statistiches Handbuch*, 1890, 1900, 1910, 1914, *K. K. Statistiche Monatschrift*, 1904: 696 - nótese, sin embargo, que Bolognese-Leuchtenmuller, 1978: II, cuadro 60, reproduce las cifras del censo de 1910, pero reduce las de 1890 y 1900 a 495.000 y 617.000 sin explicación.

CUADRO A.2. *Empleo estatal: Gran Bretaña, 1760 a 1910*

		Personal civil					
		Estado central		Todos los niveles		Personal Militar	
Año	Total Población (millones)	Total (miles)	%	Total (miles	%	Total (miles)	%
1760	6,10	16	0,26			144	2,36
1770	6,41					37	0,58
1780	6,99					193	2,76
1790	7,65					74	0,97
1800	8,61	16	0,18			422	4,91
1810	9,76	23	0,24			517	5,30
1820	11,30	24	0,22			115	1,02
1830	13,11	23	0,17			132	1,01
1840	14,79			43	0,29	163	1,10
1850	16,52	40	0,24	67	0,41	197	1,20
1860	18,68			76	0,41	325	1,74
1870	21,24			113	0,53	242	1,14
1880	25,71			118	0,46	246	0,96
1890	28,76	90	0,32	285	0,99	276	0,96
1900	32,25	130	0,40	535	1.66	486	1,51
1910	35,79	229	0,64	931	2,60	372	1,04

Notas:

1. La cifra del personal militar en 1840 incluye la milicia incorporada y la policía, pero no los cuerpos voluntarios. La de 1850 incluye la milicia incorporada, la policía y las clases pasivas alistadas (éstos ascienden a 16.720).
2. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: *Población*: Wrigley and Schofield, 1981. *Personal civil*: Central -1800-1830, calculado sobre las cifras de la Cámara de los Comunes, *British Sessional Papers*, *Establishment of Public Offices*, 1797, 1810, 1819 y 1827; 1840-1880, Mitchell y Deane, 1962; 1890-1910, Flora, 1983: I, 242. Todos los niveles -1840-1880, Mitchell y Deane, 1980; 1890-1910, Abramovitz y Eliasberg, 1957: 25. Los años en realidad son 1981, 1901 y 1911. *Personal militar*: 1760-1790 y 1810-1860 se han calculado sobre las cifras de la Cámara de los Comunes, *British Sessional Papers*: 1760-1770 en 1816, 12: 399 y 1860, 42: 547 a 549; 1780 (en realidad, 1781) en 1813-1814, 11: 306 y 307 y 1860, 42: 547 a 549; 1790 (en realidad, 1792) y 1810-1830 en 1844, 42: 169 y 1860, 42: 547 a 549; 1840-1850 en 1852, 30: 1 a 3; 1860-1910 en Flora, 1983: I, 247 a 250. Para 1800 se combinan cifras del ejército en Fortescue, 1915, vol. 4, parte 2: 939, y cifras de la armada calculadas sobre *British Sessional Papers*, 1860, 42: 547 a 549.

CUADRO A.3 *Empleo estatal: Francia, 1760-1910*

		Personal civil					
		Estado central		Todos los niveles		Personal Militar	
Año	Población total (millones)	Total (miles)	%	Total (miles	%	Total (miles)	%
1760	25,70					460	1,78
1770	26,60					220	0,82
1780	27,00			350	1,29	240	0,89
1790	27,19			275	1,01	230	0,85
1800	27,35			250	0,91	800	2,93
1810	27,35					1.000	3,66
1820	30,46						
1830	32,57					400	1,23
1840	34,23	90	0,26			350	1,02
1850	35,78	146	0,41	300	0,84	390	1,09
1860	37,39					460	1,23
1870	36,10	220	0,60	374	1,03	600	1,66
1880	37,67	331	0,87	483	1,28	540	1,44
1890	38,34	348	0,91	472	1,23	600	1,55
1900	38,96	430	1,10	583	1,50	620	1,59
1910	39,61	556	1,40	562	1,42	650	1,65

Notas:

1. Los militares reclutados por Francia suponen unos 350.000 en 1800 y 450.000 en 1812.
2. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: *Población*: 1760-1780. Riley, 1986: 5; 1790-1910, Dupeux, 1976: 37. *Personal civil*: todos los niveles -para 1780 la estimación es de Necker, 1784 (véase texto); para 1790 y 1800 las estimaciones (en realidad, 1794 y 1798) son de Church, 1981; la lista de los cargos del gobiernos en 1850 (en realidad, 1846) en Block, 1875: 117 a 119; 1870-1910, Flora, 1983: I, 211. Central -la cifra de 1850 (en realidad, 1846) es de Vivien, 1859: 172 a 178, enmendada por Julien-Lafferrière, 1970, y excluyendo a los oficiales militares; 1870-1900, *Recensement général* y *Résultats Statistiques du Dénombrement*, para los años 1866, 1876, 1891 y 1901; 1910, *Annuaire statistique de la France*, 1913: 264. El año es 1913. *Personal militar*: Ejército -1760, Kennet, 1967: 77 y 78; 1770-1790, Lynn, 1984: 44, Scott, 1978: 5; 1800, 1810 (en realidad, 1812), Addington, 1984: 26, Rothenberg, 1978: 43, 51 a 55, Chandler, 1966; 1830-1870, Block, 1875: I, 566 (excluidas las tropas estacionadas en Argelia). Armada - 1780, Dull, 1975: 144; 1790, Hampson, 1959: 209; 1810, Masson, 1968: 257; 1870, Block, 1875: I, 583. El resto de los años anteriores a 1860 incluyen estimaciones extrapoladas para el personal naval. Ejército y armada: 1880-1910, *Annuaire statistique de la France*, 1913: «Rĕsumé rétrospective», 132.

CUADRO A.4. *Empleo estatal: Prusia-Alemania, 1760-1910*

	Población Total (millones)		Personal civil						Personal militar	
			Estado central		Todos los niveles		Todos los niveles			
Año	Prusia	Alemania	Prusia total (miles)	%	Prusia total (miles)	%	Alemania total (miles)	%	Total (miles)	%
1760	3,62								150	4,14
1770	4,10									
1780	5,00								188	3,76
1790	5,70								195	3,42
1800	6,16		23	0,37					230	3,73
1810	7,00								272	3,88
1820	11,27								150	1,33
1830	13,00								150	1,15
1840	14,93		16+	0,11+					157	1,05
1850	16,61		32+	0,20+	55+	0,33+			173	1,04
1860	18,27				86	0,47			149	0,82
1870	24,57	41,01	135	0,55	283	1,15			400	0,98
1880	27,19	45,23			413	1,51	704	1,56	434	1,07
1890	29,84	49,43			535	1,80	900	1,70	529	1,12
1900	34,27	26,37							629	1,05
1910	39,92	64,93			c.1.000	3,92	1.700	2,35	680	1,05

Notas:

1. Las cifras del personal militar anteriores a 1870 son prusianas; en adelante, alemanas.
2. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: *Población*: Prusia - 1760-1810, Turner, 1980; 1820-1870, Kraus, 1980: 226; 1870-1910, *Statistische Jahrbuch für den Preussischen Staat*, 1912. Alemania: 1870-1900, Hohorst *et al.* 1975: 22; las cifras de 1870 corresponden en realidad a 1871. *Personal militar*: Prusia -1760-1860, Jany, 1967; los datos en realidad corresponden a 1760, 1777, 1789, 1813, 1820, 1830, 1840, 1850, 1859. Las cifras de Jany para 1820-1840 no incluyen a oficiales y suboficiales y han sido aumentadas al alza en un 23 por 100 (por ser la proporción normal de suboficiales y oficiales en el ejército prusiano del siglo XIX); 1870, el total prusiano es de 315.000 (Jany más 2.400 del personal naval). Alemania -1870, Weitzel, 1967: cuadro 8; la cifra de 1872. 1890-1910, Hohorst *et al.*, 1975: 171; la cifra de 1890 corresponde en realidad a 1891. *Personal civil*: Prusia - la estimación de 1800 fue proporcionada, «con reservas», por un alto oficial prusiano a Finer, 1949; 710 (como su estimación de 1850 era mucho más baja, su reserva debía estar justificada); 1840, Bülow-Cummerow, 1842: 225, número de *Beamten* para 1839; 1850, *Tabellen und amtlichen Nachtrichten den Preussischen Staat für das Jahr 1849*, número de *Beamten* para 1849, así, las cifras de 1840 y 1850 subestiman el total del empleo estatal quizás en un 20-30 por 100; 1860 (en realidad, 1861), *Jahrbuch für die Amliche Statistik*, 1863; 1870, 1880 y 1890 (en realidad, 1869, 1880 y 1895), *Statistisches Handbuch für den Preussischen Staat*, 1869, 1898; 1910 (en realidad, 1907), Kunz, 1990. Alemania - 1880-1910, *Statistisches Jahrbuch für das Deutche Reich*, 1884: 19, 1889: 14, 1909: 33 (en realidad, 1882 y 1895); 1910 (en realidad, 1907), Kunz, 1990.

CUADRO A.5. *Empleo estatal: Estados Unidos, 1760-1910*

		Personal civil					
		Estado central		Todos los niveles		Personal militar	
Año	Población total (millones)	Total (miles)	%	Total (miles)	%	Total (miles)	%
1760	1,59						
1770	2,15						
1780	2,78						
1790	3,93	0,7	0,02			0,7	0,02
1800	5,93	2,6	0,04			7	0,12
1810	7,24	3,8 (est.)	0,05 (est.)			12	0,16
1820	9,62	7	0,07			15	0,16
1830	12,90	11	0,09			12	0,09
1840	17,12	18	0,11			22	0,13
1850	23,26	26	0,11			21	0,09
1860	31,51	37	0,12			28	0,09
1870	39,91	51	0,13			50	0,13
1880	50,26	100	0,19			38	0,07
1890	63,06	157	0,25			39	0,06
1900	76,09	239	0,31	1.034	1,36	126	0,17
1910	92,41	389	0,42	1.552	1,68	139	0,15

Notas: Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: *Población*: 1760-1780 en *U.S. Bureau of the Census*, 1975: cuadros A.6-8. *Personal civil*: Central - 1790-1810, calculado de cifras estadounidenses, *American State Papers*, vol. 38, *Miscelanea*: 1790 (en realidad, 1792) en 1: 57 a 68; 1800 (en realidad, 1802) en 1: 260 a 308; para 1810 se han extrapolado de las cifras de 1810 y 1816 en 2: 307 a 396; 1820-1910 en Estados Unidos, 1975: cuadro Y 308 a 317. Todos los niveles - 1900-1910 en Fabricant, 1952: 29. *Personal militar*: *U.S. Bureau of Census*, 1975: cuadro Y 904 a 916. En realidad, los años son 1789, 1801, 1821, 1831, 1841, 1851, 1861, 1871, 1891, 1901 y 1911.

CUADRO A.6. *Ingreso estatal: Austria, 1760-1910 (fuentes totales y principales como porcentaje del total)*

			Impuestos indirectos		Propiedad del estado	
Año	Total (millones de florines)	Impuestos directos	General	Sal, tabaco y monopolios	Timbres, tasas	Beneficios de los monopolios
1760	35,0	53	19	16	2	10
1770	39,5	48	17	16	9	10
1780	50,1	41	18	19	13	10
1790	85,6	27	36		NA	
1800	65,5	29	45		NA	
1810	25,0	30	42		NA	
1820	112,2	44	20	30	4	2+
1830	123,0	39	23	22	4	12
1840	193,3	25	23	26	4	25
1850	202,5	29	24	24	4	18
1860	355,1	27	17	25	9	26
1870	259,6	35	30		15	21
1880		32	31		20	17
1890		NA	NA		NA	NA
1900		28	30		17	25
1910	1.159,2	28	29		17	26

Notas:

1. En realidad se han utilizado los años 1763, 1770, 1778, 1821, 1830, 1841, 1850, 1859, 1868, 1883, 1898 y 1913.
2. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: 1760-1780: Dickson, 1987: II, 382 a 383; ingreso neto ordinario en tiempos de paz, «sellos y tasas» igual a «otras» categorías en Dickson. 1790-1810: Czoernig, 1861: 122; el ingreso total para 1800 y 1810 calculados de nuevo por Beer, 1871: 390 y 391, con el fin de deducir los cambios monetarios (lo que reduce fuertemente los ingresos totales del Estado de 1810, probablemente demasiado). El grueso de los ingresos restantes para esos años son clasificados por Czoerning como «extraordinarios», probablemente una categoría mixta. 1820-1860: Brandt, 1978: II, 1072 y 1073 ingreso ordinario; «beneficios de los monopolios», industrias desaparecidas durante aquellos años se asumen como residuo tras deducir los impuestos directos e indirectos, los sellos y las tasas de los ingresos totales (éstos son increíblemente bajos en 1821; quizás estén confundidos con la inusualmente alta categoría del monopolio de la sal). 1870-1910: Gratz, 1949: 229 y 230.

CUADRO A.7. *Ingreso estatal: Gran Bretaña, 1760-1911 (fuentes totales y principales como porcentaje del total)*

Año	Total (mill libras)	Impuestos		Propiedad estatal
		Directos	Indirectos	Sellos y oficinas postales
1760	9,2	26	69	4
1770	11,4	16	70	4
1780	12,5	20	71	5
1790	17,0	18	66	9
1800	31,6	27	52	12
1810	69,2	30	57	11
1820	58,1	14	68	16
1830	55,3	10	73	17
1840	51,8	8	73	19
1850	57,1	18	65	16
1860	70,1	18	64	16
1870	73,7	26	59	12
1880	73,3	25	61	16
1890	94,6	26	50	18
1900	129,9	31	47	22
1910	131,7	27	47	22
1911	(203,9)	(44)	(36)	(17)

Notas:

1. Las cifras de 1800 pertenecen en realidad a 1802.
2. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: Mitchell y Deane, 1980: cuadros de las finanzas públicas.

CUADRO A.8. *Ingreso estatal: Francia, 1760-1910 (fuentes totales y principales como porcentaje del total)*

Año	Total (mill. de francos)	Impuestos		Propiedad estatal
		Directos	Indirectos	
1760	259 *l.t.*	48	45	7
1770				
1780	377 *l.t.*	41	49	10
1790	422 *l.t.*	35	47	18
1800				
1810				
1820	933			
1830	978	40	22	38
1840	1.160	c.30		
1850	1.297	c.28		
1860	1.722	c.23		
1870	1.626	26	31	44
1880	2.862	21	38	41
1890	3.221	18	36	42
1900	3.676	21	36	43
1910	4.271	22	33	45

Notas:

1. Ingresos ordinarios, préstamos excluidos.
2. Se han utilizado los siguientes años inmediatos: 1751, 1775, 1788, 1828.
3. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: 1760-1790: Morineau, 1980: 314, clasifica la contribución del clero como impuestos directos y *dons gratuit* como propiedad estatal. Total en *livres tournois* (*l.t*). 1830 (en realidad, 1828): Hansemann, 1834, 1844-1910: *Annuaire Statistique de la France*, 1913: 134 a 139; la cifra de impuestos directos de 1840 equivale a la suma de *quatres contributions direct* del gobierno central más una estimación del 5 por 100 para el impuesto sobre las plusvalías que falta.

CUADRO A.9. *Ingreso estatal: Prusia, 1820-1910 (fuentes totales y principales como porcentaje del total)*

		Impuestos		Propiedad estatal		
Año	Total (en millones de marcos)	Directos	Indirectos	Ferrocarriles	Otras industrias	Todas
1820	96	36	33			30
1840	169	24	34			41
1850	183	22	32			46
1870	550 (651)	24 (20)	10 (24)	24 (20	30 (25)	65 (55)
1880	805 (982)	21 (17)	8 (25)	30 (25)	22 (18)	71 (58)
1890	1.774 (2.140)	10 (8)	14 (30)	51 (42)	15 (12)	76 (62)
1900	2.607 (3.139)	8 (7)	13 (28)	54 (44)	16 (13)	79 (65)
1910	3.732 (4.630)	11 (9)	3 (22)	58 (47)	16 (13)	86 (69)

Notas:

1. Todas las cifras de ingresos ordinarios excluyen préstamos y excedentes.
2. Se han utilizado los siguientes años inmediatos: 1821, 1844 y 1871.
3. En 1870 y los años posteriores: las cifras se refieren sólo a Prusia (no al Reich alemán completo). Las cifras que no se encuentran entre paréntesis proceden de las cuentas de ingresos estatales de Prusia. Las cifras entre paréntesis añaden el 60 por 100 de los ingresos del Reich (casi todos derivados de impuestos indirectos). Prusia aportaba el 60 por 100 a la población del Reich, y los ingresos de la contribución al Reich de los estados individuales se fijaban generalmente según la población respectiva. Por lo tanto, las cifras entre paréntesis corresponden a estimaciones bastante exactas.
4. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: 1820-1850: Leineweber, 1988: 315. Nótese que en 1850 las fuentes de ingresos prusianas se situaban en la media de los mayores estados alemanes, mientras que los más pequeños tienden a depender en mayor medida para sus ingresos de las fuentes más tradicionales de la propiedad estatal (cifras de Heitz, 1980: 406 a 408). 1870-1910: Prochnow, 1977: 5 a 7.

CUADRO A.10. *Ingreso estatal y federal: Estados Unidos, 1820-1900 (fuentes totales y principales como porcentaje del total)*

Año	Total (mill. dólares)	Impuestos		Propiedad estatal
		Directos	Indirectos	
1820	25	10	62	26
1830	31	5	71	21
1840	33	18	42	37
1850	69	23	58	20
1860	100	26	54	18
1870	501	26	58	16
1880	446	15	67	17
1890	584	16	64	20
1900	837	16	58	26

Notas:

1. Método de cálculo: se dispone de ingresos estatales para aproximadamente la mitad de los estados contemporáneos en 1820; para alrededor de tres cuartas partes en 1870; y para la totalidad en 1900. Los ingresos per cápita se han calculado para esos estados y las sumas se han multiplicado por el total de la población estadounidense de ese año. La estimación de los totales estatales se ha añadido después a los totales del gobierno federal.
2. La propiedad estatal incluye los ingresos postales. Las cifras en U.S., de 1975 no incluyen los ingresos postales, excepto cuando la oficina postal genera un superávit, en cuyo caso sólo se incluye este último.
3. Los ingresos por propiedad estatal proceden de la oficina postal en todos los periodos, peajes de canales en los primeros años y cesión de tierras a mediados del siglo XIX.
4. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: Calculado sobre *U.S. Bureau of the Census*, 1975: cuadro Y352 a 357; U.S., 1947: 419 a 422; Holt, 1977: 99 a 324.

CUADRO A.11. *Ingreso federal: Estados Unidos, 1792-1910 (fuentes totales y principales como porcentaje del total)*

Año	Total (mill. dólares)	Impuestos		Propiedad estatal
		Directos	Indirectos	
1792	4		98	2
1800	11		89	11
1810	10		87	13
1820	19		80	20
1830	27		82	18
1840	24		56	44
1850	49		81	19
1860	65		82	18
1870	430	17	68	15
1880	367	1	82	17
1890	464	0,2	80	20
1900	670	2	71	27
1910	900		69	31

Notas:

1. La propiedad estatal es fundamentalmente ingreso postal. Las cifras en *U.S. Bureau of the Census*, 1975, corresponden a ingreso postal neto, excepto en los casos en que la oficina postal generara un superávit, en cuyo caso sólo se incluye este último. He incluido todos los ingresos postales.
2. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: Población: U.S., 1975: cuadros A.6-A.8. Ingresos: calculados sobre U.S., 1975: cuadro Y352 a 357; U.S.: 419 a 422.

CUADRO A.12. *Ingreso estatal: Estados Unidos, 1820-1900 (total agregado estimado, y por fuente principal en porcentaje del total)*

		Principales fuentes de ingresos				
		Impuestos				
Año	Ingresos totales	Directo	Indir.	Negocios	Propiedad estatal	Otros
1820	5.930	25	7	17	43	8
1830	4.263	25	1	14	42	18
1840	9.085	24	4	40	19	13
1850	19.462	53	1,5	23	22	1
1860	35.643	62	1,6	13	18	6
1870	70.911	64	1	17	16	3
1880	79.125	63	0,1	19	18	1
1890	119.988	60	1	20	18	2
1900	167.407	52	4	23	20	2

Notas:

1. Las cifras de 1820-1900 se agregan para el total de la población estadounidense, basada en datos estatales disponibles (véase cuadro A.10, nota 1).
2. Para las referencias citadas véase la bibliografía del capítulo 11.

Fuentes: 1820-1900: calculado sobre Holt, 1977: 99 a 324.

ÍNDICE ANALÍTICO

África, 106, 355, 462, 971, 1008-9
Agricultura, 134-35, 145, 191-93, 195-97, 234, 353-55, 360-61, 366, 399, 419-20, 499, 641-42, 663, 665, 671, 685, 702, 721, 776-78, 789-90, 813, 858, 864-65, 867, 899-901, 941, 943-45
Alemania, 15, 30, 56, 61, 88, 95, 104, 112, 121-23, 184, 296, 318-19, 327-28, 336, 349-50, 352-55, 380, 387-92, 398-438, 443-45, 447-54, 456-61, 462-64, 465-69, 475, 478-82, 484, 486-87, 489-96, 498-500, 502, 504-6, 514-15, 517, 532-33, 537-38, 540-41, 545, 548, 558, 563-67, 570-72, 584, 588-89, 607, 612, 616, 641-42, 646, 650-51, 653-55, 658, 669, 717-18, 720, 722-23, 728, 731, 734, 737, 745 n., 749, 750, 752-54, 756-65, 767, 795, 817, 821-25, 832-33, 837, 842, 845, 847, 855, 864, 867, 873-91, 900, 907, 910-11, 913, 917-25, 926, 932, 934, 940, 945, 947-48, 949, 951, 954-56, 962, 963-65, 967, 970, 972-76, 977-83, 984-94, 997, 1001-3, 1008-13, 1014, 1017-18, 1020-21, 1022-30, 1032, 1034-35, 1046-47, *véase también* Prusia
Alfabetización, 60-62, 139, 145, 147,48, 165, 193, 200-1, 240-42, 251, 266, 273, 291-94, 305, 307-14, 317-19, 326, 329-31, 333, 343, 399, 403-4, 408, 412, 447, 499, 549-50, 589, 671, 675-76, 678, 729, 744, 785-86, 950-51
Alianzas, 103, 332, 349-50, 360-62, 365, 371-74, 377, 379, 389, 455, 462, 464, 470, 570-71, 963-65, 968, 972, 975, 999-1000, 1002, 1011-12, 1028, 1030
Antiguo régimen, nobles, terratenientes, 36, 50, 94-98, 104-9, 133, 138-143, 144-47, 148-51, 173-74,

176, 179-84, 194-96, 203, 229-31, 253, 260, 266, 273, 296-99, 300, 310-11, 330, 332-35, 361, 410-12, 415, 419-20, 425, 448-49, 505, 545-49, 553-56, 562-67, 569, 572-74, 587-89, 605-6, 609, 619, 675-77, 744, 761, 778, 818, 844, 983, 905, 906-8, 911, 912-14, 921-24, 925, 927-33, 945, 956, 967, 979-80, 982, 987, 1006-7, 1025
Armadas, poder naval, 57, 103, 346-47, 355-57, 360-61, 367-69, 382, 386, 469, 527, 547-54, 557, 559-60, 562, 565-66, 574, 581, 645-47, 758, 970, 977-78, 980-81, 989-90, 1001, 1003, 1026-28
Artesanos, 18, 51, 137-43, 148-51, 156, 174, 194, 203, 210, 212, 218, 256, 273-74, 276, 280, 197, 311, 314, 412, 549, 556, 671-76, 678-80, 681, 683, 697-98, 702-4, 714, 716, 721-22, 726, 736, 766, 778, 781, 802, 867-69, 874-75, 878, 886
Austria, Austria-Hungría, 20, 35, 63, 116, 119, 121, 123, 154, 163, 183, 209, 243, 247, 275, 277, 294-95, 296, 301-2, 305-6, 309, 313, 318, 322, 324-33, 335-36, 343, 349-55, 364, 367, 371-72, 374-78, 381, 386, 388, 390, 399-400, 403-6, 411, 413-14, 417, 423, 439-72, 478-79, 481-82, 484, 486-88, 490-99, 501-5, 510-12, 514-16, 528, 532, 537, 540, 545, 548, 550, 553, 555, 557-59, 561-64, 566-68, 571-72, 583-90, 592, 595, 607-9, 611-12, 640, 642, 653-54, 657-58, 752-54, 760-61, 765, 820-22, 824-25, 882-85, 889, 900, 910-911, 921-25, 931-32, 934, 945-46, 949-51, 954, 956, 964-65, 968, 972-76, 980-83, 986, 988-89, 990-94, 997, 1013-16, 1018, 1034, 1042-43, 1049
Bélgica, Países Bajos de dominio austriaco, 321-23, 328-29, 377, 78, 381, 383, 386-89, 404, 440, 449, 488, 496, 499, 653, 722-23, 728, 888, 900, 941, 952, 964, 992, 997, 1027
Bismarck, Otto von, 96, 247, 335, 351, 387, 413-16, 418-19, 423-24, 429, 432, 434, 455, 570-71, 653-55, 718, 876-79, 970, 1022
Bonaparte, Napoleón, 167, 247, 320-21, 324-28, 349, 351, 364-73, 376, 392, 556, 559, 602-4, 606-7, 652
Burguesía, 104, 133, 138, 146, 167, 182, 231, 237-38, 255-57, 263-65, 273-74, 279-82, 295-98, 299, 314, 322, 329, 333, 375, 409-12, 415, 419, 425, 449, 469, 555-56, 564-65, 572, 609, 638, 657, 680, 712, 735, 818, 883-84, 889, 941, 967, *véase también* Clase media; Pequeña burguesía,
Burocracia, 80, 87-88, 91, 99-101, 115, 168, 423-26, 430, 467, 473-78, 512-13, 518, 526, 551-55, 572-74, 579-623, 659, 727-28, 733-34, 751, 941, 956, 959, 986

Cameralismo, 402, 584-87, 591, 595, 601, 616-17
Campesinos, granjeros, agricultores, 21, 46-47, 139, 172, 192-97, 201, 212, 225, 231, 236, 238-39, 246, 252, 256, 270-73, 300, 303, 325-26, 410, 418-19, 451, 458, 460, 505, 548-50, 556, 638, 652-53, 668, 683, 710, 750-51, 846, 863-64, 866, 867, 879-80, 884, 889-90, 899-939, 941, 945, 951, 1014-15, 1034
Capital, *véase* Capital financiero
Capital financiero, 138, 179-80, 236, 347, 358, 361, 391-92, 446, 644-47, 776, 904, 908, 916, 1026
Capitalismo, 16, 44-58, 60, 62-64,

134-35, 184, 196-97, 213, 237-39, 291, 294-99, 308, 313-15, 329, 332-38, 342-44, 346-47, 409-10, 419-20, 423-25, 443-47, 468, 475-76, 510, 529, 593, 595, 638-50, 654-56, 664, 666, 668-70, 671, 674-75, 713-15, 726, 727, 733-34, 776-79, 783, 788, 823, 842, 906-9, 941-48, 949-51, 953-54, 957-59
Capitalistas, 50, 106, 138-39, 295-99, 430, 459, 679, 777, 779-80, 784, 787-803, 823, 841-45, 908-9, 993, 1007-13, 1034
Casta militar, 108, 526, 539, 549, 553, 557-69, 572-74, 617, 956, 960, 985, 994, 1010, 1034
Colonias americanas, 61, 139, 154, 163, 165-66, 190-228, 297, 301, 362, 592, 596, *véase también* Estados Unidos
Cartismo, 117, 172, 181, 451, 534-35, 629, 653, 663, 675, 680-97, 699, 701, 704-5, 717, 780, 786, 800, 807, 831, 843, 943
China, 32, 59, 352-54, 369, 643
Ciencia, tecnología, 31-32, 136-37, 415, 641, 645-47, 776, 959
Ciudadanía, 31-40, 98-99, 101, 156, 165, 216-17, 282, 294, 305, 321-22, 334, 448, 450-51, 467, 474-75, 526, 530, 538, 545, 556, 557-60, 569, 606, 608, 610-11, 625, 629, 650-56, 669, 682, 689, 715, 744-49, 751-52, 806, 842, 857, 859, 861, 864, 866, 869, 876-82, 884-85, 926-27, 933, 952, 971, 1014-15
Ciudades, 134-35, 165, 173, 196, 201, 210-11, 236, 271-73, 528, 530, 549, 684, 701-2, 784, 859, 912
Civilizaciones de múltiples actores de poder, 27, 102, 342, 358, 640, 642, 659, 678
Clase, conflicto de la clase, 16, 44-58, 71-73, 104-5, 112-13, 117, 138-47, 155-56, 160-62, 170-73, 204-13, 217, 220-21, 229-31, 237-39, 255, 263-64, 268-75, 281, 289-341, 409-13, 525-26, 529-30, 653-58, 663-709, 776-816, 817-98, 899-939, 940, 941-49, 962, 1005-7, 1013-30
  definición, 23-25, 47-50
  véase también Conciencia de clase; Marx, Karl y teorías marxistas, teorías de las clases
Clase media, 15, 21, 50-51, 139-40, 146, 419-20, 422, 537, 562-63, 565, 632, 680-82, 689, 692, 699, 710-75, 777, 799-800, 805, 879-80, 883, 918, 925-26, 941, 951-53, 1015, 1019, 1021, 1026, 1029, 1034
  definición, 710-15
  véase también Burguesía; Pequeña burguesía
Clase trabajadora, trabajadores, obreros, proletariado, 44-51, 141-43, 225, 273-74, 280, 303, 307, 410, 412, 416, 419-23, 432-33, 451-53, 460-61, 542, 549-50, 559, 627-32, 654-55, 663-709, 710-14, 716, 726, 727-31, 744, 746-53, 757, 762, 766-898, 914-19, 922-24, 925-26, 933, 941-45, 947-48, 951, 1014-19, 1021, 1034
Clientelismo, patronazgo, 36, 157-18, 159, 194-95, 198, 210-12, 220-21, 582, 593, 598, 626, 832, 850, 884
Comunidad, 151, 193-94, 200, 210-11, 239, 271-74, 307, 331, 457, 586, 664, 667, 674, 684, 687-89, 702-5, 782-83, 784-86, 800, 802, 812, 818, 832, 863, 867, 880-81, 885-86, 905, 927, 950-52
Conciencia de clase, 46-49, 149-52, 155-57, 264, 314, 412, 655, 668, 674-80, 686, 689, 691, 697-706, 783, 784-87, 799-802, 806, 833,

857, 868, 872, 876, 885-91, 903-4, 930-31, 955
Conflicto dialéctico, 34, 36, 54, 182, 217, 225, 241-44, 626, 649, 657, 667-68, 705, 752, 778, 783, 942-43, 946, 963
Conscripción militar, levas, reclutamiento, 143, 152, 170, 299-300, 323-24, 531, 537, 559-60, 754, 757, 901, 918, 950, 988, 1000, 1014-15
Corporaciones, 717-18, 725, 727-34, 735-37, 802, 832, 848
Cortes, reales , 94, 139, 152-53, 160-61, 241, 263-64, 266, 268, 281, 426, 430, 441, 497, 513, 586, 619, 626, 859, 985-87, 992-93, 1034
Cristalización ideológico-moral, 70, 118, 625-35, 694-96, 706
Cristalización nacional, 40, 70, 71, 118, 124-25, 127, 180, 214, 218, 279, 289, 330, 411, 418, 422, 431-33, 434, 449, 493, 537, 617, 650, 657-58, 745, 748, 749, 753, 758, 760, 803-13, 818-20, 849, 875, 882-83, 889-90, 901-2, 909-11, 943, 950, 1006-7, 1017-20
Cristalización tecnocrático-burocrática, 100, 107, 570-72, 581, 608, 619, 630-32, 800, 988
Cristalizaciones capitalistas, 111, 113-20, 124-25, 126-27, 180, 289, 361, 407, 418, 430-33, 441, 458, 573, 617, 625-35, 650, 657-58, 675, 696, 706, 749, 779, 784, 820, 841-45, 856, 858, 888, 890, 914, 916-17, 944, 987, 1027-30
Cristalizaciones monárquicas (autocráticas, autoritarias, absolutistas, dinásticas), 33, 71, 91, 94-102, 111, 115-116, 120-21, 235-36, 239, 243-44, 246-48, 255, 282, 313, 337, 3443, 398-403, 407-8, 409-12, 416, 428-33, 439-43, 459-50, 453-55, 456-70, 501-10, 528, 540-41, 572, 583-96, 606-12, 616-17, 648-59, 826, 859-60, 866, 876-82, 889, 910-12, 917-30, 946-48, 952, 956, 965, 984-95, 998, 1003, 1012, 1013-14, 1021, 1026-34
Cristalizaciones polimorfas, 21, 70, 110-27, 153, 184, 350, 403, 429-33, 434, 459, 463, 466, 604, 625, 659, 749, 844, 856, 882, 955-57, 963, 983, 986, 944, 998, 1004, 1032-34
Cristalización representativa, 21, 40, 118, 124-25, 127, 155, 235, 289, 441, 504, 537, 590, 593, 608, 617, 818-20, 844, 859, 868, 875, 882-93, 909-25, 931-34

Democracia, democracia de partidos, parlamentos, 71, 74, 87, 111-13, 115-16, 120-23, 132-33, 153-58, 161, 163-64, 175-76, 183-84, 209-13, 222-24, 243, 334-38, 409-11, 416, 427-28, 431, 448, 450, 452-54, 456, 459-466-67, 468, 470, 501, 507, 509-10, 534, 537, 540-42, 544-45, 547, 571, 583, 595, 608-9, 610-11, 616-18, 625-40, 648-49, 658, 670, 680-82, 685, 687, 689-90, 692, 694-95, 700, 705-6, 752-53, 759, 767, 798-800, 803-13, 819-20, 826, 828-29, 844-49, 851, 856, 869, 873, 876, 882-83, 889-91, 902, 903, 909-11, 912-17, 921-24, 925-27, 947-48, 952, 965, 995-1005, 1019-21, 1032-34
Diplomáticos, estadistas, 77, 94, 106-8, 544-47, 570-71, 573, 955-56, 966-72, 1001, 1006, 1012, 1032
Disturbios, revueltas, rebeliones, desórdenes, 167, 170-75, 197-98, 199-205, 214, 272-73, 298, 316, 320, 327, 461, 505, 527-39, 573, 651, 686-93, 701, 825-26, 861-66, 928-29

Economicismo entre los trabajadores, 668, 675-76, 697, 779, 782, 819, 854, 861-65, 871, 891, 1016-17
Educación, 61-64, 100, 180, 240, 308, 321, 326, 408, 415, 498-99, 562, 564-65, 584-85, 587-88, 603-4, 613-15, 626, 628, 630-33, 635-36, 639, 641, 684, 700, 713-14, 729, 734-42, 744-49, 751-53, 755-56, 762-64, 849, 891, 931, 949-51, 955, 1019
Elite del poder ideológico, intelectuales, 66, 133, 261, 264, 267, 272, 274, 279-80, 281-282, 306-20, 322, 601, 641, 654, 819, 859-60, 865
Emergencia intersticial, 59, 63, 66, 149, 735, 946
Empleados de carrera, 51, 140, 412, 420, 614, 715, 727-34, 742-43, 747, 749, 751, 755, 766-67
Enjaulamiento social, *véase* Jaula, enjaulamiento (social)
Entrelazamientos de las relaciones de poder, 17, 41, 52, 66, 105, 125-126, 134, 337, 343, 411, 421, 458, 573, 696, 704, 760, 768, 874, 885, 890, 902, 943, 949, 955, 958, 963, 972, 983, 1011, 1024, 1031-34
España, 206, 321, 325, 352, 356, 359, 368-69, 375-77, 381, 439, 552, 754, 883-85, 889-90, 903, 907
Estadistas, *véase* Diplomáticos, estadistas
Estado
  autonomía, 70-84, 89-92, 93-118, 126-27, 152, 155, 402, 409-14, 423-35, 583-84, 618-19, 625, 629-31, 656-59, 955-57
  definición, 84-86
  elites, 75-84, 89, 92-102, 106-7, 110, 126-27, 182-83, 333, 337, 362, 415, 425, 450, 513, 581, 583, 587, 617, 626, 629-31, 640-50, 656-59, 779-81, 794, 842-43, 859-61, 878, 881, 945, 949, 954
  funcionarios, 99-101, 138, 159-60, 165, 236-37, 254-58, 413, 449, 457, 475-76, 510-18, 579-623, 743, 744-49, 750-51, 755, 760-67, 798-99, 802-4, 953-54, 985, 1019, 1042-48
  gastos, 99, 114, 124, 159-61, 162-64, 245-46, 290-91, 299-301, 384, 387, 444, 476-77, 478-500, 751
  ingresos, 91-92, 95, 99, 102, 152, 159, 162-63, 166, 200-4, 213, 235, 245-46, 251, 299-306, 317, 330-31, 383, 405-6, 416, 418-19, 422, 444-45, 448-49, 454-55, 477, 501-10, 590-92, 602-3, 649, 655, 670, 677-78, 682-87, 693, 742, 745, 779, 805, 849, 901, 913-14, 918, 1025, 1030
  instituciones, 61, 93-110, 158, 1599-62, 215-20, 247, 268, 299-306, 360, 416, 452-55, 788
  surgimiento del Estado moderno, 16, 20-21, 70-131, 152-62, 402, 463, 473-78, 596-662, 671, 944-46, 955-57, 1032-34
Estado-nación, Estado nacional, 18, 21, 40-41, 51-52, 55, 71, 87, 213, 278-80, 317, 320, 343-45, 398-400, 402, 440-42, 464, 465, 469, 475, 635-36, 638, 650, 657-58, 715, 740-41, 742, 745, 749, 756, 760-62, 764-68, 783, 804, 818, 955, 958-59, 968, 871, 1017-19, 1031, 1033
Estados Unidos, 15, 60, 83, 87, 101, 106, 114, 117, 121-23, 144, 247, 279, 316, 332, 334, 336, 346-47, 352-57, 358, 376, 380, 385, 388-92, 414, 418, 428-29, 432, 443, 446, 450, 462, 467-69, 478-82, 484, 486-90, 492-500, 501-6, 508-9, 512, 514-17, 528, 532, 537, 542-46, 549,

560, 562-63, 596-98, 606, 608, 610, 612-15, 625, 638, 644-48, 650-53, 655-56, 657-58, 690, 697, 718, 720, 724-25, 731, 734, 737, 740, 745-48, 752-56, 758, 765, 795, 821-58, 859, 877, 882, 883, 888, 891, 900, 907-8, 910-11, 914-17, 945-48, 960, 970, 977-79, 989, 995-98, 1004, 1015-16, 1048, 1053-55, *véase también* Colonias americanas,
Estatismo institucional, 71, 81, 84, 90, 126-27, 182-83, 223-24, 338, 426-30, 945-48, 958
Estrategias del régimen, 38, 40-41, 63-64, 149, 291, 375, 400-1, 420-23, 449-70, 507, 608, 617, 640-56, 705-6, 760-62, 765, 778-81, 803-13, 860-66, 869, 874, 876-82, 888-90, 920, 928-30, 942, 947-48, 984-86, 994, 1013-31
Etnia, raza, 60, 106, 109, 122, 191, 193-94, 213-14, 291-92, 328, 427, 429, 448, 462, 532, 628, 754-59, 826, 827-28, 832, 835-36, 844-46, 850, 855-56, 890, 915, 917-18, 952-55, 970, 978, 1014-17, 1019-20, 1023, 1025
Evolución, 132-33, 157, 182, 442, 468, 473-76, 518, 818-19, 948-49, 955, 957-60

Fábricas, talleres, 137, 173, 529, 629, 666, 671-75, 694-96, 697-98, 701-4, 779, 782-84, 788-90, 852-53, 859
Familia, parentesco, 137, 141-42, 178, 272, 296-98, 304, 307, 336, 629, 636-37, 667, 674, 677-78, 680-81, 684-85, 687, 689, 693-96, 698-702, 704-6, 716-17, 719, 731-33, 744, 785-87, 800, 812, 891, 906-7, 950-52, 969, 980
Feudalismo, 90-91, 222, 230, 237-39, 246, 270-71, 333, 430, 441, 565, 600, 607, 720, 827

Francia, 51, 62, 121, 138, 139, 144, 154, 163, 182-84, 206, 220, 225, 229-88, 291, 294-95, 296-97, 301-2, 313, 320, 324-28, 332, 334, 343, 352-55, 358-93, 403, 405-6, 413-16, 418-19, 429, 432, 440, 445, 448, 451-52, 455, 462, 467-68, 478-82, 484-87, 489-90, 492-96, 497-98, 500, 501, 503-5, 509, 512, 514-15, 528, 531-34, 537, 542-46, 547-51, 553, 555-56, 558-62, 566, 570, 590-96, 600-4, 606-9, 610-12, 615, 625, 632, 635-38, 644, 646, 650-53, 657-58, 680, 688, 717-18, 720, 722-24, 726, 728, 734, 737, 745, 747, 752-58, 765, 767, 818, 821-23, 825, 833, 837, 842, 848, 867-73, 876-77, 882-84, 888, 891, 900, 906-8, 910-11, 912-14, 916, 926-27, 931-34, 940, 944-46, 953-54, 963-65, 967, 971-73, 975, 980, 988-89, 992, 995, 997, 1000-3, 1008, 1011-12, 1014, 1016-21, 1023, 1025-30, 1045, 1051
Fuerzas armadas, 199, 204, 206, 210, 213, 244, 245, 247, 265-66, 275-77, 2281, 290, 294, 325-28, 365-68, 412, 426, 441, 449, 452, 461-65, 490, 493, 511, 525-78, 581, 585-88, 644-47, 653, 658, 677, 691, 821, 953, 987-95, 1003
  oficiales en, 244-45, 257, 262, 266, 274, 276-77, 364-67, 369-70, 430, 547-56, 557-74, 587, 734, 758, 956, 988
  rangos en, 245, 266, 276, 364, 548-51, 554-61, 568
  suboficiales en, 244-45, 266, 274, 276, 366, 550, 555, 558, 560, 566, 568-69, 572, 588, 653, 956

Geopolítica, política exterior, 76-78, 86, 93, 102-10, 123-26, 133, 158, 162, 184, 199, 206, 221, 223, 233, 235, 275, 335, 342-97, 400-1, 403-

9, 413-16, 433, 449, 453, 455, 459-61, 462-64, 469, 539-47, 569-74, 605-6, 752-68, 879, 955, 961-1035
definición, 969
Gobierno local, 93, 120, 122-23, 418, 477, 478-83, 486-87, 491-95, 498-99, 502, 504, 508-9, 512-18, 586, 599-601, 606, 609-15, 630-31, 647, 682, 687, 901, 911, 921
Gran Bretaña, 15, 33-35, 56-57, 61, 63-65, 103, 115, 119-22, 124, 132-89, 191, 193, 195, 197-209, 219-21, 223, 234-36, 242, 252, 264, 280, 282, 290-92, 295, 301-2, 303 n., 304-6, 313, 317-18, 320-21, 324, 330, 332, 334-36, 343, 346-47, 349-50, 352-57, 358-64, 365, 367-69, 371-73, 374-77, 379-92, 393, 398, 401-2, 404, 406, 408, 414, 419, 422, 425, 429, 432, 434, 440, 443, 451, 467, 474, 478-87, 489-96, 497-500, 501-6, 508-9, 511-12, 514-15, 517, 528, 534-37, 541-46, 547-50, 553-54, 561, 563-64, 569, 583, 584, 592-96, 598, 605-6, 608-9, 610-11, 613, 615, 616, 618, 625-27, 630-31, 633, 635, 637, 641, 644, 646-47, 650-51, 653, 655, 657-58, 663-709, 711, 717-18, 720-22, 725, 728, 730-31, 734, 737, 739, 744, 745 n., 746, 748-49, 752-60, 765, 767, 776-816, 818, 821-25, 829, 830-36, 841, 843, 846-49, 851 n., 855, 858 n., 859, 866, 867-68, 874, 876, 838-84, 886, 888, 899-901, 933, 940, 944-47, 953-54, 963, 965, 968, 970, 972-73, 975, 977-80, 984, 988-89, 992, 995-1005, 1008-9, 1011-12, 1014, 1017, 1020-21, 1023, 1025-30, 1034, 1045, 1050
Guerra, 102-4, 235, 303-5, 345-47, 358-64, 392, 433, 448, 466-67, 468-70, 474, 529-30, 596, 599, 952, 965-67, 975, 976-82, 994, 995-1004
austro-prusiana, 406, 413-16, 455, 490, 646, 972
franco-prusiana, 414-15, 489-90, 646, 879, 972
Primera Guerra Mundial, 126, 303, 350, 391, 442, 463-64, 484, 489-90, 506, 559, 565, 572, 574, 655-56, 743, 766, 784, 811, 865-66, 873 n., 961-76, 1034-35
revolucionarias y napoleónicas (guerras), 166-68, 205-13, 275-82, 299, 320-33, 334, 364-73, 374-75, 379, 484, 489-91, 506, 508, 516-17, 533, 539-47, 555-59, 596, 604-8, 672, 677, 693, 967, 999
de los Siete Años, 163-68, 199, 244, 362, 489-90, 516, 594
Guerra Civil Americana, 482, 484, 488, 492, 506, 516, 560, 562-63, 599-600, 633, 647, 652, 914

Hegemonía, internacional, 17, 56, 345-47, 350, 362-63, 364-65, 368, 371-73, 374-76, 378, 382, 385, 386-87, 390-93, 403, 965, 972, 977, 979, 1001, 1034
Holanda, República holandesa, 347, 356, 360-61, 368, 375, 379, 381, 387, 485, 508, 583, 888, 992, 997
Huelgas, 531-35, 665, 675-78, 686, 698, 780, 793-94, 796, 822-26, 832-34, 838-42, 854, 862-63, 865, 869-72, 875, 877, 880
Hungría, 378, 440, 446, 447-53, 455, 456-62, 488, 492, 540, 586, 760-61, 900, 921-25, 982-83

Iglesia católica, 36, 61, 116, 118, 120, 122, 160, 174, 239, 240, 243-44, 247, 251-53, 265, 268, 274, 280-81, 293, 306, 311-12, 318-19, 327, 399, 402, 403, 417, 419, 421-23, 427-29, 441, 583-84, 633, 639, 645, 761-65,

835, 872, 874-76, 878-80, 890-91, 909, 912-14, 917-25, 1005, 1015, 1023, 1026, 1028
Ilustración, 60, 64, 66, 137, 146, 200-2, 241, 243-44, 248-50, 258-63, 265-66, 278, 316, 322, 344, 557, 586, 591, 597, 616, 627, 859-60, 979, 1012, 1017
Imperialismo, 57, 324-25, 356, 400-1, 543, 754-55, 857-60, 858-59, 952, 965, 971, 978, 1015, 1018, 1020
  económico, 57, 106, 358-59, 387, 400, 962, 1006, 1007-13, 1020, 1025-26, 1033
  geopolítico, 57, 358, 365, 386, 400, 1009-10, 1013, 1025-26
  social, 57, 359, 364, 400, 962, 1006, 1010, 1013-30
Imperio Otomano, Turquía, 377-78, 386, 389, 404, 441, 462, 640, 972
Imperios coloniales, colonias, 59, 103-4, 183, 344, 355, 376-77, 381-82, 388-89, 393, 496, 637, 754-60, 975, 977-78, 1008-9, 1010-13, 1020, 1022, 1026
India, 353, 359, 361-62, 376, 755
Industria, manufactura, *véase* Manufactura, industria
Infraestructuras de comunicación, 136-37, 177-79, 191, 219, 385-87, 406-9, 417-18, 448, 491, 498-500, 508-10, 518, 559-60, 571, 599, 602, 624, 638-39, 640-50, 802, 908, 915, 949, 951
Irlanda, irlandés, 15 n., 132, 145, 158, 170, 174, 180, 205-6, 322, 533-34, 548, 563, 638, 677, 691, 703, 754, 783, 791, 795, 944, 951-52, 1000, 1002, 1016
Italia, 113, 122, 321-23, 325, 328-29, 350, 352, 377, 381, 389, 404, 410, 413-14, 440, 446, 449, 451-52, 455, 541, 571, 641-42, 720, 725, 824 n., 889, 907, 951, 963-64, 989, 997

Japón, 32, 53, 59, 65, 353-54, 410, 423, 468-69, 641-42, 720, 724-25, 883, 889, 972
Jaula, enjaulamiento (social), 25, 39-40, 106, 303, 337-39, 629, 658, 727, 777, 954, 1005, 1033

Laissez-faire, *véase* Mercado, organización del mercado, *laissez-faire*
Leales al Estado, estatistas, 457, 516, 518, 569, 710-11, 749-66, 953-54, 1028-29
Lengua, comunidades lingüísticas, 318-19, 323, 327-28, 331, 331, 409, 446, 447-48, 451-52, 456-57, 460, 466, 639-40, 950-51, 954, 960, 978, 1014, 1034
Ley, tribunales de justicia, abogados, 62-63, 97-98, 114, 156, 160, 165, 192, 201-2, 215-17, 236, 240, 242-43, 247-50, 254-58, 262-63, 265, 274, 310-11, 313, 320-21, 324, 416, 440-41, 448, 452, 497-98, 529, 587, 675-76, 690-91, 697, 700, 736, 741, 794-95, 804, 806-7, 838-51, 852-53
Liberalismo, 64, 104, 124, 176-81, 182, 191, 198, 222-25, 295, 338, 344-45, 409-10, 412-19, 425, 432, 449, 456-58, 469, 484, 528, 614, 629, 631-35, 699-700, 717-18, 742, 754-60, 795, 801, 841, 843-44, 851, 856, 864, 875-76, 880, 888-89, 911, 914, 916-17, 925-26, 931, 946, 954, 971, 979, 995-1005, 1007, 1019-20, 1024-25
Logística, 30-31, 92, 191, 198, 367, 386, 561, 643, 649
Luteranismo, *véase* Protestantismo, Luteranismo

Manufactura, industria, 133-38, 139-43, 144-45, 179-81, 234, 237-38,

260, 273, 297, 330, 353-57, 363, 379, 403-9, 445-46, 451, 612, 642-50, 654-55, 663-65, 670, 671-80, 713, 717-26, 780, 788-95, 906-7, 933, 940, 941
Marshall, T. H., 38-40, 98, 101, 216-217, 416, 474, 569, 625, 629, 650, 655, 669, 849, 882
Marx, Karl, y teorías marxistas, teorías de las clases, 15, 24-25, 28-29, 34, 43-58, 66, 71-73, 79, 85, 88, 90, 93, 97, 101-2, 105, 110, 111-14, 119, 126, 133, 295-99, 306, 310, 344-46, 401-2, 410-11, 415, 423, 431-33, 458, 475-76, 496, 528-29, 535-36, 582, 627, 645, 657-58, 663-58, 663-64, 666-68, 670, 687, 693, 705, 712-13, 716, 719, 740, 767, 777-78, 780-81, 782-83, 785, 802, 819, 858, 865, 868, 885, 887, 890-91, 899, 901, 904-5, 906-7, 923, 926, 929, 932-33, 941-43, 1017
Marxismo entre los trabajadores, 420-22, 669-70, 779-81, 782, 798, 810, 812, 865-66, 871, 876, 880-82, 888-91, 919-21, 1016-17
Mercado, organización del mercado, *laissez-faire*, 56-58, 133, 144-46, 297-98, 308, 343-44, 359, 374, 379-93, 400-2, 404-9, 425, 446, 626-35, 675-77, 680, 694, 925-26, 959, 979, 1009-12
Mercantilismo, 57, 212, 344, 359, 362, 385, 387, 400-1, 404, 406, 409, 1010-13, 1025-26, 1033
Militarismo, cristalización militarista, 111, 118-19, 124-125, 127, 183, 190-91, 224-25, 230, 239, 280, 281, 289-91, 293, 299-306, 320-33, 344, 361, 387, 407, 410, 415, 418-19, 430-31, 433, 434, 441-43, 449, 459, 466-67, 469-70, 488-97, 500, 518, 525-47, 572-74, 588-89, 594, 596, 599, 604-5, 607-9, 617, 624, 628, 633, 645-47, 649-40, 675, 677, 686, 705, 715, 753-56, 759, 764, 784, 818, 820, 838-41, 851, 856, 858-60, 867, 874, 877-79, 882, 885, 888-90, 909-10, 946, 947-56, 957-60, 965, 980, 987, 994, 1003-4, 1018, 1022-30, 1034
Movilización militar, 570-72, 964-65, 980, 989, 990-94
Mujeres, 35, 113-14, 147-48, 155, 170, 210, 298, 514, 637, 667, 671-74, 682, 684-85, 694-96, 698, 702-3, 729-31, 733, 74?, 767, 786-87, 789, 792, 798, 801, 821, 845, 848, 867, 873, 952, 956, 1021
Mutualismo, 669, 676, 678, 680, 682, 687, 700, 751, 777-80, 784, 800, 807-9, 811, 819, 831, 853, 861-62, 864-65, 869-71, 889, 891, 948, 1016-17

Nación, 16, 21, 60, 107, 134, 145, 150, 252, 261, 267, 276-78, 281-82, 289-341, 378, 402, 403, 441, 447-70, 569, 587, 635-38, 711, 744-76, 787, 835, 850, 857, 946, 949-57, 1001, 1005-7
Nacionalismo, organización nacionalista, 21, 54-55, 105, 108-9, 145, 150, 167, 277-80, 292, 305, 307, 319, 324-25, 328-32, 335-37, 344-45, 378, 391-92, 400, 403-4, 415, 417, 420, 431-34, 442-43, 445-47, 467, 613, 638, 711, 718, 749-66, 922-24, 927, 931, 933-34, 951-56, 962-63, 964, 971, 976, 979, 982, 985-86, 999, 1004-7, 1010-13, 1015-17, 1019, 1027-34
Normas, reglas, pautas, 53, 78-79, 102-3, 106, 306, 346, 363, 374-75, 381-82, 385, 393, 968-69, 978-79, 999, 1003

Organización nacional, 55, 105-6, 145, 343-44, 400-2, 404-9, 451,

625, 635-40, 658, 744, 776, 793, 802-3, 950, 954, 1017-18, 1033-34
Organización territorial, 56-57, 344, 379, 386-92, 400-1, 944-46, 959, 969-70, 1006, 1009-13, 1033
Organización transnacional, 18-19, 54, 105, 293-294, 312, 322, 342-45, 359, 362-63, 372, 374, 383-93, 398-403, 406, 415, 446, 458, 635-36, 777, 794, 858, 882, 891, 950, 954, 969-70, 978-80, 995, 1005-13, 1016-18, 1033

Parlamentos, *véase* Democracia, democracia de partidos, parlamentos
Particularismo, 33, 94-96, 105, 107, 158, 161, 163, 168, 175-76, 236, 255, 261, 282, 300, 304, 310-311, 333-34, 445, 459, 465-66, 593, 618, 681, 710-11, 784, 941
Partidos, 88-89, 94, 101, 108, 153-56, 160-63, 182-83, 205, 218-22, 224, 230-31, 264, 301-2, 333-36, 416, 420-23, 424-28, 507, 573, 581, 599-600, 604, 606, 619, 641, 684, 752-53, 761, 780, 782, 794, 843, 934, 987, 1003-4
Partidos conservadores, 170-72, 174-75, 180, 202, 416-22, 424-25, 427, 457, 631, 634, 676, 694-95, 700, 702, 785, 803-5, 810-12, 843, 845, 903, 912-25, 932, 934, 1002, 1025-26
Partidos laboristas, *véase* Partidos socialistas y laboristas
Partidos liberales, 165-68, 170, 174, 180-81, 412, 416-19, 421-22, 427, 456-58, 614, 631-35, 655, 679, 694-95, 700, 702, 718, 724, 754-57, 759-60, 782, 785, 796, 803-12, 843, 845, 848, 851, 914-17, 921, 999-1003, 1019, 1023, 1026
Partidos socialistas y laboristas, 124, 420-23, 427-28, 458, 655-56, 664, 668-70, 687, 767, 778, 779, 782-83, 787, 796-97, 800-1, 803-13, 818-20, 824-29, 833-38, 841, 845, 849, 853, 925-34, 948, 1014-19, 1026
Patriarcado, 71, 118, 213, 684, 694-96, 881, 943, 956
Patronazgo, *véase* Clientelismo, patronazgo
Pequeña burguesía, 21, 50, 63, 133, 138-39, 143, 144-45, 147, 149-51, 155-57, 164-65, 167, 170, 175, 176-77, 181, 194, 205, 231, 256, 274, 278-79, 281, 297-300, 303, 321, 333-35, 375, 412, 420, 451-52, 458, 606-9, 671, 678, 680, 711, 714-15, 716-26, 742-43, 744-45, 750-51, 761-64, 766, 786, 889, 941, 953
definición, 716
Pluralismo, 71, 73-76, 78, 83, 89-90, 93, 95, 110, 111, 119-20, 122, 126-27, 474-75, 625
Población, demografía, 30-31, 133-34, 175, 212, 234, 366, 672-73
Poder autoritario, 16, 22, 415, 429, 655, 666, 715, 726, 728, 738, 768, 783, 793, 941, 944-48, 958, 1017
Poder colectivo, 17, 19, 30-33, 45, 900-92, 109, 295, 342, 640, 776, 941, 949
Poder despótico, 38, 89-92, 93-96, 153-54, 202, 214, 218, 280, 338, 441, 585, 596, 617
Poder difuso, 16, 22, 715, 716, 740-41, 744, 768, 783, 793, 812, 941-49, 957
Poder distributivo, 17-19, 29-30, 33-37, 899-90, 295-97, 777-78, 781, 941, 960
Poder económico, 15, 23-24, 43-58, 115, 345-47, 348, 351, 352-57, 365-66, 640, 776-77, 830, 934, 949
Poder ideológico, 16-17, 23, 52-54, 58-67, 147-52, 182, 200-1, 224, 230-33, 239-45, 251, 265-67, 291,

306-20, 335-36, 348-49, 366, 373, 572, 616, 640, 715, 735, 744-49, 942-43, 949
Poder infraestructural, 90-92, 152-54, 441, 450
Poder local-regional, 18-19, 21, 36-37, 122-23, 149-52, 160, 184, 215, 218, 220, 2281, 291, 308, 312, 320-23, 331, 359, 428, 456-59, 560, 640, 819, 890-91, 905, 912-25, 944, 950-52, 954, 1015
Poder militar, 15-16, 25-26, 52-54, 61, 70, 85, 102, 107, 116, 133, 162-68, 209-13, 223-24, 266, 275, 335, 348-49, 364-73, 445-525-26, 574, 640, 942, 944, 949, 957, 989
Poder político, 15-16, 26, 52-58, 70-131, 335, 349, 373, 640, 667, 715, 830, 935, 942, 944, 949
Policía, 97, 527-39, 651, 682
Política exterior, *véase* Geopolítica, política exterior
Políticas asistenciales, de bienestar, 113-14, 429, 432, 474, 500, 518, 558, 624-25, 627-34, 650, 656, 693, 779, 805-9, 871, 878-80, 955
Primacía última, 16, 110-27, 337-38, 432-34, 625, 957-60
Profesionales, 51, 138, 140-41, 144-46, 254, 255-57, 314, 412, 420, 526, 549, 551-52, 555, 557-74, 587-88, 614, 689, 714-15, 832, 734-44, 746-49, 751, 755, 763, 766-67, 956
  definición, 734-35
Proletariado, *véase* Clase trabajadora, trabajadores, obreros
Propiedad, *véase* Propiedad privada
Propiedad privada, 43, 152, 216-17, 359, 432, 581-83, 587, 590-95, 690, 702, 827, 902-3
Proteccionismo
  comercio, 56-58, 359, 375, 384, 387-89, 400-2, 404, 409, 418-19, 717, 905, 908, 914, 918-21, 928, 930-31, 1010-12, 1025-27, 1030, 1033
  entre los trabajadores, 668-69, 671-76, 679, 778-81, 831, 852, 855, 861, 889, 1016
Protestantismo, Luteranismo, 60-61, 118, 120, 122, 150-151, 160, 166, 174, 193-94, 201, 293, 306, 311-12, 316-19, 322, 327-28, 402, 408, 412, 417, 421-22, 426-27, 431-33, 545, 584, 631, 677, 679, 694-95, 757-58, 761-64, 827, 835, 875-76, 879-80, 890-91, 909, 917, 919-22, 924, 926, 943
Prusia, 35, 48, 53, 115-16, 121, 154-55, 163, 184, 209, 248, 251, 275-77, 291, 295, 301-2, 313, 326-27, 332-33, 335, 349-50, 361-62, 364-65, 367, 371-72, 375-78, 381, 386, 398-418, 421, 425-28, 433-34, 440-41, 443-44, 448, 478-82, 484, 486-87, 489-90, 492-95, 497, 501-4, 506, 509, 512, 515, 517, 528, 532, 540, 545, 547, 551, 553-54, 557-59, 561, 563-66, 584-92, 595-96, 606-9, 611-13, 641, 643-46, 657, 908, 945, 971-72, 1046-47, 1052, *véase también* Alemania
Pueblo, plebe, muchedumbre, 140-43, 150, 164-65, 1699-70, 172, 175, 194, 203, 208-10, 261, 264, 269, 272, 275, 277, 279, 296, 304, 324, 333, 335, 671

Raza, *véase* Etnia, raza
Realismo, 71, 77-78, 83, 85, 89, 110-11, 345-47, 962-63, 966-84, 992, 996, 998, 1001, 1034
Reformismo, 295, 298, 412-13, 507, 668-70, 676, 778-80, 784, 800-1, 803-13, 819-20, 836-37, 861, 870-72, 876, 889, 930-31, 943
Religión, 16, 33-34, 61-64, 113, 118, 164, 170, 174, 193-95, 291-94, 307-

8, 318-19, 377, 412, 628-29, 749, 767, 818, 835, 843, 855, 890-91, 905, 906, 909, 915, 944-45, 951-52, 954-56, 960, 1020, 1034
Represión, 173-74, 193, 204, 410, 412, 429, 433, 452-54, 462, 527-39, 556, 573, 689-93, 779-80, 791-95, 820, 824-26, 829, 838-46, 849-50, 851-55, 860-66, 869-70, 875, 877, 881, 883, 889-90, 928, 942-43, 987, 1015, 1026
República Holandesa, *véase* Holanda, República Holandesa
Revolución Industrial, industrialización, 28-36, 37, 132-38, 162, 177, 180-82, 184, 225, 329, 381, 443, 468, 483, 569, 639-50, 716, 736, 788, 831-32, 867-68, 874-75, 885-86, 906, 912, 914, 926, 933-34, 940, 941, 944-45, 949-50, 1007
  Segunda, 30, 108, 338, 398, 611, 643-50, 705, 717, 750, 776-81, 783, 787, 812-13, 817-18, 826, 832, 859, 874, 880, 882, 885-88, 906
Revolucionarios, 202-3, 205-26, 248-50, 254, 255-75, 309, 333-34, 411-12, 449, 687-88, 779-80, 784, 862-63, 928, 934
Revoluciones, 27-37, 38, 132, 168-76, 289-90, 298-99, 302-3, 422, 475, 574, 596-609, 651, 668, 670, 686-92, 779-81, 817-18, 869-73, 881-82, 942
  americana, 37, 66, 162, 172, 184, 190-228, 246, 289, 300, 313, 489, 594, 596, 598
  de 1848, 303, 378, 411-13, 450-52, 607, 645, 717, 831
  francesa, 17, 37, 52, 66, 98, 109, 117, 125, 162, 167, 172, 206, 208, 229-88, 289, 299-300, 313, 316, 320, 324, 363, 364-65, 411, 505, 551, 600-2, 604, 607-9, 912-13, 960, 967
  rusa, 817, 823, 863-66, 928-30
Rusia, 87, 121, 243, 320, 332, 350, 352-54, 368-72, 374-78, 384, 385-86, 388-90, 441, 449, 460-64, 496, 533, 571-72, 574, 584, 588, 640, 780, 817, 820, 820, 823, 825-26, 838, 840, 842, 852, 858-67, 874, 883, 888, 890, 900, 907, 910, 912, 927, 929-30, 948, 952, 963-65, 968-69, 971-76, 980-81, 986, 988, 991-94, 997, 1000-1, 1014-15, 1018-19, 1021, 1034

Secciones, seccionalismo, 18-19, 24-25, 50-51, 333, 655-56, 960
  entre los trabajadores, 665-66, 672-75, 681, 692-705, 778-83, 790-803, 818-19, 826-28, 835-37, 851-58, 862, 866, 869, 872-73, 876-78, 886-89, 942-45, 948
Segmentos, segmentalismo, 18-19, 24-25, 50-51, 95-96, 120, 157, 160, 162, 172-73, 177-78, 182-84, 194-96, 224, 237, 253, 281, 299, 304, 322, 325, 333-35, 387, 419-20, 427-29, 434, 456-57, 459, 526, 560-69, 572-74, 596, 631, 653-56, 679, 710, 715, 726, 727, 734, 744, 749, 752, 768, 846, 864-65, 884, 903-4, 907-8, 912-14, 920-21, 942, 960, 985, 1014, 1032
  entre los trabajadores, 665-66, 674, 698, 701-2, 705, 778, 780-81, 783-84, 791, 801, 812, 818-19, 823, 850, 858, 886-89, 942-45
Sociedad civil, 43-44, 64, 67, 136, 138, 152, 154-55, 157, 191, 196, 243, 280, 282, 342, 398, 410, 425, 445, 450, 477, 517, 529, 595-96, 625, 626, 648-49, 664, 677, 744, 784-87, 1017

Sociedades, Estados, federales y confederales, 19-20, 70-71, 117-18, 121-24, 190, 196-97, 213-22, 278-80, 282, 398-400, 403-6, 411-17, 440-43, 447-61, 467, 468-70, 585, 590, 599-600, 629-35, 658-59, 675, 704, 828, 848-51, 883-84, 890, 910-12, 921-24, 926-31, 933-34, 950-51
Sindicalismo, 668-70, 779, 781, 782, 810, 819, 830, 832-34, 837, 851, 854, 861, 869-73, 884-85, 1016-17
Sindicatos, 172, 651, 655, 669, 676, 681-83, 697-706, 782-83, 787-803, 809-12, 820-23, 830-41, 844-46, 848-49, 851-56, 858, 861, 868-69, 871, 873-78, 880-81, 884, 886-87, 889, 891, 1014, 1016-18
Suecia, 61, 444, 446, 496, 512, 584, 641-42, 820-21, 883, 900, 925-26, 932-34, 997
Superación organizativa, 560, 670-71, 702, 710, 727, 802

Talleres, *véase* Fábricas, talleres
Tecnología, *véase* Ciencia, tecnología
Teorías de las elites, elitismo, 71, 75-84, 89, 92-97, 122, 126-27, 152, 230-31, 425, 475, 513, 625
Teorías de desarrollo tardío, 219, 234, 401, 443, 446, 640-50
Teorías del embrollo, 71, 82-83, 111, 127, 962, 965-66, 973, 976, 992-94, 1028, 1034
Trascendencia ideológica, 58, 150, 267, 277-78, 317
Transición del feudalismo al capitalismo, 29-30, 229, 295-99, 441
Turquía, *véase* Imperio Otomano, Turquía

Weber, Max, y teorías weberianas, 16, 28, 38, 70, 83-90, 93, 106-7, 115, 122, 127, 153, 212, 402, 409, 423-26, 430, 475, 485, 579-80, 582, 589, 591, 615, 664, 714, 743, 904, 907-8, 977, 1023